

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
Departamento de Derecho Mercantil



**LA LEY Y EL REGLAMENTO DE 1848 SOBRE
COMPAÑÍAS MERCANTILES POR ACCIONES**

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR**

Rafael Ansón Peironcely

Bajo la dirección del Prof. Dr.

Juan Sánchez-Calero Guilarte

Madrid, 2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

Departamento de Derecho Mercantil



**LA LEY Y EL REGLAMENTO DE 1848 SOBRE
COMPAÑÍAS MERCANTILES POR ACCIONES**

TESIS DOCTORAL

Dirigida por el Prof. Dr. Juan Sánchez-Calero Guilarte, Catedrático de
Derecho Mercantil

Doctorando: Rafael Ansón Peironcely

Madrid, 2014

Abreviaturas	PÁGINA XIII
--------------------	----------------

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN.....	1
-------------------	---

CAPÍTULO II CONTEXTO ECONÓMICO Y POLÍTICO

I. SITUACIÓN ECONÓMICA EN LA ESPAÑA DE MEDIADOS DEL SIGLO XIX	5
A) LA PÉRDIDA DE LAS COLONIAS	5
B) LA CRISIS DE LA HACIENDA PÚBLICA	6
C) LA DESAMORTIZACIÓN	10
D) LOS FERROCARRILES	12
E) EL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO	16
F) EL SECTOR INDUSTRIAL	19
II. SITUACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA ENTORNO A LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE 1848.....	22
A) EL INICIO DE LA “DÉCADA MODERADA”	22
B) LAS CARACTERÍSTICAS DE LA “DÉCADA MODERADA”	23
1. Los partidos políticos	23
2. Armonía entre orden y libertad.....	24
3. El impulso codificador	24
4. Las reformas administrativas	25
C) LA CE 1845	27
1. Notas generales del constitucionalismo español hasta el final del segundo tercio del siglo XIX.....	27
2. Notas características de la CE 1845	27
D) LA INESTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LOS AÑOS PREVIOS A LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE 1848	28
E) EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE 1848 EN EUROPA Y SU REPERCUSIÓN EN ESPAÑA	29

CAPÍTULO III ANTECEDENTES DE LA LEY DE 1848

I. LA REGULACIÓN ANTERIOR AL CCom 1829	31
A) LAS PRIMERAS SOCIEDADES ANÓNIMAS	31
B) LA APARICIÓN DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES Y SU RELACIÓN CON LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS.....	33
C) LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS DURANTE EL PERIODO INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA CODIFICACIÓN (DESDE FINALES DEL SIGLO XVIII HASTA 1829). 34	
D) ESTUDIOS DE LA DOCTRINA MERCANTILISTA ESPAÑOLA SOBRE EL ORIGEN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA	36
E) REFERENCIAS A LOS ORÍGENES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA EN LOS DEBATES PARLAMENTARIOS DEL PL 1848	40
II. LA REGULACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS POR ACCIONES EN EL CCom 1829.....	44
A) NECESIDAD, REDACCIÓN Y VALORACIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO.....	45
B) PRINCIPIOS GENERALES	48
C) DISPOSICIONES COMUNES A LOS DIFERENTES TIPOS DE SOCIEDADES MERCANTILES	54
1. Formalidades	54

a)	Constitución de las compañías mercantiles	54
b)	Inscripción registral de las compañías mercantiles	55
2.	Las obligaciones mutuas entre los socios y modo de resolver sus diferencias	56
3.	Disolución y liquidación	58
a)	Disolución (rescisión parcial y disolución total)	58
b)	Liquidación.....	60
D)	RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS (Y COMANDITARIAS POR ACCIONES).....	63
1.	Principio general de la responsabilidad de los socios.....	65
2.	Constitución, examen y aprobación por el T. de c.	66
3.	Inscripción registral	67
4.	Denominación social	67
5.	Acciones	68
6.	Derecho de información de los socios	69
7.	Junta de accionistas	70
8.	Administradores	70
9.	Disolución y liquidación	71
III.	LOS T. de c. Y LA APLICACIÓN DEL CCom 1829 A LAS SOCIEDADES POR ACCIONES ANTES DE LA LEY DE 1848.....	71
A)	RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES DE COMERCIO EN EL CCom 1829.	72
B)	BREVE MENCIÓN AL RPGC.....	73
C)	LA ACTUACIÓN DE LOS T. de c. EN LA APROBACIÓN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS.	75
1.	El artículo 293 del CCom y justificación de su derogación.	75
2.	Referencia a la RO de 9 de febrero de 1847 y al RD de 15 de abril de 1847.	77
3.	Las sociedades comanditarias y los T. de c.	78
4.	“El problema no fue la legislación sino su aplicación”	79
5.	¿Por qué el CCom 1829 sometió la aprobación de las sociedades anónimas a los T. de c. y no a la Autoridad pública?	82
IV.	JUSTIFICACIÓN DE LA LEY	84
A)	EL ESPÍRITU DEL AGIOTAJE.....	85
B)	LA ESPECULACIÓN BURSÁTIL	87
C)	INCORRECTA APLICACIÓN DEL CCom 1829 POR LOS T. de c.	91
D)	URGENCIA PARA REMEDIAR LA MALA SITUACIÓN DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES.....	91

CAPÍTULO IV **ÍTER LEGISLATIVO**

I.	INTRODUCCIÓN	93
II.	CRONOLOGÍA DE LOS GOBIERNOS DE LA NACIÓN Y LEGISLATURAS DURANTE LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DEL PL 1848	93
III.	CREACIÓN EL 28 DE ENERO DE 1847 DEL MCIOP Y EVOLUCIÓN DURANTE SU PRIMER AÑO	96
IV.	RO DE 9 DE FEBRERO DE 1847 POR LA QUE SE SUSPENDE TRANSITORIAMENTE LA COMPETENCIA DE LOS T. de c. PARA APROBAR LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES POR ACCIONES	100
V.	PL 1848 PRESENTADO AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR EL MINISTRO DE CIOP, SR. ROCA DE TOGORES, EL 26 DE FEBRERO DE 1847	104
VI.	DICTAMEN DE LA CCD SOBRE EL PL 1848 (16 DE ABRIL DE 1847).....	109

VII. RD DE 15 DE ABRIL DE 1847 RELATIVO A LA RO DE 9 DE FEBRERO DE 1847. DEBATES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE LA INOPORTUNIDAD DE SU PROMULGACIÓN.....	113
VIII. RESUMEN DE LOS DEBATES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DURANTE LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE ABRIL DE 1847	123
IX. PL 1848 REMITIDO POR EL CONGRESO AL SENADO EL 23 DE ABRIL DE 1847	124
X. DICTAMEN DE LA CS SOBRE EL PL 1848 (18 DE DICIEMBRE DE 1847).....	126
XI. RESUMEN DE LOS DEBATES EN EL SENADO DURANTE LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE DICIEMBRE DE 1847.....	130
XII. PL 1848 REMITIDO POR EL SENADO AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (24 DE DICIEMBRE DE 1847)	132
XIII. DICTAMEN DE LA CMC-S (11 DE ENERO DE 1848)	133
XIV. PROMULGACIÓN DE LA LEY 1848	136
XV. BREVE REFLEXIÓN: ¿POR QUÉ NO SE MODIFICÓ EL CCom 1829 EN VEZ DE PROMULGAR UNA LEY ESPECIAL?.....	138

CAPÍTULO V DESARROLLO DE LA LEY DE 1848

I. IMPORTANCIA DEL REGLAMENTO EN RELACIÓN A LA LEY DE 1848.....	141
II. EXCEPCIONALIDAD DE LA REGULACIÓN DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES POR UNA NORMA REGLAMENTARIA	142
A) BREVE REFERENCIA GENERAL A LAS MATERIAS RESERVADAS A LA LEY Y A LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	142
B) LA MATERIA DE SOCIEDADES MERCANTILES POR ACCIONES, ¿ES OBJETO DE RESERVA DE LEY FORMAL? EN SU CASO, ¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ESTA MATERIA? CONCRETA REFERENCIA AL REGLAMENTO DE 1848 COMO ÚNICA NORMA REGLAMENTARIA DE DESARROLLO O DE “EJECUCIÓN” DE UNA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES POR ACCIONES EN NUESTRO DERECHO SOCIETARIO	147
III. MATERIAS REGULADAS POR LA LEY DE 1848 Y POR EL REGLAMENTO DE 1848: DESCRIPCIÓN Y COORDINACIÓN EN AMBOS TEXTOS	150
A) LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD	150
1. Procedimiento de constitución de la sociedad	151
2. Objeto social.....	152
3. Escritura de constitución	153
B) INSCRIPCIÓN REGISTRAL	153
C) SOCIEDAD EN FORMACIÓN Y SOCIEDAD IRREGULAR	153
D) LAS APORTACIONES SOCIALES	153
1. Aportaciones no dinerarias (especial referencia a su valoración).....	153
2. Desembolso del capital social	154
3. Proporcionalidad entre el capital y el objeto social y entre capital y patrimonio	154
E) ACCIONES	155
1. Derechos del socio.....	155
2. Formalidades de las acciones	157
3. Transmisión de las acciones. Libro registro de acciones.	158
F) JUNTA GENERAL.....	158

1.	Competencia.....	159
a)	Aprobación de las cuentas anuales	159
b)	Aprobación de la distribución de dividendos.....	160
c)	Nombramiento de administradores.....	160
d)	Remuneración de administradores.....	161
2.	Procedimiento de constitución	161
3.	Adaptación de sociedades por acciones ya existentes	162
4.	Clases de Juntas.....	162
5.	Convocatoria, constitución y adopción de acuerdos.....	163
G)	ADMINISTRADORES.....	165
1.	Competencias del órgano de administración	165
2.	Nombramiento.....	167
3.	Cese	168
4.	Modos de organizar la administración.....	171
5.	Remuneración.....	171
6.	Deberes.....	172
7.	Responsabilidad	172
8.	Actuaciones para la regularización de las sociedades ya existentes	175
H)	CUENTAS ANUALES.....	176
1.	Procedimiento de aprobación de las cuentas anuales	177
2.	Contenido de las cuentas anuales	178
3.	Aplicación del resultado. Dividendos.....	178
4.	Depósito y publicidad.....	179
5.	Adaptación de las sociedades a la Ley de 1848.....	179
I)	REGLAMENTOS Y ESTATUTOS. APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN.....	180
J)	DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	181
K)	LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES	183

IV. REMISIONES AL REGLAMENTO DE 1848 DURANTE LOS DEBATES EN EL SENADO 184

CAPÍTULO VI CONCEPTO DE COMPAÑÍAS MERCANTILES POR ACCIONES

I.	CUESTIONES PREVIAS	191
A)	CUESTIÓN TERMINOLÓGICA: ¿“COMPAÑÍAS” O “SOCIEDADES”?	191
B)	LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES POR ACCIONES, ¿SON UN NUEVO TIPO SOCIETARIO QUE INCLUYE A LAS ANÓNIMAS Y COMANDITARIAS?.....	193
C)	AUSENCIA DE DEFINICIÓN LEGAL DE COMPAÑÍA MERCANTIL POR ACCIONES, COMPAÑÍA ANÓNIMA Y COMPAÑÍA COMANDITARIA POR ACCIONES.....	196
D)	FALTA DE ACUERDO EN CUANTO AL ORIGEN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA. NOTAS CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPAÑÍAS DE COMERCIO PRECODIFICADAS.....	197
II.	LA COMPAÑÍA MERCANTIL EN EL CCom 1829; SU VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL.....	200
A)	EL SISTEMA OBJETIVO O SUBJETIVO DEL CÓDIGO DE SÁINZ DE ANDINO	202
B)	NOTAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL	204
1.	¿Se puede hablar de un concepto genérico de compañía mercantil o sólo existe el régimen propio de cada tipo (colectiva, comanditaria y anónima)?.....	205
2.	Antecedentes normativos del concepto de compañía mercantil	206
3.	Es una sociedad regulada por el Derecho común a la que se le aplican las especialidades del Derecho mercantil.....	207
4.	La compañía mercantil es, ante todo, un contrato	209
5.	El artículo 264 del CCom 1829 no reconoce expresamente la creación de una nueva persona jurídica.....	211
6.	La compañía mercantil es un comerciante.....	213
7.	Pluralidad de contratantes, obtención de lucro y puesta en común de bienes e industria	214
C)	¿CAMBIO DE PLANTEAMIENTO EN EL CCom 1885?	215
III.	NOCIÓN DE COMPAÑÍAS MERCANTILES POR ACCIONES	217

A)	LOS TIPOS SOCIETARIOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA Y DE LA COMANDITARIA POR ACCIONES	217
1.	La compañía anónima y la comanditaria por acciones en el CCom 1829	217
a)	La compañía comanditaria por acciones	218
b)	La compañía anónima	218
i.	Regulación legal	218
ii.	Notas características básicas	222
2.	La compañía anónima y la comanditaria por acciones en la Ley y Reglamento de 1848	226
a)	La compañía comanditaria por acciones	227
b)	La compañía anónima	229
i.	Referencias al concepto de compañía anónima en los debates del PL 1848	229
ii.	Noción legal y características	232
iii.	Evolución del concepto de compañía anónima durante la vigencia de la Ley de 1848.	233
B)	CARACTERÍSTICAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA SEGÚN D. PEDRO SÁINZ DE ANDINO:	234
1.	Limitación de la responsabilidad de los socios.....	234
2.	El privilegio consiste en la derogación de las reglas comunes de los contratos. El interés público.	235
3.	Son grandes empresas	236
4.	Son un instrumento para canalizar las inversiones de las medianas fortunas y pequeños ahorradores	237

CAPÍTULO VII

RÉGIMEN DE LA AUTORIZACIÓN GUBERNATIVA O LEGISLATIVA

I.	FUENTES NORMATIVAS	239
A)	EL CCom 1829.....	239
B)	EVOLUCIÓN DE LAS REDACCIONES DEL PL 1848.....	241
C)	LA LEY DE 1848.....	242
1.	Procedimiento para obtener la autorización legal.....	242
2.	Procedimiento para obtener la autorización en virtud de RD.	243
D)	EL REGLAMENTO DE 1848	244
II.	DERECHO COMPARADO.....	246
A)	DERECHO FRANCÉS	247
B)	DERECHO BRITÁNICO	250
1.	Cambio de tendencia: finaliza la restricción impuesta a la aprobación de nuevas compañías por acciones. <i>The Chartered Companies Act, 1837</i>	253
2.	Admisión por primera vez del régimen de inscripción registral de las compañías mercantiles. <i>JSCA 1844</i>	257
3.	Ley marco para las compañías mercantiles cuyo objeto social sea una obra pública. <i>CCCA 1845</i>	259
4.	Conclusiones	262
III.	DEBATES PARLAMENTARIOS.....	264
A)	MOTIVOS PARA RETIRAR DE LOS T. de c. LA COMPETENCIA PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS ANÓNIMAS	264
B)	DIFERENTES POSTURAS SOBRE LA AUTORIZACIÓN GUBERNATIVA Y LEGISLATIVA.....	265
1.	Parlamentarios partidarios de que la autorización la concedan exclusivamente las Cortes ...	265
2.	Parlamentarios partidarios de que la autorización la conceda exclusivamente el Gobierno..	268
3.	Parlamentarios partidarios de que la autorización sea competencia de las Cortes y del Gobierno, en función del objeto social	271
4.	Cambio de postura del Gobierno	273
C)	ANULACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.....	276
IV.	DOCTRINA DE LA ÉPOCA.....	278

V. LOS BANCOS Y LA LEY DE 1848: ADAPTACIÓN DE LOS ENTONCES EXISTENTES Y AUTORIZACIÓN DE NUEVAS SOLICITUDES. MENCIÓN PARTICULAR A LAS SUCURSALES O CAJAS SUBALTERNAS.....	280
A) BREVE REFERENCIA HISTÓRICA A LOS BANCOS ESPAÑOLES EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX	280
B) NECESIDAD DE UNA LEY DE BANCOS	282
C) ADAPTACIÓN A LA LEY DE 1848.....	285
D) INTERVENCIONES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.....	285
E) INTERVENCIONES EN EL SENADO	291
F) REFERENCIA A LAS SUCURSALES O CAJAS SUBALTERNAS	292

CAPÍTULO VIII EL OBJETO SOCIAL

I. FUENTES NORMATIVAS	299
A) EL CCOM 1829	299
1. Un fondo por acciones para girarlo sobre uno o muchos objetos	299
2. Privilegio	300
3. Necesaria determinación del objeto social.	301
B) EVOLUCIÓN DE LAS REDACCIONES DEL PL 1848.....	301
C) LA LEY DE 1848.....	305
1. El objeto social determina si una sociedad puede constituirse por acciones y si la autorización debe ser legislativa o gubernativa	305
2. Necesaria determinación del objeto social	307
3. Proporcionalidad entre el objeto social y el capital social. Breve referencia a la infracapitalización.....	307
4. Prohibición de actuación fuera del ámbito del objeto social	309
D) EL REGLAMENTO DE 1848	310
1. Utilidad pública. Exclusión de los artículos de primera necesidad	310
2. Proporcionalidad entre el objeto social y el capital social.....	311
3. Vigilancia gubernativa	312
4. Prohibición de actuación fuera del ámbito del objeto social	313
II. DEBATES PARLAMENTARIOS.....	313
A) UTILIDAD PÚBLICA. EXCLUSIÓN DE LAS “OPERACIONES ORDINARIAS DE COMERCIO”	314
1. Intervenciones en el Congreso de los Diputados.....	314
2. Intervenciones en el Senado	321
a) Artículos de comer, beber y arder.....	321
b) “Subsistencias” o “artículos de primera necesidad”	324
c) La función de vigilancia de los T. de c. respecto al objeto social	327
B) PROHIBICIÓN DE ACTUACIÓN FUERA DEL ÁMBITO DEL OBJETO SOCIAL	328
C) EL OBJETO SOCIAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS. REFERENCIAS A FRANCIA Y REINO UNIDO	330
III. DOCTRINA DE LA ÉPOCA.....	335

CAPÍTULO IX RÉGIMEN DE LAS ACCIONES

I. FUENTES NORMATIVAS	339
A) INTRODUCCIÓN.....	339
B) DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ACCIONISTA.....	340
1. Igualdad de derechos. Privilegios de los fundadores	341
2. Pactos o acuerdos entre accionistas	341
3. Desembolso de los dividendos pasivos	342
C) DOCUMENTACIÓN DE LA ACCIÓN	345
1. CCom 1829	346
2. Las cartas de pedido de acciones	347
3. El libro de registro de acciones	349

4.	Las acciones en depósito o garantía del ejercicio del cargo de los administradores.....	351
D)	TRANSMISIÓN DE LA ACCIÓN.....	351
E)	COTIZACIÓN EN BOLSA DE LA ACCIÓN	353
F)	EVOLUCIÓN DE LAS REDACCIONES DEL PL 1848.....	356
1.	Las cartas de pedido de acciones.....	356
2.	La emisión y desembolso	357
3.	Acciones al portador o nominativas	359
4.	Las acciones depositadas por los administradores en garantía del ejercicio de su cargo.	360
5.	La cotización en Bolsa	360
II.	DEBATES PARLAMENTARIOS.....	361
A)	CARTAS DE PEDIDO DE ACCIONES	361
B)	EMISIÓN, SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO	366
1.	Emisión de los títulos de las acciones. Acciones provisionales.....	366
2.	Diferenciación entre suscripción y desembolso	367
3.	Fijación del límite de desembolso mínimo.....	368
C)	ACCIONES NOMINATIVAS O AL PORTADOR (ARTÍCULO 12 DEL PL 1848)	370
1.	Debates en el Congreso de los Diputados	371
2.	Debates en el Senado.....	374
a)	Las enmiendas del Marqués de Vallgornera y del Sr. Pérez de Seoane.....	374
b)	Dictamen de la CS sobre la enmienda del Marqués de Vallgornera.....	376
c)	Réplica del Sr. Pérez de Seoane al Dictamen	377
d)	Respuesta de D. Pedro Sáinz de Andino al Marqués de Vallgornera y al Sr. Pérez de Seoane por sus enmiendas.....	380
e)	Intervención del Senador Sr. Peña Aguayo	384
f)	Discurso del Ministro de CIOP, D. Juan Bravo Murillo.....	385
g)	Últimas intervenciones de los Sres. Pérez de Seoane, Bravo Murillo, Marqués de Vallgornera y Sáinz de Andino	386
h)	Redacción final del artículo 12 del PL 1848.....	390
D)	UNA CUESTIÓN TERMINOLÓGICA: ACCIONES “NOMINALES” O “NOMINATIVAS”.....	391
E)	OTRA CUESTIÓN TERMINOLÓGICA: “TÍTULOS DE ACCIONES” O “PROMESAS DE ACCIONES”	393
F)	LAS DENOMINADAS ACCIONES DE RESERVA	394
G)	LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES	395
H)	TRANSMISIÓN DE ACCIONES	396
I)	ACCIONES DEPOSITADAS POR LOS ADMINISTRADORES EN GARANTÍA DEL EJERCICIO DE SU CARGO.....	398
III.	DOCTRINA DE LA ÉPOCA.....	402

CAPÍTULO X ÓRGANOS SOCIALES (I): LA JUNTA GENERAL

I.	FUENTES NORMATIVAS	405
A)	EL CCom 1829.....	405
B)	LA LEY DE 1848.....	407
1.	Aprobación de los estatutos y reglamentos societarios: competencia de la junta de accionistas, ¿o de la autoridad pública?	407
2.	Adaptación de las compañías constituidas con anterioridad a la Ley de 1848.....	408
C)	EL REGLAMENTO DE 1848	409
1.	Competencias	410
a)	Cuestiones generales.....	410
b)	Estatutos y reglamentos societarios	411
c)	Cuentas anuales	412
i.	Antecedentes. El CCom 1829 no preveía la publicidad de las cuentas anuales ni la inspección por la Autoridad pública.....	412
ii.	Inventarios y balances.....	413
iii.	Distribución de dividendos	416
d)	Nombramiento y remuneración de administradores	417
2.	Vigilancia de la junta por la autoridad pública.....	420

3.	Adaptación de las compañías constituidas con anterioridad a la promulgación de la Ley de 1848	421
D)	LOS ESTATUTOS Y LOS REGLAMENTOS. UN APUNTE SOBRE SUS CONTENIDOS	421
II.	DEBATES PARLAMENTARIOS.....	428
A)	SOBERANÍA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS EN LAS OPERACIONES SOCIALES ..	428
B)	CONVOCATORIA Y PRESIDENCIA DE LAS JUNTAS POR LA AUTORIDAD PÚBLICA	429
C)	CÓMPUTO DE LA MAYORÍA: ¿POR ACCIONES O POR ACCIONISTAS?	433
III.	DOCTRINA DE LA ÉPOCA.....	437

CAPÍTULO XI ÓRGANOS SOCIALES (II): LOS ADMINISTRADORES

I.	FUENTES NORMATIVAS	439
A)	EL CCom 1829.....	439
B)	LA LEY DE 1848.....	441
C)	EL REGLAMENTO DE 1848	442
D)	REGULACIÓN DE ALGUNAS CUESTIONES RELEVANTES	444
1.	Requisitos para ser nombrado administrador	445
2.	Nombramiento y aceptación.....	446
3.	Administración provisional y administración definitiva	447
4.	Sistema de administración dual	448
5.	Duración del cargo	450
6.	Separación. Amovilidad	450
7.	Naturaleza de la relación jurídica entre la sociedad y el administrador. ¿Relación orgánica?	451
8.	Ejercicio del cargo.....	454
9.	Ámbito de representación.....	455
10.	Retribución	456
11.	Control de los administradores: el órgano de inspección o vigilancia y la Autoridad pública	457
12.	Responsabilidad	460
a)	Régimen del CCom 1829	460
b)	Regulación de la Ley de 1848	462
c)	Régimen del Reglamento de 1848	464
d)	Resumen de la regulación de la responsabilidad	467
II.	DEBATES PARLAMENTARIOS.....	470
A)	VIGILANCIA Y CONTROL POR LA AUTORIDAD PÚBLICA	470
B)	AMOVILIDAD	472
C)	ACCIONES DEPOSITADAS EN GARANTÍA DEL EJERCICIO DEL CARGO	477
D)	CONFLICTOS DE INTERESES	479
E)	RESPONSABILIDAD POR CONDUCTAS CONCRETAS.....	481
1.	Utilización de fondos sobrantes.....	481
2.	Las promesas de acciones y la transmisión de acciones	483
III.	DOCTRINA DE LA ÉPOCA.....	484

CAPÍTULO XII VIGILANCIA E INSPECCIÓN ASIGNADAS A LA AUTORIDAD PÚBLICA

I.	PRELIMINAR. EL DOBLE ÁMBITO DE LA VIGILANCIA Y DE LA INSPECCIÓN DE LA AUTORIDAD PÚBLICA.....	489
II.	LOS JEFES POLÍTICOS. LOS GOBERNADORES DE PROVINCIA O GOBERNADORES CIVILES	489
A)	LA LEY DE 1845.....	490
B)	RD 1849	495
C)	LA INSTRUCCIÓN DE 26 DE ENERO DE 1850, DEL MCIOP PARA LOS GOBERNADORES CIVILES DE LAS PROVINCIAS,	496

III. FUENTES NORMATIVAS	501
A) EL CCom 1829.....	502
B) LA LEY DE 1848.....	504
C) EL REGLAMENTO DE 1848	505
1. Régimen general de la vigilancia e inspección	505
2. Disposiciones específicas sobre la vigilancia e inspección	507
3. La vigilancia e inspección de las compañías existentes antes de la promulgación de la Ley de 1848	509
D) LA RO DE 22 DE MARZO DE 1850, DIRIGIDA A LOS GOBERNADORES CIVILES SOBRE LA FORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y ENVÍO AL GOBIERNO DEL BALANCE ANUAL GENERAL DE SITUACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS POR ACCIONES.....	511
E) LA COMUNICACIÓN DE 16 DE ABRIL DE 1853 A LOS GOBERNADORES CIVILES PARA IMPEDIR QUE SOCIEDADES QUE AÚN NO HAN RECIBIDO LA AUTORIZACIÓN, EMITAN Y PONGAN EN CIRCULACIÓN SUS ACCIONES.	513
F) EL RD DE 15 DE FEBRERO DE 1854, SOBRE LA INSPECCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES POR ACCIONES DOMICILIADAS EN MADRID. EL RD DE 15 DE AGOSTO DE 1854, QUE DEROGA EL RD DE 15 DE FEBRERO DE 1854.....	514
G) EL REGLAMENTO DE 1857, DE LAS FUNCIONES QUE DEBEN EJERCER LOS GOBERNADORES DE LA PROVINCIAS Y DELEGADOS ESPECIALES DEL GOBIERNO CERCA DE LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES POR ACCIONES AL INSPECCIONAR ESTAS SOCIEDADES	516
1. Vigilancia e inspección en la fase anterior a la autorización de la compañía	517
2. Participación y seguimiento de las reuniones de la junta general, de la dirección y de la vigilancia social.	518
3. Inspección de los estados financieros	519
4. Vigilancia de las sociedades concesionarias de obras públicas	521
5. La coordinación entre el Gobierno, los Gobernadores y los delegados especiales.....	523
IV. DEBATES PARLAMENTARIOS.....	524
A) DEBATES EN LAS SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS	524
1. Propuesta de presentación semestral de un estado de operaciones al Jefe Político o al T. de c.	524
2. Discusión del artículo 17 del PL 1848.....	527
3. La inspección de los bancos	529
B) DEBATES EN LAS SESIONES DEL SENADO	530
1. Discusión del artículo 17 del PL 1848. Propuesta para concretar las funciones de vigilancia e inspección por la Autoridad pública	530
2. Inspección de las operaciones de liquidación.....	533
V. DOCTRINA DE LA ÉPOCA.....	535
CAPÍTULO XIII	
LAS COMPAÑÍAS POR ACCIONES REGULADAS POR LEYES ESPECIALES DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE 1848 (1848 – 1868)	
I. LAS COMPAÑÍAS ANÓNIMAS COMUNES Y LAS REGULADAS POR LAS LEYES ESPECIALES. DOCTRINA DE LA ÉPOCA	539
II. LAS SOCIEDADES DE BANCOS DE EMISIÓN.....	544
A) REFERENCIAS A LA FUTURA LEY DE BANCOS DURANTE LOS DEBATES PARLAMENTARIOS DE LA LEY DE 1848	544
B) NOCIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS BANCOS.....	546
C) EXCEPCIONES Y OBLIGACIONES ESPECIALES REGULADAS POR LA LB, EN RELACIÓN A LA LEY DE 1848.....	548
1. Autorización otorgada por RD y no por ley	548
2. Las acciones y el capital social.....	550
3. La administración social y la vigilancia e inspección por la Autoridad pública.....	550
III. LAS SOCIEDADES DE CRÉDITO.....	551
A) NOCIÓN. GÉNESIS DE LA LEY	551

B)	OBJETOS SOCIALES	555
C)	DIFERENCIAS ENTRE EL RÉGIMEN DE LA LSCr Y EL DE LA LEY DE 1848.	556
1.	Excepciones establecidas por la LSCr en relación a la Ley de 1848.....	557
a)	Naturaleza de la autorización: gubernativa y no parlamentaria	557
b)	Objeto social general	558
c)	No es necesaria una proporción entre el capital social y el objeto social	558
d)	Posibilidad de emitir acciones al portador y suspensión de la responsabilidad del cedente en la transmisión de acciones con dividendos pasivos (artículo 283 CCom 1829)	560
e)	Emisión de obligaciones al portador.....	562
2.	Obligaciones especiales establecidas por la LSCr, en relación a la Ley de 1848: vigilancia por la Autoridad pública y publicidad contable.	563
IV.	LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE OBRAS PÚBLICAS	565
A)	REFERENCIAS A LAS COMPAÑÍAS DE OBRAS PÚBLICAS EN LOS DEBATES PARLAMENTARIOS DE LA LEY DE 1848	565
B)	NORMATIVA APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE OBRAS PÚBLICAS.....	569
C)	NOCIÓN, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS.....	572
D)	EXCEPCIONES ESTABLECIDAS POR LA LSCOP, EN RELACIÓN A LA LEY DE 1848	574
1.	Autorización provisional y definitiva. Autorización por RD	574
2.	Emisión de acciones al portador. Suspensión del artículo 283 del CCom 1829.....	576
3.	Emisión de obligaciones.....	578
4.	¿Se encuentran excluidas las sociedades comanditarias por acciones del ámbito de aplicación de la LSCOP?	579
E)	OBLIGACIONES ESPECIALES ESTABLECIDAS POR LA LSCOP, EN RELACIÓN A LA LEY DE 1848. VIGILANCIA E INSPECCIÓN POR LA AUTORIDAD PÚBLICA	580
CAPÍTULO XIV		
EL TRIUNFO DE LOS PRINCIPIOS LIBERALES: DEROGACIÓN DE LA LEY Y DEL REGLAMENTO DE 1848		
I.	SITUACIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL EN LOS AÑOS PREVIOS A LA DEROGACIÓN DE LA LEY Y DEL REGLAMENTO DE 1848.....	583
A)	ANTECEDENTES. LA CRISIS ECONÓMICA DE 1866	583
B)	LOS FERROCARRILES	585
C)	EL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO	587
D)	EL SECTOR INDUSTRIAL.....	589
II.	SITUACIÓN POLÍTICA ALREDEDOR DE LA DEROGACIÓN DE LA LEY Y DEL REGLAMENTO DE 1848 (INICIO DEL SEXENIO REVOLUCIONARIO)	595
A)	ANTECEDENTES	595
B)	EL TRIUNFO DE LA “GLORIOSA”. EXILIO DE ISABEL II.....	597
C)	LAS CORTES CONSTITUYENTES. LA CE 1869.....	597
III.	EL DECRETO DE 1868.....	600
A)	PREÁMBULO O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	600
B)	ARTICULADO	602
IV.	LA LEY DE 1869	605
A)	INTRODUCCIÓN.....	605
B)	REGLAS COMUNES A TODAS LAS SOCIEDADES.....	606
C)	DISPOSICIONES ESPECIALES PARA DETERMINADAS CLASES DE SOCIEDADES... ..	608
D)	DISPOSICIONES ADICIONALES Y DISPOSICIÓN DEROGATORIA.....	608

CAPÍTULO XV CONCLUSIONES

CONCLUSIONES.....	611
-------------------	-----

ABSTRACT.....	621
---------------	-----

BIBLIOGRAFÍA.....	627
-------------------	-----

ANEXO 1: LEY DE 28 DE ENERO DE 1848, DE COMPAÑÍAS MERCANTILES POR ACCIONES.....	643
--	------------

ANEXO 2: REGLAMENTO DE 17 DE FEBRERO DE 1848 PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY DE 28 DE ENERO DE ESTE AÑO SOBRE COMPAÑÍAS MERCANTILES POR ACCIONES.	649
--	------------

Abreviaturas

AA.VV.	Autores varios
AyS	Agricultura y Sociedad
BdE	Banco de España
BOE	Boletín Oficial del Estado
BoT	<i>Board of Trade</i> británico
CCCA 1845	<i>The Companies Clauses Consolidation Act</i> , 1845
CCD	Comisión del Congreso de los Diputados
CCom 1829	Código de comercio de 1829
CCom 1885	Código de comercio de 1885
CE 1845	Constitución de la Monarquía Española de 23 de mayo de 1845 (GdM de igual fecha)
CE 1869	Constitución aprobada por las Cortes Generales el 1 de junio de 1869 y promulgada el 5 de junio del mismo año (GdM de 7 de junio de 1869)
CE 1978	Constitución española publicada en el BOE de 29 de diciembre de 1978
CMC-S	Comisión Mixta Congreso-Senado
Code	Código de comercio francés de 1807
coord./coords.	coordinador(a) /coordinadores
CS	Comisión del Senado
Decreto de 1868	Decreto de 28 de octubre de 1868, derogando la Ley de Sociedades anónimas de 28 de enero de 1848 y el Reglamento y demás disposiciones dadas para su ejecución
dir./dirs.	director(a) / directores
DsC	Diario de las sesiones de Cortes
FJ	Fundamento Jurídico
GdM	Gaceta de Madrid
ICE	Información Comercial Española
IEF	Instituto de Estudios Fiscales
INAP	Instituto Nacional de Administración Pública
JSCA 1844	<i>The Joint Stock Companies Act</i> , 1844
LB	Ley de 28 de enero de 1856, de Bancos
Ley de 1845	Ley de 2 de abril de 1845, sobre Jefes Políticos
Ley de 1848	Ley de 28 de enero de 1848, de compañías mercantiles por acciones
Ley de 1869	Ley de 19 de octubre de 1869, sobre la libre constitución de sociedades mercantiles
Ley de Bolsa	Real Decreto de 10 de septiembre de 1831
LF	Ley de 2 de junio de 1855, general de ferrocarriles
LSA (1951)	Ley de 17 de julio de 1951 sobre régimen jurídico de sociedades anónimas
LSA (1989)	Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades anónimas
LSC	Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades de capital
LSCOP	Ley de 11 de julio de 1856, de sociedades concesionarias de obras públicas
LScr	Ley de 28 de enero de 1856, de sociedades de crédito
LSRL (1953)	Ley de 17 de julio de 1953 sobre Régimen Jurídico de las sociedades de responsabilidad limitada

LSRL (1995)	Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada
MCIOP	Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas
Ministro de CIOP	Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas
MyC	Moneda y Crédito
Pág. / págs.	página / páginas
PL 1848	Proyecto de Ley de compañías mercantiles por acciones
RAE	Real Academia de la Lengua Española
RAJyL	Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
RC	Real Cédula
RD/RRDD	Real Decreto/Reales Decretos
RD 1849	Real Decreto de 28 de diciembre de 1849, sobre los Gobernadores de Provincia o Gobernadores Civiles
RDM	Revista de Derecho Mercantil
RDP	Revista de Derecho Privado
RdS	Revista de Derecho de Sociedades
REFyC	Revista Española de Financiación y Contabilidad
Reglamento de 1848	Reglamento de 17 de febrero de 1848, para la ejecución de la Ley de 1848, sobre las compañías mercantiles por acciones
Reglamento de 1857	Reglamento de 12 de diciembre de 1857, de las funciones que deben ejercer los Gobernadores de las Provincias y delegados especiales del Gobierno acerca de las compañías mercantiles por acciones al inspeccionar estas sociedades
RGLyJ	Revista General de Legislación y Jurisprudencia
RHE	Revista de Historia Económica
RO/RROO	Real Orden/Reales Órdenes
RPGC	Registro Público General de Comercio
SEAP	Sociedad Económica de Amigos del País
ss.	siguientes
T. de c.	Tribunal de comercio
TC	Tribunal Constitucional
vol. / vols.	volumen / volúmenes

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo ha sido analizar el contenido de la Ley española de 28 de enero de 1848 sobre compañías mercantiles por acciones y su Reglamento de desarrollo de 17 de febrero del mismo año. Se trata de unos textos sobre los que no se han realizado estudios en profundidad y cuyo contenido, en la actualidad, es poco conocido.

El régimen establecido por las dos normas ha sido, y es, objeto de crítica por su carácter represivo e intervencionista, en la medida en que exigió la autorización legal o gubernativa de la sociedad y consagró una permanente inspección por parte de la Autoridad pública. Simultáneamente, es un hecho que se desconoce gran parte del contenido normativo, sobre todo de los cuarenta y dos artículos del Reglamento que constituye un antecedente básico de nuestro Derecho de sociedades anónimas.

El estudio se ha centrado, por un lado, en el contenido de los dos textos citados y de las normas complementarias promulgadas durante la vigencia de los mismos (1848 – 1868). Por otro lado, en la evolución de la política legislativa sobre las compañías por acciones desde el CCom 1829 hasta la derogación de los textos de 1848, en 1868 – 1869. Y, por último, se ha pretendido evaluar si el Legislador consiguió los objetivos que se propuso al promulgar la Ley y el Reglamento de 1848, lo cual está relacionado con la cuestión del fracaso de la Revolución Industrial en España.

Se trata, por tanto, de un trabajo en el que confluyen dos perspectivas de análisis: el técnico jurídico, propio del Derecho de sociedades, y el histórico, fundamentalmente, económico.

La dificultad mayor para realizar la investigación ha sido el escaso número de obras doctrinales que tratan sobre la materia. Los autores coetáneos al periodo de vigencia de la Ley de 1848 son muy pocos y sus aportaciones exiguas, en la medida que suelen transcribir o resumir los textos legales sin ofrecer abundantes ni profundos comentarios, como era habitual en la época. Un conocido profesor de principios del siglo XX¹, realizó un estudio exhaustivo de toda la Doctrina mercantilista durante el periodo comprendido entre el CCom 1829 y el CCom 1885, del que resulta que sólo se dispone de once autores que han publicado obras en las que se cita y comenta (en mayor o menor medida) la Ley y el Reglamento de 1848.

En cuanto a la doctrina posterior, que llega hasta nuestros días, es frecuente observar breves referencias a la Ley de 1848 –y, a veces, al Reglamento de 1848- en un marco histórico enumerativo, en el que se subraya su carácter intervencionista, pero sin comentar más aspectos. Incluso alguna obra no menciona la Ley de 1848 dentro de las normas mercantiles promulgadas entre los dos Códigos de comercio. Es interesante, también, constatar que en los estudios monográficos sobre materias esenciales del

¹ ÁLVAREZ DEL MANZANO Y ÁLVAREZ RIVERA, F. (1903): *Curso de Derecho Mercantil filosófico, histórico y vigente (español y extranjero)*, tomo I, Parte General, segunda edición, Madrid, págs. 693 a 701.

Derecho de sociedades anónimas (como, por ejemplo, el capital, las aportaciones, las acciones, los administradores, el sistema dual, las cuentas anuales, la cotización en Bolsa, etc.) es raro que aparezcan referencias históricas a los textos de 1848, que establecen los principios normativos de esas materias.

La escasez de fuentes bibliográficas mercantiles contrasta con la abundancia de obras que estudian el aspecto histórico y económico del periodo en el que nuestra Ley de 1848 está en vigor. Sobre esta materia se ha podido disponer de numerosas obras, la mayoría de fechas recientes, que expresan diferentes interpretaciones de la primera industrialización en España, así como de los acontecimientos políticos del periodo 1848 – 1868.

Pero, sin duda, la más valiosa fuente de información e interpretación del texto legal y de la política legislativa de 1848 han sido las intervenciones de los parlamentarios durante los debates del PL 1848 en el Congreso y en el Senado. Se ha dispuesto de unas ochenta enjundiosas páginas del DsC (Congreso de los Diputados y Senado) en las que se refleja la negociación de la política legislativa y las posiciones de las diferentes corrientes y grupos de interés. Sin este material, el presente trabajo, seguramente, hubiera quedado pobre y deslucido.

En cuanto a la metodología seguida, se pueden hacer las siguientes observaciones.

Se ha estimado necesario enmarcar el trabajo desde el punto de vista histórico y económico (capítulos II, IV, XIII –en parte- y XIV). Como resultaba demasiado extenso un estudio histórico-económico de todo el periodo de vigencia de la Ley de 1848, se decidió limitarlo a tres momentos: la promulgación en 1848, la aprobación de las leyes de Bancos, sociedades de crédito y de ferrocarriles a mitad del periodo, en 1855 y 1856 y, por último, la derogación de los textos normativos en 1868.

Se ha pretendido estudiar con profundidad el contenido de la Ley de 1848 (veintiún artículos) y del Reglamento de 1848 (cuarenta y cuatro artículos). Por razones de extensión, no ha sido posible comentar todas las materias tratadas por los textos legales. Se han elegido las materias siguiendo un doble criterio. Primero, los aspectos que mejor reflejaran la política legislativa sobre sociedades mercantiles por acciones. Y, segundo, aquellos temas que se trasluzcan en la legislación actual, bien porque siguen con un tratamiento similar, bien por lo contrario: porque el Legislador en un momento posterior decidió optar por un régimen opuesto o sustancialmente diferente.

Las materias seleccionadas son las siguientes: el concepto de compañía mercantil por acciones; el régimen de autorización, que es el aspecto más denostado de la Ley de 1848 y, posteriormente, abandonado por el Legislador desde 1868; el objeto social; las acciones, sobre las que se produjeron los debates más largos en el Senado, en relación a la prohibición de los títulos al portador; los órganos sociales: la junta y la administración (previéndose el sistema dual); la vigilancia e inspección por parte de la Autoridad pública; y, por último, las sociedades anónimas reguladas por las leyes de 1855 y 1856 sobre Bancos, sociedades de crédito y concesionarias de obras públicas. Los demás temas que no se han podido estudiar con profundidad, se comentan, con carácter general, en el capítulo V (desarrollo de la Ley de 1848) y el capítulo VI (concepto de compañías mercantiles por acciones).

La estructura del análisis de los temas, en líneas generales, ha consistido en un examen y comentario de las fuentes normativas, es decir, del CCom 1829, de la Ley y del Reglamento de 1848; del contenido de los debates parlamentarios; y, por último, de las escasas referencias de la Doctrina de la época. En algunos capítulos se han introducido variaciones, en función de sus características particulares.

Las menciones al Derecho comparado (fundamentalmente Francia y Reino Unido) se han realizado en cada materia objeto de estudio, pues ha parecido más útil hacerlo así, que dedicar un capítulo monográfico a la legislación de los citados países sobre las compañías mercantiles por acciones durante el periodo 1848 – 1868.

Por otro lado, se decidió prescindir del estudio tanto de la jurisprudencia como de los documentos de constitución de sociedades por acciones publicados durante la vigencia de la Ley, debido a su gran volumen. Se estimó más coherente con la metodología utilizar los datos estadísticos generales aportados por diversos autores y centrar el estudio en la evolución de la política legislativa, manifestada, fundamentalmente, en la promulgación de las leyes de 1855 y 1856 en las que se advierte una flexibilización de muchos requisitos.

Ha parecido conveniente adjuntar al final del trabajo sendos Anexos con los textos íntegros de la Ley de 1848 y del Reglamento de 1848 para evitar la transcripción repetitiva de artículos y facilitar la remisión a los mismos.

Aunque se trate de un tema menor, cabe advertir que las reglas ortográficas han sido objeto de importantes modificaciones desde mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Por este motivo, se decidió tomar la licencia de variar la redacción de algunas palabras al transcribir citas textuales, acomodándolas a las reglas actuales. Así por ejemplo, se han omitido los acentos de las preposiciones “a” u “o” que, generalmente se escribían con tilde; “*Gefe político*” se ha cambiado por “*Jefe político*”; “*suscriptor*” por “suscriptor”; “*excitar la junta*” por “convocar la junta”; “*Comisión mista*” por “Comisión Mixta; etc.

Por último, el criterio de citas ha situado a pie de página las mínimas menciones, de manera que se pudiera leer todo el texto con continuidad, sin interrupciones. Uno de los objetivos ha sido facilitar la lectura de los extractos de las intervenciones de los parlamentarios durante la tramitación de la Ley, para recoger fidedignamente no sólo su contenido sino también la forma.

CAPÍTULO II CONTEXTO ECONÓMICO Y POLÍTICO

I. SITUACIÓN ECONÓMICA EN LA ESPAÑA DE MEDIADOS DEL SIGLO XIX

De 1808 a 1848, España sufrió un cambio radical: de ser un Estado con cierto peso en el mundo, pasó a ser un país de escasa influencia en la política y economía internacional. Fueron varios los factores que contribuyeron a esta situación. Se pueden destacar tres²: la guerra contra el invasor napoleónico, la pérdida de la mayor parte de los territorios coloniales y una dura guerra civil (la guerra carlista) en la década de 1830.

Para enmarcar la situación económica y empresarial de España en los años previos a la tramitación y aprobación parlamentaria de la Ley de 1848, se van a describir algunos –no todos- de los factores tradicionalmente apuntados por los historiadores económicos. Se han seleccionado los siguientes: la pérdida de las colonias, la crisis crónica de la Hacienda, la desamortización, los ferrocarriles, el sistema bancario y financiero y, por último, el sector industrial.

A) LA PÉRDIDA DE LAS COLONIAS

La independencia de la mayor parte de las colonias en el periodo 1810 – 1824 ocasionó la pérdida de un mercado privilegiado para los productores e industriales españoles, la desaparición del papel de intermediario comercial de la metrópoli, así como el colapso de la Hacienda Pública, al desaparecer los envíos de oro y plata.

La emancipación de Hispanoamérica redujo drásticamente los intercambios de exportación e importación. Según expone PALAFOX³, las estimaciones reflejan cómo entre el quinquenio 1784-1788 y el de 1816-1820 las exportaciones e importaciones a y desde las colonias experimentaron una reducción de casi el cincuenta por ciento. El total importado, sin embargo, no sufrió un descenso similar a las exportaciones ya que la caída en el comercio colonial fue en gran parte compensado con un aumento de las procedentes de otras zonas, mayoritariamente Europa. Además, en la Hacienda Pública decrecían sustancialmente los ingresos y, correlativamente, aumentaban los gastos y el endeudamiento para financiar las campañas militares de la Guerra de Independencia (1808 - 1812) y de la Guerra Carlista (1833 - 1839).

La ruptura del comercio colonial produjo un profundísimo impacto en la economía española. CARRERAS Y TAFUNELL⁴ destacan que tuvo una influencia decisiva sobre cuatro órdenes macroeconómicos. Primero, en la estructura y niveles del comercio exterior. Segundo, en la generación de un desequilibrio exterior de la economía

² PALAFOX GAMIR, J. (1998): *Curso de historia económica*, Valencia, pág. 151.

³ PALAFOX GAMIR, J. (1998): *Curso de historia ...*, pág. 152.

⁴ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica de la España contemporánea (1879-2009)*, págs. 71 a 82.

española. Tercero, en la renta nacional. Y, por último, en la estructura productiva y la asignación de recursos.

La pérdida de las colonias afectó, principalmente, a las nacientes actividades empresariales y preindustriales de la Península. Se redujeron las exportaciones a un mercado en cierto modo cautivo. Pero, por otro lado, no se puede olvidar que la emancipación de las colonias produjo un efecto positivo para la Península: la repatriación de importantes capitales que no hubieran vuelto durante aquellos años y que se pudieron utilizar para acometer proyectos industriales y empresariales.

En cualquier caso, no existe unanimidad en cuanto a la valoración de las consecuencias de la independencia de las colonias en el deterioro de la economía española. Así, por ejemplo, PRADOS DE LA ESCOSURA, en varios trabajos, relativiza su impacto. Cabe destacar la siguiente exposición:

La emancipación colonial tuvo ciertamente efectos negativos, en particular, a corto plazo, sobre la economía española. El comercio exterior de bienes y servicios descendió de forma perceptible y los niveles de inversión se resintieron significativamente. La industria nacional perdió el mercado reservado. Las dificultades financieras del Estado se agravaron como consecuencia de la caída de sus ingresos externos y de un sistema impositivo petrificado. Sin embargo, es en las dificultades inherentes a la industria manufacturera y en las insuficiencias de una Hacienda con una débil base fiscal donde han de buscarse las claves de la delicada situación de la economía española postimperial⁵.

B) LA CRISIS DE LA HACIENDA PÚBLICA

La crisis de la Hacienda Pública española era estructural: los ingresos ordinarios del Estado no llegaban a cubrir los gastos, pues, entre otros motivos, las clases privilegiadas estaban exentas del pago de impuestos. No era fácil encontrar una solución satisfactoria para esta situación, descrita por TORTELLA en los siguientes términos:

El déficit persiguió a la economía española durante todo el siglo XIX: éste es quizá el factor más importante para entender el retraso económico español. (...) Desde los años en que España participó en la guerra anglo-francesa de 1796, el Gobierno español permaneció endeudado y esta deuda, que creció constantemente durante el siglo XIX, se aligeró más a menudo por repudio que por pago. Como hemos visto, el origen de esta deuda se halla en las guerras napoleónicas que no sólo aumentaron los gastos del Gobierno, sino también empobrecieron al país, imposibilitaron la recaudación de los impuestos e interrumpieron los envíos y remesas de las colonias transatlánticas. Cuando la guerra acabó en 1814, la rebelión hispanoamericana impidió las remesas de

⁵ La cita elegida corresponde a la siguiente obra: PRADOS DE LA ESCOSURA, L. (1993): “La pérdida del Imperio y sus consecuencias económicas” en PRADOS DE LA ESCOSURA, L. y AMARAL, S. (eds.): *La independencia americana: consecuencias económicas*, Madrid, pág. 284. En el mismo sentido, en una publicación anterior, PRADOS DE LA ESCOSURA, L. (1988): *De imperio a nación. Crecimiento y atraso económico de España (1780 – 1930)*, Madrid, pág. 242. También se puede consultar, para enmarcar las consecuencias de la pérdida de las colonias en el sector exterior español, PRADOS DE LA ESCOSURA, L. (1999): “El sector exterior español durante el siglo XIX” en ANES, G. (ed.): *Historia económica de España. Siglos XIX y XX*, Barcelona, págs. 295 – 299 y 307 – 310.

metales preciosos, al tiempo que mantenía alto el presupuesto militar. Este disminuyó con la independencia definitiva de Hispanoamérica, pero ello a su vez implicó el fin irrevocable de las remesas. (...) Cuando el volumen de la deuda pública adoptaba proporciones alarmantes, el Gobierno introducía reformas o conversiones con o sin el consentimiento de los acreedores, conversiones que en realidad equivalían a repudios parciales. Este es el esquema que se siguió, con pocas variaciones durante el siglo XIX, hasta que la guerra Hispano-Norteamericana y la pérdida de Cuba y Filipinas influyeron fuertemente en la opinión y forzaron al Gobierno a seguir una línea de responsabilidad fiscal⁶.

Hubo varios intentos de reforma de la Hacienda, como los de Martín de Garay y López Ballesteros, que no prosperaron. Fue en 1845 (tres años antes de la promulgación de nuestra Ley de 1848), cuando, por fin, se aprobó la tan necesitada reforma. Dice COMÍN, en relación a la evolución de la Hacienda Pública española en el siglo XIX, que *(h)asta 1845 se presenció la pugna entre la emergente Hacienda liberal y la agonizante Hacienda absolutista; por el contrario, en la segunda mitad lo que dilucidó fue el tipo de Hacienda liberal que acabó imponiéndose: concretamente, se adoptó la de tipo moderado frente a la opción progresista⁷.*

Es conocida la referencia del último autor citado⁸ a que las dos auténticas reformas de la Hacienda en España han sido la de 1845 y la de 1977. La de 1845, según TORTELLA⁹, marcó un hito fundamental en la modernización de la Hacienda española. Este último autor se refiere a que gran parte de las luchas entre absolutistas y liberales hasta la mitad del siglo XIX se refieren a la Hacienda Pública¹⁰. Los primeros tratan de mantener el sistema como estaba, dado que claramente les favorecía pues la nobleza y la Iglesia raramente pagaban contribuciones e, incluso al contrario, en algunos casos podían recaudar sus propios impuestos.

Hasta 1845, para hacer frente a los compromisos de pago adquiridos se recurrió a dos soluciones extraordinarias: la desamortización (que se estudia en el siguiente apartado) y el endeudamiento con financieros extranjeros. Esta última práctica influirá decisivamente en el marco normativo de las compañías por acciones¹¹, pues tanto la Corona como el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no tenían las manos libres al acometer la regulación de las actividades industriales y empresariales: era preciso favorecer los intereses de quienes habían evitado la bancarrota de la Corona.

⁶ TORTELLA, G. (1975): *Los orígenes del capitalismo en España*, Madrid, págs., 25 y 26.

⁷ COMÍN COMÍN, F. (1999): “La Hacienda pública en el siglo XIX” en ANES, G.: *Historia económica ...*, pág. 343.

⁸ COMÍN COMÍN, F. (1990): “Reforma tributaria y política fiscal” en GARCÍA DELGADO, J.L.: *España, economía*, Madrid, pág. 860.

⁹ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX*, Madrid, pág. 153.

¹⁰ Como ha dejado demostrado FONTANA, J. (1977): *La revolución liberal. Política y Hacienda en 1833 – 1845*, Madrid.

¹¹ Nos referimos no sólo a la Ley y Reglamento de 1848, sino, sobre todo, a la LF, LB, LSCr y LSCOP, promulgadas en 1855 y 1856, y que se estudian en el capítulo sobre las compañías por acciones reguladas por leyes especiales.

CARRERAS Y TAFUNELL¹² resumen los principios en los que se basaba la reforma Mon – Santillán de 1845 en cinco: universalidad, equidad, legalidad, suficiencia y sistematicidad. ¿Cumplió esta reforma sus objetivos? Responden que sí y no. En la parte positiva, cabe hacer mención al pragmatismo de Mon y de Santillán¹³, pero a costa de sacrificar la equidad y eficacia recaudatoria. Fue muy relevante la simplificación del cuadro impositivo: unos pocos impuestos directos, derivados de la fiscalidad de la Corona de Aragón, otros pocos de carácter indirecto, provenientes de la Corona de Castilla, más el impuesto de aduanas y algunos monopolios fiscales.

En la parte negativa, destaca la insuficiencia del resultado. Aunque a partir de 1845 la situación cambia (se reducen los gastos militares), el nuevo sistema no fue capaz de generar los ingresos necesarios para cubrir los gastos¹⁴. Por este motivo, desde 1845 a 1868 (año de la derogación de la Ley de 1848), ningún ejercicio se cerró sin aumentar el déficit fiscal¹⁵. Según TORTELLA¹⁶, los pagos del servicio de la Deuda pública durante el periodo 1850 – 1890 suponían entorno al 27 por 100 de los gastos presupuestarios. Lamentablemente no se dispone de datos anteriores a 1849 porque las Estadísticas de los Presupuestos comienzan en ese momento.

Los años inmediatamente anteriores a la promulgación de la Ley de 1848 fueron complicados para la deuda pública. A pesar de la reforma de Mon y Santillán, la crisis de aquel momento generó un problema muy grave, que solucionó posteriormente Bravo Murillo en 1851 mediante una conversión de la deuda pública en vigor¹⁷. En opinión de TORTELLA¹⁸, esta operación encubrió una bancarrota que consolidó en deuda personal los atrasos pendientes de pago a los funcionarios públicos y en una deuda material los impagos a los proveedores del Estado, a lo que se añadió una rebaja unilateral de los pagos o amortizaciones¹⁹. Una consecuencia de esta conversión de deuda fue el cierre de varias Bolsas extranjeras a todos los valores españoles²⁰.

¹² CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X. (2012): *Historia económica ...*, págs. 113 y 114.

¹³ Sobre estos dos políticos se pueden consultar sendas biografías en la interesante obra COMÍN COMÍN, F., MARTÍN ACEÑA, P. Y VALLEJO, R. (eds.) (2006): *La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899*, Zaragoza:

- VALLEJO POUSADA, R. “Alejandro Mon, un reformador económico”, págs. 57 a 90.
- VALLEJO POUSADA, R. “Ramón Santillán González, reformador de la Hacienda liberal” págs. 91 a 132.

¹⁴ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, págs. 135 y 136. COMÍN puntualiza a este respecto *que los frutos de la reforma de 1845 tardarían en recogerse*. Además, no puede olvidarse que en los años posteriores a las reforma de 1845 los ingresos ordinarios recaudados por el Tesoro fueron aumentando. COMÍN COMÍN, F. (1988): *Hacienda y Economía en la España contemporánea (1800 – 1936)*, vol. I, Madrid, IEF, pág. 147.

¹⁵ Bravo Murillo hizo un detallado estudio sobre la evolución de la Hacienda Pública en BRAVO MURILLO, J. (1865): *El pasado, el presente y el porvenir de la Hacienda Pública*, Madrid, págs. 41 y ss.

¹⁶ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, pág. 154.

¹⁷ Se puede consultar para esta cuestión tan relevante la obra de ARTOLA, M. (1986): *La Hacienda del siglo XIX. Progresistas y moderados*, BdE, Madrid, págs. 266 – 279, con interesantes datos sobre las reclamaciones presentadas oficialmente por los inversores extranjeros y que afectaron negativamente a la credibilidad financiera de España en el exterior y también ARTOLA, M., Y MARTÍN NIÑO, J. (1988): “La Hacienda” en ARTOLA, M. (dir.) Y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario): *Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola. II. Instituciones políticas. Imperio*, Madrid, pág. 211.

¹⁸ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, pág. 163.

¹⁹ TEDDE DE LORCA, P. (1985): “El sector financiero y el fracaso de la revolución industrial en España, 1814 – 193” en *ICE*, núm. 623, julio, pág. 41.

²⁰ Sobre este particular, se puede consultar, por ejemplo, BRAVO MURILLO, J. (1864): *De las deudas amortizables y de los certificados de cupones*, Madrid, págs. 10 y ss., en las que se describe el cierre de la Bolsa de París a los valores españoles en 1861 y de Londres, Amsterdam y Frankfurt en 1862. También

La situación de permanente aumento del déficit se trató de solucionar, conforme se ha comentado antes, mediante el recurso a préstamos extranjeros, lo cual ocasionó una importante influencia de los grupos financieros extranjeros, especialmente franceses, en el mundo empresarial e industrial. Según VILAR²¹, la supeditación financiera del Estado en relación a la banca internacional fue total durante la primera guerra carlista y los años posteriores, sobre todo respecto a Francia y Reino Unido. Entre 1816 y 1851 la Bolsa de París negoció 775 millones de francos en papel español, cifra que representaba más de la tercera parte de las inversiones francesas en valores oficiales extranjeros. Algo similar ocurrió en la Bolsa de Londres.

A este respecto, son ilustrativas las siguientes palabras de PALAFOX:

*[esta situación] pone de manifiesto la debilidad de la posición de la Hacienda Pública, y por extensión del Estado, a la hora de negociar la obtención de préstamos con los cuales paliar su difícil situación. Esta debilidad condicionó gran parte de las decisiones económicas fundamentales adoptadas en estos años e influyó decisivamente en la articulación de instituciones básicas para el crecimiento económico. Así, agotadas en diversas coyunturas las vías del endeudamiento interior, el Estado debió apelar al crédito exterior. Ello obligó a realizar onerosas concesiones y motivó no pocos contenciosos por la imposibilidad de hacer frente a los compromisos. En varias ocasiones los mercados financieros exteriores se negaron a aceptar la cotización de los valores españoles, anulando la posibilidad de conseguir nueva financiación. No fueron las únicas repercusiones de la situación presupuestaria. Además, el Estado, y a cambio de fondos, se vio obligado a realizar concesiones importantes a los grupos extranjeros*²².

En el mismo sentido cabe destacar la siguiente exposición de TORTELLA:

Los expertos eran banqueros o financieros profesionales, a menudo con buenos contactos o influencia política, que esperaban ganar con las alzas de los títulos, o con las conversiones. Frecuentemente prestaban directamente al gobierno para obtener de éste ciertas concesiones que les interesaban. La obtención de estas concesiones era a menudo su objetivo principal, y el perder o ganar en la Deuda les era de importancia secundaria. Éste era característicamente el caso de los Rothschild, de los Péreire, de Prost, de los Guilhou y de muchos otros en 1855, cuando se trataba de obtener del gobierno español concesiones bancarias y ferroviarias en buenas condiciones. Este fue repetidamente el caso de los Rothschild, que hicieron préstamos al gobierno español para obtener el arrendamiento de las minas de Almadén, para obtener subsidios a su compañía

destaca una breve publicación coetánea a la anterior –cuyo planteamiento quizá sea algo partidista- de LAGO, J. M. (1864): *Vindicación del crédito económico de España, deprimido por jugadores de bosa y agiotistas ingleses*, Madrid, págs. 16 a 26 y 43 a 50. Además, es interesante un folleto sobre la evolución del pago de la deuda pública española con referencias a noticias periodísticas valorando los impagos y quitas de ÁLVAREZ, J. (1870): *La deuda extranjera de España. 1822 – 1870. Reseña de varias conversiones con estados demostrativos del resultado para el Gobierno y los poseedores de títulos*, Londres, Effingham Wilson, Royal Exchange, págs. 4 a 16.

²¹ VILAR RAMÍREZ, J. B. (1983): “El esfuerzo industrializador” en *Historia general de España y América*, tomo XIV: *La España liberal y romántica*, Madrid, pág. 115.

²² PALAFOX GAMIR, J. (1998): *Curso de historia ...*, págs.155 y 156.

*ferroviaria en España (la MZA), etc.; el caso del Banco de París y los Países Bajos para obtener la concesión del Banco Hipotecario*²³.

C) LA DESAMORTIZACIÓN

La desamortización fue un proceso económico muy importante durante el siglo XIX en nuestro país. Sin embargo, por lo que afecta a la Ley de 1848, no se constata una influencia directa relevante sobre la misma. Quizá se pueda hablar de un efecto indirecto al reducir la deuda pública del Estado y redistribuir la colocación de los capitales privados.

La desamortización²⁴ es el procedimiento por el cual el Estado procede a incautar determinados bienes (tierras pertenecientes a la Iglesia y a los municipios), mediante compensación, para venderlos en pública subasta. Las consecuencias de este proceso fueron muy relevantes en la historia económica, política y social de España. Los historiadores económicos difieren en cuanto a la valoración de sus efectos. Así, por ejemplo, para ARTOLA²⁵ la cantidad de dinero que realmente aportó a las arcas del Estado, aun siendo grande, no fue tanto como se dijo en aquellos momentos. En cambio, FONTANA²⁶ entiende que, dada la crítica situación de la Hacienda Pública se trató de un expediente obligado cuyo saldo fue positivo, dadas las particulares necesidades económicas del momento. Otros autores, como SIMÓN SEGURA²⁷, piensan que es uno de los fenómenos clave del siglo XIX en España.

El proceso desamortizador se inicia tímidamente con Carlos III²⁸ y, posteriormente, ya en el siglo XIX, se desarrolla en dos grandes fases.

La primera, comúnmente denominada "eclesiástica", en la que se enajenaron los bienes del clero regular para hacer frente a los cuantiosos gastos de la primera Guerra Carlista²⁹, tuvo lugar en 1836 y 1837, siendo Ministro de Hacienda, D. Juan Álvarez de Mendizábal³⁰. La reforma se basa en tres RD: uno de 19 de febrero de 1836³¹, otro de 8 de marzo del mismo año³² y, finalmente, uno de 29 de julio de 1837³³. La ejecución de

²³ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea* ..., pág. 166.

²⁴ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X. (2012): *Historia económica* ..., pág. 96.

²⁵ ARTOLA, M. (1973): *La burguesía revolucionaria (1808 – 1869)*, Madrid, pág. 149.

²⁶ FONTANA, J. (1985): "La desamortización de Mendizábal y sus antecedentes" en GARCÍA SANZ, A., Y GARRABOU, R., (eds.) *Historia agraria de la España contemporánea*, vol. 1: *Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800 – 1850)*, Barcelona.

²⁷ SIMÓN SEGURA, F. (1973): *La desamortización española del siglo XIX*, Madrid, pág. 60.

²⁸ Se puede consultar al respecto la obra de referencia de HERR, R. (1991): *Hacienda real y cambios rurales en España a finales del antiguo régimen*, Madrid, capítulo V.

²⁹ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea* ..., pág. 47.

³⁰ En una interesante biografía sobre Mendizábal, escrita por GARCÍA TEJERO, A. (1858): *Historia político-administrativa de Mendizábal. Dedicada al pueblo liberal español*, tomo I, Madrid, pág. 196, se hace la siguiente valoración de la obra de este político: *(l)a reforma de MENDIZABAL, la desamortización, en fin, era legítima y reclamada imperiosamente por los pueblos. En lo único en que nosotros, y con nosotros la mayoría de los verdaderos liberales, en lo que únicamente censuraríamos a MENDIZABAL, sería en la imperdonable falta, triste olvido acaso, de favorecer a muchos ricos, y no levantar a los pobres.*

³¹ GdM de 21 de febrero de 1836, núm. 426.

³² GdM de 10 de marzo de 1836, núm. 444.

³³ GdM de 31 de julio de 1837, núm. 973.

este último RD se demoró hasta la RO de 2 de septiembre de 1841³⁴, estando Espartero en el poder. En esta fecha se inició la desamortización de los bienes del clero secular, pero fue interrumpida mediante el RD de 26 de julio de 1844³⁵ (cuatro años antes de la Ley de compañías por acciones) por la llegada de los Moderados al poder³⁶.

La segunda desamortización fue promovida por Madoz en 1855. Se pueden encontrar antecedentes respecto a la incautación de bienes municipales en el RD de 25 de septiembre de 1847³⁷, fecha cercana a los debates parlamentarios del PL 1848 en el Congreso de los Diputados (abril 1847) y en el Senado (diciembre de 1847). La Ley Madoz es de 1 de mayo de 1855³⁸ y se conoce como la desamortización “general” o “civil”³⁹ porque afecta no sólo a los bienes eclesiásticos, sino también a los del Estado, municipios y otros⁴⁰.

El destino del dinero ingresado por la venta de estos bienes se dedicó fundamentalmente a sanear la Hacienda y, más concretamente, a reducir la Deuda Pública, con el consiguiente alivio de la situación financiera del Estado. Comenta PALAFOX⁴¹ que en 1836, no sólo se permitió el pago de los remates de las subastas en títulos de Deuda, aceptados por su valor nominal (a pesar de que su cotización real era muy inferior), para disminuir la deuda en circulación, sino que los pagos en efectivo se dedicaban exclusivamente a este fin. En 1855 se estableció que la mitad de los ingresos obtenidos con la venta de los bienes del Estado y del clero y el veinte por ciento de los propios fueran destinados a amortizar deuda. Esto ayudó, lógicamente, a mitigar la dependencia del dinero extranjero.

La desamortización tuvo otra consecuencia muy importante para lo que aquí interesa: trató de consolidar la propiedad privada. Como decía DURAN Y BAS⁴² en una obra de la época, el verdadero beneficio de la desamortización se manifestaría a largo plazo en el *incremento de la riqueza territorial*. Teóricamente esto debería fomentar la inversión de capitales autóctonos en las empresas e industrias españolas. Pero la realidad fue muy diferente como se expone en el capítulo sobre el triunfo de los principios liberales. Parece que esos capitales se invirtieron, fundamentalmente, en Deuda del Estado, que ofrecía una atractiva remuneración.

CARRERAS Y TAFUNELL⁴³ resumen en tres los objetivos de los procesos de desamortización. Primero, privatizar la propiedad para hacer más eficiente la utilización

³⁴ GdM de 5 de septiembre de 1841, núm. 2515.

³⁵ GdM de 13 de agosto de 1844, núm. 3621.

³⁶ Respecto a los resultados de las ventas se puede consultar SIMÓN SEGURA, F. (1973): *La desamortización española* ..., pág. 152.

³⁷ GdM de 27 de septiembre de 1847, núm. 4761.

³⁸ GdM de 3 de mayo de 1855, núm. 852.

³⁹ PAREDES, J. (2011): “Los Bienios Progresista y Moderado (1854 – 1858)” en PAREDES, J. (dir.) *Historia de España contemporánea*, Barcelona, pág. 334.

⁴⁰ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea*..., pág. 47. Según el artículo 1 de la Ley de 1 de mayo de 1855, la desamortización se dirige a los bienes del Estado, Clero, las Órdenes Militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén, las cofradías, obras pías y santuarios, secuestro del ex - Infante D. Carlos, los propios y comunes de los pueblos, la beneficencia, la instrucción pública y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores.

⁴¹ PALAFOX GAMIR, J. (1998): *Curso de historia* ..., pág. 158.

⁴² DURAN Y BAS, M. (1856): *Estudios políticos y económicos*, Barcelona, pág. 237.

⁴³ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X. (2012): *Historia económica* ..., págs. 98 y ss.

de los recursos, pues la propiedad colectiva es poco eficaz en lo que a su explotación se refiere. Segundo, fiscal: medio para obtener recursos extraordinarios destinados a reducir las deudas del Estado. Sobre los resultados de este objetivo, como se indicó anteriormente, los historiadores económicos discrepan. Y, tercero, una finalidad política: atraer a la causa revolucionaria a los beneficiarios de la desamortización y el debilitamiento económico de la Iglesia.

Como resumen, se puede repetir lo que se decía al principio de este apartado. La importancia del proceso desamortizador español durante el siglo XIX es muy relevante (aunque los historiadores económicos difieran en cuanto a su magnitud). No puede señalarse una influencia directa en nuestra Ley de 1848, aunque sí de manera indirecta por la nueva situación económica, social y política que se generó. Incluso se podría decir, que la adquisición de bienes desamortizados redujo la disponibilidad de capitales para invertir en compañías por acciones, si bien esta conclusión no ha podido ser contrastada⁴⁴.

D) LOS FERROCARRILES

La construcción y puesta en funcionamiento de los ferrocarriles durante el siglo XIX fue vital para el desarrollo económico de Europa y Estados Unidos. La mejora de las comunicaciones trajo como consecuencia el incremento de los intercambios comerciales y el crecimiento empresarial.

La situación de España fue singular. Como ponen de manifiesto CARRERAS Y TAFUNELL⁴⁵, la oferta de medios de transporte terrestre hacia 1840 era muy deficiente, debido al relieve y clima peninsular, que impedían (e impiden) la existencia de vías de navegación interiores. La red de caminos y carreteras presentaba graves carencias, haciendo muy costoso el transporte de personas y mercancías.

Esto ocasionó un importante retraso en la construcción del ferrocarril. TORTELLA y otros autores⁴⁶ señalan las siguientes causas de esta demora: inactividad estatal; falta de capital; carencia de conocimientos técnicos; atraso económico en general; obstáculos

⁴⁴ En las obras que se han consultado sobre este tema no se llega a estudiar con detalle la influencia de la desamortización en la constitución e inversión en sociedades por acciones. Destaca, entre otros, el trabajo de TOMÁS Y VALIENTE, F. (1978): “El proceso de desamortización de la tierra en España” en AyS, núm. 7, págs. 11 – 33 y el de RUEDA HERNANZ, G. [con la colaboración de GARCÍA COLMENARES, P. Y DíEZ ESPINOSA, J. R.] (1986): *La desamortización de Mendizábal y Espartero en España*, Madrid, en el que se dedica un capítulo a las “Consecuencias socioeconómicas” de la desamortización, destacando su último epígrafe sobre “Los beneficiarios de la desamortización de las tierras”, págs. 154 a 178. Entre algunos autores extranjeros se incide en el hecho de la desviación de recursos que podían haberse destinado a la industria y obras públicas; así cabe destacar las siguientes palabras: *(l)a mayoría de los observadores sositenen que el programa [la desamortización] fue un fracaso (...) porque retardó el crecimiento económico al desviar los ahorros desde la infraestructura y la industria hacia la tenencia de tierras por parte de terratenientes absentistas* (KINDLEBERGER, C. (2011): *Historia financiera de Europa*, Madrid, pág. 201).

⁴⁵ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X. (2012): *Historia económica ...*, pág. 133.

⁴⁶ TORTELLA, G. (1975): *Los orígenes...*, pág. 164, TAMAMES, R., (1964): *Estructura económica de España*, Madrid, pág. 475, VICENS VIVES, J. (1959): *Manual de historia económica de España*, Barcelona, págs. 612 y 613, SÁNCHEZ ALBORNOZ, N., (1968): *España hace un siglo: una economía dual*, Barcelona, págs. 86-87, 117-118, y WAIS SAN MARTÍN, F., (1967): *Historia general de los ferrocarriles españoles (1830 – 1914)*, Madrid, págs. 16 y ss.

geográficos; y, por último, determinados acontecimientos económicos y políticos como la primera Guerra Carlista (1833 – 1839) y la crisis de 1847 – 1848.

Finalizado este conflicto, surgieron pocas iniciativas solventes. Antes de su materialización, en el año 1844 el Gobierno encargó un informe⁴⁷ a los ingenieros Juan Subercase y Calixto Santa Cruz, conocido popularmente por “Estudio Subercase” en el que se planteaban una serie de recomendaciones técnicas y legales para lograr la construcción del ferrocarril en España⁴⁸. Sus conclusiones fueron las siguientes:

- Era recomendable que fuese el Estado el que construyera directamente las líneas de ferrocarril.
- En caso de que no fuera posible lo anterior y debiera acudir a la iniciativa privada, el Estado debía limitar las pretensiones de las compañías en favor del bien (interés) público.
- El ancho de vía se fijó en 6 pies castellanos, aproximadamente 1,67 metros (ancho ibérico antiguo) por razón de la orografía de España, para conseguir mayor estabilidad y grandes velocidades, así como la posibilidad de colocar calderas más grandes. En aquellos momentos el ancho adoptado en Europa como estándar era 1,435 metros.

A finales de ese mismo año, se promulgó la RO de 31 de diciembre de 1844⁴⁹ sobre la concesión de caminos de hierro, que pretendió impulsar la construcción del tendido ferroviario, siguiendo un modelo similar al francés y belga⁵⁰. Esta norma se fundamentó en las siguientes bases: la inversión y la gestión se adjudicaban al sector privado; el sector público –el Estado– se reservaba la regulación de la actividad ferroviaria, que se consideraba de interés público. Como el Estado no podía financiar la construcción, la cedía al sector privado, junto a la explotación durante 99 años, es decir, hasta mediados del siglo XX, como contraprestación a la asunción del costo de construcción y con la condición de sometimiento a las normas que estableciera la Autoridad pública sobre requisitos técnicos y tarifas.

Según VILAR⁵¹ los inversores consiguieron modificar el texto legal para favorecer, fundamentalmente, los intereses de quienes simplemente realizaban la solicitud de adjudicación del tendido correspondiente, con independencia de su posterior construcción. El artículo III de la citada RO establecía que *cuando el suscriptor o suscriptores de las propuestas de caminos de hierro sean sujetos de conocido arraigo y ofrezcan, además, las garantías que el Gobierno estime suficientes,*

⁴⁷ ..., que constituiría “el primer documento español sobre ferrocarriles” por su interesante contenido y el detenido examen que revelaba de la legislación de los países más avanzados en la materia, MATEO DEL PERAL, D. (1978): “Los orígenes de la política ferroviaria en España (1844 – 1877)” en ARTOLA, M. (dir.): *Los ferrocarriles en España. 1844 – 1943. I. El Estado y los ferrocarriles*, Madrid, Servicio de Estudios del BdE, pág. 41.

⁴⁸ RODRÍGUEZ LÁZARO, F. J., (2000): *Los primeros ferrocarriles españoles*. Madrid, pág. 14, GÓMEZ MENDOZA, A. (1999): “Los transportes y el comercio interior en la España del siglo XIX” en ANES, G. (edit.) *Historia económica ...*, págs. 233 – 234, y CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975*, Barcelona, pág. 262.

⁴⁹ GdM de 19 de enero de 1845, núm. 3780, págs. 1 a 3.

⁵⁰ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X. (2012): *Historia económica ...*, págs. 133 y ss.

⁵¹ VILAR RAMÍREZ, J.V. (1983): *El esfuerzo industrializador ...*, pág. 138.

se las concederá un término de doce a diez y ocho meses para que puedan presentar los documentos y llenar las formalidades que expresan las disposiciones precedentes con la autorización necesaria para obtener los datos precisados, reservándoles entre tanto la preferencia sobre otras propuestas que se refieren al mismo camino. Este artículo desató un frenesí especulativo que pocas veces llegó a plasmarse en realidades prácticas. En el bienio 1845-1846 fueron concedidos 6.500 kilómetros de líneas de ferrocarril. En total, 23 líneas, cuyas concesiones caducaron una tras otra. Sólo fueron construidos 186 kilómetros de ferrocarril, repartidos entre cuatro compañías diferentes⁵².

La RO de 1844 fue un fracaso. En la fecha de la promulgación de la Ley de 1848, no había ni un solo kilómetro de vía férrea en servicio en el territorio peninsular. La primera línea de ferrocarril que funcionó fue la de Barcelona a Mataró en octubre de 1848, si bien –y éste no es un dato muy conocido– en España la primera línea de ferrocarril se inauguró en Cuba, el 19 de abril de 1837, entre La Habana – Bejúcar – Güines⁵³. Según VILAR⁵⁴ fue proyectado y tendido por una sociedad cuyas acciones

⁵² A continuación se transcribe, por su interés, la siguiente cita de VILAR RAMIREZ, J. V. (1983): *El esfuerzo industrializador ...*, pág. 137:

Como en el caso de Inglaterra, Bélgica o Francia, los primeros tendidos solicitados fueron líneas de cercanías a poblaciones importantes: Barcelona-Mataró, Madrid-Aranjuez y Gijón-Sama de Langreo. En junio de 1843 Josep Maria Roca i Roca, conocido importador barcelonés de maquinaria inglesa, de acuerdo con varios hombres de negocios del principado, solicitó del Gobierno provisional presidido por Joaquín María López autorización para el tendido ferroviario Barcelona-Mataró. Hacía suyo un proyecto anterior del indiano catalán Miguel de Viada. Informado favorablemente el proyecto por Fermín Caballero, entonces ministro de la Gobernación, en 23 de agosto de 1843 fue autorizado el que había de ser el primer ferrocarril de la península Ibérica. Las acciones de la compañía constituida al efecto fueron cubiertas automáticamente y las obras –28 kilómetros de tendido– realizadas en sólo 13 meses. Su construcción fue contratada con la firma inglesa Mckenzie & Brassie en 112.000 libras esterlinas. Unos 560.000 duros. El viaje inaugural –de regreso– fue realizado en 35 minutos. Nuestro primer ferrocarril peninsular entraba en funcionamiento cuando la red británica básica se hallaba prácticamente ultimada. Un año más tarde, la Real orden de 20 de agosto de 1844 concedía al Ingeniero Pedro de Lara la línea Madrid-Aranjuez, con derecho de prolongación hasta Alicante. Lara no tardó en transferir la concesión al financiero Salamanca, en adelante, figura nuclear en el no siempre transparente mundo de los negocios ferroviarios españoles. La Real orden de 22 de noviembre de 1845 declaró de “utilidad pública” el proyecto presentado por Salamanca, al tiempo que, en igual fecha, el Gobierno le autorizaba a “ejecutar y explotar por su cuenta el camino de hierro de Madrid a Aranjuez”. La línea meseteña no fue tendida con la celeridad que la catalana, no obstante las generosas subvenciones oficiales que Salamanca se concedió a sí mismo en su condición de titular del ramo ministerial correspondiente. Utilizando material y asesoramiento francés y británico, entró en servicio en 1851. Al año siguiente, el malagueño vendió el ferrocarril al Estado en 15 millones de pesetas, pagables en acciones ferroviarias. Salamanca quedaba como arrendador de la línea por cinco años y renta anual de 375.000 pesetas. El negocio resultó inmejorable. En tanto Lara daba los primeros pasos en relación con el ferrocarril Madrid-Aranjuez, el también ingeniero J. Gulbrin, representante de un grupo financiero parisiense dispuesto a invertir 137 millones de francos, solicitaba la importante línea Madrid-Cádiz. Casi simultáneamente otro extranjero, Richard Kelly, agente de una sociedad financiera domiciliada en el Reino Unido y dispuesta a movilizar dos millones de libras, solicitó la línea Avilés-León-Madrid. Ninguna de las propuestas halló eco favorable en la Administración. Acaso por las abusivas condiciones presentadas por los solicitantes de cara a la construcción y explotación de los respectivos ferrocarriles. Más afortunado resultó el proyecto Gijón-Sama de Langreo, autorizado el 2 de mayo de 1845, financiado con capital español –V. Beltrán de Lis–, realizado con técnica y materiales británicos e inaugurado en 1855.

⁵³ COMÍN COMÍN, F., MARTÍN ACEÑA, P., MUÑOZ RUBIO, M., Y VIDAL OLIVARES, J. (1998): *150 Años de Historia de los Ferrocarriles Españoles*, vol. I, Madrid, págs. 31 a 34.

fueron suscritas en su mayoría por ricos hacendados habaneros. Era un tramo inicial de 27 kilómetros, prolongado aquel mismo año hasta Güines. La sociedad constructora concertó un empréstito de tres millones de pesos con la banca londinense Robertson y contrató en los Estados Unidos los técnicos y el material necesario. En 1842, el ferrocarril pasó a otra sociedad hispanocubana que construyó nuevos ramales y, simultáneamente, otra empresa iniciaba el tendido del ferrocarril de Matanzas.

A los diez años de la promulgación de la RO de 1844, en España sólo se habían construido 400 kilómetros de vía. En esas fechas, Francia tenía 5.000 kilómetros, Alemania 7.000 kilómetros y Reino Unido 11.000 kilómetros⁵⁵.

Muchas personas empezaron a pensar que el futuro de la economía pasaba necesariamente por estos proyectos. Tanto es así, que se generó un ambiente inversor sin precedentes y muchos individuos y familias comenzaron a invertir dinero en estos proyectos. El instrumento jurídico más apropiado para canalizar los recursos a estas grandes empresas era, obviamente, la sociedad por acciones.

El clima de euforia estaba creado. Y ocurrió lo que tantas veces enseña la historia: tras la especulación se produjo el hundimiento de muchas de estas empresas (que aún no habían finalizado el proceso de constitución como sociedades), con la consiguiente alarma social. Fue la crisis de 1847, año que presencié la discusión parlamentaria del PL 1848 de sociedades por acciones. Esta crisis de las empresas de ferrocarril es clave para entender la tramitación de la Ley de 1848.

Abundando en esta idea, comenta TORTELLA: *al amparo -o desamparo- de la real orden de 1844 se construyeron las cortas líneas mencionadas y se planearon muchas más en medio de una orgía de especulación que produjo muchos escándalos y pocas realidades tangibles en el ramo del transporte, aunque acabó por tener hondas repercusiones políticas, y que parece haber sido una de las razones que causaron el pronunciamiento de O'Donnell y la llegada al poder del Partido Progresista en 1854. Bajo la égida de ese partido se promulgó la Ley de Ferrocarriles de 1855*⁵⁶.

Cabe finalizar este apartado subrayando la importancia e influencia que tuvo la industria del ferrocarril en la redacción del texto de la Ley de 1848. En efecto, el *boom* de las concesiones ferroviarias de 1845, así como los fraudes y abusos que lo acompañaron, fue seguido de una profunda crisis y desengaño, tanto empresarial como popular, todo lo cual influyó decisivamente en la política legislativa de carácter restrictivo e intervencionista del Legislador de 1848.

⁵⁴ VILAR RAMÍREZ, J.V. (1983): “El esfuerzo industrializador ...”, pág. 136. Cabe destacar también la colaboración de ZANETTI LECUONA, O. (1999): “El ferrocarril en la economía cubana” en MUÑOZ RUBIO, M., SANZ FERNÁNDEZ, J., Y VIDAL OLIVARES, J. (eds). (1999): *Siglo y medio de ferrocarriles en España, 1848 – 1998: economía, industria y sociedad*, Madrid, pág. 146.

⁵⁵ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X. (2012): *Historia económica ...*, pág. 134. También puede consultarse, para mayor detalle, CARRERAS, A. (1999): “Los ferrocarriles en Europa: algunas perspectivas históricas” en MUÑOZ RUBIO, M., SANZ FERNÁNDEZ, J., Y VIDAL OLIVARES, J. (eds.) (1999): *Siglo y medio de ferrocarriles en España ...*, págs. 41 a 49.

⁵⁶ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, págs. 106-107.

E) EL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO

La situación de los escasos bancos en los años previos a 1848 influyó en la redacción de la Ley de 1848 y, recíprocamente, este texto legal condicionó de una manera sustancial, la creación y desarrollo de las futuras entidades bancarias. Así, cabe diferenciar dos etapas claramente definidas durante la vigencia de la Ley de 1848. La primera, hasta la misma fecha de 1856 en la que, debido a la política restrictiva e intervencionista de la Ley de 1848, no se constituye prácticamente ningún banco ni sociedad de crédito. La segunda, que se inicia el 28 de enero de 1856 con la promulgación de la LB y la LSCr –textos más liberales y flexibles- hasta 1868 (año de la derogación de nuestra Ley de 1848). En esta etapa, en cambio, se produjo un *boom* bancario y se constituyeron decenas de bancos y sociedades de crédito.

El sistema bancario y financiero español en la primera mitad del siglo XIX puede caracterizarse, en palabras de TORTELLA⁵⁷, por su estado embrionario e inmaduro. Los primeros antecedentes del sistema bancario se encuentran en el Banco Nacional de San Carlos, creado en 1782, bajo el reinado de Carlos IV. Se trataba de un Banco, como dice TEDDE⁵⁸, creado para adelantar recursos al Gobierno, que apenas ejerció la facultad de emitir billetes. Descontó “vales reales”, letras de cambio, actuó como contratista de los aprovisionamientos del Ejército y de la Marina, financiaba obras públicas, etc.

Por RC de fecha 9 de julio de 1829⁵⁹ se fundó el Banco Español de San Fernando, siendo Rey de España Fernando VII, debido a la crisis que atravesaba el Banco de San Carlos. Su misión era fundamentalmente prestar grandes cantidades de dinero al Estado. También emitió en algunas ocasiones billetes y descontó letras.

En 1844 aparecieron dos nuevas sociedades bancarias: el Banco de Isabel II (RD de 25 de enero de 1844⁶⁰) y el Banco de Barcelona (RD de 1 de mayo de 1844⁶¹). La fusión del Banco de Isabel II y el Banco Español de San Fernando se produjo por RD de 26 de febrero de 1847⁶². Ambos bancos se encontraban domiciliados en Madrid⁶³ y, como dicen CARRERAS Y TAFUNELL, *no puede explicarse que se fundasen tan pocos bancos en las otras ciudades*⁶⁴.

VILAR describe la evolución del Banco de Isabel II y del Banco de San Fernando de la siguiente manera:

El Banco de Isabel II (una de las primeras empresas en que figuró José de Salamanca) inmediatamente se convirtió en rival del de San Fernando. La competencia entre ambos bancos hizo que la circulación fiduciaria se multiplicara y el crédito se abaratara en Madrid, pero al cabo de poco tiempo la crisis de 1847-1848 y la temeridad e inexperiencia de ambas instituciones, en

⁵⁷ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, pág. 139.

⁵⁸ TEDDE DE LORCA, P. (1999): “Del Banco de San Carlos al de España: formación de un Banco central” en ANES, G. (ed.): *Historia económica ...*, págs. 426 – 428.

⁵⁹ Suplemento GdM de 3 de septiembre de 1829, págs.1 a 4.

⁶⁰ GdM de 30 de enero de 1844, núm. 3425.

⁶¹ GdM de 19 de agosto de 1844, núm. 3627.

⁶² GdM de 26 de febrero de 1847, núm. 4548.

⁶³ Sobre las relaciones entre ambos bancos, de puede consultar TEDDE DE LORCA, P. (1981): *Madrid y el capital financiero en el siglo XIX*, Madrid, págs. 9 – 18.

⁶⁴ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, pág. 144.

especial de Isabel II, pusieron a los dos al borde de la quiebra. El Gobierno no encontró más solución que la fusión de ambos, fusión de la que surgió el Nuevo Banco Español de San Fernando, que, abrumado por el pasivo del Isabel II (que había hecho grandes préstamos a compañías que resultaron insolventes), llegó a 1850 en situación de virtual de suspensión de pagos, aunque a la larga logró recuperarse. La Ley de Bancos de Emisión de 1856 lo rebautizó con el nombre de Banco de España⁶⁵.

Sin duda alguna, la fusión entre el Banco de Isabel II y el de San Fernando influyó en la redacción de la Ley de 1848, tanto por las fechas en que se produce: 1847, año de la tramitación de la Ley, y 1848, aprobación del PL 1848, como por los personajes que en ella intervienen. En este sentido, es ilustrativa la siguiente exposición de TORTELLA que se transcribe a continuación:

A finales de 1846 la situación de ambos bancos era difícil. La cotización de las acciones del Banco de Isabel II, que había ascendido vertiginosamente durante los tres primeros trimestres de 1846 empezó a descender peligrosamente. Este descenso era gravísimo para un banco que tenía una buena parte de su activo prestado contra la garantía de sus propias acciones. La crisis financiera iniciada en Inglaterra y Francia a fines de 1846 no hacía sino empeorar la situación. En enero de 1847, Santillán, entonces Ministro de Hacienda en el efímero gabinete de Sotomayor, propone la solución: unir ambos bancos, propuesta que los interesados, a quienes los comunes apuros habían hecho olvidar sus recientes diferencias, acogieron con agrado. A fines de febrero se publicó el decreto aprobando la fusión, pero ésta se llevó a cabo después de caer el ministerio Sotomayor y sucederle el gabinete Pacheco, con Salamanca en Hacienda. Es indudable que Salamanca fue colocado allí para llevar a cabo la fusión de modo muy distinto a como la hubiera efectuado Santillán⁶⁶. El activo del Banco de Isabel II estaba muy averiado, ya que se componía en más de sus dos terceras partes, de préstamos cuya garantía en muchos casos eran acciones del propio banco y de sociedades particulares, a quienes la crisis estaba afectando considerablemente. La caída de los precios de la Bolsa disminuía gradualmente el valor de estos títulos y también de los públicos que componían el resto de esta desproporcionada partida contable. Si, para atajar esta pérdida, el Banco intentase vender los títulos, la caída en lugar de gradual sería fulminante. (...) La situación del Banco de San Fernando, en cambio, dependía de su gran deudor, el Estado, que aunque envuelto a su vez en severos apuros financieros e incapaz de pagar puntualmente, no era probable que abandonase sin remisión a su acreedor. En estas circunstancias parecía inevitable que la fusión se realizase con cierta pérdida para el Banco de Isabel

⁶⁵ VILAR RAMIREZ, J.B. (1983): *El esfuerzo industrializador ...*, págs. 129 y 130. Sobre estos antecedentes, se puede comentar también, TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, pág. 141.

⁶⁶ Como dice TEDDE, *Salamanca fue nombrado ministro de Hacienda poco antes de que se autorizara la fusión, en febrero de 1847, y cabe pensar que, desde su privilegiada situación, tuvo oportunidad de favorecer a los accionistas del Banco de Isabel II, como lo demuestra el hecho de que las acciones de este último se aceptaran en las negociaciones por todo su valor nominal, cuando el elevado volumen de préstamos facilitados, sobre la garantía de dichos títulos, unido a las propias circunstancias de la crisis, hubiera debido conducir a una evaluación más realista de tales activos* TEDDE, P. (1988): "El sector financiero" en ARTOLA, M. (dir.) Y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario): *Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola, I. Economía. Sociedad*. Madrid, pág. 300.

II, y que la cuantía de esta pérdida fuese objeto de negociación entre los dos bancos con la mediación del Ministro de Hacienda. (...) Lo terrible para el nuevo banco era que lo peor de la crisis no había llegado todavía. En 1847, cargado de activos incobrables y obligado a hacer pagos mensuales por cuenta del Gobierno, había tenido enormes dificultades para convertir los billetes que se le presentaban. La desconfianza del público se reflejó en la disminución de las cuentas corrientes, que pasaron de 164 millones de reales el 4 de enero de 1848 a 48 millones el 19 de febrero del mismo año: una reducción de más de dos tercios en cuarenta y cinco días. Las retiradas eran, por supuesto, en moneda metálica, cuya escasez forzaba al Banco a hacer todos sus pagos en billetes, lo cual causaba una peligrosa desproporción entre la circulación fiduciaria y el encaje metálico. Se estuvo, durante unos meses, en régimen de circulación forzosa de facto. El banco obstaculizaba y entorpecía las operaciones de conversión, y los billetes empezaron a depreciarse. Para evitarlo, el Gobierno los admitió en el pago de los derechos de aduanas. Para colmo de desdichas, en junio de 1848 se descubrió un desfaldo en el Banco, del que era autor nada menos que su propio director. El crédito del Banco de San Fernando alcanzó su nadir. Sus acciones, que en enero cotizaban al 262,5 por 100, estaban en octubre al 44 por 100⁶⁷.

La anterior descripción refleja el clima financiero y bancario en los años previos a la promulgación de la Ley de 1848, muy especialmente durante los debates parlamentarios del PL 1848 a lo largo del año 1847. Dejando aparte otros bancos de menor tamaño⁶⁸, los abusos y corrupciones que forzaron la fusión del Banco de Isabel II y el de San Fernando, como se ha dicho anteriormente, condicionaron de manera radical la política del legislador, de manera que se impusieron los principios de control e intervencionismo extremo.

Esta idea la expresa magistralmente el siguiente texto de TORTELLA, en relación a la crisis de 1846 - 1847:

La crisis infundió un terror pánico entre la minoría dirigente española. La opinión más extendida era que la crisis se debía a la especulación y que un exceso de liberalismo económico había desencadenado fuerzas que ponían en peligro la estabilidad social. Para los conservadores en el poder, el espectáculo de lo que estaba ocurriendo en Europa era un toque de alarma sobre los peligros inherentes a dejar que las fuerzas económicas se desplegaran libremente. La reacción conservadora fue inmediata y enérgica. Su objetivo era someter al capitalismo financiero del mismo modo que se sometía a las partidas revolucionarias. Con esta finalidad se emitió la Ley de enero de 1848 que prácticamente prohibía las sociedades por acciones⁶⁹.

⁶⁷ TORTELLA, G. (1975): *Los orígenes ...*, págs. 33 a 35.

⁶⁸ TORTELLA, G. (1975): *Los orígenes...*, págs. 35 y ss.

⁶⁹ TORTELLA, G. (1975): *Los orígenes...*, págs. 39 y 40. En el mismo sentido, CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, págs. 144 y 145.

F) EL SECTOR INDUSTRIAL

La actividad económica de la primera mitad del siglo XIX en España (así como su segunda mitad) muestra una clara preponderancia del sector agrario sobre el industrial. España quedó al margen del proceso de Revolución Industrial experimentado por los demás países de nuestro entorno.

Se pueden destacar dos sectores básicos de industrialización desde principios de siglo hasta 1848: la industria textil algodonera y la siderúrgica⁷⁰. La primera, se encontraba localizada fundamentalmente en Cataluña. Y, la segunda, radicada hasta mitad de siglo en Andalucía (Málaga y Sevilla), trasladándose posteriormente al Norte de la Península.

En cuanto a la primera, existen muchos y muy buenos estudios sobre la evolución del sector textil algodonero en Cataluña durante el siglo XIX⁷¹. A principios de dicha centuria esta industria es modesta y con inversiones "liliputienses"⁷², caracterizándose desde el principio por producir no para el autoconsumo, sino para el mercado español. Una vez finalizada la cruenta Guerra de Independencia, la producción fue expandiéndose poco a poco y durante el segundo tercio del siglo progresó ininterrumpidamente, planteándose con frecuencia el debate entre la política proteccionista o librecambista⁷³.

En cualquier caso, no se puede olvidar, en lo que al presente estudio se refiere, que la industria algodonera catalana estaba formada por un gran número de pequeños fabricantes cuya actividad no la desarrollaban, en la mayor parte de los casos, a través de compañías por acciones. Éstas se utilizaron para los grandes telares, las grandes fábricas, cuyo número fue reducido, si bien, su producción alcanzaba una parte importante del total.

En este sentido, son representativos los datos aportados por NADAL: *En 1850 había sólo tres hilaturas de más de 10.000 husos cada una, las cuales sumaban un todo de 47.688, equivalente al 6,01 por ciento del conjunto de los del país; once años más tarde, los establecimientos mayores de 10.000 husos eran seis, sumando 142.726 husos, o sea, el 18,52 por ciento del total. Este progreso implicó la movilización de capitales*

⁷⁰ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, pág. 66.

⁷¹ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, págs. 66 a 74; (1975): *Los orígenes ...*, págs. 201 y ss.; PALAFOX GAMIR, J. (1998): *Curso de historia ...*, págs. 168 a 175. NADAL, J. (1997): *El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913*, Barcelona, págs. 188 a 225.

⁷² NADAL, J. (1997): *El fracaso de la Revolución industrial ...*, pág. 192.

⁷³ Existen numerosos estudios sobre las consecuencias de las políticas proteccionistas o librecambistas en el sector textil – algodonero español durante el siglo XIX. Aquí solo se cita una obra cuya lectura nos ha llamado la atención por el debate tan acalorado que ya existía en la época: MORQUECHO Y PALMA, G. (1860): *La controversia económica en 1859. Colección de artículos publicados en varios periódicos en defensa del sistema proteccionista*, Madrid, particularmente el capítulo titulado “Una indicación sobre nuestra industria algodonera”, págs. 216 a 223 en la que se analiza las consecuencias de la Ley de 19 de julio de 1849 sobre la fabricación y comercialización del algodón. De fechas más recientes se puede consultar un breve trabajo sobre la cuestión en el que se matizan algunas tesis generalmente aceptadas, de PALAFOX GAMIR, J. (1999): “Proteccionismo y librecambio” en ANES, G. (ed.): *Historia económica ...*, págs. 251 – 287. Y, por último, con carácter más general, ANES ÁLVAREZ, R. (1988): “Economía y pensamiento económico en España” en ARTOLA, M. (dir.) y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario): *Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola. III. Iglesia. Pensamiento. Cultura*, Madrid, págs. 256 – 266.

considerables. En algunos casos, los caudales invertidos fueron caudales repatriados de América. En otros, quizá los más numerosos, hubo la formación de sociedades regulares colectivas, que muchas veces sacrificaron el objetivo de la rentabilidad financiera a corto plazo al objetivo de la continuidad del crecimiento de la empresa. Por último, con la fundación de la `España Industrial, S.A.', apareció el recurso, más moderno, a la sociedad anónima. En los ocho años siguientes [a 1849], el número de éstas se elevó hasta 9, sumando 93 millones de reales. Luego, la promulgación de la ley general de ferrocarriles, en 1855, pareció ofrecer un terreno más atractivo para el inversionista, con el efecto de parar en seco, hasta después de 1868, la constitución de nuevas anónimas algodoneras. También es de interés la información aportada por el mismo autor con relación a la situación en Gran Bretaña: Debe señalarse que, de las 947 sociedades anónimas existentes en Gran Bretaña en septiembre de 1844, sólo una pertenecía al sector algodonero⁷⁴.

Por lo que respecta al segundo sector industrial citado anteriormente, la escasa industria siderúrgica se localizó en sus orígenes en la costa malagueña. A finales de la década de los años 20 y principios de los 30, aparecen la fábrica "La Concepción" y la fábrica "La Constancia" que, con motivo de la primera Guerra Carlista, vieron incrementar enormemente los pedidos de material, pues las forjas septentrionales fueron paralizadas o destruidas.

A continuación se transcribe un interesante comentario de VILAR sobre la primera factoría siderúrgica de Andalucía: *"La Concepción", que tuvo su origen en una contrata particular -6 de septiembre de 1826- que dio paso a escritura pública otorgada en 15 de enero de 1830 de acuerdo con el artículo 284 del recién establecido Código de comercio. Se enumeran nueve socios fundadores en concepto de capitalistas -lo más selecto de la Alameda-, a cuyo frente figura Heredia, alma de la empresa. Como socio industrial, Francisco Antonio de Elorza y Aguirre, antiguo oficial de Artillería emigrado en 1823 por sus ideas liberales. (...) La sociedad quedó constituida como anónima por un plazo de 25 años, prorrogables previo consenso de los accionistas, y un capital repartido en 82 acciones de 25.000 reales⁷⁵.*

En estos años aparece también la sociedad "El Pedroso", radicada en Sevilla. La hegemonía siderúrgica andaluza se mantuvo desde los años 30 hasta el inicio de los años 60, que fue alcanzada y superada por la industria septentrional⁷⁶.

En relación a la utilización de sociedades anónimas por los empresarios siderúrgicos, cabe preguntarse si fue frecuente o esporádica. La respuesta, sorprendentemente, es que fue muy escasa. Así, comenta NADAL *que durante la mayor parte del siglo XIX el recurso a la sociedad anónima, el instrumento de concentración capitalista más eficaz, estuvo vedado a las firmas siderúrgicas. La única excepción, formada por la "Palentina-Leonesa de Minas", que en 1845 se subrogó a la "Sociedad Palentina de Minas", nacida tres años antes, fue obra de un visionario -Ramón de la Sagra- más que de un auténtico hombre de negocios, y resultó incapaz de franquear el cabo de la reforma arancelaria de 1862. En los demás casos, los socios fueron poco numerosos y hubieron de comprometerse sin reservas⁷⁷.* En el mismo sentido,

⁷⁴ NADAL, J. (1997): *El fracaso de la Revolución industrial ...*, págs., 201-202.

⁷⁵ VILAR RAMÍREZ, J.B. (1983): *El esfuerzo industrializador ...*, pág. 170.

⁷⁶ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, pág. 76.

⁷⁷ NADAL, J. (1997): *El fracaso de la Revolución industrial ...*, pág. 166

TORTELLA⁷⁸ dice que la única compañía siderúrgica por acciones fue la Palentina-Leonesa.

Cabe añadir que en esta época existieron algunos proyectos siderúrgicos impulsados desde el extranjero antes de la Ley de 1848. Así, por ejemplo, NADAL, refiere que *los orígenes de la moderna industria del hierro remontan, en Oviedo, a 1840, fecha de la llegada de un núcleo de capitalistas ingleses, dirigido por John Manby, con el fin de estudiar los cotos hulleros de Tudela y Mieres. Explorando el terreno, el grupo extranjero acabó por constituir, en 1844, en Londres la “Asturiana Mining Company” para la explotación carbonera y creación de altos hornos y forjas en la proximidad de Mieres del Camino. Sin embargo, los obstáculos resultaron superiores a la capacidad de superación de la empresa que, tras un fugaz encendido de su primer horno alto en 1848, fue declarada disuelta y en liquidación por real decreto de 26 de junio de 1849 [El real decreto aduce la falta de adecuación de la sociedad a la nueva ley de anónimas (de 28 de enero de 1848) y aporta numerosas precisiones acerca de su pasivo; cf. CLE, XLVII, 2 cuatrimestre 1849, Madrid, 1850, pp. 283-286]. De esta forma, la fábrica de Mieres hubo de quedar parada hasta 1852, en que la “Compagnie Minière et Metallurgique des Asturies”, constituida en París por “Grimaldi et Cie.”, con un capital de 4 millones de francos distribuidos en 16.000 acciones, consiguió reanudar los trabajos. La nueva sociedad duraría hasta 1865*⁷⁹.

Como conclusión, se puede decir que el sector industrial era un parte mínima de la producción económica española antes de 1848. Esta producción estaba, además, localizada, fundamentalmente, en Málaga (siderúrgica) y Cataluña (textil algodonera). Este era uno de los sectores a los que se dirigía la Ley de compañías mercantiles por acciones de 1848, junto a los bancos y concesionarias de obras públicas. El dato relevante, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, es que tanto antes de la promulgación de nuestra Ley de 1848, como después, la gran mayoría de los empresarios industriales prefirieron utilizar la sociedad colectiva o comanditaria y no las compañías por acciones.

Una vez analizadas las características de la economía en la España de la primera mitad del siglo XIX, se puede abordar el estudio de la situación política, muy influida por aquélla. El periodo histórico previo a la promulgación de la Ley y del Reglamento de 1848 viene caracterizado por su inserción en la denominada por los historiadores “Década moderada” y, desde un punto de vista constitucional, por el texto de 23 de mayo de 1845.

⁷⁸ TORTELLA, G. (1975): *Los orígenes ...*, pág. 234.

⁷⁹ NADAL, J. (1997): *El fracaso de la Revolución industrial ...*, pág. 171.

II. SITUACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA ENTORNO A LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE 1848.

A) EL INICIO DE LA “DÉCADA MODERADA”

El primer Gobierno del General Narváez, el 10 de mayo de 1844, da inicio a un periodo de diez años, hasta 1854⁸⁰, en el que los políticos moderados se asientan en el poder⁸¹. Nuestra Ley de 1848, es promulgada, por tanto, en pleno apogeo de la “Década moderada”.

Durante el decenio precedente a 1844 se había desmantelado el Estado del Antiguo Régimen, afirmándose la Monarquía constitucional por las armas. Al fallecimiento de Fernando VII en 1833, su esposa M^a Cristina de Borbón- Dos Sicilias, asumió la regencia de su hija y futura reina Isabel II (que en ese momento tenía 3 años) con el apoyo de los liberales. Ese mismo año, con motivo de las pretensiones al trono de Carlos M^a Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII y con fundamento en la vigencia de la ley Sálica, derogada por el propio Fernando VII, se produjo en España la Primera Guerra Carlista (1833-1839). Posteriormente, asumió la regencia el general Espartero desde 1840 hasta la declaración por las Cortes Generales, en 1843, de la mayoría de edad de Isabel II, que entonces contaba solamente 13 años. Fue en este año, el 10 de noviembre de 1843, cuando prestó juramento como Reina constitucional, dando comienzo el reinado efectivo de Isabel II, una mujer espontánea, poco culta y precoz en todo: Reina a los tres años, mayor de edad a los 13 años, casada con Francisco de Asís a los 16⁸². Separada de hecho de su esposo a los 17 y destronada a los 38 años⁸³.

Tras la caída de Espartero en 1843 y la proclamación de la mayoría de edad de Isabel, se inicia una serie de gobiernos moderados que son apoyados por la Corona. En esos momentos, existía una sensación colectiva de fatiga, de necesidad de reposo. En el discurso de la Corona en las Cortes, el 10 de octubre de 1844, los moderados le hicieron decir a Isabel II que los españoles, *cansados de alternativas y trastornos desean con ansia disfrutar de tranquilidad y sosiego bajo el imperio de las leyes, y a la sombra tutelar del trono*⁸⁴. El eje del Discurso de la Corona giró sobre la convicción de que el orden y la libertad eran condiciones indispensables para que prosperaran las artes y el comercio, es decir, para el progreso económico, que había sido hasta entonces preterido al progreso político⁸⁵.

En una primera fase constituyente, tras el gobierno introductorio de González Bravo (diciembre de 1843-mayo 1844), la figura política clave es Narváez (mayo 1844-febrero 1846). Durante esta fase se promulgó la CE 1845, la ley de imprenta, la ley

⁸⁰ Año en el que se produjo la conocida “Vicalvarada”, protagonizada por el General O’Donell en las cercanías del pueblo madrileño de Vicálvaro y que dio paso al denominado “Bienio progresista” (1854 – 1856), cuyas consecuencias para nuestro estudio fueron la LB, LSCr, LF y LSCOP de 1855 y 1856, que se comentan en el capítulo sobre las compañías por acciones reguladas por leyes especiales.

⁸¹ PALACIO ATARD, V. (1978): *La España del Siglo XIX, 1808-1898*, Madrid, págs. 239 y 240.

⁸² SCARLATTI DE ALDAMA, D., Y AMÉRIGO ALCARAZ, M. (1866): *Historia General de España desde los tiempos primitivos hasta fines del año 1860, inclusa la gloriosa guerra de África*, Madrid, págs. 972 – 974.

⁸³ COMELLAS, J. L. (1988): *Historia de España contemporánea*, Madrid, págs. 173 y 174.

⁸⁴ GdM de 11 de octubre de 1844, núm. 3680.

⁸⁵ PALACIO ATARD, V. (1978): *La España del Siglo XIX ...*, pág. 238.

electoral, la reforma tributaria, la reforma de la instrucción pública y se creó la Guardia Civil.

El 11 de febrero de 1846, Narváez dimitió, momento que da paso a un período de inestabilidad con seis gobiernos en año y medio. En esa breve etapa se produjo un hecho político de especial relevancia: el matrimonio (el 10 de octubre de 1846) de Isabel II con D. Francisco de Asís, duque de Cádiz que tenía fama de afeminado y cuya mínima personalidad no podía molestar a nadie.⁸⁶ Esta boda es importante por dos motivos. En primer lugar, por las consecuencias que tuvo en la vida personal de la Reina y en la Corte. Y, en segundo lugar, como manifestación de la potente influencia (y rivalidad mutua) entre Reino Unido y Francia sobre los asuntos internos en España⁸⁷. La presión de estos países siguió presente durante los siguientes años y afectó a intereses económicos, como más adelante se verá, regulados por la Ley de 1848 y las LB, LSCr y LSCOP de 1855 y 1856.

B) LAS CARACTERÍSTICAS DE LA “DÉCADA MODERADA”

1. Los partidos políticos

Los partidos o corrientes que integraban el escenario político entre 1844 y 1854, según PALACIO ATARD⁸⁸, a quien seguimos en la presente exposición, eran los que se señalan a continuación.

En primer lugar, los moderados, quienes, con motivo de la reforma constitucional de 1844 – 1845, se dividen entre la Unión Nacional y los “puritanos”. Los primeros, liderados por el Marqués de Viluma, pretendían volver al Estatuto Real de 1834. Los segundos, con Pacheco como primera figura, secundado por Pastor Díaz, Istúriz y Ríos Rosas⁸⁹, son los partidarios de la reconciliación liberal. Como dice ARTOLA⁹⁰, desaparecieron hasta 1855, año en el que reaparecieron con los progresistas de derechas para anticipar la constitución de la Unión Liberal. Entre estas dos alas del partido moderado, se podría identificar un núcleo central con Mon, Pidal, Sartorius y González Bravo, afines a Narváez.

Y, en segundo lugar, el partido progresista, afín a la doctrina constitucionalista de 1837, entre cuyas figuras destacaban López, Cortina, Olózaga⁹¹, Calatrava y Madoz. Numéricamente era poco importante⁹², trataba de ganar la calle y su fuerza consistía en controlar la Milicia Nacional, hasta que fue suprimida en 1844.

⁸⁶ COMELLAS, J.L. (1988): *Historia de España contemporánea* ..., pág. 189 y PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea* ..., págs. 260 - 262.

⁸⁷ MIRAFLORES, M. de (1964): *Memorias del Reinado de Isabel II*, vol. II, Madrid, pág. 306, y CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975* ..., pág. 239.

⁸⁸ PALACIO ATARD, V. (1978): *La España del Siglo XIX* ..., págs. 243 y 244.

⁸⁹ Nombres todos ellos que aparecerán en los DsC cuando se debata el PL 1848.

⁹⁰ ARTOLA, M. (1974): *Partidos y programas políticos, 1808 – 1836*, vol. I, Madrid, pág. 249.

⁹¹ El episodio de Olózaga y la Reina Isabel II, que hizo a aquél caer en desgracia y empeorar la imagen de su partido, se encuentra descrito en FIGUEROA, A. de Conde de Romanones (1941): *Un drama político: Isabel II y Olózaga*, Madrid, págs. 101 y ss.

⁹² Una referencia pormenorizada a sus diferentes facciones y su evolución hasta que llegó al poder durante el Sexenio Revolucionario (1868 – 1874) se puede encontrar en CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975*..., págs. 228 y ss.

El partido moderado, no era un partido político en los términos que se entiende en la actualidad. Era un conjunto de grupos de tendencia moderada. Su perfil ideológico lo ha descrito DÍEZ DEL CORRAL⁹³ como un pensamiento improvisado, fragmentario, de escaso rigor intelectual, en el que se acusan los bruscos e imprevisibles cambios de la política de aquel periodo.

2. Armonía entre orden y libertad

Éste es el postulado del liberalismo doctrinario: orden y libertad. Señala COMELLAS⁹⁴ que una vez vencido definitivamente el Antiguo Régimen, ya no se espera el paraíso prometido por la Revolución. Se da paso a una mentalidad realista y desengañada, a una desconfianza hacia los principios universales, a un deseo de paz y estabilidad que recela de los cambios radicales. En el mismo aspecto incide PALACIO ATARD⁹⁵, destacando el sentido pragmático de los moderados y su voluntad de construir sobre las conquistas de los postulados liberales. Para eso, *su propósito es “anclar el nuevo régimen”, o sea, “organizar, institucionalizar, codificar”*.

La importancia que tuvo en este binomio el elemento “orden” se entiende desde lo que CARR⁹⁶ denomina el temor a la revolución. En efecto, la revolución de 1843 dio cuerpo al fantasma de la anarquía y reforzó los sentimientos conservadores. El Gobierno de los moderados explotó este miedo. Debía haber un retorno al orden y evitar el triunfo de los partidos radicales.

3. El impulso codificador

El fenómeno de la codificación se expande a lo largo de casi todo el siglo XIX en España y Europa. La “Década moderada” es un periodo más dentro del largo proceso codificador que, según CARR⁹⁷, tiene la siguiente singularidad: los liberales avanzados habían promovido y exigido la codificación de sus nuevas conquistas, pero fueron los moderados quienes la realizaron.

En efecto, el Derecho español era un *amasijo histórico*, reflejo de la lucha por la unidad política. Las revoluciones del siglo XIX pretenderán consolidar sus avances y triunfos mediante un aparato legal que impidiera el retorno al Antiguo Régimen. Durante las primeras décadas del siglo XIX se encuentran pocos textos codificados en España. El más relevante, sin duda alguna, es el CCom 1829 de D. Pedro Sáinz de Andino, al final del periodo absolutista de Fernando VII. La burguesía, a pesar de no contar con un marco constitucional adecuado, presionó para la promulgación de este texto, que estuvo en vigor hasta 1885.

Con carácter general, como expone TOMÁS Y VALIENTE⁹⁸, la burguesía revolucionaria necesitaba sustituir el orden jurídico del Antiguo Régimen por uno nuevo, adecuado a sus intereses. La clase burguesa, como titular y agente del proceso histórico, hace la revolución y construye su orden jurídico. De la misma manera que se

⁹³ DÍEZ DEL CORRAL, L. (1945): *El liberalismo doctrinario*, Madrid, pág. 473.

⁹⁴ COMELLAS, J. L. (1970): *Los moderados en el poder, 1844 - 1854*, Madrid, pág. 52.

⁹⁵ PALACIO ATARD, V. (1978): *La España del Siglo XIX ...*, págs. 240 y 241.

⁹⁶ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975...*, págs. 231 y 232.

⁹⁷ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975...*, pág. 234.

⁹⁸ TOMÁS Y VALIENTE, F. (1997): *Manual de Historia del Derecho español*, Madrid, págs. 474 y 475.

hablaba de la “pax romana” en relación con el Imperio romano, o de la “pax Ecclesiae” como referencia de la cristiandad medieval, desde principios del siglo XIX se puede hablar en Europa de una “paz burguesa”.

Este mismo autor diferencia cinco etapas en la codificación española⁹⁹. La primera, 1808 – 1823, formada por el preludio gaditano y el “Trienio liberal”. La segunda, 1823 – 1843, en la que destaca, como se decía antes, el CCom 1829¹⁰⁰. La tercera, 1843 – 1868, que abarca la totalidad del periodo de vigencia de nuestra Ley de 1848, y que se comenta a continuación. La cuarta, 1868 – 1874, correspondiente al “Sexenio revolucionario”. Y, por último, la Restauración, etapa final de la codificación.

En relación a la tercera etapa, comprensiva de veinticinco años, de 1843 a 1868, la primera cuestión relevante es la creación de la Comisión General de Codificación¹⁰¹ por RD de 19 de agosto de 1843¹⁰², cuyo primer Presidente fue D. Manuel Cortina¹⁰³. El éxito inicial de la Comisión fue el Código Penal de 19 de marzo de 1848¹⁰⁴. El siguiente fue la Ley de Enjuiciamiento civil durante el “Bienio progresista”, mediante Ley de 13 de mayo de 1855¹⁰⁵. Y, el tercero, consistió en la publicación del Proyecto de Código civil de 1851, que no llegó a promulgarse por su intento de suprimir los derechos civiles forales, lo cual ocasionó una fuerte oposición desde las correspondientes regiones.

Cabe advertir que, si bien nuestra Ley de 1848 no fue impulsada por la Comisión General de Codificación, los debates parlamentarios se producen en este periodo expansivo de la codificación. La Ley de 1848 presenta dos singularidades respecto al proceso codificador general. En primer lugar, se trata de una materia que ya estaba codificada en ese momento, a través del CCom 1829¹⁰⁶. Y, en segundo lugar, la Ley y el Reglamento de 1848 no consolidan el triunfo de la burguesía liberal avanzada, sino que, muy al contrario, suponen un regreso a planteamientos rígidos e intervencionistas.

4. Las reformas administrativas

El partido moderado se caracterizó como el partido del orden, y no sólo del mantenimiento del “orden público”, sino por crear un nuevo “orden administrativo”¹⁰⁷. En el marco de la CE 1845, que se estudia en el siguiente apartado, los moderados promovieron una serie de leyes complementarias de reformas administrativas.

⁹⁹ TOMÁS Y VALIENTE, F. (1997): *Manual de Historia ...*, págs. 484 a 492.

¹⁰⁰ Sobre las notas características de la codificación mercantil española y, más concretamente, sobre el CCom 1829, puede consultarse PASCUAL QUINTANA, J. M. (1958): “Aspecto histórico del Derecho mercantil” en *RDM*, vol. XXVI, núm. 69, julio - septiembre, págs. 30 y ss.

¹⁰¹ TOMÁS Y VALIENTE, F. (1988): “El pensamiento jurídico” en ARTOLA, M. (dir.) Y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario): *Enciclopedia de la Historia de España dirigida por Miguel Artola. III. Iglesia. Pensamiento. Cultura*, Madrid, pág. 389.

¹⁰² GdM de 20 de agosto de 1843, núm. 3255.

¹⁰³ LASSO GAITE, J. F. (1998): *Crónica de la codificación española. Procedimiento civil*, vol. 2, Madrid, págs. 35 y ss.; BÁDENAS ZAMORA, A. (2005): *El patrocinio del justiciable pobre en la España liberal (1833 – 1868)*, Madrid, págs. 148 y ss. y BARÓ PAZOS, J. (1993): *La codificación del Derecho civil en España (1808 – 1889)*, Santander, págs. 91 y ss., en el que se encuentra una breve semblanza de cada uno de los dieciocho juristas que integraron la Comisión General de Codificación en el momento de su creación.

¹⁰⁴ GdM de 21 de marzo de 1848, núm. 4937.

¹⁰⁵ GdM de 17 de mayo de 1855, núm. 866.

¹⁰⁶ Aún no se habían promulgado otros Códigos. El siguiente, a los dos meses de la publicación de la Ley de 1848, es el citado Código penal de 19 de marzo de 1848.

¹⁰⁷ PALACIO ATARD, V. (1978): *La España del Siglo XIX ...*, pág. 244.

ARTOLA¹⁰⁸ expone que el partido moderado configuró un régimen político basado en el control total de la Corona a través del Consejo de Ministros, regulando los mecanismos de la acción política. Así, por ejemplo, el Gobernador civil de la Provincia disfrutaba de amplísimas facultades, gozando de una práctica inmunidad por su gestión. Esta figura se estudia con detenimiento en el capítulo sobre la vigilancia e inspección de las compañías mercantiles por acciones, como manifestación del principio de control político gubernamental que ahora se está comentando. Cabe destacar también el RD sobre imprenta de 6 de julio de 1845¹⁰⁹, la ley electoral de 18 de marzo de 1846¹¹⁰ y la reforma del Reglamento de las Cortes de 4 de mayo de 1847¹¹¹.

Durante los años anteriores al acceso al poder de los moderados, la maquinaria administrativa del Estado, Provincias y Municipios había crecido sin responder a un plan racional. Como dice PALACIO ATARD¹¹², era un aparato caprichoso que no siempre se identificaba con la sociedad a la que debía servir. La máquina burocrática se instaló al margen de la realidad social. Esto trajo como consecuencia el desinterés de grandes grupos sociales respecto al Estado, que aparecía como el enemigo público del que se recela y contra quien uno se debe proteger. Ahora bien, paradójicamente, la aspiración de muchos ciudadanos era alcanzar un empleo público que, en condiciones normales, suponía una garantía de seguridad. Sin duda que esto influyó en la actitud de emprendimiento de los españoles. El espíritu empresarial, arriesgado, era patrimonio de unos pocos.

Esta búsqueda del empleo público, llevó a los moderados a racionalizar las carreras administrativas y los cuerpos de funcionarios. Mención especial merece, a este respecto, la labor de D. Juan Bravo Murillo –que fue Ministro de CIOP durante la parte final de la tramitación parlamentaria de la Ley de 1848- a quien CARRASCO¹¹³ califica como el primer tecnócrata español y a quien se le debe el RD de 18 de junio de 1852¹¹⁴ sobre estas cuestiones.

Por último, cabe citar también como figura relevante de la reforma administrativa de aquella época a D. Alejandro Mon, designado por CARR¹¹⁵ como un Peel español quien, al igual que este político británico, detestaba la inestabilidad de los funcionarios y pretendía conseguir un cuerpo funcional inamovible.

¹⁰⁸ ARTOLA, M. (1974): *Partidos ...*, pág. 245, y PALACIO ATARD, V. (1978): *La España del Siglo XIX ...*, págs. 249 y 250.

¹⁰⁹ GdM de 13 de julio de 1845, núm. 3955.

¹¹⁰ GdM de 21 de marzo de 1846, núm. 4206. Esta ley redujo a una quinta parte el cuerpo electoral respecto al sistema anterior, al establecer una fuerte subida de la contribución directa exigida para el derecho de sufragio.

¹¹¹ Que, en relación a nuestra Ley de 1848, se produce poco después de tener lugar en el Congreso de los Diputados los debates durante los días 19, 20 y 21 de abril de 1847.

¹¹² PALACIO ATARD, V. (1978): *La España del Siglo XIX ...*, pág. 251

¹¹³ CARRASCO CANALS, C. (1975): *La burocracia en la España del siglo XIX*, Madrid, págs. 230 y ss.

¹¹⁴ GdM de 20 de junio de 1852, núm. 6572.

¹¹⁵ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975 ...*, pág. 234.

C) LA CE 1845

1. Notas generales del constitucionalismo español hasta el final del segundo tercio del siglo XIX

Cabe señalar dos notas caracterizadoras del constitucionalismo español hasta 1868¹¹⁶. La primera, es la vinculación entre Constitución y partido político en el poder: la fuerza política ganadora aprueba una Carta Magna diseñada a su medida, excluyendo las otras alternativas políticas, que cuando llegan al poder, se encargan de modificar o sustituir por una nueva. Y, la segunda, el escaso arraigo popular de los textos constitucionales: no existía un auténtico proceso constitucional; la iniciativa –el Proyecto del texto– provenía del Gobierno en el poder. Estas dos características se aplican a la CE 1845.

Los procesos constituyentes solían debatirse entre la modificación de la Constitución anterior o su derogación y promulgación de un texto totalmente nuevo. Así ocurrió con la CE 1845. Una vez los moderados en el poder, se evidenciaron las diversas posiciones en cuanto a la oportunidad de modificar –en mayor o menor medida– la Constitución de 1837 o redactar una nueva¹¹⁷.

2. Notas características de la CE 1845

En primer lugar, la CE 1845¹¹⁸ se presentó como una reforma o “mejora” de la de 1837, para adecuarla a la ideología del momento. Quizá el cambio más importante, dentro de los principios fundamentales constitucionales, fue la asunción de que la soberanía era compartida por el pueblo y la Monarquía; se había perdido la soberanía nacional¹¹⁹. Muestra de ello fue que la iniciativa de la revisión del texto de 1837 partió del Gobierno, no de las Cortes.

La CE 1845 consta de trece títulos, como la de 1837, y un total de ochenta artículos, copia en su gran mayoría de los setenta y siete de que constaba la anterior.

CARR¹²⁰ mantiene que el texto de la CE 1845 es la encarnación más fidedigna de la doctrina de la “constitución interna”: el principio inamovible de los moderados, es decir, la Monarquía y las Cortes o, en palabras de TOMÁS Y VALIENTE, el postulado básico consistente en que *la Monarquía era una pieza histórica consustancial con la Constitución política de España y, en cuanto tal, cotitular de la soberanía junto a la nación*¹²¹.

Se pueden señalar las siguientes modificaciones fundamentales del texto constitucional de 1845 respecto a su antecesor.

¹¹⁶ TOMÁS Y VALIENTE, F. (1997): *Manual de Historia...*, págs. 446 a 448, a quien seguimos en el presente epígrafe.

¹¹⁷ PALACIO ATARD, V. (1978): *La España del Siglo XIX ...*, págs. 247 y 248.

¹¹⁸ Suplemento a la GdM de 23 de mayo de 1845, núm. 3904.

¹¹⁹ TOMÁS Y VALIENTE, F. (1997): *Manual de Historia...*, págs. 447 y 448.

¹²⁰ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975...*, págs. 236 y 338 y ss.

¹²¹ TOMÁS Y VALIENTE, F. (1997): *Manual de Historia...*, pág. 448. Idea similar se encuentra ya, por ejemplo, en MARTÍNEZ DE LA ROSA, F. (1857): *Bosquejo histórico de la política de España*, tomo II, Madrid, págs. 198 a 200.

En relación a las Cortes, el Senado fue objeto de una profunda transformación, estableciéndose un número ilimitado de Senadores, nombrados por la Corona, con carácter vitalicio. De esta manera, el Rey controlaba la Cámara Alta¹²². Además, se atribuyó al Senado importantes facultades judiciales, a parte de las legislativas que mantenía. Todo esto llevó a lo que CARR¹²³ refiere como un constitucionalismo adulterado que, al cabo de diez años, al final de la “Década moderada”, se había convertido en instrumento de una oligarquía poderosa, que utilizó el Senado como instrumento predilecto para su provecho.

Se sustituyó la ambigua fórmula de la Constitución de 1837 sobre la cuestión religiosa por una inequívoca declaración confesional, lo cual propició el Concordato de 1851, firmado por Bravo Murillo, que restableció las buenas relaciones con la Santa Sede (aún no se había unificado Italia) y que puso fin a la ruptura entre la Iglesia y el Estado desde los tiempos de Mendizábal y la desamortización.

En relación al régimen municipal, señala PALACIO ATARD¹²⁴ que fue objeto de importante modificación, diferenciándose entre Alcaldes y Ayuntamientos. Además, los Concejales serían elegidos por los vecinos. Las atribuciones de los delegados del Gobierno en los Ayuntamientos y Diputaciones se regularon por una Ley posterior, acorde con el principio básico del orden, promovido por el partido moderado.

Finalmente, cabe decir que la CE 1845 se hizo para satisfacer, fundamentalmente, a un sector de los moderados, denominado “monista”, por su líder, Alejandro Mon. Tanto los puritanos como los progresistas protestaron por la exclusión de sus planteamientos, de manera que cuando alcanzaron el poder en 1854, se pusieron a elaborar una nueva Constitución, que no llegó a proclamarse, por la vuelta al poder de los moderados en 1856, dando fin al “Bienio progresista”.

D) LA INESTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LOS AÑOS PREVIOS A LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE 1848

En un apartado anterior se ha comentado que los partidos políticos del periodo histórico que se está estudiando no eran organizaciones como se conocen en la actualidad. Eran grupos de tendencias, seguidores de líderes o agrupaciones de notables. Esto hacía que la fragilidad y vulnerabilidad fuera una nota característica de los partidos políticos. Además, no se puede olvidar la personalidad singular de la Reina¹²⁵, que se manifestaba, entre otras cuestiones, en apoyar o en dejar caer a Presidentes del Consejo de Ministros o a Ministros por factores erráticos o impredecibles.

Varios historiadores coinciden en que el partido moderado era una conjunción de intereses vinculados a la élite aventajada (PALACIO ATARD¹²⁶) o una colección de

¹²² Como dice ARTOLA, esta designación de todos los miembros del Senado, suponía *un medio de bloquear el proceso político mucho más eficaz que el veto, aún cuando sus posibilidades de aplicación tienen un límite de resultados del diferente nivel de representatividad del Senado y del Congreso* (ARTOLA, M. (1973): *La burguesía revolucionaria (1808 – 1869)*, Madrid, pág. 213.

¹²³ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975...*, pág. 243.

¹²⁴ PALACIO ATARD, V. (1978): *La España del Siglo XIX ...*, pág. 249.

¹²⁵ COMELLAS, J. L. (1999): *Isabel II. Una reina y un reinado*, Madrid, págs. 122 y ss.

¹²⁶ PALACIO ATARD, pág. 242.

oligarcas unidos solamente por el temor a la revolución (CARR¹²⁷). Este último autor incide en los cambios que sufría dicho partido político con motivo de los cismas y descontentos de sus miembros, a los que se añadían las influencias contrapuestas de los embajadores británico y francés, que apoyaban Gobiernos y medidas diferentes.

Este vaivén llegó a su punto álgido entre febrero de 1846 y octubre de 1847, como pone de manifiesto CARR¹²⁸: *(e)ntre febrero de 1846 y octubre de 1847 se sucedieron los Gobiernos de Miraflores (enero – marzo de 1846), Narváez (abril 1846), ahora sin el favor de la corte (marzo de 1846), Istúriz (marzo de 1846 – enero de 1847), Sotomayor, Pacheco y Goyena García – Salamanca.*

Por lo tanto, si ya en líneas generales la permanencia de los Gobiernos durante la “Década moderada” fue breve¹²⁹, en los años inmediatamente anteriores a la promulgación de la Ley de 1848, fue especialmente corta. En efecto, y aunque se estudia con detenimiento en el capítulo sobre la formación y tramitación de la Ley de 1848, el PL 1848 presentado por el Ministro Sr. Roca de Togores al Congreso el 26 de febrero de 1847 se vio sometido a una doble presión: los frecuentes cambios de Gobierno (cuyos Ministros entendían de forma distinta la manera de regular las compañías por acciones) y la posible disolución de las Cortes (como, de hecho, ocurrió en el verano de 1847, después de haberse debatido el PL 1848 en el Congreso en abril de dicho año).

En este sentido, son frecuentes las referencias, durante el debate del PL 1848 en el Senado, en diciembre de 1847, a la necesidad de aprobar urgentemente la Ley, que se traduce en rechazar en varias ocasiones algunas enmiendas, no por su contenido, sino por la necesidad de regular sin más dilaciones la maltrecha situación de las compañías por acciones, que no admitía demora alguna. También en este contexto se explican las frecuentes referencias de los Senadores a lo que estableciera el Gobierno en el Reglamento de 1848 para evitar embarrancar la aprobación del texto legal.

E) EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE 1848 EN EUROPA Y SU REPERCUSIÓN EN ESPAÑA

A los pocos días de promulgarse la Ley y su Reglamento de 1848, el 24 de febrero, se inicia en París la Tercera Revolución francesa, que da origen al ciclo revolucionario europeo de 1848 y 1849, protagonizado por el movimiento obrero y la burguesía más liberal. La incidencia de ese periodo en España, como expresa PALACIO ATARD¹³⁰, es peculiar y singular. En líneas generales se puede decir que el movimiento revolucionario no triunfó en España. En contra de lo que pueda parecer, el país que instiga el levantamiento español no es Francia sino el Reino Unido que apoya a los progresistas para que recuperaran el poder.

¹²⁷ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975 ...*, pág. 236.

¹²⁸ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975 ...*, pág. 239, nota a pie de pág. núm. 61.

¹²⁹ Se puede consultar un interesante estudio estadístico de la época en RAMÍREZ ARCAS, A. (1859): *Manual descriptivo y estadístico de las Españas consideradas bajo todas sus fases y condiciones*, Madrid, págs. 163 – 185, especialmente el epígrafe sobre el Ministerio de Fomento (título que sustituyó al de MCIOP) en págs. 171 – 172.

¹³⁰ PALACIO ATARD, V. (1978): *La España del Siglo XIX ...*, págs. 265 y ss.

Las revueltas que se produjeron en España carecían de contenido social. En palabras de CARR¹³¹, las asonadas radicales de Madrid durante la primavera y el verano de 1848 fueron fácilmente reprimidas. Los progresistas, según PIRALA¹³², esperaban retomar el poder mediante el pacto con los moderados descontentos, más que a través de la revolución.

La actitud del Gobierno de Narváez fue firme frente a este conato revolucionario (desde luego muy diferente al francés), sobre todo cuando se produjeron intentos de sublevación militar. PALACIO ATARD¹³³ señala, en este sentido, que la Revolución de 1848 desencadenó una contrarrevolución preventiva en España, que cristalizó en un modelo de “dictadura liberal”, al menos durante los meses que se suspendieron las Cortes¹³⁴. Aquellos fueron los primeros meses de aplicación de la Ley y del Reglamento de 1848.

¹³¹ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975 ...*, págs. 240 y 241.

¹³² PIRALA, A. (1875): *Historia contemporánea*, Madrid, págs. 128 a 130.

¹³³ PALACIO ATARD, (1978): *La España del Siglo XIX ...*, págs. 270 y 271.

¹³⁴ Del 22 de marzo al 15 de diciembre de 1848.

CAPÍTULO III ANTECEDENTES DE LA LEY DE 1848

I. LA REGULACIÓN ANTERIOR AL CCom 1829

La Ley y el Reglamento de 1848 derogan el régimen jurídico en vigor en aquel momento. Para comprender el calado de esta reforma, es necesario conocer el contenido normativo aplicable a las sociedades por acciones antes del 28 de enero de 1848. Esto es lo que se realiza en el presente epígrafe. En capítulos posteriores se analizará pormenorizadamente el nuevo contenido normativo.

La primera norma que regula con carácter general la materia de las sociedades por acciones es el CCom 1829. Éste debe ser el punto de partida de nuestro estudio. Pero necesariamente se ha de realizar una breve referencia a los antecedentes de dicha norma, pues sin ellos no se puede entender correctamente la evolución del régimen de las compañías por acciones.

Por razones metodológicas se empieza el estudio de este apartado por el origen histórico de las sociedades anónimas. A continuación se analizará la aparición de las compañías por acciones y su influencia en las sociedades anónimas, lo cual nos llevará a la situación de las sociedades anónimas durante el periodo inmediatamente anterior a la Codificación. Después se hará una referencia a los estudios de la doctrina mercantilista española sobre el origen de la sociedad anónima. Y, por último, se comentarán las referencias al origen de las sociedades anónimas y por acciones que aparecen en los DsC en que se debatió el PL de 1848.

A) LAS PRIMERAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

No se puede estudiar adecuadamente el inicio de las sociedades por acciones sin analizar previamente el origen de las sociedades anónimas. Y esta concreta cuestión, a fecha de hoy, no está definitivamente resuelta¹³⁵. Los estudiosos del tema como el profesor HIERRO ANIBARRO, a quien seguimos en la presente exposición, han avanzado en la investigación, pero reconocen que aún queda camino por recorrer¹³⁶.

En primer lugar, el origen geográfico de la sociedad anónima es difuso aunque, en principio, limitado al Continente europeo y a las Islas Británicas. En segundo lugar, la génesis temporal tampoco es clara, apuntándose a lejanos momentos como la *societatis vectigalium publicorum* romana o a periodos más recientes que comienzan en la Edad Media¹³⁷. Además, en tercer lugar, la doctrina jurídica española ha tendido en sus comienzos (en torno a nuestra Ley de 1848) a estudiar los orígenes de la sociedad

¹³⁵ Es posible que no se llegue a una conclusión universalmente válida, pues son muchos los factores que influyeron en la constitución de las primeras entidades a las que se les puede atribuir las notas caracterizadoras de este tipo social.

¹³⁶ HIERRO ANIBARRO, S. (1998): *El origen de la sociedad anónima en España*, Madrid, pág. 40 (nota núm. 42).

¹³⁷ Véase HIERRO ANIBARRO, S. (1998): *El origen ...*, págs. 73 y ss., en referencia a la Doctrina española.

anónima en el Derecho comparado, sin prestar atención a la normativa española, si bien este extremo ha variado según avanzaba el siglo pasado.

Las primeras sociedades anónimas (“sociedades anónimas precodificadas”) eran promovidas por la autoridad, que fijaba su régimen de actuación interna y externa en la RC de fundación. Su constitución quedaba sujeta a una actuación de la autoridad pública que otorgaba un privilegio y un monopolio de naturaleza comercial¹³⁸.

Los rasgos definitorios de estas primeras sociedades anónimas son la limitación de responsabilidad y, sobre todo, el privilegio del que eran titulares. Si a esto se le añade que la naturaleza del privilegio es público o estatal, se entiende, como dice el profesor HIERRO ANIBARRO, que en sus inicios, la sociedad anónima no era considerada como una entidad de carácter mercantil, sino una mera creación de tráfico¹³⁹.

A este respecto, GIRÓN¹⁴⁰ mantiene que dichas sociedades no se sometían al Derecho mercantil pues se conceptuaban como empresas públicas. También URÍA¹⁴¹ al decir que eran “entidades semipúblicas”. En contra, HIERRO ANIBARRO¹⁴² expone que el pretendido carácter público de las compañías de comercio ha sido uno de los mitos más extendidos e incorrectos en la historia del Derecho de la sociedad anónima, según -dice- ha demostrado la moderna doctrina mercantil.

Más adelante se volverá sobre este aspecto de la limitación de responsabilidad y la concesión de privilegios económicos, haciendo referencia a las posiciones de nuestra doctrina mercantilista sobre el origen de la sociedad anónima. Cabe destacar ahora que algunos autores entienden que aquellas “sociedades anónimas precodificadas”, no constituyen el antecedente de la sociedad anónima codificada. Otros, como el profesor RUBIO, piensan lo mismo, pero formulado de una manera diferente: la expresión sociedad anónima *cuya vaguedad sirve para encubrir las más diversas formas sociales*¹⁴³. El origen de la sociedad anónima, se encontraría mucho más cercano en el tiempo: las sociedades por acciones de finales del siglo XVIII.

Dejamos apuntado este tema sin poder detenernos mucho más, dado que excede del ámbito del presente trabajo. Pero es necesario mencionarlo dado que, como luego se dirá, los Diputados y Senadores que participaron en las discusiones del PL 1848 hacen varias referencias al origen y a los hitos de la regulación de las sociedades anónimas. En ellas se aprecia una falta de consenso sobre el momento de su inicio, así como de los resultados de las disposiciones normativas extranjeras.

Así, por ejemplo, el Diputado Sr. Ordax, mantiene que el origen de las compañías mercantiles se debe situar en la legislación romana¹⁴⁴. En cambio, el entonces Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Vaamonde, defendía que fue en las

¹³⁸ HIERRO ANIBARRO, S. (1998): *El origen ...*, págs. 31 y 32. Este autor identifica los términos sociedad anónima y compañía de comercio, pues *ambos términos son sinónimos, aunque con las características peculiares de su época* (pág. 31, nota núm. 2).

¹³⁹ HIERRO ANIBARRO, S. (1998): *El origen ...*, pág. 32.

¹⁴⁰ GIRÓN TENA, J. (1976): *Derecho de sociedades*, tomo I, Madrid, pág. 59 y (1947): “Sociedades civiles y sociedades mercantiles: distinción y relaciones en Derecho español” en *RDM* núm. 10, Madrid, pág. 17.

¹⁴¹ URÍA, R. (1987): *Derecho mercantil*, Madrid, pág. 186.

¹⁴² HIERRO ANIBARRO, S. (1998): *El origen ...*, pág. 302.

¹⁴³ RUBIO, J. (1950): *Sáinz de Andino y la codificación mercantil*. Madrid, pág. 153.

¹⁴⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1431.

Repúblicas de Venecia, Pisa y Génova en las que apareció por primera vez la sociedad colectiva, para dar paso en el siglo XII a la comanditaria y ya en el siglo XV se pueden reconocer las primeras sociedades anónimas, si bien, la precursora es la compañía holandesa de las Indias Orientales de Amsterdam, creada en 1602¹⁴⁵.

El Sr. Bertrán de Lis sitúa el origen de las compañías anónimas en Inglaterra, en tiempos del Rey Jorge I (1660 – 1727)¹⁴⁶. Por su parte, Sáinz de Andino en el Senado no se define sobre el momento del inicio de las sociedades anónimas, pero hace mención a dos hitos en la regulación de este tipo de sociedades: la Compañía de Indias francesa fundada durante la Regencia del Duque de Orleans, que sufrió una tremenda crisis en 1720, y la *South Sea Company* británica que también fue un fracaso y que es coetánea de la *Bubble Act* de 1720¹⁴⁷.

B) LA APARICIÓN DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES Y SU RELACIÓN CON LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS.

El profesor HIERRO ANIBARRO sostiene¹⁴⁸ que el origen de las compañías por acciones no se encuentra en la gran burguesía que invertía capitales en la exportación, sino en la burguesía media de provincias que implicaba a un mayor número de inversores con menos recursos. Estas compañías, además, no eran objeto de privilegios y, por tanto, era más sencilla su constitución.

Sitúa el mismo autor el inicio de las compañías por acciones a lo largo del siglo XVIII y se pregunta por la relación causal entre las compañías por acciones y la sociedad anónima. Pueden ser dos las explicaciones.

La primera, parte de la premisa de que las sociedades anónimas tienen su origen en la codificación y, por lo tanto, las compañías por acciones participan en el origen de aquéllas.

La segunda, en cambio, se refiere al origen histórico de la aparición de la institución jurídica de la sociedad anónima o compañía de comercio y, en consecuencia, el punto de partida debe ser exclusivamente la sociedad anónima precodificada, titular de privilegios, tal y como se ha comentado anteriormente. En este caso, las compañías por acciones se limitan a difundir en el tráfico comercial las sociedades anónimas precodificadas, generalizando, por un lado, unos elementos de carácter jurídico, de probada eficacia en cuanto a la acumulación de capital y, por otro lado, desvinculándose de los privilegios.

En consecuencia, se puede decir que en la época inmediatamente anterior a la codificación, las compañías por acciones se diferenciaban de las sociedades colectivas y comanditarias simples por su carácter capitalista y no personalista. También se diferenciaban de las sociedades anónimas precodificadas porque no eran titulares de privilegios. En cuanto al aspecto básico del privilegio de la limitación de la responsabilidad únicamente al capital aportado, apunta HIERRO ANIBARRO que la fecha

¹⁴⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1422.

¹⁴⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1439.

¹⁴⁷ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 280.

¹⁴⁸ HIERRO ANIBARRO, S. (1998): *El origen ...*, págs. 41 y ss.

de la generalización de la responsabilidad limitada en las compañías por acciones gaditanas se puede fijar entorno al año 1780¹⁴⁹.

RUBIO¹⁵⁰, por su parte, entiende que en la segunda mitad del siglo XVIII se produce una alteración progresiva de tres factores de las sociedades anónimas precodificadas: su situación de privilegio, la ausencia de una gran industria y su íntima relación con la Administración pública. Esta alteración produce la aparición de compañías por acciones vinculadas al ejercicio privado del comercio y de la industria.

C) LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS DURANTE EL PERIODO INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA CODIFICACIÓN (DESDE FINALES DEL SIGLO XVIII HASTA 1829).

El inicio de la Revolución Industrial genera unas necesidades financieras que afectan a la regulación de las sociedades anónimas. Surge la necesidad de dotarlas de un nuevo marco jurídico común o básico que regule unos niveles mínimos para evitar los fraudes y engaños. Esto se produce, fundamentalmente, en los países que antes desarrollan su producción industrial, entre los que no se encuentra España.

ESTEBAN VELASCO, en relación a este *periodo de transición a la moderna sociedad anónima* destaca que en él *se inicia un profundo cambio que afecta a la función y a la caracterización de la sociedad. Por un lado comienza a aparecer la sociedad anónima como un recurso de la iniciativa privada para el ejercicio de una actividad económica en determinados sectores, con independencia del Estado y, por otro, en consecuencia, comienza a dejar de ser una figura excepcional, público – privada, para convertirse en un tipo de empresa ordinario, junto a las otras formas privadas tradicionales de sociedad – las sociedades colectiva y comanditaria*-¹⁵¹.

El nuevo marco jurídico se encuentra con un problema fundamental: el clima creado en relación a la sociedad anónima precodificada no favorecía su legitimación a través de la ley debido al tradicional resentimiento, contrario a las compañías privilegiadas, que eran consideradas como algo residual con lo que se debía acabar¹⁵². La Revolución francesa trató de abolir los privilegios y, por este motivo, las propuestas de regulación de las sociedades anónimas precodificadas en los trabajos preparatorios del *Code* fueron contrarias a dichas sociedades. Pero la innegable evidencia de la evolución del tráfico mercantil hizo que se enfocara el problema de otra manera y al final, el *Code* recogió los tres tipos de sociedad mercantil: la colectiva, la comanditaria y la anónima.

HIERRO ANIBARRO¹⁵³ mantiene que la burguesía liberal consiguió transformar la inicial oposición a la sociedad anónima por su carácter privilegiado, en una desvinculación de la sociedad anónima precodificada (y, por tanto privilegiada) de la

¹⁴⁹ HIERRO ANIBARRO, S.(1998): *El origen ...*, pág. 42, que en nota a pie de página (núm. 55) cita como fuente a GARCÍA-BAQUERO (1976) en su obra *Cádiz y el Atlántico (1717-1778)*, Sevilla, pág. 415.

¹⁵⁰ RUBIO, J. (1950): *Sáinz de Andino ...*, pág. 155.

¹⁵¹ ESTEBAN VELASCO, G. (1982): *El poder de decisión en las sociedades anónimas. Derecho europeo y reforma del Derecho español*, Madrid, págs. 54 – 55.

¹⁵² HIERRO ANIBARRO, S. 1998): *El origen ...*”, pág. 43.

¹⁵³ Ídem, pág. 44.

naciente sociedad anónima. Esta tesis, quizá por motivos de la evolución histórica, se ve difuminada en el caso de nuestra Ley de 1848. A lo largo de las intervenciones de los Diputados y Senadores sobre el PL 1848, se encuentran frecuentes alusiones y críticas al carácter privilegiado de la sociedad anónima. Esta posición es consecuencia de una doble referencia histórica: en primer lugar, la experiencia de la actuación de las compañías anónimas constituidas en el periodo inmediatamente anterior bajo el régimen del CCom 1829; y, en segundo lugar, el recuerdo de las compañías anónimas precodificadas, que, como más adelante se verá, en varias ocasiones, se conceptúan como antecedentes directos de las sociedades anónimas.

Ya desde la primera intervención en los debates en el Congreso de los Diputados, se hace mención al carácter privilegiado de las sociedades anónimas¹⁵⁴. En la segunda sesión, el 20 de abril de 1847, el Diputado Sr. Ordax presenta una enmienda al PL 1848 pues entiende que no tiene sentido que las sociedades comanditarias se encuentren dentro de su ámbito de aplicación, porque éstas no disfrutaban de ningún privilegio, como las sociedades anónimas. Le parece adecuado el régimen restrictivo del PL 1848 para las compañías que gozan de privilegios como las anónimas, pero le parece un grave error que también se aplique a las comanditarias. Con este motivo, realiza una interesante mención al carácter privilegiado de las compañías anónimas:

El principio sobre que descansa el proyecto que se nos presenta, es el privilegio; porque en efecto, el privilegio es inherente a las sociedades anónimas; es de su naturaleza y organización íntima; no se puede comprender sociedad anónima sin la idea de privilegio. Es preciso conocer que esto es lo que constituye su esencia; quitadlas si no el privilegio, y al momento desaparecerán.

(...)

*... por eso mismo que el principio de la ley o del proyecto es lógico y justo, se ha faltado a él llevándole más allá de donde se debía, extendiéndole a las sociedades comanditarias, donde no existe ese privilegio. Y si no, dígame: ¿de qué manera existe en ellas el privilegio? ¿Están exentas de la ley mercantil común?*¹⁵⁵

A esta propuesta de enmienda al PL 1848 responderá el miembro de la CCD, Sr. Miota, cuya larga respuesta se podría sintetizar con sus mismas palabras:

*He aquí otra equivocación visible. Las compañías comanditarias, cuando su capital se divide en acciones, gozan del mismo privilegio que las anónimas; gozan de la excepción del derecho común*¹⁵⁶.

Por su parte, D. Pedro Sáinz de Andino, en la Sesión del 22 de diciembre de 1847, en el Senado, oponiéndose a una enmienda al artículo 4 del texto del PL 1848, pronunció las siguientes palabras que no necesitan comentario alguno:

¹⁵⁴ Exposición del primer Diputado que hizo uso de la palabra: el Sr. Gonzalo Morón, en DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1419.

¹⁵⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1429.

¹⁵⁶ Ídem, pág. 1432.

*... porque está probado, hasta la evidencia, que las Sociedades anónimas constituyen un sistema que está fuera de la ley, que repugna a los principios estrictos de la justicia universal y primitiva, y que es un sistema de contratación privilegiada*¹⁵⁷.

Sáinz de Andino, en la sesión del día siguiente, 23 de diciembre de 1847, con motivo de una enmienda para suprimir las acciones al portador (que, al final, fue acogida por el texto definitivo), dice que, debido a la gravedad del tema,

*... tendré que internarme en el examen de la índole, del carácter y de las condiciones del sistema excepcional y privilegiado de la contratación mercantil, sobre que se funda la existencia de las Sociedades anónimas*¹⁵⁸.

Un comentario sobre la *índole, carácter y condiciones* de la sociedad anónima se realiza en el capítulo sobre el concepto de sociedad anónima y compañías mercantiles por acciones y a él nos remitimos.

D) ESTUDIOS DE LA DOCTRINA MERCANTILISTA ESPAÑOLA SOBRE EL ORIGEN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

En relación a los orígenes de la compañía mercantil en general, existen obras de las diferentes épocas que se refieren a esta cuestión. Más recientemente, la Doctrina actual ha investigado esta materia y fruto de esta actividad han sido varias publicaciones, a algunas de las cuales se refiere OLIVENCIA¹⁵⁹ en una breve publicación.

Respecto a la sociedad anónima, comenta HIERRO ANIBARRO¹⁶⁰ que en la Doctrina española de Derecho mercantil no existió el debate sobre su origen, como se dio en el Derecho comparado. Por este motivo, los autores españoles se limitaron a asumir las conclusiones extranjeras, renunciando al estudio de los orígenes autóctonos, ante el convencimiento de la carencia de precedentes propios.

Cabe destacar unas breves menciones a los estudios coetáneos de la Ley de 1848. De los textos de que disponemos (que no son muchos), en líneas generales, no abordan el origen de la sociedad anónima. Se trata de comentarios al texto normativo en vigor, el CCom 1829 y, en su caso, la Ley y Reglamento de 1848, en los que no se encuentran referencias al origen histórico de la compañía por acciones, excepto en dos casos, que se comentan a continuación.

AVECILLA, en 1849 situaba el origen de la compañía anónima en los Estados Unidos de América:

¹⁵⁷ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 271.

¹⁵⁸ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 279.

¹⁵⁹ OLIVENCIA, M. (1981): "Sobre la historia de la compañía mercantil (Aportaciones del Departamento de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla)" en *RDM*, núm. 160, abril – junio, págs. 313 – 324.

¹⁶⁰ HIERRO ANIBARRO, S. (1998): *El origen ...*, págs. 72 y 73 y, también del mismo autor, HIERRO ANIBARRO, S. (1998): "La doctrina del Derecho mercantil y el origen de la sociedad anónima" en *RDM*, núm. 229, julio – septiembre, pág. 1191.

Las sociedades anónimas tuvieron su origen en los Estados Unidos del Norte de América, en aquel pueblo eminentemente comercial que después de conquistar su libertad y su independencia, tan gloriosos esfuerzos ha hecho por subir a la altura en que se halla de una de las naciones más poderosas del mundo. Su engrandecimiento lo debe en gran parte a su comercio, y las sociedades anónimas son las más a propósito para reunir fuertes capitales, y emprender grandes empresas. Con sociedades anónimas generalmente se han llevado a cabo esos colosales caminos de yerro (sic) que cruzan, puede decirse, a toda Europa; sociedades anónimas son la mayor parte de los Bancos de las naciones y si es verdad que se hallan en España en un completo descrédito por el abuso que se hizo de ellas en todo el año de 1846, no por ello podremos dejar de exponer la legislación que las rige, porque las sociedades anónimas serán siempre necesarias en mayor o menor escala, y el espíritu, y la necesidad de asociación no ha de morir para siempre porque una vez se abusase de él lamentablemente¹⁶¹.

Esta idea es recogida por GONZÁLEZ HUEBRA¹⁶² en nota a pie de página al inicio de sus comentarios sobre las sociedades anónimas en su Curso de Derecho mercantil.

En este mismo sentido, GÓMEZ DE LA SERNA y REUS Y GARCÍA, sitúan el origen de la compañía anónima en Estados Unidos: *débese el origen de las compañías mercantiles por acciones, común y legalmente denominadas anónimas, a los Estados-Unidos del Norte de América, a ese pueblo que después de haber conquistado su independencia, fue aglomerando por este medio cuantiosos capitales para emprender esas colosales empresas que lo han elevado a la altura de la prosperidad y engrandecimiento en que se encuentra¹⁶³*. También RUBIO Y LÓPEZ manifestaba que *(l)a gloria de la iniciativa de las sociedades anónimas en el mundo corresponde a Estados Unidos¹⁶⁴*.

En la Enciclopedia española de Derecho que ARRAZOLA coordinó y publicó en 1858, se dice que

Sería interminable el enumerar todas las compañías de privilegio, de que dan razón nuestras leyes y reales disposiciones. (...) Ni esta enumeración reportaría grande utilidad, pues las mas han concluido ya, y en todo caso por las cuestiones, a que aún pudieran dar lugar, habría de estarse a la ley especial de las mismas, o sea, sus contratos, constituciones, privilegio, real cédula, etc.¹⁶⁵.

¹⁶¹ AVECILLA, P. (1849): *Diccionario de la legislación mercantil de España*, Madrid, pág. 97.

¹⁶² GONZALEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil*, tomo I, segunda edición, Barcelona, pág. 151.

¹⁶³ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio, concordado y anotado, precedido de una Introducción histórico-comparada, y seguido de la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio, y de un Repertorio alfabético de la legislación y del procedimiento mercantil*, cuarta edición, Madrid, pág. 480.

¹⁶⁴ RUBIO Y LÓPEZ, J. (1857): *Novísimo manual de Derecho mercantil, arreglado a la legislación vigente sobre esta materia y al Código de comercio: comprende las leyes de Bolsa, Bancos y sociedades anónimas*, Madrid, pág. 114.

¹⁶⁵ *Enciclopedia española de Derecho y Administración o Nuevo Teatro Universal de la Legislación de España e Indias*, Tomo X, Madrid, 1858, coordinada por D. LORENZO ARRAZOLA, pág. 776.

Pero a pesar de lo transcrito, recoge la citada Enciclopedia unos ejemplos de compañías privilegiadas, es decir, lo que hemos denominado sociedades anónimas precodificadas. Así, se citan: la *Guipuzcoana de Caracas*, refundida después en la de *Filipinas*; la de *Panaderos de Madrid* (1801); *Seguros Marítimos* de Cádiz (1800); *Impresores y libreros de la Corte*; *Paños o fábricas de Escaray* (sic); *Compañía de Filipinas* (1733), reproducida en 1775 con el nombre de *Compañía de comercio de Filipinas*, reproducida en 1785, renovada y prorrogada en 1803 y suprimida en 1834.

Respecto a los mercantilistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, HIERRO ANIBARRO¹⁶⁶ manifiesta que situaron el origen de la sociedad anónima en la compañía de comercio (MARTÍ DE EIXALÁ¹⁶⁷), pudiendo distinguirse dos corrientes. Una primera, situaba el origen de la sociedad anónima en la *societatis vectigalium publicorum* romana, a la que antes se ha aludido. La segunda, en la compañía de navegación, siendo ésta la más aceptada, relegando otras hipótesis como las agrupaciones italianas de acreedores o los Bancos de la Edad Media. En relación a los orígenes de la sociedad anónima en nuestro Derecho, no había acuerdo entre la Doctrina.

Los autores de mediados del siglo XX prestaron mayor interés sobre esta cuestión¹⁶⁸. El primero que lo hizo fue GARRIGUES. En sus escritos iniciales¹⁶⁹ citaba como ejemplo de primeras compañías anónimas a los “Montes”, asociaciones de acreedores del Estado, frecuentes en las ciudades italianas medievales, en concreto, el Banco de San Jorge de Génova de 1407. Posteriormente¹⁷⁰ reconocía la importancia de las compañías holandesas del siglo XVII, que tienen su origen en la lucha por las colonias de ultramar entre las grandes potencias marítimas. Las grandes compañías coloniales son el antecedente más directo de las sociedades anónimas actuales¹⁷¹: la Compañía holandesa de las Indias Orientales (1602), la Compañía inglesa de las Indias Orientales (1612), la Compañía sueca (1615), la Compañía danesa de las Indias Orientales (1616), la Compañía holandesa de las Indias Occidentales (1621) y la Compañía francesa de las Indias Occidentales y Orientales (1664).

Como dato erudito revela que el uso de la palabra “acción” se remonta a 1606.

Los antecedentes españoles los sitúa a principios del siglo XVIII con la compañía creada en Guipúzcoa hacia 1728 para el tráfico con Caracas y la Real Compañía de Filipinas fundada por Felipe V en 1733. Estas grandes compañías fueron el resultado de la antigua *commenda* y las asociaciones navieras.

Pero, a pesar de todas las citas anteriores, GARRIGUES no tiene totalmente claro el origen de la compañía anónima: *las grandes compañías coloniales holandesas y el Banco de San Jorge genovés, constituyen, al parecer, dos manifestaciones paralelas*

¹⁶⁶ HIERRO ANIBARRO, S. (1998): “La doctrina del Derecho mercantil ...”, pág. 1192.

¹⁶⁷ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones de Derecho mercantil de España*, Barcelona y Madrid, quinta edición, puesta al día por DURÁN Y BAS, pág. 45.

¹⁶⁸ Seguimos aquí a HIERRO ANIBARRO, S. (1998): “La doctrina del Derecho mercantil ...”, págs. 1193 y ss.

¹⁶⁹ GARRIGUES, J. (1933): *Nuevos hechos, nuevo Derecho de sociedades anónimas*, Madrid, reeditado por CIVITAS, Madrid, 1998, pág. 40.

¹⁷⁰ GARRIGUES, J. (1946): “Fundación de la sociedad anónima” en *RDM*, núm. 1, enero – febrero, pág. 11.

¹⁷¹ GARRIGUES, J. (1959): *Curso de Derecho mercantil*, tomo I, Madrid, págs. 350 y 351.

*diversas por su origen económico y por su configuración jurídica, y que han contribuido conjuntamente a la formación legislativa y conceptual de la sociedad por acciones contemporánea, aun cuando hay que reconocer que ésta ha recibido los rasgos principales de su fisonomía más de las compañías holandesas que de los montes italianos*¹⁷².

URÍA¹⁷³ entiende que el origen de la sociedad anónima está ligado a las compañías creadas en el siglo XVII para el comercio con las Indias Orientales y Occidentales. En concreto, dice que suele señalarse como primer ejemplo de compañía anónima la Compañía holandesa de las Indias Orientales (1602), a la que siguió en ese país la Compañía holandesa de las Indias Occidentales (1612) y, en Inglaterra, la Compañía de las Indias Occidentales (1621)¹⁷⁴.

URÍA, en relación a lo que se está comentando, apunta que aquellas compañías, son muy diferentes a las actuales sociedades anónimas, pues eran entidades semipúblicas, constituidas por la Corona mediante decisión gubernativa (*octroi*) que las dotaban de personalidad jurídica y les conferían privilegios monopolísticos en la explotación comercial, reservándose el Poder público un control continuo y una participación en beneficios.

GIRÓN observa que *aunque las formas de sociedad aparezcan en el artículo 265 en una situación paritaria, el Código del 29 refleja todavía el origen no mercantil y cuasi público de las compañías anónimas*¹⁷⁵. Fundamenta su observación en los artículos 293 y 294 del Código de Sáinz de Andino.

ESTEBAN VELASCO expone que *sin entrar en la larga polémica que, sobre todo a fines del siglo pasado y principios de éste, dividió a los autores sobre el origen de la moderna sociedad anónima, hoy podemos dar por aceptado que ésta tiene sus antecedentes en las compañías coloniales de los siglos XVII y XVIII*¹⁷⁶.

SÁNCHEZ CALERO y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE manifiestan que *la sociedad anónima capitalista ha tenido como antecedente a las compañías coloniales del siglo XVII, de fuerte matiz estatal y que el propio Estado tuvo sometidas a las sociedades anónimas privadas a un control previo a su fundación para juzgar sobre su oportunidad*¹⁷⁷.

Será a finales del siglo XX, sobre todo por el citado trabajo de HIERRO ANIBARRO, cuando se investigue con más profundidad acerca del origen de la sociedad anónima en el Derecho español. En el capítulo sobre el concepto de la compañía por acciones se detallan sus conclusiones.

¹⁷² GARRIGUES, J. (1956): *Curso ...*, págs. 351 y 352.

¹⁷³ URÍA, R. (1987): *Derecho mercantil ...*, págs. 185 y 186.

¹⁷⁴ Como se puede apreciar, las fechas no coinciden en algunos de los ejemplos que ponen GARRIGUES Y URÍA. Destaca, además, que éste último no hace mención a ningún antecedente nacional.

¹⁷⁵ GIRÓN TENA, J. (1986): “Las Sociedades mercantiles en el Código de Comercio”, en *Centenario del Código de comercio*, Ministerio de Justicia, Madrid, pág. 181.

¹⁷⁶ ESTEBAN VELASCO, G. (1982): *El poder de decisión ...*, pág. 43.

¹⁷⁷ SÁNCHEZ CALERO, F. Y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J. (2013): *Instituciones de Derecho Mercantil*, vol. I, Cizur Menor, pág. 381.

E) REFERENCIAS A LOS ORÍGENES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA EN LOS DEBATES PARLAMENTARIOS DEL PL 1848

Líneas más arriba se comentaba el interés de recoger algunas de las intervenciones que se hicieron durante los debates del PL 1848 en los dos Cuerpos colegisladores sobre los antecedentes remotos de la sociedad anónima. Esas manifestaciones expresan lo que en aquél momento juristas, Diputados, Senadores y políticos conocían y entendían como antecedentes de la figura de la sociedad anónima, antes de la promulgación del CCom 1829.

La primera intervención es del Diputado Sr. Gonzalo Morón, nada más comenzar el debate. Centra su argumentación en la necesidad de que el objeto social sea de utilidad pública y, de modo tangencial, realiza el siguiente comentario: *las sociedades anónimas son una excepción de las sociedades generales de comercio*¹⁷⁸.

En esa misma sesión, se recoge poco después la intervención del Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Vaamonde¹⁷⁹. Tiene una especial significación, pues había publicado unos artículos sobre el CCom 1829 en la *Revista de Madrid*, en los que estudiaba la situación de las sociedades mercantiles en España y la comparaba con otros países de Europa con la intención de promover, según sus palabras, la revisión de la legislación societaria y, en concreto, de las sociedades anónimas. Compara las características y funciones de los tres tipos de sociedades mercantiles y sus orígenes históricos:

El Congreso sabe que de todas las sociedades comerciales que se conocen, la sociedad anónima es la más moderna. La primera especie de sociedad comercial que se conoció en la Edad Media fue la sociedad colectiva; sociedad creada por medio del movimiento comercial que en la Edad Media ejercían las Repúblicas de Venecia, de Pisa y de Génova, que es a donde se acudió en esta materia para buscar la verdadera norma y guía que debía seguirse en estas cuestiones.

Introdujose en seguida la sociedad en comandita, que se empezó a conocer en el siglo XII, y hasta el siglo XV no hay un solo ejemplo de sociedad anónima. Lo más que se deja ver es una sociedad entre una persona que tiene toda la responsabilidad indefinida acerca de los negocios de la sociedad, y otras dos o tres o más personas, llamadas comanditarias o de pacotilla, que entregan cierta cantidad a este comanditario, no queriendo correr más riesgo que hasta donde llegue el valor de aquella cantidad que han entregado.

El Sr. Vaamonde sitúa el origen de las sociedades mercantiles en la Edad Media. A continuación, se refiere brevemente a la sociedad anónima, cuyos inicios, en su opinión, se encuentran en Amsterdam a principios del siglo XVII:

Hasta el siglo XVI no se encuentra ningún ejemplo de esta clase de sociedades anónimas. La primera que vemos es la de las Indias Orientales de Amsterdam en el año 1602. En este año de 1602 se estableció una sociedad comercial formada por acciones a imitación de la sociedad en comandita, con el

¹⁷⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1419.

¹⁷⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1422.

pensamiento de explotar y beneficiar la inmensa riqueza de las Indias Orientales, donde ejercía entonces grande influjo y poderío la Nación holandesa.

Interesa también reseñar dos intervenciones del Diputado Sr. Ordax, que tuvieron lugar durante la misma sesión del Congreso. En la primera, contradice lo que se acaba de transcribir, pues piensa que el espíritu de asociación, la base de las empresas mercantiles, no tiene su origen en la Edad Media, sino mucho antes, desde la época romana. Se dirige al Ministro Sr. Vaamonde en los siguientes términos:

De paso responderé aquí a una idea emitida por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia respecto a las sociedades en la Edad Media. Yo he dicho antes, y repito ahora: las sociedades han existido desde los tiempos más antiguos; en la antigua legislación romana se encuentran sociedades de esta clase con el nombre de compañías, y ellas son las que con diferentes nombres han venido prolongándose hasta nuestros días, porque eso está en la naturaleza humana, con lo cual puede decirse que nacieron estas sociedades. Estas sociedades o compañías, muchas de ellas se hicieron poderosas, tuvieron intervención en los negocios públicos, y aun fueron en casos dados las que influyeron en la suerte de los Gobiernos.¹⁸⁰

En su segunda intervención, el Sr. Ordax hace unas consideraciones generales sobre el espíritu de asociación para crear empresas que, aunque carece de datos históricos, es interesante como resumen de lo que muchas de las personas intervinientes en la redacción del PL 1848 conocían del origen y primera regulación de las sociedades anónimas. Se llama la atención sobre el planteamiento de que las acciones, en cierta medida, nacen para hacer que las personas distinguidas puedan dedicarse a la actividad comercial “conservando su honor”, pues no comprometían su nombre sino solamente el dinero.

Así fue que los caballeros, los hombres más distinguidos de todos los tiempos, tomando acciones en sociedades colectivas, sin comprometer su nombre ni otra cosa más que el fondo, los convirtieron por este medio en comanditarias, hicieron el comercio sin ser comerciantes, o lo que es lo mismo, conservaron el honor, adquiriendo las ventajas del comercio. Las sociedades que se formaron progresaban, y se conoció bien pronto que era necesario marchar más adelante y adoptar nuevas formas que se plegaran más al comercio que las formas de las sociedades colectiva y comanditaria. Las necesidades siempre crecientes del comercio, la aglomeración de industrias y otras diferentes causas hicieron ver que era necesario pensar en dar nueva forma a la asociación, pues los instrumentos y la acción de la industria se perfeccionaban y extendían de día en día, hasta tocar, como puede decirse que tocan hoy, con su apogeo. Las sociedades comanditarias tenían un límite natural en la prudencia de los hombres, en el temor de la aventura, pues que no todos los hombres quieren comprometerse directamente en empresas grandes. De aquí la necesidad de inventar una nueva forma para las sociedades mercantiles, a fin de que pudieran arrostrar esos peligros; y de aquí, señores, nacieron las sociedades anónimas, las cuales, disponiendo de inmensos capitales, pueden aventurarse a

¹⁸⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1431.

*empresas grandes y arriesgadas, porque como sostenidas por la reunión de pequeños capitales pertenecientes a diferentes familias o empresas, no arrastran a su caída la ruina de nadie, peligro que envuelven las comanditarias, y que refrena los proyectos de un particular o establecimiento aislado. Se ve, pues, que estas sociedades tienen una naturaleza particular, una naturaleza sui generis, que no se puede confundir de ninguna manera con las otras...*¹⁸¹

Otra interesante aportación fue la del Presidente de la CCD, Sr. Bertrán de Lis. Se refirió, en primer lugar, a los inicios de las primeras sociedades anónimas y su regulación en el Reino Unido:

*En Inglaterra existen compañías anónimas desde tiempo de Jorge I¹⁸², y en aquel país, como en el nuestro, empezaron cometiendo grandes abusos, porque allí no tenían más reglas que las del derecho común y las de la práctica del comercio, pues todo el mundo comerciaba individual y colectivamente. Estableciéronse esas compañías, y hubo grandísimos abusos, creándose para negocios que de ninguna manera debían sacarse del círculo del comercio común; y no sólo se fundaron para este objeto, sino que sucedió, entre nosotros, que se formaban compañías para crear un papel que servía de negociación y de juego, y llegó a tal punto el escándalo, que el parlamento creyó necesario intervenir en esta materia. Y era tal y tan escandaloso el abuso cometido sobre este particular, que se formó un Acta y se llamó a esta Acta el Acta de engañifa. Hasta tal punto había llegado el escándalo. Pero sucedió como siempre; que quiso remediarse el mal, y se tomaron disposiciones tan duras, que nada se remedió, porque una de ellas fue que todas las compañías formadas se sujetasen a la nueva acta, no exceptuándose más que dos. Todas las demás se las obligaba a acomodarse a las nuevas disposiciones; y eran estas tan duras y severas, que no se aplicaron en manera alguna y continuaron las cosas del mismo modo. No se tomaron después disposiciones hasta tiempo de Jorge IV¹⁸³, en que se estableció el Acta que ha venido rigiendo hasta nuestros días. En ésta se determinaba que las compañías anónimas por regla general debían establecerse del parlamento, y se dejaba al gobierno la facultad de establecer otras por medio de una carta o real cédula*¹⁸⁴.

A continuación se refirió a los orígenes de esta legislación en Francia. Este país tuvo mucha más influencia en España que el Reino Unido. Nuestro Legislador de aquella época observaba con interés la evolución normativa en las naciones de su entorno y, de modo preminente, las leyes francesas. Por esto, interesa conocer el concepto que en aquellos años tenían los Diputados y Senadores de los sistemas jurídicos extranjeros. Comentaba el Sr. Bertrán de Lis:

En Francia es cierto que las compañías anónimas no van para organizarse a las cámaras; pero es menester tener en cuenta una cosa, y es, que la legislación francesa sobre esta materia es la hecha en un tiempo en que no se había desarrollado como ahora el espíritu de asociación, ni tampoco la influencia parlamentaria; y sabido es que la índole del poder legislativo en Francia es hoy

¹⁸¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1428.

¹⁸² 1660 – 1727.

¹⁸³ 1762 – 1830.

¹⁸⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1439.

muy distinta a como se consideraba en tiempos de la restauración, que fue cuando se empezó a tomar alguna disposición sobre la materia. Pero la razón principal es que no se había desarrollado como ahora el espíritu de asociación; que no había tomado ese incremento, esa extensión, ni se había ocupado de la clase de negocios que hoy se ocupa. Hoy que el espíritu de asociación es uno de los objetos más graves que preocupan a la sociedad; que se comprometen tantos intereses en las compañías anónimas, se ha creído conveniente intervenir de una manera indirecta en la organización de esas compañías¹⁸⁵.

La última intervención que se recoge aquí es de Sáinz de Andino en la sesión de 23 de diciembre de 1847 en el Senado. Se refiere a dos situaciones críticas de estas sociedades a principios del S. XVIII, tanto en Francia como en Reino Unido. Estos ejemplos que los Senadores ya conocían o conocieron después del discurso de Sáinz de Andino, sin duda influyeron en las decisiones que se tomaron, por eso interesa conocerlos. Respecto al caso de Francia, dijo:

Bástenos recordar el deplorable ejemplo de la Compañía de Indias fundada en Francia por el célebre Law, que constituida bajo los auspicios del Gobierno de la Regencia del Duque de Orleans, y colmada de privilegios por aquella Corte, sin embargo de la enérgica oposición que contra esta empresa hizo el Parlamento, entusiasmó la imaginación de los capitalistas de toda Europa, que se elevaron sus acciones desde su valor nominal, que era de 500 francos, hasta el de 20.000 francos, precio a que se vendían en Diciembre de 1719. ¿Y en qué vino a parar este escandaloso agio que había multiplicado los capitales cuarenta tantos de su valor efectivo? En que en Noviembre del año siguiente ya no se negociaban a precio alguno las acciones de la Compañía de Law, y los crédulos jugadores sufrieron una irreparable ruina¹⁸⁶.

Aunque los datos no son del todo exactos, el resumen que hace Sáinz de Andino es muy expresivo de lo que ocurrió en 1719 – 1720 con la Compañía Francesa de las Indias. A continuación se refiere al caso británico conocido como “la burbuja de la compañía del Mar del Sur” (*South Sea Company*), que tuvo lugar unos meses después, en verano de 1720 y que fue la causa de la *Bubble Act*, de 9 de junio de 1720, en pleno momento especulador. Estas fueron sus palabras:

Igual escarmiento recibieron también los ingleses en su Compañía del mar [sic] del Sur, que dio lugar a que se multiplicasen prodigiosamente los bubbles, que convirtieron el comercio inglés en un verdadero monopolio. Hasta 176 compañías anónimas se contaban en Inglaterra en aquella época, y casi todas ellas establecidas para empresas ridículas, bajo cuya apariencia se disfrazaba el espíritu de agio. La una proveía de utensilios para los entierros; la otra se constituía garante de la fidelidad de los criados, y aun había algunas para objetos que la decencia no permite designar. Todas tuvieron el término que merecía la inmoralidad de su creación¹⁸⁷.

Estas intervenciones permiten conocer lo que se consideraban antecedentes históricos de las sociedades anónimas entre los Diputados, Senadores y Ministros del

¹⁸⁵ Ídem.

¹⁸⁶ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 280.

¹⁸⁷ Ídem.

Gobierno durante los debates del PL 1848. Sin profundizar en más detalles, hay que reconocer, con los conocimientos actuales, que aquellos ejemplos de sociedades anónimas eran correctos en sus detalles históricos: la Compañía de las Indias Orientales de Amsterdam, la Compañía de las Indias de Francia o la *South Sea Company* británica. Curiosamente no se cita la burbuja del tulipán o “tulipomanía holandesa” de 1637, quizá por desconocimiento, o por considerarse muy lejana en el tiempo.

Se podría concluir, por tanto, que para los juristas, parlamentarios y políticos que intervinieron en las redacciones del PL 1848, las sociedades anónimas precodificadas, es decir, las titulares de privilegios (limitación de responsabilidad y explotación de interés público) conectan directamente con la compañía anónima regulada en la Ley de 1848. Simultáneamente, consideran que esta Ley deroga la regulación del CCom 1829 sobre las sociedades anónimas, cuyas notas características no coinciden exactamente con las sociedades anónimas precodificadas puesto que, entre otras cuestiones, son aprobadas por el T. de c. Por este motivo, nuestro Legislador de 1848 parece que pretende volver al modelo de sociedad anónima precodificada al exigir la autorización pública, bien por ley, bien por RD, como justificación del régimen privilegiado de la misma. Se rechaza categóricamente que las sociedades anónimas se puedan dedicar al comercio ordinario, reservándolas exclusivamente a las grandes empresas, aglutinadoras de muchos inversores para acometer negocios de interés público.

II. LA REGULACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS POR ACCIONES EN EL CCom 1829

Después de comentar en el apartado anterior los orígenes de la legislación de las compañías mercantiles, debe estudiarse el marco normativo vigente hasta el momento de la aprobación de la Ley de 1848. Es necesario conocer, por un lado, las disposiciones que el Legislador de 1848 quiso derogar y, por otro, las disposiciones comunes a todas las sociedades mercantiles en aquel periodo histórico.

El punto de partida y norma básica es el Código de comercio de 30 de mayo de 1829. Texto legal que, por otro lado, es clave en la historia de nuestro Derecho mercantil. En este sentido, comenta el profesor ROJO: *por un fenómeno de fácil explicación, el Código de comercio español de 1829 ha constituido el punto de partida de las investigaciones históricas sobre la legislación mercantil española del siglo XIX. De un lado, el hecho de que este Código sea el primer cuerpo legal de proceso codificador mercantil y, de otro, la perfección técnica del mismo justifican sobradamente la atención que se viene prestando a la obra de P. SÁINZ DE ANDINO*¹⁸⁸.

¹⁸⁸ ROJO, A. (1977): “José Bonaparte (1808-1813) y la legislación mercantil e industrial española” en *RDM*, núms. 143-144, pág. 121. Conviene apuntar que la cita transcrita continúa con la siguiente referencia: *Pero esta preferente atención ha supuesto, al mismo tiempo, un empobrecimiento de la investigación sobre la legislación mercantil española del período anterior.*

A) NECESIDAD, REDACCIÓN Y VALORACIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO

La necesidad de unificar los distintos criterios y disposiciones legales en España se hizo patente, igual que en otros países europeos, a principios del siglo XIX. La gran obra de la codificación iniciada en Francia en aquella época trascendió de sus fronteras y los juristas acometieron un gran trabajo que fue plasmándose en los diversos textos legales codificados de aplicación al territorio nacional correspondiente.

Comenta MARTÍNEZ-ALCUBILLA que *la legislación de España en materia mercantil hasta la publicación del Código de comercio en 1829, estaba reducida a las Ordenanzas particulares otorgadas a los Consulados para su organización y régimen interior, careciéndose de leyes generales que determinasen las obligaciones y derechos que se derivan de los actos de comercio*¹⁸⁹.

También insisten en la necesidad de la codificación mercantil GÓMEZ DE LA SERNA y REUS GARCÍA en sus comentarios al Código de comercio, dado que *la legislación mercantil de España era ambigua e incierta: podía vanagloriarse de contar entre sus compilaciones el Consulado del Mar y las Ordenanzas de Bilbao; pero ni el uno ni el otro eran códigos generales obligatorios en toda la monarquía, ni bastaban a satisfacer las nuevas necesidades que se habían creado. Los diversos consulados, que desde antiguo existían en las principales ciudades marítimas, tenían sus ordenanzas particulares; los de Barcelona y Valencia, entre otros, se regían por sus leyes y costumbres con preferencia al Código bilbaíno; y hasta el modo de proceder en las causas mercantiles, había en cada consulado cierta jurisprudencia consuetudinaria que se diferenciaba poco o mucho de las demás. Era, pues, urgente una nueva codificación que, abarcando los adelantos del siglo, reasumiese las venerables fuentes que la antigüedad nos presentaba*¹⁹⁰.

Las Cortes habían tratado de impulsar este proyecto de codificación mercantil, pero por diversas causas políticas y de oportunidad, no habían logrado nada. Así, en las Cortes de 1810 se acordó *nombrar una comisión para que redactase un proyecto de Código de comercio, sin que, por lo crítico en que se encontraba la Península, se llegara por entonces a realizar el acuerdo; y si bien el nombramiento al fin se hizo, y se participó en 1813 a las Cortes, el deseado proyecto no ha podido redactarse, por haberse declarado nulas y de ningún valor las resoluciones de aquéllas, en el Manifiesto de 4 de Mayo de 1814*¹⁹¹. Tras la Revolución de 1820 por la que volvió el poder constitucional, se nombró de nuevo una Junta para la redacción del proyecto de Código de comercio, que, como dice RUBIO¹⁹², *parece se limitó al simple acopio de materiales*. Este nombramiento fue anulado por el Decreto de 1 de octubre de 1823, que derogó todas las normas aprobadas desde la Revolución de 1820, regresando el poder absoluto.

¹⁸⁹ MARTÍNEZ-ALCUBILLA, M. (1915): *Diccionario de la Administración española. Compilación de la Novísima Legislación de España en todos los ramos de la Administración pública*. Voz “Código de comercio”, sexta edición, Madrid, pág. 560.

¹⁹⁰ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio ...* págs. 19 y ss., que seguimos para las consideraciones que se realizan a continuación.

¹⁹¹ ÁLVAREZ DEL MANZANO Y ÁLVAREZ DE RIVERA, F. (1903): *Curso de Derecho mercantil ...*, págs. 658 y 659.

¹⁹² RUBIO, J. (1969): *Introducción al Derecho Mercantil*, Barcelona, pág. 326.

En este marco formado por el poder político absoluto, *a consecuencia de una exposición elevada al rey en 29 de noviembre de 1827, por Don Pedro Sáinz de Andino, siendo Ministro del ramo Don Luis López Ballesteros, se pensó en nombrar, como así se hizo en 11 de enero de 1828, una comisión especial compuesta de magistrados jurisconsultos y de personas versadas en las prácticas y usos mercantiles, para que meditasen, preparasen y presentasen un proyecto de Código de comercio. En breve la comisión por sí, y el Sr. Andino por su parte, como encargado también de presentar el proyecto que había ofrecido en su citada exposición, elevaron sus trabajos concluidos al Ministerio; y después de examinar el rey por sí mismo uno y otro proyecto, y de oír el parecer de personas idóneas sobre la materia, prefirió el del Sr. Sáinz de Andino, aprobándole, firmándole y promulgándole como ley del reino en 30 de mayo de 1829*¹⁹³. ALCUBILLA reseña que Sáinz de Andino fue el Secretario de la Comisión creada el 11 de enero de 1829 para redactar el texto del Código. El Proyecto de Código de Comercio se entregó el 27 de mayo de 1829¹⁹⁴. Y, por su parte, SILVELA apunta que cuando Don Pedro hizo su exposición al Rey en 1828, también le notificó *que él tenía ya uno hecho*¹⁹⁵.

Los miembros de la Comisión o Junta eran: D. Bruno Vallarino, Consejero de Indias, Presidente; D. Antonio Porcel, Ministro jubilado del mismo Consejo; D. Manuel María Cambronero, Abogado de los Reales Consejos, y D. Cesáreo María Sáenz, Director en funciones de la Real Compañía de Filipinas; y D. Pedro Sáinz de Andino, Secretario¹⁹⁶.

El profesor RUBIO realizó un detallado estudio del proyecto presentado por la Comisión. Comparándolo con el de Sáinz de Andino, califica aquél como arcaico y nacionalista. Destaca la “mayor amplitud” del texto de D. Pedro en el tratamiento, entre otras cuestiones, de las compañías de comercio. Respecto al de la Comisión, subraya un aspecto básico que se comentará más adelante: se trata de un texto que opta por el sistema subjetivo, de manera que el acto de comercio es el llevado a cabo exclusivamente por comerciantes, si bien no configura la matriculación obligatoria del comerciante. Por contraposición, el proyecto de Sáinz de Andino, se decanta por el sistema objetivo del acto de comercio y exige la obligatoria inscripción registral de los comerciantes¹⁹⁷.

El Código de comercio derogó todas las leyes, ordenanzas y demás disposiciones que regulaban las materias y asuntos mercantiles¹⁹⁸. Por RD de 5 de octubre de 1829 el Código entraría en vigor en la Península el 1 de enero de 1830 y se

¹⁹³ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio...*, págs. 19 y 20.

¹⁹⁴ CRUZ ALLI ARANGUREN, J. (2005): *Derecho, Estado y Administración en el pensamiento de Sáinz de Andino*, Pamplona, pág. 121.

¹⁹⁵ AA.VV. (1881): *Lecciones de Derecho mercantil según las explicaciones de D. Luis Silvela por varios de sus alumnos en el curso de 1879 a 1880*, Madrid, pág. 31.

¹⁹⁶ RUBIO, J. (1950): *Sáinz de Andino ...*, pág. 47.

¹⁹⁷ RUBIO, J. (1950): *Sáinz de Andino ...*, págs. 115 a 117.

¹⁹⁸ Dice así la parte final del texto del Código, en lo que respecta a la legislación anterior:

y derogo todas las leyes, decretos, órdenes y reglamentos que regían hasta el día en las materias y asuntos de comercio, y especialmente todas las ordenanzas particulares de los Consulados del Reino, queriendo que se tengan para desde hoy en adelante por derogadas y revocadas, y que no produzcan efecto alguno en juicio ni fuera de él, y que sólo se observe y cumpla cuanto en este Código va prescrito y decretado.

puso en ejecución en las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas por las Reales cédulas de 1 y 17 de febrero y 26 de julio de 1832, respectivamente.

Pero faltaba organizar y unificar el procedimiento, lo cual se realizó mediante la Ley de Enjuiciamiento sobre negocios y causas de comercio, sancionada y promulgada el 24 de julio de 1830, cuyo autor fue también D. Pedro Sáinz de Andino. Esta Ley se puso en ejecución en los mismos países y en virtud de las Reales cédulas citadas en el párrafo anterior.

La valoración del Código de comercio de Sáinz de Andino, en general, ha sido bastante positiva. El marco político es, sin duda alguna, singular, si se compara con la redacción del CCom 1885 y con las más importantes leyes mercantiles posteriores al texto de 1829. En efecto, la voluntad del Monarca absoluto decidió entre dos proyectos: el redactado por la Comisión nombrada y el de Sáinz de Andino. No fueron objeto de debate parlamentario ni en el Congreso de los Diputados ni en el Senado. Fernando VII, después de solicitar consejo a *personas idóneas sobre la materia*¹⁹⁹, optó por el presentado por Sáinz de Andino.

La doctrina española de aquel momento, la posterior y la actual, reconocen, en líneas generales, la alta calidad técnica y sistemática del CCom 1829.

Siguiendo a GÓMEZ DE LA SERNA – REUS y ÁLVAREZ DEL MANZANO, cabe mencionar las siguientes valoraciones de la doctrina francesa de la época sobre nuestro Código:

PARDESSUS, a quien se le atribuyen las siguientes palabras sobre el CCom 1829: *es mucho más perfecto que todos los que habían salido a la luz hasta ahora*²⁰⁰.

Para FOUCHER, *el nuevo Código de comercio español puede ser considerado como un comentario legal de la ley francesa; pero es un buen comentario, en que, aprovechando al mismo tiempo las fuentes tan abundantes del Derecho comercial español, su autor ha sabido llevar felices modificaciones al sistema que le servía de base*²⁰¹.

SAINT-JOSEPH afirma que *el Código español llena las lagunas que el francés contiene (...) No solamente representa un progreso respecto a la codificación francesa, sino también para España y sus colonias*²⁰².

Esta buena acogida del texto legal hizo que se tomara como base para otros Códigos (por ejemplo, el de Portugal de 18 de septiembre de 1833) y que influyera en la mayor parte de los Códigos de Hispanoamérica.

¹⁹⁹ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio* ..., pág. 20.

²⁰⁰ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio* ..., pág. 22.

²⁰¹ FOUCHER, *Code de commerce et Loi de procédure sur les affaires et causes de commerce du royaume d'Espagne*. Introduction, citado por ÁLVAREZ DEL MANZANO Y ÁLVAREZ DE RIVERA, F. (1903): *Curso de Derecho mercantil* ..., pág. 666.

²⁰² ÁLVAREZ DEL MANZANO Y ÁLVAREZ DE RIVERA, F. (1903): *Curso de Derecho mercantil* ..., pág. 666.

B) PRINCIPIOS GENERALES

Cuando Fernando VII tuvo que decidir (*aconsejado por personas idóneas sobre la materia*) entre el texto presentado por la Comisión y por Sáinz de Andino, optó por el que tenía más artículos (1.219) frente al más breve (462). Este último, el de la Comisión, se basaba en principios generales que luego aplicarían los jueces²⁰³, mientras que el de Sáinz de Andino trataba de resolver las dudas y las cuestiones que pudieran ocurrir en la práctica de los negocios, lo que explica la diferencia extraordinaria que se observa en el número de los artículos²⁰⁴. Parece ser que D. Pedro había iniciado la preparación del texto desde bastante tiempo antes.

La primera cuestión que parece importante subrayar es la indudable influencia del *Code* y de la doctrina francesa en el texto de Sáinz de Andino²⁰⁵.

Esta influencia francesa se extenderá a muchas de las leyes mercantiles españolas promulgadas en el siglo XIX. Como se pone de manifiesto en otros capítulos y epígrafes, son continuas las referencias a la normativa francesa tanto en los debates parlamentarios durante la tramitación del PL 1848, como en la doctrina de la época.

Ahora bien, en el caso del CCom 1829 hay juristas de la época –y también posteriores– que detectan un elemento nacional o español claramente marcado, que conecta directamente con las Ordenanzas de los Consulados y que singulariza o diferencia el texto de nuestro Código respecto al del francés de 1807. Es representativa de esta posición la siguiente manifestación de ALVAREZ DEL MANZANO (hecha en nota a pie de página en su *Curso de Derecho mercantil*): *Es creencia general, aun entre los jurisconsultos españoles, que D. Pedro Sáinz de Andino formó su proyecto de Código sólo con el auxilio del de Francia y de las obras de los escritores franceses; sin embargo (...) se verá: por una parte, las grandes diferencias que existen, en la forma y en el fondo, entre el Código francés y el nuestro, y, por otra, las marcadas analogías que hay entre muchas disposiciones de este último y numerosas leyes de las antiguas compilaciones españolas, sobre todo del Consulado del Mar y de las Ordenanzas de Bilbao; de donde en buena lógica se infiere que Sáinz de Andino, hermanando con su buen criterio elementos franceses y españoles, hizo un Código que si no es genuinamente español, tampoco puede llamársele absolutamente francés: resalta en él el carácter distintivo de la escuela mercantil francesa, dominante entonces, pero, en mi humilde concepto, nada más*²⁰⁶.

El Código se divide en los cinco siguientes libros: I.- De los comerciantes y agentes de comercio. II.- De los contratos del comercio en general, sus formas y efectos. III.- Del comercio marítimo. IV.- De las quiebras. Y, V.- De la administración de justicia en los negocios de comercio. Este último libro fue criticado por la doctrina al

²⁰³ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio* ..., pág. 21. y ÁLVAREZ DEL MANZANO Y ÁLVAREZ DE RIVERA, F. (1903): *Curso de Derecho mercantil* ..., págs. 659 y 660.

²⁰⁴ ÁLVAREZ DEL MANZANO Y ÁLVAREZ DE RIVERA, F. (1903): *Curso de Derecho mercantil* ..., pág. 660.

²⁰⁵ Influencia que, como dice el profesor OLIVENCIA, perdura hasta la actualidad:

Si los Códigos de comercio españoles del siglo XIX recibieron la del Code de commerce de 1807, el nuevo Código mercantil sigue al modelo francés de 2000. Como éste, frente a la proliferación de leyes especiales, se plantea una “reorganización” y una “recodificación” del conjunto de la legislación mercantil. (OLIVENCIA, M. (2013): “El título preliminar de la propuesta de Código mercantil” en *RDM*, núm. 290, octubre – diciembre, pág. 13).

²⁰⁶ ÁLVAREZ DEL MANZANO Y ÁLVAREZ DE RIVERA, F. (1903): *Curso de Derecho mercantil* ..., pág. 661.

considerarlo innecesario por tratarse de *reglas de carácter procesal, propias de un Código de procedimientos*²⁰⁷.

La materia de Derecho de sociedades se encuentra regulada en el Título II *De las compañías mercantiles* del Libro II.

Como dice RUBIO²⁰⁸, los preceptos que dedica el CCom 1829 a las sociedades anónimas se enlazan directamente con el *Code*, pero el Código español acentúa la unidad funcional de todas las compañías mercantiles, regulando la sociedad anónima sin sección aparte, dentro los artículos relativos a “las diferentes especies de compañías” (Sección Primera del Título Segundo, artículos 264 a 358). La diferencia fundamental entre ambos Códigos es la autorización gubernativa.

En efecto, Sáinz de Andino mantiene el principio de libertad, de manera que sólo es necesaria la aprobación real cuando la sociedad anónima goce de algún privilegio (artículo 294 CCom 1829). En cambio, cuando la actividad de la sociedad se refiere a una explotación ordinaria, basta con la aprobación del T. de c.

El CCom 1829 conceptúa a la compañía mercantil como un contrato del comercio. El Libro II *De los contratos del comercio en general, sus formas y efectos*, regula varios contratos mercantiles; uno de ellos es el de compañía. Es importante tener presente este enfoque del Legislador, que se mantendrá durante mucho tiempo. No es éste el lugar para reflexionar sobre las distintas posturas doctrinales acerca de la naturaleza contractual de la sociedad mercantil²⁰⁹. Tampoco para comentar la ruptura de la unidad de los dos Códigos de comercio españoles con la promulgación de las dos Leyes societarias en los años 50 del siglo pasado. Pero, repetimos, la naturaleza contractual tiene su origen legal en el CCom 1829.

El Libro II del Código, se compone de doce títulos que regulan los contratos mercantiles. El Título I regula las disposiciones preliminares sobre la formación de las obligaciones de comercio. El Título II se refiere a las compañías mercantiles, estructurándose, como más adelante se verá, en cuatro Secciones. Los posteriores seis Títulos se refieren a los siguientes contratos: compraventa, permuta, préstamos, depósitos mercantiles, afianzamientos mercantiles y seguros de conducciones terrestres. El Título IX regula el contrato y letras de cambio²¹⁰. El Título X, las libranzas y los avales o pagarés a la orden. El Título XI se refiere a las cartas-órdenes de crédito. Y, por último, el Título XII recoge las disposiciones generales sobre la prescripción de los contratos mercantiles.

El Título II *De las compañías mercantiles*, comprende noventa y cinco artículos, del 264 al 358 y se divide en cuatro Secciones. La primera, *De las diferentes especies de compañías, sus efectos respectivos, y formalidades con que han de contratar* (artículos 264 al 298). La segunda, *De las obligaciones mutuas entre los socios, y modo de resolver sus diferencias* (artículos 299 al 325). La tercera, *Del término y liquidación*

²⁰⁷ ÁLVAREZ DEL MANZANO Y ÁLVAREZ DE RIVERA, F. (1903): *Curso de Derecho mercantil* ..., pág. 666.

²⁰⁸ RUBIO, J. (1950): *Sáinz de Andino* ..., págs. 157 a 159.

²⁰⁹ *Aun suponiendo que [la sociedad anónima] sea realmente un contrato...* dice GARRIGUES, J. (1950): en “Reforma, contrarreforma y ultrarreforma de la Sociedad anónima” en *RDM*, vol. IX, núm. 26, marzo - abril, pág. 184.

²¹⁰ Interesante relación conceptual entre letra de cambio (título valor) y contrato.

de las compañías de comercio (artículos 326 al 353). Y, por último, la cuarta *De la sociedad accidental o cuentas en participación* (artículos 354 al 358).

Las cuentas en participación o, también denominada *sociedad accidental*, aunque sistemáticamente Sáinz de Andino la incluyó dentro del Título regulador de las compañías mercantiles, no será objeto de nuestro estudio porque no participa de una de las características esenciales de los otros tipos societarios: no constituye una persona jurídica independiente de sus socios. En este aspecto seguimos la posición de una parte importante de la doctrina antigua, representada por el Catedrático de Derecho mercantil GONZÁLEZ HUEBRA, que ya en 1859 decía: *la compañía llamada accidental o de cuentas en participación, no es en realidad compañía de comercio*²¹¹. Y, desarrollando esta afirmación, continuaba: *esta sociedad no se parece a ninguna de las anteriores, de las que la separan diferencias muy notables, y entre otras la de que se limita a operaciones fijas y determinadas, y no se publica ni resulta de ella una persona moral distinta de los comerciantes de que está compuesta. En realidad es un negocio particular conocido solo de los que lo celebran, y algo parecido a la comisión o mandato mercantil*²¹².

En el mismo sentido, años más tarde, el Catedrático de Derecho civil, mercantil y criminal, MARTÍ DE EIXALÁ²¹³, ya derogada nuestra Ley de 1848, pero aún vigente el CCom 1829, afirmaba que la sociedad de cuentas en participación, *calificada como accidental por nuestro Código, no se cuenta en el número de las verdaderas sociedades mercantiles, sino que se la considera como anómala, pues que no se halla sujeta a las reglas generales que se prescriben para la formación y régimen de aquéllas*.

*La razón no consiste en que las cuentas en participación formen una sociedad pasajera, (...) hállese, si, al considerar que semejante sociedad, anómala, no produce un ser moral distinto de todos y cada uno de los socios. (...) en otros términos, las sociedades de comercio producen efectos respecto del público y entre los socios, mientras las cuentas en participación se limitan a producir obligaciones y derechos entre los interesados*²¹⁴.

Como consecuencia de lo anterior, el vigente CCom 1885, regula las cuentas en participación como un contrato mercantil, pero diferente de las compañías mercantiles: éstas se encontraban en el Título I del Libro II *De los contratos especiales de comercio*, y aquéllas (las cuentas en participación), en un Título diferente, el II, dentro del mismo Libro II.

²¹¹ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, pág. 126.

²¹² GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, págs. 207 y 208.

²¹³ Ramón Martí de Eixalá (1807-1857) fue Catedrático de Derecho civil, mercantil y criminal de España en la Universidad de Barcelona. La primera edición de sus “Instituciones de Derecho mercantil de España” es de 1848. En ediciones posteriores fue “notablemente adicionada y puesta al corriente de la legislación y jurisprudencia por D. MANUEL DURAN Y BAS, Catedrático de Derecho mercantil y penal de España en la Universidad de Barcelona”. A lo largo del texto se citará la quinta edición (1870) o la séptima edición (1875), haciendo referencia a su autor inicial, Martí de Eixalá.

²¹⁴ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil de España*, séptima edición, Madrid, puesta al día por DURÁN Y BAS, pág. 265. Define las cuentas en participación del siguiente modo: *es un convenio por el cual uno o más comerciantes se interesan en alguna o algunas de las operaciones que otro verifique, o se propone verificar en su nombre particular, contribuyendo con una parte del capital*.

Antes de estudiar las disposiciones comunes a los diferentes tipos de sociedades, se describe el marco establecido por los dos primeros artículos que fijan las bases de la materia.

El artículo 264 CCom 1829 recoge el concepto de compañía en los siguientes términos:

El contrato de compañía, por el cual dos o más personas se unen poniendo en común sus bienes e industria, o alguna de estas cosas, con objeto de hacer algún lucro, es aplicable a toda especie de operaciones de comercio bajo las disposiciones generales del derecho común, con las modificaciones y restricciones que establecen las leyes mercantiles.

De esta definición o concepto se pueden destacar las siguientes características.

En primer lugar, como se ha dicho antes, la compañía es un tipo de contrato (*el contrato de compañía por el cual...*).

En segundo lugar, se apunta –aunque no se recoge explícitamente– la nota básica de la creación de una persona jurídica independiente de los socios (*poniendo en común ... con objeto de hacer algún lucro*). Esta característica es básica para la institución. No se puede olvidar que en 1829 la sociedad mercantil por excelencia es la colectiva²¹⁵ en la que el patrimonio de los socios responde frente a los acreedores sociales. Por este motivo decíamos antes que se “apunta” esta nota básica, pues no se recoge expresamente en el texto transcrito, que incide sobre todo en el aspecto contractual o de relación entre los socios, más que en el resultado de ese contrato.

A este respecto, MARTÍ DE EIXALÁ, comentando en 1875 este artículo del CCom 1829 (por tanto, ya derogada nuestra Ley de 1848), dice que del concepto de sociedad mercantil del artículo 264 del CCom 1829 resultan dos efectos generales. El segundo lo describe en los siguientes términos: *del propio contrato de sociedad mercantil se origina una persona jurídica, o lo que es lo mismo, un nuevo ser moral comerciante, de todo punto distinto de las personas de los socios. Este principio, aunque no formulado en abstracto por la ley [entiéndase el CCom 1829], se encuentra sancionado por ella en todas sus consecuencias*²¹⁶.

En tercer lugar, no cabe la sociedad unipersonal, pues se trata de un contrato plurilateral entre dos o más personas.

En cuarto lugar, la compañía debe perseguir un beneficio o lucro.

En quinto lugar, los bienes e industria puestos en común deben dedicarse a toda especie de operaciones de comercio, pues si no sería una sociedad civil, pública, religiosa, etc.

²¹⁵ Comenta MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil ...*, pág. 261: *semejante sociedad viene a ser la regla general, y las demás a manera de excepciones; así pues, siempre que aparezca una sociedad mercantil, se entenderá colectiva respecto de todos los socios mientras no conste de un modo evidente lo contrario.*

²¹⁶ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil ...*, págs. 257 y 258.

Y, por último, se conceptúa como una especialidad del derecho común. Es decir, no se trata de un nuevo instituto, sino de la adecuación o adaptación de otro ya existente al ámbito mercantil. Pero pronto se establecerán tantas excepciones y restricciones que, en la práctica, será algo independiente de sus vínculos con el derecho común. Prueba de ello son las siguientes palabras de GONZÁLEZ HUEBRA, en 1859, treinta años después de la aprobación del CCom 1829 y once años posterior a nuestra Ley de 1848: *aun cuando por regla general está declarado que les son aplicables [a la sociedad mercantil] las disposiciones del derecho común, salvas las excepciones y restricciones de la ley mercantil, son tantas las modificaciones que ésta se ha visto en la necesidad de introducir, que ha dejado casi sin aplicación aquel principio, y las ha reglamentado de manera, que esta materia es hoy uno de los tratados más importantes de este derecho*²¹⁷.

El artículo 265 CCom 1829 recoge los tres tipos de compañías mercantiles. RUBIO, como se indicó anteriormente, comparando la regulación de las sociedades anónimas en Francia y en España en aquella época, pone de manifiesto el acierto de incluir dichas sociedades dentro de la regulación general de las compañías mercantiles: *mayor resulta, por tanto, la previsión del Código español [en relación al francés] que acentúa esa unidad funcional de todas las sociedades de comercio, regulando la anónima, sin sección aparte, dentro de las generales en que se distribuye el articulado relativo «a las diferentes especies de compañías» (artículos 264-358)*²¹⁸. ESTEBAN VELASCO, por su parte, indica que en España, *en el siglo XIX, a medida que maduran las condiciones e ideas sobre las que se asienta el orden capitalista (libre iniciativa económica y propiedad privada) se produce la privatización de las sociedades anónimas, pasando a ser un tipo ordinario de sociedad junto a los tradicionales del ámbito mercantil (la colectiva y la comanditaria)*²¹⁹.

La regulación de los tres tipos de compañías mercantiles es objeto de estudio de varios capítulos y epígrafes. Ahora sólo se reseñan los artículos del CCom 1829 que los regulan.

Sociedades colectivas:

Artículo 265 CCom 1829. *Puede contraerse la compañía mercantil: 1. En nombre colectivo bajo pactos comunes a todos los socios, que participen en la proporción que hayan establecido, de los mismos derechos y obligaciones, y esta se conoce con el nombre de compañía regular colectiva.*

Las compañías colectivas, como se ha dicho anteriormente, son el tipo societario más común o general en el origen de las empresas asociativas mercantiles. Se caracterizan porque los socios se encuentran obligados solidariamente a las resultas de las operaciones que hagan a nombre y por cuenta de la sociedad (artículo 267 CCom

²¹⁷ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho* ..., pág. 125.

²¹⁸ RUBIO, J. (1950): *Sáinz de Andino* ..., pág. 157.

²¹⁹ ESTEBAN VELASCO, G. (1994): "Sociedad anónima: principales aspectos y problemas de su regulación" en *RdS*, núm. 3, pág. 135.

1829) y todos tienen poder recíproco de obligar a los otros, *viniendo a ser procuradores mutuos en los negocios, objeto de la sociedad*²²⁰.

Sociedades comanditarias:

Artículo 265 CCom 1829. *Puede contraerse la compañía mercantil: 2. Prestando una o varias personas los fondos para estar a las resultas de las operaciones sociales, bajo la dirección exclusiva de otros socios que los manejen en su nombre particular: esta se titula compañía en comandita.*

Los socios gerentes responden solidariamente de los resultados de todas sus operaciones (artículo 270 CCom 1829). En cambio, la responsabilidad de los socios comanditarios en las obligaciones y pérdidas de la compañía se limita a los fondos que pusieron o se comprometieron a poner en la comandita (artículo 273 CCom 1829). Para estos últimos socios, *su objeto es interesar con capitales en una compañía a los que no quieren aparecer como socios, ni tomar sobre si una responsabilidad indefinida*²²¹. El capital de las compañías comanditarias puede dividirse en acciones y estas subdividirse en cupones (artículo 275 CCom 1829).

Sociedad anónima:

Artículo 265 CCom 1829. *Puede contraerse la compañía mercantil: 3. Creándose un fondo por acciones determinadas para girarlo sobre uno o muchos objetos, que den nombre a la empresa social, cuyo manejo se encargue a mandatarios o administradores amovibles a voluntad de los socios, y esta compañía es la que lleva el nombre de anónima.*

Los socios no responden de las obligaciones de la sociedad anónima, sino sólo hasta lo que se hayan comprometido a aportar (artículo 278 CCom 1829). Sólo el patrimonio social es responsable de las obligaciones contraídas por los legítimos administradores de dichas compañías (artículo 279 CCom 1829). La sociedad anónima se denomina así porque *no lleva el nombre de ningún socio y carece de razón social designándose sólo por su objeto*²²².

De estos tres tipos societarios, la sociedad colectiva regular era la más frecuente y la que mejor caracterizaba los intereses empresariales. *Es como el tipo principal, pudiendo las demás considerarse como excepciones suyas*²²³.

²²⁰ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio...*, pág. 98, quienes añaden: *suelen formarse entre pocas personas y puede decirse que la consideración y aprecio en que cada socio tiene a los demás, es la causa principal que le mueve a contraer sociedad.*

²²¹ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio...*, pág. 99.

²²² Ídem. También dicen que el público y los que con la sociedad contratan busquen la garantía del cumplimiento de las obligaciones en el capital social, no en la responsabilidad de personas determinadas. (...) es una persona jurídica representada por gerentes, directores o administradores que son considerados como simples mandatarios. El objeto de las sociedades anónimas es entrar en las grandes empresas reuniendo capitales que de otro modo difícilmente podrían realizarse.

²²³ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, pág. 126.

C) DISPOSICIONES COMUNES A LOS DIFERENTES TIPOS DE SOCIEDADES MERCANTILES

Una vez comentados los artículos 264 y 265 CCom 1829 en los que se establece el marco básico del contrato de compañía, se analiza, en primer lugar, las disposiciones comunes a las sociedades colectivas regulares, en comandita y anónimas, sin entrar en detalle sobre las dos primeras. En el siguiente epígrafe se estudiará el régimen jurídico de las sociedades anónimas según el CCom 1829.

1. Formalidades

Siguiendo la exposición de GONZÁLEZ HUEBRA²²⁴, es condición necesaria para la existencia de los tres tipos societarios, que exista un patrimonio o fondo y personas que lo administren. Como, además, un efecto básico del contrato de sociedad es la creación de una nueva persona jurídica independiente de sus socios, el nuevo empresario o comerciante debe estar representado por unos administradores. Por estos motivos, es necesario que las sociedades mercantiles se constituyan con unas formalidades especiales, que son diferentes a los que, por regla general se exigen a los demás contratos y, además, deben disponer de un nombre que las identifique y diferencie.

a) Constitución de las compañías mercantiles

El primer requisito formal es el otorgamiento de escritura pública para la constitución de cualquier sociedad mercantil (artículo 284 CCom 1829). Si los fundadores de la compañía hubieran firmado un contrato privado, será válido a los efectos de obligarles al otorgamiento de la escritura pública, lo cual se hará necesariamente antes de que comiencen las operaciones de la sociedad (artículo 285 CCom 1829).

En conexión con este principio básico, *los socios no pueden hacer pactos algunos reservados, sino que todos han de constar en la escritura social* (artículo 287 CCom 1829). Por tanto, no pueden oponer el contenido de ningún documento privado al contenido de la escritura social (artículo 288 CCom 1829). Cualquier modificación del contrato de sociedad *deberá formalizarse con las mismas solemnidades prescritas para celebrarlo* (artículo 289 CCom 1829).

El contenido mínimo de la escritura de fundación de la compañía mercantil se encuentra regulado en el artículo 286 CCom 1829²²⁵.

²²⁴ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, pág. 127.

²²⁵ Dicho contenido es el siguiente:

1. Nombres, apellidos y domicilios de los otorgantes.
2. Razón social o denominación de la sociedad.
3. Designación de los socios que tienen a su cargo la administración de la compañía y la utilización de su firma.
4. El capital que aporta cada socio en dinero efectivo, crédito o efectos, con la expresión que se dé a estos o de las bases para realizar su valoración.
5. La proporción de beneficios y pérdidas que corresponde a cada socio capitalista y a los industriales, si existiesen
6. Duración de la sociedad, que ha de ser necesariamente por un tiempo fijo o para un objeto determinado.
7. Ramo de comercio, fábrica o navegación sobre el que ha de operar la compañía en el caso de que ésta se establezca limitadamente para uno o varios objetos sociales.

b) *Inscripción registral de las compañías mercantiles*

Una vez constituida la sociedad mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, era necesario cumplir con otra formalidad, en este caso relativa a la publicidad: la inscripción registral.

La necesidad de inscripción registral de los comerciantes se recoge en el artículo 11 CCom 1829. Además, el artículo 22 CCom 1829 estableció que en cada capital de Provincia se debía establecer un RPGC, en el cual debían presentarse los documentos en el plazo máximo de quince días desde su otorgamiento (artículo 26 CCom 1829). Además, se debía enviar una copia de cada asiento realizado en el registro general al T. de c. del domicilio o al juzgado real ordinario, donde no hubiera T. de c., para que la fijara en el estrado ordinario de sus audiencias y se insertara en el registro particular que cada tribunal debía llevar de estos actos (artículo 31 CCom 1829).

Si la compañía tuviera casas de comercio situadas en otras localidades, también se cumplirán las formalidades previstas en los citados artículos 22 y 31 CCom 1829 en los registros generales de las Provincias afectadas y se publicarán en el domicilio respectivo de cada establecimiento²²⁶ (artículo 291 CCom 1829).

Las escrituras posteriores a la de fundación en las que se reforme, amplíe o prorrogue ésta, así como la escritura de disolución antes del tiempo establecido para la compañía y cualquier convenio o decisión que produzca la separación de algún socio, así como la rescisión o modificación del contrato de sociedad, están sujetas a las mismas formalidades de inscripción que las establecidas en los artículos 22 y 31 CCom 1829 (artículo 292 CCom 1829).

En este marco regulatorio, el artículo 290 CCom 1829 establece el contenido mínimo del asiento registral de las compañías colectivas y comanditarias²²⁷, dado que el citado artículo 11 del mismo cuerpo legal se refería fundamentalmente a las personas físicas.

En cuanto a las sociedades anónimas, como más adelante se comenta, el artículo 293 CCom 1829, establece que *es condición particular de las compañías anónimas que las escrituras de su establecimiento y todos los reglamentos que han de regir para su*

8. Las cantidades que se atribuyan a cada socio anualmente para sus gastos particulares y las compensaciones que, en caso de exceso, hayan de recibir los demás socios.

9. La sumisión a arbitraje en caso de discrepancias entre los socios, expresando el modo de nombrar los árbitros.

10. La forma en que se ha de dividir el patrimonio social, una vez disuelta la compañía.

11. Todos los demás objetos sobre los que los socios quieran establecer pactos especiales.

²²⁶ A este respecto, comentan GÓMEZ DE LA SERNA Y REUS Y GARCÍA (1863): que *esta obligación es sólo referente a los puntos en donde tenga la sociedad un domicilio social, mas no en aquellos donde únicamente posea relaciones con terceros. Código de Comercio...*, pág. 105.

²²⁷ Dicho contenido es el siguiente:

1. Fecha de la escritura y domicilio del escribano ante quien se otorgó.
2. Nombres, domicilios y profesión de los socios que no sean comanditarios.
3. La razón o título comercial de la compañía.
4. Los nombres de los socios autorizados para administrar la compañía y usar de su firma.
5. Las cantidades entregadas o que se hubieren de entregar por acciones o en comandita.
6. La duración de la sociedad.

administración y manejo directivo y económico, se han de sujetar al examen del tribunal de comercio del territorio en donde se establezca y sin su aprobación no podrán llevarse a efecto. Además, en la inscripción y publicación de las sociedades anónimas, se insertarán a la letra los reglamentos aprobados por la autoridad correspondiente para su régimen y gobierno (artículo 295 CCom 1829).

2. Las obligaciones mutuas entre los socios y modo de resolver sus diferencias

La Sección II del Título II del CCom 1829 regula las obligaciones recíprocas de los socios y el modo de resolver sus diferencias. Siguiendo el método establecido anteriormente, se comenta en este epígrafe las disposiciones comunes a los tres tipos de compañías mercantiles, sin estudiar con detalle ninguno de ellos. En el siguiente epígrafe se comentará el régimen de las anónimas.

El principio fundamental en cuanto a las obligaciones recíprocas entre los socios es la libertad de pactos. El régimen de las sociedades mercantiles se ajustará a los pactos convenidos en la escritura del contrato, y en cuanto por ella no se haya prescrito y determinado, a las disposiciones del Código (artículo 299 CCom 1829).

Se destaca la relevancia del contenido de este artículo 299, dado que asume la doctrina liberal sobre la regulación de las compañías mercantiles. La libertad de pactos entre los socios se consagra en un marco de independencia de estas sociedades respecto al Poder Ejecutivo y Legislativo, sin olvidar que las sociedades anónimas no se encuentran excluidas de esta situación. Los pactos entre los socios, si son lícitos, son ley para ellos. Las materias no reguladas en la escritura fundacional y sus posteriores modificaciones, se regirán por lo previsto en el CCom 1829.

Esta doctrina liberal debe matizarse en lo que se refiere a la libertad de forma, puesto que, como se ha visto en el epígrafe anterior, el CCom 1829 exige taxativamente la escritura pública para la constitución de las compañías mercantiles, así como para cualquier modificación de los acuerdos fundacionales.

Los artículos de esta Sección II no siguen un orden sistemático, aunque están agrupados por materias afines. Se describen a continuación siguiendo la estructura del texto legal.

El primer tema se refiere a las aportaciones de los socios al capital social. Si los socios no han previsto el procedimiento para resolver determinadas situaciones de conflicto entre ellos, se aplicarán determinadas reglas²²⁸.

²²⁸ Que son las siguientes:

- En caso de no aportar el capital en la fecha prevista, la sociedad puede proceder ejecutivamente contra los bienes del socio moroso para hacer efectiva la aportación o rescindir el contrato con dicho socio, reteniendo los intereses que tenga en la masa social en la forma prevista para la liquidación parcial de la compañía (artículo 300 CCom 1829).
- Valoración de las aportaciones no dinerarias. En caso de que las escrituras societarias no prevean nada, se realizará por peritos que nombren el socio y la compañía, según los precios de la plaza, corriendo su variación posterior por cuenta de la compañía (artículo 301 CCom 1829).
- Si la aportación consiste en la cesión de créditos a favor del socio, no se considerará realizada la aportación hasta que la sociedad los haya cobrado. En caso de no hacerse efectivos, después de la ejecución de los bienes del deudor o bien si el socio no conviniere en hacerla, estará obligado a

Respecto al derecho de información de los socios, el CCom 1829 diferencia su contenido según el tipo societario²²⁹.

Las obligaciones asumidas por los socios en nombre propio, no afectan a la sociedad, dado que se trata de una persona jurídica independiente, aunque pueda existir una confusión patrimonial según el tipo de socio (artículos 311 y 312 CCom 1829).

Arbitraje y resolución de disputas. Se trata de unos artículos de derecho imperativo, pues el artículo 323 CCom 1829 establece que toda diferencia o disputa entre los socios será resuelta por jueces árbitros, háyase o no estipulado en el contrato de sociedad. Los jueces árbitros deberán adecuarse a lo previsto en el artículo 1219 CCom 1829 en relación a la instrucción y sustanciación del procedimiento (artículo 325 CCom 1829). El artículo 1219 CCom 1829 se remite a un futuro Código de enjuiciamiento, rigiendo en el *interim* una ley que el Rey promulgará (como así lo hizo el 24 de julio de 1830 con la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas mercantiles).

Sobre el arbitraje societario, GÓMEZ DE LA SERNA y REUS Y GARCÍA²³⁰ aportan unas interesantes consideraciones prácticas:

- El arbitraje es forzoso –imperativo– en los negocios mercantiles (no sólo los societarios). Ahora bien, no son competencia de los jueces árbitros todas las cuestiones que pueden suscitarse en materia mercantil: lo son las que nacen de la inteligencia y consecuencias de un contrato social, pero no las materias relativas a la naturaleza y existencia de la misma sociedad, que deben ser resueltas por el tribunal competente. Si los árbitros se excediesen de su competencia, podrá interponerse el recurso de nulidad previsto en los artículos 262 y 292 de la Ley de enjuiciamiento mercantil.
- En caso de que unos socios se opongan a nombrar árbitros y otros quieran ejercitar el derecho a nombrarlos, el nombramiento de oficio por la autoridad judicial se hará sobre los primeros, pudiendo los segundos designar los que estimen conveniente.

responder del importe de dichos créditos hasta la cifra de capital que se comprometió a aportar (artículo 302 CCom 1829).

- Si el socio retrasa su aportación comprometida al capital según lo previsto en el contrato de sociedad o, en caso de no haber fijado dicho plazo, desde que se estableció la caja, deberá abonar a la sociedad el interés corriente del dinero que hubiere dejado de entregar a su debido tiempo (artículo 303 CCom 1829).

²²⁹ En el siguiente sentido:

- En ninguna compañía mercantil se puede impedir a los socios el examen de todos los documentos comprobantes de los balances que se formen para manifestar el estado de la administración social. En las sociedades establecidas por acciones, cabe derogar esta regla general por pacto expreso en el contrato de sociedad o en sus reglamentos, que determinarán el modo particular de hacer este examen, sujetando a su resultado la mayoría de los accionistas (artículo 310 CCom 1829).
- En las compañías en comandita y en las anónimas no pueden los socios comanditarios ni los accionistas hacer examen ni investigación sobre la administración social, sino en los plazos y bajo la forma que establezcan los contratos y reglamentos de la compañía (artículo 309 CCom 1829).

²³⁰ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio...*, pág. 111.

- Sin perjuicio del régimen previsto en los artículos 323 a 325 CCom 1829, pueden los socios otorgar poder a los jueces árbitros para que juzguen según las reglas de equidad, en cuyo caso actuarán como *amigables componedores*.

3. Disolución y liquidación

La rúbrica de la Sección III del Título II del Código es: “Del término y liquidación de las compañías de comercio”. Se regulan, por tanto, dos materias: la disolución, a la que el texto legal se refiere como “término” y la liquidación. Ambos contenidos se glosan a continuación siguiendo el texto legal y los comentarios de GONZÁLEZ HUEBRA²³¹ adaptando, por razones de necesidad, algunas expresiones terminológicas.

Esta Sección III fue objeto de encendido elogio por parte del jurista francés Mr. Pardessus, quien al poco de ser promulgado el Código, escribió el siguiente comentario: *El Título de las compañías, aunque muy semejante al código francés en lo que toca a las reglas fundamentales de las cuatro sociedades, colectiva, en comandita, anónimas y de participación, se conoce que han trabajado mucho sobre las liquidaciones, que es precisamente lo que pasa en silencio en nuestro Código [el francés] y en lo que nuestro tribunales encuentran mayor dificultad*²³². GIRÓN fue crítico con esta afirmación que nuestra Doctrina se encargó de repetir, y afirma que *no es cierto que el Código del 29 sea sólo nuevo en lo referente a la materia de liquidaciones respecto del francés, como viene repitiéndose al transcribir las opiniones encomiásticas de Pardessus por nuestra doctrina; también es nuevo respecto del francés la Sección II “de las obligaciones mutuas entre los socios y el modo de resolver sus diferencias”*²³³.

a) Disolución (rescisión parcial y disolución total)

Esta materia la trata el Código —en coherencia con su sistemática— desde la perspectiva de los contratos mercantiles. Éstos se extinguían por el medio ordinario del pago o prestación de lo debido, o bien por causas extraordinarias. Pero en el caso de las compañías, el CCom 1829 estableció exclusivamente la rescisión, que se refiere a la separación o exclusión de un socio sin disolver la sociedad.

El CCom 1829 establece dos tipos de disolución: la total, regulada en el artículo 329, cuyas características son similares a la disolución actual; y la rescisión parcial del contrato de la sociedad (artículo 326) por la que la compañía continúa en su existencia, pero uno o varios socios se desvinculan de la sociedad.

La disolución es la *conclusión del contrato*²³⁴, que supone la desaparición de la persona jurídica, a la que sigue necesariamente la división y distribución del patrimonio social (integrado por el fondo común que se creó en el momento de la constitución, con el aumento o disminución consecuencia de la actividad de la sociedad).

La rescisión es la novación del contrato de sociedad, consecuencia de la exclusión de algún socio por la que dicho contrato queda ineficaz para el excluido y

²³¹ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, págs. 195 y ss.

²³² Citado por GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio...*, pág. 23.

²³³ GIRÓN TENA, J. (1954): “Sobre los conceptos de sociedad en nuestro Derecho” en RDP, pág. 397.

²³⁴ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, pág. 196.

subsistente para los demás socios. Como aclara GONZÁLEZ HUEBRA, *en realidad no es un modo de rescindir el contrato, sino de modificarlo, porque la obligación primitiva de los demás socios queda como antes, y tampoco desaparece la persona moral creada a su formación*²³⁵. Por lo tanto, la expresión del artículo 326 CCom 1829 (p)uede rescindir el contrato de compañía mercantil parcialmente ...” era y es equívoca, pero es la que utiliza el texto del CCom 1829.

Las causas para rescindir parcialmente el contrato de compañía mercantil se encuentran reguladas en el artículo 326 CCom 1829²³⁶.

Respecto a la disolución de las compañías, el artículo 329 CCom 1829 establece que las compañías mercantiles se disuelven totalmente por las causas siguientes:

1ª Cumplimiento del término fijado en el contrato de sociedad o terminada la empresa que fue objeto especial de su formación. Se preguntan GÓMEZ DE LA SERNA y REUS Y GARCÍA a este respecto: *¿Cuándo se entenderá disuelta la sociedad si se fija un término de duración y conjuntamente se señala un objeto para las operaciones sociales, por ejemplo si se formase una compañía para fabricar un objeto en un año? Parécenos bien el modo de resolver esta cuestión adoptado por el Sr. Vicente y Carabantes. Como el objeto principal de la sociedad es la fabricación del objeto, parece que hasta que esto no se realice, se entenderá que aquélla continúa, aun cuando haya expirado el plazo que se marcara. Sin embargo, cuando el motivo esencial de la compañía sea el plazo y no el objeto, la cuestión propuesta se resolverá en sentido contrario. Es menester para cada caso particular tener presentes las circunstancias y cláusulas de la escritura social*²³⁷.

2ª Por la pérdida entera del capital social. *Esto debe entenderse cuando los socios traspasan la propiedad a la compañía; mas cuando los socios sólo ceden su uso, basta que se pierda el capital de uno de los socios para que se entienda disuelta la sociedad, porque entonces no tenía éste interés en ella*²³⁸.

²³⁵ Ídem.

²³⁶ El artículo 326 CCom 1829 establecía las siguientes causas:

1ª Cuando un socio usa de los capitales comunes y de la firma social para negocios por cuenta propia.

2ª Desempeño de funciones de administración por parte del socio que no se encuentre autorizado a ello por los pactos del contrato de sociedad.

3ª Si algún socio administrador cometiere fraude en la administración o contabilidad de la compañía.

4ª No ingresar en la caja común el capital que cada uno estipuló en el contrato de sociedad, después de haber sido requerido a hacerlo.

5ª Ejecución por un socio en nombre propio de operaciones que no le sean lícitas con arreglo a lo dispuesto en el Código de comercio.

6ª Ausencia del socio que está obligado a prestar oficios personales a la sociedad, si habiendo sido requerido para ello, no los realizare, salvo que acreditare una causa justa que le impidiere hacerlos temporalmente.

De estas seis causas, sólo la cuarta se aplica a los socios de la sociedad anónima y a los comanditarios.

²³⁷ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio...*, pág. 113.

²³⁸ Ídem.

3ª Por la muerte de uno de los socios, si no contiene la escritura social pacto expreso para que continúen en la sociedad los herederos o que ésta subsista entre los socios sobrevivientes.

4ª Por la demencia u otra causa que produzca la inhabilitación de un socio para administrar sus bienes.

5ª Por la quiebra de la sociedad o de cualquiera de sus socios.

6ª Por la simple voluntad de uno de los socios, cuando la sociedad no tenga un plazo o un objeto fijo.

El artículo 330 CCom 1829 establece que sólo se pueden aplicar las causas 1ª y 2ª a las sociedades por acciones. GONZÁLEZ HUEBRA y GÓMEZ DE LA SERNA y REUS Y GARCÍA lo matizan en el siguiente sentido: se aplican a todas las sociedades mercantiles las causas 1ª, 2ª, 5ª (sólo lo referente a la quiebra de la sociedad); y a las sociedades colectivas y comanditarias cuyo capital no esté dividido en acciones, las causas 3ª, 4ª, 5ª (exclusivamente la quiebra de algún socio) y 6ª.

Señala GONZÁLEZ HUEBRA dos efectos principales de la disolución total de la sociedad. En primer lugar, la extinción de la persona jurídica, de manera que no se pueden realizar nuevas negociaciones a nombre de la sociedad, ni usar su nombre o firma sin añadir *en liquidación*; y el cese de todas las atribuciones que competían a los representantes de la sociedad. En segundo lugar, la liquidación y distribución del patrimonio social.

Después de establecer las causas de rescisión parcial o disolución total de las compañías, el Código recoge el siguiente régimen:

- Las compañías mercantiles se disuelven por el cumplimiento del término para el que hayan sido establecidas. La voluntad presunta de prórroga de la actividad está excluida expresamente por el artículo 331 CCom 1829. Si los socios quieren continuar en compañía, deberán renovarla por un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para el establecimiento de las sociedades.
- El socio que se separe voluntariamente de la sociedad o promueva su disolución, no puede impedir que se concluyan las negociaciones pendientes del modo más conveniente para los intereses comunes. Una vez concluidas, se procederá a la división del patrimonio social (artículo 334 CCom 1829).
- La disolución de las compañías mercantiles por cualquier causa diferente a la expiración del término para el que fueron constituidas, no surtirá efecto en perjuicio de terceros, hasta que se inscriba en el registro mercantil de la provincia y se publique en los tribunales donde tenga la sociedad su domicilio o establecimiento fijo (artículo 335 CCom 1829).

b) Liquidación

Los artículos del CCom 1829 que regulan las operaciones de liquidación, se aplican en su mayoría a todos los tipos de compañías mercantiles. Por este motivo, se

hace una descripción más detallada en este epígrafe, pues, por un lado, muchos artículos son aplicables a las sociedades anónimas y, por otro lado, nuestra Ley de 1848 no deroga ni sustituye el régimen de la liquidación de las compañías anónimas, siendo por tanto, aplicable a este tipo societario las normas previstas en el CCom 1829.

El régimen de liquidación se encuentra recogido en los artículos 336 a 353 CCom 1829. El principio general establece que se seguirán las normas previstas en la escritura de la sociedad para la liquidación y división del haber social. En caso de que no se hubiera estipulado nada, se aplicarán las reglas previstas en los artículos 337 y ss., CCom 1829.

Una vez disuelta totalmente la sociedad, cesa la representación de los administradores para celebrar nuevos contratos o contraer nuevas obligaciones y quedan limitadas sus facultades en calidad de liquidadores a percibir los créditos de la sociedad, extinguir las obligaciones conforme vayan venciendo y a realizar las operaciones que se encuentren pendientes (artículo 337 CCom 1829).

En cuanto al nombramiento de los liquidadores, establece el artículo 338 CCom 1829, que si no se opone ningún socio, los administradores continuarán encargados de las operaciones de liquidación. En caso contrario, es decir, si algún socio se opusiera, tendrán que nombrar dos o más liquidadores de dentro o de fuera de la compañía, para lo cual, se celebrará sin dilación junta de socios²³⁹, convocada con tiempo suficiente para que los socios ausentes puedan concurrir por sí mismos o por apoderado.

Balance inicial de la liquidación. Los socios administradores (nótese que no son los liquidadores) deben presentar dentro de los quince días posteriores a la fecha de la disolución el inventario y balance del caudal común, cuyo resultado pondrán en conocimiento de los socios. En caso de que no lo hicieran, se podrá establecer, a instancia de cualquier socio, una intervención sobre la gestión de los administradores, a cuya costa harán los interventores el balance (artículo 339 CCom 1829).

GONZÁLEZ HUEBRA señala las siguientes atribuciones de los liquidadores²⁴⁰:

- Concluir los negocios pendientes: cobrar los créditos y pagar las deudas, incluidas las de los socios si hubieran celebrado préstamos con la sociedad o sean acreedores de la sociedad por otros conceptos.
- Practicar la división de los fondos liquidados, conforme a lo previsto en la escritura social o, en su defecto, en proporción al interés que cada socio tenga en la compañía.
- Entregar a cada socio su cuota de liquidación. *¿Y podrán los liquidadores vender los bienes o efectos de la compañía? La Ley no les da expresamente esta facultad, ni tampoco se la prohíbe; los autores dicen, y a nosotros nos parece*

²³⁹ El Código no expresa el plazo dentro del cual debe celebrarse esta junta; manda que sea sin dilación, pero previene también que se dé a los ausentes el tiempo necesario para que puedan concurrir por sí o por medio de sus representantes. Nosotros creemos que debe ser el de los 15 días, dentro de los que debe presentarse a los socios el resultado del inventario y balance prevenido en el artículo 339, que de otro modo no puede tener cumplimiento. GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, pág. 203.

²⁴⁰ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, pág. 204.

también, que la enajenación corresponde a la Junta general, que es la que debe acordar y autorizarlos para que la ejecuten, aun cuando sean mercancías o efectos fungibles, y con más razón si son bienes raíces. En el mismo sentido se expresan GÓMEZ DE LA SERNA y REUS Y GARCÍA²⁴¹, al afirmar que el artículo 342 CCom 1829 no autoriza a los liquidadores a la venta *de los efectos de la sociedad*, sin hacer distinción alguna.

Estos comentarios indican la importancia que debían tener en aquella época las decisiones de la junta en materia de liquidación, al asumir la competencia para la enajenación y disposición de bienes, quedando los liquidadores con una función más bien de simple ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

En caso de que los liquidadores no sean los administradores, se entregarán a aquéllos el haber de la sociedad por el inventario y el balance que se hubiere formado, dando previamente fianzas idóneas en cantidad que cubra el haber que se ponga a su disposición (artículo 340 CCom 1829).

Los liquidadores tienen la obligación de informar a cada socio con una periodicidad mensual del estado de la liquidación. Si no lo hicieran, pueden ser destituidos (artículo 341 CCom 1829). Por su parte, los socios tienen el derecho de solicitar a los liquidadores la información que les interese sobre el estado de la liquidación y de las operaciones pendientes de la sociedad.

Si en el patrimonio social existen bienes, muebles o efectos divisibles, *se pueden adjudicar a cada socio en virtud de su participación en la sociedad. Si son inmuebles se adjudicarán en partes intelectuales, o designando la cantidad que deba corresponder a cada uno hasta completar el valor de su tasación, cuando no sea posible adjudicar la finca entera a uno solo. Si son créditos, se suelen clasificar antes en ciertos y dudosos, adjudicando estos últimos por suerte. El derecho de continuar usando de las marcas y señales que usaba la compañía, aunque objeto divisible, se deja comúnmente al que la fundó o al que ha tenido en ella mayores capitales*²⁴².

También serán responsables los liquidadores frente a los socios de cualquier perjuicio o daño al patrimonio social que sea consecuencia de una actuación fraudulenta o por grave negligencia en el desempeño de sus cargo, el cual no les autoriza, como se ha dicho anteriormente, para realizar transacciones ni compromisos sobre los intereses sociales, a no ser que se les hubiera concedido expresamente facultades por los socios (artículo 342 CCom 1829).

Una vez realizadas las operaciones de liquidación, se formulará una propuesta de división del haber social, según la calificación que realicen los liquidadores o la junta de socios (cualquiera de ellos podrá exigir que se celebre para tratar esta cuestión). Esta propuesta se verificará y ejecutará por los liquidadores dentro del término que la junta establezca (artículo 343 CCom 1829). Practicada la división, se comunicará a los socios, quienes en el plazo de 15 días la aceptarán o impugnarán (artículo 344 CCom 1829). La impugnación se resolverá por jueces árbitros, que nombrarán las partes en el plazo de 8 días a contar desde la comunicación de la impugnación. En caso de no realizarse este nombramiento, lo hará de oficio el tribunal competente (artículo 345 CCom 1829).

²⁴¹ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio...*, pág. 116.

²⁴² GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, pág. 206.

Respecto a la cuota de liquidación, ningún socio podrá exigir su entrega antes de que se hayan extinguido todos los créditos pasivos de la compañía, o se consigne su importe, si la entrega no se pudiese realizar al contado (artículo 347 CCom 1829), si bien no sería necesario esperar a la finalización de todas las operaciones de liquidación, pues *una vez pagadas o depositado el importe de las deudas, el sobrante es un capital ocioso, que debe distribuirse inmediatamente para que sus dueños puedan utilizarlo, sin perjuicio de hacer lo mismo con los demás fondos, según se vayan recaudando*²⁴³.

Los préstamos de los socios a la sociedad deben ser satisfechos como acreedores de la sociedad, antes de proceder a la distribución efectiva de la cuota de liquidación (artículo 348 CCom 1829).

Los libros y papeles de la sociedad se conservarán bajo la responsabilidad de los liquidadores, hasta la total liquidación de la compañía y del pago de todos los que bajo cualquier título sean interesados en su haber (artículo 353 CCom 1829). Estos libros son de dos tipos: los de comercio, que toda compañía debe llevar según lo previsto en los artículos 32, 33, 40, 48 y 57 CCom 1829; y los libros de actas en los que se recogen los acuerdos de la sociedad²⁴⁴.

D) RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS (Y COMANDITARIAS POR ACCIONES).

Una vez expuesto el régimen general aplicable a las compañías mercantiles, se centra el estudio en las sociedades anónimas, haciendo referencia también a las comanditarias por acciones. Este epígrafe tiene una especial relevancia, pues nuestra Ley de 1848 deroga, reforma y modifica los artículos del CCom 1829 referidos a las compañías por acciones. Se trata, por tanto, de conocer el régimen establecido por el Código, que fue la causa (para algunos) o el medio (para otros) que permitió la utilización fraudulenta y especuladora de las sociedades anónimas desde 1829 hasta que la Ley de 1848 terminó con dichos abusos, aunque incurriendo en otros, también criticables.

El punto de partida del CCom 1829 se sitúa en la caracterización de las sociedades mercantiles como un contrato mercantil, el contrato de sociedad. Este fundamento no puede perderse de vista para comprender con exactitud el concepto de sociedad por acciones para el Legislador del siglo XIX. No es este el lugar apropiado para estudiar la evolución del concepto de sociedad mercantil. Hoy en día, si bien es claro que la sociedad supone un acuerdo de voluntades entre varias partes (excepto para la sociedad unipersonal), su caracterización como contrato se ha diluido, dejando paso a una mayor consideración –no en términos absolutos– de la nueva persona jurídica resultante sometida al estatuto del empresario.

La evolución de los textos legales reguladores de las sociedades mercantiles pone de manifiesto lo que se acaba de expresar. El CCom 1829 encuadra sistemáticamente las sociedades mercantiles dentro del Libro II sobre los contratos mercantiles. Así lo hacía también el CCom 1885, pero a partir de las leyes societarias de

²⁴³ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho...*, pág. 205.

²⁴⁴ GÓMEZ DE LA SERNA, P. y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio...*, pág. 117.

los años 50 del siglo pasado, desaparece la referencia explícita –que no implícita- a la caracterización contractual.

En este marco, la compañía anónima es uno de los tipos societarios regulados por el CCom 1829. Sus características esenciales se describen en el apartado 3 del artículo 265 (texto continuamente citado por la doctrina y por los Diputados y Senadores durante los debates del PL 1848):

Puede contraerse la compañía mercantil:

(...)

3. Creándose un fondo por acciones determinadas para girarlo sobre uno o muchos objetos, que den nombre a la empresa social, cuyo manejo se encargue a mandatarios o administradores amovibles a voluntad de los socios, y esta compañía es la que lleva el nombre de anónima.

El párrafo transcrito aporta alguno de los elementos esenciales del concepto, pero es claramente incompleto. Estos elementos, además, son importantes para el Legislador, puesto que son características diferenciadoras de los otros tipos societarios.

La primera nota recogida por el artículo 265.3 CCom 1829 es la constitución de un “fondo”, es decir, la aportación al capital social, que tiene como contraprestación las acciones emitidas por la sociedad y suscritas por los socios. En los otros tipos societarios, al fondo o capital no le corresponden acciones, sino la participación del socio aportante en el fondo común.

La segunda nota se refiere al objeto social, que puede consistir en una o varias actividades empresariales. En sus orígenes, las sociedades anónimas se constituían para empresas determinadas (bancos, ferrocarriles, obras públicas, seguros, etc.), pero no para realizar cualquier acto de comercio. El objeto social amplio o indeterminado estaba previsto para las sociedades colectivas y, en ellas, se prohibía a los socios realizar actos de comercio por cuenta propia (artículos 313 y 314 CCom 1829).

La tercera nota es la denominación social, que debe hacer referencia al objeto social aprobado. Esta característica diferenciaba a las sociedades anónimas de las colectivas, que debían tener como razón social el nombre de todos o alguno de los socios (artículo 266 CCom 1829).

Por último, la cuarta nota menciona la cualidad de la amovilidad de los administradores sociales. También se trata de una característica diferenciadora de la sociedad colectiva y de la comanditaria, puesto que en estos últimos casos, el socio colectivo (no el comanditario) representa a la sociedad frente a terceros y no puede ser removido de su cargo.

El CCom 1829 complementa la regulación de las sociedades por acciones con otros artículos, que se comentan a continuación²⁴⁵. Dos advertencias antes de entrar en

²⁴⁵ Se cita en este epígrafe los artículos del CCom 1829 de manera textual, a diferencia de lo que se ha hecho en los epígrafes anteriores sobre las compañías mercantiles en general, pues nos parece más oportuno recoger la expresión exacta de los artículos reguladores de las sociedades por acciones.

la materia. En primer lugar, el régimen legal de las sociedades por acciones regulado por el CCom 1829 no es solamente el que a continuación se describe, pues ha de tenerse en cuenta que gran parte del régimen general expuesto en el epígrafe anterior se aplica a todos los tipos societarios (principio de libertad de pactos, valoración de aportaciones no dinerarias, sumisión a arbitraje, disolución, liquidación, etc.).

En segundo lugar, en estos comentarios no vamos a detenernos en el proceso de modificación del régimen establecido por el CCom 1829 que realizarán la Ley y el Reglamento de 1848²⁴⁶. Esas materias se analizan en los capítulos correspondientes en los que se hace referencia al marco regulatorio vigente antes de la aprobación de la Ley de 1848. Ahora conviene hacer una descripción analítica de la regulación de las sociedades por acciones en el CCom 1829.

1. Principio general de la responsabilidad de los socios

Respecto al principio general de la responsabilidad de los socios, se establece la limitación de la misma a las cantidades comprometidas a aportar o aportadas al capital. Por lo tanto, sólo es responsable frente a terceros el patrimonio de la sociedad. Dos artículos recogen esta doctrina básica para las sociedades anónimas y uno para las comanditarias.

Sociedades anónimas:

- Artículo 278 CCom 1829: *Los socios no responden tampoco de las obligaciones de la compañía anónima, sino hasta la cantidad del interés que tengan en ella.*
- Artículo 279 CCom 1829: *La masa social compuesta del fondo capital y de los beneficios acumulados a él, es solamente responsable en las compañías anónimas de las obligaciones contraídas en su manejo y administración por persona legítima, y bajo la forma prescrita en sus reglamentos.*

Sociedades comanditarias:

- Artículo 273 CCom 1829: *La responsabilidad de los socios comanditarios en las obligaciones y pérdidas de la compañía, está limitada a los fondos que pusieron o se empeñaron a poner en la comandita, fuera del caso de contravención al artículo 271, que los constituirá en la misma responsabilidad que tienen los socios gestores sobre todos los actos de la compañía*²⁴⁷.

La limitación de la responsabilidad de los socios *hasta la cantidad del interés que tengan en la sociedad*, constituye el principal privilegio que la legislación otorga a este tipo de compañías mercantiles. Es la excepción que configura la clave para comprender el régimen instaurado por el CCom 1829 y la reforma operada por la Ley de 1848.

²⁴⁶ Recuérdese que su artículo final, el 21, establecía: *Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley*. Redacción que, por su falta de precisión, no dejó claro qué artículos del CCom 1829 seguían en vigor y, por tanto, se aplicaban a las sociedades por acciones.

²⁴⁷ El artículo 271 CCom 1829 prohíbe a los socios comanditarios incluir sus nombres en la razón comercial de la sociedad. Si contravienen esta previsión, se hacen responsables solidarios de las deudas sociales, como los socios colectivos.

En este sentido, son significativas las palabras de Sáinz de Andino, redactor del CCom 1829 y Presidente de la CS para la redacción de la Ley de 1848, pronunciadas ante la Cámara Baja, en la primera sesión de debate del PL 1848, que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1847:

*... porque está probado, hasta la evidencia, que las Sociedades anónimas constituyen un sistema que está fuera de la ley, que repugna a los principios estrictos de la justicia universal y primitiva, y que es un sistema de contratación privilegiada*²⁴⁸.

En la Doctrina actual, PETIT²⁴⁹ ha puntualizado que la expresión “los accionistas responden limitadamente” es inexacta, en la medida que los artículos 273 y 278 CCom 1829 citados anteriormente se refieren a que los accionistas nunca responden (ni limitada ni ilimitadamente) ante los acreedores, pues quien lo hace es el patrimonio de la sociedad.

2. Constitución, examen y aprobación por el T. de c.

La constitución, examen y aprobación por el T. de c. de las sociedades por acciones presenta unas singularidades respecto al régimen general de las sociedades mercantiles. Establece el artículo 293 CCom 1829:

Es condición particular de las compañías anónimas que las escrituras de su establecimiento y todos los reglamentos que han de regir para su administración y manejo directivo y económico, se han de sujetar al examen del tribunal de comercio del territorio en donde se establezca, y sin su aprobación no podrán llevarse a cabo.

Este artículo es la llave para entender la evolución práctica de las sociedades anónimas y la reacción legislativa de nuestro Legislador del 48. La singularidad respecto al régimen general de constitución consiste en la exigencia de la aprobación por parte de los T. de c. de la escritura de fundación y los reglamentos de la compañía anónima. Los demás requisitos formales (otorgamiento de escritura pública, etc.) son iguales, pero en el caso de las anónimas, es necesaria la expresa aprobación por el T. de c.

Este requisito es consecuencia del carácter privilegiado de la sociedad anónima al limitar la responsabilidad de los socios *hasta la cantidad del interés que tengan en ella*. Por este motivo, era necesaria la aprobación por los T. de c. Tribunales que, en muchos casos, aprobaron escrituras fundacionales y reglamentos aplicando criterios más cercanos al régimen de las sociedades colectivas o comanditarias que a las anónimas. Esta fue la causa –aceptada por la mayoría de los comentaristas y prácticamente por todos los Diputados y Senadores intervinientes en los debates parlamentarios, con independencia de su adscripción política- que originó o permitió el uso fraudulento de la

²⁴⁸ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 271.

²⁴⁹ PETIT, C. (2009): “El anonimato de la sociedad mercantil y la llamada responsabilidad limitada. Apuntes para la historia de las anónimas en el Derecho español del siglo XIX” en LEÓN SANZ, F. J. (dir.) y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, S. Y PUY FERNÁNDEZ, G. (coord.): *Tendencias actuales en la ordenación del control y el capital en las sociedades mercantiles*, Madrid, pág. 87.

sociedad anónima en perjuicio de pequeños ahorradores o inversores que pusieron su dinero y patrimonio en el capital de estas compañías.

Respecto al cumplimiento por los T. de c. de la misión que el CCom 1829 les asignó en este punto, existe una opinión prácticamente unánime en el Legislador de 20 años después: desempeñaron ineficazmente su cometido. Cabría citar en este momento muchas referencias, pero nos limitamos a hacer una remisión al apartado posterior, dentro de este capítulo, en el que se analiza con detalle la aplicación del CCom 1829 a las sociedades por acciones por los T. de c.

Por último, cabe señalar que el régimen de examen y aprobación de las compañías anónimas por los T. de c. se aplicaba a todas estas sociedades, con la excepción contemplada en el artículo 294 CCom 1829:

Cuando las compañías anónimas hayan de gozar de algún privilegio que Yo le conceda para su fomento, se someterán sus reglamentos a mi soberana aprobación.

La concesión de un privilegio suponía otro requisito adicional, añadido a la intervención de los T. de c.: la real aprobación. Previsión coherente con la característica de excepcionalidad por la concesión de un privilegio (para operar en exclusiva en una zona geográfica, disfrutar de una situación de monopolio, explotación de una concesión, etc.). El CCom 1829 no especifica la forma de la aprobación: RD o ley.

3. Inscripción registral

Por lo que respecta a la inscripción registral, las compañías anónimas siguen el régimen general descrito en el epígrafe anterior (Registro provincial Público y General de Comercio: artículo 22 CCom 1829 y contenido mínimo de la matrícula de comerciante: artículo 11 CCom 1829), con la singularidad prevista en el artículo 295 CCom 1829:

En la inscripción y publicación de las compañías anónimas se insertarán a la letra los reglamentos aprobados por la autoridad correspondiente para su régimen y gobierno.

4. Denominación social

En relación a la denominación social, el CCom 1829 establece unos requisitos especiales para las sociedades anónimas, diferentes a los de las sociedades personalistas. La compañía colectiva debe girar bajo el nombre de todos o algunos socios sin que pueda utilizarse el nombre de alguien que no sea socio (artículo 266 CCom 1829). Lo mismo ocurre en las comanditarias, prohibiéndose que los nombres de los socios comanditarios figuren en la razón social (artículo 270 CCom 1829).

El régimen de las sociedades anónimas es singular. *No tienen razón social ni se pueden designar por los nombres de sus socios, sino por el objeto u objetos para que se hubiesen formado* (artículo 276 CCom 1829). Las normas sobre la identificación de la sociedad anónima son incompatibles o excluyentes respecto a las colectivas y comanditarias. Esto tiene como consecuencia que el concepto “razón social” es diferente al de “denominación social”. El primero es el identificador de las sociedades

personalistas. El segundo es el nombre de la persona jurídica constituida por accionistas²⁵⁰.

5. Acciones

En cuanto a las acciones, la nota básica es la de su circulación: *pueden representarse para la circulación en el comercio por cédulas de crédito reconocido*, declara el artículo 280 CCom 1829. La libre transmisibilidad de las acciones es un elemento caracterizador de estas sociedades frente a las personalistas que no emiten acciones, pues la participación de los socios en ellas es, en líneas generales, intransmisible²⁵¹.

Las formalidades de estas *cédulas de crédito* representativas de las acciones no se encuentran establecidas en el CCom 1829, sino que se autoriza a los reglamentos sociales a que lo hagan (artículo 280). Solamente se exige que se subdividan *en porciones de un valor igual*. Estas cédulas se pueden emitir exclusivamente por *importes que se hayan hecho efectivos en la caja social antes de su emisión*, pero no por *valores prometidos* (artículo 281 CCom 1829). En orden a prevenir fraudes, los *consignatarios de las cédulas que se expidan, sin que conste de los libros de la compañía la entrega del valor que representan, responden de su importe a los fondos de la compañía y a todos los interesados en ella* (artículo 281 citado).

La emisión o representación de las acciones en *cédulas de crédito* no era obligatoria. Si no se producía la emisión, la titularidad de las acciones se establecía *por su inscripción en los libros de la compañía* (artículo 282 CCom 1829). La transmisión de estas inscripciones se hacía *por declaración, que se extenderá a continuación de la inscripción, firmándola el cedente o su apoderado y, sin este requisito, será ineficaz la cesión en cuanto a la compañía* (artículo 282 citado).

No queda suficientemente clara la diferencia entre el procedimiento de transmisión de las *cédulas de crédito* y de las *inscripciones* de acciones. En el primer caso, el artículo 280 CCom 1829 dice *para la circulación en el comercio*. Se puede entender, en nuestra opinión, que se refiere a la posibilidad de transmitir libremente el título en un mercado en el que se compren y vendan. Sin duda podría referirse a un mercado organizado, pero recuérdese que en 1829 aún no existía la Bolsa de comercio de Madrid²⁵². El segundo caso, la transmisión de *inscripciones*, no se refiere a un mercado, sino a la venta particular por parte de un socio, o su apoderado, a un tercero. Sin duda, son procedimientos convergentes desde un punto de vista de la transmisión de la propiedad, pero el CCom 1829 los diferencia.

²⁵⁰ Comenta GONZÁLEZ HUEBRA a este respecto: *el nombre en las sociedades anónimas se diferencia mucho del de las colectivas. No se compone del de los asociados porque ninguno se obliga solidariamente, sino solo con la parte puesta en el fondo, ni se llama razón social, sino denominación de la compañía*. GONZÁLEZ HUEBRA, P (1859): *Curso de Derecho ...*, págs. 155 y 156.

²⁵¹ El socio que no quiera continuar en la sociedad colectiva o comanditaria sin acciones, tiene derecho a solicitar la disolución de la sociedad (artículo 334 CCom 1829) y sólo *puede transmitir a otra persona el interés que tenga en la sociedad o sustituirla en su lugar para que desempeñe los oficios que a él le tocaren en la administración social* con el consentimiento de los socios (artículo 322 CCom 1829). Además, el fallecimiento de un socio supone la disolución de la sociedad, salvo que establezca lo contrario el contrato de sociedad (artículo 331 CCom 1829).

²⁵² Que fue creada por la Ley de Bolsa (redactada por Sáinz de Andino) y celebró su primera sesión el 20 de octubre de 1831.

Con independencia de lo expuesto en el párrafo anterior, a juzgar por lo previsto en el artículo 298 CCom 1829, parece que requisito previo para la emisión de la *cédula de crédito* era la *inscripción* de la acción, aunque no cabe ser concluyentes a este respecto. Establece el citado artículo 298:

En la sociedades en comandita o anónimas constituidas por acciones, sólo puede tener lugar el embargo de que se habla en el artículo 296 cuando la acción del deudor conste solamente por inscripción, y no se le haya emitido cédula de crédito que represente su interés en la sociedad²⁵³ (el subrayado es nuestro).

Esta falta de precisión del texto legal (sobre todo los artículos 280 a 282) debió incrementar la inseguridad de las transmisiones durante los primeros años de vigencia del CCom 1829, pues son muchas y largas las intervenciones en el Congreso y en el Senado durante la tramitación del PL 1848 sobre la clarificación de las formalidades y requisitos para transmisión de las acciones.

En ningún momento el CCom 1829 se refiere a acciones nominativas o al portador, de lo que se deduce que estaban permitidos ambos tipos de acciones.

La transmisión de acciones (el CCom 1829 no especifica si se refiere a las *cédulas de crédito* o a las *inscripciones*) que no estén totalmente desembolsadas tienen la singularidad de que el cedente es responsable, si los administradores tienen derecho a exigirle el desembolso, conforme a lo previsto en el artículo 283 CCom 1829:

Los cedentes de las acciones inscritas en la compañía anónima que no hayan completado la entrega total del importe de cada acción, quedan garantes al pago que deberán hacer los cesionarios, cuando la administración tenga derecho de exigirlo.

6. Derecho de información de los socios

Respecto al derecho de información de los socios, el CCom 1829 establece un contenido diferente y más restringido que los demás tipos sociales. Por ejemplo, en las sociedades colectivas, todo socio, con independencia de que sea o no administrador, tiene derecho a examinar el estado de la administración y la contabilidad, según establezcan las escrituras sociales (artículo 308 CCom 1829). En cambio, respecto a los accionistas, prevé el artículo 309 CCom 1829:

En las compañías en comandita y en las anónimas no pueden los socios comanditarios ni los accionistas hacer examen ni investigación alguna sobre la administración social, sino en las épocas y bajo la forma que prescriban los contratos y reglamentos de la compañía.

Respecto a la información contable, el CCom 1829 establecía el principio general de que ninguna sociedad mercantil podía impedir a los socios el examen de

²⁵³ Establece el referido artículo 296 que los acreedores particulares de un socio no pueden ejecutar los fondos que tenga el socio en el patrimonio social y sólo pueden embargar los intereses que correspondan al socio en el caso de liquidación de la sociedad, para percibirlo cuando tuviera derecho a ello el socio.

todos los documentos comprobantes de los balances que se formen, para manifestar el estado de la administración social (primer párrafo del artículo 310 CCom 1829). En cambio,

(e)n las sociedades establecidas por acciones podrá hacerse derogación a esta regla general por pacto establecido en el contrato de sociedad, o por disposición de sus reglamentos aprobados que determinen el modo particular de hacer este examen, sujetando a su resultado la masa general de accionistas (segundo párrafo del artículo 310 CCom 1829).

Se observa, por tanto, una nueva remisión a lo que prevean las escrituras sociales. Esta situación podría permitir a los fundadores de las sociedades hacer de hecho imposible el ejercicio del derecho de información de los socios, quedando los administradores, por ello, en una situación de no tener que justificar los manejos y resultados de su administración.

7. Junta de accionistas

En cuanto a los órganos sociales, la junta de accionistas no es objeto de regulación detallada por el CCom 1829. Esta situación no deja de ser sorprendente. En efecto, las disposiciones o costumbres que se aplicaban a las juntas de socios de las sociedades colectivas o comanditarias no eran fácilmente trasladables a las compañías por acciones –fundamentalmente las anónimas– pues aquéllas son marcadamente personalistas en las que el número de socios suele ser reducido y, además, los socios representan a la sociedad frente a terceros y, en consecuencia, la junta de socios y el órgano de administración guardan cierto paralelismo.

Esta omisión o vacío legal no será suplido por nuestra Ley de 1848, puesto que dedica escasamente dos artículos a la junta de accionistas. Será el Reglamento de 1848 el que dedique varios artículos a la regulación de la Junta de socios²⁵⁴.

8. Administradores

Respecto a los administradores, la regulación específica de las sociedades anónimas se centra en que son nombrados y cesados por la junta. En las sociedades personalistas, los socios son también administradores del patrimonio social. En cambio, las sociedades capitalistas se caracterizan por su limitación de responsabilidad y por la amovilidad de los administradores. Es decir, siguiendo la redacción del artículo 265.3 CCom 1829, son *administradores amovibles a voluntad de los socios*.

El CCom 1829 no establece el sistema o procedimiento de elección y cese de los administradores. *Los administradores de las sociedades anónimas se nombrarán en la forma que prevengan sus reglamentos* (artículo 277 CCom 1829). El procedimiento dependerá, por tanto, de lo establecido en las escrituras sociales. Escrituras que, recuérdese, deben ser aprobadas por el T. de c. En esta materia, al no prever nada preciso el CCom 1829, sino la expresa remisión a los reglamentos sociales, la discrecionalidad del T. de c. era muy elevada.

²⁵⁴ Véase el capítulo sobre el desarrollo de la Ley de 1848.

La responsabilidad de los administradores es mencionada (aunque no regulada sistemáticamente) en el artículo 277 CCom 1829, en los siguientes términos: *no son responsables personalmente, sino del buen desempeño de las funciones que según estos mismos reglamentos [de la sociedad] estén a su cargo*. Se incide en la falta de responsabilidad respecto de las deudas sociales (lo cual suponía una gran diferencia respecto a los administradores de las sociedades personalistas).

En cuanto a su obligación de rendir cuentas a los accionistas, se remite a lo expuesto anteriormente sobre el derecho de información de los socios (artículos 309 y 310 CCom 1829) y a las consideraciones que allí se hacían.

9. Disolución y liquidación

Con respecto a la disolución y liquidación de la sociedad por acciones, las previsiones del CCom 1829 no presentan especialidades diferentes a las indicadas en el epígrafe anterior sobre las disposiciones comunes a los diversos tipos de sociedades mercantiles. Cabe indicar, simplemente, que no todas las causas de disolución son aplicables a las sociedades por acciones.

En efecto, en la rescisión parcial, entiende GONZÁLEZ HUEBRA²⁵⁵ que sólo es aplicable a las sociedades por acciones la causa 4ª del artículo 326 CCom 1829, consistente en dejar de *poner en la caja común de la sociedad el capital que cada uno estipuló en el contrato de sociedad, después de haber sido requerido a verificarlo*.

En el caso de la disolución total, el artículo 330 CCom 1829 establece que *en las sociedades constituidas por acciones, sólo puede tener lugar su disolución por las causas expresadas en los párrafos 1 y 2 del artículo anterior*, que son las siguientes:

1ª Cumplido el término prefijado en el contrato de sociedad, o acabada la empresa que fue objeto especial de su formación

2ª Por la pérdida entera del capital social.

La enumeración y descripción de las demás causas de rescisión parcial y disolución total, aplicables exclusivamente a las sociedades personalistas, se realizó en un apartado anterior.

III. LOS T. de c. Y LA APLICACIÓN DEL CCom 1829 A LAS SOCIEDADES POR ACCIONES ANTES DE LA LEY DE 1848

La regulación de las sociedades por acciones que hace el CCom 1829 fue objeto de una controvertida aplicación por los T. de c. Por este motivo, después de haber expuesto en el epígrafe anterior el régimen de esas sociedades según lo dispuesto en el CCom 1829, debemos realizar un estudio del comportamiento de dichos Tribunales en esta cuestión.

²⁵⁵ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho...*, pág. 197.

A) RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES DE COMERCIO EN EL CCom 1829.

Con el objetivo de no extender en demasía el estudio de esta cuestión, cabe tomar como punto de partida el régimen que el CCom 1829 instauró en relación a los T. de c., prescindiendo de antecedentes más remotos.

El Libro V –y último- del CCom 1829, *De la administración de justicia en los negocios de comercio*, regula esta materia a lo largo de cuatro títulos, que comprenden los artículos 1178 a 1219, último del texto legal. Se analizan a continuación las líneas básicas del régimen, funcionamiento y competencias de los Tribunales especiales de comercio²⁵⁶.

Estos Tribunales son los encargados de *la administración de justicia en primera instancia sobre las causas y negocios mercantiles* (artículo 1178 CCom 1829). La segunda y la tercera instancia en esta materia la asumen las Chancillerías y Audiencias Reales en cuya circunscripción se encuentre el T. de c. (artículo 1180 CCom 1829). En los territorios en los que no exista T. de c., los jueces ordinarios conocerán de los negocios judiciales mercantiles (artículo 1179 CCom 1829).

Como se deduce del párrafo anterior, los T. de c. son órganos jurisdiccionales que imparten justicia en el ámbito mercantil. No son órganos o entes administrativos dependientes jerárquicamente de una Autoridad pública (estatal, municipal, etc.).

Los Tribunales especiales de comercio se componían de un prior, dos cónsules y dos sustitutos de cónsules (artículo 1183 CCom 1829). Todos debían ser comerciantes “de por mayor” y matriculados, con la antigüedad mínima exigida por la ley. Se contemplaban unas prohibiciones para formar parte del Tribunal (artículo 1186 CCom 1829).

Es importante destacar que el prior y los cónsules eran cargos honoríficos y gratuitos (artículo 1193 CCom 1829). También eran obligatorios, pues *ningún comerciante matriculado puede excusarse del ejercicio de las judicaturas de comercio para que sea nombrado*, aunque el CCom 1829 contempla alguna excepción a este principio (artículo 1194 CCom 1829). Junto a ellos, cada T. de c. debía tener un consultor letrado, un escribano de actuaciones judiciales y el número de dependientes de justicia que estimara adecuado, todos ellos retribuidos (artículo 1195 CCom 1829).

El sistema que implantó el CCom 1829 diferenciaba, por tanto, dos tipos de miembros. En primer lugar, los “jueces” (el prior y los cónsules) que tomaban las decisiones. Estas personas eran comerciantes, pero no requerían tener conocimientos mercantiles, procesales o jurídicos en general. Formaban parte del T. de c. porque eran elegidos y, en su caso, no podían oponerse a este nombramiento, salvo los casos recogidos por el artículo 1194 CCom 1829. En segundo lugar, el consultor letrado, el escribano y los dependientes, constituían el grupo de los profesionales, pues su cargo aunque voluntario, era remunerado y exigía una determinada preparación.

²⁵⁶ CARRERAS Y GONZÁLEZ, M. (1860): *Elementos del Derecho mercantil de España. Obra escrita para que pueda servir de texto a los alumnos de las carreras de jurisprudencia, de administración, del notariado y de comercio, y de consulta a los comerciantes*. Prólogo de PÉREZ PUJOL, E., Madrid, págs. 279 a 284.

En cuanto a la competencia, la *jurisdicción de los Tribunales de comercio es privativa para toda contestación judicial sobre obligaciones y derechos procedentes de las negociaciones, contratos y operaciones mercantiles que van comprendidas en las disposiciones de este Código, teniendo los caracteres determinados en ellas para que sean calificadas de actos de comercio* (artículo 1199 CCom 1829).

Por lo tanto, los actos de comercio –y no sólo los relativos a las sociedades mercantiles- era objeto de competencia *privativa* de estos Tribunales especiales. Y era competencia para *administrar justicia en primera instancia*, tal y como se expresaba en el artículo 1178 CCom 1829. Además, en esta línea de órgano judicial, establecía el artículo 1204 CCom 1829 que *los tribunales de comercio se ceñirán a las atribuciones judiciales que les están declaradas en este Código y no ejercerán funciones administrativas de especie alguna* (el énfasis es nuestro).

Entonces, ¿cómo se hace compatible el artículo 293 CCom 1829 (los T. de c. otorgarán la autorización a las sociedades anónimas) con el artículo 1204 CCom 1829 (estos Tribunales no ejercerán funciones administrativas)? La respuesta no es fácil. Puede que haya varias soluciones, aunque ninguna parece totalmente convincente.

Una puede ser que el redactor del CCom 1829 decidió judicializar la autorización de las sociedades anónimas. No parece razonable, pues es difícil justificar que una declaración de cumplimiento de la legalidad en cuanto a las escrituras fundacionales, se pueda enmarcar en un procedimiento rogado en el que las partes intervinientes defiendan sus derechos frente a las otras.

Si se trata de un procedimiento administrativo, ¿por qué se somete a un Tribunal? En el siguiente epígrafe se expone la explicación que realiza D. Pedro Sáinz de Andino en una de sus intervenciones ante el Senado. Ahora simplemente se adelanta que, aunque el razonamiento es coherente, quizá no es acertado.

Como conclusión de la breve descripción que se ha realizado sobre la estructura, composición y competencias de los T. de c., cabe decir que es cuando menos curioso y forzado que sea a este órgano jurisdiccional, compuesto por las citadas personas, al que el CCom 1829 (artículo 293 repetidamente citado) le encomienda la autorización de las sociedades anónimas.

B) BREVE MENCIÓN AL RPGC

En el presente epígrafe se hace una breve mención de la institución encargada de las funciones registrales y de publicidad de los comerciantes en general y de las compañías mercantiles en particular. En primer lugar, conviene aclarar, que el CCom 1829 no atribuye estas funciones al Registro mercantil, que se creó muy posteriormente, ni a los T. de c., sino al denominado RPGC. Como expresa el profesor ROJO,

(a)unque de modo incipiente, en el primer Código de Comercio español ya está presente la idea de que el Registro Mercantil es una institución destinada a desplegar efectos sustanciales en relación con los terceros (arts. 22, 29, 328 y 335). Con todo, es preciso esperar a la promulgación del Código de Comercio

*de 1885 para que el Registro Mercantil aparezca como instrumento técnico de publicidad legal*²⁵⁷.

El artículo 22 CCom 1829 establecía que en toda capital de Provincia existiría un RPGC, dividido en dos secciones. La primera era la matrícula general de comerciantes, en la que se asentaban todas las inscripciones que se expidieran a quienes ejercieran el comercio. En la segunda sección, se tomaba razón, por orden de números y fechas, de las cartas dotales y capitulaciones matrimoniales, de las escrituras de constitución de sociedades mercantiles y de los poderes que se otorgasen a factores y dependientes²⁵⁸.

Este Registro ha sido fuente de inapreciable valor para el estudio cuantitativo de las compañías mercantiles inscritas desde 1830 en adelante. Lamentablemente, los documentos registrados durante los primeros años carecen, en bastantes casos, de los datos necesarios para poder elaborar estadísticas completas. MARTÍN ACEÑA²⁵⁹, en un interesante trabajo, aporta un dato relevante para nuestro estudio: el número total de sociedades mercantiles inscritas en el Registro de Madrid en 1848, era 320, de las que 121 eran compañías por acciones.

El encargado del RPGC era el Secretario de Intendencia²⁶⁰, que posteriormente será el Jefe Político al que se hace referencia en varios artículos de la Ley y del Reglamento de 1848. Como se estudia más adelante en el capítulo sobre la vigilancia e inspección de las compañías por acciones, este cargo se transformará por el RD 1849, en el Gobernador civil de la Provincia.

La relación entre el Registro de Comercio y el T. de c. se encuentra descrita en el artículo 31 CCom 1829, según el cual,

(c)opia del asiento que se haga en el registro general de todos los documentos de que se toma razón en él, se dirigirá sin dilación a expensas de los interesados por el Secretario de Intendencia, a cuyo cargo está el registro, al Tribunal de comercio del domicilio de aquéllos, o al juzgado real ordinario, donde no haya Tribunal de comercio, para que la fije en el estrado ordinario de sus audiencias, y se inserte en el registro particular que cada tribunal deberá llevar de estos actos.

Esta situación se verá modificada, en algún caso, por la Ley y Reglamento de 1848. Cabe destacar lo establecido por el artículo 26 del Reglamento de 1848, según el cual

(d)e los estatutos y reglamentos de la compañía después de haberse constituido y del Real decreto de autorización, se remitirán copias al Tribunal de comercio en cuyo territorio estuviere domiciliada para que se haga los correspondientes

²⁵⁷ ROJO, A. (2013): “El Registro mercantil (I). Organización y funcionamiento” en MENÉNDEZ, A. Y ROJO, A. (dirs.) *Lecciones de Derecho mercantil*, Cizur Menor, pág. 159.

²⁵⁸ Artículo 22 CCom 1829.

²⁵⁹ MARTÍN ACEÑA, P. (1993): *La creación de sociedades en Madrid (1830 – 1848). Un análisis del primer Registro Mercantil*, Documento de trabajo 9303 del Programa de Historia Económica de la Fundación Empresa Pública, Madrid, pág. 11.

²⁶⁰ Artículo 23 CCom 1829.

asientos en sus registros fijándose edictos en los estrados del tribunal con inserción literal de aquellos documentos.

Se puede apreciar que, en este supuesto, la comunicación de la documentación no se debe hacer al RPGC, sino al T. de c. del domicilio social.

Cabe concluir este breve apartado haciendo referencia a GARRIGUES²⁶¹, quien en su *Curso de Derecho Mercantil*, al referirse a la evolución histórica del Registro mercantil, señalaba dos direcciones. Una horizontal, que extiende el ámbito registral a ciertos documentos importantes en el tráfico; y, otra vertical, que ahonda en las consecuencias jurídicas de la inscripción misma o, dicho de otro modo, eleva la consideración de la inscripción: el Registro no es un mero “casillero administrativo”, sino un órgano jurídico de publicidad material.

Esta doble dirección en las inscripciones de las compañías la percibe claramente el citado profesor en la legislación española, comparando las Ordenanzas de Bilbao de 1737 con el CCom 1829. Mientras según aquéllas sólo se inscriben los contratos de sociedad, es decir, los comerciantes sociales, en el CCom 1829, junto a la matrícula de comerciantes aparece ya un registro de documentos, por ejemplo las cartas dotales, capitulaciones y los poderes otorgados por los comerciantes: extensión horizontal de la materia inscribible.

C) LA ACTUACIÓN DE LOS T. de c. EN LA APROBACIÓN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS.

Como se expuso anteriormente, uno de los motivos fundamentales para la modificación normativa de las sociedades por acciones fue el sometimiento de éstas a la aprobación del T. de c. correspondiente, en virtud de lo dispuesto por el artículo 293 del Código. *Trasladar la facultad que residía en los Tribunales de comercio al Gobierno, y en algunos casos a los Cuerpos legislativos, e impedir que se establezcan sociedades anónimas sin las garantías necesarias, es el objeto de la ley*, dirá el Diputado Sr. Miota²⁶². Conviene detenerse ahora en esta cuestión.

1. El artículo 293 del CCom y justificación de su derogación.

Como se recordará, el artículo 293 del Código de comercio establecía que las escrituras de establecimiento y los reglamentos que han de regir para su administración y manejo directivo y económico, se someterán al examen del T. de c. del territorio donde se establezca la sociedad anónima y sin su aprobación no podrá llevarse a efecto.

Esta previsión singularizaba las sociedades anónimas respecto de las demás compañías mercantiles. La razón era la situación de privilegio que se otorgaba a sus accionistas al limitar la responsabilidad a lo que habían aportado o se habían comprometido a aportar.

La misión de control y supervisión había fracasado. La experiencia desde 1829 hasta 1847 (casi 20 años) era incontestable. Y esta es la premisa de la que partieron las

²⁶¹ GARRIGUES, J. (1959): *Curso ...*, págs. 578 y 579

²⁶² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1433.

personas involucradas en el cambio legislativo. No se conoce con exactitud si todas compartían esta postura, pero lo que está claro es que todos quienes intervinieron en los debates sobre el PL 1848 coincidían en el planteamiento. Por eso, llegará a decir el Diputado Sr. Miota al Congreso: *y excuso ocuparme en demostrar que los Tribunales de comercio no deben ser los encargados de aprobar ni desaprobar el establecimiento de las sociedades anónimas, toda vez que no ha habido ninguno de los que han usado de la palabra que haya sostenido que deben ser ellos y no el Gobierno o el Poder legislativo*²⁶³.

En efecto, el objetivo era excluir a los T. de c. de esta función de autorización y supervisión para encargarla al Gobierno o a las Cortes, en función del objeto de la sociedad. La Autoridad pública (más adelante se detallará este punto) podría desempeñar este cometido mejor que los T. de c. Se preguntaba el Ministro de Gracia y Justicia (Sr. Vaamonde) en la primera sesión de los debates del Congreso: *¿Cómo el Gobierno había de contener esos abusos, si no tenía medios para evitarlos, si no estaba armado con una ley que le diera facultad para impedirlos? ¿Cómo había de mezclarse en esto el Gobierno, si una sociedad anónima estaba autorizada desde el momento en que presentando sus estatutos al Tribunal de comercio, le daba éste la sanción, y era necesario respetar ya a esta sociedad, por más que el gobierno conociera que encerraba en su seno el germen del monopolio? Así que, lo que faltaba era que el Gobierno tuviera que dar la sanción a esas sociedades*²⁶⁴.

También reiteraban la necesidad de cambiar la función de los T. de c. varios Diputados, entre los que cabe destacar al Sr. Miota: *pase lo que pase allende de los Pirineos, (...) lo que la experiencia nos ha acreditado en España es que no debe residir en los Tribunales de comercio la facultad de aprobar o desaprobar el establecimiento de las compañías anónimas, y que no deben permitirse compañías anónimas bajo el nombre de comanditarias*²⁶⁵. O el Sr. Bertrán de Lis, con las siguientes palabras: *anteriormente se establecían sociedades anónimas sólo con acudir al Tribunal de comercio, el cual, careciendo de leyes o disposiciones para los casos que se ocurrían, se veía en la precisión de conceder la autorización a todas las que lo pedían, de donde resultaron los abusos y los males que todos hemos lamentado (...). La Comisión, señores, no ha hecho más innovación fundamental grave respecto al estado anterior en este negocio, que una, cual es, trasladar la intervención del Tribunal de comercio al poder ejecutivo en los casos que aquí se determinan, y esto es conveniente, esto nadie lo pone en duda*²⁶⁶.

Para finalizar se transcriben unas palabras de DEL VISO²⁶⁷, que expresan ideas similares desde la perspectiva doctrinal de la época: *(m)as esta restricción [se refiere a la necesidad de aprobación por los Tribunales de comercio: artículo 293 CCom 1829], que no podía tener otro objeto sino afianzar en cierto modo la utilidad y moralidad de las sociedades anónimas, empezó a considerarse como una nueva fórmula que se hubiera que llenar; y a favor de este errado juicio, no había escritura de sociedad que*

²⁶³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1431.

²⁶⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1423.

²⁶⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1433.

²⁶⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1438.

²⁶⁷ VISO, S. DEL (1864): *Lecciones elementales de historia, y de Derecho civil, mercantil y penal de España, con arreglo al programa de enseñanza para el tercer año de Jurisprudencia*, Parte Tercera “Del Derecho mercantil”, segunda edición, Valencia, pág. 225.

presentada al tribunal de comercio no mereciera la aprobación. La experiencia acreditó que esta completa liberad, mas bien que medio de desarrollar la riqueza, era un lazo tendido a la credulidad, y un resorte para incluir en contra del crédito público

2. Referencia a la RO de 9 de febrero de 1847 y al RD de 15 de abril de 1847.

Desde un punto de vista formal, la derogación del artículo 293 CCom 1829 se produce con la RO de 9 de febrero de 1847²⁶⁸ y no con nuestra Ley de 1848. Esta cuestión se encuentra tratada en el capítulo sobre la formación y la tramitación parlamentaria de la Ley de 1848 y allí se aborda la delicada cuestión de la legalidad derogatoria de una Ley (el CCom 1829) por una RO. No es necesario abundar más en el tema, sino sólo reiterar la urgencia que acompañó este cambio normativo de las sociedades por acciones. Aunque muchos Diputados y Senadores estaban en contra de este atropello del principio de prelación de fuentes, podemos encontrar alguna manifestación en el Congreso de los Diputados como la siguiente: *(c)uando se suspendió el artículo 293 del Código de comercio; cuando el Ministro anterior en 9 de Febrero último tuvo por conveniente suspender ese artículo, prohibiendo que se establecieran sociedades anónimas, procedió de una manera que si en alguna ocasión es disculpable la suspensión de la ley por medio de un decreto, lo fue en aquella ocasión*²⁶⁹.

Meses más tarde, el 15 de abril de 1847, un RD²⁷⁰ disponía que la autorización y supervisión de las sociedades por acciones las asumía el Gobierno. Esta disposición, analizada también en el capítulo sobre la formación y tramitación parlamentaria de la Ley de 1848, causó un profundo malestar en el Congreso de los Diputados y, especialmente, entre los miembros de la CCD, cuyo Dictamen se recogió en el DsC del 16 de abril, es decir, un día antes de la publicación en la GdM del RD de 15 de abril.

Las discusiones de este Dictamen tuvieron lugar los días 19, 20 y 21 de abril y, como puede suponerse, se debatió con amplitud la oportunidad de la promulgación del RD. La cuestión de fondo era que los Diputados estaban de acuerdo con el Gobierno en que éste asumiera su nueva función, pero discrepaban que se publicara el RD en ese momento, unos días antes de la celebración de los debates sobre el PL 1848. Pero lo que a todas luces les parecía inadmisibles es que el Gobierno fuera el único legitimado para aprobar las sociedades anónimas, cuando el PL 1848, consensuado por otra parte con el Gobierno, preveía en su artículo 2 que, para determinados casos, la aprobación era competencia exclusiva del Parlamento.

El resumen de la justificación del Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz, de la oportunidad del RD de 15 de abril de 1847, cabe hacerlo con sus propias palabras: *El Código de comercio deja a los Tribunales de comercio expeditas ciertas atribuciones; pero ¿se ha desprendido el Gobierno de la autoridad que ejerce sobre esos Tribunales? Esta autoridad ¿es una acción judicial? El dar permiso a las sociedades ¿es una sentencia? Es, señores, una atribución administrativa que está en la esencia de la administración. Yo siento oír en boca de una persona tan entendida en estas materias*

²⁶⁸ GdM, de 14 de febrero de 1847, núm. 4536.

²⁶⁹ Palabras del Diputado Sr. Miota. DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1474.

²⁷⁰ GdM, de 17 de abril de 1847, núm. 4598.

*como el Sr. Ríos Rosas, que confunda las atribuciones de justicia que competen a los Tribunales de comercio con aquellas atribuciones que son puramente administrativas. ¿No es de esencia puramente administrativa la facultad que tienen los Tribunales de comercio para autorizar la formación de sociedades? ¿Quiere S.S. que estos Tribunales sean independientes e irresponsables? ¿Podrán tener esa facultad ilimitada sin que el Gobierno pueda ejercer sobre ellos la acción suprema de su autoridad? He aquí cómo el Gobierno puede, sin salirse de la legalidad, ejercer esa autoridad sobre los Tribunales de comercio en lo relativo a la autorización de sociedades*²⁷¹.

Llegados a este punto, es necesario confrontar la afirmación del Ministro (el otorgar permiso a las sociedades anónimas es una atribución administrativa que está en la esencia de la administración) con el artículo 1204 CCom 1829, citado en el epígrafe anterior. Según este artículo, *los tribunales de comercio se ceñirán a las atribuciones judiciales que les están declaradas en este Código y no ejercerán funciones administrativas de especie alguna* (el énfasis es nuestro). La incoherencia es patente y quizá pudo haber fundado su argumentación y actuación mediante la aprobación del RD, basándose en este artículo 1204 CCom 1829.

En cambio, su argumentación frente a las críticas del Diputado Sr. Miota fueron por otros derroteros: *Respecto a las atribuciones del Gobierno, también ha convenido S. S., al hablar de los Tribunales de comercio, que sus atribuciones son las que ha empleado en ese mismo decreto, pues podía hacerlo en una instrucción o reglamento, y el Gobierno lo único que ha hecho es ejecutarlas de una manera más solemne, por medio de un decreto, para instrucción de esos mismos Tribunales*²⁷².

3. Las sociedades comanditarias y los T. de c.

Cabe preguntarse si el artículo 293 CCom 1829 se aplicaba a las sociedades comanditarias. La respuesta ha de ser negativa, pues el tenor literal de dicho artículo dice que *es condición particular de las compañías anónimas...* Por lo tanto, las sociedades comanditarias por acciones no estaban sujetas a la aprobación del T. de c. Por desgracia, no tenemos datos estadísticos de este tipo societario en aquella época.

Ante esta situación, la RO de 8 de febrero de 1847 incurrió en un importante error (desconocemos la causa) pues al derogar el artículo 293 CCom 1829, permitió un importante escape del control al que se quería someter a las sociedades anónimas, dado que las sociedades comanditarias por acciones, que en la práctica podían dedicarse a las mismas actividades que las anónimas, seguían fuera de la supervisión de la Autoridad pública: nunca habían estado sometidas a los T. de c. ni, tras la RO, quedaban sometidas a la autorización del Gobierno. Varios Diputados y Senadores manifestaron su preocupación a este respecto, aun cuando en el texto del PL 1848 incluía dentro de su ámbito de aplicación a todas las sociedades por acciones.

Por este motivo, el RD de 15 de abril de 1847 hace referencia a las sociedades por acciones, no a las sociedades anónimas. Nuestra Ley de 1848 incluye dentro de su ámbito de aplicación las sociedades comanditarias por acciones –y no sólo las anónimas– para asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

²⁷¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1473.

²⁷² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1474.

4. “El problema no fue la legislación sino su aplicación”

“El problema no fue la legislación sino su aplicación”. Aunque no sean palabras textuales, puede ser el resumen de una larga intervención de Sáinz de Andino en el Senado²⁷³ hablando tanto de por qué decidió que en el CCom 1829 los T. de c. aprobaran las sociedades anónimas (que se analiza en el siguiente epígrafe) como de cuáles fueron los motivos por los que dichos Tribunales actuaron incorrectamente.

Se transcriben a continuación los fragmentos más relevantes de su largo discurso, limitándonos a comentar alguna cuestión concreta, pues la exposición es exhaustiva y de gran calidad.

Así se expresaba al inicio: *los Tribunales de comercio no han comprendido su misión, ni han tenido presente que la autorización que se les delegaba por el artículo 293 de nuestro Código de comercio para la aprobación de los estatutos y reglamentos de las Sociedades anónimas, llevaba implícita la obligación que se les imponía de conformarse en el uso de esta facultad a las reglas del derecho, ni a los principios económicos de la materia*²⁷⁴. *Se ha seguido la máxima de que conformándose las Sociedades anónimas en sus estatutos a las disposiciones que rigen para la formación de las Sociedades colectivas y comanditarias no se les debía negar la aprobación, echándose en olvido que la índole especial de estas Sociedades requiere condiciones de existencia mucho más severas. A este error debe indudablemente atribuirse el sistema vicioso que en ellas ha prevalecido*²⁷⁵.

La aplicación de las normas de las sociedades colectivas y comanditarias a las anónimas, tiene sentido en un momento histórico en el que la mayor parte de la actividad societaria se llevaba a cabo mediante compañías personalistas y, por tanto, de modo inconsciente se utilizaría su regulación como modelo de la sociedad anónima.

Pero la legislación que debían aplicar los T. de c. a las sociedades anónimas, según Sáinz de Andino, era correcta, adecuada y precisa. Por eso, dice, era responsabilidad de *los Tribunales de Comercio asegurarse* de que se cumplían correctamente todos los requisitos establecidos por el CCom 1829 respecto a las sociedades anónimas, y describe detalladamente estas previsiones que deberían haberse cumplido²⁷⁶:

- *que el objeto de la empresa no solo era lícito y positivo, como el derecho lo prescribe para toda clase de compañías, sino también de utilidad común, bajo cuyo solo concepto pueden existir estas Sociedades privilegiadas;*
- *que sus especulaciones no habían de rozarse ni ponerse en competencia con el comercio individual en ningún ramo de la contratación común, pues que sin esta precaución, las Sociedades anónimas constituirían un monopolio necesario y universal en las compras y en las ventas de todos los objetos de su tráfico,*

²⁷³ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, págs. 281 a 283.

²⁷⁴ En otras intervenciones, Sáinz de Andino vuelve a referirse a este binomio de las reglas del derecho y de los principios económicos como mejor criterio interpretador de las relaciones mercantiles.

²⁷⁵ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 281.

²⁷⁶ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 282.

restringiéndose a ellas todas las relaciones comerciales, y se convertirían en un cáncer que consumiese y aniquilase el buen comercio legal;

- *que no se excitaba a los capitalistas para que se comprometiesen en empresas quiméricas e ilusorias, sino prudentemente concebidas y de segura ejecución: que se había celebrado una acta social con las solemnidades que las leyes prescriben;*
- *que se contaba con un fondo congruente y disponible, proporcionado a la calidad de la empresa: que ésta no se fundaba sobre meras promesas para figurar un capital ficticio que sirviese de cebo para adquirir derechos positivos, sino que los capitales anunciados al público eran reales y efectivos, hallándose competentemente asegurada su recaudación; y por último,*
- *que los estatutos adoptados para el régimen social, estaban arreglados a principios de justicia y moralidad, pudiéndose fundar sobre sus cláusulas la convicción profunda de que la sociedad cumpliría religiosamente sus contratos y obligaciones.*

Pero estas previsiones legales no se cumplieron. Por eso continúa lamentándose: *si los Tribunales de Comercio hubiesen tenido presentes estas reglas económicas, en cuya aplicación estriban las garantías de legalidad que la justicia, la buena fe y la seguridad de los intereses públicos e individuales prescriben como indispensables para establecimiento de las Sociedades anónimas, no tendríamos hoy que lamentar los graves conflictos en que se está viendo el país por el abuso que se ha hecho del espíritu de asociación, convirtiéndolo en instrumento deplorable de agios ruinosos.*

De nuevo insiste en que “el problema no fue la legislación, sino su aplicación”: *este desorden no procede de que faltasen en nuestra legislación las disposiciones convenientes para precaverlo. Y vuelve a detallar la normativa que debería haberse aplicado, en esta ocasión haciendo referencia, en su caso, a los artículos correspondientes del CCom 1829 (“su” Código)²⁷⁷:*

- *Para asegurar que el capital de estas Sociedades fuese cierto y efectivo, y no ilusorio ni ficticio, se prescribió en el artículo 281 del Código que los títulos de las acciones no podrían emitirse por valores prometidos, sino por los que se hubiesen hecho efectivos en la caja social antes de su emisión, declarándose además que los administradores de la Sociedad que autorizaran estos títulos sin que constara de los libros la entrega del valor que representaran, responderían de su importe a los fondos de la compañía, y a todos los interesados en ella.*
- *Por el artículo 283 se estableció que los cedentes de las acciones inscritas en las compañías anónimas que no hubiesen completado la entrega total del importe de cada acción, quedarían garantes al pago que debieran hacer los cesionarios de lo que se restase cuando la administración tuviese derecho de exigirlo; con cuya disposición, que parece haber caído en olvido, según el giro que han llevado las Sociedades anónimas de nuestra época, se afianzó*

²⁷⁷ Ídem.

competentemente la integridad de los capitales que hubiesen anunciado para garantía de su crédito.

- *Que estas compañías hubiesen de tener un objeto efectivo, real y determinado en sus empresas, era una consecuencia necesaria del artículo 244 del propio Código: que hubieran de fundarse para objetos de utilidad pública y que de manera alguna hubiesen de monopolizar los ramos de la contratación común, era un principio legal y económico que no podía violarse sin desnaturalizar manifiestamente la índole de las Sociedades anónimas; y por último,*
- *para no haber permitido que ninguna de ellas se crease para traficar en artículos de subsistencias, ni haber permitido que las que estuviesen fundadas con distinto objeto especularan sobre estos mismos artículos, obraban las disposiciones de la ley 11, título 7 de la Novísima Recopilación, en cuyo artículo 6 se prohíbe terminantemente que los comerciantes puedan formar compañías para las compras y ventas de los géneros de primera necesidad.*

Este elenco de previsiones aplicables a las sociedades anónimas no necesita ahora de comentarios, dado que el discurso es claro y exhaustivo y, además, cada uno de los temas mencionados es tratado en los capítulos correspondientes.

¿Cuáles son las consecuencias de esta incorrecta aplicación de la legalidad? La mala situación en la que se encontraban las sociedades anónimas de la época. Lo describe el mismo D. Pedro²⁷⁸: *el mal viene, señores, de la inobservancia de aquellas disposiciones y de la ligereza con que, prescindiéndose abiertamente de ellas, se hayan aprobado los estatutos de muchas Sociedades para objetos, los unos fantásticos e ilusorios, y los otros de mero interés privado;*

- *de que no se les hayan prescrito en estos mismos estatutos las reglas oportunas para que sus capitales fuesen ciertos y efectivos;*
- *de haber consentido que los fundadores se reservasen la administración social por largos períodos de años, y aun en algunas Sociedades indefinidamente, sin embargo, de que por la naturaleza misma de estos contratos corresponde a la Junta general de accionistas nombrar las personas en quienes haya de recaer su representación y el manejo de sus intereses;*
- *de haberse también autorizado las retribuciones exorbitantes que los mismos fundadores de la compañía se asignaban en los estatutos, convirtiéndose en condición obligatoria para los accionistas lo que debiera haberse sometido a su libre deliberación;*
- *de que se haya tenido por bastante para constituir una Sociedad el simple proyecto de un corto número de individuos, que tomándola por objeto de especulación propia, se arreglaban los estatutos en la forma más conveniente para sus intereses, sin tomar en cuenta los de las accionistas, a quienes se procuraba entusiasmar y atraer con pomposas y halagüeñas promesas;*

²⁷⁸ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, págs. 282 y 283.

- *de que se haya asimismo tolerado que sin estar constituidas las Sociedades se negociara sobre las simples promesas de acciones, dándoles un valor imaginario por medios insidiosos e inmorales; y finalmente,*
- *de que la autoridad pública haya prescindido absolutamente de la inspección que le competía y estaba obligada a ejercer sobre estas compañías, dando lugar con este abandono a que con infracción de sus estatutos hayan invertido sus capitales en especulaciones para que no estaban autorizadas; a que se haya engañado la confianza pública, distribuyendo a título de beneficios cantidades que se segregaban de los capitales, con el criminal objeto de elevar desmesuradamente el valor de las acciones, y a otros muchos fraudes, usurpaciones de fondos y actos de mala fe que es repugnante referir.*

Sin duda un buen análisis de la situación de las sociedades anónimas en 1847 y una enumeración de los males que la nueva legislación debía evitar.

5. ¿Por qué el CCom 1829 sometió la aprobación de las sociedades anónimas a los T. de c. y no a la Autoridad pública?

Esta es la gran pregunta. ¿Cuál fue el motivo que llevó a Sáinz de Andino en 1829 a adjudicar a los T. de c. la misión de autorización y control de las sociedades anónimas? No existía precedente similar en la legislación comparada. En Francia, cuyo ordenamiento jurídico era muy bien conocido por D. Pedro, estas sociedades necesitaban la autorización del Gobierno para establecerse y quedaban sometidas a su control.

En realidad no se había profundizado en los motivos o razones por los que D. Pedro –gran jurista y de fama reconocida, tanto en España como fuera, especialmente en Francia- había tomado esta decisión. Esta revisión de la causa hizo, por ejemplo, que en las sesiones del Congreso de los Diputados en las que se debatió el PL 1848, en las que no estaba presente Sáinz de Andino (era Senador), el Sr. Martínez Almagro planteara la cuestión en los siguientes términos:

La Comisión conocerá muy bien que nada hay más lejano de las atribuciones de un Tribunal de comercio, cuyo instituto es administrar justicia en negocios mercantiles, que el de ejercer las funciones tutelares que al Gobierno corresponden en la organización de las sociedades anónimas. Por consecuencia, en general la autorización de los Tribunales de comercio no era más que una mera fórmula, ni podía ser otra cosa. Y en esto no quiero hacerles ninguna inculpación, porque estando erigidos para administrar justicia, no podían entrar en puntos meramente administrativos. ¿Y qué resultó? Que la anarquía vino en esta parte a reemplazar la libertad concedida al principio de asociación, y hemos visto los desmanes y escándalos que tan justamente se han lamentado en la constitución de muchas sociedades anónimas. Manera de poner coto a esta tendencia: la intervención del Gobierno en esa constitución, como tutor de todos los intereses generales²⁷⁹

²⁷⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, págs. 1434 y 1435.

Esta crítica (*Tribunal de comercio, cuyo instituto es administrar justicia en negocios mercantiles* y no tutelar la organización de las sociedades anónimas) estaba en la base de los razonamientos de todos quienes trabajaban por cambiar la legislación. Estos argumentos, además, tenían como base el artículo 1204 CCom 1829 que, como se decía en el epígrafe anterior, deja fuera de las competencias de los Tribunales especiales de comercio cualquier función administrativa.

Por estos motivos se entiende que Sáinz de Andino, como autor del CCom 1829 y como presidente de la CS encargada del PL 1848, se encontrara en una posición compleja, embarazosa cabría decir. Por un lado, fue quien decidió la intervención de los T. de c. en 1829 y, por otro lado, estaba apoyando un PL 1848 que sometía esas sociedades a la autorización del Gobierno o del Parlamento.

Y D. Pedro tuvo que justificar la decisión que adoptó en 1829. Lo hizo en una de sus intervenciones ante el Senado. Son unos razonamientos coherentes y oportunos. En nuestra opinión, sus justificaciones superan el examen. Pero, en primer lugar, nos parecen incoherentes con el artículo 1204 CCom 1829, antes citado. En segundo lugar, son contradictorias con las argumentaciones que proporciona en otros momentos de sus intervenciones para fundamentar el intervencionismo extremo del PL 1848. Él quiso, en 1829, dotar a las sociedades anónimas de un régimen muy flexible, basado sobre todo en la libertad de pactos entre los participantes en el contrato de sociedad. En cambio, en 1847, propugnó un cambio radical, un “pendulazo”, hacia el intervencionismo y control estricto por parte del Gobierno y de las Cortes. ¿Quiso corregir un error con otro error? Estas son las palabras de Sáinz de Andino:

¿Y por qué en el Código de comercio no se reservó al Poder Real la autorización que para su creación deberían impetrar las Sociedades anónimas y se concedió esta facultad a los Tribunales de comercio? Este cargo se acaba de hacer, aunque ligeramente, y yo tengo motivos especiales para empeñarme en resolverlo, demostrando la conveniencia de aquella disposición y las razones en que se fundó el legislador para otorgar en la creación de las Sociedades anónimas una latitud [sic] que no estaba en armonía con los principios que he sentado, ni con los ejemplos de la legislación extranjera, de que también he hecho referencia.

Cuando se formó el Código de comercio vigente se encontraba nuestro tráfico mercantil en una postración y languidez lamentables: sus vías ordinaria que anteriormente eran las colonias americanas, habían desaparecido, y no se hacía más tráfico que el de surtir nuestro propios mercados para el consumo interior de la Península y exportar la parte sobrante de nuestros productos, que los tratados de comercio, poco favorables por cierto a nuestros intereses, nos permitían llevar a puertos extranjeros. El espíritu mercantil podía decirse con razón que estaba muerto entre nosotros, sucediendo otro tanto con el industrial; y de aquí la necesidad de adoptar cuantos medios pudieran contribuir a despertar en los españoles la afición las grandes empresas mercantiles e industriales, que rápidamente se formaban en otros países, y a estimular a los capitalistas extranjeros, y con especialidad a los americanos, que habían trasportado sus capitales a varias plazas de Europa, para que se interesasen en las que pudieran formarse en España, donde por otra parte se les podían presentar mayores ventajas que en ningún otro país. Añadíase también la

consideración de que por la situación política de la Monarquía en aquella época, y los trastornos que recientemente la habían conmovido, respiraban algunos actos de su Gobierno cierta intolerancia que tenían intimidados los ánimos, alejándolos de toda operación en que hubiese de intervenir directamente la acción del Poder Supremo, y por eso se creyó que inhibiéndose éste completamente de toda participación en la formación de las Sociedades anónimas, se disiparían aquellos temores y podrían éstas fomentarse concurriendo a ellas propios y extraños con toda confianza y seguridad.

Tales fueron, señores, los motivos que movieron al legislador de nuestro derecho comercial para haber abdicado en los Tribunales de Comercio la facultad que le competía reservarse en el establecimiento de las Sociedades anónimas; pero no por esto pudo ser su mente de que estos Tribunales prescindieran en el examen de los estatutos que se presentaran a su aprobación, de los principios legales y de las reglas económicas que debían servirles de norma²⁸⁰.

Se finaliza este apartado repitiendo la pregunta que se formulaba antes de transcribir las últimas palabras de Sáinz de Andino: ¿se trató de corregir un error con otro error? Expresado de otra manera, ¿el excesivo intervencionismo de nuestra Ley de 1848 (planteamiento erróneo) fue el remedio al sometimiento de las sociedades anónimas a los T. de c. por el CCom 1829 (planteamiento previo erróneo)?

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA LEY

Una vez expuesta la situación legal previa a la entrada en vigor de nuestra Ley de 1848, se recogen los motivos o causas que justificaron, por un lado, la modificación legal de las sociedades por acciones y, por otro, la urgencia de la reforma.

Pero antes, se citan aquí unos datos sobre la realidad de las sociedades anónimas a finales de 1847, poco antes de la aprobación de la Ley de 1848, para conocer las dimensiones de la cuestión. La información proviene del entonces Ministro de CIOP, D. Juan Bravo Murillo, que informó al Senado del número de sociedades anónimas existentes en ese momento (22 de diciembre de 1847) en los siguientes términos:

Tengo a la vista un estado de las Sociedades anónimas que se han formado en Madrid: de él resulta que hay en esta corte 66 sociedades, y ocho en diversas capitales del Reino: total, 74, por un capital nominal de 5.786 millones de reales²⁸¹.

Estos datos, no concuerdan con la información recogida por MADOZ²⁸² en 1850, ni por el trabajo, en época más reciente, de MARTÍN ACEÑA²⁸³.

²⁸⁰ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 281.

²⁸¹ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 267.

²⁸² MADOZ, P. (1850): *Diccionario geográfico – estadístico de España y sus posesiones de Ultramar*, tomo X, Madrid, voz “Madrid” en las págs. 956 – 960 recoge la relación de compañías por acciones por domicilio en Madrid en las vísperas de la promulgación de la Ley de 1848. Las tablas incluyen: denominación, objeto de su institución, capital nominal, número de acciones, valor de cada una (nominal – al portador), desembolso, fecha de la escritura o de la instalación, tiempo que debe durar y observaciones. En la pág. 961 aparece otro cuadro con el “estado que manifiesta las sociedades que

A) EL ESPÍRITU DEL AGIOTAJE²⁸⁴

En términos generales, los primeros años de la década de 1840 fueron tiempos de recuperación económica en España. Las guerras Carlistas precedentes habían ocasionado una crisis financiera y económica, de la que, poco a poco, se fue recuperando el país. Al existir más recursos en circulación, muchas personas y familias trataron de enriquecerse con las nuevas oportunidades que se ofrecían, fundamentalmente a través de la deuda pública y de las grandes empresas. También se dejó sentir la influencia de familias adineradas extranjeras. Todo ello produjo una generalización del espíritu inversor entre los ciudadanos corrientes que fomentó el deseo de ganar dinero sin tener suficientes conocimientos en la materia.

Esta evolución o tendencia del espíritu de agiotaje fue una de las causas que justificaron el cambio normativo y la aprobación de nuestra Ley de 1848. Se recogen aquí, por parecernos de especial interés, las intervenciones más representativas de los Diputados y Senadores durante los debates sobre el PL 1848 acerca de esta cuestión. En las descripciones de la realidad de este desafortunado espíritu de agiotaje, destaca la unanimidad de Diputados y Senadores, con independencia de su adscripción política. Todos coinciden, y nadie lo niega o rebate, que en los años previos a los debates, muchas personas, sin conocer suficientemente la realidad empresarial, trataron de incrementar rápidamente su patrimonio, siendo víctimas de avezados financieros que, entre otros instrumentos, utilizaron las sociedades anónimas como vehículos para su agio.

Especialmente gráficas y claras son las dos siguientes intervenciones de D. Pedro Sáinz de Andino en el Senado:

- *... la clave de todos los males, señores, se encuentra en el fatal espíritu de agiotaje que predomina en las relaciones comerciales de algún tiempo a esta parte; espíritu que se alimenta de hacer grandes fortunas en poco tiempo y con menos trabajo; espíritu que trastornó la legalidad de las operaciones de la Bolsa, convirtiéndola en teatro de operaciones fraudulentas, y en un abismo que se tragaba los patrimonios legítimamente adquiridos por el trabajo y la inteligencia²⁸⁵.*
- *Fáciles son de concebir estos abusos. Anunciándose la formación de compañía anónima bajo el poderoso atractivo de destinarse a especulaciones ventajosas, y escudadas con nombres respetables, y de crédito conocido, que se ponen al frente de su administración, los grandes y pequeños capitalistas concurren a la porfía a inscribirse en sus registros, y entregan con ciega confianza sus capitales, sin cuidarse las más veces de la parte que se les reserva en la inspección de su manejo. En otro concepto: establecidas estas compañías bajo la base de un capital cuantioso, el comercio se cree seguro en negociar con ellas por el crédito que representan, ignorando hasta qué punto pueden ser*

después de anunciadas no han llegado a constituirse, o que constituidas, han sido disueltas posteriormente, con expresión de su objeto y capital que representaban”.

²⁸³ MARTÍN ACEÑA, P. (1993): *La creación de sociedades en Madrid ...*, págs. 11 y ss.

²⁸⁴ El término “agiotaje”, muy utilizado en la literatura de la época, lo define la R.A.E. como *especulación abusiva hecha sobre seguro, con perjuicio de tercero*.

²⁸⁵ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 282.

*efectivos o supuestos los fondos anunciados al público; y bajo esta creencia se suelen multiplicar los contratos de la compañía y extenderse su responsabilidad más allá de lo que correspondería a sus garantías positivas. A esto se agregan los menoscabos que en los intereses de la masa social pueden sobrevenir por la impericia por la imprevisión o por la negligencia de los que están encargados de su administración, cuya trascendencia, se extiende tanto a los accionistas o socios, como a los acreedores de la compañía*²⁸⁶.

Con motivo de la discusión sobre las acciones al portador, el Marqués de Vallgornera presentó en la sesión del Senado del 22 de diciembre de 1847 una enmienda al PL 1848 para que sólo se permitiera la emisión de acciones nominativas y así evitar las “sociedades fantasma” en las que el desconocimiento de la identidad permitía, en su opinión, el abuso, fraude y agiotaje. La CS (presidida por Sáinz de Andino), respondió por escrito, mediante un dictamen que se leyó al día siguiente, el 23 de diciembre, que interesa a los efectos que se comentan en este epígrafe:

En efecto, el abuso ha existido, no precisamente por la negociación de las acciones al portador, sino favorecido por los nombres de las personas que se colocaban al frente de las Sociedades proyectadas.

Era el interés principal de los autores de tales proyectos atraer para la realización de sus designios los nombres de personas respetables; y cuanto más alta fuese su categoría y más puros y limpios de tacha esos nombres, tanto más seguro era el éxito del agiotaje único fin que se proponían en tales empresas.

Pocas veces se calculaba en ellas la naturaleza del negocio, los medios de llevarlo a cabo, las utilidades presumibles de su dirección acertada, ningún examen, en fin, del objeto ostensible para el cual se creaba la Sociedad.

El examen se reducía a informarse de las personas que figuraban al frente de las empresas, y por la habilidad que se les suponía en los medios de hacer subir el precio de las acciones, y por la calidad de los demás individuos a quienes se colocaba como por adorno en las Juntas de gobierno, por esos datos establecían el curso que habría de darse y el valor que en corto plazo deberían adquirir las acciones.

*En el acceso de la fiebre que tales negociaciones produjeron no se limitó el agio a las acciones, fuesen nominales, fuesen al portador; se extendió a las promesas de acciones de compañías fantásticas*²⁸⁷.

También cabe destacar las siguientes palabras del entonces Ministro de CIOP, Bravo Murillo ante el Senado:

El Senado conoce, como todos los españoles, que el asunto de que se trata en esta ley es de grande importancia y urgencia. ¿Cuál es el estado a que han llegado las Sociedades en España, y especialmente el Madrid? Cuáles son los males del demasiado desarrollo de ese espíritu de especulación, a nadie se le ocultan; y por consiguiente me creo libre de la necesidad de encarecerlo al Senado. El Gobierno de S. M. conoció bastante esta necesidad, y presentó en la anterior legislatura al otro Cuerpo Colegislador el proyecto que se discute. Este

²⁸⁶ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 280.

²⁸⁷ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 276.

*proyecto fue modificado, aunque no sustancialmente, y al cabo obtuvo el voto de aquel Cuerpo*²⁸⁸.

Y, por último, se recogen dos intervenciones en el Congreso de los Diputados. Unas breves palabras del Sr. Miquel Polo:

*... el objeto de esta ley es poner coto al agio y al juego de que se ha visto abusar*²⁸⁹.

Y parte de la intervención del entonces Ministro de CIOP, Pastor Díaz:

*Y esta necesidad, la necesidad a que aludo, la necesidad que he dicho antes, la necesidad de moralizar las sociedades, la necesidad de evitar el escandaloso juego que a su sombra se hacía, la necesidad de evitar las defraudaciones que se cometían a veces por hombres respetables, a veces por objetos alucinadores, era sin embargo una consecuencia natural de la anarquía en que estábamos por la falta de leyes que había habido anteriormente*²⁹⁰.

B) LA ESPECULACIÓN BURSÁTIL

El espíritu de agiotaje se concretó de diversas maneras, pero el instrumento más utilizado fue la inversión especulativa en la Bolsa de Madrid. Para enmarcar esta cuestión se debe hacer una breve referencia al entorno legal y financiero.

La Bolsa de comercio de Madrid se crea por RD de 10 de septiembre de 1831, celebrándose su primera sesión pública el 20 de octubre de ese mismo año. A esta norma siguieron otras, siendo la más relevante para nuestros comentarios el RD de 5 de abril de 1846 por el que se aprueba un Proyecto de Ley Orgánica Provisional de la Bolsa de comercio de Madrid. Dice su Preámbulo o Exposición de Motivos:

*Habiendo acreditado la experiencia que las operaciones a plazo sobre los efectos públicos, autorizadas por la ley de 10 de septiembre de 1831, lejos de contribuir al fomento de las relaciones comerciales y a promover la circulación de los valores del Estado, se han convertido en un agiotaje inmoral, contrario a las leyes y perjudicial así al comercio como al crédito de aquellos mismos valores; y no habiendo sido suficientes para refrenar estos deplorables abusos las disposiciones dictadas en 2 y 30 de septiembre de 1841, ni las que se prescriben por el RD de 20 de julio de 1845; siendo ya indispensable dictar las medidas severas que reclama el buen orden de la contratación de la Bolsa para que en ella se observen las condiciones esenciales que se requieren en todo género de contrato legítimo; oído el Consejo Real, y de conformidad con el parecer de mi Consejo de Ministros, vengo en mandar que, interinamente y hasta la resolución de las Cortes, se observe el siguiente proyecto de ley orgánica provisional de la Bolsa de comercio de Madrid*²⁹¹.

²⁸⁸ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 265.

²⁸⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1466.

²⁹⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1441.

²⁹¹ GdM de 6 de abril de 1846, pág. 1, núm. 4222.

El objetivo fundamental de este “RD – Ley Orgánica provisional”, es la prohibición de las operaciones a plazo. Las operaciones al contado no planteaban ningún peligro. Las tres normas citadas en el Preámbulo (dos de 1841 y una de 1845) habían tratado de encauzar y controlar la situación de este mercado organizado para evitar el agiotaje. Por lo que más adelante se verá, este mercado se refería sobre todo a la compraventa de títulos de deuda pública, que fue derivando hacia las acciones emitidas por sociedades mercantiles, según avanzaban las citadas disposiciones restrictivas.

La realidad fue que, a pesar del RD de 5 de abril de 1846 (justo un año antes de tener lugar los debates sobre el PL 1848 de compañías mercantiles por acciones en el Congreso de los Diputados), se siguieron realizando operaciones a plazo fuera de la Bolsa y, por lo tanto, sin las garantías propias de un mercado organizado.

Por este motivo, la Reina otorgó un nuevo RD el 30 de septiembre de 1847²⁹², breve, de sólo 4 cortos artículos, por el que se autorizaban de nuevo las operaciones a plazo, sujetas a determinadas garantías. Se transcribe parte del Preámbulo porque explica tanto los motivos como el contenido del RD:

El abuso de las operaciones a plazo en la Bolsa de Madrid produjo un anatema contra ellas que alcanzó a la Bolsa misma. De aquí vino el descrédito de la institución y la prohibición absoluta de los contratos a término sobre efectos públicos. Clamores opuestos han llegado después a los oídos de vuestro Gobierno, fundados, ya en las incontestables ventajas que la existencia de la Bolsa procura al comercio, ya en la propagación y funestas consecuencias de un juego oculto, sostenido por mediadores intrusos. (...) El Ministro que suscribe tiene la honra de someter a la aprobación de V. M. algunas reglas que, apartadas de los extremos en que incurrieron las precedentes disposiciones, puedan reanimar las operaciones lícitas, disminuir los fraudes, atenuar la crisis monetaria que abrumba la plaza, aumentar el precio de los efectos públicos, y oponer estorbos a los fraudes que en los contratos a plazo se introdujeron hasta ahora.

En estas reglas, Señora, no se confunden las operaciones a plazo, cuya garantía consiste en la mera palabra de los contratantes, con las que se hacen sobre efectos depositados. En cuanto a las primeras, si bien no se pretende aniquilar la obligación moral que producen, no tendrán sin embargo fuerza civil de obligar; circunstancia que calmará en gran manera la propensión al juego, pues que no habrá más garantías para emprenderlo que la probidad y la posibilidad de los contratantes. Respecto de las segundas, la garantía es completa...

La garantía se basaba en tres previsiones: sólo obligan las operaciones a plazo cuyos efectos se hubieran depositado (artículo 1); el plazo no puede ser superior a cincuenta días (artículo 2); y, por último, los agentes son responsables de las operaciones si los efectos se encuentran depositados (art 4).

²⁹² GdM de 1 de octubre de 1847, pág. 1, núm. 4765.

Es interesante reparar en la fecha de este RD: 30 de septiembre de 1847. Quiere esto decir que es posterior a los debates del PL 1848 en el Congreso de los Diputados (abril de ese mismo año), pero anterior a las sesiones que sobre el mismo PL 1848 tuvieron lugar en el Senado (diciembre de 1847).

Como colofón a estos datos históricos, se hace notar que, pocos meses después, ya en vigor la Ley y el Reglamento de 1848, un nuevo RD de 22 de marzo de 1848²⁹³, restableció íntegramente el RD de 5 de abril de 1846 por el que se habían prohibido las operaciones a plazo, derogando el de 30 de septiembre de 1847.

En las discusiones parlamentarias sobre el PL 1848 se recogen abundantes referencias a las operaciones en Bolsa y al vaivén normativo sobre las prohibiciones de las operaciones a plazo. En este sentido, se destacan las siguientes intervenciones:

El Diputado Sr. Illa hacía la siguiente consideración en la sesión del 21 de abril de 1847: *(l)a experiencia, señores, está acreditando la verdad de que me ocupo: la desmoralización espantosa a que habían llegado de unos años a esta parte las operaciones bursátiles, obligó al Gobierno a tomar una providencia en Marzo²⁹⁴ del año anterior para impedir las operaciones a plazo, operaciones que si bien habían coadyuvado a improvisar algunas fortunas colosales con escándalo universal y ruina de la Nación, también arruinaron las familias y fueron causa de gravísimos perjuicios.*²⁹⁵

En una breve intervención posterior, manifestó el Diputado Sr. Fuentes: *(e)so que se ha dicho aquí del juego que se cortó en la bolsa y que ha ido a parar a otro lado, juntamente con los efectos de la crisis monetaria, han sido las verdaderas causas de ese descrédito que ha pesado sobre esas sociedades anónimas.*²⁹⁶

El entonces Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz, había comentado en la sesión del día anterior: *(e)l gobierno prohibió las operaciones a plazo, el gobierno prohibió el juego; pero quedaba el espíritu de especulación, quedaba el espíritu del agio, quedaba la tendencia, y esta tendencia tomó otro camino. No había ley sobre las sociedades anónimas, y el juego no hizo más que cambiar de rumbo. ¿Qué sucedió, señores? Que hubo una ley que prohibió jugar con barajas selladas con el timbre del estado, pero se permitió el juego con barajas elaboradas en fábricas particulares. Esto se hizo por precisión; se prohibió en la Bolsa las jugadas a plazo, y los jugadores discurrieron el medio de jugar con acciones. El Gobierno castigó la falsificación en papel sellado, pero la dejó en papel simple.*²⁹⁷

Y, por último, el Marqués de Vallgornera resumió este tema en el Senado con las siguientes palabras: *(e)n estos últimos tiempos, sobre todo desde principios de 1846, ha habido en Madrid una fiebre de juego, y nada más que juego en su Bolsa. ¿No nos hemos quejado de esto todos? ¿No tuvo el Gobierno que prohibir las operaciones a plazo y dictar cuantas providencias pudo, en el círculo de sus atribuciones y aún fuera*

²⁹³ GdM de 25 de marzo de 1848, núm. 4939, pág. 1.

²⁹⁴ En realidad se refiere al RD de 5 de abril de 1846, comentado líneas más arriba.

²⁹⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1461.

²⁹⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1463.

²⁹⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1441.

*de él, para contener el ardor del agio, el lucro inmoral, el dolo, el engaño, elemento de tantas riquezas improvisadas, y de tantas ruinas y pérdidas lamentables?*²⁹⁸

Pero las intervenciones no se centraron exclusivamente en la referencia a las operaciones a plazo, sino que se insistió una y otra vez en el afán especulador bursátil como causa de los abusos y fraudes financieros en general y de las sociedades anónimas en particular. Son muchas las referencias que se encuentran en los debates de los dos Cuerpos colegisladores. Se han seleccionado las siguientes:

- Intervenciones del Sr. Pastor Díaz, Ministro de comercio en ese momento, durante la primera sesión de los debates en el Congreso de los Diputados el 20 de abril de 1847:

*Llegó otra época, llegó otro tiempo, se despertó el espíritu de asociación; y como sucede en todas las cosas, el espíritu de asociación al despertarse fue más allá de sus naturales límites. Entonces se combinó, señores, con otro espíritu que se había despertado aquí por otras razones, con el espíritu del juego y del agio, con el espíritu de las operaciones bursátiles. (...) El agio, las especulaciones bursátiles habían contribuido a hacer esa inmensidad de capitales, habían creado infinidad de fortunas. El gobierno se vio obligado a atajar el mal*²⁹⁹.

- De nuevo el Ministro de CIOP, en la sesión del día siguiente:

*Como antes del proyecto de ley había crecido el espíritu de juego, habían llegado los capitales nominales de las sociedades de Madrid a 7.000 millones, cifra que basta por sí sola para escandalizar a la Europa y al mundo y para presentar a la Nación española como una Nación de jugadores, como una Nación inmoral*³⁰⁰.

- El Diputado Sr. Ríos Rosas, haciendo referencia a otra intervención del Sr. Ministro de CIOP, le recomendó que presentara un proyecto de ley sobre Bolsa para atajar de verdad los abusos que se estaban produciendo³⁰¹:

*El Sr. Ministro de Comercio ha encarecido la necesidad de la moralidad, la necesidad de reprimir todo género de inmoralidad, donde quiera que se encuentre (...); pero, puesto que hay ese celo, yo citaré a S.S. una necesidad muy grave. El Gobierno sabe que la Bolsa está regida por un decreto; las especulaciones de la Bolsa han sido siempre objeto de escándalo, y por desgracia continuarán siéndolo por algún tiempo más entre nosotros. Yo aconsejo a S.S. que por consideraciones de moralidad, por consideraciones de política, por todo el orden de consideraciones que debe tener un Gobierno, traiga aquí pronto una ley sobre Bolsa*³⁰².

²⁹⁸ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 274.

²⁹⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1441.

³⁰⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1471.

³⁰¹ No se aprobó dicho Proyecto de Ley, pero en su lugar, de promulgó el RD el 22 de marzo de 1848, citado anteriormente, en el que se volvió a prohibir totalmente las operaciones a plazo.

³⁰² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1473.

C) INCORRECTA APLICACIÓN DEL CCom 1829 POR LOS T. de c.

Otra de las causas que, sin duda alguna, justificaron el movimiento normativo para sustituir los preceptos del CCom 1829 sobre las sociedades por acciones por nuestra Ley de 1848, fue la actuación de los T. de c.

Dado que en un epígrafe anterior de este mismo capítulo se ha tratado esta cuestión como uno de los antecedentes importantes de nuestra Ley de 1848, a él nos remitimos, pues al tratarse de materias conexas e interrelacionadas (antecedentes y justificación) ha parecido oportuno unificar el estudio en ese epígrafe anterior. Aquí simplemente se señala a efectos sistemáticos.

D) URGENCIA PARA REMEDIAR LA MALA SITUACIÓN DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES

Junto a las tres causas justificadoras de nuestra Ley de 1848: el funesto espíritu de agiotaje, la especulación bursátil y la actuación de los T. de c., habría que añadir otra, sin duda alguna, importante: la urgencia.

No se trata de una causa de fondo, sino más bien de las singularidades (¿cabría decir defectos?) de la situación política de España en la época de la Reina Isabel II. Nos referimos, fundamentalmente, a la brevedad de las Legislaturas y a la falta de continuidad de los Gobiernos y de los equipos ministeriales. Estos dos factores constituían una rémora que impedía conseguir el objetivo de modificar la legislación de sociedades por acciones, hecho sobre el que, como se decía anteriormente, existía un gran consenso entre Diputados y Senadores.

Siendo consciente de estas dificultades, uno de los Gobiernos de aquella época, derogó, mediante RO de 9 de febrero de 1847³⁰³, el artículo 293 CCom 1829 por el que se exigía la autorización de los T. de c. para la constitución de sociedades anónimas, repetidamente citado a lo largo de ese capítulo. La situación de dichas compañías era tan calamitosa que exigió la intervención urgente del Gobierno, o mejor dicho, del Ministro de CIOP, Roca de Togores. Sobre la ilegalidad de semejante actuación, se hacen unos comentarios en el epígrafe correspondiente del capítulo de la formación y tramitación parlamentaria de la Ley de 1848.

Pero el desarrollo de los acontecimientos no terminó en este punto. Al cabo de muy poco tiempo, otro Gobierno, ya presentado el primer PL 1848 en el Congreso de los Diputados, mediante RD de 15 de abril de 1847³⁰⁴, decidió que, hasta que se aprobase una nueva ley, sólo se podían constituir compañías por acciones mediante RD.

Como puede comprobarse, la situación era bastante límite. La urgencia apremiaba tanto al Legislador como al Ejecutivo y se trataba de avanzar rápidamente para evitar más retrasos. Y, en efecto, el primer obstáculo apareció a los pocos días de finalizar las sesiones sobre el PL 1848 en el Congreso. El 5 de mayo de 1847 la Reina

³⁰³ GdM de 14 de febrero de 1847, núm. 4536.

³⁰⁴ GdM de 17 de abril de 1847, núm. 4598.

suspende las Cortes Generales³⁰⁵ y convoca elecciones de Diputados Provinciales para los días 18, 19 y 20 de julio.

No se ofrecen aquí más detalles de aquella situación compleja y comprometida, pues se encuentran descritos estos hechos y sus consecuencias en el siguiente capítulo sobre el *íter* legislativo de la Ley de 1848.

Es de destacar que esta urgencia tuvo como consecuencia que se renunciara a debatir a fondo determinadas cuestiones en aras a conseguir una rápida aprobación del texto. Varios Senadores hicieron referencia a la necesidad de reconducir determinados defectos del texto del PL 1848 a través del Reglamento que aprobaría posteriormente el Gobierno.

Para finalizar, y como resumen de lo que se acaba de exponer, se recoge una ilustrativa intervención del Ministro de CIOP, Pastor Díaz, en el Congreso de los Diputados, el 21 de abril de 1847, poco antes de que la Reina suspendiera las Cortes Generales:

*El Gobierno tenía presentada una ley: hace un año que se había presentado otra: ¿era, pues, justo, que el Gobierno esperase a las contingencias que esta ley podía tener? Dice el Sr. Ríos Rosas que si no podía esperar ocho días el estado de la plaza. No señor: podía esperar ocho meses; podía esperar un año; podía rechazar el Parlamento la ley; podía ir al Senado y no conformarse con ella; podía haber necesidad de nombrar una comisión mixta; podía llegar el verano y ser la época en que las tareas legislativas tuvieran que suspenderse: ¿y entre tanto había de quedar el Gobierno en la misma anarquía que antes? ¿Había de permitir otra vez el juego?*³⁰⁶

³⁰⁵ Por RD publicado en la GdM de 6 de mayo de 1847, núm. 4617.

³⁰⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1472.

CAPÍTULO IV ÍTER LEGISLATIVO

I. INTRODUCCIÓN

Una vez estudiado en el capítulo anterior los antecedentes de la Ley de 1848, se hace necesario detenerse en la tramitación parlamentaria de la Ley de 1848. Se trata de un periodo breve que podríamos delimitar entre los últimos meses del año 1846 y enero de 1848.

No puede entenderse adecuadamente el contenido y el significado de la Ley de 1848 si no se conoce en detalle la evolución de los diferentes textos del PL 1848: desde el primer texto o borrador presentado por el Gobierno el 26 de febrero de 1847, hasta el formulado en el Dictamen de la CMC-S el 11 de enero de 1848, que será la versión definitiva.

Aunque el periodo temporal de este estudio sea breve, es necesario conocer la evolución del Poder Ejecutivo durante esos once meses, pues la estabilidad no fue su nota caracterizadora. Así, por ejemplo, la Reina designa a cuatro Presidentes del Consejo de Ministros y se suceden cinco diferentes Ministros de CIOP. La tramitación parlamentaria se desarrolla durante dos legislaturas distintas, habiendo durado la primera escasamente diez meses. También ha de tenerse en cuenta que exactamente un año antes de la aprobación de la Ley de 1848, es decir, el 28 de enero de 1847, se crea el nuevo MCIOP, que será el responsable del PL 1848.

Conviene, además, hacer una referencia a las intervenciones tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, pues ayudan a conocer las distintas corrientes jurídicas, económicas y políticas sobre las sociedades mercantiles y el espíritu empresarial existentes en aquellas fechas. En este capítulo no se realiza un resumen exhaustivo de dichas intervenciones, ya que serán objeto de frecuente cita y referencia cuando se comente pormenorizadamente el régimen jurídico de las sociedades anónimas (sistemas de autorización, constitución, capital, órganos sociales, etc.).

Por último, conviene ofrecer alguna aclaración sobre las formalidades del procedimiento para la aprobación y promulgación de las leyes en aquella época, al hilo de los comentarios sobre la tramitación de la Ley de 1848.

II. CRONOLOGÍA DE LOS GOBIERNOS DE LA NACIÓN Y LEGISLATURAS DURANTE LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DEL PL 1848

En este apartado se expone, de una manera breve y esquemática, la sucesión cronológica de los Gobiernos de la Nación durante la tramitación parlamentaria del PL 1848 en el Congreso de los Diputados y Senado. En los siguientes apartados se detallarán oportunamente, al hilo de los textos normativos que se comentan, las

menciones aquí realizadas (que se limitan al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de CIOP).

El reinado de Isabel II se caracterizó, en lo que ahora interesa, por la brevedad de las Legislaturas y por los continuos cambios en el Gobierno. La estabilidad del Ejecutivo brilló por su ausencia, salvo breves períodos, señalados por los historiadores. Los años 1846 y 1847 no fueron una excepción en esta tónica. Así, se debe tomar como punto de partida para el estudio de este periodo el RD de 31 de octubre de 1846³⁰⁷ que disuelve el Congreso de los Diputados y establece el fin de la Legislatura, siendo Pidal el Ministro de la Gobernación. Casi dos semanas más tarde, el 11 de noviembre de 1846, otro RD³⁰⁸ establece la fecha de inicio de las elecciones al Congreso de los Diputados para el 6 de diciembre de 1846.

El 31 de diciembre de 1846 da comienzo la primera Legislatura durante la cual se desarrollarán las discusiones parlamentarias del texto del PL 1848.

El primer Gobierno de esta Legislatura es nombrado por Isabel II mediante los correspondientes RRDD de 28 de enero³⁰⁹. El Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Estado es D. Carlos Martínez de Irujo, Duque de Sotomayor y D. Mariano Roca de Togores, Diputado, Ministro de CIOP. Este Gobierno es conocido por el apelativo del “Gobierno puritano”³¹⁰

En la misma fecha del 28 de enero un RD crea el nuevo MCIOP, desgajado del Ministerio de la Gobernación de la Península.

El primer Ministro de CIOP, Sr. Roca de Togores, introduce el 27 de febrero de 1847 en el Congreso de los Diputados el texto del PL 1848³¹¹, firmado por él.

Un mes más tarde, el 28 de marzo de 1847, la GdM (núm. 4578) recoge los RRDD de la misma fecha por los que la Reina cambia la composición del Gobierno. El Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Estado pasa a ser D. Joaquín Francisco Pacheco, Diputado y nombra Ministro de CIOP a D. Nicómedes Pastor Díaz, ex - Diputado.

Durante los días 19, 20 y 21 de abril tienen lugar los debates en el Congreso de los Diputados sobre la totalidad del texto del PL 1848. Pero los trabajos quedan

³⁰⁷ GdM de 1 de noviembre de 1846, núm. 4431. El citado RD disuelve el Congreso de los Diputados, convoca las nuevas elecciones conforme a la Ley de 18 de marzo de ese mismo año y convoca a las Cortes para reunirse en Madrid el 25 de diciembre de 1846.

³⁰⁸ GdM de 13 de noviembre de 1846, núm. 4443.

³⁰⁹ GdM de 30 de enero de 1847, núm. 4521.

³¹⁰ Dice el Marqués de Miraflores en relación al Gobierno del Duque de Sotomayor: *Todavía eran mayores que las anunciadas las dificultades con que hubo de luchar el Ministerio de Pacheco, a que desde su nacimiento le dieron el nombre de “Puritano”, aceptando en teoría una severidad puritana, adoptada como precisa consecuencia de los deplorables disturbios que a la sazón se dejaron sentir en la estancia regia, a punto de verificarse una momentánea separación de los Reyes jóvenes e inexperimentados* (PANDO, M., Marqués de Miraflores (1964): *Memorias del reinado de Isabel II*. Edición y estudio preliminar de Manuel Fernández Suárez. Madrid, pág. 449)

³¹¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847, núm. 46, pág. 630. El texto del PL de 1848 se encuentra recogido en el Apéndice segundo a dicho número 46, págs. 653 y 654. En la GdM de 28 de febrero de 1847, núm. 4550, se recoge que el Ministro de CIOP subió a la Tribuna del Congreso de los Diputados y leyó un proyecto de ley sobre sociedades anónimas y comanditarias.

paralizados dos semanas más tarde, pues por RD de 5 de mayo³¹² se suspenden las Cortes Generales. Se convocan las elecciones de Diputados Provinciales para los días 18, 19 y 20 de julio.

La Reina cambia de nuevo el Gobierno el 31 de agosto de 1847³¹³. El Sr. Pacheco dimite de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Estado y el Sr. Pastor Díaz hace lo mismo del cargo de Ministro de CIOP, siendo sustituido por D. Antonio Ros de Olano, Mariscal de Campo y Diputado a Cortes.

El RD de 12 de septiembre de 1847³¹⁴ nombra Presidente del Consejo de Ministros a D. Florencio García Goyena, Ministro de Gracia y Justicia. Su permanencia en el cargo no llegó al mes. El 4 de octubre le sustituye en la Presidencia del Consejo de Ministros el veterano D. Ramón M^a Narváez, Duque de Valencia y Capitán General del Ejército. D. Lorenzo Arrazola, Diputado a Cortes y Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia es nombrado nuevo Ministro de Gracia y Justicia.

Al día siguiente, 5 de octubre, la Reina declara cerrada la Legislatura (había durado 11 meses) y convoca las Cortes para el día 15 de noviembre. Empieza la segunda legislatura durante la cual tienen lugar los trabajos parlamentarios para la aprobación del PL 1848. Esta Legislatura finalizará el 22 de marzo de 1848.

El 3 de noviembre se releva al Sr. Ros de Olano del cargo de Ministro de CIOP, encargando interinamente este Ministerio a D. José Sartorius, Ministro de la Gobernación del Reino³¹⁵. El RD de 10 de noviembre³¹⁶ nombra a D. Juan Bravo Murillo, Diputado a Cortes, Ministro de CIOP, quien permanecerá en el cargo hasta después de la aprobación de la Ley³¹⁷.

Los días 22, 23 y 24 de diciembre (fechas especialmente señaladas) tienen lugar en el Senado los debates sobre el PL 1848 remitido por el Congreso en el mes de abril.

El 19 de enero de 1848 se aprueba el texto definitivo en el Congreso de los Diputados³¹⁸. Cinco días después el Senado³¹⁹ recoge la Comunicación de dicha aprobación. La Ley es sancionada por la Reina el 28 de enero de 1848.

Por último, el 17 de febrero de 1848, a propuesta de Ministro de CIOP, Sr. Bravo Murillo, la Reina aprueba un RD "dictando el Reglamento para la ejecución de la Ley de 28 de Enero de este año sobre compañías mercantiles por acciones".

El resumen de todo lo anterior es el siguiente. Desde el 27 de febrero de 1847, fecha en la que se presenta el primer texto de PL 1848, hasta el 28 de enero de 1848, día de la sanción real de la Ley de 1848, han pasado once meses, durante los cuales se han sucedido cuatro Presidentes del Consejo de Ministros: D. Carlos Martínez de Irujo, D. Joaquín Francisco Pacheco, D. Florencio García Goyena y D. Ramón María Narváez y

³¹² GdM de 6 de mayo de 1847, núm. 4617.

³¹³ GdM de 1 de septiembre de 1847, núm. 4735.

³¹⁴ GdM de 13 de septiembre de 1847, núm. 4747.

³¹⁵ GdM de 4 de noviembre de 1847, núm. 4799.

³¹⁶ GdM de 12 de noviembre de 1847, núm. 4807.

³¹⁷ Será cesado por RD de 31 de agosto de 1849 (GdM de 2 de septiembre de 1849, núm. 5468).

³¹⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de enero de 1848, núm. 45, pág. 850.

³¹⁹ DsC. Senado. Sesión de 24 de enero de 1848, núm. 24, págs. 352 y 361.

se han nombrado cinco Ministros de Comercio, Instrucción y Obras Públicas: D. Mariano Roca de Togores, D. Nicómedes Pastor Díaz, D. Antonio Ros de Olano, D. José Sartorius (interino) y D. Juan Bravo Murillo. Como es lógico, estos continuos cambios influyeron en la redacción de la Ley y del Reglamento de 1848.

III. CREACIÓN EL 28 DE ENERO DE 1847 DEL MCIOP Y EVOLUCIÓN DURANTE SU PRIMER AÑO

Se dedica un apartado específico al MCIOP, porque su titular (en realidad, sucesivos titulares) fue el responsable de la tramitación e impulso del PL 1848.

Este Ministerio se creó el 28 de enero de 1847 (exactamente un año antes de la sanción real de la Ley de 1848), desgajado del Ministerio de la Gobernación de la Península.

El RD de 28 de enero de 1847 “Creando un nuevo Ministerio con la denominación de Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas”³²⁰ sancionado por la Reina Isabel II el mismo día³²¹ comienza por una Exposición que resulta importante para entender la nueva división y coordinación ministerial.

Se realiza un resumen histórico de la organización del sistema político de España desde los “augustos abuelos de V.M.” para justificar la propuesta de nueva organización del Consejo de Ministros y sus Ministerios. El punto de referencia es la Constitución de 1812 que creó dos nuevos Ministerios, el de la Gobernación de la Península y el de Ultramar³²² como respuesta “a la necesidad de dotar a la nación de una secretaría del Despacho que atendiese especialmente su gobierno civil”. Tras una reducción de Ministerios durante el reinado de Fernando VII, al inicio de la minoría de edad de Isabel II se creó el Ministerio de Fomento, que posteriormente se denominó “de lo Interior” y que en el momento de otorgar este RD de 28 de enero de 1847 se llamaba de la Gobernación de la Península.

La Exposición del RD expresa las serias dudas de que una sola persona pueda atender satisfactoriamente la “dirección de las administraciones públicas, civil y municipal por una parte, a la beneficencia, a los caminos, a la instrucción y a las obras públicas por otra”. Por este motivo proponen a la Reina la segregación de los ramos de beneficencia, instrucción y obras públicas del Ministerio de Gobernación y la sección de comercio del Ministerio de Marina (del cual dependían los asuntos de comercio), creando al efecto un nuevo Ministerio.

³²⁰ En aquella época se utilizan indistintamente los términos “Secretaría de Estado”, “Secretaría del Despacho” y “Ministerio”.

³²¹ GdM de 30 de enero de 1847, núm. 4521.

³²² “El siglo XIX se iniciaba en nuestro país con la clásica Administración central heredada del Antiguo Régimen. Cinco Secretarías del Despacho gestionaban los intereses del reino: Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina” (PÉREZ JUAN, J. A. (2008): *El Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas (1847-1851)*, Madrid, INAP, pág. 20). La denominación exacta de las dos nuevas Secretarías del Despacho es la de “Gobernación del Reino de la Península e Islas Adyacentes” y “Gobernación del Reino para Ultramar”.

Tras formular la consideración de que esta propuesta no debería suponer un aumento de los gastos públicos, proponen la aprobación de un RD (como así se hizo en la misma fecha) que establece:

- La creación de un nuevo Ministerio igual a los ya existentes con la denominación “Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas”.
- A él se incorporan la Dirección de Instrucción pública y las Secciones de Beneficencia y Obras Públicas dependientes de la Secretaría de la Gobernación, así como la Sección de Comercio de la Secretaría de Marina.
- El nuevo Ministro de CIOP (nombrado el mismo día en que se aprueba este RD) someterá al Consejo de Ministros y a la Real aprobación un proyecto de Decreto estableciendo la forma, atribuciones y planta del nuevo Ministerio.
- Hasta que las Cortes aprueben los presupuestos de gastos generales del Estado, se atenderá a los del nuevo Ministerio por los de la Gobernación y Marina en la parte que les corresponda “y del fondo de imprevistos en lo restante”.
- Por último, los encargados de la ejecución del RD serán el Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros de Marina, Gobernación y el de CIOP.

El 5 de febrero de 1847, una semana más tarde, Martínez de Irujo, Presidente del Consejo de Ministros, propone a la Reina que toda la materia de Agricultura pase a depender del recién creado MCIOP y que el negociado de beneficencia pública quede en el Ministerio de la Gobernación del Reino³²³.

El RD de 5 de febrero de 1847 regula las competencias de cada ramo del recién constituido Ministerio, quedando los de Comercio y Obras Públicas, por lo que aquí interesa, de la siguiente manera:

Competencias del Ramo de Comercio del MCIOP:

1. Organización y personal de las juntas de comercio y nombramiento de sus empleados.
2. Organización y personal de los tribunales del ramo con sus empleados y dependencias.

³²³ GdM de 11 de febrero de 1847, núm. 4533. Se pueden destacar las siguientes palabras de la Exposición a la Reina en la que se le propone la aprobación de los pertinentes Reales Decretos:

La reunión del comercio, de la agricultura y de las obras públicas en un mismo ministerio está por otra parte apoyada, no sólo en los auxilios que recíprocamente se prestan estos medios de crear la prosperidad pública, sino también en sus estrechas relaciones. Necesita la agricultura de los canales de riego para fecundar los campos y de las comunicaciones públicas para la extracción de sus productos. Así es como el enlace de diversos intereses, dirigidos todos a un fin común, vienen a reunir en el mismo ministerio el comercio, la agricultura, las obras públicas y la enseñanza y propagación de las ciencias y las artes que crean y perfeccionan estos poderosos gérmenes de la prosperidad pública.

3. Organización y personal de la administración e inversión de los fondos que recaudan las juntas de comercio.
4. Los negocios relativos al aumento o reducción de derechos de importación o exportación y al recargo o supresión de arbitrios, cuyas decisiones en último resultado corresponden al ministerio de Hacienda.
5. Los incidentes sobre mejora y fomento de cabotaje.
6. La concesión de ferias y mercados.
7. El arreglo de pesos y medidas.
8. Los expedientes gubernativos sobre el cumplimiento del CCom 1829 y ley de enjuiciamiento del ramo.
9. Las casas-lonjas o bolsas de comercio.
10. Las consultas del ministerio de Estado sobre tratados de comercio e incidencias del ramo con las demás naciones.

Competencias del Ramo de Obras Públicas del MCIOP:

1. Carreteras y ferro-carriles, canales de navegación y de riego, acequias, obras públicas y privadas de los ríos navegables y flotables y policía de los caminos.
2. Desagüe de lagunas y formación de pantanos.
3. Las obras de mar y todas las accesorias de los puertos, su limpia y conservación, fosos, boyas y balizas.
4. La junta consultiva de estos ramos, el cuerpo de ingenieros y su escuela especial.
5. Portazgos, pontazgos, barcaje, aranceles y tarifas de peaje y transporte por toda vía pública: administración y arriendo de sus productos.
6. Concesiones y contratas de estos ramos.
7. La construcción de las líneas telegráficas.
8. Los monumentos y edificios costeados por el Estado.

D. Mariano Roca de Togores, primer Ministro de CIOP, dedicó los primeros días después de su nombramiento a la organización del Ministerio. El 18 de febrero de 1847 propone a la Reina la aprobación de un RD³²⁴ por el que se organiza la estructura del Ministerio, que se dividirá en tres Direcciones Generales: la de Instrucción pública, la

³²⁴ GdM de 20 de febrero de 1847, núm. 4542.

de Obras públicas y la de Agricultura y Comercio. El Director General de Agricultura y Comercio será D. Cristóbal Bordiu³²⁵, el de Obras públicas será D. José García Otero, Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales, y el de Instrucción Pública será D. Antonio Gil de Zárate.

El 7 de abril de 1847, el Sr. Pastor Díaz, nombrado Ministro de CIOP el 28 de marzo, solicita a la Reina la aprobación de un RD "para la aprobación de un cuerpo consultivo en los negocios de agricultura y comercio"³²⁶. El motivo es que "el ramo de Instrucción tiene un consejo y el de Obras públicas una junta para ilustrar la marcha de la administración activa". Faltaba, por tanto, un Órgano consultivo para los ramos de comercio y agricultura. Con independencia de la necesidad de dicho Órgano, lo cierto es que en un primer momento no se crearon dos "Cuerpos" independientes, uno para Agricultura y otro para Comercio, sino que se estableció uno solo.

Es importante tener conocimiento de la existencia de este Consejo de Agricultura y Comercio, pues debió tener alguna relación con las redacciones del PL 1848 y porque quedaba facultado para, posteriormente, influir en la tramitación y aprobación tanto de los RD como de las leyes que autorizarían la constitución de sociedades por acciones durante la permanencia en vigor de la Ley de 1848.

El Consejo de Agricultura y Comercio, según lo establecido en el RD que lo crea, se compone del "Ministro del ramo, presidente; de un vicepresidente nombrado por Mí [la Reina]; del director general de Comercio y de 14 vocales, de los cuales me propondrá 12 el Ministro de CIOP y 2 el de Hacienda. Será Secretario del Consejo de comercio el oficial del ministerio encargado de este ramo. Todas estas funciones serán gratuitas" (artículo 1).

Además, el Consejo dictaminará sobre todas las cuestiones que el Ministro estime conveniente (artículo 2), quien podrá solicitar al Consejo que proceda a la averiguación de hechos que puedan convenirle (artículo 3).

Los componentes del primer Consejo son los siguientes: Vicepresidente, D. Gaspar Remisa. Vocales: D. Manuel Gaviria y Alcoba, D. Joaquín Fagoaga, D. Manuel Salvador López, D. José Buchenthal, D. José Caveda, D. Juan García Carrasco, Conde de Santa Olalla, D. Fermín Lassala, D. Buenaventura Carlos Aribau, D. Juan Manuel Calderón, D. Juan Antoine y Zayas, D. José Manuel Collado y D. Antonio Guillermo Moreno (Senador, que intervino en los debates sobre el PL 1848 los días 22 y 24 de diciembre de 1847). Todos estos propuestos por el Sr. Pastor Díaz. El Ministro de Hacienda, el conocido D. José de Salamanca, nombró a D. Antonio Jordá y Santandreu y a D. Nazario Carriquiri.

El número de integrantes del Consejo aumentó a 20 en virtud de un RD de 29 de abril de 1847³²⁷ para dar entrada a "personas entendidas en materias agrícolas", pues parece que los otros vocales eran expertos sólo en materia de comercio. Se creó otra Secretaría dentro del Consejo exclusivamente para los asuntos de agricultura. Estos nuevos vocales fueron: "D. Mariano Miguel de Reinoso, propietario y Diputado a Cortes, D. Pascual Asensio, catedrático de agricultura en el jardín Botánico de esta

³²⁵ Reales decretos de 18 de febrero de 1847 (GdM de 20 de febrero de 1847, núm. 4542)

³²⁶ GdM de 10 de abril de 1847, núm. 4591.

³²⁷ GdM de 1 de Mayo de 1847, núm. 4612.

corte, D. José María Benjumea, propietario y Senador del Reino, D. Luis Piernas, propietario y teniente alcalde de Madrid, D. Julián Aquilino Pérez, propietario y Senador del Reino, y D. Antonio Bulnes, propietario y comandante de artillería retirado".

Con fecha de 9 de octubre de 1847³²⁸, el Consejo pasa a denominarse Consejo Real de Agricultura, Industria y Comercio y se reorganiza su funcionamiento, creándose tres Departamentos: agricultura, industria y comercio. También se nombran nuevos miembros del Consejo: D. Pedro Colón, D. Nicolás Pérez de Osorio, Sr. García Golfín, D. Miguel Laso de la Vega, D. José María Huet, D. Francisco de Laiglesia y Darrac; D. Eugenio Moreno López, D. Joaquín Posada Moscoso, D. Manuel Mazarredo, D. Rafael Cabanillas, D. Juan Subercase, D. José Solano, D. Joaquín Alfonso, D. Antonio Moreno, D. Ramón Temprado, D. Vicente Juan Pérez, D. Blas Requena y D. Pascual Madoz.

IV. RO DE 9 DE FEBRERO DE 1847 POR LA QUE SE SUSPENDE TRANSITORIAMENTE LA COMPETENCIA DE LOS T. de c. PARA APROBAR LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES POR ACCIONES

La RO de 9 de febrero de 1847³²⁹ por la que se suspende interinamente la competencia de los T. de c. para aprobar las compañías mercantiles por acciones, es el primer paso normativo para acabar con el sistema instaurado por el CCom 1829 en su artículo 293 y empezar el nuevo, más restrictivo, por el que se exige Ley o RD para la constitución de sociedades por acciones.

Establecía el artículo 293 CCom 1829 que *es condición particular de las compañías anónimas que las escrituras de su establecimiento y todos los reglamentos que han de regir para su administración y manejo directivo y económico, se han de sujetar al examen del Tribunal de comercio del territorio donde se establezca; y sin su aprobación no podrán llevarse a efecto.*

Se trata de una RO que deroga una Ley (el citado artículo 293 CCom 1829) atacando frontalmente el principio elemental de jerarquía normativa. Además, hay que recordar que el Ministro de CIOP promotor de esta RO es el Sr. Roca de Togores, que fue nombrado 10 días antes, el 28 de enero de 1847 y, durante esos días, se encontraba inmerso en la regulación de la estructura del recién creado Ministerio.

Nos encontramos, por tanto, ante una medida adoptada fuera de toda lógica jurídica cuya justificación formal es difícilmente aceptable, por muy mala que fuera la situación de los mercados financieros y empresariales de la España de 1846 y principios de 1847.

La RO no tiene ningún artículo. En la primera parte se encuentra la justificación material de las medidas adoptadas. Se pueden destacar los siguientes párrafos:

El espíritu de asociación y de empresa que rápidamente se arraiga entre nosotros, así como es un germen fecundo de prosperidad pública cuando las

³²⁸ GdM de ese mismo día, núm. 4773.

³²⁹ GdM de 14 de febrero de 1847, núm. 4536.

leyes regularizan su acción y le facilitan los medios de desarrollarse, puede producir también muy graves daños si abandonado a si mismo y sin condiciones, ninguna traba ha de encontrar el interés individual de los medios de realizar sus especulaciones. Una prueba evidente de esta verdad se encuentra en la creación de las compañías anónimas que con distintos nombres y aplicaciones se multiplican en nuestro suelo.

Deber es del Gobierno protegerlas, impulsar su desarrollo y procurar que los resultados correspondan cumplidamente a los fines de su estatuto. No le llenaría sin embargo cuando al presentarle su apoyo y remover los obstáculos que pudieran oponerse a su formación dejase de impedir los riesgos que llevan consigo, quedando a merced de los particulares que las promueven las garantías del éxito, la posibilidad de abusar de la credulidad pública y de halagar con mentidas esperanzas la buena fe de los que con más celo que prudencia confían su porvenir y su fortuna a especulaciones comerciales e industriales no bien conocidas y calculadas. Nada por desgracia más común que alimentar esta afición general a las empresas de todas clases con promesas seductoras, pocas veces cumplidas y que convertir en negociaciones fraudulentas aquellas mismas que, con un carácter legal y la falsa seguridad de un feliz resultado despiertan grandes esperanzas, comprometiendo considerables intereses

La segunda parte del texto de la RO recoge las medidas adoptadas. La transcripción de los correspondientes párrafos es suficientemente expresiva como para omitir comentarios:

Habíase creído que el artículo 293 del Código de comercio pudiera bastar a prevenir estos males al exigir como condición esencial de las compañías anónimas, que así las escrituras de su creación, como los reglamentos particulares para su administración y régimen económico y directivo, obtuviesen la aprobación de los tribunales de comercio; pero la experiencia ha demostrado que si esta garantía de legalidad no ha de ser eludida por el interés individual mal entendido, es preciso que sean con más especialidad determinadas las circunstancias de la aprobación que se exige, y que se dicten al efecto las reglas y condiciones que la experiencia ha hecho necesarias conciliándolas con el espíritu y la letra del Código de comercio. Pero como esta resolución que ha de modificar una ley vigente debe necesariamente llevar el carácter de tal y, como por otra parte el abuso que ya se hace de la facultad de asociarse no consienta dilación en el remedio, S. M. la Reina (Q.D.G.) se ha servido resolver que interinamente y hasta tanto que las Cortes aprueben un PL 1848 sobre sociedades anónimas, suspenda ese tribunal de comercio el conceder su autorización para la organización de ninguna de ellas, siendo además la voluntad de S.M. que esta medida provisional no se entienda con aquellas que, habiendo obtenido ya la aprobación de la escritura de su establecimiento, les falte alcanzar igualmente la de sus reglamentos.(el subrayado es nuestro)

Quedan a salvo de esta RO solamente aquellas Sociedades que antes del 14 de febrero (fecha de la publicación en la GdM) hubieran obtenido la aprobación de la escritura de constitución, aunque sus reglamentos no estuvieran aprobados.

La RO, firmada por "Roca" (sic), se dirige a los "Sres. Prior y cónsules del T. de c. de ...".

Las consecuencias de esta RO fueron bastante perniciosas. El desconcierto debió ser tal, que el 15 de abril de 1847³³⁰, el nuevo Ministro de CIOP, D. Nicómedes Pastor Díaz, propone a la Reina la aprobación de un RD que da comienzo con las siguientes palabras:

Señora: La Real orden de 9 de Febrero último prohibiendo que por los tribunales de comercio se autorice el establecimiento de sociedades anónimas ínterin no se apruebe por la Cortes una ley sobre el particular, ha creado un estado de cosas que aunque interino, no puede sostenerse por más tiempo.

En uno de los siguientes apartados del presente capítulo se estudia el contenido de este RD de 15 de abril de 1847 que deroga la RO.

No se puede dejar de mencionar aquí las referencias que se hicieron a esta RO de 9 de febrero de 1847, durante las sesiones del Congreso de los Diputados en las que se discutió el Dictamen sobre el PL 1848 presentado por la CCD (especialmente la sesión del día 20 de abril de 1847).

En la primera sesión en la que se inició el debate artículo por artículo del PL 1848, el Diputado Sr. Martínez Almagro, haciendo referencia a la RO y demás circunstancias que la rodearon, decía:

*Yo conozco como la Comisión, la importancia de poner término a los desórdenes, a los escándalos, a la anarquía que ha habido en la constitución de sociedades anónimas; creo no sólo urgente poner término a ese estado de anarquía y de escándalo, sino también a la incertidumbre, al estado transitorio en que en el día se encuentra la constitución de las sociedades anónimas después de los decretos dados por el gobierno, el uno suspendiendo la autorización para formar nuevas sociedades, el otro permitiendo éstas bajo ciertas condiciones.*³³¹ (el subrayado es nuestro)

Y en esa misma sesión, el entonces Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz, tras una larga discusión entre varios Diputados sobre el artículo 1 del PL 1848 (la necesidad de autorización por Ley o RD), justifica la RO de 9 de febrero, obra de su antecesor, Sr. Roca de Togores:

(...) las causas son muchas, las causas son políticas, son sociales, son de la época, son de las vicisitudes porque hemos pasado, están a la vista de todos, todos las sienten y conocen; no hay necesidad de señalar la causa del mal, pero el mal existía. El agio, las especulaciones bursátiles habían contribuido a hacer esa inmensidad de capitales, habían creado infinidad de fortunas. El gobierno se vio obligado a atajar el mal; el gobierno se vio obligado a tomar aquellas precauciones que no podía dejar de tomar un gobierno que se respetara, un gobierno que estimará en algo su misión.

³³⁰ GdM de 17 de abril de 1847, núm. 4598.

³³¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1434.

*El gobierno creyó y debió remediar el agio de las operaciones bursátiles; (...) El gobierno prohibió las operaciones a plazo, el gobierno prohibió el juego; pero quedaba el espíritu de especulación, quedaba el espíritu del agio, quedaba la tendencia, y esta tendencia tomó otro camino. No había ley sobre las sociedades anónimas, y el juego no hizo más que cambiar de rumbo. (...) Se prohibió en la bolsa las jugadas a plazo, y los jugadores discurrieron el medio de jugar con acciones.*³³² (el subrayado es nuestro)

Y en este marco pretende justificar la RO, desde un punto de vista político y no jurídico, ya que, como se apuntaba anteriormente, es inaceptable que una RO derogue un artículo del CCom 1829. Sus palabras fueron estas:

*Antes de nada, señores, vuelvo a repetir, y deseo que quede consignado, que el gobierno ha tomado la iniciativa en este particular, y que las censuras que ha sufrido el gobierno en este punto fuera de aquí y antes de que esta discusión viniera al parlamento, han sido la de ser tan celoso de la moralidad pública y de las garantías que deben obtener los ciudadanos de las compañías que se forman a la sombra de la Ley, que se había aprobado las facultades legislativas, y que pasando por encima de la consideración limitada al código de comercio, había por un decreto*³³³ *prohibido la formación de sociedades anónimas. Esto es verdad, señores. Habían sido tan poderosas para el gobierno la necesidad, la urgencia de moralizar, de atajar y contener los abusos que a la sombra de la anterior anarquía habían nacido, que no temió echar sobre si la responsabilidad de una manera que pudiera atraer sobre si la censura del parlamento; pero a esto siguió inmediatamente presentar al Congreso un proyecto de ley que se había obligado a redactar en el momento en que tomaba una disposición interina tal cual la que el país ha visto.*³³⁴ (el subrayado es nuestro)

Parece, por tanto, que quedaba justificada la RO en la medida en que el Gobierno iba a presentar con carácter de urgencia el PL 1848 para resolver la situación. Y, efectivamente, este PL 1848 fue presentado el 26 de febrero de 1847, días después de la RO (véase el siguiente apartado).

Resultan también de interés las palabras que pronuncia el Sr. Ministro para justificar la derogación del artículo 293 CCom 1829, en las que afirma que quien lo había derogado en realidad era la moral pública, no la RO:

*Señores, el espíritu de asociación naufragó y se desnaturalizó en ese mal camino. Cuando el gobierno quiso poner un freno a esa tendencia, cuando el gobierno quiso atajar ese abuso (y atajar ese abuso era lo único que tenía que hacer), las sociedades estaban hundidas, estaban suicidadas. Para impedir que se formaran sociedades no había necesidad de ley alguna: la moral pública las había rechazado; las sociedades habían perdido la confianza pública, estaban hundidas.*³³⁵ (el subrayado es nuestro)

³³² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1441.

³³³ En realidad debe entenderse que la referencia es a la RO de 9 de febrero.

³³⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1440.

³³⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1441.

Por último, en la siguiente sesión del Congreso de los Diputados (la del día 21 de abril de 1847) un miembro de la CCD, el Diputado Sr. Miota, hace una referencia ciertamente singular a la RO de 9 de febrero. Es obligado transcribir textualmente su intervención antes de realizar ningún comentario:

*Cuando se suspendió el artículo 293 del Código de comercio; cuando el Ministerio anterior en 9 de Febrero último tuvo por conveniente suspender ese artículo, prohibiendo que se establecieran sociedades anónimas procedió de una manera que si en alguna ocasión es disculpable la suspensión de la ley por medio de un decreto, lo fue en aquella ocasión.*³³⁶ (el subrayado es nuestro)

Sorprende que un Sr. Diputado, miembro además de la CCD, justifique la derogación de un artículo de una ley por una RO emanada de un Ministerio. Más extraño es aún que este mismo Diputado manifieste que no estaba de acuerdo con la derogación por ese procedimiento del artículo 293 CCom 1829, pues entendía que se podía haber conseguido el mismo objetivo mediante una *instrucción que regularizase la ejecución de la misma ley*³³⁷.

Interesa resaltar que esta intervención del Diputado Sr. Miota se debía a la constatación de que el ámbito de aplicación de la RO de 9 de febrero no eran las compañías mercantiles por acciones, sino solamente las sociedades anónimas, pues el artículo 293 CCom 1829 se refería exclusivamente a dichas sociedades y no a las sociedades comanditarias por acciones.

Para finalizar los comentarios a la RO de 9 de febrero de 1847, transcribimos el siguiente comentario de AVECILLA, publicado en 1849, dos años después de la promulgación de la norma: *la redacción de toda la Real orden que nos ocupa de 9 de febrero de 1847, da a entender bien a las claras, el poco convencimiento que arrastraba a estas medidas al Gobierno de S. M.; fluctuaba entre mil dudas, conocía la trascendencia de la determinación, y lleno de incertidumbre daba el primer paso en tan espinosa materia, lanzando la espada de Damocles [sic] en medio de un campo en que debiera ser neutral por hallarle erizado de vastos y complicados intereses privados. Sea como quiera, la Real orden de 9 de febrero de 1847, fue el primer paso que se dio en la innovación de la jurisprudencia establecida por el Código en materia de compañías*³³⁸.

V. PL 1848 PRESENTADO AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR EL MINISTRO DE CIOP, SR. ROCA DE TOGORES, EL 26 DE FEBRERO DE 1847

El 26 de febrero de 1847 aparece el denominado Proyecto de Ley "sobre sociedades anónimas"³³⁹, que será el primer borrador sobre el que trabajen las dos Cámaras.

³³⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1474.

³³⁷ Ídem.

³³⁸ AVECILLA, P. (1849): *Diccionario de la legislación mercantil...*, pág. 99.

³³⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847, Apéndice Segundo al núm. 46, págs. 653 y 654.

Su promotor es el entonces Ministro de CIOP, D. Mariano Roca de Togores, siendo Presidente del Consejo de Ministros D. Carlos Martínez de Irujo.

El antecedente próximo de este PL 1848 es la RO de 9 de febrero de 1847 por la que se suspende interinamente la competencia de los T. de c. para aprobar las compañías por acciones, cuyo autor fue el mismo Ministro y que se ha estudiado en el apartado anterior.

El PL 1848 consta de un Preámbulo y de 15 artículos. Antes de analizar someramente el texto del articulado, interesa hacer una breve referencia al Preámbulo.

El Preámbulo recoge las bases del PL 1848. Estas bases se pueden agrupar en dos ámbitos: la justificación sociológica, económica e incluso filosófica; y las propuestas jurídico-mercantiles.

En cuanto a las primeras, la línea argumental (que se repetirá continuamente en la defensa de las posiciones gubernativas durante los debates del PL 1848) se centra, por un lado, en el reconocimiento de las bondades del espíritu de asociación empresarial y, por otro, de las consecuencias dañinas del abuso de dicho asociacionismo empresarial a través de las sociedades anónimas³⁴⁰.

En este sentido, el Preámbulo empieza diciendo:

Las compañías anónimas, realización parcial del espíritu de asociación, son sin duda el medio más eficaz y poderoso de favorecer el desarrollo de la riqueza pública y dar cima a empresas de utilidad general, superiores a los esfuerzos del particular y aun a veces de los Gobiernos mismos.

Y continúa más adelante:

Algunas de estas sociedades, creadas a vista de todos, lo fueron acaso con el único objeto de especular sobre la credulidad de los incautos, lo que es importante evitar, así como que por efecto de maniobras empleadas con este fin se aumente el numerario en pocas manos, sobrevenga una crisis comercial que ponga en alarma al comercio de buena fe, y lo que es aun más lamentable, que los artículos de primera necesidad puedan ser objeto de estas especulaciones inmorales, elevando sus precios fuera del alcance de una gran parte de nuestros artesanos.

Las propuestas de naturaleza jurídico-mercantil tienen como objetivo poner "alguna traba a la excesiva libertad de la formación de las sociedades anónimas" a través de las siguientes medidas:

³⁴⁰ El Preámbulo acude a un símil un tanto curioso: las sociedades anónimas son parecidas a los procesos de industrialización del trabajo, que llevado al extremo puede ocasionar graves quebrantos a la salud de los trabajadores.

Puede decirse que estas sociedades son al desenvolvimiento de la riqueza pública lo que la subdivisión del trabajo al aumento y perfección de la producción fabril; pero al mismo tiempo, así como éste, llevado al extremo, perjudica a las facultades físicas e intelectuales del trabajador, así aquellas, dejadas en una completa libertad, pueden ser, más bien que medios de desarrollar la riqueza, los lazos tendidos a la credulidad y un resorte para influir de una manera altamente perjudicial en el crédito público.

- Asegurar que el objeto social es lícito y útil.
- Que la sociedad cuenta con los medios necesarios para alcanzar su objeto social.
- Que se establezca el modo peculiar de contratar por parte de la sociedad anónima, pues nunca produce responsabilidad "*directa, personal y absoluta*" contra los socios.

Las consecuencias de estas medidas serían la reducción "*de las sociedades anónimas que ya existan y las que en lo sucesivo se formen, a las condiciones propias y naturales de su institución*".

Son expresivas las palabras del Sr. Pastor Díaz, siendo Ministro de CIOP durante los debates parlamentarios sobre el PL 1848, en las que, con motivo de otras cuestiones, resume el Proyecto del Gobierno con las siguientes palabras:

*El proyecto del gobierno era muy sencillo. El gobierno quería garantizar tres cosas: el objeto de las sociedades, el capital de las compañías, y hasta cierto punto la responsabilidad moral de las personas de cuyas circunstancias pende más de lo que parece la rectitud en esta clase de negocios.*³⁴¹ (el subrayado es nuestro)

Con relación a los 15 artículos que integran este texto del PL 1848, se ha de realizar un comentario pormenorizado de casi todos ellos.

El artículo más importante o básico del PL 1848 es el artículo 1, según el cual sólo se podrá constituir sociedad cuyo capital esté en todo o en parte dividido en acciones mediante un RD que autorice su formación. Como se tendrá ocasión de ver más adelante, este artículo sufrirá una modificación sustancial encaminada a aumentar el intervencionismo del Parlamento en la aprobación de las sociedades por acciones. El PL 1848 consideraba suficiente para evitar los abusos cometidos por estas sociedades, la exigencia de aprobación por RD. En cambio, el Parlamento, estimó que no era bastante y exigió para determinados casos la aprobación de las sociedades anónimas mediante ley.

Por tanto, una primera conclusión que se puede extraer, es que el Proyecto del Gobierno no era tan intervencionista como quedó el texto final aprobado por las Cortes, en la medida en que "sólo" exigía la aprobación de las sociedades por acciones mediante RD, pero no por Ley del Parlamento.

En este sentido, el primer día de los debates en el Congreso de los Diputados sobre el texto del Dictamen del PL 1848, el entonces Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz, hace una referencia a este tema con las siguientes palabras:

El gobierno, por consiguiente, tenía que moralizar, no ahogar ese espíritu; tenía que exigir garantías, no establecer fórmulas, no poner trabas. Por eso, señores,

³⁴¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1442.

el proyecto que presentó el gobierno no hacía ninguna mención de la legislación, de la parte legislativa del parlamento. El gobierno creyó que las sociedades anónimas necesitaban una autorización; las sociedades anónimas necesitaban una sanción de autoridad y de confianza delante del país³⁴² (el subrayado es nuestro).

Y en otra ocasión justifica por qué se excluyó la autorización legal, pues el Gobierno pensaba que con la intervención del Consejo Real se impedirían posibles abusos por parte de algún miembro del Gobierno o del mismo Gobierno, pero siempre sobre la base de que la autorización correspondía en exclusiva al Gobierno:

El gobierno creyó que lo establecido, que lo propuesto a las Cortes en el proyecto que se presentó llenaba todas esas condiciones, porque según él era necesaria la autorización del gobierno para el establecimiento de las compañías, y creía que ésta era suficiente garantía, porque al concederse esta facultad al gobierno se disponía que fuera con la intervención del Consejo real. Era menester o ir al Consejo para dar esta autorización, y en este examen que del asunto había de hacer el gobierno y el Consejo real con todos los documentos a la vista, se había de ver si era posible llenar....³⁴³ (el subrayado es nuestro).

El artículo 2 enumera las actividades a las que, con carácter exclusivo, podían dedicarse las sociedades anónimas:

- La construcción de obras de utilidad pública
- El fomento directo de la agricultura, de la industria fabril o del comercio
- La aseguración de la propiedad mueble o inmueble, de las operaciones de tráfico y giro mercantil o industrial y de los riesgos de cualquiera clase en todo género de contratación
- Cualquier otra empresa que a juicio del Gobierno sea de conveniencia general y común y que no impida el libre ejercicio de ningún ramo de comercio o industria ni se dirija a monopolizar los artículos de primera necesidad

El artículo 3 recoge previsiones de variada índole: la sociedad ha de constituirse para uno o más objetos sociales determinados; el capital social debe ser proporcionado a dichos objetos; el capital, antes de la declaración de constitución de la sociedad, debe estar suscrito en un 50 %, haciéndose efectivo según establezca el RD que la autorice.

El artículo 4 determina que todas las acciones habrán de ser nominativas y estar numeradas.

En el artículo 5 se recoge la aprobación de la escritura de establecimiento y de todos los reglamentos de la sociedad con carácter previo a la autorización de la

³⁴² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1441.

³⁴³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1442.

sociedad. En dicha autorización se fijará el plazo para que dé comienzo a su actividad, entendiéndose que si no lo hiciera caducará la autorización.

El artículo 6 exige aprobación gubernativa de las modificaciones estatutarias, así como que para el caso de que alguna sociedad quiera dividir su capital en acciones, deberá obtener el correspondiente RD.

Para evitar la especulación sobre títulos de acciones aún inexistentes, el artículo 7 prohíbe la emisión de acciones hasta que se haya declarado oficialmente constituida a la sociedad.

El artículo 8 declara "ilegítimos" todos los contratos celebrados en nombre de la sociedad antes de su completa aprobación, siendo responsables quienes hayan actuado en representación de la sociedad.

La doctrina *ultra vires* es recogida en el artículo 9, según el cual, la sociedad sólo se puede dedicar a su objeto social. Todos los actos que se extralimiten de él serán responsabilidad personal de los administradores. Queda autorizada la colocación de fondos sobrantes en descuentos o préstamos.

El artículo 10 se refiere a las sociedades comanditarias en las que, además de la responsabilidad común de la masa social, en todos los contratos los socios gerentes tendrán la responsabilidad solidaria a la que alude el artículo 270 CCom 1829.

El artículo 11 establece que las acciones de las sociedades establecidas según el PL 1848 cotizarán en la Bolsa como valores comunes de comercio, según lo dispuesto en la Ley de Bolsa.

La adaptación a la nueva regulación de las sociedades ya existentes, se regula en el artículo 12. Las sociedades por acciones ya establecidas, deben solicitar en el plazo de un mes la autorización recogida en el artículo 1, es decir, el RD. Si no se solicitaran la adaptación en el plazo previsto, se tendrán por disueltas, comenzando su liquidación.

En el artículo 13 se prevé que Leyes especiales regularán las sociedades "dirigidas al beneficio de minas y fundición de minerales, así como la de aquellas que tengan por objeto el establecimiento de Bancos de emisión".

El último artículo, el 15, deroga expresamente el artículo 293 CCom 1829.

Por último, debe decirse que el texto de este PL 1848 sufrió modificaciones sustanciales desde el Dictamen de la CCD hasta el final de los debates parlamentarios, de tal manera que el texto definitivamente aprobado difiere enormemente del que presentó el Ministro Roca de Togores.

VI. DICTAMEN DE LA CCD SOBRE EL PL 1848 (16 DE ABRIL DE 1847)

Una vez presentado el PL 1848 por el Ministro de CIOP, Sr. Roca de Togores, el 26 de febrero de 1847, al Congreso de los Diputados, pasó a la CCD, que emitió su Dictamen con fecha 16 de abril de 1847³⁴⁴.

El Presidente de la CCD fue D. Antonio Ríos Rosas, el Secretario D. Fernando Rodríguez Rivas y los Vocales D. Rufino García Carrasco, D. Manuel Bertrán de Lis, D. Gregorio Miotra y D. Joaquín Marco.

Este Dictamen es de gran importancia, pues supone un giro sustancial respecto a los planteamientos del PL 1848 presentado por el Gobierno. A lo largo de los debates parlamentarios del Congreso y del Senado sufrirá varias modificaciones, pero sin afectar a los fundamentos del nuevo texto.

El Dictamen consta de dos partes. En la primera, se expresan las bases del mismo y, en la segunda, se recoge el nuevo Proyecto de Ley "sobre compañías mercantiles por acciones", que consta de 21 artículos.

La primera parte comienza reconociendo, por un lado, la importancia de las sociedades mercantiles para el progreso del país y, por otro, la necesidad de poner un límite o freno a los abusos cometidos hasta la fecha³⁴⁵. Este planteamiento, expuesto ya en el preámbulo al PL 1848 de Roca de Togores, es asumido por la CCD *adoptando el pensamiento del Gobierno*, si bien, *ha procurado seguir el camino más derecho y más llano para acercarse al término apetecido*. Por tanto, la CCD reconoce que el enfoque dado por el Gobierno en el PL 1848 es correcto, si bien estima que se ha quedado corto o escaso para llegar al objetivo final.

En un párrafo de esta primera parte, la CCD sintetiza el concepto y la naturaleza jurídica de la compañía mercantil por acciones, que resulta especialmente interesante para el presente estudio. Dice así:

La compañía mercantil por acciones, cuya denominación comprende a todas aquellas en que la responsabilidad se ciñe al fondo social, no entra en la esfera general del comercio; su existencia es de suyo una excepción del derecho común; su responsabilidad limitada le da por sí sola el carácter de una especie de privilegio; por consiguiente, sólo un objeto de reconocida utilidad pública, fuera del alcance y superior a los medios del capital privado, puede autorizar con justicia su establecimiento. (el subrayado es nuestro)

³⁴⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847, Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393. Recogido también en la GdM de 19 de abril de 1847, núm. 4600.

³⁴⁵ Se pueden destacar las siguientes palabras;

(La Comisión) no se lisonjea con la esperanza de haber acertado a resolver cumplidamente una materia en que ha sido necesario luchar, no menos que con la novedad, incertidumbre de los principios, con las graves dificultades prácticas y las complicaciones de nuestra situación especial. No era, en verdad, fácil aspirar a la extirpación inmediata de los abusos que tan justamente han llamado la solicitud del Gobierno, sin detrimento del respeto debido a los intereses y los derechos que han crecido a la sombra de la ley; ni lo era tampoco amalgamar aquella severa y eficaz restricción que tanto se necesita para evitar la reproducción del mal, con el desembarazo y soltura que ha menester el desarrollo de uno de los primeros elementos de prosperidad en las Naciones modernas.

Por lo tanto, la nota definitoria de la “compañía mercantil por acciones” es que la responsabilidad se limita al capital social, es decir, los socios sólo son responsables de las deudas sociales hasta la cuantía que se han comprometido a aportar al capital social. Consecuentemente, se trata de una sociedad que tiene un carácter de “excepción” o de “privilegio” con respecto a los demás tipos de sociedades. Y, por todo ello, se concluye que solamente pueden ser titulares de este privilegio aquellas compañías que se dediquen a un objeto de utilidad pública, que exceda de las posibilidades normales del capital privado.

Continúa la CCD destacando el acierto del Gobierno al sustraer la competencia de la aprobación de las sociedades por acciones de los T. de c.; reconoce la dificultad de precisar en determinados casos concretos si un objeto social se puede incluir dentro del “principio de la utilidad común”; y denuncia determinadas prácticas administrativas que suponen desvíos y abusos que deben corregirse.

Por todo lo anterior, la CCD

... buscando aquella segura norma y eficaz garantía que da la luz del público debate, ha recurrido a la intervención desembarazada y amplia de la potestad legislativa; en lo cual, siguiendo el ejemplo de otras Naciones cuya ilustración y experiencia pueden servirnos de pauta y guía en esta materia, no se adultera en lo más mínimo la índole de aquel poder, puesto que debiéndose limitar de ordinario en este punto a fijar las reglas y bases fundamentales, deja intacta la acción administrativa del Gobierno.

En este párrafo se justifica la intervención del Parlamento para aprobar determinadas sociedades por acciones, separándose del espíritu del PL 1848 presentado por el Gobierno. Se invoca la necesidad de “un público debate” para evitar los peligros de las ocultas maquinaciones de quienes pretendan aprovecharse de la constitución de estas sociedades para su exclusivo beneficio particular. Parece como si todo el esfuerzo del Legislador se encaminara a proteger a los inversores en vez de garantizar la solvencia patrimonial de estas sociedades privilegiadas con la limitación de la responsabilidad.

Este mismo párrafo que se está comentando trata de adelantarse a posibles críticas (como así ocurrió durante los debates parlamentarios) sosteniendo que la aprobación parlamentaria no supone inmiscuirse en las competencias del Poder Ejecutivo.

La aprobación parlamentaria de determinadas sociedades por acciones tiene carácter excepcional. Así, declara la CCD:

Fuera de estos casos graves, especiales y no muy frecuentes, la comisión entra de lleno en el sistema del proyecto sometido a su examen y cree, como el Gobierno de S.M., que ninguna autoridad es por punto general más adecuada para este objeto que el Poder ejecutivo, el cual a su natural actividad y a su acción continua, reúne la posesión de los conocimientos y datos que esta clase de negocios requiere, al paso que ofrece la garantía que lleva siempre consigo el principio de la responsabilidad.

Pero, aunque según acaba de expresar la CCD los casos normales serían aprobados por RD, no por ello deja al libre arbitrio del Gobierno la autorización del establecimiento de sociedades anónimas, pues ha previsto mecanismos de garantía para evitar que a través de la autorización gubernativa se repitan las malas experiencias anteriores. Por esto, dice el preámbulo:

Por eso, la Comisión, ampliando el pensamiento del Gobierno, ha sido muy severa en las condiciones y los trámites indispensables para el otorgamiento de la autorización, aunque circunscribiendo todo su rigor a este punto, no ha entorpecido con trabas innecesarias la libre acción de las compañías, una vez cumplidas todas las condiciones de su establecimiento.

El último párrafo del preámbulo se dedica al régimen transitorio del PL 1848. La CCD hace hincapié en el especial empeño dedicado a armonizar la severa legislación que se propone aprobar, con el respeto a los derechos adquiridos. Por ello, trata de mantener las situaciones anteriores, pero para aquellos casos en que no se pueda justificar *ni el interés público ni tal vez el de la mayor parte de las mismas personas que en ellas han comprometido incautamente sus capitales y la suerte de sus familias*, habrá que proceder a su disolución y liquidación.

La segunda parte del Dictamen de la CCD la constituye el articulado del PL 1848. Consta de 21 artículos y se puede decir que, salvo varias modificaciones, permanecerá en sus líneas generales hasta la aprobación del texto definitivo. Procede comentar ahora brevemente el contenido de los artículos más relevantes.

El artículo 1 es la base de todo el nuevo planteamiento. Dispone que solamente se podrá constituir una compañía mercantil cuyo capital en todo o en parte se divida en acciones mediante una Ley o RD.

El artículo 2 establece las sociedades que deben constituirse mediante Ley. Serán aquellas que tengan por objeto:

- El establecimiento de Bancos de emisión y cajas subalternas de éstos, o la construcción de carreteras generales, canales de navegación y caminos de hierro.
- Cualquier empresa que, siendo de interés público, pida algún privilegio exclusivo, con exclusión de las que se propongan beneficiar alguno de los privilegios industriales de invención o introducción que el Gobierno pueda conceder.

Este artículo supone, por tanto, una modificación sustancial del espíritu del PL 1848 presentado por el Gobierno.

Según el artículo 4, las sociedades que pueden constituirse por autorización del Gobierno, expedida en forma de RD, son todas aquellas que no estén comprendidas en el artículo 2. Deberán tener un objeto de utilidad pública y no podrán monopolizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad.

El artículo 5 dispone que la compañía ha de constituirse para objetos determinados y que el capital debe ser proporcionado al fin de su establecimiento. En este punto sigue al artículo 3 del PL 1848 de 27 de febrero de 1847 empleando una sistemática legal más acertada al regular en varios artículos las previsiones relativas al capital social.

El artículo 6 responde – en terminología de la CCD – a una de las condiciones o trámites indispensables para el otorgamiento de la autorización que tratan de impedir las actuaciones fraudulentas de los fundadores de la sociedad. Así, en la solicitud de la Real autorización, se ha de incluir una lista de todos los suscriptores, las cartas de pedidos de acciones, la escritura social y los estatutos y reglamentos que rijan la administración de la sociedad, los cuales deben ser aprobados previamente por la junta general de suscriptores.

El artículo 7, como continuación de lo anterior, dispone que es necesario que conste, para dar curso a la solicitud de autorización, la suscripción de, al menos, el 50% del capital social. Y añade que las cartas de pedido de acciones constituyen por sí una obligación real. Sobre el contenido de esta confusa afirmación se hablará en el capítulo dedicado a las acciones.

Los artículos 8, 9 y 10 disponen que el Gobierno, una vez instruido el expediente de solicitud de aprobación, oído el parecer del Consejo Real, decidirá si la autorización ha de ser legislativa o del propio Gobierno. En el primer caso, si merece su apoyo, lo presentará a las Cortes con el correspondiente Proyecto de Ley; y si no, devolverá el expediente a los interesados. En el segundo caso, si el Gobierno entiende que se trata de una empresa que persigue una utilidad pública, aprobará la escritura social, los estatutos y los reglamentos, determinando la parte del capital que debe hacerse efectiva antes de obtener el RD de autorización. Esta parte no podrá exceder del 25% (previsión que será modificada posteriormente). Una vez cumplido lo anterior, el Gobierno otorgará la Real autorización, fijando el plazo para que la compañía de comienzo a sus operaciones. Si transcurriera este plazo sin haberse verificado, la autorización se tendrá por caducada.

Cualquier modificación de los estatutos o reglamentos que no sea aprobada por el Gobierno es nula y dejará sin efecto la autorización en virtud de la cual existe esa sociedad (artículo 11).

El artículo 12 recoge otra de las previsiones para evitar la repetición de fraudes. No se podrán emitir títulos de acciones hasta que se haya declarado constituida la sociedad. Las acciones deben estar numeradas y serán nominales, al menos, en dos tercios de las emitidas. Sólo podrán emitirse acciones al portador si previamente se ha ingresado la totalidad del importe en la caja social. Estas previsiones sufrirán modificaciones posteriores.

En el artículo 13 se establece que los gerentes o directores deben tener en depósito un número fijo de acciones mientras ostenten estos cargos. Dichas acciones se emitirán en títulos con un papel y formas especiales.

El artículo 14 repite lo previsto en el artículo 11 del PL 1848 del Gobierno, según el cual las acciones de las sociedades constituidas según esta Ley cotizarán como valores comunes de comercio, según lo previsto en la Ley de Bolsa.

El artículo 15 establece una prohibición absoluta de emitir billetes, pagarés, abonarés ni ningún documento al portador, a no ser que la sociedad estuviera autorizada por la ley.

El artículo 16 regula la responsabilidad de los representantes sociales que contrataren en nombre de una sociedad aún no constituida legalmente, así como cuando incumplan la doctrina *ultra vires* al extender las negociaciones de la sociedad fuera de su objeto social. El Proyecto del Gobierno recogía en su artículo 9 las mismas previsiones y, además, la posibilidad de que los fondos sobrantes se pudieran colocar en descuentos o préstamos.

El artículo 17 consagra la facultad inspeccionadora del Gobierno para afianzar la observancia estricta de la ley, sin que pueda gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de la compañía.

Los artículos 18, 19 y 20 regulan el régimen transitorio concediendo un plazo de dos meses para regularizar la situación de las compañías ya formadas. En caso de que no lo hicieran, se tendrán por disueltas, iniciándose su liquidación conforme a sus estatutos y reglamentos.

El artículo 21, último de este texto del PL 1848 deroga todas las disposiciones contrarias al mismo. De esta manera, se amplía lo previsto en el último artículo del PL 1848 del Gobierno que sólo derogaba el artículo 293 del CCom 1829.

VII. RD DE 15 DE ABRIL DE 1847 RELATIVO A LA RO DE 9 DE FEBRERO DE 1847. DEBATES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE LA INOPORTUNIDAD DE SU PROMULGACIÓN

La RO de 9 de febrero de 1847³⁴⁶, como ya se vio con anterioridad, suspende interinamente la competencia de los T. de c. para aprobar la constitución de las compañías mercantiles por acciones. Quedó, por tanto, impedida *de facto* la creación de nuevas empresas económicas mediante sociedades por acciones. La situación no podía prolongarse en el tiempo, pues muchas iniciativas empresariales corrían el riesgo de perderse, con los consiguientes perjuicios para un país muy necesitado de riqueza.

Por este motivo, el nuevo Ministro de CIOP, D. Nicómedes Pastor Díaz, tramitó un RD de fecha 15 de abril de 1847³⁴⁷, por el que se dejaba sin efecto la RO de 9 de febrero y se autorizó la constitución de compañías mercantiles por acciones mediante RD.

Las previsiones recogidas en este RD, en líneas generales, son muy similares a las establecidas en el PL 1848 presentado al Congreso de los Diputados por el Sr. Roca de Togores (paradójicamente el promotor de la tan citada RO de 9 de febrero) el 27 de febrero de 1847.

³⁴⁶ Promovida por el entonces Ministro de CIOP, Sr. Roca de Togores.

³⁴⁷ GdM de 17 de abril de 1847, núm. 4598.

Se trata de una norma importante, por cuanto estará en vigor durante toda la tramitación parlamentaria del PL 1848 y será de aplicación hasta la promulgación de la Ley de 1848.

En el preámbulo del RD se parte de la situación creada por la RO de 9 de febrero, *que no puede sostenerse por más tiempo*. Y continúa el texto:

Era sin duda muy urgente impedir los abusos que a la sombra de la libertad de asociarse se cometían y era acaso conveniente también impedir por un tiempo breve la formación de sociedades anónimas (...). Pero semejante estado no puede prolongarse, Señora, sin causar al país el grave daño de que se apague el naciente espíritu de asociación tan necesario para el desarrollo de la riqueza pública.

El RD consta de 10 artículos. El primero es el que cambia el régimen transitorio instaurado por la RO de 9 de febrero al establecer que hasta que no se apruebe una Ley sobre compañías por acciones, sólo se podrán constituir sociedades anónimas o comanditarias mediante autorización obtenida por RD. De esta manera, se volvía a permitir la constitución de compañías anónimas. Este artículo 1 es muy similar a su correlativo del PL 1848 presentado al Congreso de los Diputados por el Sr. Roca de Togores el 27 de febrero de 1847. Se trata, por tanto, de someter la autorización de la constitución de sociedades anónimas con carácter exclusivo al Gobierno quedando fuera de esta competencia tanto el Parlamento como los T. de c.

Ahora bien, el Gobierno sólo podrá autorizar la constitución de compañías anónimas que tengan por objeto obras de utilidad pública, el fomento directo o indirecto de la agricultura, comercio, industria o cualquier otra actividad que estime sea de conveniencia general o común, siempre que no tienda a monopolizar ningún ramo de comercio o industria ni ningún artículo de primera necesidad (artículo 2).

El capital ha de estar suscrito en un 50% y se ha de hacer efectivo en la proporción y plazos que determine el RD (artículo 3). El Gobierno podrá comprobar el cumplimiento de estos extremos.

Para obtener la autorización es necesaria la previa aprobación de la escritura y de *todos los reglamentos para la administración y manejo directivo y económico* (artículo 4), siendo necesario el correspondiente informe del Consejo Real.

El artículo 5 establece que antes de emitir acciones o de actuar los administradores en nombre de la compañía, es necesaria la declaración oficial de la constitución de la sociedad, la cual no se otorgará hasta que se haya hecho efectiva la parte de capital prevista en el RD. Si transcurriese el plazo determinado para el desembolso del capital sin haberse producido, la autorización de la constitución de la sociedad se entiende caducada (artículo 6).

La compañía no podrá dedicarse más que a la actividad de sus objetos sociales, siendo responsables los administradores de las consecuencias de la infracción de este principio (artículo 7). En cualquier caso, se permite la colocación de los fondos sobrantes en descuentos o préstamos (artículo 8).

Las previsiones anteriores se aplicarán sin excepción *a todas las compañías, de cualquiera especie o denominación, cuyo capital en todo o en parte se divida por acciones* (artículo 9). La redacción no es muy afortunada, pues no queda suficientemente claro el alcance de la retroactividad implícita en esta disposición.

El artículo 10 prevé la siguiente disposición de carácter derogatorio: *(q)uedan vigentes todos los artículos del Código de comercio, cuyas disposiciones no sean contrarias a las del presente Decreto.*

En resumen, se puede decir que este RD sigue las bases que sustentan el PL 1848 presentado por el Gobierno el 27 de febrero de 1847. Por tanto, como ya se vio anteriormente, difiere bastante del Dictamen de la CCD de fecha 16 de abril de 1847, un día posterior a la firma del RD y un día anterior a su publicación en la GdM (el sábado 17 de abril de 1847).

En cuanto a la oportunidad de esta disposición parece que, por un lado, fue importante desbloquear la situación producida por la RO de 9 de febrero. Pero, por otro, la coincidencia de la publicación del RD con los trabajos de la CCD para emitir el Dictamen sobre el PL 1848 del Gobierno (presentado el 27 de febrero) no fue bien interpretada. Más bien habría que decir que se entendió como un acto fuera de razón por parte del Gobierno y, en concreto, de su Ministro de CIOP, que no supo manejar con tacto esta coincidencia, dado que la CCD había modificado varios artículos fundamentales del PL 1848 presentado por el Gobierno y el RD mantiene íntegramente las bases de dicho PL 1848. Pareció, por tanto, que el Gobierno mediante un “decretazo” deseaba mantener su postura en contra del parecer de la CCD, por lo menos, hasta que se aprobara definitivamente el texto legal.

En la sesión del Congreso de los Diputados del 21 de abril de 1847 se recoge una larga y agria discusión sobre la oportunidad y contenido de este RD, entre el Sr. Ríos Rosas, Presidente de la CCD, Sr. Bertrán de Lis, Vocal de la misma CCD y el Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz³⁴⁸.

Al debatirse la redacción del artículo 16 del Dictamen de la CCD de la Comisión, se produce una extensa digresión relacionada con el RD de 15 de abril. Es interesante transcribir los primeros párrafos de las discusiones para captar directamente los matices de las acusaciones. Está en uso de la palabra el Presidente de la CCD, Sr. Ríos Rosas, que dice:

... desde el momento en que la Comisión, siendo muy deferente a las opiniones del Gobierno, había alterado alguno de los artículos fundamentales del proyecto [presentado por el Gobierno el 27 de febrero] en el seno mismo de la Comisión, yo creía que el Sr. Ministro no debió haber traído estas interioridades a la discusión pública, porque ningún antecedente ni causa especial había para que S. S. Se ocupase de lo que había pasado en el seno de la Comisión; pero ésta, que tenía que hacer un cargo, y cargo grave, al Gobierno de S. M. sobre este asunto, deseaba para atenuar este cargo, para modificarle o callar enteramente, haber oído al Gobierno en la discusión de ayer, y este es el motivo por el que los individuos de la Comisión que tomaron parte en esa discusión no hicieron

³⁴⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, págs. 1467 a 1474.

mérito de lo que voy a decir ahora. La Comisión, repito, deseaba oír al Gobierno para ver si daba explicaciones que pudieran satisfacerla y al Congreso también. El hecho es el siguiente: cuando el Gabinete anterior determinó presentar un proyecto de ley sobre este asunto, bajo su responsabilidad suspendió la legislación existente acerca del modo de constituirse las sociedades anónimas, considerando que se estaba abusando extraordinariamente del espíritu de asociación, constituyendo sociedades anónimas perjudicialísimas y valiéndose para ello de la insuficiencia de la ley existente. Dio, pues, el Gabinete anterior una Real orden suspendiendo la legislación existente y presentó a las Cortes un proyecto de ley.

Este proyecto de ley se discutió en la Comisión y, estando ya de acuerdo sus individuos en el dictamen que se había de presentar, llamó aquella a su seno, como era natural, al Ministro del ramo del Gabinete anterior, y cuando había de concurrir cayó aquel Ministerio. Habiendo entrado en el poder el actual Gabinete, la Comisión practicó con el Sr. Ministro de Comercio la misma diligencia que son su antecesor; le rogó que concurriera a la Comisión³⁴⁹ a oír el Dictamen que tenía extendido, para ver si estaba conforme con él o tenía que hacer algunas observaciones, a fin de venir a un avenimiento. El Ministro concurrió en efecto, y después de una discusión sumamente detenida quedamos convenidos en el Dictamen que se había de presentar al Congreso. Pero después de todos estos hechos, después de estar convenidos, dijo el Sr. Ministro que iba a dictar un decreto sobre esta materia y esto lo dijo fuera de la Comisión, en conversación particular. En efecto, S. S. ha publicado ese decreto, decreto de suma gravedad, porque envuelve muchas contradicciones con el Dictamen de la Comisión adoptado por el Gobierno, y estas contradicciones son en punto de grandísima importancia³⁵⁰. (el subrayado es nuestro)

El Sr. Ríos Rosas, manifiesta con estas palabras su desagrado sobre el modo de proceder del Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz, dado que todas las personas implicadas habían entendido que el Gobierno, por medio de su Ministro competente, había aceptado el contenido del Dictamen de la CCD, pero ahora, como "por la espalda", dispuso lo contrario en el RD.

El Presidente de la CCD considera especialmente grave el contenido del artículo 9 del RD (que leyó íntegramente a los Sres. Diputados), pues

se establece la retroacción de sus disposiciones para aplicarlas a las sociedades ya existentes: es decir, señores, que este decreto tiene un efecto completamente retroactivo; es decir, que se estará ya aplicando, si las autoridades cumplen con lo que el Gobierno manda, a las sociedades existentes.

Y este RD es publicado a instancias del Ministro de CIOP, después de haber asumido el contenido el Dictamen de la CCD, que respetaba los derechos adquiridos por las compañías anónimas existentes con anterioridad. Para dejar más patente esta

³⁴⁹ Testimonio escrito de esto se encuentra en las Actas del Congreso de 13 de abril de 1847 (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 13 de abril de 1847, núm. 73, pág. 1325), que dicen:

El Sr. RÍOS ROSAS: como presidente de la comisión de Sociedades anónimas, debo hacer presente que hace ya tiempo que tiene concluidos sus trabajos, pero antes de presentarlos al Congreso tiene necesidad de oír al Gobierno en su opinión. (el subrayado es nuestro)

³⁵⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, pág. 1467.

contradicción, el Sr. Ríos Rosas leyó el texto completo de los artículos 18 y 19 del Dictamen de la CCD³⁵¹. Sigue diciendo el Sr. Ríos Rosas:

Hay, pues, una contradicción palmaria entre lo que el Gobierno ha dispuesto en ese decreto y lo que ha presentado con la Comisión al Congreso. Más podría extenderme, examinando el proyecto de ley y comprándole con el decreto citado, para encontrar variaciones, contradicciones, antinomias completas entre el decreto y el proyecto (...) Es pues, visto que se ha consultado poco a la conveniencia para publicar este decreto, decreto que no debió darse habiéndose ya presentado el proyecto de ley, y sobre esto vuelvo a pedir al Sr. Ministro explicaciones categóricas. (el subrayado es nuestro)

El Sr. Ríos Rosas continúa la crítica, dura y contundente, refiriéndose a la ilegalidad del RD que invade contra toda lógica jurídica las competencias legislativas del Parlamento³⁵²:

Jamás ha ocurrido que estando presentado un proyecto de ley a las Cortes, estando de acuerdo el Gobierno y la Comisión, hallándose el proyecto "sub judice", el Gobierno se haya atrevido a hacer innovaciones en aquella misma materia, arrogándose facultades legislativas y dando un decreto que se opone abiertamente al mismo proyecto que tiene presentado.

No se ha podido encontrar justificación documental del cambio de parecer del Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz, para aceptar el nuevo planteamiento dado por la CCD respecto al PL 1848 presentado por su predecesor en el cargo el 27 de febrero. Es posible que lo aceptara sabiendo que por medio de un RD establecería una norma en

³⁵¹ Estas fueron las palabras de la intervención del Sr. Ríos Rosas:

Ese decreto, en primer lugar, es ilegal y, en segundo, contradictorio con lo mismo que el Sr. Ministro acordó en la Comisión en el artículo que voy a leer. Dice así el artículo 18: "Las compañías por acciones formadas en la actualidad, que no existan en virtud de autorización Real, solicitarán esta autorización dentro de dos meses, contados desde la publicación de esta Ley, presentado al efecto sus escrituras, estatutos y reglamentos. Antes de pedir la autorización, los gerentes o directores convocarán a junta general de accionistas, y sólo en el caso de que la mayoría de estos, que se computará con arreglo a sus respectivos estatutos y reglamentos, acuerde la continuación de la compañía, se podrá hacer la solicitud".

Es decir, señores, que aquí nada se establece que destruya en lo más mínimo los derechos creados por la legislación existente. Pero el artículo 19 es todavía más explícito. Dice así: "La autorización Real se otorgará precisamente a las compañías que hubieren cumplido las condiciones con que fueron aprobadas por los Tribunales de comercio, y a las comanditarias por acciones que hubiesen sido establecidas con arreglo a las disposiciones del Código de comercio". DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, pág. 1467.

³⁵² Se transcribe a continuación parte de su intervención, como ejemplo de la oratoria parlamentaria de nuestro siglo XIX:

En los fastos de las innumerables ilegalidades a que la necesidad unas veces, y otras el error, han conducido a los Gobiernos que se han sucedido durante la guerra civil por que hemos pasado, no se ha cometido una igual a la que me refiero. Quedaba esto por ver; y es todavía más singular si se tiene presente que eso se ha hecho siendo Ministros unos señores que antes de entrar en el Ministerio, y después, han condenado siempre las ilegalidades y han hecho mil salvedades de su respeto, de su veneración hasta idolátrica hacia las prerrogativas del Parlamento. No creo, señores, que haya habido una cosa igual; no creo que se pueda hacer una cosa semejante o parecida. Aunque no tan puritano como SS. SS., comprendo que se pueden cometer algunas ilegalidades; pero lo que no comprendo es que se cometan tan gratuitas, y que no solo ofendan las facultades de las Cortes, las prerrogativas del Parlamento, sino que ofendan hasta su decoro, que no tengan sentido, y si le tienen, muy malo.

vigor que, en términos generales, asumía los planteamientos del primer PL 1848. Es posible, también, que pensara que nunca saldría adelante dicho PL 1848 por la escasa duración de los Gobiernos de la Nación³⁵³. Otra hipótesis es que fuera consciente de la fugacidad de su permanencia en el Ministerio y prefiriera tomar medidas con eficacia a corto plazo más que confiar en un largo plazo que podía terminar sin ninguna medida real.

En cualquier caso, parece que el Sr. Ministro “jugaba a varias bandas” al asentir al Dictamen de la CCD y, simultáneamente, promover un RD que, de hecho, llevaba ya a la práctica el espíritu del PL 1848 presentado en febrero por el Gobierno (y modificado sustancialmente por el citado Dictamen). Las invectivas del Sr. Ríos Rosas continúan en los siguientes términos:

Con lo que el Gobierno ha hecho, parece que ese proyecto de ley ha venido aquí por vía de juego; que el Congreso es una Academia donde se viene a disertar sobre ciertas tesis, reservándose el Gobierno la facultad de archivar lo que aquí se acuerde, para después o cuando le parezca mejor, acordar lo que quiera en cuestiones vitales. Para eso no están los Cuerpos Colegisladores; para eso no está el Gobierno de S. M (el subrayado es nuestro).

La réplica del Ministro de CIOP comienza con unas consideraciones generales³⁵⁴ y, posteriormente, se centra en la defensa de dos aspectos: el Gobierno informó a la CCD sobre el nuevo RD y, en segundo lugar, el Decreto no usurpa las competencias del Parlamento.

Respecto al primer aspecto, dijo el Sr. Ministro:

Me parece, pues, señores, que las intenciones del Gobierno no son tan de sorpresa, cuando en esa conferencia de la Comisión dije yo amigablemente; hoy he dado un decreto sobre esto, que tiene estas bases y estos principios.

En cuanto a las justificaciones sobre la legalidad del RD, las razones aducidas apelan más bien a la oportunidad política y no a razonamientos jurídicos constitucionales o mercantiles. En este sentido, siguiendo alguna de las hipótesis recogidas párrafos más arriba sobre las razones que podían haber justificado el cambio de planteamiento por parte del Ministro (del primer texto del PL 1848 al Dictamen de la CCD), destacan las siguientes palabras del Ministro:

El día que se firmaba aquel Decreto, ¿sabía el Ministro de Comercio cuándo se sometería este Proyecto de ley a discusión? ¿Sabía el Ministro de Comercio si

³⁵³ Benito Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales, titula el correspondiente a este periodo “Las tormentas del 48” en el que refleja con bastante exactitud el ambiente de continuos cambios que se respiraba en Madrid esos años (*Episodios Nacionales*, núm. 3, Madrid, 1985).

³⁵⁴ Dice el Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz al inicio de su turno:

El Congreso comprenderá, el Congreso apreciará debidamente los graves motivos que tengo para ser muy mesurado, muy explícito, muy lacónico y muy templado respondiendo al Sr. Ríos Rosas, y me permitirá que reserve para otra ocasión el dar explicaciones muy cumplidas acerca de algunos cargos que me ha dirigido tan de súbito y tan inopinadamente. El Gobierno tiene razones de decoro para esto, y que se combinan ahora con las que pueda tener presentes el Ministro hacia un amigo tan estimable para él como S. S. y con quien le unen vínculos tan estrechos. DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, pág. 1468.

había otros proyectos a los cuales diese la preferencia en la discusión el Congreso? Y, aun cuando el Gobierno pudiera sospechar que sería tan tranquila, tan conciliadora y tan avenida la opinión del Congreso sobre un Proyecto de 21 artículos, ¿no quedaba todavía llevarlo al Senado? ¿No podían entre uno y otro tardarse dos meses en sancionar la ley? ¿Y sabe el Sr. Ríos Rosas cuántas solicitudes, cuántas exposiciones, cuántos intereses comprometidos hay para que el Gobierno dejara de adoptar una disposición interina que sin perjuicio de la Ley pudiera salvar los intereses de las sociedades y dar algunas garantías para las que estaban prontas a establecerse?

El Sr. Ministro, además, manifiesta que no encuentra contradicción entre el artículo 9 del RD y lo previsto en los artículos 18 y 19 del Dictamen de la CCD. Según su entender, hay muchas sociedades que ya están autorizadas, pero que aún no están constituidas. A ellas se refiere el RD. Por este motivo, y porque se trata de una norma interina, concluye con simple razonamiento, que el Gobierno no condiciona el contenido de la Ley mediante el RD.

La parte final de su intervención trata de justificar, quizá de una manera un tanto superficial, la legalidad del RD. Expone el Sr. Pastor Díaz:

El Gobierno en el decreto que ha dado y en los términos que lo ha dado no se contradice, ni se arroga más facultades que las que pudiera tener en virtud de la Ley ya promulgada; sobre este punto estén tranquilos el Sr. Ríos Rosas y el Congreso. El Gobierno no procederá nunca a hacer por sí lo que sea objeto de una ley.

Después de las palabras del Ministro de CIOP, interviene por alusiones un miembro de la CCD, el Sr. Bertrán de Lis³⁵⁵. Efectivamente, toda esta discusión sobre la oportunidad del RD, tiene su origen en unas afirmaciones formuladas por el Sr. Bertrán de Lis durante los debates del día anterior, que fueron objeto de una acalorada y desproporcionada respuesta por parte del Ministro de CIOP. Esta réplica -siempre según los testimonios de las actas del Congreso- es la causa de que el Presidente de la CCD, el Sr. Ríos Rosas, al día siguiente, es decir, 21 de abril, profiriera las invectivas contra el Ministro, según se acaba de comentar anteriormente.

El Sr. Bertrán de Lis afirmó el día anterior que los cuatro primeros artículos del PL 1848 presentado por el Gobierno dieron lugar a los mayores debates en el seno de la CCD. Esto demuestra que hubo posiciones muy contrapuestas por algunos de los seis miembros de la CCD para variar el espíritu del PL 1848 del Gobierno y establecer la aprobación parlamentaria de las sociedades anónimas para determinados casos. Al final obtuvieron la victoria los partidarios del cambio intervencionista. Por desgracia, no se

³⁵⁵ Dice a este respecto el Sr. Bertrán de Lis en la sesión de 21 de abril de 1847:

Puesto que el Sr. Ministro de Comercio ha manifestado que todo lo que dijo ayer S. S. [el propio Ministro] con algún calor por cierto, lo cual ha dado lugar a la contestación de hoy del Sr. Ríos Rosas, provenía de algunas expresiones que yo había dicho en mi discurso, he estado recorriendo mi memoria, la he puesto si cabe en prensa, y no encuentro ninguna expresión que pueda haber dado motivo, no sólo a lo que ha dicho ahora el Sr. Ministro de Comercio, pero ni a lo que dijo ayer mismo, porque me llamó extraordinariamente la atención el calor con que contestó a los que habíamos tomado parte en el debate.

ha podido encontrar base documental para conocer quiénes fueron los promotores de este cambio.

Continuó el Sr. Bertrán de Lis desvelando otros motivos de fondo de las decisiones de la CCD. Uno de ellos, que no está claramente reconocido en ninguna parte, pero que bien puede ser de los más importantes, es el deseo de los Sres. Diputados de que el Parlamento asuma competencias en este asunto, en detrimento del poder del Gobierno. Es, por tanto, una lucha por incrementar el poder del Parlamento frente al PL 1848 del Gobierno que se reservaba exclusivamente a si mismo esta materia.

El turno de la palabra pasa de nuevo al Presidente de la CCD, el Sr. Ríos Rosas que trata de hacer recapacitar al Sr. Pastor Díaz sobre la inseguridad que ha creado el RD en todas las personas. Pero, en nuestra opinión, el Sr. Ríos Rosas, se confunde categóricamente en este punto. En efecto, lo que iba a crear inseguridad a los inversores y empresarios era conocer que la CCD había variado radicalmente el PL 1848 presentado por el Gobierno en febrero, al exigir para determinados casos la aprobación parlamentaria de las compañías anónimas. El RD otorga eficacia jurídica -eso sí, invadiendo injustificadamente las competencias del Poder Legislativo- al PL 1848 presentado por el Gobierno. Por lo tanto, muchos promotores de sociedades anónimas debieron agradecer este RD, dado que suprimió la prohibición de constituir estas compañías y porque iba en línea continuista con respecto al PL 1848 presentado en febrero. Es más, cuando conocieron que el Congreso quería exigir aprobación parlamentaria para determinadas sociedades, su preocupación debió subir enormemente³⁵⁶.

Esta línea argumental del Sr. Ríos Rosas induce a pensar que él fue uno de los máximos promotores de la intervención parlamentaria en el ámbito societario y trató de impedir que el Gobierno siguiera siendo el titular exclusivo de las competencias relacionadas con estas compañías mercantiles. Por esto interpeló varias veces al Sr. Ministro para que aclarara ante el Congreso si el RD tenía carácter retroactivo o no³⁵⁷.

El Sr. Ríos Rosas termina esta intervención recriminando al Sr. Pastor Díaz, Ministro de CIOP, que cuando compareció en la CCD, anunció la publicación de este

³⁵⁶ Cabe destacar las siguientes expresiones del Sr. Ríos Rosas:

¿Sabe el Sr. Ministro que todas las operaciones mercantiles relativas a sociedades anónimas han girado sobre las esperanzas que ha creado ese proyecto? ¿Sabe la subversión gravísima que habrá producido en todas las transacciones de intereses que estaban en esos caso, desquiciándolos completamente del objeto que tenían? Todo el mundo consideraba que después de haber presentado un proyecto de ley a las Cortes, después de haber oído al Consejo Real, y cuando se ventilaba en el seno de la comisión, las disposiciones de esta Ley vendrían a poner el sello de las Cortes y de la Corona sobre la materia, y todo el mundo, las compañías como los particulares, han procedido sobre este dato. ¿Y qué ha hecho el Sr. Ministro de Comercio? Ha destruido la combinación mercantil que descansaba en estas esperanzas (Como se ha dicho en el párrafo al que corresponde esta nota, en nuestra opinión, lo que debió destruir las esperanzas de los promotores de sociedades anónimas fue conocer que el nuevo PL 1848 propugnado por Ríos Rosas exigía la aprobación parlamentaria para determinados casos).

³⁵⁷ Así, en un momento de la disertación, dijo el Sr. Ríos Rosas:

Según el texto expreso, según la letra rigurosa de todo el decreto en punto a su economía, el decreto es aplicable a las [sociedades] anteriores. (El Sr. Ministro de comercio a media voz: No, no). Yo celebraré que S. S. [el Ministro] lo explique en este sentido, por más que sea contrario a lo que estoy diciendo. A eso voy y eso pretendo, que S. S. lo explique en ese sentido.

RD pero sin decir nada sobre su contenido y sin dejar posibilidad de discusión alguna³⁵⁸.

La réplica del Ministro de CIOP quizá no es tan brillante como la intervención del Sr. Ríos Rosas, pero se encuentra bien fundamentada y refleja una actitud más pragmática y política. En efecto, el Ministro trata de mantener el poder y el control sobre las sociedades anónimas por la vía de los hechos, mientras va avanzando una medida legislativa que, en aquellos días, era muy probable que nunca viera la luz. En definitiva, de una manera demasiado sibilina está acusando a la CCD de tratar de resolver un problema sacando provecho propio y sin reparar en las consecuencias de índole práctica que se estaban produciendo en la realidad empresarial. La gran cuestión que se va a plantear aquí es cómo se logró aprobar este PL 1848 en circunstancias políticas tan adversas y cambiantes.

El Sr. Ministro de CIOP también trata de justificar la oportunidad del RD, vista la realidad de la tramitación parlamentaria de los Proyectos de Ley en aquellos meses de inestabilidad política. En su intervención aporta datos muy interesantes sobre los intentos de los anteriores Gobiernos de aprobar una nueva Ley de compañías mercantiles por acciones que pusiera fin a la deteriorada situación de aquella época. Aunque se trate de una transcripción algo larga, interesa destacar varios momentos de su intervención:

El Ministerio actual ha aceptado el proyecto de ley de las anteriores Administraciones, porque es un proyecto de ley muy antiguo. (...) [la iniciativa] venía de muy atrás; el Ministerio, no el que le había precedido, sino el anterior, había tomado la iniciativa. El Ministro de Hacienda, el Sr. Mon, había presentado en el Senado un proyecto de ley sobre sociedades anónimas. En el discurso de la Corona ya se hacía mención por el anterior Gabinete de las sociedades anónimas y de un proyecto que iba a presentarse a las Cortes; y, sin embargo, debo notar que al mismo tiempo que presentó en el Senado ese proyecto, el mismo Ministerio que lo había propuesto, dejó vigente la legislación que había, y permitió que siguieran formándose las sociedades anónimas según la legislación que existía, mientras estaba presentado un proyecto de ley en los Cuerpos Colegisladores.

Son hechos, señores; aquella ley no se pudo discutir, no pudo tener objeto, y de este ejemplo partió el Ministerio actual para subvenir al mal y para evitar ahora esa queja de ilegalidad de que le quiere hacer cargo al Gobierno el Sr. Ríos Rosas. Se había presentado hace un año un proyecto de ley sobre sociedades anónimas, y las sociedades anónimas no se habían regularizado con el proyecto de ley presentado. (...)

¿Qué era lo que tenía que hacer el Gobierno? O dar un decreto por sí para la formación de sociedades anónimas o prohibirlas de todo punto o presentar una

³⁵⁸

El Señor Ministro de Comercio ha hablado de su conducta en el seno de la comisión, y yo sobre esto diré que después de terminado todo debate en la comisión, tuvo por conveniente el Sr. Ministro decirnos que iba a adoptar una medida en aquel mismo día y que estaba resuelto a elevar a S. M. un decreto sobre sociedades mercantiles. El Señor Ministro se ha equivocado cuando ha dicho que con nosotros trató el contenido de las disposiciones de este decreto. Este es un error, porque S. S. no nos dijo una palabra más que lo que he dicho, y eso fue terminada ya la discusión y cuando ya no se podía deliberar nada. No hizo esa explicación franca, y así es que yo por mi parte no comprendí, como no comprendió nadie, qué objeto podía tener ese decreto.

ley a las Cortes. El Gobierno prohibió la formación de las Sociedades; el Gobierno se presentó con una ley a las Cortes. (...) El Gobierno tenía presentada una ley: hace un año se había presentado otra: ¿era, pues, justo que el Gobierno esperase a las contingencias que esta Ley podía tener? (...) Podía rechazar el Parlamento la ley; podía ir al Senado y no conformarse con ella; podía haber necesidad de nombrar una comisión mista (sic); podía llegar el verano y ser la época en que las tareas legislativas tuvieran que suspenderse; ¿y entre tanto había de quedar el Gobierno en la misma anarquía que antes? (el subrayado es nuestro)

De esta intervención se podrían destacar varias cuestiones, pero quizá son dos las más relevantes. La primera es la de que el Sr. Pastor Díaz acertó al intuir que el PL 1848 tardaría tiempo en ser aprobado (probablemente él pensara -aunque no se ha encontrado soporte documental al respecto- que la Ley de 1848 nunca se aprobaría) y que pasó el periodo estival por medio.

La segunda cuestión pone de manifiesto una contradicción. El Ministro de CIOP dice que no se puede criticar al Gobierno pues ha aprobado el RD para poner orden en la caótica situación de las compañías anónimas y, simultáneamente, está promoviendo y apoyando el nuevo texto del PL 1848. Se dice que se trata de una contradicción, porque el Gobierno otorgó su conformidad al Dictamen de la CCD, que variaba radicalmente los fundamentos del PL 1848 presentado por el Gobierno y, por tanto, contrario a los principios del RD. Es decir, el Gobierno está apoyando dos documentos contradictorios entre sí: en uno se establece como única autorización la gubernativa y en otro se exige la aprobación parlamentaria en algunos casos (PL 1848 modificado por la CCD).

Las últimas palabras de esta intervención del Ministro de CIOP son para replicar al Sr. Ríos Rosas sobre el hecho de que informó a la CCD del contenido del RD, pues ésta le advirtió que debía hacer mención también de las sociedades comanditarias dado que, en caso contrario, quedaría abierta una cómoda puerta para el incumplimiento de la norma³⁵⁹.

La respuesta del Sr. Ríos Rosas a la intervención del Ministro de CIOP es muy breve y, se podría decir, que simplemente testimonial. En primer lugar, abandona la cuestión de la legalidad del RD al parecer del Congreso. Reprocha al actual Gobierno ser el único que ha actuado contra la legalidad, pues los anteriores, en su opinión, la han respetado al tratar de regular las sociedades anónimas. Este juicio resulta excesivo, pues, sin ir más lejos, el Gobierno anterior derogó un artículo del CCom 1829, no mediante RD, sino mediante RO, tal y como se vio anteriormente.

359

En el seno de la comisión, al retirarme de ella -dice el Sr. Pastor Díaz, Ministro de Comercio-, hablé bastante: no fue una indicación tan ligera que no se me hiciera una observación que aprecié mucho. Cuidado, se me dijo, no revelo secretos, son cosas que se pueden decir, se ha citado la mitad de lo que allí paso; se me dijo: tenga Ud. cuidado de que ese decreto no deje abierta la puerta a las sociedades comanditarias, porque sería falsear la prohibición; y entonces, señores, aproveché esta indicación de la comisión. Esto prueba que no fue una conversación tan ligera; hablé francamente para manifestar a la comisión, para exponer en el seno de la amistad las intenciones del Gobierno, la necesidad que había de dictar una medida a consecuencia de las exposiciones que había en la Secretaría del Despacho acerca de la existencia de las sociedades anónimas.

El Ministro de CIOP, en su respuesta al Sr. Ríos Rosas realizó una interesante puntualización acerca de la naturaleza jurídica de la aprobación por los T. de c. de las sociedades anónimas, conforme a lo previsto en el artículo 293 CCom 1829, vigente hasta febrero de 1847:

El Código de comercio deja a los Tribunales de comercio expeditas ciertas atribuciones; pero ¿se ha desprendido el Gobierno de la autoridad que ejerce sobre esos Tribunales? Esta autoridad ¿es una acción judicial? El dar permiso a las sociedades ¿es una sentencia? Es, señores, una atribución administrativa que está en la esencia de la administración. Yo siento oír en boca de una persona tan entendida en estas materias como el Sr. Ríos Rosas, que confunda las atribuciones de justicia que competen a los tribunales de comercio con aquellas atribuciones que son puramente administrativas. ¿No es de esencia puramente administrativa la facultad que tienen los Tribunales de comercio para autorizar la formación de sociedades? ¿Quiere S. S. que estos Tribunales sean independientes e irresponsables? ¿Podrán tener esa facultad ilimitada sin que el Gobierno pueda ejercer sobre ellos la acción suprema de su autoridad? He aquí cómo el Gobierno puede, sin salirse de la legalidad, ejercer esa autoridad sobre los Tribunales de comercio en lo relativo a la autorización de sociedades. (el subrayado es nuestro)

Estas importantes palabras centran la cuestión sobre la autorización de la constitución de compañías por acciones. El pronunciamiento del T. de c. -aunque lleve este nombre de "Tribunal"- no es de carácter judicial, sino administrativo. Es decir, las sociedades por acciones estaban sometidas a la tutela administrativa, dirigida en última instancia por el Gobierno.

Las duras y acaloradas discusiones sobre la inoportunidad de la promulgación del RD de 15 de abril de 1847 no terminaron aquí. Las últimas intervenciones, protagonizadas por el Diputado Sr. Miota repiten los mismos argumentos y por este motivo se omiten, para no alargar más el presente comentario.

VIII. RESUMEN DE LOS DEBATES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DURANTE LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE ABRIL DE 1847

Los debates en el Congreso de los Diputados sobre el Dictamen de la CCD, en el que se proponía un nuevo texto de PL 1848 tuvieron lugar los días 19, 20 y 21 de abril (lunes a miércoles). El texto transcrito en el Diario de las sesiones es extenso³⁶⁰.

El primer día, lunes 19 de abril, tuvo lugar el debate sobre la totalidad del PL 1848³⁶¹. Las discusiones versan sobre la fundamentación del texto, sin entrar en cuestiones puntuales, aunque se impugnan artículos concretos. Es una parte especialmente interesante para estudiar los aspectos básicos de la Ley de 1848: aprobación parlamentaria para determinadas compañías por acciones, objeto social de utilidad pública, intervención administrativa previa y posterior a la constitución de estas sociedades, garantías para los inversores, etc.

³⁶⁰ Un resumen de las intervenciones se encuentra en la GdM de 20, 21 y 22 de abril de 1847, núms. 4601, 4602 y 4603, respectivamente.

³⁶¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 78, págs. 1419 a 1424.

Las intervenciones corresponden a tres personas: los Sres. Gonzalo Morón, Bertrán de Lis (Vocal de la CCD) y, por último, el Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Vaamonde.

El segundo día, martes 20 de abril, da comienzo el debate artículo por artículo. En esta sesión, de largas intervenciones e interpelaciones³⁶², sólo dio tiempo a discutir el artículo 1 del PL 1848, que es la clave de todo el texto. En realidad se trata de una continuación de las discusiones del día anterior sobre las bases de la propuesta, aunque se debatiera la redacción de un artículo. El artículo fue aprobado sin ninguna modificación. Los autores de las intervenciones de este día son los Sres. Ordax, Miota (Vocal de la CCD), Martínez Almagro, Bertrán de Lis y el Sr. Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz.

El último día, miércoles 21 de abril, tiene lugar la discusión de todo el articulado del PL 1848 (excepto el artículo 1, debatido el día anterior). Se trata de la sesión más larga³⁶³ de las tres, en la que se debaten cuestiones muy concretas al hilo de la redacción de los artículos 2 al 21. El resultado de las discusiones fue, sin duda, contundente: no se modificó la redacción de ningún artículo.

Este día intervinieron bastantes Diputados: los Sres. Illa, Rodríguez Rivas (Secretario de la CCD), Fuentes, Bertrán de Lis, Mendizábal, Miota, Miquel Polo, Ríos Rosas (Presidente de la CCD), Sánchez Silva, Pérez de Rivas, Manso, Gonzalo Morón y los Ministros de Gracia y Justicia (Sr. Vaamonde) y de CIOP (D. Nicómedes Pastor Díaz).

Como resumen de todos estos debates, destacan dos cuestiones. En primer lugar, permiten conocer con más exactitud lo que pretendía y pensaba el Gobierno y diversos Diputados. Y, en segundo lugar, las discusiones no cambiaron nada del PL 1848, de manera que el texto remitido al Senado es idéntico al que elaboró la CCD.

IX. PL 1848 REMITIDO POR EL CONGRESO AL SENADO EL 23 DE ABRIL DE 1847

La conclusión de los debates celebrados en abril de 1847 en el Congreso de los Diputados se concreta en el texto del *Proyecto de ley, aprobado definitivamente por el Congreso, sobre sociedades mercantiles por acciones*³⁶⁴ que, con fecha de 23 de abril se pasa al Senado, acompañando el expediente, para los efectos prescritos en la Constitución.

Firman el PL 1848 el Presidente del Congreso, Marqués de Gerona, D. Diego Coello y Quesada, Diputado Secretario y D. Juan S. Comín, Diputado Secretario.

³⁶² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, págs. 1427 a 1444.

³⁶³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 80, págs. 1460 a 1480.

³⁶⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 23 de abril de 1847, Apéndice Primero al núm. 81, pág. 1499 y 1500.

El PL 1848 consta de 21 artículos, idénticos al texto presentado por la CCD. Los debates parlamentarios del 19 al 21 de abril no cambiaron nada el texto presentado por la CCD: se trata de una transcripción literal de éste.

Un comentario detallado del contenido del PL 1848 se ha expuesto en el apartado anterior, al cual nos remitimos.

El 26 de abril el Senado recibe el PL 1848³⁶⁵ aprobado por el Congreso, quedando constancia en las Actas de dicha fecha del siguiente modo³⁶⁶:

Se leyó un proyecto de ley, remitido y aprobado por el Congreso de los Diputados sobre compañías mercantiles. Terminada su lectura, dijo

El Sr. PRESIDENTE: Este proyecto de ley pasará a las Secciones para el nombramiento de los individuos que han de formar la Comisión que dará su dictamen para la resolución del Senado.

Concluida la sesión se reunirán las Secciones para los efectos que acabo de indicar, y para nombrar quien reemplace al Sr. Castejón que ha hecho renuncia por el mal estado de su salud.

Ruego a los presidentes de las Comisiones que exciten el celo de sus compañeros para que se presenten los dictámenes pendientes, porque no hay asuntos de que ocuparse.

Con independencia de valorar el sentido del último párrafo transcrito, el dato objetivo es que se formó la CS encargada de realizar el Dictamen sobre el PL 1848. Pero los trabajos quedan paralizados porque la Reina suspende las Cortes Generales por RD de 5 de mayo de 1847 y convoca elecciones de Diputados Provinciales para los días 18, 19 y 20 de julio.

No obstante, antes de terminar la Legislatura, se completó el Dictamen de la CS y estuvo a punto de ser leído en la sesión correspondiente. El episodio lo cuenta personalmente el Senador Sr. Armendáriz, que formó parte de dicha CS y que presentó una enmienda a la totalidad en relación al siguiente Dictamen que se presentó el 18 de diciembre en el Senado y que se comenta en el siguiente epígrafe. Su propuesta fue contestada por el entonces Ministro de CIOP, Sr. Bravo Murillo, cuya intervención fue muy interesante. Se transcribe a continuación, por ese interés, parte de las intervenciones.

Dice el Senador Armendáriz en la sesión del Senado del 22 de diciembre de 1847:

Debo decir también otra cosa, sin que mi ánimo sea ofender en lo más mínimo a los dignos individuos de la Comisión. En la legislatura anterior, señores, se presentó este mismo proyecto, y entonces tuve el honor de ser individuo de aquella Comisión, y desde luego todos los que la componíamos convenimos en enmendar el proyecto que venía del Congreso de Diputados en la parte que acabo de decir. Se extendió el dictamen, se firmó, y en el día mismo que se suspendió la legislatura, aquel día mismo estaba ya el secretario de la Comisión al pie de la tribuna para leer aquel dictamen. Yo bien sé que no tiene valor

³⁶⁵ DsC. Senado. Sesión de 26 de abril de 1847, Apéndice Segundo al núm. 35, págs. 421 y 422.

³⁶⁶ DsC. Senado. Sesión de 26 de abril de 1847, pág. 416.

*ninguno, porque no habiéndose leído, caducó por el mismo hecho de haberse cerrado las Cortes; pero obra en el expediente como documento, y me atrevería a rogar al Sr. Presidente que mandara leer ese documento, como tal documento, no como dictamen, porque en él se explican las razones que la Comisión tuvo para enmendar el proyecto de ley que ha venido del Congreso de Diputados. Me parece que como documento que existe en el expediente, estoy en mi derecho pidiendo que se mande leer.*³⁶⁷

Fue una lástima, a los efectos de este PL 1848, que la Reina disolviese las Cortes al poco tiempo de que llegara al Senado el texto aprobado por el Congreso de los Diputados. Esto supuso que se perdieran los trabajos realizados por la correspondiente CS y, sobre todo, un retraso en la aprobación de la Ley. Por este motivo, el Dictamen de la CS presentado el 18 de diciembre de 1847 (que se comenta en el siguiente epígrafe), en su Preámbulo declara que no ha introducido prácticamente ninguna enmienda al texto aprobado por el Congreso de los Diputados para tramitar con urgencia el PL 1848.

La intervención del Senador Sr. Armendáriz, anteriormente citada, fue contestada por el entonces Ministro de CIOP, Sr. Bravo Murillo. En su exposición comparó la redacción, en primer lugar del artículo 11 según los dos Dictámenes y, finalmente, también la redacción de las dos versiones del artículo 19. Los temas de fondo comentados con motivo de ambos artículos se estudian en los epígrafes correspondientes. Aquí solamente se reproduce un párrafo en el que el Sr. Ministro explica la vinculación de los dos Dictámenes, así como el acuerdo al que llegó el Gobierno con la CS nombrada en aquél momento:

*La Comisión anterior, como el Senado habrá podido observar cuando se ha dado lectura del dictamen que sometía a su deliberación en la época pasada, ya manifestó que en su sentir las modificaciones que proponía eran más bien aclaraciones que variaciones. La Comisión actual y el Gobierno, de acuerdo con ella, ha creído con efecto que no se trataba de introducir modificaciones nuevas, sino aclaraciones; y si aquella Comisión creyó que eran convenientes, no podría creer que eran necesarias.*³⁶⁸

El Dictamen de la anterior Legislatura debía incluir algunas enmiendas (al menos las dos citadas en la intervención del Sr. Bravo Murillo y que se citan en el siguiente epígrafe), pero a juicio tanto de la CS nombrada en diciembre de 1847 como del Gobierno, eran simplemente aclaratorias y, por este motivo, no las recogieron en el Dictamen que finalmente se sometió a la aprobación del Senado.

X. DICTAMEN DE LA CS SOBRE EL PL 1848 (18 DE DICIEMBRE DE 1847)

La CS presentó su Dictamen *sobre el proyecto de ley relativo al establecimientos de sociedades anónimas* el día 14 de diciembre de 1847³⁶⁹. Como ya quedó expuesto anteriormente, el texto del PL 1848 aprobado por el Congreso se recibió en el Senado el 26 de abril. La razón de este retraso se explica por el cambio de

³⁶⁷ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 265.

³⁶⁸ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 266.

³⁶⁹ DsC. Senado. Sesión de 18 de diciembre de 1847, Apéndice Segundo al núm. 16, págs. 251 y 252.

Legislatura ordenado por Isabel II durante el verano. A la vez, es de destacar la rapidez con la que se debatió y aprobó el texto (la Ley estaba promulgada el 28 de enero de 1848).

En el Diario de las Sesiones del Senado del día 20 de noviembre de 1847³⁷⁰, queda reflejado el acuerdo por el que pasan

... a las Secciones para el nombramiento de las Comisiones respectivas los dos proyectos de Ley procedentes del Gobierno y pendientes desde la anterior legislatura: (...) y, segundo, sobre compañías mercantiles por acciones.

Días más tarde, el Diario del 3 de diciembre de 1847³⁷¹, recoge las siguientes intervenciones que manifiestan cierto desconcierto sobre la continuidad o no del PL 1848 presentado en la Legislatura anterior por un Gobierno diferente al de finales de 1847:

El Sr. Conde de VIGO: Habiendo presentado el Gobierno un proyecto de ley sobre Sociedades anónimas, que quedó pendiente en la anterior legislatura, y acerca del cual hay nombrada una Comisión, desearía saber si el Gobierno estima que continúe en la presente. (...)

El Sr. PRESIDENTE [del Senado]: Señores, el Sr. Conde de Vigo sabe bien que todos los proyectos presentados por el Gobierno continúan de una legislatura a otra, cuando no manifiesta que los retira: por consiguiente, no habiendo retirado hasta ahora el de Sociedades anónimas, se entiende que debe continuar.

El Sr. Ministro de ESTADO (Duque de Sotomayor): Para contestar a la pregunta que el Sr. Conde de Vigo ha dirigido al Senado le diré en nombre del Gobierno, que reproduce el proyecto de ley sobre Sociedades anónimas

La CS estaba formada por las siguientes personas. El Presidente fue D. Pedro Sáinz de Andino. Los Vocales, D. Julián Aquilino Pérez, el Conde de Santa Olalla y D. José María Pérez. El Secretario, D. Francisco Acebal Arratia³⁷².

En el preámbulo del Dictamen, la CS incide, en primer lugar, sobre la deplorable situación en la que se encontraban muchas sociedades anónimas, como consecuencia de la actuación de los T. de c.³⁷³.

³⁷⁰ Pág. 24.

³⁷¹ Pág. 96.

³⁷² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 29 de diciembre de 1847, Apéndice al núm. 32, pág. 618.

³⁷³ Dice así el primer párrafo del Dictamen:

La franquicia otorgada por el Código de comercio para el establecimiento de las Sociedades anónimas, autorizando a los tribunales de este ramo para el examen y aprobación de sus estatutos, ha sido causa de que muchas se hayan constituido sin exigírseles las garantías de orden legal que la justicia, la buena fe y la seguridad de los intereses públicos e individuales prescriben. Notorios son los perjuicios y graves conflictos que en los últimos tiempos ha producido el abuso del espíritu de asociación, que si bien dirigido es indisputablemente la palanca más poderosa para el movimiento industrial y mercantil del país, cuando se convierte en instrumento de cálculos y operaciones de mero agio no puede menos de trastornar la legalidad de la contratación mercantil, sirviendo de lazo peligroso para la credulidad de los incautos, que se fían en anuncios pomposos de capitales que no existen, de grandiosas empresas con que se excita el entusiasmo público, y nombres respetables, bajo que se amparan los que de hecho han de tener el manejo efectivo de los intereses sociales.

El Dictamen reconoce que debe protegerse la autonomía privada *en cuanto sea materia convencional y de libre estipulación*, pero deben establecerse unas normativas imperativas para alcanzar los siguientes objetivos:

- La protección de los intereses de los accionistas
- Asegurar la ejecución y cumplimiento de los contratos
- Conectar estas sociedades con *la prosperidad del Estado y el orden de su administración*.

El preámbulo de Dictamen destaca, finalmente, que la CS ha aceptado íntegramente el texto recibido del Congreso de los Diputados, por dos motivos. En primer lugar por la urgencia del asunto, dado que al poco tiempo de recibir el Senado (el 26 de abril de 1847³⁷⁴) el texto definitivo del PL 1848, aprobado por el Congreso de los Diputados el día 23 de abril de 1847, la Reina disuelve las Cortes por RD de 5 de mayo de 1847³⁷⁵. Los trabajos de la CS nombrada días antes no se pueden terminar, debiéndose nombrar una nueva CS, tal y como se ha explicado unas líneas más arriba.

Varias menciones a esta necesidad de tramitar con carácter de urgencia el PL 1848 y, en consecuencia, evitar modificaciones del texto, las encontramos en la intervención que tuvo el entonces Ministro de CIOP, D. Juan Bravo Murillo en la primera sesión del Senado en la que se debatió el PL 1848. He aquí algunas de sus palabras:

El Senado conoce, como todos los españoles, que el asunto de que se trata en esta Ley es de grande importancia y urgencia. (...) El Gobierno de S. M. conoció bastante esta necesidad, y presentó en la anterior legislatura al otro Cuerpo Colegislador el proyecto que se discute. Este proyecto fue modificado, aunque no sustancialmente, y al cabo obtuvo el voto de aquel Cuerpo.

Posible es, señores, y casi seguro, que las mismas personas que adoptaban este proyecto, que le creían suficiente para satisfacer a las necesidades de aquella época [se refiere a los meses de febrero, marzo y abril de ese mismo año 1847], creerían en el día después de los sucesos que han pasado desde entonces acá, de lo que ha sucedido en España, y principalmente en Madrid; creerían, digo, que acaso no satisfarían hoy las necesidades como por aquel tiempo, como se creían en Marzo y Abril. Sin embargo, el Gobierno que conoce esto, como lo ha conocido la Comisión que presenta este dictamen, ha creído que estas razones debían atenderse, y que era necesario que se aprobase este proyecto en el Senado, como fue aprobado por el otro Cuerpo Colegislador.

En todas las leyes han de tenerse en consideración la conveniencia, la bondad, la necesidad y la urgencia de ellas. (...) Creo, pues, que es una circunstancia esencialísima, y que debe atenderse a la necesidad y a la urgencia de la Ley, y que si algo hay que sacrificar, debe hacerse atendiendo a la urgencia, porque esto es una necesidad.

³⁷⁴ DsC. Senado. Sesión de 26 de abril de 1847, Apéndice Segundo al núm. 35, págs. 421 y 422.

³⁷⁵ GdM de 6 de mayo de 1847, núm 4617

*Creo que todos los Sres. Senadores conocerán y estarán penetrados de que el Gobierno y la Comisión que ha extendido este dictamen, han tenido presente esta mira. Así, pues, aunque el Gobierno y algunos individuos de la Comisión, y acaso todos, aunque otros muchos Sres. Senadores creyesen que esta Ley, en las circunstancias en que va a ser aprobada por el Senado, y que S.M., si lo tiene a bien, sancionará no satisface tan ampliamente las necesidades como lo haría otra ley; sin embargo, si esta perfección ideal a que nunca se pudo aspirar, y mucho menos en estas materias, que varían todos los años, no llenase el objeto de que se remediasen las necesidades; si hubiera que sacrificar algo, creo, vuelvo a decir, que todos debemos estar convencidos de que debe hacerse este sacrificio. Por esta razón, aunque la Comisión pensó haber introducido algunas modificaciones en la ley; aunque el Gobierno creyó que hubieran sido convenientes; aunque en otras ocasiones, puedo asegurarlo, las hubiera aceptado, expuso en el seno de la Comisión estas razones, y sus dignos individuos cedieron al peso de ellas. Tales son, señores, hablando de la totalidad del proyecto, los motivos que ha tenido la Comisión para que no se introdujera ninguna modificación en el proyecto que fue aprobado por el Congreso, y se discute ahora en el Senado.*³⁷⁶

La segunda razón recogida en el Preámbulo del Dictamen por la que la CS decidió aceptar el texto aprobado por el Congreso de los Diputados el 23 de febrero anterior es

...porque en las conferencias que la Comisión ha tenido con el Gobierno se ha convencido de que en el Reglamento que habrá de expedirse para la ejecución de la Ley se dictarán las disposiciones que están en las facultades constitucionales del Poder ejecutivo, para que la acción tutelar y la inspección que la compete ejercer para la creación y régimen de las compañías por acciones sea tan eficaz y directa como requiere un género de contratación que estando fuera de las condiciones ordinarias que se observan en las demás Sociedades mercantiles, se debe considerar ligado íntimamente con el orden público del Estado (el subrayado es nuestro).

Es significativo comprobar la importancia que ya se le daba al Reglamento que iba a desarrollar la Ley de 1848. Prueba de ello son los contactos de la CS con el Gobierno para conocer la actitud de éste en cuanto a la regulación de las materias de su competencia. Cabe recordar que el Ministro de CIOP desde el mes anterior a la publicación del Dictamen era D. Juan Bravo Murillo.

Se puede destacar, también, el tono claramente intervencionista del párrafo transcrito, al hablar de la acción tutelar, la inspección, etc. Como se tendrá ocasión de exponer más adelante, el Presidente de la CS, D. Pedro Sáinz de Andino, durante los debates parlamentarios, adoptará una línea muy intervencionista y crítica con el entonces vigente CCom 1829, redactado por él.

El texto del PL 1848 presentado por la CS es prácticamente idéntico al aprobado por el Congreso de los Diputados, salvo algunas variaciones menores³⁷⁷. No se trata de

³⁷⁶ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, págs. 265 y 266.

³⁷⁷ Estas modificaciones son las siguientes:

El artículo 6 cambia el término "pida" por "expida".

repetir aquí los comentarios que se hicieron sobre el texto del Congreso; simplemente poner de relieve que la CS asumió en su totalidad las líneas maestras del PL 1848 aprobado por el Congreso. En este sentido, son muy esclarecedoras las siguientes palabras del Ministro de CIOP, D. Juan Bravo Murillo, pronunciadas el 22 de diciembre de 1847 en el Senado, al comparar el Dictamen de la CS que se nombró en abril de 1847 y que no se pudo utilizar por la disolución de las Cortes en mayo, y el Dictamen presentado en diciembre de 1847:

*La Comisión anterior, como el Senado, habrá podido observar cuando se ha dado lectura del dictamen que sometía a su deliberación en la época pasada, ya manifestó que en su sentir las modificaciones que proponía eran más bien aclaraciones que variaciones. La Comisión actual y el Gobierno, de acuerdo con ella, ha creído con efecto que no se trataba de introducir modificaciones nuevas, sino aclaraciones; y si aquella Comisión creyó que eran convenientes, no podría creer que eran necesarias.*³⁷⁸

No se puede finalizar los comentarios a este Dictamen sin hacer alusión a la intervención transcrita al principio de este epígrafe por parte del Duque de Sotomayor, Ministro de Estado, para ratificar la continuidad del PL 1848 presentado en la anterior Legislatura. En efecto, declara en nombre del Gobierno que éste *reproduce el Proyecto de ley sobre Sociedades anónimas*. El Ejecutivo reconoce así haber aceptado el cambio de planteamiento con respecto al primer texto presentado por el Gobierno a través de su Ministro de CIOP, el Sr. Roca de Togores, en febrero de 1847 y asume el nuevo PL 1848 de carácter mucho más intervencionista que el primero.

XI. RESUMEN DE LOS DEBATES EN EL SENADO DURANTE LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE DICIEMBRE DE 1847

El Dictamen de la CS sobre el PL 1848 se presentó a la Cámara Alta el 14 de diciembre de 1847. Una semana más tarde, el día 22 de diciembre, comenzaron los debates, que se prolongaron durante los dos siguientes días, terminando el día de Nochebuena, 24 de diciembre, a las cinco de la tarde. Es claro que, por lo señalado de las fechas, había una gran urgencia para aprobar el texto legal y adoptar las medidas que se entendieron más eficaces para terminar con la deplorable situación de las compañías anónimas.

El 22 de diciembre de 1847, primer día de los debates en el Senado, se discutió *sobre la totalidad del Dictamen sobre el proyecto de ley de Sociedades anónimas*³⁷⁹. El Sr. Armendáriz, que formó parte de la CS que elaboró el anterior Dictamen sobre el PL 1848, pero que no vio la luz por el inesperado final de Legislatura en el verano de 1847, abrió el turno de las intervenciones para dejar constancia de la existencia del anterior

El artículo 8 desdobra su segundo párrafo, apareciendo, por tanto, un tercero, pero con idéntica redacción.

El artículo 14, en su última frase sustituye la conjunción "y" por una coma.

El artículo 17 omite el artículo "los" referido a los fondos de la Sociedad.

El artículo 18 *in fine* sustituye "continuación" por "autorización", lo cual subraya que, en relación a las sociedades por acciones ya existentes, necesitaban obtener un nuevo pronunciamiento administrativo para su continuidad.

³⁷⁸ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 266.

³⁷⁹ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, págs. 264 a 274.

Dictamen. Fue contestado por el Ministro de CIOP, Sr. Bravo Murillo, quien reconoció los trabajos efectuados por la CS durante la anterior Legislatura.

Después de esta breve intervención, se iniciaron las deliberaciones artículo por artículo del PL 1848, desde el primero hasta el 12. Se aprobaron todos sin modificación, salvo el artículo 12. Las discusiones fueron rápidas en este primer día pues existía un alto grado de consenso y mucha urgencia en la tramitación del texto.

Los protagonistas de las intervenciones fueron el Sr. Pérez de Seoane, D. Pedro Sáinz de Andino (Presidente de la CS), D. Antonio Guillermo Moreno, el Sr. Santillán, el Marqués de Fuentes de Duero y el Marqués de Vallgornera.

La jornada del 23 de diciembre de 1847³⁸⁰ fue la más larga de las tres y solamente se debatió un artículo, el 12, relativo a las acciones nominativas y al portador. Destaca un largo discurso de Sáinz de Andino citando legislación comparada y justificando su cambio de postura con respecto a los planteamientos del CCom 1829. También intervinieron los Señores Pérez de Seoane, Peña Aguayo, Ministro de CIOP (Sr. Bravo Murillo) y el Marqués de Vallgornera³⁸¹.

En las actas de los debates de aquel día se recogen los textos íntegros de las enmiendas presentadas al artículo 12 y los Dictámenes -algunos de larga extensión- sobre esas enmiendas. Las discusiones se prolongaron excesivamente y no se pudo votar la aprobación de la redacción del citado artículo.

El 24 de diciembre de 1847, último día de los debates sobre el PL 1848, continuó la discusión artículo por artículo, aprobándose, en primer lugar, el artículo 12 modificado con respecto al texto propuesto por la CS.

Los artículos 13 al 22³⁸² fueron objeto de las correspondientes discusiones, en las que intervinieron los siguientes Señores: López Ballesteros, Marqués de Peñaflorida, Conde de San Julián, Pérez de Seoane, Conde de Vigo, Ministro de CIOP (D. Juan Bravo Murillo), Marqués de Fuentes de Duero, Sáinz de Andino (Presidente de la CS), Armendáriz, Marqués de Vallgornera, Marqués de Montevirgen y D. Antonio Guillermo Moreno.

Muchos de ellos son los promotores de diversas enmiendas a varios artículos, cuyos textos quedan recogidos en las Actas del Senado de este día 24 de diciembre. Los artículos se aprobaron sin modificaciones respecto al texto propuesto, excepto los números 18, 19 y 20, que sufrieron variaciones y, además, se incluyó un nuevo artículo 21.

³⁸⁰ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, págs. 275 a 290.

³⁸¹ El contenido y tono de las discusiones del Senado difiere en algunos aspectos en relación a las del Congreso de los Diputados. Quizá el más relevante es que en el Senado se detecta un gran interés por defender las concepciones tradicionales del ahorro, seguridad, orden público y prudencia. En cambio, los Diputados (y siempre generalizando, con el riesgo que esto conlleva) mantienen unos diálogos que denotan un mayor conocimiento práctico de la realidad empresarial y una visión proyectada más hacia el futuro, aunque, en ocasiones, centrado demasiado en intereses particulares.

³⁸² El texto del PL 1848 aprobado por el Senado incluye, a propuesta de D. Antonio Guillermo Moreno, un artículo más, el 21, trasladándose el antiguo artículo 21 al artículo 22.

A última hora de la tarde de aquel día de Nochebuena³⁸³ se procedió a la votación definitiva de la Ley, que dio el siguiente resultado:

Número total de votantes	82
Bolas blancas.....	80
Bolas negras	2

XII. PL 1848 REMITIDO POR EL SENADO AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (24 DE DICIEMBRE DE 1847)

Los debates sobre el PL 1848 en la Cámara Alta, tuvieron lugar en fechas muy señaladas. El último día (24 de diciembre), la Reina aprobó un reajuste parcial del Gabinete ministerial, produciéndose los siguientes cambios³⁸⁴: dimisión del Ministro de Hacienda, D. Francisco de Paula Orlando y nombramiento de su sustituto, D. Manuel Bertrán de Lis, que, a su vez, es cesado como Ministro de Marina, siendo sustituido por D. Mariano Roca de Togores, Diputado a Cortes. Se nombra Ministro de la Guerra a D. Francisco de Paula Figueras, Senador y se releva de este cargo a D. Ramón María Narváez, quien conserva la Presidencia del Consejo de Ministros.

Pocos días después de estos cambios, el 29 de diciembre de 1847, el Congreso de los Diputados recibe el PL 1848, modificado por el Senado. Se lee y se manda pasar a secciones³⁸⁵.

Las modificaciones respecto al texto del PL 1848 recogido en el Dictamen de la CS (de fecha 14 de diciembre de 1847) y que, como se dijo anteriormente, es casi idéntico al aprobado por el Congreso el 23 de abril de 1847, son las siguientes:

- En el artículo 4, se omite la mención *Esta autorización sólo se concederá a las compañías cuyo objeto sea de utilidad pública*. Parece que se trata de un error mecanográfico, dada la importancia de esta cuestión, puesto que no es objeto de comentario posterior y figura expresa e íntegramente en el texto final de la Ley de 1848.
- El artículo 6 vuelve a corregir la redacción y sustituye el término *expida* por *pida*, tal y como se encontraba en la redacción anterior.
- En el artículo 12, que, como ha quedado expuesto más arriba, fue objeto de larga discusión durante la segunda sesión (23 de diciembre), se suprimen las siguientes frases: *... serán nominales en sus dos terceras partes a lo menos. No podrá emitirse ninguna al portador, sin que previamente se haya entregado su importe total en la Caja de la compañía*, que son sustituidas por la siguiente: y

³⁸³ No se puede dejar de recoger aquí la intervención del Presidente del Senado al final de las discusiones y antes de la votación sobre el PL 1848:

Yo ruego a los Sres. Senadores, que puesto que vienen festividades, deseo tengan la bondad de no retirarse del Senado hasta que se haga la votación de la ley que estamos discutiendo.

³⁸⁴ RD de 24 de diciembre de 1847 (GdM de 25 de diciembre de 1847, núm. 4850)

³⁸⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 29 de diciembre de 1847, núm. 32, pág. 595. En el Apéndice a dicho Diario se encuentra el texto del PL 1848 (págs. 617 y 618)

se inscribirán en el libro registro, que habrá de llevarse necesariamente a nombre de la persona o corporación a quien correspondan.

- En el artículo 17: se introduce el artículo “los” al referirse a los fondos.
- En el artículo 18 se recoge dos modificaciones. En primer lugar, se sustituye la expresión *formadas en la actualidad, y que no existan en virtud de autorización Real* por la más lógica de *existentes en la actualidad sin autorización Real*. En segundo lugar, se sustituye el siguiente texto: *Antes de pedir la autorización los gerentes o directores convocarán a junta general de accionistas, y sólo en el caso de que la mayoría de éstos, que se computará con arreglo a sus estatutos y reglamentos, acuerde la continuación de la compañía, se podrá hacer solicitud, por: (D)entro del término de cincuenta días siguientes a esta publicación, los gerentes o directores convocarán a junta general de accionistas para que resuelvan si se ha de pedir o no la Real autorización, la cual se impetrará solamente en el caso de que la mayoría de los mismos accionistas, que se computará con arreglo a sus estatutos y reglamentos, acuerde la continuación de la compañía.*
- En el artículo 19 se omite al principio el adverbio *precisamente* y se añade la siguiente frase al final: *No se concederá, sin embargo, esta autorización a las compañías por acciones, sea cualquiera su naturaleza, si se hallasen comprendidas en el último párrafo del artículo 4.*
- El artículo 20 intercala la expresión *lo mismo que aquéllas que no la obtuviesen después de haberla solicitado.*
- El artículo 21 antiguo (disposición derogatoria) pasa a ser el nuevo artículo 22 y el nuevo artículo 21 tiene la siguiente redacción: *Es condición indispensable para la Real aprobación de los estatutos de las sociedades anónimas que han de estar arreglados a la cláusula tercera del artículo 265 del Código de comercio, que exige que el manejo de aquellas ha de encargarse a mandatarios o administradores amovibles a voluntad de los socios.*

XIII. DICTAMEN DE LA CMC-S (11 DE ENERO DE 1848)

Según la normativa aplicable en aquel momento a la tramitación de los Proyectos de Ley en las Cortes, si el texto aprobado por el Congreso de los Diputados era modificado por la Cámara Baja, se debía formar una Comisión formada por igual número de Senadores y Diputados para que emitiera un Dictamen con un texto de consenso. Dicho Dictamen debía ser aprobado en su integridad por ambas Cámaras. En caso contrario, el Proyecto de Ley no podía aprobarse.

El Senado, tal y como figura en la comunicación del 24 de diciembre de 1847 del nuevo texto del PL 1848 al Congreso (dándose la Cámara Baja por enterada el 29 de diciembre de 1847³⁸⁶), nombra a sus miembros en la Comisión: *Y habiendo este Cuerpo Colegislador hecho en el proyecto las modificaciones que aparecen, y conforme a lo*

³⁸⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 29 de diciembre de 1847. Apéndice al núm. 32, pág. 618.

prevenido en el artículo 47 del Reglamento para su gobierno interior, formarán parte de la comisión mista [sic] los mismos cinco individuos, que han compuesto la especial, y son los Sres. D. Pedro Sáinz de Andino, D. Julián Aquilino Pérez, Conde de Santa Olalla, D. José María Pérez y D. Francisco del Acebal y Arratia. Lo que el Senado manifiesta al Congreso, a fin de que nombrando igual número de Sres. Diputados, pueda tener efecto lo dispuesto en el artículo 10 de la ley de 19 de julio de 1837³⁸⁷.

Pocos días más tarde, aún en plena época navideña, el 4 de enero de 1848, el Congreso comunica al Senado (que queda enterado con fecha 13 de enero de 1848³⁸⁸) que forman parte de la CMC-S sobre el PL 1848 los Sres. Diputados, D. Santiago Fernández Negrete, D. José Polo y Borrás, D. Gregorio Miota, D. Joaquín Marco y Miguel y D. Ramón María Calatrava.

La CMC-S elige como Presidente y Secretario de la misma al Sr. Senador D. Pedro Sáinz de Andino y al Sr. Diputado D. José Polo respectivamente³⁸⁹.

El 7 de enero de 1848, tres días después de la anterior comunicación, el Congreso queda enterado de una comunicación del Senado en la que se indica que el Marqués de Fuentes de Duero sustituye en la CMC-S al Conde de Santa Olalla, que se había excusado por su mal estado de salud³⁹⁰.

El 11 de enero de 1848 la CMC-S emite su dictamen³⁹¹ desde el Senado. Por unanimidad se propone a los dos Cuerpos Colegisladores aprobar unas enmiendas y modificaciones exclusivamente sobre cinco artículos.

En concreto, se somete a la aprobación lo siguiente:

- Artículo 12: la redacción modificada por el Senado.
- Artículo 18: también la redacción modificada por la Cámara Alta.
- Artículo 19: la redacción aprobada por el Senado, si bien, aunque no se plantea de nuevo volver al adverbio “precisamente” se propone incluir la palabra “todas” referida a las compañías que hubieren cumplido las condiciones con que fueron aprobadas por los T. de c.
- Artículo 20: volver a la redacción dada por el Congreso de los Diputados.

³⁸⁷ El artículo 10 de la Ley Adicional de 19 de julio de 1837 establecía lo siguiente:

Si uno de los Cuerpos Colegisladores modificare o desaprobare solo en alguna de sus partes un proyecto de ley, aprobado ya en el otro Cuerpo Colegislador, se formará una Comisión compuesta de igual número de Senadores y Diputados, para que conferencien sobre el modo de conciliar opiniones. El dictamen de esta Comisión se discutirá sin alteración ninguna por el Senado y el Congreso; y si fuese admitido por los dos, quedará aprobado el proyecto de ley”.

Texto transcrito en el DsC. Senado. Sesión de 17 de enero de 1848, núm. 23, pág. 333.

³⁸⁸ DsC. Senado. Sesión de 13 de enero de 1848, núm. 21, pág. 322.

³⁸⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 13 de enero de 1848, núm. 40, pág. 742 y DsC. Senado. Sesión de 13 de enero de 1848, núm. 21, pág. 322.

³⁹⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 7 de enero de 1848, núm. 38, pág. 727.

³⁹¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 13 de enero de 1848. Apéndice segundo al núm. 41 y DsC. Senado. Sesión de 14 de enero de 1848. Apéndice segundo al núm. 22.

- Suprimir el nuevo artículo 21, que vuelve a su versión anterior, desapareciendo, por tanto, el artículo 22.

Dos días más tarde, el 13 de enero de 1848, se lee el Dictamen en ambas Cámaras. Así, en el acta del Congreso de esa fecha³⁹² se recoge:

Previa su lectura, se anunció igualmente que quedará sobre la mesa el dictamen relativo al proyecto de ley de sociedades anónimas que presentaba la comisión mista [sic] encargada de conciliar la opinión de ambos Cuerpos Colegisladores.

Y en el acta correspondiente del Senado³⁹³ se dice:

Entrándose en el orden del día, se leyó el dictamen (...) de la comisión mixta sobre el proyecto de ley de Sociedades mercantiles por acciones, (...) señalándose para su discusión el lunes inmediato.

El lunes al que se refiere el párrafo anterior fue el día 17 de enero de 1848, fecha en que tuvieron lugar las discusiones sobre el Dictamen de la CMC-S simultáneamente en la Cámara Alta y en la Cámara Baja.

En el Senado, el Marqués de Falces plantea una cuestión de orden. Entiende que no se puede discutir sobre el Dictamen por dos razones. En primer lugar, ese mismo día se estaba debatiendo en el Congreso de los Diputados el mismo texto y, en segundo lugar, podría ocurrir que se aprobaran diferentes redacciones en cada Cuerpo Colegislador. El Presidente del Senado, Marqués de Miraflores, le responde diciendo que

(e)l que se discuta a un tiempo en ambos [Cuerpos Colegisladores] no es un obstáculo, porque no cabe enmienda alguna sobre este dictamen, sino aprobación simple de lo acordado por la comisión mixta. Si no hay aprobación en cualquiera de los dos Cuerpos, la ley no tiene efecto y esta es la razón por la que la Mesa no ha tenido inconveniente en ponerlo a discusión.

Se leyó el artículo 10 de la ley adicional de 19 de julio de 1837, transcrito en nota a pie de página más arriba, y quedó aclarado el tema.

La discusión sobre el Dictamen se centró en el artículo 21 antiguo, que fue introducido en el PL 1848 del Senado por el Senador Sr. Moreno, que es quien interviene también en esta sesión del 17 de enero de 1847. Entiende que debe volverse a la anterior redacción para evitar una discordancia con el artículo 265.3 CCom 1829 en relación a los administradores amovibles de las sociedades anónimas. Le responde el Ministro de CIOP, D. Juan Bravo Murillo, explicando las razones de la modificación propuesta por el Dictamen de la CMC-S. El Senador Sr. Moreno sugiere que se tenga en cuenta su observación cuando se redacte el texto reglamentario. Sin más discusiones, quedaron aprobadas todas las propuestas del Dictamen de la CMC-S.

³⁹² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 13 de enero de 1848, núm. 41.

³⁹³ DsC. Senado. Sesión de 13 de enero de 1848, núm. 22. Véase también una referencia en la GdM, de 14 de enero de 1848, núm. 4870.

En el Congreso de los Diputados³⁹⁴ el debate más largo se produjo con motivo del artículo 18, entre el Sr. Gasco, que criticaba la retroactividad de dicho artículo, y D. José Polo, Secretario de la CMC-S. Al final se aprobaron íntegramente todas las propuestas contenidas en el Dictamen de la CMC-S.

XIV. PROMULGACIÓN DE LA LEY 1848

Una vez aprobado en su integridad el Dictamen de la CMC-S en el Congreso de los Diputados y en el Senado, el día 19 de enero de 1848,

*(s)e leyó, y el Congreso declaró estar conforme con lo acordado, y aprobó definitivamente, revisado ya por la comisión de correcciones de estilo, el dictamen de la comisión mixta sobre el proyecto de ley de sociedades mercantiles por acciones.*³⁹⁵

El 24 de enero de 1848³⁹⁶ se lee en el Senado una comunicación del Congreso, de fecha 19 de enero de 1848,

... con la que se remitía al Senado los artículos desde el 12 hasta el 20, ambos inclusive, del proyecto de ley de compañías mercantiles por acciones, que ha aprobado conformándose con el dictamen de la Comisión mixta. El Senado quedó enterado, ordenando se procediese a los efectos convenientes.

Y, al final de la misma sesión, antes de reunirse el Senado en Secciones,

Se leyó, y halló conforme con lo aprobado por el Senado, el proyecto de ley sobre Sociedades mercantiles por acciones.

Al día siguiente, 25 de enero de 1848, el Senado quedó enterado

... de una comunicación del Señor Presidente del Consejo de Ministros, fecha de 24 del corriente mes, participando que S.M. se había dignado señalar la hora de las seis de la tarde del día 25 para recibir a la Diputación que ha de poner en sus Reales manos el proyecto de ley (...) de las Sociedades mercantiles por acciones.

Como cuestión meramente anecdótica, se reseña que, en cuanto al uso terminológico del título de la Ley, el Senado utiliza indistintamente los sustantivos “sociedades” como “compañías” mercantiles por acciones.

El 26 de enero de 1848, el Vicepresidente del Senado (Duque de Gor) informa³⁹⁷, nada más abrirse la sesión, que

³⁹⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 17 de enero de 1848, núm. 44, págs. 829 a 832.

³⁹⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de enero de 1848, núm. 46, pág. 850.

³⁹⁶ DsC. Senado. Sesión de 24 de enero de 1848, núm. 24, pág. 352.

³⁹⁷ DsC. Senado. Sesión de 26 de enero de 1848, núm. 26, pág. 377.

... la Diputación encargada de poner en manos de S.M. el proyecto de ley (...) de sociedades mercantiles por acciones cumplió ayer su cometido, siendo recibida dicha Diputación por S.M. con la amabilidad que acostumbra.

Y ese mismo día, el Congreso de los Diputados queda enterado de

... dos comunicaciones del Senado, participando en la primera que con fecha de hoy [26 de enero] elevaba a la sanción de S. M. el proyecto de ley de compañías mercantiles por acciones.

En realidad, el día al que se refiere es el 25 de enero, como consta por la documentación del Diario del Senado, y no el 26.

El 28 de enero de 1848, la Reina sanciona la Ley. El primer párrafo del texto legal dice así:

SEÑORA: El Senado, habiendo tomado en consideración el proyecto de ley de compañías mercantiles por acciones que en vista de lo propuesto por el Gobierno de V. M. aprobó el Congreso de los Diputados en 23 de Abril de 1847 y 19 de Enero corriente, ha aprobado lo siguiente:

El texto de la Ley es recogido íntegramente en los Diarios de las dos Cámaras. En el Congreso de los Diputados, el día 29 de enero de 1848³⁹⁸ se manifiesta lo siguiente:

Se leyeron y quedaron publicadas como leyes en el Congreso, anunciándose que se archivarían, los originales que de las mismas remitía el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, las dos sancionadas por S. M. en 28 del corriente; la primera (...) y la segunda sobre compañías mercantiles por acciones (Véase el Apéndice segundo a este Diario).

Y el Apéndice segundo al número 54 del DsC, Congreso de los Diputados, de 29 de enero, en las págs. 1021 y 1022, se recoge el texto de la Ley, que lleva por título *Ley sancionada por S. M. y publicada en el Congreso, sobre compañías mercantiles por acciones.*

Por su parte, en el Senado, el día 31 de enero de 1848³⁹⁹,

Diose cuenta de dos oficios del Sr. Ministro de Gracia y Justicia, fecha 28 de este mes, acompañando a cada uno un ejemplar original de las leyes que S. M. sea dignado sancionar; (...) la segunda sobre Sociedades mercantiles por acciones.

Se leyeron dichas leyes (Véanse los Apéndices primero y segundo al Diario núm. 27, que es el de esta sesión).

El Apéndice segundo al número 27 del DsC, Senado, de 31 de enero, en las págs. 395 y 396, se recoge todo el texto de la Ley, que tiene el siguiente título: *Ley*

³⁹⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 29 de enero de 1848, núm. 54, pág. 1004.

³⁹⁹ DsC. Senado. Sesión de 31 de enero de 1848, núm. 27, pág. 387.

sancionada por S. M., y publicada en el Senado, sobre establecimiento de compañías mercantiles por acciones.

Como se ha podido apreciar, el título es diferente en el Congreso y en el Senado. En éste último se hace referencia al “establecimiento” de compañías mercantiles por acciones. En cambio, en el Congreso se omite esta palabra.

Por otro lado, parece que se ha unificado el uso del sustantivo “compañías”, prescindiendo en el título de “Sociedades”, aunque en la mención de ese mismo día en la sesión de la Cámara Baja, vuelve a aparecer “Sociedades”.

La firma de la Ley en el Palacio del Senado (“*Y el Senado lo eleva a V. M., a fin de que se digne darle su sanción, si lo tiene por conveniente*”) es el 24 de enero de 1848. Firman el Marqués de Miraflores (Presidente de la Cámara), Domingo Ruiz de la Vega, Senador Secretario, Diego Medrano, Senador Secretario, Francisco del Acebal y Arratia, Senador Secretario y Juan de la Pezuela, Senador Secretario.

La sanción real se otorga en Palacio, el 28 de enero de 1848. Junto al mandato “*Publíquese como ley*”, figura el nombre de la Reina y el del Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Larrola.

Por su parte, en la *Colección Legislativa de España* de 1848⁴⁰⁰, se recoge la ley en el número 48 del primer cuatrimestre, bajo una rúbrica más extensa que los títulos citados anteriormente: *Ley, preceptuando que no se pueda constituir ninguna compañía mercantil, cuyo capital en todo o en parte se divida en acciones, sino en virtud de una ley o de un Real decreto, con lo demás que se determina.*

Este texto se inicia con el consabido párrafo formal *Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, Reina de las Españas, a todos los que las presentes vieren y entendieren sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:* y da comienzo el articulado de la Ley.

El párrafo final de este texto (que tampoco se recoge en la versión del Congreso ni en la del Senado) dice: *Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes [sic], gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.* Junto al YO LA REINA aparece El Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, D. Juan Bravo Murillo.

XV. BREVE REFLEXIÓN: ¿POR QUÉ NO SE MODIFICÓ EL CCom 1829 EN VEZ DE PROMULGAR UNA LEY ESPECIAL?

Cabe terminar el presente capítulo planteándose por qué el Legislador de 1848 decidió aprobar una ley de carácter especial en vez de modificar los artículos del CCom 1829 sobre las compañías mercantiles por acciones.

⁴⁰⁰ *Colección Legislativa de España (Continuación de la colección de Decretos)* (1849). Primer cuatrimestre de 1848, tomo XLIII, Madrid, págs. 51 a 54.

No deja de sorprender que una lectura detenida de todas las intervenciones de los Sres. Diputados y Senadores durante la tramitación parlamentaria del PL 1848, no encuentre ninguna referencia a la posibilidad de incluir el nuevo régimen en los artículos de CCom 1829. El acuerdo en este aspecto es unánime; no hay ninguna opinión crítica o discrepante. Tampoco se cuestiona por la Doctrina de la época ni, posteriormente, cuando se promulgan las leyes especiales sobre compañías anónimas (LF, LB, LSCr y LSCOP).

Además, cabe recordar que la legislación francesa, modelo de la nuestra, regulaba las compañías por acciones en el *Code*, sin haber aprobado una ley especial sobre la materia⁴⁰¹.

En nuestra opinión, esta técnica legislativa obedece a varias causas. En primer lugar, la urgencia por derogar el régimen vigente. Como expresa el profesor ROJO,

*(m)ientras que las leyes pueden ser fruto de un súbito impulso, los Códigos, como conjuntos normativos unitarios bajo principios homogéneos, exigen meditación y exigen tiempo*⁴⁰².

Dentro de las circunstancias que rodearon el cambio normativo de 1848, según se recoge en otros epígrafes, los parlamentarios dieron una gran importancia a la celeridad de la aprobación del nuevo régimen legal. Su introducción en los artículos del CCom 1829, por la estructura de éste al regular las compañías mercantiles sin diferenciar títulos o secciones para cada tipo social, hubiera requerido la redistribución de muchos artículos y la modificación de algunos de ellos, reguladores de otros tipos societarios. Trabajo que, sin duda, exigía más tiempo y podía generar debates sobre otras materias de las compañías colectivas y comanditarias.

Y, en segundo lugar, no puede olvidarse que la redacción del CCom 1829 fue un trabajo personal de D. Pedro Sáinz de Andino, promulgado por el Rey. En cambio, el nuevo texto, es fruto de un trabajo parlamentario, de un consenso técnico y político en el que intervinieron los representantes de los titulares del derecho de sufragio. La legitimación de la aplicabilidad de la norma es diferente y, probablemente, desde la perspectiva política, en materia tan importante como las compañías por acciones, convenía no introducir reformas aprobadas por el Parlamento en un texto redactado por una persona y directamente promulgado por el Rey.

⁴⁰¹ En la legislación británica existían leyes reguladoras de diferentes tipos de compañías mercantiles, tal y como se expone en otro capítulo, pero su sistema normativo mercantil no se basaba en un Código similar al de Sáinz de Andino.

⁴⁰² ROJO, A. (2012): “El Código mercantil” en RDM, núm. 286, octubre – diciembre, pág. 21.

CAPÍTULO V

DESARROLLO DE LA LEY DE 1848

I. IMPORTANCIA DEL REGLAMENTO EN RELACIÓN A LA LEY DE 1848

La aprobación de la Ley de 1848 supone un cambio muy importante en la historia del Derecho de sociedades español. El texto legal introduce, por primera y única vez, el requisito de la autorización legal o gubernativa para la constitución de sociedades por acciones. Y lo hace en una corta ley de 21 artículos, de los cuales, 3 se dirigen a la regularización de las sociedades ya existentes.

Sorprende este reducido número de artículos si se compara con los textos legales sobre esta materia: LSA (1951), 171 artículos; LSA (1989), 338 artículos; LSRL (1953), sólo 32 artículos, LSRL (1995), 144 artículos; y, por último, LSC, 539 artículos. En España, así como en los demás países de nuestro entorno, las normas con rango de ley formal que regulan las sociedades por acciones, son de una gran extensión, con un elevado número de artículos a través de los cuales se regulan aspectos concretos del funcionamiento y régimen de las sociedades por acciones.

El Legislador de 1848, por el contrario, decidió que el contenido de la materia con rango de Ley en relación al Derecho de sociedades por acciones era mínimo. Su desarrollo sería competencia del Gobierno, a través de un Reglamento de ejecución de la Ley⁴⁰³. Esto supuso que los debates parlamentarios, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, se refirieran solamente a las materias reguladas por los 21 artículos de la Ley de 1848.

Esta técnica legislativa –que, como se ha señalado, difiere de la actual- tampoco es de extrañar en la medida en que aquellos años eran los primeros momentos de la regulación de las compañías por acciones. En este sentido, la norma de rango legal que empezó a regular dichas sociedades (prescindiendo de las leyes aprobadas anteriormente para sociedades por acciones *ad hoc*) y que se encontraba en vigor en el momento de la tramitación del PL 1848, era el CCom 1829, que dedicaba varias decenas de artículos a todas las sociedades mercantiles, de los cuales sólo una minoría se referían a las sociedades por acciones.

Las precedentes consideraciones llevan a dos importantes conclusiones que se desarrollan en este capítulo. La primera, se refiere a que, en 1848, la materia reservada a rango de ley es bastante reducida, pues el Reglamento de 1848 regula la mayor parte del régimen aplicable a las sociedades por acciones, incluso en materias sobre las cuales la Ley de 1848 no dice nada. Esto supone plantear si la materia del Derecho de sociedades por acciones debe ser o no objeto de reserva de ley formal. La segunda conclusión es obvia, esto es, que para estudiar la influencia de la Ley de 1848 en el

⁴⁰³ Esta forma de legislar (leyes breves y reglamentos largos) fue frecuente durante gran parte del s. XIX español. Es conocida la frase (posterior a nuestra Ley de 1848) del Conde de Romanones: “Que mis enemigos hagan las leyes y me dejen a mí hacer el Reglamento”.

Derecho de sociedades es necesario e imprescindible conocer en detalle el contenido del Reglamento de 1848.

En línea con el párrafo anterior, cabe preguntarse: ¿cuáles son las materias del Derecho de sociedades por acciones que regula la Ley de 1848? Ciertamente son pocas. Se pueden enumerar las siguientes: los requisitos y condiciones para que una sociedad por acciones se pueda constituir, a través de una ley o de un RD (con especial referencia al objeto social y utilidad pública); las acciones (cartas de pedido, emisión, suscripción, desembolso, cotización en Bolsa, carácter obligatoriamente nominativo); la facultad de vigilancia por parte del Gobierno (en la constitución, presentación de documentación, solicitud de modificaciones de los estatutos y reglamentos, cumplimiento de la Ley de 1848); emisión de títulos al portador; responsabilidad de los administradores y gerentes (depósito de acciones en garantía, actuación fuera del ámbito del objeto social); regularización de las sociedades existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley de 1848; y, por último, disposición derogatoria de las normas contrarias a la Ley de 1848.

Existen, por tanto, muchas materias cuya regulación no tuvieron rango de ley, sino reglamentario. Ejemplos de estas materias son: el contenido de la escritura de constitución, de los estatutos y de los reglamentos; las aportaciones al capital social; el régimen de las juntas y de los administradores; la disolución y liquidación, etc. En un epígrafe posterior de este capítulo se estudia de una manera sistemática y exhaustiva la relación de materias sometidas a rango legal y reglamentario.

Se decía al principio que sorprende la brevedad del texto de la Ley de 1848. Además, es preciso llamar la atención sobre su larga duración: 20 años, de 1848 a 1868. A pesar de todos los cambios políticos, de los vaivenes de la economía y de las finanzas, la Ley de 1848 se mantuvo en vigor hasta el cambio político de finales de la década de 1860⁴⁰⁴. ¿Y el Reglamento de 1848? También corrió una suerte similar en cuanto a su vigencia, lo cual es sorprendente, dado que su modificación es mucho más rápida y sencilla que la de la Ley. Se trata, por tanto, de dos normas que, con independencia de sus aciertos y errores, fueron mantenidas por un amplio consenso de las fuerzas políticas y empresariales durante unos años ciertamente complicados en nuestra historia.

II. EXCEPCIONALIDAD DE LA REGULACIÓN DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES POR UNA NORMA REGLAMENTARIA

A) BREVE REFERENCIA GENERAL A LAS MATERIAS RESERVADAS A LA LEY Y A LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En este epígrafe se desarrollan brevemente los conceptos de reserva de ley y de potestad reglamentaria de la Administración Pública, para poder estudiar en el siguiente epígrafe si la materia de sociedades mercantiles por acciones es objeto de reserva de ley

⁴⁰⁴ Aunque el texto no sufrió modificaciones, parte de su contenido fue variado *de facto* por la LB, LF, LSCr y LSCOP.

y, en su caso, cuáles son los límites de la potestad reglamentaria de la Administración Pública en esta materia.

Con carácter general, como se verá en el apartado siguiente, la regulación de la materia mercantil en nuestro país se ha realizado, desde un punto de vista formal, mediante leyes. En concreto, las sociedades mercantiles han sido reguladas por normas con rango de ley en la mayor parte de los casos. El primer texto normativo, fue una excepción: el CCom 1829, que aprobó y sancionó el Rey sobre un proyecto particular de Sáinz de Andino. El resto de las disposiciones tienen rango formal de Ley. Así nuestra Ley de 1848, la Ley de 1869, el CCom 1885, la LSA (1951), la LSRL (1953), la LSA (1989), la LSRL (1995) y la LSC. Ciertamente hay otras normas de carácter reglamentario que regulan las sociedades mercantiles (como el Reglamento del Registro Mercantil), pero lo hacen desarrollando los preceptos legales.

Lo anterior indica que la materia del Derecho mercantil y de sus sociedades en particular, son objeto de reserva formal de ley. Su relación con la economía, los medios de producción, los trabajadores, etc., hacen que las normas reguladoras sean objeto de reserva de ley.

Según nuestra vigente CE 1978, el Derecho mercantil y societario se ocupa de los sujetos que organizan la actividad económica, de la satisfacción de las necesidades del mercado y de la regulación de las relaciones jurídicas que surgen en esa actividad⁴⁰⁵. La denominada “Constitución económica” establece las reglas que afectan a la materia del Derecho mercantil y de sociedades en particular, determinando, por las razones anteriormente expuestas, que sean leyes las que regulen el contenido de esa materia.

Estas leyes son de carácter ordinario, no orgánico (artículo 81 CE 1978⁴⁰⁶) y pueden ser objeto de delegación legislativa (artículo 82 CE 1978⁴⁰⁷), como así se ha hecho con la LSA (1989) y el reciente texto de la LSC.

La evolución de la actividad económica en la que se constata, entre otros factores, un progresivo intervencionismo de la Administración Pública, ha influido sobre el Derecho mercantil y el de sociedades en un doble ámbito. Por un lado, un mayor control y supervisión por parte de la Administración Pública de determinadas

⁴⁰⁵ Se ha seguido la exposición de SÁNCHEZ CALERO, F. Y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J. (2011): *Instituciones de Derecho Mercantil*, vol. 1, 34ª edición, Cizur Menor, págs. 73 y ss.

⁴⁰⁶ Establece su apartado primero:

Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral central y las demás previstas en la Constitución”

⁴⁰⁷ Destacan, a estos efectos, los siguientes párrafos del artículo 82 CE 1978:

1. *Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el apartado anterior [materias de Ley orgánica].*
2. *La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.(...)*
(...)
5. *La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.*

actividades empresariales; y, por otro, una interferencia de las normas administrativas que regulan (además de controlar y supervisar) esas actividades. En este sentido, comenta SANCHEZ CALERO, F. y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J.: *la penetración de la Administración Pública en la supervisión o control del ejercicio de determinadas actividades económicas (banca, seguros, transportes, mercados de valores, etc.) lleva consigo la interferencia de normas administrativas en el estatuto de ciertos empresarios, que conforman a los sujetos que intervienen en esa actividad y a las relaciones jurídicas que surgen en la misma. Las autoridades administrativas (BdE, Dirección General de Seguros, Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc.) frecuentemente no se limitan a controlar el ejercicio de esas actividades, sino que las regulan (intervienen en la preparación de las leyes que afectan a esas actividades y se reservan de hecho la facultad reglamentaria para su aplicación).*⁴⁰⁸ (el subrayado es nuestro)

Llegados a este punto, cabe hacer referencia a la facultad o potestad reglamentaria de la Administración Pública con carácter general para, posteriormente, aplicarlos a nuestra materia de sociedades mercantiles. Seguimos la exposición de GARRIDO FALLA⁴⁰⁹.

Define el Reglamento como *toda disposición jurídica de carácter general dictada por la Administración Pública y con valor subordinado a la ley*. Es fuente de Derecho para la Administración, con la singularidad de que procede de ella misma y se integra en el “bloque de la legalidad” que se impone a la propia Administración en su actuación concreta.

Se pueden destacar las siguientes razones justificativas de la potestad reglamentaria de la Administración Pública:

- La composición política y no técnica de las dos Cámaras legislativas determina que no sean idóneas para la confección de los Reglamentos.
- La movilidad y variación de las normas administrativas exige que no tengan rango formal de ley para facilitar su derogación y sustitución por otras.
- La amplia esfera discrecional del Poder ejecutivo determina la conveniencia de que la propia Administración Pública se autolimite dictando Reglamentos.
- Dado que el Legislador no puede prever todo, es oportuno atribuir determinadas materias al Poder ejecutivo para que las reglamente.

El artículo 97 de la CE 1978 atribuye al Gobierno *la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes*. En este marco, la Administración Pública podrá dictar disposiciones sin necesidad de una habilitación expresa de carácter legislativo, siempre que, lógicamente, se respeten los límites propios de la potestad reglamentaria.

⁴⁰⁸ SÁNCHEZ CALERO, F. Y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J. (2011): *Instituciones ...*, págs. 76 y 77.

⁴⁰⁹ GARRIDO FALLA, F. (1987): *Tratado de Derecho Administrativo*, vol. I, décima edición, Madrid, págs. 234 y ss.

¿Esta atribución expresa del artículo 97 de la CE 1978 de la potestad reglamentaria al Gobierno, supone que sólo el Gobierno es titular de dicha potestad? Formulado de otro modo, ¿las Autoridades inferiores son también titulares de potestad reglamentaria? Desde un punto de vista histórico, como queda expuesto en el epígrafe sobre la formación de la Ley de 1848, una RO de 9 de febrero de 1847, del entonces Ministro de CIOP, Sr. Roca de Togores, suspendió interinamente la competencia de los T. de c. para constituir sociedades por acciones (competencia otorgada por el artículo 273 del CCom 1829). Esta RO fue dictada por un Ministro del Gobierno, pero no por el Gobierno. Aquella situación no puede repetirse en la actualidad, pues violaría los principios constitucionales sobre la prelación de las normas jurídicas.

En este sentido, las autoridades inferiores al Gobierno son titulares de la potestad reglamentaria, teniendo en cuenta lo que escribe GARRIDO FALLA: *a nuestro juicio, lo que, después de la Constitución, han perdido los ministros es la facultad de dictar reglamentos independientes, a no ser en materia de organización interna; como regla, se exige una previa ley habilitante. Y, claro está, también han perdido la facultad de delegar su potestad normativa en autoridad inferior (delegata potestas non delegatur) a pesar de que no es infrecuente la infracción de este principio. Durante el periodo de la Monarquía constitucional española, la potestad reglamentaria se ejerce en nombre del Rey, por lo que las Órdenes ministeriales eran formalmente Reales Órdenes. La nueva etapa monárquica iniciada con la designación del Rey Don Juan Carlos I no ha supuesto una vuelta a la práctica de las Reales Órdenes; en cambio, son Reales Decretos en congruencia con el artículo 62.f) de la Constitución*⁴¹⁰.

Otro aspecto importante al hablar de la potestad reglamentaria es la relación entre Reglamento y Ley. Cabe destacar en este sentido una de las primeras sentencias de nuestro TC (n 18/1982 de 4 de mayo), que en su FJ Cuarto declara:

Este aspecto de colaboración entre la ley y el reglamento en la ordenación de una materia, sin embargo, sólo adquiere verdadera virtualidad en relación con aquellos reglamentos en los que se acentúa la idea de ejecución o desarrollo de la Ley, y al propio tiempo la exigencia de una más específica habilitación legal. Existe en nuestro derecho una tradición jurídica que dentro de los reglamentos, como disposiciones generales de la Administración con rango inferior a una ley, y aun reconociendo que en todos ellos se actúa el ejercicio de la función ejecutiva en sentido amplio, destaca como «reglamentos ejecutivos» aquellos que están directa y concretamente ligados a una ley, a un artículo o artículos de una ley o a un conjunto de leyes, de manera que dicha ley (o leyes) es completada, desarrollada, pormenorizada, aplicada y cumplimentada o ejecutada por el reglamento. Son reglamentos que el Consejo de Estado ha caracterizado como aquellos «cuyo cometido es desenvolver una ley preexistente o que tiene por finalidad establecer normas para el desarrollo, aplicación y ejecución de una ley». Pero, junto a éstos, existen los reglamentos de organización que, todo lo más, alcanzan a normar las relaciones de la Administración con los administrados en la medida en que ello es instrumentalmente necesario por integrarse éstos de una u otra forma en la organización administrativa, pero no en los derechos y obligaciones de éstos en

⁴¹⁰ GARRIDO FALLA, F. (1987): *Tratado de Derecho ...*, pág. 236 con su nota correspondiente.

aspectos básicos con carácter general. Sin tratar la cuestión de si dichos reglamentos tienen verdaderamente carácter independiente, cuestión que aquí no es necesario resolver, hay que admitir que los mismos no aparecen necesariamente como complementarios de la Ley. (el subrayado es nuestro)

Se admite, por tanto, que estos denominados “Reglamentos ejecutivos” se dictan para desarrollar preceptos de una ley. Dicho desarrollo puede ser parcial o total, surgiendo en este último caso el “Reglamento general” para la ejecución de la Ley. En cualquier caso, la ley previa tiene carácter de condición habilitante del reglamento.

Por último, ¿cuáles son los límites de la potestad reglamentaria? Se señalan dos. En primer lugar, el principio constitucional de reserva de ley; y, en segundo lugar, la propia naturaleza de los reglamentos administrativos en cuanto disposiciones subordinadas a la ley.

Respecto al primer límite, el principio constitucional de reserva de ley, tanto ordinaria como orgánica, la Administración Pública no podrá:

- Reglamentar las materias reguladas por el artículo 53. 1 de la CE 1978 (que se refiere a los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I de la CE 1978), ni por el artículo 81.1 de la CE 1978 (materias de ley orgánica), ni demás preceptos constitucionales que atribuyen materias a la ley formal.
- Establecer ni imponer penas.
- Establecer prestaciones personales obligatorias.
- Establecer tributos ni exacciones, tasas, cánones u otras cargas similares.

En cuanto al segundo límite, la subordinación al contenido de la Ley, la Administración Pública no podrá:

- Derogar ni modificar el contenido de las leyes formales, decretos-leyes o legislativos ni de otros reglamentos dictados por autoridad de mayor jerarquía.
- En el caso de los reglamentos de ejecución, no pueden limitar derechos a particulares ni extenderse a materias distintas de las de la Ley de autorización.
- Abusar de la utilización de reglamentos que, por su naturaleza, regulen materias que pertenezcan al campo jurídico-privado.

Encuadradas a través de los anteriores comentarios generales las materias objeto de reserva de ley y la potestad reglamentaria de la Administración Pública, se ha de estudiar, dentro de la materia del Derecho mercantil, la de sociedades por acciones en particular.

B) LA MATERIA DE SOCIEDADES MERCANTILES POR ACCIONES, ¿ES OBJETO DE RESERVA DE LEY FORMAL? EN SU CASO, ¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ESTA MATERIA? CONCRETA REFERENCIA AL REGLAMENTO DE 1848 COMO ÚNICA NORMA REGLAMENTARIA DE DESARROLLO O DE “EJECUCIÓN” DE UNA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES POR ACCIONES EN NUESTRO DERECHO SOCIETARIO

El estudio histórico parece especialmente útil en esta materia, después de lo que se ha reseñado en el epígrafe anterior. El Derecho mercantil surge de la autorregulación de los empresarios o mercaderes. Este grupo social y económico es el que determina las normas aplicables a su propia actividad y establece un sistema de aplicación de las mismas específico para él. Durante muchos siglos, el ejercicio de la actividad económica y empresarial no fue objeto de leyes formales.

Con motivo del proceso de codificación, cambia aquella situación, de manera que se empieza a regular la actividad empresarial por parte del Parlamento y del poder Real. Como dicen SÁNCHEZ CALERO y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, *(l)a codificación tuvo como presupuesto el principio del carácter estatal del Derecho, de forma que su producción se reservaba a la soberanía absoluta del Estado pretendiendo eliminar la facultad de producción de normas jurídicas a cuerpos intermedios entre él y los ciudadanos, como podían ser las corporaciones o colegios de comerciantes*⁴¹¹.

El proceso de codificación del siglo XIX en Europa extrae la competencia normativa de los empresarios y comerciantes de ellos mismos para depositarla en los Parlamentos y Gobiernos nacionales. Se consideró que la materia mercantil (y la societaria como parte de ella) no podía ser objeto de una autorregulación, sino que el Estado debía asumir la competencia regulatoria que vinculase a todos los ciudadanos sin excepción por su clase o tipo de actividad.

En España, la codificación de esta materia (prescindiendo de las normas específicas *ad-hoc* que regularon con anterioridad determinadas sociedades mercantiles por acciones) se abre con el CCom 1829, decretado, sancionado y promulgado por Fernando VII el 30 de mayo de aquel año. Son ilustrativas las siguientes palabras del Preámbulo o introducción a la promulgación de este Código:

Por cuanto hallándose reducida la Jurisprudencia mercantil de esta Monarquía a las ordenanzas particulares otorgadas a los Consulados para su organización y régimen interior, se carecía de leyes generales que determinasen las obligaciones y derechos que proceden de los actos de comercio, de lo cual resultaban grande confusión e incertidumbre, tanto para los mismos comerciantes y traficantes, como para los Tribunales y Jueces que habían de dirimir sus diferencias; y queriendo poner Yo término a males de tanta gravedad e interés, y dar al Comercio un sistema de legislación uniforme, completo y fundado sobre los principios inalterables de la justicia y las reglas seguras de la conveniencia del mismo Comercio, ... (el subrayado es nuestro)

⁴¹¹ SÁNCHEZ CALERO, F. Y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J. (2011): *Instituciones ...*, pág. 52.

Siguen, al CCom 1829, disposiciones importantes como el RD de 10 de septiembre de 1831 que crea la Bolsa de Madrid; nuestra Ley de 1848 y su Reglamento de ejecución; la LB; la LSCr; la LSCOP; etc. La Ley de 1848 (y su Reglamento) fueron derogados por el Gobierno provisional mediante Decreto de 1868, completado, también provisionalmente, por la Ley de 1869, derogada por el CCom 1885, que fue objeto de discusión y aprobación parlamentaria y promulgado como Ley por RD. Esta existencia simultánea ley – RD, se recoge en la GdM de 16 de octubre de 1885⁴¹² del siguiente modo:

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA – LEY. DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios REY constitucional de España. A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: Artículo único. Se autoriza al Ministro de Gracia y Justicia para que publique como ley el adjunto proyecto de Código de comercio (...) Dado en San Ildefonso a veintidós de agosto de mil ochocientos ochenta y cinco. (el subrayado es nuestro)

Y a continuación:

REAL DECRETO. Teniendo presente lo dispuesto en la ley sancionada por Mi con esta fecha, que autoriza al Gobierno para publicar como ley el proyecto de Código de comercio, y conformándome con el parecer del Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente: Artículo 1. El Código de comercio referido se observará como ley en la Península e islas adyacentes desde el primero de enero de mi ochocientos ochenta y seis... (el subrayado es nuestro)

La regulación de las sociedades por acciones del CCom 1885 estuvo en vigor hasta la LSA (1951). Este texto surgió, entre otras cuestiones, para evitar que el vacío normativo de dichas compañías fuera cubierto por disposiciones legales, fundamentalmente, de naturaleza económica y fiscal. Son muy ilustrativas las siguientes palabras de GARRIGUES, GONZÁLEZ, DE LA PLAZA, URÍA, RODRÍGUEZ GIMENO, PALAO y SÁINZ DE BUJANDA, en las que se justifica la necesidad de la modificación del CCom 1885 por el Proyecto de Ley de sociedades anónimas, que se promulgaría en 1951:

En efecto, el páramo legislativo en que vive la sociedad anónima española se ha ido poblando estos últimos años de una multitud de preceptos aislados e inconexos, nacidos al calor de la creciente presión contributiva, pero que, en realidad, exceden del ámbito estrictamente fiscal, invadiendo el campo del Derecho mercantil a impulso de finalidades diversas, mas todas ellas regidas por preocupaciones de política económica⁴¹³.

Por su parte, la LSA (1989), que derogó la LSA (1951), así como la vigente LSC, tampoco han sido objeto de desarrollo o ejecución reglamentaria.

Cierto que ha habido algún RD que desarrolla alguna de las materias reguladas por Ley. Así, por ejemplo, la materia de nombramiento de miembros del Consejo de

⁴¹² GdM de 16 de octubre de 1885, núm. 289, pág. 169.

⁴¹³ GARRIGUES, J., GONZÁLEZ, J., PLAZA, M. DE LA., URÍA, R., RODRÍGUEZ GIMENO, A., PALAO, J. E., y SÁINZ DE BUJANDA, F. (1947): *Reforma de la sociedad anónima*, Madrid, págs. 9 – 10.

Administración por el sistema proporcional, se encuentra regulada por el RD 921/1991, de 17 de mayo, que desarrolla el artículo 137 de la LSA (1989), actual artículo 243 LSC. Pero se trata de una materia específica y determinada; nada tiene que ver con el carácter general y disperso del Reglamento de 1848, que desarrolla la Ley de 1848.

En esta línea, también la vigente LSC, en su Disposición Final Segunda establece que,

Se autoriza al Gobierno para que mediante Real decreto apruebe:

1.- La modificación de los límites monetarios que figuran en esta Ley para que las sociedades de capital puedan formular cuentas anuales abreviadas con arreglo a los criterios que establezcan las Directivas de la Unión Europea.

2.- La adaptación de los importes de las multas que figuran en el Código de comercio y en esta Ley a las variaciones del coste de la vida.

Incluso la Disposición Final segunda de la LSC (no confundir con la anterior, que es la del Texto Refundido), prevé lo siguiente:

Se autoriza al Ministro de Justicia para la modificación de las referencias a la numeración contenida en el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real decreto 1784/1996, de 19 de julio, de los artículos de los textos de las disposiciones que se derogan por la que corresponde a los contenidos en el Texto Refundido de la Ley de sociedades de capital.

Cierto, también, que la materia referente al Registro mercantil ha sido y es objeto de regulación reglamentaria: Decreto de 14 de diciembre de 1956, RD 1597/1989, de 29 de diciembre y el vigente RD 1784/1996, de 19 de julio. Si bien estas normas, no desarrollan o ejecutan directamente lo previsto en las leyes reguladoras de las sociedades de capital, dado que se centran en lo relativo a la inscripción, actos y contratos de dichas sociedades, entre otras variadas cuestiones.

La conclusión que se deriva después del estudio anterior es que se observa una continuidad en la reserva de esta materia al rango de ley formal. Con independencia de la singularidad del CCom 1829 y de la norma aislada del Decreto de 1868 (por las razones históricas obvias), la materia se regula mediante textos legales aprobados por ley. Estas normas, en alguna ocasión, han sido completadas en aspectos concretos de su contenido por Decretos y Órdenes ministeriales (o Reales Órdenes). Pero el único Reglamento que desarrolla en su integridad una ley de sociedades por acciones es nuestro Reglamento de 1848.

¿Se trata de una técnica legislativa adecuada? La respuesta, desde el punto de vista de la experiencia histórica es que es la excepción. Por lo tanto, no parece que sea la más adecuada. De hecho, gran parte de la materia y disposiciones del Reglamento de 1848, como se verá a continuación, ha pasado a la LSA (1951), a la LSA (1989) y a la vigente LSC.

La necesidad de un debate público parlamentario en el que puedan estar presentes las opiniones de todos los sectores afectados por esta materia de las sociedades mercantiles en general y las sociedades por acciones en particular, es de vital importancia.

Este principio cuya inobservancia por la Ley y el Reglamento de 1848 fue corregida en los textos legales posteriores (sobre todo los de los siglos XX y XXI), puede ser objeto de matizaciones. En efecto, como se ha dicho anteriormente, la progresiva influencia y expansión de la actividad pública en la materia de Derecho de sociedades ha supuesto una mayor intervención por parte de la Administración Pública en los mercados y sectores denominados “regulados”, existiendo en la actualidad bastantes normas reglamentarias que regulan directa o indirectamente la materia del Derecho de sociedades.

III. MATERIAS REGULADAS POR LA LEY DE 1848 Y POR EL REGLAMENTO DE 1848: DESCRIPCIÓN Y COORDINACIÓN EN AMBOS TEXTOS

La Ley de 1848 consta de 21 artículos y el Reglamento que la desarrolla de un poco más del doble: 44 artículos. No todos los artículos del Reglamento de 1848 desarrollan los artículos de la Ley de 1848. Hay una parte relativamente importante de las previsiones reglamentarias que regulan materias sobre las que la Ley de 1848 no dice nada. Por este motivo, el Reglamento de 1848 excede de una norma “de desarrollo de la ley” o “de ejecución de la ley”⁴¹⁴.

El contenido y la aplicación de la Ley de 1848 no se pueden entender correctamente sin el análisis exhaustivo del Reglamento de 1848. Por este motivo, en el presente capítulo se estudian coordinadamente las materias reguladas por ambos textos normativos. La metodología elegida es la siguiente: se toma como referencia la estructura de la vigente LSC. Sobre dicha estructura se analiza lo que establece la Ley y el Reglamento de 1848, de manera que se pueda observar sistemáticamente la relación entre ambos textos. En todo caso, se han recogido al final del trabajo los textos íntegros de la Ley y del Reglamento de 1848 para facilitar la lectura y consulta de los mismos.

A) LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Este es el tema clave de la nueva regulación: la necesidad de la autorización legal o gubernativa para la constitución de la sociedad. Se encuentra establecido básicamente en los cuatro primeros artículos de la Ley. El artículo fundamental es el 1: *No se podrá constituir ninguna compañía mercantil, cuyo capital en todo o en parte se divida en acciones, sino en virtud de una ley o de un Real decreto*. Los artículos 2 y 3 de la Ley regulan las sociedades que deberán ser aprobadas por ley. El artículo 4 se refiere a las sociedades que deben ser autorizadas por RD.

El Reglamento de 1848 sólo regula de manera indirecta algunas cuestiones relacionadas con la constitución de la sociedad, pero referidas a temas procedimentales y no sobre los requisitos básicos para la autorización de la compañía por acciones.

⁴¹⁴ Como dice el brevísimo preámbulo del Reglamento.

1. Procedimiento de constitución de la sociedad

En esta materia, la Ley de 1848 establece unos requisitos previos para poder iniciar la solicitud de constitución: que la sociedad tenga objetos sociales determinados y un capital proporcionado a sus objetos (artículo 5 de Ley de 1848); la preparación de la siguiente documentación: lista de suscriptores de las acciones, cartas de pedido de acciones, escritura social, estatutos y reglamentos (artículo 6 de la Ley de 1848); y la suscripción de, al menos, el 50 % del capital (artículo 7 de la Ley de 1848).

Una vez recibida la solicitud de autorización, el Gobierno deberá examinar si requiere autorización legislativa (artículo 8 de la Ley de 1848). En caso de que se encuentre dentro de sus facultades, deberá comunicarlo a los solicitantes y dar curso al expediente (artículo 9 de la Ley de 1848). El artículo 10 de la Ley de 1848 se refiere al otorgamiento de la Real autorización, su plazo y caducidad.

Dentro del marco establecido por la Ley de 1848, el Reglamento de 1848 regula bastantes aspectos relacionados con el procedimiento para la autorización y constitución de la sociedad. Muchos de ellos desarrollan los correspondientes artículos del texto legal (en esta materia los artículos del Reglamento sirven para la *ejecución de la Ley de 28 de Enero de este año*, como reza el breve Preámbulo del Reglamento de 1848).

Los artículos 9 y 10 del Reglamento de 1848 desarrollan lo previsto en la Ley de 1848 sobre la necesidad de que con carácter previo se suscriba el 50 % del capital social. Una vez suscrita la mitad del capital social, todos los socios deben ratificar la documentación de la compañía según el artículo 11 del Reglamento de 1848 y se debe presentar esa documentación a los Jefes políticos correspondientes, conforme al artículo 12 del Reglamento de 1848, para que la revisen (artículo 13 del Reglamento de 1848), haciendo mención a la utilidad pública del objeto social (artículo 14 del Reglamento de 1848). El artículo 15 del Reglamento de 1848 exige que, en caso de que la sociedad tenga establecimientos en otras Provincias, se recabe la misma información de los Jefes políticos de esas localidades.

El artículo 16 del Reglamento de 1848 establece que, una vez instruido el expediente, el Jefe político debe remitirlo al Gobierno, quien lo trasladará al Consejo Real para su estudio y propuesta (artículos 17 y 18 del Reglamento de 1848), incluido el supuesto de aprobación por Ley (artículo 19 del Reglamento de 1848).

El artículo 20 del Reglamento de 1848 autoriza al Gobierno a exigir modificaciones o cambios en la documentación presentada para que se ajuste a la legalidad. Una vez cumplidos todos los requisitos, el Gobierno expedirá el RD de autorización (artículo 21 del Reglamento de 1848), que deberá comunicar al Jefe político correspondiente para que proceda a las formalidades necesarias para poner en práctica la autorización (artículos 22, 23 y 24 del Reglamento de 1848).

Hasta aquí los artículos del Reglamento de 1848 que regulan el procedimiento para la constitución de la sociedad. Representan una parte importante de todo el articulado (16 de un total de 44) y, como se decía, se trata de un verdadero desarrollo o ejecución de la Ley de 1848.

2. Objeto social

Esta materia es especialmente relevante en la constitución de la sociedad. Son varios los artículos de la Ley de 1848 que regulan el objeto social y las circunstancias conexas al mismo: la utilidad y el interés público. La regulación reglamentaria afecta a temas menores, dado que esta cuestión es una de las bases fundamentales de la nueva regulación.

Ya en los primeros artículos de la Ley de 1848 se regulan las dos formas de constituir compañías por acciones en función de su objeto social. El artículo 2 se refiere a las que deben ser aprobadas por ley y el artículo 4 las que debe autorizar el Gobierno en forma de RD.

Este último artículo es desarrollado por el Reglamento de 1848, que atribuye al Jefe político la facultad de examinar *si el objeto de la sociedad es lícito y de utilidad pública* (artículos 13.2 y 14).

Dos principios consagran la Ley de 1848 sobre el objeto social en su artículo 5. En primer lugar, la determinación del objeto u objetos, no pudiendo establecerse con carácter genérico. Y, en segundo lugar, la proporcionalidad entre el capital social y el objeto de la sociedad.

En relación al primer principio, el artículo 16 de la Ley de 1848, en su último inciso establece que incurrirán en responsabilidad *los que a nombre de una compañía aun legalmente constituida se extiendan a otras negociaciones que las de su objeto o empresa, según esté determinado en sus estatutos y reglamentos*. Esa responsabilidad se refiere a todos los perjuicios ocasionados y una multa que no excederá de 100.000 reales. Además, el artículo 31 del Reglamento de 1848 establece que *los fondos de las compañías mercantiles por acciones no podrán distraerse de la caja social para negociaciones extrañas al objeto de su creación. Se permitirá únicamente aplicar los fondos sobrantes que existan en caja para descuentos o préstamos cuyo plazo no podrá exceder de noventa días, dándose precisamente en garantía papel de la deuda consolidada. Los administradores son directamente responsables de cualquiera cantidad de que dispusieren contraviniendo a estas disposiciones*.

Por lo que se refiere al segundo principio, el artículo 13.3 del Reglamento de 1848 asigna al Jefe político la obligación de examinar *si el capital prefijado en los estatutos sociales puede graduarse suficiente para el objeto de la empresa*.

Por último, el Reglamento de 1848 se refiere al objeto social en su artículo 1 sobre el contenido mínimo de la escritura de fundación, en el cual debe figurar *el objeto o ramo de industria o de comercio a que exclusivamente ha de dedicarse la compañía* (apartado 3) y *la denominación o razón comercial que ha de guardar en conformidad con el objeto de su fundación* (apartado 4 del Reglamento de 1848).

También exige que, en caso de aportación al capital de *algún privilegio de invención, o el secreto de algún procedimiento*, dicha invención o secreto deben tener relación con el objeto social (artículo 4).

3. Escritura de constitución

La Ley hace una mención a la *escritura social* en su artículo 6 al detallar la documentación necesaria para la presentación de la solicitud de autorización de la sociedad por RD. Pero no detalla nada más. El contenido de la *escritura de fundación* se recoge en el artículo 1 del Reglamento de 1848.

B) INSCRIPCIÓN REGISTRAL

La Ley de 1848 no menciona en ningún momento la inscripción registral de la sociedad. El objetivo de sustraer de los T. de c. la autorización para la constitución de la sociedad, lo realiza la Ley de 1848 sin hacer ninguna referencia a estos Tribunales. Sencillamente se establece en los cuatro primeros artículos de la Ley de 1848 las dos maneras de constituir sociedades por acciones.

Esto no significa que los T. de c. quedaran totalmente ajenos a las compañías por acciones, pues el artículo 26 del Reglamento de 1848 establece la obligatoriedad de la inscripción en dichos Tribunales.

C) SOCIEDAD EN FORMACIÓN Y SOCIEDAD IRREGULAR

Estas materias son objeto de regulación casi exclusiva por la Ley de 1848 en sus artículos 10 y 16.1.

El Reglamento de 1848 hace una breve mención a esta materia en su artículo 22: *Comunicado al Jefe político a quien corresponda el Real decreto de autorización, se imprimirán y publicarán los estatutos y reglamentos de la sociedad abriéndose por la administración provisional la suscripción de acciones vacantes dentro del plazo prefijado, a cuyo vencimiento se remitirá al mismo Jefe político en forma auténtica la lista de los nuevos accionistas, conque se acredite haberse cubierto la suscripción del capital social. Si no se presentaren accionistas para completarlo, se tendrá por caducada la Real autorización* (el subrayado es nuestro).

D) LAS APORTACIONES SOCIALES

Las aportaciones sociales es una materia que se caracteriza por estar regulada fundamentalmente por el Reglamento de 1848 y no por la Ley de 1848. Ésta no hace mención alguna al régimen de las aportaciones no dinerarias, pero sí se encuentra alguna referencia sobre el desembolso de las aportaciones.

A continuación se resume el tratamiento normativo de esta materia en dos apartados: las aportaciones no dinerarias y el desembolso de las aportaciones.

1. Aportaciones no dinerarias (especial referencia a su valoración)

Se encuentran reguladas, como se decía líneas más arriba, solamente en el Reglamento de 1848. Son tres los artículos que a ellas se refieren, siendo su objetivo conseguir una justa valoración para evitar fraudes. El artículo del Reglamento de 1848

establece que *(l)os objetos muebles o inmuebles que algún socio aportare a la compañía para que se refundan en su capital se apreciarán convencionalmente entre el interesado y la administración definitiva de la misma compañía, o por peritos si así se pactare, convirtiéndose su importe en acciones a favor del que hubiere hecho la cesión.*

También se prevé específicamente la posibilidad de aportar patentes de invención y derechos de propiedad intelectual (artículo 4 del Reglamento de 1848):

Y, por último, el artículo 24 del Reglamento de 1848 exige acreditar la valoración ante el Jefe político.

2. Desembolso del capital social

Esta materia es objeto de regulación legal y reglamentaria. La Ley de 1848, establece en su artículo 9 que *(c)uando se trate de una compañía para cuyo establecimiento baste la autorización Real, y el Gobierno juzgare la empresa de utilidad pública, lo declarará así a los recurrentes, (...) determinando la parte del capital que la compañía haya de hacer efectiva antes de obtener el Real decreto de autorización. El Gobierno no podrá por razón de esta parte exigir en ningún caso más de un 25 por ciento.*

Esta regulación legal se refiere exclusivamente al desembolso que exigirá el Gobierno (nunca superior al 25 % del capital) como condición necesaria para otorgar la autorización a la compañía.

La regulación reglamentaria es más amplia y detallada, no sólo en relación a esta situación, sino también al régimen de los dividendos pasivos, etc. Así, el artículo 1.8 del Reglamento de 1848 prevé que la escritura de fundación debe expresar necesariamente, entre otras cuestiones, *la forma y plazos en que han de hacer efectivo los socios el importe de sus acciones.* Por su parte, el artículo 10 del Reglamento de 1848 establece los efectos de las cartas de pedido de acciones. El Jefe político debe examinar la razonabilidad de los plazos de desembolso (artículo 13.3 del Reglamento de 1848)

En cuanto a los diferentes pasos del procedimiento de constitución de la sociedad, el desembolso de las acciones es un tema de especial relevancia y por eso el Reglamento de 1848 lo regula en varios artículos, concretamente el 21, 22 y 23.

Por último, el régimen de los dividendos pasivos o desembolsos pendientes se establece en los artículos 32 y 33 del Reglamento de 1848.

3. Proporcionalidad entre el capital y el objeto social y entre capital y patrimonio

También estas materias se regulan tanto en la Ley de 1848 como en el Reglamento de 1848. En primer lugar, en cuanto a la proporción entre capital social y objeto social, el artículo 5 de la Ley de 1848 establece el principio general de que *toda compañía por acciones, se constituirá precisamente para objetos determinados y con un capital proporcionado al fin de su establecimiento* (el subrayado es nuestro). Y el artículo 13. 3 del Reglamento de 1848 exige que el Jefe político examine *si el capital prefijado en los estatutos sociales puede graduarse suficiente para el objeto de la*

empresa; si esta convenientemente asegurada su recaudación; si las épocas establecidas para los dividendos pasivos de las acciones están combinadas de manera que la caja social se halle suficientemente provista para cubrir sus obligaciones. (el subrayado es nuestro)

La cuestión del equilibrio patrimonial o del equilibrio entre capital y pérdidas, aparece en dos artículos del Reglamento de 1848. La Ley de 1848 no hace ninguna mención al respecto. El primero es el artículo 1.13 que establece que la escritura de constitución debe expresar *la porción de capital cuya pérdida ha de inducir la disolución necesaria de la sociedad*. No determina una cifra o porcentaje cuya superación suponga la necesidad de disolver y liquidar la sociedad. Es la escritura de constitución la que lo debe determinar. El Legislador establece que este aspecto (el equilibrio patrimonial) es necesario para el correcto funcionamiento de las sociedades por acciones, pero deja libertad a los socios para que fijen en límite. Libertad que, como se ha dicho en otros lugares, es relativa en tanto que si al Gobierno o al Consejo Real no les parece adecuada, no concederán la autorización de la compañía por acciones. Y, dado que el Reglamento de 1848 no establece una proporción concreta, la discrecionalidad de la autoridad pública era muy amplia.

En segundo lugar, es aplicable a esta materia del equilibrio patrimonial el artículo 36 del Reglamento de 1848 en el que se establece que *cuando del balance resultase haberse disminuido el fondo de reserva se aplicara para completarlo toda la parte de beneficios que fuere necesaria, reduciéndose el dividendo para los accionistas a la que hubiere sobrante*. Se trata de una previsión complementaria de la anterior (artículo 1.13). El objetivo es proteger la viabilidad de la sociedad e, indirectamente, a los accionistas a medio y largo plazo. Los beneficios que se generen con posterioridad a una disminución del *fondo de reserva* deben aplicarse en primer lugar a dotar dicho fondo hasta que llegue a la cifra prevista en la escritura social. Es decir, los beneficios han de aplicarse a aumentar los recursos propios de la sociedad para darle una mayor solvencia, a costa del dividendo de los socios.

E) ACCIONES

La materia de las acciones se encuentra regulada con detalle tanto en la Ley de 1848 como en el Reglamento de 1848, lo cual es lógico al tratarse de normas que regulan las sociedades por acciones. Además, durante los debates, sobre todo en el Senado, la polémica sobre acciones nominativas o al portador, fue especialmente larga y relevante⁴¹⁵.

1. Derechos del socio

La Ley de 1848 no recoge una relación de derechos del socio. Tampoco lo hace el Reglamento de 1848. La Ley de 1848 dedica más previsiones a las obligaciones del socio que a sus derechos. Así, se recoge la obligación del desembolso de las cartas de pedido de acciones (artículos 6 y 7) y del desembolso de las acciones anterior a la concesión de la autorización Real (artículo 9). En cuanto a los derechos, el que se

⁴¹⁵ Véase concretamente la larga intervención de D. Pedro Sáinz de Andino y las intervenciones del Marqués de Vallgornera y del Sr. Pérez Seoane en el DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, págs. 275 a 290. Esta materia se trata con más extensión en el capítulo dedicado a las acciones.

reconoce directamente es el de la cotización *como valores de comercio y conforme a las disposiciones prescritas en la ley de Bolsa*. Los demás derechos se reconocen implícitamente (modificación de estatutos, aunque sujeta a aprobación del Gobierno, etc.) pero no se regulan sistemáticamente.

Es el texto reglamentario el que detalla los derechos del socio. El artículo 1 al regular el contenido mínimo de la escritura de fundación de la sociedad establece el siguiente régimen de derechos de los socios:

- Las atribuciones concedidas a la junta de socios y, por tanto, las facultades que éstos tienen respecto al ámbito de este órgano social (artículo 1.11 del Reglamento de 1848).
- La aprobación de las cuentas anuales por la junta de socios (artículo 1.14 del Reglamento de 1848). Esta regulación se complementa con la prevista en el artículo 34 del mismo Reglamento, que establece a estos efectos lo siguiente: *estos balances autorizados por los administradores de la compañía bajo su responsabilidad directa y personal, y después de reconocidos y aprobados en junta general de accionistas, se remitirán al Jefe político de la provincia*.
- La percepción de dividendo (artículo 1.15 del Reglamento de 1848). El régimen de la distribución de dividendos en proporción a la participación en el capital social se establece en el artículo 2 del Reglamento de 1848. Las condiciones para el reparto de los dividendos se regulan en el artículo 35 del Reglamento de 1848.
- La designación de la administración de la sociedad: *La designación de las personas que hayan de tener la representación de la compañía provisionalmente y solo para las gestiones necesarias hasta que hallándose constituida se proceda al nombramiento de su administración por la Junta general de accionistas* (artículo 1.16 del Reglamento).

El Reglamento de 1848 establece el principio general de que el ejercicio de los derechos del socio se basa en que se encuentren recogidos y regulados en los estatutos y reglamentos sociales. Cualquier pacto entre socios que no figure en dichos documentos se tiene por nulo (artículo 8 del Reglamento de 1848).

Continúa el Reglamento de 1848 en su artículo 2 regulando los derechos de los socios y establece el principio de igualdad de trato en los siguientes términos: *(s)erá condición esencial y común en todas las sociedades mercantiles por acciones, que los socios tendrán iguales derechos y participación en los beneficios de la empresa, distribuyéndose estos proporcionalmente al número de acciones que posea cada socio*. En el párrafo segundo de este mismo artículo se limita el establecimiento de privilegios a favor de uno o varios socios.

Por último, el artículo 5 del Reglamento de 1848 hace referencia a que los socios aprobarán en la Junta la remuneración de los administradores.

2. Formalidades de las acciones

El primer artículo de la Ley de 1848 que regula las formalidades de las acciones es el artículo 12, en el que se recogen tres cuestiones básicas: la prohibición de emitir acciones hasta que se haya declarado constituida la sociedad; la prohibición de emitir acciones al portador; y, en tercer lugar, la numeración e inscripción en el libro registro de socios.

El segundo artículo, también importante, sobre las formalidades de las acciones es el artículo 14 de la Ley de 1848, que declara que las acciones de estas sociedades cotizan en el mercado de la Bolsa.

El tercer artículo de la Ley de 1848 sobre esta cuestión se refiere a las acciones que los gerentes o directores de la sociedad deben tener en depósito mientras ejerzan su cargo, pues *deben extenderse en papel y forma especiales* (artículo 13). El artículo 29 del Reglamento de 1848 desarrolla esta previsión en los siguientes términos: *Dentro de los quince días siguientes al en que se hubiere declarado constituida la compañía, acreditarán los administradores ante el Jefe político haber hecho el depósito efectivo de las acciones con que deben garantizar su gerencia en la cantidad determinada en los estatutos, y conforme a lo prescrito en el artículo 13 de la Ley de 28 de Enero.*

El Reglamento de 1848 regula con detalle las formalidades de las acciones. Empieza el artículo 1 estableciendo que, respecto a la escritura de fundación de la sociedad, aquélla debe incluir, al menos *el capital social* (artículo 1.5) y *el número de acciones nominativas en que ha de dividirse el capital y cuota de cada uno* (artículo 1.7).

Las formalidades para la emisión de las acciones siguen el procedimiento previsto en los artículos 22 y 25 del Reglamento de 1848. Son las siguientes. Una vez comunicado al Jefe político el RD de autorización, la administración provisional abre el periodo de suscripción de acciones vacantes. Al finalizar dicho plazo se debe remitir al Jefe político la lista de los nuevos accionistas, acreditándose que se ha cubierto la suscripción del capital. En caso de no suscribirse el capital, se tiene por caducada la autorización.

Cumplidos los requisitos anteriores, se envía la orden en la que se declara la constitución de la sociedad al Jefe político para que, entre otras funciones, *proceda a la emisión de los títulos de las acciones en suscripciones nominales. Estos títulos no podrán representar sino la cantidad efectiva que del importe nominal de cada acción se hubiere entregado por el accionista en la caja social.*

Por último, el Reglamento de 1848 establece un régimen diferente de formalidades para las cartas de pedido de acciones (que, como se recordará, *constituirán por si una obligación legal*: artículo 7 de la Ley de 1848 y artículo 10 del Reglamento de 1848) pues las cartas que se suscriban con posterioridad al otorgamiento de la escritura de constitución se dirigen *a la comisión encargada de gestionar para la aprobación de la compañía* (artículo 9 del Reglamento de 1848).

3. Transmisión de las acciones. Libro registro de acciones.

La transmisión y el libro registro de acciones son dos cuestiones relevantes para el Legislador. Éste trata de establecer nuevas medidas aseguradoras del control de los accionistas y de la transferencia de acciones para evitar los fraudes y abusos que se habían producido en la etapa anterior a la entrada en vigor de la Ley.

Por este motivo, el artículo 12 de la Ley de 1848 regula con un mayor detalle que otras materias estos temas y establece que *las acciones en que se divida el capital de la compañía estarán numeradas y se inscribirán en un libro de registro que habrá de llevarse necesariamente a nombre de la persona o corporación a quien correspondan*. El primer requisito, por tanto, es que las acciones se encuentren numeradas. El segundo, es que figuren en el libro registro. Y, el tercero, es que sólo se pueden emitir acciones nominativas⁴¹⁶ a nombre de su propietario, sea persona física o jurídica.

El artículo 13 de la Ley de 1848 prevé que los gerentes y directores de la sociedad tengan depositadas en garantía unas acciones mientras ejerzan sus cargos, acciones *cuyos títulos han de extenderse en papel y forma especiales*. Estos requisitos, tras un largo debate en el Senado, se recogieron con la finalidad de evitar que los administradores pudieran transmitir sus acciones en depósito a terceros. Como medida de precaución se estableció que tuvieran un papel y color diferente a los demás títulos de las acciones.

El Reglamento de 1848 desarrolla en parte lo previsto por la Ley de 1848. El apartado primero del artículo 33 relaciona los requisitos formales de la transmisión: consignación en un registro especial para estas transmisiones y la intervención de agente o corredor de cambios. El segundo apartado de este mismo artículo 33, establece unas exigencias adicionales en caso de que las acciones transmitidas no estuvieran totalmente desembolsadas. Exigencias que, por otra parte, ya estaban previstas por el CCom 1829, pero cuya aplicación era controvertida⁴¹⁷.

F) JUNTA GENERAL

La Ley de 1848 se refiere a la junta general solamente en dos artículos. El artículo 6 regula la documentación que la sociedad debe aportar al solicitar la autorización Real y se hace mención a que *los estatutos y reglamentos se aprobarán previamente en junta general de suscriptores*.

El segundo artículo es el 18, que establece el procedimiento por el cual las compañías por acciones existentes antes de la entrada en vigor de la Ley de 1848 deben proceder a su regularización. En él se prevé que en el plazo de cincuenta días desde la publicación de la Ley, *los gerentes o directores convocarán a junta general de accionistas para que resuelvan si se ha de pedir o no la Real autorización, la cual se impetrará solamente en el caso de que la mayoría de los mismos accionistas, que se*

⁴¹⁶ Véase el capítulo sobre las acciones en relación a la terminología de acciones *nominales* o *acciones nominativas*. En las discusiones del Senado fue un tema bastante debatido, existiendo unos partidarios de la expresión *acciones nominales* y, otros, de la expresión más precisa *acciones nominativas*. La redacción final elude utilizar ambas expresiones.

⁴¹⁷ Véase el capítulo sobre las acciones.

computará con arreglo a sus estatutos y reglamentos, acuerde la continuación de la compañía. En el texto se concretan dos temas básicos: el órgano legitimado para la convocatoria de la junta será el órgano de administración y los acuerdos se adoptarán por las mayorías previstas en los estatutos y reglamentos.

Sorprende, de alguna manera, constatar que sólo en dos artículos (y de un modo tangencial) la Ley de 1848 se refiera a la junta de socios. Al tratarse de una materia importante, surge la pregunta sobre la justificación de esta mínima regulación legal. Las causas, en nuestra opinión, son variadas, pero una es la más importante: el Reglamento de 1848 recoge un gran número de previsiones sobre la junta de socios, como se verá a continuación. Los Cuerpos Colegisladores eran conocedores de que, dada la premura de tiempo para aprobar el PL 1848, muchos aspectos tuvieron que dejarse a la decisión del Gobierno a través del Reglamento.

A continuación se describe la regulación que sobre la junta de socios realiza el Reglamento de 1848.

1. Competencia

El Reglamento de 1848 no recoge en un artículo las competencias de la junta de socios. Hay que extraerlas del texto del articulado.

El artículo 1 del Reglamento de 1848, que establece el contenido mínimo de la escritura de constitución de la compañía por acciones, en su apartado 11 determina el principio básico y organizador de las competencias de la junta de accionistas, dado que en dicha escritura de fundación se deben recoger expresamente *las facultades que se reserven a la Junta general de accionistas*.

Aparentemente puede pensarse que se trata de un sistema muy poco intervencionista pues, como se verá a continuación, las facultades reservadas por el Reglamento de 1848 a la junta de accionistas se concretan básicamente en la aprobación de las cuentas anuales, distribución de dividendos, nombramiento de administradores y su remuneración. Respecto a las demás facultades, será la voluntad privada y particular de los socios la que determine el contenido de las facultades.

Decíamos que aparentemente es un modelo liberal, pero en realidad no era así, puesto que la escritura de constitución, los estatutos y los reglamentos requerían la aprobación del Gobierno y, además, se establecía el control y fiscalización permanente del funcionamiento de la sociedad por el Jefe político. Por lo tanto, aunque ni la Ley ni el Reglamento de 1848 establezcan un régimen detallado de las competencias de la junta de accionistas, ésta no tenían más margen de libertad que la que le concediera el Gobierno y, después, la actuación del Jefe político.

a) Aprobación de las cuentas anuales

La aprobación de las cuentas anuales es una facultad de la junta regulada en dos artículos. En primer lugar, el artículo 1.14 del Reglamento de 1848, conforme al cual, la escritura de fundación de la sociedad debe establecer, *las épocas en que hayan de formarse y presentarse los inventarios y balances de la compañía, no pudiendo dejar de verificarse en cada año, como lo previenen los artículos 36 y 37 del Código de comercio, y las formalidades con que hayan de revisarse y aprobarse por la Junta de*

accionistas. Esta previsión se complementa con el artículo 34 que regula las cuentas anuales y establece que la junta de accionistas es el órgano competente para su aprobación.

b) Aprobación de la distribución de dividendos

La competencia del reparto de dividendos se debe atribuir por los estatutos a la junta de accionistas, con los detalles previstos en ellos y en el Reglamento. Así su artículo 1.15 establece que la escritura de constitución de la sociedad debe regular *la forma y tiempo en que hayan de acordarse la distribución de dividendos por la Junta general de accionistas con sujeción a lo que sobre ello se previene en este Reglamento*.

Esta remisión se refiere a los artículos 35 y 36, que fijan las condiciones en las cuales la junta de accionistas podrá aprobar la distribución de dividendos. Para ello, será necesario, en primer lugar, que se refieran a un balance concreto de la sociedad. En este balance deben existir beneficios líquidos, es decir, repartibles entre los accionistas, fundamentalmente en dinero. Pero no se pueden repartir todos los beneficios líquidos, sino solamente los que queden después de constituirse una reserva, que será determinada por los estatutos y reglamentos, sujeta siempre al control y verificación del Jefe político. Además, en caso de disminución del fondo de reserva, los beneficios deben aplicarse en primer lugar a dotarla y, en consecuencia, los accionistas no podrán aprobar una distribución de beneficios hasta que se encuentre íntegramente dotada dicha reserva.

c) Nombramiento de administradores

El Reglamento de 1848 regula el nombramiento de administradores según dos supuestos diferentes. El primero, se refiere a los representantes de la sociedad durante el periodo de la tramitación de la solicitud de autorización. El segundo, son los administradores nombrados una vez constituida la sociedad. En este último caso, el Reglamento de 1848 diferencia entre las sociedades anónimas y las sociedades comanditarias por acciones.

Según el artículo 1.16 del Reglamento de 1848, la escritura de constitución de la sociedad debe expresar *la designación de las personas que hayan de tener la representación de la compañía provisionalmente* hasta que se constituya la sociedad. En este caso, por tanto, no hay una elección directa por parte de los socios constituidos en junta general, pero se puede decir que hay una aprobación indirecta en el sentido de que los estatutos, reglamentos y escritura de constitución de la sociedad deben estar refrendados por los socios. Esto podía dar lugar –y dio lugar- a abusos por parte de los socios fundadores a la hora de otorgar las facultades de representación. Por este motivo el artículo 1.16 limita la representación *sólo para las gestiones necesarias* para la constitución de la sociedad.

Una vez constituida la sociedad, hay que diferenciar el supuesto de las sociedades anónimas de las comanditarias por acciones. En el primer caso, se debe proceder *al nombramiento de su administración por la Junta general de accionistas*, que se llevará a cabo según lo previsto en los estatutos y reglamentos. Y en el caso de la sociedad comanditaria por acciones deben encargarse de la administración *los socios*

gerentes, debiéndose observar las disposiciones de los artículos 271 y 272⁴¹⁸ del Código de comercio y ni los que se nombren como inspectores de la administración social ni la Junta general de accionistas podrán tener otras atribuciones y facultades que las que por derecho están declaradas a los socios comanditarios.

En este mismo sentido, el artículo 25 del Reglamento de 1848 establece que *el Jefe político, a consecuencia de la orden en que se declare la compañía constituida convocará la Junta general de accionistas que se reunirá bajo su presidencia o la del empleado público en quien al efecto delegare, y dándose lectura del Real decreto de autorización y de aquella misma orden, se procederá al nombramiento de las personas que hayan de tener a su cargo la administración de la compañía y la inspección o vigilancia de esta misma administración si es anónima, y al de las que hayan de tener a su cargo la inspección o vigilancia de la administración, si es comanditaria con arreglo en unas y otras a sus estatutos y reglamentos, declarándose a los elegidos lo mismo que a los socios gerentes, si la sociedad es comandita, el ejercicio de sus funciones (...).*

d) Remuneración de administradores

Si la competencia para el nombramiento de los administradores sociales, una vez constituida la sociedad, es de la junta de accionistas, también lo es la determinación de la remuneración. Y, en esta materia, el texto reglamentario es taxativo, no admitiendo excepciones.

El artículo 5 del Reglamento de 1848 regula los tres supuestos de remuneración de los administradores: una cantidad fija, una cantidad variable o una combinación de ambos, pero, en cualquier caso, la determinación (*asignación*) de la cantidad ha de realizarla la Junta. El objetivo era evitar que los propios administradores se fijasen su retribución y que los fundadores de la sociedad estipulasen cláusulas en sus estatutos o reglamentos que aseguraran a determinados administradores ciertas cantidades.

2. Procedimiento de constitución

El Reglamento de 1848 establece la obligación de la celebración de la junta general en dos ocasiones durante el proceso de constitución de la sociedad.

El primer momento en el que la junta de accionistas ha de reunirse tiene lugar una vez suscrita la mitad del capital social. Su finalidad es la de que los accionistas que solicitaron cartas de pedido de acciones y no hubieran participado en el otorgamiento de la escritura de constitución, ratifiquen los estatutos y reglamentos de la sociedad (artículo 11).

El segundo momento es consecuencia de la aprobación de la Orden de autorización de constitución de la sociedad. Conforme a lo previsto en el artículo 25, *el Jefe político, a consecuencia de la orden en que se declare la compañía constituida convocará la Junta general de accionistas que se reunirá bajo su presidencia o la del empleado público en quien al efecto delegare, y dándose lectura del Real decreto de autorización y de aquella misma orden, se procederá, en primer lugar, a la designación*

⁴¹⁸ El artículo 271 se refiere a que los nombres de los socios comanditarios no pueden figurar en la razón social y el artículo 272 establece que los socios comanditarios no pueden realizar actos de administración en representación de la sociedad ni como apoderados de los socios gestores.

de los administradores e inspectores de la sociedad (ya sea anónima o comanditaria por acciones) conforme a las normas previstas en sus estatutos y reglamentos, y, en segundo lugar, a la emisión de los títulos de las acciones con las limitaciones previstas.

3. Adaptación de sociedades por acciones ya existentes

La Ley de 1848 y el Reglamento de 1848 ponen especial énfasis y empeño en la adaptación o regularización de las compañías por acciones existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley de 1848. Al inicio de este apartado se ha citado el artículo 18 de la Ley de 1848 que prevé la necesaria intervención de la junta de accionistas para decidir si se solicita o no la autorización Real para continuar con sus operaciones. En este marco, el Reglamento de 1848 establece la intervención de la junta como único órgano legitimado para tomar la decisión sobre la continuidad de la compañía.

De esta manera, aunque los administradores no estuvieran interesados en convocar la junta y dejar transcurrir el plazo para solicitar la Real autorización (y, en consecuencia, forzar la disolución y liquidación de la sociedad por vía de la inacción), los artículos 39 y 40 del Reglamento de 1848 prevén la convocatoria a instancia del Jefe político para que sean los socios, reunidos en junta general, quienes decidan sobre la continuidad de la empresa. La junta de accionistas es el único órgano con competencia para adoptar esta decisión.

4. Clases de Juntas

La Ley de 1848 no establece clases de juntas de accionistas. El Reglamento de 1848 tampoco se refiere explícitamente a diferentes clases de juntas. Pero del texto de los artículos que hacen referencia sobre todo a las cuentas anuales, se puede deducir que el Reglamento de 1848 contempla, al menos, un supuesto específico en relación a las cuentas anuales, distinto al supuesto general de las demás juntas.

En efecto, según el Reglamento de 1848 toda sociedad regulada por la Ley de 1848 debe celebrar una junta de accionistas una vez al año para aprobar el inventario y el balance general de la situación de la sociedad, que comprenderá todas las operaciones practicadas en el año (que podría corresponder con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en terminología actual), los resultados y, por último, el estado del activo y del pasivo.

Esta junta es, por tanto, el embrión de la junta ordinaria, tal y como se ha conocido después. Las dos diferencias respecto al régimen actual son las siguientes. En cuanto al plazo temporal, la Ley de 1848 establece que sea una vez al año, pero no especifica que tenga lugar *dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio*⁴¹⁹. Y, en segundo lugar, la Ley de 1848 no recogía el requisito de aprobación de la *gestión social*⁴²⁰.

La junta extraordinaria tal y como se entiende en la actualidad (es decir, la que no reúne los requisitos de la junta ordinaria⁴²¹) no tiene carta de naturaleza en la Ley de 1848, si bien, por lo comentado anteriormente, cabe concluir que, de hecho, existían estas dos clases de juntas de accionistas.

⁴¹⁹ Véase, por ejemplo el artículo 164 LSC; el artículo 95 LSA (1989), etc.

⁴²⁰ Ídem.

⁴²¹ Artículo 165 de la LSC, artículo 96 LSA (1989), etc.

Los artículos del Reglamento de 1848 que regulan estas cuestiones son el 1.11, 1.14 y 34.

5. Convocatoria, constitución y adopción de acuerdos

Estos tres temas no están regulados expresamente en la Ley de 1848 ni en el Reglamento de 1848. Se hacen varias menciones a ellos (comentadas a lo largo de este capítulo) en el sentido de remitirse a lo que prevean los estatutos y reglamentos sociales que, como se recordará, son aprobados y posteriormente vigilados por el Gobierno. En consecuencia y, como ya se ha expresado en otras ocasiones, esta aparente libertad de los socios para pactar los procedimientos de convocatoria, constitución y adopción de acuerdos, no es real, pues estaba controlada y fiscalizada por el Gobierno o el Jefe político.

A este respecto, es ilustrativa la discusión sobre el PL 1848, que tuvo lugar en el Senado el 24 de diciembre de 1847 con motivo del debate sobre el artículo 17 de la Ley⁴²². Dos Senadores, el Sr. Pérez Seoane y el Conde de Vigo, propusieron una nueva redacción de dicho artículo en los términos siguientes:

Artículo 17.- Se redactará en los términos siguientes:

“El Gobierno, sin gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías, ejercerá la inspección que conceptúe necesaria para afianzar la observancia de esta Ley y proteger los intereses legítimos de los accionistas. Con este fin podrá:

- 1.- Nombrar visitador que examine los libros de la compañía y cuanto estime necesario para formar un juicio cabal de su estado.*
- 2.- Mandar que se convoque extraordinariamente junta general de accionistas.*
- 3.- Designar persona que presida las Juntas generales de accionistas, así ordinarias como extraordinarias, siempre que lo juzgue oportuno.*

*La elección de visitador o de presidente de las Juntas generales, recaerá necesariamente en el jefe político, o en un individuo del Consejo Real, del Tribunal Supremo de Justicia, o del Tribunal de Comercio de Madrid, si la compañía se hallase domiciliada en la provincia de Madrid. Respecto a las domiciliadas en las demás del Reino, recaerá en el jefe político, o en un individuo del Consejo provincial, de la Audiencia del territorio o del Tribunal de Comercio respectivo.*⁴²³ (el subrayado es nuestro)

Pensaban que la redacción propuesta por la CS era tan general que podía quedar vacía de contenido en la práctica y por eso proponían que se concretase, al menos, en los tres puntos recogidos en el texto de su enmienda. *Esa es la única manera eficaz de que [el Gobierno] inspeccione las Sociedades, sin gravar sus fondos ni entorpecer sus operaciones*⁴²⁴ decía el Senador Sr. Pérez Seoane.

⁴²² Dice así el artículo:

El Gobierno sin gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías ejercerá la inspección que conceptúe, necesaria para afianzar la observancia estricta y constante de la presente ley.

⁴²³ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 294.

⁴²⁴ Ídem.

Esta propuesta fue rebatida por el entonces Ministro de CIOP, Sr. Bravo Murillo, acusándola de sobrepasar las materias propias de la Ley pues debían ser, en su caso, objeto de regulación reglamentaria. Para el Ministro, la redacción tan amplia del artículo 17 objeto de discusión era la que otorgaba mayor posibilidad de control e intervención al Gobierno. Si se concretaban facultades se podría perder la eficacia pretendida. Estas son sus palabras sobre la remisión del tema al Reglamento:

... las disposiciones contenidas en esa enmienda son puramente reglamentarias. Dice que el Gobierno puede nombrar los visitadores y presidentes de las Juntas; dice que el Gobierno debería tener la facultad de convocar a junta general de accionistas; quiere que se designe una persona que presida esta Junta, y hasta las personas que pueden ser; que pueden serlo el jefe político, un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, o un individuo del Tribunal de comercio de Madrid; y me parece, señores, que si esto no corresponde a los reglamentos, no hay nada que pueda corresponderles. Me parece que la ley no debe descender a pormenores personales; al reglamento toca exponer las medidas convenientes para ejecutar aquella base, que está en la ley. Pero si pudiera descender a este pormenor, sería decir: el Gobierno nombrará un individuo del Supremo Tribunal de Justicia, un individuo del Tribunal de comercio; y esto, señores, sería ligar las manos al Gobierno, entorpecer sus facultades y cercenarle derechos consignados hasta por la Constitución, la cual le concede la facultad de dictar los reglamentos convenientes, con arreglo a las leyes. Por estas razones se opone al Gobierno a que se admita la enmienda del Sr. Seoane⁴²⁵ (el subrayado es nuestro).

El Sr. Bravo Murillo, coherente con su planteamiento, no recogió esta propuesta en el Reglamento de 1848. ¿Qué prevé el citado Reglamento respecto a la convocatoria de la junta de accionistas? El principio general es que el órgano social legitimado para convocar a los accionistas es la administración de la sociedad. Pero existen dos excepciones.

La primera, se produce cuando el Gobierno aprueba el Decreto por el que se declara constituida la sociedad. En este caso, es el Jefe político el que convoca la junta general, que *se reunirá bajo su presidencia o la del empleado público en quien al efecto delegare* (artículo 25 del Reglamento de 1848).

Y, la segunda, tiene lugar en el caso en el que los administradores de la sociedad constituida antes de la entrada en vigor de la Ley de 1848 no convoquen la junta de accionistas para decidir si solicitan la Real autorización o no. Pues bien, si no lo hacen dentro del plazo previsto, el Jefe político *procederá a convocar la junta general de accionistas bajo su presidencia o la de otro empleado público en quien delegare al efecto.*

Salvo estas dos excepciones, la convocatoria ordinaria es competencia de los administradores. Ahora bien, esto no significa que el Gobierno no pudiera convocar la junta de accionistas, pues conforme a lo que se ha comentado anteriormente, las

⁴²⁵ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 295.

facultades de control y supervisión del Gobierno consagradas en el artículo 17 de la Ley de 1848 eran tan amplias, que le podían legitimar para efectuar la convocatoria.

Por último, en relación al quórum y a la adopción de acuerdos, los textos normativos no establecen un régimen concreto. Los estatutos y reglamentos de cada sociedad regulaban estas cuestiones. Por lo tanto, podían admitirse quóruns y mayorías cualificadas para determinados acuerdos, siempre que la Autoridad pública lo aprobara.

En la Ley de 1848 se encuentra una referencia a las mayorías de voto para un determinado supuesto referido a las sociedades constituidas antes de la Ley de 1848: la votación en la junta para aprobar la nueva Real autorización, que se solicitaría exclusivamente *en el caso de que la mayoría de los mismos accionistas que se computará con arreglo a sus estatutos y reglamentos, acuerde la continuación de la compañía* (artículo 18). Por lo tanto, la Ley de 1848 no establece una mayoría determinada, sino la que determinen los estatutos y reglamentos.

Pero lo que realmente sorprende es que la redacción se refiera a mayorías de accionistas y no de acciones. Si esto fuera así, sería una contradicción con el carácter abierto de las compañías por acciones, cuyos títulos cotizaban en Bolsa (artículo 14 de la Ley de 1848). Esta interesante cuestión (mayorías de accionistas o de acciones) se comentó en las sesiones en las que se debatió el PL 1848 en el Senado, sin llegar a una conclusión clara⁴²⁶. Los detalles del debate se recogen en el capítulo sobre la junta general y a él nos remitimos. Resta por concluir que, en nuestra opinión, si bien bajo el CCom 1829, los T. de c. podían haber autorizado estatutos o reglamentos en los que se admitieran mayorías por accionistas, no nos parece razonable que, tras la promulgación de la Ley de 1848 esto pudiera hacerse, pues iría contra la caracterización de la compañía por acciones como sociedad abierta, formada por un gran número de socios, cuyas acciones cotizaban en la Bolsa.

G) ADMINISTRADORES

La regulación del régimen de los administradores se encuentra, fundamentalmente, en el Reglamento de 1848. Las escasas referencias que aparecen en el texto legal están desarrolladas en la norma reglamentaria y se analizan a continuación.

1. Competencias del órgano de administración

Ninguno de los dos textos normativos define las competencias de los administradores. De los artículos correspondientes se deduce, sin lugar a dudas, que la administración social asume con carácter habitual *la gestión y representación de la sociedad*⁴²⁷ frente a terceros, siempre dentro del marco de las facultades de control y supervisión del Gobierno (artículo 17 de la Ley de 1848).

⁴²⁶ Uno de los intervinientes fue D. Pedro Sáinz de Andino.

⁴²⁷ Siguiendo la terminología tradicional de los textos normativos posteriores. Así se expresa el artículo 209 LSC, que refiere la competencia de los administradores a lo previsto en dicha ley.

Pero aunque no se encuentre una descripción de las competencias de los administradores, a lo largo del articulado del Reglamento de 1848 aparecen bastantes menciones y referencias a competencias concretas del órgano de administración.

En primer lugar, se alude a las atribuciones en el artículo 1.9, al regular el contenido de la escritura de constitución de la sociedad, pues deben figurar *(l)as atribuciones de sus administradores, y de los que tengan a su cargo inspeccionar las operaciones de la administración.*

De nuevo se produce otra remisión a lo que los socios libremente acuerden entre sí. Pero, como se ha repetido en otras ocasiones, esta remisión a la libre voluntad de los accionistas es, en cierto modo, ficticia puesto que la redacción de los estatutos y reglamentos debía ser aprobada por el Gobierno. Las atribuciones o competencias de los administradores quedaban señaladas en los estatutos, reglamentos y escritura de fundación de la sociedad, aprobados y supervisados por el poder político. En este sentido, establece el artículo 7 del Reglamento de 1848 que *los reglamentos de las sociedades por acciones comprenderán las disposiciones relativas al orden administrativo de la empresa y al directivo de sus operaciones, guardando conformidad con las bases establecidas en la escritura de fundación.*

Junto a esta remisión de carácter general, el Reglamento de 1848 regula determinadas competencias de los administradores. Así, se pueden destacar las siguientes:

- La valoración de las aportaciones no dinerarias al capital social *se apreciarán convencionalmente entre el interesado y la administración definitiva de la misma compañía, o por peritos si así se pactare* (artículo 3).
- La representación de la sociedad antes de su constitución (en terminología reglamentaria la *administración provisional*) debe abrir el periodo de suscripción de acciones vacantes una vez recibida la comunicación del RD de autorización por vía del Jefe político, para acreditar posteriormente que se ha *cubierto la suscripción del capital social*. Se trata de un importante requisito, pues *si no se presentaren accionistas para completarlo, se tendrá por caducada la Real autorización* (artículo 22).
- La exigencia de los dividendos pasivos dentro de *las épocas marcadas en los estatutos*. Si el accionista no desembolsare dichos dividendos pasivos, *podrá optar la misma administración conforme a lo dispuesto en el artículo 300 del Código de comercio, entre proceder ejecutivamente contra los bienes del socio omiso para hacer efectiva la cantidad de que fuere deudor, o proceder a la venta de sus acciones al curso corriente en la plaza, por medio de la Junta sindical de los agentes, de cambio o la de corredores donde no hubiere colegio de agentes* (artículo 32).
- La formulación de las cuentas anuales es competencia exclusiva de los administradores, tal y como establece el artículo 34: *estos balances autorizados por los administradores de la compañía bajo su responsabilidad directa y personal, y después de reconocidos y aprobados en junta general de accionistas, se remitirán al Jefe político de la provincia (...).*

2. Nombramiento

En cuanto al nombramiento de los administradores, el artículo clave del Reglamento de 1848 es el 1.16, que establece que la escritura de fundación de la sociedad debe recoger *(l)a designación de las personas que hayan de tener la representación de la compañía provisionalmente y solo para las gestiones necesarias hasta que hallándose constituida, se proceda al nombramiento de su administración por la Junta general de accionistas, o se encarguen de ella los socios gerentes si la compañía es en comandita.*

Se establecen, por tanto, dos administraciones diferentes. La administración *provisional*, hasta que se halle constituida la sociedad y cuyo nombramiento se realiza en la escritura de constitución por los otorgantes de la misma. Las personas que suscriban acciones después del otorgamiento de la escritura de constitución y con anterioridad a la aprobación de la sociedad, deben prestar necesariamente su conformidad a la escritura de constitución, estatutos y reglamentos (artículo 11). De esta manera, son los socios los que nombran a la administración provisional en dos momentos diferentes: en el momento del otorgamiento de la escritura de constitución y en la *Junta general para que los [socios] que no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura de fundación, presten su conformidad a los estatutos y reglamentos de la compañía* (artículo 11 del Reglamento de 1848).

La administración *definitiva*⁴²⁸ es nombrada por la junta general una vez constituida la sociedad (cfr. artículo 25 del Reglamento de 1848, que se comenta más adelante). El procedimiento y requisitos para el nombramiento, serán los que hayan establecido los estatutos y reglamentos de la sociedad (cfr. artículo 7 del Reglamento de 1848), que han de ser aprobados por el Gobierno. En la administración *definitiva*, el Reglamento de 1848 distingue dos supuestos diferentes según se trate de una sociedad anónima o de una sociedad comanditaria por acciones.

En el caso de una sociedad anónima, la junta de accionistas nombra a los administradores. En el caso de una sociedad comanditaria por acciones, serán los socios gerentes los que ostenten la condición de administradores (cfr. artículo 1.16 *in fine*, así como el artículo 28, *sensu contrario*). Esta diferenciación, consecuencia de las características propias de cada tipo social, permanece hasta la actualidad⁴²⁹.

Dentro del proceso de constitución de la sociedad por acciones, una vez aprobado el Decreto por el que se declara constituida la sociedad, el Jefe político convocará la junta de accionistas para, entre otras cuestiones, proceder *al nombramiento de las personas que hayan de tener a su cargo la administración de la compañía y la inspección o vigilancia de esta misma administración si es anónima, y al de las que hayan de tener a su cargo la inspección o vigilancia de la administración, si es comanditaria con arreglo en unas y otras a sus estatutos y reglamentos, declarándose a los elegidos lo mismo que a los socios gerentes, si la sociedad es comandita, el ejercicio de sus funciones (...)* (artículo 25 del Reglamento de 1848).

⁴²⁸ Expresión que tomamos del artículo 3 del Reglamento de 1848 para calificar este segundo tipo de administradores.

⁴²⁹ Cfr. artículo 252 “Administración de la sociedad comanditaria por acciones” de la LSC.

Los siguientes nombramientos se realizarán en las juntas de accionistas correspondientes, conforme a lo previsto en los reglamentos y estatutos de la sociedad.

El nombramiento ha de hacerse por un periodo limitado de tiempo. Ni la Ley de 1848 ni el Reglamento de 1848 establecen periodos máximos. Serán los estatutos y reglamentos sociales los que regulen el plazo de vigencia del cargo. Lo que establece el artículo 27 del Reglamento de 1848 de manera categórica –y así se acordó en las discusiones del PL 1848 en el Senado- es que los administradores de las sociedades anónimas son amovibles, conforme a lo previsto por el artículo 265 CCom 1829.

Por eso, en aplicación del mismo principio y del principio de igualdad de trato de los accionistas, establece el artículo 2 del Reglamento de 1848 que *no podrá reservarse ningún socio a título de fundador ni por otro alguno, el derecho de (...) la administración o gerencia irrevocablemente en las compañías anónimas.*

En cuanto a los requisitos subjetivos para ser nombrado administrador, no se hace ninguna referencia a que deba ser socio de la sociedad. Tampoco se hace mención a la posibilidad de que sean personas jurídicas, aunque cabe presumir que no estaba en la mente del Legislador esta posibilidad, como sí lo estaba expresamente el accionista persona jurídica, conforme a lo previsto en el artículo 12 *in fine* de la Ley de 1848.

Pero establece el artículo 15.4 del Reglamento de 1848 un requisito de carácter subjetivo y, podríamos añadir, discrecional. Este artículo regula que el Jefe político debe examinar cuando reciba, al inicio de todo el procedimiento, la solicitud de autorización Real. Uno de esos aspectos es *si el régimen administrativo y directivo de la compañía ofrece las garantías morales que son indispensables para el crédito de la empresa y la seguridad de los intereses de los accionistas y del público* (el subrayado es nuestro).

Y este requisito subjetivo de reunir las garantías morales para ejercitar adecuadamente sus funciones no se limita al examen del Jefe político al inicio del expediente de solicitud de la Real autorización, sino que permanece durante la vida de la sociedad, pues el artículo 37 del Reglamento de 1848 establece que los Jefes políticos *además de estas comunicaciones anuales⁴³⁰ pondrán en conocimiento del Gobierno para la resolución correspondiente toda novedad que ocurra en el régimen directivo y administrativo de las compañías que pueda perturbarlo o que produzca alguna alteración en la observancia de sus estatutos* (el subrayado es nuestro).

3. Cese

El cese de los administradores ya se ha tratado indirectamente en el epígrafe anterior al hablar sobre su nombramiento. Como ya se mencionó, el régimen es diferente para los administradores de las sociedades anónimas y para los de las sociedades comanditarias por acciones, pues en estas últimas, los socios gerentes son los administradores. Por ello, no pueden ser cesados; su inhabilitación o fallecimiento es causa de disolución de la sociedad comanditaria (artículo 28 del Reglamento de 1848).

⁴³⁰ Informe que debía enviar al Gobierno sobre las cuentas anuales y otras materias que estimaran de relevancia.

El marco regulatorio del cese de los administradores de la sociedad anónima se basa en el principio de la amovilidad de los administradores. Parece ser⁴³¹ que en el periodo previo a la aprobación de la Ley de 1848, aun cuando el CCom 1829 establecía este principio de amovilidad de los administradores, en la práctica muchas sociedades anónimas tenían, de hecho, administradores con carácter indefinido. Para evitar estas situaciones, el artículo 27 del Reglamento de 1848, dispone que *según está declarado en el artículo 265 del Código de comercio, los administradores de las sociedades por acciones, siendo anónimas, son amovibles a voluntad de los socios, mediando justas causas de separación, con arreglo a derecho o a lo que sobre la materia estuviere establecido en los estatutos de la sociedad.*

Requisito imprescindible, por tanto, para la separación de un administrador era la justa causa⁴³² establecida en la normativa general o en la particular de la sociedad (sus reglamentos y estatutos).

El Reglamento de 1848 contiene también otra previsión para aplicar el principio de amovilidad de los administradores. Se trata del anteriormente citado artículo 2 por el cual ningún socio puede reservarse el derecho especial de la administración o gerencia irrevocable en las compañías anónimas.

Por último, se debe realizar un comentario sobre la previsión contenida en el artículo 38 del Reglamento de 1848 cuyo contenido (y más concretamente su inciso final) plantea problemas interpretativos. Dice así el citado artículo:

Siempre que de resultas de la inspección que la administración ha de ejercer sobre las sociedades por acciones o por los documentos que estas deben someter a su comprobación o por cualquiera otro medio legal constare haberse perpetrado algún delito en el manejo directivo y administrativo de la sociedad, procederá el Jefe político conforme está prescrito en el párrafo 5 del artículo 5 de la Ley de 2 de Abril de 1 845.

El supuesto que contempla se basa en las facultades de control e inspección del Jefe político y del Gobierno sobre las sociedades por acciones. Si en el ejercicio de dichas atribuciones, el Jefe político descubre que se ha cometido algún delito *en el manejo directivo y administrativo de la sociedad*, es decir, en la actuación de los administradores o gerentes, deberá proceder según lo establecido en el artículo 5.5 de la Ley de 1845.

La dificultad interpretativa del texto se encuentra en la referencia al artículo 5.5 de la Ley de 1845. Este texto normativo lleva por título “Ley para el gobierno de las Provincias”⁴³³ y regula el procedimiento de elección y cese del Jefe político de cada Provincia, así como sus facultades y el ejercicio de las mismas. El artículo 5 establece que *para el buen desempeño de su autoridad deberá el Jefe político...* y en su apartado 5 le otorga la siguiente facultad: *suspender en casos urgentes a cualquier funcionario o empleado dependiente del ministerio de la Gobernación de la Península, dando inmediatamente cuenta al Gobierno.*

⁴³¹ Véase el capítulo sobre los administradores.

⁴³² Este requisito, como se sabe, ya no existe en la legislación actual.

⁴³³ GdM de 9 de abril de 1845, núm. 3860, págs. 1 y 2.

Como se expone en otro lugar⁴³⁴, el 28 de enero de 1847 (es decir, casi dos años después de la Ley de 1845 y un año antes de la Ley de 1848), la Reina Isabel II aprueba una reordenación de los Ministerios, creando el de MCIOP, al que se adscriben la Dirección de Instrucción Pública y las Secciones de Beneficencia y Obras Públicas dependientes del Ministerio de la Gobernación, así como la Sección de Comercio de la Secretaría o Ministerio de Marina. Por lo tanto, en la fecha de 17 de febrero de 1848 en la que se aprueba el Reglamento de 1848, las competencias del Ministerio de la Gobernación de la Península habían sido modificadas respecto a las que tenía atribuidas en 1845 y la competencia sobre las sociedades por acciones se había atribuido al MCIOP. Con independencia de ello, tanto la Ley de 1848 como el Reglamento de 1848 confieren las atribuciones de inspección y control sobre las sociedades por acciones y sus administradores, a los Jefes políticos, aunque éstos dependieran del Ministerio de la Gobernación.

¿Por qué se aplica a los administradores de las compañías por acciones una norma dirigida a los funcionarios o empleados dependientes del Ministerio de Gobernación? No puede ofrecerse una respuesta clara. Se descarta, como punto de partida, que tanto la Ley de 1848 como el Reglamento de 1848 consideren a los administradores y gestores funcionarios o empleados dependientes de un Ministerio, bien sea de la Gobernación, bien del recién creado de CIOP. No se hace mención en ningún momento a esta situación, sino solamente en esta referencia a la Ley de 1845. Si realmente se consideraran funcionarios o empleados públicos, ambos textos normativos habrían regulado de otra manera a los administradores y gerentes.

Quizá se trate de una manera de reforzar la autoridad del Jefe político sobre la administración y gerencia de la sociedad. La figura y atribuciones del Jefe político se comenta en otro lugar⁴³⁵ en el que se pone de manifiesto el poder que tenía conferido y en este marco se podría entender que el Legislador pretendiera imponer esa autoridad sobre los administradores de las sociedades por acciones.

Aunque esto fuera así, no parece razonable la remisión a la Ley de 1845. Si se hubiera querido dar al Jefe político la facultad de cesar (*suspender* en la terminología de la citada Ley) a los administradores en caso de urgencia, se les podía haber otorgado en esos términos, pero no como consecuencia de la remisión a la “Ley para el gobierno de la Provincias”. Aunque esto que se acaba de decir es lógico para la mentalidad actual, quizá no fuera así para la de aquella época, dadas las competencias atribuidas al Jefe político.

Una última explicación del citado artículo 38 del Reglamento de 1848 (complementaria a las anteriores) podría ser que la *suspensión* motivada por el descubrimiento del delito se refiera no sólo a los administradores sino a *los funcionarios o empleados dependientes del Ministerio* (artículo 5.5 Ley de 1845) que perpetraran alguna actuación delictiva en relación a la compañía. Dado que las sociedades por acciones desarrollaban actividades de interés público que se concretaban en concesiones o privilegios administrativos, podría hacer referencia el artículo 38 a los funcionarios que actuaran fueran de la legalidad en la tramitación y decisión sobre dichos privilegios. De esta manera, el Jefe político, en caso de urgencia, podría cesarlos o suspenderlos

⁴³⁴ Véase el capítulo sobre el *iter* legislativo de la Ley de 1848.

⁴³⁵ Véase el capítulo sobre la vigilancia e inspección asignada a la Autoridad pública.

informando inmediatamente al Gobierno tal y como prevé el citado artículo 5.5 Ley de 1845.

4. Modos de organizar la administración

La Ley de 1848 y el Reglamento de 1848 no regulan los modos de organizar la administración de la sociedad. No se han encontrado datos sobre el sistema de administración más utilizado. Se puede indicar que, razonablemente, excepto el administrador único, se debieron utilizar los sistemas de consejo y administradores, bien solidarios, bien mancomunados, con las limitaciones propias de las sociedades comanditarias por acciones (las cuales si tuvieran un único socio gerente, estarían conformadas con un administrador único, aunque este caso sería muy infrecuente).

Los modos de organizar la administración se encuentran, para cada sociedad, en la escritura de constitución y en sus estatutos y reglamentos. Dos son los artículos del Reglamento de 1848 que así lo expresan.

En primer lugar, el artículo 1.9, que regula el contenido mínimo de la escritura de constitución, establece que ésta debe expresar *el régimen administrativo de la compañía*.

En segundo lugar, el artículo 7, dispone que *los reglamentos de las sociedades por acciones comprenderán las disposiciones relativas al orden administrativo de la empresa y al directivo de sus operaciones, guardando conformidad con las bases establecidas en la escritura de fundación* (el subrayado es nuestro).

5. Remuneración

La remuneración de los administradores se encuentra regulada en dos artículos del Reglamento de 1848, que diferencian el régimen de la sociedad anónima y el de la sociedad comanditaria por acciones.

Al primer supuesto, referido a la compañía anónima, se refiere el artículo 5 en los siguientes términos: *(l)a remuneración que hayan de disfrutar los administradores de las compañías anónimas podrá establecerse por medio de un sueldo fijo, o por el de una participación en los beneficios repartibles de la empresa o por ambos medios; pero en todos casos habrá de reservarse esta asignación a la Junta general de accionistas constituida que sea la sociedad.*

Se establecen por tanto, tres sistemas de remuneración: fijo, variable o una combinación de ambos. En cualquier caso, es la junta de accionistas el único órgano legitimado para fijar y aprobar la remuneración. Este esquema concuerda en líneas generales con el sistema actual de remuneración, dando especial importancia a la aprobación por la junta de accionistas y no por la propia administración de la sociedad, debido a los conflictos que esto genera. Quizá la mayor diferencia entre el régimen actual y el de la Ley de 1848 es que en aquél se presume que *el cargo de administrador es gratuito*⁴³⁶.

⁴³⁶ Véase el artículo 217 LSC.

El segundo supuesto (los administradores de las sociedades comanditarias por acciones), se encuentra regulado en el artículo 6, según el cual *en las sociedades en comandita por' acciones tendrán los socios gerentes, como responsables solidariamente de los resultados de las operaciones sociales, la participación que se prefijare por la escritura de fundación en las ganancias y pérdidas de la empresa*. Será, por tanto, la escritura de fundación de la sociedad la que determine la remuneración del socio o socios gerentes.

6. Deberes

Ni la Ley de 1848 ni el Reglamento de 1848 recogen un régimen sistemático de las obligaciones de los administradores. Este silencio normativo contrasta con la frecuente referencia durante los debates del PL 1848 en los dos Cuerpos Colegisladores a las situaciones de conflictos de interés de los administradores. Aunque se le daba una gran importancia a la necesidad de poner fin a determinadas situaciones de abuso y fraude protagonizadas por algunos administradores, el hecho cierto es que no se recoge ninguna previsión al respecto. Además, los administradores de las sociedades anónimas no respondían directamente de las obligaciones sociales como ocurría en el caso de los administradores de las sociedades comanditarias por acciones.

Es posible que el motivo de esta sorprendente omisión (sorprendente desde la perspectiva actual) sea que el Legislador entendió que los medios del Derecho mercantil y civil eran suficientes para penalizar la transgresión de los deberes de los administradores. Ha tenido que pasar mucho tiempo para elaborar un régimen más eficaz en este aspecto.

Por otro lado, no se puede dejar de mencionar lo que ya se comenta en otros lugares. Tanto la Ley de 1848 como el Reglamento de 1848 tratan de proteger casi en exclusiva a los socios frente a las actuaciones ilícitas de los administradores. Prácticamente no hay rastro de menciones a los intereses de los acreedores o de terceros contratantes con la sociedad. Por lo tanto, el régimen de responsabilidad de los administradores, como se ve a continuación en el siguiente apartado, se fundamenta sobre unas bases diferentes a las que tiene en la actualidad, fruto de la evolución histórica y económica del empresario social.

7. Responsabilidad

La responsabilidad de los administradores por actuaciones ilícitas es uno de los temas que más inquietaban a los Diputados y Senadores que intervinieron durante los debates parlamentarios sobre el PL 1848.

Esta preocupación no tiene un tratamiento proporcional en la Ley de 1848 ni en el Reglamento de 1848, dado que se regula de una manera muy escasa. Aparentemente puede parecer una contradicción, pero leídos todos los artículos con atención, tiene su lógica. En efecto, en nuestra opinión, el artículo 17 de la Ley de 1848 es la clave, pues establece que el Gobierno, sin entorpecer las operaciones ni gravar los fondos de las sociedades, dispone de todas las facultades de inspección y control para asegurar el cumplimiento de la Ley.

Este artículo 17 es desarrollado por el artículo 30 del Reglamento de 1848 que reitera que las sociedades por acciones *estarán constantemente bajo la inspección del gobierno y del Jefe político en cuanto a su régimen administrativo* y al cumplimiento de los estatutos y reglamentos. Y añade el siguiente párrafo: *el gobierno, con el debido conocimiento de causa, y oído el Consejo Real, suspenderá o anulará, según estimare procedente la autorización de las compañías que en sus operaciones o en el orden de su administración faltaren al cumplimiento de las disposiciones legales o de sus estatutos* (el subrayado es nuestro).

El Reglamento de 1848 concreta en otro artículo esta función de control e inspección de la actividad de la sociedad y especialmente de los administradores. La obligación de control recae directamente en el Jefe político, quien debe dar cuenta al Gobierno de la situación de las sociedades que se encuentran dentro de su demarcación. Esta rendición de cuentas se establece con carácter anual en el momento de informar sobre las cuentas anuales aprobadas. Y, *además de estas comunicaciones anuales pondrán en conocimiento del Gobierno para la resolución correspondiente toda novedad que ocurra en el régimen directivo y administrativo de las compañías que pueda perturbarlo o que produzca alguna alteración en la observancia de sus estatutos* (artículo 37).

Pero hay más, puesto que, como ya se ha referido en otros lugares, el objetivo del Legislador es proteger los intereses, fundamentalmente de los socios y del Gobierno. Los acreedores apenas son citados a lo largo del articulado de la Ley de 1848 y del Reglamento de 1848. Evidentemente no se trata de un olvido. En nuestra opinión, el objetivo de la Ley de 1848 es reconducir la situación creada en torno a las sociedades por acciones, que habían perjudicado sobre todo a los accionistas, puesto que muchas de ellas aún no habían empezado su actividad empresarial. La Ley de 1848 se centraba más en lo que hoy llamaríamos los “inversores”. La protección a los acreedores quedaba garantizada por las disposiciones del derecho común.

La Ley de 1848 hace una referencia a la responsabilidad de los administradores en su artículo 13, que exige que *los gerentes o directores de cada compañía deberán tener en depósito mientras ejerzan sus cargos un número fijo de acciones, cuyos títulos han de extenderse en papel y forma especiales*. Este artículo no regula el contenido de la responsabilidad o deberes de los administradores, sino que con carácter preventivo, les obliga a constituir un depósito de garantía con acciones de la sociedad para hacer frente a eventuales responsabilidades. Esta obligación es de carácter genérico, pues no se concreta un importe o porcentaje.

El Reglamento de 1848 desarrolla este artículo en los siguientes términos: *dentro de los quince días siguientes al en que se hubiere declarado constituida la compañía, acreditarán los administradores ante el Jefe político haber hecho el depósito efectivo de las acciones con que deben garantizar su gerencia en la cantidad determinada en los estatutos, y conforme a lo prescrito en el artículo 13 de la Ley de 28 de Enero* (artículo 29). Tampoco establece este texto una cuantía o porcentaje mínimo de acciones en depósito de garantía.

Esta cuestión del número mínimo de acciones en depósito fue objeto de debate en el Senado en la sesión de Nochebuena de 1847. Al discutirse el artículo 13 del PL 1848, el Senador Marqués de Montevirgen hizo la siguiente propuesta:

...desearía yo que este número se determinase, y que se determinase con respecto al capital social de la compañía. Sin embargo, si esta es cuestión de reglamento, la abandono enteramente; si no lo es, me parece que sería conveniente que la ley fijase la cantidad, el mínimum de acciones que deben ponerse en depósito al tiempo de instituirse la Sociedad. (...) Si la Comisión cree que puede ser bueno para la ley, estoy conforme; y si no lo hace, con el fin de que se exprese en el Reglamento, lo estoy también⁴³⁷ (el subrayado es nuestro).

No hubo respuesta por parte de la CS ni del Gobierno y el artículo se aprobó sin modificaciones. Como se ha visto, el Gobierno decidió no incluir ninguna mención al respecto en el Reglamento de 1848.

Por otro lado, el artículo 16.1 de la Ley de 1848 regula la responsabilidad de los administradores que obligan, a través de contratos, a la sociedad frente a terceros antes de haberse constituido y recibido la Real autorización: *(l)os que contraten a nombre de compañías que no se hallen establecidas legalmente, serán solidariamente responsables de todos los perjuicios que por la nulidad de los contratos se irroguen a los interesados, e incurrirán además en una multa que no excederá de 100,000 reales.*

El párrafo segundo del artículo 16 de la Ley de 1848 regula la responsabilidad de los administradores por la disposición de cantidades para operaciones que no se encuentren previstas en el objeto social de la compañía. Como se comenta en el capítulo sobre el objeto social, la Ley de 1848 pone especial énfasis en ceñir la actividad societaria al objeto social aprobado. Lo que exceda de este ámbito puede ocasionar un perjuicio al patrimonio social y al mercado y, en consecuencia, ha de ser convenientemente penalizado. Por este motivo, se establece la responsabilidad solidaria de los administradores en relación a las cantidades indebidamente dispuestas en los siguientes términos: *(e)n igual responsabilidad incurrirán los que a nombre de una compañía aun legalmente constituida se extiendan a otras negociaciones que las de su objeto o empresa, según esté determinado en sus estatutos y reglamentos.*

La responsabilidad hace referencia a lo comentado en el párrafo primero de este artículo 16: una responsabilidad *solidaria de todos los perjuicios que por la nulidad de los contratos se irroguen a los interesados* y, además, *una multa que no excederá de 100,000 reales.*

En el mismo sentido, el artículo 31 del Reglamento de 1848 desarrolla el artículo 16 de la Ley estableciendo que,

los fondos de las compañías mercantiles por acciones no podrán distraerse de la caja social para negociaciones extrañas al objeto de su creación. Se permitirá únicamente aplicar los fondos sobrantes que existan en caja para descuentos o préstamos cuyo plazo no podrá exceder de noventa días, dándose precisamente en garantía papel de la deuda consolidada. Los administradores son directamente responsables de cualquiera cantidad de que dispusieren contraviniendo a estas disposiciones.

⁴³⁷ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 304.

Se declara, por tanto, la responsabilidad solidaria, pero no *de todos los perjuicios que por la nulidad de los contratos se irroguen a los interesados* (artículo 16 de la Ley de 1848) sino por *la cantidad de que dispusieren contraviniendo a estas disposiciones* (artículo 31 del Reglamento de 1848). Son causas de responsabilidad diferentes, pero que se pueden acumular, sobre todo lo referente a la indemnización por daños y perjuicios. El artículo del Reglamento de 1848 no hace mención a la multa (que figura en la previsión legal) ni a graduaciones de la misma.

Lo más destacable del artículo 31 del Reglamento de 1848 es la excepción que consagra al autorizar la utilización de *fondos sobrantes que existan en la caja para descuentos o préstamos cuyo plazo no podrá exceder de noventa días, dándose precisamente en garantía papel de la deuda consolidada*. Cabe cuestionar la legalidad de esta excepción reglamentaria, dado que no se trata de una disposición de desarrollo o ejecución de la Ley de 1848, sino una previsión que excepciona la prohibición de carácter general del artículo 16.2 de dicha Ley.

Esta cuestión de la utilización de fondos sobrantes para constituir préstamos a favor de terceros fue ampliamente debatida en las sesiones del Senado⁴³⁸ y criticada con dureza, pues algunas compañías se constituyeron y no llegaron a iniciar su actividad social, porque empezaron prestando el dinero que habían recibido de los accionistas para desarrollar el objeto social, de manera que, por las causas que fueran, perdieron gran parte de su patrimonio.

Se trata de una muestra aislada de cómo el Reglamento de 1848 puede burlar el espíritu y la letra de la Ley de 1848.

8. Actuaciones para la regularización de las sociedades ya existentes

Se ha dejado para el final esta materia relativa a la actuación de los administradores de las sociedades por acciones existentes antes de la entrada en vigor de la Ley de 1848. Se trata en este último epígrafe sobre los administradores porque tanto la Ley de 1848 como el Reglamento de 1848 así lo hacen. Y, también, porque no se trata, en sentido estricto, de una previsión normativa general sobre los administradores sino específicamente sobre la actuación de los administradores de las sociedades ya constituidas en el momento de la entrada en vigor de la Ley de 1848, con el fin de regularizar dichas compañías.

El objetivo fundamental que se propone la Ley de 1848 (y su Reglamento) para conseguir un saneamiento de la mala situación societaria existente en aquél momento se centra en la regularización de las sociedades por acciones o, alternatively, en su disolución y liquidación, sin términos medios. Para conseguir este objetivo era fundamental la actuación de los administradores y, por este motivo, ambos textos legales les imponen unas obligaciones que, se reitera, no se han recogido en el epígrafe general de las obligaciones de los administradores de este capítulo, puesto que las que ahora se comentan se refieren exclusivamente a las sociedades constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 1848.

⁴³⁸ Se puede consultar el capítulo sobre el objeto social.

El artículo 18 de la Ley de 1848 impone a los administradores el *deber de convocar la Junta* en el plazo máximo de cincuenta días a contar desde la publicación de dicha Ley, para que decida *si se ha de pedir o no la Real autorización*. En este mismo sentido, el artículo 39 del Reglamento de 1848 recoge la obligación de convocar la junta de accionistas a estos efectos y añade el deber de dar *conocimiento al Jefe político de la provincia del día de la reunión, a fin de que aquella autoridad pueda por sí o por sus delegados presidir dicha junta*. Una vez celebrada la junta, los administradores tienen además que enviar *copia certificada del acuerdo, sea para declarar la compañía en liquidación o bien para impetrar la Real autorización que la habilite para continuar en sus operaciones*.

En caso de que se decida solicitar la Real aprobación, el artículo 42 del Reglamento de 1848 impone a los administradores la obligación de dirigir *al Gobierno la correspondiente exposición, que acompañarán certificación de aquel acuerdo y sus estatutos y reglamentos*. Este envío se realizará a través del Jefe político de la Provincia a quien también se entregará *dentro del término improrrogable de quince días el balance general que demuestre la situación de la compañía y la calificación de su activo*.

H) CUENTAS ANUALES

La Ley de 1848 no recoge menciones a las cuentas anuales de las compañías por acciones. En cambio, el Reglamento de 1848 regula varios aspectos mercantiles de las mismas en una media docena de artículos. No se trata de disposiciones de carácter contable cuya regulación en aquella época desconocemos y, además, quedan fuera del ámbito del presente trabajo. Son normas societarias relacionadas básicamente con el contenido y el procedimiento de aprobación de las cuentas anuales.

La decisión de que la Ley de 1848 no regulara los detalles de las cuentas anuales se encuentra en una intervención del Ministro de CIOP, D. Juan Bravo Murillo, en la sesión del Senado del día 22 de diciembre de 1847. Se trata de una contestación al Senador Sr. Marqués de Fuentes de Duero, que propuso la siguiente enmienda al artículo 6⁴³⁹ del Proyecto presentado por la CS⁴⁴⁰:

Estoy conforme con el artículo, pero quisiera se añadiese al final del primer párrafo: “los cuales [los estatutos] habrán de fijar el período, que no podrá ser más dilatorio que de un año, en que habrá de tenerse a su disposición los balances y libros sociales para enterarse de los pormenores de las operaciones.” Esto es común: yo no he conocido Sociedad ninguna en que esto no se haya hecho; pero he oído resentirse a varios de algunas en que no, y yo quisiera que se tuviera presente al tiempo de aprobar los reglamentos. De consiguiente, yo he hecho esta observación como parte que toca el Reglamento y

⁴³⁹ El primer párrafo del artículo 6 al que se refiere el Senador proponente dice así:

A la solicitud en que se expida la Real autorización ha de acompañarse la lista de los suscriptores que se propusieren formar la compañía, las cartas de pedido de acciones, la escritura social y todos los estatutos y reglamentos que hayan de regir para la administración de la compañía.

⁴⁴⁰ DsC. Senado. Sesión de 18 de diciembre de 1847, núm. 16, págs. 251 y 252.

para que no se olvide en tiempo oportuno, no dudando de que el Gobierno lo practicará así⁴⁴¹ (el subrayado es nuestro).

La respuesta del Ministro de CIOP confirma que se trata de una materia que será desarrollada por el Reglamento:

El Sr. Marqués de Fuentes de Duero acaba de manifestar su parecer en cuanto a los reglamentos; por consiguiente bastará decir a S. S. que el Gobierno lo tendrá presente, y apreciará en su justo valor sus observaciones⁴⁴² (el subrayado es nuestro).

1. Procedimiento de aprobación de las cuentas anuales

En primer lugar, el Reglamento de 1848 determina que las cuentas han de ser formuladas y aprobadas cada año (artículo 1.14: ... *no pudiendo dejar de verificarse en cada año* ... y artículo 34: *(a)nualmente formalizarán las compañías mercantiles por acciones un balance general de su situación* ...).

En segundo lugar, no se define el momento en que hayan de formularse y aprobarse las cuentas anuales, dejando a la escritura de fundación libertad para determinar los momentos (artículo 1.14: *En la escritura de fundación ha de constar (...) las épocas en que hayan de formarse y presentarse los inventarios y balances de la compañía...*).

En cuanto a los pasos o momentos del procedimiento de aprobación de las cuentas, se señalan unos similares al régimen actual, dejando libertad a la escritura de constitución de la sociedad sobre *las formalidades con que hayan de revisarse y aprobarse por la Junta de accionistas* (artículo 1.14):

- Formulación de las cuentas anuales *por los administradores de la compañía bajo su responsabilidad directa y personal* (artículo 34).
- Aprobación de las cuentas anuales, conforme a lo previsto en el artículo 1.14 según se ha señalado anteriormente y al artículo 34: *reconocidos y aprobados en junta general de accionistas*.
- Verificación de las cuentas anuales. Desconocemos la práctica de la auditoría (o institución similar) de aquella época. El Reglamento de 1848 no olvida esta cuestión y la regula de una manera diferente a la actual. En primer lugar, esta verificación se produce después de la aprobación de las cuentas anuales por la Junta de accionistas. Y, en segundo lugar, el Jefe político de la Provincia es quien tiene facultad para realizar esta labor de verificación. En este sentido, establece el artículo 34: *después de reconocidos y aprobados en junta general de accionistas, se remitirán al Jefe político de la provincia, quien dispondrá su comprobación* ...

⁴⁴¹ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 272.

⁴⁴² Ídem.

Debe entenderse que el Jefe político no estaría en condiciones de poder realizar esa comprobación y solicitaría a expertos en la materia que hicieran los correspondientes informes.

2. Contenido de las cuentas anuales

Se encuentra regulado de una manera muy breve en el artículo 34: *anualmente formalizaran las compañías mercantiles por acciones un balance general de su situación en que se comprenderán todas las operaciones practicadas en el año, sus resultados y el estado de su activo y pasivo.*

Aun cuando la terminología no es muy precisa, se puede señalar que las cuentas anuales consistían en un documento denominado “balance general” que constaba de tres partes:

- *Todas las operaciones practicadas en el año.*
- *El estado de su activo y pasivo*, que coincidiría en líneas generales con lo que actualmente conocemos como balance. Y,
- *Sus resultados*, que de alguna manera tendrían que figurar en los dos documentos anteriores (cuenta de pérdidas y ganancias y balance), pero que, dada su importancia, debía constituir una unidad independiente y separada para que fuera aprobada expresamente por los accionistas de la sociedad.

3. Aplicación del resultado. Dividendos.

Los resultados, como se ha dicho en el epígrafe anterior, constituyen una de las tres partes del *balance general de la situación*. Los requisitos para la aplicación de los resultados vienen establecidos en el artículo 35 del Reglamento de 1848.

El primero, es que deben acordarse *necesariamente en junta general de accionistas*. No hay mención a si los administradores deben realizar una propuesta de dicha aplicación. Pero queda claro que el único órgano legitimado para la aplicación del resultado es la junta de accionistas.

El segundo requisito, establece que han de referirse al concreto *balance general de la situación de la compañía y no podrán verificarse sino de los beneficios líquidos y recaudados del mismo balance, previa la deducción de la parte que haya de aplicarse al fondo de reserva*. En consecuencia, las cantidades que figuren en los diversos documentos del balance general de la situación, determinarán la cifra que se puede distribuir como dividendos. Y, además, ha de tenerse en cuenta la situación del *fondo de reserva*.

El concepto de fondo de reserva es similar al actual, si bien, no parece que se diferencien reservas legales, estatutarias, etc. Se trata de una aplicación de parte de los beneficios sociales a aumentar los recursos propios de la compañía conforme a la previsión del artículo 1.12: en la escritura de constitución debe figurar *la formación del fondo de reserva con la parte que usualmente ha de separarse de los beneficios de la compañía para constituirlo hasta que componga un 10 por ciento a lo menos del capital*

social. Por tanto, este “fondo de reserva” puede ser superior al 10 % del capital social y el ritmo de dotación lo determinará cada sociedad.

Este “fondo de reserva” es de carácter indisponible y, en consecuencia, no puede ser distribuido entre los accionistas. Se utilizará para compensar las pérdidas de la sociedad, según lo establecido en el artículo 36: *cuando del balance resultase haberse disminuido el fondo de reserva se aplicará para completarlo toda la parte de beneficios que fuere necesaria, reduciéndose el dividendo para los accionistas a la que hubiere sobrante*.

4. Depósito y publicidad

El aspecto más importante relativo a la publicidad es el conocimiento por parte del Jefe político y del Gobierno de las cuentas anuales, comentado en los epígrafes anteriores.

Respecto a los terceros, el depósito y la publicidad de las cuentas anuales es regulado en el artículo 34, que establece, en relación a las cuentas anuales, que (...) *se imprimirán y publicarán en el Boletín oficial de la provincia, comunicándose asimismo al Tribunal de Comercio del territorio*.

Son, por tanto, dos requisitos. En primer lugar, la impresión del *balance general de la situación* para que se pueda distribuir. Y, en segundo lugar, una comunicación al T. de c. en el que se encuentre inscrita la sociedad. Debe entenderse que esta *comunicación* no se reduce a la mera noticia de la aprobación de las cuentas, sino que se enviaría al menos uno de los ejemplares impresos por obligación legal.

5. Adaptación de las sociedades a la Ley de 1848

Por último, se ha de hacer una breve mención a las cuentas anuales de las sociedades que pretendieran la adaptación a la Ley de 1848. La solicitud de la autorización Real por estas compañías debería concederse si cumplían los requisitos exigidos por el T. de c. o el CCom 1829 para su constitución⁴⁴³.

Pero el artículo 42 de Reglamento de 1848 añade otro requisito más respecto a la situación patrimonial en que se encuentre la sociedad que impetra la Real autorización, basado en la presentación del *balance general de la situación* de la compañía en el momento de solicitar la Real autorización. El citado artículo prevé que si la sociedad decide, dentro del plazo legal, solicitar la autorización Real, los administradores han de presentar el acuerdo, los estatutos y los reglamentos (lo cual no supone sino una repetición de lo previsto por la Ley de 1848) al Jefe político de la provincia, pero añade que deben formarse *dentro del término improrrogable de quince días el balance general que demuestre la situación de la compañía y la calificación de su activo, y comprobada que sea la exactitud de aquel documento se remitirá el expediente al Gobierno para la resolución conveniente*

⁴⁴³ Establece el artículo 19 de la Ley que *la autorización Real se otorgará a todas las compañías que hubieren cumplido las condiciones con que fueron aprobadas por los tribunales de Comercio, y a las comanditarias por acciones que hubieren sido establecidas con arreglo a las disposiciones del Código de comercio*.

No bastaba, por tanto, que las sociedades que pretendían su adaptación a la Ley de 1848 acreditaran que cumplían los requisitos impuestos en su constitución, sino que debían probar también el estado de su patrimonio, que tendría que ser acorde con las actividades económicas que se había propuesto llevar a cabo. Además, el Jefe político, con carácter previo a su envío al Gobierno, debía comprobar la realidad de las cuentas.

D) REGLAMENTOS Y ESTATUTOS. APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN

Los reglamentos y estatutos sociales son regulados, con cierta extensión, por la Ley de 1848. El régimen se refiere, sobre todo, a las formalidades de aprobación y modificación, más que a su contenido, que es objeto de regulación más detallada en el Reglamento de 1848.

La idea básica de esta materia es que la aprobación y modificación de los reglamentos y estatutos sociales deben ser siempre aprobadas por el Gobierno. Además, éste tiene la facultad de control y supervisión de lo establecido en los reglamentos y estatutos. Tratándose de un punto de tanta importancia para el legislador, opta por regularlo en la Ley de 1848, dejando al Gobierno el desarrollo o ejecución del mismo.

Los artículos 6 y 9 de la Ley de 1848 establecen la necesidad de autorización legal o gubernativa respecto a los estatutos y reglamentos sociales, aprobados previamente por los accionistas. Su contenido –pilar básico de la regulación de la Ley– se desarrolla en los artículos 11, 12, 16, 21, 22 y 26 del Reglamento.

Coherentemente con este planteamiento, será necesaria la autorización del Gobierno para cualquier modificación de los reglamentos o estatutos sociales. Esta materia es también objeto de regulación en la Ley en su artículo 11: *toda alteración o reforma en los estatutos y reglamentos que no obtenga la aprobación del Gobierno, será ilegal, y anulará por sí la autorización en virtud de la cual exista la compañía*. Este artículo no tiene desarrollo reglamentario.

En relación a posibles acuerdos entre socios, tanto anteriores como posteriores a la constitución de la sociedad, establece el artículo 8 del Reglamento de 1848 que, conforme a *lo prescrito en el artículo 287 del Código de comercio, se tendrá por nulo todo pacto que establecieren los fundadores de las compañías o acordaren los accionistas, sin que conste en la escritura de fundación o en los reglamentos que han de someterse a la aprobación del Gobierno*. Esta previsión reglamentaria no se recoge en la Ley de 1848 porque se trata de una transcripción del contenido del artículo 287 del CCom 1829⁴⁴⁴.

La vigilancia y el control del cumplimiento de los reglamentos y estatutos sociales es competencia del Gobierno y del Jefe político del domicilio social (artículo

⁴⁴⁴ El artículo 287 CCom 1829 disponía lo siguiente:

Los socios no pueden hacer pactos algunos reservados, sino que todos han de constar en la escritura social.

Este artículo se complementaba con el 288, que decía así:

Los socios no pueden oponer contra el contenido de la escritura de sociedad ningún documento privado, ni la prueba testimonial.

30 del Reglamento de 1848). Disposición de enorme transcendencia y congruente con la necesidad de aprobación gubernamental de los reglamentos y estatutos sociales. Su rango reglamentario trae causa del artículo 17 de la Ley, que es la pieza clave de esta materia: *el Gobierno sin gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías ejercerá la inspección que conceptúe necesaria para afianzar la observancia estricta y constante de la presente ley.*

El contenido de los reglamentos y estatutos sociales se encuentra regulado, fundamentalmente, en el artículo 1 del Reglamento de 1848, que establece el contenido mínimo de la escritura de fundación de la sociedad.

El último punto de estudio sobre el tratamiento legal o reglamentario de los estatutos y reglamentos sociales ha de referirse a la regularización de las sociedades ya existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley de 1848 y del Reglamento de 1848. Se trata de una cuestión delicada, pues dichos documentos habían sido aprobados por los socios y autorizados por el T. de c. correspondiente. Los criterios de este órgano para la autorización de las sociedades por acciones se fueron alejando de lo previsto en el CCom 1829 y, como se recoge en numerosas intervenciones de los debates parlamentarios, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, fue una de las causas de los abusos y fraudes de las sociedades por acciones hasta 1848.

Por este motivo, la Ley de 1848 regula la adaptación de las sociedades anteriores a su entrada en vigor, destacando el artículo 18, que establece que *las compañías por acciones existentes en la actualidad sin autorización Real, la solicitarán dentro de dos meses, contados desde la publicación de esta Ley, presentando al efecto sus escrituras, estatutos y reglamentos. Dentro del término de cincuenta días siguientes a esta publicación los gerentes o directores convocarán a junta general de accionistas para que resuelvan si se ha de pedir o no la Real autorización, la cual se impetrará solamente en el caso de que la mayoría de los mismos accionistas que se computará con arreglo a sus estatutos y reglamentos, acuerde la continuación de la compañía.*

Disposición desarrollada en el artículo 42 del Reglamento de 1848: *los administradores de las compañías que acordaren solicitar la Real autorización, lo verificarán dentro del plazo legal, dirigiendo al Gobierno la correspondiente exposición, que acompañarán certificación de aquel acuerdo y sus estatutos y reglamentos.*

En caso de que los administradores no solicitaran la Real autorización dentro del plazo señalado, *se tendrán por disueltas las sociedades, poniéndose en liquidación en la forma que prescriban sus estatutos y reglamentos* (artículo 20 de la Ley de 1848).

J) DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Este tema se trata sucintamente en la Ley de 1848. En concreto, sólo aparece una referencia en el artículo 20, que regula la adaptación de las sociedades por acciones a la Ley de 1848. El Reglamento de 1848, por su parte, hace mención a la disolución y liquidación en cinco artículos, dos de los cuales establecen sendas causas de disolución obligatoria y los otros tres se refieren a la adaptación de las sociedades a la Ley de

1848. No se regula, por tanto, ningún régimen en cuanto al procedimiento de disolución y liquidación.

El artículo 20 de la Ley de 1848 se refiere a que las *compañías por acciones que dentro del plazo ya señalado no solicitaren la Real autorización se tendrán por disueltas, poniéndose en liquidación en la forma que prescriban sus estatutos y reglamentos*. Dado que el CCom 1829 establece un marco regulatorio general para esta materia de disolución y liquidación de sociedades por acciones, la regulación previa a la Ley de 1848 se encontraba no sólo en el Código, sino también en los pactos voluntarios entre los socios concretados en los reglamentos y estatutos de cada sociedad.

El artículo 1 del Reglamento de 1848, que recoge el contenido mínimo de la escritura de fundación de la sociedad, establece que debe expresar *la porción de capital cuya pérdida ha de inducir la disolución necesaria de la sociedad* (apartado 13). El desequilibrio entre patrimonio y capital social es causa de la disolución obligatoria de la sociedad. Como ya se ha comentado en otro lugar, ni la Ley de 1848 ni el Reglamento de 1848 establecen el umbral de este desequilibrio desencadenante de la disolución forzosa. Serán los estatutos y reglamentos de cada sociedad los que lo hagan.

En las sociedades comanditarias por acciones, en caso de muerte o inhabilitación de los *socios gerentes, se tendrá por disuelta la compañía, y se procederá a su liquidación* (artículo 28 del Reglamento de 1848). Se trata de otra causa de disolución propia de la sociedad en comandita por acciones.

Los tres restantes artículos del Reglamento de 1848 sobre esta materia, se refieren a las sociedades que deben adaptarse a la Ley. Los administradores, una vez publicada la Ley de 1848, deben convocar una junta dentro del plazo fijado, para que adopte el acuerdo de *declarar la compañía en liquidación o bien para impetrar la Real autorización que la habilite para continuar en sus operaciones* (artículo 39). En consecuencia, la sociedad debe disolverse obligatoriamente si el acuerdo es contrario a la solicitud de la autorización Real.

En caso de que en el plazo establecido al efecto, las sociedades no hayan solicitado la Real autorización (bien porque no se ha celebrado la junta de accionistas, bien porque ésta se ha celebrado y ha acordado no solicitar la autorización Real), *se declararán disueltas todas las compañías por acciones. (...) La disolución de estas compañías se publicará en la Gaceta del Gobierno y en el Boletín Oficial de la provincia respectiva, dándose conocimiento de ello al tribunal de Comercio a quien corresponda* (artículo 43). Este artículo establece el requisito de publicidad relativo al anuncio de la disolución y liquidación en la GdM y en el Boletín Oficial de la provincia correspondiente.

Por último, el artículo 44 del Reglamento de 1848 recoge algunos detalles del procedimiento de liquidación de las sociedades que no hubieran solicitado la autorización Real. *En la liquidación de las compañías que quedaren disueltas, sea por acuerdo de los accionistas, o bien por no haber impetrado y obtenido la Real autorización, se procederá con arreglo a las disposiciones del Código de comercio*. Por tanto, remisión a lo dispuesto por el CCom 1829, que va seguida de la imposición a los liquidadores de *dar cuenta mensualmente al Jefe político de la provincia del estado en*

que se hallare la liquidación y acreditar asimismo a su conclusión haber quedado canceladas todas las resultas de la misma liquidación.

Se consagran dos obligaciones fundamentales de los liquidadores. La primera, “cancelar todas las resultas” dejando el patrimonio líquido. Y, la segunda, informar al Jefe político de la marcha de la liquidación, rindiendo cuentas con carácter mensual hasta la finalización de las operaciones liquidatorias.

Respecto a la obligación de los liquidadores de rendir cuentas mensualmente, el Marqués de Montevirgen, en la sesión de 24 de diciembre de 1847 en el Senado citada líneas más arriba, propuso que, si bien no le parecía adecuado fijar un periodo máximo de liquidación como proponía el Marqués de Fuentes de Duero, pensaba que era necesaria una inspección mensual o trimestral del estado de liquidación por parte del Gobierno⁴⁴⁵. A esta propuesta respondió el Ministro de CIOP, D. Juan Bravo Murillo, en los siguientes términos:

*Estoy enteramente de acuerdo con las insinuaciones que acaba de hacer el Sr. Marqués de Montevirgen; pero me parece que todo lo que S. S. propone no debe ser objeto de la Ley, y creo también que deberá tener lugar en el Reglamento; y me parece, vuelvo a decir, que será muy conveniente todo lo que S. S. propone, prescindiendo de si el plazo será un mes, dos o tres.*⁴⁴⁶ (el subrayado es nuestro)

Termina el citado artículo 44 del Reglamento de 1848 estableciendo que la inspección de la liquidación por los Jefes políticos *no obstará para que los interesados ejerciten judicialmente los derechos que les competan sobre los haberes de la compañía y para que su liquidación se haga legalmente*. Esta remisión genérica a la legalidad de la liquidación incluye no sólo lo dispuesto en el CCom 1829, sino también en lo previsto en los estatutos y reglamentos de cada sociedad.

K) LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES

Es este último apartado, se comenta brevemente la regulación de la emisión de deuda (en sentido amplio) por parte de las sociedades por acciones. En los debates parlamentarios sobre el PL 1848 se encuentran varias intervenciones denunciando fraudes y abusos de algunas sociedades que participaron en operaciones especulativas de alto riesgo. Se trataba, por tanto, de un tema delicado que, por su importancia, iba a ser objeto de regulación legal y no reglamentaria. La única mención se hace, de modo categórico, en el artículo 15 de la Ley de 1848. El Reglamento de 1848 no trata de esta materia.

Se ha de recordar, para situar la cuestión en su preciso contexto histórico, que en la época de los debates parlamentarios estaba en vigor el RD de 10 de septiembre de 1831 que crea la Bolsa de Madrid, pero aún no se había aprobado la LB, cuyo proyecto se menciona durante los debates parlamentarios de nuestra Ley de 1848. Ante este vacío legal y, sobre todo, ante el reducido número de Bancos y la necesidad de financiar proyectos empresariales, las sociedades por acciones podían actuar como entidades financieras captando y prestando dinero. Incluso las acciones al portador, que cotizaban

⁴⁴⁵ DsC. Senado. Sesión del 24 de diciembre de 1847, núm 20, pág. 302.

⁴⁴⁶ Ídem.

en bolsa, ofrecían la posibilidad de equipararse a billetes al portador en la medida en que se podían transmitir fácilmente y recuperar el dinero entregado por ellas. Esto se deduce de algunas intervenciones en los debates parlamentarios, entre los que podemos destacar la del Senador Sr. Peña Aguayo, en la sesión del 23 de diciembre de 1847:

...principian los accionistas a convertir sus acciones en dinero, a cualquiera hora que quieran, y por consiguiente tiene la Sociedad unos billetes de Banco iguales a los del Banco de San Fernando, que si bien no se llamarán así, sino acciones de tal o cual compañía, en el fondo será un papel que represente un capital que sirva para todas las transacciones y todos los cambios, y por consecuencia tiene la Sociedad un papel que está aprobado por el artículo 15.⁴⁴⁷

Por estos motivos, el artículo 15 de la Ley de 1848 establece que *ninguna compañía podrá emitir, a no hallarse autorizada por la ley, billetes, pagarés, abonarés, ni documento alguno al portador: los infractores quedarán sujetos al pago de una multa que no podrá exceder de 50,000 reales.*

Esta disposición, además de lo comentado anteriormente, refleja, en nuestra opinión, el criterio seguido por el Legislador en cuanto a las fuentes de financiación de las compañías por acciones. Este criterio consiste en el fomento y regulación de la financiación mediante fondos propios, fundamentalmente por la aportación de capital. Recuérdesse, como se ha dicho en otros lugares, que la Ley de 1848 trata de proteger los intereses y derechos de los accionistas dejando en un segundo plano a los acreedores. Éstos podrían ejercitar sus derechos y acciones judiciales conforme al derecho común.

Por lo tanto, cabría decir que la mente del Legislador de la Ley de 1848 es que las sociedades por acciones se financiaran fundamentalmente a través de las aportaciones al capital social. La captación de recursos ajenos, por el principio de proporción objeto social respecto al capital social, era algo extraordinario y que, en su caso, debía relacionarse con los Bancos legalmente constituidos. Esta situación cambió con el “Bienio Progresista” de 1855-1856 en el que se promulgaron la LB, LSCr y LSCOP, que estimularon el endeudamiento de las sociedades.

IV. REMISIONES AL REGLAMENTO DE 1848 DURANTE LOS DEBATES EN EL SENADO

Durante los debates sobre el PL 1848 en el Senado en las sesiones de 22, 23 y 24 de diciembre de 1847, se produjeron cuantiosas referencias al desarrollo y ejecución de determinadas materias por medio de un Reglamento posterior a la Ley.

Estas remisiones obedecen, fundamentalmente, a dos causas. En primer lugar, la duda o incertidumbre del Senador interviniente acerca de si su propuesta formaba parte de la materia objeto de regulación legal o correspondía a la potestad reglamentaria del Gobierno. No son los más frecuentes.

En segundo lugar, la urgencia para aprobar el texto de la Ley de 1848. Son las más frecuentes y las que, de alguna manera, condicionaron, en nuestra opinión, la redacción final del texto legal (y, en consecuencia del texto reglamentario). Pueden

⁴⁴⁷ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 286.

destacarse tres factores que generaron este consenso unánime de urgencia y apremio para aprobar los textos normativos:

- El caótico estado en el que se encontraban las sociedades por acciones en el periodo anterior a los debates parlamentarios, que propició abusos y fraudes de gran dimensión en relación a los afectados y a la imagen de las empresas españolas.
- El retraso de la tramitación parlamentaria del PL 1848 por cambio de Legislatura. Como se expone en el capítulo sobre la formación y tramitación de la Ley de 1848, poco después de producirse el debate sobre el PL 1848 en el Congreso de los Diputados durante los días 19, 20 y 21 de abril de 1847, la Reina suspende las Cortes Generales y se convocan elecciones de Diputados Provinciales para los días 18, 19 y 20 de julio⁴⁴⁸. Por ello, una vez aprobado el PL 1848 por el Congreso, al terminar abruptamente la Legislatura, se genera la incertidumbre sobre si se asumirá por el nuevo Parlamento el texto o, en caso negativo, habrá que empezar de nuevo la tramitación, con un Gobierno distinto al que existía cuando se debatió en el Congreso. Las nuevas Cortes, debido a la urgencia por aprobar la nueva regulación, asumen el texto del PL 1848 aprobado por el Congreso, que se debate los días 22, 23 y 24 de diciembre de 1847 en el Senado.
- La decisión del Senado, en diciembre de 1847, de modificar el PL 1848 aprobado por el Congreso suponía la necesidad de constituir una CMC-S que elaborara un Dictamen de consenso. Conforme al procedimiento regulador de la tramitación parlamentaria de la época, cualquier modificación de dicho Dictamen en una u otra Cámara suponía el rechazo del texto y, por tanto, empezar de nuevo todo el proceso. Debido a la urgencia para su aprobación y ante la posibilidad de que no se aprobara el texto de la CMC-S, algunas materias conflictivas se consensuaron haciendo referencia al Reglamento de 1848 que aprobaría el Gobierno en breve plazo.

Por otro lado, a tenor del contenido de algunas de las intervenciones de los Senadores y Ministros del Gobierno, se puede presumir que había bastante relación e intercambio de información entre algunos miembros del Gobierno, la CS y la CMC-S, lo cual lleva a pensar que es posible que durante los debates de final de diciembre de 1847 en el Senado ya se habría planteado –o, incluso, acordado– las materias y los detalles que desarrollaría el Reglamento de 1848. Desde luego esto debió ser así durante los trabajos de la CMC-S y los debates de 17 de enero de 1848 en ambas Cámaras legislativas, dado que el Reglamento de 1848 se aprobó tres semanas después de la publicación de la Ley de 1848.

Con este marco histórico y parlamentario, se comprende mejor la importancia del contenido del Reglamento de 1848. Por este motivo, parece de interés recoger una reducida muestra de las abundantes intervenciones de los Senadores durante los debates sobre el PL 1848, que mostrarán con mayor detalle lo expuesto anteriormente⁴⁴⁹. En el Congreso de los Diputados se realizan algunas alusiones a esta problemática, pero son

⁴⁴⁸ RD de 5 de mayo de 1847 (GdM de 6 de mayo de 1847, núm. 4617).

⁴⁴⁹ Como se acaba de exponer, son varias decenas las referencias a la urgencia para aprobar la Ley de 1848, pero en aras de la brevedad, a continuación se transcriben sólo las que ha parecido más relevantes.

muy escasas y, además, no se plantean de una manera tan apremiante como en la Cámara Baja. Por este motivo, sólo se citan algunas intervenciones en el Senado.

La primera referencia ha de hacerse al Preámbulo al Dictamen de la CS⁴⁵⁰ que, por su importancia, es recogido en la primera intervención que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1847. El Senador interviniente es el Sr. Armendáriz. Estas fueron sus palabras:

... dice la Comisión que ha aceptado la totalidad del proyecto según viene del Congreso (Leyendo) “no solo por haber considerado que la promulgación de esta Ley es de reconocida urgencia, sino también porque en las conferencias que la Comisión ha tenido con el Gobierno, se ha convencido de que en el Reglamento que habrá de expedirse para la ejecución de la Ley se dictarán las disposiciones que están en las facultades constitucionales del Poder ejecutivo, para que la acción tutelar y la inspección que le compete ejercer sobre la creación y régimen de las compañías por acciones, sea tan eficaz y directa como requiere un género de contratación que estando fuera de las condiciones ordinarias que se observan en las demás Sociedades mercantiles, se debe considerar ligado íntimamente con el orden público del Estado”⁴⁵¹ (el subrayado es nuestro).

En la contestación a esta intervención, efectuada por el entonces Ministro de CIOP, D. Juan Bravo Murillo, se pueden destacar las siguientes referencias:

- *El Senado conoce, como todos los españoles, que el asunto de que se trata en esta ley es de grande importancia y urgencia. (...) El Gobierno de S. M. conoció bastante esta necesidad, y presentó en la anterior legislatura al otro Cuerpo Colegislador el proyecto que se discute. Este proyecto fue modificado, aunque no sustancialmente, y al cabo obtuvo el voto de aquel Cuerpo.⁴⁵²*
- *En todas las leyes han de tenerse en consideración la conveniencia, la bondad, la necesidad y la urgencia de ellas. En esta de que tratamos, si bien ha de atenderse a la bondad intrínseca, si bien debemos entrar en la consideración de si es justa, conveniente y necesaria, hay sin embargo, especialísimamente otra consideración muy importante y es la de la urgencia; (...) Creo, pues, que es una circunstancia esencialísima, y que debe atenderse a la necesidad y a la urgencia de la Ley, y que si algo hay que sacrificar, debe hacerse atendiendo a la urgencia, porque esto es una necesidad⁴⁵³ (el subrayado es nuestro).*

Más adelante, el Marqués de Fuentes de Duero presentó una enmienda al artículo 4 del Dictamen de la CS, pero no tenía claro si su propuesta debía afectar al texto de la Ley o ser recogida en el Reglamento:

⁴⁵⁰ DsC. Senado. Sesión del 18 de diciembre de 1847, Apéndice Segundo al núm. 16, pág. 251.

⁴⁵¹ DsC. Senado. Sesión del 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 264.

⁴⁵² Ídem, pág. 265.

⁴⁵³ Ídem, pág. 266.

Pero sin embargo, yo haré algunas observaciones que ahora me ocurren en este artículo, y quizá me ocurran en algunos otros, para que se me diga si tal vez estas observaciones están explícitamente contenidas en la ley, y entonces estaré más satisfecho para votarla, o porque se me ofrezca por el Gobierno el tenerlas presentes al aprobar los reglamentos de estas sociedades, y confiado en que he visto que el Gobierno con tanta facilidad se ha prestado a hacer ya aclaraciones que han sido muy convenientes⁴⁵⁴ (el subrayado es nuestro).

El Marqués de Vallgornera, en una intervención posterior, al plantearse una enmienda al artículo 11 del PL 1848, realizó la siguiente declaración, de gran interés para el tema que se está comentando:

*El Sr. Ministro, haciéndose cargo de ello, ha manifestado que a extender los reglamentos, y usando de las facultades constitucionales que tiene la Corona para la ejecución de la Ley, pondría en claro el artículo, y por lo mismo no tengo inconveniente en ceder en esta parte, y por eso no he presentado una enmienda, porque ciertamente no se puede pedir más*⁴⁵⁵ (el subrayado es nuestro).

En esa misma sesión, dijo también el Marqués de Vallgornera:

*No quiero abusar de la atención y del tiempo del Senado, ni detener el curso de una ley cuya importancia y urgencia reconozco; pero he tenido que estudiar esta materia detenidamente*⁴⁵⁶ (el subrayado es nuestro).

En la sesión del día siguiente, el 23 de diciembre de 1847, también aparecen varias referencias a este tema. Se destaca solamente la siguiente intervención del Ministro de CIOP:

*Pero sin entrar ahora a prejuzgar esta cuestión, porque el Gobierno de S. M. al formular el reglamento para la ejecución de esta Ley, dictará las medidas oportunas para que esos y otros abusos no se cometan, y si se cometen no queden impunes*⁴⁵⁷ (el subrayado es nuestro).

Esta intervención es especialmente relevante en la medida en que su autor es el Ministro de CIOP, que se encargará de la redacción del Reglamento de 1848 (su nombre figura en la rúbrica del mismo) y corrobora lo que se comentaba más arriba en relación a que durante los debates en el Senado ya se habían acordado o pactado por el Gobierno y la CS qué materias se recogerían en el texto del Reglamento de 1848.

En la última sesión de los debates en el Senado, el día de Nochebuena de 1847, el Ministro de CIOP, Sr. Bravo Murillo, responde a una propuesta del Senador Sr. Pérez de Seoane en la que proponía una modificación el artículo 17 del Dictamen de la CS. En su respuesta, el Sr. Ministro recuerda los criterios generales para diferenciar materias de la Ley y materias del Reglamento, aplicables al caso concreto:

⁴⁵⁴ Ídem, pág. 271.

⁴⁵⁵ Ídem.

⁴⁵⁶ Ídem, pág. 274.

⁴⁵⁷ Ídem, pág. 287.

La segunda es porque las disposiciones contenidas en esa enmienda son puramente reglamentarias. Dice que el Gobierno puede nombrar los visitadores y presidentes de las Juntas; dice que el Gobierno debería tener la facultad de convocar a junta general de accionistas; quiere que se designe una persona que presida esta Junta, y hasta las personas que pueden ser; que pueden serlo el jefe político, un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, o un individuo del Tribunal de comercio de Madrid; y me parece, señores, que si esto no corresponde a los reglamentos, no hay nada que pueda corresponderles. Me parece que la ley no debe descender a pormenores personales; al reglamento toca exponer las medidas convenientes para ejecutar aquella base, que está en la ley. Pero si pudiera descender a este pormenor, sería decir: el Gobierno nombrará un individuo del Supremo Tribunal de Justicia, un individuo del Tribunal de comercio; y esto, señores, sería ligar las manos al Gobierno, entorpecer sus facultades y cercenarle derechos consignados hasta por la Constitución, la cual le concede la facultad de dictar los reglamentos convenientes, con arreglo a las leyes. Por estas razones se opone al Gobierno a que se admita la enmienda del Sr. Seoane⁴⁵⁸ (el subrayado es nuestro).

Más adelante, el Marqués de Fuentes de Duero, en relación a la propuesta de redacción del artículo 18 del Dictamen de la CS, hizo una reflexión, entre otras cuestiones, sobre el dilema de presentar más enmiendas y retrasar la aprobación de la Ley o no presentarlas en aras a la urgencia para su publicación. También aborda alguna cuestión sobre la remisión de materias al Reglamento:

Yo en esta cuestión no estoy por las enmiendas, porque creo que atrasan mucho, y porque todavía no he visto que se ha presentado ninguna hoy, que no tenga conexión con los reglamentos, y en este caso el Gobierno hará lo que le parezca oportuno después; por consiguiente, entiendo que basta hacer las observaciones conducentes cuando se trata de cosas relativas al reglamento; réstame, pues, marcar las indicaciones convenientes que tengan relación con el espíritu de la Ley. Yo bien sé que no se va a hacer ahora una ley completa, sino que se hará una ley que sea mejor que la vigente; porque por lo demás ¿a quién le ocurre que los individuos de la Comisión, tan ilustrados como lo son todos, no habrían hecho otra cosas? ¿Y por qué no lo han hecho, señores? Es muy sencillo; porque no quieren entorpecer este asunto; porque nada es mejor ya que la prontitud; porque hay una porción de cuestiones pendientes, que se concluirán tan luego como se publique esta Ley; y así que ayer me sucedió con la enmienda del Sr. Marqués de Vallgornera, que a mí me hacía mucha fuerza, y al mismo tiempo me hacía mucha fuerza también la prontitud de la publicación de esta Ley; no sabía cuál de las dos cosas eran más convenientes; y al votar dudaba, señores, a cuál de los dos extremos inclinarme. Pues bien, entiendo que aquí todo lo que sea prontitud es lo mejor⁴⁵⁹ (el subrayado es nuestro).

La intervención del Marqués de Fuentes de Duero fue contestada por el Presidente de la Comisión, D. Pedro Sáinz de Andino. En ella realiza un breve resumen cronológico de la historia del PL 1848 y termina haciendo una interesante referencia a la urgencia para aprobarlo y al consenso o acuerdo de desarrollar determinadas materias en la norma reglamentaria:

⁴⁵⁸ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 295.

⁴⁵⁹ Ídem, pág. 296.

El Sr. Senador [se refiere al Marqués de Fuentes de Duero] comenzó su discurso calificando el proyecto de ley de imperfecto; pero salvando la responsabilidad a la Comisión, porque ha creído que esta había tenido presente la urgencia. El proyecto de que se trata era un proyecto de ley que el Gobierno se dignó encargar al Consejo Real, y que estuvo presidiendo varias de sus sesiones un Ministro de la Corona. Este proyecto después lo recibió el Gobierno e hizo en él las enmiendas que le pareció convenientes; después pasó al Congreso y lo admitió la Comisión como bueno, no creyendo que debía hacer enmienda alguna en él, porque consideró la urgencia de la Ley, y porque creía que las faltas que pudiesen encontrarse en el proyecto de ley se referían más bien a las medidas de ejecución que podrían tener lugar en el Reglamento, puesto que sobre todas las leyes tiene el Gobierno esta prerrogativa, y mucho más en una cuestión gubernamental para que sea ley y pueda cumplirse como debe⁴⁶⁰ (el subrayado es nuestro).

Después de las modificaciones que se realizaron en el Senado al PL 1848 a finales de diciembre de 1847, había que aprobar el Dictamen de la CMC-S. La aprobación debía producirse en ambos Cuerpos Colegisladores y cualquier modificación suponía el rechazo del PL 1848 y el comienzo de la tramitación parlamentaria de uno nuevo.

En estas circunstancias, en la sesión de 17 de enero de 1848, el Senador Sr. Moreno presentó una enmienda porque el Senado había aprobado en diciembre de 1847 una enmienda suya de adición de un nuevo artículo entre el 20 y el 21 del PL 1848, pero la CMC-S lo rechazó. Su propuesta consistía en que se volviera a introducir ese artículo. La contestación del Ministro de CIOP, Sr. Bravo Murillo, refutó la necesidad de incluir de nuevo ese artículo y terminó diciendo que:

con las manifestaciones que he tenido el honor de dirigir al Senado, quedará completamente satisfecho el Sr. Moreno de que no hay necesidad del artículo o adición que ha manifestado, como también de que debe aprobarse cuanto antes el dictamen de la Comisión, para que pueda ser publicado este proyecto de ley con la urgencia posible, pues no debe ocultarse a los Sres. Senadores toda su importancia⁴⁶¹ (el subrayado es nuestro).

⁴⁶⁰ Ídem, pág. 299.

⁴⁶¹ DsC. Senado. Sesión de 17 de enero de 1848, núm. 23, pág. 335.

CAPÍTULO VI CONCEPTO DE COMPAÑÍAS MERCANTILES POR ACCIONES

En este capítulo se estudia el concepto de compañías mercantiles por acciones. Se trata de analizar y clarificar, en la medida de lo posible, su contorno y contenido pues, como se verá, la imprecisión de esta noción dificulta su correcta comprensión.

En el primer epígrafe, se abordan unas cuestiones previas de carácter relevante, como son la utilización de los términos “compañía” o “sociedad”; las relaciones entre tres conceptos: compañías mercantiles por acciones, compañías anónimas y compañías comanditarias por acciones y, por último, la falta de acuerdo en relación al origen de la sociedad anónima.

El segundo epígrafe, se refiere al concepto general de compañía mercantil, sobre todo en el CCom 1829. Para ello, es necesario hacer una referencia al proceso de segregación conceptual de la compañía mercantil respecto de la sociedad civil.

Y, por último, en el tercer epígrafe, se estudia la noción específica de compañías mercantiles por acciones en el CCom 1829 y en nuestra Ley de 1848, terminando con un comentario a una intervención de D. Pedro Sáinz de Andino en el Senado el 23 de diciembre de 1847.

I. CUESTIONES PREVIAS

A) CUESTIÓN TERMINOLÓGICA: ¿“COMPAÑÍAS” O “SOCIEDADES”?

Actualmente la terminología que utilizan nuestros textos legales, así como jurisprudenciales y Doctrinales, es la de “sociedades”: sociedades de capital, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, derecho de sociedades, etc. Lo mismo ocurre en otros países de nuestro entorno. En cambio, en los países anglosajones, como Reino Unido, se utiliza la palabra “compañía” (*Company Law, Companies Act*) o “corporación” (*Corporate Law*) en Estados Unidos.

Ambos términos proceden del latín. “Sociedad” deriva de *societas* que significa compañerismo, asociación, unión, de *socius*, aliado, compañero, que, a su vez, provienen del verbo *sequor*, seguir.

“Compañía”, como se recoge en la Enciclopedia de ARRAZOLA⁴⁶², proviene de “*cum-par*”, *el igual con otro, pues la compañía iguala entre sí a los socios o compañeros. Compónese la voz “cum-par”, de las simples “par”, igual y la comunitiva “cum”, convertida en con, significando reunidas, reunión o conjunto de cosas o personas iguales. Y ciertamente la compañía envuelve siempre la*

⁴⁶² ARRAZOLA, L. (Coord.) (1858): *Enciclopedia española de Derecho y Administración o Nuevo Teatro Universal de la Legislación de España e Indias*, tomo X, Madrid, pág. 773.

idea cardinal de igualdad, ora en clase, ora en cualidades, en sentimientos, en derechos, en fines, etc.

Llama la atención que en la época del CCom 1829 y de la Ley de 1848, el término que con más frecuencia se utiliza en España es “compañía”. Se ha producido, por tanto, una evolución desde ese periodo a nuestros días. El término “compañía” acabará desapareciendo del uso y será reemplazado por “sociedad”.

No es preciso detenerse en este interesante tema terminológico e histórico sobre el que existe una interesante aportación de PETIT⁴⁶³. Simplemente queda apuntado, que el CCom 1829 utiliza casi siempre la palabra “compañía”. La Ley de 1848 también utiliza, fundamentalmente, esta palabra. El Reglamento de 1848 utiliza en su título la palabra “compañía”, pero emplea en muchas ocasiones a lo largo de su articulado el término “sociedad” junto al de “compañía”.

En los debates parlamentarios para la aprobación de la Ley de 1848 se utilizan ambas palabras, pero es más frecuente y habitual “compañía”. En los textos de los diferentes PL 1848, la utilización no es uniforme. Así, en el presentado por el Gobierno el 26 de febrero de 1847⁴⁶⁴ el título se refiere a las “sociedades” anónimas; su articulado emplea indistintamente ambas palabras. El Dictamen del Congreso de los Diputados de 16 de abril de 1847⁴⁶⁵ utiliza casi exclusivamente el término “compañía”. El Dictamen del Senado de 14 de diciembre de 1847⁴⁶⁶ hace referencia en su título a las “sociedades” anónimas, aunque en el articulado se emplea fundamentalmente la palabra “compañías”. El PL 1848 modificado por el Senado el 24 de diciembre de 1847⁴⁶⁷ rotula su título usando la expresión “sociedades” mercantiles por acciones, aunque luego emplee, fundamentalmente, el término “compañías”. El Dictamen de la CMC-S⁴⁶⁸ vuelve a referirse a las “sociedades” mercantiles por acciones, aunque en el texto se utilice “compañías”.

¿Qué conclusiones se pueden extraer de lo que se acaba de comentar? Cabe señalar las siguientes. El CCom 1829 emplea mayoritariamente la palabra “compañías”. La terminología utilizada por la Ley de 1848 es la de “compañías”. El Reglamento en su título se refiere a esta palabra, aunque en su articulado utiliza indistintamente “sociedad” y “compañía”. En los debates, los parlamentarios emplean con más frecuencia el término “compañía”. Y, por último, en los sucesivos títulos de los Dictámenes sobre el PL 1848, el Congreso tiende a utilizar “compañía” y, el Senado, “sociedad”.

⁴⁶³ En su trabajo PETIT, C. (2009): “El anonimato de la sociedad mercantil ...”, en LEÓN SANZ, F. J. (dir.) y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, S. Y PUY FERNÁNDEZ, G. (coord.) *Tendencias actuales...*, págs. 83 – 85. En esta colaboración estudia la influencia de la terminología francesa anterior hasta nuestro CCom 1829, así como la utilización de *sociedad* y *compañía* por el Derecho civil y el Derecho mercantil español hasta la primera Codificación.

⁴⁶⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847, Apéndice Segundo al núm. 46, págs. 653 y 654.

⁴⁶⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847, Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393. Recogido también en la GdM de 19 de abril de 1847, núm. 4600.

⁴⁶⁶ DsC. Senado. Sesión de 18 de diciembre de 1847, Apéndice Segundo al núm. 16, págs. 251 y 252.

⁴⁶⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 24 de diciembre de 1847. Apéndice al núm. 32, págs. 617 y 618.

⁴⁶⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 13 de enero de 1848. Apéndice segundo al núm. 41, pág. 769.

Nosotros utilizaremos, a lo largo de todo el trabajo, “compañía” o “sociedad”, indistintamente.

Poco tiempo después de la aprobación de la Ley y el Reglamento de 1848, el uso del término “sociedad” se iba imponiendo. En este sentido, es interesante la siguiente consideración de ARRAZOLA⁴⁶⁹: *El Código de comercio clasifica, y reduce a cuatro clases todas las compañías, que legalmente pueden resultar de la asociación mercantil, y son: la compañía colectiva, la en comandita, la anónima y la genérica, y como supletoria, denominada accidental o de cuentas en participación (...) pero en los últimos tiempos la tecnología [entiéndase terminología] en la materia ha sufrido una modificación, y es, que así como en tiempos anteriores, del contrato de sociedad, que abarcaba, como las Ordenanzas de Bilbao, todos los géneros de sociedades mercantiles e industriales, se pasó por las nuevas leyes y prácticas mercantiles a las compañías; así, ahora, por las novedades legales y prácticas, ha pasado la tecnología de compañías otra vez a sociedades, y hoy se dice más frecuentemente, y ya en el lenguaje legal y oficial, ya en el común, sociedad mercantil, que compañía.*

Por su parte, VICENTE Y CARAVANTES⁴⁷⁰ aporta la siguiente diferenciación en el uso de ambos términos: *(o)bsérvese que la palabra “compañía” se aplica más particularmente a las sociedades anónimas que presuponen una gran reunión de asociados y gran masa de capitales, mientras que la palabra “sociedad” se reserva a las demás asociaciones que suponen menos asociados y empresas menos considerables.*

B) LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES POR ACCIONES, ¿SON UN NUEVO TIPO SOCIETARIO QUE INCLUYE A LAS ANÓNIMAS Y COMANDITARIAS?

La Ley de 1848 lleva por título *sobre compañías mercantiles por acciones*. El Reglamento de 1848 que la desarrolla, tiene como rúbrica *para la ejecución de la Ley de 28 de enero de este año sobre compañías mercantiles por acciones*. Por su parte, el CCom 1829 se refiere a las *compañías mercantiles*, que pueden ser de tres tipos: *colectivas, comanditarias y anónimas*. ¿Qué relación existe entre los tipos societarios regulados por el CCom 1829 y la Ley de 1848? Esta es la cuestión que se desarrolla en el presente apartado.

El CCom 1829 ofrece una noción general de compañía mercantil en su artículo 264 (en el siguiente epígrafe se analiza con detalle su contenido). El artículo 265 establece los tres tipos de compañías mercantiles: la que *se conoce con el nombre de compañía regular colectiva* (apartado 1); la que *se titula compañía en comandita* (apartado 2); y la que *lleva el nombre de anónima* (apartado 3). Esta tricotomía clásica, como dice RUBIO⁴⁷¹, tiene su origen en el *Code* y *con sus defectos iniciales y con sus reformas posteriores, la clasificación del Código napoleónico se afirmará con eficacia para un siglo*.

Las compañías por acciones precodificadas que se constituyeron desde finales del siglo XVIII hasta el CCom 1829, a las que se ha hecho referencia en el capítulo

⁴⁶⁹ ARRAZOLA, L. (Coord.) (1858): *Enciclopedia española de Derecho y Administración...*, pág. 775.

⁴⁷⁰ VICENTE Y CARAVANTES, J. (1850): *Código de comercio extractado...*, pág. 126.

⁴⁷¹ RUBIO, J. (1950): *Sáinz de Andino ...*, págs. 155 y 156.

sobre los antecedentes de la Ley de 1848, no son recogidas por los Códigos europeos como un tipo societario específico y autónomo. Tampoco lo hace el de Sáinz de Andino. Los tipos societarios codificados son las compañías anónimas (cuyo capital se encuentra dividido en acciones) y las comanditarias (cuyo capital puede estar dividido en acciones).

La pregunta que surge en este momento es por qué la Ley de 1848 se refiere a las *compañías mercantiles por acciones*. En realidad, la Ley deroga la regulación del CCom 1829 relativa a las compañías anónimas y comanditarias por acciones para instaurar un nuevo régimen que evite los fraudes y abusos cometidos fundamentalmente por las anónimas. El Legislador se percató de que no puede aprobar una nueva regulación exclusiva para las compañías anónimas, pues quedaría abierta la puerta del fraude mediante la utilización de la compañía comanditaria por acciones. Este es el motivo o la causa de que el ámbito de aplicación de la Ley de 1848 no se circunscriba a las anónimas, sino que también se extienda a las comanditarias por acciones, aun cuando éstas no hubieran sido utilizadas como instrumento de engaño o especulación dañina.

En este sentido, en la sesión del Congreso del 20 de abril de 1847, el Diputado Sr. Ordax planteó una enmienda al artículo 1 del PL 1848 (y a la totalidad del mismo) por estar en desacuerdo con la inclusión de las sociedades comanditarias por acciones. Su intervención fue larga. Se extractan los párrafos más relevantes en relación a este tema.

*Tres clases de sociedades reconoce la legislación mercantil: las colectivas, las comanditarias y las anónimas. El artículo del proyecto de ley del Gobierno, contrayéndose en su texto y espíritu a aquella clase de sociedades que dividen el todo o parte de su capital en acciones, deja conocer clara y terminantemente que solo habla con las que se encuentran en este caso, y no hallándose en él las colectivas, no hay para qué nombrarlas: si, pues, de todas las sociedades que dividen su capital en acciones, de todas hablan el Gobierno y la comisión, es concluyente que hablan también de las comanditarias. Las sociedades en comandita están sujetas por el Gobierno y la comisión a esa fiscalización, a esa autorización previa que ha de regular su constitución y establecimiento, y en esto hay un grande vicio de economía, un grande error de legislación y jurisprudencia, que es necesario combatir con toda la energía que da la convicción.*⁴⁷²

El Sr. Ordax muestra su conformidad con el nuevo régimen que se pretende instaurar en relación a las compañías anónimas. En la medida en que gozan de un privilegio y de una exención del Derecho común que, de hecho, había generado fraudes y abusos, debían quedar sometidas a un nuevo control e inspección más severo. Ahora bien, dado que las comanditarias no son titulares de privilegios, no deben estar sometidas a la misma exigencia que las anónimas:

Si atendemos a los considerandos del proyecto, bastante buenos, de la comisión, bastante tachables [sic] del Gobierno anterior, vemos que tienen por base ¿el qué? el privilegio, la exención del derecho común que afecta a las sociedades

⁴⁷² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1428.

*anónimas; y la comisión y el Gobierno debieran comprender que allí donde no hubiera privilegio no debía alcanzar la ley. ¿Y existe el privilegio en las sociedades comanditarias? No; y el privilegio es la base de la represión. Y entonces, ¿para qué se aplica a las comanditarias?*⁴⁷³

El Diputado Sr. Miota, en nombre de la CS, responde al Sr. Ordax. Centra su argumentación sobre la inclusión de las compañías comanditarias por acciones de la siguiente manera:

*... las compañías comanditarias, lo mismo que las anónimas, pueden dividir su capital, no como quiera en alguna parte, sino en el todo, en acciones; y desde el momento en que dividen su capital en acciones, a juicio de la comisión, y me parece que del Gobierno, son unas verdaderas sociedades anónimas y no tienen más que el nombre de comanditarias. La comisión no quiere ninguna compañía que no corresponda a su nombre.*⁴⁷⁴

También rectifica al Sr. Ordax aclarándole que no es correcto que todas las compañías comanditarias necesiten autorización legal o gubernativa, sino sólo aquellas

*... cuyo capital se divida en acciones en todo o en parte y pertenezca en su totalidad o en parte a socios que no se comprometan en las pérdidas más que a una cantidad limitada, al mismo tiempo que no tiene límite su derecho a las ganancias.*⁴⁷⁵

Y el motivo de la aplicación de este nuevo régimen a las comanditarias por acciones es el mismo que a las anónimas: el privilegio. Por ello le dice el Sr. Miota al Sr. Ordax que se equivoca en esta cuestión:

*Pero ha dicho S.S. [Sr. Ordax] que la comisión parte de un principio, parte del privilegio, porque reconocer que solamente es necesaria la intervención de la autoridad pública para aquellas compañías que hayan de gozar de algún privilegio, y que no gozan de ninguno las comanditarias. He aquí otra equivocación visible. Las compañías comanditarias, cuando su capital se divide en acciones, gozan del mismo privilegio que las anónimas; gozan de la excepción del derecho común, en cuanto a que los accionistas de las compañías comanditarias, lo mismo que los de las anónimas, a tanto se comprometen, a cuánto valen sus acciones. De este privilegio gozan los mismos las unas que las otras, como he demostrado ya; y por eso, lejos de incurrir en ninguna inconsecuencia, han sido consecuentes, así la comisión como el Gobierno.*⁴⁷⁶

El problema que realmente preocupaba a la CCD era la utilización fraudulenta de la sociedad comanditaria y, por este motivo, cerraba esta vía de escape. El Sr. Miota, Vocal de la CCD, lo expresó gráficamente:

¿no sería muy fácil que se eluda la ley formando compañías que lleven este nombre [comanditarias por acciones], con un capital de 100 o 200 millones, y

⁴⁷³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1429.

⁴⁷⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1431.

⁴⁷⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1432.

⁴⁷⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1432.

*eligiendo para gestor cualquiera persona que no pueda responder de 2.000 rs.?*⁴⁷⁷

Por lo tanto, la Ley de 1848 no crea un nuevo tipo de sociedad mercantil, sino que respeta la tricotomía (siguiendo la expresión de RUBIO) establecida por nuestro CCom 1829. El ámbito de aplicación son las compañías anónimas y las comanditarias por acciones.

Después de lo que se acaba de exponer, queda claro que la Ley de 1848 tampoco es una Ley de compañías anónimas. Por esto, sorprende profundamente que el legislador del CCom 1885, en su Exposición de Motivos, en el capítulo titulado *LIBRO II.- SOCIEDADES MERCANTILES*, recoja la siguiente declaración: *La Ley de 28 de enero de 1848, reformando el Código de comercio sobre la constitución de las sociedades anónimas...*, sin ninguna mención a las comanditarias por acciones.

C) AUSENCIA DE DEFINICIÓN LEGAL DE COMPAÑÍA MERCANTIL POR ACCIONES, COMPAÑÍA ANÓNIMA Y COMPAÑÍA COMANDITARIA POR ACCIONES

Ni la Ley de 1848 ni el CCom 1829 definen las compañías mercantiles por acciones. La única referencia que se encuentra, pero no es una definición legal, es la descripción que sobre la compañía mercantil por acciones se realiza en el Preámbulo del Dictamen de la CCD de 16 de abril de 1847 sobre el PL 1848 relativo a compañías mercantiles por acciones⁴⁷⁸.

Esta caracterización o descripción no aparece en el texto de la CS⁴⁷⁹ de 18 de diciembre de 1847 ni en el definitivo de la Ley de 1848, que sería lo más importante. Ahora bien, nos parece de utilidad transcribirla a continuación, aunque, repetimos, no se trata de una definición legal:

La compañía mercantil por acciones, cuya denominación comprende a todas aquellas en que la responsabilidad se ciñe al fondo social, no entra en la esfera general del comercio; su existencia es de suyo una excepción del derecho común; su responsabilidad limitada le da por sí sola el carácter de una especie de privilegio; por consiguiente, sólo un objeto de reconocida utilidad pública, fuera del alcance y superior a los medios del capital privado, puede autorizar con justicia su establecimiento.

De este texto cabría extraer las notas características de este concepto de compañía mercantil por acciones:

- Se trata de un modo societario que comprende otros tipos, no es un tipo nuevo o autónomo.

⁴⁷⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1432.

⁴⁷⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847, Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393. Recogido también en la GdM de 19 de abril de 1847, núm. 4600.

⁴⁷⁹ DsC. Senado. Sesión de 18 de diciembre de 1847, Apéndice Segundo al núm. 16, págs. 251 y 252.

- La responsabilidad se limita al fondo social, constituyendo un privilegio. Los socios y administradores no son responsables solidarios de las deudas sociales.
- Son compañías que suponen una excepción al Derecho común. Desde un punto de vista general, se les aplica el Derecho común, pero con unas especialidades o excepciones tan profundas, que, en la práctica, el régimen aplicable es diferente.
- A la vez, son sociedades que se encuentran fuera de la esfera general del comercio, es decir, son tipos diferentes a las colectivas o comanditarias simples que, a grandes rasgos, representaban la compañía tradicional o general de comercio.
- El objeto social debe dedicarse exclusivamente a actividades de utilidad pública.

Como se ha expuesto en el apartado anterior, la Ley de 1848 regula dos de los tres tipos societarios codificados: las compañías anónimas y, dentro de las comanditarias, solamente aquellas cuyo capital se encuentre formado en todo o en parte por acciones. No aparece una definición de compañía mercantil por acciones ni en el CCom 1829 ni en la Ley de 1848.

En cuanto a la compañía anónima y la compañía comanditaria por acciones, por más que se repasen ambos textos legales, tampoco se encontrará su definición, si se entiende por definición *la proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial* (Diccionario de la R.A.E.).

No obstante lo anterior, al final del presente capítulo se estudian las notas configuradoras de los dos tipos societarios codificados: la anónima y la comanditaria por acciones. Pero, con carácter previo, es necesario detenerse en el origen de la compañía anónima, que, sin duda alguna, era el objeto de preocupación del Legislador de 1848, pues ayuda a comprender mejor las notas configuradoras de estos tipos societarios que recogió Sáinz de Andino en su Código.

D) FALTA DE ACUERDO EN CUANTO AL ORIGEN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA. NOTAS CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPAÑÍAS DE COMERCIO PRECODIFICADAS

Como se expuso en el capítulo sobre los antecedentes la Ley de 1848, y, más concretamente en el epígrafe referido a la situación anterior al CCom 1829, no existe unanimidad entre los tratadistas en cuanto al origen de la compañía anónima. Por ello, centramos el comentario en este tipo societario y no en la comanditaria por acciones porque el interés básico de la Ley de 1848 eran las anónimas aunque, como ha quedado expuesto más arriba, tuviera que ampliar su ámbito de aplicación a las comanditarias por acciones para evitar el uso fraudulento de este último tipo societario.

La noción legal de compañía anónima del CCom 1829, que asume la Ley de 1848, se encuentra mediatizada por los orígenes difusos e imprecisos de esta institución.

Con anterioridad al CCom 1829, las compañías anónimas eran las sociedades de carácter público o semipúblico, titulares de concesiones públicas y de privilegios. Pero Sáinz de Andino codifica una sociedad anónima con perfiles diferentes en los que estas sociedades no son públicas –son mercantiles- y no son titulares de concesiones, aunque puedan serlo; su privilegio fundamental es la limitación de responsabilidad. Por eso su autorización no es gubernativa o parlamentaria, sino de los T. de c. En cambio, el Legislador de 1848 vuelve al modelo de la gran sociedad anónima, titular de privilegios económicos y financieros, a parte de la limitación de responsabilidad. Pero, ¿cuál es realmente ese modelo?

En la obra del profesor HIERRO ANIBARRO citada en el capítulo sobre los antecedentes de la Ley de 1848, en sus interesantes conclusiones⁴⁸⁰, se expone que los estudios de los precedentes de la compañía anónima se pueden agrupar en dos teorías: la recepcionista y la evolucionista. En su opinión, la más firme es la evolucionista del consulado de mercaderes, aunque no aclare bien algunas fases de su evolución en las que se podría haber producido una influencia del precedente recepcionista de los Bancos italianos.

Para este autor, el origen de la sociedad anónima en España se relaciona con la organización del comercio con las Indias, que la Corona otorgó al Consulado sevillano, el cual, al organizar las flotas y su administración, fue adquiriendo una personalidad jurídica propia dentro del Consulado de cargadores, conocida como “avería”. Ésta se organizó mediante asientos, que se pueden considerar una auténtica sociedad anónima. En el siglo XVII los asientos de avería se convirtieron en compañías de comercio, tomando como modelo la administración de los bancos italianos.

La aparición de estas compañías de comercio obedece a un plan sistemático de reforma de las instituciones mercantiles que promovió el Conde-Duque de Olivares (1587–1645) para hacer frente a la competencia económica de otras naciones, especialmente Holanda. Ese plan se materializó en el Proyecto de compañías de comercio, que acabó concretándose en las Compañías del Norte o Almirantazgo de Sevilla y la de la India Oriental, cuyo funcionamiento se extendió algo más de cinco años. Pero la grave crisis financiera y social de la Corona impidió la puesta en marcha completa del Proyecto.

Se pueden destacar las siguientes notas características de estas compañías de comercio precodificadas citadas por HIERRO ANIBARRO.

- La cédula de erección de la compañía le otorgaba una nueva personalidad jurídica que no tenía carácter contractual sino institucional.
- Aparece un régimen común aplicable a todas las compañías constituidas o que fueran a serlo. El motivo es el carácter contractual-tipo que tenían los asientos de avería, en los que prácticamente sólo cambian las condiciones particulares del

⁴⁸⁰ HIERRO ANIBARRO, S. (1998): *El origen ...*, págs. 297 y ss.

contrato, sin que se alteren las demás. Este régimen común es conocido como Plan de compañías de Comercio y Navegación.

- El citado Plan no puede equipararse a una moderna Ley de sociedades anónimas porque el carácter privilegiado de la cédula de erección de cada compañía asimilaba el régimen de la constitución a la autorización gubernativa, en la que se debía cumplir un contenido mínimo de normas, en este caso conforme al Plan de compañías de Comercio y Navegación, lo cual permitía la correspondiente sanción real.
- Se estableció un sistema de prelación de fuentes. Las cédulas de erección debían cumplir lo dispuesto en el Plan de compañías de Comercio y Navegación y, con carácter subsidiario, se las aplicaba el Derecho general de los contratos.
- Las cédulas de erección constaban, normalmente, de dos partes diferenciadas. Una otorgaba el privilegio de fundar la compañía y la otra regulaba el régimen dispositivo de la organización jurídica de la compañía.
- El monopolio, tanto en su carácter geográfico como material, es característica configuradora de la compañía de comercio. En el caso concreto de las compañías españolas, esta característica tiene un carácter poco marcado como consecuencia de una tradición escasamente monopolística en comparación con otros países.
- El régimen de duración y liquidación de la compañía era similar al de los asientos de avería, aunque establecía un sistema de prórroga que se podía asimilar a una liquidación y paralela fundación de una nueva compañía. Esta situación, de hecho, asimilaba la cédula de erección a un contrato de sociedad mercantil general.
- Las compañías de comercio no tienen un carácter público.
- El capital es el elemento clave de la compañía de comercio. Se anula la base personalista, siendo sustituida por la capitalista en la que la identidad del socio no es relevante.
- En cuanto a los derechos de los partícipes de las compañías de comercio, no se puede exponer un régimen general, pues su contenido era muy variado, según cada compañía. En el Proyecto del Conde-Duque de Olivares, se implantó la regla de la igualdad de derechos, como había ocurrido antes con los asientos de avería.
- Por un lado, se reconocían los derechos económicos a los partícipes, concretados en el dividendo y la cuota de liquidación.
- Por otro lado, el partícipe era titular de unos derechos de contenido político, que se concretaba en el derecho de voto, limitado a la elección de los administradores.

- Junto a estos derechos de contenido económico y político, también se incorporaba un derecho a un determinado grado social para los que invirtieran elevadas sumas de dinero en la compañía. La finalidad de estos derechos era atraer los capitales inactivos en poder de personas que deseaban un ascenso social. Esta situación también buscaba los bienes de la nobleza y el clero a quienes estaba prohibido invertir sus patrimonios en negocios mercantiles.
- Los administradores eran elegidos por todo el tiempo de duración de la compañía. Esto no era un reflejo de falta de democracia interna, sino una manifestación de la dificultad de comunicación en la época, que podía poner en peligro la gestión de las compañías, dado que las noticias tardaban mucho en llegar a su destino.
- La función de los administradores de las compañías es esencial. Es la segunda nota caracterizadora de las compañías de comercio, después del capital social. De hecho, estas compañías se pueden considerar “monorgánicas” pues el papel de la junta de partícipes es mínimo.
- La administración social se organizó en administradores y consiliarios. Éstos desarrollaban una labor de asesoramiento en temas específicos a los primeros.
- Los administradores gozaban de una gran amplitud de poderes. Su responsabilidad se limitaba a la aportación que hubieran realizado a la compañía. El sistema de control de la administración se basaba en una auditoría contable realizada por expertos independientes.
- La distancia geográfica de los negocios de estas compañías hizo que los factores tuvieran unas facultades asimilables a los administradores.
- Se creó una instancia jurisdiccional superior a los administradores, denominada Consejo de Comercio, que funcionaba como órgano de apelación frente a las decisiones de los administradores.
- La limitación de responsabilidad de los socios está claramente recogida en el Proyecto del Conde-Duque. En cambio, en las coetáneas compañías de comercio europeas el régimen de la responsabilidad limitada aún es muy difuso.

Se ha recogido por extenso esta enumeración del profesor HIERRO ANIBARRO, porque muestra las notas características de las compañías de comercio precodificadas. En el presente capítulo sobre el concepto de las compañías mercantiles por acciones, es necesario conocer estas notas históricas, que ayudan a precisar el contorno conceptual de la compañía anónima del CCom 1829 y la Ley de 1848.

II. LA COMPAÑÍA MERCANTIL EN EL CCom 1829; SU VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL

Una vez analizadas las cuestiones anteriores, es preciso adentrarse en el concepto general de compañía mercantil para poder abordar, en el siguiente epígrafe, el concepto de compañías mercantiles por acciones.

El concepto de compañía mercantil no parece que surja como resultado de la reunión de los diferentes tipos societarios que se relacionan con la actividad comercial (compañía colectiva, comanditaria y anónima) sino como una especialidad frente a la sociedad civil o común. Esta situación condiciona el concepto y características de la compañía mercantil. Pero, como se verá a continuación, hay que matizar la relación compañía mercantil – compañía civil o común, en función de cada tipo de compañía mercantil (colectiva, comanditaria y anónima). Por este motivo el estudio, en cierto sentido, se complica.

El artículo 264 del CCom 1829 entiende la compañía de comercio en los siguientes términos:

El contrato de compañía, por el cual dos o más personas se unen poniendo en común sus bienes e industria, o alguna de estas cosas, con objeto de hacer algún lucro, es aplicable a toda especie de operaciones de comercio bajo las disposiciones generales del derecho común, con las modificaciones y restricciones que establecen las leyes mercantiles.

En los siguientes apartados se analiza detalladamente esta definición. A los efectos de lo que se está exponiendo, conviene destacar que son *las disposiciones generales del derecho común, con las modificaciones y restricciones que establecen las leyes mercantiles* las que se aplican a las compañías de comercio. Precisamente aquí se encuentra la estrecha vinculación de la compañía mercantil respecto de la sociedad civil o común.

Además, según CASTÁN⁴⁸¹, se ha de tener presente que la sociedad civil o común, por influencia del derecho romano era una sociedad de tipo personal con reducida exteriorización y organización unitaria, frente a la compañía mercantil que era un ente colectivo y autónomo. Esta estructura tiene como importante consecuencia el diferente régimen de responsabilidad del socio de la sociedad civil respecto al de la compañía mercantil. En este sentido se expresa DEL VISO⁴⁸², diciendo que

el socio por derecho común no corre más peligro que el de pagar su parte de deudas; y a falta de pago, el de responder con sus bienes en la misma proporción; pero el socio por derecho mercantil contrae una obligación solidaria, y quedan comprometidos su persona, sus bienes, y hasta su honor, como sucede en caso de quiebra.

El deslinde de la sociedad civil o común y la compañía mercantil es una manifestación del fenómeno más general de diferenciación entre el Derecho civil y el Derecho mercantil que, con el correr de los años se concretará, desde un punto de vista normativo, en la existencia de dos Códigos: el civil y el mercantil. En este marco se entiende que el primer apartado de este epígrafe se refiera al sistema objetivo o subjetivo que establece el CCom 1829, pues forma parte de los criterios para establecer la diferencia entre la legislación común y la mercantil.

⁴⁸¹ CASTÁN, J. (1929): “Alrededor de la distinción entre las sociedades civiles y las comerciales” en *RGLyJ*, pág. 34.

⁴⁸² VISO, S. DEL (1864): *Lecciones elementales de historia ...*, pág. 212.

A continuación, en el segundo apartado, se estudian las notas características de las compañías mercantiles, en el que, por lo que se acaba de exponer, se harán frecuentes referencias a las sociedades civiles.

En el último apartado, se recogen unos breves comentarios sobre el planteamiento del CCom 1885 respecto al sistema objetivo y subjetivo. Aunque se trate de un periodo que se encuentra fuera del ámbito temporal de nuestro estudio, parece obligado citarlo pues ayuda a perfilar el concepto de la compañía mercantil en general y de las compañías mercantiles por acciones en particular.

A) EL SISTEMA OBJETIVO O SUBJETIVO DEL CÓDIGO DE SÁINZ DE ANDINO

Con carácter previo al estudio del concepto de compañía mercantil en el CCom 1829, se ha de realizar un comentario de los principios generales caracterizadores de dicho texto legal. La regulación de la sociedad o compañía mercantil se encuentra dentro del marco establecido por dichos principios configuradores.

Tradicionalmente se ha expuesto la diferenciación entre el sistema objetivo y el sistema subjetivo del Derecho mercantil⁴⁸³. Esta cuestión es importante en el momento en el que se codifican las compañías mercantiles. El sistema objetivo caracterizará a dichas compañías en función de los actos de comercio que realicen. El sistema subjetivo lo hará en función de la condición de comerciante de la compañía o de sus socios.

Para analizar el sistema que sigue el Código de Sáinz de Andino (subjetivo u objetivo) se ha de tomar como punto de partida el *Code*. Como dice GARRIGUES⁴⁸⁴, este Código se inspiró en las ideas de la Revolución francesa y se propuso borrar en el Derecho mercantil toda huella del Derecho gremial o de clase. Es decir, se centró en el acto de comercio, desvinculándolo de la persona del comerciante. Construyó, por tanto, un sistema legal basado en el concepto de acto de comercio objetivo.

En referencia al *Code*, RUBIO⁴⁸⁵ precisa que en él late una idea y propósito certero, impuestos por la madurez histórica que el Derecho mercantil había adquirido: el de dar definitivamente a éste su carácter de Derecho general del tráfico extraprofesional aplicable a comerciantes y no comerciantes.

Uno de los preceptos claves que recogen el sistema objetivo es el artículo 631.3 del *Code*, que establecía que los T. de c. conocerían de las contiendas relativas a los actos de comercio *entre toda clase de personas*.

La influencia de esta disposición en Derecho español, como señala RUBIO⁴⁸⁶, se concretó ya en el RD dictado por José Bonaparte el 14 de octubre de 1809 en el que se

⁴⁸³ Sobre la posición de la Doctrina española de la segunda mitad del siglo XX sobre esta cuestión, íntimamente relacionada con el concepto de Derecho mercantil se pueden consultar abundantes trabajos. Se encuentra un buen resumen del tema en VICENT CHULIÁ, F. (1976): "El Derecho mercantil del neocapitalismo" en *RDM*, núm. 139, enero – marzo, págs. 62 – 64.

⁴⁸⁴ GARRIGUES, J. (1959): *Curso ...*, págs. 125 y ss.

⁴⁸⁵ RUBIO, J. (1947): "Sobre el concepto de Derecho mercantil" en *RDM*, vol. IV, núm. 12, noviembre - diciembre, pág. 342.

⁴⁸⁶ RUBIO, J. (1950): *Sáinz de Andino ...* pág. 134.

implantaba los T. de c. para conocer de los pleitos sobre todos los contratos y obligaciones mercantiles entre comerciantes y *entre las demás clases de personas*.

Este sistema objetivo es recogido por nuestro CCom 1829 en dos importantes artículos:

Artículo 1200: *Siendo el acto que da lugar a la contestación judicial propiamente mercantil, podrá ser el demandado citado y juzgado por los tribunales de comercio, aun cuando no tenga la cualidad de comerciante matriculado, conforme a lo determinado en el artículo 2.*

Artículo 1201: *No serán de competencia de los tribunales de comercio las demandas intentadas por los comerciantes ni contra ellos sobre obligaciones o derechos que no procedan de actos mercantiles.*

Por lo tanto, los T. de c. conocerán de las disputas originadas por actos de comercio, aun cuando el demandado no sea un comerciante debidamente inscrito. Además, los T. de c. no podrán conocer de las causas de carácter no mercantil entre los comerciantes ni contra ellos.

En los momentos de la primera codificación mercantil, se está produciendo la demarcación (en terminología de GARRIGUES⁴⁸⁷) del Derecho mercantil frente al Derecho civil. Para practicar esa demarcación, el legislador toma como base los “actos de comercio” a los que se les aplicará las normas mercantiles para singularizarlos respecto a los actos de naturaleza civil.

Ahora bien, como dice este mismo profesor, las expresiones “sistema subjetivo” y “sistema objetivo” tienen un valor relativo. El Derecho mercantil siempre ha sido objetivo, aun cuando se configurara como Derecho de clase o profesional, pues no regulaba todos los actos jurídicos de esa clase. La contraposición entre el sistema subjetivo y objetivo no se corresponde con la realidad histórica.

Nos parecen acertadas estas observaciones. Pero cuando se considera el origen de la compañía mercantil, separándose de la sociedad civil o general, la cuestión se complica porque esta última, en su configuración tradicional, carecía de proyección externa. Por ello, en el proceso de segregación de ambas clases de sociedades, junto a la actividad comercial, es importante la condición de comerciante de los socios (cuya importancia será diferente en función de cada tipo societario mercantil).

GIRÓN en un trabajo sobre las sociedades civiles y las sociedades mercantiles⁴⁸⁸, al estudiar la situación de este tema hasta los Códigos españoles del siglo XIX, dice que el sistema del Derecho mercantil es subjetivo, pues es un Derecho para comerciantes. En cuanto a las compañías, lo importante es si los socios son o no son comerciantes, porque eso es lo relevante para la fijación de la ley aplicable. Posteriormente, este mismo autor, modifica levemente este planteamiento haciendo una mención al objeto:

⁴⁸⁷ GARRIGUES, J. (1959): *Curso ...*, pág. 122.

⁴⁸⁸ GIRÓN TENA, J. (1947): “Sociedades civiles y sociedades mercantiles: distinción y relaciones en Derecho español” en RDM, vol. IV, núm. 10, julio – agosto, pág. 15.

*Bajo el sistema de Derecho mercantil subjetivo lo que sucedía era lo siguiente: la sociedad encuentra su diferenciación no por su objeto, sino por el hecho de ser sociedad de mercaderes. En ello va implícito el objeto. Era la misma Sociedad civil bajo las disposiciones y restricciones del Derecho mercantil, como rezaban los textos*⁴⁸⁹.

LANGLE, en cambio, dice que el CCom 1829,

*suele ser calificado de Código subjetivo, porque en él muy numerosos actos jurídicos considerábanse mercantiles por razón de la persona, por ejecutarlos un comerciante. (...) Pero el viejo Código presentaba también algunos rasgos claramente objetivos. (...) El contrato de compañía se definió por su objeto, siendo mercantil si, con fin de lucro, se aplicaba a operaciones de comercio (artículo 264)*⁴⁹⁰.

GONZÁLEZ ORDÓÑEZ mantiene que el concepto de sociedad mercantil se diferenciaba del civil por el ejercicio de actos de comercio, entendiendo, por tanto, que se está ante un sistema objetivo. Estas son sus palabras:

*De los artículos 264 y 265 CCom 1829 resulta que este texto consideraba las compañías mercantiles como concreta manifestación del contrato de compañía. Se trataba de un concepto genérico de contrato de compañía valedero para las esferas civil y mercantil. Para que el contrato de compañía tuviera carácter mercantil debía constituirse para realizar operaciones de comercio (artículo 264). Así lo confirmaron las decisiones de competencia (3-X-1857 y 24-III-1858)*⁴⁹¹.

Estas consideraciones en cuanto al sistema objetivo o subjetivo del Derecho mercantil y la compañía mercantil se analizan con más detalle a lo largo del siguiente apartado sobre las notas características de la compañía mercantil

B) NOTAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL

El CCom 1829 describe la compañía mercantil en su artículo 264:

El contrato de compañía, por el cual dos o más personas se unen poniendo en común sus bienes e industria, o alguna de estas cosas, con objeto de hacer algún lucro, es aplicable a toda especie de operaciones de comercio bajo las disposiciones generales del derecho común, con las modificaciones y restricciones que establecen las leyes mercantiles.

⁴⁸⁹ GIRÓN TENA, J. (1976): *Derecho de sociedades* ..., pág. 63.

⁴⁹⁰ LANGLE, E. (1947): "Las directrices fundamentales del Derecho Mercantil" en *RDM*, vol. III, núm. 9, págs. 330 – 331. Sobre el mismo tema, también el mismo autor: LANGLE, E. (1950): *Manual de Derecho mercantil*, tomo I, Barcelona, pág. 202.

⁴⁹¹ GONZÁLEZ ORDÓÑEZ, J. M^º. (1956): "Los criterios del Derecho español sobre distinción de sociedades mercantiles y sociedades civiles y sus consecuencias prácticas" en *RDM*, vol. XXI, núm. 59, enero – marzo, págs. 57 – 58.

A continuación se analizan las notas características de la compañía mercantil que proporciona este artículo.

1. ¿Se puede hablar de un concepto genérico de compañía mercantil o sólo existe el régimen propio de cada tipo (colectiva, comanditaria y anónima)?

Antes de analizar las notas características de la compañía mercantil en el Código de Sáinz de Andino, debemos preguntarnos si se puede hablar de un concepto genérico de la misma. En nuestra opinión, la respuesta es afirmativa. El CCom 1829, en el Título II de su Libro II regula las compañías mercantiles en general. En concreto, su Sección I se titula *De las diferentes especies de compañías, sus efectos respectivos, y formalidades con que han de contratar*. El primer artículo de dicha Sección, el 264, ofrece una noción de compañía mercantil en general, sin referencia a ningún tipo en particular. En el siguiente, el 265, se enuncian los tres tipos de compañías mercantiles: la colectiva, la comanditaria y la anónima, que son reguladas a lo largo de los siguientes artículos.

Por tanto, el legislador del 29 no presenta una noción independiente de cada tipo societario, sino un concepto general (el del artículo 264) y luego el régimen particular de cada compañía mercantil. Sin duda podemos decir que esta cuestión es racional, teórica o artificial, en el sentido de que la realidad mercantil, desde un punto de vista histórico, no presenta una unidad conceptual, sino la aparición escalonada de los diferentes tipos societarios⁴⁹².

Si mantenemos esta premisa, debemos analizar primero los elementos configuradores del artículo 264 y, después, estudiar los concretos tipos societarios. Eso haremos en el siguiente epígrafe, centrando las consideraciones en las compañías por acciones, que es el marco normativo que modificará nuestra Ley de 1848.

El profesor GIRÓN ha dedicado varios estudios al origen y evolución del concepto de sociedad mercantil. En un primer momento⁴⁹³, recelaba de la existencia de

⁴⁹² Entre otros, podemos destacar, en primer lugar, la siguiente cita de GIRÓN:

... cada una de estas formas principales [de tipos societarios] ha surgido independientemente de las otras –la sociedad en comandita no es históricamente (o dogmáticamente) una sociedad en nombre colectivo modificada, y la sociedad anónima no es una sociedad comanditaria modificada-. (...) No son los tratadistas quienes han elaborado los tipos de sociedades que hoy conocemos, sino la práctica. GIRÓN TENA, J. (1947): “Sociedades civiles y sociedades mercantiles ...”, págs. 12 y 13.

En segundo lugar, cabe también citar las siguientes palabras de GONZÁLEZ ORDÓÑEZ:

Las sociedades mercantiles son tipos sociales que nacen en el tráfico comercial. Estos tipos surgen y se desarrollan independientes unos de otros. (...) La concepción genérica de las sociedades mercantiles apareció con el movimiento codificador. Fue entonces cuando, por los textos legales o por la doctrina científica, se formuló un concepto genérico de sociedades mercantiles, dentro del cual pretendía cobijarse a los diversos tipos sociales recibidos del tráfico comercial. GONZÁLEZ ORDÓÑEZ, J. M^a. (1956): “Los criterios del Derecho español ...”, págs. 52 – 53.

⁴⁹³ GIRÓN TENA, J. (1954): “Sobre los conceptos de sociedad ...”, págs. 400 y 401. Aunque esta cita se refiere al vigente CCom 1885, es aplicable al CCom 1829 por ser el origen de aquél y mantener, en este tema, la misma estructura. Transcribimos las palabras de este autor:

Se ha pretendido la existencia de un concepto genérico de Sociedad mercantil. Según esta tendencia tendríamos que admitir que automáticamente habría de buscarse el régimen de su configuración jurídica en el Código de comercio. Este punto de vista me parece que

un concepto genérico de sociedad mercantil y mantenía que *el Código de comercio no ha configurado un tipo genérico de Sociedad mercantil ni ha construido una Doctrina positiva general para su régimen*. Más adelante, en su *Derecho de Sociedades*⁴⁹⁴, consideraba que *desde el punto de vista de juego de conceptos, la “mercantilidad” de las sociedades mercantiles busca la subsunción bajo la idea general de mercantilidad por razones objetivas que se propone el codificador del Derecho mercantil*. Ahora bien, una vez que sepamos que una sociedad es “mercantil”, aún no sabemos qué tipo de sociedad es.

Finalmente, en un trabajo más reciente⁴⁹⁵, complementa sus primeras afirmaciones sobre este tema diciendo que *(e)n el Código del 29, los tipos mercantiles de sociedad se manifiestan, todavía, como antes de la Codificación: a manera de matices o peculiaridades de un concepto único que es el de sociedad. La individualidad como tipo, con configuración jurídico-estructural propia de cada una de las sociedades mercantiles, no es lo que expresa la terminología del Código (...). Es decir, un tipo único, “la” compañía mercantil puede revestir distintas modalidades. Y la compañía mercantil es dogmáticamente la sociedad civil. (...) El Código francés había sido más determinante al decir que la Ley reconoce tres clases de sociedades comerciales: la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita y la sociedad anónima. Estos términos del artículo 19 del Código de comercio francés expresan la individualidad tipológica de las figuras mercantiles de sociedad*. En apoyo de su tesis, puntualiza que el CCom 1885 realiza una ordenación sistemática en secciones que regulan los diferentes tipos societarios, lo cual no hace el CCom 1829.

2. Antecedentes normativos del concepto de compañía mercantil

Dadas las limitaciones del presente trabajo, se va a tomar como punto de partida el CCom 1829 para estudiar el concepto de compañía mercantil. De todos los antecedentes sobre esta materia (que empiezan en el Derecho romano), por razones de brevedad, sólo citaremos los que se encuentran más directa y estrechamente relacionados con el CCom 1829. Dos son las citas que consideramos relevantes: las Partidas y las Ordenanzas de Bilbao.

Las Partidas, respecto a la sociedad mercantil, establecían lo siguiente:

Compañía facen los mercaderos, e los otros homes entre si, para poder ganar algo, mas de ligero, ayuntando su aver en uno; e acaesce a las vegadas que en la compañía son algunos rescibidos por compañeros, porque son sabidores e

metodológicamente es insostenible; la mercantilidad, por razón de la índole material del objeto, no dice nada de la estructura u organización jurídico formal de un tipo de sociedad; el Código de comercio no ha configurado un tipo genérico de Sociedad mercantil ni ha construido una Doctrina positiva general para su régimen (...).

Es curioso observar que esta tendencia no se propuso a la vieja Doctrina francesa, que tanto influyó en la española. En los libros franceses que siguen inmediatamente al Código –y que reciben aún viva la tradición de las relaciones entre Sociedad civil y mercantil– está clara la consideración de las del Código como subtipos, y no pretenden presentar una Sociedad mercantil genérica enfrentada a la del Código civil, y en general así se sigue la sistemática de la Doctrina del pasado siglo [el XIX]. Pueden verse los libros de Vincens, Dufour, Paris, Molinier, Bravard-Veyrieres.

⁴⁹⁴ GIRÓN TENA, J. (1976): *Derecho de sociedades ...*, pág. 63.

⁴⁹⁵ GIRÓN TENA, J. (1986): “Las Sociedades mercantiles ...”, págs. 180 y 182.

entendidos de comprar e vender, maguer non hayan riquezas... (Proemio del título 10. Partida 5).

El capítulo 10, artículo 1 de las Ordenanzas de Bilbao (1737) define así a las sociedades mercantiles:

Compañía, en términos de comercio, es un contrato o convenio, que se hace o puede hacerse entre dos o más personas, que se obligan recíprocamente por cierto tiempo y bajo ciertas condiciones y pactos a hacer y proseguir juntamente varios negocios por cuenta y riesgo común, y de cada uno de los compañeros respectivamente, según y en la parte que por el caudal o industria que cada uno ponga, les pueda pertenecer, así en las pérdidas como en las ganancias, que al cabo del tiempo se asignaren, resultaren de tal compañía.

Destaca GIRÓN⁴⁹⁶ dos cuestiones importantes sobre el texto citado de las Ordenanzas de Bilbao, que influyen en el Código de Sáinz de Andino. La primera, es que el legislador no tiene en la cabeza la idea de la personalidad jurídica de las sociedades; lo que le importa es que hay unos comerciantes que están en sociedad. Y, la segunda, es que se pretende una mayor seguridad que la regulada por el Derecho común.

Con estos breves antecedentes, pasemos a la exposición sobre el concepto de sociedad mercantil en Código vigente en la entrada en vigor de nuestra Ley de 1848.

3. Es una sociedad regulada por el Derecho común a la que se le aplican las especialidades del Derecho mercantil

Una nota característica importante de la noción de compañía mercantil es su vinculación o dependencia con respecto a la sociedad regulada por el Derecho común. Como se desprende de la lectura del artículo 264 CCom 1829 transcrito antes, la compañía mercantil es una sociedad regulada por *las disposiciones generales del derecho común*, pero que, al dedicarse a cualquier *especie de operaciones de comercio* es una compañía sujeta a *las modificaciones y restricciones que establecen las leyes mercantiles*.

Los tratadistas coetáneos de la Ley de 1848 incidieron en este aspecto. *¿Qué se entiende por compañía mercantil?* se pregunta LASO. Esta es su respuesta: *(s)e llama Compañía o Sociedad mercantil la reunión de dos o más personas como capitalistas o industriales*⁴⁹⁷, *o con ambos conceptos, para hacer algún lucro común, cuyo objeto puede tener lugar en toda clase de operaciones mercantiles*. Y hace una referencia a lo que ahora se está comentando: *(l)as reglas de tales asociaciones se deducen del Derecho común, y de las disposiciones particulares establecidas por las leyes de comercio*⁴⁹⁸.

⁴⁹⁶ GIRÓN TENA, J. (1947): “Sociedades civiles y sociedades mercantiles ...”, pág. 19.

⁴⁹⁷ Este autor, en la citada obra, otorga una gran importancia a la diferencia entre estos dos tipos de socios: los capitalistas y los industriales.

⁴⁹⁸ LASO, E. (1849): *Elementos de Derecho Mercantil de España, formados con arreglo al programa de tercer año de Jurisprudencia*, Madrid, pág. 21.

RUBIO Y LÓPEZ expone en su breve obra que *(n)o se gobernaron, sin embargo, por leyes especiales las compañías mercantiles en un principio, bastándolas para regirse las leyes comunes*⁴⁹⁹.

Por su parte, GONZÁLEZ HUEBRA parte del hecho de que una compañía es un contrato en el que participan una pluralidad de contratantes (socios) cuya voluntad de involucrarse con la compañía es diferente para cada uno de ellos: *ni aún podrían acaso aunque quisieran tomar igual parte, ni obligarse de un mismo modo*. Esta singularidad de cada socio en su relación con la compañía, se presenta también en las sociedades reguladas por el Derecho común. Pero son de mayor frecuencia e importancia en las compañías mercantiles *en las que por la naturaleza de sus actos y por el interés de éstos, dan diversa forma a las compañías*. Y llegados a este punto expone la parte central de su comentario: *(a)un cuando por regla general está declarado que les son aplicables [a las compañías mercantiles] las disposiciones de derecho común, salvas las excepciones y restricciones de la ley mercantil, son tantas las modificaciones que ésta se ha visto en la necesidad de introducir, que ha dejado casi sin aplicación aquél principio, y las ha reglamentado de tal manera, que esta materia es hoy uno de los tratados más importantes de este derecho*⁵⁰⁰.

Comentando esta cuestión en fechas más recientes, decía GIRÓN⁵⁰¹ que el artículo 264 del CCom 1829 refleja el pensamiento de que la compañía mercantil es una utilización por comerciantes de una figura jurídica, que es el contrato de sociedad, cuyo concepto da el Derecho civil. En la etapa previa a la Codificación, la técnica histórica de separación entre el Derecho civil y el Derecho mercantil no presta atención a la construcción de un concepto “objetivo” de compañía mercantil, distinto del concepto de sociedad civil.

Este mismo autor⁵⁰², en un trabajo posterior, insiste en que el CCom 1829, como el *Code*, reconoce que la figura conceptualmente definida en el Derecho civil, que se llama sociedad, puede adoptarse en el tráfico comercial. Tanto en el artículo 264 del CCom 1829 como en el artículo 18 del *Code*, tienen como centro esta concepción. Como se ha citado anteriormente, la frase que resume este pensamiento es: *la compañía mercantil es dogmáticamente la sociedad civil*.

Por otro lado, cabe recordar con GONZÁLEZ ORDÓÑEZ, que *entre las diversas sociedades mercantiles existen diferencias esenciales, al menos entre las de personas y las de capitales. En consecuencia, tampoco son idénticas las diferencias que existen entre cada uno de los tipos sociales mercantiles y la sociedad civil*⁵⁰³.

En términos más generales, la segregación de la compañía mercantil de la sociedad civil durante el periodo que se está estudiando es una manifestación de lo que la doctrina actual denomina “mercantilización” del Derecho civil (ROJO⁵⁰⁴). Por su

⁴⁹⁹ RUBIO Y LÓPEZ, J. (1857): *Novísimo manual de Derecho mercantil...*, pág. 113.

⁵⁰⁰ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, págs. 124 y ss.

⁵⁰¹ GIRÓN TENA, J. (1976): *Derecho de sociedades ...*, págs. 57 y 61.

⁵⁰² GIRÓN TENA, J. (1986): “Las Sociedades mercantiles ...”, págs. 179 y 180.

⁵⁰³ GONZÁLEZ ORDÓÑEZ, J. M^a. (1956): “Los criterios del Derecho español ...”, pág. 53.

⁵⁰⁴ En relación a esta cuestión, se puede consultar dos interesantes y recientes trabajos de ROJO, A.:

- (2012): “El Código mercantil” en *RDM*, núm. 286, octubre – diciembre, págs. 15 – 22, especialmente, págs. 19 – 21.

parte, el profesor RUBIO⁵⁰⁵ la calificaba como la “retracción del Derecho civil”, es decir, el fenómeno de extensión del Derecho mercantil a un número cada vez mayor de relaciones antes sometidas al Derecho común o, para decirlo con la terminología tradicional, el movimiento de ampliación progresiva de la materia de comercio o la “comercialización del Derecho civil”.

El Derecho mercantil es el causante o “pionero” de la reforma jurídica⁵⁰⁶. Son, como apunta CONDE⁵⁰⁷, las instituciones del Derecho civil las que van siendo sustituidas en la vida del tráfico empresarial por las instituciones mercantiles. Y esto es lo que ocurre con las compañías mercantiles en relación a las sociedades civiles o comunes. La regulación de las compañías mercantiles a principios del siglo XIX se basa, en su sometimiento con carácter general a las normas de Derecho civil o común (artículo 264 CCom 1829), siendo de aplicación con carácter especial los preceptos de dicho Código y demás normativa mercantil.

Esta situación sufre una profunda transformación a lo largo de los años hasta nuestros días. En efecto, la evolución de la realidad y práctica societaria posterior ha llevado a la mayor parte de la Doctrina actual a mantener que las normas de Derecho común sólo pueden regular las sociedades civiles, puesto que se refieren a sociedades personalistas y, en consecuencia, son inadecuadas o inapropiadas para constituir una disciplina general en materia de sociedades⁵⁰⁸.

4. La compañía mercantil es, ante todo, un contrato

Para los tratadistas de principios del siglo XIX y para Sáinz de Andino, la compañía mercantil es, fundamentalmente, un contrato: *el contrato de compañía*. Son muchos los artículos del CCom 1829 que se refieren a los “contratantes”, en vez de a los “socios”. Con el transcurso del tiempo, esta nota característica se ha difuminado. Autores han cuestionado, posteriormente, si se trata de un verdadero contrato, entendiendo que es, más bien, un “acto conjunto de creación” o un “acuerdo jurídico-social unilateral de fundación”. En la actualidad, se hace referencia a que es un contrato que crea una organización de los socios a la que se le reconoce una personalidad jurídica⁵⁰⁹.

La lectura actual de los artículos del CCom 1829 que regulan las compañías mercantiles pone de manifiesto que el legislador de 1829 se centró más en el aspecto contractual que en el efecto fundamental del contrato: la aparición de una persona jurídica.

Pero de esto –como se verá en el siguiente epígrafe– no se puede deducir que se ignore la realidad del nacimiento de una nueva persona jurídica, diferente de sus socios. Lo que ocurre es que estamos ante la primera codificación del Derecho de sociedades y

- (2014): “El Derecho mercantil y el proceso de unificación del Derecho privado” en *RDM*, núm. 291, enero – marzo, págs. 127 – 142, especialmente pág. 136.

⁵⁰⁵ RUBIO, J. (1947): “Sobre el concepto ...”, págs. 346 y 347.

⁵⁰⁶ Ídem, pág. 347.

⁵⁰⁷ CONDE, F. J. (1947): “La transformación del Derecho patrimonial en la época del capitalismo” en *RDM*, vol. IV, núm. 11, págs. 186 – 187.

⁵⁰⁸ SÁNCHEZ CALERO, F. Y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J. (2011): *Instituciones ...*, pág. 310.

⁵⁰⁹ SÁNCHEZ CALERO, F. Y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J. (2011): *Instituciones ...*, págs. 313 y 314.

el énfasis de las notas características era diferente al actual, consecuencia de la situación histórica.

En efecto, desde hace bastante tiempo el estudio de las sociedades mercantiles se refiere tanto a su elemento contractual como al elemento organizativo (en terminología de GARRIGUES⁵¹⁰) o al aspecto contractual y al institucional (URIA). Son dos elementos básicos del concepto de sociedad mercantil que, según este último autor están relacionados de la siguiente manera: *en el contrato está el origen de la sociedad, pero una vez constituida ésta por los trámites que la ley establece estaremos en presencia de un ente jurídico nuevo y distinto de los socios que la integran, dotado de vida propia y de órganos especialmente adecuados para su actuación en el mundo exterior*⁵¹¹.

Un razonamiento similar se encuentra en GARRIGUES: *cuando la sociedad asciende a corporación, cosa evidente en la sociedad anónima, desaparece el contrato de sociedad y las relaciones personales que de él nacen y en su lugar entra una entidad ideal que se presenta en el mundo jurídico como persona y que tiene una vida independiente de los socios. Así se comprueba en la forma de sociedad mercantil que más ha evolucionado hacia la persona jurídica y la corporación, que es justamente la sociedad anónima, que vive y muere con independencia de la vida o de la muerte de sus socios*⁵¹².

URÍA⁵¹³ expone que, como unión voluntaria de personas, la sociedad tiene su origen en un negocio jurídico constitutivo, que tradicionalmente, si bien con algunas discrepancias, se adscribe a la amplia categoría de los contratos. El contrato de sociedad es el vínculo jurídico que une originariamente a los socios fundadores y a todos los que, posteriormente, formen parte de la sociedad.

Dentro de la literatura doctrinal del siglo XIX, cabe citar a DEL VISO, que es quizá el autor de la época que mejor expresó la relación entre el aspecto contractual y el organizativo de la compañía mercantil, quien escribió que *(e)n el contrato de sociedad, como su objeto inmediato es crear una personalidad, y determinar el modo como se hayan de ejercer sus derechos, la utilidad que se espera de ella no se consigue desde luego que esté formada, sino que es necesario que proceda ésta a verificar aquellas operaciones o celebrar aquella clase de contratos que puedan proporcionarles el lucro que desean*⁵¹⁴.

Se podrían resumir los anteriores comentarios diciendo que el CCom 1829 se centra fundamentalmente en el elemento o aspecto contractual, es decir en la esfera interna que regula las relaciones del socio con la compañía. En efecto, la sociedad mercantil regulada por el CCom 1829 estaba vinculada a la civil, la cual, por influencia del Derecho romano, era de carácter personalista, con reducida exteriorización y organización unitaria. GONZÁLEZ ORDÓÑEZ expresa con acierto esta cuestión: *el contrato de sociedad civil se limita a crear una situación de contenido económico afín a la comunidad de bienes, a la que se ha atribuido personalidad jurídica. Esta*

⁵¹⁰ GARRIGUES, J. (1956): *Curso ...*, pág. 307.

⁵¹¹ URÍA, R. (1987): *Derecho ...*, pág. 133.

⁵¹² GARRIGUES, J. (1974): "Teoría general de las sociedades mercantiles" en *RDM*, núm. 131, enero - marzo, Madrid, pág. 9.

⁵¹³ URÍA, R. (1987): *Derecho mercantil ...*, pág. 130.

⁵¹⁴ VISO, S. DEL (1864): *Lecciones elementales de historia ...*, pág. 211.

*personalidad facilita posibles relaciones con terceros; pero la sociedad civil no está pensada para tales relaciones. Con la sociedad civil se trata de distribuir entre los socios los lucros resultantes del uso o goce estático de bienes puestos en fondo común. (...) Por el contrario, las sociedades mercantiles están pensadas para la vida de relación. En ellas se trata de obtener lucros derivados de la organización comercial del tráfico con terceros*⁵¹⁵.

El elemento organizativo o el aspecto institucional, la esfera externa de las relaciones de la compañía con terceros, queda en un segundo plano de menor importancia, como se expone a continuación.

5. El artículo 264 del CCom 1829 no reconoce expresamente la creación de una nueva persona jurídica

Esta consideración (que se trata de una nota característica negativa) es de gran importancia. El efecto básico de la constitución de la sociedad es la aparición de una nueva persona jurídica, diferente de sus socios. Y esto, sorprendentemente, no es mencionado en el artículo 264 del CCom 1829.

Algún autor, como GIRÓN, piensa que no se trata de un olvido o error del legislador: *el Legislador no tiene en la cabeza la idea de la personalidad jurídica de las sociedades. (...) En este Código [el de 1829] no hay una declaración expresa de personalidad jurídica en las sociedades mercantiles. Como en las Ordenanzas [de Bilbao], esa idea no ha sido tenida en cuenta en la técnica legislativa. Importa la persona individual y no la social; la sociedad es sólo un negocio jurídico que crea una situación permanente y que interesa en tanto afecta a la situación patrimonial de sus componentes. Incluso entiende que ni implícitamente se juega con esa idea [la personalidad jurídica de la compañía] en la técnica legislativa*⁵¹⁶.

RUBIO parece mantener una postura similar al entender que la personalidad de las sociedades es una materia en la que *la reglamentación común recoge principios e instituciones nuevas y modifica lenta y rápidamente las tradicionales, de acuerdo a los principios del llamado Derecho especial [mercantil]*⁵¹⁷.

Los tratadistas coetáneos a nuestra Ley de 1848 no analizan con profundidad esta cuestión de la personalidad jurídica de la compañía independiente de sus socios. Quizá el motivo es que la consideraban implícita y, por tanto, innecesaria a los efectos de ser mencionada en el CCom 1829. Aun así, se pueden recoger cuatro comentarios a este respecto. En primer lugar, GONZÁLEZ HUEBRA, en 1859 —once años después de la aprobación de nuestra Ley de 1848 y treinta años después de la promulgación del Código de Sáinz de Andino—, al hablar de las formalidades de las sociedades mercantiles en general, manifiesta que, *resulta además de esta asociación una persona jurídica distinta de los individuos de que está compuesta, un nuevo comerciante por decirlo así, representado por los administradores del caudal común*⁵¹⁸.

⁵¹⁵ GONZÁLEZ ORDÓÑEZ, J. M^a. (1956): “Los criterios del Derecho español ...”, pág. 98.

⁵¹⁶ GIRÓN TENA, J. (1947): “Sociedades civiles y sociedades mercantiles ...”, págs. 19 y 20.

⁵¹⁷ RUBIO, J. (1947): “Sobre el concepto ...”, pág. 346.

⁵¹⁸ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil* ..., pág. 127.

En segundo lugar, RODRÍGUEZ, en 1861, después de exponer las características de la compañía mercantil frente a la civil, manifiesta que, *(c)on la formación de la sociedad nace un ser moral o persona jurídica comerciante, distinta enteramente de la de sus socios*⁵¹⁹.

En tercer lugar, DEL VISO, expone categóricamente que *(e)n el contrato de sociedad, como su objeto inmediato es crear una personalidad, y determinar el modo como se hayan de ejercer sus derechos*⁵²⁰.

Y, por último, existe una aportación importante en una publicación algo más tardía, pero anterior al Código de 1885, en la que MARTÍ DE EIXALÁ dice que *del propio contrato de sociedad mercantil se origina una persona jurídica, o lo que es lo mismo, un nuevo ser moral comerciante, de todo punto distinto a las personas de los socios* (el subrayado es nuestro). Y, a continuación, realiza una aclaración importante: *(e)ste principio [la creación de una persona jurídica nueva e independiente de sus socios], aunque no formulado en abstracto por la ley, se encuentra sancionado por ella en todas sus consecuencias*⁵²¹.

Nuestra opinión coincide con estos tres autores. Efectivamente, el texto legal no reconoce en ningún precepto la personalidad jurídica de la compañía, como hará el vigente artículo 116 del CCom 1885 (*una vez constituida la compañía mercantil, tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y contratos*), pero pensamos que el CCom 1829 reconoce este principio en muchos de sus artículos. Así, por ejemplo, todos los que regulan la responsabilidad de los socios en los diferentes tipos societarios se basan en una separación patrimonial de la sociedad y sus miembros; y, también, las compañías mercantiles son comerciantes y deben inscribirse (con independencia de sus socios) en el correspondiente RPGC.

Pero dada la falta de precisión legal sobre esta importantísima cuestión, el Legislador trató de corregirla, como dice GARRIGUES⁵²², desde mucho antes de la promulgación del CCom 1885. Así, ya en el Decreto de 20 de septiembre de 1869, en el que se formularon las bases para el Código de comercio, se decía que *al unirse por la asociación dos o más personalidades libres, brota un nuevo ser, un nuevo ente jurídico, una nueva personalidad, y de este hecho resultan dos clases de relaciones: unas, internas, que ligan a los socios entre sí; otras, externas, que enlazan a la sociedad misma con otras personas, a las que pudiéramos llamar terceros contratantes*.

⁵¹⁹ RODRÍGUEZ, J. M. (1861): *Elementos de Derecho civil, penal y mercantil de España*, tomo III (Parte Mercantil), Madrid, pág. 153.

⁵²⁰ VISO, S. DEL (1864): *Lecciones elementales de historia ...*, pág. 211.

⁵²¹ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil...*, pág. 258. Esas consecuencias, en su opinión, son cuatro. Primera, toda sociedad mercantil debe tener un domicilio, aun cuando no lo exija el artículo 286 CCom 1829 en el que se recoge el contenido mínimo de la escritura fundacional. Segunda, las sociedades mercantiles deben llevar los libros de contabilidad previstos en el CCom 1829. Tercera, todas las compañías mercantiles deben tener un nombre especial con el que se designe e identifique a la misma, diferenciándola de la identidad de sus socios. Y, cuarta, los acreedores de un socio no podrán considerarse por este solo hecho acreedores de la sociedad.

⁵²² GARRIGUES, J. (1976): "Teoría general de las sociedades mercantiles" en *RDM*, núm. 142, octubre – diciembre, Madrid, pág. 523.

6. La compañía mercantil es un comerciante

Esta nota se encuentra relacionada con la anterior (la personalidad jurídica) y con la cuestión del sistema objetivo o subjetivo del Derecho mercantil, expuesta más arriba. Si la compañía mercantil no tiene personalidad jurídica independiente de sus socios por influencia de la noción de sociedad civil tradicional, no puede ser comerciante. Los comerciantes son los socios. Esto último es lo que mantenía el sistema subjetivo anterior a la precodificación.

Pero la lectura de los preceptos del CCom 1829, como se expone a continuación, muestra que la sociedad mercantil debe inscribirse en el registro correspondiente y, por tanto, se caracteriza como un sujeto independiente de sus socios. Veamos brevemente el régimen legal.

El artículo 1 CCom 1829 define el concepto de comerciante en los siguientes términos: *los que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se han inscrito en la matrícula de comerciantes, y tienen por ocupación habitual y ordinaria el tráfico mercantil, fundando en él su estado político*. El artículo 11 establece la obligación de inscripción en la matrícula de comerciantes de la provincia mediante una declaración realizada ante la autoridad municipal correspondiente en la que se exprese los datos identificativos del comerciante, su ánimo de emprender la profesión mercantil y si la va a ejercer al por mayor o al por menor o a ambos a la vez.

El artículo 17 establece una presunción legal de ejercicio habitual del comercio cuando, una vez inscrito el comerciante en la matrícula, *anuncia al público por circulares, o por periódicos, o por carteles, o por rótulos permanentes expuestos en lugar público, un establecimiento que tiene por objeto cualquiera de las operaciones que en este Código se declaran como actos positivos de comercio, y a estos anuncios se sigue que la persona inscrita se ocupa realmente en actos de esta misma especie*.

La obligatoriedad de la inscripción de la compañía mercantil en su correspondiente registro viene recogida en el artículo 22 CCom 1829. Este precepto establece que en cada capital de Provincia se debe establecer un *Registro Público General de Comercio* que se dividirá en dos secciones. La primera, es la matrícula general de comerciantes en la que se inscriben todas las inscripciones que se expidan a los que se dediquen al comercio. La segunda, debe tomar razón por orden de número y fechas, entre otras, *de las escrituras en que se contrae sociedad mercantil, cualquiera que sea su objeto y denominación*.

Por lo tanto, toda compañía mercantil constituida según las formalidades del CCom 1829 debe inscribirse en el RPGC, con independencia de su objeto. En consecuencia, la compañía es reconocida como comerciante, sin tomar en consideración la condición de sus socios.

En relación a los requisitos formales para la inscripción en el RPGC, el artículo 25 dispone, respecto a las escrituras de sociedad, que debe presentarse *testimonio autorizado por el mismo escribano ante quien pasaron, que contenga las circunstancias que prescribe el artículo 290*. Este precepto regula el contenido del asiento que debe practicarse en el RPGC para el caso de compañías colectivas o comanditarias:

- 1) La fecha de la escritura y el domicilio del escribano ante quien se otorgó.
- 2) Los nombres, domicilios y profesiones de los socios que no sean comanditarios.
- 3) La razón o título comercial de la compañía
- 4) Los nombres de los socios autorizados para administrar la compañía y usar de su firma.
- 5) Las cantidades entregadas o que se hubieren de entregar por acciones o en comandita.
- 6) La duración de la sociedad.

La compañía anónima tiene su regulación específica en otro artículo, el 293, conforme al cual, *es condición particular que las escrituras de su establecimiento y todos los reglamentos de sometán al examen del T. de c. del territorio donde se establezca y, sin su aprobación, no podrá llevarse a cabo.*

El régimen de la inscripción registral de las compañías mercantiles es diferente en función del tipo societario. Las colectivas y comanditarias, deben ajustarse a lo previsto en el artículo 290. Las anónimas, se someten al artículo 293, que remite al examen y aprobación del T. de c., dadas las características especiales de esta forma social. Pero, en ambos casos, el CCom 1829 presupone que la compañía es un sujeto autónomo de sus socios y que debe obtener las preceptivas aprobaciones e inscripción en el registro correspondiente.

Las escrituras de compañía que no se inscriban en el RPGC, no producen acción entre los otorgantes para reclamar los derechos que en ellas se hubieran pactado, sin que por ello dejen de ser eficaces en favor de los terceros interesados que hayan contratado con la sociedad (artículo 28).

En la Doctrina de la época, RODRÍGUEZ recoge en su libro que la primera consecuencia del nacimiento de la personalidad jurídica independiente de la sociedad es

*que la sociedad por sí está obligada a llenar todos los deberes que pesan sobre los comerciantes: así que habrá de llevar los libros de contabilidad con iguales formalidades que el Código prescribe a aquéllos, encabezando sus asientos a nombre de la compañía y no de alguno de sus socios*⁵²³.

7. Pluralidad de contratantes, obtención de lucro y puesta en común de bienes e industria

Junto a las características citadas anteriormente, la definición del artículo 264 CCom 1829 recoge otras tres, también importantes.

⁵²³ RODRÍGUEZ, J. M. (1861): *Elementos de Derecho...*, pág. 153.

En primer lugar, la nota básica de la pluralidad de contratantes: *dos o más personas*, que en la actualidad, ha desaparecido desde que se admitiera la sociedad unipersonal para las sociedades anónimas y limitadas.

En segundo lugar, la necesidad de buscar un beneficio, es decir, *con objeto de hacer algún lucro* que, por la redacción del artículo 264 puede entenderse aplicable tanto a la sociedad como a sus socios o contratantes.

Y, en tercer lugar, la participación o *puesta en común de bienes e industria, o alguna de estas cosas*. La “industria” no se refiere a unas instalaciones fabriles (que debían ser prácticamente inexistentes en 1829) sino a las dos primeras acepciones que recoge el Diccionario de la R.A.E. La primera dice: *maña y destreza o artificio para hacer algo*, es decir, un cualificación para desarrollar un trabajo, fundamentalmente manual; y, la segunda, *conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales*.

C) ¿CAMBIO DE PLANTEAMIENTO EN EL CCom 1885?

Aunque el CCom 1885 exceda con mucho el ámbito de nuestro trabajo (la Ley de 1848) parece interesante recoger, brevemente, algunos comentarios doctrinales que comparan la noción de compañía mercantil entre el texto de Sáinz de Andino y el de 1885, pues ayudan a precisar sus notas características e indican la línea de la evolución de nuestro Derecho de sociedades.

Con carácter previo, se ha de citar la opinión de varios tratadistas en relación a la siguiente declaración de la *Exposición de Motivos del Proyecto de Código de comercio de 18 de marzo de 1882*, realizada en el apartado **LIBRO I.- ORIENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. Actos de comercio**:

Comenzando por el carácter general que ofrece el Proyecto, se observa desde sus primeros artículos que éste considera al Derecho mercantil bajo una faz completamente nueva, no sólo en cuanto a lo que debe ser el objeto principal de sus disposiciones, sino en lo que atañe a los elementos o fuentes que lo constituyen, en lo cual se distingue esencialmente del vigente Código.

En efecto: mientras éste [el de Sáinz de Andino], partiendo del concepto que tenían formado de las leyes comerciales los antiguos jurisconsultos, parece ser el Código propio y peculiar de una clase de ciudadanos, el Proyecto, de acuerdo con los principios de la ciencia jurídica, propende a regir todos los actos y operaciones mercantiles, cualquiera que sea el estado o profesión de las personas que los celebren.

Afirma GARRIGUES⁵²⁴ que el estudio comparativo del articulado de ambos Códigos (1829 y 1885) demuestra que el criterio es el mismo por la evidente razón que el texto de Sáinz de Andino se inspira en el *Code*, que no podía ser de tipo profesional, sino de naturaleza objetiva, bien que manifestada exclusivamente en el aspecto jurisdiccional.

⁵²⁴ GARRIGUES, J. (1959): *Curso ...*, pág. 129.

En el mismo sentido, GIRÓN⁵²⁵ dice que cuando se tacha al CCom 1829 de subjetivista, se olvida que no lo era mucho más que el *Code*.

URÍA critica este apartado de la Exposición de Motivos del CCom 1885 no tanto por su afirmación sobre el sistema subjetivo del Código de Sáinz de Andino, sino porque entiende que el CCom 1885 no sigue un sistema objetivo. En efecto, si bien es cierto que el artículo 2 del Código de 1885 al hablar de los actos de comercio *sean o no comerciantes los que los ejecuten* parece admitir la posibilidad de actos de comercio realizados por no comerciantes, *no es menos cierto que el articulado posterior del Código traiciona esa aparente concepción objetiva al exigir la participación de un comerciante, por lo menos, en casi todos los contratos, como requisito indispensable para que puedan ser considerados mercantiles (...). Esta circunstancia (criterio subjetivista) no permite mantener que el Código esté inspirado en un criterio objetivo*⁵²⁶.

Del análisis de los textos doctrinales transcritos, se pueden extraer dos conclusiones. La primera, que el sistema objetivo/subjetivo del CCom 1829 no sufre una modificación radical en el Código de 1885, a pesar de lo que proclama la Exposición de Motivos. La segunda, que aunque se pueda decir que ambos Códigos siguen el sistema objetivo, en realidad no se puede afirmar que sea un sistema objetivo puro, pues admite tácitamente elementos de carácter subjetivo de gran importancia.

Cabe aplicar estas conclusiones, en términos generales, a la definición de compañía mercantil de ambos textos. Dice así el artículo 116 CCom 1885:

El contrato de compañía, por el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo común bienes, industria o alguna de estas cosas, para obtener lucro, será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituido con arreglo a las disposiciones de este Código.

Una vez constituida la compañía mercantil, tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y contratos.

Como se puede advertir, se han modificado algunas de las notas características contenidas en el artículo 264 CCom 1829. Modificaciones que no parecen esenciales ni merecedoras de un comentario exhaustivo en este trabajo, excepto una que, sin duda, es la más importante: se recoge la nota de la personalidad jurídica de la compañía. Así lo expresa GIRÓN: *el artículo 116 del Código vigente, al corregir la redacción del artículo 264 del Código del 29, realizó una serie de cosas importantísimas. He aquí lo que nos interesa: añadió por vía legislativa en una “parte general” de las Sociedades la nota de la personalidad jurídica a todas [las sociedades]*⁵²⁷.

⁵²⁵ GIRÓN TENA, J. (1947): “Sociedades civiles y sociedades mercantiles...”, pág. 27.

⁵²⁶ URÍA, R. (1987): *Derecho mercantil* ..., págs. 19 y 20.

⁵²⁷ GIRÓN TENA, J. (1954): “Sobre los conceptos de sociedad ...”, pág. 397.

III. NOCIÓN DE COMPAÑÍAS MERCANTILES POR ACCIONES

Después de estudiar el concepto general de compañía mercantil y sus notas características, debe abordarse el análisis de la noción de las compañías mercantiles por acciones. Como se ha expuesto en el apartado anterior, estas compañías no han constituido un tipo autónomo o específico de compañía mercantil. Ni el CCom 1829, ni nuestra Ley de 1848 (tampoco ninguna otra norma posterior a éstas) han regulado como tipo social independiente las compañías por acciones. Solamente se encuentra una noción o caracterización de las compañías por acciones en el Preámbulo del Dictamen de la CCD⁵²⁸ de 16 de abril de 1847 (que, posteriormente no se incluyó en la Ley de 1848) a la que luego se hará referencia.

El Código de Sáinz de Andino recoge la tricotomía clásica de las compañías mercantiles: la colectiva, la comanditaria (dentro de ésta se encuentra la comanditaria por acciones) y la anónima. Nuestra Ley de 1848 se refiere, manteniendo la estructura del CCom 1829, a las anónimas y a las comanditarias por acciones por los motivos que se comentan en otro apartado.

A) LOS TIPOS SOCIETARIOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA Y DE LA COMANDITARIA POR ACCIONES

En el presente epígrafe se analizan los conceptos y notas características de la compañía anónima y de la comanditaria por acciones, en primer lugar, en el CCom 1829 y, después, en nuestra Ley de 1848.

1. La compañía anónima y la comanditaria por acciones en el CCom 1829

El texto de Sáinz de Andino regula de manera autónoma estos dos tipos societarios que, se reitera, no constituyen una nueva modalidad independiente de compañía mercantil. Ahora bien, interesa resaltar que, a pesar de esta regulación separada, el CCom 1829 recoge tres artículos en los que unifica el tratamiento de algunos aspectos de ambos tipos societarios.

El artículo 298 establece, en relación al embargo de las acciones del socio y de su eventual cuota de liquidación (artículo 296), que sólo se podrá realizar, en el caso de las sociedades anónimas o comanditarias, cuando la acción del socio *conste solamente por inscripción y no se le haya emitido cédula de crédito que represente su interés en la sociedad*.

El artículo 310 otorga a los socios de las compañías mercantiles el derecho a examinar todos los documentos comprobantes de los balances que se formen para verificar el estado de la administración social. *En las sociedades establecidas por acciones* [el texto se refiere simultáneamente a las anónimas y a las comanditarias por acciones, sin hacer diferenciación alguna] *podrá hacerse derogación de esta regla general por pacto establecido en el contrato de sociedad, o por disposición de sus*

⁵²⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393. Recogido también en la GdM de 19 de abril de 1847, núm. 4600.

reglamentos aprobados que determinen el modo particular de hacer este examen, sujetando a su resultado la masa general de accionistas.

En el artículo 330 también se hace una referencia a *las sociedades constituidas por acciones* (tanto anónimas como comanditarias), en las que sólo puede tener lugar la disolución por el cumplimiento del término establecido en el contrato de sociedad o de su objeto social, así como por la pérdida entera del capital social. En el resto de las compañías mercantiles, las causas de disolución total son las recogidas en el artículo 329.

Con independencia de estos tres artículos citados, que constituyen la excepción, el CCom 1829 regula autónomamente las compañías anónimas y las comanditarias por acciones, que se analizan a continuación.

a) La compañía comanditaria por acciones

El CCom 1829 no recoge una definición de compañía comanditaria por acciones. El artículo 265, en el que se establecen los tres tipos de estas sociedades, en su apartado segundo se dice que puede contraerse compañía mercantil *prestando una o varias personas los fondos para estar a las resultas de las operaciones sociales, bajo la dirección exclusiva de otros socios que los manejen en su nombre particular: esta se titula compañía en comandita.*

Comenta GONZÁLEZ HUEBRA⁵²⁹ que se trata de un compuesto de las colectivas y anónimas al tener unos socios que se obliguen solidariamente y otros que puedan evitar esta responsabilidad, así como la publicidad de sus nombres.

La limitación de la responsabilidad de los socios comanditarios en las pérdidas de la compañía se contrae a los fondos que aportaron o se comprometieron a aportar al capital de la sociedad en comandita (artículo 273).

Puede dividirse en acciones el capital de las compañías en comandita y subdividirse dichas acciones en cupones. Dice MARTÍ DE EIXALÁ⁵³⁰ que no deja de ser en comandita la sociedad porque su capital o fondo que le sirva de base se haya dividido en acciones. La sociedad puede emitir acciones sin dejar de ser una compañía comanditaria, a la que se le seguirán aplicando las normas de este tipo societario, normas que no se comentan aquí por exceder del ámbito del presente trabajo.

b) La compañía anónima

Veamos en primer lugar el régimen establecido en el CCom 1829 y comentarios de los tratadistas de la época.

i. Regulación legal

El CCom 1829, como en el caso de la compañía comanditaria por acciones, no ofrece una definición de compañía anónima. El artículo 265 se refiere a ella en los siguientes términos:

⁵²⁹ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil...*, pág. 188.

⁵³⁰ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil ...*, pág. 262.

Puede contraerse la compañía mercantil (...) 3. Creándose un fondo por acciones determinadas para girarlo sobre uno o muchos objetos, que den nombre a la empresa social, cuyo manejo se encargue a mandatarios o administradores amovibles a voluntad de los socios, y esta compañía es la que lleva el nombre de anónima.

El CCom 1829 dedica doce artículos a regular específicamente diversos aspectos del régimen propio de las compañías anónimas. Un comentario extenso de la regulación de estas sociedades en el Código de Sáinz de Andino se encuentra en el capítulo sobre los antecedentes de la Ley de 1848, en su apartado dedicado al régimen jurídico de las sociedades anónimas y comanditarias por acciones. En el presente capítulo resulta más adecuado analizar la definición legal de la compañía anónima y para ello se acudirá, en primer lugar, a los tratadistas de la época.

BACARDÍ, años antes de la promulgación de la Ley de 1848, en su *Tratado*, define la sociedad anónima transcribiendo el artículo 265.3 CCom 1829 en los siguientes términos: *(l)ámase compañía anónima la que se establece creándose un fondo por acciones determinadas para girar con él sobre uno o mucho objetos que den nombre a la empresa social; cuyo manejo se encargue a mandatarios o administradores amovibles a voluntad de los socios*⁵³¹. Destaca que la calificación de “anónima” no es consecuencia de que sus operaciones sean ocultas o secretas sino porque, a diferencia de los otros tipos sociales, no tiene razón social, ni se designa por el nombre de sus socios, sino por los objetos para que se ha constituido. Este autor se refiere a este tipo de compañía como *anómala o anónima*.

LASO⁵³² también transcribe el artículo 265.3 CCom 1829 para ofrecer la definición. Omite la referencia a la limitación de responsabilidad de los socios, si bien, al describir los *efectos de la compañía anónima*, detalla los siguientes: *se rigen por sus reglamentos aprobados por el Gobierno*⁵³³. *El Administrador responde sólo de su administración, el fondo, de las obligaciones sociales, y si se emitiesen acciones, como puede hacerse, debe ejecutarse por el valor existente en caja.*

GONZÁLEZ HUEBRA, se limita a parafrasear el tan citado artículo 265.3 en los siguientes términos: *Sociedad anónima es la que se forma creando un fondo por acciones para emplearlo en determinados objetos por mandatarios elegibles y amovibles a voluntad de los socios*⁵³⁴.

RUBIO Y LÓPEZ la describe como aquella sociedad *en que se crea un fondo representado por acciones determinadas que giran sobre uno o muchos objetos, limitándose la responsabilidad de cada socio al número de acciones que representa. Esta circunstancia característica es la que da nombre a esta especie de compañías,*

⁵³¹ BACARDÍ, A. (1840): *Tratado de Derecho Mercantil de España*, tomo II, Barcelona, págs. 233, 250 – 251.

⁵³² LASO, E. (1849): *Elementos de Derecho mercantil...*, págs. 22 y 23.

⁵³³ Sorprende que no se haga mención a la aprobación parlamentaria. Quizá es consecuencia de que el libro se publica en 1849 y por descuido se omitió esta referencia, por otro lado, básica para la nueva Ley de 1848.

⁵³⁴ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil ...*, pág. 150.

*pues que en ellas a nada conduce el nombre de los socios y sí las acciones que poseen*⁵³⁵.

RODRÍGUEZ se refiere a la compañía anónima en los siguientes términos: *es la que se forma con un capital determinado que se divide en cierto número de acciones, respondiendo cada uno de los socios de las operaciones de la compañía solamente con el importe de las que posea*⁵³⁶.

MARTÍNEZ ALCUBILLA⁵³⁷, en su edición de 1862 se limita a transcribir el artículo 265.3 CCom 1829.

GÓMEZ DE LA SERNA Y REUS, en sus anotaciones al CCom 1829, al comentar el artículo 265.3, exponen las diferencias de la sociedad anónima respecto de las otras sociedades mercantiles en unos términos muy ilustrativos, que se transcriben a continuación:

*La sociedad anónima es llamada así, porque no lleva el nombre de ningún socio y carece de razón social designándose solo por su objeto: tiene puntos de semejanza con la comanditaria dimanados de que así como en ésta hay socios que tienen limitada su responsabilidad al caudal que lleven a la compañía, en aquélla la responsabilidad de todos los socios está reducida al capital que se obligan. De aquí resulta que el público y los que con la sociedad contratan busquen la garantía del cumplimiento de las obligaciones en el capital social, no en la responsabilidad de personas determinadas. En esto se diferencian las sociedades anónimas también de las regulares colectivas. En ellas la sociedad es una persona jurídica representada por gerentes, directores o administradores que son considerados como simples mandatarios*⁵³⁸.

DEL VISO ofrece un concepto en el que incide en el carácter anónimo o desconocido de la identidad de los socios: *es llamada así porque no lleva el nombre de ninguno de los asociados como distintivo propio de ella, la define el Código diciendo (...). De esta definición resulta, que la calificación de “anónima” que tiene esta sociedad, no la recibe porque sus operaciones deban ser ocultas; sino solamente, como expresa al mismo tiempo el Código en otro artículo, por la circunstancia de no tener razón social*⁵³⁹.

MARTÍ DE EIXALÁ recoge un concepto de compañía anónima en el que se resalta la limitación de la responsabilidad: *es la que se crea con un capital dividido en número determinado de acciones, y en la que no hay socio alguno que responda del resultado de las operaciones sociales, más allá del valor que representan las acciones por las que*

⁵³⁵ RUBIO Y LÓPEZ, J. (1857): *Novísimo manual de Derecho mercantil* ...,pág. 118.

⁵³⁶ RODRÍGUEZ, J. M. (1861): *Elementos de Derecho*..., pág. 155.

⁵³⁷ MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. (1862): *Diccionario de Administración; obra de utilidad práctica par los Alcaldes y Ayuntamientos y para todos los funcionarios públicos en el orden judicial y administrativo*, tomo V, voz “Sociedades mercantiles”, pág. 625. Esta obra ofrece pocas opiniones doctrinales, limitándose, en líneas generales, a la recopilación de los textos normativos aplicables a los temas seleccionados por el autor.

⁵³⁸ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio* ..., pág. 99.

⁵³⁹ VISO, S. DEL (1864): *Lecciones elementales de historia* ..., pág. 223.

*se interesa*⁵⁴⁰. No hace referencia al objeto social, denominación social ni amovilidad de los administradores, como recoge el artículo 265.3 CCom 1829.

Este mismo tratadista subraya que no es una sociedad personalista, sino capitalista, pues el hecho de que todo el capital se divida en acciones y de que ningún socio responda personalmente de las deudas sociales, *indica que en la sociedad anónima se atiende principalmente a los capitales en vez de las personas a que pertenecen*⁵⁴¹. También destaca que la sociedad anónima es una excepción al principio general de la intransmisibilidad de la participación del socio, pues cualquier socio puede vender libremente todas o parte de las acciones de las que sea titular.

Estas aportaciones doctrinales se complementan con los estudios realizados por la Doctrina más reciente, que dispone de una perspectiva histórica de gran utilidad. En efecto, la primera cuestión que se resalta por parte de tratadistas más modernos es la conocida dependencia del CCom 1829 respecto del *Code*, la cual se manifiesta, sin duda alguna, en la figura de la compañía anónima.

En este sentido, RUBIO afirma que *los preceptos que el Código de 1829 dedica a la Sociedad anónima se enlazan directamente con el code de commerce*⁵⁴². Pero realiza una puntualización interesante, que compartimos plenamente: nuestro Código incide en la unidad funcional de todos los tipos de compañías mercantiles, regulando a la anónima sin sección independiente, dentro de las generales en que se distribuye el articulado relativo a “las diferentes especies de compañías” (artículos 264 a 358).

El punto de partida de GIRÓN⁵⁴³ es que las sociedades anónimas no pasan a las fuentes mercantiles hasta la Codificación. Dichas compañías se integrarán con los demás tipos mercantiles de sociedad, a pesar de haberse conformado al margen de los textos jurídico-mercantiles históricos. Con estos antecedentes afirma que el concepto de compañía anónima no se puede conformar por referencia a la sociedad civil, en sentido restringido. No es una subespecie de “sociedad” sino una “corporación”.

URÍA⁵⁴⁴, incide en que la sociedad anónima del CCom 1829 es una compañía ya privatizada en todo lo relativo a su funcionamiento y organización. Han desaparecido los privilegios, la injerencia del Estado en la vida societaria y ésta se rige democráticamente por la voluntad de los socios en régimen de igualdad de derechos.

La evolución conceptual de la sociedad anónima es comentada por GARRIGUES, quien mantiene que *la trayectoria vital de la s. a. vuelve sobre sí misma, como una curva que se cierra en su punto de arranque*⁵⁴⁵. En su inicio, la compañía anónima se encontraba bajo la tutela del Estado al ser una organización “aristocrática”, basada en la desigualdad de derechos y en la preponderancia de los grandes accionistas y de los directores de la sociedad. El cambio político de la Revolución francesa genera un nuevo concepto de compañía anónima, recogido en nuestro CCom 1829, en el que se ha liberado de la intervención estatal y, además se ha hecho democrática.

⁵⁴⁰ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil*..., pág. 263.

⁵⁴¹ Ídem.

⁵⁴² RUBIO, J. (1950): *Sáinz de Andino* ..., págs. 159 y ss.

⁵⁴³ GIRÓN TENA, J. (1976): *Derecho de sociedades* ..., pág. 73.

⁵⁴⁴ URÍA, R. (1987): *Derecho mercantil* ..., pág. 186.

⁵⁴⁵ GARRIGUES, J. (1956): *Curso* ..., págs. 354 y 355.

Como puede observarse, los tratadistas modernos, al referirse al concepto de compañía anónima del CCom 1829 no analizan el contenido de su artículo 265.3, sino que se refieren a dicho concepto como un punto de inflexión en la evolución conceptual del mismo. Es la época en la que desaparecen las notas básicas del concepto de compañía por acciones precodificada y se establecen las bases del concepto actual de dicho tipo societario. Pero es interesante referirlas, pues complementan adecuadamente la noción de compañía anónima recogida en el texto legal y en los tratadistas de la época.

ii. Notas características básicas

El artículo 265.3 CCom 1829 recoge la noción legal de compañía anónima, de la cual derivan una pluralidad de notas características. Todas ellas son objeto de estudio en varios capítulos del presente trabajo. Por este motivo, no se va a realizar ahora un exhaustivo comentario a dichas notas. Solamente vamos a añadir algunos matices o enfoques que complementan lo que se expone en otros lugares. En concreto, nos referimos a tres: la limitación de la responsabilidad de los administradores y socios; la singularidad de la aprobación por los T. de c., en comparación con el *Code*; y, por último, la apertura a nuevos inversores.

En cuanto a la limitación de responsabilidad, lo más destacable es que el CCom 1829 la establece tanto para los socios como para los administradores. Respecto a estos últimos, quizá no se ha reparado en la importancia que tuvo esta cuestión para los tratadistas de la época.

Esta materia se encuentra regulada en los artículos 277 y 278 CCom 1829. Es interesante reseñar que el primero de ellos regula la limitación de responsabilidad de los administradores: *los administradores de las sociedades anónimas (...) no son responsables personalmente*. Esto es consecuencia de la situación histórica de aquel momento, dado que en las compañías mercantiles en general, los administradores eran responsables solidarios de las deudas sociales. Por eso, este primer precepto consagra la limitación de responsabilidad de los administradores.

Y como continuación del artículo 277, el siguiente, establece que *los socios no responden “tampoco” de las obligaciones de la compañía anónima, sino hasta la cantidad de interés que tengan en ella*. El adverbio “tampoco” que se ha entrecomillado, indica que la limitación de responsabilidad no es exclusiva de los accionistas, sino también (e incluso con anterioridad a aquéllos) de los administradores sociales.

En este sentido, GONZÁLEZ HUEBRA manifiesta que *como en estas sociedades [las anónimas] solo el fondo social y el de reserva son los que garantizan el resultado de los negocios, los administradores no responden bajo tal concepto a los extraños con quien contratan*⁵⁴⁶ (si responderán, en su caso, frente a la sociedad que administran). Con carácter general, subraya que la gran ventaja de estas compañías mercantiles consiste en *no comprometer la fortuna de los que ponen capital*, si bien tienen el gran

⁵⁴⁶ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, pág. 163.

inconveniente de *prestarse más que las otras a proyectos aventurados y peligrosos y aún al agio y al fraude*⁵⁴⁷.

RUBIO Y LÓPEZ resalta, como excepción al régimen de los administradores de los otros tipos de sociedades mercantiles, que en las anónimas, *(l)os administradores no serán tampoco personalmente responsables sino del buen desempeño de las funciones, que según los reglamentos, estén a su cargo.*⁵⁴⁸

GÓMEZ DE LA SERNA y REUS Y GARCÍA señalan, en cuanto a la limitación de la responsabilidad, que los administradores *no responden ni personal ni solidariamente de los empeños que toman para la sociedad, como no se extralimiten.* Respecto a los socios, explican que *el capital social es la garantía de los acreedores de las sociedades anónimas.*⁵⁴⁹

MARTÍ DE EIXALÁ, con más perspectiva histórica, ya no incide en la limitación de la responsabilidad de los administradores de las compañías, sino que se centra sólo, a efectos de las notas características de este tipo social, en los socios: *en la sociedad anónima no hay socio alguno que responda del resultado de las operaciones sociales, más allá del valor que representan las acciones por las que interesa.*⁵⁵⁰

En la Doctrina reciente se pierde esta nota de limitación de responsabilidad de los administradores, que se encuentra presente en los tratadistas coetáneos del CCom 1829 y de nuestra Ley de 1848. Los comentarios sobre la limitación de responsabilidad se centran en los accionistas.

En la actualidad, PETIT ha señalado que es inexacta la expresión “los accionistas responden limitadamente”. La lectura de los artículos 273 y 278 CCom 1829 le llevan a concluir que *la falta de vínculos jurídicos entre el accionista y los acreedores sociales supone que el primero nunca responde –limitada ni ilimitadamente- ante los segundos: tan sólo lo hace la sociedad, con sus capitales y ganancias*⁵⁵¹.

Respecto a la autorización de los T. de c. o de la Real aprobación, destaca la ausencia de comentarios en los tratadistas coetáneos al CCom 1829. Es algo que se asume como evidente, que no es objeto de estudio comparado y que no plantea especiales problemas, aun cuando se salga del régimen ordinario de autorización o aprobación de las demás compañías mercantiles, como establece el texto del artículo 293 CCom 1829, que comienza diciendo *es “condición particular” de las compañías anónimas para continuar del siguiente modo: que las escrituras de su establecimiento y todos los reglamentos que han de regir para su administración y manejo directivo y económico, se han de sujetar al examen del tribunal de comercio del territorio en donde se establezca y sin su aprobación no podrán llevarse a efecto.*

⁵⁴⁷ Ídem, pág. 150.

⁵⁴⁸ RUBIO Y LÓPEZ, J. (1857): *Novísimo manual de Derecho mercantil* ..., pág. 134.

⁵⁴⁹ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio*..., pág. 102.

⁵⁵⁰ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil* ..., pág. 263.

⁵⁵¹ PETIT, C. (2009): “El anonimato de la sociedad mercantil ...”, en LEÓN SANZ, F. J. (dir.) y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, S. Y PUY FERNÁNDEZ, G. (coord.) *Tendencias actuales*..., pág. 87.

El artículo 294 consagra una excepción sobre el régimen particular de las sociedades anónimas: las que *hayan de gozar de algún privilegio que Yo le conceda para su fomento, se someterán sus reglamentos a mi soberana aprobación.*

Es de gran interés en relación a estos dos artículos lo que ha comentado algún autor más cercano a nosotros en el tiempo y, por tanto, con perspectiva histórica para analizar con más precisión el tema. RUBIO⁵⁵² subraya que el Código de Sáinz de Andino se separa del *Code en un tema de gran importancia para la vida de las sociedades anónimas: el de la autorización gubernativa.* El *Code* exigía la aprobación o autorización del Gobierno dadas las características específicas de la compañía anónima. Pero Sáinz de Andino se desmarca de esta exigencia y apuesta por el principio de libertad.

Por último, en relación a la apertura a nuevos inversores, cabe señalar que los comentaristas del CCom 1829, en términos generales, no tratan esta característica. En cambio, en los debates parlamentarios de nuestra Ley de 1848 se hacen frecuentes referencias a la posibilidad que ofrecía la compañía anónima a personas que, permaneciendo en el anonimato, podían participar de la actividad empresarial invirtiendo sus caudales y patrimonio sin perder la honra u honor que exigía su pertenencia a determinadas clases sociales.

Son varias las referencias a este tema en los debates del Congreso de los Diputados y del Senado. Se recogen dos de Sáinz de Andino y otra del Senador, Sr. López Ballesteros, ambas en el Senado. Con motivo de una larga discusión sobre la prohibición de emisión de acciones al portador, Sáinz de Andino (Presidente de la CS) insistió en la importancia de permitir que personas con liquidez pudieran invertir en compañías anónimas sin que tuvieran que hacer pública su condición de accionistas de esas empresas. Esta era una condición esencial para obtener rendimiento de capitales que quedarían inactivos, si esto no se permitiera. Estas son sus interesantes palabras:

- *Hay además muchas personas que por su estado, por su posición social, por modestia o por consideraciones privadas no quieren que figuren sus nombres en las empresas comerciales ni en otra alguna; y sería un mal mayor que el abuso que pudiera resultar el consentir que capitales de estas personas permanecieran ociosos y no entrando en la circulación, fuesen infecundos.*⁵⁵³
- *La acción al portador es indudablemente uno de los medios más eficaces para fomentar las grandes Compañías y atraer a ellas muchos capitales que de otro modo no vendrían a sus cajas. No entra ciertamente en el ánimo de muchas personas dar publicidad a sus medios de fortuna; sino que al contrario desean ocultarlos por motivos más o menos fundados, pero que siempre deben respetarse; (...) y no faltan tampoco algunos que por miramientos de delicadeza, por espíritu de preocupación, o por huir de compromisos, no quieren aparecer inscritos en las empresas mercantiles. ¿Y por qué ha de desatenderse el interés, el gusto y aun el capricho de cuantos se hallen en alguno de aquellos casos, negándoles el medio de interesarse en las Sociedades anónimas, tomando acciones al portador? Las consecuencias de este error*

⁵⁵² RUBIO, J. (1950): Sáinz de Andino ..., pág. 159.

⁵⁵³ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 276.

*serían que permanecerían estancados y estériles muchos capitales, dejando de concurrir al fomento de la riqueza pública, y que se rebajaría sobremanera la concurrencia de licitadores para tomar participación en unas compañías a cuyo alcance están únicamente las grandes empresas que levantan rápidamente la prosperidad económica de los países donde se acierta a fundarlas sobre su verdadera base.*⁵⁵⁴

Y, por su parte, el Senador López Ballesteros abundó en estas mismas ideas de Sáinz de Andino:

*En lo que no hay duda es que, como dijo la Comisión, personas en la apariencia de pobres, o que no quieren aparecer ricas, o que realmente tienen pequeños ahorros, como ocho, diez o pocos más miles de reales, los emplean con confianza y facilidad en acciones al portador de una Sociedad, de cuya probidad y solidez no duda, y dejarían de emplearla, concurriendo de este a la circulación, si su nombre hubiese de ser conocido*⁵⁵⁵.

Aunque no se dispone de datos cuantitativos al respecto, es de suponer que individuos pertenecientes a clases sociales a las que, por tradición (u otras razones), les estaba prohibido o desaconsejado participar en negocios económicos, tratasen de impulsar instituciones jurídico-empresariales como la compañía anónima para obtener rendimiento de su patrimonio. Además, esos individuos formaban parte de grupos con poder e influencia para propiciar cambios normativos.

No sería de extrañar que una parte de los afectados por los abusos y fraudes del mal funcionamiento de las compañías anónimas después de la entrada en vigor del CCom 1829, fueran también personas de la nobleza, clero, ejército, etc., y no sólo los pequeños ahorradores. Respecto a estos últimos, HIERRO ANIBARRO⁵⁵⁶ mantiene que los accionistas de estas compañías anónimas no pertenecían a la gran burguesía que invertía capitales en la exportación, sino a una burguesía media de provincias que, aunque disponía de menos patrimonio, era más extensa en cuanto al número. Junto a ella, como se dice, debieron invertir también personas de otras clases sociales que lo hicieron porque podían permanecer ocultos.

La Doctrina posterior ha incidido en este aspecto. GIRÓN destaca que la sociedad anónima de aquel periodo iba unida a la *Gran Empresa*, y más específicamente a la *canalización del ahorro de personas extrañas al mundo de los mercaderes (...)*. Ya entonces la participación de público extraño a la profesionalidad empresarial añade, al interés público del pasado, el punto de vista protector de la particular peligrosidad de este llamamiento de capitales. La idea de una pequeña sociedad anónima no aparece, ni siquiera como una fórmula posible, porque precisamente la individualidad de cada empresa aparece asociada con su interés general y con su magnitud y el sector de aplicación jurídico privado tiene una importancia todavía menor.⁵⁵⁷

⁵⁵⁴ Ídem, pág. 284.

⁵⁵⁵ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 293.

⁵⁵⁶ HIERRO ANIBARRO, S. (1998): *El origen ...*, págs. 41 y ss.

⁵⁵⁷ GIRÓN TENA, J. (1986): "Las Sociedades mercantiles ...", págs. 192 y 193.

En este sentido de la participación de no comerciantes en las sociedades anónimas, el mismo autor citado en el párrafo anterior⁵⁵⁸ transcribe el siguiente texto del *Diccionario* de SAVARY: *las sociedades anónimas existen no solamente entre comerciantes y negociantes; hay también nobles, clérigos y militares que entran en ellas junto con aquéllos con la intención de hacer valer su dinero.*

Como se verá en el siguiente epígrafe, esta nota característica de la compañía anónima se diluye con la entrada en vigor de nuestra Ley de 1848 porque sólo autoriza la emisión de acciones nominativas en las que figura el nombre de su titular y del que queda constancia en el libro de socios. Esta modificación debió desincentivar la inversión de personas pertenecientes a esos grupos sociales que por tradición, costumbre u otros motivos, debían permanecer al margen de los negocios económicos.

2. La compañía anónima y la comanditaria por acciones en la Ley y Reglamento de 1848

Una vez estudiadas la regulación y notas características de la compañía anónima y de la comanditaria por acciones en el CCom 1829, se ha de finalizar la exposición de esta parte con un análisis de la noción de cada una de dichas sociedades en el texto de la Ley y del Reglamento de 1848.

Esta Ley no regula las compañías mercantiles por acciones como un nuevo tipo societario. Por este motivo, se ha de analizar por separado los dos tipos societarios que componen la categoría de compañía mercantil por acciones: la anónima y la comanditaria por acciones. El único texto que ofrece una noción descriptiva de la compañía mercantil por acciones se encuentra en el Preámbulo del Dictamen de la CCD sobre el PL 1848⁵⁵⁹. Dice así:

La compañía mercantil por acciones, cuya denominación comprende a todas aquellas en que la responsabilidad se ciñe al fondo social, no entra en la esfera general del comercio; su existencia es de suyo una excepción del derecho común; su responsabilidad limitada le da por sí sola el carácter de una especie de privilegio; por consiguiente, sólo un objeto de reconocida utilidad pública, fuera del alcance y superior a los medios del capital privado, puede autorizar con justicia su establecimiento.

Este texto, aunque carece de fuerza legal, pues no fue recogido en la versión final de la Ley de 1848, es de gran importancia por ser el único que contempla unitariamente las compañías anónimas y las comanditarias por acciones. Su contenido es interesante y sugerente, pero, como se dice, no se le puede otorgar rango normativo. Por este motivo, pensamos que los comentarios deben centrarse en el texto legal, sirviendo de orientación esta noción descriptiva que pone el acento en las notas características de la limitación de responsabilidad, carácter privilegiado y objeto social de utilidad pública.

La idea básica por la que se debe empezar el análisis de las compañías anónimas y comanditarias por acciones es el siguiente. La Ley de 1848 no complementa o

⁵⁵⁸ GIRÓN TENA, J. (1947): “Sociedades civiles y sociedades mercantiles ...”, pág. 16.

⁵⁵⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393. Recogido también en la GdM de 19 de abril de 1847, núm. 4600.

desarrolla lo previsto en el CCom 1829 sobre compañías anónimas y comanditarias por acciones, sino que lo deroga y sustituye, si bien la disposición derogatoria de la Ley de 1848 no especifica las normas suprimidas, pues hace la siguiente genérica remisión: *quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley* (artículo 21). La técnica derogatoria no es precisa, puesto que unos artículos quedan total o parcialmente en vigor y otros no. Incluso se producen remisiones expresas en el Reglamento de 1848 (por ejemplo su artículo 33) al CCom 1829 (artículo 283).

a) La compañía comanditaria por acciones

Como se dijo al inicio de este capítulo, la Ley de 1848 no ofrece una definición de compañía comanditaria por acciones. También se abordó el motivo por el cual nuestra Ley de 1848, incluye a las comanditarias por acciones dentro de su ámbito de aplicación. Las razones, como se recogió en el debate de la sesión del Congreso de los Diputados del 20 de abril de 1847 entre los Diputados Sres. Ordax y Miota⁵⁶⁰ (este último miembro de la CCD del PL 1848), se pueden resumir de la siguiente manera.

Si la Ley de 1848 trata de evitar los fraudes y abusos generados por la actividad de las sociedades anónimas, no se puede dejar una puerta de escape a la utilización de las compañías comanditarias por acciones. Por este motivo, debía incorporarse dicho tipo societario al ámbito de aplicación de la Ley de 1848, a pesar de las razones aducidas por el Diputado Sr. Ordax, que se recogieron al principio del presente capítulo.

Por lo tanto, la Ley de 1848 no regula sistemáticamente la compañía comanditaria por acciones, no ofrece un concepto de la misma y, además, es considerada como algo añadido o de segundo orden dentro del objetivo del Legislador.

Prueba de lo que se acaba de decir es que con gran frecuencia en los debates parlamentarios del PL 1848 se hace referencia a las compañías anónimas, sin incluir ni tener en cuenta a las comanditarias por acciones. Incluso, como se citó más arriba, el legislador de 1885, en la Exposición de Motivos del CCom 1885, dice textualmente: *la Ley de 28 de enero de 1848, reformando el Código de comercio sobre la constitución de sociedades anónimas ...*, sin ninguna referencia a las sociedades comanditarias por acciones, que pasan como una hermana pequeña olvidada.

Una breve referencia histórica ilustra esta cuestión. Pocos días antes de presentarse al Parlamento el 9 de febrero de 1847 el primer PL 1848, el Gobierno, mediante RO⁵⁶¹ promovida por el entonces Ministro de CIOP, Sr. Roca de Togores, suspendió transitoriamente la competencia de los T. de c. para aprobar las compañías anónimas. Se produjo *de facto* una derogación del artículo 293 del CCom 1829, lo cual pone de manifiesto una carencia de rigor jurídico al ser derogado un precepto de rango legal por una RO.

Es de reseñar que esa RO de 9 de febrero de 1847 se refiere exclusivamente a las compañías anónimas. Días más tarde, el 27 de febrero de 1847, se recoge en el DsC⁵⁶² el *Proyecto de ley, presentado por el Sr. Ministro de Comercio* [Sr. Roca de Togores, el

⁵⁶⁰ Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, págs. 1428 y ss.

⁵⁶¹ GdM de 14 de febrero de 1847, núm. 4536.

⁵⁶² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, págs. 653 y 654.

mismo que promovió la citada RO] *sobre sociedades anónimas*. Subrayamos “sobre sociedades anónimas” para insistir en que las comanditarias por acciones no se citan ni parece que se tomen en consideración a estos efectos. En efecto, en el breve Preámbulo del PL 1848 se refiere exclusivamente a las anónimas pero, en cambio, su artículo 1 establecía lo siguiente: *No podrá constituirse sociedad alguna cuyo capital en el todo o en parte se divida en acciones, sea anónima, comanditaria o de cualquier especie o denominación, sin que se autorice su formación por un Real decreto*. Se observa claramente la falta de coordinación o precisión del título del PL 1848 con su ámbito de aplicación especificado en el artículo 1.

Pocos meses más tarde, el nuevo Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz, promovió el RD de 15 de abril de 1847⁵⁶³ por el que se dejaba sin efecto la RO de 9 de febrero de 1847 sobre las compañías anónimas y se establecía que a partir de ese momento y hasta que se aprobara una ley sobre el particular, *no podrá constituirse ninguna, sea anónima o comanditaria, sin que su formación sea autorizada por un Real decreto* (el subrayado es nuestro). Por tanto, el ámbito de aplicación de este RD incluía tanto las anónimas como las comanditarias por acciones.

El RD de 15 de abril de 1847 se aprueba la víspera de que se recoja en el DsC el Dictamen de la CCD sobre el *Proyecto de Ley relativo a compañías mercantiles por acciones*⁵⁶⁴. La publicación del citado RD se realiza en la GdM de 17 de abril. Esta situación, a la que se le dedica cierta atención en el capítulo sobre la formación y tramitación parlamentaria de la Ley de 1848, fue especialmente conflictiva, no tanto por la referencia a las sociedades comanditarias por acciones, cuanto porque el Dictamen de la CCD modificó sustancialmente el anterior, presentado por el Sr. Roca de Togores, en el sentido de exigir la aprobación legal para determinadas compañías mercantiles por acciones. En cambio, el RD de 15 de abril establecía exclusivamente la autorización gubernativa, una vez despojados los T. de c. de la facultad de autorizar las compañías anónimas.

Poco antes de la publicación del RD de 15 de abril, cuando la CCD tenía ya elaborado su Dictamen sobre el PL 1848, tuvo lugar una reunión para intercambio de pareceres entre miembros de dicha Comisión y representantes del Gobierno, incluido el nuevo Ministro de CIOP. En la sesión del Congreso de los Diputados de 21 de abril de 1847, los miembros de la CCD reprocharon al Ministro la aprobación del RD en un momento inoportuno y sin coordinarlo o hacerlo coherente con el PL 1848. El Diputado, Sr. Ríos Rosas, miembro de la CCD, criticó duramente al Ministro. Éste, en un momento de su contestación, hizo la siguiente referencia a las compañías comanditarias por acciones, que nos parece importante transcribir aquí:

Respecto al artículo⁵⁶⁵ en que S.S. [Sr. Ríos Rosas] encuentra contradicción, me limito a su simple lectura. Dice éste que todas las sociedades por acciones, todas las sociedades existentes, todas la que se formen, están sujetas a esa responsabilidad. En ese artículo no se ha querido decir más de lo que ha dicho

⁵⁶³ GdM de 17 de abril de 1847, núm. 4598.

⁵⁶⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393. Recogido también en la GdM de 17 de abril de 1847, núm. 4600.

⁵⁶⁵ Se refiere al artículo 9 del RD de 15 de abril de 1847 que dice así:

Las disposiciones anteriores son aplicables y obligatorias a todas las compañías, de cualquiera especie o denominación, cuyo capital en todo o en parte se divida por acciones.

*la ley, y no se extiende solo a las sociedades anónimas, sino a las comanditarias. Ese artículo, señores, me fue sugerido por la comisión. En el seno de la comisión, al retirarme de ella (...) se me dijo: (...) tenga Vd. cuidado de que ese decreto no deje abierta la puerta a las sociedades comanditarias, porque sería falsear la prohibición; y entonces, señores, aproveché esta indicación de la comisión (el subrayado es nuestro)*⁵⁶⁶.

Poco después intervino por alusiones el Diputado Sr. Miota, pues era quien había hecho la advertencia sobre la inclusión de compañías comanditarias por acciones. En sus palabras se resumen los anteriores comentarios:

*Efectivamente, después de concluida la discusión del proyecto de ley que ocupa la atención del Congreso, el Sr. Ministro de Comercio nos manifestó que sin embargo de aquella ley iba a dar un decreto sobre sociedades anónimas, y fui yo quien contestó a S.S. que no se remediarían los males que habían ocasionado las sociedades por acciones si S. S. se limitaba a las sociedades anónimas y no extendía las disposiciones del decreto a las sociedades comanditarias*⁵⁶⁷ (el subrayado es nuestro).

Palabras del Diputado, Sr. Miota, que ratifican lo expuesto sobre la inclusión de las compañías comanditarias por acciones en la Ley de 1848.

b) La compañía anónima

i. Referencias al concepto de compañía anónima en los debates del PL 1848

¿Cuál es el concepto de compañía anónima que se recoge en los debates parlamentarios del PL 1848? Las intervenciones de los diferentes Diputados y Senadores muestran una falta de precisión en cuanto a las características configuradoras de las compañías anónimas y en relación al origen de las mismas.

La codificación realizada por Sáinz de Andino produce un cambio sustancial respecto a las notas que históricamente habían caracterizado a las compañías de comercio. El arquetipo de compañía anónima como institución jurídica que regulaba la constitución y desarrollo de las grandes empresas, se basaba, fundamentalmente, en dos premisas: la concesión de un monopolio para la explotación de una determinada actividad económica, y el privilegio de la limitación de responsabilidad. Además, se fundaban mediante la concesión de una cédula o instrumento similar en la que, en términos generales, el Poder público regulaba el régimen de la compañía y el ejercicio del monopolio.

Con estos antecedentes, que son citados durante los debates sobre el PL 1848, se observa con más claridad lo que se comentaba anteriormente. Las notas características de las compañías anónimas del Código de Sáinz de Andino, corresponden a un modelo diferente. En efecto, estas compañías no se fundaban mediante cédula sino que su escritura fundacional era aprobada por el T. de c. competente (lo cual, como ya se ha visto, fue una situación única en los países de nuestro entorno, que, en líneas generales,

⁵⁶⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1473.

⁵⁶⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, págs. 1473 y 1474.

exigían autorización gubernativa). Solamente en caso de que gozaran de algún privilegio, era necesaria la real autorización (artículo 294 CCom 1829). Por tanto, una de las dos premisas caracterizadoras de las compañías mercantiles precodificadas, la explotación de un monopolio económico, era una excepcionalidad para el CCom 1829. La otra, relativa a la limitación de la responsabilidad, se mantuvo como rasgo definitorio de este tipo societario.

Esta nueva regulación permitió que, desde 1829, se constituyeran compañías anónimas dedicadas a actividades económicas ordinarias, de menor importancia y, en definitiva, no monopolísticas. Por tanto, muy diferentes a las grandes compañías encargadas del comercio con las colonias. Y aquí se llega a la cuestión que se quiere suscitar. Cuando en los debates del PL 1848 se habla de compañía anónima, ¿a qué concepto de compañía anónima se está haciendo referencia? ¿A la precodificada o a la codificada? ¿O, quizá, a las dos, sin diferenciarlas suficientemente?

En varias intervenciones se citan las compañías de comercio precodificadas como antecedentes de las anónimas. En algunos casos es para aprender de las malas experiencias históricas. En otros casos, nos da la impresión de que es por simple prurito de erudición. Y, en otras intervenciones, es para explicar el origen de la limitación de responsabilidad y los esfuerzos para captar capitales inactivos de algunas clases sociales.

En el capítulo sobre los antecedentes de la Ley de 1848 se recogen por extenso las referencias a los orígenes de las sociedades anónimas durante los debates parlamentarios de la Ley de 1848. Se resumen a continuación.

El Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Vaamonde, expone que la primera sociedad anónima es la Compañía de las Indias Orientales de Amsterdam, fundada en 1602⁵⁶⁸. El Sr. Bertrán de Lis⁵⁶⁹ hace referencia a las compañías anónimas británicas que se crearon durante el reinado de Jorge I (1660 – 1727) en el que se aprobó la ley que él denomina “Acta de la engañifa”, probablemente haciendo referencia a *The Bubble Act* de 1720. También se refiere a las compañías anónimas creadas bajo el Monarca Jorge II (1762 – 1830). Por último, Sáinz de Andino⁵⁷⁰ pone como ejemplo de mala administración y fraude a la Compañía de Indias francesa, que tuvo una tremenda ruina en 1720 y a la *South Sea Company* británica, que dio origen a la citada *The Bubble Act*.

En relación a las compañías anónimas codificadas, las menciones a lo largo de las intervenciones en el Congreso de los Diputados y en el Senado son más frecuentes que las referencias a las precodificadas. En términos generales no suelen detallarse ejemplos concretos, salvo algún caso como el que se citará después. Se trata de compañías que están operativas en el año 1847, durante el que se debate el PL 1848. También se incluyen las que habían sucumbido en los años anteriores. Tanto unas como otras debían ser familiares a los intervinientes. El arquetipo de estas compañías codificadas es diferente al de las precodificadas, pues no se constituían por cédula real sino por aprobación del T. de c. y podían ser o no titulares de algún privilegio monopolístico.

⁵⁶⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1422.

⁵⁶⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1439.

⁵⁷⁰ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 280.

Las críticas a las compañías anónimas codificadas son constantes, repetitivas e implacables. Evidentemente se trata de la justificación de la Ley de 1848 y del cambio radical de regulación. Es frecuente la referencia al peligro de la utilización de este tipo societario para el agio y el fraude. Pero el punto fundamental se refiere a la especulación bursátil. El engaño y la falta de regulación de las inversiones en las compañías anónimas en el mercado de la Bolsa generaron parte de los escándalos financieros que el Legislador pretendía atajar.

En efecto, la evolución de la regulación de la Bolsa era conocida por el Legislador de 1848 y le preocupaba sobremanera los resultados de la misma. La Bolsa de Madrid se crea por el RD de 10 de septiembre de 1831 (poco después de la promulgación del CCom 1829 y casi veinte años antes que nuestra Ley de 1848). El mercado de la Bolsa de Madrid, en su inicio se centraba en la deuda pública, pero fue evolucionando y se produjo una tímida apertura a las acciones. Durante el primer lustro de la década de 1840, se dictan varias disposiciones tratando de encauzar y controlar el mercado organizado. Entre ellas, destaca el RD de 20 de julio de 1845, al que sigue un RD – Ley Orgánica provisional de 5 de abril de 1846 en el que se prohíben las operaciones a plazo.

Este RD de 5 de abril de 1846 se publica justo un año antes del inicio de los debates del PL 1848 en el Congreso. Sorprendentemente, el 30 de septiembre de 1847 la Reina otorgó un RD por el que se volvían a autorizar las operaciones a plazo, sujetas a determinadas garantías. Conviene reparar que esta norma se publica después de los debates del PL 1848 en el Congreso de los Diputados y antes de los que tuvieron lugar en el Senado durante el mes de diciembre de 1847. Pero el vaivén normativo no termina aquí. Al poco de publicarse la Ley y el Reglamento de 1848, el 22 de marzo de ese año la Reina otorgó un nuevo RD por el que derogó el de 30 de septiembre de 1847, restableciendo el RD de 5 de abril de 1846 por el que se prohibían las operaciones a plazo.

Junto a este marco jurídico-financiero que rodeaba las anónimas codificadas, hay que añadir la actuación de los T. de c. en relación a las autorizaciones de las compañías anónimas. Este aspecto se trata en el capítulo sobre los antecedentes de la Ley de 1848.

Para terminar este comentario sobre las referencias a las compañías anónimas codificadas durante los debates del PL 1848, hemos de referirnos a las menciones – pocas- que se hicieron sobre estadísticas de las compañías. Se cita solamente la intervención del Sr. Bravo Murillo, a la sazón Ministro de CIOP, en el Senado, pues muestra los datos de los que se disponía en aquel momento:

*Tengo a la vista un estado de las Sociedades anónimas que se han formado en Madrid: de él resulta que hay en esta corte 66 sociedades, y ocho en diversas capitales del Reino: total, 74, por un capital nominal de 5.786 millones de reales*⁵⁷¹.

Después de todo lo comentado cabe concluir que los Diputados, Senadores y miembros del Gobierno que intervinieron en los debates del PL 1848 incluyen, indistintamente, dentro de la denominación “compañía anónima” a las precodificadas y

⁵⁷¹ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 267.

a las codificadas cuyas notas configuradoras son diferentes, conforme ha quedado expuesto. Esto tiene sus consecuencias en la redacción del texto final, como se analiza en otros capítulos.

ii. *Noción legal y características*

No existe una definición legal de compañía anónima en la Ley de 1848. El CCom 1829 tampoco la define. Además, la Ley de 1848, deroga todas las disposiciones que sean a ella contrarias (artículo 21), pero no especifica los textos legales suprimidos o modificados, lo cual genera incertidumbre en cuanto a la vigencia posterior total o parcial de ciertos artículos del CCom 1829.

Lo que interesa reseñar ahora es que la Ley de 1848 pretende instaurar un nuevo concepto de compañía anónima, que no rompe radicalmente con el del CCom 1829, pero que lo modifica de manera sustancial.

También se ha de tener en cuenta que la Ley de 1848 es desarrollada por un largo Reglamento de ejecución, de 44 artículos. Entre los dos textos legales (Ley y Reglamento) se pretende implantar el nuevo concepto de sociedad anónima⁵⁷².

GIRÓN⁵⁷³ estimaba que, en el plano estrictamente jurídico, tanto la Ley como el Reglamento de 1848 seguían correspondiéndose con ideas constitucional-económicas propias del Antiguo Régimen. Además, en cuanto a la tipología de la sociedad anónima mantenía que, *se sigue con que la Ley [de 1848], al contemplar el tratamiento individualizado de cada sociedad, no significa progreso en la configuración tipológica de la S.A., es decir, en la definición de sus elementos o rasgos definitorios fundamentales en sentido moderno*. Sobre esta afirmación estamos conformes sólo en parte, pues no puede limitarse *la definición de sus elementos o rasgos definitorios fundamentales* al contenido de la Ley, sino que debe tenerse en cuenta el Reglamento que, como se apuntaba en el párrafo anterior, recoge a lo largo de sus 44 artículos numerosos elementos o rasgos definitorios de la sociedad anónima.

Aunque no podamos dar una definición de compañía anónima según la Ley de 1848, conviene realizar un breve comentario sobre las notas características que se encuentran en dicho texto legal. Tomando como referencia los comentarios a las tres notas de la compañía anónima según el CCom 1829, reseñadas en el epígrafe anterior, se puede concluir que la Ley de 1848 no modifica la limitación de la responsabilidad. En cambio, las cuestiones relativas a la autorización legal o gubernativa y la apertura a nuevos inversores, son alteradas con carácter sustancial.

En primer lugar, por lo que se refiere a la autorización legal o gubernativa, se puede decir que es la pieza clave de la reforma. Se encuentra recogida a lo largo del articulado de la Ley y del Reglamento de 1848 y de modo expreso y concreto en los cuatro primeros artículos de la Ley de 1848. La necesidad de la aprobación legal o por RD es la característica configuradora de la compañía anónima durante los veinte años de vigencia de la Ley desde 1848 hasta 1868.

⁵⁷² En el capítulo sobre la Ley de 1848 y el Reglamento se analiza su contenido y se comenta la cuestión sobre la reserva de ley que el Reglamento no respeta.

⁵⁷³ GIRÓN TENA, J. (1986): "Las Sociedades mercantiles ...", pág. 195.

Las consecuencias de este requisito fueron bastante perjudiciales para el desarrollo industrial y económico de España durante el tercer cuarto del siglo XIX. Recogemos como cita representativa el siguiente comentario de GONZÁLEZ HUEBRA: *se promulgaron después [del CCom 1829] la ley de 28 de enero y el reglamento de 17 de febrero de 1848, que, pasando de un extremo a otro, exigieron para su formación [de las sociedades anónimas] una ley especial, o un real decreto, y las reglamentaron y restringieron de modo que apenas se volvió a constituir ninguna después de su publicación*⁵⁷⁴.

En segundo lugar, en relación a los nuevos inversores, también se produce un cambio importante. El artículo 12 de la Ley de 1848 establece que las acciones deberán ser nominativas e inscribirse en el libro registro de accionistas. Por lo tanto, las personas que disponían de caudales líquidos para invertir, pero que por tradiciones o prácticas sociales no podían figurar vinculados a actividades económicas, se encontraron con un importante obstáculo. En consecuencia, no se favoreció el movimiento inversor de capitales no productivos, perdiendo una oportunidad para fomentar el desarrollo industrial y comercial de España.

iii. *Evolución del concepto de compañía anónima durante la vigencia de la Ley de 1848.*

Por último, se ha de aludir a la evolución del concepto de compañía anónima durante la vigencia de la Ley de 1848.

En primer lugar interesa apuntar, siguiendo a los tratadistas coetáneos de la Ley de 1848, que este texto legal regula la sociedad anónima “común” y otras leyes posteriores regulan las que se han denominado sociedades anónimas “especiales” como, por ejemplo, las sociedades de crédito o de ferrocarril. Se produce de esta manera una diferenciación entre la sociedad anónima común o general y otras sociedades anónimas que se encuentran reguladas por leyes especiales.

GONZÁLEZ HUEBRA refiere a este respecto que las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley y del Reglamento de 1848 fueron bastante perniciosas y *que trataron de remediarse por las Cortes constituyentes de 1855, que autorizaron la creación de las sociedades de crédito y las de ferro-carriles, suprimiendo varias de las restricciones impuestas en 1848, en las que se promulgaron para establecer dichas sociedades en 28 de enero y 30 de junio de 1856. Mas como no se propusieron uniformar este ramo de la legislación haciendo una ley general de sociedades anónimas derogando la anterior, sino solo autorizar la formación de aquellas dos clases especiales, resulta ahora que es más restrictiva y defectuosa la Ley general que las dictadas para las excepcionales que eran las que necesitaban acaso ser autorizadas con más limitaciones*⁵⁷⁵.

En este sentido, años más tarde, MARTÍ DE EIXALÁ decía que *las sociedades anónimas son comunes o especiales, aunque es la misma en una que en otras su esencia o lo que las caracteriza*⁵⁷⁶.

⁵⁷⁴ GONZALEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil...*, pág. 152.

⁵⁷⁵ GONZALEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil...*, pág. 152.

⁵⁷⁶ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil ...*, pág. 264.

En segundo lugar, GÓMEZ DE LA SERNA y REUS Y GARCÍA⁵⁷⁷ citan otro texto legal que modificó la Ley y el Reglamento de 1848 y, en consecuencia el concepto y características de la compañía anónima: *con respecto a Ultramar, la formación y régimen de las sociedades anónimas, debe sujetarse a lo dispuesto en el reglamento publicado por el Real decreto de 19 de octubre de 1853*. El ámbito de aplicación de este Reglamento eran las sociedades anónimas en la isla de Cuba. Es un texto de gran interés pero que, por la limitación del ámbito del presente trabajo no podemos comentar.

B) CARACTERÍSTICAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA SEGÚN D. PEDRO SÁINZ DE ANDINO:

Nos ha parecido oportuno tratar en un epígrafe independiente la aportación realizada por Sáinz de Andino en su intervención en el Senado el 23 de diciembre de 1847⁵⁷⁸, en la medida que fue el redactor del CCom 1829 que asignó la facultad de autorización de las compañías anónimas a los T. de c., y el Presidente de la CS sobre el PL 1848 en el que se despojó a dichos Tribunales de esa competencia para atribuirle al Parlamento y al Gobierno.

Por este motivo, tienen especial interés sus palabras, en las que, de alguna manera, se da respuesta a la evolución del concepto de sociedad anónima desde el CCom 1829 a la Ley de 1848.

El debate tiene su origen en una propuesta del Marqués de Vallgornera para suprimir las acciones al portador. La respuesta de D. Pedro, como Presidente de la CS, fue contraria (aunque, paradójicamente, el texto final de la Ley de 1848 excluyó la emisión de acciones al portador). Para exponer una buena contestación, decía, *debo internarme en el examen de la índole, del carácter y de las condiciones del sistema excepcional y privilegiado de la contratación mercantil, sobre el que se funda la existencia de las Sociedades anónimas*. Y por este motivo, nos ofrece una valiosa descripción de la noción y características de la sociedad anónima. Podemos extraer las siguientes notas caracterizadoras.

1. Limitación de la responsabilidad de los socios

Es la nota característica más importante y la que diferencia a las sociedades anónimas de las colectivas y comanditarias. La responsabilidad de los socios de estos dos últimos tipos societarios es solidaria respecto a las deudas sociales. Los contratos de sociedad mercantil se basan principalmente en esta situación según la cual los acreedores sociales pueden hacer efectivos sus créditos sobre el patrimonio de la sociedad y de sus socios. En cambio,

... en las Sociedades anónimas la responsabilidad de cada socio, aun de aquellos mismos que dirigen su administración y contratan a su nombre, se limita al importe de la acción o parte de capital que haya introducido, o se haya obligado a contribuir para constituir el fondo de la Sociedad.

⁵⁷⁷ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio* ..., pág. 480 y en el mismo sentido, RUBIO Y LÓPEZ, J. (1857): *Novísimo manual de Derecho mercantil* ..., pág. 115.

⁵⁷⁸ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, págs. 279 y 280. Las citas textuales de la intervención las recogemos en cursiva.

Por lo tanto, la limitación de responsabilidad es completa, tanto para el administrador como para el socio. Hace esta expresa mención porque en aquel momento, en la práctica, era muy poco frecuente que el administrador de una sociedad no fuera responsable personalmente de sus actuaciones como representante de la sociedad.

Una consecuencia de este principio de limitación de responsabilidad es que los socios no participan proporcionalmente o en la misma medida en los resultados de la sociedad:

... de manera que los accionistas tienen un derecho indeterminado a los beneficios que reporte aquella de sus negociaciones, y las pérdidas no pueden exceder de la cuota prefijada en los estatutos sociales.

2. El privilegio consiste en la derogación de las reglas comunes de los contratos. El interés público.

Como consecuencia de la limitación de responsabilidad, señala Sáinz de Andino, se produce una quiebra en la reciprocidad de los derechos y obligaciones que asume la sociedad anónima frente a terceros:

Así, pues, entre los derechos y obligaciones de los accionistas que constituyen las compañías anónimas, existe una desproporción manifiestamente repugnante con el principio de igualdad que debe observarse en todos los contratos bilaterales y de buena fe, porque los que negocian con estos establecimientos quedan obligados a todas las eventualidades del contrato, sin limitación alguna, y la Sociedad no tiene más responsabilidad, ni aventura mayor suma que la que puede importar el capital social, sin trascendencia alguna a los bienes particulares de los socios.

Este desequilibrio o desproporción sólo puede ser permitido por la ley si se concede un privilegio por el que se deroga el Derecho común y se sustituye su aplicación por la nueva regulación. Esta es la segunda nota caracterizadora de las sociedades anónimas, consecuencia de la limitación de responsabilidad: se trata de una excepción, de un privilegio y en este marco ha de regularse su régimen jurídico. Por eso insiste D. Pedro:

... las Sociedades anónimas gozan de una ventaja que no ha podido acordárseles, sino derogando en su favor las reglas comunes de los contratos, y esta derogación es un verdadero privilegio anejo a su especial constitución.

La concesión de un privilegio que rompe con el principio básico de la igualdad de trato es legal, siempre que tenga una causa u origen proporcionada y justificada. En el caso de las sociedades con responsabilidad limitada, ¿cuál es ese motivo? El interés público. Estas son sus palabras:

Para otorgarse esta excepción se ha preferido a la rigurosa observancia de los principios de justicia el interés de la conveniencia pública.

3. Son grandes empresas

La tercera nota con la que Sáinz de Andino caracteriza las compañías anónimas es de carácter económico⁵⁷⁹. Se trata de una figura jurídica creada para permitir la realización de grandes empresas que una sola persona no puede acometer. La evolución comercial e industrial desde 1848 ha hecho que esta nota se haya desvirtuado hasta casi desaparecer, en el sentido de que no sólo las sociedades anónimas sirven para emprender grandes proyectos y empresas, sino también para el desarrollo de cualquier actividad empresarial, con independencia de su tamaño.

Pero en aquellos años, no se intuyó que los pequeños comerciantes acabarían utilizando sociedades con responsabilidad limitada para sus negocios. Con esta perspectiva histórica se entienden mejor las palabras de Sáinz de Andino:

... por medio de estas grandes Compañías pueden solamente promoverse, facilitarse y ejecutarse las grandes empresas, así en la agricultura como en la industria, y tanto en el comercio como en la navegación, que rápidamente desarrollen los elementos de riqueza, de fuerza y poder, que permanecieran estériles e infructíferos en muchos siglos, por la dificultad de que en un solo individuo se reúnan medios para utilizarlos, y porque aun poseyéndolos, nadie los aventura al resultado incierto de una especulación vasta y desconocida que pueda absorber toda su fortuna, ni tampoco puede bastante la capacidad ni la atención de un solo hombre para obras tan complicadas y extensas.

Una consecuencia del tamaño de estas grandes empresas es que al acumularse mucho capital en ellas, facilitan el crecimiento y expansión de las pequeñas y medianas empresas que dependen de sus negocios, e incluso financian a las que nada tienen que ver con su objeto social:

Estas mismas Sociedades, acumulando en sus cajas grandes masas disponibles de numerario, contribuyen a sostener las empresas industriales y mercantiles subalternas; al paso que alimentan la circulación, y fomentan el crédito público, sosteniendo los precios de sus valores. Muy dignos son, pues, de consideración los beneficios que a la causa pública prometen las Sociedades anónimas; y por lo mismo, desde que en el último siglo arbitró e indujo el espíritu mercantil este nuevo medio de reunir las fuerzas individuales y materiales de cada individuo para operaciones en que obrando cada cual aisladamente le habría sido imposible comprometerse, se les ha dispensado una protección especial por los Gobiernos de las Naciones más cultas de Europa.

Estas palabras se entienden en la medida en que en ese momento aún no se había aprobado la LB y la financiación de empresas (no del Estado) era complicada, pues existían muy pocas entidades financieras.

⁵⁷⁹ En los discursos que dirige al Senado con motivo de la tramitación de la Ley de 1848 es frecuente que apele a los principios económicos como algo complementario a los principios jurídicos, sin los cuales las normas mercantiles quedan incompletas e ineficaces para conseguir su objetivo.

4. Son un instrumento para canalizar las inversiones de las medianas fortunas y pequeños ahorradores

La última nota característica hace referencia al ámbito económico y social. La figura de la compañía anónima abre las inversiones a todas las fortunas, permitiendo la posibilidad de que las clases medias obtengan unos beneficios que de otra manera serían implanteables para ellas. Es decir, se produce una socialización de los beneficios, que ya no quedan reservados exclusivamente a los grandes patrimonios. Por eso, acaba diciendo Sáinz de Andino:

... las Sociedades anónimas ofrecen la inapreciable ventaja de que no se vinculen en los grandes capitalistas estas mismas empresas, tan fecundas en beneficios cuantiosos, pues que por medio de la división del capital social en acciones de un valor moderado, se facilita tomar interés en ellas a las personas de mediana fortuna; y aun las de muy cortos haberes, a quien su economía y buen orden doméstico haya proporcionado hacer algunos ahorros, tienen en su mano gozar de igual beneficio.

CAPÍTULO VII

RÉGIMEN DE LA AUTORIZACIÓN GUBERNATIVA O LEGISLATIVA

El régimen de autorización de las compañías por acciones es la pieza clave de la reforma del CCom 1829, que realiza la Ley de 1848. Por ello, este capítulo tiene especial importancia para el presente trabajo.

I. FUENTES NORMATIVAS

Se ha de iniciar el estudio tomando como referencia el régimen jurídico instaurado por el Código de Sáinz de Andino para la autorización de las compañías por acciones. Es el punto de partida para entender el destino final de la reforma, recogido en la Ley y el Reglamento de 1848.

A) EL CCom 1829

Las compañías anónimas se encontraban sometidas a un régimen especial de autorización, regulado en el artículo 293 del CCom 1829:

Es condición particular de las compañías anónimas que las escrituras de su establecimiento y todos los reglamentos que han de regir para su administración y manejo directivo y económico, se han de sujetar al examen del tribunal de comercio del territorio en donde se establezca, y sin su aprobación no podrán llevarse a efecto.

Este régimen especial contemplaba una excepción en el artículo 294:

Cuando las compañías anónimas hayan de gozar de algún privilegio que Yo le conceda para su fomento, se someterán sus reglamentos a mi soberana aprobación.

Se establecen, por tanto, dos sistemas de autorización diferentes. Uno, general, para todas las compañías anónimas conforme al cual el T. de c. era el único órgano competente para otorgar dicha autorización. Y, otro, especial, para aquellas compañías anónimas que gozaran de un privilegio para el desarrollo de su actividad económica.

Las otras compañías mercantiles, las colectivas y comanditarias, no estaban sometidas a este régimen de autorización, dado que era exclusivo para las anónimas.

¿En qué consistía la actuación de los T. de c. respecto a la autorización de las compañías anónimas? Se ha de empezar realizando una breve descripción de la naturaleza y composición de estos Tribunales.

El CCom 1829, en su Libro V regula *la administración de justicia en los negocios de comercio*. El artículo 1178 establece que los T. de c. son los encargados de

la administración de justicia en primera instancia sobre las causas y negocios mercantiles. Son, por tanto, órganos jurisdiccionales que imparten justicia en el ámbito mercantil. Estos órganos pluripersonales estaban compuestos por un prior, dos cónsules y dos sustitutos de cónsules (artículo 1183). Todos debían ser comerciantes *de por mayor* y matriculados, con una antigüedad mínima. Se trataban de cargos gratuitos y honoríficos (artículo 1193) y, además, obligatorios, pues no cabía excusa si algún comerciante era nombrado miembro del Tribunal (artículo 1194). Además, el Tribunal debía tener unos miembros profesionales, concretamente un consultor letrado, un escribano de actuaciones judiciales y un número variable de dependientes de justicia (artículo 1195).

No está clara la naturaleza del acto de autorización de una compañía anónima por parte del T. de c. No parece que se trate de un acto jurisdiccional, dado que no nos encontramos ante una solicitud de administración de justicia. ¿Será, entonces, un acto administrativo? Esta cuestión trató de resolverla el Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz, en el debate en el Congreso el 21 de abril de 1847, en los siguientes términos:

El Código de comercio deja a los Tribunales de comercio expeditas ciertas atribuciones; pero ¿se ha desprendido el Gobierno de la autoridad que ejerce sobre esos Tribunales? Esta autoridad ¿es una acción judicial? El dar permiso a las sociedades ¿es una sentencia? Es, señores, una atribución administrativa que está en la esencia de la administración. Yo siento oír en boca de una persona tan entendida en estas materias como el Sr. Ríos Rosas, que confunda las atribuciones de justicia que competen a los Tribunales de comercio con aquellas atribuciones que son puramente administrativas. ¿No es de esencia puramente administrativa la facultad que tienen los Tribunales de comercio para autorizar la formación de sociedades? ¿Quiere S.S. que estos Tribunales sean independientes e irresponsables? ¿Podrán tener esa facultad ilimitada sin que el Gobierno pueda ejercer sobre ellos la acción suprema de su autoridad? He aquí cómo el Gobierno puede, sin salirse de la legalidad, ejercer esa autoridad sobre los Tribunales de comercio en lo relativo a la autorización de sociedades⁵⁸⁰.

Esta exposición clara y rotunda se contradice con el artículo 1204 CCom 1829, que establecía que *los tribunales de comercio se ceñirán a las atribuciones judiciales que les están declaradas en este Código y no ejercerán funciones administrativas de especie alguna.* La solución no es sencilla. En el epígrafe sobre los T. de c. del capítulo relativo a los antecedentes de la Ley de 1848 se analiza con detalle esta cuestión y a aquel lugar nos remitimos. Sólo reiteramos que, en nuestra opinión, esta atribución de la competencia de autorización a los T. de c., que no tiene equivalente en el Derecho comparado de la época, no fue acertada y constituyó la causa del cambio legislativo de 1848 hacia una Ley y un Reglamento demasiado rígidos y restrictivos.

En cuanto a las compañías comanditarias por acciones, el CCom 1829 no establece ningún procedimiento especial. Es el general de las comanditarias: el otorgamiento de la escritura pública fundacional (artículos 284 y 286) y su inscripción en el RPGC (artículos 290 y 291).

⁵⁸⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1473.

B) EVOLUCIÓN DE LAS REDACCIONES DEL PL 1848

El primer PL 1848 fue presentado por el Ministro Roca de Togores al Congreso de los Diputados el 26 de febrero de 1847⁵⁸¹, que establecía en su artículo 1 que sólo podía constituirse una sociedad cuyo capital en todo o en parte esté dividido en acciones, mediante RD. Es muy importante reparar que este texto no contempla la autorización parlamentaria. Solamente, en consonancia con el resto de los países de nuestro entorno, se refiere a la aprobación gubernativa.

El Gobierno, conforme a lo previsto en el artículo 2 del primer PL 1848, otorgará autorización a las sociedades que se establezcan para:

- la construcción de obras de utilidad pública;
- el fomento directo de la agricultura, de la industria fabril o del comercio;
- aseguración de la propiedad mueble o inmueble, de las operaciones de tráfico y giro mercantil o industrial y de los riesgos de cualquiera clase en todo género de contratación; o
- cualquiera otra empresa que, a su juicio, sea de conveniencia general y común, siempre que no impida el libre ejercicio de algún ramo del comercio o de la industria ni que monopolice artículos de primera necesidad.

El procedimiento de autorización se regulaba sucintamente en el artículo 5, que establecía que *a la autorización precederá la Real aprobación de la escritura de establecimiento y de todos los reglamentos que han de regir para la administración y manejo directivo y económico de la compañía, instruyéndose para ello el oportuno expediente y oyendo al Consejo real.*

Por último, se preveía que las leyes especiales determinarían los requisitos para la constitución de sociedades dirigidas al beneficio de minas, fundiciones de minerales y al establecimiento de Bancos de emisión.

En el Dictamen de la CCD de 16 de abril de 1847⁵⁸² es donde se produce el vuelco fundamental en el régimen de autorización de las compañías por acciones, al introducir la autorización legal en los casos contemplados en su artículo 2. En este aspecto, se separa radicalmente del PL 1848 presentado por el Ministro Roca de Togores el 26 de febrero de 1847.

Además, como se recordará, la víspera del 16 de abril, el Gobierno, a instancia del nuevo Ministro de CIOP, D. Nicómedes Pastor Díaz, aprobó un RD⁵⁸³ que derogaba la RO de 9 de febrero de ese mismo año y establecía que, hasta que se aprobara una ley al respecto, sólo el Gobierno podía autorizar la constitución de sociedades anónimas. Quedaban, por tanto, excluidos de esta competencia, en primer lugar, los T. de c.

⁵⁸¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, págs. 653 y 654.

⁵⁸² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393. Recogido también en la GdM de 19 de abril de 1847, núm. 4600.

⁵⁸³ De 15 de abril de 1847, que se publicó en la GdM de 17 de abril de 1847, núm. 4598.

(cuestión que no planteaba ninguna duda) y, en segundo lugar, el Parlamento (lo que originó un duro y largo debate durante la sesión del 21 de abril en el Congreso de los Diputados⁵⁸⁴).

En este contexto, se aprecia la importancia de este giro legislativo, que tendrá profundas consecuencias económicas en el desarrollo industrial de España.

El Dictamen de la CCD regula la autorización legal y gubernativa de las compañías por acciones en los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11, que pasarán al texto final de la Ley de 1848 prácticamente sin modificaciones. Por tanto, sus correspondientes versiones en los otros Dictámenes permanecen prácticamente iguales. Dado que el contenido de estos artículos es el de la Ley de 1848, los comentarios se realizan en el siguiente epígrafe.

C) LA LEY DE 1848

Con carácter general se puede decir que el nuevo régimen de autorización de compañías por acciones está presente en todo el articulado de la Ley de 1848. Es su objetivo prioritario y básico. Aquí se recogen solamente los preceptos directamente relacionados con el proceso de autorización. Otros se comentan, según los temas a que se refieran, en los correspondientes capítulos: acciones, inspección y control por la Autoridad pública, etc.

El régimen general de autorización se establece en el artículo 1 al prohibir la constitución de ninguna compañía mercantil cuyo capital, en todo o en parte, se divida en acciones, sino es en virtud de una ley o RD. Se delimitan, por tanto, dos procedimientos distintos, que se estudian a continuación.

1. Procedimiento para obtener la autorización legal

El criterio competencial para diferenciar la autorización legal de la gubernativa se asienta en el tipo de objeto social. Establece el artículo 2 que será necesaria una ley para la constitución de las compañías que tengan por objeto:

1. El establecimiento de Bancos de emisión y cajas subalternas de estos, o la construcción de carreteras generales, canales de navegación y caminos de hierro.
2. Cualquiera empresa que siendo de interés público pida algún privilegio exclusivo.

Se excluyen las compañías que se propongan beneficiar algunos de los privilegios industriales de invención o introducción que el Gobierno pueda conceder.

La ley determinará en cada caso las condiciones en virtud de las cuales haya de concederse la autorización legal (artículo 3).

⁵⁸⁴ Cuestión que se comenta por extenso en el capítulo sobre la formación y tramitación parlamentaria de la Ley de 1848.

El Gobierno, una vez oído el Consejo Real, examinará si la solicitud de autorización se encuentra dentro de sus atribuciones. En caso de que sea necesaria la autorización legislativa, el Gobierno, si la empresa mereciere su apoyo, presentará el expediente a las Cortes con el correspondiente Proyecto de Ley. En caso contrario, devolverá el expediente a los interesados para que hagan de su derecho el uso que estimen oportuno⁵⁸⁵.

La complejidad y dificultad para tramitar la autorización legislativa de una compañía por acciones era realmente enorme. Los promotores debían, en primer lugar, lograr el apoyo del Gobierno a su iniciativa. Cuestión sin duda ardua en una época en la que los Gobiernos duraban escasos meses, las Legislaturas eran breves y el tiempo de tramitación de una ley era largo. Una vez obtenido el patrocinio del Gobierno de turno (no sólo para presentar el Proyecto de Ley sino para impulsarlo durante la tramitación parlamentaria), los promotores necesitaban convencer a la mayoría de los Diputados y Senadores para que votaran a favor del Proyecto de Ley. A partir del momento de la entrada del Proyecto de Ley en el Parlamento, la legislación procedimental rectora era la aplicable a las leyes: inicio de la tramitación en el Congreso de los Diputados, Dictamen de la CCD y debate, remisión al Senado, Dictamen de la CS y debate, en su caso, Dictamen de la CMC-S y nuevo debate en ambas Cámaras.

A todos los pasos anteriores hay que añadir, además, el necesario informe favorable del Consejo de Estado y del Jefe político de cada uno de los territorios en los que la sociedad fuera a desarrollar su actividad, conforme a lo previsto en el Reglamento de 1848.

2. Procedimiento para obtener la autorización en virtud de RD.

En el caso de la autorización gubernativa, la Ley de 1848 consagra un criterio negativo de competencia, en relación a las compañías que deben ser autorizadas por el Parlamento. Dice a este respecto el artículo 5: *para la formación de toda compañía que no se halle comprendida en el artículo 2 de esta Ley, será necesaria la autorización del Gobierno expedida en forma de Real decreto*. El Gobierno sólo podrá conceder la autorización a las compañías que tengan un objeto social de utilidad pública y la denegará a las compañías que se dirijan a monopolizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad.

En cuanto a los requisitos y características del objeto social para poder constituir una compañía por acciones, nos remitimos al capítulo sobre el objeto social.

El procedimiento se puede resumir de la siguiente manera. Los promotores de la sociedad deben comenzar siempre solicitando la autorización al Gobierno, aunque finalmente sea el Parlamento el que la otorgue. En esa solicitud se debe adjuntar la lista de suscriptores de acciones, las cartas de pedidos de acciones, la escritura social, así como los estatutos y reglamentos que regirán la administración de la compañía, los cuales deberán ser aprobados previamente por la junta general de suscriptores⁵⁸⁶. El Gobierno no instruirá el expediente de solicitud de autorización si no consta la suscripción de, al menos, la mitad del capital social⁵⁸⁷.

⁵⁸⁵ Artículo 8 de la Ley de 1848.

⁵⁸⁶ Artículo 6 de la Ley de 1848.

⁵⁸⁷ Artículo 7 de la Ley de 1848.

Una vez comprobado el cumplimiento de los anteriores requisitos y recabada la opinión del Consejo Real, el Gobierno decidirá si tiene facultades para autorizar la compañía, o ha de ser objeto de autorización legislativa. En este último caso, si la empresa mereciera su apoyo, presentará el correspondiente Proyecto de Ley. Si no lo apoyare, devolverá el expediente a los promotores⁵⁸⁸.

En caso de que el Gobierno estimara que es competente para conceder la autorización y que la empresa es de utilidad pública, lo notificará a los promotores. Deberá aprobar la escritura social, los estatutos y los reglamentos, así como determinar la parte del capital que ha de desembolsarse antes de aprobar el RD de autorización. En caso de que el Ministro que haya de resolver la solicitud de autorización no estuviera conforme con la opinión manifestada por el Consejo Real, resolverá la cuestión el Consejo de Ministros⁵⁸⁹.

El último paso de este largo procedimiento es la aprobación del RD de autorización en el que el Gobierno ha de determinar el plazo máximo para el inicio de la actividad de la compañía⁵⁹⁰.

Dado que la autorización se basa en documentos (fundamentalmente la escritura de fundación, los estatutos y los reglamentos), cualquier alteración de éstos requiere la aprobación gubernativa y si no la obtuviere, se anulará la autorización concedida⁵⁹¹.

D) EL REGLAMENTO DE 1848

El régimen legal de autorización gubernativa se encuentra ampliamente desarrollado por el Reglamento de 1848. La aprobación legislativa es objeto de una mínima consideración por el citado Reglamento, dado que, en este caso, se aplicaba la normativa relativa a la tramitación parlamentaria de las leyes.

El artículo 9 del Reglamento de 1848 recoge el requisito del artículo 7 de la Ley de 1848 según el cual no se puede iniciar la instrucción del expediente hasta que no conste la suscripción de, al menos, la mitad del capital social. Y fija el procedimiento para acreditarlo: bien por haberse suscrito entre los otorgantes de la misma escritura, o bien por las cartas de pedidos de acciones que, con posterioridad a su otorgamiento se hayan dirigido a la comisión encargada de gestionar la autorización de la compañía.

El Reglamento de 1848 otorga un papel fundamental al Jefe Político en la instrucción del expediente. Una vez otorgada la escritura de fundación de la compañía, con sus reglamentos, las cartas de suscripción de acciones que completen la mitad del capital social y el acta de su aprobación definitiva, se presentarán al Jefe político de la provincia donde se encuentre domiciliada la sociedad, para que proceda a formar el expediente instructivo sobre su aprobación. Si los establecimientos de la empresa estuvieran en otras provincias diferentes a las de su domicilio, se presentarán, también,

⁵⁸⁸ Artículo 8 de la Ley de 1848.

⁵⁸⁹ Artículo 9 de la Ley de 1848.

⁵⁹⁰ Artículo 10 de la Ley de 1848.

⁵⁹¹ Artículo 11 de la Ley de 1848.

a los correspondientes Jefes Políticos copia autorizada de dichos documentos para que instruyan el expediente en la parte que les concierna⁵⁹².

El Jefe Político, una vez recibido el expediente, debe examinar las siguientes cuestiones⁵⁹³:

1º Si los estatutos de la sociedad están conformes a lo prescrito en el Código de comercio con respecto a las sociedades comanditarias y anónimas, a las disposiciones de la Ley de 18 de Enero de 1848 y a las de este Reglamento.

2º Si el objeto de la sociedad es lícito y de utilidad pública, conforme al artículo 4 de la precitada ley, sin transcendencia a monopolizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad.

3º Si el capital prefijado en los estatutos sociales puede graduarse suficiente para el objeto de la empresa; si esta convenientemente asegurada su recaudación; si las épocas establecidas para los dividendos pasivos de las acciones están combinadas de manera que la caja social se halle suficientemente provista para cubrir sus obligaciones.

4 Si el régimen administrativo y directivo de la compañía ofrece las garantías morales que son indispensables para el crédito de la empresa y la seguridad de los intereses de los accionistas y del público.

Examinadas estas materias por el Jefe Político, remitirá el expediente al Gobierno. Éste dará traslado al Consejo Real para que lo examine y emita su parecer⁵⁹⁴. Si el Consejo Real estima que el expediente se encuentra incompleto, acordará su ampliación solicitando nuevos informes o la presentación de los documentos pertinentes⁵⁹⁵. Una vez completo el expediente, si la resolución es favorable, el Consejo Real determinará la parte del capital que haya de hacerse efectiva antes de ponerse en ejecución el RD de autorización⁵⁹⁶. Si la autorización debe ser otorgada por el Parlamento, el Consejo Real consultará al Gobierno lo conveniente sobre su aprobación. En caso de que ésta procediese, adjuntará a la consulta una propuesta del Proyecto de Ley para presentarse a las Cortes⁵⁹⁷.

En el supuesto de que la autorización sea competencia del Gobierno, una vez comprobada por el Consejo Real la adecuación del objeto social a los requisitos exigidos por la Ley, si éste –el Consejo Real- entendiese que los estatutos propuestos por los fundadores no son conformes a los requisitos legales, propondrá las modificaciones pertinentes. En caso de que el Gobierno estuviera de acuerdo con esta propuesta, la comunicará a los interesados para que, si continuaran en su intención de constituir la compañía, otorguen nueva escritura de modificación de los estatutos⁵⁹⁸.

⁵⁹² Artículo 12 del Reglamento de 1848.

⁵⁹³ Artículo 13 del Reglamento de 1848.

⁵⁹⁴ Artículo 16 del Reglamento de 1848.

⁵⁹⁵ Artículo 17 del Reglamento de 1848.

⁵⁹⁶ Artículo 18 del Reglamento de 1848.

⁵⁹⁷ Artículo 19 del Reglamento de 1848.

⁵⁹⁸ Artículo 20 del Reglamento de 1848.

Una vez finalizada la instrucción de todo el expediente y, habiendo sido formulada la consulta del Consejo Real, el Gobierno decidirá lo que corresponda. Si procediere la autorización de la compañía sobre la base de los estatutos y reglamentos presentados, expedirá el RD de autorización en el que, conforme al artículo 9 de la Ley de 1848, fijará la parte de capital que deba desembolsarse, determinando el plazo para hacerla efectiva en la caja social y el que se estime suficiente para que se complete la suscripción de acciones⁵⁹⁹.

Una vez expedido el RD de autorización, debe ser comunicado al Jefe Político que corresponda. Se imprimirán y publicarán los estatutos y reglamentos de la sociedad. La administración provisional de la compañía abrirá el plazo para la suscripción de acciones vacantes dentro del plazo prefijado. Una vez transcurrido este plazo, se remitirá al Jefe Político la lista de los nuevos accionistas, acreditándose que se ha cubierto la suscripción del capital. Si no se suscribieran las acciones, se tendrá por caducada la Real autorización⁶⁰⁰. Una vez que se haya desembolsado en la caja social la parte del capital determinada por el Gobierno, el Jefe Político deberá verificar su realidad y lo comunicará al Gobierno para que declare constituida la compañía, determinando el plazo para que dé comienzo sus operaciones⁶⁰¹.

Aquí finaliza el *íter* procedimental para obtener la autorización gubernativa de la compañía por acciones. Es evidente el elevado grado de complejidad que estableció el Legislador. Además, es llamativa la participación de variados grupos de interés que podían interferir de diferentes maneras durante el proceso de concesión de la autorización. Sin duda, se trata de un procedimiento más sencillo que el de la tramitación de una ley, pero, aun así, es muy lento y dificultoso.

II. DERECHO COMPARADO

Una vez estudiadas las referencias normativas sobre la autorización, conviene estudiar los antecedentes y la legislación en vigor durante aquellos años en los países de nuestro entorno. En los debates del PL 1848 se produjeron frecuentes alusiones al régimen jurídico francés y británico. Parece interesante contrastar las menciones de nuestros parlamentarios con la realidad del Derecho societario comparado de la época.

Vamos a recoger, en primer lugar, las referencias a la legislación francesa. Después analizaremos las remisiones a la legislación británica. En ésta nos parece oportuno detenernos con más detalle por un doble motivo. Primero porque, comparativamente, el desconocimiento de la realidad jurídica británica con respecto a la francesa era muy grande. Nuestros juristas de la época dominaban el ordenamiento francés y lo utilizaban frecuentemente como modelo (recuérdese la influencia del *Code* sobre el de Sáinz de Andino). En cambio, no disponían de un conocimiento tan detallado del ordenamiento británico (ni el de Estados Unidos), no sólo por una cuestión lingüística sino por la diferencia de categorías jurídicas.

⁵⁹⁹ Artículo 21 del Reglamento de 1848.

⁶⁰⁰ Artículo 22 del Reglamento de 1848.

⁶⁰¹ Artículo 23 del Reglamento de 1848.

En segundo lugar, porque merece una consideración más detallada el Derecho de compañías de la nación que detentaba la posición de dominio y liderazgo mundial durante los años que son objeto del presente estudio.

A) DERECHO FRANCÉS

El 20 de abril de 1847 tuvo lugar la primera sesión del Congreso de los Diputados en la que se debatió artículo por artículo el Dictamen de la CCD. En esa sesión, el Diputado Sr. Ordax planteó una enmienda al artículo 1 del Dictamen de la CCD para que la autorización de la compañía anónima fuera competencia exclusiva del Parlamento, excluyendo al Gobierno. Cita en su apoyo, como luego se verá, las legislaciones anglosajonas (británica y norteamericana). También se refiere a la normativa francesa pero, siendo consciente de que era totalmente contraria a su propuesta, expone lo siguiente:

*Yo bien sé, señores, que se echará mano para contestarme del Código francés; se dirá que la Francia está muy adelantada en la civilización, y que su Gobierno es el que da allí estas autorizaciones, y que lo mismo sucede en Holanda y otros países que han copiado el Código francés; ...*⁶⁰²

Y, efectivamente así era: el Gobierno autorizaba en exclusiva la constitución de las compañías anónimas, excluyendo al Parlamento de esta facultad. Por este motivo, el Diputado Sr. Ordax se adelanta a las críticas que de contrario le podrían llegar en los siguientes términos:

Mas si a ejemplos extraños quisiéramos apelar; si por un espíritu de servil imitación quisiéramos poner en nuestro Código lo que está en otros, entonces yo ofrecería al Congreso español Códigos tan respetables como el francés y aún mucho más en esta materia, por ser del pueblo más mercantil del mundo, y que además es el más adelantado en el régimen constitucional: tal es la Inglaterra. Este pueblo confiere todo el poder en el caso que nos ocupamos al Parlamento, y se lo niega todo al Gobierno. (...)

Si, pues en Inglaterra y en los Estados-Unidos es el Parlamento el que de acuerdo con los buenos principios concede ese permiso, ¿qué nos importa a nosotros que en Francia y Portugal sea el Gobierno quien lo conceda? ¿No tenemos nosotros justos títulos para obrar por nuestra razón, por nuestras propias convicciones, sin tener que acudir a lo establecido fuera, como si esto fuese lo mejor el non plus ultra de la civilización? (...)

Yo desearía que se reformara [el texto presentado por la CCD], retirándose el proyecto por el Gobierno, imitando lo que hizo el Gobierno francés en el año 1838. Entonces presentó un proyecto de ley idéntico al actual, pues éste puede decirse que es un mero trasunto de aquél, con el objeto de contener una crisis comercial que había en Francia, muy superior a la nuestra, producto también de haberse aprobado el establecimiento de más de 600 sociedades comanditarias desde el año 28 al 38; pues presentado el proyecto de ley a las

⁶⁰² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1430.

*Cámaras francesas, fue combatido por no estar basado sobre los principios que he expuesto; y entonces el Gobierno, convencido de ello, retiró su proyecto.*⁶⁰³

Como se puede comprobar, había un conocimiento bastante detallado de la actividad legislativa francesa. Las referencias al sistema legal británico no suelen presentar este nivel de detalle, por ejemplo, sobre proyectos de ley presentados y retirados.

Las intervenciones del Diputado Sr. Ordax fueron contestadas por el Sr. Miota, miembro de la CCD que presentó el Dictamen. Su argumentación fue la siguiente:

De la legislación francesa sin duda se tomó en su mayor parte la mercantil nuestra, consignada en el Código de comercio; y, contrayéndome a las compañías anónimas, no encuentro entre una y otra [la legislación francesa y la legislación española] más diferencia que la de exigir la primera la autorización del Gobierno para la creación de las compañías anónimas, y determinar el Código español que esta autorización haya de ser de los Tribunales de comercio. En los Códigos de uno y otro país no encuentro ninguna otra diferencia en esta parte, porque si después hay algunas otras disposiciones en Francia, no son legislativas; es una instrucción, un reglamento que se hizo en el año 1818 para la ejecución de la regla consignada en el Código. Es cierto que en esa legislación francesa se hace también la distinción entre las sociedades comanditarias y las anónimas: es cierto también que respecto de las sociedades comanditarias no se requiere ninguna autorización; pero no es menos exacto que se clama en aquel país aún más de lo que se ha clamado en éste contra la facilidad con que se establecen las compañías comanditarias y se elude la Ley que exige la autorización del Gobierno para la constitución de las compañías anónimas, y que los hombre más ilustrados de Francia reconocen que el mejor remedio es el que la comisión propone en el proyecto que se discute.

*No es este, señores, el lugar de recordar los males que ha causado esa facilidad en el vecino Reino; pero permítaseme decir que tampoco es exacto que el Gobierno francés hubiera retirado el proyecto que presentó en el año 1838, o que se hubiese discutido en las Cámaras, y que lo que sucedió fue que el Gobierno no se puso de acuerdo con la comisión.*⁶⁰⁴

En esta misma sesión del 20 de abril de 1847, se produjo una larga exposición sobre el régimen francés de autorización de compañías por acciones, así como su relación con la concesión y adjudicación de obras públicas. La discusión fue mantenida por el Sr. Martínez Almagro y el Sr. Bertrán de Lis, miembro de la CCD que redactó el Dictamen sobre el PL 1848.

El Sr. Martínez Almagro realiza una intervención que, a nuestro juicio, es de las más acertadas y clarividentes sobre el régimen de autorización. Diferencia la aprobación de la constitución de una compañía por acciones, de la autorización de una concesión de obras públicas o bancos de emisión. Él defendía la postura de que las compañías anónimas debían ser autorizadas por el Gobierno y sólo el Gobierno. En cambio, la concesión de una obra pública o de una actividad de interés público, por su carácter

⁶⁰³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, págs. 1430 y 1431.

⁶⁰⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1433.

privilegiado, debía ser objeto de autorización legislativa. En este marco, utiliza como ejemplo la legislación francesa:

(...) en Francia se divide completamente la autorización de una sociedad para constituirse, de la concesión de una carretera, de un camino de hierro y otras cosas análogas, para las cuales da el Gobierno una subvención como por vía de auxilio y fomento. Y para que no se confundiese una cosa con otra, la ley de 1842 fijó ya las grandes líneas de caminos de hierro que se habrían de construir bajo la obligación del Gobierno en auxiliarlas, en la cual iba embebida, como se sabe, la de pagar la expropiación de los terrenos necesarios, de hacer la explanación y demás operaciones preliminares de esta clase de obras. Después, partiendo del principio de esta Ley, leyes sucesivas que han ido presentándose a medida que han llegado los casos, han fijado las condiciones que en cada uno debían imponerse a los que contratasen la construcción de esas líneas, ya fuesen compañías de cualquier clase, ya particulares. En los caminos de hierro se fijan las tarifas, señalando el máximo y el mínimo a que deben ascender, el depósito, etc., y dejando al Gobierno los pormenores de la subasta pública.⁶⁰⁵

El Sr. Bertrán de Lis en su respuesta acepta que el Parlamento francés no tiene competencia para autorizar las compañías anónimas. Pero se acoge a un caso particular en que esto no fue así: la autorización de una compañía anónima que explotaba una línea marítima entre El Havre y Estados Unidos.

En Francia es cierto que las compañías anónimas no van para organizarse a las cámaras; pero es menester tener en cuenta una cosa, y es, que la legislación francesa sobre esta materia es la hecha en un tiempo en que no se había desarrollado como ahora el espíritu de asociación, ni tampoco la influencia parlamentaria; y sabido es que la índole del poder legislativo en Francia es hoy muy distinta a como se consideraba en tiempos de la restauración, que fue cuando se empezó a tomar alguna disposición sobre la materia. Pero la razón principal es que no se había desarrollado como ahora el espíritu de asociación; que no había tomado ese incremento, esa extensión, ni se había ocupado de la clase de negocios que hoy se ocupa. Hoy que el espíritu de asociación es uno de los objetos más graves que preocupan a la sociedad; que se comprometen tantos intereses en las compañías anónimas, se ha creído conveniente intervenir de una manera indirecta en la organización de esas compañías. Así es que, sin ir más lejos, hace pocos días se ha presentado por el gobierno en la Cámara de los Diputados, y posteriormente en la de los Pares, un proyecto para sancionar un contrato que el Gobierno había hecho con una compañía anónima para la navegación por vapor desde el Havre hasta Estados Unidos. Es verdad que estaba el contrato hecho y formada la compañía; pero el Gobierno presentó ese contrato, lo que basta para conocer que el espíritu y tendencia del poder legislativo en Francia sobre esta materia es aproximarse a la práctica inglesa. ¿Y qué ha hecho la Cámara? La Cámara ha querido examinar la organización de la compañía a quien se concedía el privilegio de establecer esta carrera, y ha llegado a tal punto su escrupulosidad, que la Cámara se ha ocupado de ver si en los individuos de esa compañía había algunos Pares y Diputados, porque creyó que no se debía conceder el privilegio si figuraban en ella tales o cuales

⁶⁰⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1436.

*individuos. ¿Y qué sucede con las compañías de caminos de hierro? Es claro que con arreglo a la ley de 1832 el Gobierno está facultado para atender a los gastos de las expropiaciones y demás que son necesarios para la colocación de los carriles y explotación del camino antes que las compañías, y por pública subasta adjudica después a una compañía la explotación del camino de hierro. Pero nótese una cosa, y es, que a estas adjudicaciones acompaña siempre lo que se llama el pliego de condiciones; y si bien en éste no entra la organización de la compañía, establece otras las cuales tienen que arreglarse aquéllas en su organización. De manera que de un modo indirecto interviene el gobierno.*⁶⁰⁶

La réplica del Sr. Martínez Almagro es breve y aguda. Parece que uno de los motivos de la autorización legislativa de esa compañía anónima titular de la concesión de la línea marítima El Havre – Estados Unidos, según palabras del propio Sr. Bertrán de Lis, fue el conflicto de intereses que existía al haber varios socios que eran Diputados o Senadores. La función del Parlamento es legislar, no determinar si concretas personas pueden formar parte de una compañía por acciones.

*Precisamente una de las razones por que yo me oponía al proyecto del Gobierno es porque aquí va a tratarse de cuestiones que la Cámara francesa ha querido evitar. Aquí va a descender la cuestión de sociedades anónimas a la cuestión de personas, cuestión que debe evitar el Congreso y todo cuerpo colegislador. En las cámaras francesas, como ha dicho muy bien el señor. Bertrán de Lis, al tratarse de las comunicaciones de los vapores se ha descendido a las personas; pero la ley no debe buscar la garantía en las personas, sino en el depósito de esas personas, cualesquiera que ellas sean.*⁶⁰⁷

B) DERECHO BRITÁNICO

En la primera sesión del Congreso de los Diputados, el 20 de abril de 1847, en la que se debatió artículo por artículo el Dictamen de la CCD, el Diputado, Sr. Ordax, expuso, entre otras cuestiones, su oposición a que la ley se aplicara, a toda “compañía mercantil cuyo capital en todo o en parte si divida en acciones” (artículo 1). Propuso la modificación de este artículo (básico en la estructura del Dictamen) para que se circunscribiera exclusivamente a las compañías anónimas, excluyendo a las comanditarias por acciones. En un momento determinado de su intervención, para apoyar sus argumentos, recurre al Derecho comparado en los siguientes términos:

*Los autores de este proyecto pudieran haber visto el Código francés y demás que han derivado de él, en el Código de los Estados-Unidos y de Inglaterra, y de todas partes, los artículos que separan determinadamente las sociedades comanditarias de las sociedades anónimas...*⁶⁰⁸

El Diputado Sr. Miota, miembro de la CDD encargada de la redacción del Dictamen que proponía la aplicación del PL 1848 tanto a las anónimas como a las comanditarias por acciones, le respondió en los siguientes términos:

⁶⁰⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1439.

⁶⁰⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1440.

⁶⁰⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1429.

*...Pero ha dicho también S. S. [Sr. Ordax] que en la legislación inglesa se reconocen las compañías comanditarias lo mismo que las anónimas, y que se distinguen entre sí unas y otras por lo que respecta a la necesidad de la autorización para formarlas, y este es un error. La legislación inglesa no reconoce compañías ningunas, absolutamente ningunas, en que el accionista no se comprometa más que al importe de lo que pone en la compañía, y que no deban ir al Parlamento a obtener la autorización. Más es: en Inglaterra no se conocen las compañías comanditarias.*⁶⁰⁹

La contestación, como se verá más adelante, es acertada.

En esta misma sesión del 20 de abril de 1847, se produjo una larga exposición sobre el régimen británico de autorización de compañías por acciones, así como su relación con la concesión y adjudicación de obras públicas. La discusión fue mantenida por el Sr. Martínez Almagro y el Sr. Bertrán de Lis, miembro de la CCD que redactó el Dictamen sobre el PL 1848.

El Sr. Martínez Almagro, en nuestra opinión con gran acierto, proponía mantener el espíritu del PL 1848 presentado por el Gobierno el 26 de febrero de 1847 siendo Ministro de CIOP, el Sr. Roca de Togores, conforme al cual la autorización de las compañías por acciones la otorgaba el Gobierno y no el Parlamento. Además, también apoyaba la aprobación de una Ley de Obras Públicas que se coordinara y armonizara con el PL 1848. Como se expuso en el apartado anterior, citó en su apoyo la práctica francesa. En cuanto a la legislación británica dijo que, a primera vista o en apariencia, parecía contraria a lo que él proponía, pero que en realidad una consideración reflexiva de lo que ocurría en Reino Unido demostraba que no era así. Estas son sus palabras:

Yo bien sé que se me dirá que así se hace, es decir, como se propone en esta Ley [en la propuesta de la CCD, que introducía la autorización legislativa], en Inglaterra; pero se me permitirá que diga que no es esto tan exacto como parece a S. S. Después de varias leyes, en el reinado de la actual soberana Victoria, el año 1844, viendo los grandes abusos que existían, porque las sociedades anónimas presentaban la misma anarquía que en España, se adoptó el principio de que las sociedades anónimas que tuvieran por objeto ocuparse en obras públicas necesitaban de un acta del Parlamento. De igual aprobación necesitaban las sociedades para caminos de hierro, pero con una notable diferencia: las que tenían por objeto obras públicas pueden constituirse provisoriamente, enviando sus estatutos y demás a una oficina ad hoc, que se llama Soint Stock [sic], y acuden después al Parlamento; pero las de caminos de hierro tenían que presentarse desde luego ante una comisión de la Cámara.

(...) en Inglaterra, después del examen de la Comisión de la Cámara que se ocupa de los pormenores de la sociedad y de su objeto, pasa sólo por fórmula a las Cámaras; de modo que la aprobación realmente ha sido de la Comisión en la que todo se ventila en un juicio contradictorio con audiencia de las partes y asistencia de letrados. Yo prescindo en este momento de la diferencia que hay entre la organización social, o más bien política de Inglaterra y la nuestra, sin

⁶⁰⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1432.

*embargo de que nadie ignora que los Parlamentos ingleses no sólo legislan, sino que en muchos casos administran. Y esto nace, como no se oculta a los entendidos individuos de la Comisión, del distinto origen de las fracciones que forman la Cámara de los comunes. Hasta el siglo XV los Diputados de los condados eran en muchos casos unos verdaderos Consejeros de la Corona; posteriormente se confundieron con estos Consejeros los Diputados de los boroughs o pueblos, y formaron la Cámara de los comunes según en el día se halla organiza.*⁶¹⁰

Esta exposición es de las pocas que se encuentran en los debates parlamentarios en la que se ofrezcan tantos detalles y pormenores del sistema legal británico. Bertrán de Lis rebatió la propuesta acudiendo a la historia de las compañías por acciones en Gran Bretaña y mostrando también un conocimiento detallado del sistema británico.

El señor Martínez Almagro ha citado varios ejemplos de naciones extranjeras, y entre ellos nos ha citado los de Francia e Inglaterra. No estoy conforme con S. S. en los hechos que ha indicado respecto de Inglaterra, ni tampoco en la inteligencia que ha dado a la legislación francesa. En Inglaterra existen compañías anónimas desde tiempo de Jorge I, y en aquel país, como en el nuestro, empezaron cometiendo grandes abusos, porque allí no tenían más reglas que las del derecho común y las de la práctica del comercio, pues todo el mundo comerciaba individual y colectivamente. Estableciéronse esas compañías, y hubo grandísimos abusos, creándose para negocios que de ninguna manera debían sacarse del círculo del comercio común; y no sólo se fundaron para este objeto, sino que sucedió, entre nosotros, que se formaban compañías para crear un papel que servía de negociación y de juego, y llegó a tal punto el escándalo, que el parlamento creyó necesario intervenir en esta materia. Y era tal y tan escandaloso el abuso cometido sobre este particular, que se formó un Acta y se llamó a esta Acta el Acta de engañifa. Hasta tal punto había llegado el escándalo. Pero sucedió como siempre; que quiso remediarse el mal, y se tomaron disposiciones tan duras, que nada se remedió, porque una de ellas fue que todas las compañías formadas se sujetasen a la nueva acta, no exceptuándose más que dos. Todas las demás se las obligaba a acomodarse a las nuevas disposiciones; y eran estas tan duras y severas, que no se aplicaron en manera alguna y continuaron las cosas del mismo modo.

No se tomaron después disposiciones hasta tiempo de Jorge IV, en que se estableció el Acta que ha venido rigiendo hasta nuestros días. En ésta se determinaba que las compañías anónimas por regla general debían establecerse del parlamento, y se dejaba al gobierno la facultad de establecer otras por medio de una carta o real cédula. Esta Acta no establecía el principio de una manera bastante clara y distinta, sino que decía que por regla general debían establecerse por el Parlamento, dejando a los que quisieran el beneficio de acudir al gobierno, decidiéndose así por un principio raro y extravagante. Pero esa Acta estableció una regla, y fue, que toda compañía que exigiese el privilegio de poder expropiar por causa de utilidad pública, debía ir al parlamento, y esto se ha venido practicando constantemente hasta ahora, en que bajo el gobierno de la reina Victoria se dio el Acta que está rigiendo en la

⁶¹⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, págs. 1436 y 1437.

*actualidad que viene a ser poco más o menos la de Jorge IV, estableciendo como regla lo que era práctica de comercio. Pero con arreglo a esa Acta y a las prácticas del país, toda compañía que exige la facultad de expropiar por causa de utilidad pública tiene que ir al Parlamento, no sólo para obtener el privilegio, sino para que se examine su organización; y es muy frecuente que a consecuencia de esto se varíe la organización de la compañía. En los caminos de hierro ha sucedido que algunas veces el Parlamento ha determinado que los particulares y las compañías han de tener tal interés en la acción, que han de tener acciones permanentes, y otras reglas particulares que entran en la organización de las compañías. Esto es verdad que se hace por un comité; pero esto no dice nada contra la esencia del pensamiento, sino contra la diversa aplicación práctica de este principio. El resultado es que el Parlamento sólo es el interesado; porque si bien es el comité el que decide, luego, aunque sea por fórmula, siempre va al Parlamento. De manera que éste es el que le da el carácter legal.*⁶¹¹

Finalmente, el Sr. Martínez Almagro contesta al Sr. Bertrán de Lis con unas escuetas palabras en las que recuerda que el Parlamento británico no tiene las mismas facultades que el Parlamento español:

*En cuanto a la legislación inglesa, S. S. ha convenido conmigo en que por un bill de la Reina Victoria respecto de las compañías de los caminos de hierro, es un comité el que las autoriza; pero téngase presente que la práctica en Inglaterra en las disposiciones puramente administrativas, se discuten y aprueban en un comité, y las legislativas en el Parlamento.*⁶¹²

Estas son las referencias al sistema legal británico que figuran en los debates del Congreso sobre la Ley de 1848. No hemos hecho un comentario a su contenido porque nos parece más adecuado, desde un punto de vista metodológico, exponer ahora un breve resumen del Derecho de sociedades de Reino Unido en los años previos a las fechas en que se realizan las intervenciones que se han transcrito, es decir, abril de 1847. De esta manera se tendrá un punto de referencia o comparación más objetivo y se podrán extraer conclusiones más precisas.

1. Cambio de tendencia: finaliza la restricción impuesta a la aprobación de nuevas compañías por acciones. *The Chartered Companies Act, 1837*

Afirma PALMER que “la historia de la moderna legislación (británica) sobre sociedades empieza en 1825, cuando se deroga *The Bubble Act*”⁶¹³. El antecedente próximo de *The Bubble Act, 1720*, se resumen en una crisis financiera aguda, a principios del siglo XVIII en Inglaterra. Más concretamente, estuvo propiciada por las actuaciones de una sociedad denominada *South Sea Company* (HASLBURY, PALMER, BOYLES Y BIRDS y TUNC⁶¹⁴). Constituida en 1710 por una Ley del Parlamento, su objeto

⁶¹¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1439.

⁶¹² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1440.

⁶¹³ PALMER (1976): *Palmer's Company Law*, Londres, pág. 6. Se trata de la vigésimo segunda edición, realizada por CLIVE M. SCHMITTHOF.

⁶¹⁴ HASLBURY, The Earl of (1910): *The laws of England being a complete statement of the whole law of England*, vol. V Companies, Londres, pág 25; PALMER, *Palmer's Company ...*, pág. 6; BOYLES Y BIRDS

social eran determinados servicios en relación a la deuda pública, recibiendo en contraprestación algunos derechos de monopolio para el comercio en los mares del Sur, incluyendo Iberoamérica. Este monopolio fue menos rentable de lo previsto. La guerra de España de 1718 originó un grave revés a la *South Sea Company*. Por este motivo obtuvo algunas modificaciones de la *Royal Charter* aprobada por Ley del Parlamento.

En 1719 consiguió la prerrogativa de ofrecer a determinadas personas la conversión de sus derechos de cobro en acciones que iba a emitir la *South Sea Company*. La autorización para ofrecer la citada conversión constituyó un gran éxito financiero. En 1720 el Gobierno propuso a la sociedad repetir la operación, pero aumentando la cifra anterior: se sobrepasó el valor nominal de treinta millones de libras esterlinas. El Banco de Inglaterra tomó parte en la puja por las acciones de la *South Sea Company*. Pero la compañía elevó especulativamente el precio de las acciones prometiendo mayores rentabilidades sin un apoyo sólido y firme, pues la actividad de la compañía pasaba por serias dificultades.

De esta manera, durante la tramitación parlamentaria de esta modificación de la *Royal Charter*, el valor de las acciones subió del 137% al 319%. Se fijó el valor de cambio de la acción en el 375% del valor nominal para el mes de mayo de 1720. El 2 de junio, el ambiente especulativo financiero empujó el valor de la acción al 890%. Pero debido a los rumores sobre el riesgo de la operación, se produjo la reacción contraria y ese mismo día la valoración cayó al 640%.

El Parlamento (que había autorizado una primera modificación de la *Royal Charter* y que estaba autorizando una segunda, para más datos promovida por el Gobierno) inquieto y preocupado por las consecuencias de esta especulación financiera y deseoso de que no afectara al público en general, aprobó *The Bubble Act, 1720*.

Esta Ley, entre otras disposiciones, prohíbe el uso de compañías mercantiles, a no ser que se autorizase su funcionamiento por *Act of Parliament* o *Royal Charter*. La Ley no se aplica a todas las compañías creadas con anterioridad al 24 de junio de 1724, ni tampoco a dos compañías en particular: *East India Company* y *South Sea Company*.

Las consecuencias de esta Ley llegaron pronto. La publicidad que se le dio, los abusos que trataba de evitar, los procedimientos contra determinadas sociedades, etc., consiguieron inquietar realmente a los inversores. La valoración de las acciones de la *South Sea Company* fueron un reflejo de esta situación: en el mes de junio volvieron a subir casi hasta el 1.000%; el día que se anunciaron los procedimientos contra la compañía estaban al 850%; un mes más tarde habían caído hasta el 390%, a pesar de que los administradores habían anunciado un dividendo semestral del 30%; en diciembre su valor era del 125%.

Debido a las buenas relaciones políticas y financieras de la compañía, ésta escapó de la situación concursal, si bien, muchas personas se vieron afectadas por la pérdida de sus inversiones. Por este motivo, durante bastantes años el público perdió la confianza en las compañías anónimas o *Joint Stock Companies*. A partir de este

(1987): Boyles & Birds Company Law, Bristol, pág. 2. Destaca también el estudio realizado por el francés TUNC, A (1971): *Le Droit anglais des sociétés anonymes*, Paris, 1971, págs. 7 y ss., en el cual nos basamos para esta breve reseña histórica de la *South Sea Company*.

momento se constituyeron muy pocas *Joint Stock Companies*. Las que estaban ya constituidas antes de la *Bubble Act, 1720*, siguieron actuando en el mercado.

A finales del siglo XVIII se aprecia un cambio en la situación y el Parlamento empieza a conceder la personalidad jurídica a sociedades (de carácter civil, no mercantil) cuyo objeto social era la construcción y explotación de canales. Las leyes que aprobaron estas sociedades otorgaban, entre otras cosas, el privilegio de limitar la responsabilidad de los socios a la cifra de capital que hubieran suscrito.

Los demás empresarios que quisieran promover una asociación de personas y capitales para acometer una empresa, sólo podían hacerlo mediante el *partnership*, desprovisto totalmente de personalidad jurídica. Y así tuvieron que hacerlo, pactando unas cláusulas específicas para cada caso concreto. De esta manera, como dice TUNC⁶¹⁵ empezaron a aparecer las denominadas *Unincorporated Joint Stock Companies*, que eran *Joint Stock Companies* desprovistas de personalidad jurídica.

En esta situación, por un lado, no se permitía la libre transmisibilidad de las acciones, si bien el influjo de *The Bubble Act* cada vez era menor. Y, por otro, según apunta PALMER⁶¹⁶, se utilizaron instrumentos legales ingeniosos para que la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica no entorpeciera el funcionamiento societario. En este sentido, la sociedad se creaba mediante *deed of settlement* (escritura de constitución) en la que se constituía un *trust* gestionado por los administradores de la sociedad, teniendo los *trustees* cierta capacidad de intervención en la gestión social, pudiéndose modificar los pactos societarios según determinados principios de mayoría. La limitación de la responsabilidad de los socios seguía circunscribiéndose a las sociedades constituidas y aprobadas por Ley. Por este motivo, las *Joint Stock Companies* se formaban casi exclusivamente por hombres de negocios y empresarios involucrados en la gestión de las sociedades.

A principios del siglo XIX las circunstancias comienzan a variar con motivo de los gastos económicos de las guerras napoleónicas y, sobre todo, por la Revolución Industrial, concretamente por el incipiente ferrocarril y la siderurgia. De nuevo empieza a tomar cuerpo el espíritu de especulación. El Gobierno, preocupado por encauzar esta inquietud empieza a aplicar de nuevo *The Bubble Act, 1720*. Así en 1807 inicia procedimientos contra dos compañías que permitían la transmisibilidad de sus acciones y que habían tratado de limitar la responsabilidad de sus socios. En 1808 dos sociedades son declaradas nulas.

1824 y 1825 son años de nueva especulación financiera, como lo habían sido 1719 y 1720. Se plantea la necesidad de romper el esquema anterior para poder desarrollar las empresas, pues el marco jurídico encorsetaba e impedía encauzar las inquietudes empresariales. Se enfrentaron dos corrientes: una que preconizaba la libre empresa y otra que criticaba duramente la acumulación de capitales. Al final triunfó la primera corriente y en 1825 se aprobó la derogación de *The Bubble Act, 1720*.

Como dice PALMER⁶¹⁷, en 1825, cuando se derogó *The Bubble Act, 1720*, existían tres tipos de sociedades: *Companies incorporated by Royal Charter*,

⁶¹⁵ TUNC, A. (1971): *Le Droit anglais ...*, pág. 9.

⁶¹⁶ PALMER (1976): *Palmer's Company ...*, pág. 6.

⁶¹⁷ PALMER (1976): *Palmer's Company ...*, pág. 6.

Companies incorporated by special Act of Parliament y, por último, *Deed of Settlement Companies*. Al poco tiempo de la derogación de la citada Ley comenzó a crearse un estado de opinión entre los empresarios para lograr el reconocimiento de la personalidad jurídica de las sociedades (*incorporation*) y poder acometer iniciativas empresariales de envergadura. Apunta TUNC⁶¹⁸ que este periodo coincide con unos años de gran auge económico hacia 1834, sobre todo en los sectores de la banca y seguros, así como en la actividad industrial y comercial.

Con este motivo, el Legislador dudaba sobre la conveniencia de reconocer con carácter general la personalidad jurídica de las sociedades. Optó por una solución intermedia a través del antecedente de la *Chartered Companies Act, 1837*, que es la *Trading Companies Act, 1834*. Esta última Ley permitía a la Corona conceder el reconocimiento total o parcial de la personalidad jurídica de una sociedad. En ningún caso podía limitar la responsabilidad por deudas sociales de los socios. En opinión de TUNC, no fue una Ley especialmente brillante⁶¹⁹.

En 1837 el *BoT* encarga un estudio sobre la posibilidad de limitar la responsabilidad de los integrantes de un *partnership* en relación a las deudas sociales. El informe es bloqueado por el Parlamento, si bien, sus principios son recogidos por *The Chartered Companies Act, 1837*, en virtud de la cual, el Parlamento autorizó a la Corona a conceder mediante *Royal Charter* que los socios de una sociedad fueran responsables de las deudas sociales sólo hasta una determinada cantidad.

Esta Ley, recogen CHARLESWORTH AND CAIN⁶²⁰, facultó a la Corona para otorgar las denominadas *letters patent*, por las cuales podía conceder las ventajas de la incorporación de una sociedad sin necesidad de otorgar una *charter* a un conjunto de personas asociadas con fines comerciales. La Ley exigía como requisito la inscripción de una *deed of partnership* en la que el capital estuviera dividido en acciones transmisibles.

PALMER⁶²¹, citando a MAITLAND comenta que hubo mucho interés para facilitar que el espíritu empresarial se canalizara por el reconocimiento jurídico de la personalidad de las sociedades de capital. En opinión de TUNC⁶²², esta Ley de 1837 no tuvo gran aplicación por los cuantiosos gastos que suponía conseguir la *Royal Charter*, si bien PALMER⁶²³ apunta en 1976 que aún seguían en funcionamiento algunos bancos constituidos por este procedimiento conforme a la citada Ley.

⁶¹⁸ TUNC, A. (1971): *Le Droit anglais* ..., pág. 10.

⁶¹⁹ TUNC, A. (1971): *Le Droit anglais* ..., pág. 11.

⁶²⁰ CHARLESWORTH AND CAIN (1977): *Company Law*, décimo primera edición, Londres.pág. 7.

⁶²¹ PALMER (1976): *Palmer's Company* ..., pág. 8, cita a modo de ejemplo las siguientes palabras de F. W. Maitland: *If the State had not given way, we should have had in England joint stock companies, unincorporated, but contracting with limited liability*. MAITLAND, F. W. (1936): *Trust and Corporation, Selected Essays*, págs. 141, 210.

⁶²² Según TUNC, durante los 17 años siguientes a la Ley de 1837, se constituyeron por este procedimiento unas 50 sociedades. TUNC, A (1971): *Le Droit anglais*..., pág. 11.

⁶²³ PALMER (1976): *Palmer's Company* ..., pág. 1041.

2. Admisión por primera vez del régimen de inscripción registral de las compañías mercantiles. *JSCA 1844*

JSCA 1844 es el resultado de la iniciativa de Gladstone, como Presidente del *BoT*. La novedad más importante de esta Ley es la creación de *joint stock companies* mediante la inscripción en un Registro. El texto legal consagra un nuevo procedimiento de constitución de la sociedad, diferente al de la *Royal Charter* o *Act of Parliament*⁶²⁴. Este procedimiento será de importancia capital.

El ámbito de aplicación de esta Ley⁶²⁵, abarca todas las *Joint Stock Companies* establecidas en Inglaterra e Irlanda, o establecidas en Escocia con domicilio o sucursal comercial en cualquier otro lugar de Gran Bretaña, cuyo objeto social fuera alguno de los siguientes (dentro de ciertas excepciones):

- Desarrollo de una actividad comercial.
- La obtención de beneficios.
- Concesión de garantías a terceros (excepto las actividades bancarias, escuelas, Instituciones Científicas y Literarias, etc).
- Seguros

HALSBURY⁶²⁶ precisa el contenido del término *Joint Stock Companies* en el sentido que se expone a continuación.

En primer lugar, comprendía los siguientes tipos societarios:

- a) Todo *partnership* cuyo capital estuviera dividido o se hubiera acordado su división en acciones que pudieran ser transmitidas sin el consentimiento expreso de los otros socios.
- b) Toda sociedad de garantía, incluyendo determinadas *insuring friendly societies*, que fueran *joint stock companies* o *mutual assurance societies*.
- c) Todo *partnership* con más de 25 socios. Es decir, toda sociedad con fines comerciales con más de 25 socios debía inscribirse en el Registro. Esta cifra bajó a 20 socios con la Ley de 1856⁶²⁷.

En segundo lugar, quedaban expresamente excluidas del ámbito de esta Ley y, por tanto, fuera del término *joint stock companies* las siguientes sociedades:

- a) Los *partnership* existentes con anterioridad al 1 de noviembre de 1844.
- b) Salvo que expresamente se dispusiera lo contrario, todas las sociedades cuyo objeto social fueran los trabajos de obras públicas como la construcción de

⁶²⁴ PALMER (1976): *Palmer's Company ...*, págs. 8 y 9.

⁶²⁵ Artículo 1 *JSCA 1844*.

⁶²⁶ HALSBURY (1910): *The laws of England ...*, págs. 25 y 26.

⁶²⁷ TUNC, A. (1971): *Le Droit anglais ...*

puentes, canales, embalses, ferrocarriles, puertos, etc., que requerían expresa autorización del Parlamento.

- c) Cualquier sociedad constituida por Ley o por *charter*.
- d) Cualquier sociedad autorizada por Ley o por *letters patent* para demandar o ser demandada en nombre de un representante.

La Ley exigía presentar a inscripción registral unos datos mínimos de la compañía. Tras este registro, la sociedad obtenía un certificado que se podría denominar de conformidad (*evidence of compliance*), pero que expresamente no era considerado un certificado definitivo de registro que otorgara a la sociedad los privilegios y facultades regulados en esta *JSCA 1844*⁶²⁸. Su artículo 4 lo denomina "certificado provisional" (*Certificate of Provisional Registration*).

Para completar la constitución de la sociedad, la Ley exigía, además del registro de la información mencionada anteriormente, una escritura de constitución en la que se designaran, al menos, tres administradores, uno o más auditores y con un contenido mínimo regulado por el artículo 7 *JSCA 1844*. Junto a esta escritura, otro requisito necesario era un contrato o pacto (*Covenant*) de cada socio con el representante de la sociedad (*Trustee on the part of the Company*) por el que los accionistas se comprometían a desembolsar el capital suscrito y a cumplir todas las obligaciones asumidas en la escritura pública.

Una vez cumplidos los requisitos mencionados anteriormente, se podía obtener el *certificate of complete registration* (artículo 9 *JSCA 1844*) y, a partir de esa fecha, la sociedad quedaba constituida con plenas facultades⁶²⁹. Una vez registrada la sociedad, la Ley regulaba los derechos y obligaciones de los accionistas (artículo 26), las facultades y obligaciones de los administradores (artículo 27), algunos aspectos de la junta general (artículo 29), las cuentas sociales (artículos 33 a 37), los auditores (artículos 38 a 43), el capital y las acciones (artículos 49 a 56), etc.

Este importantísimo avance legal en cuanto al reconocimiento de la personalidad jurídica por inscripción registral, quedó ensombrecido por la falta de previsión en la Ley de la limitación de la responsabilidad de los socios. En efecto, *JSCA 1844* presenta un aspecto favorable, cual es la constitución de las sociedades mediante la inscripción registral y, otro desfavorable: la falta de limitación de responsabilidad para los socios (artículo 25).

La Doctrina británica ha tratado de interpretar benévolamente esta situación. Así, HALSBURY⁶³⁰ matiza en el sentido de que la responsabilidad limitada era similar a la establecida para los socios de las sociedades sometidas a la *CCCA 1845*, más que a la establecida en la *Joint Stock Companies Act, 1856*.

⁶²⁸ HALSBURY (1910): *The laws of England* ..., pág. 9.

⁶²⁹ HALSBURY (1910): *The laws of England* ..., pág. 26. PALMER, señala expresamente la facultad de actuar en procedimientos legales y la de ser titular de propiedades. (*Palmer's Company* ..., pág. 8)

⁶³⁰ HALSBURY (1910): *The laws of England* ..., pág. 27.

Por su parte, PALMER⁶³¹ comenta que esta Ley regulaba expresamente la responsabilidad de los socios por las deudas sociales como si fueran *partners*. Si bien añade que, a pesar de esto, se intentó conseguir la limitación de responsabilidad para las sociedades inscritas al amparo de esta Ley. En efecto, se pensó que era o podría ser eficaz la inclusión en la escritura de constitución de una cláusula de limitación de responsabilidad de los socios a la cuantía de las acciones, si bien, los Tribunales entendieron que esta cláusula tenía efectos *inter partes*, pero no frente a terceros⁶³².

El historiador económico norteamericano KINDLEBERGER⁶³³ ha analizado el proceso de discusión hasta el reconocimiento de la limitación de responsabilidad en 1856. Expone que, según algunos autores, fue importante la presión de los ahorradores del sudeste de Inglaterra, con excedente de tesorería en un momento de desaceleración de la industria ferroviaria. Otros escritores destacan los planteamientos de socialistas cristianos que propugnaban la inversión de los trabajadores en su empresa y así reducir las tensiones entre las clases proletarias y capitalistas. En su opinión, *el argumento decisivo fue el de la libertad de la actividad económica, más el hecho de que cierto número de compañías se estaban constituyendo en sociedades por acciones, al amparo de la ley francesa o la norteamericana, al objeto de limitar la responsabilidad de los accionistas*.

Esta Ley crea el Registro de Sociedades que otorgaba publicidad de todos los documentos en él inscritos, entre los que se incluían la escritura de constitución de la sociedad, así como la cuenta anual de ingresos⁶³⁴.

Por último, cabe destacar que algún autor español como CASTRO-RIAL⁶³⁵, califica esta Ley de 1844 como el texto que *sistematizó algunos de los principios fundamentales de la sociedad anónima*.

3. Ley marco para las compañías mercantiles cuyo objeto social sea una obra pública. CCCA 1845

Esta Ley establece unas cláusulas o artículos que, salvo disposición particular en contrario, se aplican a todas las sociedades constituidas para la ejecución de líneas de ferrocarril, carreteras, etc., excluyendo a estas sociedades del ámbito de aplicación de leyes societarias posteriores que pudiéramos llamar “generales”, como son *The Limited Liability Act, 1855*, *The Joint Stock Companies Act, 1856*, y *The Companies Act, 1862*.

Afirma TUNC⁶³⁶ que el autor de esta Ley fue GLADSTONE.

⁶³¹ PALMER (1976): *Palmer's Company ...*, pág. 9.

⁶³² PALMER (1976): *Palmer's Company ...*, pág. 9, nota 14: *Notwithstanding this provision, an effort was in some cases made to obtain limited liability for a company registered under the Act. It was thought that the insertion in the deed of settlement of a clause limiting the liability of the members to the amount of their shares would or might be effective, as the deed of settlement was filed with Registrar and was open for public inspection, but it was ultimately held by the Court that this attempt to limit was, as regard outsiders, ineffectual.*

⁶³³ KINDLEBERGER, C. (2011): *Historia financiera de Europa*, Madrid, págs. 274 – 275.

⁶³⁴ PALMER (1976): *Palmer's Company ...*, pág. 9.

⁶³⁵ CASTRO-RIAL, B. J. (1946): “Evolución del Derecho de Sociedades en Inglaterra” en *RDM*, vol. I, núm. 2, pág. 248.

⁶³⁶ TUNC, A. (1971): *Le Droit anglais ...*, pág. 12.

Con carácter previo se ha de exponer, brevemente, el concepto general de una *Consolidation Act*: se trata de una Ley que deroga o que vuelve a poner en vigor o que refunde en una única Ley otras Leyes anteriores sobre el mismo objeto. El procedimiento parlamentario de aprobación de estas Leyes no suele incluir el debate de las mismas en el Parlamento⁶³⁷.

Durante muchos años del siglo XIX, en Gran Bretaña, las compañías creadas para acometer obras públicas (*public works*) como puentes, carreteras, canales, embalses, acueductos, depuradoras de agua, túneles, ferrocarriles, embarcaderos, puertos, muelles, etc., necesitaban ser autorizadas con carácter particular por el Parlamento. Estas compañías se constituían en virtud de “Leyes especiales”⁶³⁸ que les concedían facultades, entre otras materias, para adquirir inmuebles, fincas, etc., bajo especiales condiciones legales y, además, regulaban su capital, socios, administradores, etc.⁶³⁹

JSCA 1844, como se vio en el epígrafe anterior, no se aplicaba (salvo disposición expresa en contrario) a las compañías cuyo objeto social fueran las obras públicas. Ahora bien, esta Ley preveía lo siguiente: si la compañía depositaba en las Cámaras del Parlamento toda la documentación requerida por la “Ley especial” que regulaba su aprobación y enviaba copia de dicha documentación al Registro, junto con otros documentos de carácter técnico (como eran planos, secciones, etc.), el Registrador debía aceptarlos y otorgar el certificado definitivo de inscripción.

En bastantes casos era necesaria, una vez conseguido el certificado definitivo de inscripción, la tramitación de los poderes o facultades concedidas en la “Ley especial” para ejecutar las obras públicas aprobadas y, hasta que esto no se consiguiera, sólo se podían realizar determinados actos y contratos con carácter condicional. Una vez obtenidos estos poderes o facultades, cesaban automáticamente los concedidos “supletoriamente” por la *JSCA 1844*, a no ser que la “Ley especial” previera otra cosa.

Este procedimiento no era ni eficaz, ni práctico, ni seguro para constituir y gestionar una empresa dedicada a las obras públicas, como los ferrocarriles, carreteras, gas, etc. En efecto, se hacía muy complejo y costoso para estas compañías la necesidad de obtener, en primer lugar, una “Ley especial” antes de poder utilizar las facultades y poderes que les otorgaban las leyes generales sobre las compañías y que, además, en segundo lugar, necesitaran de una posterior declaración formal que les habilitara para el ejercicio de las facultades y poderes otorgados a su favor en la “Ley especial”.

Por este motivo se aprobó la denominada *CCCA 1845*. El objetivo de esta Ley era recopilar en un único texto legal la regulación uniforme de ciertas materias relativas al capital, las acciones, la ampliación de capital, solicitud de préstamos, junta general de accionistas, administradores, auditores, cuentas anuales, distribución de dividendos, etc., de las *Joint Stock Companies* que habían realizado las “Leyes especiales” que

⁶³⁷ CURZON, L. B. (1998): *Dictionary of Law*, Londres, define de la siguiente manera: la *Consolidation Act*: *An Act which repeals or re-enacts or collects in a single statute previous enactments and amendments relating to a topic. Acts of this nature may be passed without customary debate in Parliament.*

⁶³⁸ Se utilizara en este apartado la expresión “Ley especial” para referirse a la Ley concreta que regula la constitución, funcionamiento y poderes de la compañía que va a desarrollar una determinada obra pública.

⁶³⁹ HALSBURY (1910): *The laws of England ...*, pág. 674.

regulaban la autorización para acometer obras públicas. De esta manera, se evitó la repetición innecesaria de la regulación de dichas materias en cada una de las distintas “Leyes especiales” que concedían esas autorizaciones y, por otro lado, se consiguió dar una mayor uniformidad al tratamiento de estos temas⁶⁴⁰.

Las denominadas *Clauses Consolidation Acts* recogieron lo que se podría denominar “cláusulas generalmente utilizadas” por las compañías en diversos ámbitos. Y, de esta forma, en la legislación posterior, por ejemplo, *The Joint Stock Companies Act, 1856* y *The Companies Act, 1862* siguieron el mismo esquema permitiendo que esas “cláusulas generalmente utilizadas” recogidas en la Ley pudieran adoptarse como modelo de regulación de las distintas compañías sometidas a dichas leyes.

El ámbito de aplicación de la *CCCA 1845* era toda *joint stock company* que, aprobada su constitución por una “Ley especial” posterior al 8 de mayo de 1845, tuviera como objeto la realización de las obras públicas aprobadas en dicha “Ley especial”. Por tanto, todas las previsiones y cláusulas contenidas en la *CCCA 1845*, se aplicaban a las compañías constituidas por cada “Ley especial”. Por otro lado, según exponen SMITH AND KEENAN⁶⁴¹ la “Ley especial” podía determinar no aplicables determinadas cláusulas de la *CCCA 1845*.

Por lo tanto, todas las cláusulas y previsiones contenidas en la *CCCA 1845*, forman parte integrante de las “Leyes especiales” y dichas Leyes han de considerarse como una única Ley junto con la *CCCA*,⁶⁴² con la excepción citada por SMITH AND KEENAN.

Una peculiaridad de las compañías constituidas por estas “Leyes especiales” que las diferencia de las compañías que no se dedican a este tipo de obras públicas, es que eran titulares de unos poderes y facultades singulares para poder adquirir bienes inmuebles o, dicho de otro modo, para evitar que sus propietarios entorpecieran la ejecución de las obras públicas. PALMER⁶⁴³ señala también otras peculiaridades que diferencian a estas compañías de las reguladas por las Leyes generales sobre sociedades, entre las que destacan: un procedimiento de constitución similar, la responsabilidad de los socios suele limitarse a la suscripción del capital y sólo puede dedicarse al objeto social y por el plazo aprobado en la “Ley especial”.

Una vez expuesto el régimen de *CCCA 1845*, tenemos que volver a hacer mención de la intervención del Diputado Sr. Martínez Almagro (probablemente el que mejor enfocó la cuestión de las compañías dedicadas a las obras públicas) el 20 de abril

⁶⁴⁰ Durante ese mismo año de 1845, se aprobaron también otras *Clauses Consolidation Acts*: *Lands Clauses Consolidation Act, 1845*; *Lands Clauses Consolidation (Scotland) Act, 1845*; *Railway Clauses Consolidation Act, 1845*; *Railway Clauses Consolidation (Scotland) Act, 1845*. Dos años más tarde, en 1847 se aprobaron otro grupo de *Clauses Consolidation Acts*, que recogieron las “cláusulas generalmente utilizadas” en las siguientes materias: ferias y mercados, gas, depuradoras de aguas, puertos, muelles marítimos, embarcaderos, rehabilitación de ciudades, cementerios y policía municipal. Se pueden destacar las siguientes *Gas Works Clauses Act, 1847*; *Waterworks Clauses Act, 1847*; y *Harbours, Docks and Piers Clauses Act, 1847*. HALSBURY (1910): *The laws of England ...*, pág. 675 y PALMER (1976): *Palmer's Company ...*, pág. 1044.

⁶⁴¹ SMITH, K. & KEENAN, D. (1981): *Company Law*, cuarta edición, Londres, pág. 4.

⁶⁴² HALSBURY (1910): *The laws of England ...*, pág. 676.

⁶⁴³ PALMER (1976): *Palmer's Company ...*, pág. 1044.

de 1847⁶⁴⁴ en la que pedía al Congreso que se diferenciara la autorización de la compañía anónima de la concesión de la obra pública que fuera su objeto social. El Parlamento sólo debía tener competencia sobre la segunda cuestión (la concesión de la obra pública). La primera cuestión –la autorización de la compañía– no podía ser competencia de las Cortes sino del Gobierno. Su postura, como él mismo expuso en su intervención –que se ha transcrito páginas atrás–, se apoyaba, entre otras, en la legislación británica, pero fue rebatida por Bertrán de Lis en nombre de la CCD y, finalmente, nadie apoyó al Sr. Martínez Almagro.

4. Conclusiones

¿Por qué hemos dedicado un comentario más largo al sistema de autorización británico de las compañías por acciones? Como dijimos al principio, por dos motivos. En primer lugar, porque, en relación al ordenamiento jurídico francés, se trata de un sistema mucho menos conocido por los juristas españoles de la época de nuestra Ley de 1848 y, además, presenta grandes diferencias respecto al nuestro y al francés.

En segundo lugar, el Reino Unido fue el primer país industrializado y el líder económico y empresarial durante la vigencia de la Ley de 1848. España, por desgracia, se quedó rezagada en su desarrollo empresarial e industrial. Sin duda alguna, las instituciones jurídico-mercantiles influyeron, como en otras ocasiones históricas, en esta evolución. Resulta interesante, por tanto, conocer con más detalle el régimen de autorización de compañías por acciones del país que más se desarrolló durante el segundo tercio del siglo XIX y cuyo sistema jurídico es muy diferente al nuestro.

Aunque los hechos económicos y empresariales demostraran posteriormente que la legislación mercantil británica fue más eficaz, por lo que se ha visto en los epígrafes anteriores, no se puede decir que fuera siempre por delante de la española y la francesa. En unos temas sí y en otros no. Veámoslos a modo de conclusiones. Para ello, se diferenciarán las compañías dedicadas a obras públicas de las demás.

En primer lugar, las compañías mercantiles cuyo objeto social no fueran las obras públicas, se regularon por JSCA 1844, que establecía las siguientes características básicas de su régimen jurídico:

- Las compañías se podían dedicar a objetos sociales muy variados, sin que fuera necesario el interés o utilidad pública. Así, podían ser conceptos tan amplios como el desarrollo de una actividad comercial, la obtención de beneficios, etc.
- La autorización era otorgada, en última instancia, por el Registro de compañías, no por el Gobierno ni por el Parlamento.
- No se reconoce la limitación de la responsabilidad del socio a la cantidad comprometida en la suscripción de acciones.
- Se recoge, por primera vez, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la compañía, como ente diferente a sus socios.

⁶⁴⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, págs. 1436 y 1437.

Es interesante comparar estas características con las que establece nuestra Ley de 1848 respecto a las compañías que no se dedican a obras públicas:

- Respecto al objeto social, debe ser de utilidad pública, no pudiendo ser cualquier “actividad comercial”.
- La autorización debe otorgarla el Gobierno o el Parlamento.
- Se mantiene el reconocimiento de la limitación de responsabilidad recogida en el CCom 1829.
- No se reconoce expresamente la personalidad jurídica independiente de la sociedad, aunque los tratadistas⁶⁴⁵ de la época la entienden implícita en todos los artículos del CCom 1829 (y también de la Ley de 1848). En cambio, algún autor más reciente⁶⁴⁶ mantiene que nuestro Legislador de 1829 no tuvo en cuenta este tema.

Como se puede comprobar, sólo una de las cuatro características coincide en ambos sistemas jurídicos.

En segundo lugar, las compañías dedicadas a las obras públicas, quedaban en una situación difícil con la *JSCA 1844*, debido a la enorme complejidad burocrática en su proceso de tramitación ante el Parlamento y el Registro de compañías. Este aspecto era similar al de las sociedades españolas, como se ha expuesto en un epígrafe anterior. Pero la práctica británica modificó esta cuestión para permitir una mayor flexibilidad en el proceso de autorización de estas compañías, que fueron el motor de la industrialización.

El texto legislativo clave fue las *CCCA 1845* que recopiló un cuerpo normativo de carácter societario que, salvo excepción, se aplicaba a cada compañía por acciones constituida en virtud de una “Ley especial” que aprobaba la concesión de una obra pública. Por lo tanto, el Parlamento autorizaba lo relativo a la concesión, pero las discusiones sobre las particularidades societarias, no entorpecían la autorización de la compañía, porque se aplicaba la *CCCA 1845*.

En cambio, en España, la Ley de 1848 establecía que toda compañía por acciones cuyo objeto social fueran las obras públicas (artículo 2. 1: *la construcción de carreteras generales, canales de navegación y caminos de hierro*) debía ser autorizada por el Parlamento. Años más tarde, se producirá una separación entre el acto de concesión de la obra pública, de la autorización de la compañía. Así empezó con la denominada Ley general de ferrocarriles de 3 de junio de 1855⁶⁴⁷, que luego se concretó en la Ley de 9 de julio de 1856⁶⁴⁸ sobre concesión de caminos de hierro, canales u otras obras públicas, que en su artículo 1 establecía que una vez obtenida en virtud de una ley la concesión de un camino de hierro, canal u otras obras públicas, *podrá el Gobierno*

⁶⁴⁵ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil* ..., pág. 258.

⁶⁴⁶ GIRÓN TENA, J. (1947): “Sociedades civiles y sociedades mercantiles ...”, págs. 19 y 20.

⁶⁴⁷ GdM de 6 de junio de 1855, núm. 886.

⁶⁴⁸ GdM de 12 de julio de 1856, núm. 1.286.

*autorizar, por medio de Reales decretos, acordados en Consejo de Ministros, la formación y constitución definitiva de la compañía que las haya de llevar a cabo*⁶⁴⁹.

III. DEBATES PARLAMENTARIOS

Una vez expuesto en los dos apartados anteriores el régimen normativo español y comparado (Francia y Reino Unido) sobre la autorización, es de gran interés detenerse en los debates parlamentarios.

Comienza este apartado con una breve referencia a las razones por las que se despoja a los T. de c. de su competencia para autorizar las compañías anónimas. En el segundo epígrafe, se analizan las diferentes corrientes entre los Diputados y Senadores en relación a la atribución de competencia para autorizar las compañías por acciones: los partidarios de que fueran sólo las Cortes, sólo el Gobierno o, por último, tanto las Cortes como el Gobierno. En este mismo epígrafe, se recoge una breve mención al cambio de la postura del Gobierno. Y, finalmente, se trata un aspecto concreto relativo a la anulación de la autorización.

A) MOTIVOS PARA RETIRAR DE LOS T. de c. LA COMPETENCIA PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS ANÓNIMAS

Uno de los pilares de la reforma de la Ley de 1848 era la necesaria aprobación gubernativa o parlamentaria de las compañías por acciones. Son abundantes las referencias durante los debates parlamentarios a las justificaciones de este cambio, destacando, sin duda, la crítica de la actuación de los T. de c. a los que el CCom 1829 atribuía la facultad de autorizar las compañías anónimas.

Dado que esta materia se ha comentado en el capítulo sobre los antecedentes de la Ley de 1848, a él nos remitimos. Allí se recogen las intervenciones de los Diputados Sres. Miota y Bertrán de Lis, así como del Ministro de Gracia y Justicia (Sr. Vaamonde) y del Ministro de CIOP (Sr. Pastor Díaz). También se comenta detalladamente la intervención de D. Pedro Sáinz de Andino en el Senado en la cual mantiene que el problema no fue la legislación sino su aplicación por los T. de c. y enumera una larga relación de incumplimientos de artículos del CCom 1829 aplicables a las compañías anónimas.

Por último, conviene recordar que Francia, Reino Unido y demás países de nuestro entorno disponían de un régimen de autorización de compañías por acciones diferente al nuestro. España era el único caso en el que un órgano como el T. de c. se encontraba legitimado para conceder la autorización a dichas compañías. Francia, cuyo ordenamiento jurídico sirvió de referencia a los juristas españoles de la época de nuestra Ley de 1848, establecía autorización gubernativa.

Como hemos expuesto en otras ocasiones, en nuestra opinión, el rigor y la rigidez de la Ley de 1848 en cuanto al régimen de autorización, tiene relación directa

⁶⁴⁹ Esta materia se desarrolla en el capítulo sobre las sociedades anónimas reguladas por leyes especiales.

con la desacertada decisión del CCom 1829 de asignar a los T. de c. la competencia para la autorización de las compañías anónimas.

B) DIFERENTES POSTURAS SOBRE LA AUTORIZACIÓN GUBERNATIVA Y LEGISLATIVA

El PL 1848 presentado el 26 de febrero de 1847⁶⁵⁰ por el Ministro de CIOP, D. Mariano Roca de Togores, contemplaba exclusivamente la autorización por RD de las compañías por acciones.

Es el Dictamen del 16 de abril de 1847⁶⁵¹ de la CCD sobre el PL 1848 el que amplía al Parlamento la competencia para la autorización. Esta decisión de la CCD es de importancia capital y fue, en cierto modo, bastante novedosa e inesperada. Por este motivo, como demuestran las actas de los debates parlamentarios, no existía ni mucho menos una postura unánime al respecto.

A continuación se analizan las diferentes posturas de los parlamentarios, que podemos agrupar en tres grupos o posiciones. Primero, la de quienes apoyan a las Cortes como único órgano legitimado para la autorización. Segundo, los que mantienen que debe ser exclusivamente el Gobierno. Y, tercero, aquellos que propugnan que la competencia debe ser tanto de las Cortes como del gobierno, en función del objeto social de la compañía. Por último, expondremos la evolución de la posición del Gobierno.

1. Parlamentarios partidarios de que la autorización la concedan exclusivamente las Cortes

Esta es la postura de quienes apoyan el mayor intervencionismo en la constitución de compañías por acciones. Su representante es el Diputado Sr. Ordax. No parece que tuviera muchos apoyos entre los demás miembros de la Cámara Baja, pero aun así, nos parece interesante recoger sus argumentos.

El Diputado Sr. Ordax, en la primera sesión que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados (el día 20 de abril de 1847) en la que se debatió artículo por artículo el PL 1848, propuso una modificación de la redacción del artículo 1. El texto propuesto por la CCD⁶⁵² contenía una modificación sustancial respecto al PL 1848 presentado por el Ministro Sr. Roca de Togores el 26 de febrero de 1847⁶⁵³, consistente en añadir la autorización parlamentaria para determinadas compañías por acciones.

El citado Diputado encomia la inclusión de la autorización legislativa y critica que se haya mantenido la autorización gubernativa. Su propuesta de modificación del

⁶⁵⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, págs. 653 y 654.

⁶⁵¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393. Recogido también en la GdM de 19 de abril de 1847, núm. 4600.

⁶⁵² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393.

⁶⁵³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, págs. 653 y 654.

artículo 1 del PL 1848 (y de los concordantes) consiste en que la autorización de las compañías por acciones sea competencia exclusiva de las Cortes.

Se transcriben a continuación sus argumentos más relevantes⁶⁵⁴:

- ... *No puedo convenir en que el Gobierno sea por punto general competente [para la autorización]. Yo no convengo que sea el Gobierno competente, en presencia de otros Poderes que son mucho más altos, para expedir autorizaciones de una importancia tan grande como la que tienen por objeto establecimientos que puedan afectar hasta los intereses públicos y hasta el orden público, por los medios y objetos sobre que pueden obrar.*
- ... *¿De qué género ha de ser esta intervención [en la autorización de las compañías por acciones]? ¿Ha de ser del Gobierno? Es clara la necesidad de una intervención; pero ¿de quién? Ello es que siempre hemos de venir a parar a la cuestión de competencia para esta intervención. Y yo niego la competencia del Gobierno, y se la doy a las Cortes.*
- ... *Por muchas luces que yo suponga en los individuos del Gobierno, atendiendo a que los Gobiernos en el día son tan transitorios, hoy se nombran y mañana desaparecen por las cuestiones políticas; por mucha ilustración e imparcialidad que yo reconozca en seis o siete individuos que juntos traten estas cuestiones, aunque regularmente no las tratarán así, siempre reconoceré mayor ilustración a las Cortes del Reino. La razón de la ilustración que ha de reunirse en un centro de seis o siete personas, esa razón milita con más fuerza a favor de una reunión de 340.*
- *Un Ministro se ve asediado en su gabinete y rodeado en su despacho de todas las seducciones de la amistad, de todas las seducciones del porvenir en muy encontrados y diferentes sentidos; y ese Ministro sin discusión amplia, sin debate público, y ese Ministro, presa por otro lado de sus ocupaciones normales, cede al que tiene más habilidad o más talento para fijar un segundo su atención. Así es como se resuelven los negocios del mayor interés en el Gobierno, y estas resoluciones es muy difícil que puedan ser siempre las que convienen al interés general; es moralmente imposible, sin que yo tache a ningún Ministro de prevaricación, porque su conciencia y su razón no se ilustran suficientemente, porque su libre albedrío está encadenado por todas las seducciones y todos los medios que un establecimiento o un hombre muy poderoso pueden ejercer sobre él. ¿Sucede esto en las Cortes? ¿Podrá suceder que un Parlamento se deje seducir de ese modo por una o dos personas? ¿Podrá suceder que un Parlamento trate en secreto de negocios de esta importancia, cuando lo primero que hay que ventilar es la predeterminación de que el objeto es de utilidad pública; cuando el Parlamento, señores, es precisamente el que representa todos los intereses del país, todas las clases, todas las ilustraciones; cuando es, en fin, la fórmula más sintética del país mismo? (...) ¿Habría una sociedad mercantil, por poderosa que fuera, que se*

⁶⁵⁴ Extractados del DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, págs. 1429 y 1430.

atrevera a sostener una cosa que fuera contraria al interés público? Todo el Parlamento ¿no se levantaría contra ella?

El Sr. Ordax parte de la base de que las compañías por acciones son grandes empresas, vinculadas a una suerte de interés nacional cuya autorización debe asignarse al Parlamento, que representa mejor que el Gobierno a todos los intereses del país y a todas las clases. Además, quiere prevenir contra la discrecionalidad en la que pueden caer los miembros del Gobierno, pues es más difícil que eso ocurra con todos los parlamentarios que deberían pronunciarse sobre cada PL 1848.

Volviendo a su discurso, en otro momento trata de rechazar las críticas que se le pueden realizar desde el punto de vista del Derecho comparado, pues, como el mismo Sr. Ordax razona, es consciente de que en otros países como Francia, Portugal y Holanda la autorización es otorgada por el Gobierno y no por el Parlamento. En su opinión, estas legislaciones se oponen a la razón y a la ilustración más adelantada. Los países a los que España debe imitar en este caso son Inglaterra (*el pueblo más mercantil del mundo y el más adelantado en el régimen constitucional*) y los Estados Unidos, *si bien yo aquí no recomendaría nunca los trámites y las formalidades que en ambos pueblos se exigen para el establecimiento de las sociedades anónimas.*⁶⁵⁵

Es éste un aspecto importante, que se estudia en el epígrafe sobre Derecho comparado del presente capítulo. En efecto, la propuesta de la CCD era totalmente novedosa, pues en este aspecto de la autorización legislativa se desmarcaba de la práctica francesa, a la que nuestro Legislador de aquella época tomaba habitualmente como modelo. Pero llegados a este punto, debemos subrayar un matiz. El sistema de autorización de compañías anónimas del CCom 1829 no siguió la práctica francesa. A este respecto, comenta RUBIO que *Sáinz de Andino mantiene resueltamente el principio de libertad. Sólo será necesaria la aprobación real cuando la compañía haya de gozar de algún privilegio (artículo 294). En cambio, la que se limita a una explotación ordinaria, no requiere sino el examen y aprobación del Tribunal de Comercio del territorio en que se establezca. Procedimiento que, de ningún modo, puede considerarse, como a veces se ha hecho, como equivalente, ni siquiera desfigurado de la autorización gubernativa del Código francés. No se trata de establecer un control estatal, sino, meramente, un examen técnico acerca de las circunstancias de existencia y solvencia que acompañan a la fundación de la sociedad anónima*⁶⁵⁶.

Esto nos lleva a subrayar la radicalidad del cambio que plantea el Sr. Ordax: pasar de la autorización concedida por los T. de c. a la autorización otorgada exclusivamente por las Cortes.

La respuesta al Sr. Ordax es formulada por el Ministro de CIOP y por el miembro de la CCD, Sr. Miota. El primero, Sr. Pastor Díaz, se opuso a la propuesta en los siguientes términos:

Yo comprendo muy bien la teoría del Sr. Ordax y Avecilla; comprendo que esto puede explicarse y justificar; pero no quiero esto para mi país, ni como gobierno ni como ciudadano, pues esto sería la paralización absoluta del

⁶⁵⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1430.

⁶⁵⁶ RUBIO, J. (1950): *Sáinz de Andino ...*, pág. 159.

*espíritu de asociación; sería desnaturalizar las facultades y prerrogativas del parlamento; sería exagerar con perjuicio de su propia índole y naturaleza las atribuciones parlamentarias; sería traer aquí las cuestiones personales aunque, sería revestir de un carácter político las cuestiones de la industria y del comercio; sería, en fin, entorpecer la acción del interés privado y de la administración pública, sujetándose las concesiones de toda asociación, cualquiera que ella fuera, a las atribuciones del parlamento, de suyo lentas y periódicas, y distraídas en otras atenciones más graves. Se quiere por esa teoría, no que el parlamento gobierne, sino que administre, y esto no lo puede creer nadie que ame la prosperidad de su país.*⁶⁵⁷

El Diputado Sr. Miota rechaza la propuesta del Sr. Ordax, no tanto por los argumentos utilizados por el Sr. Ministro, sino por la necesidad de que sea el Gobierno el que autorice estas compañías en determinados supuestos. Resumimos sus argumentos⁶⁵⁸:

- *... La Comisión disiente de S. S. [Sr. Ordax], porque entiende que por punto general el examen de la oportunidad y conveniencia de establecer una compañía anónima, una compañía por acciones, es de la incumbencia del Gobierno, que es administrar.*
- *El Gobierno tiene, por otra parte, todos los conocimientos necesarios, y en muchísimas ocasiones más y más cumplidos que los Cuerpos Colegisladores, acerca de la conveniencia y oportunidad de que se establezca una compañía.*
- *La Comisión (...) establece la necesidad de que haya de ser consultado el Consejo Real y de que en las ocasiones en que el Ministro del ramo disienta en algo de la opinión del Consejo Real, haya de darse el Real decreto oyendo al Consejo de Ministros.*
- *Conviene fomentar el espíritu de asociación (...) y no hay la misma facilidad para establecer una compañía en virtud de una ley que en virtud de un Real decreto.*

2. Parlamentarios partidarios de que la autorización la conceda exclusivamente el Gobierno

El representante de esta corriente es el Diputado Sr. Martínez Almagro. En definitiva, lo que pretendía era asimilar el régimen de autorización al sistema francés de intervención exclusiva del Gobierno.

En la primera sesión de los debates en el Congreso de los Diputados, se oponía a los artículos 1, 2 y 3 del PL 1848 por entender que bastaba la autorización del Gobierno, sin ser necesaria en ningún caso la autorización del Parlamento. En su opinión, había que conjugar el principio de libre asociación con el de la tutela administrativa del Gobierno a favor de los intereses generales⁶⁵⁹. Debía atajarse con urgencia la mala

⁶⁵⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1442.

⁶⁵⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, págs. 1432 y 1433.

⁶⁵⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1434.

situación en la que se encontraban las compañías por acciones, mediante la intervención del Gobierno como tutor de todos los intereses generales. Pero,

*¿Qué ha sucedido? Que la Comisión hace prevalecer el principio opuesto, y que así como antes el espíritu de asociación había degenerado en licencia, ahora, por la adopción de ese principio tutelar llevado al extremo, se ahoga el espíritu de asociación. (...) A consecuencia de esto, dando la extensión que en el proyecto se da a la tutela administrativa, no sólo no se ha contentado la Comisión con someter la formación de las sociedades anónimas a los trámites lentos y tardíos de una ley en algunos casos, sino que a mi entender ha falseado un principio de derecho público, haciendo objeto de la Ley lo que sólo debe serlo de administración pública.*⁶⁶⁰

El Sr. Martínez Almagro analiza por qué debe diferenciarse la autorización gubernativa de la autorización legal. Aborda también la cuestión de la oportunidad de aprobar una ley de obras públicas, de caminos de hierro y de bancos, ámbitos estrechamente relacionados con las compañías por acciones. Aunque la cita sea algo extensa, interesa transcribirla ahora:

Las leyes, en cuya formación únicamente deben intervenir las Cortes a mi entender, establecen principios generales, crean derechos, imponen deberes; esto es lo que se llama legislar. La aplicación de estos principios a circunstancias dadas, el fomento de los intereses creados, la adopción de disposiciones para conservar los derechos y hacer cumplir los deberes, forman la obligación del Gobierno, y esto es lo que se llama ya gobernar, ya administrar. Establecidos estos principios, vamos a ver qué sucede en la constitución de una sociedad anónima, cualquiera que sea su objeto. Lo único que se hace es examinar si los que piden licencia para constituirse en sociedad anónima se han sujetado a los principios y reglas que establece la ley que ahora se está discutiendo. La cuestión de entonces se ventila para conceder la autorización, es sólo ésta: ¿esa sociedad tiene por objeto algún ramo de utilidad pública? Sí señor. ¿Ha llenado la suscripción de acciones señaladas en la ley? Sí señor. ¿Ha hecho el depósito establecido en la misma ley? Sí señor. Satisfechos estos requisitos, y teniendo la sociedad anónima las condiciones exigidas por la ley, no puede menos de concederse la autorización. Aquí, pues, sólo se trata del examen del expediente que promueve la sociedad, y de aplicar en un caso particular los principios de la Ley. Pues, señores, eso es administrar; y, por consiguiente, la ley no debe someter al Poder legislativo una cosa que está dentro de la esfera ejecutiva del Gobierno.

Examinada de este modo la cuestión en teoría, descenderé a considerarla, aunque brevemente, en el terreno de la práctica. Se trata de una sociedad anónima para construir un camino de hierro, un trozo de carretera u otro objeto análogo, y llena aquella todas las formalidades prevenidas, hasta que llega el caso que el Ministro cree conveniente presentar una ley sobre el asunto. Esto es lo que terminantemente se previene en el proyecto. Esa ley viene al Congreso; el Congreso tiene que ocuparse entonces, no sólo de la creación de esa sociedad, sino también del objeto de ella; tiene que ocuparse primero de la autorización

⁶⁶⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1435.

*para formar la sociedad, y después volverse a ocupar del objeto; pero el resultado es que pasarán desapercibidas sin duda alguna muchas de las cuestiones más principales, como es el capital con que se erige la sociedad, el número de acciones, el término de su escritura, etc. Pues yo pregunto: ¿serán muchas las veces que esto produzca un examen serio y detenido en los Cuerpos Colegisladores? Lo propio sucederá en el Senado; y si por casualidad se introduce una enmienda en algunos de los artículos, bien sea sobre el objeto o sobre el número de acciones o fondos de la compañía, volverá a tener que practicar todas las diligencias que antes. ¿Y no puede, señores, temerse con razón que estos trámites, que estas dilaciones concluirán por ahogar el espíritu de asociación?*⁶⁶¹

A partir de aquí entra en un tema de gran importancia: la diferencia entre la constitución de la compañía por acciones y la concesión de la obra pública que vaya a acometer la sociedad. A nuestro entender, es la persona que mejor plantea esta cuestión y que con más acierto prevé lo que ocurriría en el futuro lejano. Pero el problema es que es el único que lo expone y, lamentablemente, no es apoyado por nadie. Quizá se adelantó demasiado en el tiempo y, aunque otros Diputados pudieran estar de acuerdo, no vieron posible su ejecución en ese momento. Y así, ocho años más tarde, en 1856, se promulgaron la LB, LSCr y LSCOP que llevaron a la práctica la propuesta del Sr. Martínez Almagro. Pero volvamos a su discurso:

Yo ruego a la Comisión y al Congreso que tengan muy presente la diferencia que hay, y llamo sobre esto muy particularmente su atención, entre la constitución de la compañía anónima y la concesión del camino de hierro, del trozo de carretera que sea objeto de la asociación, y del cual pueden comprometerse esos grandes intereses sociales. En lo primero sólo se trata de reconocer si se han cumplido las condiciones impuestas en la ley para la formación de esas sociedades, y declarar si es hábil aquella sociedad para el objeto, como ente moral a contratar con el Gobierno acerca de esos intereses sociales; lo único que hay que examinar en autorización es esto. En lo segundo se examina si conviene o no que la sociedad constituida ya como ente moral, que tiene representación pública y legal, si conviene o no que se confíen tales o cuales intereses públicos, si conviene que se le conceda la construcción de un camino de hierro, un trozo de carretera, el establecimiento de un Banco de emisión, etc. etc. Esta segunda cuestión se resuelve por un contrato, exigiendo las garantías que se crean necesarias, independientemente de la existencia como sociedad, a la cual ha debido prestar antes su consentimiento del Gobierno. La cuestión, por consiguiente, de intereses públicos no está enlazada, o no debe estarlo, con la autorización de la sociedad, y yo creo que la Comisión los confunde, porque el artículo tercero dice: "La ley determinará en cada caso las condiciones en virtud de las cuales haya de concederse la autorización de que habla el artículo precedente".

(...) No debe confundirse la concesión de la cosa que se pide con la autorización de la compañía que pretende ocuparse en aquel objeto. Desde luego, confundiéndose estos dos puntos, tendremos en primer lugar que la cuestión de autorización, la fiscalización o examen de las garantías que ofrecen los socios,

⁶⁶¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1435.

*quedará completamente desapercibida. Presentadas aquí las dos cosas juntas, estoy seguro de que nadie descenderá a examinar los pormenores de la constitución de la sociedad, pues todo el mundo se ocupará del objeto para que se forma la sociedad, como cosa de más bulto, de más interés, y se quedarán sin el menor examen las garantías de la sociedad, el si ha hecho o no el depósito prevenido en la ley, el número de acciones que ha de tener y demás pormenores. Todo el estudio será sobre si deberá o no concederse la construcción del camino de hierro o del trozo de carretera, sobre si se han de fijar de éste o de otro modo las tarifas, sobre si han de emitirse o no billetes si es en un Banco, etc., y nada sobre la verdadera constitución de la compañía.*⁶⁶²

En un momento determinado, el Sr. Martínez Almagro propone al Congreso que el PL 1848 fije los principios generales de una ley, dejando su aplicación al Gobierno y termina sugiriendo al Gobierno que presente un Proyecto de Ley sobre obras públicas⁶⁶³.

La réplica al Sr. Martínez Almagro la hizo el miembro de la CCD, Sr. Bertrán de Lis. Los detalles se exponen en el siguiente epígrafe, dado que son parte de los argumentos de los parlamentarios partidarios de otorgar la competencia para la autorización tanto a las Cortes como al Gobierno.

3. Parlamentarios partidarios de que la autorización sea competencia de las Cortes y del Gobierno, en función del objeto social

Los Diputados partidarios de que la autorización fuera competencia de las Cortes y del Gobierno, en función del objeto social, son, lógicamente, los miembros de la CCD. Recogemos aquí la contestación del Diputado Sr. Bertrán de Lis, miembro de dicha Comisión, a la propuesta del Sr. Martínez Almagro, comentada en el epígrafe anterior. Comienza diciendo que el punto de divergencia entre el PL 1848 presentado por el Gobierno el 26 de febrero de 1847 (siendo Ministro de CIOP el Sr. Roca de Togores) y el Dictamen de la CCD fue justamente el planteado por el Sr. Martínez Almagro: la CCD estima que junto a la autorización gubernativa debe atribuirse, en determinados casos, la autorización al Parlamento. Describe la naturaleza de la compañía anónima, centrándose en el privilegio por la limitación de la responsabilidad al capital social y en la necesidad de que exista un interés público o utilidad general. Se cuestiona si pueden existir diferentes grados de interés público o utilidad general que influyan en la formación y establecimiento de las sociedades. La respuesta es afirmativa y, en concreto,

(...) ha creído también la Comisión que cuando esta compañía tenga por objeto beneficiar alguno de aquellos grandes objetos que interesan a la sociedad, no bastaban solamente las garantías que daba la intervención del Gobierno, sino que era ya menester la intervención legislativa; y esta intervención no la creía necesaria solamente por ser de la índole de los Cuerpos Colegisladores, porque lo es indudablemente, sino porque ofrece mayores garantías que ninguna, otra en atención a la publicidad que traen consigo las discusiones; y, por último,

⁶⁶² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, págs. 1435 y 1436.

⁶⁶³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1437.

*señores, la Comisión ha tenido que partir del estado en que nos encontramos actualmente respecto a este ramo.*⁶⁶⁴

La CCD entiende que es necesaria, en ciertos casos, la autorización de la sociedad por el Parlamento. Un primer motivo es para evitar posibles abusos por parte del Gobierno. Así,

*(l)a Comisión ha creído que existiendo entre nosotros la práctica abusiva (...), de que el gobierno se arroge la facultad de conceder autorizaciones para que se formen ciertas sociedades anónimas que lleven consigo, no sólo el privilegio que es propio y natural de esta clase de compañías, sino además un privilegio especialísimo, un privilegio enteramente exclusivo, como sucede, por ejemplo, en el establecimiento de un banco de emisión, al cual se le concede realmente la facultad de acuñar moneda; cuando esto sucede en este país, la Comisión ha creído que debía aprovechar la primera coyuntura que se presentaba para aplicar al mal un remedio, aunque fuese indirecto.*⁶⁶⁵

En relación a los bancos de emisión, es posible que el Sr. Bertrán de Lis (y muchos otros Diputados y Ministros) tuvieran en mente la actuación del Marqués de Salamanca en relación al Banco de Isabel II. Dejemos que lo resuma brevísimamente el profesor SÁNCHEZ ANDRÉS⁶⁶⁶ en un interesante artículo sobre las crisis bancarias. *Cuando Salamanca advierte que el banco fundado por él [el Banco de Isabel II] no tiene otra salida que la de suspender pagos y cerrar sus puertas, no ahorra habilidades ni influencias para eludir el desenlace; y la salida arbitrada fue la fusión de su entidad con el Banco Español de San Fernando, a la sazón no muy boyante, pero que espera mejorar tras la absorción del de Isabel II, en situación mucho peor, pero que disfrutaba también de facultades emisoras.* La citada fusión se realizó mediante RD de 25 de febrero de 1847 (dos meses antes de pronunciar el Sr. Bertrán de Lis el discurso que estamos citando) en la que todo lo que se hizo y deshizo provino del Gobierno, concretamente del citado Marqués de Salamanca, aprovechando el vacío legislativo sobre esta materia. D. José de Salamanca fue nombrado Ministro de Hacienda (autoridad política sobre el nuevo Banco) el 28 de marzo de 1847⁶⁶⁷ y cesado el 4 de octubre de 1847⁶⁶⁸. Las intervenciones de los Diputados que se están comentando son del 20 de abril de 1847.

El Sr. Bertrán de Lis sigue su discurso respondiendo a las críticas del Sr. Martínez Almagro y manifiesta que la CCD no ha pasado de un extremo a otro al derogar las competencias de los T. de c. para asumirlas el Poder público. Lo que ha hecho la CCD, ha sido trasladar la intervención del T. de c. al Poder ejecutivo,

Sólo ha hecho una excepción de este principio la Comisión: ha dicho: siempre que se trate de compañías que tengan por objeto alguno de los especiales comprendidos en el párrafo segundo, o que necesiten fundarse en un privilegio exclusivo, entonces vengán a solicitar el permiso del poder legislativo; entonces

⁶⁶⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1437.

⁶⁶⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1438.

⁶⁶⁶ SÁNCHEZ ANDRÉS, A. (1984): “Las crisis bancarias en España. Apuntes sobre su tratamiento hasta la mitad del siglo XX” en *RDM*, núm. 171, enero– marzo, pág. 31.

⁶⁶⁷ GdM de 30 de marzo de 1847, núm. 4580.

⁶⁶⁸ GdM de la misma fecha, núm. 4768.

*la formación de estas compañías serán objeto de una ley; (...) No se trata aquí de que las Cortes intervengan en las operaciones que son puramente del gobierno, en operaciones de la administración; no, señores; esos detalles y pormenores no las corresponden; las Cortes, a propuesta del gobierno, que es el que les presentará el proyecto, acordarán las bases fundamentales del establecimiento de tal o cual sociedad y todo lo que sea relativo a la organización de la misma, lo cual no se puede hacer en leyes generales, sino en una especial para cada caso.*⁶⁶⁹

Pero es que hay más, dice el Sr. Bertrán de Lis. El procedimiento para la autorización de la compañía lo inicia el interesado acudiendo al Gobierno, que examinará la solicitud. Tendrá que determinar el Gobierno si es competente o no y, en este segundo caso, deberá presentar un Proyecto de Ley a las cortes para la autorización de la sociedad correspondiente.

En cuanto al inconveniente manifestado por el Sr. Martínez Almagro en su intervención, relativo a la inoportunidad de que la organización de la sociedad sea objeto de tramitación parlamentaria, el Sr. Bertrán de Lis contesta con dos argumentos. El primero hace referencia a la necesidad de limitar la competencia que en ese momento tenía el Gobierno para autorizar sociedades que se dedicasen a la construcción de ferrocarriles, etc., pues entendía que las compañías dedicadas a dichos objetos sociales debían ser aprobadas exclusivamente por el Parlamento. Su segundo argumento es el siguiente:

Pero no sólo se necesita que sea una ley la que determine el privilegio que se deba conceder, sino que cuando se trata de una compañía anónima es necesaria una ley que determine cuál ha de ser su organización, porque esas compañías por su índole son irresponsables, no se encuentran en ninguna parte cuando es preciso perseguirlas, y por consiguiente es necesario que la ley adopte ciertas disposiciones especiales, ciertas precauciones para su creación. Y así, cuando se trata de conceder un privilegio que por ser exclusivo es muy grave, es necesario saber a quién se concede. (...)

*Cuando se trate de conceder un privilegio, no sólo se deberá tener en cuenta la clase de privilegio que es, sino qué garantías ofrece la compañía a quien se va a conceder, e imponerle tales condiciones para organizarse, que pueda llevarse a cabo su responsabilidad.*⁶⁷⁰

Este último argumento, en nuestra opinión, no es excesivamente concluyente y estamos con la opinión del Sr. Martínez Almagro: es una desproporción que la regulación interna de la compañía deba ser objeto de aprobación legal. Las garantías a las que se refiere el Sr. Bertrán de Lis se podrían exigir a través de la concesión del privilegio.

4. Cambio de postura del Gobierno

La postura del Gobierno sobre la competencia de las Cortes para la autorización de las compañías por acciones fue bastante errática durante el inicio de la tramitación

⁶⁶⁹ Ídem.

⁶⁷⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, págs. 1438 y 1439.

parlamentaria. El punto de partida es el PL 1848 presentado por el Sr. Roca de Togores (a la sazón Ministro de CIOP) el 26 de febrero de 1847⁶⁷¹, que sólo contemplaba la autorización gubernamental.

El día 15 de abril de 1847, es decir, cuatro días antes del primer debate en el Congreso sobre el PL 1848 y un día antes de la publicación del Dictamen de la CCD⁶⁷² en el que se reconoce la competencia de las Cortes para la autorización, el nuevo Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz, mediante RD⁶⁷³, derogó la RO de 9 de febrero de 1847, de manera que a partir de la fecha de la entrada en vigor del citado RD y hasta que se aprobase una ley al respecto, sólo se podían constituir compañías anónimas con la autorización exclusiva del Gobierno, excluyendo de esta competencia a las Cortes.

Curiosamente esta posición del Gobierno cambia durante los debates del PL 1848 y, para mayor confusión, apoya a la CCD aceptando que el Parlamento sea competente para autorizar determinadas compañías por acciones.

En la sesión del día 20 de abril de 1847⁶⁷⁴ el Ministro Pastor Díaz asume el reto de justificar la postura del Gobierno anterior y la suya. Inicia su discurso haciendo referencia a la deteriorada y difícil situación empresarial y económica que se vivía en los momentos anteriores a la publicación de la RO del 9 de febrero de 1847 por la que se suspende interinamente la competencia de los T. de c. para autorizar las compañías por acciones. Justifica y apoya la decisión del Gobierno anterior, en parte por el compromiso que asumió de presentar un Proyecto de Ley de compañías por acciones, como así hizo pocos días más tarde, el 26 de febrero de 1847, en el que se contemplaba exclusivamente la autorización gubernativa.

¿Por qué aquel Proyecto del Gobierno excluía la autorización Parlamentaria? La respuesta ofrecida por el Sr. Pastor Díaz se refiere a la necesidad de no ahogar el espíritu empresarial. Es decir, el Gobierno había decidido poner coto a los abusos surgidos en torno a las compañías por acciones exigiendo una autorización gubernativa en vez de la del T. de c., pero no estimaba oportuno involucrar a las Cortes, pues esto sofocaría iniciativas empresariales. Dice el Sr. Pastor Díaz:

*El gobierno, por consiguiente, tenía que moralizar, no ahogar ese espíritu; tenía que exigir garantías, no establecer fórmulas, no poner trabas. Por eso, señores, el proyecto que presentó el gobierno no hacía ninguna mención de la legislación, de la parte legislativa del parlamento. El gobierno creyó que las sociedades anónimas necesitaban una autorización; las sociedades anónimas necesitaban una sanción de autoridad y de confianza delante del país.*⁶⁷⁵

Otro argumento que sustentaba el PL 1848 presentado por el Gobierno el 26 de febrero de 1847 era la necesidad de la intervención del Consejo Real, lo cual era una mayor garantía para la imparcialidad y legalidad de las autorizaciones:

⁶⁷¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, págs. 653 y 654.

⁶⁷² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393.

⁶⁷³ GdM de 17 de abril de 1847, núm. 4598,

⁶⁷⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, págs. 1440 y ss.

⁶⁷⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1441.

El gobierno creyó que lo establecido, que lo propuesto a las Cortes en el proyecto que se presentó llenaba todas esas condiciones, porque según él era necesaria la autorización del gobierno para el establecimiento de las compañías, y creía que ésta era suficiente garantía, porque al concederse esta facultad al gobierno se disponía que fuera con la intervención del Consejo real. Era menester oír al Consejo para dar esta autorización, y en este examen que del asunto había de hacer el gobierno y el Consejo real con todos los documentos a la vista (...).

Pero durante las discusiones en el seno de la CCD para redactar el Dictamen del PL 1848, que se publicó el 16 de abril de 1846, se plantea la necesidad de incluir también la autorización parlamentaria en determinados casos. Debieron ser discusiones largas y prolijas de las que, por desgracia, no quedan fuentes para poder estudiarlas, pero el resultado fue claro. El Gobierno rectificó oficiosamente su posición y admitió la conveniencia de que fuera el Parlamento el que autorizara determinadas compañías por acciones. Así lo reconoce el Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz:

Cuando se trató de que en algunos casos era precisa la intervención de la ley, y por consiguiente la del parlamento, además de la intervención del gobierno, éste reconoció la necesidad de la condición, la necesidad de esta garantía. Es verdad; la cuestión entre el gobierno y la Comisión acerca de este particular fue muy empeñada, como ha dicho el Sr. Bertrán de Lis. El gobierno reconocía la necesidad, se sometía a ella, no podía huir ni esquivarla, y no entraba en sus miras y cálculos esquivar esta necesidad de respetar las prerrogativas del parlamento en aquellas compañías que no se pueden establecer en la ley.⁶⁷⁶

Dos comentarios, al menos, se merecen estas palabras. El primero es que este es el momento en que nuestro Legislador y Gobierno adoptan una decisión que tendrá unas profundas consecuencias para el desarrollo industrial y económico de España. La necesidad de la aprobación parlamentaria de determinadas sociedades por acciones (en función de los criterios recogidos en el artículo 2 del PL 1848), significó una paralización y retraso de los grandes proyectos empresariales de aquella época.

El segundo comentario se relaciona con el desconcierto que generaba la actitud incoherente del Gobierno. Nos explicamos. El Ministro de CIOP, responsable del impulso del PL 1848, dice a los Sres. Diputados el 20 de abril de 1847 que el Gobierno reconoció a la CCD la conveniencia de la autorización legislativa para determinados casos, pero previamente había aprobado un RD (de fecha 15 de abril de 1847) por el que, con carácter transitorio, hasta que se aprobara una ley al respecto, el único órgano competente para aprobar las compañías por acciones era el Gobierno. Por lo tanto, si, al final no se aprobaba el PL 1848 (lo cual era bastante posible, aunque al final no fue así) quedaría en vigor ese RD que confería al Gobierno la competencia exclusiva para la autorización.

Este es el trasfondo que se encuentra en las siguientes palabras del Ministro de CIOP:

⁶⁷⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1442.

Desde luego conocí que la intención del proyecto era la que ha dicho el Sr. Bertrán de Lis: obligar de una manera indirecta al Gobierno a que todas las grandes cuestiones a que todas las grandes negociaciones que habían estado hasta ahora entregadas a la discreción y anarquía, vinieran a resolverse de una manera más parlamentaria: que las compañías de ferrocarriles que en algún tiempo se han de establecer y realizar, que la construcción total de las grandes líneas de carreteras, que los canales de navegación, que el encauzamiento de los grandes ríos, que todas esas obras en que se comprometen además de los intereses particulares los intereses públicos, que pueden ser mejorados o lastimados con su realización, habían de tratarse y debían tratarse aquí en el Parlamento.

El Gobierno no podía rehuir esto de una manera directa o indirecta, al contrario, lo aceptaba con placer, y puede estar tranquilo el Sr. Bertrán de Lis de que el Ministro actual de Comercio no resolvería ningún expediente en que se controvertieran grandes intereses nacionales, sin presentarlo al Poder legislativo (...)

El Gobierno, por consiguiente, se limitó a aceptar y acepta la obligación de presentar delante del Parlamento y no tomar sobre sí la responsabilidad de la autorización en aquella formación de compañías que de alguna manera hacen ley, ya porque son de privilegio exclusivo, ya porque pueden tener privilegio del Gobierno.(...) Y el Gobierno no podía dejar de admitir, y admite, como cree que admitirá el Congreso, la intervención del Parlamento.⁶⁷⁷

A partir de este momento, la postura del Gobierno no sufrirá más variaciones. Apoyará el planteamiento del PL 1848 asignando la competencia de la autorización al Parlamento según dispone el artículo 2, y mantendrá en vigor el RD de 15 de abril de 1847 por el que, con carácter “transitorio hasta que se apruebe una ley al respecto”, sólo el Gobierno se encuentra legitimado para autorizar compañías por acciones.

C) ANULACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

Dentro de este capítulo sobre la autorización legislativa o gubernativa de las compañías por acciones, hay que hacer referencia a la anulación de la misma y, en concreto, al artículo 11 de la Ley de 1848.

Este artículo tiene su origen en el artículo 6 del PL 1848 presentado por el entonces Ministro de CIOP, Roca de Togores, el 26 de febrero de 1847, cuyo texto era el siguiente: *Las sociedades no podrán hacer por sí mismas reforma ni adición alguna en sus estatutos y reglamentos, ni ampliar el tiempo de su duración. Toda alteración que acordaren en su forma constitutiva o reglamentaria se someterá a la aprobación del Gobierno, sin la cual será nula e ineficaz.*⁶⁷⁸

La CCD, en su Dictamen, alteró el orden de los artículos, pasando el antiguo 6 al número 11. También modificó su contenido en estos términos: *Toda alteración o*

⁶⁷⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, págs. 1442 y 1443.

⁶⁷⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, pág. 654.

*reforma en los estatutos y reglamentos, que no obtenga la aprobación del Gobierno, será ilegal y anulará por sí la autorización en virtud de la cual existe la compañía.*⁶⁷⁹

Por su parte, la CS, no modificó ni el número ni la redacción de este artículo⁶⁸⁰.

En la sesión del Senado del 22 de diciembre de 1847, en la que se inició el debate artículo por artículo del PL 1848, cuando llegó el turno para la discusión del artículo 11, el Marqués de Vallgornera solicitó que se aclarara la redacción que, en su opinión era confusa por el siguiente motivo:

*... la palabra obtenga, que es la primera que aquí se usa, tiene su sentido recto y gramatical, y es este: en una Sociedad, en una compañía, se propone en sus estatutos o reglamentos una enmienda, que puede ser de poco momento; se aprueba, y se lleva a la aprobación de S. M., porque toda alteración en los estatutos debe tener los mismos trámites y seguir las mismas reglas. Pues bien ¿qué dice la ley sobre la formación de Sociedades anónimas? Que si no obtienen la aprobación Real, es ilegal. Quiere decir que toda Sociedad existente, hasta que el Gobierno la niegue, por motivos más o menos fundados, la aprobación, no sabe que ha traspasado los límites de la ley. No es este el sentido del artículo; pero este es el sentido recto y gramatical.*⁶⁸¹

El análisis es, en nuestra opinión, correcto. Si la compañía propone una modificación de sus estatutos o reglamentos y el Gobierno la rechaza, esto supone la nulidad de dicha propuesta, pero no puede suponer la nulidad de la autorización de la compañía, a no ser que ésta lleve a la práctica dicha modificación estatutaria que previamente ha sido rechazada por el Gobierno:

*... la ley dice que se someta al Rey la modificación que los socios hayan aprobado; no la obtiene, no es ilegal, pero sí nula y de ningún efecto. Ahora, si luego se llevara a efecto contra lo que previene la ley, aquí empezaría la ilegalidad y la necesidad del castigo, que es la anulación de la Sociedad.*⁶⁸²

En efecto, no parece proporcional que el hecho de no aprobar una modificación de estatutos o reglamentos sea causa de disolución y liquidación de la sociedad puesto que *se anulará por sí la autorización en virtud de la cual exista la compañía* (artículo 11). Por eso, vuelve a insistir el Marqués de Vallgornera en los siguientes términos:

Si el delito [consecuencia de la modificación de estatutos] fuera tan grave que desnaturalizase la sociedad, entonces ya comprendo yo que ella misma es la que provoca la anulación de su autorización; pero si la falta es de poco momento ¿no habría otro medio que el de anular la Sociedad, y perjudicar a un gran número de individuos que de buena fe han confiado a ella su capital?

⁶⁷⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, pág. 1393.

⁶⁸⁰ Dictamen de la CS al PL 1848 aprobado por el Congreso. DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 29 de diciembre de 1847. Apéndice al núm. 32 y DsC. Senado. Sesión de 29 de diciembre de 1847. Apéndice Segundo al núm. 16.

⁶⁸¹ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm.18, pág. 272.

⁶⁸² Ídem.

La enmienda no es contestada por la CS sino por el Ministro de CIOP (Sr. Bravo Murillo), que no la acepta por varias razones, entre las que se pueden recoger las siguientes palabras:

*... una Sociedad que presenta al Gobierno una modificación a sus estatutos para que se apruebe, no ha infringido la ley porque continúe rigiéndose por sus estatutos anteriores. Si el Gobierno aprueba la modificación propuesta, la Sociedad en tanto ha estado en su derecho, a nada ha faltado; si no la aprueba, una de dos, o la lleva a cabo, o no; en el primer caso falta a la ley, y entonces incurre en la pena; en el segundo, no, y esto lo dice el artículo con mucha claridad; desde el momento en que se ha hecho esta manifestación cesa la duda.*⁶⁸³

La lectura del texto del artículo 11 admite razonablemente la interpretación del Marqués de Vallgornera, a pesar de que el Ministro diga que su interpretación es la que *dice el artículo con mucha claridad*. Continúa el Sr. Bravo Murillo en los siguientes términos:

*Esa Sociedad que ha faltado a lo mandado por el Gobierno, no existe ni puede existir; esa es una reunión de personas que se ha formado sin intervención del Gobierno, y contra la disposición de la Ley. Esto me parece claro, y eso es lo que dispone la ley. ¿Y qué hace una Sociedad en el caso de variar los estatutos? Es lo mismo que lo que hace la que existe sin autorización del Gobierno. La Sociedad necesita del Gobierno para existir. Si varía las reglas que éste le da, ¿qué hace? Hallarse en el mismo caso que la Sociedad que sin remitirse al Gobierno se constituye. Aquí no hay dureza, ni blandura, porque lo mismo es constituirse sin la anuencia del Gobierno que sin dar parte de las variaciones que haga en sus estatutos. En uno y otro caso existe contra la ley, y lo que existe contra la ley es ilegal; y lo que es ilegal es delito; y lo que es delito merece pena. Aquí no hay pena dura ni blanda; lo que hay es la pena que merece por su falta de cumplimiento a la ley.*⁶⁸⁴

La enmienda al final fue rechazada.

IV. DOCTRINA DE LA ÉPOCA

Los tratadistas inmediatamente posteriores a la Ley y al Reglamento de 1848 no tratan en profundidad la cuestión de la autorización legal y gubernativa. En los comentarios generales se describe la situación de abuso y fraude en las compañías anónimas en los años previos al 48 como causa justificativa del cambio normativo. Conforme transcurre el tiempo y se dispone de mayor perspectiva histórica, los autores critican al Legislador de 1848 por haber obstaculizado la constitución de compañías anónimas y, en consecuencia, haber ralentizado el progreso comercial e industrial de España.

El comentario más interesante sobre la autorización legal y gubernativa entre los autores del segundo tercio del siglo XIX probablemente sea el de GONZÁLEZ HUEBRA

⁶⁸³ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 273.

⁶⁸⁴ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 273.

quien parafrasea los primeros artículos de la Ley de 1848 en los que se recoge como requisito necesario para formar una sociedad anónima una *licencia expresa, concedida precisamente por medio de una ley, cuando la compañía tenga por objeto el establecimiento de algún Banco de emisión o sus cajas subalternas, la construcción de carreteras generales, canales de navegación y caminos de hierro y cuando solicite algún privilegio exclusivo, y, en todos los demás casos, por Real decreto*⁶⁸⁵.

En nota a pie de página hace una breve referencia al sistema de aprobación por los T. de c. recogido en el CCom 1829, la crisis desencadenada años más tarde por los fraudes y abusos, y el cambio normativo producido por la entrada en vigor de la Ley y del Reglamento de 1848. Una vez expuestos los hechos, ofrece su valoración personal, que, por su interés, transcribimos a continuación, aunque ya figura en otro lugar. Comenta GONZÁLEZ HUEBRA: *se pasó de un extremo a otro, exigieron para su formación [de compañías por acciones] una ley especial, o un Real decreto, y las reglamentaron y restringieron de modo que apenas se volvió a constituir ninguna después de su publicación [de la Ley y del Reglamento de 1848]. Se trató de remediar esta situación por las Cortes constituyentes de 1855, que autorizaron la creación de las sociedades de crédito y las de ferro-carriles, suprimiendo varias de las restricciones impuestas en 1848, en las que se promulgaron para establecer dichas sociedades en 28 de enero y 30 de junio de 1856. Mas como no se propusieron uniformar este ramo de la legislación haciendo una ley general de sociedades anónimas derogando la anterior, sino solo autorizar la formación de aquellas dos clases especiales, resulta ahora que es más restrictiva y defectuosa la Ley general que las dictadas para las excepcionales que eran las que necesitaban acaso ser autorizadas con más limitaciones.*

Este mismo autor⁶⁸⁶ realiza una precisión importante al diferenciar el *acto de fundación* del *acto de constitución definitiva*. El primero consiste en el otorgamiento de la escritura de fundación, formación del reglamento o reglamentos, petición y colocación de, al menos, la mitad del capital social y, por último, presentación de la solicitud de autorización. La constitución definitiva se produce *después de haber sido concedida la autorización*, de haberse impreso y publicado los estatutos y reglamentos y, por último, de haberse ingresado en la caja social la parte del capital con que debe constituirse la compañía. Al *acto de fundación* concurren sólo los socios que han participado en la gestación del proyecto, invitando a los demás socios a que se impliquen mediante la suscripción de acciones. En cambio, al *acto de constitución definitiva* deben concurrir todos los accionistas para nombrar a las personas que se encarguen de la administración y de su vigilancia.

Por último, en relación a las compañías comanditarias por acciones, GONZÁLEZ HUEBRA⁶⁸⁷ señala también que deben *formarse con las mismas solemnidades que las anónimas comunes; y, por consiguiente es indispensable, que presentando la escritura y el reglamento, se pida y obtenga la correspondiente autorización por una Ley o un Real decreto antes de constituirse.*

⁶⁸⁵ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil...*, págs. 151 y 152.

⁶⁸⁶ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil...*, pág. 152.

⁶⁸⁷ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil...*, pág. 188.

V. LOS BANCOS Y LA LEY DE 1848: ADAPTACIÓN DE LOS ENTONCES EXISTENTES Y AUTORIZACIÓN DE NUEVAS SOLICITUDES. MENCIÓN PARTICULAR A LAS SUCURSALES O CAJAS SUBALTERNAS

La autorización de compañías por acciones originó durante los debates parlamentarios una gran controversia en relación a los bancos. Esta cuestión era de vital importancia para los intereses económicos y financieros de la época. Es necesario, por tanto, dedicar un epígrafe a los bancos, pero no podemos extendernos en exceso pues nos alejaríamos de nuestro tema central: la Ley de 1848.

Por este motivo, limitamos la exposición a comentar las intervenciones durante los debates parlamentarios, diferenciando dos cuestiones: la adaptación a la Ley de 1848 por los bancos ya existentes y la autorización de las sucursales o cajas subalternas. Por otro lado, es necesario hacer una mención, con carácter previo, aunque sea muy breve, a los antecedentes del sistema bancario español que influyen en el Legislador de 1848.

A) BREVE REFERENCIA HISTÓRICA A LOS BANCOS ESPAÑOLES EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

El 2 de junio de 1782 el Rey Carlos III dicta una RC por la que creó el Banco de San Carlos y publicó sus estatutos. El profesor RUBIO⁶⁸⁸ resume con gran concisión la historia de este banco: *Nacido para resolver los problemas de una guerra costosa y adversa, tuvo que hacer frente durante sus cuarenta años de existencia a las contingencias de una de las etapas más agitadas y de más duras repercusiones económicas de toda nuestra historia. La invasión francesa produce su desdoblamiento: un Banco de San Carlos en Madrid, que Cabarrús maneja en beneficio del invasor, y otro en zona libre –primero en Sevilla y después en Cádiz-, al servicio inmediato de las necesidades de la resistencia. Abrumado en 1814 por las consecuencias de la guerra, mal visto por el sistema liberal en 1820, mantenido apenas por el régimen de 1823, sus acciones descienden hasta el 6 por 100 del valor nominal, y los directores nombrados por la Junta general de 19 de abril de 1828 tienen que ser forzados por Real orden a tomar posesión de sus cargos.*

El Banco de San Carlos llegó a una situación límite en 1829 y el Rey Fernando VII decidió con sus asesores liquidarlo y “traspasarlo” a un nuevo Banco denominado Banco de San Fernando. En el suplemento a la GdM de 3 de septiembre de 1829 se publicaron el convenio de transacción del Banco de San Carlos, la RO disponiendo su liquidación y la RO de erección del Banco de San Fernando con sus estatutos, cuyo autor fue Sáinz de Andino.

RUBIO⁶⁸⁹ destaca que el Banco de San Fernando logró recuperar la confianza pública, perdida durante la última etapa del Banco de San Carlos, así como asegurar las bases para el futuro desarrollo del BdE. Era titular del privilegio de emisión de billetes con el que se inicia una tendencia a la unidad de circulación. Citando a Sáinz de Andino, recoge los dos objetivos que se planteó el banco: reanimar el comercio con una entidad de grandes dimensiones y auxiliar al Gobierno en sus negociaciones de giros y

⁶⁸⁸ RUBIO, J. (1950): Sáinz de Andino..., pág. 167.

⁶⁸⁹ Ídem, págs. 171 y 172.

descuentos. Durante muchos años consiguió estos dos objetivos. Pero al inicio de la década de los 40 se produjeron actuaciones contrarias a los estatutos que le desviaron de su estrategia conservadora y contraria al riesgo.

En este marco, el 25 de enero de 1844, un RD crea el Banco de Isabel II *con una concepción más ágil y eficaz y mejor vinculada a las necesidades del comercio privado, al que se dota igualmente de facultades emisoras. La crisis de 1846-47 y la necesidad de restablecer la unidad de circulación abocan en*⁶⁹⁰ su fusión con el Banco de San Fernando⁶⁹¹.

SÁNCHEZ ANDRÉS en una interesante colaboración sobre las crisis bancarias en España señala, a este respecto, que la caída de la coyuntura afectó al Banco de San Fernando de forma importante, momento que se aprovechó para incorporarle el *Banco de Isabel II, que fundado como banco vinculado a la financiación de los ferrocarriles por el Marqués de Salamanca y el Conde de Santa Olalla en 1844, se encontraba al estallar el crack de 1846, y tras una etapa de despegue realmente brillante, ante una situación sin salida. El Real decreto de 25 de febrero de 1847, que aglutinó con ambas instituciones el Nuevo Banco Español de San Fernando afirmó, por tanto, las bases de la más importante de nuestras instituciones financieras que, superadas las dificultades propias de los tiempos de crisis que presidieron el alumbramiento, recibiría nueve años más tarde, esta vez por obra del Derecho positivo y con más firme fundamento (Ley de 28 de enero de 1856), el título de Banco de España, sin otros añadidos ni explicaciones*⁶⁹².

Con estos antecedentes y, más concretamente, la referencia al RD de 25 de febrero de 1847, que es citado varias veces durante los debates del PL 1848 en el Congreso de los Diputados, estamos en condiciones de iniciar el estudio de las relaciones entre los bancos y la Ley de 1848. Quizá falta añadir, para tener una idea más completa de la realidad del momento, que durante los debates del PL 1848 en el Congreso (abril de 1847) el Ministro de Hacienda, supervisor del Banco español de San Fernando era el Marqués de Salamanca. El periodo en el que fue Ministro de este ramo se inicia el 28 de marzo de 1847⁶⁹³ y finaliza el 4 de octubre de 1847⁶⁹⁴.

Una cuestión que hemos de plantearnos se refiere al número de bancos que existían en el momento de promulgarse la Ley de 1848. Encontramos una referencia interesante en los debates del Congreso en los que el 21 de abril de 1847, el Diputado Sr. Sánchez Silva manifiesta que existían sólo cuatro bancos en España: el de Isabel II y el de San Fernando (que se acababa de fusionar, como se ha dicho, por RD de 25 de febrero de 1847), otro en Barcelona y dos en Cádiz. Muy probablemente existían intereses creados y presiones para que se autorizaran nuevos bancos (en Sevilla, Valencia, Málaga y algún otro sitio más, dice el Sr. Sánchez Silva), que se enfrentaban con los bancos ya autorizados, los cuales, obviamente, no veían con agrado más competencia. Es de suponer, además, que grupos financieros extranjeros trataran de

⁶⁹⁰ Ídem, pág. 173.

⁶⁹¹ Un estudio muy detallado sobre la mala situación final del Banco de Isabel II, y la constitución del Banco de San Fernando con abundantes referencias a las actas del BdE, se puede encontrar en ZUMALACARREGUI, L. (1952): *El Banco de Isabel II y la crisis de la banca de emisión española de 1847*. Madrid, págs. 215 y ss.

⁶⁹² SÁNCHEZ ANDRÉS, A. (1984): "Las crisis bancarias en España ...", págs. 26 y ss.

⁶⁹³ GdM de 30 de marzo de 1847, núm. 4580.

⁶⁹⁴ GdM de la misma fecha, núm. 4768.

tomar posiciones como consecuencia del cambio legislativo que se avecinaba. Estas son las palabras del Sr. Sánchez Silva:

*Ya que estoy en el uso de la palabra, diré que con esta Ley se pone término a la arbitrariedad con que antes se ha concedido el establecimiento de Bancos por dispensar favor a personas, corporaciones y ciudades, al mismo tiempo que se ha negado a otras sin saberse la causa. En Madrid se han establecido dos Bancos que hoy se han fundido en un solo; en Cádiz otros dos, en Barcelona uno, y a Valencia, Sevilla y otras ciudades se les ha negado, teniendo todas el mismo derecho para establecimientos de esta clase.*⁶⁹⁵

De estas palabras se deduce la existencia de un complejo entramado de intereses, tanto de personas como de grupos financieros, políticos, gremiales, etc., para controlar la actividad de los bancos. El Sr. Sánchez Silva propone que haya transparencia e igualdad de oportunidades a la hora tanto de autorizar nuevos bancos como de armonizar los ya existentes. Estas son sus palabras:

*Los Bancos podrán venir aquí manifestando sus estatutos, sus reglas principales, y de esa manera se podrá entrar en una regla que comprenda a todos. De otra manera será una cosa incomprensible que para los pocos Bancos que quedan por establecer se haga una ley a la cual no tengan que sujetarse los que ya existen. El Banco de San Fernando, el de Isabel II, el de Barcelona, el de Cádiz, el de Ultramar, que es interesantísimo, no sabemos con qué condiciones se han constituido, lo cual hace indispensable que se presenten aquí. De otra manera esta Ley no será más que una paradoja.*⁶⁹⁶

B) NECESIDAD DE UNA LEY DE BANCOS

La razón básica por la que se plantean los problemas que a continuación veremos entre los bancos y la Ley de 1848 es que no se había aprobado una Ley de Bancos. Esta situación originaba una gran inseguridad en la medida en que se preveía una inminente presentación de un Proyecto de Ley al respecto. Y, a la vez, los bancos ya existentes, tenían una regulación aprobada por la Corona que podría modificarse con la aprobación de la Ley de 1848.

Esta confusa situación sólo podía ser arreglada o encauzada por el Gobierno⁶⁹⁷, responsable de la introducción del esperado proyecto de ley sobre bancos. Pero los Ministros del Gobierno que participaron en los debates de la Ley de 1848 no concretaron nada al respecto. Sus respuestas eran evasivas. Quizá pensaban que era más pragmática una estrategia escalonada (primero la ley de compañías mercantiles por acciones, después los bancos, después las obras públicas,...) y, también es posible, que

⁶⁹⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1475.

⁶⁹⁶ Ídem.

⁶⁹⁷ No se puede olvidar que el artículo 13 del PL 1848 presentado por el Sr. Roca de Togores el 26 de febrero de 1847 (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847, núm. 46. Apéndice Segundo, págs. 653 y 654) establecía lo siguiente: *Leyes especiales fijarán las reglas necesarias para la constitución de las sociedades dirigidas al beneficio de minas y fundición de minerales, así como las de aquellas que tengan por objeto el establecimiento de los bancos de emisión* (el subrayado es nuestro).

aún no se hubiera alcanzado un acuerdo entre todos los intereses creados alrededor de las instituciones financieras.

En este contexto se enmarcan varias intervenciones en el Congreso de los Diputados en las que se reclamaba y exigía al Gobierno más urgencia y claridad para resolver el problema de los bancos. Destacamos las siguientes.

El Diputado por Valencia, D. Fermín García Morón, entre otras cuestiones, aludió a la necesidad de que el Gobierno presentase un proyecto de ley de cajas subalternas:

*... cuando se trate de esta cuestión el Gobierno presentará un proyecto de ley para la creación de cajas subalternas, y entonces se entrará en la discusión con la detención que su importancia merece*⁶⁹⁸.

A lo que respondió el entonces Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz:

*Señores, hoy no se trata de la cuestión de los Bancos; lo ha reconocido el señor Morón; aquí se ha tratado por incidente. Lo que discutimos es una ley sobre sociedades anónimas: la ley especial sobre el establecimiento de los Bancos podrá venir, y vendrá en la primera ocasión. Por consiguiente, las observaciones de Su Señoría yo me permitiría contestarlas como diputado desde aquellos Bancos; desde este tengo que aplazarlas para su día.*⁶⁹⁹

En las actas de las sesiones del Senado se recogen dos intervenciones interesantes en relación al tema que se está comentando. El Senador D. Antonio Guillermo Moreno pidió la palabra

*... para exigir explicaciones del Gobierno, con el objeto de que nos diga si el Banco Español de San Fernando sufrirá algún perjuicio con la presentación y aprobación de esta Ley, y si trata de presentar el proyecto de ley ofrecido en el decreto de 25 de Febrero sobre el establecimiento de Bancos, y si podrá, como hasta aquí establecer cajas sucursales en los puntos donde lo crea conveniente.*⁷⁰⁰

El Sr. Bravo Murillo, entonces Ministro de CIOP, contestó en los siguientes términos:

Yo creo haber manifestado con mucha claridad que el Banco de San Fernando no está comprendido en esta Ley, y que no se le menoscaba en ninguno de los derechos que tiene. El Banco de San Fernando seguirá existiendo como hasta aquí, en virtud del decreto de 25 de Febrero, hasta tanto que se someta la ley sobre Bancos a las Cortes; y añadido, que en virtud de ese decreto tiene la facultad de establecer cajas subalternas, sin que obste el que hasta ahora no las haya establecido en algunos puntos.

⁶⁹⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1479.

⁶⁹⁹ Ídem.

⁷⁰⁰ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 269.

*En cuanto a lo demás, el Gobierno puede manifestar, contestando al Sr. Moreno, que presentará ese proyecto de ley, que cumplirá con lo que se ofreció en el decreto de 25 de Febrero, y lo hará tan pronto como le sea posible, pues reconoce el interés y urgencia de la presentación de este proyecto de ley.*⁷⁰¹

Concluido este diálogo, el Senador Marqués de Santillán intervino para expresar lo siguiente:

*He dicho que aquí [en el Proyecto de Ley] se consigna un principio que no se declara completamente, y es que el establecimiento de Bancos de emisión sea objeto de una ley, y de una ley especial*⁷⁰². *Esta es mi opinión; lo ha sido siempre, y por esta razón en el Real decreto de 25 de Febrero, que tuve el honor de proponer a S.M., y refrendar después como Ministro entonces de Hacienda, se dispone por el artículo 11 que el Gobierno presentaría a las Cortes un proyecto de ley para que fuesen aprobadas las disposiciones allí contenidas; compromiso que el Gobierno debe cumplir. Hasta entonces, señores, el Gobierno había estado en la facultad de establecer Bancos de emisión; nadie se la había negado siquiera, y por desgracia mía, a pesar de haber sido el primero que consiguió que los Bancos de emisión fueran objeto de leyes especiales, fue censurado por la prensa y otras personas respetables, por no haberlo presentado como procedía a las Cortes.*⁷⁰³

El Ministro, Sr. Bravo Murillo, le respondió en los siguientes términos:

*Que esto deber ser objeto de una ley, lo reconoce el Gobierno, quien presentará el proyecto de la ley sobre Bancos; se tratará esta cuestión, y se sentará el principio de que las Sociedades de Bancos de emisión y su institución, deben ser objeto de una ley especial.*⁷⁰⁴

Un breve comentario a la intervención del Marqués de Santillán y del Sr. Bravo Murillo. Queda claro que, a partir de 1847 el Legislador tomará las medidas oportunas para que los bancos se autoricen mediante ley aprobada en el Parlamento⁷⁰⁵. La norma a la que se hacía referencia (también en la intervención del Senador Sr. Guillermo Moreno) era el reciente RD de 25 de febrero de 1847 en el que se creaba el Banco español de San Fernando mediante la fusión del Banco de San Fernando y el Banco de Isabel II. Pero es necesario puntualizar que dicho RD, a pesar de lo que digan varios parlamentarios, no preveía que a partir de ese momento los bancos debieran autorizarse

⁷⁰¹ Ídem.

⁷⁰² Esta afirmación sorprende porque el artículo 2 del PL 1848 aprobado por la CS establecía que *será necesaria una ley para la formación de toda compañía que tenga por objeto: 1 El establecimiento de bancos de emisión y Cajas subalternas de estos...* El Marqués de Santillán no cometió un error tan grave como olvidar este punto básico del PL 1848, sino que pretendía evitar que se pudieran constituir bancos por personas físicas o compañías mercantiles diferentes a las anónimas o comanditarias por acciones. Era evidente que nuestra Ley de 1848 sólo podía establecer la necesidad de autorización legal si el solicitante del banco entraba dentro de su ámbito de aplicación, es decir, las compañías anónimas y comanditarias por acciones. De esta manera, se entiende la respuesta que le dará el Ministro de CIOP y que se recoge a continuación.

⁷⁰³ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 270.

⁷⁰⁴ Ídem.

⁷⁰⁵ Con el transcurso del tiempo, esta autorización será de carácter administrativo, sin necesidad de pasar por las Cortes.

por ley. Lo que establecía en su artículo 11 –y así lo cita el Marqués de Santillán– es lo siguiente:

*Artículo 11: Mi Gobierno presentará a las Cortes un proyecto de ley para que sean confirmados al Banco español de San Fernando los derechos y facultades que se le concedan por el presente Decreto.*⁷⁰⁶

C) ADAPTACIÓN A LA LEY DE 1848

El principal problema de la Ley de 1848 en relación a los bancos se refería a los que ya existían antes de su entrada en vigor. Como compañías anónimas que eran, ¿debían adaptarse a la Ley de 1848?

Si la respuesta era afirmativa, perderían algunos derechos adquiridos en virtud de su autorización particular. En este sentido, el más relevante era la emisión de billetes, pues el artículo 15 del PL 1848 establecía que *ninguna compañía podrá emitir, a no hallarse autorizada por la ley, billetes, pagarés, abonarés, ni documento alguno al portador*. Como la constitución de los bancos antes de la Ley de 1848 se había realizado mediante autorización de la Corona, sería necesario, a partir de la entrada en vigor de la Ley, una ley que aprobara o regularizara esta importante cuestión.

En cambio, si la respuesta era negativa, es decir, estos bancos no debían adaptarse a las nuevas normas, se produciría una situación de desigualdad entre los bancos aprobados antes de la Ley de 1848 y los autorizados después.

En los debates del Congreso, algunos Diputados propusieron que los bancos entonces existentes se adaptaran a los nuevos requisitos de la Ley de 1848. Tanto la CCD como el Gobierno se opusieron radicalmente a la propuesta. En los epígrafes siguientes sobre las intervenciones en el Congreso y en el Senado se recoge con detalle la discusión. Veámoslos.

D) INTERVENCIONES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

La cuestión de la autorización de los bancos existentes antes de la entrada en vigor de nuestra Ley de 1848, así como de los futuros bancos, se plantea, con cierta extensión, durante la última sesión del Congreso de los Diputados. En ella, se debate artículo por artículo el texto del PL 1848 presentado por la CCD. El momento en el que aparece este tema se produce al llegar al artículo 18. Su redacción era la siguiente: *Las compañías por acciones formadas en la actualidad, y que no existan en virtud de autorización Real, solicitarán esta autorización dentro de dos meses, contados desde la publicación de esta Ley, presentando al efecto sus escrituras, estatutos y reglamentos. Antes de pedir la autorización, los gerentes o directores convocarán a Junta general de accionistas, y sólo en el caso de que la mayoría de éstos, que se computará con arreglo a sus estatutos y reglamentos, acuerde la continuación de la compañía, se podrá hacer la solicitud*⁷⁰⁷.

⁷⁰⁶ RD de 25 de febrero de 1847. GdM de 26 de febrero de 1847, núm. 4548.

⁷⁰⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice quinto al núm. 76, pág. 1393.

Al abrirse el debate, toma la palabra el Diputado Sr. Sánchez Silva y dice que de la lectura de esta redacción se deduce que todas las compañías por acciones existentes en ese momento se encuentran obligadas a adaptarse a la nueva ley y a solicitar la correspondiente autorización si pretenden continuar con su actividad y

... para que guardase armonía, creo que debería exigirse igual condición a los Bancos existentes. Si el término que se fija para las compañías, que es sesenta días, parece corto para los Bancos, podría fijarse una más largo; pero fijarlo igualmente para unos que para otros. Si aquí en esta Ley lo que se exige es que los Bancos consigan esa autorización para establecerse, me parece claro que para los existentes debían exigirse también, y en muy pocas palabras diré mi idea. En esta Ley se pone ya un artículo que haría aparecer una contradicción en ella si no se pusiese ahora lo que reclamo respecto a los Bancos. Este artículo es el 15, que dice: "Ninguna compañía podrá emitir, a no hallarse autorizada por la ley, billetes, pagarés, abonarés, ni documento alguno al portador: los infractores quedarán sujetos al pago de una multa que no podrá exceder de 50.000 rs".⁷⁰⁸

Se plantea un doble problema. En primer lugar, si a los bancos que fueran a establecerse después de la entrada en vigor de la Ley se les iba a exigir cumplir los requisitos en ella contenidos, pero no a los bancos que ya operaban en España, se producía un situación discriminatoria. El mismo tipo de entidades, con similar objeto social, serían reguladas por normas diferentes.

En segundo lugar, se plantearía un conflicto con lo dispuesto por el artículo 15, citado literalmente por el Diputado proponente, de manera que los bancos anteriores a la Ley de 1848 no podrían emitir billetes, ni pagarés, ni abonarés, ni ningún documento al portador hasta que obtuvieran la correspondiente autorización legislativa, dado que habían sido creados mediante RD.

Por otro lado, el Sr. Sánchez Silva también advierte de un peligro en el que pueden caer los bancos y que, en su opinión, se debe evitar por todos los medios legales posibles: los préstamos al Gobierno de la Nación. Las consecuencias perniciosas del uso de los fondos de los bancos por el Gobierno pueden arrastrar a la desaparición de los bancos. Y ejemplos ocurridos en otros países son bastante ilustrativos. Dice este Diputado:

También sería del caso, cuando se trata de establecimientos de esta importancia, saber hasta donde les sería lícito comprometerse con el Gobierno; porque el Gobierno mismo, la nación por medio de sus poderes legislativos, tiene necesidad de prever que los Bancos no dediquen todos sus fondos a negocios con el Gobierno, pues eso puede dar lugar a una derrota, porque no ha habido Banco notable en Europa al que eso no le haya sucedido. El Banco de Venecia, después de una existencia de seis siglos, fracasó por sus contratos con el Gobierno. El de Holanda lo mismo; el de San Carlos, en España lo mismo; el de Inglaterra se hubiera arruinado si no hubiera sido por los grandes esfuerzos que hicieron por sostenerle los que en él estaban interesados. En fin, son

⁷⁰⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1475.

*necesarias muchas precauciones; y si para la continuación de las compañías, en que hay menos intereses comprometidos que en los Bancos, se exige que han de solicitar esa investidura, creo muy justo y razonable que los Bancos existentes vengan a solicitar la autorización legal también. Si el plazo que se exija para eso es corto, amplíese lo que se quiera.*⁷⁰⁹

En resumen, el Sr. Sánchez Silva pretende que los cuatro bancos españoles existentes en ese momento, regularicen su situación adaptándose al PL 1848 (otorgándoles un plazo de tiempo mayor, si fuera preciso), de tal manera que se instaure un régimen regulador único para todas las entidades bancarias (fundamentalmente la aprobación parlamentaria), tanto las ya existentes como las que pudieran venir en el futuro.

Al tratarse de un tema de gran calado y enorme trascendencia para la economía y la política de aquel tiempo, la respuesta a la intervención del Sr. Sánchez Silva no la da en ese momento la CCD sino el Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz. Comienza haciendo referencia a la ausencia de retroactividad del PL 1848. Lee íntegramente al Congreso el artículo 19, que decía así: *La autorización Real se otorgará precisamente a las compañías que hubieren cumplido las condiciones con las condiciones con que fueron establecidas por los Tribunales de comercio, y a las comanditarias por acciones que hubiesen sido establecidas con arreglo a las disposiciones del Código de comercio*⁷¹⁰.

No parece muy acertada la contestación del Ministro de CIOP puesto que este artículo no se puede aplicar a aquellas compañías por acciones que deban ser aprobadas por el Parlamento. Quizá al ser consciente de la limitación de su argumentación, el Ministro trata de justificar su oposición a la propuesta mediante otros razonamientos entre los que destaca el siguiente: los bancos ya existentes no pueden estar sometidos a esta Ley de 1848 porque ya tienen la suya.

No les exige, pues, el Gobierno condiciones nuevas, y sólo les exige las que antes eran necesarias para la aprobación del tribunal de comercio. Y si respeta la ley, y si ha querido respetar el Gobierno estos intereses, estas esperanzas, estos cálculos hechos anteriormente a la sombra de la ley existente, y cuando por otra parte ha puesto una condición que les da una garantía para lo sucesivo, ¿quería Su Señoría que se hubiese dado a la misma ley una fuerza retroactiva a los Bancos de comercio? Los actuales Bancos de comercio tienen un tiempo, un período fijo; no son eternos; su existencia no es indefinida; su objeto tiene límites, y cuando lleguen a ellos, entonces será cuando tenga toda su fuerza y efecto la ley. No podrían ser sometidos a la autorización de esta Ley, pues ya tienen la suya, y tienen una existencia pública, y todo lo que su señoría puede exigir de ellos está consignado en sus estatutos, que corren impresos en el público. El Gobierno tiene sobre ellos la debida inspección por medio de un comisario regio, que pasa el estado de lo activo y pasivo y del capital circulante cada quince días. El Gobierno tiene respecto de ellos todas las garantías de seguridad, de que carece respecto de esas otras sociedades, y sabe que sus especulaciones de descuento, préstamo y giro se sujetan a las bases establecidas en sus estatutos. Y cuando el Gobierno tiene todos los datos de sus operaciones; cuando sabe el estado de la emisión de su papel; cuando sabe el estado de sus

⁷⁰⁹ Ídem.

⁷¹⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Anexo Quinto al núm. 76, pág. 1393.

*cambios y demás; cuando tiene cerca de ellos una autoridad que vigila todas sus operaciones, no hay respecto de los Bancos esos temores que se han tenido respecto de las demás sociedades.*⁷¹¹

Antes de continuar con las argumentaciones del Ministro de CIOP, es oportuno transcribir la respuesta del Sr. Sánchez Silva a este punto concreto de las facultades de inspección del Gobierno a través del *Comisario regio*. Dice el Sr. Sánchez Silva:

*Yo no pido que los Bancos existentes hoy en España, que son únicamente los de Madrid, Barcelona y Cádiz, vengan aquí a presentar el estado de sus operaciones interiores; no quiero yo tampoco que la ley tenga un efecto retroactivo para ellos, no; lo que quiero es que se legalice en cierto modo su existencia, conforme a los principios en que se funda este proyecto.*⁷¹²

Efectivamente, lo que quiere el Sr. Sánchez Silva es que haya una armonización en cuanto al régimen jurídico aplicable a los bancos para evitar que existieran dos grupos: uno que se sometería a los requisitos de este PL 1848 y, otro, compuesto por los bancos constituidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 1848. El razonamiento es, sin duda, acertado. Lo que sorprende es que diga que no quiere que el PL 1848 tenga efectos retroactivos respecto a los bancos pues, llámese como se llame, eso es lo que pretendía para lograr una armonización legal.

Volviendo a los razonamientos del Sr. Pastor Díaz, Ministro de CIOP, que tratan de rebatir los argumentos del Diputado proponente, se pueden destacar los siguientes. En primer lugar, se refiere a la seriedad de los bancos en cuanto a la concesión de créditos. Menciona que probablemente realizó para contestar a la propuesta del Sr. Sánchez Silva sobre la limitación de los negocios de los bancos con el Gobierno. Dice el Ministro de CIOP:

*Del crédito de los Bancos no se puede abusar con tanta facilidad; los Bancos no pueden entrar en concurrencia con especulaciones, porque les está prohibido por sus estatutos; los Bancos no pueden comerciar, tienen un objeto determinado de que ocuparse, y por lo mismo no creo que el Sr. Sánchez Silva pueda tener las mismas razones para exigir respecto a ellos el efecto retroactivo que exige: esto traería males muy graves, males que no evitaría el único bien que esa medida trajese, cuál sería la publicidad; porque el crédito, señores, es muy delicado y susceptible, y podría alarmarse de una publicidad que pueden tener los Sres. Diputados en otro sitio y por otros medios.*⁷¹³

Y, por último, el Ministro de CIOP se refiere a la calidad y legalidad de las autorizaciones a los bancos existentes en ese momento, lo cual justificaba, en su opinión, la falta de retroactividad de la Ley para estas sociedades:

Respecto a todas las demás disposiciones que dice el Sr. Sánchez Silva deben estar consignadas en los estatutos de los Bancos para ser la garantía de la fe pública y al mismo tiempo del crédito del país, yo diré a Su Señoría que esas condiciones están atendidas en todas las concesiones que ha hecho el Gobierno,

⁷¹¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1476.

⁷¹² Ídem.

⁷¹³ Ídem.

pues éste al aprobar los estatutos y reglamentos para ello ha tenido presentes todas las reglas puestas en vigor para esta clase de establecimientos, todas las observaciones que ha suministrado la experiencia de las Naciones vecinas más adelantadas en este punto, y que esas condiciones se han atendido, no sólo en los Bancos que existen en Madrid, sino en los demás que se han establecido en las provincias.

*Ha dicho el Sr. Sánchez Silva que se debían crear Bancos en algunas provincias. Para esto el Gobierno tiene ya la ley, y no procederá a hacerlo por sí; esté bien seguro el Sr. Sánchez Silva y yo respondo, aunque no está presente el Ministro a quien esto corresponde, que no se creará un nuevo Banco sin pedir a las Cortes la ley especial para ello. No veo, por consiguiente, la razón para que se introduzca en el artículo el paréntesis o período que Su Señoría solicita; creo que la alarma del crédito sería mayor; creo que el estado actual de la legislación en este punto, combinado con las disposiciones sabiamente puestas en la ley, salva los intereses existentes, las esperanzas para lo futuro, y el derecho que tiene el Parlamento y el país a que las concesiones privilegiadas de los Bancos vengan a someterse al juicio de las Cortes.*⁷¹⁴

El Diputado proponente vuelve a tomar la palabra para agradecer las explicaciones del Sr. Ministro de CIOP y para insistir que, a pesar las aclaraciones, no quedaba resuelto el problema que había señalado:

*(m)e ha complacido mucho oír las explicaciones dadas por el Sr. Ministro de Comercio; pero queda en pie la principal dificultad que yo he notado, a saber: que si los Bancos que se establezcan en lo sucesivo vienen a ser por esta Ley, como debe ser, no siéndolo los actualmente existentes, resultará que después habrá unos Bancos existiendo dentro de esta Ley, y otros fuera de ella.*⁷¹⁵

El turno de la palabra pasa ahora al Diputado Sr. Pérez de Rivas, si bien este nombre debe tratarse de un error de transcripción en las actas del DsC (Congreso de los Diputados⁷¹⁶) y se refiere a D. Fernando Rodríguez Rivas⁷¹⁷, Secretario de la CCD que redactó el PL 1848.

El Sr. Rodríguez Rivas, en nombre de la CCD, manifiesta su coincidencia con el Ministro de CIOP en el sentido de no admitir la retroactividad de la Ley para los bancos establecidos con anterioridad a su entrada en vigor:

⁷¹⁴ Ídem.

⁷¹⁵ Ídem.

⁷¹⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, págs. 1476 y 1478.

⁷¹⁷ En efecto, según figura en el libro AA.VV. (1858): *Estadística del Personal y vicisitudes de las Cortes y Ministerios de España* desde el 29 de septiembre de 1833 en que falleció el Rey, D. Fernando VII, hasta el 11 de septiembre de 1858 en que se disolvió el Congreso de los Diputados, Madrid, Imprenta Nacional, 1858, el Diputado D. José Pérez Rivas, lo fue durante las siguientes legislaturas: 1837 a 38 – 1838 a 39 – 1839 – 1840. En cambio, D. Fernando Rodríguez Rivas, lo fue durante las legislaturas de 1846 a 47 – 1847 a 48 – 1848 a 49 – 1849 a 50 – 1850 a 51 – 1853 – 1854. Esta información se encuentra en el capítulo “Catálogo general por orden alfabético de apellidos de los que han sido PROCURADORES, DIPUTADOS, PRÓCERES, SENADORES ELECTIVOS, SENADORES VITALICIOS, SENADORES POR DERECHO PROPIO y MINISTROS desde el año de 1834 hasta el 11 de septiembre de 1858.”

*(...) pero Su Señoría [se refiere al Sr. Sánchez Silva] llevado sin duda de su buen deseo, ha traspasado en mi juicio los justos límites, pues quiere que la ley tenga un efecto retroactivo a los Bancos existentes ya en el día. La Comisión, señores, no ha querido llegar a esta cuestión; ha dejado las cosas tal como estaban, porque no podía hacer otra cosa tratándose de intereses de tanta monta, como ha dicho ya el Sr. Ministro de Comercio.*⁷¹⁸

A continuación se produce un largo debate sobre las sucursales o cajas subalternas de los bancos, que se comenta en un epígrafe posterior de este capítulo.

La última intervención en el Congreso sobre la autorización de los bancos corresponde al Diputado por Valencia, D. Fermín García Morón, con motivo de una contestación por parte del Sr. Ministro de CIOP. En primer lugar, le acusó de cierta incoherencia, después manifestó que, en su opinión, el Banco de San Fernando tenía un capital excesivo para los negocios que se hacían en Madrid. También solicitó que el Gobierno presentara un Proyecto de Ley sobre las sucursales o cajas subalternas de los bancos. Y, por último, realizó una severa crítica al espíritu empresarial de la capital del Reino:

*... todo lo que sea centralizar en una caja única y especial todo el metálico de España, es una cosa funesta y perjudicial y que yo atacaré siempre que se trate de esta cuestión. Y digo que la atacaré, porque Madrid no es ni puede ser nunca una gran ciudad industrial y mercantil; los negocios siempre serán de cierto género; el interés del dinero será por muchos años muy alto, y todo lo que sea centralizar en un solo Banco todo el metálico de España, es hacer una cosa muy funesta, porque el caudal metálico de Madrid se empleará en cosas improductivas, y resultará que se traerá aquí todo ese dinero que todavía en las provincias podría destinarse a objetos verdaderamente útiles.*⁷¹⁹

El Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz, contesta brevemente a la intervención del Diputado Sr. Gonzalo Morón. En primer lugar, dice que el Gobierno presentará un Proyecto de Ley sobre el establecimiento de los bancos y, después replica al otro argumento del Sr. Gonzalo Morón en los siguientes términos:

El Sr. Gonzalo Morón acaba de incurrir en una inconsecuencia, porque sentada la premisa que Su Señoría ha sentado, se deduce enteramente lo contrario. Dice el Sr. Morón que no quiere la acumulación metálica en Madrid, y por eso no quieren la creación de un Banco en Madrid. Pues, señores, la centralización de un Banco en Madrid es lo único que permite que haya metálico en las provincias.

En una ciudad donde nada se produce, donde todos son consumidores, si no hubiera un Banco considerable, si no hubiera un gran Banco, el dinero metálico entraría por mucho, sería necesario para todas las transacciones, y no existiendo el crédito, no pudiendo hacerse las transacciones metálicas, las grandes contrataciones comerciales entre los principales capitalistas, porque siempre residirán en Madrid los principales capitalistas, aunque no esté aquí la producción, no pudiendo hacerse por medio de documentos de crédito, tendrían

⁷¹⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1476.

⁷¹⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1479.

*que hacerse a metálico, y este metálico faltaría en las provincias. He aquí cómo la indicación de su señoría aboga por un Banco en Madrid.*⁷²⁰

Ahora sí, la discusión termina con las siguientes palabras de D. Fermín Gonzalo Morón:

*He pedido la palabra para decir terminantemente al Sr. Ministro de Comercio que no me opongo a que haya un Banco en Madrid; yo quiero que haya un Banco con facultad de emitir billetes; en lo que no estoy de acuerdo con Su Señoría es en que haya cajas subalternas dependientes del Banco de Madrid, porque eso no haría más que traer aquí el metálico, donde repito que es improductivo.*⁷²¹

E) INTERVENCIONES EN EL SENADO

Las discusiones sobre los bancos, sus cajas subalternas y la retroactividad de la Ley, como era de prever, no se limitaron al Congreso de los Diputados. En el Senado estos temas se trataron en dos ocasiones. La primera, se refirió a la autorización de sucursales y cajas subalternas, que se comentará, junto a lo que dijeron los Diputados sobre este tema, en el siguiente epígrafe de este capítulo.

La segunda, se refería a las condiciones o requisitos subjetivos de las entidades que pudieran solicitar la autorización bancaria. La intervención fue del Marqués de Santillán, quien puso de manifiesto que el PL 1848 exigía la autorización legal para que una compañía por acciones fuera un banco, pero no podía extender ese requisito a aquellas personas o entidades que, sin ser compañías por acciones, solicitaran la autorización bancaria. Esta situación le preocupaba pues consideraba de todo punto de vista necesario que sólo se pudieran autorizar bancos por ley. Decía el Marqués de Santillán:

*Pero aquí la ley actual se concreta a las Sociedades anónimas; por consiguiente, la prohibición de establecer por Reales decretos Bancos de emisión, se limita a las Sociedades por acciones. ¿Se creará el Gobierno de S.M. autorizado para establecer Bancos de emisión a favor de Sociedades que no sean anónimas; esto es, sobre Sociedades colectivas o en comandita sin acciones⁷²², hasta a favor de un banquero particular? Porque esto podría suceder no prohibiéndose dicho establecimiento por Reales decretos más que a favor de Sociedades por acciones. A esto me opondría, yo siempre, porque los Bancos, tan útiles y ventajosísimos en ciertas circunstancias, son altamente perjudiciales y perturbadores cuando las circunstancias que deben asistirles no existen. Esto es por lo que he dicho que todo establecimiento de Banco de emisión debe ser objeto de una ley especial, para que estas materias de tan alto interés público se discutan aquí ampliamente y se excite el estudio de las buenas doctrinas de crédito, que tanto interesan al bien del país.*⁷²³

⁷²⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1479.

⁷²¹ Ídem.

⁷²² Se trata de un error en la transcripción del Diario del Senado. Se entiende que debe decir “en comandita sin acciones”. (el subrayado es nuestro)

⁷²³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1479.

El Ministro de CIOP, Sr. Bravo Murillo, contesta al Senador Sr. Santillán diciendo que el ámbito del PL 1848 se circunscribe a las compañías por acciones y, en consecuencia, nada puede regular sobre otras personas o entidades que soliciten autorización bancaria. Excediéndose de su ámbito, en relación a si el Gobierno piensa que está facultado para otorgar establecimientos bancarios a cualquier persona o entidad, responde en los siguientes términos, transcritos en un epígrafe anterior:

*Que esto deber ser objeto de una ley, lo reconoce el Gobierno, quien presentará el proyecto de la ley sobre Bancos; se tratará esta cuestión, y se sentará el principio de que las Sociedades de Bancos de emisión y su institución, deben ser objeto de una ley especial.*⁷²⁴

Con estas palabras, el Marqués de Santillán había conseguido su objetivo: el compromiso por parte del Gobierno de no hacer uso de sus facultades para autorizar bancos a favor de sociedades colectivas, comanditarias sin acciones ni personas físicas.

F) REFERENCIA A LAS SUCURSALES O CAJAS SUBALTERNAS

El problema de la autorización de bancos se extendía a otra cuestión conexas: la autorización de sus sucursales o cajas subalternas. Debían abordarse a la vez. Por este motivo, el artículo 2 del PL 1848 establecía la necesidad de una ley para constituir una compañía que tuviera por objeto el *establecimiento de Bancos de emisión y Cajas subalternas de estos* (apartado 1).

La primera intervención en el Congreso fue la del Secretario de la CCD, el Diputado D. Fernando Rodríguez Rivas que, contestando a la intervención del Diputado Sr. Sánchez Silva, se refirió a

*... las cajas subalternas, cuestión que la Comisión ha ventilado no sólo por los principios que envuelve, sino por lo que se agita en sí esta cuestión en el día, porque la cuestión que nos ocupa en este momento tiene ese cáncer y cuya causa y remedio no está bien explicado. Desearía yo, pues, que, bien el Sr. Ministro de Comercio, bien a su vez el Sr. Ministro de Hacienda, nos dijeran si la negativa ya establecida respecto al Gobierno para la creación de nuevos Bancos de emisión, Bancos que, repito, no estarán ya en las facultades del Gobierno conceder, se extiende a las cajas subalternas, a las llamadas sucursales.*⁷²⁵

Se desprende de estas palabras el interés de la CCD por conocer la postura del Gobierno sobre este tema, que generaba cierta inquietud. Por eso, su intervención se dirige al Diputado Sr. Sánchez Silva como si se le hubiese olvidado plantear esta cuestión, que el Sr. Rodríguez Rivas, de esta forma, propone al Ministro de CIOP, pues el de Hacienda (D. José de Salamanca) no estaba presente en el hemiciclo en ese momento.

⁷²⁴ Ídem.

⁷²⁵ Ídem.

La preocupación se refiere al futuro, no a los hechos pasados. En concreto, se trata de la posibilidad de que alguno de los bancos ya existentes en aquel momento pudiera abrir sucursales o cajas subalternas en otras ciudades, que operarían *de facto* como nuevos bancos, pero sin haber sido aprobados por el Parlamento. Esta es la concreta inquietud de la CCD:

*... deseo saber si la negativa acordada para las concesiones de nuevos Bancos por parte del Gobierno es extensiva a las cajas sucursales de los mismos Bancos, que es el caso en que está el de Cádiz: éste, por el artículo 25 de sus estatutos puede establecer cajas subalternas en las capitales de Andalucía, de acuerdo con el Gobierno, porque éste está en la facultad de concederlo o negarlo, según lo crea conveniente. El Banco de San Fernando y el de Isabel II, reunidos hoy en uno, el primero no tenía esa facultad, el segundo sí bajo las mismas condiciones que el de Cádiz; yo desearía, pues, oír al Sr. Ministro lo que piensa sobre estas cajas subalternas o sucursales, para contestar después.*⁷²⁶

El Sr. Ministro de CIOP, Pastor Díaz, formula una respuesta coherente, sabiendo que tendrá réplica del Sr. Rodríguez Rivas. Transcribimos literalmente la parte más importante de su intervención, que es suficientemente clara y detallada:

*... hay que explicar una cosa, a saber: ¿y estas cajas subalternas tienen una existencia especial, un capital separado, un papel particular? ¿Les está concedido un privilegio distinto del Banco de que dependen? ¿Esto las constituye en la facultad de emitir billetes? En este caso las cajas subalternas con emisión especial de billetes y capital distinto del Banco central no se pueden fundar sino por medio de una ley; pero si se quiere decir con esto que tampoco pueden existir las cajas que puedan tener los Bancos en las provincias para la mejor administración de sus intereses, el Gobierno no puede aceptar la interpretación demasiado extensiva que pudiera darse a aquella prohibición, porque estas cajas son dependencias naturales del Banco, sin las cuales se dificultaría la marcha de estos establecimientos públicos. Por consiguiente, el artículo 2, cuando dice: "el establecimiento de Bancos de emisión y de cajas subalternas de éstos", creo que debe entenderse con aquellos establecimientos que aunque ligados de alguna manera con un Banco central, tienen capital separado, tienen accionistas distintos, un papel autorizado y un privilegio; pero no con aquellos que están dentro del privilegio de autorización concedida al Banco central. Creo que en esto convendrá la Comisión, como los demás señores, y que estas explicaciones son las más satisfactorias que pueden darse.*⁷²⁷

Luego en la cuestión de la autorización de sucursales o cajas subalternas, el aspecto clave es, por un lado, si pueden realizar una emisión especial de billetes y, por otro lado, si tienen un capital distinto al del banco. En caso afirmativo, se trataría en la práctica como un banco nuevo y, por tanto, sería necesaria la pertinente autorización legal. Esta es la interpretación que parece ofrecer el Ministro al poner en relación los artículos 2 y 18 del PL 1848.

⁷²⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1477.

⁷²⁷ Ídem.

Pero para el Sr. Sánchez Silva el problema no es tanto que las sucursales o cajas subalternas puedan realizar emisiones especiales de billetes o tener accionistas diferentes a los del banco (denominado entonces “Banco central”, diferente al concepto actual de Banco Central), sino que en determinadas ciudades los poderes locales pretendían constituir bancos y no lo podían hacer por la presencia de sucursales, aunque éstas no emitieran billetes especiales ni su capital fuera diferente al del banco. Estas son sus palabras:

*Precisamente el inconveniente mayor que ofrecen los estatutos de los Bancos existentes es la pretensión de poner cajas subalternas estos Bancos con el mismo papel, que es lo que se quiere evitar. Yo, señores, no encuentro razón para que un Banco como el de Cádiz ponga una caja en Sevilla, cuando Sevilla tiene propios recursos, garantías y suficiente número de negociantes que solicitan del Gobierno la misma facultad, y no se les concede porque estos Bancos quieren especular. Enhorabuena que especulen respecto a los negocios generales de su instituto, pero no por lo que hace a otros, porque las provincias tienen derecho a rechazar esa intrusión que se hace en sus capitales. Por tanto, si había de ser verdad la investidura que se quiere dar al establecimiento de los Bancos, era necesario que los existentes trajeran aquí, no todo el material de su existencia, pero sí sus solicitudes, y que el Gobierno tuviera autorización para investirlos; porque si no, repito que algunos de ellos establecerán cajas subalternas, otros no, y otros que se creen en lo venidero tendrán también esa investidura legal. Pero esto es lo que más interesa, y quisiera que el Gobierno diera una explicación satisfactoria, reducida a que, lejos de permitir que en las capitales se establezcan cajas, les será permitido a aquéllas establecer Bancos si lo solicitan del parlamento por los trámites legales.*⁷²⁸

La respuesta del Ministro de CIOP no se basa en razonamientos jurídicos, sino en motivos económicos y de libre competencia:

Yo no veo los peligros de esa concentración general del crédito en el privilegio de establecer cajas subalternas; no veo peligro ninguno; es imposible que le haya, porque ese privilegio está limitado por el capital del Banco. Cuando se conceden cajas subalternas a un Banco y cuando se le permite hacer pagadero el papel de su emisión, este papel de su emisión no se refiere al capital de la caja subalterna, aunque tenga otro separado, sino al del mismo Banco Central. Por consiguiente, suponiendo que la plaza de Madrid absorbe una gran cantidad del papel que cabe en las proporciones de la Ley, ¿qué le importa al Banco, aunque se le permita por la ley colocarle en otras cajas subalternas? Esto está limitado por el capital del mismo Banco, y éste no puede ejercer ese monopolio; en vano se permitirá al Banco de San Fernando que tenga 40 millones de billetes en Málaga, otros 40 en Cádiz y otros tantos en Barcelona; por qué ¿cómo ha de destinar esos 40 millones de billetes, si no le caben dentro de su capital mismo?

Si el Banco de San Fernando tiene 100 millones en efectivo y otros 100 en emisión, y la plaza de Madrid absorbe 80 millones, ¿cómo han de temer las demás plazas la concurrencia de ese Banco, cuando no está en sus facultades

⁷²⁸ Ídem.

*emitir más papel? ¿Dónde están, pues, los peligros de esa concurrencia? Yo creo que el Sr. Sánchez Silva no temerá que se pueda abusar de esa facultad concedida a los Bancos, con perjuicio del comercio y de los intereses de las provincias. En vano tendrían facultad de monopolizar el papel y el crédito, porque cuando se viniera a pedir una autorización para un Banco local o provincial, el Gobierno tendría que sujetarlos al Parlamento, y éste vería si convenía o no el establecimiento de esos Bancos. Siempre, pues, habrá que solicitar esas concesiones provinciales, y se verá si son convenientes y cabe en el pensamiento del Gobierno establecerlos.*⁷²⁹

El Diputado Sr. Sánchez Silva, interviene citando el caso concreto que tenía en su pensamiento pero que no había detallado:

*... sólo citaré un hecho para justificar de un solo rasgo como no son temores los que yo abrigo, sino que son hechos. El Banco de Isabel II⁷³⁰ envió no hace mucho al de Cádiz 20 millones de reales en billetes con condición de que aquel Banco había de pagarle un 20%. ¿Y en qué consiste esto? En que el Banco de Cádiz no estaba autorizado para emitir billetes, y no habiendo allí otro Banco de emisión, tuvo que buscarlos donde los había; pero el hecho es que tiene un privilegio, porque nos exigió un 20%; y cuando hay hechos terminantes que manifiestan una usura tan alta, siempre sucederá lo mismo.*⁷³¹

Esta es la respuesta del Ministro de CIOP:

*... el Ministro nada sabe de lo que ha pasado en el Banco de Isabel II: lo que puede decir a Su Señoría es que si hizo eso en Cádiz, no pudo hacerlo en Sevilla o en Málaga. Si el Banco de Isabel II llevó 20 millones a Cádiz, no pudo llevarlos a Sevilla y a Málaga, porque no cabían en la esfera de sus operaciones.*⁷³²

En este punto retoma la palabra el Secretario de la CCD, el Sr. Rodríguez Rivas, para puntualizar al Ministro de CIOP y poner de manifiesto el criterio de la CCD:

Acaba de decir el Sr. Ministro de Comercio y de Instrucción Pública que el Banco de Isabel II, si envió a Cádiz 20 millones, no podría enviarlos a Málaga o a Sevilla, porque esa cantidad no hubiera cabido en el capital que tenía el Banco. Al tratar estas cuestiones no se puede hasta cierto punto hablar sino con hechos.

⁷²⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, págs. 1477 y 1478.

⁷³⁰ Es oportuno recordar aquí parte de la cita ya transcrita del profesor SÁNCHEZ ANDRÉS (1984) “Las crisis bancarias en España ...”, págs., 26 y ss: el Banco de Isabel II, que fundado como banco vinculado a la financiación de los ferrocarriles por el Marqués de Salamanca y el Conde de Santa Olalla en 1844, se encontraba al estallar el crack de 1846, y tras una etapa de despegue realmente brillante, ante una situación sin salida. Las hábiles dotes políticas del Marqués de Salamanca consiguieron que su fusión con el Banco de San Fernando en el Banco español de San Fernando. Al poco tiempo, cuando tuvo lugar el debate en el Congreso de los Diputados que estamos comentando, el Marqués era el Ministro de Hacienda.

⁷³¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1478.

⁷³² Ídem.

(...) Es una verdad; ¿pero me combina el Sr. Ministro que el Banco de San Fernando, que ha tenido más cantidad que el de Isabel II, no solamente no ha establecido las provincias cajas subalternas, sino que no ha tratado de establecerlas, cuando el Banco de Isabel II, no sólo ha establecido esa caja subalterna en Cádiz, sino que ha tratado de establecerlas en otras provincias? Digo esto, porque siendo Diputado por aquella provincia y teniendo conocimiento de aquellas cuestiones el individuo de la Comisión que tiene la honra de dirigir la palabra al Congreso, ha tratado de cortarlas, y los señores de la Comisión han convenido conmigo en poner esta parte en la ley.

*(...) Esta es la rectificación que he creído necesario hacer, y a que ha dado lugar ese nuevo argumento del Sr. Ministro. Yo creo que los señores Diputados se convencerán de que no ha sido en vano poner esa parte en la ley respecto de los nuevos Bancos que se establezcan, y que se extienda también a las cajas subalternas de éstos.*⁷³³

Aquí se encuentra, por tanto, la justificación del inciso y *cajas subalternas de éstos* (los bancos) del artículo 2 del PL 1848, que enumera las compañías que deben ser aprobadas exclusivamente por el Parlamento, en función de su objeto social.

Los debates sobre las cajas subalternas o sucursales de los bancos también tuvieron lugar en el Senado. Ya en la primera sesión en la que se debatió el PL 1848, se puso de manifiesto la importancia de esta cuestión. Así, la primera enmienda, una vez abierta la deliberación artículo por artículo, la planteó el Senador Sr. Pérez Seoane al artículo 2 en los siguientes términos:

*Después del segundo párrafo, que empieza: “1. El establecimiento de Bancos, etc.,” se añadirá: “Se exceptúan las Cajas subalternas que pretenda establecer el Banco Español de San Fernando, respecto a las cuales se observará lo dispuesto en el Real decreto de 25 de Febrero de este año.”*⁷³⁴

El problema de fondo que subyace en esta propuesta es que el Banco español de San Fernando (constituido, como se recordará, mediante la fusión del Banco de San Fernando y el de Isabel II en virtud del RD de 25 de febrero de 1847 citado por el Sr. Pérez Seoane y comentado en un epígrafe anterior), tenía la facultad o prerrogativa válidamente adquirida de crear nuevas sucursales o cajas subalternas en otras ciudades de España. Si el PL 1848 se aprobaba, conforme a lo previsto en el artículo 2, esa creación debía ser autorizada por el Parlamento. Por lo tanto, en su opinión, se conculcarían unos derechos adquiridos dentro de la legalidad⁷³⁵. Transcribimos el razonamiento del Senador Sr. Pérez Seoane:

Dice el artículo 2 del proyecto: “Será necesaria una ley para la formación de toda compañía que tenga por objeto el establecimiento de Bancos de emisión y Cajas subalternas de éstos, etc.” Y ya se ve que aun cuando no se entienda, como no debe entenderse, que el Banco Español de San Fernando necesite de una ley especial para seguir funcionando, sí se entenderá que no puede

⁷³³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1478.

⁷³⁴ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 268.

⁷³⁵ Dice el Sr. Pérez Seoane en un momento de su intervención: *que se respete un derecho legítimamente adquirido por el Banco Español de San Fernando.* (Ídem nota anterior).

establecer en lo sucesivo ninguna Caja subalterna sin que preceda una ley autorizándole al efecto. En esto cabalmente está el perjuicio para el Banco, que me propongo evitar, porque sin hacer una excepción en su favor quedaría derogado el artículo 5 del Real decreto de 25 de Febrero de este año [1847], que puede considerarse como el constitutivo u orgánico de ese establecimiento, en que tan oportuna y convenientemente, haciendo sin duda un gran servicio al país, refundió el Gobierno los dos Bancos que a la sazón existían; esto es, el que llevaba el mismo nombre de San Fernando y el de Isabel II. Dicho artículo 5 dice: “El Banco podrá establecer, con mi Real aprobación, Cajas subalternas en los puntos en que se crean convenientes con las condiciones que yo tenga a bien aprobar, oído el Consejo Real, etc.” Si, pues, se ha de respetar la disposición de este artículo, que solo exige la autorización Real para el establecimiento de Cajas subalternas que el Banco crea convenientes, preciso es que no le dejemos sujeto a la disposición del artículo que discutimos, y que sin pensarlo acaso, le despojemos de un derecho legítimamente adquirido por el Real decreto de 25 de Febrero, decreto en que debió hacerse semejante concesión por respeto a los derechos de los Bancos, por él reunidos.⁷³⁶

Contestó a esta propuesta no un miembro de la CS sino el Ministro de CIOP, D. Juan Bravo Murillo. Su respuesta es contraria a la enmienda por entender que el Banco de San Fernando se encuentra dentro del ámbito del artículo 18 del PL 1848. Aunque el razonamiento no es muy convincente, queda clara la posición del Gobierno y la aquiescencia de la CS y de los Senadores a las siguientes palabras del Ministro:

Esta ley no habla con el Banco de San Fernando, porque por el artículo 2 de esta Ley no se le priva de ningún derecho, de ninguna facultad; y la demostración es clara, es evidente. El artículo 18 dice así: (Leyó.) El Banco de San Fernando existe en virtud de autorización Real. Y no como ha manifestado el Sr. Seoane, por el decreto del 25 de Febrero del presente año. El artículo 18 que he tenido el honor de leer al Senado expresa terminantemente que las Sociedades por acciones creadas por autorización Real, están exceptuadas. Y siendo así que el Banco de San Fernando fue creado por mandamiento Real del Sr. D. Fernando VII, y posteriormente lo ha sido por otra Real autorización, por el decreto de 25 de Febrero, es innegable que se halla comprendido en el artículo 18.

Claro está, pues, señores, que el Banco se halla excluido de los efectos de este proyecto de ley. Pues considerando el Gobierno de S.M. al Banco de San Fernando como Sociedad anónima, y habiéndosele concedido por el ya citado decreto del 25 de Febrero el permiso de establecer cajas subalternas, obvias y patentes son las consideraciones que todavía se podrían hacer para demostrar que el Banco no se sujeta a lo marcado por el artículo 18 del proyecto.

Véase por qué, señores, he dicho que la enmienda del Sr. Pérez Seoane es innecesaria, es de todo punto inútil; porque está ya determinado en el proyecto de ley lo que en su concepto faltaba al artículo 2. Por lo tanto, debe desecharse la enmienda, ya que todos los Sres. Senadores deben estar persuadidos de que al Banco de San Fernando no se le priva de derecho alguno.⁷³⁷

⁷³⁶ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 268.

⁷³⁷ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 269.

El Senador Sr. Pérez Seoane finalmente retiró su enmienda, pues ya había conseguido lo que quería (que es la última frase transcrita).

CAPÍTULO VIII EL OBJETO SOCIAL

El objeto social era un elemento básico caracterizador de las compañías por acciones en el periodo histórico que se analiza en el presente trabajo. La naturaleza del objeto social determinaba, en primer lugar, la inclusión o exclusión en la tipología de las anónimas o comanditarias por acciones. Y, en segundo lugar, condicionaba el tipo de autorización: legislativa o gubernativa.

Se trata de una materia estrechamente vinculada con el régimen jurídico de la autorización de las compañías mercantiles por acciones, que ha sido objeto de un detallado análisis en el capítulo precedente. Al tratarse de dos cuestiones conexas, pero independientes, nos parece adecuado tratarlas de manera separada aunque complementaria.

I. FUENTES NORMATIVAS

Se inicia el estudio de esta materia con el comentario del régimen del objeto social de las compañías por acciones establecido en el CCom 1829, dado que es el marco legal que modifica nuestra Ley de 1848. Como se verá a continuación, la regulación es muy concisa.

A) EL CCOM 1829

1. Un fondo por acciones para girarlo sobre uno o muchos objetos

La primera característica que se puede resaltar en cuanto a la regulación del objeto social en el CCom 1829 hace referencia a la propia esencia de la compañía por acciones. Establece su artículo 265.3 que se puede constituir la compañía anónima *creándose un fondo por acciones determinadas para girarlo*⁷³⁸ *sobre uno o muchos objetos...*

Como se expone en otro lugar, el concepto de compañía mercantil del CCom 1829 presenta la peculiaridad de que, aunque asume que la compañía es un sujeto jurídico independiente de sus socios, el texto legal no lo recoge expresamente en ningún lugar⁷³⁹. Será el CCom 1885 el que lo haga por primera vez (artículo 116.II: *una vez*

⁷³⁸ La séptima acepción del verbo “girar” en el Diccionario de la R.A.E. es *hacer las operaciones mercantiles de una empresa*.

⁷³⁹ Se puede consultar el capítulo sobre el concepto de compañías mercantiles por acciones en la época del CCom 1829 y de la Ley de 1848 en el que se expone cómo la Doctrina de la época -GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derechomercantil ...*, pág. 127 y MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil...*, pág. 258- aceptan que la sociedad es *un nuevo ser moral comerciante*. En cambio, Doctrina más reciente, entiende que esta ausencia no es un olvido sino que el legislador no contempla la personalidad jurídica independiente de la sociedad. Así GIRÓN TENA, J. (1947): “Sociedades civiles y sociedades mercantiles ...”, págs. 19 y 20, y, en una postura menos radical, RUBIO, J. (1947): “Sobre el concepto ...”, pág. 346.

constituida la compañía mercantil, tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y contratos).

En este marco general de las compañías mercantiles, la anónima y la comanditaria por acciones presentaban la singularidad de la limitación de responsabilidad de los socios exclusivamente al capital (*fondo*) aportado. Ese capital, que se podría decir que adquiría una personalidad jurídica propia, se encontraba condicionado de manera sustancial por su finalidad, es decir, por el objeto para el que se constituyó la sociedad. Este rasgo se ha diluido con el paso de los años y se ha difuminado esta característica básica presente en el origen de las compañías mercantiles por acciones codificadas. La sociedad se constituía sólo para el objeto u objetos que tenía previsto. En consecuencia, la modificación o sustitución del objeto social no entraba dentro de la regulación de la época. Además, lógicamente, la duración de la compañía se establecía en función de su objeto social, siendo mucho más frecuente que ahora las sociedades de duración definida.

Otra muestra de lo que se comenta es el artículo 276 CCom 1829 en relación a un tema tan importante como la denominación social, instrumento de identificación y diferenciación de la sociedad. Establece el citado artículo que *las compañías anónimas no tienen razón social, ni se designan por los nombres de sus socios, sino por el objeto u objetos para que se hubiesen formado*. En los demás tipos societarios (compañía colectiva, comanditaria), la identidad de los socios era muy relevante y, por eso, sus nombres identificaban la compañía. En la anónima (el propio nombre lo indica) no era relevante quién estaba detrás de la sociedad, sino el capital: el dinero y los bienes aportados. Pero no se trataba de una característica exclusivamente negativa, sino que la importancia la adquiría el objeto que iba a acometer la compañía.

2. Privilegio

Como se apunta en otro lugar, el CCom 1829 no recogió la figura de las compañías anónimas precodificadas, caracterizadas por la autorización pública que otorgaba un privilegio y un monopolio de naturaleza comercial⁷⁴⁰. En el artículo 265.3 CCom 1829, citado en el apartado anterior, no se mencionan estos aspectos.

El artículo 294 CCom 1829 establecía que, *cuando las compañías anónimas hayan de gozar de algún privilegio que Yo le conceda para su fomento, se someterán sus reglamentos a mi soberana aprobación*. Se pueden extraer dos consecuencias de este texto. En primer lugar, la concesión de un privilegio introduce en la compañía anónima un supuesto especial o cualificado que requiere la aprobación real. Y, en segundo lugar, el juego de este artículo 294 con el 265.3 lleva a la conclusión de que las compañías anónimas autorizadas por el T. de c. (artículo 293) no tenían limitación en cuanto al contenido del objeto social. Como se verá más adelante, este punto es objeto de duras críticas durante los debates tanto en el Congreso como en el Senado.

⁷⁴⁰ HIERRO ANIBARRO, S. (1950): *El origen de la sociedad anónima ...*, págs. 31 y 32 sobre las compañías anónimas precodificadas. En cuanto a la caracterización de las compañías anónimas en el CCom 1829, se puede consultar el capítulo sobre el concepto de compañía mercantil por acciones.

3. Necesaria determinación del objeto social.

Con carácter general para todos los tipos de compañías mercantiles, el artículo 286 CCom 1829, establecía dos requisitos para la validez de la escritura de constitución de la sociedad: *La escritura debe expresar necesariamente: (l)a duración de la sociedad, que ha de ser necesariamente por un tiempo fijo o para un objeto determinado* (apartado sexto) y *(e)l ramo de comercio, fábrica o navegación sobre que ha de operar la compañía en el caso que ésta se establezca limitadamente para una o muchas especies de negociaciones* (apartado séptimo).

Por lo tanto, en primer lugar, si la compañía no se constituye por un tiempo fijo, su duración se vincula al objeto social *determinado*. Y, en segundo lugar, el CCom 1829 recoge dos posibles situaciones en las que se pueden encontrar el objeto social de los diferentes tipos de compañías mercantiles: limitado a una o varias especies de negociaciones o un objeto social sin esta restricción.

En este sentido, GONZÁLEZ HUEBRA⁷⁴¹ afirma que en las sociedades colectivas cabe diferenciar dos tipos de requisitos para su válida constitución. Unos necesarios y otros accidentales. Dentro de estos últimos incluye la mención, en la escritura de constitución, del contenido del objeto social en el caso de que éste estuviera limitado a determinadas actividades. *Sensu contrario* si no circunscribía su actividad a concretos sectores de actuación, no era necesario hacer mención al contenido del objeto social.

Las compañías por acciones suponían una excepción a esta situación en la que se encontraban los demás tipos societarios, en la medida en que el artículo 265.3 CCom 1829 establecía que las compañías anónimas se constituyen *(c)reándose un fondo por acciones determinadas para girarlo sobre uno o muchos objetos* (el subrayado es nuestro). Se admite un único objeto o una pluralidad de los mismos (de *especies de negociaciones* en terminología del artículo 286 apartado séptimo), pero no una compañía anónima sin objeto social.

Respecto a los límites de la determinación del objeto social, es decir, si debía expresarse en términos generales o precisos, el texto legal no establece nada al respecto, ni tampoco se han encontrado comentarios de la Doctrina de la época sobre la cuestión. En nuestra opinión, el tenor del artículo 265.3 induce a concluir que el objeto social debía recogerse con un alto grado de precisión porque ésta era una de las características esenciales de la compañía anónima regulada por el CCom 1829.

B) EVOLUCIÓN DE LAS REDACCIONES DEL PL 1848

El primer PL 1848 fue presentado por el Ministro Roca de Togores el 26 de febrero de 1847 al Congreso de los Diputados⁷⁴². El régimen específico del objeto social se encuentra en tres artículos, que se comentan a continuación.

El artículo 2 establece los objetos sociales a los que pueden dedicarse las compañías cuyo capital en todo o en parte se divida en acciones:

⁷⁴¹ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil* ..., págs. 133 y 134.

⁷⁴² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 47, págs. 653 y 654.

- las que se establezcan para la construcción de obras de utilidad pública;
- para el fomento directo de la agricultura, de la industria fabril o del comercio;
- para la aseguración de la propiedad mueble o inmueble, de las operaciones de tráfico y giro mercantil o industrial, y de los riesgos de cualquiera clase en todo género de contratación; y,
- para cualquiera otra empresa que a juicio del Gobierno sea de conveniencia general y común, que ni impida el libre ejercicio de ningún ramo de comercio o industria, ni menos se dirigirá a monopolizar los artículos de primera necesidad.

Esta última mención era de gran importancia para aquel Gobierno, pues se recoge en el Preámbulo del PL 1848 una mención al peligro de monopolizar los “artículos de primera necesidad” en los siguientes términos: ... y lo que es aún más lamentable, que los artículos de primera necesidad puedan ser objeto de estas especulaciones inmorales, elevando sus precios fuera del alcance de una gran parte de nuestros artesanos.

El artículo 3 recoge el principio de la determinación del objeto social en los siguientes términos: *(t)oda sociedad por acciones se ha de constituir para uno o más objetos determinados.*

Y, por último, el artículo 9 regula las consecuencias de realizar operaciones sociales fuera del objeto determinado de la compañía: *(l)as sociedades por acciones no podrán extenderse a otras negociaciones que las que sean peculiares de su objeto o empresa, según estén determinados en sus estatutos o reglamentos. Todo contrato hecho por sus gerentes contra esta disposición será de su cuenta particular, y considerándose como celebrado en sociedad colectiva de los administradores de la sociedad, quedarán responsables a sus results con sus bienes propios y mancomunadamente cuantos la tuvieren a su cargo, salva la repetición a que contra ellos haya lugar por parte de los accionistas como infractores de los estatutos y reglamentos sociales. Lo determinado en este artículo no impide que cuando tuvieren fondos sobrantes puedan colocarlos en descuentos o préstamos.* Dada la importancia del principio según el cual la compañía anónima sólo podía actuar dentro del objeto social previsto en sus estatutos sociales, el PL 1848 de Roca de Togores establece esta responsabilidad de los administradores que actúen fuera del ámbito del objeto social. La única excepción permitida es la disposición de *fondos sobrantes* a la que, como luego se verá, se refieren varios parlamentarios en sus intervenciones.

El segundo PL 1848 fue presentado por la CCD el 16 de abril de 1847⁷⁴³ con un planteamiento radicalmente diferente al anterior. Es el primer texto en el que se establece la autorización legislativa o gubernativa en función del objeto social de la compañía. Son cuatro los artículos que regulan específicamente la materia del objeto social.

⁷⁴³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393. Recogido también en la GdM de 19 de abril de 1847, núm. 4600.

El artículo 2 regula las compañías que deben ser autorizadas por las Cortes Generales: *(s)erá necesaria una ley para la formación de toda compañía que tenga por objeto:*

1. *El establecimiento de Bancos de emisión y cajas subalternas de éstos, o la construcción de carreteras generales, canales de navegación y caminos de hierro.*
2. *Cualquiera empresa que, siendo de interés público, pida algún privilegio exclusivo.*

En este párrafo no se comprenden las compañías que se propongan beneficiar algunos de los privilegios industriales de invención o introducción que el Gobierno puede conceder con arreglo a las disposiciones siguientes en esta materia.

El artículo 4 se refiere a la autorización gubernativa en los siguientes términos: *(p)ara la formación de toda compañía que no se halle comprendida en el artículo 2 de esta Ley, será necesaria la autorización del Gobierno, expedida en forma de RD. Esta autorización solo se concederá a las compañías cuyo objeto sea de utilidad pública. El Gobierno denegará la autorización a las compañías que se dirijan a monopolizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad.*

El interés público o interés general era prioritario para la Comisión y así lo expresa en el Preámbulo de su Dictamen: *Las compañías anónimas, lejos de encaminarse siempre a un objeto de interés general, verdadero y positivo, han sido no pocas veces un mero prete(x)to para crear valores ficticios, para favorecer transacciones inmorales y para desviar los capitales de un empleo verdaderamente provechoso al fomento de los ramos en que estriba la pública prosperidad.*

Esta estructura en la que el artículo 2 se refiere a la autorización legislativa y el artículo 4 a la gubernativa, permanecerá en los posteriores textos del PL 1848 y así pasará a la versión definitiva.

El artículo 5 recoge el principio de la determinación del objeto social que contenía el artículo 3 del anterior PL 1848, pero lo modifica al añadir el adverbio *precisamente*, otorgando una mayor importancia a este principio: *(t)oda compañía por acciones se constituirá precisamente para objetos determinados.*

El artículo 16 se refiere a las consecuencias de la actuación fuera del objeto social y modifica el contenido del artículo 9 del anterior PL 1848: *(l)os que contraten a nombre de compañías que no se hallen establecidas legalmente, serán solidariamente responsables de todos los perjuicios que por la nulidad de los contratos se irroguen a los interesados, e incurrirán además en una multa que no excederá de 100.000 rs. En igual responsabilidad incurrirán los que a nombre de una compañía, aun legalmente constituida, se extiendan a otras negociaciones que las de su objeto o empresa, según esté determinado en sus estatutos y reglamentos.*

Los debates en el Congreso aprueban un nuevo texto de PL 1848 (el tercero) que es remitido al Senado el 23 de abril de 1847⁷⁴⁴. El Dictamen de la CCD no modifica ninguno de los cuatro artículos (2, 4, 5 y 16) del PL 1848 anterior que regulan específicamente el régimen del objeto social.

El cuarto texto del PL 1848 es presentado por la CS el 18 de diciembre de 1847, justo antes de iniciarse los debates en la Cámara Alta⁷⁴⁵. Tampoco modifica el texto de los cuatro artículos (2, 4, 5 y 16) sobre el objeto social.

La quinta versión del PL 1848 es el texto modificado por el Senado durante las sesiones de finales de diciembre de 1847⁷⁴⁶. No se alteran los cuatro artículos relativos al régimen del objeto social, aunque debe advertirse de un error de transcripción pues la frase del artículo 4 *(e)sta autorización sólo se concederá a las Compañías cuyo objeto sea de utilidad pública* ha desaparecido del texto publicado en el DsC. Congreso de los Diputados. Luego se volverá a encontrar en la versión definitiva.

Este PL 1848 de 24 de diciembre de 1847 introdujo un último inciso en el artículo 19 a propuesta del Senador Sr. Armendáriz. El artículo 19 regulaba la adaptación de las compañías por acciones constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de nuestra Ley de 1848 y establecía que *(l)a autorización Real se otorgará a las compañías que hubieren cumplido las condiciones con que fueron aprobadas por los tribunales de comercio, y a las comanditarias por acciones que hubiesen sido establecidas con arreglo a las disposiciones del Código de comercio.*

Este Senador propuso en la sesión de Nochebuena de 1847 que se añadiera un nuevo inciso al final del artículo 19 en los siguientes términos: *“No se concederá, sin embargo, esta autorización a las compañías por acciones, sea cual fuere su naturaleza, si se hallasen comprendidas en el último párrafo del artículo 4.”*⁷⁴⁷ De esta manera, se prohibía la adaptación de compañías que monopolizaran *subsistencias u otros artículos de primera necesidad*. Sáinz de Andino, Presidente de la CS, aceptó la enmienda, que se incluyó en el texto y pasó a la versión finalmente aprobada por las Cortes⁷⁴⁸.

Finalmente, el Dictamen de la CMC-S aprueba un nuevo texto en el que permanecen igual los cinco artículos (2, 4, 5, 16 y 19) sobre el régimen del objeto social, a excepción del cambio de una palabra en el artículo 19, que afecta indirectamente a la cuestión del objeto social⁷⁴⁹. Así lo explica el Dictamen de la CMC-S: *El artículo 19, si bien juzga conveniente la adición aprobada por el Senado, ha creído que puede añadirse una palabra en lugar del adverbio “precisamente”, que ha sido suprimido por el Senado.* La palabra que se añade es “todas” en relación a las compañías que cumplieran las condiciones para adaptarse a la nueva Ley.

⁷⁴⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 23 de abril de 1847. Apéndice Primero al núm. 81, págs. 1499 y 1500. DsC. Senado. Sesión de 26 de abril de 1847. Apéndice Segundo al núm. 35, págs. 421 y 422.

⁷⁴⁵ DsC. Senado. Sesión de 18 de diciembre de 1847. Apéndice Segundo al núm. 16, págs. 251 y 252.

⁷⁴⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 29 de diciembre de 1847. Apéndice al núm. 32, págs. 617 y 618.

⁷⁴⁷ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, págs. 299 y 300.

⁷⁴⁸ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 300.

⁷⁴⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 11 de enero de 1848. Apéndice Segundo al núm. 41, pág. 769.

C) LA LEY DE 1848

Nuestra Ley de 1848 se refiere específicamente al régimen del objeto social en cinco artículos, de los veintiuno que tiene. En el epígrafe anterior se ha estudiado la evolución de los diferentes textos del PL 1848 hasta la versión finalmente aprobada. A continuación se exponen las características básicas del régimen jurídico.

1. El objeto social determina si una sociedad puede constituirse por acciones y si la autorización debe ser legislativa o gubernativa

La innovación más importante de Ley de 1848, respecto al CCom 1829, es la exigencia de aprobación legislativa o gubernativa de dichas sociedades. Esta cuestión tan relevante presenta una conexión directa con el objeto social de la compañía.

En efecto, si unos socios iniciaban una actividad empresarial utilizando la compañía anónima o comanditaria por acciones, sólo podían dedicarse a los objetos o fines sociales establecidos por la Ley de 1848⁷⁵⁰. El motivo era que la concesión del privilegio de la limitación de responsabilidad de los socios tenía como contraprestación que la compañía se dedicara a determinados objetos sociales, todos ellos relacionados, fundamentalmente, con el interés público o general.

Además, el objeto social condicionaba el régimen de la autorización de la compañía, conforme a lo previsto en los artículos 2 y 4 de la Ley de 1848. El artículo 2 recoge los supuestos que requieren autorización legislativa o parlamentaria: *(s)erá necesaria una ley para la formación de toda compañía que tenga por objeto:*

Primero, el establecimiento de Bancos de emisión y cajas subalternas de éstos, o la construcción de carreteras generales, canales de navegación y caminos de hierro.

Segundo, cualquiera empresa que siendo de interés público pida algún privilegio exclusivo. En este párrafo no se comprenden las compañías que se propongan beneficiar algunos de los privilegios industriales de invención o introducción que el Gobierno puede conceder con arreglo a las disposiciones vigentes en esta materia.

En el primer párrafo se enumeran dos tipos de actividades: los bancos de emisión y las obras públicas (éstas relacionadas específicamente con las carreteras, canales de navegación y ferrocarriles). El segundo párrafo, recoge una formulación de carácter general siempre que se cumplan dos condiciones simultáneamente: el interés público y el privilegio exclusivo, con excepción de las invenciones.

El artículo 4 de la Ley de 1848 regula los supuestos de autorización gubernativa en los siguientes términos: *(p)ara la formación de toda compañía que no se halle comprendida en el artículo 2 de esta Ley, será necesaria la autorización del Gobierno, expedida en forma de Real decreto. Esta autorización solo se concederá a las compañías cuyo objeto sea de utilidad pública. El Gobierno denegará la autorización a*

⁷⁵⁰ Lo cual no significaba que el desarrollo de esos objetos sociales sólo se pudiera realizar mediante compañías por acciones. Es decir, por ejemplo, la construcción y explotación de una línea de ferrocarril se podría acometer por una persona física o una sociedad colectiva o comanditaria.

las compañías que se dirijan a monopolizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad.

Se trata, por tanto, de una fórmula general, sin enumeraciones concretas, complementaria del artículo 2. Es decir, todas las compañías por acciones que se dediquen al resto de objetos sociales deben ser aprobadas por el Gobierno. Pero esta formulación residual recoge dos importantes limitaciones que excluyen muchas actividades empresariales del objeto de las sociedades anónimas y comanditarias por acciones. Éste es un aspecto básico de la regulación del objeto social y de la naturaleza misma de las compañías por acciones de nuestra Ley de 1848.

El Gobierno autorizará exclusivamente las compañías cuya actividad sea, en primer lugar *de utilidad pública*. Esta expresión no es idéntica a la empleada en el artículo 2, que se refiere al objeto social de *interés público* (que *pida algún privilegio exclusivo*). Cabría plantearse si la única diferencia para que la autorización sea parlamentaria o gubernativa estriba en que siendo de utilidad o interés público, la compañía solicite un privilegio de carácter exclusivo. O bien, podría plantearse que *utilidad pública* e *interés público* son conceptos diferentes y, por lo tanto, toda actividad de *utilidad pública* se encontraría dentro del ámbito de la autorización gubernativa y la de *interés público* dentro del ámbito legislativo. En nuestra opinión, lo que ha ocurrido, simplemente, es que el Legislador no utilizó la misma palabra (*utilidad/interés*), quizá incurriendo en una falta de imprecisión. Sin duda son términos muy cercanos o similares, aunque no idénticos. Pero el motivo fundamental es que durante los debates parlamentarios los Diputados y Senadores utilizaban ambas palabras indistintamente.

Quizá el aspecto más relevante del artículo 4 de la Ley de 1848 es su inciso final: *(e)l Gobierno denegará la autorización a las compañías que se dirijan a monopolizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad*. El acuerdo era unánime: las compañías por acciones no podían dedicarse a actividades que no fueran de interés público. Como se comentó en un epígrafe anterior, el CCom 1829 no recogió esta prohibición y, de hecho, existían compañías anónimas dedicadas a actividades sin interés público⁷⁵¹. Pero el régimen del CCom 1829 era una excepción respecto a lo que establecían las legislaciones societarias de nuestro entorno: preveían que las compañías anónimas, al beneficiarse de la limitación de responsabilidad, debían desarrollar su actividad exclusivamente para el interés general. Ya se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones que, en nuestra opinión, esta decisión ralentizó el desarrollo industrial español. El único país que en las fechas de nuestra Ley de 1848 admitió que las compañías por acciones se dedicaran al desarrollo de cualquier actividad comercial fue Reino Unido con *JSCA 1844*, si bien la limitación de la responsabilidad se introdujo posteriormente. Las compañías dedicadas a la ejecución de obras públicas se sometieron a otra Ley diferente: las *CCCA 1845*⁷⁵².

La prohibición de que el objeto social se dedicara a *las subsistencias o artículos de primera necesidad* es objeto de extensos comentarios a lo largo de los debates parlamentarios. Aunque más adelante se expone con detalle, las propuestas de algunos

⁷⁵¹ Más adelante se cita la intervención del Ministro de CIOP Sr. Bravo Murillo (DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 267) en la que expone que en aquella época había en Madrid algunas sociedades dedicadas a este tipo de actividades. En concreto cita la explotación de subsistencias coloniales, carbón y demás combustibles, alimentos y bebidas y subsistencias y reemplazos militares.

⁷⁵² HALSBURY (1910): *The laws of England* ..., pág. 674.

Diputados y Senadores reflejaban un espíritu enormemente restrictivo, manifestando la preocupación por los artesanos y comerciantes que no podrían resistir ante grandes competidores y, también, la inquietud por los ciudadanos que verían subir los precios de los productos de primera necesidad. Los miembros de las CCD y CS trataron de contrapesar esas propuestas rechazando redacciones muy restrictivas.

En relación a este extremo, el artículo 19 de la Ley de 1848 establecía el régimen para la adaptación de las compañías por acciones existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley de 1848. Dado que, como se ha citado anteriormente, existían algunas –pocas– compañías anónimas dedicadas al comercio de artículos de primera necesidad, se planteó que, aunque cumplieran todos los requisitos para su adaptación al nuevo régimen, si no sustituían su objeto social, no podrían recibir la autorización del Gobierno. De esta forma, se aprobó la inclusión del inciso final del artículo 19, comentado más arriba⁷⁵³.

2. Necesaria determinación del objeto social

El artículo 276 CCom 1829 establecía que las compañías anónimas se debían designar por su objeto social y no por su razón social ni nombre de los socios. Otros artículos hacían referencia a la necesidad de un objeto social determinado (artículos 265.3, 293, 294). Fueron los T. de c. (artículo 293) los que, en su facultad de autorización de estas compañías, determinaron caso por caso la validez del objeto social.

En nuestra Ley de 1848 la formulación del principio de determinación del objeto social se encuentra en el artículo 5, que establece que *(t)oda compañía por acciones, se constituirá precisamente para objetos determinados*. No queda duda de que, en continuidad con lo dispuesto en el CCom 1829, no se admiten estas compañías con un objeto social genérico o incluso sin objeto social (como podía ocurrir con los otros tipos societarios: colectivas o comanditarias).

El cambio fundamental de regulación respecto al CCom 1829 es retirar de los T. de c. la competencia sobre las compañías anónimas para transferirlo a las Cortes o al Gobierno. Éste, además, dispondrá de amplias facultades para la supervisión y control de la adecuación de la actividad de la compañía con su objeto social. Dichas facultades se detallan en el texto del Reglamento de 1848.

3. Proporcionalidad entre el objeto social y el capital social. Breve referencia a la infracapitalización

Este principio constituye una novedad legal. El CCom 1829 no lo recoge expresamente. Se trata de una consecuencia lógica de los rasgos caracterizadores de la limitación de responsabilidad. En los otros tipos societarios los socios respondían con todo su patrimonio de las deudas sociales, conforme al régimen recogido por el CCom 1829. En cambio, el empresario social con responsabilidad limitada debía justificar una solvencia adecuada a su objeto social.

La relación capital / objeto social se recoge en el artículo 5 de la Ley de 1848 como un principio básico del régimen de las compañías por acciones, aunque no se

⁷⁵³ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, págs. 299 y 300

precisa con exactitud, como se observa de la lectura de dicho artículo: *(t)oda compañía por acciones se constituirá precisamente (...) con un capital proporcionado al fin de su establecimiento*. Como ocurría con el principio de la determinación del objeto social, serán las Cortes o el Gobierno quienes determinen en los casos concretos si en la constitución de una compañía anónima o comanditaria por acciones el capital es *proporcional* al objeto social y, posteriormente, el Gobierno tendrá amplias facultades de vigilancia para el cumplimiento de la proporción aprobada controlando los desembolsos de dividendos pasivos, ampliaciones o reducciones de capital, etc. En este sentido, dijo el entonces Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz, en la sesión de Congreso de los Diputados de 18 de abril de 1847:

*El capital social es necesario ver si es arreglado, si es proporcionado al objeto a que le aplica la sociedad.*⁷⁵⁴

El principio de proporcionalidad entre capital y objeto social, en una primera aproximación, suponía una garantía para el buen fin de la empresa y para los acreedores⁷⁵⁵. El punto más controvertido podría ser la discrecionalidad de quien lo autorizaba y vigilaba dado que la Ley de 1848 no recogió un principio objetivo que pudiera aplicarse. En el Reglamento de 1848, como se verá más adelante, se establece un procedimiento objetivo al que puede acudir voluntariamente el Jefe Político encargado de la valoración.

Este principio con el paso del tiempo se ha modificado sustancialmente y en la actualidad nuestra LSC recoge el principio del capital social mínimo –que es muy diferente al principio de proporcionalidad- para las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada (artículo 4⁷⁵⁶). También, en el vigente texto legal se hace referencia a la proporción entre capital social y patrimonio neto de la sociedad a efectos de la necesaria disolución de la sociedad (artículo 363.1.e)), pero el otro elemento de la relación no es el objeto social sino el patrimonio neto.

Quedan vestigios de este principio en la denominada infracapitalización de las sociedades. Aunque no podamos detenernos en esta interesante cuestión, dado que entronca con el citado artículo 5 de nuestra Ley de 1848, se pueden dejar apuntadas unas nociones básicas. El profesor PAZ-ARES lo define como *cualquier proporción conmensurable –o, si se prefiere, inequívocamente constatable- entre la magnitud del capital de responsabilidad fijado estatutariamente (artículos 11.3, f LSA y 7,6 LSRL) y el nivel de riesgo de la empresa que en cada caso se programe para llevar a efecto el objeto social*⁷⁵⁷. Por su parte, LLEBOT MAJO, describe la infracapacitación en los siguientes términos: *fenómeno consistente en que los socios fijan un capital social que*

⁷⁵⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1442.

⁷⁵⁵ Aunque, como ya se comenta en otros apartados, nuestra Ley de 1848 trata de proteger fundamentalmente a los socios de las compañías por acciones. Las menciones a los acreedores son mínimas, pues se entendía que ya estaban protegidos por la legislación común.

⁷⁵⁶ Sobre el contenido del artículo 4 LSC se puede consultar ROJO, A. Y BELTRÁN, E. (2011): “Artículo 4. Capital social mínimo” en ROJO, A. Y BELTRÁN, E. (dirs.) *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo I, Cizur Menor, págs. 205 – 206, en el que se expone las finalidades de dicho artículo, entre las que no se encuentra la proporcionalidad entre el capital social y el objeto social.

⁷⁵⁷ PAZ-ARES, C. (1983): “Sobre la infracapitalización de las sociedades” en *Anuario de Derecho Civil*, pág. 1598. Este autor, posteriormente, modificará sus *puntos de vista iniciales*, como refleja en el trabajo (1994): “La infracapitalización. Una aproximación contractual” en RdS, (Número extraordinario: *La reforma del Derecho de Sociedades de Responsabilidad Limitada*), págs. 253 y ss.

*dotará a la sociedad con un patrimonio manifiestamente insuficiente para el desarrollo del objeto social*⁷⁵⁸.

La Doctrina diferencia la infracapitalización material y la infracapitalización nominal. Siguiendo a GUASCH MARTORELL⁷⁵⁹, la primera aparece en los supuestos en que la sociedad no dispone de los recursos propios adecuados para cubrir satisfactoriamente las necesidades financieras que requiere la actividad que desarrolla o que pretende desarrollar, sin que tampoco, de existir, deban estimarse como suficientes los recursos patrimoniales aportados por los socios, tales como préstamos u operaciones de análogo significado económico. La infracapitalización nominal se da cuando las necesidades de financiación de una sociedad que cuenta con unos recursos propios inadecuados para realizar su objeto social, son cubiertas por los socios mediante aportaciones realizadas en concepto de capital crédito.

Como se puede comprobar, los conceptos utilizados corresponden a categorías más evolucionadas y complejas, pero, sin duda, se relacionan con la sencilla formulación del principio de proporcionalidad del capital / objeto social del artículo 5 de la Ley de 1848.

4. Prohibición de actuación fuera del ámbito del objeto social

Este principio también constituye una novedad legal, como el caso comentado en el epígrafe anterior. Una de las características básicas de la compañía por acciones era que el capital quedaba afecto al objeto social y, como consecuencia, éste debía estar especificado. La compañía no podía dedicarse a otras actividades, pues supondría un abuso del privilegio de la limitación de la responsabilidad.

La prohibición de actuación fuera del ámbito del objeto social o doctrina *ultra vires* se recoge en varios preceptos de la Ley de 1848 (artículos 2, 4, 5 y 16). Concretamente, en el artículo 16, se establece que *(l)os que contraten a nombre de compañías que no se hallen establecidas legalmente, serán solidariamente responsables de todos los perjuicios que por la nulidad de los contratos se irroguen a los interesados, e incurrirán además en una multa que no excederá de 100,000 reales. En igual responsabilidad incurrirán los que a nombre de una compañía aun legalmente constituida se extiendan a otras negociaciones que las de su objeto o empresa, según esté determinado en sus estatutos y reglamentos.*

El establecimiento de esta sanción refleja la importancia que le dio el Legislador a las conductas transgresoras de la obligación de actuación dentro del ámbito del objeto social. Prueba de ello es que la Ley de 1848 sólo recoge en tres ocasiones la mención de una multa y su cuantificación. En primer lugar, el artículo 15 en relación a la emisión ilícita de billetes, pagarés, abonarés, o documentos al portador, sancionada con una multa de hasta 50.000 reales. En segundo lugar, el primer inciso del citado artículo 16 en caso de sociedades que aún no se han constituido. Y, en tercer lugar, el segundo inciso del mismo artículo en referencia a la actuación fuera del objeto social.

⁷⁵⁸ LLEBOT MAJO, J. O. (1999): “La geometría del capital” en *RDM*, núm. 231, pág. 77, en un epígrafe titulado “El pseudoproblema de la infracapitalización”.

⁷⁵⁹ GUASCH MARTORELL, R. (1999): “La doctrina de la infracapitalización: aproximación conceptual a la infracapitalización de las sociedades” en *RDM*, núm. 234, págs. 1506 y ss.

Los sujetos infractores del artículo 16 de la Ley de 1848 no son exclusivamente los administradores. Dice el tenor literal: *los que contraten a nombre de compañías...* Por lo tanto, incluye tanto a los representantes orgánicos como a los representantes voluntarios o apoderados.

Esta Doctrina ha sido objeto de importantes modificaciones con posterioridad a la Ley de 1848. Como comenta SÁNCHEZ CALERO, desde la perspectiva de la representación de los administradores de las sociedades de capital, *del conjunto del artículo 129 [de la LSA, actual artículo 234 LSC] –y de la propia Directiva 69/151/CEE- se deduce que el objeto social ha perdido en gran medida la función que venía desarrollando, ya que al quedar vinculada la sociedad por los actos de los administradores, aun cuando no estén comprendidos en el objeto social, excepto en el caso de que la sociedad pruebe que los terceros han obrado de mala fe y con culpa grave, no puede seguir manteniéndose que el objeto social constituye el límite externo del poder de representación, cuando tal límite ha sido sobrepasado*⁷⁶⁰.

Cuestión diferente es la responsabilidad que pueda exigirles la sociedad y los socios por actuaciones que sobrepasen el límite interno del poder de representación.

D) EL REGLAMENTO DE 1848

El Reglamento de 1848 se refiere al objeto social en seis de sus cuarenta y cuatro artículos (los números 1, 4, 13, 14, 20 y 31). Algunos se limitan a repetir lo establecido por la Ley de 1848 o el CCom 1829 y, otros, desarrollan aspectos particulares del régimen general.

El artículo 1, establece como un elemento del contenido mínimo de *las escrituras de fundación de las compañías mercantiles por acciones*, que figure la *denominación o razón comercial que ha de guardar en conformidad con el objeto de su fundación* (número 4). Este apartado recoge el espíritu del artículo 276 CCom 1829 en el que se establecía que las compañías anónimas se designaban *no por los nombres de sus socios, sino por el objeto u objetos para que se hubieren formado*.

El artículo 4 del Reglamento de 1848 autoriza la aportación al objeto social de una invención o procedimiento secreto que contribuya al objeto social de la compañía, así como de *servicios científicos y artísticos* por parte de los socios industriales.

Los aspectos del objeto social regulados en el Reglamento de 1848 más relevantes son los que se comentan en los siguientes epígrafes.

1. Utilidad pública. Exclusión de los artículos de primera necesidad

La cuestión de la utilidad pública del objeto social se regula en los artículos 13 y 14 del Reglamento de 1848. En el primero, se establece que el Jefe Político debe examinar *(s)i el objeto de la sociedad es lícito y de utilidad pública, conforme al artículo 4 de la precitada ley, sin transcendencia a monopolizar subsistencias u otros*

⁷⁶⁰ SÁNCHEZ CALERO, F. (2005): *Los administradores en las sociedades de capital*, Cizur Menor, pág. 232.

artículos de primera necesidad. Por tanto, el objeto del examen del Jefe Político es doble: la licitud del objeto social y su utilidad pública. Se trata de una repetición del contenido del artículo 4 de la Ley de 1848, con el añadido de la licitud del objeto.

La calificación del objeto social en relación a la utilidad pública del mismo era de importancia capital. El Reglamento de 1848 no detalla el contenido del concepto de utilidad pública. El encargado de determinar caso por caso si el objeto propuesto en los estatutos y reglamentos sociales cumplía los requisitos de la utilidad pública era, conforme al citado artículo 13, el Jefe Político. En orden a contrapesar el amplio margen de discrecionalidad que tenía el Jefe Político, el artículo 14 del Reglamento de 1848 exigía que *(p)ara calificar si el objeto de la compañía es de utilidad pública, el Jefe político pedirá informe a la Diputación y Consejo Provincial, al tribunal de Comercio en cuyo distrito estuviere domiciliada la compañía, a la Sociedad económica de Amigos de País, si la hubiere y al Ayuntamiento.*

La decisión sobre la utilidad pública de un concreto objeto social era compleja. La intención del Legislador es comprensible pero, sin duda alguna, supuso un serio entorpecimiento y retraso en la tramitación de las autorizaciones de las compañías mercantiles y, posiblemente, nuevas situaciones en las que intervendrían los intereses creados, bien afines, bien contrarios, a la nueva iniciativa empresarial.

Volviendo al comentario del artículo 13 del Reglamento de 1848 en el que se relacionan las facultades del Jefe Político sobre las compañías por acciones, interesa resaltar el último inciso del apartado 2 en el que se hace referencia a *monopolizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad.* El origen de esta expresión se encuentra en el artículo 4 de la Ley de 1848, que termina diciendo: *El Gobierno denegará la autorización a las compañías que se dirijan a monopolizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad.*

Se trata de una aclaración al contenido del concepto de utilidad pública. En los debates parlamentarios se refleja la preocupación de muchos intervinientes sobre esta concreta cuestión y se propone, en reiteradas ocasiones, modificar la redacción para incluir con mayor detalle los artículos de primera necesidad.

Aunque esas propuestas al final no fueron aprobadas, la redacción final, en coherencia con los nuevos postulados de la Ley de 1848, supone una ruptura completa con el CCom 1829 que no excluía los objetos sociales de las compañías anónimas relacionados con actividades de interés particular.

2. Proporcionalidad entre el objeto social y el capital social

En línea de continuidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley de 1848, el artículo 13 de su Reglamento, otorga al Jefe Político la facultad de examinar *si el capital prefijado en los estatutos sociales puede graduarse suficiente para el objeto de la empresa; si está convenientemente asegurada su recaudación; si las épocas establecidas para los dividendos pasivos de las acciones están combinadas de manera que la caja social se halle suficientemente provista para cubrir sus obligaciones* (apartado 3).

El Reglamento de 1848 no hacía referencia a la *proporcionalidad* (artículo 5 de la Ley de 1848) sino a la *graduación*. En ambos conceptos, el problema consistía en la falta de referencia a unos parámetros objetivos que indicaran el límite de capital por debajo del cual no se podía constituir la compañía. El Jefe Político recibía el expediente con las correspondientes escrituras en el que figuraba *el capital prefijado* (artículo 13.3 del Reglamento de 1848), es decir, propuesto y pendiente de autorización.

El Jefe Político, podía decidir con plena autonomía la aprobación o rechazo de la cifra de capital propuesta así como las fechas de desembolso de los dividendos pasivos. También tenía la facultad potestativa que le confería el artículo 14 del Reglamento de 1848 de solicitar *informe a la Diputación y Consejo Provincial, al tribunal de Comercio en cuyo distrito estuviere domiciliada la compañía, a la Sociedad económica de Amigos de País, si la hubiere y al Ayuntamiento* sobre el concreto aspecto de la graduación del capital en relación al objeto social.

3. Vigilancia gubernativa

El Gobierno, a través de sus Jefes Políticos, desarrollaba la función de control y vigilancia del objeto social de las compañías por acciones. Esta actuación se realizaba en dos fases diferentes. La primera, se llevaba a cabo durante el periodo previo a la autorización de la compañía. La segunda, se iniciaba una vez autorizada la sociedad, a lo largo de la duración de la misma.

En la primera fase, el Jefe Político debía examinar si el objeto social era lícito y de utilidad pública, sin monopolizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad (artículo 13.2) y si el capital estaba suficientemente *graduado* para el objeto social (artículo 13.3). Para ello, debía solicitar (obligatoriamente en el caso del artículo 13.2 y facultativamente en el caso del artículo 13.3) un informe a la Diputación y Consejo Provincial, al T. de c. del domicilio social, a la SEAP si la hubiera y al Ayuntamiento (artículo 14).

Además, en esta primera fase, para las compañías cuya autorización fuera competencia del Gobierno, éste, una vez comprobado que dichas sociedades *reúnen en su objeto las calidades prescritas en la ley*, si detectara que *no están conformes a sus disposiciones los estatutos acordados por los fundadores, propondrá al Consejo las modificaciones que en ellos deban hacerse. Conformándose el Gobierno con esta consulta, se comunicarán aquéllas a los interesados, para que en su vista, si insistieren en la formación de la compañía, otorguen nueva escritura reformando los estatutos según se les haya prevenido* (artículo 20).

La segunda fase de la vigilancia gubernativa empezaba después de otorgarse la autorización de la compañía. El Gobierno, mediante los Jefes Políticos, controlaba las operaciones de la compañía para evitar, entre otras cuestiones, que se realizaran fuera del objeto social. ¿Cómo llevaba a cabo el Gobierno esta labor de vigilancia? El Reglamento de 1848, en sus competencias de desarrollo del régimen previsto en la Ley de 1848, fundamentalmente en su artículo 17, estableció un sistema por el que los Jefe Políticos podían comunicar al Gobierno, sin limitación alguna y en cualquier momento, toda *novedad* que pudiera *alterar o perturbar* la observancia de los estatutos (artículos 30, 37 y 38 del Reglamento de 1848).

4. Prohibición de actuación fuera del ámbito del objeto social

El Reglamento de 1848 desarrolla en dos artículos el principio instaurado por la Ley de 1848 en relación a la prohibición de actuación fuera del ámbito del objeto social. El artículo 1.3 del Reglamento de 1848 establece como contenido necesario de la escritura de fundación de las compañías por acciones, la expresión del *objeto o ramo de industria o de comercio a que exclusivamente ha de dedicarse la compañía*.

Por su parte, el artículo 31 regula el supuesto concreto de la utilización de los excedentes de tesorería. En el primer inciso del primer párrafo, se establece que *(l)os fondos de las compañías mercantiles por acciones no podrán distraerse de la caja social para negociaciones extrañas al objeto de su creación*. Se trata de una reiteración del principio general.

Ahora bien, en el último inciso de este primer párrafo, se introduce una excepción relevante, que plantea un problema de legalidad del texto, pues en realidad no desarrolla lo previsto en la norma de rango superior, la Ley de 1848, sino que limita su contenido e, incluso, se podría pensar que es contrario a su espíritu, sobre todo si se leen los debates parlamentarios, a los que se aludirá más adelante. Este es tenor literal del precepto: *(s)e permitirá únicamente aplicar los fondos sobrantes que existan en caja para descuentos o préstamos cuyo plazo no podrá exceder de noventa días, dándose precisamente en garantía papel de la deuda consolidada*. Y el segundo párrafo del artículo 31 concluye haciendo directamente responsables a los administradores *de cualquiera cantidad de que dispusieran contraviniendo a estas disposiciones*.

Como se acaba de apuntar, esta excepción se puede considerar contraria al espíritu de la Ley de 1848, concretamente al párrafo segundo de su artículo 16, pudiendo dar lugar a abusos o fraudes. En los debates del Senado, un Senador puso de manifiesto el caso de una compañía que, una vez constituida, no se dedicó a su objeto social sino a realizar préstamos a terceros a un interés del 5 ó 6%⁷⁶¹.

II. DEBATES PARLAMENTARIOS

Durante los debates parlamentarios del PL 1848, el objeto social fue tema frecuente de discusión. Al tratarse de una materia básica para la nueva regulación de las sociedades por acciones, se puso de manifiesto el interés existente sobre él y, también, las diferentes posiciones o corrientes entre los Diputados y Senadores. Son muchas las intervenciones que se recogen en los DsC. Se han estructurado en torno a tres temas: la utilidad pública, la necesaria determinación del objeto social y, finalmente, el caso concreto de las obras públicas. Aunque no se recojan todas las referencias al objeto social, en los siguientes epígrafes se trata lo que, a nuestro parecer, es más relevante.

⁷⁶¹ Intervención del Marqués de Vallgornera en la que citó el caso del Banco Agrícola que, en vez de ayudar financieramente a recoger la cosecha de los labradores, se dedicó a realizar préstamos al 5 ó 6 % de interés anual. DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 300.

A) UTILIDAD PÚBLICA. EXCLUSIÓN DE LAS “OPERACIONES ORDINARIAS DE COMERCIO”

La necesaria nota de utilidad pública del objeto social y la consiguiente exclusión de las operaciones ordinarias de comercio, es la cuestión más tratada en relación al objeto social durante los debates parlamentarios del PL 1848. Dada su extensión, conviene dividir este epígrafe en dos apartados: uno que resume lo tratado en el Congreso de los Diputados y, otro, en el Senado.

1. Intervenciones en el Congreso de los Diputados

En la primera sesión del Congreso de los Diputados en la que se debate el Dictamen de la CCD (de fecha 16 de abril de 1847), la primera intervención es del Diputado Sr. Gonzalo Morón⁷⁶². Comienza aclarando que no va a impugnar la totalidad del texto, al contrario, felicita a la CCD por el trabajo que ha realizado, pero cuestiona la redacción concreta del artículo 4 del PL 1848. Establece el citado artículo que *(e)l Gobierno denegará la autorización a las compañías que se dirijan a monopolizar las subsistencias u otros artículos de primera necesidad*.

En su opinión esta prohibición debe extenderse a las “operaciones ordinarias” del comercio. Aunque no quedan claros los límites precisos de este concepto, parece que propone circunscribir la autorización de las sociedades anónimas a las compañías que persigan un interés público. Su intención es excluir del privilegio de la limitación de responsabilidad a las sociedades que no tengan una utilidad pública. Dice el Sr. Gonzalo Morón:

*La comisión, en el magnífico preámbulo que sirve de base a este proyecto, ha sentado, en mi opinión, la verdadera teoría sobre sociedades anónimas, cual es que no puedan de ninguna manera fundarse sociedades anónimas, sino para aquellos casos o para aquellas empresas en las cuales no basten los medios ordinarios, a las cuales no alcancen los esfuerzos de los individuos ni de las compañías colectivas ordinarias, y las cuales, por fin, lleven consigo un objeto de interés público; y yo, señores, no he podido menos de extrañar que la comisión cuando, como digo, ha sentado el verdadero principio que debe regir la legislación sobre sociedades anónimas, no haya llevado este principio cardinal a sus consecuencias lógicas e indeclinables. Si la comisión ha tenido por conveniente expresar terminantemente que el Gobierno negará la autorización a todas aquellas compañías que tengan por objeto monopolizar los artículos de primera necesidad, no veo yo cómo habiéndose sentado el principio de que las sociedades anónimas son una excepción de las sociedades generales de comercio, no se haya dicho expresamente que el Gobierno, no puede ni debe autorizar de ninguna manera, no sólo las sociedades anónimas que tengan por objeto monopolizar el comercio de los artículos de primera necesidad, sino también las que se dediquen a las operaciones ordinarias del comercio de compra y venta de estos artículos.*⁷⁶³

⁷⁶² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 78, págs. 1419 y ss.

⁷⁶³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1419.

La respuesta a esta propuesta la dio el Sr. Bertrán de Lis en nombre de la CCD. En primer lugar, se congratula que una persona *tan entendida en estas materias*⁷⁶⁴ como el Sr. Gonzalo Morón⁷⁶⁵, no haya impugnado la totalidad del PL 1848. A continuación expone la posición de la CCD sobre la cuestión planteada.

El punto de partida es el principio general de libertad para ejercer la actividad empresarial *teniendo entendido que es responsable [el comerciante] con el capital que tenga y que pueda tener, del resultado de las operaciones a que se comprometa*⁷⁶⁶. Este principio general presenta una excepción cuando se limita la responsabilidad exclusivamente al capital que se aporta, que es lo que ocurre en el caso de la sociedad anónima:

*La compañía por acciones que se llama anónima tiene el privilegio de establecer una excepción de este derecho y se reduce a que la sociedad se limita al importe de las acciones que representan el capital social. Este es un privilegio de excepción y claro es que no se puede conceder sin objeto verdadero y manifiesto de utilidad pública. Partiendo de este principio, la comisión ha dicho, primero, que hay ciertas compañías a las cuales es necesario conceder este privilegio con ciertas precauciones y con más extensión que en otros casos, y para esto es menester que esta compañía se forme por una ley, porque ha creído que no podía haber garantía mayor para esta clase de compañías que la de la publicidad de la discusión en los debates parlamentarios. Después de esto ha dicho: toda compañía que no tenga por objeto uno de los motivos de que habla el artículo 2, se podrá establecer por medio de autorización Real. La comisión ha trasladado al Gobierno esta facultad que antes tenía el Tribunal de Comercio; pero al tiempo de trasladarla al Gobierno, le ha puesto la limitación que lleva consigo la índole de la compañía anónima, y que es la única posible en esta clase de materias, y ha dicho: cuando se trate de establecer compañías anónimas que no tengan necesidad de intervención legislativa a juicio del Gobierno, téngase entendido que han de tener por objeto un motivo de interés público general, y así lo dice la comisión en el art 4, concebido en estos términos: “Para la formación de toda compañía que no se halle comprendida en el artículo 2 de esta Ley, será necesaria la autorización del Gobierno, expedida en forma de Real decreto. Esta autorización sólo se concederá a las compañías cuyo objeto sea de utilidad pública. El Gobierno denegará la autorización a las compañías que se dirijan a monopolizar las subsistencias u otros artículos de primera necesidad”. Por manera que, cuando se trate de una compañía que tenga por objeto monopolizar artículos ordinarios de comercio, desaparece el privilegio de compañía anónima, se sale de la esfera de esta clase de compañías y el Gobierno está en la obligación de denegar la autorización*⁷⁶⁷.

⁷⁶⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1420.

⁷⁶⁵ Que fue dir. de la *Revista de Madrid*, según indica en la siguiente intervención durante esta sesión, el entonces Ministro de Gracia y Justicia (Sr. Vaamonde), refiriéndose a unos artículos sobre el CCom 1829, que publicó en dicha revista (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1422).

⁷⁶⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1420.

⁷⁶⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, págs. 1420 y 1421.

Como se puede apreciar por los razonamientos expuestos anteriormente, la CCD coincide con el planteamiento del Sr. Gonzalo Morón, pero entiende que no es necesario clarificar que las sociedades anónimas no pueden dedicarse al comercio ordinario, puesto que las menciones del artículo 2.2 y del párrafo segundo del artículo 4, limitan el ámbito del objeto a las actividades de interés público. En consecuencia, no comparte la propuesta de modificación de la redacción del artículo 4 del PL 1848.

El Sr. Gonzalo Morón entiende que la redacción del citado artículo 4 es demasiado vaga y puede dar pie a autorizaciones de sociedades anónimas que se dediquen al comercio ordinario, perjudicando a otros comerciantes que no podrán comprar la misma mercancía a precios tan baratos como lo podrán hacer esas sociedades anónimas. Por este motivo concluye esta parte de su intervención solicitando que:

(s)i el Gobierno de Su Majestad nos dice expresamente que no se podrá de ninguna manera conceder autorización a las sociedades anónimas que tengan por objeto dedicarse a las operaciones ordinarias de comercio, estaré completamente de acuerdo.

El Sr. Ministro de Gracia y Justicia (Sr. Vaamonde) en una larga respuesta expone lo siguiente:

(a)sí es que el principio común y general (...) es que toda sociedad anónima sea admitida siempre que no sea contra las leyes o contra las buenas costumbres o en perjuicio de las condiciones naturales del comercio, y contra estas condiciones sería una sociedad anónima que se pusiera a traficar en las cosas en que trafica todo el mundo; porque desde el momento en que se desnivelan los precios de las cosas de una manera violenta y artificial, el Gobierno tiene un deber de atajar este germen de vicios que causan perjuicios inmensos a los comerciantes de buena fe y que colocan a la clase media, que es la que generalmente se dedica a este comercio, en manos de personas arrojadas, cosa en que no puede convenir jamás Gobierno alguno.

Está consentido, me dice el Sr. Morón. Es verdad; pero ¿cómo el Gobierno había de contener esos abusos, si no tenía medios para evitarlos, si no estaba armado con una ley que le diera facultad para impedirlos? ¿Cómo había de mezclarse en esto el Gobierno, si una sociedad anónima estaba autorizada desde el momento en que presentado sus estatutos al Tribunal de comercio, le daba éste la sanción y era necesario respetar ya a esta sociedad, por más que el Gobierno conociera que encerraba en su seno el germen del monopolio? Así que, lo que faltaba era que el Gobierno tuviera que dar la sanción a esas sociedades; y una vez sentado este principio, yo puedo asegurar al Sr. Morón que está en el caso de tranquilizarse completamente, porque ningún Gobierno, oyendo como tiene que oír al Consejo Real, puede autorizar ninguna asociación que tenga por objeto negociar los artículos comunes que están al cuidado y que constituyen la profesión de la clase de nuestros comerciantes y mercaderes⁷⁶⁸.

⁷⁶⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, págs. 1422 y 1423.

De la lectura de los párrafos anteriores se puede concluir que todos los intervinientes (el Sr. Gonzalo Morón como proponente, el Sr. Bertrán de Lis como portavoz de la CCD y el Ministro de Gracia y Justicia) coinciden en que ninguna sociedad anónima puede dedicarse al comercio ordinario, dado que si no, desaparecerían la mayor parte de comerciantes y mercaderes, que no podrían competir con estas grandes sociedades. En lo que, en cambio, no están de acuerdo es en modificar la redacción del PL 1848. El propio Sr. Gonzalo Morón resume la situación:

(e)l Señor Ministro de Gracia y Justicia (...) ha dicho, y esto es conveniente que quede consignado, que no pueden formarse sociedades anónimas, que no se autorizarán por el Gobierno cuando tengan por objeto dedicarse a las operaciones ordinarias del comercio de venta y de compra de artículos. Yo siento mucho que tanto la comisión como el Gobierno hayan tenido dificultad en hacer esa adición, en añadir esa expresión en el artículo correspondiente, cuando la comisión no ha tenido la menor dificultad en establecer que el Gobierno negará su autorización a toda sociedad que pueda tender a monopolizar los artículos de precisa subsistencia. Yo no sé señores, por qué la comisión ha establecido esa condición, por qué esa especie de excepción, puesto que, en sentir de la comisión y del Gobierno, no era necesaria. Pero una vez que se ha establecido, quede consignado que la comisión y el Gobierno consideran que no puede autorizarse sociedad alguna que tenga por objeto las operaciones comunes y ordinarias del comercio⁷⁶⁹.

Y continúa el Diputado D. Fermín Gonzalo Morón, haciendo la siguiente afirmación:

(e)s necesario no confundir las sociedades anónimas cuyo objeto es público y de utilidad general, con las sociedades anónimas que no llevan este objeto, para evitar los fraudes, los agios y los abusos que tal vez pueden ser el principal norte de estas últimas.⁷⁷⁰

Esta cita pone de manifiesto la coexistencia de dos tipos de sociedades anónimas en aquel momento: las que tenían un objeto social de interés público y las que lo tenían de interés particular. Las primeras, eran las herederas de las compañías por acciones precodificadas, titulares de privilegios empresariales y de limitación de responsabilidad a cambio de una concesión. Las segundas, eran las que permitió el CCom 1829 al no exigir necesariamente el objeto social de utilidad pública (excepto para las que gozaran de algún privilegio real, que debían ser aprobadas por la Corona⁷⁷¹). Aunque el Sr. Gonzalo Morón las relaciona con los fraudes, agios y abusos, que sin duda pudieron existir, aquellas compañías anónimas dedicadas al comercio ordinario podían haber contribuido muy positivamente al desarrollo industrial y comercial de la España del siglo XIX.

En la segunda sesión en la que se discutió el PL 1848 en el Congreso de los Diputados, el día 21 de abril de 1847, D. Tomás Illa i Balaguer, Diputado por la

⁷⁶⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1424.

⁷⁷⁰ Ídem.

⁷⁷¹ Artículo 294 CCom 1829.

Provincia de Barcelona (Distrito de San Pedro)⁷⁷² impugnó la redacción del artículo 4 del PL 1848 presentado por la CCD. Su objetivo era variar la redacción del texto para clarificar que las sociedades autorizadas por el Gobierno o el Parlamento en ningún caso se pudieran dedicar al “comercio común u ordinario”, ya que afectaría negativamente a los pequeños y medianos comerciantes. En su opinión, la versión propuesta tampoco era suficientemente clara.

Las sociedades anónimas, que, como se ha dicho muy bien, son una excepción del derecho común y mercantil, son un privilegio; y es menester no otorgar ese privilegio sino a aquellas sociedades formadas para casos y objetos particulares, de los cuales haya de resultar un gran beneficio al público; y el artículo, del modo con que está redactado, podría dar margen a que se autorizase la creación de nuevas sociedades anónimas para asuntos en que perjudicasen, ya sea al comercio común u ordinario, ya sea a la industria, destruyendo a la medianía, que es la causa eficiente y efectiva de la riqueza y poder de las naciones.

(...) yo trato de que se evite la nueva instalación de sociedades anónimas que tiendan a monopolizar el comercio y la industria

(...) ¿será útil, será beneficioso para el país, que así como se había tratado de impedir el establecimiento de las sociedades anónimas para monopolizar los artículos de primera necesidad, se permita ahora el establecimiento de nuevas sociedades que se ocupen en el comercio y la industria común?

(...) por estas consideraciones encuentro yo que al artículo 4 le faltan algunas palabras que terminantemente impidan la interpretación que podría motivar la ruina de muchísimas familias.

(...) el malestar de innumerables familias, el medio que imposibilita en el giro particular o individual el que muchos comerciantes o industriales medianos y pequeños puedan cumplir sus créditos; porque, señores, el que tiene mucho, siempre y necesariamente ha de absorber al que tenga poco.

(...) El Gobierno y las Cortes tienen [la obligación de] proteger al débil contra el fuerte.

Para el citado Diputado, no se trata sólo de prohibir las sociedades que se dediquen al monopolio de productos de primera necesidad, sino también, y sobre todo, las sociedades con el privilegio de la limitación de responsabilidad dedicadas al “comercio e industria común”, que sería la actividad propia de los pequeños y medianos comerciantes, que no podían beneficiarse de la limitación de responsabilidad. Por eso, al final de su intervención, el Sr. Illa dice:

(...) la Comisión haría muy bien en retirar su artículo (...)y añadir al artículo 4, en donde dice: "El Gobierno denegará la autorización a las compañías que se

⁷⁷²http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXD1S.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&NUM1=&DES1=&QUERY=%2856010%29.NDIP.

*dirijan a monopolizar las subsistencias u otros artículos de primera necesidad", las palabras siguientes, u otras equivalentes: "Y cuanto sea del comercio e industria común y ordinaria". (...) Sea en estas o en otras palabras que entienda la Comisión, ha de quedar explícita, es preciso en mi entender que se exprese claramente, la idea de que no se podrá conceder autorización ninguna para establecer nuevas sociedades anónimas que tiendan a monopolizar el comercio y la industria ordinaria y común. Quedando así clara y explícitamente expresado, no sólo se evitarán dudas cuando llegue el caso de solicitarse nuevos permisos para el establecimiento de sociedades anónimas que lleven por objeto dedicarse al comercio o a las industrias comunes, sino que se fomentarán las sociedades colectivas, que son las que dan más garantías a la fe pública, y se calmaran los temores de tantos comerciantes y artesanos que ven amenazada su existencia social, porque se les anonada en su posición particular, en la que tienen un derecho indisputable a ser sostenidos y protegidos por las Cortes y el Gobierno.*⁷⁷³

Uno de los problemas de la argumentación del Diputado Sr. Illa era la ambigüedad del concepto "comercio e industria común". El objetivo o la idea puede estar más o menos clara, pero carece de precisión. Esta consideración, junto a alguna otra, aparece en la contestación de D. Fernando Rodríguez Rivas, Secretario de la CCD:

*El artículo en cuestión [el 4] no se refiere al establecimiento de sociedades que se dirijan a monopolizar los artículos comunes de comercio, sino únicamente a aquellas que tengan por objeto los de primera necesidad. La Comisión, al debatirse ayer la totalidad del proyecto, dio las explicaciones más amplias sobre el particular, y creo que sería inútil comprender aquí una idea tan vaga como eso del comercio general que quiere el señor ILLA, puesto que el juez ha de ser el gobierno.*⁷⁷⁴

Tres breves conclusiones se pueden deducir de estas palabras. La primera, que la ley prohíbe las sociedades que monopolicen los artículos de primera necesidad y en ellos no se incluyen los relativos al "comercio e industria común". La segunda, que el concepto "comercio e industria común", desde un punto de vista jurídico es indeterminado. Y, la tercera, será el Gobierno quien decidirá, caso por caso, si la autorización de una sociedad afecta ilícitamente a quienes se dedican a actividades que pudieran incluirse dentro de ese concepto indeterminado.

Continúa la intervención del Sr. Rodríguez Rivas en los siguientes términos:

*(...) si existen algunas sociedades en tan gran escala que absorban el comercio en pequeño, esto no puede llamarse monopolio. Monopolio, exactamente dicho, es aquello que no puede hacerse más que por uno; pero las sociedades que existan y que no puedan ejercer ningún comercio particular no pueden llamarse monopolizadoras, por más que abarquen una gran escala, a cuya extensión no pueda llegar nunca ningún particular.*⁷⁷⁵

⁷⁷³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, págs. 1461 y 1462.

⁷⁷⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1462.

⁷⁷⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1462.

El Sr. Rodríguez Rivas defendía, por lo tanto, como el resto de los miembros de la CCD una libre competencia entre los comerciantes. El límite era el monopolio de los productos de primera necesidad. Pero fuera de él, entendían que ni el Gobierno ni el Parlamento debía prohibir con carácter absoluto las demás actividades de las sociedades por acciones. De esta manera, critica las argumentaciones del Diputado Sr. Illa en las que decía que los poderes públicos deben proteger a los débiles frente a los fuertes porque la manera de defender los intereses de los ciudadanos no es proteger exclusivamente al pequeño comerciante, dado que eso lleva a una situación ficticia e irreal. Estas intervenciones son un ejemplo más de la continua lucha entre partidarios del libremercado frente a los de proteccionismo, que fue una constante durante todo el siglo XIX. Referencias concretas a esta cuestión se encuentran en el capítulo sobre el triunfo del liberalismo.

La posición de la CCD, se hace pragmática al introducir al Poder Ejecutivo como árbitro de este conflicto de intereses entre grandes y pequeños comerciantes. Dice el Sr. Rodríguez Rivas:

*Si se añade la frase que quiere el señor ILLA, yo le pregunto de si con esto conseguirá el objeto que se propone. Yo creo que no, por las razones que he dicho antes. El gobierno, que será siempre el juez de la cuestión, será el que diga si la sociedad cuya formación se solicita destruye o no el comercio que puede abarcar el particular; si entendemos por abarcar un comercio particular, una pequeña escala, es claro que las sociedades anónimas, que sólo se establecen cuando se trata de un objeto que no puede emprender uno solo, sino muchos, no pueden permitirse. Por consiguiente, es inútil la adición.*⁷⁷⁶

El miembro de la CCD que estaba haciendo uso de la palabra, le preguntó al Diputado Sr. Illa si había quedado satisfecho con la exposición. Esta fue su respuesta:

(...) siento muchísimo que estando de acuerdo la Comisión, el Gobierno y también el humilde Diputado que está hablando al Congreso, no pueda yo convencerme de lo que acaba de decir el muy digno órgano de la Comisión.

(...) Sabe S. S. que se concede un privilegio exclusivo en la industria, pero no al que hace una cosa común que ya están en el uso de hacerla todos, sino al que inventa una industria nueva o la importa del extranjero. Pues bien; ya que las sociedades anónimas son una excepción del derecho común y mercantil y un privilegio exclusivo que se da a determinadas personas que no se sabe quiénes son, pero que será en beneficio público, si esto resulta así, no hay reparo; pero ¿cree S. S. que la causa pública sale beneficiada de que se concentren muchas fuerzas en un centro común, para que aquel centro común vaya a entrar en lucha con una porción de fortunas que no podrán medir sus fuerzas con ese gigante? Esto no lo pueden desconocer ni la Comisión, ni el Gobierno, ni ninguno de los señores Diputados en su ilustración. Por consecuencia, yo no puedo convencerme con lo que ha dicho la Comisión, y no comprendo cómo entendiendo el Gobierno y la Comisión eso mismo, no se puede consignar un principio claro y preciso para evitar esas interpretaciones que se darán; porque si se concede a cualquier compañía que lo solicite un privilegio exclusivo, una

⁷⁷⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1462.

*excepción del derecho común y mercantil, es menester que se diga que sólo se puede dar por causas especiales, especialísimas, por causas de utilidad públicamente reconocidas, y de ninguna manera para todo cuanto tienda a perjudicar ni monopolizar el comercio y la industria ordinaria y común*⁷⁷⁷.

El Sr. Rodríguez Rivas, termina la intervención haciendo una referencia a la utilidad pública, pero no accede a la modificación propuesta:

*Las compañías anónimas que se establezcan por esta Ley han de proponerse un objeto de utilidad pública para que puedan ser aprobadas, y claro es que no hay objeto de utilidad pública en todo aquello que entra en el comercio o industria común. Por consiguiente, no habiendo autorización para esas compañías que se dedican a comerciar en lo que pueden hacer los particulares, entiendo que no puede tener lugar la observación del señor ILLA.*⁷⁷⁸

2. Intervenciones en el Senado

a) Artículos de comer, beber y arder

En la primera sesión del Senado sobre el Dictamen de la CS (el día 22 de diciembre de 1847), el Senador Sr. Armendáriz inició el debate presentando una enmienda a la totalidad del PL 1848 por entender que no quedaba suficientemente claro en el texto que las sociedades por acciones, sociedades privilegiadas, no podían dedicarse bajo ningún concepto a operaciones ordinarias o de comercio común. Reconoce que este principio está pacíficamente aceptado y que el propio texto legal lo recoge:

*(...) no pueden establecerse Sociedades mercantiles para objetos de consumo y artículos de primera necesidad, o como dicen muchas leyes, de comer, beber y arder.*⁷⁷⁹

Estos artículos de primera necesidad nunca pueden formar parte del objeto social de las sociedades privilegiadas (como las sociedades por acciones). Ahora bien, sentado el acuerdo general sobre este punto, ¿cómo se relaciona con lo previsto en el artículo 18 del PL 1848, según el cual toda sociedad por acciones existente en ese momento, debía solicitar la autorización Real para continuar su actividad? Por este motivo dice el Sr. Armendáriz:

Yo pregunto a la Comisión y al Gobierno de S.M.: si hay una Sociedad establecida, sobre la subsistencia que especula en los artículos de comer, beber y arder, y por un respeto supersticioso, si se quiere no dar efecto retroactivo a la ley, ¿permitirá que existan estas Sociedades? Esto es lo que yo pregunto. Yo creo que no puedan subsistir, y que sería un mal gravísimo que subsistiesen.

(...)

⁷⁷⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1462.

⁷⁷⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1462.

⁷⁷⁹ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 264.

*Por consiguiente, señores, una Sociedad anónima es una Sociedad privilegiada; una Sociedad anónima no puede tener por objeto jamás, sin que resulte un grave daño al país, el establecer una sociedad que tenga por objeto comerciar con las subsistencias del país.*⁷⁸⁰

El Senador Armendáriz quizá no tenía muy clara la diferencia entre bienes o productos de consumo ordinario y las “subsistencias”. El primer concepto (producto de consumo ordinario) es más amplio que el segundo (“subsistencias”), pues a este último hay que darle un contenido restringido, referido a los productos de primera necesidad. Interesa llamar la atención sobre este punto, pues en los debates, tanto del Congreso como del Senado, parece que, con frecuencia se cae en esta confusión. Esto tuvo como consecuencia que productos de consumo ordinario que no fueran de primera necesidad (ropa, muebles, materiales de construcción, etc.) quedaron fuera de la posibilidad de ser producidos, importados y distribuidos por sociedades anónimas. Si esto se hubiera podido realizar, es probable que la evolución económica de España durante el s. XIX hubiera sido diferente.

La enmienda del Sr. Armendáriz la concretó en los siguientes términos:

*... adicionando la ley de manera que se dijese que las Sociedades que están establecidas para comerciar y tratar en artículos de primera necesidad, de comer, beber y arder, dejasen de existir en el momento, porque son perjudiciales, perjudicialísimas al bien del país, y no sé cómo se ha de sostener por un principio supersticioso, y mucho más cuando se trata de interés del país, y que el comercio siendo libre, los comerciantes responden con sus intereses, con sus bienes del resultado de sus operaciones.*⁷⁸¹

La respuesta a esta enmienda no la ofreció ninguno de los miembros de la CS, sino el entonces Ministro de CIOP (Sr. Bravo Murillo). Su argumentación se puede resumir así: no tiene sentido una enmienda a la totalidad del texto basada en que se haga más explícita la prohibición de que las sociedades por acciones se dediquen al comercio común u ordinario, pues ya está previsto de una manera clara en el PL 1848.

El Sr. Bravo Murillo, al final de su intervención, cita la propuesta de la anterior CS de la que, el Senador Sr. Armendáriz formaba parte⁷⁸². La propuesta se refería al texto del artículo 19 del Proyecto de Ley en los siguientes términos, según expone Sr. Bravo Murillo:

*La Comisión anterior proponía esa modificación indicada por el Sr. Armendáriz, y que estaba reducida a lo siguiente:
“La autorización Real se otorgará precisamente a las compañías que hubiesen cumplido las condiciones con que fueron aprobadas por los Tribunales de Comercio, y a las comanditarias por acciones que hubieran sido establecidas con arreglo a las disposiciones del Código de comercio.*

⁷⁸⁰ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 265.

⁷⁸¹ Ídem.

⁷⁸² En efecto, el Senador Sr. Armendáriz fue miembro de la CS que elaboró un Dictamen sobre el PL 1848 en la legislatura anterior, pero que no pudo tramitarse, porque por RD de 5 de mayo de 1847 se disolvió el Parlamento. En la nueva legislatura, por razones de urgencia, se decidió asumir el PL 1848, pero se nombró una nueva CS.

*No se concederá, sin embargo, esta autorización a las compañías por acciones, sea cual fuere su naturaleza, si se hallan comprendidas en el último párrafo del artículo 4, o tienen más de una tercera parte en acciones al portador, contra lo que se previene en el artículo 12 de la presente ley.*⁷⁸³

Las dos referencias de este último párrafo son las siguientes. El artículo 4, párrafo último, establecía que *(e)l Gobierno denegará la autorización a las compañías que se dirijan a monopolizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad*. Por su parte, el artículo 12, a los efectos que aquí interesan, disponía que *las acciones en que se divida el capital de la compañía estarán numeradas, y serán nominativas en sus dos terceras partes a lo menos*.

Continúa la intervención del Ministro de CIOP (Sr. Bravo Murillo) en los siguientes términos:

*El Sr. Armendáriz ha manifestado, con mucha razón, que no debía permitirse de ninguna manera a las Sociedades anónimas el que por sus especulaciones pudieran producir el monopolio, y menos en los artículos de subsistencia, en los artículos de primera necesidad; y en este principio estamos conformes. La Comisión actual quería proponer esa modificación, y yo voy a exponer al Senado las consideraciones en que la Comisión misma se fundó para no hacerlo después.*⁷⁸⁴

La CS decidió descartar la modificación porque, después de estudiarlo, llegó a la conclusión de que no era un problema práctico, dado que no había sociedades por acciones en esa situación. Estos son los interesantes datos que ofrece el Ministro de CIOP en su intervención:

Tengo a la vista un estado de las Sociedades anónimas que se han formado en Madrid: de él resulta que hay en esta corte 66 Sociedades⁷⁸⁵, y ocho en diversas capitales del Reino: total 74, por un capital nominal de 5.786 millones de reales. Entre todas estas Sociedades hay las cuatro siguientes, que se rozan con la cuestión indicada por el Sr. Armendáriz: yo no aseguraré que este estado está exacto; creo que lo será; pero por el número conocerá el Senado que no será la regla general, sino que aquí estará el mayor número.

Entre setenta y tantas Sociedades hay las siguientes sobre artículos de consumo o de subsistencia:

⁷⁸³ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 267.

⁷⁸⁴ Ídem.

⁷⁸⁵ Según los minuciosos datos elaborados por MARTÍN ACEÑA, en 1848 había inscritas en el RPGC de Madrid 121 compañías mercantiles por acciones. Lo que no se sabe es cuántas habían desaparecido de hecho, pues según este autor, desde 1830 que se crea el citado Registro, sólo se inscribe una liquidación de sociedad anónima durante el periodo que se está comentando: entre 1830 y 1848. MARTÍN ACEÑA, P. (1993): *La creación de sociedades en Madrid ...*, págs. 11 y ss. Se puede consultar también MADOZ, P. (1850): *Diccionario geográfico – estadístico de España ...*, voz “Madrid” que en las págs. 956 – 960 recoge la relación de compañías por acciones con domicilio en Madrid en las vísperas de la promulgación de la Ley de 1848 y en la pág. 961 aparece otro cuadro con el *estado que manifiesta las sociedades que después de anunciadas no han llegado a constituirse, o que constituidas, han sido disueltas posteriormente, con expresión de su objeto y capital que representaban*.

1ª.- Fomento mutuo, sobre artículos de subsistencias coloniales; capital 45 millones: no está constituida.

2ª.- Sociedad de Fuego; capital 45 millones, para especular sobre carbón y demás combustibles: no ha llegado a especular.

3ª.- Sociedad Mercurio; capital 50 millones de reales, para objetos de comercio de comer y de beber: no se ha constituido.

La Previsora; capital 140 millones, para subsistencia y reemplazos militares: no se ha constituido.

En este cuadro o estado que tengo en la mano, no encuentro otra Sociedad que tenga por objeto el que ha indicado el Sr. Armendáriz, a saber, especular con los artículos de subsistencia; y se ha creído, por tanto, que no hay Sociedad alguna que estuviera en este caso, y si no la hay, parece, con efecto, que no debe el Senado tener en cuenta que con este proyecto de ley se va a atacar el principio del efecto retroactivo; pero si a pesar de todo hubiese alguna Sociedad de que el Gobierno no tenga conocimiento, Sociedad, digo, que especulara sobre artículos de subsistencia, ¿cómo se ocurre a esto? Me parece que el Sr. Armendáriz quedará satisfecho en este punto.

Este proyecto de ley, si llega a sancionarse, si llega a ser ley, ocurre a la necesidad de aquellas Sociedades que no tienen las condiciones que ella exige; y claro es, que semejantes Sociedades, sin llenarlas, no podrán seguir adelante.⁷⁸⁶

Después de estas explicaciones y otras que no se han transcrito, el Senador proponente, el Sr. Armendáriz, concluye retirando la enmienda a la totalidad y diciendo que votará a favor del PL 1848 porque las explicaciones del Sr. Ministro de CIOP han cumplido totalmente sus expectativas⁷⁸⁷.

b) “Subsistencias” o “artículos de primera necesidad”

El concepto “subsistencias” o “artículos de primera necesidad” no tiene unos límites precisos y definidos. En el primer día de los debates sobre el PL 1848 en el Senado (22 de diciembre de 1847), al discutirse la redacción del artículo 4 del PL 1848, el Marqués de Fuentes de Duero propuso se adicionara al final del texto y *de industrias generalizadas o comunes de comercio*. Su objetivo era ampliar la prohibición del apartado tercero no sólo a las subsistencias y artículos de primera necesidad, sino a dos tipos más de productos. En primer lugar los que él denominó *objetos desconocidos o que se desconocen poco*, cuyo contenido no precisó ni concretó y, en segundo lugar, a *las cosas de continuo uso* que,

... no son efectivamente de tanta importancia como las de primera necesidad; sin embargo, son del uso de vestir, de materiales de construcción; ¿y a qué, pues, estas Sociedades con esos objetos cuando estamos llenos de almacenes, de fábricas, y a mayor abundamiento de tiendas particulares? Pues bien; esas

⁷⁸⁶ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 267.

⁷⁸⁷ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 268.

*sociedades que acumulan gruesas sumas para especular en esto, pueden producir la ruina de los especuladores particulares de la misma clase, por no poder rivalizar con ellas.*⁷⁸⁸

El Senador proponente continuó su intervención preguntándose qué ocurriría si no se impedía a las sociedades por acciones comerciar con estos productos *de continuo uso*:

*¿Y en este caso qué sucederá? Que estas grandes Sociedades, ejerciendo la industria que se han propuesto, con grandes medios, serán exclusivas y con gran provecho propio, pero en perjuicio de la masa común de consumidores.*⁷⁸⁹

Las últimas palabras constituyen un claro antecedente del movimiento a favor del derecho de consumidores y usuarios.

La postura del Marqués de Fuentes de Duero era bastante generalizada, pero no todos los Senadores ni los grupos de intereses eran tan extremos. Así, la respuesta de Sáinz de Andino (miembro de la CS) no acepta la enmienda por entender que el texto del PL 1848 ya la refleja y, por tanto, no es necesario modificar el texto del artículo 4.

Comienza Sáinz de Andino tratando de precisar el contenido de la enmienda, que las explicaciones habían difuminado un poco:

*... si yo no he concebido mal la manifestación del Sr. Senador, ésta tiende a que no solo se limite la prohibición de las Sociedades que tengan por objeto especular en artículos de subsistencia, sino también a las que se funden para empresas mercantiles o industriales, que están dentro del artículo de la contratación común y ordinaria, y para las cuales bastan los recursos y medios del comercio individual.*⁷⁹⁰

Después manifiesta que no ve necesaria la modificación del texto puesto que la actual redacción expresa la idea propuesta con bastante claridad y, por tanto, no es necesario un mayor detalle o reiteración de la misma:

*... está probado, hasta la evidencia, que las Sociedades anónimas constituyen un sistema que está fuera de la ley, que repugna a los principios estrictos de la justicia universal y primitiva, y que es un sistema de contratación privilegiada. En los países constitucionales, donde rigen los buenos principios de economía civil, no puede concederse ningún privilegio, sino en compensación del beneficio que de su otorgamiento recibe el Estado; el privilegio es, y no debe ser, sino el precio de una adquisición de utilidad pública. Y quien dice utilidad pública, ¿qué quiere significar sino una empresa que no sea de interés privado?*⁷⁹¹

Pone como ejemplos los talleres de industria fabril, los comerciantes que sirven al público productos para los usos ordinarios de la vida, etc.: todos ellos se dirigen a un

⁷⁸⁸ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 271.

⁷⁸⁹ Ídem.

⁷⁹⁰ Ídem.

⁷⁹¹ Ídem.

interés particular y, por tanto, no pueden conformar el objeto social de una compañía por acciones, que se fundamenta en el privilegio de la limitación de responsabilidad. Así se expresó Sáinz de Andino:

*... no cabe establecer Sociedades anónimas para esta clase de granjerías. Es menester que el interés público sea directo e inmediato: es menester que la Sociedad anónima no se dirija a especulaciones sobre cosas de que están ocupándose otros particulares, o Sociedades colectivas, o comanditarias, que son las vías regulares de la buena contratación, para que pueda autorizarse su formación. Así, pues, para que haya Sociedad anónima es condición indispensable que tenga por objeto una empresa de utilidad pública, directa e inmediata: toda contratación que se dirija al interés individual, y que pueda hacerse por los medios comunes del comercio, no puede ser objeto de sociedad anónima, sino que ha de sujetarse a las reglas comunes de sus contratos. Tal es el principio que se consigna en el proyecto de ley, sin haberlo extendido a designaciones individuales, que lejos de dar mayor claridad y precisión al principio para facilitar su aplicación, podrían ser motivo de dudas y confusión.*⁷⁹²

En apoyo de esta técnica legislativa (no detallar para que quede todo incluido en el concepto de “utilidad pública”), Sáinz de Andino cita la experiencia del Legislador francés que cuando redactó el *Code*, en el Proyecto se incluyeron tres artículos que determinaban los objetos de utilidad pública: bancos de depósito y emisión, seguros, canales de navegación y transportes de agua. En los debates parlamentarios se desechó la designación específica de los objetos de utilidad pública para que se comprendieran todos.

Termina Sáinz de Andino su exposición diciendo que corresponde al Gobierno determinar, caso por caso, si un objeto es de utilidad pública:

*Cuáles sean las empresas que merezcan calificarse de utilidad pública, debe necesariamente dejarse a la prudencia del Gobierno, porque esta calificación depende de una combinación de circunstancias, que no sería posible detallar en la ley. Su espíritu y su texto quedarán cumplidos con tal que en ningún caso entren las Sociedades anónimas en revalidad con el comercio individual, no con el de las Sociedades colectivas y comanditarias que son las vías regulares y legales del tráfico, como antes he dicho.*⁷⁹³

Estas explicaciones y aclaraciones satisfacen al Marqués de Fuentes de Duero, que retira su propuesta.

Por último, en relación a las “subsistencias” y “artículos de primera necesidad”, en la sesión que tuvo lugar el día de Nochebuena de 1847 en el Senado, en la que se debatió el artículo 19 del PL 1848, el Senador Sr. Armendáriz presentó otra enmienda en los siguientes términos:

⁷⁹² Ídem.

⁷⁹³ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, págs. 271 y 272.

El que suscribe tiene la honra de proponer al Senado que en el párrafo 19 del proyecto de ley de Sociedades anónimas, después de las últimas palabras de su actual redacción, se añada el período siguiente:

No se concederá, sin embargo, esta autorización a las compañías por acciones, sea cual fuere su naturaleza, si se hallasen comprendidas en el último párrafo del artículo 4.

*Palacio del Senado 24 de Diciembre de 1847. Agustín Armendáriz.*⁷⁹⁴

Dicho artículo 19 se refería a las sociedades ya constituidas antes de entrar en vigor la Ley de 1848. Estas sociedades, dentro de los plazos previstos en la citada Ley, debían acordar en junta general si continuaban o no con su actividad. En caso afirmativo, debían obtener la Real autorización.

La enmienda se dirige a que el Gobierno no pueda otorgar su autorización a las Sociedades que *se dirijan a monopolizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad* (artículo 4, último párrafo).

El Presidente de la CS actuando de portavoz, aceptó la enmienda⁷⁹⁵. De esta manera, se añadió un párrafo final al artículo 19, que permaneció en la versión final de la Ley de 1848.

c) La función de vigilancia de los T. de c. respecto al objeto social

Sáinz de Andino en una larga intervención en el Senado durante la sesión de 23 de diciembre de 1847, expuso las funciones que el CCom 1829 había asignado a los T. de c. en relación a las sociedades anónimas. Una de ellas se refería a la vigilancia del objeto social, para evitar que las sociedades anónimas pudieran dedicarse a actividades que no fueran de utilidad común:

*Competía a los Tribunales de Comercio asegurarse de (...) que el objeto de la empresa no sólo era lícito y positivo, como el derecho lo prescribe para toda clase de compañías, sino también de utilidad común, bajo cuyo solo concepto pueden existir estas Sociedades privilegiadas: que sus especulaciones no habían de rozarse ni ponerse en competencia con el comercio individual en ningún ramo de la contratación común, pues que sin esta precaución, las Sociedades anónimas constituirían un monopolio necesario y universal en las compras y en las ventas de todos los objetos de su tráfico, restringiéndose a ellas todas las relaciones comerciales, y se convertirían en un cáncer que consumiese y aniquilase el buen comercio legal.*⁷⁹⁶

Y continúa reiterando que la crisis en las sociedades anónimas se produjo por la errónea aplicación de la Ley por los T. de c., pues la normativa vigente era correcta y justa. Y, a los efectos del objeto social expresa lo siguiente:

Que estas compañías hubiesen de tener un objeto efectivo, real y determinado en sus empresas, era una consecuencia necesaria del artículo 244 del propio

⁷⁹⁴ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, págs. 299 y 300.

⁷⁹⁵ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 300.

⁷⁹⁶ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 282.

*Código [de comercio]: que hubieran de fundarse para objetos de utilidad pública y que de manera alguna hubiesen de monopolizar los ramos de la contratación común, era un principio legal y económico que no podía violarse sin desnaturalizar manifiestamente la índole de las Sociedades anónimas; y por último, para no haber permitido que ninguna de ellas se crease para traficar en artículos de subsistencias, ni haber permitido que las que estuviesen fundadas con distinto objeto especularan sobre estos mismos artículos, obraban las disposiciones de la ley 11, título 7 de la Novísima Recopilación, en cuyo artículo 6 se prohíbe terminantemente que los comerciantes puedan formar compañías para las compras y ventas de los géneros de primera necesidad.*⁷⁹⁷

Termina haciendo referencia a la experiencia práctica, pues conocía que se habían

*... aprobado los estatutos de muchas Sociedades para objetos, los unos fantásticos e ilusorios, y los otros de mero interés privado.*⁷⁹⁸

B) PROHIBICIÓN DE ACTUACIÓN FUERA DEL ÁMBITO DEL OBJETO SOCIAL

Se pueden destacar dos intervenciones sobre la prohibición de actuación fuera del objeto social autorizado.

La primera, tuvo lugar en la sesión de 21 de abril de 1847 en el Congreso de los Diputados, en la que se debatió el PL 1848 presentado por la CCD. Al llegar al artículo 16 (que regulaba, entre otras cuestiones, la responsabilidad por la actuación fuera del objeto social de la compañía), el Diputado Sr. Fuentes solicitó aclaración a la CCD sobre la supresión de un párrafo que figuraba en el artículo 9 de la versión presentada por el Gobierno el 26 de febrero de 1847⁷⁹⁹, que decía lo siguiente: *Lo determinado en este artículo no impide que cuando tuvieren fondos sobrantes puedan colocarlos en descuentos o préstamos.* Ésta es la aclaración concreta que solicitó el Diputado Sr. Fuentes:

*Yo creo que habrá sido porque no considere necesario decir que los fondos sobrantes puedan emplearlos las compañías en descuentos y préstamos; pero si lo hubiese suprimido con estudio, no puedo menos de hacerlo presente, porque podría perjudicar a las sociedades que se hallan en el caso de tener sobrantes, y por esto quisiera yo que se aclarase este punto.*⁸⁰⁰

El Diputado Sr. Fuentes tiene el temor de que la CCD no considere oportuno que las sociedades por acciones que dispongan de exceso de tesorería lo puedan rentabilizar. En su opinión, la obligación de mantener en la sociedad el *sobrante* sin poder obtener un rendimiento supone un claro perjuicio.

⁷⁹⁷ Ídem.

⁷⁹⁸ Ídem.

⁷⁹⁹ Véase DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, pág. 654.

⁸⁰⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1467.

Su temor iba bien encaminado, porque la supresión de ese párrafo por parte de la CCD no fue un olvido sino una actuación deliberada para evitar que las sociedades por acciones pudieran salirse de su objeto social. La rentabilización del *sobranante* mediante descuento o préstamo no formaba parte del objeto social autorizado y, por tanto, la sociedad no podía destinar esas cantidades a dicho fin. Aunque no se diga explícitamente, se puede observar entre líneas (como se pondrá de manifestó en una intervención en el Senado que se cita más abajo) la mala experiencia de alguna sociedad que perdió su tesorería por una mala inversión, de tal manera que no pudo llevar a cabo el objeto social para el que se constituyó.

La respuesta de la CCD vino de la mano del Diputado Sr. Ríos Rosas:

Si el artículo que se discute se redactase como dice el Sr. Fuentes, estaría en contradicción con otro anterior, en el cual se previene que las compañías no se establezcan sino para objetos determinados. Esta es la razón por la que no se puede admitir la enmienda que S. S. desea, enmienda que estaba en el artículo del Gobierno, pero que la Comisión no ha creído conveniente conservar. La Comisión ha creído que sería peligroso establecer en la ley que las sociedades pudieran destinar los fondos sobrantes a otros objetos que para los que han sido creadas; la Comisión ha creído que esto debe dejarse al arbitrio del Gobierno, el cual, considerando las condiciones particulares de cada compañía, su objeto y otra porción de circunstancias fugaces y variables, podrá o no autorizar a las compañías a que dispongan de sus fondos distrayéndolos del objeto de su escritura social⁸⁰¹.

Por lo tanto, la postura de la CCD era mantener el principio de que cada sociedad por acciones sólo pudiera dedicarse a su objeto social, y nada más. Por consiguiente, no autorizaba el uso generalizado del exceso de tesorería en préstamos o descuentos. Cuestión distinta era que, al tramitar la autorización de la compañía, se solicitara al Gobierno la facultad de utilizar el *sobranante* para obtener una rentabilidad. El Gobierno, una vez estudiada la propuesta, podía aceptarla o no.

En el Reglamento de 1848 se recoge esta postura, pero de una manera diferente. Su artículo 31 establece que *(s)e permitirá únicamente aplicar los fondos sobrantes que existan en caja para descuentos o préstamos cuyo plazo no podrá exceder de noventa días, dándose precisamente en garantía papel de la deuda consolidada*. Como se puede comprobar, esta redacción no hace referencia al estudio caso por caso de las posibles solicitudes, como insinuaba el Sr. Ríos Rosas, sino que se hizo una exclusión general de la prohibición si los préstamos o descuentos se hacían por un plazo inferior a noventa días y el prestatario aportaba en garantía la deuda consolidada del Estado (emitida por el Gobierno). Como se ha apuntado en un epígrafe anterior, nos parece que esta redacción del artículo 31 del Reglamento es contraria al espíritu de la Ley de 1848 (en concreto, en relación al párrafo segundo de su artículo 16).

Se decía al principio de este epígrafe que, en relación a la prohibición de la actuación fuera del ámbito del objeto social, se conservan dos intervenciones importantes. La primera fue en el Congreso de los Diputados y la segunda, tuvo lugar en el Senado, como se expone a continuación.

⁸⁰¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1467.

En la sesión de Nochebuena del 1847, el Senador Sr. Marqués de Vallgornera, presentó una enmienda al artículo 19 del PL 1848⁸⁰² para suprimir el adverbio *precisamente*. El objetivo era que la labor de vigilancia del Gobierno sobre las compañías constituidas antes de la entrada en vigor de la Ley de 1848, no se limitara a la autorización formal de la adaptación de las escrituras, sino que incluyera también la comprobación del cumplimiento de las mismas y, entre otras cuestiones, que la compañía se dedicara exclusivamente al objeto social autorizado. En este marco, cabe destacar las siguientes palabras:

... todas esas compañías [las que tienen como objeto las subsistencias y los artículos de primera necesidad], casi todas, tienen una cláusula peligrosa, que es la de poder hacer préstamos sobre intereses o fondos públicos; de donde ha venido también a resultar que casi todo el capital de esas mismas Sociedades está empleado para esos objetos, por cuya razón puede asegurarse que en este momento no hay una sola de esas compañías que pueda venir en liquidación; porque, repito, no una tercera, sino la mayor parte del capital que las representa, está prestado para objetos que están muy distantes de ser los que se llaman comunes de la compañía, o para los que se dijo iba a formarse. (...)

*Un ejemplo de esto tenemos en el Banco agrícola, establecido en esta corte con el fin de auxiliar al labrador cierta época del año para que pueda después recoger y beneficiar su cosecha; nada más honesto, nada más útil que esto, y muchos colonos han creído que también debía generalizarse o extenderse a muchas provincias; pero el resultado es que no se ha prestado al labrador, antes, por el contrario, lo han hecho a un cualquiera que haya asegurado un 5 o 6 por 100 de interés anual; de modo que el capital de la Sociedad está en estas manos.*⁸⁰³

La CS aceptó la enmienda y suprimió el adverbio *precisamente*. Poco más tarde, la CMC-S⁸⁰⁴ introdujo el término *todas*, que acabó pasando a la redacción final de dicho artículo 19.

C) EL OBJETO SOCIAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS. REFERENCIAS A FRANCIA Y REINO UNIDO

En el Congreso de los Diputados se produjo una interesante intervención del Diputado Sr. Martínez Almagro sobre las características de las compañías por acciones cuyo objeto social fueran las obras públicas, que se comenta a continuación.

En la sesión de 20 de abril de 1847 (primer día que se debate el PL 1848 artículo por artículo), el citado Diputado se opone al artículo 1 del PL 1848 (e indirectamente a

⁸⁰² Decía así la redacción del artículo 19, según el Dictamen de la CS de 14 de diciembre de 1847: *La autorización Real se otorgará precisamente a las compañías que hubieren cumplido las condiciones con que fueron aprobadas por los tribunales de Comercio, y a las comanditarias por acciones que hubieren sido establecidas con arreglo a las disposiciones del Código de comercio.*

⁸⁰³ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 300.

⁸⁰⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 11 de enero de 1848. Apéndice Segundo al núm. 41, pág. 769.

los dos siguientes artículos, el 2 y el 3). La oposición la realiza en los siguientes términos:

*(...) Me opongo al artículo primero de la Ley sometida a la deliberación del Congreso, porque no quiero tampoco que se introduzcan abusos y malas prácticas legislativas peores que las que se tratan de extirpar. Yo creo que por los artículos primero, segundo y tercero se exige una ley para lo que en mi entender debe ser objeto sólo de un decreto (...) Creo también que se sujeta a ciertas sociedades anónimas a formalidades y trámites innecesarios, y acaso poco convenientes. Creo que en los artículos primero, segundo y tercero se confunde la autorización para constituir la sociedad anónima con la concesión del establecimiento de Bancos, de carreteras, canales, etc., a sociedades anónimas ya constituidas.*⁸⁰⁵

El Sr. Martínez Almagro tratará de diferenciar la autorización de la constitución de la sociedad por acciones, de la adjudicación o concesión de una obra pública en la que los intereses generales se encuentran en juego. Estas son sus palabras:

Yo ruego a la Comisión y al Congreso que tengan muy presente la diferencia que hay, y llamo sobre esto muy particularmente su atención, entre la constitución de la compañía anónima y la concesión del camino de hierro, del trozo de carretera que sea objeto de la asociación, y del cual pueden comprometerse esos grandes intereses sociales. En lo primero sólo se trata de reconocer si se han cumplido las condiciones impuestas en la ley para la formación de esas sociedades, y declarar si es hábil aquella sociedad para el objeto, como ente moral a contratar con el Gobierno acerca de esos intereses sociales; lo único que hay que examinar en autorización es esto. En lo segundo se examina si conviene o no que la sociedad constituida ya como ente moral, que tiene representación pública y legal, si conviene o no que se confíen tales o cuales intereses públicos, si conviene que se le conceda la construcción de un camino de hierro, un trozo de carretera, el establecimiento de un Banco de emisión, etc. etc. Esta segunda cuestión se resuelve por un contrato, exigiendo las garantías que se crean necesarias, independientemente de la existencia como sociedad, a la cual ha debido prestar antes su consentimiento del Gobierno. La cuestión, por consiguiente, de intereses públicos no está enlazada, o no debe estarlo, con la autorización de la sociedad, y yo creo que la Comisión los confunde, porque el artículo tercero dice: "La ley determinará en cada caso las condiciones en virtud de las cuales haya de concederse la autorización de que habla el artículo precedente".

Esta confusión, sobre la cual llamo la atención del Congreso, no debe existir en la ley, porque puede producir graves inconvenientes, como demostraré en su caso. No debe confundirse la concesión de la cosa que se pide con la autorización de la compañía que pretende ocuparse en aquel objeto. (...).

Yo pondré un caso práctico, porque es el mejor modo de conocer estas cosas. Se presenta una sociedad que pretende encargarse de una línea de camino de hierro desde Badajoz a Madrid, y al discutir la concesión de esta línea, envuelta

⁸⁰⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1434.

con la autorización según se propone por la Comisión, la compañía ha llenado todas las prescripciones que exige la ley para su constitución, ha depositado el 25 por 100 que es el máximo, ha llenado las acciones que la ley manda y demás. ¿Cabrán entonces discusión acerca de estos puntos? No, señores; no la habrá ni aun cuando algunos de ellos no estén enteramente cumplidos, porque lo que se discutirá, lo que llamará más la atención, será si se ha de conceder o no a la compañía el camino de hierro, si ha de ser por 70 u 80 años, si las tarifas han de ser de un 15 o un 20 por 100. ¿Y qué resultará de esto? Que mientras que se está en este debate, el camino de hierro se podrá conceder por el Gobierno a otro empresario, a un particular. Se quiere, pues, hacer indirectamente una ley de obras públicas, una ley de caminos de hierro, una ley de Bancos, y ya conocen muy bien los ilustrados individuos de la Comisión que esto no debe hacerse de una manera incidental, sino entrando de lleno en la materia; y tanto más de lleno, cuanto que el Gobierno está en el día autorizado a hacer concesiones de esta clase por la ley vigente de 1840 y por el artículo 294 del Código de comercio.

Según esta Ley, se halla el Gobierno autorizado para adjudicar toda clase de obras públicas, y hasta para imponer arbitrios; y de consiguiente si no se deroga la legislación vigente, por la ley de que ahora nos ocupamos vendrá una sociedad a pedir autorización para formarse y dedicarse a la construcción de una carretera, y mientras el Congreso está discutiendo la autorización, una casa fuerte de comercio o dos comerciantes en sociedad común, que no necesitan esta autorización, se presentarán en la Dirección de caminos y harán la subasta, inutilizando así la gestión de la primera sociedad y la discusión del Congreso.

El Gobierno, repito, está autorizado para esto, y si no se deroga la ley vigente por esta nueva, resultará que las sociedades anónimas, que no pueden tratar sin previa autorización, quedarán sin objeto por la adjudicación que el Gobierno haga a otra sociedad común o a un particular de lo mismo para que aquella se formó.⁸⁰⁶

El Diputado Sr. Martínez Almagro solicitó a los miembros de la CCD que aclararan la situación descrita. En su opinión, para defender los intereses sociales era necesario aprobar una Ley especial sobre las obras públicas, caminos de hierro, Bancos y demás empresas análogas. Se encontraba tan sorprendido con el planteamiento del Dictamen de la CCD, que dijo que España sería el único país en el que ocurriría semejante confusión. Para ello trajo a colación la normativa vigente en aquel momento en Francia y Reino Unido. Empezando por Francia, expuso:

(...) en Francia se divide completamente la autorización de una sociedad para constituirse, de la concesión de una carretera, de un camino de hierro y otras cosas análogas, para las cuales da el Gobierno una subvención como por vía de auxilio y fomento. Y para que no se confundiese una cosa con otra, la ley de 1842 fijó ya las grandes líneas de caminos de hierro que se habrían de construir bajo la obligación del Gobierno en auxiliarlas, en la cual iba embebida, como se sabe, la de pagar la expropiación de los terrenos necesarios, de hacer la explanación y demás operaciones preliminares de esta clase de obras. Después,

⁸⁰⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, págs. 1435 y 1436.

*partiendo del principio de esta Ley, leyes sucesivas que han ido presentándose a medida que han llegado los casos, han fijado las condiciones que en cada uno debían imponerse a los que contratasen la construcción de esas líneas, ya fuesen compañías de cualquier clase, ya particulares. En los caminos de hierro se fijan las tarifas, señalando el máximo y el mínimo a que deben ascender, el depósito, etc., y dejando al Gobierno los pormenores de la subasta pública.*⁸⁰⁷

En relación a Inglaterra estas fueron sus palabras:

Después de varias leyes, en el reinado de la actual soberana Victoria, el año 1844, viendo los grandes abusos que existían, porque las sociedades anónimas presentaban la misma anarquía que en España, se adoptó el principio de que las sociedades anónimas que tuvieran por objeto ocuparse en obras públicas necesitaban de un acta del Parlamento. De igual aprobación necesitaban las sociedades para caminos de hierro, pero con una notable diferencia: las que tenían por objeto obras públicas pueden constituirse provisoriamente, enviando sus estatutos y demás a una oficina ad hoc, que se llama Soint Stock [sic], y acuden después al Parlamento; pero las de caminos de hierro tenían que presentarse desde luego ante una comisión de la Cámara.

*En Francia no es así, pues se obra según la ley que he citado antes; pero en Inglaterra, después del examen de la Comisión de la Cámara que se ocupa de los pormenores de la sociedad y de su objeto, pasa sólo por fórmula a las Cámaras; de modo que la aprobación realmente ha sido de la Comisión en la que todo se ventila en un juicio contradictorio con audiencia de las partes y asistencia de letrados. Yo prescindo en este momento de la diferencia que hay entre la organización social, o más bien política de Inglaterra y la nuestra, sin embargo de que nadie ignora que los Parlamentos ingleses no sólo legislan, sino que en muchos casos administran.*⁸⁰⁸

Respecto a la legislación comparada, el Diputado Sr. Bertrán de Lis, miembro de la CCD, no compartía los argumentos del Sr. Martínez Almagro. En concreto, sobre Reino Unido dijo:

En Inglaterra existen compañías anónimas desde tiempos de Jorge I, y en aquel país, como en el nuestro, empezaron cometiendo grandes abusos, porque allí no tenían más reglas que las del derecho común y las de la práctica del comercio, pues todo el mundo comerciaba individual y colectivamente. Estableciéronse esas compañías, (...) Y era tal y tan escandaloso el abuso cometido sobre este particular, que se formó un Acta y se llamó a esta Acta el Acta de engañifa. (...) Se tomaron disposiciones tan duras, que nada se remedió, porque una de ellas fue que todas las compañías formadas se sujetasen a la nueva Acta, no exceptuándose más que dos. Todas las demás se las obligaba a acomodarse a las nuevas disposiciones; y eran estas tan duras y severas, que no se aplicaron en manera alguna y continuaron las cosas del mismo modo.

No se tomaron después disposiciones hasta tiempo de Jorge IV, en que se estableció el Acta que ha venido rigiendo hasta nuestros días. En ésta se

⁸⁰⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1436.

⁸⁰⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1437.

*determinaba que las compañías anónimas por regla general debían establecerse en el Parlamento, y se dejaba al Gobierno la facultad de establecer otras por medio de una carta o real cédula. Esta Acta no establecía el principio de una manera bastante clara y distinta, sino que decía que por regla general debían establecerse por el Parlamento, dejando a los que quisieran el beneficio de acudir al Gobierno, decidiéndose así por un principio raro y extravagante. Pero con arreglo a esa Acta y a las prácticas del país, toda compañía que exige la facultad de expropiar por causa de utilidad pública tiene que ir al Parlamento, no sólo para obtener el privilegio, sino para qué se examine su organización; y es muy frecuente que a consecuencia de esto se varíe la organización de la compañía. En los caminos de hierro ha sucedido que algunas veces el Parlamento ha determinado que los particulares y las compañías han de tener tal interés en acción, que han de tener acciones permanentes, y otras reglas particulares que entran en la organización de las compañías. Esto es verdad que se hace por un Comité; pero esto no dice nada contra la esencia del pensamiento, sino contra la diversa aplicación práctica de este principio. El resultado es que el Parlamento sólo es el interesado; porque si bien es el Comité el que decide, luego, aunque sea por fórmula, siempre va al Parlamento. De manera que éste es el que le da el carácter legal.*⁸⁰⁹

Y, respecto al ordenamiento jurídico francés, se expresó el Sr. Bertrán de Lis en los siguientes términos:

En Francia es cierto que las compañías anónimas no van para organizarse para las cámaras; pero es menester tener en cuenta una cosa, y es, que la legislación francesa sobre esta materia es la hecha en un tiempo en que no se había desarrollado como ahora el espíritu de asociación, ni tampoco la influencia parlamentaria. (...) Así es que, sin ir más lejos, hace pocos días se ha presentado por el gobierno en la Cámara de los diputados, y posteriormente en la de los Pares, un proyecto para sancionar un contrato que el gobierno había hecho con una compañía anónima para la navegación por vapor desde el Havre hasta Estados Unidos. Es verdad que estaba el contrato hecho y formada la compañía; pero el gobierno presentó ese contrato, lo que basta para conocer que el espíritu y tendencia del poder legislativo en Francia sobre esta materia es aproximarse a la práctica inglesa. ¿Y qué ha hecho la Cámara? La Cámara ha querido examinar la organización de la compañía a quien se concedía el privilegio de establecer esta carrera, y ha llegado a tal punto su escrupulosidad, que la Cámara se ha ocupado que ver si en los individuos de esa compañía había algunos Pares y diputados, porque creyó que no se debía conceder el privilegio si figuraban en ella tales o cuales individuos. ¿Y qué sucede con las compañías de caminos de hierro? Es claro que con arreglo a la ley de 1832 el gobierno está facultado para atender a los gastos de las expropiaciones y demás que son necesarios para la colocación de los carriles y explotación del camino antes que las compañías, y por pública subasta adjudica después a una compañía la explotación del camino de hierro. Pero nótese una cosa, y es, que a estas adjudicaciones acompaña siempre lo que se llama el pliego de condiciones; y si bien en éste no entra la organización de la compañía,

⁸⁰⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1439.

*establece otras a las cuales tienen que arreglarse aquéllas en su organización. De manera que de un modo indirecto interviene el gobierno.*⁸¹⁰

Otro aspecto importante que se puso de manifiesto en el debate del PL 1848 fue la oportunidad o conveniencia de aprobar una Ley de Obras Públicas que completara el PL 1848. Sin duda esta iniciativa afectaba a la regulación del objeto social de dichas compañías.

La propuesta, como ya se ha apuntado más arriba, la realizó el Diputado Sr. Martínez Almagro, quien al final de su intervención formuló a los miembros de la CCD la siguiente pregunta:

*¿La Comisión considera derogada la legislación vigente sobre obras públicas a consecuencia de introducir este artículo [el 1] en la nueva ley? ¿Sí, o no?*⁸¹¹

Recuerda que se encuentra en vigor una Ley de 1840 sobre esta materia y conviene, por parte de la CCD, ser explícitos y aclarar la cuestión, dado que son muy grandes los intereses que están comprometidos. Responde a la pregunta el Sr. Bertrán de Lis, miembro de la CCD en los siguientes términos:

*Dice S. S. [Sr. Martínez Almagro] si la Comisión entiende derogada la ley que existe sobre obras públicas. La comisión la considera derogada en cuanto diga relación con compañías anónimas y esté en contradicción con ésta y no tiene inconveniente en manifestar al señor Martínez Almagro que la Comisión no mira como un mal que se evite la competencia de las sociedades anónimas en esas subastas. Pero de todos modos, quedan derogadas en todo lo que dice relación con las sociedades anónimas.*⁸¹²

Por último, en relación a este tema, el entonces Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz, instado por el propio Diputado Sr. Martínez Almagro, ratifica la postura de la CCD, expresada por las anteriores palabras del Sr. Bertrán de Lis, entendiendo que queda derogada toda la legislación sobre obras públicas en lo que tenga relación con las sociedades anónimas. Concluye su intervención con las siguientes palabras dirigidas al Sr. Martínez Almagro:

*Los temores que el Sr. Almagro manifiesta respecto de las obras pendientes y de intereses creados, creo que están salvados con el artículo 18.*⁸¹³

III. DOCTRINA DE LA ÉPOCA

Los autores del segundo tercio del siglo XIX se refieren al régimen del objeto social de las compañías autorizadas según la Ley de 1848 en términos concisos.

Parten, como no podía ser de otra manera, del concepto general de compañía mercantil del artículo 264 del CCom 1829 en el que no se hacía referencia expresa al

⁸¹⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1439.

⁸¹¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1440.

⁸¹² Ídem.

⁸¹³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1444.

objeto social: *(e)l contrato de compañía, por el cual dos o más personas se unen, poniendo en común sus bienes e industria, o alguna de estas, cosas, con objeto de hacer algún lucro, es aplicable a toda especie de operaciones de comercio bajo las disposiciones generales del derecho común con las modificaciones y restricciones que establecen las leyes del comercio.* En las compañías colectivas y comanditarias el objeto social tiene un régimen acorde con su configuración peculiar, que es diferente al de las anónimas.

La Doctrina de la época se refiere al objeto social como elemento determinante para que la compañía por acciones sea autorizada por el Gobierno o por el Parlamento. Se resume a continuación las menciones de los autores de aquel momento al régimen del objeto social.

ARRAZOLA no desarrolla la voz “compañía anónima” sino “compañía de privilegio” y, aunque no trata la cuestión del objeto social, se refiere frecuentemente a su régimen al comentar los privilegios de los que eran titulares. Este autor es muy crítico con las compañías de privilegio, pero *no porque el privilegio careciese absolutamente de razón y conveniencia*⁸¹⁴, sino por una razón filosófica: las grandes empresas son muy complejas y en ellas es *más difícil el contar con la aptitud, laboriosidad y probidad de todos: la vigilancia y la energía administrativa se hacen difíciles y se atenúan; las ocasiones de abusar se multiplican.* Además, en su opinión, *las exclusivas de comercio son dañosas.*

En su obra figuran interesantes datos sobre las fechas de constitución de compañías anónimas precodificadas, tanto españolas como extranjeras, así como las cifras de capital, número de acciones, volumen de facturación, repartos de dividendos, etc. En términos generales no se encuentran referencias a los objetos sociales ni a la utilidad pública de los mismos, si bien destaca la siguiente excepción: la compañía española denominada *Los Cinco Gremios, compuesta de las de paños, sedas, lienzo, especería, droguería y quincalla, que hace años se halla en la triste situación de no dar repartimiento a sus accionistas, de no poder devolver los capitales, ni satisfacer el rédito de 3 por 100 a los que temporalmente han impuesto en ella sus caudales, fiados en la solidez de su opinión*⁸¹⁵.

GONZÁLEZ HUEBRA incluye en su definición de compañía anónima la mención al objeto social, parafraseando el artículo 265.3 CCom 1829. Dice este autor que *la sociedad anónima es la que se forma creando un fondo por acciones para emplearlo en determinados objetos por mandatarios elegibles y amovibles a voluntad de los socios*⁸¹⁶. Puntualiza que la ventaja de la limitación de la responsabilidad tiene el inconveniente de que las compañías anónimas pueden prestarse *más que las otras a proyectos aventurados y peligrosos, y aún al agio y al fraude, por cuya razón la ley ha establecido que no se formen sino cuando tengan un objeto lícito y de utilidad común, prohibiendo las que se propongan monopolizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad.* También se refiere a las diferentes clases de estas compañías *según el objeto con que se formen y la autorización que necesiten.*

⁸¹⁴ ARRAZOLA, L (1858): *Enciclopedia española de Derecho y Administración* ..., págs. 777 y 778.

⁸¹⁵ ARRAZOLA, L (1858): *Enciclopedia española de Derecho y Administración* ..., pág. 779.

⁸¹⁶ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil* ..., págs. 150 y 151.

Este autor aporta un dato relevante que no se deduce del tenor literal de la Ley de 1848 en relación al objeto social y su duración. Recoge el contenido mínimo necesario de la escritura de fundación de una compañía anónima y en nota a pie expresa que *en estas compañías no basta que tengan un objeto determinado, sino que se requiere además que se fije su duración; exigencia que podrá ocasionar dificultades cuando no se haya conseguido el objeto al finalizar el plazo designado (...). Lo regular es que concluya la sociedad cuando se haya concluido su objeto, porque éste fue el que dio causa a su formación, y no parece justo que se la obligue a cesar, dejando a medio hacer un camino, por ejemplo; pero se ha querido, sin duda, que no quede a su arbitrio finalizarlo cuando le acomode, prolongando su duración por un plazo indefinido; y se exige además que se fije tiempo, concluido el que examinará el Gobierno si ha sido necesaria o voluntaria dilación y concederá nueva autorización, o declarará caducada la concedida, según estime conveniente*⁸¹⁷.

Esta interesante anotación relaciona la necesidad de fijar un objeto social determinado con la duración del mismo y los problemas prácticos que se podían plantear para el caso de un retraso en la ejecución del objeto social. Por lo que dice GONZÁLEZ HUEBRA, la compañía no podía unilateralmente posponer el plazo de duración, sino que debía ser autorizado por el Gobierno.

Cabe destacar dos menciones más que realiza este autor sobre el objeto social. La primera, hace referencia a la denominación de la compañía anónima, que deberá tener necesariamente relación *con el objeto de su fundación*⁸¹⁸. La segunda, en relación a los administradores, recoge que tienen prohibido por la Ley *hacer en nombre de la sociedad negocios extraños al objeto con que se ha formado*⁸¹⁹.

Por su parte, GÓMEZ DE LA SERNA y REUS Y GARCÍA⁸²⁰ no recogen aportaciones sobre el objeto social en sus comentarios al texto del CCom 1829 ni al de la Ley de 1848.

Por último, MARTÍ DE EIXALÁ, en época posterior a la derogación de la Ley de 1848, se limita a mencionar el objeto social como una característica configuradora de la compañía anónima, en relación a la denominación social: *ha de girar bajo una mera denominación, sacada del objeto u objetos de sus especulaciones*⁸²¹. También describe el contenido de la escritura de fundación de la compañía anónima, en la que debía figurar *el objeto o ramo de industria o de comercio a que exclusivamente había de dedicarse*⁸²².

Cabe finalizar este apartado haciendo referencia a una particular discusión doctrinal que afecta indirectamente al objeto social. Se trata de la redacción del párrafo 4 del artículo 1 del Reglamento de 1848, según el cual en la escritura de fundación de una compañía por acciones debe figurar *la denominación o razón comercial que ha de guardar en conformidad con el objeto de su fundación*. Algunos autores entendieron o interpretaron que el Reglamento de 1848 autorizaba que las compañías anónimas

⁸¹⁷ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil* ..., pág. 153.

⁸¹⁸ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil* ..., pág. 156.

⁸¹⁹ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil* ..., pág. 162.

⁸²⁰ GÓMEZ DE LA SERNA, P., Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio* ...

⁸²¹ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil* ..., pág. 263.

⁸²² MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil*..., pág. 271.

tuvieran razón comercial, lo cual estaba prohibido por el artículo 276 CCom 1829⁸²³. La razón comercial era propia de los otros tipos societarios.

A este respecto, comenta GONZÁLEZ HUEBRA en nota a pie de página lo siguiente: *(d)e las palabras en que está concebido el párrafo 4 [del artículo 1 del Reglamento] infieren algunos que está equivocada su redacción, suponiendo que se da a entender, que las sociedades anónimas pueden tener razón social, contra lo prevenido en el artículo 276 del Código. Mas nosotros no participamos de esta opinión, antes creemos por el contrario, que está bien expresado el pensamiento, porque no trata sólo de las anónimas, sino también de las en comandita por acciones, las que indudablemente la tienen, y por lo mismo exige en general que las escrituras de todas estas compañías por acciones, contengan o la denominación o la razón social. Así opina también el señor Vicente y Carabantes*⁸²⁴.

MARTÍ DE EIXALÁ, mantenía la posición contraria a GONZÁLEZ HUEBRA. Estas son sus palabras: *(e)n el citado Real decreto de 17 de febrero [se refiere al Reglamento] se tuvo la inadvertencia de confundir “razón social” con “denominación”. En efecto, en el artículo primero se lee que la escritura de la sociedad por acciones ha de contener “la denominación o razón comercial, que ha de guardar conformidad con el objeto de su fundación”. Decimos inadvertencia, primero, porque un Real decreto no podía derogar la ley (artículo 276 del Código de comercio) que declara que las compañías anónimas no tienen razón social; segundo, porque sin trastornar el sentido de las palabras, a la sociedad anónima no cabe concederle razón social; y a la verdad es imposible un nombre con el objeto de inspirar su garantía por sí solo, tratándose de una clase de sociedades en que no hay responsables solidarios*⁸²⁵.

MARTÍ DE EIXALÁ falleció en Madrid en 1857. Su importante libro de las *Instituciones de Derecho Mercantil de España* continuó publicándose durante bastantes años después, actualizado y comentado por DURÁN Y BAS, Catedrático de Derecho Mercantil y Penal en la Universidad de Barcelona. La cita que se ha reproducido en el párrafo anterior es de la séptima edición (1875) y en ella se recoge una interesante anotación de DURÁN Y BAS en la que critica⁸²⁶ la posición de MARTÍ DE EIXALÁ: *(n)o consideramos justa la crítica que hace el Autor [MARTÍ DE EIXALÁ] del Real decreto de 17 de febrero de 1848: parécenos que le indujo a ella un error que debemos rectificar. La ley de 28 de enero y el Real decreto para su ejecución no fueron dictados exclusivamente para las sociedades anónimas, sino en general para las sociedades mercantiles por acciones, bajo cuya denominación se comprenden no solamente aquellas, sino las comanditarias que tiene dividido en acciones su capital; y como estas han de tener precisamente razón social, así como aquellas denominación, el núm. 4 del artículo 1 del Real decreto abrazaba en su disposición la razón social de unas y la denominación de otras*⁸²⁷.

⁸²³ Decía el artículo 276: *(l)as compañías anónimas no tienen razón social, ni se designa por los nombres de sus socios, sino por el objeto u objetos para que se hubiesen formado.*

⁸²⁴ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil* ..., págs. 156 y 157.

⁸²⁵ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil* ..., pág. 271.

⁸²⁶ En nuestra opinión de manera acertada.

⁸²⁷ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil* ..., pág. 271.

CAPÍTULO IX RÉGIMEN DE LAS ACCIONES

Las acciones constituyen el elemento identificador necesario de las compañías mercantiles para estar sometidas al ámbito de aplicación de la Ley de 1848 y del Reglamento de 1848. Toda sociedad *cuyo capital en todo o en parte se divida en acciones*, se debía constituir conforme a la Ley de 1848 (artículo 1).

La materia, por tanto, es relevante para nuestro estudio. La Ley y el Reglamento de 1848 son los dos primeros textos que establecen, con cierto detalle, el régimen jurídico de las acciones. El CCom 1829 no profundizó en su regulación. Es indicativo de su importancia que a esta materia es a la que se dedican más páginas del DsC durante los debates parlamentarios del PL 1848.

Cabe advertir que, desde un punto de vista sistemático, el tratamiento del régimen de las acciones en los textos normativos se entremezcla y confunde frecuentemente con la regulación de la constitución de la sociedad y del capital social. En el largo y complejo proceso de constitución de una compañía por acciones, la emisión y desembolso de las mismas fue objeto de detallada regulación para evitar abusos y fraudes⁸²⁸. Por este motivo, la estructura del presente capítulo, a diferencia de otros⁸²⁹, se va a centrar, en primer lugar, en una selección de los temas tratados por los textos normativos. En segundo lugar, en los debates parlamentarios sobre el régimen de las acciones, evitando, en la medida de lo posible, intrusiones en otras materias como son, fundamentalmente, la constitución de la compañía y el capital social. Y, por último, se realiza una breve mención al escaso tratamiento de esta materia por la Doctrina de la época.

I. FUENTES NORMATIVAS

A) INTRODUCCIÓN

Tanto el CCom 1829, como la Ley y el Reglamento de 1848 dedican numerosos artículos al régimen jurídico de las acciones. Como se ha comentado anteriormente, esta materia se encuentra mezclada con la regulación del capital social y de la constitución de la compañía. Por este motivo, para centrar el estudio y evitar la dispersión y excesiva extensión, ha parecido oportuno seleccionar determinadas cuestiones que serán objeto de comentario detallado a lo largo de los siguientes epígrafes.

⁸²⁸ Estos engaños habían consistido fundamentalmente en dos simulaciones: comunicar que la suscripción de acciones se había ejecutado satisfactoriamente, cuando en realidad no era así, y la transmisión de acciones en la que el adquirente desconocía la existencia de dividendos pasivos.

⁸²⁹ Como los relativos al régimen de autorización, objeto social, junta general, administradores y, por último, la vigilancia e inspección de la Autoridad pública.

B) DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ACCIONISTA

En este apartado se estudian, por un lado, los derechos del accionista y, por otro, los deberes⁸³⁰. En cuanto a los primeros, es importante destacar que ni el CCom 1829, ni la Ley de 1848, ni el Reglamento de 1848 los recogen sistemáticamente. Se asume o se deduce, por ejemplo, que el socio tiene derecho a asistir y votar en la junta de socios⁸³¹, a recibir la distribución de dividendos⁸³², pero no se determina con detalle el ejercicio de los mismos. El motivo de este silencio normativo es que los estatutos y reglamentos solían regularlos. No se puede olvidar que, tras la entrada en vigor de la Ley de 1848, dichos estatutos eran aprobados y vigilados en cuanto a su cumplimiento por el Gobierno.

Ante este vacío normativo, algún autor de la época recogió una relación de derechos del accionista. Así, GONZÁLEZ HUEBRA⁸³³ incluía los siguientes:

- Asistencia y voto en la Juntas generales.
- Examen del balance y de los documentos que los comprueben, salvo que los estatutos o reglamentos establezcan otra cosa⁸³⁴ (artículo 310 CCom 1829).
- Transferencia a terceros de las acciones, excepto las que deben depositar los administradores como garantía del ejercicio de sus funciones.
- Percepción de los dividendos aprobados (artículo 35 del Reglamento de 1848).
- Recepción del importe de sus acciones cuando se disuelva y se haga la liquidación de la compañía.

Cabe señalar también la insistencia doctrinal en que el socio de la compañía por acciones no tenía derecho a participar en la administración de la misma⁸³⁵, como ocurría con otros tipos societarios.

Por lo que respecta a las obligaciones de los accionistas, los textos normativos se refieren fundamentalmente al desembolso de la acción⁸³⁶.

A continuación se comentan tres aspectos relacionados con los derechos y las obligaciones del accionista.

⁸³⁰ En el capítulo en el que se analiza el Reglamento de 1848 se recogen unos breves comentarios generales sobre los derechos del socio y la obligación de desembolso del capital.

⁸³¹ Artículo 25 del Reglamento de 1848.

⁸³² Artículo 35 del Reglamento de 1848.

⁸³³ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil* ..., págs. 166 y 167.

⁸³⁴ LASO, E. (1849): *Elementos de Derecho Mercantil* ..., pág. 25, puntualiza, siguiendo la redacción del artículo 310 CCom 1829, lo siguiente: *en las sociedades Colectivas todos los socios tiene derecho a enterarse de su estado; en las Anónimas y en Comanditas sólo puede hacerse en los tiempos y forma prescritas por el reglamento.*

⁸³⁵ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil*..., pág. 160 y MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil* ..., pág. 288.

⁸³⁶ Comentado por GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil* ..., pág. 165 y MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil* ..., pág. 288.

1. Igualdad de derechos. Privilegios de los fundadores

El CCom 1829 y la Ley de 1848 no mencionan el principio de igualdad de derechos de los socios de las compañías por acciones. En cambio, el Reglamento de 1848 lo establece, aun cuando pareciera más lógico que, por su importancia, se formulara en la norma de rango legal.

Conforme al párrafo primero del artículo 2 del Reglamento de 1848, *(s)erá condición esencial y común en todas las sociedades mercantiles por acciones, que los socios tendrán iguales derechos y participación en los beneficios de la empresa, distribuyéndose estos proporcionalmente al número de acciones que posea cada socio.* Por lo tanto, ninguna sociedad anónima o comanditaria por acciones podía incumplir este principio. Los estatutos y reglamentos no podían alterar esta relación de igualdad de derechos y de participación en beneficios. En realidad, el principio de igualdad, tal y como se encuentra formulado, debería aplicarse a las acciones, más que a los accionistas, puesto que los derechos y los dividendos se distribuyen *proporcionalmente al número de acciones que posea cada socio.*

En cuanto a los privilegios de los fundadores, el mismo artículo 2 del Reglamento de 1848, en su párrafo segundo consignaba que *(n)o podrá reservarse ningún socio a título de fundador ni por otro alguno, el derecho de propiedad sobre la empresa en todo ni en parte, ni el de otras ventajas personales y privativas, fuera de la remuneración y participación de que hablan los artículos 6º y 7º, ni el de la administración o gerencia irrevocablemente en las compañías anónimas.*

En este tema, el criterio establecido por el Reglamento de 1848 fue la prohibición de cualquier tipo de privilegio o derecho que excepcionara la regla general de la igualdad de derechos. Sólo se admitía el trato desigual de los socios gerentes de las compañías comanditarias por acciones y las remuneraciones que tuviera cualquier administrador que ostentare simultáneamente la condición de accionista.

2. Pactos o acuerdos entre accionistas

DEL VISO recoge el principio de libertad de pactos entre los socios en el contrato de sociedad: *(e)s un principio generalmente reconocido, que los socios puedan poner en el contrato de sociedad cuantas cláusulas quieran, siempre que sean conformes a la moral y a las leyes; y como las convenciones legítimas son las leyes para los contrayentes, resulta que con arreglo a ellas se resolverán las cuestiones sociales, y se determinarán muchas de sus obligaciones*⁸³⁷.

Ahora bien, los pactos privados entre socios podían afectar a los derechos y obligaciones recogidos en los reglamentos y estatutos de la sociedad, así como a lo previsto por la Ley y el Reglamento de 1848.

Con anterioridad a esta situación, el CCom 1829 reguló los pactos entre socios de cualquier compañía mercantil (colectiva, comanditaria y anónima). El régimen era muy estricto. No se admitían acuerdos parasociales o extraestatutarios: *(l)os socios no pueden hacer pactos algunos reservados, sino que todos han de constar en la escritura social* (artículo 287 CCom 1829). La cuestión subyacente, por consiguiente, no era tanto

⁸³⁷ VISO, S. DEL (1864): *Lecciones elementales de historia* ..., pág. 243.

el contenido de esos acuerdos entre socios, sino la *reserva* o secreto. GÓMEZ DE LA SERNA y REUS Y GARCÍA⁸³⁸ apuntan que *sin esta prohibición podría con pactos secretos quedar anulada la escritura de sociedad*.

Quizá pudiera pensarse que lo dispuesto en el artículo 287 CCom 1829 se refería principalmente a las compañías colectivas y comanditarias, dada la estrecha relación entre el patrimonio social y el de los socios. Pues bien, aunque la Ley de 1848 no recoge el contenido del citado artículo 287 CCom 1829, sí lo hace el Reglamento de 1848 en su artículo 8: *(c)on arreglo a lo prescrito en el artículo 287 del Código de comercio, se tendrá por nulo todo pacto que establecieren los fundadores de las compañías o acordaren los accionistas, sin que conste en la escritura de fundación o en los Reglamentos que han de someterse a la aprobación del Gobierno*.

Lejos, por tanto, de flexibilizar el régimen de los acuerdos extraestatutarios de las compañías por acciones, el Reglamento de 1848 declara categóricamente la nulidad de dichos acuerdos. Nulidad que afectaba tanto a terceros como a quienes eran parte del contrato de accionistas. Además, se detalla el ámbito subjetivo de la prohibición: los fundadores y los accionistas y se hace referencia no sólo a la escritura de fundación sino también a los reglamentos⁸³⁹.

3. Desembolso de los dividendos pasivos

La obligación fundamental del socio se centraba en el desembolso de la acción. Como expone GONZÁLEZ HUEBRA⁸⁴⁰, *(l)as obligaciones de los socios anónimos son muy limitadas, pues nadie se compromete más que a poner en fondo el importe de las acciones que suscribe y, cumpliendo ésta no puede exigírsele más*.

Cabe diferenciar dos periodos diferentes en el cumplimiento de esta obligación. El primero se refiere a la etapa previa a la constitución de la compañía, que abarcaba el largo itinerario desde la presentación de la solicitud, pasando por el examen del Jefe Político, las consultas a los organismos pertinentes y, finalmente, la autorización Real o gubernativa. Como establecía el artículo 12 de la Ley de 1848, *(h)asta que se haya declarado constituida la compañía no se podrá emitir ningún título de acción*. En este primer periodo se regulan todos los requisitos necesarios para obtener la autorización de la compañía, entre los que se encontraba las cartas de pedido de acciones y el desembolso al que se comprometían los accionistas.

El segundo periodo en relación al desembolso, se iniciaba una vez constituida la compañía y, por tanto, las acciones se encontraban ya emitidas y suscritas (artículo 12 de la Ley de 1848). A esta fase se dedicará el presente epígrafe en el que se analizarán las disposiciones del CCom 1829 y de la Ley y del Reglamento de 1848.

El Código de Sáinz de Andino dedica varios artículos a regular el desembolso de los dividendos pasivos. Se pueden diferenciar dos grupos. El primero se refiere a los tres tipos de compañías mercantiles y, desde esta perspectiva conviene interpretarlo. Se trata del artículo 300, que establecía que *(n)o cumpliendo algún socio con poner en la*

⁸³⁸ GÓMEZ DE LA SERNA, P., Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio ...*, pág. 104.

⁸³⁹ Debe entenderse incluido en el término “Reglamento” a los estatutos sociales. La diferenciación terminológica se haría más tarde.

⁸⁴⁰ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil ...*, pág. 165.

masa común en el plazo convenido la porción de capital a que se hubiere empeñado en el contrato de sociedad, tiene la compañía opción entre proceder ejecutivamente contra sus bienes para hacer efectiva la porción de capital que haya dejado de entregar, o rescindir el contrato en cuanto al socio omiso, reteniendo los intereses que tenga en la masa social en la forma que se establece en el artículo 327⁸⁴¹. El artículo 32 del Reglamento de 1848, como se verá más adelante, cita expresamente la aplicación del artículo 300 del CCom 1829 en relación al accionista moroso.

LASO⁸⁴², al recoger las obligaciones de los socios de las compañías mercantiles en general, cita esta obligación de desembolso del capital social parafraseando el artículo 300 del CCom 1829 en los siguientes términos: *(t)odos los socios están obligados a entregar el haber prometido, verificándolo en la época estipulada. Para su cobro puede procederse ejecutivamente, rescindir el contrato para con el omiso, o retener lo que hubiese entregado sin darle parte en las utilidades.* Y luego añade dos detalles interesantes sobre la aportación de un crédito al capital y el desembolso moroso: *(e)l que entrega un crédito, no se cuenta hasta su cobro; el retardo en la entrega de un capital obliga al abono del interés del tiempo retardado.*

El segundo grupo de artículos se refiere concretamente a las compañías anónimas. Con carácter previo al estudio de los dividendos pasivos, cabe recordar que el CCom 1829 diferencia dos maneras de documentar las acciones. En primer lugar, lo que denomina *cédulas* o *cédulas de crédito reconocido* (artículo 280⁸⁴³). Y, en segundo lugar, las *acciones inscritas* (artículo 282⁸⁴⁴).

Respecto a las primeras, sólo se pueden emitir por la cantidad efectivamente desembolsada según lo que establece el artículo 281: *(e)stas cédulas no podrán emitirse por valores prometidos, sino por los que se hayan hecho efectivos en la caja social antes de su emisión.* En caso de incumplir este requisito, continúa el mismo artículo, *(l)os consignatarios de las cédulas que se expidan, sin que conste de los libros de la compañía la entrega del valor que representan, responden de su importe a los fondos de la compañía y a todos los interesados en ella.*

En cuanto a las segundas, el CCom 1829 establecía las consecuencias de la transmisión de *acciones inscritas* con dividendos pasivos en el artículo 283: *(l)os cedentes de las acciones inscritas, en las compañías anónimas que no hayan*

⁸⁴¹ Establecía el artículo 327 que *(e)l efecto de la rescisión parcial de la compañía es la ineficacia del contrato con respecto al socio culpable, que se considerará excluido de ella, exigiéndole la parte de pérdida que pueda corresponderle, si la hubiere habido; y quedando autorizada la sociedad a retener, sin darle participación en las ganancias ni indemnización alguna, los intereses que puedan tocar a aquél en la masa social, hasta que estén evacuadas y liquidadas todas las operaciones que se hallen pendientes al tiempo de la rescisión.*

Además tendrán lugar en cada caso particular las disposiciones penales prescritas en sus respectivos lugares.

⁸⁴² LASO, E. (1849): *Elementos de Derecho Mercantil ...*, pág. 24.

⁸⁴³ Artículo 280: *(l)as acciones de los socios en las compañías anónimas pueden representarse para la circulación en el comercio por cédulas de crédito reconocido, revestidas de las formalidades que los reglamentos establezcan, y subdividirse en porciones de un valor igual*

⁸⁴⁴ Artículo 282: *(c)uando no se emitan las cédulas de crédito indicadas en el artículo 280 para representar las acciones de las compañías anónimas, se establecerá la propiedad de ellas por su inscripción en los libros de la compañía.*

completado la entrega total del importe de cada acción, quedan garantes del pago que deberán hacer los cesionarios, cuando la administración tenga derecho a exigirlo.

Este era el marco configurado por el CCom 1829 en el que no se hace mención de plazos ni de límites de los dividendos pasivos. La regulación se centraba, básicamente, en el régimen del accionista moroso, diferenciando el supuesto de las *cédulas*, en el que el responsable es el consignatario, del caso de las *acciones inscritas* en las que es el cedente.

En cuanto a la Ley de 1848, las menciones a los dividendos pasivos son muy escasas. El texto guardaba silencio respecto a las compañías autorizadas por el Parlamento, dado que la ley correspondiente regularía los detalles sobre esta cuestión: porcentaje en la constitución, modos, fechas y cuantías de desembolsos, etc. En el caso de las compañías autorizadas por RD, conforme al artículo 9 de la Ley de 1848, el Gobierno debía determinar⁸⁴⁵ *la parte del capital que la compañía haya de hacer efectiva antes de obtener el Real decreto de autorización*. Y fijaba el límite máximo de desembolso del capital: *(e)l Gobierno no podrá por razón de esta parte exigir en ningún caso más de un 25 por ciento*. En cuanto a límites temporales, la Ley de 1848, igual que el CCom 1829, no establece nada al respecto⁸⁴⁶.

Por su parte, el Reglamento de 1848 regula con más detalle el régimen jurídico de los dividendos pasivos: la escritura de fundación de las compañías por acciones *debe contener necesariamente: (...) 8. (l)a forma y plazos en que han de hacer efectivo los socios el importe de sus acciones*⁸⁴⁷.

Continúa la reglamentación de esta materia al especificar las facultades de vigilancia del Jefe Político. Así, el artículo 13.3 del Reglamento de 1848 establece que esta autoridad debe examinar *si está convenientemente asegurada la recaudación del capital; si las épocas establecidas para los dividendos pasivos de las acciones están combinadas de manera que la caja social se halle suficientemente provista para cubrir sus obligaciones*. Se establece, por tanto, la obligación del Jefe Político de analizar si los plazos y cantidades de desembolsos de los dividendos pasivos son razonables en relación a la ejecución del objeto social.

⁸⁴⁵ Aunque la redacción utiliza el verbo *determinar* debe entenderse en el sentido de *aprobar*, pues en la solicitud, los fundadores de la compañía realizaban una propuesta en relación a los periodos y cantidades de desembolso de los dividendos pasivos.

⁸⁴⁶ Se recoge como ejemplo un anuncio de desembolso de dividendos pasivos de la compañía “Sociedad castellana del fomento de la seda”, publicado en la GdM de 14 de mayo de 1848, núm. 4991, recién promulgada la Ley y el Reglamento de 1848, que decía así:

SOCIEDAD CASTELLANA DE FOMENTO DE LA SEDA

En la junta general de accionistas que tuvo lugar el día 18 de marzo último se acordó que se exigiese inmediatamente el segundo 50 por 100 a los accionistas que aún lo hubiesen satisfecho, dándoles 15 días de término para hacer el pago, y que, transcurrido el cual sin verificarlo, se entendieran caducados sus derechos y acciones.

Todo lo que se pone en noticia de los Sres. accionistas para su inteligencia, y a fin de que se sirvan presentarse en casa del tesorero de esta sociedad D. Manuel de Anduaga, que vive calle del Príncipe, núm. 11, cuarto principal, a satisfacer la parte que por sus respectivas acciones les corresponda; pues en otro caso y pasado dicho término caducarán sus acciones con arreglo al referido acuerdo.

Madrid, 8 de Mayo de 1848 = El secretario, Antonio Guerrero y Céspedes.

⁸⁴⁷ Artículo 1.8 del Reglamento de 1848.

Otro aspecto que trata el Reglamento de 1848 son las aportaciones no dinerarias, si bien no diferenciaba entre su desembolso inicial en el momento de la fundación de la compañía, del desembolso como dividendo pasivo. La regulación se centra, sobre todo, en la problemática de la valoración⁸⁴⁸.

Respecto a la transmisión de acciones parcialmente desembolsadas, el artículo 33, párrafo segundo del Reglamento de 1848 prevé la mención obligatoria en el documento de transferencia de la existencia de los dividendos pasivos: *(c)uando no estuviere cubierto el valor íntegro de la acción, se hará expresión formal en el acto de transferencia de quedar el cedente subsidiariamente responsable del pago que deberá hacer el cesionario de las cantidades que falten para cubrir el importe de la acciones según se prescribe en el artículo 283 del Código de comercio.*

Por último, el Reglamento de 1848, dedica el artículo 32 a regular el régimen del accionista en mora: *(n)ingún accionista podrá excusarse de satisfacer puntualmente los dividendos pasivos que acordare la administración de la compañía en las épocas marcadas en los estatutos. En defecto de hacerlo, podrá optar la misma administración conforme a lo dispuesto en el artículo 300 del Código de comercio⁸⁴⁹, entre proceder ejecutivamente contra los bienes del socio omiso para hacer efectiva la cantidad de que fuere deudor, o proceder a la venta de sus acciones al curso corriente en la plaza, por medio de la Junta sindical de los agentes, de cambio o la de corredores donde no hubiere colegio de agentes.* Es interesante comprobar la similitud de este artículo con el régimen vigente sobre la reintegración de la sociedad⁸⁵⁰.

Ninguno de los tres textos legales (CCom 1829, Ley y Reglamento de 1848) trata de los efectos de la mora del accionista en relación al ejercicio del derecho de asistencia y voto en juntas generales ni de los derechos económicos del dividendo y la cuota de liquidación. Este vacío normativo permitía que los Reglamentos y Estatutos fijaran el contenido de esta materia.

C) DOCUMENTACIÓN DE LA ACCIÓN

El régimen del CCom 1829 que regula las formalidades de la documentación de la acción es sencillo y breve: sólo tres artículos se refieren a él. La Ley y el Reglamento de 1848 lo modifican sustancialmente, como consecuencia de los abusos y fraudes cometidos en los años previos a la aprobación de la Ley de 1848. Ésta y el Reglamento

⁸⁴⁸ Así lo hace con carácter general para los bienes muebles e inmuebles (artículo 3), los privilegios de invención (artículo 4) y, para el caso particular de bienes inmuebles (artículo 24).

⁸⁴⁹ Citado al inicio de este epígrafe.

⁸⁵⁰ Artículo 84 de la vigente LSC:

1. Cuando el accionista se halle en mora, la sociedad podrá, según los casos y atendida la naturaleza de la aportación no efectuada, reclamar el cumplimiento de la obligación de desembolso, con abono del interés legal y de los daños y perjuicios causados por la morosidad o enajenar las acciones por cuenta y riesgo del socio moroso.

2. Cuando haya de procederse a la venta de las acciones, la enajenación se verificará por medio de un miembro del mercado secundario oficial en el que estuvieran admitidas a negociación, o por medio de fedatario público en otro caso, y llevará consigo, si procede, la sustitución del título originario por un duplicado.

Si la venta no pudiese efectuarse, la acción será amortizada, con la consiguiente reducción del capital, quedando en beneficio de la sociedad las cantidades ya desembolsadas.

de 1848 establecen dos “fases” claramente diferenciadas. La primera, se inicia en el momento del otorgamiento de la escritura pública de fundación y termina con la autorización de la compañía. La segunda, da comienzo en el acto de autorización y termina cuando se retiren las acciones de la circulación, bien por disolución y liquidación, bien por amortización. En la “primera fase”, se contemplan dos supuestos diferentes de la documentación de las acciones: el de los otorgantes de la escritura fundacional y el de los suscriptores de *cartas de pedido de acciones*. En la “segunda fase”, el elemento esencial es el libro registro. Veamos con detalle esta cuestión.

1. CCom 1829

El Código de Sáinz de Andino establecía dos sistemas para la documentación de las acciones: las representadas por *cédulas de crédito reconocido* o, alternativamente, por *inscripción en los libros de la compañía*.

Respecto a las primeras, el artículo 280 establecía que *(l)as acciones de los socios en las compañías anónimas pueden representarse para la circulación en el comercio por cédulas de crédito reconocido, revestidas de las formalidades que los reglamentos establezcan, y subdividirse en porciones de un valor igual*. La finalidad de esta documentación era, por tanto, permitir la transmisibilidad o *circulación* de los títulos. Aquí se encuentran las características básicas del título-valor, puesto que se incide en su facilidad para la transmisión a terceros y en la incorporación de unos derechos (el *crédito reconocido*).

También preveía el citado artículo que la proporción sobre el capital social debía tener *un valor igual* y, en consecuencia, todas las acciones tenían el mismo valor nominal. A parte de este requisito, las formalidades de la documentación de las acciones no estaban reguladas en el Código 1829 sino en los reglamentos de cada compañía anónima. El texto legal dejó al libre convenio de las partes la determinación de los requisitos formales en cuanto a la documentación de la acción.

El CCom 1829 estableció una limitación muy relevante para este tipo de acciones (*cédulas de crédito*): no podían emitirse si existían dividendos pasivos. Así lo determina el artículo 281: *(e)stas cédulas no podrán emitirse por valores prometidos, sino por los que se hayan hecho efectivos en la caja social antes de su emisión*. El Legislador quiso asegurar que el transmitente de aquellas cédulas no adeudaba nada a la compañía y, por tanto, ésta no podía exigir el desembolso de cantidad alguna al adquirente, que podría desconocer la existencia de los dividendos pasivos. Por este motivo, concluye el artículo 281 en los siguientes términos: *(l)os consignatarios de las cédulas que se expidan, sin que conste de los libros de la compañía la entrega del valor que representan, responden de su importe a los fondos de la compañía y a todos los interesados en ella*. El transmitente transgresor respondía frente a la compañía y frente a cualquiera que tuviera interés en ella (los otros socios a título personal, administradores, acreedores, etc.).

El segundo sistema para documentar las acciones es el de la *inscripción en los libros de la compañía*. Se contempla como alternativa a las cédulas. *Cuando no se emitan las cédulas de crédito indicadas en el artículo 280 para representar las acciones de las compañías anónimas, se establecerá la propiedad de ellas por su inscripción en los libros de la compañía* (artículo 282, primer párrafo). En este caso, no se contempla

la transmisibilidad o *circulación* de las acciones, sino la acreditación de la propiedad. La participación en el capital se referencia al asiento de inscripción en el libro de socios. Han desaparecido las notas configuradoras de los títulos valores. Para obtener la inscripción, había que acreditar la titularidad mediante cualquier negocio jurídico válido.

En este sentido, el CCom 1829 establece la diferenciación de los efectos internos de la transferencia de acciones entre transmitente y adquirente, de los efectos externos frente a la compañía. Es posible que una transmisión de acciones fuera válida *inter partes* pero no para la compañía, figurando, por tanto, como accionista el transmitente que enajenó su participación. El requisito que se exigía era la firma del cedente o de su apoderado: *(l)a cesión de las acciones inscritas (...) se hará por declaración, que se entenderá a continuación de la inscripción, firmándola el cedente o su apoderado, y sin este requisito será ineficaz la cesión en cuanto a la compañía* (artículo 282, párrafo segundo). A este respecto, comentan GÓMEZ DE LA SERNA y REUS Y GARCÍA⁸⁵¹: *la cesión separa de la compañía al cedente, ingresando en su lugar el cesionario.*

La diferencia entre acciones representadas por *cédulas de crédito reconocido* o por *inscripción en los libros de la compañía* ofrecía otra consecuencia importante en relación al embargo de la cuota de liquidación. Con carácter general para todas las compañías mercantiles, el artículo 296 CCom 1829 establecía que *(l)os acreedores particulares de un socio no pueden extraer de la masa social por virtud de sus créditos los fondos que en ella tenga su deudor, y sólo les será permitido embargar la parte de intereses que puedan corresponder a éste en la liquidación de la sociedad, para percibirla en el tiempo en que el deudor podría hacerlo.* Con respecto a las sociedades por acciones, el artículo 298 CCom 1829 preveía que *sólo puede tener lugar el embargo de que se habla en el artículo 296 cuando la acción del deudor conste solamente por inscripción, y no se le haya emitido cédula de crédito que represente el interés en la sociedad.* Por lo tanto, una vez la acción emitida como *cédula de crédito*, el acreedor no podía embargar el derecho sobre la cuota de liquidación del accionista. En este mismo sentido se manifiesta LASO⁸⁵².

Como se decía líneas atrás, este doble régimen de documentación de las acciones de las compañías anónimas recogido en el CCom 1829 se modificó sustancialmente por la Ley y el Reglamento de 1848.

2. Las cartas de pedido de acciones

El legislador de 1848 manifestó la preocupación de que quienes se comprometían a suscribir y desembolsar acciones durante los primeros pasos de la tramitación de la autorización de la compañía, finalmente no lo hicieran. Se habían dado casos de asumir *promesas de suscripción de acciones* en las que los titulares, al entender que no tenían carácter vinculante, llegado el momento previsto, ni suscribieron ni desembolsaron las acciones comprometidas. Algunos “accionistas” vendieron

⁸⁵¹ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio* ..., pág. 102.

⁸⁵² LASO, E. (1849): *Elementos de Derecho Mercantil* ..., pág. 24: *En las sociedades Anónima y en Comandita constituidas por acciones, el embargo solo se entiende a las utilidades del socio, cuya acción consta sólo por inscripción, y no se le ha emitido cédula de crédito que represente el interés que en ella tenga.*

especulativamente sus promesas a terceros, que fueron los que realmente corrieron el riesgo de la obtención o denegación de la autorización⁸⁵³.

El carácter fundamental de estas *cartas de pedido de acciones* era su obligatoriedad o, desde otro punto de vista, que su incumplimiento llevaba aparejada la ejecución frente al deudor. Por este motivo se deja de utilizar la expresión *promesas de acciones*, utilizada en la práctica comercial, para que no hubiera duda del compromiso adquirido por el (futuro) socio. Estas consideraciones indican que el Legislador, aunque no las denomine *acciones* sino *cartas de pedido de acciones*, les otorga una naturaleza prácticamente similar a las acciones, en cuanto a derechos y obligaciones. La diferencia se encontraba en que los derechos y obligaciones del titular de una *carta de pedido de acciones* se referían al periodo correspondiente a lo que se ha denominado “primera fase”, es decir, desde la escritura de fundación de la compañía hasta la ejecución de la autorización, real o gubernativa⁸⁵⁴.

La Ley y el Reglamento de 1848 señalan dos supuestos diferentes para adquirir una participación en el capital de la compañía por acciones durante la “primera fase”: la comparecencia a la escritura de fundación y la firma de las *cartas de pedido de acciones*. Por este motivo, exigía el artículo 6 de la Ley de 1848 que *(a) la solicitud en que se pida la Real autorización, ha de acompañarse la lista de los suscritores que se propusieren formar la compañía, las cartas de pedidos de acciones, la escritura social y todos los estatutos y reglamentos que hayan de regir para la administración de la compañía*. Las *cartas de pedido de acciones* son requisito imprescindible para la solicitud de autorización gubernativa de la compañía por acciones y deben representar, al menos la mitad del capital social: *(n)o se dará curso a la solicitud [en que se pida la Real autorización] cuando de los pedidos de acciones no conste la suscripción de una mitad, por lo menos, del capital de la compañía* (artículo 7 de la Ley de 1848).

Con independencia de estos requisitos, como se ha expuesto anteriormente, la innovación fundamental es el carácter obligatorio: *las cartas de pedidos de acciones constituirán por sí una obligación legal* (artículo 7, último inciso). Aquí se encuentra la pieza clave que pretendía evitar los fraudes y abusos, como se pone de manifiesto en varias intervenciones de los parlamentarios durante los debates del PL 1848.

Por su parte, el Reglamento de 1848 trata estas mismas cuestiones, con un mayor grado de detalle. Su artículo 9 establece que *(p)ara impetrar la aprobación Real de la escritura de fundación de toda sociedad mercantil por acciones ha de hallarse cubierta la mitad de las que compongan su capital social, sea por haberse distribuido este número entre los otorgantes de la misma escritura o sea por las cartas de pedidos de acciones que con posterioridad a su otorgamiento se hayan dirigido a la comisión encargada de gestionar para la aprobación de la compañía*.

Aunque no lo diga expresamente, pero así se deduce del texto transcrito, el Reglamento de 1848 equipara la obligatoriedad del compromiso de suscripción de los

⁸⁵³ Se puede consultar el epígrafe posterior sobre los debates de este tema particular en las Cortes Generales en el que se recogen intervenciones de los parlamentarios denunciando este problema.

⁸⁵⁴ Así, por ejemplo, según el artículo 25 del Reglamento de 1848, los titulares de las *cartas de pedido de acciones* debían acudir a la primera Junta General convocada por el Jefe Político, una vez recibida la Orden por la que se declaraba autorizada la compañía, para elegir a los administradores, aprobar la emisión de los títulos de las acciones en suscripciones nominales, etc.

comparecientes en la escritura de fundación a la de quienes firman las *cartas de pedido de acciones*. Aunque, desde un punto de vista temporal, estas últimas sólo pueden formalizarse con posterioridad a la escritura de constitución, tienen la misma validez en cuanto al cumplimiento de la obligación de suscripción y desembolso de capital.

Por este motivo, el artículo 10 del Reglamento de 1848 insiste en que *(l)as cartas de pedidos de acciones producen en los suscriptores la obligación de hacer efectivo el importe de las mismas acciones (...)*. Frente al suscriptor en mora puede actuar la compañía con los mismos medios que contra los otorgantes de la escritura fundacional. En este sentido, el incumplimiento de la obligación de desembolso no sólo daba acción a la compañía para ir contra los socios morosos, sino que, según el último inciso del artículo 10, *(l)os fundadores de la sociedad responderán de la autenticidad de las suscripciones para el efecto de haberse tenido por cubierto el número de acciones que se requieren a fin de la que la sociedad pueda constituirse*.

Una muestra de que los titulares de *cartas de pedido de acciones* eran como los otorgantes de la escritura de fundación, en el sentido de que su compromiso no consistía en una promesa, sino en unas obligaciones asumidas frente a la compañía, es el artículo 11 del Reglamento de 1848, que impone el deber de los titulares de *cartas de pedido de acciones* de asistir a una junta de accionistas para aprobar los estatutos y reglamentos sociales.

Por último, el artículo 12 del Reglamento de 1848 establece que las *cartas de suscripción de acciones*⁸⁵⁵ forman parte del conjunto de requisitos necesarios para obtener la autorización de la compañía.

3. El libro de registro de acciones

Una vez otorgada la autorización real o gubernativa, se emiten los títulos de las acciones, que sustituyen a las *cartas de pedido de acciones* y al compromiso de desembolso, asumido por los otorgantes de la escritura fundacional. La suscripción ya se había realizado (bien en el otorgamiento de la escritura, bien en la firma de la *carta de pedido de acciones*), pero la documentación cambia. Nos encontramos en la que antes hemos denominado “segunda fase”.

La pieza clave sobre el *libro de registro* es el artículo 12 de la Ley de 1848, según el cual, *(h)asta que se haya declarado constituida la compañía no se podrá emitir ningún título de acción. Las acciones en que se divida el capital de la compañía estarán numeradas y se inscribirán en el libro de registro que habrá de llevarse necesariamente a nombre de la persona o corporación a quien correspondan*.

Cabe aclarar que el momento en el que se declara constituida la compañía no es la promulgación de la Ley ni el otorgamiento del RD. Debe considerarse que, a los efectos de la emisión de las acciones, es cuando se cumple el requisito, entre otros, del desembolso del capital social (que siempre es posterior al documento formal de aprobación legal o gubernativa⁸⁵⁶).

⁸⁵⁵ En este artículo, el Reglamento de 1848 utiliza esta expresión de “cartas de suscripción de acciones”. En las demás ocasiones emplea el término “pedidos” o, en singular, “pedido”.

⁸⁵⁶ Así lo establece el artículo 25 del Reglamento de 1848 en relación a la autorización gubernativa.

El artículo 12 de la Ley de 1848 prevé que las acciones *en que se divida el capital de la compañía estarán numeradas*. El valor nominal, como se comentó anteriormente, debe ser el mismo para todas las acciones.

Pero, quizá, la cuestión más relevante de este artículo 12 es la prohibición de acciones al portador en las compañías anónimas (lo cual no deja de ser una paradoja). Las acciones se inscribirán *en el libro de registro que habrá de llevarse necesariamente a nombre de la persona o corporación a quien correspondan*. Más adelante, en el epígrafe sobre los debates parlamentarios se transcriben largas intervenciones sobre esta concreta materia.

Una cuestión interesante del citado artículo 12 es la mención a socios personas jurídicas: *a nombre de la persona o corporación a quien correspondan*. En relación a esta cuestión, desconocemos si en aquellos años eran frecuentes los grupos de sociedades. En los debates parlamentarios se sobreentiende que los accionistas son personas físicas a quienes el Legislador trata de proteger frente a determinados abusos. Pero en algunas intervenciones se hace referencia a que algunas entidades podrían haberse planteado tomar participación en algunas compañías anónimas ofertando unos precios muy bajos⁸⁵⁷. Además, debe tenerse en cuenta que en aquella época las compañías podían disponer de autocartera o acciones propias.

Pero, se insiste, el aspecto más importante del artículo 12 de la Ley es la prohibición de emisión de acciones al portador, que se encuentra regulada también en dos artículos del Reglamento de 1848. En primer lugar, el artículo 1.7 en el que se recoge como requisito necesario de la escritura de fundación la expresión del *número de acciones nominativas en que ha de dividirse el capital y cuota de cada uno*⁸⁵⁸. En segundo lugar, el artículo 25 por el que el Jefe Político, una vez recibida la orden y el RD de autorización de la compañía, convocará la primera junta de accionistas para decidir sobre una serie de cuestiones entre las que se encontraba la *emisión de los títulos de las acciones en suscripciones nominales*.

La Ley y el Reglamento de 1848 no establecen más requisitos sobre el contenido del libro de registro de acciones nominativas. El artículo 33 del Reglamento de 1848, al regular la transmisión de acciones, establece indirectamente algunas cuestiones concretas sobre las inscripciones, como se verá seguidamente. En los debates parlamentarios también se encuentran referencias al libro de registro, que se recogen en el epígrafe correspondiente.

⁸⁵⁷ Por ejemplo, en la última sesión del Congreso en la que se debatió el Dictamen de la CMC-S, el 17 de enero de 1848, el Diputado Sr. Gasco manifestó una singular preocupación por la redacción del artículo 18 que se refería a la adaptación de las compañías por acciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley. Según él, otras compañías competidoras o algún banco podían estar interesados en liquidarlas y para ello podían tomar una pequeña participación en su capital y conseguir que en la obligatoria junta para deliberar sobre la adaptación o liquidación de la compañía, se aprobara esto último, es decir, la liquidación. Su inquietud pone de manifiesto que las compañías podían ser accionistas de otras compañías. Véase DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 17 de enero de 1848, núm. 44, pág. 830.

⁸⁵⁸ Redacción imprecisa, pues la cuota debería hacer referencia a cada unaa, pues no se entiende si no a qué se refiere.

4. Las acciones en depósito o garantía del ejercicio del cargo de los administradores

Cabe hacer referencia a una última cuestión en relación a la documentación de la acción. Se trata de las acciones que debían tener en depósito los administradores, como garantía de su gestión.

Los gerentes o directores de cada compañía deberán tener en depósito mientras ejerzan sus cargos un número fijo de acciones, cuyos títulos han de extenderse en papel y forma especiales (artículo 13 de la Ley de 1848). El Legislador quiso que estas acciones en garantía del ejercicio del cargo de los administradores⁸⁵⁹ se documentaran de manera diferente a los demás títulos, con la finalidad de que sus titulares no pudieran enajenarlas libremente. Durante el debate del PL 1848 en la sesión del 24 de diciembre de 1847 en el Senado⁸⁶⁰, se produjo una larga y detallada intervención sobre esta cuestión. La promovió el Senador D. Antonio Guillermo Moreno, que presentó una enmienda al artículo 13 del PL 1848, rechazada por la CS y debatida por el entonces Ministro de CIOP, D. Juan Bravo Murillo y por el Marqués de Montevirgen⁸⁶¹.

El plazo para la formalización del depósito de estas acciones lo fijó el artículo 29 del Reglamento de 1848 en quince días desde la declaración de constitución de la compañía.

D) TRANSMISIÓN DE LA ACCIÓN

La transmisibilidad de las acciones se regula solamente en el artículo 33 del Reglamento de 1848. Nos sorprende esta escasez de artículos, pues la transferencia de las acciones y, por tanto, de la condición de socio, constituía una relevante excepción al régimen general de la cesión de los derechos y obligaciones de los socios en los demás tipos societarios.

En el anterior epígrafe sobre los derechos y obligaciones de los accionistas, se han transcrito algunas citas de autores de la época de nuestra Ley de 1848 en los que se refleja el derecho del accionista a transferir su participación en la sociedad a un tercero⁸⁶². En los otros tipos societarios, los socios no podían salir fácilmente de la sociedad⁸⁶³. Incluso el fallecimiento o la simple voluntad de alguno de los socios suponía la disolución de la compañía⁸⁶⁴. En este contexto, estaba pacíficamente asumido

⁸⁵⁹ Esta cuestión también se comenta en el capítulo sobre los administradores sociales

⁸⁶⁰ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, págs. 303 y ss.

⁸⁶¹ En el epígrafe sobre los debates parlamentarios, se encuentra una sección dedicada a esta cuestión de las acciones en garantía del ejercicio del cargo de los administradores en la que se recoge con detalle el debate.

⁸⁶² GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil* ..., págs. 166 y 167.

⁸⁶³ En este sentido, establecía el artículo 322 CCom 1829, en relación a los demás tipos societarios: *Ningún socio puede transmitir a otra persona el interés que tenga en la sociedad, ni sustituirla en su lugar para que desempeñe los oficios que a él le toquen en la administración social, sin que preceda tanto para lo uno como para lo otro el consentimiento de los socios.*

⁸⁶⁴ Tal y como recoge el artículo 329 CCom 1829: *Las compañías mercantiles se disuelven totalmente por las causas siguientes: (...) 3. Por la muerte de uno de los socios, si no contiene la escritura social pacto expreso para que continúen en la sociedad los herederos del socio difunto, o que ésta subsista entre los socios sobrevivientes (...). 6. Por la simple voluntad de uno de los socios cuando la sociedad no tenga un plazo o un objeto fijo.*

que la transmisión de acciones era mucho más sencilla y que, además, en virtud de esta simplicidad, se podían dar abusos y fraudes, que el Legislador trató de evitar⁸⁶⁵.

Por todo esto, como se decía al principio, sorprende que sólo un artículo del Reglamento de 1848 (la Ley de 1848 guarda silencio sobre esta materia) regule la transmisibilidad de las acciones. Lo hace en los siguientes términos: *(l)as trasferencias de las acciones han de consignarse en un registro especial para estas operaciones que llevará cada compañía interviniendo en ellas un agente o corredor de cambios para la autenticidad del acto, quedando aquél responsable de la identidad de las personas entre quienes se hiciere la negociación.*

Cuando no estuviere cubierto el valor íntegro de la acción, se hará expresión formal en el acto de transferencia de quedar el cedente subsidiariamente responsable del pago que deberá hacer el cesionario de las cantidades que falten para cubrir el importe de la acciones según se prescribe en el artículo 283 del Código de comercio (artículo 33 del Reglamento de 1848).

Cabe destacar dos cuestiones sobre este artículo. La primera, se refiere a las formalidades de la transmisión de las acciones. La segunda, la responsabilidad por la transferencia de acciones parcialmente desembolsadas.

En cuanto a la primera, llama la atención que no exista referencia al *libro de registro de acciones*⁸⁶⁶. Sin duda alguna, la consignación de las transferencias en un *registro especial* debe coordinarse con el libro registro de acciones. Da la impresión que tendrían que ser dos documentos diferentes, pero nada impediría que sólo se llevara en el libro de registro de acciones nominativas. Para poder consignar una transferencia a favor de un tercero, debía comprobarse previamente la identidad del titular transmitente en los registros del libro de acciones.

Con el fin de asegurar la identificación de la parte transmitente, el Reglamento de 1848 exige (sobre esta cuestión concreta no establece nada el texto legal) la intervención de *un agente o corredor de cambios* que será responsable de cualquier irregularidad en relación a *la identidad de las personas entre quienes se hiciere la negociación*. Por tanto, no se refiere sólo al transmitente, sino también al adquirente. El Agente o Corredor debería tener un fácil acceso a los libros de la sociedad, cuya diligente custodia por parte de la compañía, había de permitir el correcto uso de la información al intermediario para cumplir correctamente con sus obligaciones.

La segunda cuestión hace referencia a la obligación del adquirente de desembolso de los dividendos pasivos, comentada en el epígrafe anterior. Cabe destacar aquí que el párrafo segundo del artículo 33 trataba de proteger al adquirente del posible engaño, por parte del transmitente, que consistía en ocultarle la existencia de cantidades pendientes de desembolsar, de las que aquél sería responsable frente a la compañía en virtud de lo dispuesto en el artículo 283 CCom 1829. La expresa mención a los

⁸⁶⁵ Decía en este sentido RUBIO Y LÓPEZ: *La movilidad continua de las acciones en las sociedades anónimas, su transmisibilidad, que haciéndolas pasar por manos de muchos poseedores en un breve plazo, ocasionaba fraudes sin cuento, exigían de parte de la ley, un cuidado especial, que no llenaba ni con mucho el Código con sus disposiciones* (RUBIO Y LÓPEZ, J. (1857): *Novísimo manual de Derecho mercantil* ...,pág. 124).

⁸⁶⁶ Artículo 12 de la Ley de 1848.

dividendos pasivos en el documento de transferencia le informaba de dicha situación. Si esto se omitía, el transmitente y el Agente o Corredor serían responsables de los perjuicios ocasionados.

E) COTIZACIÓN EN BOLSA DE LA ACCIÓN

Una característica básica de las acciones de las compañías reguladas por la Ley de 1848 consistía en su admisión a cotización, una vez emitidas. Como dice SÁNCHEZ CALERO, esta Ley *produce una equiparación entre sociedades por acciones y sociedades cotizadas*⁸⁶⁷. La tipología doctrinal de sociedad cerrada estaba excluida para las compañías por acciones.

En efecto, así lo establecía el artículo 14 de la Ley de 1848, el cual disponía que *(l)as acciones de las compañías establecidas con arreglo a esta ley se cotizarán como valores comunes de comercio, y conforme a las disposiciones prescritas en la ley de Bolsa.*

Por lo tanto, una vez autorizada la compañía y emitidas las acciones según el régimen previsto en la Ley y Reglamento de 1848, éstas, las acciones, cotizaban en la Bolsa⁸⁶⁸ de Madrid que, a la sazón, era la única existente en España. Esta Bolsa se creó por RD de 10 de septiembre de 1831⁸⁶⁹, al final del reinado de Fernando VII, participando en ella Sáinz de Andino⁸⁷⁰.

El preámbulo del RD (formalmente con rango de ley) destaca la conveniencia de crear una bolsa o lonja de negociación pública que facilitara la reunión de las partes involucradas en el tráfico y la comunicación de las operaciones allí realizadas, bajo la garantía de la publicidad y con la intervención de agentes intermediarios responsables del cumplimiento de las formalidades legales⁸⁷¹. El artículo 1 creaba *en Madrid una Bolsa de Comercio en que se reúnan con sujeción a reglas determinadas y bajo la vigilancia e inspección de la autoridad establecida por Mí, las personas dedicadas al tráfico y giro comercial, y los Agentes públicos que intervienen en sus contratos y negociaciones.*

⁸⁶⁷ SÁNCHEZ CALERO, F. (2001): *La sociedad cotizada en Bolsa en la evolución del Derecho de sociedades*, Discurso leído el día 26 de marzo de 2001 en el acto de su recepción como Académico de Número de la RAJyL, pág. 48.

⁸⁶⁸ Como dice DEL VISO, una vez emitidas las acciones conforme a los requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento de 1848, *se cotizarán como valores comunes de comercio con sujeción a las disposiciones prescritas en la Ley de Bolsa; quedando autorizados sus propietarios a cederlas o transferirlas a todos, pero observando en la cesión lo que dispone la ley, de haber de consignarse ésta en un registro que llevará cada compañía; debiendo intervenir un agente o corredor de cambio para la autenticidad del acta, en la que se hará expresión, si no estuviera cubierto el valor de la acción de quedar el cedente responsable del pago en los términos que antes hemos indicado.* VISO, S. DEL (1864): *Lecciones elementales de historia ...*, pág. 233.

⁸⁶⁹ RD por el que, como ocurre en otras ocasiones durante aquel periodo absolutista, el Rey decreta la promulgación de un texto que formalmente lleva rango de ley. Fue publicado en las GdM de 27 de septiembre de 1831, núm. 119, de 29 de septiembre del mismo año, núm. 120 y de 1 de octubre del mismo año, núm. 121.

⁸⁷⁰ RUBIO, J. (1950): *Sáinz de Andino ...*, págs. 176 a 189, en donde se tratan con detalle temas relacionados con los Agentes de Bolsa y las operaciones a plazo.

⁸⁷¹ Boletín de la Bolsa de Madrid. *Historia viva de la actividad diaria del mercado de valores desde 1854*. 2 trimestre de 2012, pág. 46.

Los objetos especiales de las operaciones de Bolsa, según el artículo 2 de la Ley de Bolsa, eran los siguientes: la negociación de los efectos públicos cuya cotización esté autorizada en los anuncios oficiales, la venta de materiales preciosos, de todo género de mercaderías, la aseguración de los efectos comerciales contra todos riesgos terrestres o marítimos, el fletamento de buques, los transportes en el interior por tierra o por agua y, finalmente, las letras de cambio, libranzas, pagarés y *cualesquiera valores de comercio* procedentes de personas particulares. Esta última mención es la que más interesa para nuestro estudio, pues se relaciona directamente con el texto del artículo 14 de la Ley de 1848 en el que se habla de que las acciones cotizarán como *valores comunes de comercio*.

Para esta Ley, la denominación genérica de “efectos públicos” se refería a toda institución de venta y título de crédito, cuya constitución y circulación se hubiera autorizado expresamente por RD, incluyendo los efectos emitidos por cuenta del Estado como deuda consignada sobre las Cajas Reales o por alguna empresa particular a quien se haya concedido Real privilegio⁸⁷².

Las negociaciones de giro, tanto de los efectos públicos como de los valores de comercio de personas particulares, solamente se podrían realizar mediante operaciones efectuadas en Bolsa, conforme a la cotización que hagan sus Agentes según lo previsto en la Ley de Bolsa⁸⁷³.

La Autoridad pública que controlaba la Bolsa era el Intendente de la Provincia (posteriormente denominado Jefe Político), siendo ayudado por el Inspector de Bolsa, nombrado directamente por la Corona⁸⁷⁴.

La regulación de los Agentes de Cambios es bastante extensa y se encuentra en el Título Quinto de la Ley de Bolsa, en el que se detallan sus atribuciones, nombramiento y fianzas, así como las obligaciones y responsabilidad⁸⁷⁵. Cabe destacar, por ejemplo, el régimen de autoentrada de los Agentes⁸⁷⁶ y la obligación de la Junta Sindical del Colegio de Agentes, órgano de gobierno de la Bolsa, de redactar un Boletín de Cotización que regiría como documento fehaciente para la resolución de dudas y contestaciones judiciales o extrajudiciales de acuerdo con los precios negociados.

Cabe citar, también, la existencia del Acta Oficial de Cotización, documento que recogía los precios de las cotizaciones inmediatamente después de cada sesión. La Ley de Bolsa expresaba que debía extenderse en un registro encuadernado, foliado y con las hojas rubricadas por el Intendente de la provincia, debiendo ser firmada en el acto por los integrantes de la Junta Sindical, (no menos de tres), que hubiesen realizado la operación, los cuales serían responsables de su exactitud y legalidad. Este documento se cumplimentaba una vez reunidos los agentes del Boletín de Cotización, si bien no

⁸⁷² Artículo 3 de la Ley de Bolsa.

⁸⁷³ Artículo 5 de la Ley de Bolsa.

⁸⁷⁴ Artículos 18 y 19 de la Ley de Bolsa.

⁸⁷⁵ Artículos 63 a 97 de la Ley de Bolsa.

⁸⁷⁶ Artículo 75 de la Ley de Bolsa. Para más detalles sobre su contenido y evolución posterior, se puede consultar el trabajo del profesor OTERO LASTRES, J. M. (1981): “La autoentrada de los agentes de Cambio y Bolsa” en *Estudios de Derecho mercantil en homenaje al Profesor ANTONIO POLO*, Madrid, págs. 794 a 796.

estaba destinado al público en general haciéndose en la práctica un uso restringido del mismo⁸⁷⁷.

Otro aspecto importante establecido por la Ley es la admisión de la contratación de acciones al contado o a plazo⁸⁷⁸. Las operaciones a plazo las estableció Sáinz de Andino para estimular la transmisión de efectos públicos y valores de comercio en un momento de sequedad financiera. Más adelante, en la década de 1840, tras la Guerra Carlista, se produjo un fuerte movimiento especulador utilizando este tipo de operaciones⁸⁷⁹, que fue objeto de represión normativa, si bien con carácter errático, como se ha expuesto en otros lugares. Sobre estos vaivenes de la política legislativa de la Bolsa, comenta RUBIO Y LÓPEZ que la *legislación especial que se le dio en 10 de septiembre de 1831 ha tenido que sufrir radicales y continuas modificaciones a causa de los agios y desórdenes de que la Bolsa era teatro*⁸⁸⁰. El propio Sáinz de Andino, en 1845, se lamentaba de la especulación bursátil en una interesante obra titulada “Ensayo crítico sobre la contratación de la bolsa de comercio y las ventas simuladas de los efectos públicos; en que se analiza el proyecto de reforma de la Ley de Bolsa, presentado por el Gobierno a las Cortes en la última legislatura”⁸⁸¹ y propugnaba una profunda revisión del texto de 1831.

A modo de resumen, se puede decir que son dos los aspectos fundamentales del régimen de cotización de las acciones de las sociedades reguladas por la Ley de 1848. Primero, en relación a la formalización de las transferencias de estos títulos, era necesaria la intervención de los Agentes de Cambios y el seguimiento de los requisitos correspondientes. Y, segundo, las acciones se encontraban sometidas a unos especiales requisitos de publicidad y transparencia en cuanto al valor de cotización.

Para finalizar este apartado, cabe preguntarse si las acciones que cotizaban en la Bolsa de mediados del siglo XIX era una parte importante de su volumen de operaciones. La respuesta la encontramos en TORTELLA⁸⁸², que citando el estudio de HOYO⁸⁸³, afirma el total predominio de los títulos de Deuda pública en la Bolsa de Madrid a mediados del siglo XIX, frente a los títulos privados que representaban un escaso 1 por cien de la contratación. Por su parte, TEDDE⁸⁸⁴ mantiene que durante la década 1831 – 1841 la Bolsa de Madrid funcionó como un mercado de capitales dirigido hacia el sector público; a partir de 1841 aumentaron las operaciones con activos financieros privados y fue con el inicio de la construcción del ferrocarril cuando se

⁸⁷⁷ ESCRIBANO, J. R. (2012): La evolución de la información pública de las cotizaciones en la Bolsa de Madrid. Bolsas y Mercados Españoles.

⁸⁷⁸ Artículos 38 y ss. de la Ley de Bolsa.

⁸⁷⁹ RUBIO, J. (1950): *Sáinz de Andino ...*, págs. 180 y ss.

⁸⁸⁰ RUBIO Y LÓPEZ, J. (1857): *Novísimo manual de Derecho mercantil ...*, pág. XXII.

⁸⁸¹ SAINZ DE ANDINO, P. (1845): Ensayo crítico sobre la contratación de la bolsa de comercio y las ventas simuladas de los efectos públicos; en que se analiza el proyecto de reforma de la Ley de Bolsa, presentado por el Gobierno a las Cortes en la última legislatura, Madrid, en SUÁREZ F., Y BERALUCE, A. (1967): *Documentos del reinado de Fernando VII*, vol. 1, Pamplona, págs. 83 – 86.

⁸⁸² TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea...*, pág. 136.

⁸⁸³ HOYO, A. (1993): *La evolución del mercado de valores en España. La Bolsa de Madrid, 1831 – 1874*, comunicación presentada al V Congreso de la Asociación de Historia Económica, San Sebastián, págs. 371 - 383.

⁸⁸⁴ TEDDE, P. (1988): “El sector financiero ...”, pág. 307.

incrementó notablemente la contratación de títulos privados. En este sentido se manifiesta también SÁNCHEZ ANDRÉS⁸⁸⁵.

F) EVOLUCIÓN DE LAS REDACCIONES DEL PL 1848

Para terminar este apartado sobre las fuentes normativas del régimen de las acciones, se expone, como se hace en otros capítulos, un estudio de la evolución de las diferentes redacciones del PL 1848. En este caso, los artículos relacionados con las acciones, tratados a lo largo del articulado del PL 1848, se han estructurado en los siguientes temas, que se desarrollan a continuación: las cartas de pedido de acciones, la emisión y desembolso, acciones al portador o nominativas, las acciones depositadas por los administradores en garantía del ejercicio de su cargo y, por último, la cotización en bolsa.

1. Las cartas de pedido de acciones

El establecimiento de las *cartas de pedido de acciones* perseguía la finalidad de crear un instrumento vinculante o ejecutable por la compañía, frente a quienes se habían comprometido a suscribir y desembolsar acciones durante el largo y complejo periodo de constitución de la compañía. El motivo, como se ha apuntado en un epígrafe anterior, era evitar los fraudes y abusos en cuanto a la realidad de las personas que estaban dispuestas a invertir su dinero en la fundación de la sociedad. Con anterioridad a estas cartas, las personas interesadas en el proyecto manifestaban unas *promesas de suscripción de acciones* que, en la práctica, no pasaban de ser una manifestación de intenciones, pero sin consecuencias reales en caso de retractarse de su deseo o promesa.

El primer texto del PL 1848⁸⁸⁶ presentado por el entonces Ministro de CIOP, Sr. Roca de Togores, no hacía mención alguna a las *cartas de pedido de acciones* o a institución parecida. Fue la CCD encargada del primer Dictamen⁸⁸⁷, la que introdujo dos artículos al respecto:

Artículo 6. A la solicitud en que se pida la Real autorización ha de acompañarse la lista de los suscritores que se propusieren formar la compañía, las cartas de pedido de acciones, la escritura social y todos los estatutos y reglamentos que hayan de regir para la administración de la compañía.

Los estatutos y reglamentos serán previamente aprobados en junta general de suscritores.

Artículo 7. No se dará curso a la solicitud cuando de los pedidos de acciones no conste la suscripción de una mitad por lo menos del capital de la compañía.

⁸⁸⁵ SÁNCHEZ ANDRÉS, A. (1980): “En torno al concepto, evolución y fuentes del Derecho bursátil en el sistema jurídico español” en *RDM*, núm. 155, enero – marzo, págs. 17 a 22. En este trabajo se encuentra un interesante resumen de la evolución normativa bursátil que engloba el periodo objeto de nuestro estudio.

⁸⁸⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, págs. 653 y 654.

⁸⁸⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393.

Las cartas de pedido de acciones constituirán por sí una obligación legal.

Estos dos artículos fueron objeto de largos comentarios en los primeros debates del Congreso de los Diputados⁸⁸⁸ para precisar el contenido del nuevo concepto de las *cartas de pedido de acciones*, incidiendo en que constituyen una obligación legal. Una vez manifestadas las diferentes posturas, hubo un permanente acuerdo de la mayoría de los Diputados para mantener la redacción dada por la CCD el 16 de abril de 1847. Lo mismo ocurrió en el Senado, de manera que la redacción de estos dos artículos del PL 1848, el 6 y el 7, permanecen inalterados a lo largo de los seis diferentes textos del PL 1848⁸⁸⁹, siendo recogidos tal cual en la versión final de la Ley de 1848⁸⁹⁰.

2. La emisión y desembolso

Ya desde el primer texto del PL 1848⁸⁹¹ quedaba claro que las acciones no se podían emitir hasta que se hubiera constituido la compañía. Su artículo 7 establecía: *(h)asta que se haya declarado oficialmente constituida la sociedad, no se podrán emitir las acciones ni procederse por sus fundadores y gerentes a acto alguno de administración social.*

El principio básico de emisión de acciones con posterioridad a la constitución de la compañía, se reformula a partir del segundo texto del PL 1848⁸⁹² en los siguientes términos: *(h)asta que se haya declarado constituida la compañía no se podrá emitir ningún título de acción* (primer inciso del artículo 12). Esta redacción permanecerá inalterada en las siguientes versiones y en el texto promulgado de la Ley de 1848. Se omite la referencia a la declaración *oficial* de constitución y no se habla de emisión de acciones sino de *títulos* de acciones. El Legislador califica de esta manera, en el texto legal, a la acción como *título*.

⁸⁸⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, págs. 1462 y ss., que se comentan en detalle en el epígrafe posterior sobre los debates parlamentarios.

⁸⁸⁹ Así se puede ver en el texto aprobado por el Congreso de 23 de abril de 1847 (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 23 de abril de 1847. Apéndice Primero al núm. 81, págs. 1499 y 1500), en el Dictamen de la CS de 18 de diciembre de 1847 (DsC. Senado. Sesión de 18 de diciembre de 1847. Apéndice Segundo al núm. 16, págs. 251 y 252), en el texto aprobado por el Senado (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 29 de diciembre de 1847. Apéndice al núm. 32, págs. 617 y 618) y en el Dictamen de la Comisión Mixta de 11 de enero de 1848 (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 11 de enero de 1848. Apéndice Segundo al núm. 41, pág. 193).

⁸⁹⁰ Una comparación atenta de los textos de los dos artículos muestra dos variaciones de carácter formal. En primer lugar, el primer párrafo del artículo 6, siempre se refiere en todos los textos del PL 1848 a las *cartas de pedido* (en singular), mientras que en la versión final de la Ley utiliza la expresión en plural: *cartas de pedidos de acciones*, según aparece en el DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 29 de enero de 1848. Apéndice Segundo al núm. 54, pág. 1021. Aquí se ha utilizado habitualmente, a lo largo de los comentarios, la expresión en singular, para diferenciarla de *los pedidos de acciones* del artículo 7, que incluirían también a los otorgantes de la escritura fundacional.

En segundo lugar, el párrafo segundo del artículo 6, a tenor de la versión de los PL 1848 de la CCD, los estatutos y reglamentos *serán previamente aprobados* en junta general. A partir del primer texto del PL 1848 del Senado de 18 de diciembre de 1847, la redacción cambia a: *se aprobarán previamente*, que será como quede en la versión final de la Ley y que no altera el contenido de la versión anterior.

⁸⁹¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, págs. 653 y 654.

⁸⁹² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393.

Para una comprensión más precisa de la prohibición de emisión de títulos de acción hasta la declaración de constitución de la compañía, conviene relacionar el citado artículo 12 con el 9, que se comenta a continuación, en el sentido de que para las sociedades que eran autorizadas por el Gobierno, éste podía exigir el desembolso hasta un máximo del 25 por ciento del capital social antes de la autorización y, por tanto, de la declaración de constitución. En consecuencia, en este tipo de compañías, las acciones no se podían emitir aun cuando se hubiera desembolsado una cantidad con anterioridad a la declaración de constitución.

Enlazando con este artículo 9, su evolución desde su introducción en la segunda versión del PL 1848⁸⁹³, es interesante. El texto es el siguiente:

Cuando se trate de una compañía para cuyo establecimiento baste la autorización Real, y el Gobierno juzgare la empresa de utilidad pública, lo declarará así a los recurrentes, aprobando desde luego la escritura social y los estatutos y reglamentos, y determinando la parte del capital que la compañía haya de hacer efectiva antes de obtener el Real decreto de autorización.

Esta parte no podrá exceder en ningún caso de un 25 por 100.

En el caso de que el Ministro por cuyo conducto haya de resolverse la solicitud disienta en todo o en parte de lo consultado por el Consejo Real, se expedirá la resolución oyendo al Consejo de Ministros.

Al margen de los otros temas regulados, por lo que al desembolso de las acciones se refiere, queda establecida la facultad del Gobierno para determinar el desembolso que deben realizar los socios antes de obtener el RD de autorización, tras el cual, si se cumplen los correspondientes requisitos, se podía declarar constituida la compañía y, por tanto, emitir los títulos de las acciones.

El porcentaje máximo de este desembolso se fijaba en el 25 %. Esta cuestión suscitó una precisión durante el debate del artículo 9, el 21 de abril de 1847, en el Congreso⁸⁹⁴, pues según la redacción propuesta por la CCD en su Dictamen, se podía entender que la prohibición de exigir un desembolso superior al 25% afectaba a todas las compañías, cuando parece que se quería expresar que el Gobierno no podía exigir una cantidad superior. Es decir, una compañía podía libremente establecer un desembolso superior al 25% antes de la declaración de constitución.

La propuesta fue aceptada por la CCD y se modificó el texto del artículo 9 en cuanto a este determinado aspecto, quedando su redacción así: *(e)l Gobierno no podrá por razón de esta parte exigir en ningún caso más de un 25 por 100*. En los posteriores Proyectos de Ley no se modificó esta frase⁸⁹⁵.

⁸⁹³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393. En el primer PL 1848 de 27 de febrero de 1847 no se hacía mención a la facultad del Gobierno para exigir un desembolso previo a la declaración de constitución de la compañía.

⁸⁹⁴ Discusión entre el proponente de la precisión, el Diputado Sr. D. Juan José Fuentes y el Sr. Miota, este último, miembro de la CCD, recogida en el DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, págs. 1465 y ss.

⁸⁹⁵ Así figura en los restantes textos de los PL 1848: Dictamen de la CS de 18 de diciembre de 1847 (DsC. Senado. Sesión de 18 de diciembre de 1847. Apéndice Segundo al núm. 16, págs. 251 y 252) Texto aprobado por el Senado (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 29 de diciembre de 1847. Apéndice

3. Acciones al portador o nominativas

Este tema originó largas discusiones en el Parlamento, sobre todo en el Senado. En cada una de las seis versiones del PL 1848 existe una referencia a la cuestión, que evoluciona y varía casi hasta el último Dictamen (el de la CMC-S).

En la primera versión del PL 1848⁸⁹⁶, presentada por el Ministro Sr. Roca de Togores, el artículo 4 establecía, sucintamente, que *(l)as acciones de las sociedades anónimas y comanditarias serán nominativas y estarán numeradas*. Por tanto, se prohibían las acciones al portador, además debían estar numeradas y la expresión legal empleada es *nominativas*.

El segundo texto del PL 1848, presentado por la CCD el 16 de abril de 1847, introdujo el siguiente texto en el último inciso del artículo 12: *(l)as acciones en que se divida el capital de la compañía estarán numeradas según nominales en sus dos terceras partes a lo menos. No podrá emitirse ninguna al portador sin que previamente se haya entregado su importe total en la caja de la compañía*. La modificación respecto al primer texto es importante: se admite la emisión de acciones al portador, si bien con dos requisitos o limitaciones: que no superen un tercio del capital y que estén totalmente desembolsadas.

Cabe hacer referencia a una cuestión terminológica que se puso de manifiesto durante los debates parlamentarios: se utiliza la expresión *las acciones (...) estarán numeradas según nominales*. La CCD prescindió del término *nominativas* para sustituirlo por la expresión transcrita. Cuando se debatió este artículo 12 en el Congreso, el Diputado Sr. D. Juan José Fuentes, propuso utilizar la terminología del primer texto del PL 1848 (*nominativas*) pues en su opinión la palabra *nominal* se aplica más bien a los valores y la palabra *nominativa* a las acciones⁸⁹⁷.

El Congreso no aceptó esta enmienda, aunque modificó levemente el texto en los siguientes términos: *(l)as acciones en que se divida el capital de la compañía estarán numeradas y serán nominales en sus dos terceras partes a lo menos. No podrá emitirse ninguna al portador sin que previamente se haya entregado su importe total en la caja de la compañía* (artículo 12, último inciso)⁸⁹⁸. La complicada expresión de la versión anterior (*estarán numeradas según nominales*) se sustituye por *serán nominales*. El resto del contenido no varía.

El Dictamen de la CS de 18 de diciembre de 1847⁸⁹⁹ acepta en su integridad el texto anterior, aprobado por el Congreso de los Diputados en abril.

En el Senado se debatió también el artículo 12 del PL 1848. En las discusiones, a los efectos que se están comentando ahora, destaca la enmienda propuesta por el Senador Sr. Pérez Seoane que plantea volver a emplear el término *nominativas* utilizado

al núm. 32, págs. 617 y 618). Y, por último, Dictamen de la CMC-S de 11 de enero de 1848 (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 11 de enero de 1848. Apéndice Segundo al núm. 41, pág. 193).

⁸⁹⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, págs. 653 y 654.

⁸⁹⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1465.

⁸⁹⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 23 de abril de 1847. Apéndice Primero al núm. 81, págs. 1499 y 1500.

⁸⁹⁹ DsC. Senado. Sesión de 18 de diciembre de 1847. Apéndice Segundo al núm. 16, págs. 251 y 252.

en el primer texto del PL 1848 para evitar que se pudiera confundir *lo nominal del capital con lo nominal para indicar la necesidad de que conste el nombre de la persona dueña de las acciones, y a cuyo favor están inscritas*⁹⁰⁰.

Con este motivo, se aprueba modificar la redacción del artículo 12 y, aunque si bien no se recoge la palabra *nominativas*, no se utiliza *nominales*. Esta es la redacción: *(l)as acciones en que se divida el capital de la compañía estarán numeradas, y se inscribirán en el libro de registro, que habrá de llevarse necesariamente a nombre de la persona o corporación a quien correspondan*⁹⁰¹. Este texto pasará sin modificaciones al Dictamen de la CMC-S de 11 de enero de 1848⁹⁰² y será recogida en la versión final de la Ley de 1848.

4. Las acciones depositadas por los administradores en garantía del ejercicio de su cargo.

El primer texto del PL 1848⁹⁰³ no recogió ninguna previsión en particular sobre las acciones de los administradores depositadas en garantía del ejercicio de su cargo.

El segundo texto, introducido por la CCD el 16 de abril de 1847⁹⁰⁴, introdujo el artículo 13 con la siguiente redacción: *(l)os gerentes o directores de cada compañía deberán tener en depósito, mientras ejerzan sus cargos, un número fijo de acciones, cuyos títulos han de extenderse en papel y formas especiales*.

Esta redacción permanecerá inalterada hasta la publicación de la Ley de 1848. Así aparece en el texto aprobado por el Congreso de los Diputados después de los debates⁹⁰⁵, en el Dictamen de la CS⁹⁰⁶, en la versión aprobada por el Senado⁹⁰⁷ y en el Dictamen de la CMC-S⁹⁰⁸.

5. La cotización en Bolsa

Las acciones emitidas por las compañías anónimas y comanditarias cotizaban en Bolsa según las redacciones de las seis versiones del PL 1848.

⁹⁰⁰ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 277.

⁹⁰¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 29 de diciembre de 1847. Apéndice al núm. 32, págs. 617 y 618.

⁹⁰² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 11 de enero de 1848. Apéndice Segundo al núm. 41, pág. 193.

⁹⁰³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, págs. 653 y 654.

⁹⁰⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393.

⁹⁰⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 23 de abril de 1847. Apéndice Primero al núm. 81, págs. 1499 y 1500.

⁹⁰⁶ DsC. Senado. Sesión de 18 de diciembre de 1847. Apéndice Segundo al núm. 16, págs. 251 y 252.

⁹⁰⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 29 de diciembre de 1847. Apéndice al núm. 32, págs. 617 y 618.

⁹⁰⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 11 de enero de 1848. Apéndice Segundo al núm. 41, pág. 193.

El PL 1848 enviado por el Gobierno a las Cortes el 27 de febrero de 1847⁹⁰⁹ estableció en su artículo 11 que *(l)as acciones de las compañías anónimas y comanditarias establecidas en esta forma se cotizarán en la Bolsa como valores comunes de comercio y conforme a las disposiciones prescritas en la ley de Bolsa.*

Este artículo pasa a ser el nuevo artículo 14 de todas las siguientes versiones del PL 1848, las cuales, aunque presentan algunos cambios respecto al artículo 11 del primer texto, en esencia son similares⁹¹⁰. Dice así el artículo 14: *(l)as acciones de las compañías establecidas con arreglo a esta Ley se cotizarán como valores comunes de comercio y conforme a las disposiciones prescritas en la ley de Bolsa.*

II. DEBATES PARLAMENTARIOS

Una vez estudiadas las fuentes normativas del régimen jurídico de las acciones, se comentan las largas intervenciones que tuvieron lugar sobre este particular en los debates parlamentarios. Esta materia es la que ocupa proporcionalmente mayor extensión en las actas del Congreso y del Senado. Los diversos aspectos del régimen de las acciones van surgiendo al hilo de los debates sobre los correspondientes artículos del PL 1848, pero, con frecuencia, se relacionan y entrelazan desordenadamente con otros. Por este motivo, se ha decidido no realizar un comentario que siga el orden cronológico de las discusiones, sino sistematizar los comentarios entorno a los temas más importantes, que se exponen a continuación.

A) CARTAS DE PEDIDO DE ACCIONES

Las *cartas de pedido de acciones* son una pieza clave del nuevo régimen jurídico establecido por la Ley de 1848⁹¹¹. Su importancia se refiere al carácter obligatorio y vinculante de estos documentos. De esta manera se perseguía evitar los fraudes en que habían incurrido algunos fundadores de compañías por acciones al asegurar que tenían comprometida la suscripción y desembolso de una parte importante del capital social, cuando, en realidad, no era así y, legalmente, no se podía exigir la suscripción –ni, por tanto, el desembolso– a quienes habían manifestado la promesa de suscribir acciones.

El primer artículo del PL 1848 redactado por la CCD que se refiere a las *cartas de pedido de acciones* es el 6⁹¹². Cuando se sometió a debate por primera vez en el Congreso, el Diputado D. Juan José Fuentes tomó la palabra para impugnarlo. Sus

⁹⁰⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, págs. 653 y 654.

⁹¹⁰ Estas versiones son: la versión aprobada por el Congreso de 23 de abril de 1847 (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 23 de abril de 1847. Apéndice Primero al núm. 81, págs. 1499 y 1500), el Dictamen de la CS de 18 de diciembre de 1847 (DsC. Senado. Sesión de 18 de diciembre de 1847. Apéndice Segundo al núm. 16, págs. 251 y 252), el texto aprobado por el Senado (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 29 de diciembre de 1847. Apéndice al núm. 32, págs. 617 y 618) y el Dictamen de la CMC-S de 11 de enero de 1848 (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 11 de enero de 1848. Apéndice Segundo al núm. 41, pág. 193).

⁹¹¹ En frase del Sr. BERTRÁN DE LIS, es *uno de los puntos más capitales del Proyecto* (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1463).

⁹¹² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, pág. 1392.

observaciones hicieron que tomaran parte en el debate el Sr. Bertrán de Lis (como portavoz de la CCD), Sr. Mendizábal, Sr. Rodríguez Rivas (Secretario de la CCD) e incluso el entonces Ministro de Gracia y Justicia (Sr. Vaamonde). El tema de las cartas de pedidos de acciones, como se acaba de comentar, era muy importante para la CCD. Analicemos a continuación las propuestas y las respuestas.

Comienza el Diputado D. Juan José Fuentes refiriéndose a una de las notas esenciales de las compañías objeto del PL 1848, cual es que deben tener un objeto de utilidad pública. Además, deben adecuarse a las ideas que la CCD ha tenido presente al redactar su Dictamen. Piensa que para ser autorizadas basta con la presentación de los estatutos y reglamentos,

*(...) pero no sé por qué se exigen también cartas de pedido de acciones.*⁹¹³

Y continúa con este razonamiento:

*Yo no comprendo esto, y lo considero por lo menos completamente inútil. Es bien seguro que cualquiera compañía que se quiera formar no dejará de presentar esas cartas, porque los fundadores emitirán acciones y después las repartirán; de manera que ésta es una traba inútil, pero que puede traer gravísimas consecuencias. ¿Cómo se ha de dar prestigio a estas sociedades, si desde el momento en que se halla principiado a hacer pedidos de acciones, hasta tanto que se obtenga la autorización, estarán dudosos los que quieran tomar parte en ellas de si el Gobierno aprobará o no los estatutos, de si habrá variación en alguno de los objetos que quiera comprender la sociedad, o si los destruirá por no creerlos de utilidad pública? Esperando esta resolución, es claro que no habrá quien haga pedidos, y también los particulares tendrán recelo de que el gobierno sepa la cantidad por que se interesan, porque ésta es una preocupación que todos tienen, y como es general, debe respetarse.*⁹¹⁴

El motivo de la perplejidad de este Diputado es doble. En primer lugar, con carácter general, estas cartas de pedido de acciones serán una traba, dado que los inversores no suscribirán en firme ningún compromiso hasta conocer si el Gobierno o, en su caso, el Parlamento, autoriza la constitución de la sociedad y su objeto social. Nadie hará pedidos hasta que se clarifique esta cuestión fundamental. Y, en segundo lugar, porque puede darse el caso de inversores que no quieren que el Gobierno o el Parlamento conozca que se han interesado en la sociedad y cuánto van a invertir.

Por los motivos anteriormente expuestos propone al Congreso la modificación del artículo 6 del PL 1848 para suprimir la mención a las cartas de pedidos de acciones. Y es que, además,

(...) porque por lo mismo que los que piden acciones se dice en el artículo siguiente [el 7] que se constituyen en obligación por el hecho de pedir las, cuidarán de no hacer pedido ninguno hasta ver si la autorización se concede; y cuando llegue el caso de la constitución de la sociedad, entonces el Gobierno,

⁹¹³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1462.

⁹¹⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, págs. 1462 y 1463.

*por esa expresión que tiene el artículo, verá si se han cumplido o no lo que la ley ha determinado sobre capital que ha de formar la base de la sociedad.*⁹¹⁵

La contestación a esta propuesta corresponde al miembro de la CCD, Sr. Bertrán de Lis, quien comienza aclarando que las cartas de pedidos de acciones es uno de los temas que la CCD considera innegociables, porque han sido la causa de la dañina especulación con acciones y, por tanto, de la descontrolada situación de la sociedades anónimas durante el periodo inmediatamente anterior a los debates del PL 1848. Estas son las primeras palabras del Sr. Bertrán de Lis:

*Siento infinito no poder complacer al Sr. Fuentes en la parte que dice referencia al pedido de acciones, porque éste puede calificarse de uno de los puntos más capitales del proyecto. Es bien sabido que hasta ahora ha habido el abuso de hacer grandes pedidos de acciones, porque en general estas compañías se han formado, no todas, algunas de ellas, no con el objeto de llevar adelante una especulación sobre un objeto de utilidad pública, sino con el fin de crear un papel especial; y de aquí ha provenido que al establecerse la compañía anónima, por lo general se han apresurado los especuladores a pedir gran número de acciones, no con el objeto de ser accionistas, sino con el objeto de tener aquel papel para poderlo luego negociar. La Comisión, uno de los principales objetos que tenido es que para establecerse las sociedades anónimas y poder recaer la sanción sobre ellas, hubiese ya una cosa efectiva, y no una mera ficción o engaño: por eso, una de las precauciones que ha creído debían tomarse ha sido la de saber quiénes eran las personas que se proponían ser accionistas, y segunda, cuál era el documento por el cual se obligaban o comprometían con esta compañía. Así es que ha exigido primero en la lista de suscriptores, y como ésta podía fácilmente falsificarse poniendo nombres que no fueran efectivos, ha querido que se presentaran documentos en que constara la firma de aquellos que pretendían ser accionistas de la sociedad; y no contenta con esto, la Comisión, para que fuera una verdad, ha exigido un requisito nuevo, esencialísimo, y ese requisito es que se tuviera entendido que las cartas de pedidos de acciones constituirán por sí una obligación legal.*⁹¹⁶

Estas son las razones ofrecidas por el representante de la CCD. El punto clave es, por tanto, la novedad de otorgar un carácter vinculante a quienes firmaran las cartas de pedido de acciones, a lo que se añade el requisito de presentación de las cartas como parte de la solicitud de autorización de la sociedad. De esta manera se pretendía evitar las actuaciones de los especuladores que podían falsificar las firmas de las antiguas “promesas de acciones”.

Concluye Bertrán de Lis que no se puede acceder a la petición del Diputado Sr. Fuentes,

*(...) porque lo que se quiere es, repito, que sean una verdad estas compañías, y para que sean una verdad es necesario que haya suscriptores, y para que estos suscriptores sean efectivos, que se presente el documento en virtud del cual se comprometen a ser accionistas.*⁹¹⁷

⁹¹⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1463.

⁹¹⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1463.

⁹¹⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1463.

El Diputado D. Juan José Fuentes entiende los razonamientos del Sr. Bertrán de Lis, pero piensa que está en contradicción con lo previsto en el siguiente artículo del PL 1848 (el 7, que se debatiría a continuación) conforme al cual las cartas de pedido de acciones con vinculantes o irrevocables. Por lo tanto, piensa

*(...) que no pedirá nadie acciones hasta que no vea la autorización del gobierno; porque los estatutos pueden modificarse, todos esperarán a ver cuáles son las modificaciones que sufren, y después que se haya visto que efectivamente el Gobierno las ha considerado como de utilidad pública es cuando se apresurarán a hacer pedidos, y hasta tanto esto puede considerarse como una traba a esas sociedades anónimas.*⁹¹⁸

Responde el Sr. Bertrán de Lis para aclarar la posible contradicción entre los artículos 6 y 7 del PL 1848: la irrevocabilidad de las cartas de pedido de acciones se refiere exclusivamente a las condiciones y peculiaridades recogidas en la solicitud de autorización. Si dichas condiciones y peculiaridades son modificadas por exigencias del Gobierno o del Parlamento, ya no vinculan a los firmantes de las cartas.

Esta explicación planteaba el problema práctico de que si se producía alguna variación respecto a los términos de la solicitud de autorización, habría que recabar esas cartas de pedido de acciones para las nuevas condiciones en las que se va a autorizar la compañía. Transcribimos parte de la intervención del Sr. Bertrán de Lis:

*La Comisión entiende que no hay traba ninguna, porque cree que el pedido de las acciones compromete al que la firma en cuanto sigan las condiciones en virtud de las cuales han hecho el pedido: si después de aprobado el reglamento y de hecha la solicitud para la autorización por parte del gobierno, éste manifiesta que la concederá con tales o cuales condiciones, cada uno queda libre para decidir: yo no pertenezco a esa sociedad. Por esa razón aquí se establecen dos trámites: uno, el de pedir la autorización Real, y otro, el de concederla; y aún para conceder la hay dos trámites, uno en que el Gobierno dice que está dispuesto a conceder la autorización con tales condiciones, y otro cuando luego la compañía dice que está conforme, y entonces es cuando se extiende la concesión: por manera que el compromiso es sólo en cuanto la compañía se constituya con aquellas condiciones.*⁹¹⁹

Esta aclaración no convence a otro Diputado, el Sr. Mendizábal, pues le parece incoherente la explicación del Sr. Bertrán de Lis. Por eso entiende que si no se modifica el artículo 6, habrá que modificar el 7. Sus palabras son muy claras:

(...) al haber oído decir al señor Bertrán de Lis que la carta del pedido no constituye ninguna obligación en el momento mismo en que las condiciones por las cuales el pedido que se ha hecho no sean las mismas con que fuese otorgada la concesión del gobierno, he tenido que pedir la palabra, porque he leído el artículo 7. Dice aquel artículo que las cartas de pedidos de acciones constituyen una obligación legal; y si las cartas no son obligatorias para los que las han suscrito, toda vez que se alteran en alguna parte las condiciones, es claro que

⁹¹⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1463.

⁹¹⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1463.

*aprobado el artículo 6 en ese sentido, habrá que alterar el artículo 7. Si se altera, no hay inconveniente ninguno; pero es menester que no aprobemos en un artículo inadvertidamente una cosa contraria a lo que se propone y apruebe en otro. Por lo tanto, yo desearía que el señor Bertrán de Lis se sirviera hacer alguna explicación sobre este asunto.*⁹²⁰

Bertrán de Lis contesta poniendo un ejemplo de constitución de una compañía cualquiera. El Gobierno estudia la solicitud de autorización de la sociedad y

*(...) examina estos documentos, y después de examinados, puede en primer lugar poner algunas modificaciones al objeto que se propone la compañía, (...) En segundo lugar, puede decir el Gobierno: concedo la autorización para la compañía, pero los estatutos han de ser modificados sobre éstas o las otras bases; por manera que altera las bases en que estriban estos estatutos o reglamentos. Entonces el Gobierno lo que hace es pasar una Real orden a los fundadores de la Sociedad diciendo: el Gobierno está dispuesto a conceder la autorización con tales condiciones. En ese caso los recurrentes vuelven a reunirse y dicen: nos acomoda o no nos acomoda; y sólo cuando le dicen al Gobierno que les acomoda, es cuando dice el Gobierno: concedo la Real autorización; y entonces ya las cartas son obligatorias, porque los suscriptores se han convenido con las condiciones que les ha impuesto el Gobierno. Por manera que hasta que no recae el Real decreto no es verdaderamente compañía, y los suscriptores son libres de dejar de pertenecer a ella si no lo tienen por conveniente.*⁹²¹

Con esta explicación, el Diputado Sr. Mendizábal se da por satisfecho, pero solicita que el Gobierno manifieste su conformidad. El Ministro de Gracia y Justicia (Sr. Vaamonde), estando presente en la sesión dice:

*(...) para satisfacer al señor Mendizábal, y por las ventajas que de esto pueden resultar para la inteligencia de la Ley, diré que el Gobierno está enteramente conforme con las explicaciones que sobre este artículo acaba de dar el Sr. Bertrán de Lis.*⁹²²

Con estas explicaciones y la conformidad del Gobierno, se aprobó el debatido artículo 6 del PL 1848, cuya redacción no sufrirá variaciones posteriores. Tampoco se modificó el artículo 7. Cabe señalar, como colofón, que este principio que el Legislador del 48 tenía meridianamente claro, se diluyó en el Legislador que aprobó la LSCOP, que en su artículo 46.4 utiliza de nuevo la expresión *promesas de acciones*⁹²³.

⁹²⁰ Ídem.

⁹²¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1464.

⁹²² Ídem.

⁹²³ GdM de 6 de junio de 1855, núm. 886. En efecto, según el citado artículo el Gobierno podía aprobar provisionalmente una compañía de ferrocarriles, siempre que cumpliese una serie de condiciones, entre las que se encontraba la siguiente:

Hasta que la compañía no se halle constituida definitivamente y haya obtenido la concesión o adjudicación de la línea, no podrá emitir títulos de acción ni otra clase de documentos transferibles o negociables, siendo nulas y de ningún valor las transferencias que se hagan de las promesas de acciones o de las acciones provisionales que se entreguen a los suscriptores (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, aunque la Ley no lo previera expresamente, por el contenido de los debates parlamentarios, se puede concluir que las *cartas de pedido de acciones* vinculaban al suscriptor solamente si las condiciones propuestas para la autorización de la compañía no eran modificadas por el Gobierno o las Cortes. En caso de que cambiaran las bases sobre las que se había solicitado la aprobación de la compañía, los suscriptores de las *cartas de pedido de acciones* quedaban liberados de su compromiso y no se les podía exigir la formalización de la suscripción ni desembolso. Era necesario obtener otras *cartas de pedido de acciones* referenciadas a las nuevas condiciones aprobadas por el Gobierno o el Parlamento.

En el Senado se produjeron pocas intervenciones sobre las *cartas de pedido de acciones*. Cabe destacar una enmienda al artículo 6 del PL 1848, propuesta por el Marqués de Vallgornera en la que pone de manifiesto otra finalidad u objetivo de estas *cartas*: la publicidad, en orden a conocer la identidad, no sólo de quienes suscriben las acciones en la escritura fundacional, sino de quienes firman dichas *cartas*. Dice el citado Senador:

*En los artículos aprobados [los cinco primeros] se ve, señores, el deseo de que todo sea conocido; que se evite toda clase de embozo, de oscuridad, de ocultación; y sin duda por esto en el artículo 6 se pide la lista de los suscritores, y hasta las cartas de los pedidos de acciones antes de que se conceda la autorización (...) ¿qué quiere el legislador? Quiere que se conozca y publique el objeto de la Sociedad, su capital, los nombres de las personas que interesan en ellas, las condiciones de su escritura social, sus reglamentos, sus estatutos(...) este es el sistema, es la índole, es la esencia de la Ley: publicidad.*⁹²⁴

B) EMISIÓN, SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO

1. Emisión de los títulos de las acciones. Acciones provisionales

El Diputado Sr. Gonzalo Morón manifestó en la primera sesión de los debates del Congreso que se encontraba confuso al comparar la redacción de los artículos 9 y 12 del PL 1848. Una vez leídos a Sus Señorías, dice:

Yo encuentro, si no contradicción manifiesta, cierta oscuridad en la redacción de estos artículos, cotejando uno con otro. Según el 9, muy oportunamente, y en ello aplaudo las miras que la Comisión ha tenido presentes, no podrá recaer en ninguna sociedad anónima el Real decreto de autorización sin que se haya hecho efectiva una parte del capital, el 10, el 12, el 25 por 100, la cantidad en fin que se designe; y según el 12, no podrá emitirse ningún título hasta que se haya declarado constituida la sociedad. Si la compañía no puede declararse constituida hasta que esté hecho el depósito que se fija, y se haya obtenido por supuesto la autorización; si esto tampoco puede hacerse sin dar a los accionistas sus acciones provisionales, es necesario que el artículo 12 se redacte de manera que desaparezca esa confusión que yo encuentro entre él y el 9, añadiendo alguna palabra que haga referencia a los títulos definitivos.

⁹²⁴ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 273.

Bertrán de Lis le responde como miembro de la CCD en los siguientes términos que ilustran el procedimiento de emisión de los títulos de las acciones en la época inmediatamente anterior a la aprobación de la Ley:

*En el artículo 9 se dice que no se podrá considerar legalmente constituida una compañía hasta que se llenen los requisitos que en el mismo se expresan; y en el artículo 12 se previene que no se pueda expedir ningún título de acción hasta que se haya obtenido la autorización Real. Las compañías tienen dos clases de títulos: el uno es la inscripción y el otro la acción propiamente dicha. La inscripción se da luego que la compañía está constituida y cuando se han pagado ciertos plazos; y la acción, propiamente dicha, no se emite hasta que se ha entregado todo el capital que corresponde al individuo. Pero el Sr. Morón dice: ‘al tiempo de depositar la cantidad que el Gobierno exige para conceder la autorización Real, ¿no se podrá admitir ningún documento que sirva de garantía al interesado?’. Esta es una equivocación, porque además del título de inscripción y de la acción propiamente dicha, hay el recibo. Cuando un individuo vaya a depositar en el Banco la cantidad que exija el Gobierno, no se le dará el título de inscripción, porque la sociedad no está constituida; pero se le dará su recibo, y después este recibo, que representa la cantidad depositada, se presenta en las oficinas de la compañía y entonces se le da la inscripción, y la acción no se emite hasta que esté dado todo el capital. Por eso dice la Comisión ‘título y acción’, porque en esto está comprendido, no sólo la acción, sino también la inscripción y por eso ha excluido todo otro documento’.*⁹²⁵

El Diputado Sr. Gonzalo Morón agradece al Sr. Bertrán de Lis la aclaración y puntualiza:

*Relativamente a lo que ha indicado el Sr. Bertrán de Lis para poner en armonía el artículo 9 con el 12, estoy enteramente de acuerdo; sólo que yo me he expresado así porque en el giro de operaciones ordinarias que se acostumbran en esta clase de negocios no se han dado recibos, sino acciones provisionales o títulos provisionales de acciones*⁹²⁶.

El tema queda aclarado de esta manera. A partir de la entrada en vigor de la Ley no pueden emitirse acciones provisionales.

2. Diferenciación entre suscripción y desembolso

En la segunda sesión de los debates en el Congreso de los Diputados (el día 21 de abril de 1847) sobre el articulado del PL 1848 presentado por la CCD, se discutió la redacción del artículo 7⁹²⁷. Tomó la palabra el Diputado Sr. Mendizábal para plantear que sólo se exigiera un 25%. La formulación de su propuesta fue ciertamente confusa, bien porque no la transmitió correctamente, bien porque no tenía clara la diferencia

⁹²⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1421.

⁹²⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 78, págs. 1419 y 1420.

⁹²⁷ Que decía así:

No se dará curso a la solicitud [de autorización de la compañía] cuando de los pedidos de acciones no conste la suscripción de una mitad por lo menos del capital de la compañía. Las cartas de pedido de acciones constituirán por sí una obligación legal

entre suscribir y desembolsar acciones. Esto permitió que el Secretario de la CCD, el Sr. Rodríguez Rivas, lo explicara en dos interesantes párrafos:

Yo diré a S. S. [al Diputado Sr. Mendizábal] que hay muy grande diferencia entre suscribir la mitad del capital y hacer efectivo el capital de una compañía. A esta Ley preside una idea de la cual no sé si se habrá hecho cargo el Sr. Mendizábal, a saber: que todas las operaciones las ha de decidir la junta general de accionistas. Al formarse la sociedad por medio de la voluntad de los accionistas, puede establecerse en los estatutos o reglamentos hasta qué parte del capital se quiere comprometer en los ensayos, y si hechos estos ensayos no se satisfacen las esperanzas de los socios, puede la misma junta decidir la disolución de la sociedad; en este caso el compromiso de suscribir la mitad del capital ningún perjuicio irroga.

(...) repetiré nuevamente que ningún perjuicio puede resultar a las sociedades de la formalidad que por este artículo se exige de haber de estar suscrita la mitad del capital, porque esto no quiere decir que esta mitad del capital se haya de hacer efectiva; esto dependerá de la voluntad de los suscriptores, que podrán muy bien establecer al fundar la sociedad que se invierta el 10,15 ó 20% en los primeros ensayos, para si éstos no corresponden a las ventajas que se han prometido, decidir si ha de continuar o no la sociedad.⁹²⁸

3. Fijación del límite de desembolso mínimo

El artículo 9 del PL 1848 presentado por la CCD decía lo siguiente:

Cuando se trate de una compañía para cuyo establecimiento baste la autorización Real, y el Gobierno juzgare la empresa de utilidad pública, lo declarará así a los recurrentes, aprobando desde luego la escritura social y los estatutos y reglamentos, y determinando la parte del capital que la compañía haya de hacer efectiva antes de obtener el Real decreto de autorización.

Esta parte no podrá exceder en ningún caso de un 25 %.

En el caso de que el ministro por cuyo conducto haya de resolverse la solicitud disienta en todo o en parte de lo consultado por el Consejo Real, se expedirá la resolución oyendo al Consejo de Ministros⁹²⁹

En la sesión del Congreso en la que se discutió la redacción de este artículo, el Diputado D. Juan José Fuentes, tomó la palabra para decir que, en su opinión, la redacción era defectuosa pues parecía que en ningún caso se podría desembolsar más del 25 % antes de obtener la autorización. Si se pretendía que el Gobierno no pudiera exigir un porcentaje superior, había que dejar libertad a las compañías para que ellas voluntariamente pudieran exigir un desembolso superior a ese 25 %. Así planteó su propuesta:

⁹²⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1464.

⁹²⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, pág. 1392.

(...) encuentro que está mal redactado el artículo, porque debía decir: "El Gobierno no podrá exigir en ningún caso que se haga efectivo más que el 25% del capital". Dicho como está en el artículo, parece que las sociedades no tienen facultad para desembolsar un 30% o lo que les acomode, y yo creo que cuanto más se desembolse, tiene la sociedad más arraigo, porque uno de los males de las sociedades anónimas, ha sido haber pedido poco capital y luego pedir más, cuando tal vez algunos suscriptores no contaron más que con los fondos para pagar el primer desembolso.

Insisto en que esto se explique, que se diga que el Gobierno es quien no puede exigir más que el 25%, porque según el artículo está redactado, parece que obliga a las sociedades a no desembolsar más que el 25%. Ruego a la Comisión que explique este punto, porque mi deseo no es otro que dar claridad a la ley.⁹³⁰

El Sr. Miota, miembro de la CCD, respondió diciendo que, en su opinión, tal y como se encontraba redactado el artículo 9, quedaba suficientemente claro que una sociedad podría desembolsar más de un 25 % antes de recibir la autorización, pero que el Gobierno no podía exigir más allá de esa cantidad.

El Sr. Fuentes se congratuló de coincidir en las apreciaciones, pero creyó que

(...) sería conveniente explicar más el artículo diciendo: "El Gobierno no podrá exigir más que el 25%". Con esto creo que ganaría mucho el artículo. De cualquier manera, es un bien haber promovido la cuestión, y me doy por satisfecho.⁹³¹

El Sr. Miota comprende que la propuesta es acertada y la acepta, proponiendo que se apruebe el artículo 9 en los siguientes términos:

Cuando se trate de una compañía para cuyo establecimiento baste la autorización Real, y el gobierno juzgaré la empresa de utilidad pública, lo declarará así a los recurrentes, aprobando desde luego la escritura social y los contratos y reglamentos, y determinando la parte del capital que la compañía haya de hacer efectiva antes de obtener el real decreto de autorización.

El gobierno no podrá por razón de esta parte exigir en ningún caso más de un 25%.

En el caso de que el ministro por cuyo conducto haya de resolverse la solicitud disienta en todo o en parte de lo consultado por el Consejo Real, se expedirá la resolución oyendo al Consejo de Ministros.⁹³²

La nueva redacción del segundo párrafo no fue alterada en el Senado ni en la CMC-S, pasando a la versión final del texto legal.

⁹³⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1465.

⁹³¹ Ídem.

⁹³² Ídem.

C) ACCIONES NOMINATIVAS O AL PORTADOR (ARTÍCULO 12 DEL PL 1848)

Probablemente esta cuestión es la que se trató con mayor extensión en los debates parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado. Las intervenciones y argumentaciones discurrieron por varios temas nucleares y básicos del concepto de compañía por acciones. Las intervenciones aluden desordenadamente a esas cuestiones, produciéndose muchas referencias cruzadas en las respuestas, réplicas y contrarréplicas. Por este motivo, resulta preferible exponer un resumen de las intervenciones según se recogen en las actas de las Cámaras Legisladoras, pues un análisis independiente de cada uno de los temas exigiría enmarcar cada intervención sobre la cuestión debatida y se perdería el hilo conductor.

Entre todos los temas tratados, se pueden destacar como más fundamentales, en relación con la esencia o concepto de compañía por acciones, los dos siguientes.

En primer lugar, las acciones al portador se relacionan con la transparencia respecto a la identidad del accionariado. A este respecto, se pueden señalar dos posiciones antagónicas entre sí. La de quienes entendían que las compañías por acciones (en concreto las “anónimas”, es decir, de las que no se conoce la identidad de sus socios) eran sociedades puramente capitalistas en las que lo único relevante es el desembolso del capital, siendo insignificante el titular de las acciones (sus representantes fundamentales fueron Sáinz de Andino y Bravo Murillo). Y la otra, correspondiente a quienes aun concediendo una gran importancia a los elementos capitalistas de la compañía por acciones, se oponían al anonimato de los socios y de esta manera evitar fraudes y abusos por conflictos de interés y ocultación de información.

En segundo lugar, las acciones al portador permitían a los inversores que no querían figurar en los registros la posibilidad de invertir sus patrimonios en empresas comerciales. Esta es otra de las características básicas de las compañías por acciones. Uno de sus mayores defensores fue Sáinz de Andino. Frente a esta postura, la mayor parte de los Senadores intervinientes en los debates eran partidarios de alejar a esos inversores que ponían como condición no aparecer vinculados a las compañías. Preferían perder esos inversores, si realmente fuera cierto que se iban a perder.

Con independencia de los dos temas citados, cabe destacar una interesante preocupación de varios Senadores consistente en la equiparación de las acciones al portador con el papel moneda o los billetes de banco. Esto podía suponer un grave peligro (como se recordará, en el momento de debatirse el PL 1848 no hay ninguna ley sobre bancos y entidades de crédito) que debía evitarse por todos los medios. Esta preocupación, que puede sorprender al lector, parte de la base de que algunas compañías se habían comprometido a reintegrar el valor de sus acciones a quienes lo solicitaran. Lógicamente esta operación ponía en peligro la viabilidad de la empresa y podía ser consecuencia de operaciones financieras que nada tenían que ver con el objeto social de la compañía.

El estudio de la materia de las acciones nominativas y al portador en los debates parlamentarios, como se decía al principio de este epígrafe, es muy interesante. El

artículo clave es el 12⁹³³. En la primera redacción de la CCD se permitía hasta un tercio de acciones al portador. Así pasó por el Congreso y por la CS. Dos enmiendas de sendos Senadores obligaron a la CS a proponer un texto en el que sólo se contemplaban las acciones nominativas, que aprobó por mayoría el Senado, posteriormente asumió la CMC-S y, finalmente, pasó a la versión definitiva. Cabe destacar que es el único punto sustantivo en el que tras largas y detalladas discusiones la postura de la CS y del Gobierno fue derrotada por la mayoría de los Senadores.

1. Debates en el Congreso de los Diputados

En el debate sobre la redacción del artículo 12 del PL 1848 presentado por la CCD, tomó la palabra el Sr. Fuentes para decir que no entendía por qué la CCD había variado la redacción respecto al PL 1848 presentado por el Gobierno el 26 de febrero de 1847. Comparemos el texto de las dos propuestas.

El PL 1848 del Gobierno decía:

*Las acciones de las sociedades anónimas y comanditarias serán nominativas y estarán numeradas.*⁹³⁴

El texto del PL 1848 presentado por la CCD era el siguiente:

*Hasta que se haya declarado constituida la compañía no se podrá emitir ningún título de acción. Las acciones en que se divida el capital de la compañía estarán numeradas y serán nominales en sus dos terceras partes a lo menos. No podrá emitirse ninguna al portador sin que previamente se haya entregado su importe total en la caja de la compañía.*⁹³⁵

Para el Diputado D. Juan José Fuentes, las acciones al portador constituían un peligro difícil de controlar y propuso suprimirlas conforme al siguiente razonamiento:

*... los títulos al portador son anónimos, circulan como billetes, y por consiguiente fáciles de falsificar, pues que no se pueden tomar respecto de ellos, como con los billetes de banco, precauciones y garantías. El resultado es que, en mi concepto, no deberían admitirse títulos al portador.*⁹³⁶

La contestación a esta propuesta la hizo el Sr. Bertrán de Lis, miembro de la CCD, quien, aun comprendiendo las razones del Diputado Sr. Fuentes, entendía que era

⁹³³ Dice así el citado artículo:

Hasta que se haya declarado constituida la compañía no se podrá emitir ningún título de acción. Las acciones en que se divida el capital de la compañía estarán numeradas y se inscribirán en el libro de registro que habrá de llevarse necesariamente a nombre de la persona o corporación a quien correspondan (el subrayado en nuestro).

⁹³⁴ En las actas del Congreso se recoge el artículo 7 del citado PL 1848 (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, pág. 653) que, si bien tiene relación con la materia, en realidad se debería haber hecho referencia al artículo 4 que se ha transcrito. Dispone el artículo 7 lo siguiente:

Hasta que se haya declarado oficialmente constituida la sociedad, no se podrán emitir las acciones ni procederse por sus fundadores y gerentes a acto alguno de administración social.

⁹³⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 80, pág. 1393.

⁹³⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1465.

conveniente permitir la emisión de acciones al portador porque, en primer lugar, así se hace tanto en España como fuera de España:

*...lo ha hecho la Comisión porque es general, es general en España y fuera de España; en segundo lugar, porque es conveniente para las compañías, y no hay una razón de justicia para privarlas de esta comodidad y conveniencia de emitir acciones al portador.*⁹³⁷

En segundo lugar, porque hay personas que quieren permanecer en el anonimato y tienen, en su opinión, derecho a ello. Así dijo el Sr. Bertrán de Lis:

*Hay más: puede llegar el caso de que algunas personas no sólo quieren escudarse con el anónimo que llevan consigo esas sociedades, sino que deseen otro anónimo más; pueden desear no dar su nombre a la compañía, y para eso es conveniente la facultad que se da a las compañías de emitir acciones al portador.*⁹³⁸

En tercer lugar, se refirió a la preocupación manifestada por el Diputado proponente en cuanto al peligro de falsificación de los títulos al portador. Esta fue la argumentación, quizá no muy clara ni convincente:

*Se dice que será muy difícil evitar las falsificaciones que pueda haber en esa clase de acciones: a eso contestaré yo al Sr. Fuentes que quizá sea más fácil hacerlo por las compañías que no por el gobierno, pues tendrán más miedo porque les interesa, y tendrán recursos para ello que muchas veces no están en manos del gobierno. El interés individual es sabido que indudablemente es una garantía más eficaz para asuntos de esta clase que las providencias del gobierno. Y he aquí por qué la comisión no ha creído conveniente privar a las compañías de la facultad de emitir acciones al portador.*⁹³⁹

La propuesta fue rechazada. Pero otro Diputado, el Sr. Miquel Polo, insistió en la supresión de las acciones al portador en contra del criterio del Sr. Bertrán de Lis, es decir, de la CCD. Estas son sus razones⁹⁴⁰:

Después de esto, acerca de los inconvenientes que habría en que no se permitieran acciones al portador, no estoy enteramente de acuerdo con lo que acaba de decir el señor Bertrán de Lis, porque hay muchas compañías que no tienen tales acciones y han prosperado notablemente. Y si el objeto de esta Ley es poner coto al agio y al juego de que se ha visto abusar, encuentro que ese objeto se conseguiría mucho mejor con que no hubiese acciones al portador. Para las transacciones de este género no se necesitan más que el portador y el comprador, y para las acciones que no son de esta clase se necesitan por lo menos cuatro operaciones...

A continuación describió el Sr. Miquel Polo⁹⁴¹ el procedimiento de transmisión de acciones nominativas:

⁹³⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1466.

⁹³⁸ Ídem.

⁹³⁹ Ídem.

⁹⁴⁰ Ídem.

- *el que vende da noticia de su enajenación, y tiene que presentarla para la toma de razón,*
- *el comprador tiene que dar igual aviso y que se reconozca como actual poseedor,*

De esta manera se evitaban los posibles fraudes que se podían cometer en la transmisión de las acciones al portador. Y terminó este apartado haciendo una interesante alusión al caso de quiebra de la sociedad:

Además, en un caso de quiebra todas las acciones al portador desaparecen, lo que no sucede con las demás.

Pero aquí no termina la intervención del Sr. Miquel Polo, pues también aludió al hecho, censurable en su opinión, de que haya inversores que quieran permanecer en el anonimato a toda costa:

Dice el señor Bertrán de Lis que hay muchas personas que tienen cortedad o vergüenza de que se sepa que tienen participación en compañías de esta clase, y por eso debe haber acciones al portador. Yo siento decir a S. S. que me parece serán muy tristes compañías cuando no quieren se sepa pertenecen a ellas. Por todo esto yo creo que no sería un mal que no hubiese acciones al portador.

Otro miembro de la CCD, el Diputado Sr. Miota, respondió al Sr. Miquel Polo en la misma línea que hizo previamente el Sr. Bertrán de Lis:

(p)or más que se diga, no hay tan graves inconvenientes como cree S. S. en que se emitan acciones al portador; pues sin que sean compañías tristes como dice S. S. hay muchas personas que no quieren sonar como accionistas, ya por no concurrir a las juntas, ya por no tener cargos en las sociedades, ya por otras razones particulares. Y así como hay personas que les gusta figurar en todas las sociedades y asistir a todas las juntas, hay otras muchas que no quieren ni aunque suene su nombre en ninguna de ellas.⁹⁴²

A lo que puntualizó el Sr. Miquel Polo:

... si me permite S. S. rectificaría una equivocación, y es, que el asistir a las juntas o tomar cargos en las sociedades no es obligatorio, sino enteramente voluntario.⁹⁴³

El Diputado Sr. Miota acepta la corrección y termina la discusión haciendo referencia de nuevo a esas personas que sólo invertirían en sociedades a las que no tengan que desvelar su identidad:

... el hecho es que hay personas que no quieren figurar ni que conste que son accionistas, aun cuando se interesen en las empresas de las compañías, y lo que

⁹⁴¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1466.

⁹⁴² Ídem.

⁹⁴³ Ídem.

*se quiere en el artículo es facilitar que estas personas puedan interesarse, y se fija un máximo para las acciones al portador, cuales la tercera parte.*⁹⁴⁴

El texto que se acaba de transcribir pone de manifiesto la idea comentada en el capítulo sobre el concepto de compañía mercantil por acciones según la cual una nota característica de dichas sociedades era la captación de patrimonios improductivos que por motivos históricos, sociológicos o religiosos no podían aparecer formalmente vinculados a empresas mercantiles.

2. Debates en el Senado

a) Las enmiendas del Marqués de Vallgornera y del Sr. Pérez de Seoane

En la primera sesión en la que se debatió el PL 1848 en el Senado, el día 22 de diciembre de 1847, al iniciarse la discusión sobre el artículo 12⁹⁴⁵, el Secretario de la Cámara puso en conocimiento de los Senadores la existencia de dos enmiendas a este artículo. Ya se atisbaba que el reconocimiento de las acciones al portador iba a ser polémico. El Secretario anunció de la siguiente manera las enmiendas:

Hay dos enmiendas; de estas dos enmiendas, la que más se separa del dictamen es la del Sr. Marqués de Vallgornera, que dice así:

En uso de las facultades que me concede el Reglamento, propongo la siguiente enmienda:

Artículo 12. Se suprime toda la parte del artículo que sigue a las palabras “serán nominales;” por manera que el artículo dirá:

Hasta que se haya declarado constituida la compañía no se podrá emitir ningún título de acción. Las acciones en que se divide el capital de la compañía estarán numeradas y serán nominales.

Palacio del Senado 21 de Diciembre de 1847

El Marqués de Vallgornera.

La del Sr. Seoane al mismo artículo está concebida en estos términos:

*Se suprimirán las palabras que siguen a las de “estarán numeradas” y se añadirá: y en el libro de registro de acciones que habrá de llevarse necesariamente, se inscribirán siempre a nombre de la persona o corporación a que correspondan.*⁹⁴⁶

Comenzó el Marqués de Vallgornera su discurso haciendo referencia a dos *gravísimos inconvenientes* presentados por las acciones al portador.

⁹⁴⁴ Ídem.

⁹⁴⁵ Se recoge, para facilitar la comparación el texto completo del artículo 12:

Hasta que se haya declarado constituida la compañía, no se podrá emitir ningún título de acción. Las acciones en que se divide el capital de la compañía estarán numeradas, y serán nominales en sus dos terceras partes a lo menos. No podrá emitirse ninguna al portador, sin que previamente se haya entregado su importe total en la Caja de la compañía. (DsC. Senado. Sesión de 18 de diciembre de 1847. Apéndice Segundo al núm. 16, pág. 252).

⁹⁴⁶ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 273.

El primero, se refiere al aumento de la masa de papel al portador existente en aquella época en Madrid que incluía la deuda del Estado en títulos al portador, las cuentas corrientes de los Bancos y el papel emitido por algunas compañías mercantiles. El Ministro de CIOP había citado como dato estadístico que en ese momento, el capital suscrito por todas las compañías anónimas era de unos 6.000 millones de reales. Por la tanto, se podrían emitir hasta 2.000 millones de reales al portador (un tercio, según preveía el artículo 12). La cifra global le parecía al Marqués de Vallgornera extremadamente peligrosa y de todo punto de vista inconveniente que existieran estas acciones al portador:

*¿Para qué se quiere esa tercera parte de acciones al portador? ¿Para qué? Para que la compra y venta sea más activa, más rápida, más animada; para que suban las acciones a un nivel forzado y puedan los especuladores, que conocen por dentro el estado de una Sociedad, y que acaso están al frente de ella, enajenar las acciones a un precio excesivo, sin que se diga ni se sepa que el vendedor es uno de los directores. Las formalidades que exige el endoso de una acción nominativa; el conocimiento de la persona que vende, son garantías para el comprador, garantías que podrán estar demás en los contratos de buena fe; pero que son sumamente atendibles y provechosas cuando no se procede de buena fe.*⁹⁴⁷

El segundo grave inconveniente para el Marqués de Vallgornera consistía en que las acciones al portador fomentaban la corrupción.

*Estas acciones son un medio de corrupción para que se interesen en las operaciones ciertas personas influyentes sin dar sus nombres, y este medio es inmoral hasta el extremo. (...) En este caso los que se interesan de veras en la compañía, que tienen fe en ella y confianza en sus gestores, ¿Por qué no han de dar su nombres, y evitar de este modo la duda y la sospecha de si tienen o no interés en tal o cual empresa, y si este interés les ha inclinado a obrar de un modo favorable a ella sin razón ni fundamento? Pues que sean todas las acciones nominales; que se sepa quiénes son los interesados en las empresas; y si algún día uno de ellos está llamado para probar o desaprobar una medida que tenga relación con aquellos intereses, tendrá que recusarse, y la moralidad pública será acatada; la calumnia más mordaz no hallará pábulo ni aun pretexto para odiosas imputaciones.*⁹⁴⁸

TEDDE⁹⁴⁹ relaciona la desconfianza generada por la fusión del Banco de San Fernando con el de Isabel II a principios de 1847, que, por motivos políticos propició un trato más favorable a los accionistas de este último Banco e incrementó la desconfianza de los cuentacorrentistas, disminuyendo sustancialmente sus depósitos a la vista. Dice este autor que *(l)a reacción del Gobierno fue, en esos años, la de imponer un rígido control a la actividad financiera, en la creencia de que la libertad de movimientos de capitales generaba la especulación, y que era ésta la causante de la crisis. En 1848, la nueva ley de sociedades anónimas prohibía las acciones al portador.*

⁹⁴⁷ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 274.

⁹⁴⁸ Ídem.

⁹⁴⁹ TEDDE DE LORCA, P. (1981): *Madrid y el capital financiero...*, págs. 15 – 16.

b) Dictamen de la CS sobre la enmienda del Marqués de Vallgornera

Tras la intervención del Marqués de Vallgornera recogida en el anterior epígrafe, el Presidente del Senado levantó la sesión, reanudándose el debate al día siguiente, 23 de diciembre. Por este motivo, la CS tuvo oportunidad de preparar un extenso dictamen por escrito a la enmienda propuesta.

El dictamen de la CS⁹⁵⁰ comienza poniendo de manifiesto el abuso que se había cometido con las acciones nominales (o nominativas), pues en algunas compañías se

⁹⁵⁰ Aunque se resumen los puntos más importantes del dictamen, parece conveniente transcribirlo íntegramente (se recoge en el DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 276) por si se quieren leer con detenimiento las argumentaciones en favor de las acciones al portador. Dice así el dictamen:

El Sr. Marqués de Vallgornera quiere que se suprima en esta Ley la facultad que por el artículo 12 se concede para poder emitir en acciones al portador hasta la tercera parte del capital de la compañía. Le parece a S. S. más franco, más noble y menos susceptible de abusos el que todas las acciones se emitan y encabecen a favor de nombres propios de personas.

Quizás no es tan temible como a S. S. le parece le peligro del abuso que pude cometerse por la emisión y circulación de las acciones al portador.

Acaso haya sido mayo el que ejemplos recientes nos manifiestan haberse cometido por los tenedores de acciones nominales.

En efecto, el abuso ha existido, no precisamente por la negociación de las acciones al portador, sino favorecido por los nombres de las personas que se colocaban al frente de las Sociedades proyectadas.

Era el interés principal de los autores de tales proyectos atraer para la realización de sus designios los nombres de personas respetables; y cuanto más alta fuese su categoría y más puros y limpios de tacha esos nombres, tanto más seguro era el éxito del agiotaje único fin que se proponían en tales empresas.

Pocas veces se calculaba en ellas la naturaleza del negocio, los medios de llevarlo a cabo, las utilidades presumibles de su dirección acertada, ningún examen, en fin, del objeto ostensible para el cual se creaba la Sociedad.

El examen se reducía a informarse de las personas que figuraban al frente de las empresas, y por la habilidad que se les suponía en los medios de hacer subir el precio de las acciones, y por la calidad de los demás individuos a quienes se colocaba como por adorno en las Juntas de gobierno, por esos datos establecían el curso que habría de darse y el valor que en corto plazo deberían adquirir las acciones.

En el acceso de la fiebre que tales negociaciones produjeron no se limitó el agio a las acciones, fuesen nominales, fuesen al portador; se extendió a las promesas de acciones de compañías fantásticas.

Véase pues, cómo no consiste el mal en que haya o se permitan acciones al portador.

Si por temor de los abusos se hubieran de suprimir todas las cosas que de ellos son susceptibles, no habría institución alguna que pudiera sostenerse. De todo se puede abusar; de todo se ha abusado; de todo se abusará, por más empeño que se forme en prevenir el daño. Es tributo a que está sujeta la debilidad humana.

Pero la ley no debe ser demasiado suspicaz. Debe suponerse siempre recta intención y propósito honesto de parte de los fundadores de una empresa comercial. Si se ponen obstáculos en demás, puede incurrirse en un extremo contrario al espíritu de asociación; puede sofocársele; y siendo activo, enérgico e independiente, no sufre trabas ni entorpecimientos.

Es indudable que si se restringe o elimina de esta Ley la facultad de emitir acciones al portador, se causa un gran perjuicio al espíritu de asociación, y por consiguiente a la conveniencia pública.

En las Sociedades anónimas lo que se requiere principalmente son capitales. Es de todo punto indiferente el nombre de los simples accionistas. El nombre y el crédito de esto serán condiciones necesarias para el régimen interior de la compañía, cuando no entreguen en la masa social el importe total de las acciones, sino una parte de él, y constituyen la obligación de ingresarlo en períodos determinados más o menos largos.

atraían a personas respetables y de alta posición con el único propósito de captar inversores, más que de profesionalizar la actividad de esa sociedad. Además, se refiere a una cuestión de política legislativa: de una situación se puede abusar, pero no por ello debe prohibirse. Por otro lado, suprimir las acciones al portador, según la CS, supondría un perjuicio al espíritu de asociación, pues en las compañías por acciones

*... lo que se requiere principalmente son capitales. Es de todo punto de vista indiferente el nombre de los simples accionistas.*⁹⁵¹

Dos razones más se recogen en el dictamen de la CS a la enmienda del artículo 12. La primera, se refiere a que muchos inversores no quieren que figuren sus nombres y si no se les permite utilizar las acciones al portador, no obtendrán rendimientos de sus capitales. La segunda, hace referencia a la mayor dificultad para defraudar en las acciones al portador, pues éstas han de desembolsarse totalmente; en cambio, en las acciones nominativas es más fácil el fraude pues puede haber una parte de capital pendiente de desembolso.

c) Réplica del Sr. Pérez de Seoane al Dictamen

El Senador Sr. Pérez Seoane, como se recordará autor de la segunda enmienda al artículo 12, es quien realizó la réplica al dictamen de la CS. Contestación larga y detallada que tiene como finalidad rebatir dos argumentos del dictamen. El primero, es que las acciones al portador facilitan que personas, que no quieren figurar en las empresas de las sociedades por acciones, puedan mover sus capitales e invertirlos en ellas. El segundo, es que las acciones al portador no han servido para fraudes ni especulaciones.

Respecto al primer argumento, objeta a la CS que desconoce la realidad concreta de los titulares de acciones nominativas y al portador:

... si [la Comisión] hubiera tenido ocasión para ver en manos de quiénes estaban esos títulos y quiénes eran los que buscaban las inscripciones o

Hay además muchas personas que por su estado, por su posición social, por modestia o por consideraciones privadas no quieren que figuren sus nombres en las empresas comerciales ni en otra alguna; y sería un mal mayor que el abuso que pudiera resultar el consentir que capitales de estas personas permanecieran ociosos; y no entrando en la circulación, fuesen infecundos.

Para esta clase de personas conviene dejar expedita la facultad de poderse emitir acciones al portador.

Y si se considera que debiendo ingresar el importe íntegro de las acciones en la caja sede la compañía, cooperan más eficazmente que los demás accionistas al fin de la empresa, no se concibe la causa legítima para eliminar semejante facultad.

El abuso es más fácil en aquellos efectos o títulos que representen menores valores. El que nada ha desembolsado, como sucede con el que es mero tenedor de promesas, de acciones, es el primero que promueve el agiotaje. Naturalmente le deberá seguir aquel que haya desembolsado una parte mínima del capital, y en último término aparecerá el capitalista tenedor de las acciones al portador. Y es menos probable en éstos el abuso, porque puede suponerseles como rentistas que aspiran únicamente a la colocación de sus capitales, y asegurar los réditos de ellos, y no como especuladores en alza y baja de las acciones.

Por estas razones cree la Comisión que debe desecharse la enmienda del Sr. Marqués de Vallgornera y aprobarse el artículo del proyecto.

Palacio del Senado 22 de Diciembre de 1847

Sáinz Andino. Pérez. J. M. Pérez. Francisco del Acebal y Arratia.

⁹⁵¹ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 276.

*acciones nominativas, habría visto, sabría que lejos de ser los hombres tímidos los que buscan los títulos al portador para que nadie sepa lo que poseen, esos mismos hombres tímidos que encerraban su dinero en oro en una calceta, son los que lo han impuesto en inscripciones nominativas, los que lo impusieron en la deuda pública de España. (...) Pues si esto sucedía hace más de cincuenta años, cuando los hombres que ocupaban cierta posición social creían, por razones de decoro, no deber comprometer su nombre ni aparecer interesados en cierto género de empresas, que hoy se tienen por lícitas y honestas para todos, sin excepción de ningún género, mal puede creerse que se necesite de medios que permitan ocultar el nombre para que acudan todos los capitales a interesarse en las Sociedades verdaderamente útiles.*⁹⁵²

Cabe destacar especialmente el contenido de la última larga frase, pues describe la evolución en la mentalidad empresarial en España desde principios del siglo XIX a 1847, tal y como se comenta en otros capítulos. En efecto, la mentalidad del Antiguo Régimen asumía que los nobles, los militares, los clérigos y los religiosos no podían inmiscuirse ni tener intereses en empresas mercantiles. Si deseaban participar en ellas invirtiendo sus patrimonios, tenían que hacerlo solapadamente, sin figurar, para no perder su honra (la de aquella época). Por eso utilizaban personas interpuestas o instrumentos jurídicos que permitían el anonimato (entre ellos, los títulos al portador). Pero dicha mentalidad había cambiado y algunas de esas empresas en los debates parlamentarios que se están comentando ya se tenían *por lícitas y honestas para todos, sin excepción de ningún género*, no siendo necesario seguir ocultando la identidad de las personas vinculadas a esas sociedades.

Volviendo a la crítica realizada por el Sr. Pérez Seoane, añade otro razonamiento en los siguientes términos:

*Pero hay más, señores; las acciones al portador no pueden jamás ser objeto de especulación o empleo de capital para los hombres tímidos. Los hombres tímidos no imponen sus capitales en títulos percederos; títulos que no ofrecen otra garantía que la de su material tenencia; títulos expuestos a que se quemen, roben o pierdan con la misma facilidad que un pliego de papel; títulos, en fin, que tienen todos los peligros inherentes a las cosas más frágiles y perecederas.*⁹⁵³

Este razonamiento volverá a salir a lo largo de las discusiones sobre el artículo 12. Las acciones al portador tienen un peligro de pérdida, deterioro, robo o falsificación, que no padecen las acciones nominativas al estar inscritas en el libro registro de acciones de la sociedad.

Una vez expuesto lo anterior, el Senador Sr. Pérez Seoane pasó a criticar el segundo argumento del dictamen de la CS, esto es, que las acciones al portador no dan origen a fraudes. Comenzó su disertación poniendo un ejemplo inventado sobre cómo se produce el fraude y especulación si una sociedad por acciones tiene títulos al portador⁹⁵⁴.

⁹⁵² DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 277.

⁹⁵³ Ídem.

⁹⁵⁴ Se reproduce en esta nota la narración íntegra de ese ejemplo porque expresa con detalle lo que pudo haber ocurrido en algún o algunos casos:

Continuó alertando sobre la posibilidad de utilizar las acciones al portador para perpetrar sobornos. En concreto, dice:

*En efecto, las acciones al portador son unos documentos que se prestan fácilmente al soborno, y al soborno más disimulado y más difícil de resistir por consiguiente. Las acciones al portador, pasando del dominio de uno a otro sin dejar rastro, constituyendo su propiedad la material tenencia, permiten que se tomen las Sociedades una parte o un interés por parte de aquellos que no se atreverían a tomarle si hubieran de dar su nombre y exponerse a la justa censura de favorecer los intereses de una sociedad en que eran partícipes. Cualquiera concebirá bien el uso cómodo que puede hacerse de las acciones al portador para ganar a un empleado o a una autoridad de quien depende la adopción de una medida bastante a mejorar el precio de las acciones, lo cual es tanto peor cuanto más difícil es presentar el estímulo del interés revestido de tales apariencias, que influya hasta en los hombres con reputación de honrados y celosos de su buen nombre; porque ¿no es muy fácil que con conciencia tranquila se preste uno a recibir acciones por 50, que al día siguiente, o al mes, por efecto de medidas a que pueda contribuir, hayan de valer 100?*⁹⁵⁵

Demos por establecida una Sociedad con acciones nominativas y al portador, y en la proporción que permite el artículo que ocupa la atención del Senado; proporción que permite sea mucho mayor el capital impuesto sobre las acciones al portador que sobre las nominativas [esta afirmación es contraria al contenido del artículo 12 del PL 1848]: supongamos también que todos esos valores se encuentran en el mercado a su verdadero nivel, o con alguna depreciación, y supongamos, por último, que hombres con influjo en la sociedad, con medios y con la opinión de entendidos y de crédito mercantil; crédito que por desgracia no va siempre acompañado de la honradez, se propongan hacer una especulación sobre las acciones. Pues bien; estos especuladores empiezan a recoger sigilosamente, esto es, sin dar sus nombres y sin levantar los precios notablemente, las acciones al portador; y cuando así lo han hecho, cuando han adquirido una porción de ellas, superior acaso a todas las nominativas; cuando saben en qué manos están colocadas las de esta última clase, y pueden calcular por consiguiente cuáles son las que pueden presentarse en el mercado una vez subido el cambio, y cuáles no, por encontrarse en poder de personas que las miran como una propiedad de renta, empiezan a comprar de las nominativas, dando su nombre rodeado del prestigio que acompaña siempre a la opinión de habilidad y acierto, y corre de boca en boca: Fulano y Mengano compran; hoy han comprado tantas; ayer compraron cuantas; y sube el precio de las acciones, y se justifica esta subida con alguna voz que se esparce con apariencia de fundada sobre los grandes beneficios que ha de producir a la Sociedad tal o cual medida, tal o cual circunstancia, y se favorece esa ilusión hábilmente por medio de la prensa, y suben las acciones al portador casi a la par que las nominativas sobre que se hacen esas compras ostentosas, si bien conservando siempre algún menor valor las del portador; y los hombres de buena fe, y los incautos que quieren honradamente mejorar su fortuna, y que creen hallar ocasión de conseguirlo empleando sus capitales en una Sociedad de tan lisonjeras esperanzas, acuden al mercado, y viendo que las acciones al portador tienen los mismos derechos a dividendos o beneficios que las nominativas, y que sin embargo hay en su precio una diferencia de menos de 1 o 2 por 100, solicitan y compran de las primeras, vendiéndoselas, sin saberlo ellos, los mismos que hacen en el mercado el papel de grandes compradores. Y resulta que los especuladores que compraron las 800 acciones, por ejemplo, para levantar el crédito del papel de la Sociedad, lo levantaron en efecto, y mientras compraron las 800 acciones nominativas vendieron por valor de 5.000 en las del portador, y realizaron grandes beneficios. Y luego que concluyen su operación en el día de las mayores ilusiones, empiezan a disiparse estas y empiezan a bajar las acciones, y empiezan a sentirse las funestas consecuencias del fraude y del agio, que a tantas familias ha sumido en la miseria (DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 278).

⁹⁵⁵ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 278.

Finalizó su exposición con otro argumento (que también volverá a aparecer en otras ocasiones): estas acciones son como papel moneda y, en su opinión, esto ha de prohibirse, como lo establecía el artículo 15 del PL 1848. Se transcriben a continuación sus palabras finales:

*Por último, señores, si no queremos que las Sociedades anónimas puedan emitir papel moneda sin autorización especial al efecto; si no queremos que por el artículo 12 se anule la prohibición que contiene el 15, que dice (Leyó), es preciso, que no puedan emitir acciones al portador, porque de lo contrario, y lo digo con seguridad; sí, señores, con toda seguridad, no podrá impedirse que las acciones al portador se conviertan en una especie de papel moneda, sean cuales fueren las precauciones que se tomen para impedirlo.*⁹⁵⁶

d) Respuesta de D. Pedro Sáinz de Andino al Marqués de Vallgornera y al Sr. Pérez de Seoane por sus enmiendas

La respuesta a la larga intervención del Senador Sr. Pérez Seoane la realizó el Presidente de la CS, D. Pedro Sáinz de Andino. Su respuesta fue también muy amplia. En la primera parte hizo una extensa referencia a los principios informadores de la regulación de las sociedades mercantiles, a la experiencia histórica de los años previos a 1847 en cuanto a la aplicación de dicha regulación, y, por último, al Derecho comparado, en concreto, Francia y Reino Unido.

Tras esta larga consideración, centró su intervención en la respuesta a las citadas enmiendas al artículo 12, presentadas por el Marqués de Vallgornera y el Sr. Pérez Seoane. Su primer argumento a favor de las acciones al portador se basó en la legislación francesa. Los artículos 35 y 36 del *Code* admitían la emisión de acciones nominativas y al portador, sin limitación alguna. Remarcó que estos dos artículos no fueron modificados ni enmendados durante todo el procedimiento legislativo en el que intervinieron el Consejo de Estado, el “Tribuniado” y el Cuerpo legislativo. El texto del Proyecto de Código fue objeto de numerosas reformas y modificaciones, pero la materia relativa a las acciones al portador fue admitida desde el primer momento sin ninguna oposición⁹⁵⁷.

⁹⁵⁶ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 279.

⁹⁵⁷ Estas fueron las palabras de Sáinz de Andino:

En Francia, se deja al arbitrio de las Sociedades que emitan sus acciones en títulos al portador o en inscripciones nominativas, según más les convenga, y sin imponerles traba ni límite alguno en que se emitan más ni menos de una o de otra clase. Así está declarado en los artículos 35 y 36 de su Código de comercio, siendo de notar que estas disposiciones fueron aprobadas y lo fueron sin discusión por todos los Cuerpos que concurrieron con su autoridad respectiva a la formación de aquel cuerpo legal. Ni en el Consejo de Estado, ni en el Tribuniado, ni en el Cuerpo legislativo, sin embargo, del riguroso examen que se hizo de todos y cada uno de los artículos del mismo Código y de las muchas e importantes reformas y variaciones que se hicieron sobre el proyecto que sirvió de base para la discusión, no se levantó una sola voz contra la emisión de las acciones en títulos al portador, ni a ninguno de los hombres eminentes, verdaderos maestros de las ciencias legislativas y económicas, que componían aquellas ilustres Corporaciones, ocurrió dificultad alguna en admitir y sancionar para las compañías anónimas una forma de títulos que sin inconveniente alguno estaba en práctica para representar los derechos de los acreedores del Estado y de varios fondos públicos. (DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 283).

Una vez expuesto el ejemplo de la legislación francesa, aportó dos estudios doctrinales para dar más solidez a su argumentación: los comentarios al *Code* del Barón Locré⁹⁵⁸ y de Emilio Vincens⁹⁵⁹. Ambos autores afirman que en la sociedad anónima, por su característica limitación de la responsabilidad al patrimonio social, la identidad de los socios no es relevante y, por tanto, la emisión de acciones al portador es lógica y coherente. Desarrolló esta idea con las siguientes palabras:

*... si la Sociedad es la que responde de todos sus contratos; si es la que posee y tiene en sus manos los fondos que la sirven de garantía para su cumplimiento; si la masa social es la que gana o la que pierde; y si ella es la que exclusivamente representa todos los derechos y todas las obligaciones, ¿qué importancia pueden tener los nombres de los accionistas, cuando la Sociedad es poseedora del importe de sus acciones?*⁹⁶⁰

Cuestión distinta, pero que refuerza su argumentación, es que las acciones no se encuentren totalmente desembolsadas, que existan dividendos pasivos pendientes. En ese caso, la identidad del socio es fundamental, pero una vez desembolsadas íntegramente las acciones, dijo Sáinz de Andino, es irrelevante la identidad del socio:

*Si este no hubiese ingresado íntegramente en la caja, sino que alguna parte del valor nominal de aquellas se hubiese retenido en poder de los accionistas, entonces sí que es de absoluta necesidad que consten las personas responsables a este reintegro, porque la Sociedad gestiona sobre el crédito de estos mismos accionistas; pero una vez que éstos hayan cubierto íntegramente la parte de capital conque deben contribuir al fondo común, única que aventuran en las operaciones sociales, lo que debe quedar es la acción, y el accionista nada importa que desaparezca.*⁹⁶¹

⁹⁵⁸ A quien cita de la siguiente manera:

El Barón Locré, en los comentarios que escribió sobre el Código de comercio, en Francia, donde consignó todas las actas de su discusión, después de referir que el artículo 35 había sido aprobado sin impugnación alguna, se propuso también, como yo lo hago en este momento, dar razón de los motivos de esta Ley, y los explicó diciendo que la forma que en ella se establece para incorporarse en las Sociedades anónimas, es peculiar de este género de asociaciones y contrario a las formas adoptadas para las demás Sociedades, pues que estas no pueden constituirse sino por el mutuo consentimiento de los individuos que las formen. ¿Y de dónde procede esta diferencia? De que en las Sociedades anónimas, sigue diciendo aquel sabio jurisconsulto, no existe una asociación de personas que se reúnan de común acuerdo para comerciar de consumo, sino una asociación de capitales en que las personas y sus circunstancias, sean las que se quieran, son indiferentes; en que son entre sí completamente extrañas las unas de las otras, y en que no tienen que reunirse ni ponerse de acuerdo para comerciar, ni para las gestiones administrativas de su propia empresa, a lo menos, como accionistas. (DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, págs. 283 y 284).

⁹⁵⁹ Su referencia a Emilio Vincens fue precedida de una sucinta precaución:

El ilustrado publicista Emilio Vincens, sin embargo de la rigidez de sus principios sobre la contratación mercantil, no hallaba tampoco inconveniente en la emisión de aquellos títulos. Luego que todo el importe de la acción, dice este escritor en su examen crítico del Código de comercio francés, ha sido entregado en la caja social, desde el momento mismo de la inscripción, y con tal que los estatutos no prescriban condiciones especiales para los que hayan de ser accionistas, es cómodo y útil para la sociedad que las acciones sean al portador: la ley lo permite, y en este caso la cesión se realiza por la simple entrega del título. (DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 284).

⁹⁶⁰ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 284.

⁹⁶¹ Ídem.

Pero este razonamiento no es correcto en su interpretación global. Efectivamente en las sociedades abiertas en general y en las compañías anónimas de aquella época en particular, la identidad del socio no es relevante. Desde luego mucho menos que para las sociedades colectivas (las más numerosas entonces) o las comanditarias simples. Pero eso no significa *que nada importa que desaparezca* el accionista, puesto que el accionista no se limita a desembolsar la totalidad del capital que suscribe, sino que, además, tiene una relación económica con la sociedad (dividendos, suscripción preferente, cuota de liquidación) y política (voto en Junta). Por lo tanto, debe entenderse que, la irrelevancia de la identidad del accionista no se concreta en las acciones al portador, sino, entre otras cuestiones, en la facilidad para invertir y desinvertir en las sociedades anónimas.

Después de las referencias al Derecho comparado y a las aportaciones doctrinales, Sáinz de Andino recurre a razonamientos empresariales, económicos y de gestión, que se sistematizan a continuación⁹⁶²:

- *... esta forma de títulos [las acciones al portador] es indudablemente uno de los medios más eficaces para fomentar las grandes compañías y atraer a ellas muchos capitales que de otro modo no vendrían a sus cajas. No entra ciertamente en el ánimo de muchas personas dar publicidad a sus medios de fortuna; sino que al contrario desean ocultarlos por motivos más o menos fundados, pero que siempre deben respetarse.*
- *Otros hay a quienes interesa tener sus fondos situados en términos que puedan disponer a la mano de ellos y darles el destino que convenga a su fines, sin que quede traza del movimiento que les hayan dado.*
- *No faltan tampoco algunos que por miramientos de delicadeza, por espíritu de preocupación, o por huir de compromisos, no quieren aparecer inscritos en las empresas mercantiles.*
- *Debe añadirse la consideración de que ejecutándose la enajenación de las acciones representadas en títulos al portador por la simple entrega de los títulos, la sociedad se preserva, no solo de las embarazosas formalidades con que deba hacerse la trasmisión de las acciones nominales, sino también de la responsabilidad que contrae la administración social en la legalidad de estos actos, teniendo muchas veces que intervenir en las cuestiones que se mueven sobre su validación.*
- *Y, por último, siendo innegable que la circulación de toda clase de valores de crédito influye poderosamente en sostener y mejorar sus precios, ¿por qué se negaría a las Sociedades anónimas la forma de títulos al portador, que facilitando la trasmisión sin formalidades, que siempre causan embarazos y ocupan el tiempo, contribuiría eficazmente a fomentar las negociaciones de sus acciones?*

En la última parte de su intervención sobre las acciones al portador, Sáinz de Andino aceptó que existían posibles peligros y abusos en su utilización (expuestos

⁹⁶² Recogidos en el DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 284.

detalladamente por los dos Senadores autores de las dos enmiendas al artículo 12), pero esto no era causa suficiente para justificar la prohibición de dichas acciones, pues sería desproporcionado y, llevando la argumentación al extremo, habría que evitar la constitución de compañías por acciones:

*... los abusos que puedan hacerse de las acciones al portador que emitan las Sociedades anónimas: son estos posibles sin duda alguna; pero esta posibilidad no debe retraernos de aprovechar las ventajas que nos presentan; y de no admitirse esta conclusión habrían de proscribirse enteramente todas las Sociedades por acciones, pues que también las que se representan por inscripciones nominales pueden aplicarse para los agios lamentables que se nos han expuesto.*⁹⁶³

Su discurso desarrolló después un argumento de gran consistencia. Las acciones al portador, conforme se proponía en el art 12 *in fine* del PL 1848 debían estar totalmente desembolsadas. Las acciones nominativas, se solían desembolsar en una proporción mínima al principio de la actividad empresarial, hasta que estuviera despejada y consolidada la posibilidad de desarrollar el objeto social. Por este motivo, la posibilidad de fraude y abuso en las acciones nominativas podía ser mayor que en las al portador. Estas fueron las palabras de Sáinz de Andino:

*... los títulos al portador no podrían entregarse a los accionistas sin que hicieran efectivo íntegramente el valor nominal de las acciones, lo cual ni estaba en la conveniencia, ni en la posibilidad de los que se inscribían en las Sociedades para especular sobre sus títulos; y por el contrario, las acciones nominales se obtenían con el desembolso insignificante de 2,5 o a lo más 10 por 100; desembolso que satisfaciendo las miras de los jugadores, a todos era fácil soportar y mucho más por el medio vicioso y altamente vituperable que se adoptó de que se recibiesen las acciones por las mismas Sociedades en garantía de los préstamos a que casi exclusivamente destinaban sus fondos. Así sucedía que con un corto capital se adquiría gran número de acciones nominales, y sobre estas se tomaban otras inscripciones, repitiéndose la operación hasta recorrer todas las Sociedades establecidas.*⁹⁶⁴

Acercándose al final de su exposición, Sr. Sáinz de Andino rebatió el argumento del Marqués de Vallgornera, autor de una de las enmiendas, según el cual, las acciones al portador permiten prácticas ilegales como el cohecho. Rebatía esta idea aduciendo que si esas personas influyentes se dejasen captar para semejantes actuaciones ilegales, si no hubiera acciones al portador podrían realizarlas también a través de testaferros, cómplices o participando en otros documentos o negocios⁹⁶⁵.

⁹⁶³ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 285.

⁹⁶⁴ Ídem.

⁹⁶⁵ Dijo textualmente Sáinz de Andino a este respecto:

... si con efecto la desmoralización de nuestros hombres públicos llegara hasta el extremo de caer en tales prevaricaciones, fácilmente se comprende que a falta de las acciones al portador hallarían el medio fácil y expedito de poner las inscripciones bajo nombres de personas de su confianza, o de sus mismos cómplices, o bien se les asegurarían sus participaciones en otra clase de documentos, cuyo rastro no sería posible seguir. (DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 285).

El final de su largo discurso fue una llamada a la confianza en el desarrollo del texto legal a través de su Reglamento de ejecución, en el que se trataría de asegurar la observancia de la Ley de 1848 e impedir que se produjeran los fraudes y abusos descritos a lo largo de la discusión sobre el artículo 12. Como se recordará, la versión final de la Ley de 1848 prohibió las acciones al portador y el Reglamento para su ejecución sólo contempla las acciones nominativas.

e) Intervención del Senador Sr. Peña Aguayo

Una vez finalizado el largo discurso de Sáinz de Andino pidió la palabra el Senador Sr. Peña Aguayo para apoyar las enmiendas del Marqués de Vallgornera y del Sr. Pérez Seoane. En su opinión, el artículo 12 en lo referente a acciones al portador era incompatible con el artículo 15, que prohibía emitir documentos al portador. Su propuesta era modificar el artículo 12 y no el 15 para mantener la prohibición de dichos títulos.

Ilustró con un ejemplo inventado las consecuencias de poder emitir acciones al portador hasta un tercio del capital⁹⁶⁶.

También se refirió a una alusión indirecta de Sáinz de Andino a la aparición de papeles de alguna sociedad anónima que, aunque no eran billetes del Banco de San Fernando, eran una especie de billetes al portador. Alusión que le preocupaba enormemente por los posibles abusos y fraudes que podría suponer.

Por último, terminó su breve intervención rebatiendo alguna de las razones expuestas por Sáinz de Andino:

.. la única que se ha dado y que he oído al Sr. Andino, es: que aquellas personas que tienen capitales y que no quieren que se sepa que los tienen, los imponen en estas Sociedades, y por este medio circula el dinero. Esta razón para mí no tiene fuerza ninguna: yo no quisiera que hubiera capitales en circulación cuyo dueño se ignore: todo lo contrario; pero esto va en opiniones, pues unos están en este sentido, y otros en el contrario. La facilidad de extraviarse estas acciones; la facilidad de hacerse agios y fraudes con ellas, son motivos que me han inclinado

⁹⁶⁶ El ejemplo que ofrece es el siguiente:

Pondré un ejemplo práctico. Supongamos que al día siguiente de la publicación de la ley se establece una Sociedad que emite 40.000 acciones de a 1.000 rs. cada una; en sus estatutos se establece queden 10.000 acciones en Caja para emitirlas cuando tengan a bien, lo cual es contra la ley. Se emiten las 30.000 acciones, que son nominales, y constituida ya la Sociedad, al cabo de quince o veinte días se anuncia por los periódicos que para mantener el crédito de estas acciones, todo el que se presente en la Caja con las acciones recibirá el importe de su valor nominal; esto no se puede impedir.

En virtud de este anuncio público, y de haber emitido ya, si lo ha tenido por conveniente, las otras 10.000 acciones al portador, que se reservaron, principian los accionistas a convertir sus acciones en dinero, a cualquiera hora que quieran, y por consiguiente tiene la Sociedad unos billetes de Banco iguales a los del Banco de San Fernando, que si bien no se llamarán así, sino acciones de tal o cual compañía, en el fondo será un papel que represente un capital que sirva para todas las transacciones y todos los cambios, y por consecuencia tiene la Sociedad un papel que está aprobado por el artículo 15. Esta es mi opinión. (DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, págs. 285 y 286).

*a haber pedido la palabra en contra de la Comisión, y a insistir a que se ponga un correctivo que evite males de trascendencia.*⁹⁶⁷

f) Discurso del Ministro de CIOP, D. Juan Bravo Murillo

Al terminar la intervención del Sr. Peña Aguayo, solicitó la palabra D. Juan Bravo Murillo, Ministro de CIOP. Comenzó planteándose si, con carácter general y no particular, debe reconocerse la legalidad de los títulos al portador. Dejando de lado otras cuestiones, apoyó el texto propuesto por la CS, es decir, a favor del reconocimiento de las acciones al portador y rebatió las críticas que habían realizado los Senadores Pérez Seoane y el Marqués de Vallgornera. A continuación se recoge un resumen de su réplica a las argumentaciones contrarias⁹⁶⁸:

- *Que puede perderse un título al portador; también puede perderse un Billeto del Banco. Todas esas razones, contestadas están.*
- *Que podrá favorecer al agio la existencia de esos títulos al portador en las Sociedades anónimas: yo podría dar la misma contestación porque lo mismo podría decirse de los títulos de la deuda pública, pero no lo hablaré porque hay otras razones mucho más fuertes. Cosa notable, señores, cosa singular, y sobre la cual llamo la atención del Senado: casi todas las Sociedades que existen en Madrid, la mayor parte de ellas por lo menos, tienen en sus estatutos la facultad de emitir hasta un cierto número títulos al portador, y son muy pocas las que lo han hecho; todas las acciones han sido nominativas. Ha habido agios en las Sociedades establecidas en Madrid, pues que tales son los fraudes que se han cometido, y esto es lo que nos ha movido a presentar esta Ley para su aprobación en el Senado. Pues si ha habido agios y no los ha habido en las acciones al portador, claro está que los agios se han cometido con las acciones nominativas. Pero prescindiendo de estas razones, viene en apoyo de lo que digo la experiencia, que es la que decide de todo.*

Que puede haber agio. Si se trata de impedirlo el Senado puede estar en la íntima persuasión de que no lo podrá conseguir; pero si se trata, como es lo único a que debe aspirarse, que sea lo menor posible, el Senado debe descansar en que se pondrá todo nuestro ahínco, que es lo único a que pueden aspirar los hombres en sus disposiciones, siempre insuficientes. El número de esas acciones se ha reducido a una tercera parte; el capital ha de haber sido entregado; los que tratan de hacer el agio tratan de hacerlo con poco capital, y no lo harán cuando hayan desembolsado todo o la mayor parte de él. Lo que decía el señor Seoane no podría ser con menos capital.

- *Que se pueden falsificar las acciones al portador aun con más facilidad que con las que llevan inscrito el nombre. Esto no es exacto, yo no lo reconozco, pero se puede demostrar; pero aunque fuera así, el argumento siempre valdría lo mismo; en mi opinión no vale nada. ¿Qué es una acción al portador? Un papel que ha de tener la firma, la autorización de todas las personas que por los títulos de la Sociedad deben constar en aquel papel. ¿Y una acción nominativa? Lo mismo, con la diferencia de que en ésta se dice que corresponde a D. Fulano*

⁹⁶⁷ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 286.

⁹⁶⁸ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, págs. 287 y 288.

de Tal; pero en lo tocante a las firmas es lo mismo en unas que en otras. Por consiguiente, se puede falsificar igualmente una que otra, porque el falsificador no le detendrá esta diferencia.

- *Podrá decirse que habiendo una persona conocida a quien pertenece, sería un obstáculo. Pero las acciones al portador, se ha dicho, y esto parece el argumento de mayor importancia, una vez que se admiten, van a dar a las personas que están encargadas de la dirección de las Sociedades anónimas la facultad de emitir papel moneda, y lo mismo concedida esta facultad habiendo acciones al portador que la facultad que se prohíbe en otro artículo de emitir papel moneda. Es necesario que veamos los modos que existen de hacer el agio; y ya ha indicado uno el señor Seoane; ha hecho alusión a otro, y supone que puede emitirse un título de acciones falsamente, sin que haya ingresado el capital que se supone: esto sería un abuso, y para esto no hay más medios que los de las leyes comunes, que castigan a los falsificadores como criminales.*
- *Por último, señores, el gran argumento, bien examinada esta cuestión, es el de que se puede abusar; y si esta consideración hubiera de influir en el ánimo del Senado para no prestar su aprobación al artículo que se discute, de seguro que no se haría ley alguna; porque impedir de todo punto el abuso, esto es imposible, y justamente esta Ley se hace para evitar los muchos que se han notado, para que disminuya su número; pero pensar que con ellas vamos a evitarlos todos y en todos casos, esto no es dado a los hombres. Si se concede que con esta Ley podemos evitar abusos y remediar los que hoy existe, la Comisión y el Gobierno habrán estado en su derecho, y el Senado podrá, apreciando las razones que he tenido el honor de emitir, resolver lo que crea conveniente, y que en mi concepto no es otra cosa que la aprobación del artículo, tal cual ha venido del Congreso de los Diputados.*

También indicó el Ministro que el ejemplo propuesto por el Senador Sr. Peña Guayo adolecía de alguna incoherencia que lo descalificaba como argumento válido⁹⁶⁹.

g) Últimas intervenciones de los Sres. Pérez de Seoane, Bravo Murillo, Marqués de Vallgornera y Sáinz de Andino

Al terminar la exposición del Ministro, pidió la palabra el Senador Pérez Seoane, autor de una de las dos enmiendas al artículo 12 (y que sería asumida casi íntegramente

⁹⁶⁹ Esta es la crítica realizada por el Ministro:

Ha indicado el Sr. Peña Aguayo que puede establecerse una Sociedad anunciando que va a emitir 40.000 acciones, que son las que representan el capital de la misma, quedándose en caja 10.000, y que después puede cometerse un fraude, por medio de un anuncio, manifestando que todo el que presente en un tiempo dado un título de 1.000 rs., por ejemplo, la Sociedad le abonará 2.000 rs. en efectivo. (...) Estoy persuadido de que no sucederá el caso de que una Sociedad anuncie en los papeles públicos, que todo individuo que le presente las acciones nominativas en un tiempo dado, recibirá en cambio de ellas, o su valor efectivo, o el doble en este mismo género; porque lo que hace una Sociedad es formar un capital, y establecer en cambio de él un papel que es una acción, con el fin de destinar este capital a objetos de la misma Sociedad; y de hacer lo que ha indicado el Sr. Peña Aguayo, resultaría muy perjudicada la Sociedad, porque tenía que dar parte de su capital por el papel que había emitido en equivalencia del mismo, por lo que quedarían desatendidos esos mismos objetos para que la Sociedad se había instituido. (DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 287).

por la CMC-S que dio la redacción final de la Ley de 1848), para realizar dos aclaraciones.

En la primera, trató de poner de manifiesto que no tenía las mismas consecuencias falsificar una acción nominativa que falsificar una acción al portador, aun cuando los requisitos formales de ambos títulos fueran prácticamente iguales:

*Ciertamente es tan falsificable una acción nominativa como una al portador; pero hay una gran diferencia, y es que la falsificación de la primera nunca puede aprovechar al falsificador, y la de la segunda sí, como quiera que de las acciones nominativas no se puede trasladar el dominio sino por medio de la transferencia hecha en los registros de la Sociedad, mientras que de las al portador se hace la trasmisión con la material entrega.*⁹⁷⁰

La segunda, se refería a la eventual utilización de las acciones al portador como billetes al portador:

*Otra equivocación es la de que para ver convertidas en papel moneda las acciones al portador sea necesario falsificar esos documentos, o cometer otros abusos. Yo he indicado, y creo con seguridad, que una vez autorizadas tales acciones pueden hacerse admisibles sin falsificación ni otro abuso, como moneda, como billetes al portador.*⁹⁷¹

Respecto a la primera aclaración, tomó la palabra el Ministro de CIOP para responder al Senador Sr. Pérez Seoane en los siguientes términos:

*El Sr. Seoane acaba de incurrir en una equivocación al pretender deshacer otra. Ha manifestado S. S. que en un caso, es decir, cuando las acciones son nominativas, la falsificación es estéril, y que en el otro no: es decir, cuando las acciones están representadas por títulos al portador; y se funda para ello en que en el primer caso el comprador puede ir a inquirir la validez de la acción nominativa por medio del libro registro de la Sociedad donde se halla expresado el nombre del interesado a cuyo favor se hubiese expedido. Pues yo digo al Sr. Seoane que lo mismo puede hacer un comprador de títulos al portador cuando desea saber si éstos son válidos o se han falsificado; porque viendo los libros de la Sociedad, y comparando aquellos títulos con el papel que ésta ha emitido, se deduce si se han falsificado o no los títulos, y en tal caso seguramente que sería igualmente estéril. Vea, por consiguiente, el Sr. Seoane cómo no existe esa diferencia que S. S. ha indicado.*⁹⁷²

Una vez depurados los argumentos de ambas posturas, volvió a intervenir el Marqués de Vallgornera para rebatir el discurso del Ministro de CIOP, desde *la región de los principios*. En concreto, pensaba que:

Hay que fijar de una vez la cuestión verdadera, a saber: primero, las acciones al portador ¿Son absolutamente necesarias para la formación de las Sociedades anónimas? Segundo, si no son necesarias, ¿son a lo menos convenientes?

⁹⁷⁰ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 288.

⁹⁷¹ Ídem.

⁹⁷² Ídem.

Tercero, los inconvenientes y perjuicios que traen consigo esa clase de acciones, ¿sobrepujan a su conveniencia y a sus ventajas?

*He aquí, señores, planteada la cuestión en su terreno, y traída a términos tan claros y tan lúcidos, que no es posible dejar de alcanzarla y comprenderla bien, aun cuando no se hayan hecho grades estudios en la jurisprudencia mercantil.*⁹⁷³

Resaltó los puntos de encuentro con el Gobierno y la CS: los documentos al portador están admitidos en los países de nuestro entorno; facilitan la contratación y su transmisión; las acciones al portador están admitidas por el *Code*; el CCom 1829 también las admite; etc.

Ahora bien, ¿son necesarias las acciones al portador?

*Las acciones al portador no son necesarias para la existencia de una sociedad anónima. Prueba de ello que, como ha dicho el Sr. Ministro, en setenta y tantas Sociedades que hay en España, y cuyo capital nominal raya en 6.000 millones, son muy pocas y muy contadas las que han hecho uso de esta facultad. No hablemos de Francia, donde millones de millones de francos se han empleado en los caminos de hierro por medio de Sociedades anónimas, y no tengo noticia de ninguna que haya emitido acciones al portador.*⁹⁷⁴

Visto que no son necesarias las acciones al portador, ¿son convenientes?

Son convenientes para facilitar las transacciones; lo son para los capitalistas que no quieren poner tan en evidencia sus capitales; lo son para aquellos que interesando en una compañía o empresa rival de otra, quieren asociarse a ambas sin que esto sea conocido. Pero estas ventajas, de algún peso si se quiere, están compensadas con tantos inconvenientes y tan graves, que en mi concepto pesan más que aquellas, y debe por consiguiente eliminarse esta facultad en la presente ley. (...)

*Si la Comisión cree más convenientes que nocivas las acciones al portador, ¿por qué las limita a una tercera parte? ¿Por qué exige en estas acciones el desembolso total e íntegro de su importe? A mí me parece que el dilema salta a la vista. Si son convenientes, ¿por qué se limitan a una tercera parte? Si son perjudiciales, ¿por qué se consiente una tercera parte?(...) ¿pero está segura la Comisión de que el límite de una tercera parte es suficiente, y que no sería mejor la cuarta o la quinta parte o a lo más un 10 por 100? Es, pues, un ensayo, una prueba lo que propone la Comisión. Pero en mi juicio no es este el momento propio para ensayos.*⁹⁷⁵

Llegados a este punto, el Marqués de Vallgornera se refirió a la cuestión del desembolso íntegro de las acciones al portador. Sáinz de Andino en su largo discurso enfatizó este tema para apoyar su postura a favor de las acciones al portador. Su razonamiento era sencillo: es más difícil que se produzca el fraude en las acciones al portador al tener que ser desembolsadas en su totalidad, que en las acciones nominativas

⁹⁷³ Ídem.

⁹⁷⁴ Ídem.

⁹⁷⁵ Ídem.

en las que no hay requisito mínimo de desembolso. En teoría es así, pero parece que en la práctica ocurría algo diferente, por lo que dijo el Marqués de Vallgornera:

*Y no se diga que los poseedores de las acciones nominales responden de la parte no desembolsada, y por consiguiente la Sociedad para sus operaciones la considera como efectiva. El que quiera saber lo que vale esta responsabilidad, no tiene más que dirigirse a los que están al frente de las Sociedades. Si se atreven a pedir cinco duros por acción, no habría un accionista que acudiese, y abandonando su acción y perdiendo la parte de capital entregada, quedaría libre al tenor de lo que previenen los estatutos de casi todas las Sociedades existentes y aprobadas por el Tribunal de comercio.*⁹⁷⁶

De estas palabras cabe concluir que, si bien el artículo 283 CCom 1829 regulaba la responsabilidad solidaria del cedente y cesionario en el pago de los dividendos pasivos, de hecho, los estatutos aprobados por los T. de c. establecían lo contrario. Similar reparo y crítica hizo Sáinz de Andino en su intervención de ese mismo día⁹⁷⁷. Si esto era así, se entiende mejor el empeño del Legislador por establecer que las *cartas de pedido de acciones* obligaran incondicionalmente a quienes las firmaran (artículo 7 de la Ley de 1848).

Después de concluir su discurso solicitando al Senado que vote a favor de la enmienda propuesta por él y por el Senador Sr. Pérez Seoane, le respondió (esta vez muy brevemente) Sáinz de Andino.

Respecto a la cuestión de por qué se fijó en un tercio el límite máximo de acciones al portador, la respuesta de Sáinz de Andino fue muy escueta:

*S. S. me permitirá que le diga que la Comisión ha creído que con una tercera parte era suficiente para que esos accionistas pudieran satisfacer sus deseos; por esto no se ha dicho que puedan emitir todo el capital que representa la Sociedad, sino solamente una tercera parte.*⁹⁷⁸

En cuanto a los posibles abusos y prácticas fraudulentas que podían ampararse en las acciones al portador, hizo una referencia a las facultades del Gobierno para controlar y seguir las sociedades anónimas, especialmente mediante la obligación de éstas de presentar sus balances anuales:

... es preciso tener en cuenta que estas Sociedades tienen sobre sí la inspección del Gobierno de S. M., y que entre otras cosas se les obliga ahora a presentar sus balances anuales. (...) En el Consejo Real, a cuantas Sociedades han venido a solicitar permiso para su instalación, a otras tantas el Consejo Real propuso, y S. M. lo ha aprobado, se les obligue a que presenten sus balances anuales: éstos no podrán verificarse sin que los jefes políticos tengan en ellos una intervención inmediata y pongan el visto bueno; y en vista de esto, ¿se insistirá todavía en los abusos que puede cometer una Sociedad emitiendo mayor número de acciones que una tercera parte, cuando pueden incurrir en gran responsabilidad? Pero si a pesar de todo llegase este caso, entonces el poder

⁹⁷⁶ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 289.

⁹⁷⁷ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 282.

⁹⁷⁸ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 289.

*del ministerio fiscal podría echarse sobre los delincuentes, y sin duda se les impondría la merecida pena, el condigno castigo.*⁹⁷⁹

El último argumento de Sáinz de Andino se refirió a la utilización práctica de las acciones al portador, pues, según los números oficiales que se manejaban, eran pocas en comparación con el total de acciones:

*De las acciones en títulos al portador, como ha dicho el Sr. Ministro de Comercio, y tengo por una verdad, se ha usado hasta hoy con suma parsimonia, a pesar de la facultad que conceden a las Sociedades sus estatutos, y por lo mismo este número de acciones nada perjudicaría ni a la estabilidad, ni a los intereses de la Sociedad. Creo, por tanto, que la observación del Sr. Marqués no es fundada.*⁹⁸⁰

h) Redacción final del artículo 12 del PL 1848

Después de estas palabras que ponen fin a la larga discusión sobre el artículo 12 del PL 1848, se puso a votación la redacción dada por la CS y fue desaprobado por la mayoría de los Senadores, acordándose que volviera a la CS para que presentara un nuevo texto al día siguiente, 24 de diciembre de 1847.

En efecto, al día siguiente la CS presentó un nuevo texto del artículo 12 en los siguientes términos:

*Artículo 12. Hasta que se haya declarado constituida la compañía no se podrá emitir ningún título de acción. Las acciones en que se divida el capital de la compañía estarán numeradas y se inscribirán en el libro de registro, que habrá de llevarse necesariamente a nombre de la persona o corporación a quien corresponda.*⁹⁸¹

Una vez leído, conforme preveía el Reglamento del Senado aplicable en aquel momento, debía procederse a la votación de la nueva redacción del artículo 12, pero el Senador Sr. López Ballesteros trató de reiniciar la discusión sobre la prohibición de las acciones al portador oponiéndose a la nueva redacción, tratando de volver al texto anterior de la CS. De una manera un tanto atropellada, trató de rebatir los argumentos de que las acciones al portador pueden ser instrumento de corrupción⁹⁸² y que pueden ser fácilmente falsificables. Pero, como se ha dicho, su exposición fue breve y tampoco aportaba nuevos argumentos contundentes, por lo que el Marqués de Peñaflorida pidió la palabra para interrumpir el discurso y exigir la votación de la nueva redacción. Tras una breve discusión⁹⁸³, se sometió a votación y fue aprobado el nuevo texto.

⁹⁷⁹ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, págs. 289 y 290.

⁹⁸⁰ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 290.

⁹⁸¹ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 292.

⁹⁸² Estas fueron sus palabras:

... entiendo que las acciones al portador no son instrumento especial de corrupción, sino como del mismo modo pudieran serlo las onzas de oro, los efectos públicos no endosables, u otros semejantes en que no se estampe el nombre del tenedor.

⁹⁸³ En la que se citó el artículo 68 del Reglamento vigente en aquel momento, que decía así:

Cuando se desapruebe el dictamen de una Comisión en todo o en parte, el Senado resolverá si ha de volver a ella. Si resuelve afirmativamente, la Comisión presentará nuevo dictamen para reemplazar al desaprobado, arreglándose a la opinión que prevaleció en la discusión.

Para terminar definitivamente este tema, quedaba pendiente una cuestión procedimental. Como se dijo al principio de este apartado, el artículo 12 del Dictamen de la CS, fue objeto de dos enmiendas. Una presentada por el Marqués de Vallgornera y otra por el Senador Sr. Pérez Seoane. Los contenidos eran diferentes, si bien coincidían en su objetivo de prohibir las acciones al portador. Pues bien, toda la discusión recogida anteriormente en las sesiones del 23 y 24 de diciembre tienen como base la enmienda presentada por el Marqués de Vallgornera. Pero quedaba pendiente la presentada por el Sr. Pérez Seoane, que tuvo un papel activo en la defensa de la enmienda del Marqués de Vallgornera.

Por este motivo, el Secretario del Senado (Medrano) señaló que

*sobre este artículo hay otra enmienda del Sr. Seoane, que es sustancialmente lo mismo que ahora se ha aprobado.*⁹⁸⁴

Y es que, efectivamente, en realidad la CS presentó como nuevo texto del artículo 12 el propuesto por el Sr. Pérez Seoane y no por el Marqués de Vallgornera. Por este motivo, el Sr. Pérez Seoane retiró su enmienda.

D) UNA CUESTIÓN TERMINOLÓGICA: ACCIONES “NOMINALES” O “NOMINATIVAS”.

Esta cuestión se planteó, en primer lugar, en los debates del Congreso. El Diputado D. Juan José Fuentes, propuso modificar el artículo 12 del PL 1848 para sustituir la denominación “acciones nominales” por “acciones nominativas”. Es interesante comprobar el interés por clarificar la expresión exacta para evitar confusiones terminológicas:

*Se llama a las acciones "acciones nominales" y yo lo llamaría como el Gobierno, "acciones nominativas". La palabra nominativa es más propia, más adecuada para este caso; la palabra nominal se aplica más bien a los valores, y por eso quisiera que se usara la palabra nominativa.*⁹⁸⁵

Efectivamente, el PL 1848 presentado por el Gobierno el 26 de febrero de 1847⁹⁸⁶ en su artículo 4 utilizaba la expresión “acciones nominativas”. El Diputado Sr. Bertrán de Lis, como miembro de la CCD, le contesta en los siguientes términos:

La otra observación de S. S. no es ciertamente de gran importancia. La comisión ha adoptado la palabra nominales porque la ha encontrado usada por el comercio general. Se usa también la palabra nominativas, y el gobierno la ha usado; pero la más general es la otra, y aunque la Comisión no tiene ningún empeño que se use de una o de otra, generalmente entiende que siempre se comprenderá bien la idea por el sustantivo que acompañe a este adjetivo, si nos es permitido ocuparnos aquí de una cuestión meramente gramatical. El hecho es

⁹⁸⁴ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 294.

⁹⁸⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1465.

⁹⁸⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 17 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 80, pág. 654.

*que siempre que se habla del valor se entiende y entenderá una cosa, y cuando se trata de la calidad de la acción se comprende bien diciendo si es nominal o al portador. Pero repito que la Comisión no hará en esto un gran empeño.*⁹⁸⁷

Aunque el representante de la CCD manifestó que a ésta le era indiferente usar la palabra “nominal” o “nominativa”, permaneció en el texto la expresión “acciones nominales”.

Cuando se discutió en el Senado la redacción del artículo 12, se presentaron dos enmiendas, una del Marqués de Vallgornera y otra del Sr. Pérez Seoane. A los efectos que ahora interesan, la enmienda del segundo es la que plantea de nuevo la cuestión terminológica. Propuso la supresión de la palabra “nominales” que utilizaba la Comisión en su dictamen,

*... palabra que en mi juicio es de equívoco sentido y de propiedad dudosa, y que debe reemplazarse por la idea que con ella se quiere expresar.*⁹⁸⁸

En su enmienda figuraba en texto alternativo al artículo 12, que el Sr. Pérez Seoane leyó íntegramente durante su intervención:

*... porque dice el artículo 12: “Hasta que se haya declarado constituida la compañía no se podrá emitir ningún título de acción. Las acciones en que se divida el capital de la compañía estarán numeradas y serán nominales en sus terceras partes a lo menos, etc.” y adoptada la redacción que yo propongo, diría: “Hasta que se haya declarado constituida la compañía no se podrá emitir ningún título de acción. Las acciones en que se divida el capital de la compañía estarán numeradas, y en el libro de registro de acciones que habrá de llevarse necesariamente se inscribirán siempre a nombre de la persona o corporación a quien correspondan.”*⁹⁸⁹

En su intervención justificó este cambio terminológico por dos motivos. El primero, y más importante, era evitar confusiones con la expresión “acción nominal” que entonces hacía referencia a aquéllas que tienen dividendos pasivos pendientes de desembolsar. Y, el segundo, se refiere a la conexión de estas acciones con el requisito de alguna manera previsto en el CCom 1829 de llevanza de un libro registro de acciones. Estas son sus explicaciones⁹⁹⁰.

Primer motivo:

... por acciones nominales se entienden aquellas cuyo capital inscrito no está entregado en la totalidad, y que así, de usar aquella palabra [nominales], podría confundirse lo nominal del capital con lo nominal para indicar la necesidad de que conste el nombre de la persona dueña de las acciones, y a cuyo favor están inscritas. La inteligencia equívoca, pues, que puede darse a esa palabra, y su propiedad no reconocida, es la que me ha inclinado a hacer su supresión.

⁹⁸⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1466.

⁹⁸⁸ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 276.

⁹⁸⁹ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 277.

⁹⁹⁰ Ídem.

Segundo motivo:

Y he hecho [la propuesta] reemplazando por ella la idea que expresa con el recuerdo al propio tiempo de la obligación que impone el Código de comercio, aunque no de un modo muy explícito, de llevar un libro de registro de acciones de semejantes compañías; recuerdo oportuno para suplir la falta de expresión del Código, que ha dado lugar a que no se lleve en todas las Sociedades de la manera que es necesario, para que sobre constar siempre los dueños de las acciones pueda conocerse con facilidad el curso de éstas en sus transmisiones. Yo creo que nadie puede desconocer la conveniencia de que se establezca en términos precisos la necesidad de llevar ese libro de registro de acciones.

El texto propuesto por el Sr. Pérez Seoane como alternativa al de la CS fue aprobado con alguna mínima variación y pasó a la redacción definitiva de la Ley de 1848. El texto final suprimió la palabra “nominales”, pero se debe señalar que no la reemplazó por “nominativas”⁹⁹¹.

E) OTRA CUESTIÓN TERMINOLÓGICA: “TÍTULOS DE ACCIONES” O “PROMESAS DE ACCIONES”

Esta otra cuestión terminológica, se planteó, como la comentada en el epígrafe anterior, en la misma sesión del Congreso de los Diputados (la del día 21 de abril de 1847). Fue breve y la inició el Diputado Sr. Miquel Polo diciendo que le parecía más propio hablar de “promesas de acción” en vez de “títulos de acciones”⁹⁹² como rezaba la primera frase del artículo 12 del Dictamen de la CCD, en ese momento objeto de un largo debate.

La CCD no aceptó esta sugerencia y, por medio del Diputado Sr. Miota, en esa misma sesión, respondió diciendo que no tiene sentido utilizar la palabra “promesa” por cuanto del contexto del artículo 12 se deduce que una vez constituida la sociedad, la acción es una realidad y no una promesa. Pensaba que se podrían utilizar otras denominaciones, pero le parecía que “título” es la palabra más acertada y, además, así se utilizaba por algunas sociedades. Se recogen a continuación sus palabras:

Su Señoría se ha opuesto también la palabra título; proponiendo se diga promesa de acción; pero no puede usarse de esta palabra, porque por el contexto mismo del artículo no es ya promesa lo que se hace sino que cesando de ser promesa, como es hasta que está constituida la sociedad, pasar a ser realidad; y como título es todo lo que da derecho o significa propiedad, por eso se ha adoptado esta palabra. Puede usarse la de cédula, como dice el Código de comercio, o de extracto, que en realidad es, pues los documentos de este género son una copia o extracto de lo escrito en el libro principal de la sociedad; pero

⁹⁹¹ El texto definitivamente aprobado fue el siguiente:

Hasta que se haya declarado constituida la compañía no se podrá emitir ningún título de acción. Las acciones en que se divida el capital de la compañía estarán numeradas y se inscribirán en el libro de registro que habrá de llevarse necesariamente a nombre de la persona o corporación a quien correspondan.

⁹⁹² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1466.

*no creo que sea de importancia esta variación, y sí que puede conservarse la palabra título con que se conocen los de algunas compañías, y hasta los del único Banco nacional que tenemos, cual es el de San Fernando.*⁹⁹³

F) LAS DENOMINADAS ACCIONES DE RESERVA

Con motivo de la discusión sobre la redacción del artículo 12 del PL 1848 presentado por la CCD (el día 21 de abril de 1847), el Diputado Sr. Fuentes, planteó varias cuestiones. Una de ellas se refirió a las denominadas “acciones de reserva”. Estas acciones, parece ser, eran una práctica habitual en bastantes compañías anónimas. Constituían un tercio del capital y la sociedad las reservaba hasta el momento en que se constataba que el objeto de la compañía era viable y se empezaba la actividad. Posiblemente daban lugar a especulaciones importantes en su cotización y colocación a inversores. Por este motivo, el Diputado D. Juan José Fuentes propuso limitar estas acciones de reserva o “fondo de reserva”:

*Uno de los inconvenientes de las sociedades anónimas son las acciones de reserva, y veo que sobre esto no se ha tomado ninguna precaución. La mayor parte de las sociedades emiten las dos terceras partes de las acciones y se reservan la otra tercera parte para emitir las cuando lleguen a tomar valor. Aquí es donde puede entrar el agio, y para evitarle creo que sería conveniente tomar alguna precaución respecto de estas acciones de reserva. Yo no quisiera que las compañías especularan más que con los objetos a que se dedican, no por este medio. Por consecuencia, creo que falta alguna cosa que añadir en este artículo respecto de esas acciones de reserva.*⁹⁹⁴

El Sr. Bertrán de Lis, miembro de la CCD, contesta al Diputado proponente. Inicia su respuesta refiriéndose al “fondo de reserva” como concepto intercambiable con el de acciones de reserva y después argumenta por qué no debe el PL 1848 limitar o regular estas acciones de reserva. Dice el Sr. Bertrán de Lis:

*Respecto al fondo de reserva debe decir la comisión que no encuentra justo que se prive de esta facultad a las compañías y se les fije cuál ha de ser en su caso, sino que debe dejárselas a su arbitrio. Y debe tenerse en cuenta que esto no lo podría tampoco evitar la ley, a lo menos a juicio de la Comisión.*⁹⁹⁵

Y da dos razones para esto:

*En primer lugar, si la ley se entrometiese a fijar cuál debía ser el fondo de reserva, se expondría a ser injusta, pues en unas compañías podría ser excesivo y en otras mezquino el que se fijase.*⁹⁹⁶

La segunda razón es especialmente importante, pues menciona un tema que pudo ser la causa de los abusos que citaba el Diputado Sr. Fuentes: la utilización por parte de los administradores de las sociedades de esas acciones:

⁹⁹³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1466.

⁹⁹⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1465.

⁹⁹⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1466.

⁹⁹⁶ Ídem.

*En segundo lugar, como he insinuado, sería ineficaz, porque si no se permitía que hubiese ese fondo de reserva no faltarían a los directores de las compañías medios para conservar o tomar en nombre suyo acciones que, con cualquier otro nombre, en realidad fuesen de reserva. Por esto, pues, la comisión ha creído que para huir de estos dos extremos, lo conveniente era dejar establecido que pudiese haber ese fondo de reserva a juicio de las mismas compañías.*⁹⁹⁷

La Comisión entendía que era muy difícil controlar la actuación de los administradores en relación al uso o abuso de estas acciones de reserva o fondo de reserva y, por ese motivo, optó por no regularlo.

G) LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES

El libro de registro de acciones no es un tema objeto de discusión durante los debates parlamentarios. Es una cuestión que surge de modo accidental, sobre todo entre los Senadores. Parece oportuno citar las intervenciones, pues ofrecen luces sobre la relación entre las acciones y el libro de registro y la importancia de éste.

El Senador Sr. Pérez Seoane, presentó una enmienda a la redacción del artículo 12 del PL 1848, que proponía varias modificaciones. Una de ella fue la supresión de la expresión “acciones nominales”, comentada en un epígrafe anterior del presente apartado. En la justificación de esta propuesta el Senador hizo referencia al libro de registro de acciones en los siguientes términos:

*Y he hecho [la propuesta] reemplazando por ella la idea que expresa con el recuerdo al propio tiempo de la obligación que impone el Código de comercio, aunque no de un modo muy explícito, de llevar un libro de registro de acciones de semejantes compañías; recuerdo oportuno para suplir la falta de expresión del Código, que ha dado lugar a que no se lleve en todas las Sociedades de la manera que es necesario, para que sobre constar siempre los dueños de las acciones pueda conocerse con facilidad el curso de éstas en sus transmisiones. Yo creo que nadie puede desconocer la conveniencia de que se establezca en términos precisos la necesidad de llevar ese libro de registro de acciones.*⁹⁹⁸

En esta intervención se comprueba la importancia que tenía el libro de registro. Si las compañías no lo tenían o no lo utilizaban diligentemente, se podrían transmitir acciones fraudulentamente. Para evitarlo, el Sr. Pérez Seoane propuso modificar el texto de la CS e incluir una mención expresa del libro de registro de acciones. Así se aprobó y se recogió en la versión final del texto legal.

Por su parte, el Sr. Miota, miembro de la CS, en la misma sesión que intervino el Sr. Pérez Seoane que se acaba de citar, contestando a una enmienda presentada por el Senador Sr. Miquel Polo con objeto de sustituir la expresión “título de acción” por “promesa de acción”, dijo:

⁹⁹⁷ Ídem.

⁹⁹⁸ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 277.

*... como título es todo lo que da derecho o significa propiedad, por eso se ha adoptado esta palabra. Puede usarse la de cédula, como dice el Código de comercio, o de extracto, que en realidad es, pues los documentos de este género son una copia o extracto de lo escrito en el libro principal de la sociedad.*⁹⁹⁹

De nuevo se observa la importancia del libro de registro en relación a las acciones, pues la validez de éstas dependía de aquél. Las acciones eran *una copia o extracto de lo escrito en el libro principal de la sociedad*.

Por último, el Senador Sr. Moreno presentó una enmienda a la redacción del artículo 13 del PL 1848 sobre las acciones que los administradores debían tener en depósito y, en un momento de sus intervenciones dijo:

*las acciones nominativas he dicho antes que se representan por extractos de inscripción; estos extractos son firmados por los presidentes de las compañías, por uno o dos directores, y por el tenedor de libros; de estas acciones inscritas, por ejemplo, a mi favor, no puedo hacer uso alguno sin que medie una transferencia, y para esta operación serían necesarios otras personas y otros requisitos.*¹⁰⁰⁰

Por lo tanto, había una persona de la compañía encargada del libro de registro (*el tenedor de libros*), que debía firmar cada título de acción junto con el Presidente y uno o dos directores.

Más adelante, este mismo Senador, comentando la prohibición de transmisión de las acciones que debían tener los administradores de la Sociedad en depósito y garantía, se refirió a un detalle técnico del libro registro de acciones nominativas:

*La transferencia no se puede hacer en esta clase de documentos, porque en el número del registro correspondiente a cada acción, consta la situación de depósito a que se hallan sujetas, y no es posible prescindir de esa anotación al hacerse la transferencia.*¹⁰⁰¹

De esta interesante intervención pueden extraerse dos conclusiones. La primera, es que cada acción nominativa tenía un número de registro. La segunda, es que en ese número de registro figuraba un espacio para las anotaciones correspondientes, que podían condicionar la transmisión, expresar la situación de los dividendos pasivos, etc.

H) TRANSMISIÓN DE ACCIONES

No son abundantes las menciones a este tema durante los debates parlamentarios. Cabe diferenciar dos supuestos diferentes: la transmisión de acciones al portador y de las acciones nominativas. Sobre las primeras, las acciones al portador, D. Pedro Sáinz de Andino, con motivo de la propuesta de modificación del artículo 12 PL 1848 para prohibir las acciones al portador, comparó las formalidades en la transmisión de estas acciones y de las nominativas en los siguientes términos:

⁹⁹⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1466.

¹⁰⁰⁰ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 303.

¹⁰⁰¹ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 303.

*Debe añadirse la consideración de que ejecutándose la enajenación de las acciones representadas en títulos al portador por la simple entrega de los títulos, la sociedad se preserva, no solo de las embarazosas formalidades con que deba hacerse la transmisión de las acciones nominativas, sino también de la responsabilidad que contrae la administración social en la legalidad de estos actos, teniendo muchas veces que intervenir en las cuestiones que se mueven sobre su validación; y, por último, siendo innegable que la circulación de toda clase de valores de crédito influye poderosamente en sostener y mejorar sus precios, ¿por qué se negaría a las Sociedades anónimas la forma de títulos al portador, que facilitando la transmisión sin formalidades, que siempre causan embarazos y ocupan el tiempo, contribuiría eficazmente a fomentar las negociaciones de sus acciones?*¹⁰⁰²

La transmisión de las acciones al portador se realizaba mediante la simple entrega o endoso, de una manera mucho más fácil y sencilla que las acciones nominativas. En cambio, la transferencia de estas últimas, las acciones nominativas, exigía cumplir una serie de formalidades de las que también era responsable la administración de la compañía.

Dos Senadores describieron los detalles de la transmisión de las acciones nominativas. El Sr. Miquel Polo lo resumió sucintamente de la siguiente manera:

*se necesitan por lo menos cuatro operaciones: el que vende da noticia de su enajenación, y tiene que presentarla para la toma de razón, el comprador tiene que dar igual aviso y que se reconozca como actual poseedor, y esto hace que no pueda haber tanto riesgo a fraudes como con las acciones al portador. Además, en un caso de quiebra todas las acciones al portador desaparecen, lo que no sucede con los demás.*¹⁰⁰³

Por otra parte, el Senador Sr. Moreno, presentó una enmienda al texto del artículo 13 (que regulaba las acciones que debían tener en depósito y garantía los administradores) y se refirió a las formalidades de la transmisión de acciones nominativas en los siguientes términos:

... las acciones nominativas he dicho antes que se representan por extractos de inscripción; estos extractos son firmados por los presidentes de las compañías, por uno o dos directores, y por el tenedor de libros; de estas acciones inscritas, por ejemplo, a mi favor, no puedo hacer uso alguno sin que medie una transferencia, y para esta operación serían necesarios otras personas y otros requisitos. (...)

*La transferencia no se puede hacer en esta clase de documentos, porque en el número del registro correspondiente a cada acción, consta la situación de depósito a que se hallan sujetas, y no es posible prescindir de esa anotación al hacerse la transferencia.*¹⁰⁰⁴

¹⁰⁰² DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 284.

¹⁰⁰³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1466.

¹⁰⁰⁴ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 303.

Por lo tanto, en la transmisión de las acciones nominativas se debía comprobar las anotaciones que hubiera en el libro de registro, dado que existía un número de registro para cada acción en el que figuraba un espacio para anotaciones. Este era el punto en el que la administración de la compañía podía ser responsable de negligencia por la incorrecta toma de razón de las transmisiones.

I) ACCIONES DEPOSITADAS POR LOS ADMINISTRADORES EN GARANTÍA DEL EJERCICIO DE SU CARGO

En la sesión del día de Nochebuena de 1847 en el Senado, D. Antonio Guillermo Moreno presentó una enmienda al artículo 13 del PL 1848, que regulaba las acciones que los administradores y gerentes de las compañías debían tener en depósito mientras ejercieran su cargo. Esta era la propuesta:

El abajo firmado tiene el honor de proponer al Senado, que en lugar del artículo 13 del proyecto de ley de Sociedades anónimas, se adopte la redacción siguiente:

Artículo 13. Los directores o administradores de cada compañía deberán poseer, mientras ejerzan sus cargos, un número fijo de acciones determinado en los estatutos, cuyos títulos se conservarán en depósito en el punto y forma que en aquéllos se designe.

Palacio del Senado, 24 de Diciembre de 1847. Antonio Guillermo Moreno.¹⁰⁰⁵

El Presidente de la CS, Sáinz de Andino, manifestó que no se admitía la enmienda, pero no se pudo discutir en ese momento pues el Senador proponente no se encontraba en la Cámara. Al final de la sesión ya se pudo debatir sobre la propuesta, que se inició leyendo el dictamen de la CS sobre la misma:

La Comisión ha examinado la modificación del artículo 13, presentada por el Sr. D. Antonio Guillermo Moreno; y como la única variación esencial consiste en omitir la circunstancia de que las acciones que habrán de tener los gerentes, directores o administradores de cada compañía hayan de extenderse en papel y forma especiales, la Comisión encuentra que esta disposición únicamente podrá ofrecer algún gasto leve en la confección de las láminas; pero en cambio, asegura más eficazmente la observancia en esta Ley y las precauciones que en interés de los mismos accionistas establece. Más fácil será el depósito de tales acciones, y su negociación se hará imposible teniendo, como deben tener, un tipo especial que determine su origen y la aplicación durante el periodo prefijado para el ejercicio de los cargos de aquellos funcionarios.

La Comisión, en su consecuencia, no puede admitir la modificación propuesta por el Sr. Moreno, y propone que el Senado se sirva aprobar el artículo 13 conforme se halla en el proyecto de ley.

Palacio del Senado, 24 de Diciembre de 1847. Sáinz de Andino. Pérez. Juan María Pérez. Acebal y Arratia.¹⁰⁰⁶

¹⁰⁰⁵ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 294.

¹⁰⁰⁶ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 302.

La razón fundamental que llevaba a la CS a rechazar la propuesta era evitar que los administradores o gerentes pudieran transmitir fraudulentamente las acciones que, por obligación legal, debían mantener en depósito mientras ejercieran su cargo.

El Senador Sr. Guillermo Moreno justificó su propuesta aludiendo a la modificación del artículo 12 aprobada en la sesión del día anterior conforme a la cual se prohibieron las acciones al portador. En consecuencia, todas las acciones debían ser nominativas, en las que figurara el nombre del propietario y para su transferencia debían intervenir varias personas, a diferencia de la transmisión de las acciones al portador en las que la simple entrega otorgaba la propiedad a su tenedor. Por este motivo, el Senador autor de la enmienda entendía que no era necesario que las acciones de los administradores y gerentes se *extendieran en papel y forma especiales*:

*... la razón que yo he tenido para proponer esta variación del artículo 13 está fundada en la aprobación que el Senado dio ayer a la enmienda del artículo 12: a no haber mediado esta circunstancia, no era aquella necesaria, por las razones que diré después. (...) el Senado acordó que volviese a la Comisión el artículo 12, para que conforme a la enmienda del Sr. Marqués de Vallgornera, aprobada por el Senado, se suprimiese de dicho artículo desde las palabras: “en sus dos terceras partes”, y las siguientes hasta el final del artículo. Por consiguiente, no debe haber en lo sucesivo en las compañías anónimas acciones al portador, con lo que desaparece el inconveniente que a la Comisión se ofreció, si el depósito requerido en el artículo 13 se hiciese en esta clase de acciones, el que habrá necesariamente de verificarse en acciones nominativas, las que representadas por extractos de inscripción, que así se llaman, no puede de estos hacerse uso alguno sin que medie una transferencia, a la que tienen que concurrir diferentes personas. Por lo mismo he creído que ya no es necesaria la redacción del artículo 13, según el proyecto, después de la variación que en el 12 ha admitido el Senado, y que es más propia la que he tenido la honra de proponer en lugar de dicho artículo 13, pues no se percibe fundamento, y sí bastante embarazo, de conservar el uso de papel y forma especial para las acciones nominales que han de depositarse con arreglo a dicho artículo.*¹⁰⁰⁷

El Ministro de CIOP, D. Juan Bravo Murillo, respondió al Sr. Moreno. Comenzó analizando el contenido del artículo 13 conforme lo había redactado la CS:

*El artículo tal como se halla redactado exige dos garantías para que las acciones que tengan en depósito los presidentes¹⁰⁰⁸ o directores no puedan dejar de existir en depósito, ni puedan pasar a otras manos: las dos garantías que exige el artículo tal como se halla, son las siguientes; una que las acciones estén en depósito, y otra que tengan un papel especial. Al Sr. D. Antonio Guillermo Moreno le parece que basta una garantía, la de decir que las acciones están en depósito; a la Comisión le ha parecido que las dos convenían, la cuestión está reducida a si una es bastante, o no lo es.*¹⁰⁰⁹

¹⁰⁰⁷ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 302.

¹⁰⁰⁸ Obsérvese la falta de precisión terminológica al utilizar indistintamente los términos “presidentes”, “directores” y “gerentes” (este último usado en el texto del artículo 13).

¹⁰⁰⁹ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, págs. 302 y 303.

De esta manera quedaba centrada la cuestión. Para evitar fraudes con las acciones depositadas por los administradores, ¿era suficiente que se constituyera el depósito? O se le añadía la necesidad de emitirlos *en papel y forma especiales* para que, en caso de extraerlas del depositario, no se pudieran transferir. Dijo el Sr. Bravo Murillo:

*... si las acciones tienen un papel especial; no se podrán enajenar, porque son conocidas, y se sabe que son acciones hechas para este depósito expresamente. Para que estas acciones estén hechas con arreglo a lo que dispone el artículo 13, deberán estar extendidas en un papel especial para que no puedan enajenarse y no sea violado el depósito. Cuando estas acciones dejen de estar en depósito, se cambian por otras que sean como todas las demás, que no tengan aquel papel especial, y que por consiguientes se puedan enajenar. Resuelva, pues, el Senado, porque la cuestión es muy clara. El depósito puede violarse, y una vez violado, aquellas acciones que se hallaban depositadas pueden salir a la plaza, pueden enajenarse y quedar sin garantía los administradores. Si esta garantía no es suficiente, le queda la segunda: un papel especial y una indicación en esa misma acción basta para que nadie las quiera tomar, porque cuando se concluya aquel depósito, deberán cambiarse con otras que no tengan esa indicación, y que sean enajenables.*¹⁰¹⁰

Ciertamente la cuestión no tenía una respuesta clara. En efecto, una vez prohibidas las acciones al portador se hacía más difícil el fraude en la transmisión de las acciones depositadas por los administradores. Aunque pudieran extraerse del depositario, las formalidades de la transmisión de acciones nominativas servían para indicar quién era el transmitente y quién el adquirente. En este sentido se exployó el Senador proponente:

*... las acciones nominativas he dicho antes que se representan por extractos de inscripción; estos extractos son firmados por los presidentes de las compañías, por uno o dos directores, y por el tenedor de libros; de estas acciones inscritas, por ejemplo, a mi favor, no puedo hacer uso alguno sin que medie una transferencia, y para esta operación serían necesarios otras personas y otros requisitos.*¹⁰¹¹

Y a continuación refirió el caso del Banco de San Fernando:

*El número determinado de acciones que debe tener en depósito la Dirección y Junta de gobierno del Banco de San Fernando por sus estatutos, se conserva en su archivo, anotando aquella situación en el registro en sus números correspondientes; y aunque el director del Banco pidiese el extracto correspondiente a un depósito no podría hacer nada, porque para usar de él tendría que hacerse la transferencia, extendiéndose otro título a favor de una tercera persona, y el comisario Regio y demás que deben concurrir no se prestarían a firmar ese nuevo título sin que constase la regularidad de la operación, a menos que se suponga en todos una confabulación inverosímil.*¹⁰¹²

¹⁰¹⁰ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 303.

¹⁰¹¹ Ídem.

¹⁰¹² Ídem.

Concluyó reiterando que tras la modificación del artículo 12 ya no tenía sentido mantener el requisito de *extenderse en papel y forma especiales*:

Mas es preciso notar, que después de que el artículo 12 se ha alterado de modo que no habrá acciones al portador, y que el Senado me ha hecho la honra de admitir el artículo adicional que he propuesto para la observancia de la cláusula 3ª del artículo 265 del Código de comercio¹⁰¹³, el número de documentos que representen las acciones en depósito debe disminuir, haciendo por lo tanto inadecuada la actual redacción del artículo 13.¹⁰¹⁴

De nuevo respondió el Ministro de CIOP reforzando su posición, sin que se produjera ningún acercamiento de ambas posturas porque

la cuestión es de hechos, y muy sencilla. Yo convengo con el Sr. Moreno, en que las acciones constan por extractos de inscripción, que así se llaman. El Sr. Moreno reconocerá que una cosa es que se deposite, llámese un extracto de inscripción, o llámese como se quiera, el resultado es que conste el título de la acción que se ha de depositar; pues depositado ese papel, las cien hojas que representan las cien acciones que un administrador debe tener en depósito, no se necesita más. (El Sr. Moreno, D. Antonio Guillermo: Es una sola). Puede ser una sola, y pueden ser ciento; en una se pueden comprender ciento; pero puede haber también mil extractos, porque una hoja basta para una acción.

Pensaba el Sr. Ministro que si se quería enajenar fraudulentamente las acciones en depósito o garantía, sería relativamente fácil exigir al depositario la entrega de los extractos de inscripción (acciones) bajo su custodia justificándole que era titular de otras acciones y, por lo tanto, no se le podría impedir esa transferencia¹⁰¹⁵, a no ser que los títulos se hubieren extendido *en papel y forma especiales*. Aún faltando datos concretos sobre el procedimiento de entrega y retirada del depósito, no parece coherente lo que dice, pues si estaban depositadas las acciones era porque correspondían a las que se encontraban en garantía o depósito y aunque tuviera otras el administrador, aquéllas no podrían extraerse del depósito hasta que no se acreditara el cese en su cargo. Por eso replicó el Sr. Moreno:

La transferencia no se puede hacer en esta clase de documentos, porque en el número del registro correspondiente a cada acción, consta la situación de depósito a que se hallan sujetas, y no es posible prescindir de esa anotación al

¹⁰¹³ Pero después la CMC-S omitió esta modificación y no se hizo referencia en el texto legal al artículo 265.3 del Código de comercio.

¹⁰¹⁴ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 303.

¹⁰¹⁵ Este es el ejemplo que puso el Sr. Bravo Murillo:

.. mas si el Sr. Moreno u otro cualquiera se hallase en ese caso[de transmisión fraudulenta de las acciones], en el que S. S. no puede hallarse, porque no es capaz, no es posible que cometa ningún fraude; si se cometiera por cualquiera este fraude, si se violase el depósito y se sacasen por otro aquellas acciones, y fuese luego S. S. a hacer la transferencia, no permitiría que se le pusieran obstáculos, y diría: pues qué ¿yo no puedo tener más que las cien acciones que tengo en depósito? Yo puedo tener otras mil, y se me hace un agravio en pensar que haya sacado las acciones que tenía en depósito; y el encargado en hacer la transferencia no tendrá más medio que entregar los documentos que fraudulentamente se exigen. Todo esto se evitará con que dichas acciones hayan de inscribirse en papel diferente, puesto que con el color del papel, y con la indicación que en el mismo se hiciese se sabrá que estas acciones no son trasferibles. (DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 303).

*hacerse la transferencia. Además, mi variación no fija dónde se ha de hacer el depósito de las acciones en cuestión; pero exige que este punto se ha de determinar en los estatutos.*¹⁰¹⁶

Tras esta intervención pidió la palabra el Marqués de Montevirgen para apoyar la enmienda del Senador Sr. Moreno:

*La cuestión que se ha promovido con motivo de la transferencia de las acciones del depósito, la considero de grande interés, y no tengo que añadir nada a lo dicho por el Sr. Moreno, porque es imposible que se cometa fraude siendo corto el número de acciones que existan en depósito; y cuando se presenten para transferencia por el director que ha hecho el depósito, nada más fácil que ver el número que tienen las acciones depositadas, y ver si las acciones que se van a transferir están o no conformes con la nota que para ello se exhiba. Así que en esta cuestión estoy de acuerdo con el señor Moreno;*¹⁰¹⁷

Aprovechando que estaba en el uso de la palabra propuso que se concretara en el artículo 13 el porcentaje que debían tener en depósito y garantía los administradores durante el ejercicio de su cargo.

*... desearía yo que este número se determinase, y que se determinase con respecto al capital social de la compañía. Sin embargo, si ésta es cuestión de reglamento, la abandono enteramente; si no lo es, me parece que sería conveniente que la ley fijase la cantidad, el minimum de acciones que deben ponerse en depósito al tiempo de instituirse la Sociedad. He manifestado a la Comisión mi pensamiento; lo he visto también indicado en la propuesta del Sr. Moreno: si la Comisión cree que puede ser bueno para la ley, estoy conforme; y si no lo hace, con el fin de que se exprese en el Reglamento, lo estoy también.*¹⁰¹⁸

Ya no hubo más intervenciones sobre el artículo 13. La votación aprobó el texto inicial de la CS, rechazándose, por tanto, las enmiendas del Sr. Moreno y la del Marqués de Montevirgen. Respecto a la de este último, en el Reglamento de 1848 se hace una referencia, pero no se fija ningún porcentaje, pues se deja a lo que establezcan los estatutos. En este sentido, establece el artículo 29 del Reglamento de 1848: *Dentro de los quince días siguientes al en que se hubiere declarado constituida la compañía, acreditarán los administradores ante el Jefe político haber hecho del depósito efectivo de las acciones con que deben garantizar su gerencia en la cantidad determinada en los estatutos, y conforme a lo prescrito en el artículo 13 de la Ley de 28 de enero.*

III. DOCTRINA DE LA ÉPOCA

El régimen jurídico de las acciones es una de las materias más tratadas por los textos legales y por los Diputados y Senadores durante los debates del PL 1848. A lo largo de los apartados anteriores, se ha citado a los autores que han aportado comentarios explicativos o aclarativos de los textos normativos. En contraste con otras muchas materias de la Ley y del Reglamento de 1848 en las que la Doctrina se limita a

¹⁰¹⁶ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 303.

¹⁰¹⁷ Ídem.

¹⁰¹⁸ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 304.

transcribir los textos legales, en el caso de las acciones, como se acaba de decir, se encuentran algunas glosas (no muchas) al respecto.

Se recoge en este apartado un breve resumen de las referencias de las obras aparecidas durante la vigencia de la Ley de 1848 al régimen jurídico de las acciones. Cabe destacar, en primer lugar, la ya citada enumeración de los derechos que confieren las acciones por parte de GONZÁLEZ HUEBRA¹⁰¹⁹, así como la mención de LASO¹⁰²⁰ a la obligación de desembolso.

Pero el resto de los autores se limitan a citar textualmente (o casi textualmente) el articulado del CCom 1829, la Ley y el Reglamento de 1848, en los que se incluyen todas las referencias al régimen jurídico de las acciones. Así, por ejemplo, AVECILLA¹⁰²¹; VICENTE Y CARAVANTES¹⁰²² y RODRÍGUEZ¹⁰²³ citan, por un lado, los artículos de CCom 1829 y, por otro, realizan un comentario armonizado de los artículos de la Ley y del Reglamento de 1848; UNA SOCIEDAD DE ABOGADOS¹⁰²⁴ y GÓMEZ DE LA SERNA y REUS GARCÍA¹⁰²⁵ transcriben los artículos del CCom 1829 y copian textualmente en anexo los artículos de la Ley y del Reglamento de 1848.

Por su parte, BIEC y VICENTE CARAVANTES¹⁰²⁶ se limitan a transcribir sistemáticamente los artículos de la Ley y del Reglamento de 1848; CARRERAS¹⁰²⁷ ofrece un comentario general a las cuestiones básicas de la Ley y del Reglamento de 1848, pero destaca por el resumen que realiza de la LB y LSCr en el que menciona, entre otras cuestiones, las singularidades del régimen de las acciones de esas sociedades en relación a la Ley y Reglamento de 1848.

Y, por último, MARTÍNEZ ALCUBILLA¹⁰²⁸ transcribe la Ley y el Reglamento de 1848, la LSCr, Reglamento de 1857 y la LSCOP.

Por tanto, el material aportado por la Doctrina es bastante escaso. La fuente de estudio más interesante, sin duda alguna, son las discusiones parlamentarias del PL 1848.

¹⁰¹⁹ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil...*, págs. 150 y ss.

¹⁰²⁰ LASO, E. (1849): *Elementos de Derecho Mercantil ...*, pág. 24.

¹⁰²¹ AVECILLA, P. (1849): *Diccionario...*, que transcribe una selección de artículos del CCom 1829: 276, 277, 282, 283, 293, 294, 295 y 298 (págs. 98 y ss.), y los artículos de la Ley y del Reglamento de 1848.

¹⁰²² VICENTE Y CARAVANTES, J. (1850): *Código de comercio extractado...*, pág. 126 y ss.

¹⁰²³ RODRÍGUEZ, J. M. (1861): *Elementos de Derecho civil, penal y mercantil...*, págs. 154 a 178.

¹⁰²⁴ UNA SOCIEDAD DE ABOGADOS (1857): *Código de comercio...*, págs. 90 a 117.

¹⁰²⁵ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de comercio...*, págs. 96 a 117 y 482 a 492.

¹⁰²⁶ BIEC, J. M. Y VICENTE CARAVANTES, J. (1851): *Suplemento...*, págs. 613 a 620.

¹⁰²⁷ CARRERAS Y GONZÁLEZ, M. (1860): *Elementos del Derecho mercantil de España...*, págs. 188 y ss.

¹⁰²⁸ MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. (1862): *Diccionario de Administración...*, págs. 625 a 638.

CAPÍTULO X

ÓRGANOS SOCIALES (I): LA JUNTA GENERAL

En el presente capítulo y en el siguiente se estudian los dos órganos sociales: la junta general y los administradores. Respecto al primero, la materia se divide en tres apartados: las fuentes normativas (CCom 1829 y Ley y Reglamento de 1848), los debates parlamentarios y la Doctrina de la época.

Con carácter previo cabe destacar el reducido número de menciones a la junta general en los textos normativos, en las discusiones parlamentarias y en los autores de la época. En la época del CCom 1829 y de nuestra Ley de 1848, el Legislador estableció pocas normas reguladoras de la junta, dejando el contenido de su régimen a lo que determinaran los estatutos y los reglamentos sociales. No se puede olvidar que dichos documentos debían ser autorizados por el T. de c. durante la vigencia del CCom 1829 y, posteriormente, bajo la Ley y el Reglamento de 1848, por el Gobierno o las Cortes Generales.

Por otro lado, conviene subrayar que, también como contraste con la regulación actual, la junta de accionistas de aquella época no era una reunión, podríamos decir, “privada”. El Jefe Político o el Gobierno tenían la facultad de convocar la junta en determinadas circunstancias. Además, el Jefe Político podía presidir las juntas o el *empleado público* que se determinara. Es decir, se vislumbra un elemento de “orden público” en esas reuniones, consecuencia del sometimiento de las compañías por acciones al control de la Autoridad pública.

I. FUENTES NORMATIVAS

En este apartado se analizan los tres textos normativos de referencia: el CCom 1829, la Ley y el Reglamento de 1848. El último epígrafe se dedica a una cuestión concreta: el contenido de los “estatutos” y de los “reglamentos” societarios.

A) EL CCom 1829

Sorprendentemente, el CCom 1829 al regular los tres tipos de compañías mercantiles menciona en pocas ocasiones la junta general. Parece que la intención del Legislador fue dejar esta materia al ámbito de los estatutos y reglamentos societarios, que, para las compañías anónimas debían ser autorizados y aprobados por el T. de c. competente. Sáinz de Andino expuso en los debates de la Ley de 1848 en el Senado que parte de los abusos cometidos por algunas compañías por acciones era consecuencia de la falta de criterio de estos Tribunales para autorizar la constitución de dichas sociedades¹⁰²⁹.

¹⁰²⁹ En su intervención, Sáinz de Andino se refirió en varias ocasiones a esta cuestión. Cabe destacar las siguientes palabras:

(l)os Tribunales de comercio no han comprendido su misión, ni han tenido presente que la autorización que se les delegaba por el artículo 293 de nuestro Código de comercio para la

En relación a la junta general de las compañías por acciones o, más concretamente, al conjunto de accionistas, el CCom 1829 recoge pocos artículos, entre los que cabe citar el 265.3 en el que se describe este tipo societario y se dispone que puede constituirse una compañía mercantil

3. Creándose un fondo por acciones determinadas para girarlo sobre uno o muchos objetos, que den nombre a la empresa social, cuyo manejo se encargue a mandatarios o administradores amovibles a voluntad de los socios, y esta compañía es la que lleva el nombre de anónima.

Lo relevante en cuanto a la materia que se está comentando, es el inciso que dispone que la administración se encarga *a mandatarios o administradores amovibles a voluntad de los socios*. Por tanto, aunque no se hable expresamente de junta general, se establece desde el primer momento que los socios son los únicos competentes para nombrar y cesar a los administradores. Esto no ocurría en los otros tipos de compañías mercantiles en los que, con carácter general, el socio con responsabilidad ilimitada tenía derecho a formar parte de la administración de la compañía.

También cabe destacar el artículo 310 CCom 1829. En su párrafo primero, se establece una *regla general* sobre el derecho de los socios de cualquier compañía mercantil a examinar libremente la contabilidad social¹⁰³⁰. El segundo párrafo dice así:

En las sociedades establecidas por acciones podrá hacerse derogación a esta regla general por pacto establecido en el contrato de sociedad, o por disposición de sus reglamentos aprobados que determinen el modo particular de hacer este examen, sujetando a su resultado la masa general de accionistas.

La escritura de fundación, los estatutos o los reglamentos pueden restringir el derecho de los accionistas a examinar los balances y demás documentos contables. El último inciso del artículo, cuya interpretación plantea varias dudas, establece que el resultado de esa inspección vincula a *la masa general de accionistas*. Aunque el CCom 1829 no lo establezca expresamente, la aprobación de las cuentas era competencia de la junta de accionistas. Por tanto, entendemos, que este último inciso se refiere a lo que se debatiera en la junta de aprobación de cuentas. El problema es que no es fácil delimitar el grado de *sujeción* al resultado del examen de la contabilidad por unos accionistas. Además, la expresión *masa general de accionistas* podría interpretarse como que algún accionista podría excluirse del acuerdo, dado que *la masa general* no equivale a la totalidad¹⁰³¹.

aprobación de los estatutos y reglamentos de las Sociedades anónimas, llevaba implícita la obligación que se les imponía de conformarse en el uso de esta facultad a las reglas del derecho, ni a los principios económicos de la materia (DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, págs. 281 a 283).

¹⁰³⁰ Establece el párrafo primero del artículo 310 CCom 1829:

En especie alguna de sociedad mercantil puede rehusarse a los socios el examen de todos los documentos comprobantes de los balances que se formen, para manifestar el estado de la administración social.

¹⁰³¹ Y, por tanto, sería contrario al principio de que *todos los socios, incluidos los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la junta general* (actual artículo 159 LSC).

B) LA LEY DE 1848

Las referencias de la Ley de 1848 a la junta general, al igual que ocurre en el CCom 1829, se caracterizan por su escasez. Se pueden destacar dos menciones de la Ley de 1848 a la junta general: su competencia para aprobar los estatutos y reglamentos, así como para decidir sobre la adaptación de las sociedades constituidas con anterioridad a la promulgación de la Ley.

1. Aprobación de los estatutos y reglamentos societarios: competencia de la junta de accionistas, ¿o de la autoridad pública?

El texto legal no establece el principio general de que la aprobación y modificación de los estatutos y reglamentos societarios deben ser acordados por la junta de accionistas. Bien es cierto que se debe deducir este principio del resto de los artículos que directa o indirectamente se relacionan con esta cuestión.

La mención a la competencia exclusiva de la junta para aprobar los estatutos y reglamentos se encuentra en el último inciso del artículo 6: *(l)os estatutos y reglamentos se aprobarán previamente en junta general de suscriptores*¹⁰³². El ámbito de este artículo se circunscribe a la solicitud de la Real autorización, a la que se acompañaba la lista de suscriptores, las cartas de pedido de acciones, la escritura social, los estatutos y los reglamentos. Por lo tanto, el Legislador estaba exigiendo que estos dos últimos documentos, estatutos y reglamentos, fueran aprobados previamente por la junta.

De lo expuesto en el párrafo anterior se puede deducir, en primer lugar, que la junta se celebraba válidamente antes de la constitución o aprobación definitiva de la compañía, denominándose *junta de suscriptores*, para diferenciarla de la reunión de los accionistas, una vez aprobada definitivamente la compañía por el Gobierno o el Parlamento. Y, en segundo lugar, que el Legislador, para evitar abusos, traspasó la competencia para aprobar los reglamentos y estatutos de los fundadores de la compañía a la reunión de suscriptores, es decir, a todos aquellos que se habían comprometido a desembolsar capital¹⁰³³.

Ahora bien, es importante advertir que, aunque la junta de accionistas era el órgano competente para la aprobación y modificación de los estatutos y reglamentos, no quiere esto decir que tuviera una autoridad soberana sobre su contenido. Y en este punto se encuentra uno de los cambios fundamentales producidos por la Ley de 1848 sobre el régimen instaurado por el CCom 1829. En efecto, a partir de la entrada en vigor de la Ley, la aprobación y modificación de los reglamentos y estatutos por parte de la junta estaba sometida a la posterior autorización del Gobierno y no de los T. de c.

¹⁰³² Como se recordará, el concepto de suscriptor no es igual al de accionista.

¹⁰³³ Este compromiso se realizaba, bien en la escritura de fundación mediante la suscripción de acciones, bien mediante la firma de las cartas de pedido de acciones, tal y como se deduce del citado artículo 6 de la Ley, que se encuentra desarrollado en varios artículos del Reglamento de 1848, entre los que cabe destacar, a estos efectos, el artículo 9:

Para impetrar la aprobación Real de la escritura de fundación de toda sociedad mercantil por acciones ha de hallarse cubierta la mitad de las que compongan su capital social, sea por haberse distribuido este número entre los otorgantes de la misma escritura o sea por las cartas de pedidos de acciones que con posterioridad a su otorgamiento se hayan dirigido a la comisión encargada de gestionar para la aprobación de la compañía

Son dos los artículos de la Ley que establecen la necesaria aprobación gubernamental de los estatutos y reglamentos. El artículo 9, referente a las compañías autorizadas por el Gobierno, determina que éste, entre otras cuestiones relativas a la solicitud de autorización, aprobará *la escritura social, los estatutos y los reglamentos*. Por su parte, el artículo 10 prevé que

Toda alteración o reforma de los estatutos y reglamentos que no obtenga la aprobación del Gobierno será ilegal y anulará por sí la autorización en virtud de la cual exista la compañía.

Como se decía al principio de este epígrafe, el Legislador no establece expresamente el principio de que la junta es el órgano competente para la aprobación y modificación de los estatutos y reglamentos; en cambio sí deja claro que la primera aprobación y la de cualquier *alteración o reforma* de dichos documentos debe ser aprobada por el Gobierno. La competencia se comparte entre los socios (que se ponen de acuerdo respecto al contenido de los estatutos y reglamentos) y la Autoridad pública.

2. Adaptación de las compañías constituidas con anterioridad a la Ley de 1848

La segunda mención que realiza la Ley de 1848 a la junta general se refiere a la controvertida adaptación a dicho texto legal por las compañías existentes con anterioridad a la promulgación de la Ley de 1848. El artículo que regula esta cuestión es el 18, cuya versión final (que fue objeto de modificación importante en su paso por el Senado), dice así:

Las compañías por acciones existentes en la actualidad sin autorización Real, la solicitarán dentro de dos meses, contados desde la publicación de esta Ley, presentando al efecto sus escrituras, estatutos y reglamentos. Dentro del término de cincuenta días siguientes a esta publicación los gerentes o directores convocarán a junta general de accionistas para que resuelvan si se ha de pedir o no la Real autorización, la cual se impetrará solamente en el caso de que la mayoría de los mismos accionistas que se computará con arreglo a sus estatutos y reglamentos, acuerde la continuación de la compañía.

En el texto aprobado por la CCD, la redacción de este artículo¹⁰³⁴ permitía que la inacción de los administradores para convocar la junta que deliberara sobre la adaptación de la sociedad a la nueva Ley, ocasionara la disolución y liquidación de la compañía. El Senador Sr. Pérez Seoane, en la sesión del 24 de diciembre de 1847, presentó una enmienda al artículo 18¹⁰³⁵ con la finalidad de otorgar a la junta de

¹⁰³⁴ Cuyo texto era el siguiente:

Las compañías por acciones formadas en la actualidad, y que no existan en virtud de autorización Real, solicitarán esta autorización dentro de dos meses, contados desde la publicación de esta Ley, presentando al efecto sus escrituras, estatutos y reglamentos. Antes de pedir la autorización, los gerentes o directores convocarán a junta general de accionistas, y solo en el caso de que la mayoría de éstos, que se computará con arreglo a sus estatutos y reglamentos, acuerde la continuación de la compañía, se podrá hacer la solicitud (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 23 de abril de 1847. Apéndice Primero al núm. 81, págs. 1499 y 1500).

¹⁰³⁵ Transcribimos a continuación el texto de la citada enmienda:

accionistas la competencia exclusiva para decidir si la compañía se adaptaba o no a la nueva legislación. Dada la importancia de esta decisión, entendía el citado Senador que los socios eran los únicos sujetos competentes para manifestar su voluntad de continuar o extinguir la compañía. A continuación se transcriben sus palabras, que subrayan la competencia exclusiva de la junta general en esta materia:

Mi ánimo al presentarla, en los términos que acaba de oír el Senado, no ha sido otro que el de que las Juntas generales de accionistas de las Sociedades establecidas hayan de resolver sobre su continuación o disolución; porque, señores, si se lee el artículo atentamente, se observará que se exige el acuerdo de las Juntas generales para pedir la autorización del Gobierno, caso de querer continuar; mas no se previene que para no continuar, esto es, para no pedir la autorización, haya de preceder acuerdo de las mismas Juntas generales, como quiera que no convocándose éstas, y no pidiéndose la autorización, las compañías quedarán disueltas a virtud de la Ley, con arreglo a lo prevenido en el artículo 20. Por manera que, aprobando el artículo como está redactado, y no siendo preceptiva la convocación de la Junta general de accionistas, tanto para pedir la autorización, como para dejar de pedirla, podrá suceder que una Junta de gobierno o Dirección, a quien no acomode la continuación de la Sociedad, por ventajosa que sea, deje de convocar a junta y venga la disolución prevenida en el artículo 20, sin que sobre ella haya influido el voto u opinión de los accionistas. Yo quisiera que la celebración de esas juntas fuese obligatoria, y no quedase al arbitrio de nadie el hacer precisa la disolución de las Sociedades establecidas, sin más que dejar pasar los dos meses que determina el artículo 20.¹⁰³⁶

La enmienda del Sr. Pérez Seoane no fue aceptada en su totalidad, pero sirvió para que la junta fuera el único órgano competente en relación a la adaptación de la compañía al nuevo régimen legal. En este tema no se produce ninguna injerencia directa por parte del poder público. Los socios libre y autónomamente decidían sobre la continuidad de la compañía¹⁰³⁷.

C) EL REGLAMENTO DE 1848

El Reglamento de 1848, a diferencia del CCom 1829 y de la Ley de 1848, dedica más atención a la regulación de la junta de accionistas. Se va a dividir este epígrafe en tres apartados: descripción de las competencias atribuidas a la junta, el sometimiento de

Artículo 18. Se suprimirá el segundo período que empieza Antes de y se añadirá: ‘A fin de que la Junta general de accionistas resuelva sobre la disolución, o continuación de la compañía, con arreglo a esta Ley, se la convocará precisamente dentro de los primeros cincuenta días, y sólo en el caso de que la mayoría de los accionistas, que se computará con arreglo a sus estatutos y reglamentos, acuerde la continuación de la compañía, se podrá hacer solicitud.

La Dirección o Junta de gobierno a quien compete convocar la Junta general de accionistas, responderá de los perjuicios que pueden seguirse de no reunirla.

El Gobierno, si lo creyere oportuno, podrá designar persona que presida estas Juntas con sujeción a lo dispuesto en el artículo 17.’

Palacio del Senado 21 de Diciembre de 1847. Manuel Pérez Seoane.

¹⁰³⁶ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, págs. 295 y 296.

¹⁰³⁷ Cuestión diferente era la injerencia indirecta de la autoridad pública en el sentido de que ésta debía otorgar la correspondiente autorización a los nuevos estatutos y reglamentos, de manera que, de hecho, podría abocar a la disolución de la compañía.

la misma al control de la autoridad pública y, por último, la adaptación de las compañías constituidas con anterioridad a la Ley de 1848.

1. Competencias

a) Cuestiones generales

El Reglamento de 1848 establece que determinadas materias de la vida societaria sean competencia de la junta de accionistas¹⁰³⁸, pero no recoge una relación exhaustiva de las mismas. El principio general que consagra el texto normativo es que las competencias de la junta deben figurar en la escritura de fundación de la compañía. En dicho documento se aprobaban los estatutos y reglamentos¹⁰³⁹.

El artículo 1 dispone que un elemento del contenido mínimo de la escritura de constitución son

(l)as facultades que se reserven a la junta general de accionistas y época de su convocación no pudiendo menos de verificarse una vez al año (apartado 11).

Por lo tanto, ante la ausencia de una enumeración legal de dichas facultades, la escritura de fundación debía recoger y describir todas las facultades asignadas a la junta general. Cabe llamar la atención sobre la utilización de la expresión “*se reserven*” en el sentido de que si no figuraran atribuidas a este órgano, no podría ejercitarlas. Lo cual plantea el problema de la autonomía competencial de los órganos sociales, puesto que parece que aún no estaba clara la delimitación de la esfera de actuación de ambos órganos. En efecto, el uso del reflexivo en “*se reserven*”, ¿a quién hace referencia? ¿A los accionistas? Probablemente sí. Pero, ¿quiere esto decir que los accionistas podían, por ejemplo, atribuir a los administradores competencias de la junta o, al contrario, asignar a este órgano facultades de representación o de administración de la sociedad?

La respuesta, en nuestra opinión, no es clara¹⁰⁴⁰. Sin duda alguna, la estructura orgánica de las compañías por acciones de aquella época se está desgajando de la estructura orgánica de las otras compañías mercantiles (sobre todo la colectiva) en las que sus singularidades establecían unas precisas delimitaciones entre las competencias de la reunión de socios y de la capacidad de los socios para representar y administrar la

¹⁰³⁸ Como luego se verá, estas materias son: la aprobación de los estatutos y reglamentos, de las cuentas anuales y del nombramiento y remuneración de los administradores.

¹⁰³⁹ Aunque el Reglamento de 1848 no establece expresamente que los estatutos y reglamentos sociales deban ser aprobados por la junta, puede deducirse del contenido del artículo 11, que se comenta más adelante.

¹⁰⁴⁰ Se transcribe a continuación un comentario de MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones del Derecho mercantil* ..., pág. 279, sobre los administradores de las compañías por acciones, que es aplicable al tema que se está comentando de las competencias de la junta general. El texto es posterior a la derogación en 1868 de la Ley de 1848 y tiene el interés de disponer de una perspectiva histórica no muy distanciada de aquel momento y de recoger la problemática de la autonomía competencial entre los órganos sociales:

... es necesario que exista una entidad capaz de suplir lo que la ley prohíbe a aquéllos [los administradores] o la escritura de fundación no les concede explícita o implícitamente. Por esta razón, la junta general de accionistas, legalmente reunida, debe tomar parte en la gestión social, sea ejerciendo las facultades que se haya reservado en la escritura de fundación, sea (...) sea dictando reglas a los administradores para la gestión de los intereses sociales, sea acordando sobre todo lo que en los estatutos y reglamentos no estuviese previsto.

compañía. Los socios de las compañías personalistas arriesgaban todo su patrimonio (responsabilidad ilimitada) y ostentaban la condición de administradores de la masa social. En cambio, los accionistas disfrutaban de una limitación de responsabilidad y no tenían el derecho a administrar y gestionar la compañía. Los administradores de las sociedades por acciones, como se comenta en el capítulo siguiente, se encontraban entre la figura del mandatario y la del representante orgánico.

Otra cuestión relevante del artículo 1.11, transcrito anteriormente, es el momento o plazo de celebración de la junta de accionistas. Se establece la obligación de celebrar la reunión, al menos, una vez al año, si bien, no se concreta ningún periodo determinado, pudiéndose celebrar, por lo tanto, en cualquiera de los doce meses que componen un año. Tampoco se recoge el contenido de dicha reunión, aunque del párrafo 14 de este mismo artículo 1, se colige que, al menos, debían *revisarse y aprobarse los inventarios y balances*.

b) Estatutos y reglamentos societarios

En los estatutos y reglamentos se regulaban gran parte de las materias societarias y corporativas de la compañía. Sin perjuicio del estudio del contenido de ambos documentos que se realiza en un epígrafe posterior, se debe determinar quién era titular de la facultad de aprobación y modificación de dichos documentos. El Reglamento no dice expresamente que sean los accionistas reunidos en junta general (tampoco lo establecen el CCom 1829 o la Ley de 1848).

En efecto, sorprende que el artículo 1 del Reglamento, que regula el contenido mínimo de la escritura de constitución, no mencione los estatutos ni los reglamentos. Evidentemente, recoge temas y cuestiones que deben figurar en dichos documentos, pero no se señalan como parte de la escritura de fundación, ni las condiciones para su aprobación y modificación.

La respuesta a esta cuestión se encuentra en el artículo 11 del Reglamento, según el cual,

(c)ubierta que sea la mitad de las acciones que constituyen el capital social, se reunirán los suscriptores en junta general para que los que no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura de fundación, presten su conformidad con los estatutos y reglamentos de la compañía, y según lo que se acordare, quedarán éstos definitivamente arreglados.

Del texto transcrito se pueden extraer dos conclusiones. La primera, que los otorgantes de la escritura de constitución debían aprobar los estatutos y reglamentos. No queda claro si reunidos en junta general o en el momento del otorgamiento de la escritura, pero no hay duda de que la competencia corresponde a los accionistas. La segunda, se refiere a los titulares de cartas de pedido de acciones que, sin haber asistido al otorgamiento de la escritura de fundación, una vez suscrita la mitad del capital social, debían reunirse, esta vez sí, en junta general para prestar *su conformidad con los estatutos y reglamentos de la compañía*.

c) *Cuentas anuales*

Las cuentas anuales son objeto de una especial regulación reglamentaria. El régimen de su publicidad e inspección configura un importante cambio de tendencia normativa. Por este motivo, se dedicará, necesariamente, un primer epígrafe a resumir el régimen instaurado por el CCom 1829. Posteriormente se analizarán dos cuestiones: los inventarios y balances, por un lado, y la distribución de dividendos, por otro.

i. *Antecedentes. El CCom 1829 no preveía la publicidad de las cuentas anuales ni la inspección por la Autoridad pública*

El CCom 1829 establecía que toda persona que tuviera la condición de comerciante debía llevar una contabilidad¹⁰⁴¹. Las consecuencias de la omisión de este deber, como afirma DE LA CUESTA, eran

*(d)e carácter indirecto; el Código español de 1829 preveía para ese caso, la imposición de una multa*¹⁰⁴².

Los socios tenían el derecho al examen de los libros de contabilidad según dispone el párrafo primero del artículo 310, en los siguientes términos:

En especie alguna de sociedad mercantil puede rehusarse a los socios el examen de todos los documentos comprobantes de los balances que se formen, para manifestar el estado de la administración social.

Pero el régimen para las compañías por acciones constituía una excepción a esta disposición general:

En las sociedades establecidas por acciones podrá hacerse derogación a esta regla general por pacto establecido en el contrato de sociedad, o por disposición de sus reglamentos aprobados que determinen el modo particular de hacer este examen, sujetando a su resultado la masa general de accionistas (artículo 310, párrafo segundo).

Por otro lado, cabe completar esta descripción de la regulación del CCom 1829 con la mención al carácter reservado de la información contable frente a terceros. En este sentido, dice BERNAL LLORÉNS que *(e)l Código de comercio parte de la consideración de que la contabilidad es secreta*¹⁰⁴³. En efecto, siguiendo la exposición

¹⁰⁴¹ En el Libro I del Código, el Título II, en su Sección II “*De la contabilidad mercantil*” se abre con el artículo 32, que dice así:

Todo comerciante está obligado a llevar cuenta y razón de sus operaciones en tres libros a lo menos, que son:

El libro diario.

El libro mayor o de cuentas corrientes.

El libro de inventarios.

(El subrayado es nuestro).

¹⁰⁴² DE LA CUESTA RUTE, J. M. (1973): “La contabilidad en el Código de comercio” en *REFyC*, vol. II, núm. 4, enero – abril, pág. 330. En este trabajo se encuentra un interesante resumen de la fuerza probatoria de los libros de comercio en el CCom 1829 (págs. 358 – 359).

¹⁰⁴³ BERNAL LLORÉNS, M. (1998): “En torno a la regulación contable en el Código de comercio de 1829” en *REFyC*, vol. XXVII, núm. 97, octubre - diciembre, pág. 903, que aclara que el CCom 1829 diferencia

de esta autora, el CCom 1829 estableció que el Tribunal no podía requerir de oficio la exhibición de los libros de contabilidad, debiendo concluirse *que la conducta contable sólo es sancionable en el caso de que intervenga el interés de un tercero, en concreto: comerciantes y acreedores*¹⁰⁴⁴. Solamente en caso de liquidación de la compañía, quiebra o juicio de sucesión universal, el órgano judicial podía exigir la inspección de los libros de contabilidad y, si el comerciante no hubiera llevado correctamente la contabilidad, sería objeto de sanción. Además, en estos casos de procedimiento judicial, los asientos que el comerciante llevara correctamente en la contabilidad, se considerarán prueba a su favor si el contrario no llevara contabilidad¹⁰⁴⁵.

Por último, cabe recordar que la falta de llevanza de la contabilidad era una presunción *iuris tantum* para calificar la quiebra como culpable, aunque no se hubiera ocasionado perjuicios a terceros¹⁰⁴⁶.

Una vez resumido el marco normativo configurado por el CCom 1829, se entiende mejor el carácter innovador del Reglamento de 1848 en relación a la aprobación y publicidad de las cuentas anuales de las compañías por acciones.

ii. Inventarios y balances

El principio general de que las cuentas anuales (los inventarios y balances) debían ser aprobadas anualmente por la junta de accionistas, aparece en dos artículos del Reglamento de 1848. El artículo 1 (contenido mínimo de la escritura de fundación), en su apartado 14 establece:

(l)as épocas en que hayan de formarse y presentarse los inventarios y balances de la compañía, no pudiendo dejar de verificarse en cada año, como lo

tres casos en los que se puede obligar a la comunicación, entrega y reconocimiento general de los libros contables: los juicios de sucesión universal, la liquidación de la compañía y la quiebra.

¹⁰⁴⁴ BERNAL LLORÉNS, M. (1998): “En torno a la regulación contable...”, págs. 904 y ss.

¹⁰⁴⁵ Establece el artículo 53 CCom 1829:

Los libros de comercio que tengan todas las formalidades que van prescritas, y no presenten vicio alguno legal, serán admitidos como medios de prueba en las contestaciones judiciales que ocurran sobre asuntos mercantiles entre comerciantes.

Sus asientos probarán contra los comerciantes a quienes pertenezcan los libros, sin admitírseles prueba en contrario; pero el adversario no podrá aceptar los asientos que le sean favorables, y desechar los que le perjudiquen, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, estará por las resultas combinadas que presenten todos los asientos relativos a la disputa.

También harán prueba los libros de comercio en favor de sus dueños, cuando su adversario no presente asientos en contrario hechos en libros arreglados a derecho, u otra prueba plena y concluyente.

Finalmente, cuando resulte prueba contradictoria de los libros de las partes que litigan, y unos y otros se hallen con todas las formalidades necesarias, y sin vicio alguno, el tribunal prescindirá de este medio de prueba y procederá por los méritos de las demás probanzas que se presenten calificándolas según las reglas comunes del derecho.

¹⁰⁴⁶ En efecto, el artículo 1006 CCom 1829 establecía que:

(s)erán también tratados en el juicio como quebrados de tercera clase [artículo 1002.3: insolvencia culpable], salvo las excepciones que propongan y prueben para destruir este concepto y demostrar la inculpabilidad de la quiebra.

1 Los que no hubiesen llevado los libros de contabilidad en la forma y con todos los requisitos que se prescriben en la sección 2ª, título 2, libro 1 de este Código, aunque de sus defectos y omisiones no haya resultado perjuicio a tercero.

previenen los artículos 36 y 37 del Código de comercio¹⁰⁴⁷, y las formalidades con que hayan de revisarse y aprobarse por la junta de accionistas.

Como se puede comprobar, los artículos 36 y 37 (cuyo texto íntegro se ha transcrito a pie de página) no recogían expresamente la obligación de aprobar en junta de socios los documentos contables. El Legislador de aquella época se centraba en la *formación y extensión* del libro de inventarios y del libro del balance general, que debían ser *firmados* por todos los interesados. Los comerciantes eran, sobre todo, personas físicas y compañías mercantiles personalistas en las que el número de socios era reducido y, además, participaban, normalmente, en la gestión. Por lo tanto, tras la entrada en vigor del artículo 1.14 del Reglamento de 1848, no quedó ninguna duda de que las cuentas anuales de las compañías por acciones debían *revisarse y aprobarse* por la junta.

Junto a este principio general, el artículo 34 del Reglamento de 1848 disponía, entre otras cuestiones, la publicidad e inspección de las cuentas anuales de las compañías por acciones, derogando, por tanto, como se ha expuesto anteriormente, el principio de no publicación de los documentos contables de los comerciantes recogido en el CCom 1829. Dice así el citado artículo:

Anualmente formalizaran las compañías mercantiles por acciones un balance general de su situación en que se comprenderán todas las operaciones practicadas en el año, sus resultados y el estado de su activo y pasivo. Estos balances autorizados por los administradores de la compañía bajo su responsabilidad directa y personal, y después de reconocidos y aprobados en junta general de accionistas, se remitirán al Jefe político de la provincia, quien dispondrá su comprobación y hallándose exactos y conformes con los libros de la compañía, se imprimirán y publicarán en el Boletín oficial de la provincia, comunicándose asimismo al tribunal de Comercio del territorio.

Cabe señalar, en primer lugar, que este artículo 34 reitera el principio de *reconocimiento y aprobación* de las cuentas por la junta general, recogido por el artículo 1.14, complementándolo con el otro postulado básico de las cuentas anuales: éstas son elaboradas por los administradores *bajo su responsabilidad directa y personal*.

¹⁰⁴⁷ A continuación se transcriben ambos artículos del Código:

Artículo 36.

El libro de inventarios empezará con la descripción exacta del dinero, bienes muebles e inmuebles, créditos y otra cualquiera especie de valores que formen el capital del comerciante al tiempo de comenzar su giro.

Después formará cada comerciante anualmente, y extenderá en el mismo libro el balance general de su giro, comprendiendo en él todos sus bienes, créditos y acciones, así como también todas sus deudas y obligaciones pendientes en la fecha del balance, sin reserva ni omisión alguna, bajo la responsabilidad que se establece en el libro de quiebras.

Todos los inventarios y balances generales se firmarán por todos los interesados en el establecimiento de comercio al que correspondan, que se hallen presentes en su formación.

Artículo 37.

En los inventarios y balances generales de las sociedades mercantiles, será suficiente que se haga expresión de las pertenencias y obligaciones comunes de la masa social, sin extenderse a las peculiares de cada socio en particular.

Nos encontramos, pues, ante la asignación de competencias a cada órgano social de la compañía por acciones¹⁰⁴⁸.

Además, el referido artículo 34, rompiendo con la consideración del CCom 1829 de que la contabilidad era secreta, consagra el principio de publicidad e inspección¹⁰⁴⁹ de las cuentas de las compañías por acciones. Como expone BERNAL LLORÉNS, *la publicación y la inspección de la información contable de todo tipo de sociedades por acciones, suponía una notable ruptura respecto a las normas recogidas en el Código de 1829*.¹⁰⁵⁰

Este nuevo criterio no parece que fuera muy bien recibido, fundamentalmente por parte de las compañías anónimas existentes con anterioridad a la Ley de 1848, que debían adaptar sus estatutos y reglamentos. La autora citada anteriormente¹⁰⁵¹ aporta los siguientes datos en relación a las solicitudes de autorización. Fueron un total de 41 solicitudes, de las cuales 28 fueron concedidas y 13 obligaron a la disolución de la compañía. Las decisiones del Gobierno se tomaron en los años inmediatamente posteriores a la entrada en vigor de la Ley y del Reglamento de 1848: 9 ese mismo año; 14 en 1849; 8 en 1850; 5 en 1851; 2 en 1853; y, por último, 3 en 1854. Las Juntas de Comercio colaboraron para confrontar las cuentas de las sociedades. Concluye BERNAL LLORÉNS diciendo que *(s)e puede observar que las autoridades realizaron un considerable esfuerzo para que sólo continuasen las sociedades anónimas saneadas financieramente, siendo el resultado de la comprobación, o auditoría, de los libros de cuentas el criterio determinante*.

Un ejemplo de estas dificultades es el caso concreto de la sociedad mercantil “Santa Ana de Bolueta”¹⁰⁵² (recogido por AVECILLA¹⁰⁵³ y BIEC y VICENTE CARAVANTES¹⁰⁵⁴), existente antes de la promulgación de la Ley de 1848, que solicitó la correspondiente autorización¹⁰⁵⁵, planteando la exención de varias de las obligaciones que se establecían tanto en la Ley como en el Reglamento que la desarrollaba. Siguiendo el texto de BIEC y VICENTE CARAVANTES (transcripción casi literal de la RO

¹⁰⁴⁸ Asignación de competencias que no tiene sentido en el caso del comerciante individual y que, por otro lado, presenta unas características diferentes en las compañías mercantiles personalistas en las que la condición de socio otorga el derecho a participar en la administración de la compañía (y, por tanto, la obligación de formular los estados contables).

¹⁰⁴⁹ El principio de inspección se recogía también en el artículo 37 del Reglamento de 1848, que en su párrafo primero establecía:

Los Jefes políticos darán cuenta al Gobierno del estado de cada compañía por acciones que hubiere en su territorio según el resultado del balance anual, exponiendo las observaciones que estimaren conducentes en las materias que sean de interés de la administración.

¹⁰⁵⁰ BERNAL LLORÉNS, M. (2004): “La regulación de las sociedades anónimas y la información contable publicada en la GdM a mediados del siglo XIX” en REFyC, vol. XXXIII, núm. 120 (enero - marzo), pág. 73.

¹⁰⁵¹ BERNAL LLORÉNS, M. (2004): “La regulación ...”, pág. 74.

¹⁰⁵² Que, según CAVA MESA, fue la primera sociedad constituida en el País Vasco para la explotación del mineral de hierro local (CAVA MESA, M. J. (2011): “La economía en España, de 1800 a 1936” en PAREDES, J. (dir.) *Historia de España contemporánea*, Barcelona, pág. 517).

¹⁰⁵³ AVECILLA, P. (1849): *Diccionario de la legislación mercantil* ..., págs. 111 a 114.

¹⁰⁵⁴ BIEC, J. M. Y VICENTE CARAVANTES, J. (1851): *Suplemento al Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia de Don Joaquín Escriche*. Madrid y Santiago, págs. 619 y 620.

¹⁰⁵⁵ Esta solicitud fue trasladada por RO de 18 de abril de 1848 a la Sección de Comercio, Instrucción y Obras Públicas del Consejo Real, la cual emitió su Dictamen el 15 de julio de 1848, que fue íntegramente asumido por el MCIOP, emitiendo la correspondiente resolución mediante RO de 31 de julio de 1848. GdM de 12 de agosto de 1848, núm. 5082.

de 31 de julio de 1848 que resuelve la solicitud), se puede destacar, a los efectos que ahora se comentan, que dicha compañía solicitaba la no aplicación del citado artículo 34 del Reglamento de 1848 referido a la publicación de los balances y la inspección de los mismos por los Jefes Políticos, respecto a las sociedades fabriles y manufactureras que tuviesen desembolsado el capital social.

La RO destaca la importancia y necesidad de la vigilancia e inspección de las compañías por acciones por parte de la Autoridad pública. Rechaza todas las pretensiones de la compañía y, en relación a la cuestión concreta del artículo 34 del Reglamento de 1848, dice que *alegábase en primer lugar el perjuicio que se seguiría a las sociedades industriales de darse publicidad de los resultados de sus operaciones. Esto es inexacto, porque no se exige a sociedad alguna establecida para beneficiar un invento industrial que revele la forma en que lo beneficie. Este secreto le pertenecería en propiedad si hubiese obtenido el competente real privilegio, lo que se le exige es que su administración sea exacta y bien ordenada: que sus operaciones se limiten al objeto para que ha sido autorizada, sin invertirse sus capitales en especulaciones de otro género, y que el público tenga periódicamente un conocimiento exacto de su situación por medio del balance que sirva de tipo del crédito de la sociedad; porque si ésta no ha de quedar obligada en sus contratos más que hasta donde alcance el capital social, justo y necesario es que los que con ella contraten sepan cuál es la cuantía de ese capital, y hasta dónde llega la garantía única de sus derechos.*

La compañía, al ver desestimadas todas sus pretensiones¹⁰⁵⁶, se disolvió, reorganizándose como sociedad regular colectiva, prosiguiendo su desarrollo¹⁰⁵⁷.

iii. Distribución de dividendos

Una cuestión directamente relacionada con las cuentas anuales comentadas en el epígrafe anterior es la distribución de dividendos. El Reglamento de 1848 la trata en dos artículos de manera independiente a los estados contables.

El artículo 1.15, que establece el contenido mínimo de la escritura de fundación, dispone que en ella debe expresarse

(l)a forma y tiempo en que hayan de acordarse la distribución de dividendos por la junta general de accionistas con sujeción a lo que sobre ello se previene en este Reglamento.

Queda claro que el único órgano social competente para aprobar el reparto de dividendos a los accionistas es la junta general. La escritura de fundación debe concretar la forma y tiempo en los que los socios pueden decidir sobre esta materia. El Reglamento de 1848 establece el marco regulatorio en su artículo 35, en el que se reitera que esta materia es competencia de la junta de socios:

¹⁰⁵⁶ En este sentido, AVECILLA dice: *(e)n mala hora quiso consultar al gobierno sobre la ejecución de la ley y su reglamento, la sociedad denominada "Santa Ana de Bolueta", pidiendo que para las sociedades existentes se modificasen algunas de sus disposiciones. Por consecuencia precisa de la época era natural que le fueran negadas sus instancias...* AVECILLA, P. (1849): *Diccionario de la legislación mercantil ...*, pág. 111.

¹⁰⁵⁷ BERNAL LLORÉNS, M. (2004): *La regulación ...*, pág. 74, que cita a TORTELLA CASARES, G. (1973): *Los orígenes del capitalismo en España*, Madrid, pág. 101.

Los dividendos de beneficios repartibles se acordarán necesariamente en junta general de accionistas con presencia del balance general de la situación de la compañía y no podrán verificarse sino de los beneficios líquidos y recaudados del mismo balance, previa la deducción de la parte que haya de aplicarse al fondo de reserva.

La competencia de la junta sobre esta cuestión no es ilimitada, pues debe cumplir y respetar las condiciones establecidas en el artículo 35. En primer lugar, es necesario que los dividendos dependan del contenido del *balance general*. Y, en segundo lugar, como requisito previo, es necesario que la contabilidad refleje un saldo de *beneficios líquidos y recaudados* a los que se ha deducido la asignación a la reserva.

d) *Nombramiento y remuneración de administradores*

El último ámbito de competencias de la junta general que recoge el Reglamento de 1848 se refiere a la designación y remuneración de los administradores. Cabe recordar en este momento, que la compañía por acciones era una excepción a la sociedad mercantil común en la que, con carácter general, los socios respondían ilimitadamente por las deudas sociales y, además, participaban en la gestión social.

Durante los debates parlamentarios, se puso de manifiesto el incumplimiento del principio de amovilidad de los administradores, recogido en el artículo 265.3 CCom 1829. Parecía que, de hecho en algunas sociedades, la junta general no podía cesar o sustituir a los administradores. En este sentido, Sáinz de Andino manifestaba que

*(e)l mal viene, señores, de (...) haber consentido que los fundadores se reservasen la administración social por largos períodos de años, y aun en algunas Sociedades indefinidamente, sin embargo, de que por la naturaleza misma de estos contratos corresponde a la Junta general de accionistas nombrar las personas en quienes haya de recaer su representación y el manejo de sus intereses.*¹⁰⁵⁸

Abundando en este tema, el Senador D. Antonio Guillermo Moreno propuso añadir un nuevo artículo al PL 1848 con el siguiente contenido:

Es condición indispensable para la Real aprobación de los estatutos de las Sociedades anónimas, que han de estar arregladas a la cláusula tercera del artículo 265 del Código de comercio, que exige que el manejo de aquellas ha de encargarse a mandatarios o administradores amovibles a voluntad de los socios.

*Palacio del Senado, 24 de Diciembre de 1847. Antonio Guillermo Moreno.*¹⁰⁵⁹

La CS admitió la enmienda, pero fue rechazada posteriormente por la CMC-S, que en su Dictamen excluyó dicho artículo. Por este motivo, el Senador Sr. Moreno insistió con nuevos argumentos que se recogiera su propuesta:

¹⁰⁵⁸ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 282.

¹⁰⁵⁹ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 302.

Señores, la circunstancia de haber presentado en la sesión del 24 de Diciembre un artículo adicional a la ley que ha sido discutida en el Congreso y en el Senado, el cual fue admitido por la Comisión, y aun por el Senado, dispensándome de apoyarle, me obliga a usar ahora de la palabra para manifestar las razones que tuve para proponer dicha adición, y al efecto tengo que recordar al Senado los términos de la misma.(...)

Pero es notorio, señores, que las quejas generales contra las Sociedades anónimas han procedido de dos causas: (...) [la segunda:] la forma en que se han constituido la mayor parte de las administraciones de las mismas compañías, eludiendo el carácter de amovibles, a voluntad de los accionistas, que requiere la segunda parte de la cláusula tercera del citado artículo 265 del Código de comercio. Y si se suprime el artículo adicional que propuse, por creerlo innecesario, y aun se añade porque se refiere a una disposición vigente del Código de comercio, yo pregunto, después de lo que es notorio y dejo manifestado, si dicha disposición del Código de comercio está vigente; cuando la mayor parte de las Sociedades que se han establecido se han constituido sin administraciones, sin conformarse con la parte segunda de la cláusula tercera del artículo 265 del Código de comercio; lo que hace pensar que dicha cláusula no lo impedía; y como son notorios los males que de aquí han resultado, tuvo mi adición por objeto hacer preventiva aquella para que no se repitiesen en adelante.¹⁰⁶⁰

Se reitera en estas palabras que en bastantes compañías autorizadas por los T. de c. bajo el régimen del CCom 1829, de hecho, se había despojado a la junta de accionistas de la competencia para nombrar nuevos administradores. Tanto era así, que se podía poner en duda la vigencia del artículo 265.3 del Código en relación al principio de amovilidad.

El entonces Ministro de CIOP, Sr. Bravo Murillo, contestó al Senador Sr. Moreno declarando que, sin duda alguna, el artículo 265.3 continuaba y continuaría en vigor (antes y después de la aprobación del PL 1848) y, por tanto, no veía necesario que se reprodujera en el texto de la Ley de 1848. El Senador, comprendiendo que su propuesta no tenía posibilidad de incluirse en la redacción final, dijo:

Bien sé que se me dirá que mi adición puede remitirse a la parte reglamentaria; más diré, que espero así se hará, porque creo que el Gobierno de su Majestad no desconocerá las razones poderosas que para ello hay; pero sin embargo, me parece que sería más conveniente que apareciese en el proyecto de ley.¹⁰⁶¹

Finalmente, aunque la Ley de 1848 no lo mencione, lo hace el Reglamento de 1848 en su artículo 27 en los siguientes términos:

Según está declarado en el artículo 265 del Código de comercio, los administradores de las sociedades por acciones, siendo anónimas, son amovibles a voluntad de los socios, mediando justas causas de separación, con arreglo a derecho o a lo que sobre la materia estuviere establecido en los estatutos de la sociedad.

¹⁰⁶⁰ DsC. Senado. Sesión de 17 de enero de 1848, núm. 23, págs. 333 y 334.

¹⁰⁶¹ DsC. Senado. Sesión de 17 de enero de 1848, núm. 23, pág. 334.

Cabe destacar la diferenciación que realiza texto reglamentario en relación a las sociedades anónimas y a las comanditarias por acciones. En estas últimas, como establece el artículo 28, los socios gerentes con responsabilidad ilimitada no pueden ser cesados por la junta de socios.

Es también importante subrayar que el Reglamento de 1848 exigía la necesidad de justa causa para la separación de los administradores, requisito éste que, con el paso del tiempo, ha desaparecido.

El artículo 1 también trataba del órgano competente para la designación de los administradores sociales. Este artículo, regulador del contenido mínimo de la escritura de fundación, en su último apartado, el 16, se refiere a que dicho documento debe recoger

(l)a designación de las personas que hayan de tener la representación de la compañía provisionalmente y sólo para las gestiones necesarias hasta que hallándose constituida se proceda al nombramiento de su administración por la junta general de accionistas o se encarguen de ella los socios gerentes si la compañía es en comandita.

Tanto la administración social provisional encargada de la gestión de la autorización de la compañía anónima, como los administradores sociales, son elegidos por la junta general de accionistas. Pero este régimen es diferente para las comanditarias por acciones, sobre las que establece el párrafo segundo de este mismo artículo 1.16:

*En las de esta última clase se observarán las disposiciones de los artículos 271 y 272 del Código de comercio y ni los que se nombren como inspectores de la administración social ni la junta general de accionistas podrán tener otras atribuciones y facultades que las que por derecho están declaradas a los socios comanditarios.*¹⁰⁶²

Por último, en relación a la remuneración o retribución de los administradores de las sociedades anónimas, el Reglamento de 1848, de nuevo, atribuye de manera expresa la competencia sobre esta materia a la junta general. También señala los tres sistemas de remuneración: una cantidad fija, una participación en beneficios, o una cuantía mixta de las dos anteriores. Dice así el artículo 5 del Reglamento de 1848:

La remuneración que hayan de disfrutar los administradores de las compañías anónimas podrá establecerse por medio de un sueldo fijo, o por el de una participación en los beneficios repartibles de la empresa o por ambos medios; pero en todo caso habrá de reservarse esta asignación a la junta general de accionistas constituida que sea la sociedad.

¹⁰⁶² Los artículos 271 y 272 del Código a los que se refiere el artículo transcrito dicen así:

Artículo 271:

Los comanditarios no pueden incluir sus nombres en la razón comercial de la sociedad.

Artículo 272:

Tampoco pueden los socios comanditarios hacer acto alguno de administración de los intereses de la compañía, ni aún en calidad de apoderados de los socios.

Respecto a la remuneración de los administradores de las sociedades comanditarias por acciones, el siguiente artículo del Reglamento de 1848, el 6, establece que,

(e)n las sociedades en comandita por acciones tendrán los socios gerentes, como responsables solidariamente de los resultados de las operaciones sociales, la participación que se prefijare por la escritura de fundación en las ganancias y pérdidas de la empresa.

2. Vigilancia de la junta por la autoridad pública

El texto reglamentario, siguiendo los nuevos principios de la Ley de 1848, configuró la junta como un órgano social de amplias competencias, pero sometido al control y vigilancia de la autoridad pública.

Aunque son varios los aspectos en los que se manifiesta el control y vigilancia, cabe destacar de manera fundamental la competencia del Jefe Político para convocar la junta y presidirla. Así, durante la fase de tramitación de la solicitud de la autorización, según el artículo 25 del Reglamento de 1848,

(e)l Jefe Político, a consecuencia de la orden en que se declare la compañía constituida, convocará la junta general de accionistas que se reunirá bajo su presidencia o la del empleado público en quien al efecto delegare, y dándose lectura del Real decreto de autorización y de aquella misma orden, se procederá al nombramiento ...

De igual manera, las compañías existentes antes de la promulgación de la Ley de 1848 debían celebrar una junta de socios para decidir si solicitaban la autorización o se disolvían. Esta junta debía ser convocada por los gerentes o directores de dichas compañías, debiendo dar

*conocimiento al Jefe Político de la provincia del día de la reunión, a fin de que aquella autoridad pueda por sí o por sus delegados presidir dicha junta...*¹⁰⁶³

Además, en caso de que los gerentes o directores no cumplieran la obligación legal de convocar la junta de accionistas en el plazo previsto, el Jefe Político tenía obligación de:

*convocar la junta general de accionistas bajo su presidencia o la de otro empleado público en quien delegare al efecto*¹⁰⁶⁴.

Para los demás supuestos de convocatoria de junta, el Reglamento de 1848 no establece nada concreto. En el epígrafe siguiente sobre los debates parlamentarios, se recogen unas intervenciones en el Congreso y en el Senado pretendiendo consagrar con rango legal la posibilidad de que los Jefes Políticos convocaran y presidieran las juntas generales. Tal propuesta fue rechazada, pero existía una fuerte corriente partidaria de esta medida de control, de tal manera que, casi diez años más tarde de la entrada en

¹⁰⁶³ Artículo 39 del Reglamento de 1848.

¹⁰⁶⁴ Artículo 40 del Reglamento de 1848.

vigor de la Ley y del Reglamento de 1848, se aprobó un Reglamento que recogió las facultades de la Autoridad pública de convocar y presidir las juntas generales¹⁰⁶⁵.

3. Adaptación de las compañías constituidas con anterioridad a la promulgación de la Ley de 1848

En el proceso de regularización o adaptación de las sociedades por acciones existentes con anterioridad a la promulgación de la Ley de 1848, el papel de la junta general era clave. Como se expuso en un epígrafe anterior, el artículo 18 del PL 1848 se modificó para que fuera la junta de accionistas el único órgano competente sobre la decisión acerca de la continuidad de la compañía¹⁰⁶⁶. Se trataba de impedir que la inacción de los administradores originara, de hecho, la disolución de la compañía sin que los accionistas pudieran manifestar su postura al respecto.

El Reglamento de 1848 desarrolla los artículos de la Ley de 1848 sobre esta materia concretando cuestiones, tanto procedimentales como de fondo, para evitar que los socios fueran despojados de su derecho a manifestar si querían continuar o no la actividad social bajo el nuevo marco legal.

El artículo 39 del Reglamento de 1848 establece la obligación de que

(l)os gerentes o directores de las compañías por acciones existentes en la actualidad, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de 18 de enero, deben necesariamente convocar a junta general de accionistas dentro de los 50 días siguientes al de su publicación,

debiendo, como se ha expuesto anteriormente, informar al Jefe Político de la fecha de la celebración de la junta para que pueda presidirla él o sus delegados. Los administradores deberán remitir una certificación del acuerdo, bien para declarar la compañía en liquidación, bien para solicitar la Real autorización que la permita continuar en sus operaciones.

En caso de que los gerentes o directores incumplan con la obligación de convocar la junta de accionistas, deberá llevarlo a cabo el Jefe Político, y su celebración será presidida por dicha Autoridad o por otro *empleado público en quien delegare al efecto* (artículo 40 del Reglamento de 1848).

D) LOS ESTATUTOS Y LOS REGLAMENTOS. UN APUNTE SOBRE SUS CONTENIDOS

Aparentemente la Ley y el Reglamento de 1848 utilizan las expresiones *reglamentos* y *estatutos* como conceptos diferentes, aunque complementarios¹⁰⁶⁷. En varias menciones de los textos normativos se hace referencia a los *reglamentos* “y” *estatutos*, sin emplear la expresión disyuntiva “o”. En este sentido, la autorización de la

¹⁰⁶⁵ Reglamento de 1857 (GdM de 13 de diciembre de 1857, núm. 1804).

¹⁰⁶⁶ Propuesta del Senador Sr. Pérez Seoane, en la sesión del 24 de diciembre de 1847 (DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, págs. 295 y 296).

¹⁰⁶⁷ En este epígrafe, se escribirá *estatutos* y *reglamentos* en cursiva al tratarse de los términos objeto de concreto estudio y comparación.

compañía por parte del Gobierno requiere la aprobación de los *reglamentos* “y” *estatutos* (artículo 9 de la Ley de 1848 y artículo 21 del Reglamento de 1848).

Por lo tanto, la primera consecuencia que se pone de manifiesto es que se trataría de dos conceptos o realidades diferentes: los *reglamentos* y los *estatutos*. Pero, además, debe tenerse en consideración la escritura de fundación o de constitución de la sociedad. Se trata de un tercer elemento que completa la trilogía de los documentos constitutivos de la sociedad: escritura de fundación, *reglamentos* y *estatutos*.

El problema básico es que no se encuentra una descripción de cada uno de ellos en los textos normativos. Por este motivo, es difícil diferenciar sus respectivos límites y contenidos. Incluso el texto legal (en este caso el Reglamento de 1848) genera confusión y no permite clarificar el contenido de cada documento. En efecto, el artículo 1 del Reglamento de 1848 regula el contenido mínimo de la escritura de fundación o constitución de la sociedad. En él no se hace referencia a *reglamentos* o *estatutos* que formen parte integrante de la escritura. Pero recoge muchos aspectos societarios que serían (o deberían ser) objeto del contenido de los *estatutos* y *reglamentos*.

Esta confusa situación puede explicarse (y, quizá, justificarse) entendiendo que la escritura de constitución de la sociedad debe incluir todas las menciones recogidas en el artículo 1 del Reglamento de 1848, dejando libertad a los socios para recogerlas en *estatutos* o *reglamentos*. Pero no queda aclarada la diferencia o diferencias entre los *estatutos* y los *reglamentos*.

Ante el silencio normativo sobre esta cuestión, quizá la explicación se puede encontrar en los antecedentes legislativos. Si se acude al CCom 1829, se constata con sorpresa que los artículos que regulan las compañías mercantiles por acciones no hacen referencia a los *estatutos* sino exclusivamente a los *reglamentos*. La mención se realiza fundamentalmente al documento que recoge la forma o manera de regular la administración de la sociedad. También se cita al regular las formalidades de las acciones.

En concreto, las referencias a los *reglamentos* de las sociedades (sin referirse en ningún momento a los *estatutos*) en el CCom 1829 son las siguientes: en ellos debe figurar la forma de nombramiento de los administradores de las sociedades anónimas (artículo 277); la manera de organizar la administración de estas sociedades (artículo 279); las formalidades de los títulos de las acciones (artículo 280); los *reglamentos*, junto con la escritura de establecimiento de la sociedad deben ser aprobados por el T. de c. del territorio donde se establezca (artículo 293); si la sociedad goza de algún privilegio, los *reglamentos* deben ser aprobados por el Rey (artículo 294); y, por último, los *reglamentos* deben ser impresos y publicados (artículo 295).

Por lo tanto, el CCom 1829 no resuelve las diferencias entre los *reglamentos* y los *estatutos*. Si se vuelve la atención a los textos de la Ley y del Reglamento de 1848, se podría concluir que no existía una descripción normativa del contenido de ambos documentos, siendo los socios los que determinaran su contenido. Lo importante es que entre ambos documentos se regularan todos los aspectos necesarios para la vida societaria, respetando el contenido mínimo establecido en el artículo 1 del Reglamento de 1848.

Y todo lo anterior sin olvidar que el texto de los *reglamentos* y *estatutos* debía ser aprobado expresamente, en primer lugar, por la junta general y, posteriormente, por el Consejo Real y el Gobierno, así como cualquier modificación.

¿Qué uso hacen la Ley y el Reglamento de 1848 de estos dos conceptos de *estatutos* y *reglamentos*? Para realizar un análisis exhaustivo, se debería incluir en la pregunta el tercer elemento de la trilogía: la escritura de fundación de la sociedad. Una respuesta precisa a esta cuestión requiere analizar el uso de los tres términos diferenciando tres grupos: el primero, las menciones a los tres conceptos simultáneamente; el segundo, cuando aparecen dos de los tres; y, el tercero, cuando sólo se refiere a uno de los tres.

Respecto al primer grupo, consistente en menciones de la Ley y del Reglamento de 1848 a los *estatutos*, *reglamentos* y escritura fundacional de forma simultánea, la Ley de 1848 se refiere a la vez a estos tres conceptos en los siguientes artículos:

- Artículo 6: la solicitud de la Real autorización debe acompañar *la escritura social y todos los estatutos y reglamentos que hayan de regir para la administración de la compañía. Los estatutos y reglamentos se aprobarán previamente en junta general de suscriptores.*
- Artículo 9: en caso de que la sociedad fuera aprobada por autorización Real y no por Ley, el Gobierno así lo declarará a los solicitantes y deberá *aprobar la escritura social y los estatutos y reglamentos.*
- Artículo 18: las sociedades existentes antes de la entrada en vigor de la Ley tendrán que solicitar la correspondiente autorización *presentando al efecto sus escrituras, estatutos y reglamentos.*

El Reglamento de 1848 hace referencia a los *estatutos*, los *reglamentos* y la escritura fundacional de manera simultánea en el siguiente artículo:

- Artículo 11: una vez suscrito la mitad del capital social, los socios deben reunirse en Junta de accionistas *para que los que no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura de fundación, presten su conformidad con los estatutos y reglamentos de la compañía, y según lo que se acordare, quedaran estos definitivamente arreglados.*

En cuanto al segundo grupo (menciones de la Ley y del Reglamento de 1848 sólo a dos conceptos de la trilogía: los *estatutos*, los *reglamentos* y la escritura de constitución), la Ley de 1848 las realiza en un artículo:

- Artículo 11: cualquier *alteración o reforma en los estatutos y reglamentos que no obtenga la aprobación del Gobierno, será ilegal, y anulará por sí la autorización en virtud de la cual exista la compañía.* Nótese que la modificación es sólo de los *estatutos* y de los *reglamentos*, pero no de la escritura de fundación. Es lógico pensar que las modificaciones estatutarias o reglamentarias se formalizaran u otorgaran en escritura pública (y así se menciona, por ejemplo, en el artículo 20 del Reglamento de 1848) que modificara, en consecuencia, la escritura de fundación.

El Reglamento de 1848 se refiere simultáneamente a dos de los tres conceptos en los siguientes artículos:

- Artículo 7: el régimen administrativo de la sociedad y el directivo de sus operaciones se regularán en *los reglamentos de las sociedades por acciones*, siempre *guardando conformidad con las bases establecidas en la escritura de fundación*. Es de destacar este artículo, pues, en primer lugar, vincula la administración de la sociedad a lo regulado en los *reglamentos* (no en los *estatutos*), con lo que hubiera previsto al efecto (*de conformidad con las bases*) la escritura de constitución. Y, en segundo lugar, este artículo excluye a los *estatutos* como documento en el que se regule el régimen administrativo y directivo de la sociedad.
- Artículo 8: de conformidad con lo previsto en el artículo 287 CCom 1829, *se tendrá por nulo todo pacto que establecieren los fundadores de las compañías o acordaren los accionistas, sin que conste en la escritura de fundación o en los reglamentos*. Tampoco se hace mención a los *estatutos*. ¿Serían válidos los pactos establecidos por fundadores o accionistas sin que constaran en los *estatutos*? Nos inclinamos a pensar que estarían sometidos a este mismo artículo 8. Por este motivo y por otras menciones reglamentarias citadas anteriormente, al no existir un expreso contenido mínimo de los *estatutos* ni de los *reglamentos*, es posible que la nomenclatura fuera utilizada indistintamente, de manera que al hablar de *estatutos* también se hiciera referencia a los *reglamentos* y a la inversa.
- Artículo 12: los documentos que deben presentarse al Jefe Político para que instruya el expediente de autorización de la sociedad son: *la escritura de fundación de la compañía, con sus reglamentos, las cartas de suscripción de acciones que completen la mitad del capital social y el acta de su aprobación definitiva*. No se hace mención a los *estatutos*, lo cual puede ser un error, a tenor de lo que prevé el artículo 16, que se comenta a continuación.
- Artículo 16: instruido por el Jefe Político el expediente de autorización de la sociedad, lo remitirá *al Consejo Real para que eleve consulta sobre la aprobación de la compañía y de sus estatutos y reglamentos*. En este artículo, en cambio, se mencionan los *estatutos* que se omitieron en el artículo 12 citado anteriormente. Y no se hace referencia a la escritura de fundación.
- Artículo 17: continuación del anterior, conforme al cual, si el Consejo Real estima que debe modificarse la documentación presentada, podrá exigir nuevos informes o documentos *que sean conducentes*.
- Artículo 21: el Gobierno, *si procediere la aprobación de la sociedad con los estatutos y reglamentos presentados expedirá el Real decreto de autorización*.

- Artículo 22: después de recibir el Jefe Político el RD de autorización de la sociedad, *se imprimirán y publicarán los estatutos y reglamentos de la sociedad*.
- Artículo 25: la junta de accionistas debe reunirse una vez comunicada la Real autorización al Jefe Político; en esa junta se debe nombrar a los administradores y a quienes ejerzan las labores de inspección y vigilancia de la administración, si la sociedad es anónima, y a las personas encargadas de la inspección y vigilancia si la sociedad es en comandita, *con arreglo en unas y otras a sus estatutos y reglamentos*. Por lo tanto, las características y el régimen de administración, inspección y vigilancia se encuentran regulados tanto en los *estatutos* como en los *reglamentos*. No hay una asignación de contenidos a unos u otros.
- Artículo 26: *de los estatutos y reglamentos de la compañía después de haberse constituido y del Real decreto de autorización, se remitirán copias al tribunal de Comercio en cuyo territorio estuviere domiciliada para que se haga los correspondientes asientos en sus registros fijándose edictos en los estrados del tribunal con inserción literal de aquellos documentos*. Los requisitos de publicidad afectan a los *estatutos* y a los *reglamentos*, pero no se hace mención expresa a la escritura de constitución.
- Artículo 30: el Gobierno y el Jefe Político de la provincia del domicilio social ostentan la facultad de inspección del régimen administrativo de la sociedad sobre *la exacta observancia de sus estatutos y reglamentos*.
- Artículo 42: las sociedades por acciones existentes antes de la promulgación de la Ley de 1848 deben decidir, dentro del plazo legal establecido al efecto, si solicitan o no la Real autorización. En caso de que lo hicieran, deben enviar al Jefe Político de la provincia un expediente en el que figure una certificación de dicho acuerdo y *sus estatutos y reglamentos*, así como el balance general.

Por último, el tercer grupo se refiere a las menciones individuales de la escritura de constitución, los *estatutos* y los *reglamentos*. Es el Reglamento de 1848 en donde se encuentran estas referencias.

La más importante es el artículo 1, que regula a lo largo de sus dieciséis apartados el contenido mínimo de *las escrituras de fundación de las compañías mercantiles por acciones*. Ninguna mención se hace a los *estatutos* o los *reglamentos*. El texto normativo no establece un desglose de competencias o atribuciones propias y exclusivas de los *estatutos* o de los *reglamentos*. Es posible, por tanto, que la misma materia, por ejemplo la convocatoria y régimen de acuerdos de la Junta general, fuera regulada en unas sociedades por sus *estatutos* y en otras sociedades por sus *reglamentos*.

Junto a este artículo, aparecen las siguientes menciones a lo largo del texto reglamentario:

- Artículo 6: los socios gerentes de las sociedades comanditarias por acciones tendrán la participación en las pérdidas y ganancias *que se prefijare por la escritura de fundación*.
- Artículo 9: es requisito necesario para la *aprobación Real de la escritura de fundación de toda sociedad mercantil por acciones*, haber suscrito la mitad del capital social.
- Artículo 10: *la escritura de fundación* establecerá la forma en la que *las cartas de pedido de acciones producen la obligación de hacer efectivo el importe de las mismas acciones*.
- Artículo 13: el Jefe Político debe examinar si *los estatutos de la sociedad*, en primer lugar, *están conformes a lo prescrito en el Código de comercio con respecto a las sociedades comanditarias y anónimas, a las disposiciones de la ley de 18 de Enero de 1848 y a las de este Reglamento*. Y, en segundo lugar, *si el capital prefijado en los estatutos sociales puede graduarse suficiente para el objeto de la empresa*. La referencia es exclusiva a los *estatutos sociales* y no a los *reglamentos*, lo cual apoyaría la tesis de que la nomenclatura era utilizada indistintamente y al referirse a los *estatutos* también se hacía referencia a los *reglamentos* y a la inversa. Recuerdese, además, que el CCom 1829 sólo se refiere a los *reglamentos* y no a los *estatutos* de las sociedades por acciones y este artículo 13, regulando los *estatutos sociales* hace una referencia a lo previsto en el CCom 1829 que sólo se refiere a *reglamentos* y no a *estatutos*.
- Artículo 20: las sociedades que se pueden constituir mediante Real autorización, pero cuyos *estatutos acordados por los fundadores* no sean conformes con la Ley de 1848, el Consejo Real propondrá *las modificaciones que en ellos deban hacerse*. Una vez analizada la propuesta por el Gobierno, lo comunicará *a los interesados, para que en su vista, si insistieren en la formación de la compañía, otorguen nueva escritura reformando los estatutos según se les haya prevenido*. De nuevo se observa la utilización exclusiva del término *estatutos* sin hacer mención a los *reglamentos*. ¿Significa esto que el Consejo Real o el Gobierno no podían exigir modificaciones en los *reglamentos*? La respuesta es negativa por todo el contexto de las facultades de control e inspección del Gobierno. Parece, por tanto, que se va produciendo una evolución en la utilización terminológica por parte del Reglamento de 1848, en el sentido de utilizar los *estatutos* como término que engloba tanto a los *estatutos* propiamente dichos como a los *reglamentos*.
- Artículo 27: conforme a lo previsto en el artículo 265 CCom 1829 los administradores de las sociedades anónimas son amovibles. Han de mediar *justas causas de separación, con arreglo a derecho o a lo que sobre la materia estuviere establecido en los estatutos de la sociedad*. También este artículo se refiere exclusivamente a los *estatutos* y no a los *reglamentos*. Si se compara con el texto del artículo 7 del Reglamento de 1848, encontramos de nuevo con que se utilizan indistintamente ambos términos. En efecto, según este artículo 7, *los reglamentos de las sociedades por acciones*

comprenderán las disposiciones relativas al orden administrativo de la empresa y al directivo de sus operaciones. El artículo 7 establece que los *reglamentos* sociales regulen el régimen de la administración de la sociedad y, en cambio, el artículo 27 prevé que el cese de los administradores se regule en los *estatutos* sociales.

- Artículo 29: los administradores deben constituir un depósito de garantía por el ejercicio de su cargo *en la cantidad determinada en los estatutos, y conforme a lo prescrito en el artículo 13 de la Ley de 28 de Enero.* En este caso, ocurre lo mismo que se ha comentado sobre el artículo 27 del Reglamento de 1848.
- Artículo 32: los administradores exigirán el desembolso de los dividendos pasivos *en las épocas marcadas en los estatutos.* Mención exclusiva a los *estatutos*.
- Artículo 37: los Jefes Políticos pondrán en conocimiento del Gobierno *toda novedad que ocurra en el régimen directivo y administrativo de las compañías que pueda perturbarlo o que produzca alguna alteración en la observancia de sus estatutos.* En consonancia con los comentarios anteriores, esta mención exclusiva a los *estatutos* se puede entender que incluye también a los *reglamentos* de la sociedad. Es difícil que se pueda excluir de las facultades de control y vigilancia del Jefe Político y del Gobierno el cumplimiento de los *reglamentos* sociales. Se trata, de conceptos intercambiables o, al menos, tan relacionados entre sí que a ambos se les denomina por uno solo.

¿Cuáles son las consecuencias de esta exposición sobre el uso terminológico de la escritura de fundación, los *estatutos* y los *reglamentos* a lo largo del articulado de la Ley y del Reglamento de 1848? Se pueden destacar tres.

La primera, es que los *estatutos* y *reglamentos* deben ser aprobados por la junta general y, posteriormente, por la Autoridad pública competente. La escritura de fundación expresa la voluntad de los socios en ese momento, pero no queda claro si la manifiestan en una reunión de junta general o simplemente mediante su comparecencia al otorgamiento de la escritura.

La segunda, se refiere a que ni la Ley ni el Reglamento de 1848 establecen el contenido mínimo de los *estatutos* ni de los *reglamentos*. El Reglamento de 1848 establece con bastante minuciosidad el contenido mínimo de la escritura de fundación (artículo 1 que consta de dieciséis apartados), pero sin hacer ninguna mención a los *estatutos* o *reglamentos* sociales.

Y, la tercera, es que se observa una clara evolución desde el CCom 1829 en el que sólo se habla de los *reglamentos* de la sociedad hacia la utilización por el Reglamento de 1848 del término *estatutos* sociales como concepto que engloba también a los *reglamentos* de la sociedad.

No podemos detenernos con detalle en la evolución de esta cuestión terminológica en los textos legales posteriores. Simplemente dejamos apuntado que

nuestra vigente LSC regula en el artículo 22 el contenido de la escritura de constitución, y en el artículo 23 los *estatutos sociales*¹⁰⁶⁸. La referencia a *reglamentos sociales* no se recoge en el texto legal, si bien se menciona el “reglamento interno del sindicato de accionistas” (artículo 421 LSC) y, quizá como vestigio histórico en la sociedad anónima cotizada, el “reglamento de la junta general” (artículos 512, 513 y 521 LSC) y el “reglamento del consejo de administración” (artículos 528 y 529).

II. DEBATES PARLAMENTARIOS

La cuestión de la junta general, sus competencias, funcionamiento, etc., fue objeto de pocos comentarios durante los debates del PL 1848 en las Cortes Generales. El motivo obedece, probablemente, a que la regulación de la junta se fijaba en los estatutos y reglamentos de cada compañía, quedando fuera de discusión que la junta era la reunión de los accionistas.

Los temas que se van a estudiar se pueden agrupar en tres epígrafes: la soberanía de la junta, la intervención de la Autoridad pública en la convocatoria y presidencia de la reunión y, por último, el cómputo de las mayorías: por acciones o por accionistas.

A) SOBERANÍA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS EN LAS OPERACIONES SOCIALES

Durante la segunda sesión de los debates en el Congreso de los Diputados sobre el PL 1848 (el día 21 de abril de 1847), con motivo de la discusión del artículo 7, relativo a la necesidad de haber suscrito, al menos, la mitad del capital social en el momento de la presentación de la solicitud de autorización, el Diputado Sr. Mendizábal propuso reducir la suscripción mínima al 25%. Su proposición no fue muy precisa pues parecía que no diferenciaba la suscripción del desembolso. Esta confusión propició una explicación por parte del Diputado Sr. Rodríguez Rivas, Secretario de la CCD, en la que aludió al papel e importancia de la junta general en las compañías por acciones. Estas fueron las palabras del Sr. Rodríguez Rivas:

*A esta Ley preside una idea de la cual no sé si se habrá hecho cargo el Sr. Mendizábal, a saber: que todas las operaciones las ha de decidir la junta general de accionistas. Al formarse la sociedad por medio de la voluntad de los accionistas, puede establecerse en los estatutos o reglamentos hasta qué parte del capital se quiere comprometer en los ensayos, y si hechos estos ensayos no se satisfacen las esperanzas de los socios, puede la misma junta decidir la disolución de la sociedad.*¹⁰⁶⁹

Se deduce, por tanto, que para los miembros de la CCD, las competencias de la junta general eran muy amplias, otorgándole un carácter aparentemente de órgano

¹⁰⁶⁸ Sobre el contenido de ambos artículos se puede consultar:

- ROJO, A. (2011): “Artículo 22. Contenido de la escritura de constitución” en ROJO, A. Y BELTRÁN, E. (dirs.) *Comentario de la Ley de Sociedades de capital*, tomo I, Cizur Menor, págs. 342 -353.
- MOYA, J. (2011): “Artículo 23. Estatutos sociales” en ROJO, A. Y BELTRÁN, E. (dirs.) *Comentario de la Ley de Sociedades de capital*, tomo I, Cizur Menor, págs. 353 – 364.

¹⁰⁶⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1464.

soberano. Ahora bien, cabe realizar dos precisiones sobre esta cuestión. La primera, es que la afirmación transcrita se realiza en el marco de la suscripción inicial del capital social (bien compareciendo a la escritura de fundación, bien solicitando las cartas de pedido de acciones) y no en un contexto de atribución sistemática de competencias a este órgano social una vez autorizada la sociedad. La segunda precisión se refiere a que la soberanía de la junta quedaba sometida al control e inspección de la Autoridad Pública, quedando, por tanto, diluida dicha posición¹⁰⁷⁰.

B) CONVOCATORIA Y PRESIDENCIA DE LAS JUNTAS POR LA AUTORIDAD PÚBLICA

Con carácter previo, debe hacerse una breve referencia al régimen de convocatoria y presidencia de las juntas generales, vigente en el momento de la entrada en vigor de la Ley de 1848¹⁰⁷¹. El texto normativo clave es la Ley de 2 de abril de 1845 para el gobierno de las Provincias¹⁰⁷². Conviene recordar que una junta de accionistas era una reunión pública (si bien limitada a los socios de la compañía) y, por tanto, se encontraba dentro de la esfera de competencias de autorización y supervisión de la Autoridad pública, denominada en ese momento Jefe Político.

El artículo 5 de la citada Ley de 1845 otorgaba al Jefe Político una serie de facultades para poder desempeñar correctamente sus funciones. Entre ellas, para lo que ahora nos ocupa, se pueden destacar dos apartados del artículo 5:

*Dar o negar para las funciones y reuniones públicas, que hayan de verificarse en el punto de su residencia, y presidir estos actos cuando lo estime conveniente*¹⁰⁷³ (el subrayado es nuestro).

*Presidir, cuando lo juzgue oportuno, todas las corporaciones dependientes del Ministerio de la Gobernación de la Península*¹⁰⁷⁴ (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, el régimen en vigor sobre la convocatoria y presidencia de las juntas en vigor durante los debates parlamentarios es el que se acaba de apuntar y que se puede resumir de la siguiente manera. La facultad de convocar la junta de accionistas correspondía a los administradores, si bien, debían comunicarlo al Jefe Político, quien podría prohibir la reunión por motivos de orden público. En cuanto a la presidencia de la asamblea, el Jefe Político tenía plena competencia, siendo él quien las presidiera o la persona que designara para sustituirle. Respecto a esto último, cabe clarificar que la referencia a las *corporaciones dependientes del Ministerio de la Gobernación de la Península*, incluía las compañías por acciones que, a partir del 28 de enero de 1847 se transferirían a las competencias del MCIOP¹⁰⁷⁵.

¹⁰⁷⁰ Este sometimiento se basaba, fundamentalmente, en el artículo 17 de la Ley de 1848, desarrollado en varios preceptos del Reglamento de 1848.

¹⁰⁷¹ Para más detalles, se puede consultar el capítulo sobre la vigilancia e inspección asignada a la Autoridad pública y, más concretamente, el epígrafe sobre los Jefes Políticos y Gobernadores de las Provincias.

¹⁰⁷² GdM de 9 de abril de 1845, núm. 3860.

¹⁰⁷³ Artículo 5.7 de la Ley de 1845.

¹⁰⁷⁴ Artículo 5.8 de la Ley de 1845.

¹⁰⁷⁵ Como se recordará, por RD de 28 de enero de 1847 se crea el MCIOP, asumiendo las correspondientes competencias de las que hasta ese momento fue titular el Ministerio de la Gobernación

La presidencia de la junta general es una cuestión de gran importancia para el control y vigilancia de la actividad de la sociedad. En efecto, cabe señalar con el profesor JUSTE las facultades que tradicionalmente corresponden al presidente:

(c)ontrol de la regularidad de la constitución de la junta, moderación de los debates y proclamación de la aprobación o rechazo de los acuerdos propuestos¹⁰⁷⁶.

Con los referidos antecedentes se entiende mejor el contenido de las intervenciones de los parlamentarios. En la sesión del Congreso de los Diputados del 21 de abril de 1847 al debatir el artículo 17 (que disponía: *(e)l Gobierno, sin gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías, ejercerá la inspección que conceptúe necesaria para afianzar la observancia estricta y constante de la presente ley¹⁰⁷⁷*), el Diputado D. Juan José Fuentes apoyó que el Gobierno inspeccionase los estatutos de las sociedades y la inversión de sus fondos, pero manifestó que el texto propuesto se quedaba corto. Propuso que la facultad de inspección e intervención del Gobierno se ampliara a

... provocar las reuniones de accionistas o facultarlos a éstos para tenerlas, pues así se conseguiría que las sociedades no se separasen absolutamente de lo prevenido en sus respectivos estatutos.¹⁰⁷⁸

La enmienda pretendía una ampliación de las facultades de control de la Autoridad pública. La postura contraria de la CCD fue expresada por el Diputado Sr. Miota en los siguientes términos:

El Sr. Fuentes quisiera también que se hubiera acordado algo acerca de las reuniones de los accionistas. Esto no es de la ley: en lo sucesivo los estatutos y reglamentos no podrán hacerse sino discutiéndose por los accionistas mismos, es decir, por los que se suscriban para ser accionistas. Entonces, oyendo a todos los interesados, discutiendo su propia legislación, indudablemente establecerán las reglas más convenientes a sus intereses; y si después todas estas reglas no fuesen tales cuales debían ser, y si se les privara de la intervención que deben tener los accionistas, en ese caso todavía el Gobierno no daría su aprobación ni a la escritura social ni a los estatutos, y así se remediarán los males que teme el Sr. Fuentes.¹⁰⁷⁹

Con estas palabras finalizaron las discusiones sobre esta ampliación de las facultades de control y vigilancia del Gobierno sobre las compañías por acciones. Pero se trataba de un tema relevante y en el Senado, cuando se discutió este mismo artículo

de la Península. Además, por RD de la misma fecha se nombró a D. Mariano Roca de Togores primer Ministro de CIOP (GdM de 30 de enero de 1847, núm. 4521). Para más detalles se puede consultar el capítulo sobre la formación del texto legal.

¹⁰⁷⁶ JUSTE, J. (2011): “Artículo 191. Mesa de la junta” en ROJO, A. y BELTRÁN, E. (dirs.) *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo I, Cizur Menor, pág. 1357.

¹⁰⁷⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, pág. 1393.

¹⁰⁷⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1464.

¹⁰⁷⁹ Ídem.

17 del PL 1848¹⁰⁸⁰, los Senadores Sr. Pérez de Seoane y el Sr. Marqués de Vigo propusieron la siguiente enmienda:

Artículo 17.- Se redactará en los términos siguientes:

El Gobierno, sin gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías, ejercerá la inspección que conceptúe necesaria para afianzar la observancia de esta Ley y proteger los intereses legítimos de los accionistas. Con este fin podrá:

1.- Nombrar visitador que examine los libros de la compañía y cuanto estime necesario para formar un juicio cabal de su estado.

2.- Mandar que se convoque extraordinariamente junta general de accionistas.

3.- Designar persona que presida las Juntas generales de accionistas, así ordinarias como extraordinarias, siempre que lo juzgue oportuno.

*La elección de visitador o de presidente de las Juntas generales, recaerá necesariamente en el jefe político, o en un individuo del Consejo Real, del Tribunal Supremo de Justicia, o del Tribunal de Comercio de Madrid, si la compañía se hallase domiciliada en la provincia de Madrid. Respecto a las domiciliadas en las demás del Reino, recaerá en el jefe político, o en un individuo del Consejo provincial, de la Audiencia del territorio o del Tribunal de Comercio respectivo.*¹⁰⁸¹

El Sr. Pérez Seoane justifica la enmienda en la vaga y genérica redacción del texto presentado por la CS. En su opinión, es necesario que se detallen algunas facultades para que, una vez aprobado el PL 1848, el Gobierno pueda ejercer sin obstáculos el control y vigilancia de las compañías por acciones. En caso contrario, la Autoridad pública no podría desempeñar estas funciones, pues se le acusaría de extralimitación y de actuar en contra del principio de libre empresa y economía. Además, señalando estas tres facultades concretas, no se gravan los fondos de la compañía ni se entorpece su gestión, como establece el mismo artículo 17.

La respuesta a esta enmienda vino por el Ministro de CIOP, Sr. Bravo Murillo¹⁰⁸². Su postura fue categórica: rechazar la propuesta por dos motivos. En primer lugar, porque

(e)l artículo del proyecto de ley, tal como se halla redactado, concede al Gobierno mucho más; porque el Sr. Pérez Seoane ha tratado de deslindar la facultad del Gobierno, y el artículo del proyecto le deja una facultad omnimoda y absoluta de hacer todo lo demás.

Y, en segundo lugar, porque se plantean temas propios del ámbito reglamentario y no de la Ley:

... las disposiciones contenidas en esa enmienda son puramente reglamentarias. Dice que el Gobierno puede nombrar los visitadores y presidentes de las Juntas; dice que el Gobierno debería tener la facultad de convocar a junta general de accionistas; quiere que se designe una persona que presida esta Junta, y hasta las personas que pueden ser; que pueden serlo el jefe político, un magistrado

¹⁰⁸⁰ Cuyo texto era igual al aprobado por el Congreso en abril de 1847.

¹⁰⁸¹ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 295.

¹⁰⁸² Ídem.

del Tribunal Supremo de Justicia, o un individuo del Tribunal de comercio de Madrid; y me parece, señores, que si esto no corresponde a los reglamentos, no hay nada que pueda corresponderles. Me parece que la ley no debe descender a pormenores personales; al reglamento toca exponer las medidas convenientes para ejecutar aquella base, que está en la ley. Pero si pudiera descender a este pormenor, sería decir: el Gobierno nombrará un individuo del Supremo Tribunal de Justicia, un individuo del Tribunal de comercio; y esto, señores, sería ligar las manos al Gobierno, entorpecer sus facultades y cercenarle derechos consignados hasta por la Constitución, la cual le concede la facultad de dictar los reglamentos convenientes, con arreglo a las leyes. Por estas razones se opone al Gobierno a que se admita la enmienda del Sr. Seoane.

¿Y qué dispuso el Reglamento de 1848 sobre esta cuestión?¹⁰⁸³ Como se ha expuesto en el epígrafe anterior relativo a la vigilancia de la Autoridad pública sobre la junta, el texto reglamentario, en sus artículos 25, 39 y 40, regula las facultades de convocatoria y presidencia de las juntas por parte de la Autoridad pública para las compañías por acciones existentes con anterioridad a la promulgación de la Ley de 1848, que debían adaptarse a la nueva regulación. Pero no establece expresamente ninguna facultad para los demás casos. El Gobierno, autor del Reglamento, no quiso encorsetar más la actuación y las decisiones de los socios.

Pero otros sectores influyentes seguían pensando que era necesario conferir a la Autoridad pública las competencias de convocar y presidir las juntas. Y sus esfuerzos obtuvieron resultado casi diez años después de la promulgación de la Ley y del Reglamento de 1848. La facultad de presidir las juntas quedó recogida con carácter obligatorio en el Reglamento de 1857¹⁰⁸⁴. Establecía su artículo 7:

Los Delegados del Gobierno cerca de las sociedades mercantiles por acciones asistirán a sus juntas generales y a las de dirección, vigilancia o gobierno de cada compañía, correspondiéndoles la presidencia honorífica sin voz ni voto.

Si los estatutos de las compañías confieren al Presidente alguna decisión o facultad que no sea la de dirigir la discusión, la ejercerá el que lo sea de la sociedad o de sus juntas, aun cuando en ellas ocupe el Delegado el sitio de preeminencia, si no asistiese el Gobernador de la provincia, pues de concurrir esta Autoridad le corresponderá la presidencia de honor.

El texto impone la obligación de asistencia de esta autoridad a las juntas¹⁰⁸⁵ (se dice *asistirán*, no *podrán asistir* o expresión equivalente), pero siempre con carácter honorífico, es decir, teóricamente, sin voz ni voto¹⁰⁸⁶.

¹⁰⁸³ No se olvide que el Reglamento de 1848 y las palabras que se acaban de citar tienen un mismo autor: el Sr. Bravo Murillo, Ministro de CIOP.

¹⁰⁸⁴ GdM de 13 de diciembre de 1857, núm. 1804.

¹⁰⁸⁵ Es de reseñar que esta misma función debían desempeñarla en las reuniones de la administración social.

¹⁰⁸⁶ Aunque, es evidente que no es lo mismo discutir temas estando la Autoridad pública presente o ausente.

C) CÓMPUTO DE LA MAYORÍA: ¿POR ACCIONES O POR ACCIONISTAS?

En la sesión del día de Nochebuena de 1847 en el Senado, se debatió el artículo 18 del PL 1848, que regulaba la autorización de las compañías existentes antes de la promulgación de la Ley. Debía celebrarse una junta en todas esas sociedades para decidir si continuaban la actividad adaptándose a la nueva normativa o se disolvían y liquidaban.

En este contexto, el Marqués de Fuentes de Duero propuso al Senado que la mayoría para el acuerdo de solicitar la autorización o disolver la sociedad se adoptara en relación al número de accionistas y no de acciones en las que se dividía el capital social. La propuesta la inició de la siguiente manera:

Que si se vota por acciones, como es lo más regular, los que tengan gran número de acciones decidirán el negocio. No, señores: esto es preciso que se haga por el número de accionistas; es menester que la votación se haga por individuos; (...)

*decídase por el mayor número de votos individuales, y no por el mayor número de acciones; y entonces creo yo que se sacaría muy buen provecho de ello; es decir, que se lograría el espíritu de la ley, y desde luego a luego, no se perjudicaría a nadie contra su voluntad.*¹⁰⁸⁷

Reconoce que las mayorías se forman ordinariamente en relación a las acciones en que se divide el capital social (*como es lo más regular*) y no en relación a los accionistas. El objetivo de su propuesta, era dar más poder a los accionistas minoritarios en un acuerdo de tanta importancia como continuar la sociedad en el marco de la autorización prevista por el artículo 18 o disolverla y liquidarla por imperativo legal. En principio, su propuesta se limita a este acuerdo concreto, aunque late en sus palabras el deseo de ampliarlo a otros acuerdos¹⁰⁸⁸.

¹⁰⁸⁷ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, págs. 296 y 297.

¹⁰⁸⁸ Así describe algunas intervenciones en las Juntas de accionistas:

... se dicen cosas muy agradables y lisonjeras en las juntas; se dice: esto no ha podido ser, pero será: esto está bueno: esto ha variado: se sacará partido en lo sucesivo, pues han ocurrido incidentes inesperados, y otras cosas a este tenor; y algunos añaden: este país está por explotar; aquí está todo por hacer; estas son palabras muy generales, pero que luego la experiencia ha demostrado las ventajas que han sacado los que las dicen, en lo que se han metido, pues lo que han hecho ha sido sacar su dinero, para que no vuelva a su caja, y en sus explotaciones imaginarias ni aun arena han encontrado, sino cieno, porque cieno llamo yo al hallar sólo en su consecuencia pleitos y disgustos (DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 297).

Parece, por tanto, que quería evitar el abuso de determinados accionistas o administradores dando un mayor protagonismo a la votación democrática o “por cabezas” y no por participación en el capital social. Se trata de una de las primeras propuestas de protección de las minorías en las sociedades por acciones. Debíó transcurrir mucho tiempo hasta que los textos normativos empezaran a recoger un régimen de protección de los accionistas minoritarios. Sobre esta cuestión se puede consultar la interesante obra del profesor JUSTE, J. (1995): “Los derechos de la minoría en la Sociedad Anónima” en *RdS Monografía*, núm. 3, especialmente el epígrafe introductorio, págs. 29 – 38.

Finaliza esta parte de su intervención proponiendo que si el Senado no aprobaba una modificación del PL 1848 en este sentido, lo hiciera el Gobierno al redactar el Reglamento de ejecución de la Ley:

*... esto se puede considerar al tiempo de la aprobación de los reglamentos, y que el Gobierno podía tomar en consideración si notaba disidencias, para en su día hacer lo que convenga; y si le parecía que había cuestiones en las Sociedades sobre continuar o no, desde luego disponer de qué modo se había de decidir esto por los accionistas.*¹⁰⁸⁹

Sáinz de Andino, portavoz de la CS, contestó a la propuesta del Marqués de Fuentes de Duero. La respuesta fue breve en relación a otras intervenciones de Sáinz de Andino. Comienza haciendo una referencia filosófica y general a este importante problema: ¿quién debe gobernar la Junta de accionistas? La respuesta transcurre en su primera parte exponiendo tres posibles soluciones. Las personas, los intereses (el dinero invertido) o una combinación compensatoria de las dos. Estas son las palabras de Sáinz de Andino¹⁰⁹⁰:

Las compañías anónimas, como entes morales, tienen una voluntad que en toda corporación de hombres se ha de expresar por la mayoría. Este es un principio incontestable y que tiene aplicación en todas las sociedades. Limitándonos a las Sociedades anónimas, el fijar cómo ha de considerarse la mayoría, es una cuestión económica que ha embarazado a los publicistas más célebres en esta materia; los unos han querido que se represente por personas, los otros por intereses; uno y otro tiene inconvenientes. Hecho por personas, estará gobernado por la democracia, y hecho por intereses, dominará la aristocracia. Ni los intereses deben dominar a las personas, ni las personas a los intereses.

Por esta razón, los hombres que han reflexionado sobre esta cuestión han creído que debían introducir una transacción; es decir, que debían tenerse en cuenta los intereses, porque el que tiene, por ejemplo, 1.000 acciones, ha de representar necesariamente más que el que tiene una sola, 20 o 100; porque sus intereses son mayores, y naturalmente ha debido tomarse en consideración la cuantía de los intereses para dar mayor representación a las personas. Pero también debía contarse el inconveniente de que tres o cuatro personas que reunieran 3 o 4.000 acciones, dominaran la voluntad de los accionistas que tuvieran pocas.

Y pone un ejemplo para explicar esta “vía intermedia” que tiene en consideración tanto a las personas como a su participación en el capital social:

Ha habido una ocasión en que prácticamente ha sucedido esto. Se trataba de un proyecto de ley para la reunión de los Bancos de Isabel II y San Fernando. La Comisión encargada de este proyecto, después de un trabajo muy prolijo y reflexivo, opinó que debía darse un voto a todo el que tomase 20 o 40 acciones nuevas, y a este respecto debía irse multiplicando conforme fuera aumentando, hasta llegar a 100 acciones.

¹⁰⁸⁹ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 297.

¹⁰⁹⁰ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 299.

Se trata de un tema complicado¹⁰⁹¹, de no fácil solución, para el que Sáinz de Andino parece mantener una postura ecléctica. Concluye diciendo que la CS retira la redacción del artículo 18 para presentar una nueva propuesta:

*He referido estos antecedentes para que se vea que no es nada fácil resolver la cuestión. En el Congreso se resolvió que la voluntad se apreciase por el voto de la mayoría; así lo ha adoptado la Comisión. Esta, ante todo, lo que quiere es que las nuevas Sociedades ofrezcan garantías de legalidad y orden. La Comisión considera, como el Sr. Marqués, que no es justo que los unos socios se sometan a la voluntad de los otros. Si los estatutos se hubieran hecho arreglados a los buenos principios, claro es que, estarían bien; pero, por desgracia, ha habido abusos, y a la mayor parte de las Sociedades les ha cabido esta suerte. Así, pues, la Comisión, por estas consideraciones, ha sometido al Senado las opiniones del Sr. Marqués, y retira el artículo para presentarlo nuevamente redactado.*¹⁰⁹²

Esta cuestión del *one share – one vote* sigue suscitando controversia en la actualidad. Cabe destacar, por ejemplo, el *Report on The Proportionality Principle in The European Union* (de 4 de junio de 2007) en el que se sigue planteando cuál de los dos sistemas (el “democrático” o el “aristocrático” en terminología de Sainz de Andino) resulta más adecuado para las compañías cotizadas. En este sentido, comenta FUENTES NAHARRO que

*(n)o se puede extraer ninguna conclusión rotunda, ninguna reflexión fundamentada que pueda confirmar la eficiencia económica de la imposición de la regla “una acción, un voto” (si bien, tampoco se ha confirmado lo mismo respecto a la regla contraria...*¹⁰⁹³

Al final de la sesión se presentó la nueva redacción del artículo 18 del PL 1848, que deja casi idéntica la referida al criterio de las mayorías para la válida adopción de acuerdos en la junta general que decida sobre la solicitud de la autorización, pero se aprovecha para modificar otros aspectos del artículo que se habían debatido previamente (referidos a los plazos y las causas de disolución legal) en los que la CS no había manifestado ningún cambio de criterio. Así quedó la redacción del artículo:

La Comisión encargada de dar su dictamen sobre el proyecto de ley de compañías mercantiles por acciones, presenta a la deliberación del Senado, redactado el artículo 18 de dicho proyecto en los términos siguientes:

Artículo 18. Las compañías por acciones existentes en la actualidad sin autorización Real, la solicitarán dentro de dos meses, contados desde la publicación de esta Ley, presentando al efecto sus escrituras, estatutos y reglamentos. Dentro del término de cincuenta días, siguientes a esta

¹⁰⁹¹ En nuestra actual normativa sobre sociedades anónimas, aunque se ha clarificado que el derecho de voto tiene relación proporcional con el valor nominal de las acciones (artículo 188.2 LSC), sigue siendo problemático establecer con exactitud el criterio del cálculo de las mayorías. Sobre este aspecto, puede consultarse JUSTE, J. (2011): “Artículo 201. Mayorías” en ROJO, A. y BELTRÁN, E. (dirs.) *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo I, Cizur Menor, págs. 1398 - 1400.

¹⁰⁹² Ídem.

¹⁰⁹³ FUENTES NAHARRO, M. (2007): “Algunas consideraciones sobre el informe acerca del principio de proporcionalidad entre propiedad y control en la Unión Europea” en *RdS*, núm. 29, pág. 546.

publicación, los gerentes o directores convocarán a junta general de accionistas, para que resuelvan si se ha de pedir o no la Real autorización, la cual se impetrará solamente en el caso de que la mayoría de los mismos accionistas, que se computará con arreglo a sus estatutos y reglamentos, acuerde la continuación de la compañía.

*Palacio del Senado 24 de Diciembre de 1847. Sáinz de Andino. Pérez. Julián Aquilino Pérez. Acebal.*¹⁰⁹⁴

Se ha reproducido íntegramente para poder comparar su redacción con la versión original del artículo 18 del PL 1848 presentado por la CS antes de los debates sobre el mismo. De esta manera, se advierte que las modificaciones importantes hacen referencia a otros temas y no a la cuestión concreta del criterio de mayorías planteado por el Marqués de Fuentes de Duero y que fue el motivo formal que utilizó Sáinz de Andino para retirar la anterior redacción.

Establecía el artículo 18 del PL 1848 presentado por la CS el 14 de diciembre de 1847¹⁰⁹⁵:

Artículo 18. Las compañías por acciones formadas en la actualidad, y que no existan en virtud de autorización Real, solicitarán esta autorización dentro de dos meses, contados desde la publicación de esta Ley, presentando al efecto sus escrituras, estatutos y reglamentos. Antes de pedir la autorización, los gerentes o directores convocarán a junta general de accionistas, y sólo en el caso de que la mayoría de éstos, que se computará con arreglo a sus estatutos y reglamentos, acuerde la autorización¹⁰⁹⁶ de la compañía, se podrá hacer la solicitud.

Como se decía antes, la redacción del criterio de formación de mayorías, aunque formalmente diferente, expresa prácticamente lo mismo que recogía la primera versión de la CS. Sin duda alguna, el debate suscitado por el Marqués de Fuentes de Duero y contestado por Sáinz de Andino ofrecía una pauta interpretativa interesante en cuanto a la manera de concretar el criterio de la mayoría en los acuerdos de la junta general.

El texto del artículo se refiere a los accionistas (no a acciones en las que se divida el capital social), pero se computará *con arreglo a los estatutos y reglamentos*. Por lo tanto, la Ley se remite a lo que hubieran establecido previamente esas compañías. Recoge el principio de libertad a estos efectos, de manera que no impone que la mayoría se refiera a las acciones o a los accionistas. Como expuso Sáinz de Andino, se podía seguir un sistema “democrático” (por accionistas), “aristocrático” (por acciones) o una combinación de ambos.

¹⁰⁹⁴ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 304.

¹⁰⁹⁵ DsC. Senado. Sesión de 18 de diciembre de 1847. Apéndice Segundo al núm. 16, pág. 252.

¹⁰⁹⁶ En realidad debe decir “continuación”. Se trata de un error de transcripción, pues el texto del mismo artículo aprobado por el Congreso (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, pág. 1393) utiliza “continuación”, que tiene más sentido.

III. DOCTRINA DE LA ÉPOCA

Como ha quedado expuesto en otros lugares, las obras doctrinales del segundo tercio del siglo XIX, con carácter general, hacen pocos comentarios a los textos normativos que regulan las compañías por acciones. Se limitan, en la mayoría de los casos, a transcribir textualmente dichos textos. En la materia concreta de la junta de accionistas, las referencias interpretativas o explicativas son prácticamente inexistentes.

En efecto, la mayoría de los autores transcriben los artículos del CCom 1829, Ley de 1848 y Reglamento de 1848 y, lógicamente, citan los correspondientes al órgano social de la junta general, que se han comentado a lo largo del presente capítulo. Así, LASO¹⁰⁹⁷ hace una breve descripción de las compañías mercantiles, pero no estudia la junta general; AVECILLA¹⁰⁹⁸ en sus comentarios al CCom 1829 no menciona la junta general, aunque recoge las referencias de la Ley de 1848 y del Reglamento de 1848; BIEC y CARAVANTES¹⁰⁹⁹ transcriben sistematizadamente los artículos de la Ley de 1848 y del Reglamento de 1848; UNA SOCIEDAD DE ABOGADOS¹¹⁰⁰ copia con algunos comentarios los artículos del CCom 1829 y adjunta en anexo los textos de la Ley de 1848 y del Reglamento de 1848; GONZÁLEZ HUEBRA¹¹⁰¹ menciona la junta general, pero no añade comentarios; CARRERAS¹¹⁰² resume brevemente el contenido de los textos legales, agregando una síntesis de la LB y la LSCr; RODRÍGUEZ¹¹⁰³ tampoco añade aportaciones doctrinales sobre el régimen de la junta general; MARTÍNEZ ALCUBILLA¹¹⁰⁴ se limita, fundamentalmente, a transcribir la Ley de 1848, Reglamento de 1848, LSCr, LSCOP y el Reglamento de 1857; y, por último, la obra de GÓMEZ DE LA SERNA y REUS Y GARCÍA¹¹⁰⁵ también transcribe los artículos del CCom 1829 con alguna glosa y recoge en anexo el texto completo de la Ley de 1848 y del Reglamento de 1848.

¹⁰⁹⁷ LASO, E. (1849): *Elementos del Derecho mercantil...*, págs. 21 a 28.

¹⁰⁹⁸ AVECILLA, P. (1849): *Diccionario...*, págs. 98 y ss.

¹⁰⁹⁹ BIEC, J. M. Y VICENTE CARAVANTES, J. (1851): *Suplemento...*, págs. 613 a 620. Es interesante reseñar que en la versión del año anterior de VICENTE Y CARAVANTES, J. (1850): *Código de comercio extractado...*, se hace la siguiente afirmación con carácter general sobre la junta: *sus accionistas, que toman a mayoría de votos las medidas que exigen los intereses comunes en las juntas generales* (pág. 126).

¹¹⁰⁰ UNA SOCIEDAD DE ABOGADOS (1857): *Código de comercio...*, págs. 90 a 117.

¹¹⁰¹ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil...*, págs. 150 y ss.

¹¹⁰² CARRERAS Y GONZÁLEZ, M. (1860): *Elementos del Derecho mercantil de España...*, págs. 188 y ss.

¹¹⁰³ RODRÍGUEZ, J. M. (1861): *Elementos de Derecho civil, penal y mercantil...*, págs. 154 a 178.

¹¹⁰⁴ MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. (1862): *Diccionario de Administración...*, págs. 625 a 638.

¹¹⁰⁵ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de comercio...*, págs. 96 a 117 y 482 a 492.

CAPÍTULO XI

ÓRGANOS SOCIALES (II): LOS ADMINISTRADORES

Una vez concluida la exposición sobre la junta general, en este capítulo se aborda el estudio de otro órgano social de las compañías por acciones: los administradores. Sobre este tema, al contrario de lo que ocurre con la junta general, los textos normativos (CCom 1829 y la Ley y el Reglamento de 1848) recogen abundante número de artículos.

Por este motivo, el primer epígrafe se dedica al comentario pormenorizado de las disposiciones legales. En el segundo, se recoge una selección de intervenciones de Diputados y Senadores sobre los administradores sociales, durante los debates parlamentarios del PL 1848. Y, por último, se estudian los comentarios de la Doctrina de la época.

I. FUENTES NORMATIVAS

El CCom 1829 y la Ley y el Reglamento de 1848 regulan con detalle y extensión el órgano social de los administradores de las compañías por acciones¹¹⁰⁶. El presente epígrafe se divide en dos partes. La primera, que integra los tres primeros apartados, recoge una síntesis de la regulación de cada texto normativo: el CCom 1829, la Ley y el Reglamento. La segunda, que se corresponde con el último apartado, ofrece un estudio sobre las cuestiones más relevantes de los administradores desde una perspectiva coordinada de todos los textos normativos.

A) EL CCom 1829

Es relevante la regulación de CCom 1829 sobre los administradores, dado que se trata de la legislación que la nueva Ley y el Reglamento de 1848 modifican y sustituyen. En esta materia no se produce un cambio radical, sino que el nuevo régimen es, en líneas generales, continuista con el CCom 1829.

Con carácter previo, conviene recordar que las sociedades “comunes” de comercio de la época presentaban una configuración del órgano de administración radicalmente diferente al de las compañías por acciones. Aquellas sociedades mercantiles “comunes” (como las personalistas actuales: colectivas y comanditarias) se caracterizaban por la responsabilidad ilimitada de los socios y el derecho de éstos a participar en el órgano de administración, representando a la compañía frente a terceros. Esta consideración debe tenerse en cuenta en el sentido de que los administradores de las sociedades por acciones eran una excepción al régimen general de la administración de las compañías mercantiles.

¹¹⁰⁶ Llama la atención, como se ha dicho anteriormente, el contraste con la regulación de la junta general, que es bastante escaso en las fuentes normativas.

Una manifestación de lo que se acaba de exponer es la siguiente. El CCom 1829 regula, en primer lugar, la limitación de responsabilidad de los administradores de las sociedades anónimas al correcto desempeño de sus funciones (artículo 277)¹¹⁰⁷. Y, después, el siguiente artículo (el 278) dice textualmente:

(l)os socios no responden tampoco de las obligaciones de la compañía anónima, sino hasta la cantidad del interés que tengan en ella (el subrayado es nuestro).

Se puede comprobar, aunque sea una cuestión de matiz, que el Legislador de 1829 lo primero que destaca, en relación a la regulación especial de las compañías anónimas respecto a las sociedades “comunes” de comercio, es que los administradores no responden de las deudas sociales. Posteriormente, en segundo lugar, subraya la limitación de la responsabilidad de los socios al capital comprometido. Ambas excepciones o limitaciones eran de gran relevancia y, nos parece oportuno resaltar, que la novedad de la limitación de responsabilidad en las compañías anónimas se establece no sólo respecto a los socios, sino también respecto a los administradores (e incluso con mayor importancia).

Considerando los artículos del CCom 1829 sobre los administradores, destaca, fundamentalmente, el 265.3, que describe las notas básicas de la sociedad anónima, entre las que se encuentra que la administración *se encargue a mandatarios o administradores amovibles a voluntad de los socios*. La cuestión de la amovilidad era básica: la junta era el único órgano facultado para nombrar, cesar y sustituir a los administradores. A pesar de la claridad del tenor literal del transcrito artículo 265.3 CCom 1829, muchas compañías por acciones consiguieron que sus fundadores fueran designados administradores con carácter vitalicio. Como dijo Sáinz de Andino en el Senado, esta situación fue responsabilidad de los T. de c.¹¹⁰⁸. El incumplimiento de este artículo del CCom 1829 era tan generalizado, que el Senador D. Antonio Guillermo Moreno propuso incluir un nuevo artículo en el PL 1848¹¹⁰⁹ en el que se hacía referencia expresa a la aplicación del citado artículo 265.3 para obtener el RD de autorización. La CS lo aceptó¹¹¹⁰, pero fue suprimido por la CMC-S¹¹¹¹. Aunque la versión final del PL 1848 no lo recoge, la cita expresa del artículo 265.3 se encuentra en el artículo 27 del Reglamento de 1848, que se comenta más adelante.

Otro artículo relevante es el 293, que exige la aprobación por el T. de c. del domicilio social de la compañía anónima de *los reglamentos que han de regir para su administración y manejo directivo y económico*.

¹¹⁰⁷ Dice así el artículo 277:

Los administradores de las sociedades anónimas se nombrarán en la forma que prevengan sus reglamentos, y no son responsables personalmente, sino del buen desempeño de las funciones que según estos mismos reglamentos estén a su cargo.

¹¹⁰⁸ Estas fueron las palabras de Sáinz de Andino en relación a la responsabilidad de los T. de c.:

El mal viene, señores, de (...) haber consentido que los fundadores se reservasen la administración social por largos períodos de años, y aun en algunas Sociedades indefinidamente, sin embargo, de que por la naturaleza misma de estos contratos corresponde a la Junta general de accionistas nombrar las personas en quienes haya de recaer su representación y el manejo de sus intereses (DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 282).

¹¹⁰⁹ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 302.

¹¹¹⁰ Ídem.

¹¹¹¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión del 11 de enero de 1848. Apéndice Segundo al núm. 41, pág. 769.

También consagra el CCom 1829 la facultad de los administradores para determinar el desembolso de los dividendos pasivos (artículo 283)¹¹¹² dentro de las condiciones establecidas en las escrituras sociales.

Y, por último, destaca un grupo de artículos que se refieren a la responsabilidad de los administradores. Así, por ejemplo, el artículo 279 dispone que de la actuación de los administradores, realizada por persona legítima y conforme a lo previsto en los reglamentos, responde exclusivamente el patrimonio social¹¹¹³; y los artículos 309 y 310 en relación a la limitación del derecho de inspección de la contabilidad social en las compañías anónimas¹¹¹⁴.

B) LA LEY DE 1848

La Ley de 1848 hace referencia en varios artículos a los administradores. Su contenido es de carácter general y fue objeto de desarrollo reglamentario.

Destaca, en primer lugar, el artículo 6 en el que se establece que en la solicitud de Real autorización deben presentarse, entre otros documentos, *los estatutos y reglamentos que hayan de regir para la administración de la compañía*. Dos cuestiones se pueden destacar de esta disposición. En primer lugar, que el contenido y funciones de los administradores se encuentra, fundamentalmente, en los estatutos y reglamentos de cada sociedad. Y, en segundo lugar, que dichos documentos deben ser aprobados por la Autoridad pública y, por lo tanto, el régimen de la administración social y su funcionamiento es objeto de vigilancia y seguimiento por parte de la Autoridad pública. Este precepto debe interpretarse a la luz del principio general de la inspección gubernativa de estas sociedades, consagrado por el artículo 17 de la Ley.

La Ley de 1848 también establece la necesidad de que los administradores tengan en depósito, mientras ejerzan su cargo, un número de acciones de la compañía que administran (artículo 13).

¹¹¹² Artículo 283:

Los cedentes de las acciones inscritas en las compañías anónimas que no hayan completado la entrega total del importe de cada acción, quedan garantes del pago que deberán hacer los cesionarios, cuando la administración tenga derecho a exigirlo (el subrayado es nuestro).

¹¹¹³ Dice el artículo 279:

La masa social (...) es solamente responsable en las compañías anónimas de las obligaciones contraídas en su manejo y administración por persona legítima, y bajo la forma prescrita en sus reglamentos.

¹¹¹⁴ Los artículos 309 y 310 CCom 1829 disponen lo siguiente:

Artículo 309.- En las compañías en comandita y en las anónimas no pueden los socios comanditarios ni los accionistas hacer examen ni investigación alguna sobre la administración social, sino en las épocas y bajo la forma que prescriban los contratos y reglamentos de la compañía.

Artículo 310.- En especie alguna de sociedad mercantil puede rehusarse a los socios el examen de todos los documentos comprobantes de los balances que se formen, para manifestar el estado de la administración social.

En las sociedades establecidas por acciones podrá hacerse derogación a esta regla general por pacto establecido en el contrato de sociedad, o por disposición de sus reglamentos aprobados que determinen el modo particular de hacer este examen, sujetando a su resultado la masa general de accionistas.

En relación a la responsabilidad, cabe señalar dos artículos. En primer lugar, el artículo 15 que establece la prohibición de la emisión de billetes, pagarés, abonarés o documentos al portador y, en caso de incumplimiento, se prevé una multa de hasta 50.000 reales. En segundo lugar, el artículo 16 diferencia dos supuestos. Primero, los administradores provisionales serán responsables si contratan en nombre de la compañía que aún no ha recibido la autorización; y, segundo, los administradores definitivos, incurrir en responsabilidad si contratan en nombre de la compañía que representan en negocios fuera de su objeto social. En ambos casos, se establecía, además, una multa que no podía exceder de 100.000 reales.

La instrucción e imposición gubernativa de ambas multas o sanciones (las de los artículos 15 y 16) eran competencia del Jefe Político en virtud del artículo 5.2 de la Ley de 1845¹¹¹⁵.

Por último, la Ley de 1848 impone a los administradores de sociedades existentes con anterioridad a la promulgación de la Ley de 1848, la obligación de convocar la junta de accionistas para que apruebe la solicitud de autorización de la compañía o, por el contrario, su disolución y liquidación (artículo 18). La redacción final de este artículo es consecuencia de una enmienda presentada por el Senador Sr. Pérez Seoane que pretendía evitar que la inacción de los administradores dejando pasar los plazos para solicitar la adaptación o autorización a la nueva normativa, supusiera, de hecho, la extinción de la sociedad sin dar opción a los socios a votar el acuerdo en junta general¹¹¹⁶. El incumplimiento de este deber de los administradores faculta al Jefe Político a convocar la junta y designar a su presidente (artículo 40 del Reglamento de 1848).

C) EL REGLAMENTO DE 1848

El Reglamento de 1848 es el texto normativo que, sin duda, recoge el mayor número de referencias al régimen de los administradores. Aunque la totalidad de su contenido se estudia en el siguiente epígrafe con más detalle¹¹¹⁷, ahora se recoge un resumen de las disposiciones reglamentarias más relevantes, referidas a los administradores.

En el artículo 1 se detalla el contenido mínimo de la escritura de fundación. En su apartado 9 aparece *el régimen administrativo de la compañía*, en el apartado 10 *las atribuciones de sus administradores*, y en el apartado 16 la designación de la administración provisional hasta que se obtenga la autorización del Gobierno o del Parlamento.

En relación con este artículo 1, el artículo 7 establece que *(l)os reglamentos de las sociedades por acciones comprenderán las disposiciones al orden administrativo de la empresa y al directivo de sus operaciones*, dentro del marco establecido por la escritura de constitución (cuyo contenido, como se ha dicho, regula el artículo 1).

¹¹¹⁵ El artículo 5.2 de la Ley de 1845 tenía el siguiente tenor:

Aplicar gubernativamente las penas determinadas en las leyes y disposiciones de política y en los bandos de buen Gobierno

¹¹¹⁶ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, págs. 295 y 296.

¹¹¹⁷ En coordinación con el CCom 1829 y la Ley de 1848.

Respecto a la característica básica de la amovilidad, el artículo 2 dispone que ningún socio o fundador puede reservarse el derecho *de la administración o gerencia irrevocablemente en las compañías anónimas*. En la misma línea, el artículo 27, citando textualmente el artículo 265.3 CCom, establece de manera expresa el principio de la amovilidad de los administradores, mediando justa causa. Por su parte, el artículo 28 recoge el principio de inamovilidad de *los socios gerentes de la administración social* de las compañías comanditarias por acciones.

Varios artículos regulan diferentes funciones de los administradores. Entre ellas se pueden destacar las siguientes. En primer lugar, la valoración de las aportaciones no dinerarias se hará entre el socio y la administración definitiva, o bien por peritos si así se pactare¹¹¹⁸. La administración provisional debe abrir el plazo de suscripción de acciones vacantes, una vez que el Jefe Político haya comunicado el RD de autorización de la compañía¹¹¹⁹. Los administradores solicitarán el desembolso de los dividendos pasivos en los plazos establecidos en los estatutos, pudiendo adoptar las medidas ejecutivas correspondientes contra el patrimonio del socio moroso¹¹²⁰. Y, por último, los administradores deben formular las cuentas anuales¹¹²¹.

La remuneración de los administradores aparece en dos artículos. El artículo 5, en relación a las compañías anónimas y, el artículo 6, que regula la remuneración de los socios gerentes de las sociedades comanditarias por acciones.

Otro aspecto importante es la vigilancia y control del órgano de administración, desde una doble perspectiva: la del órgano societario de control y la de la Autoridad pública. Respecto a la primera, destaca el establecimiento de un sistema dual en dos preceptos del Reglamento de 1848: el artículo 1.10, en el que se exige como parte del contenido mínimo de la escritura de fundación que se expresen *las atribuciones (...) de los que tengan a su cargo inspeccionar las operaciones de la administración*. También establece el Reglamento de 1848 que en la junta convocada por el Jefe Político para leer el RD de autorización de la compañía, se debe proceder *al nombramiento de las personas que hayan de tener a su cargo (...) la inspección o vigilancia de esta misma administración si es anónima, y al de las que hayan de tener a su cargo la inspección o vigilancia de la administración, si es comanditaria*¹¹²².

En relación a la vigilancia y control por la Autoridad pública, son numerosos los artículos del Reglamento de 1848. Se puede destacar, en primer lugar, el artículo 13.4, según el cual, una de las atribuciones del Jefe Político es comprobar si *el régimen administrativo y directivo de la compañía ofrece las garantías morales que son indispensables para el crédito de la empresa y la seguridad de los intereses de los accionistas y del público*. También son importantes los artículos que se exponen a continuación.

El artículo 30, sobre la inspección del Gobierno y del Jefe Político del régimen administrativo, así como la facultad del primero de suspender o anular *según estimare*

¹¹¹⁸ Artículo 3 del Reglamento de 1848.

¹¹¹⁹ Artículo 22 del Reglamento de 1848.

¹¹²⁰ Artículo 32 del Reglamento de 1848.

¹¹²¹ Artículo 34 del Reglamento de 1848.

¹¹²² Artículo 25 del Reglamento de 1848.

procedente la autorización de las compañías que en sus operaciones o en el orden de su administración faltaren al cumplimiento de las disposiciones legales o de sus estatutos.

El artículo 37, relativo al deber de información de los Jefes Políticos al Gobierno sobre las cuentas anuales de la compañía, *exponiendo [los Jefes Políticos] las observaciones que estimaren conducentes en las materias que sean de interés de la administración. Además de estas comunicaciones anuales pondrán en conocimiento del Gobierno para la resolución correspondiente toda novedad que ocurra en el régimen directivo y administrativo de las compañías que pueda perturbarlo o que produzca alguna alteración en la observancia de sus estatutos.*

Y, el artículo 38, en el que se establece la pauta de actuación del Jefe Político en caso de tener conocimiento de un presunto delito *en el manejo directivo y administrativo de la sociedad.*

Otro tema abordado por el Reglamento de 1848 es el de las acciones que los administradores deben tener en depósito durante el ejercicio de su cargo (artículo 29).

La responsabilidad de los administradores se regula, en primer lugar, en el artículo 31, en el que se establece la prohibición de utilizar los fondos de la compañía para negociaciones extrañas al objeto social, a excepción de los fondos sobrantes que existan en la caja, que se pueden destinar a *descuentos o préstamos cuyo plazo no podrá exceder de noventa días*. En el supuesto de incumplimiento de esta previsión, los administradores son *directamente responsables de cualquier cantidad de que dispusieran*. Además, en el caso de las compañías existentes antes de la promulgación de la Ley de 1848, si decidieran extinguirse, los administradores no podían realizar ningún nuevo negocio.¹¹²³ La infracción de esta obligación generaba la correspondiente responsabilidad.

Por último, el Reglamento de 1848 establece, en relación a los administradores y las compañías existentes con anterioridad a la promulgación de la Ley de 1848, que aquéllos tienen la obligación de convocar la junta de accionistas para que se pronuncie expresamente sobre la adaptación a la nueva normativa¹¹²⁴ y, además, en caso de que la sociedad acuerde solicitar la autorización, los administradores deben presentar una certificación del acuerdo y los estatutos y reglamentos, junto con los estados contables¹¹²⁵.

D) REGULACIÓN DE ALGUNAS CUESTIONES RELEVANTES

La exposición realizada en los epígrafes anteriores sobre las disposiciones del CCom 1829, la Ley y el Reglamento de 1848 en relación al órgano de administración, manifiesta la variedad y extensión de la materia. Por este motivo, parece oportuno centrar el estudio coordinado de los tres textos normativos en unas determinadas cuestiones, seleccionadas por su mayor relevancia.

¹¹²³ Artículo 41 del Reglamento de 1848.

¹¹²⁴ Artículo 39 del Reglamento de 1848.

¹¹²⁵ Artículo 42 del Reglamento de 1848.

1. Requisitos para ser nombrado administrador

Aunque no lo recoja expresamente ninguno de los textos normativos, el administrador debe tener capacidad de obrar para poder desempeñar su cargo. El CCom 1829 no exigía ningún requisito general, ni tampoco particular como podría ser, por ejemplo, tener la condición de comerciante.

La Ley de 1848, en cambio, exigía un requisito necesario para poder ser nombrado administrador: ser socio. Este requisito era una garantía exigida a cada administrador en previsión de futuras responsabilidades surgidas del ejercicio de su cargo. La redacción del citado artículo 13 fue objeto de debate durante las sesiones del Senado¹¹²⁶. Las discusiones no fueron sobre la necesidad de esta garantía, pues no se dudaba de su conveniencia, sino en relación a las formalidades de la emisión de estos títulos.

El Reglamento de 1848, en su artículo 29, concreta algunos aspectos del cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 13 de la Ley de 1848 sobre las acciones de los administradores: *(d)entro de los quince días siguientes al en que se hubiere declarado constituida la compañía, acreditarán los administradores ante el Jefe político haber hecho el depósito efectivo de las acciones con que deben garantizar su gerencia en la cantidad determinada en los estatutos, y conforme a lo prescrito en el artículo 13 de la ley de 28 de Enero.*

Por tanto, el plazo para acreditar el cumplimiento de esta obligación era de quince días desde que se hubiera declarado constituida la sociedad. El número de acciones que debía depositar cada administrador no se fijó por la Ley de 1848 (en los debates parlamentarios se rechazó una enmienda que pretendía fijar la cuantía¹¹²⁷) ni por el Reglamento de 1848, sino que se dispuso que los estatutos de cada compañía determinaran con plena libertad el número de acciones objeto de depósito.

Otra cuestión respecto a los requisitos para ser nombrado administrador, se refiere a las personas físicas y a las personas jurídicas. Los textos normativos parecen contemplar exclusivamente el supuesto de la persona física como administradora de la compañía. No se cita nada, a favor ni en contra, sobre la persona jurídica administrador, pues no parece que fuera una posibilidad pensada por el Legislador. Ante este vacío normativo, cabe advertir que si una sociedad por acciones planteaba su nombramiento como administradora de otra debería, en primer lugar, tener prevista esta actividad entre sus objetos sociales y, en segundo lugar, obtener la aprobación de la Autoridad pública.

Por último, los textos normativos no recogieron causas de prohibición o incompatibilidad de los administradores. Cabe destacar la alusión realizada por el

¹¹²⁶ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, págs. 303 y ss.

¹¹²⁷ El autor de la propuesta fue el Marqués de Montevirgen. Solicitó que el PL 1848 fijase el número de acciones

... con respecto al capital social de la compañía. Sin embargo, si esta es cuestión de reglamento, la abandono enteramente; si no lo es, me parece que sería conveniente que la ley fijase la cantidad, el minimum de acciones que deben ponerse en depósito al tiempo de instituirse la sociedad (DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 304).

La sugerencia que, ante el eventual rechazo de su propuesta, ésta fuera recogida en el Reglamento de 1848, no fue aceptada, dejándose a la competencia exclusiva de los estatutos la determinación o fijación del número de acciones que los administradores debían tener en depósito como garantía de su cargo.

artículo 13.4 del Reglamento de 1848 sobre las cualidades para ser administrador. El Jefe Político tenía la obligación de revisar si

(e)l régimen administrativo y directivo de la compañía ofrece las garantías morales que son indispensables para el crédito de la empresa y la seguridad de los intereses de los accionistas y del público.

Se puede concluir que, *sensu contrario*, se prohibía ser administrador a aquellas personas que no ofrecieran suficientes garantías morales para promover la buena imagen de la sociedad, ni garantizar el interés de los socios y de terceros. El Reglamento de 1848, por tanto, otorgaba un “derecho de veto” al Jefe Político respecto al nombramiento de los administradores. El gran problema era la inseguridad de un concepto tan amplio y difuso como el de *garantías morales*, que, además, se relacionaba con el *crédito* (reputación) de la compañía y la *seguridad de los intereses* de los socios y terceros. La discrecionalidad podía ser muy grande.

Pero el aspecto interesante de este artículo del Reglamento de 1848 es que se trata del inicio del requisito normativo de honorabilidad de los administradores. El problema, sin embargo, se centra en la ausencia de datos suficientes para determinar o describir su contenido. Por otro lado, no se puede olvidar que quien determinaba la honorabilidad era una autoridad política, no técnica.

2. Nombramiento y aceptación

La regulación del nombramiento de los administradores se encuentra en el artículo 277 CCom 1829, que continuó en vigor después de la promulgación de la Ley. Establece este artículo que:

(l)os administradores de las sociedades anónimas se nombrarán en la forma que prevengan sus reglamentos.

La Ley de 1848 no regula el sistema o método de nombramiento. El Reglamento de 1848 tampoco. Simplemente se remite a lo que prevean los reglamentos y los estatutos. Así, el artículo 7 del Reglamento de 1848 establece que:

Los reglamentos de las sociedades por acciones comprenderán las disposiciones relativas al orden administrativo de la empresa y al directivo de sus operaciones, guardando conformidad con las bases establecidas en la escritura de fundación.

Los reglamentos de las sociedades, según el artículo 6 de la Ley de 1848, han de acompañarse a la solicitud en que se solicitaba la Real autorización, previéndose específicamente que *los estatutos y reglamentos se aprobarán previamente en la Junta General de suscriptores*.

Abundando en esta materia, el Reglamento de 1848 establece como único órgano competente para el nombramiento de administradores a la junta de socios. Así, el artículo 1.16 dispone que la escritura de fundación debe contener

(1) la designación de las personas que hayan de tener la representación de la compañía provisionalmente y sólo para las gestiones necesarias hasta que hallándose constituida se proceda al nombramiento de su administración por la Junta General de accionistas, o se encarguen de ella los socios gerentes si la compañía es en comandita.

En este mismo sentido, como ya se expuso al estudiar las competencias de la junta general en el capítulo anterior, el artículo 25 del Reglamento de 1848 asigna esta competencia exclusiva a la junta:

El Jefe político, a consecuencia de la orden en que se declare la compañía constituida convocará la Junta general de accionistas que se reunirá bajo su presidencia o la del empleado público en quien al efecto delegare, y dándose lectura del Real decreto de autorización y de aquella misma orden, se procederá al nombramiento de las personas que hayan de tener a su cargo la administración de la compañía.

Por último, en cuanto a la aceptación del nombramiento, no hay referencias a ella en los textos normativos. El Reglamento de 1848 no diferencia entre nombramiento y aceptación: lo trata como si fuera el mismo acto jurídico. En parte es explicable, porque era prácticamente impensable que alguien fuera nombrado administrador sin su consentimiento. Los administradores se implicaban en alto grado para tramitar la aprobación de la compañía en todas las instancias y, además, los cambios posteriores requerían la aprobación de la Autoridad pública.

3. Administración provisional y administración definitiva

El Reglamento de 1848 regula dos tipos de administradores: la administración provisional y la administración definitiva¹¹²⁸. La primera, se refiere al administrador que tramita la autorización de la sociedad y, por tanto, asume su representación mientras se resuelve el expediente correspondiente. La segunda, en cambio, es el administrador que ha sido nombrado por la junta general, una vez autorizada la compañía.

Se puede destacar como causa de esta distinción la complejidad de la fase de autorización de la compañía. El Legislador manifiesta un gran interés en que la compañía no inicie sus operaciones hasta que se encuentre legalmente constituida. Por este motivo, la función básica de los administradores provisionales es la tramitación del expediente de autorización, no pudiendo actuar en nombre de la sociedad en otros negocios. Si lo hicieran, como establece el primer inciso del artículo 16 de la Ley de 1848, incurrir en responsabilidad. El Reglamento de 1848 reitera la prohibición de que los administradores provisionales realicen actos ajenos al proceso de constitución, en su artículo 1, que recoge el contenido mínimo de la escritura de fundación, señalando en el apartado 16 que debe figurar

(1) la designación de las personas que hayan de tener la representación de la compañía provisionalmente y sólo para las gestiones necesarias hasta que hallándose constituida se proceda al nombramiento de su administración por la

¹¹²⁸ Esta diferencia se encuentra implícita en la Ley de 1848. Pero la Doctrina de la época la recoge expresamente; así, GONZÁLEZ HUEBRA dice que la administración en las compañías anónimas *se divide en interina y definitiva* (GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil ...*, pág. 160).

junta general de accionistas, o se encarguen de ella los socios gerentes si la compañía es en comandita (el subrayado es nuestro).

Además, el artículo 22 del Reglamento de 1848 dispone que, una vez comunicado por el Jefe Político el RD de autorización, la administración provisional debe abrir el plazo para la suscripción de acciones vacantes y, al término del mismo, remitirá al Jefe Político la relación de los nuevos accionistas para acreditar que se ha completado la suscripción del capital social.

La mayor parte de las funciones del órgano de administración reguladas por el Reglamento de 1848 se refieren a la administración definitiva.

GONZÁLEZ HUEBRA¹¹²⁹ resume del siguiente modo las principales características y funciones de la administración provisional y definitiva:

Los administradores interinos no pueden hacer más gestiones que las relativas a la formación de la sociedad, como abrir la suscripción de las acciones que no estén tomadas o pedidas, y remitir al gobierno la lista de los suscriptores, pues les está prohibido ocuparse de otros negocios, y si los ejecutan son nulos sus contratos, responden solidariamente de los perjuicios que ocasionen, los interesados, y además incurren en una multa que puede subir hasta 100,000 rs.

Los propietarios o definitivos tienen atribuciones y derechos que ejercer, obligaciones y prohibiciones que cumplir, y responsabilidades por sus faltas.

4. Sistema de administración dual

Aunque el texto de la Ley de 1848 no haga mención expresa a esta cuestión, los textos normativos optaron por un sistema de administración dual (siguiendo la terminología actual de la LSC¹¹³⁰). Veámoslo a continuación.

El CCom 1829 recoge pocas menciones a los administradores de las compañías anónimas. No realiza ninguna mención a un órgano¹¹³¹ de vigilancia o control de los administradores. La Ley de 1848, que menciona a los administradores, no contempla la existencia de unas personas nombradas por la junta de socios para desempeñar estas funciones. En cambio, el Reglamento de 1848 se refiere a ellas en dos ocasiones.

En primer lugar, su artículo 1.10 establece como uno de los contenidos necesarios de la escritura de fundación:

(l)as atribuciones de sus administradores, y de los que tengan a su cargo inspeccionar las operaciones de la administración (el subrayado es nuestro).

¹¹²⁹ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil* ..., pág. 160.

¹¹³⁰ Artículos 476 y ss de la LSC sobre el sistema de administración de la sociedad anónima europea.

¹¹³¹ Recuérdese, como se ha expuesto en un epígrafe anterior, que la noción técnica-jurídica de “órgano social” aparece a finales del siglo XIX en el marco de Derecho público y, por lo tanto, el uso que hacemos aquí de esta palabra corresponde a unas categorías doctrinales que en la fecha de promulgación de la Ley y del Reglamento de 1848 eran similares, pero no idénticas.

Y, en segundo lugar, el artículo 25 establece que en la junta convocada por el Jefe Político para dar a conocer el RD de autorización de la sociedad, los socios deben nombrar a *las personas que hayan de tener a su cargo (...) la inspección o vigilancia de esta misma administración si es anónima, y al de las que hayan de tener a su cargo la inspección o vigilancia de la administración, si es comanditaria.*

Al tratarse de sólo dos menciones y, además, realizadas por el Reglamento de 1848, esta realidad de un órgano de vigilancia ha pasado inadvertida en la actualidad.

Respecto a los modos de organizar la dirección o administración, ni la Ley ni el Reglamento de 1848 concretan nada sobre su contenido, lo cual indica que el Legislador decidió que el régimen particular se estableciera en los estatutos y reglamentos (artículos 1.10 y 7 del Reglamento de 1848). De la lectura de estos dos preceptos, se puede deducir que, en principio, el órgano de administración era pluripersonal. Los textos legales tampoco hacen mención a una actuación mancomunada o solidaria ni como órgano colegiado y, por lo tanto, no cabe excluir ninguna.

En relación a la *inspección o vigilancia*, la regulación es aún más escasa, limitándose a señalar su existencia en los citados artículos 1.10 y 25 del Reglamento de 1848. Materias como la estructura, el funcionamiento, la responsabilidad, remuneración, etc., eran fijadas por los estatutos y reglamentos sociales.

En la Doctrina de la época se hace referencia al órgano de *inspección o vigilancia* cuando los autores comentan o parafrasean los artículos del Reglamento de 1848. Cabe destacar el breve resumen que hace GONZÁLEZ HUEBRA¹¹³²:

La primera [inspección establecida por la Ley] se pone a cargo de las personas que nombra la Junta general, al mismo tiempo que los administradores, para que vigilen su administración, y ejerzan las demás atribuciones que se les confieran.

Por su parte, MARTÍ DE EIXALÁ¹¹³³, siete años después de la derogación de la Ley de 1848, recoge unos comentarios prácticos sobre la realidad y funcionamiento de este órgano de control:

(e)n las escrituras de fundación de la sociedad deben determinarse la forma del nombramiento y las atribuciones de los que tengan a su cargo inspeccionar las operaciones de la administración, y en la práctica suele exigirse también a los nombrados para esta inspección el depósito de cierto número de acciones y señalárseles una retribución en la misma forma, aunque en menor cantidad, que a los administradores; pero debe tenerse presente, al fijar las atribuciones que se quieran conceder a las juntas de inspección o vigilancia, la prohibición del artículo 272 del Código¹¹³⁴, que determina la naturaleza y el límite de las mismas.

Volviendo a lo que se comentaba al principio de este epígrafe, las disposiciones del Reglamento de 1848 sobre el órgano de *inspección o vigilancia* de las sociedades

¹¹³² GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil ...*, pág. 164.

¹¹³³ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil ...*, pág. 280.

¹¹³⁴ Que dispone lo siguiente:

Tampoco pueden los socios comanditarios hacer acto alguno de administración de los intereses de la compañía, ni aun en calidad de apoderados de los- socios gestores.

anónimas, son de especial interés porque el sistema diseñado respecto al órgano de administración es el dual y no el monista. La tradición societaria de los países germanos (y otros que siguen el sistema dual), que puede parecer muy lejana desde nuestra práctica actual, presenta un punto de conexión en el Reglamento de 1848.

5. Duración del cargo

Los administradores provisionales desempeñaban sus funciones hasta que el Jefe Político, una vez aprobada la Orden de autorización, convocaba la junta general de accionistas para, entre otras cosas, nombrar a la administración definitiva¹¹³⁵. Cuando se nombraba a los administradores definitivos, automáticamente cesaban los provisionales.

Los administradores definitivos eran nombrados por un periodo de tiempo determinado en los estatutos y reglamentos de la sociedad¹¹³⁶. En relación a la duración del cargo, el único requisito que recoge el Reglamento de 1848 (la Ley de 1848 guarda silencio al respecto) se encuentra en el párrafo 2 del artículo 2:

No podrá reservarse ningún socio a título de fundador ni por otro alguno, el derecho de propiedad sobre la empresa en todo ni en parte, ni el de otras ventajas personales y privativas, fuera de la remuneración y participación de que hablan los artículos 6º y 7.º, ni el de la administración o gerencia irrevocablemente en las compañías anónimas.

Por lo tanto, el cargo de administrador no podía ser por tiempo indefinido, pero tampoco existía un periodo máximo legal de duración en el cargo. Aunque la Ley y el Reglamento de 1848 guarden silencio, cabe entender válida la reelección de los administradores si así lo preveían los estatutos y reglamentos de la sociedad.

6. Separación. Amovilidad

Dada la configuración especial de las compañías por acciones en las que, por un lado, los socios disfrutaban de una limitación de su responsabilidad y, por otro lado, no tenían derecho a participar en la administración social, aparece ya desde el CCom 1829 la amovilidad como nota caracterizadora de los administradores. Así, el artículo 265 CCom 1829, que regula los diferentes tipos de sociedades mercantiles, en su párrafo 3 establece las notas básicas de las compañías anónimas:

Creándose un fondo por acciones determinadas para girarlo sobre uno o muchos objetos que den nombre a la empresa social cuyo manejo se encargue a mandatarios o administradores amovibles a voluntad de los socios, y esta compañía es la que lleva el nombre de anónima.

La característica de la amovilidad es recogida por el Reglamento de 1848 en su artículo 2, que dispone que ningún administrador puede disfrutar del privilegio de la irrevocabilidad de su nombramiento. Cabe matizar que la amovilidad de los administradores de la sociedad anónima no era absoluta. El Reglamento de 1848 exigía una condición necesaria para el cese de los administradores: la justa causa. Efectivamente, su artículo 27 dispone que

¹¹³⁵ Artículo 25 del Reglamento de 1848.

¹¹³⁶ Artículo 7 del Reglamento de 1848.

(s)egún está declarado en el artículo 265 del Código de comercio, los administradores de las sociedades por acciones, siendo anónimas, son amovibles a voluntad de los socios, mediando justas causas de separación, con arreglo a derecho o a lo que sobre la materia estuviere establecido en los estatutos de la sociedad (el subrayado es nuestro).

En cambio, en las sociedades comanditarias por acciones, los socios gerentes de la administración social eran inamovibles:

En las compañías comanditarias por acciones no podrán ser removidos los socios gerentes de la administración social que les compete como responsables directamente y con sus bienes propios, de todas las operaciones a la compañía. En caso de muerte o inhabilitación de los socios gerentes se tendrá por disuelta la compañía, y se procederá a su liquidación¹¹³⁷

El procedimiento de separación de los administradores no se encuentra regulado en el Reglamento de 1848. Este aspecto se remite a lo que establezcan los estatutos y demás escrituras societarias. En principio, tanto el artículo 265 CCom 1829, como el artículo 27 del Reglamento de 1848, atribuyen la competencia para el cese de los administradores a los socios, entendiendo que su voluntad se manifestaría en la sede adecuada, es decir, en las reuniones de la junta. Pero no se puede olvidar el sometimiento de las compañías por acciones a la vigilancia del Jefe Político y del Gobierno. Llegados a este punto, cabe preguntarse si la Autoridad pública podía cesar directamente a los administradores. En nuestra opinión, no parece que pudiera hacerlo. Los citados artículos del CCom 1829 y del Reglamento de 1848, así como los referentes al nombramiento de administradores¹¹³⁸ asignan con exclusividad a la junta de accionistas la competencia en relación a la designación y cese del órgano de administración.

Ahora bien, aunque los textos normativos dispusieran lo que se acaba de comentar, no se puede dejar de subrayar los medios de los que dispondría la Autoridad pública para propiciar cambios en el órgano de administración, sin olvidar el derecho de veto del Jefe Político en relación al nombramiento de nuevos administradores¹¹³⁹.

7. Naturaleza de la relación jurídica entre la sociedad y el administrador. ¿Relación orgánica?

El artículo 265.3 CCom 1829 establece como una de las características básicas de la compañía anónima que su administración *se encargue a mandatarios o administradores amovibles a voluntad de los socios*. El empleo de la conjunción disyuntiva “o” plantea alguna dificultad de interpretación, dado que no parece lógico que esta atribución se hubiera hecho de manera excluyente: o mandatarios o administradores, a no ser que fueran conceptos similares o idénticos, lo cual no está claro.

¹¹³⁷ Artículo 28 del Reglamento de 1848.

¹¹³⁸ Fundamentalmente los artículos 1.16 y 25 del Reglamento de 1848, así como los artículos 277 CCom 1829, 6 de la Ley de 1848 y 7 del Reglamento de 1848.

¹¹³⁹ Artículos 13.4, 37 y 38 del Reglamento de 1848, entre otros.

En efecto, el CCom 1829 utiliza habitualmente la expresión “administradores” para referirse al órgano de administración. Así, por ejemplo, establece que *(l)os administradores de las sociedades anónimas se nombrarán en la forma que prevengan sus reglamentos*¹¹⁴⁰ (el subrayado es nuestro), la administración tiene derecho a exigir los dividendos pasivos¹¹⁴¹, en la escritura social debe expresarse *(l)os socios que han de tener a su cargo la administración de la compañía*¹¹⁴² (el subrayado es nuestro), etc. No hay menciones relevantes en el CCom 1829 a los mandatarios de las compañías anónimas. Cabe recordar, además, que el citado Código regula varios contratos mercantiles, entre los que no figura el mandato, siendo esta materia objeto de regulación según el Derecho civil o común.

En el análisis que realiza BACARDÍ¹¹⁴³ del CCom 1829, antes de la publicación de las normas de 1848, diferencia dos situaciones distintas. En primer lugar, cuando los administradores actúan dentro de las facultades que les atribuyen los reglamentos y estatutos, lo hacen como órgano social. En cambio, cuando su actuación se encuentra fuera de esas facultades, se les debe considerar mandatarios. Estas son sus palabras: *(c)uando el reglamento no fija con toda la precisión necesaria la extensión de facultades de los administradores, (...) debe recurrirse al derecho común sobre el mandato o procuración*. Cabe resaltar que para este autor, de los más relevantes de su época¹¹⁴⁴, el poder de representación de los administradores parece una cuestión interna de la sociedad al referirse a la determinación de las facultades en los reglamentos y estatutos sociales y no a su publicidad a través del T. de c. o del RPGC¹¹⁴⁵.

Posteriormente, la Ley y el Reglamento de 1848 no utilizan el término “mandatario” para referirse al órgano de administración, si bien emplean otras palabras que podrían intercambiarse con “administradores”. Así, aparecen los nombres de “gerentes” o “directores” en varios artículos¹¹⁴⁶. Pero esta nueva situación no significa que se haya olvidado la relación de los administradores con el mandato. En efecto, conviene destacar el comentario que GÓMEZ DE LA SERNA y REUS Y GARCÍA realizan en el año 1863 al artículo 265.3 CCom 1829. Dicen estos autores que la sociedad anónima:

¹¹⁴⁰ Artículo 277 CCom 1829.

¹¹⁴¹ Artículo 283 CCom 1829.

¹¹⁴² Artículo 286 CCom 1829 sobre todas las compañías mercantiles.

¹¹⁴³ BACARDÍ, A. (1840): *Tratado de Derecho Mercantil* ..., pág. 253.

¹¹⁴⁴ Así lo señala ÁLVAREZ DEL MANZANO Y ÁLVAREZ RIVERA, F. (1903): *Curso de Derecho Mercantil filosófico, histórico y vigente (español y extranjero)*, tomo I, Parte General, segunda edición, Madrid, pág. 695.

¹¹⁴⁵ Sobre algunos aspectos del poder de representación de los administradores societarios y los factores y la publicidad registral en época reciente se puede consultar el trabajo de JUSTE, J. (2002): “Limitaciones al poder de representación del factor en el giro o tráfico del establecimiento. Actuación del administrador societario en calidad de factor” en *Derecho de sociedades. Libro Homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, vol. II, Madrid, págs. 1353 y ss.

¹¹⁴⁶ La Ley de 1848 se refiere a los gerentes o directores en sus artículos 13 y 18. El Reglamento de 1848 menciona a los socios gerentes de las compañías comanditarias por acciones en los artículos 1, 6, 25 y 28, así como, en relación a las compañías por acciones existentes antes de la promulgación de la Ley de 1848; su artículo 39 se refiere a los gerentes, directores; y, el artículo 40 a los directores. Sobre esta cuestión terminológica, BACARDÍ dice que *(l)as sociedades anónimas se administran por directores, o sea, administradores, nombrados en la forma que prevean sus reglamentos* (el subrayado es nuestro) en BACARDÍ, A. (1840): *Tratado de Derecho Mercantil* ..., pág. 252.

(e)s una persona jurídica representada por gerentes, directores o administradores que son considerados como simples mandatarios (el énfasis es nuestro)¹¹⁴⁷.

Aunque los textos legales de referencia (CCom 1829, Ley y Reglamento de 1848) no utilizaban el término “mandatarios”, la Doctrina lo usaba para referirse a la relación jurídica entre el administrador y la sociedad. Llegados a este punto, cabe plantearse si dicha relación era, en realidad, de carácter orgánico.

La respuesta no es, en modo alguno, sencilla. En primer lugar, ni el CCom 1829, ni la Ley ni el Reglamento de 1848 utilizaron la expresión general de “órgano social”. La Ley de 1848 diferenciaba claramente la junta de accionistas de la administración social. El Reglamento de 1848, que también lo hacía, añadió la existencia de un órgano societario de control y vigilancia de la administración. El problema con el que nos encontramos es que en aquella época aún no se había elaborado el concepto de “órgano”. Como dice SÁNCHEZ CALERO, *(l)a noción técnica de órgano procede, como es sabido, esencialmente del Derecho público, tras la obra a finales del siglo XIX de GIERKE*¹¹⁴⁸.

Aunque el objeto de nuestro estudio es anterior a la aparición del concepto jurídico de “órgano”, cabe plantear la cuestión de si el CCom 1829, la Ley y el Reglamento de 1848 entendieron la relación jurídica entre el administrador y la sociedad como una relación contractual o de carácter corporativo. En nuestra opinión, el Legislador mercantil de aquella época la consideró más corporativa que contractual, aunque se pueden vislumbrar ambas aproximaciones.

Por otro lado, debe tenerse presente la figura del administrador de las compañías mercantiles “comunes” (las colectivas y comanditarias) que se contraponen al régimen de excepción del administrador de las sociedades anónimas. En efecto, en las compañías colectivas y comanditarias los socios tenían derecho a administrar y representar a la sociedad y, por lo tanto, sus actuaciones vinculaban a la compañía, dado que eran sus representantes según derecho, quienes manifestaban su voluntad frente a terceros. Cabe destacar a estos efectos, las siguientes palabras de GONZÁLEZ HUEBRA¹¹⁴⁹ en relación a las sociedades colectivas

(l)a administración en esta clase de compañías corresponde de derecho a todos los asociados (...). Mas este derecho, sin embargo, puede ser cedido y delegado a factores o gerentes, por pacto expreso de la escritura, o limitado y circunscrito a alguno o algunos socios, con exclusión de los demás.

En cambio, en las compañías por acciones, los socios no tenían derecho a participar en la administración social. Los administradores eran personas extrañas a la sociedad (aunque se les exigía un depósito de acciones en garantía del desempeño de su cargo). Su relación con la sociedad era diferente a la de los administradores de las sociedades personalistas.

¹¹⁴⁷ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio* ..., pág. 99.

¹¹⁴⁸ SÁNCHEZ CALERO, F. (2005): *Los administradores en las sociedades* ..., pág. 91, nota (23) a pie de página.

¹¹⁴⁹ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil* ..., págs. 138 y 139.

Por otro lado, GONZÁLEZ HUEBRA, en relación a la representación voluntaria (como diferente a la orgánica), en el mismo texto que se acaba de citar sobre las compañías colectivas dice:

(l)os factores y los demás dependientes que hemos considerado como agentes auxiliares de comercio, no pueden tener ni el concepto ni la representación de socios para efecto alguno de giro social, aun cuando se remuneren sus trabajos con parte de las ganancias.

Se entiende que esta diferenciación también existía en el caso de las compañías por acciones.

Volviendo a la relación de naturaleza corporativa entre el administrador y la compañía por acciones, se encuentran manifestaciones de la misma, en primer lugar, en el artículo 1.10 del Reglamento de 1848 que exige que la escritura de fundación determine las atribuciones de los administradores. Como ya se ha expuesto en otros lugares, el régimen de la administración se encontraba fundamentalmente en las escrituras sociales (estatutos y reglamentos), dentro del amplio marco establecido por la Ley y el Reglamento de 1848¹¹⁵⁰. Los socios determinaban, por tanto, en junta general la estructura, derechos, obligaciones, etc., de los administradores sociales. Pero, además, dentro de las pocas referencias normativas a las funciones de los administradores, destacan tres que presuponen su configuración como órgano: la formulación de las cuentas anuales¹¹⁵¹, la intervención en la valoración de las aportaciones no dinerarias al capital social¹¹⁵² y, por último, la exigencia y, en su caso, ejecución de los dividendos pasivos¹¹⁵³.

Finalmente, se puede observar un distanciamiento de la relación corporativa, fundamentalmente, en la administración provisional que, por su propia naturaleza, se limitaba a representar a la compañía durante la fase para conseguir la autorización, teniendo expresamente prohibido dedicarse a otras actividades (incluido el propio objeto social) hasta que se obtuviera la aprobación. En ese momento cesaba y era sustituida por la administración definitiva, que era nombrada por la junta general.

8. Ejercicio del cargo

La Ley y el Reglamento de 1848 guardan silencio sobre la naturaleza y características del ejercicio del cargo. No se encuentra en los textos normativos una declaración sobre, por ejemplo, el deber de lealtad a la sociedad, la obligación de guardar secreto o el desempeño del cargo con la diligencia de un ordenado comerciante.

La única referencia directa figura en el artículo 277 CCom 1829, que dice así:

Los administradores de las sociedades anónimas se nombrarán en la forma que prevengan sus reglamentos, y no son responsables personalmente, sino del buen desempeño de las funciones que, según estos mismos reglamentos, estén a su cargo (el subrayado es nuestro).

¹¹⁵⁰ Amplitud que, no se olvide, era objeto de vigilancia y revisión por parte de la Autoridad pública.

¹¹⁵¹ Artículo 34 del Reglamento de 1848.

¹¹⁵² Artículo 3 del Reglamento de 1848.

¹¹⁵³ Artículo 32 del Reglamento de 1848.

El último inciso de este artículo no deja de ser un anticipo de la cláusula de diligencia (*lex artis*).

El Reglamento de 1848 menciona indirectamente este tema. El artículo 13 atribuye al Jefe Político la competencia de examinar (controlar y supervisar) cuatro aspectos de la sociedad. El último se refiere a si los administradores *ofrecen las garantías morales que son indispensables para el crédito de la empresa y la seguridad de los intereses de los accionistas y del público*.

Este artículo ya se ha comentado en el primer epígrafe del presente capítulo, relativo a los requisitos para ser nombrado administrador. Allí se hacía referencia a la falta de precisión del concepto “*garantías morales*” y a la gran discrecionalidad de la Autoridad pública para interpretarlo. A pesar de la deficiente técnica legislativa, es claro que el Legislador trata de introducir el ejercicio del cargo dentro de una pauta de comportamiento¹¹⁵⁴.

Cabe reflexionar sobre la redacción de este artículo 13.4 del Reglamento de 1848, al relacionar las garantías morales con tres ámbitos: la compañía, los terceros y los accionistas. Respecto a la primera, se utiliza el término “crédito” de la empresa, lo cual suponía que los administradores desarrollaran una conducta diligente para mantener el prestigio y la buena imagen de la sociedad. En relación a los terceros, la Autoridad pública debía velar, fundamentalmente, a tenor de las intervenciones parlamentarias, por los intereses del Gobierno en la empresa, aunque también debía hacerlo por los acreedores, trabajadores, etc. Por último, en cuanto a los socios, se habla de la “seguridad de los intereses” de los accionistas. Esto es relevante, en la medida en que la actuación de los administradores no se limitaba exclusivamente a defender el interés social, sino que también debían velar por los intereses de los accionistas.

Con carácter complementario a las “garantías morales” del artículo 13.4 del Reglamento, la Ley de 1848 (artículo 13) y el Reglamento de 1848 (artículo 29) establecían, además, una garantía de carácter patrimonial para responder por el ejercicio de su cargo. De esta manera, se facilitaba el correcto ejercicio del cargo, evitando la negligencia y los conflictos de intereses entre administrador y sociedad, pues las acciones depositadas garantizaban todo o parte de la responsabilidad en la que pudieran incurrir.

9. Ámbito de representación

En los orígenes de las compañías por acciones, el ámbito de representación de los administradores se encontraba directamente relacionado con el objeto social. No puede olvidarse que el CCom 1829 describe la sociedad anónima como la creación *de un fondo por acciones determinadas para girarlo sobre uno o muchos objetos*¹¹⁵⁵. Al contrario que las compañías mercantiles “comunes” (como la colectiva o comanditaria) que podían dedicarse al comercio en general, las anónimas se creaban para un proyecto concreto. El objeto social es el que delimitaba con total precisión el ámbito de representación de los administradores.

¹¹⁵⁴ Mucho tiempo deberá transcurrir para que el Legislador recoja las características básicas del ejercicio del cargo de las sociedades de capital.

¹¹⁵⁵ Artículo 265.3 CCom 1829.

Los textos normativos establecen en varios artículos la necesidad de que el objeto social se encuentre determinado¹¹⁵⁶. Como se expuso en el capítulo sobre el objeto social, este régimen es una manifestación de la doctrina *ultra vires* según la cual los administradores sólo pueden actuar y representar a la compañía en los actos y negocios propios del objeto social. El incumplimiento de este principio tiene como consecuencia la nulidad de los contratos y la responsabilidad de los administradores por los daños y perjuicios ocasionados.

En este sentido, el artículo 16 *in fine* de la Ley de 1848 establece la responsabilidad de los administradores que *se extiendan a otras negociaciones que las de su objeto o empresa, según esté determinado en sus estatutos y reglamentos*. Esta responsabilidad se concreta en varios niveles. En primer lugar, los contratos celebrados fuera del objeto social son nulos. En segundo lugar, la responsabilidad de carácter solidario de todos los perjuicios que ocasionen a los interesados por la nulidad de los contratos. Y, por último, una multa pecuniaria¹¹⁵⁷.

La única excepción al ámbito de representación es la que recoge el artículo 31 del Reglamento de 1848, que establece que

Los fondos de las compañías mercantiles por acciones no podrán distraerse de la caja social para negociaciones extrañas al objeto de su creación. Se permitirá únicamente aplicar los fondos sobrantes que existan en caja para descuentos o préstamos cuyo plazo no podrá exceder de noventa días, dándose precisamente en garantía papel de la deuda consolidada.

Los administradores son directamente responsables de cualquiera cantidad de que dispusieren contraviniendo a estas disposiciones.

Esta excepción no es coherente con los demás artículos de la Ley de 1848 y del propio Reglamento de 1848. Como ya dejamos expuesto en el capítulo sobre el objeto social, en nuestra opinión, este artículo 31 es contrario al artículo 16 de la Ley de 1848 y al espíritu que se reflejó en los debates del PL 1848, sobre todo en el Congreso de los Diputados¹¹⁵⁸.

10. Retribución

La retribución de los administradores se encuentra regulada en tres artículos del Reglamento de 1848. El artículo 2 establece como principio general que los socios son titulares de iguales derechos y participación en beneficios. Por este motivo, en su párrafo segundo prohíbe cualquier tipo de ventaja o privilegio de uno o varios socios sobre los demás, exceptuando:

*(1) a remuneración y participación de que hablan los artículos 6 y 7.*¹¹⁵⁹

¹¹⁵⁶ Así la Ley de 1848 en sus artículos 2, 4, 5 y 16, y el Reglamento de 1848 en sus artículos 1.3 y 31.

¹¹⁵⁷ Un estudio más detallado de este artículo se realiza en el epígrafe posterior sobre la responsabilidad de los administradores.

¹¹⁵⁸ DsC. Congreso. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, págs. 1466 y 1467.

¹¹⁵⁹ La referencia a los artículos es errónea, pues en realidad se remite a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del mismo Reglamento.

El artículo 5 se refiere a las sociedades anónimas y el 6 a las compañías comanditarias por acciones. El método o criterio de retribución no es el mismo en ambos artículos, pero hay un requisito necesario común a los dos, sin el cual la remuneración no sería válida: la remuneración no la determinaba el propio órgano de administración, sino que la fijaba la junta (caso de la compañía anónima) o la escritura de fundación (sociedades en comandita por acciones). Establece el citado artículo 5:

La remuneración que hayan de disfrutar los administradores de las compañías anónimas podrá establecerse por medio de un sueldo fijo, o por el de una participación en los beneficios repartibles de la empresa o por ambos medios; pero en todos casos habrá de reservarse esta asignación a la Junta general de accionistas constituida que sea la sociedad

El Reglamento de 1848, por tanto, determina tres criterios de retribución para los administradores de compañías anónimas:

1. Cuantía fija.
2. Cuantía variable en función de los beneficios sociales. No se establece limitación alguna al porcentaje de participación en beneficios. Los beneficios a los que se hace referencia son “beneficios repartibles”.
3. Sistema mixto de los dos anteriores.

El único requisito de validez que exige el Reglamento de 1848, para evitar un evidente conflicto de intereses, es que la determinación y especificación del criterio de retribución es competencia exclusiva de la junta, una vez constituida la compañía.

Respecto a las sociedades comanditarias por acciones, el artículo 6 establece que

(e)n las sociedades en comandita por acciones tendrán los socios gerentes, como responsables solidariamente de los resultados de las operaciones sociales, la participación que se prefijare por la escritura de fundación en las ganancias y pérdidas de la empresa.

En este caso, sólo se recoge el sistema de participación en resultados para la retribución de los socios gerentes de este tipo societario. También aparece un requisito de validez: la participación en resultados no la fijan los socios gerentes, sino la escritura de fundación de la sociedad.

11. Control de los administradores: el órgano de inspección o vigilancia y la Autoridad pública

Una de las cuestiones que diferencia los textos de 1848 respecto a nuestro actual derecho de sociedades es que, en aquéllos, sin perder la junta de accionistas su función de control de los administradores, se presta mucha atención, por un lado, al control de la Autoridad pública y, por otro, aunque en mucha menor medida como se ha expuesto

anteriormente, al del órgano de inspección o vigilancia [GONZÁLEZ HUEBRA (1859)¹¹⁶⁰ y PERECAULA (1871)¹¹⁶¹].

En un epígrafe anterior se comentó el sistema de administración dual en el que se expuso el régimen del órgano de inspección o vigilancia. En el presente se aborda el análisis de la naturaleza y funciones de vigilancia que los textos normativos otorgan a la Autoridad pública.

Esta cuestión es una pieza clave del nuevo régimen establecido por la Ley y el Reglamento de 1848. El CCom 1829 sometía a las compañías por acciones a la aprobación y, en cierto modo, al control, de los T. de c.¹¹⁶². Además, aquellas sociedades que disfrutaran de algún privilegio concedido por la Corona, quedaban sometidas a la autorización y vigilancia del Rey¹¹⁶³.

La Ley de 1848 da un giro radical a esta situación tratando de prevenir los abusos y fraudes cometidos por los administradores sociales durante la vigencia del CCom 1829. Por este motivo encomienda a la Autoridad pública (Gobierno y Jefes Políticos) el control de las actuaciones de los administradores¹¹⁶⁴. Facultades de vigilancia e inspección que, como se expone a continuación, son tanto *ex ante* del ejercicio del cargo, como *ex post*.

El artículo 17 de la Ley de 1848 es la base de la facultad de inspección de la Autoridad pública sobre las compañías por acciones. Dice así este importante artículo:

El Gobierno, sin gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías, ejercerá la inspección que conceptúe necesaria para afianzar la observancia estricta y constante de la presente ley.

Se trata de la máxima expresión de la intervención administrativa en las sociedades.

En relación al control de la actuación de los administradores, cabe realizar una breve referencia a las discusiones en el Senado sobre la redacción de este artículo. Los Senadores Sr. Pérez de Seoane y el Sr. Conde de Vigo presentaron una enmienda al artículo 17 en la que se atribuían a la Autoridad pública varias facultades específicas de

¹¹⁶⁰ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil ...*, pág. 164.

¹¹⁶¹ PERECAULA, A. (1871): *Diccionario de Derecho mercantil español*, Barcelona, pág. 49. Esta publicación, posterior a la derogación de la Ley de 1848, recoge un estudio de las sociedades por acciones durante la vigencia de dicha Ley. En referencia a ellas, el autor sintetiza esta idea con la siguiente frase: *la administración o régimen administrativo de estas compañías está bajo la doble inspección y vigilancia de las mismas y del Gobierno*.

¹¹⁶² Artículo 293 CCom 1829.

¹¹⁶³ Artículo 294 CCom 1829.

¹¹⁶⁴ Refiere GONZÁLEZ HUEBRA a este respecto, que el Gobierno,

puede ejercer la inspección que conceptúe necesaria, sin entorpecer el curso de los negocios; y usando de ella comprueba y publica los balances, examina el estado de la compañía y su régimen directivo y administrativo, suspende y anula la autorización si se falta al cumplimiento de las disposiciones legales o a sus estatutos y procede criminalmente contra los culpables si se ha cometido algún delito.

Esta inspección la ejerce por medio de los Gobernadores civiles y delegados especiales.

GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil ...*, pág. 164).

En la época de la redacción de esta obra, los Jefes Políticos se denominaban ya Gobernadores Civiles.

control¹¹⁶⁵. El objetivo de esas medidas era reforzar el control y la inspección del Gobierno y Jefes Políticos sobre las compañías por acciones, entre otras cosas,

*... para que juzguen las operaciones de sus administradores.*¹¹⁶⁶

La contestación a la enmienda (que no prosperó) fue asumida por el Ministro de CIOP, D. Juan Bravo Murillo. Se opuso a ella, en primer lugar, dando la vuelta al argumento que servía de base a la enmienda: la redacción propuesta podría limitar las facultades de control e inspección del Gobierno al especificar unas competencias concretas, que no incluían a todas. Por este motivo, propuso mantener la redacción del PL 1848 (que es la que se aprobó), pues con ella el Gobierno disponía de una *facultad omnímoda y absoluta*¹¹⁶⁷ para realizar el control e inspección.

En segundo lugar, sostuvo que la enmienda se introducía en ámbitos más propios de la competencia del Reglamento de desarrollo de la Ley. Y, efectivamente, el Reglamento de 1848 reguló varios de esos aspectos. Al final, los promotores de la enmienda decidieron retirarla para evitar que se pudiera,

*restringir en lo más mínimo las facultades del Gobierno*¹¹⁶⁸.

Efectivamente, el artículo 30 del Reglamento de 1848 establece que

Las sociedades mercantiles por acciones estarán constantemente bajo la inspección del gobierno y del Jefe político de la provincia de su domicilio en cuanto a su régimen administrativo, y a la exacta observancia de sus estatutos y reglamentos, conforme está declarado en el artículo 17 de la ley de 28 de Enero. El gobierno, con el debido conocimiento de causa, y oído el Consejo Real, suspenderá o anulará, según estimare procedente la autorización de las compañías que en sus operaciones o en el orden de su administración faltaren al cumplimiento de las disposiciones legales o de sus estatutos (el subrayado es nuestro).

¹¹⁶⁵ La enmienda proponía redactar el artículo 17 de la Ley de la siguiente manera:

Artículo 17.- Se redactará en los términos siguientes: El Gobierno, sin gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías, ejercerá la inspección que conceptúe necesaria para afianzar la observancia de esta ley y proteger los intereses legítimos de los accionistas. Con este fin podrá:

1 Nombrar visitador que examine los libros de la compañía y cuanto estime necesario para formar un juicio cabal de su estado.

2 Mandar que se convoque extraordinariamente junta general de accionistas

3 Designar persona que presida las juntas generales de accionistas, así ordinarias como extraordinarias, siempre que lo juzgue oportuno.

La elección de visitador o de presidente de las juntas generales, recaerá necesariamente en el Jefe Político o en un individuo del Consejo Real, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal de Comercio de Madrid, si la compañía se hallase domiciliada en la provincia de Madrid. Respecto a las domiciliadas en las demás del Reino, recaerá en el Jefe Político o en un individuo del Consejo provincial de la Audiencia del territorio o del T. de c. respectivo.

(DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 294).

¹¹⁶⁶ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 294.

¹¹⁶⁷ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 295.

¹¹⁶⁸ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 295.

La vigilancia era, por tanto, constante (*ex ante* y *ex post*). Y su ámbito era prácticamente ilimitado. Recuérdese, por ejemplo, que según el artículo 13.4 del Reglamento de 1848, el Jefe Político debía examinar:

(s)i el régimen administrativo y directivo de la compañía ofrece las garantías morales que son indispensables para el crédito de la empresa y la seguridad de los intereses de los accionistas y del público.

Esta gran amplitud del ámbito de inspección y control atribuidos a la Autoridad pública se complementa con una materia que el Reglamento de 1848 regula en varios preceptos: los estados financieros formulados por los administradores. Así, el artículo 37 imponía a los Jefes Políticos el deber de información al Gobierno sobre las cuentas anuales,

(e)xponiendo las observaciones que estimaren conducentes en las materias que sean de interés de la administración. Además de estas comunicaciones anuales pondrán en conocimiento del Gobierno para la resolución correspondiente toda novedad que ocurra en el régimen directivo y administrativo de las compañías que pueda perturbarlo o que produzca alguna alteración en la observancia de sus estatutos.

Además, el artículo 38 establecía la pauta de actuación del Jefe Político ante la comisión de presuntas irregularidades graves por los administradores:

Siempre que de resultas de la inspección que la administración ha de ejercer sobre las sociedades por acciones o por los documentos que estas deben someter a su comprobación o por cualquiera otro medio legal constare haberse perpetrado algún delito en el manejo directivo y administrativo de la sociedad, procederá el Jefe político conforme está prescrito en el párrafo 5 del artículo 5 de la ley de 2 de Abril de 1845.

12. Responsabilidad

La responsabilidad de los administradores es una materia regulada por el CCom 1829, la Ley y el Reglamento de 1848. Por este motivo, el epígrafe se divide en diferentes apartados en los que se comenta el régimen de cada texto normativo. El último apartado resume la regulación de la responsabilidad.

a) Régimen del CCom 1829

El CCom 1829, en los artículos 276 y ss. regula las características básicas de la compañía anónima. El artículo 278 establece como principio fundamental que los socios sólo son responsables hasta la cifra que se hubieran comprometido aportar. Pero esta característica básica se encuentra precedida por otra, según establece el artículo 277:

Los administradores de las sociedades anónimas (...) no son responsables personalmente, sino del buen desempeño de sus funciones que según estos mismos reglamentos estén a su cargo.

La compañía anónima era una excepción frente a las sociedades mercantiles “comunes” (colectivas, comanditarias) y, como se explicó en un epígrafe anterior, uno de los aspectos básicos de su régimen especial era que los administradores no respondían de las deudas sociales, como ocurría en los otros tipos sociales¹¹⁶⁹. La sistemática del CCom 1829 destaca esta característica sobre la limitación de responsabilidad de los accionistas a las cantidades que se habían comprometido aportar.

Por este motivo, se podría decir que lo más relevante del régimen que establece el CCom 1829 para las sociedades por acciones, se refiere a la limitación de la responsabilidad de los administradores. Ahora bien, esta restricción no es absoluta, pues como dice el mismo artículo 277, son responsables *del buen desempeño de sus funciones que según estos mismos reglamentos estén a su cargo* (sistema de cláusula general). Por lo tanto, la responsabilidad se relaciona con el *buen desempeño* de su cargo. Así lo interpretan y reiteran los comentaristas de la época como LASO¹¹⁷⁰, quien afirma que *el administrador de la compañía anónima responde sólo de su administración*; GÓMEZ DE LA SERNA Y REUS Y GARCÍA¹¹⁷¹, dicen que *no responden, por lo tanto, los gerentes ni personal ni solidariamente de los empeños que toman para la sociedad, como no se extralimiten*; y, por último, GONZÁLEZ HUEBRA¹¹⁷² refiere que *como en estas sociedades sólo el fondo social y el de reserva son los que garantizan el resultado de los negocios, los administradores no responden bajo tal concepto a los extraños con quienes contratan, sino únicamente a la sociedad, cuando no han desempeñado bien su encargo. Su responsabilidad se reduce a la indemnización de daños y perjuicios, y la contraen siempre que faltan al cumplimiento de sus obligaciones o infringen sus prohibiciones*.

Un aspecto relacionado con la responsabilidad de los administradores es el derecho de información de los accionistas que les permite conocer los estados financieros de la sociedad. El CCom 1829, en el párrafo primero de su artículo 310 establece el principio general siguiente:

En especie alguna de sociedad mercantil puede rehusarse a los socios el examen de todos los documentos comprobantes de los balances que se formen, para manifestar el estado de la administración social.

Esta disposición se enmarca en la relación de los socios de las compañías mercantiles “comunes” (las colectivas y comanditarias) con la sociedad y sus administradores. Los socios cuya responsabilidad era ilimitada y que, además, tenían derecho a participar en la gestión y administración, no podían verse despojados del derecho de examen de la documentación contable¹¹⁷³.

¹¹⁶⁹ En las compañías colectivas y comanditarias los socios sin limitación de responsabilidad tenían derecho a participar en la administración de la compañía y su patrimonio respondía de las deudas sociales.

¹¹⁷⁰ LASO, E. (1849): *Elementos del Derecho mercantil* ..., pág. 22.

¹¹⁷¹ GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio* ..., pág. 102.

¹¹⁷² GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil* ..., 163.

¹¹⁷³ En el capítulo sobre la junta general se ha hecho una referencia al carácter secreto que la contabilidad tenía en el CCom 1829 (BERNAL LLORÉNS, M. (1998): “En torno a la regulación contable ...”, pág. 903. Ese principio es compatible con el derecho de examen de la contabilidad de los socios de las compañías colectivas y comanditarias, pues el secreto se refería a terceros (incluidos Tribunales, salvo determinados casos).

Respecto a las compañías por acciones, el párrafo segundo del mismo artículo 310 establece una importante excepción:

En las sociedades establecidas por acciones podrá hacerse derogación a esta regla general por pacto establecido en el contrato de sociedad, o por disposición de sus reglamentos aprobados que determinen el modo particular de hacer este examen, sujetando a su resultado la masa general de accionistas.

Los accionistas, por tanto, no eran titulares de un derecho absoluto de inspección de las cuentas anuales. Su ejercicio debía circunscribirse a lo que establecieran los reglamentos y estatutos sociales. Esta disposición del CCom 1829 podía ser utilizada por las sociedades para proteger la responsabilidad de los administradores.

b) Regulación de la Ley de 1848

La Ley de 1848 no establece una regulación general de la responsabilidad de los administradores. De una manera indirecta, al establecer las facultades de vigilancia y control de la Autoridad pública sobre las compañías por acciones, su artículo 17 dispone, como no podía ser de otro modo, que el incumplimiento por los administradores de las obligaciones de la Ley de 1848, originaba su correspondiente responsabilidad y el deber de la Autoridad pública de tomar las medidas adecuadas. Dice así el citado artículo:

El Gobierno, sin gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías, ejercerá la inspección que conceptúe necesaria para afianzar la observancia estricta y constante de la presente ley.

Por lo tanto, el Gobierno podría exigir responsabilidad a los administradores de la sociedad si no observaran las prescripciones de *la presente ley*. Debe entenderse *la presente ley* en sentido amplio, incluyendo las prescripciones reglamentarias que desarrollan la Ley. El margen de discrecionalidad administrativa, según el tenor del citado artículo, es bastante grande. Cabe recordar a estos efectos, la intervención del Sr. Bravo Murillo (entonces Ministro de CIOP) en los debates del Senado, en la que rechazó desglosar las facultades de inspección del Gobierno para evitar que no tuviera una *facultad omnímoda y absoluta* de control e inspección¹¹⁷⁴. Las únicas limitaciones a la actuación de la Autoridad pública eran no gravar los fondos sociales ni dificultar las operaciones sociales.

Por otro lado, la responsabilidad frente a socios y terceros, es regulada por la Ley de 1848 para unos supuestos concretos en sólo dos artículos. Este silencio respecto a un régimen societario especial de responsabilidad obedece, como se ha expuesto en otros lugares, a que era el Derecho civil o común el que regulaba esta relación jurídica, como tantos otros aspectos de las compañías mercantiles en general¹¹⁷⁵.

¹¹⁷⁴ La enmienda a este artículo 17 del PL 1848, como se expuso anteriormente, la plantearon los Senadores Sr. Pérez de Seoane y el Conde de Vigo en la sesión de 24 de diciembre de 1847 (DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 294), pretendiendo introducir tres facultades que facilitarían la inspección gubernativa. Dándose cuenta de que esto podría limitar el control del Gobierno, retiraron la enmienda para evitar *restringir en lo más mínimo las facultades del Gobierno*.

¹¹⁷⁵ Puede consultarse para esta cuestión el capítulo dedicado al concepto de compañías mercantiles por acciones en la época del CCom 1829 y de la Ley de 1848.

Los dos artículos que regulan específicamente la responsabilidad de los administradores son los siguientes. El artículo 15 les prohíbe emitir, con cargo a la sociedad, billetes, pagarés, abonarés o documentos al portador, excepto autorización legal. En caso de incumplimiento de esta obligación,

(l)os infractores quedarán sujetos al pago de una multa que no podrá exceder de 50.000 reales.

El siguiente artículo de la Ley de 1848, el 16, dispone lo siguiente:

Los que contraten a nombre de compañías que no se hallen establecidas legalmente, serán solidariamente responsables de todos los perjuicios que por la nulidad de los contratos se irroguen a los interesados, e incurrirán además en una multa que no excederá de 100.000 reales. En igual responsabilidad incurrirán los que a nombre de una compañía aun legalmente constituida se extiendan a otras negociaciones que las de su objeto o empresa, según esté determinado en sus estatutos o reglamentos.

Se prevén, por tanto, dos situaciones distintas a las que se les atribuye idéntica responsabilidad. La primera, hace referencia a los administradores provisionales que contraten con terceros antes de la aprobación de la sociedad y, la segunda, a la administración definitiva que realice contrataciones fuera del ámbito del objeto social. En ambos casos el órgano de administración es responsable con carácter solidario de todos los perjuicios ocasionados por la nulidad de los contratos y, además, se les podría imponer una multa de hasta 100.000 reales.

En estos dos casos, la Ley de 1848 consagra, por un lado, la responsabilidad civil frente a los afectados por las actuaciones ilícitas de los administradores, cuya cuantía dependerá de los perjuicios efectivamente ocasionados. Y, por otro, una responsabilidad de carácter administrativo consistente en una multa de hasta 100.000 reales cuyo beneficiario sería la Administración Pública.

Por último, en garantía del ejercicio del cargo de administrador, la Ley de 1848 estableció en su artículo 13 que los administradores depositaran acciones de la compañía que administraban para hacer frente a eventuales reclamaciones:

Los gerentes o directores de cada compañía deberán tener en depósito mientras ejerzan sus cargos un número fijo de acciones, cuyos títulos han de extenderse en papel y forma especiales.

Por su parte, el artículo 29 del Reglamento de 1848 desarrolló este artículo de la Ley de 1848 en los siguientes términos:

Dentro de los quince días siguientes al en que se hubiere declarado constituida la compañía, acreditarán los administradores ante el Jefe político haber hecho el depósito efectivo de las acciones con que deben garantizar su gerencia en la cantidad determinada en los estatutos, y conforme a lo prescrito en el artículo 13 de la ley de 28 de Enero.

DEL VISO¹¹⁷⁶ explica que esta garantía se estableció como un mecanismo añadido al régimen general de la responsabilidad de los administradores de las sociedades anónimas: *(c)on esta garantía [el depósito de las acciones] responderán en las sociedades anónimas del resultado de su gestión sus gerentes o administradores; pues aun cuando sin ella puede exigírseles la responsabilidad, del mismo modo que al mandatario que se excede de los límites de su mandato; sin embargo, la ley ha creído conveniente añadir esta otra seguridad.*

c) *Régimen del Reglamento de 1848*

La regulación reglamentaria de la responsabilidad se centra fundamentalmente en la figura de la administración definitiva. Los administradores provisionales tienen como función principal la tramitación de la autorización de la compañía y su responsabilidad se centra en ella. El artículo 1 del Reglamento de 1848 establece que la designación de los administradores provisionales se hace exclusivamente para *las gestiones necesarias hasta que hallándose constituida (la sociedad) se proceda al nombramiento de su administración (definitiva)*¹¹⁷⁷. Por lo tanto, si su actuación incumple esta previsión normativa, serán responsables por ello. En este sentido, el artículo 16 de la Ley de 1848 establece la responsabilidad solidaria de los administradores provisionales que, antes de la aprobación definitiva de la sociedad contraten con terceros, por todos los perjuicios que se deriven de la declaración de nulidad de esos contratos y, además, se les impondrá una multa de hasta 100.000 reales.

Un artículo importante del Reglamento de 1848 en cuanto a la responsabilidad del órgano de administración es el 13.4, según el cual corresponde al Jefe Político examinar,

(s)i el régimen administrativo y directivo de la compañía ofrece las garantías morales que son indispensables para el crédito de la empresa y la seguridad de los intereses de los accionistas y del público.

Por lo tanto, los administradores son responsables frente al Jefe político del crédito (prestigio y buena imagen) de la sociedad y del cuidado de los intereses de los accionistas y de terceros. El artículo 30 insiste también en el sometimiento del órgano de administración a la inspección del Jefe político:

Las sociedades mercantiles por acciones estarán constantemente bajo la inspección del gobierno y del Jefe político de la provincia de su domicilio en cuanto a su régimen administrativo, y a la exacta observancia de sus estatutos y reglamentos, conforme está declarado en el artículo 17 de la ley de 28 de Enero. El gobierno, con el debido conocimiento de causa, y oído el Consejo Real, suspenderá o anulará, según estimare procedente la autorización de las compañías que en sus operaciones o en el orden de su administración faltaren al cumplimiento de las disposiciones legales o de sus estatutos

Cabe advertir que la vigilancia del Jefe Político no se refería exclusivamente al cumplimiento de las disposiciones normativas, sino que también se ampliaba a los reglamentos y estatutos sociales, dado que muchas materias no se encontraban

¹¹⁷⁶ VISO, S. DEL (1864): *Lecciones elementales de historia ...*, pág. 230.

¹¹⁷⁷ Apartado 16 del artículo 1 del Reglamento de 1848.

reguladas por la Ley ni el Reglamento de 1848, sino que se remitían a lo que dispusieran las escrituras sociales que, no se puede olvidar, debían ser aprobadas previamente por la Autoridad pública.

Por otro lado, el incumplimiento de las obligaciones de los administradores podía llevar aparejada la decisión de la Autoridad pública de suspender o anular la autorización de la compañía. Esta situación, probablemente de las más perjudiciales para los intereses de la sociedad, sus socios, los terceros y la propia Administración pública, generaría una responsabilidad cualificada de los administradores causantes de estos perjuicios.

Como complemento de esta facultad de vigilancia y control de la Autoridad pública sobre las compañías mercantiles por acciones, el Reglamento de 1848 recoge otros dos artículos relacionados con la responsabilidad de los administradores. En primer lugar, el artículo 37, según el cual

(l)os Jefes Políticos darán cuenta al Gobierno del estado de cada compañía por acciones que hubiere en su territorio según el resultado del balance anual, exponiendo las observaciones que estimaren conducentes en las materias que sean de interés de la administración.

Además de estas comunicaciones anuales pondrán en conocimiento del Gobierno para la resolución correspondiente toda novedad que ocurra en el régimen directivo y administrativo de las compañías que pueda perturbarlo o que produzca alguna alteración en la observancia de sus estatutos (el subrayado es nuestro).

Y, en segundo lugar, el siguiente artículo se refiere a las sanciones que pueden aplicarse a los administradores por actuaciones delictivas:

(s)iempre que de resultas de la inspección que la administración ha de ejercer sobre las sociedades por acciones o por los documentos que éstas deben someter a su comprobación o por cualquiera otro medio legal constare haberse perpetrado algún delito en el manejo directivo y administrativo de la sociedad, procederá el Jefe político conforme está prescrito en el párrafo 5 del artículo 5 de la ley de 2 de Abril de 1 845.

La citada Ley de 2 de abril de 1845 es la Ley para el Gobierno de las Provincias¹¹⁷⁸. En el capítulo sobre la vigilancia e inspección de la Autoridad pública, se analiza con detalle la Ley de 1845, que recoge las funciones de los Jefes Políticos. Aunque el citado artículo 38 del Reglamento de 1848 se refiere expresamente al artículo 5.5 de la Ley de 1845, cabe recordar que no es la única competencia que se atribuía a los Jefes Políticos sobre las compañías por acciones en general y sobre sus administradores en particular. Es más, se puede decir que ésta no era la más importante, pero es relevante en la medida en que se trata de un punto de conexión directo entre los dos textos.

¹¹⁷⁸ GdM de 9 de abril de 1845, núm. 3860.

El artículo 5 de la Ley de 1845 establece que para el buen desempeño de sus funciones, el Jefe Político deberá:

5. Suspender en casos urgentes a cualquier funcionario o empleado dependiente del Ministerio de la Gobernación de la Península, dando inmediatamente cuenta al Gobierno.

Como se comenta en otros lugares, la interpretación de este texto legal no es fácil, dado que los administradores nombrados por la junta de socios, aplicando una interpretación literal del precepto, difícilmente podían tener la consideración de *funcionarios o empleados dependientes del Ministerio de la Gobernación de la Península*. Es posible que se refiera a actuaciones ilícitas de los administradores para obtener favores o privilegios de funcionarios, en cuyo supuesto, el Jefe Político podría cesar a dichos funcionarios en caso de urgencia y adoptar las medidas pertinentes contra los administradores autores o cómplices de los actos ilícitos. Ahora bien, un análisis de todo el contenido de la Ley de 1845 lleva a concluir que los Jefes Políticos disponían de suficientes facultades para intervenir drásticamente en el ejercicio del cargo de los administradores.

Una vez descrita la responsabilidad de los administradores frente a la Autoridad pública, cabe hacer referencia a una cuestión concreta regulada en el artículo 31 del Reglamento de 1848, que establece la responsabilidad de los administradores en caso de que dispusieran de dinero de la sociedad para actividades diferentes al objeto social o invirtieran las cantidades sobrantes fuera de las limitaciones previstas en dicho artículo, que dice así:

Los fondos de las compañías mercantiles por acciones no podrán distraerse de la caja social para negociaciones extrañas al objeto de su creación. Se permitirá únicamente aplicar los fondos sobrantes que existan en caja para descuentos ó préstamos cuyo plazo no podrá exceder de noventa días, dándose precisamente en garantía papel de la deuda consolidada.

Los administradores son directamente responsables de cualquiera cantidad de que dispusieren contraviniendo a estas disposiciones (el subrayado es nuestro).

Esta responsabilidad es solidaria (*son directamente responsables*) y, por otro lado, puede ser exigida por cualquier socio o tercero, así como por la Autoridad pública.

Un último aspecto que regula el Reglamento de 1848 sobre la responsabilidad del órgano de administración se refiere a la situación específica de las compañías constituidas con anterioridad a la promulgación de la Ley de 1848. Los artículos 39 a 44 establecen un conjunto de obligaciones de los administradores cuyo incumplimiento faculta a la Autoridad pública a actuar en sustitución de los administradores. Entendemos que, junto con esta competencia establecida con carácter expreso y específico por la Ley de 1848, la Autoridad pública podría exigir adicionalmente responsabilidad a dichos administradores por el incumplimiento de sus obligaciones relativas a la adaptación de la sociedad a la nueva regulación.

En relación a la responsabilidad de los administradores de sociedades constituidas antes de la promulgación de la Ley, cabe destacar, también, el artículo 41 del Reglamento de 1848, que establece que,

(l)as compañías que acordaren cesar en sus operaciones quedarán inhabilitadas desde la misma fecha de acuerdo para hacer nuevos negocios; y en caso de contravención, incurrirán los que lo hicieren en la responsabilidad y pena pecuniaria que se prescribe en el artículo 16 de la ley de 28 de Enero

Por lo tanto, aquellos administradores que iniciaren nuevos negocios una vez aprobada la disolución y liquidación de la sociedad, tendrán la misma responsabilidad que la regulada en el artículo 16 de la Ley de 1848, es decir, serán responsables solidarios de los perjuicios ocasionados por la nulidad de los contratos e incurrirán, además, en una multa de hasta 100.000 reales.

d) Resumen de la regulación de la responsabilidad

Una vez expuesta la regulación de la responsabilidad de los administradores, cabe realizar un breve resumen de la misma, combinando las disposiciones de los tres textos normativos (CCom 1829, Ley y Reglamento de 1848).

La idea más importante que interesa subrayar es que entre los diferentes sujetos ante quienes son responsables los administradores (Autoridad pública, sociedad, socios, terceros, etc.) la Ley y el Reglamento de 1848 se centran desproporcionadamente en uno: la Autoridad pública¹¹⁷⁹. Hay muy pocas referencias a la responsabilidad frente a la propia sociedad. Bien es cierto que el Reglamento de 1848 prevé un órgano social de vigilancia y control de los administradores, el cual debería ejercitar las correspondientes acciones de responsabilidad, aunque no hay ninguna mención en los textos normativos que detalle esta cuestión. Las referencias a los socios y terceros como sujetos legitimados para exigir responsabilidad a los administradores son muy escasas. Cabe pensar que esto se debe a que el Legislador de aquella época entendió que el régimen general de responsabilidad establecido por el Derecho civil o común era directamente aplicable a las reclamaciones de socios o terceros frente a los administradores de las compañías mercantiles¹¹⁸⁰.

Tras las precedentes consideraciones, se puede resumir el régimen de la responsabilidad de los administradores según el siguiente esquema.

¹¹⁷⁹ En las citas que se recogen en el siguiente apartado sobre las intervenciones en los debates parlamentarios en relación a la responsabilidad de los administradores, se constata que la preocupación básica y prioritaria de los intervinientes, tanto Diputados como Senadores, era hacer responsables a los administradores de las compañías por acciones frente a la Autoridad pública (Gobierno y Jefe Político). Sorprende el silencio, casi total, relativo a la protección de los terceros. Las menciones a los socios aparecen con más frecuencia.

Por otro lado, no se puede perder de vista que muchas compañías por acciones eran titulares de concesiones administrativas, cuyo fracaso suponía un perjuicio al Estado y a los intereses públicos.

¹¹⁸⁰ Así se ha expuesto en el capítulo sobre el concepto de compañías mercantiles por acciones en la época del CCom 1829 y de la Ley de 1848.

- ¿Ante quiénes son responsables los administradores?

Los administradores son responsables, en primer lugar, frente a la Autoridad pública (Gobierno y Jefe político). Ésta deberá velar por las garantías morales del órgano de administración¹¹⁸¹, inspeccionar constantemente su actuación pudiendo llegar a proponer la anulación o suspensión de la autorización de la sociedad¹¹⁸², comprobar la exactitud de las cuentas anuales formuladas por los administradores y aprobadas por la Junta General¹¹⁸³, e informar al Gobierno del estado anual de la sociedad, así como de cualquier acontecimiento en el órgano de administración que pueda alterar el cumplimiento de los estatutos¹¹⁸⁴.

En segundo lugar, son responsables ante al órgano de vigilancia¹¹⁸⁵ elegido por los accionistas en junta general, cuyas atribuciones y funcionamiento serán determinadas por los estatutos y reglamentos de cada compañía.

En tercer lugar, frente a los accionistas, debiendo velar por la seguridad de sus intereses, bajo la vigilancia de la Autoridad pública¹¹⁸⁶.

Por último, los administradores son responsables de los perjuicios ocasionados a terceros con quienes hayan celebrado contratos antes de la aprobación definitiva de la sociedad o, una vez autorizada, fuera del objeto social de la misma¹¹⁸⁷, así como de actuaciones contrarias a la seguridad de los intereses del público¹¹⁸⁸.

- Causas por las que se les puede exigir responsabilidad

Al órgano de administración se le puede exigir responsabilidad, en primer lugar, por las conductas contrarias a lo dispuesto en la Ley o en el Reglamento de 1848¹¹⁸⁹.

También por las actuaciones contrarias a los estatutos y demás reglamentos sociales¹¹⁹⁰.

Por último, son responsables por no ofrecer las garantías morales indispensables para la buena imagen de la sociedad y para velar por los intereses de los accionistas y del público¹¹⁹¹.

- Naturaleza de la responsabilidad

Cabe plantearse dos cuestiones al respecto: la naturaleza de la responsabilidad de los administradores (solidaria o subsidiaria) respecto a las deudas sociales y la

¹¹⁸¹ Artículo 13.4 del Reglamento de 1848.

¹¹⁸² Artículo 30 del Reglamento de 1848.

¹¹⁸³ Artículo 34 del Reglamento de 1848.

¹¹⁸⁴ Artículo 37 del Reglamento de 1848.

¹¹⁸⁵ Artículos 1.10 y 25 del Reglamento de 1848.

¹¹⁸⁶ Artículo 13.4 del Reglamento de 1848.

¹¹⁸⁷ Artículo 16 de la Ley de 1848.

¹¹⁸⁸ Artículo 13.4 del Reglamento de 1848.

¹¹⁸⁹ Artículo 17 de la Ley y artículos 30 y 40 del Reglamento de 1848.

¹¹⁹⁰ Artículo 277 del CCom 1829, artículo 16 de la Ley de 1848 y artículos 30 y 37 del Reglamento de 1848.

¹¹⁹¹ Artículo 13.4 del Reglamento de 1848.

responsabilidad interna de cada uno de los miembros del órgano de administración (solidaria entre sí o mancomunada) frente a los perjudicados por sus actuaciones.

Respecto a la primera, los textos normativos establecen una responsabilidad solidaria. Así, se determina la responsabilidad *solidaria* de los perjuicios ocasionados por la contratación realizada antes de la aprobación definitiva de la sociedad o fuera de su objeto social¹¹⁹², o posterior a la aprobación del cese de operaciones¹¹⁹³. Y, por último, se establece la responsabilidad *directa* por la disposición de cantidades depositadas en la caja social fuera de los límites establecidos en el artículo 31 del Reglamento de 1848.

En cuanto a la segunda, la norma general es la imputación de las consecuencias de las actuaciones ilícitas exclusivamente a los sujetos que las realizaron, sin presumirse responsabilidad solidaria entre todos los administradores¹¹⁹⁴. Así, por ejemplo, el artículo 16 de la Ley de 1848 habla de *los que contraten (...) serán solidariamente responsables...* No se refiere al órgano de administración en general, sino a los administradores concretos que realicen el acto ilícito.

En este sentido, es indicativa la evolución de la redacción del PL 1848. La primera versión del artículo 16 de la Ley de 1848 se corresponde con el artículo 9 del primer PL 1848, presentado por el Gobierno el 26 de febrero de 1847¹¹⁹⁵, que tenía el siguiente tenor:

Las sociedades por acciones no podrán extenderse a otras negociaciones que las que sean peculiares de su objeto o empresa, según estén determinados en sus estatutos o reglamentos.

Todo contrato hecho por sus gerentes contra esta disposición será de su cuenta particular, y considerándose como celebrado en sociedad colectiva de los administradores de la sociedad, quedarán responsables a sus resultas con sus bienes propios y mancomunadamente cuantos la tuvieren a su cargo, salva la repetición a que contra ellos haya lugar por parte de los accionistas como infractores de los estatutos y reglamentos sociales.

Lo determinado en este artículo no impide que cuando tuvieren fondos sobrantes puedan colocarlos en descuentos o préstamos (el subrayado es nuestro).

Este texto reconduce la responsabilidad de los administradores en el supuesto citado al régimen de las compañías colectivas¹¹⁹⁶, haciendo responsables de los perjuicios a todos los administradores, aunque no hubieran participado en el acto lesivo. Pues bien, esta versión fue sustituida por la redacción definitiva, transcrita

¹¹⁹² Artículo 16 de la Ley de 1848.

¹¹⁹³ Artículo 41 del Reglamento de 1848.

¹¹⁹⁴ Recuérdese, como se dijo en un epígrafe anterior, que los textos normativos no prevén expresamente el órgano de administración colegiado, aunque no lo prohíben y, de hecho, muchos funcionaron en consejos o juntas.

¹¹⁹⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, págs. 653 y 654.

¹¹⁹⁶ Esta remisión, de haberse aprobado, hubiera planteado importantes problemas de aplicación práctica, pues hubiera sido necesario detallar los criterios de atribución de responsabilidad a los administradores de las compañías por acciones en estos casos.

anteriormente, en la que sólo son responsables los que hayan participado en el negocio ilícito (*los que contraten...*). Por tanto, no se recoge una responsabilidad solidaria de todos los miembros del órgano de administración en esos supuestos, sino sólo de los autores del acto lesivo.

- Exoneración de la responsabilidad

Los textos normativos no recogen ninguna exoneración en particular que los administradores pudieran oponer ante una reclamación de responsabilidad. Era de aplicación el régimen general del Derecho común en cuanto a la exoneración de responsabilidad.

II. DEBATES PARLAMENTARIOS

Durante los debates del PL 1848, tanto en el Congreso como en el Senado, se hicieron frecuentes y constantes referencias a los administradores de las compañías mercantiles por acciones. El Legislador pretendió terminar con los actos lesivos de los administradores que originaron abusos y fraudes¹¹⁹⁷. La cuestión más tratada fue el control por la Autoridad pública de las actuaciones de los administradores, siempre en el marco de las condiciones establecidas en la autorización gubernativa o parlamentaria.

Se ha seleccionado un grupo de temas tratados por los Sres. Diputados y Senadores, que se exponen en los siguientes epígrafes.

A) VIGILANCIA Y CONTROL POR LA AUTORIDAD PÚBLICA

Esta cuestión es la más relevante y frecuente. En los epígrafes anteriores se han recogido varias intervenciones sobre las facultades de la Autoridad pública para vigilar y controlar las compañías por acciones. Cabe destacar ahora dos intervenciones que resumen la postura mayoritaria de los parlamentarios y las diferentes corrientes (algunas contrapuestas) sobre cómo concretar esta función de supervisión.

Ya desde la primera sesión en el Congreso de los Diputados se planteó el tema del control de los administradores. El autor de la intervención y de la enmienda fue D. Fermín Gonzalo Morón que pretendía obligar a todas las compañías anónimas a presentar un “estado de las operaciones” a la Autoridad competente con una periodicidad semestral. Dicha propuesta se basaba en varias razones. Por lo que aquí respecta, conviene destacar la siguiente parte de su intervención:

(...) una adición de esta naturaleza traería la ventaja, en primer lugar, de estimular el celo de los directores de estas compañías; después prevendría los abusos que pudieran introducirse en esta clase de sociedades, y por último daría lugar a que el Gobierno, el país y el comercio tuviesen una noticia exacta del

¹¹⁹⁷ Cabe recoger aquí, como botón de muestra, las siguientes palabras del Senador Sr. Moreno en la última sesión de los debates sobre el PL 1848:

... siendo el objeto de este proyecto poner el remedio posible a los males que han producido las Sociedades, y los que aún pueden producir por la mala organización de su administración (DsC. Senado. Sesión de 17 de enero de 1848, núm. 23, pág. 334).

objeto, importancia y éxito de las operaciones de estas compañías. Por esto desearía yo que la comisión admitiese, si es posible, esta adición¹¹⁹⁸ (el subrayado es nuestro).

Esta propuesta se basa sobre la desconfianza en la gestión de los administradores de la sociedad. Para evitar actuaciones ilícitas se pretende vigilar y controlar a la administración por la vía de rendir cuentas cada seis meses a la Autoridad pública correspondiente. La propuesta, que no prosperó, fue contestada, en primer lugar, por un miembro de la CCD, el Sr. Bertrán de Lis, que dijo:

La comisión no se opone enteramente a eso, pero lo cree muy grave y que debe dejarse para los reglamentos que el Gobierno forme para la ejecución de la ley, porque esto variará según la naturaleza de cada compañía. (...) Basta que las sociedades sepan que en adelante van a ser vigiladas por el Gobierno.¹¹⁹⁹

En segundo lugar, el Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Vaamonde, también intervino para oponerse a la enmienda del Diputado Sr. Gonzalo Morón en los siguientes términos:

Pero el Sr. Morón desea algo más. Desea S. S. que el Gobierno haya de recibir por medio de los jefes políticos o de sus agentes un estado cada seis meses, en el cual se haga ver cuál es la situación en que se encuentran los negocios de la sociedad. Esto, señores, es de mucha gravedad: no sólo no puede perderse de vista, como ha dicho el Sr. Bertrán de Lis, que esto sería demasiado inflexible en una ley y que no puede establecerse un principio de esta especie, sino que podría traer peligros e inconvenientes de otra especie. La sociedad antes de constituirse debe llenar todas las condiciones y garantías de solidez y de buena fe que se exijan por los reglamentos de esta ley.¹²⁰⁰

La segunda intervención que se recoge en cuanto a la supervisión de la Autoridad pública sobre las compañías por acciones, tuvo lugar en la sesión del 24 de diciembre de 1847 del Senado en la que se debatió, entre otros, el artículo 17 del PL 1848¹²⁰¹. Se presentó una enmienda a dicho artículo por los Senadores Sr. Pérez de Seoane y el Sr. Marqués de Vigo para concretar las facultades de inspección y control del Gobierno sobre las sociedades por acciones. A los efectos que aquí interesan, la modificación proponía introducir una mención en el texto de manera que se atribuyera expresamente al Gobierno la facultad de:

(n)ombrar visitador que examine los libros de la compañía y cuanto estime necesario para formar un juicio cabal de su estado.¹²⁰²

¹¹⁹⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1420.

¹¹⁹⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1422.

¹²⁰⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1423.

¹²⁰¹ Establecía el artículo 17 del PL 1848 de 18 de diciembre de 1847 lo siguiente:

El Gobierno, sin gravar fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías, ejercerá la inspección que conceptúe necesaria para afianzar la observancia estricta y constante de la presente ley.

¹²⁰² DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 294.

El objetivo fundamental de este visitador, según explicó después el Senador Sr. Pérez Seoane era *juzgar las operaciones de sus administradores*. El nombramiento del visitador debía recaer necesariamente en alguna de las siguientes personas:

*... en el jefe político, o en un individuo del Consejo Real, del Tribunal Supremo de Justicia, o del Tribunal de Comercio de Madrid, si la compañía se hallase domiciliada en la provincia de Madrid. Respecto a las domiciliadas en las demás del Reino, recaerá en el jefe político, o en un individuo del Consejo provincial, de la Audiencia del territorio o del Tribunal de Comercio respectivo.*¹²⁰³

El Ministro de CIOP, D. Juan Bravo Murillo, se opuso a esta propuesta por dos motivos. El primero, consistía en que la redacción propuesta por la CS favorecía más al Gobierno al no limitar sus facultades:

*El artículo del proyecto de ley, tal como se halla redactado, concede al Gobierno mucho más; porque el Sr. Pérez Seoane ha tratado de deslindar la facultad del Gobierno, y el artículo del proyecto le deja una facultad omnímoda y absoluta de hacer todo lo demás.*¹²⁰⁴

Y, el segundo motivo, se refería a que la propuesta entraba dentro del ámbito de un Reglamento de ejecución y no de una Ley:

*... las disposiciones contenidas en esa enmienda son puramente reglamentarias. Dice que el Gobierno puede nombrar los visitadores (...) que pueden serlo el jefe político, un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, o un individuo del Tribunal de comercio de Madrid; y me parece, señores, que si esto no corresponde a los reglamentos, no hay nada que pueda corresponderles. Me parece que la ley no debe descender a pormenores personales; al reglamento toca exponer las medidas convenientes para ejecutar aquella base, que está en la ley. Pero si pudiera descender a este pormenor, sería decir: el Gobierno nombrará un individuo del Supremo Tribunal de Justicia, un individuo del Tribunal de comercio; y esto, señores, sería ligar las manos al Gobierno, entorpecer sus facultades y cercenarle derechos consignados hasta por la Constitución, la cual le concede la facultad de dictar los reglamentos convenientes, con arreglo a las leyes. Por estas razones se opone al Gobierno a que se admita la enmienda del Sr. Seoane.*¹²⁰⁵

Al final, los Senadores proponentes de la enmienda la retiraron y el texto no se modificó, en aras a reforzar las facultades de inspección de la Autoridad pública.

B) AMOVILIDAD

Los comentarios más relevantes sobre la amovilidad de los administradores se realizaron en el Senado. Cabe destacar, en primer lugar, la intervención de Sáinz de Andino durante su discurso en el que atribuyó a los T. de c. gran parte de la

¹²⁰³ Ídem.

¹²⁰⁴ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 295.

¹²⁰⁵ Ídem.

responsabilidad del deterioro al que habían llegado las compañías anónimas. Entre las malas prácticas de estos Tribunales señaló el

*... haber consentido que los fundadores se reservasen la administración social por largos períodos de años, y aun en algunas Sociedades indefinidamente, sin embargo, de que por la naturaleza misma de estos contratos corresponde a la Junta general de accionistas nombrar las personas en quienes haya de recaer su representación y el manejo de sus intereses.*¹²⁰⁶

En la sesión del siguiente día, el 24 de diciembre de 1847, se debatió el artículo 18¹²⁰⁷ en relación, entre otras cuestiones, a la autorización de las sociedades ya existentes en ese momento. Uno de los Senadores que intervino fue el Marqués de Fuentes de Duero solicitando que la votación en las juntas para decidir si continuaban su actividad o se liquidaban, se hiciera por accionistas y no por acciones. En este marco, hizo la siguiente referencia a los administradores de las sociedades:

*Aquí está lo que digo. Señores, es menester conocer que los administradores de estas compañías tienen tendencia siempre a que continúen; y ya se ve, esto se comprende muy bien. Generalmente las compañías están dirigidas por personas muy aptas; y por más que los negocios no hayan salido tan bien como se desearía, el resultado es que todos confían mucho en su capacidad; ven inmediato el día que esto se arregle mejor, el día en que vendrán las utilidades; tienen también deseos de adquirir gloria en esta parte, continuando; mas no todos los accionistas participan de esta misma confianza.*¹²⁰⁸

La última referencia importante a la cuestión de la amovilidad tuvo lugar en esa misma sesión de Nochebuena de 1847 en el Senado. Se trata de un exponente de la preocupación que existía en aquel momento para combatir la práctica de muchas sociedades en las que, de hecho, los administradores no se podían cesar. El autor de la propuesta fue D. Antonio Guillermo Moreno. Pretendía añadir un nuevo artículo al PL 1848 en estos términos:

El abajo firmado tiene el honor de proponer al Senado el artículo siguiente, como aumento a los que contiene el proyecto de ley de Sociedades anónimas después del artículo 20:

Es condición indispensable para la Real aprobación de los estatutos de las Sociedades anónimas, que han de estar arregladas a la cláusula tercera del artículo 265 del Código de comercio, que exige que el manejo de aquellas ha de encargarse a mandatarios o administradores amovibles a voluntad de los

¹²⁰⁶ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 282.

¹²⁰⁷ Cuyo texto era el siguiente:

Las compañías por acciones formadas en la actualidad, y que no existan en virtud de autorización Real, solicitarán esta autorización dentro de dos meses, contados desde la publicación de esta ley, presentando al efecto sus escrituras estatutos y reglamentos. Antes de pedir la autorización, los gerentes o directores convocarán a junta general de accionistas, y sólo en el caso de que la mayoría de éstos, que se computará con arreglo a sus estatutos y reglamentos, acuerde la autorización de la compañía, se podrá hacer solicitud.

¹²⁰⁸ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 296.

*socios. Palacio del Senado, 24 de Diciembre de 1847. Antonio Guillermo Moreno.*¹²⁰⁹

Por su emplazamiento sistemático (después de los artículos 18 y 19) y el momento de la discusión, ha de entenderse referido el artículo a las compañías existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley de 1848. Estas sociedades necesitaban convocar una junta de socios para decidir si solicitaban o no la Real autorización. El Senador Sr. Moreno planteaba este nuevo artículo para que no se otorgara la Real autorización si no cumplían el requisito de tener unos administradores que, de hecho, se pudieran cambiar.

El artículo 265 CCom 1829 citado por el Senador proponente, regulaba los tres tipos de sociedades mercantiles y, en su apartado tercero, se recogían los requisitos básicos de las compañías anónimas. Uno de esos requisitos consistía en que los administradores fueran amovibles por los socios.

Pues bien, la propuesta fue admitida sin debate alguno por la CS (es la única vez que ocurre durante los debates de todo el articulado). Contestó su Presidente, Sáinz de Andino, en los siguientes términos:

*La Comisión admite la enmienda, no obstante que se trata en ella de una disposición general y común a toda clase de compañías; pero a fin de evitar toda duda, no tiene inconveniente en que se haga la aplicación de ese artículo a todas las Sociedades.*¹²¹⁰

Y la réplica del Senador Sr. Moreno fue de agradecimiento:

*Ya sé que el artículo 265 del Código de comercio abraza las tres clases de Sociedades que aquel reconoce; pero la cláusula tercera del mismo artículo trata exclusivamente de las Sociedades anónimas; y por este conocimiento he hecho la cita especial de la referida cláusula tercera, al proponer al Senado el artículo adicional que me ha hecho la honra de aprobar, y la Comisión, la se dispensarme de apoyarle como me faculta el Reglamento.*¹²¹¹

Acto seguido se sometió a votación el nuevo artículo y quedó aprobado.

Pero, en cambio, el Dictamen de la CMC-S de 11 de enero de 1848 no lo aceptó y desapareció del texto. Por este motivo, el Senador proponente, en la sesión del 17 de enero de 1848 en el Senado en la que se debatió el Dictamen de la CMC-S, una vez aclaradas unas cuestiones de procedimiento, pidió la palabra para insistir en que se recogiera su propuesta:

Señores, la circunstancia de haber presentado en la sesión del 24 de Diciembre un artículo adicional a la ley que ha sido discutida en el Congreso y en el Senado, el cual fue admitido por la Comisión, y aun por el Senado, dispensándome de apoyarle, me obliga a usar ahora de la palabra para

¹²⁰⁹ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 302.

¹²¹⁰ Ídem.

¹²¹¹ Ídem.

manifestar las razones que tuve para proponer dicha adición, y al efecto tengo que recordar al Senado los términos de la misma.(...)

La reforma que con la presente ley se quiere hacer sobre Sociedades anónimas, tiene precisamente que referirse al Código de comercio, que es la ley vigente. En este Código no se halla disposición alguna orgánica con relación a Sociedades anónimas sino en los artículos 265, 293 y 295.¹²¹²

Como se recordará, el nuevo artículo que había propuesto incluir en el texto hacía referencia al artículo 265.3 CCom 1829, que regulaba dos requisitos básicos de la compañía anónima: la condición de que el fondo de acciones se constituyese sólo para uno o varios objetos sociales; y, que los administradores nombrados fueran amovibles a voluntad de los socios. Dejando ahora a un lado el primer requisito relativo al objeto social, el Senador Sr. Moreno se refiere a la amovilidad de los administradores con las siguientes palabras:

Pero es notorio, señores, que las quejas generales contra las Sociedades anónimas han procedido de dos causas: una ha sido el abuso que se ha hecho de ese espíritu, malamente llamado de asociación, para el establecimiento de compañías que quizás no llevaban objeto alguno determinado sino la emisión de acciones; y la otra, la forma en que se han constituido la mayor parte de las administraciones de las mismas compañías, eludiendo el carácter de amovibles, a voluntad de los accionistas, que requiere la segunda parte de la cláusula tercera del citado artículo 265 del Código de comercio. Y si se suprime el artículo adicional que propuse, por creerlo innecesario, y aun se añade porque se refiere a una disposición vigente del Código de comercio, yo pregunto, después de lo que es notorio y dejo manifestado, si dicha disposición del Código de comercio está vigente; cuando la mayor parte de las Sociedades que se han establecido se han constituido sin administraciones, sin conformarse con la parte segunda de la cláusula tercera del artículo 265 del Código de comercio; lo que hace pensar que dicha cláusula no lo impedía; y como son notorios los males que de aquí han resultado, tuvo mi adición por objeto hacer preventiva aquella para que no se repitiesen en adelante.¹²¹³

Aunque esta discusión se produce en el marco de los artículos de la Ley de 1848 que se refieren a las compañías por acciones existentes antes de su entrada en vigor, cabe entender que la enmienda (que daba origen a un nuevo artículo de la Ley de 1848, que hubiera sido el último) se refería a todas las compañías, tanto las ya existentes como las que se autorizaran en el futuro conforme al nuevo marco normativo. Por eso, el Senador proponente plantea una cuestión de gran importancia: si el artículo 265.3 CCom 1829 está o no en vigor. Y, en caso de que lo estuviera, ¿se debería permitir la autorización Real a compañías que en la práctica no tienen administradores o es muy difícil removerlos? La omisión del texto de la Ley de 1848 debería ser subsanada:

... siendo el objeto de este proyecto poner el remedio posible a los males que han producido las Sociedades, y los que aún pueden producir por la mala organización de su administración, en mi juicio se conseguía mejor esto con mi adición, punto muy esencial que no se toca en el proyecto de ley; y que en la

¹²¹² DsC. Senado. Sesión de 17 de enero de 1848, núm. 23, pág. 333.

¹²¹³ DsC. Senado. Sesión de 17 de enero de 1848, núm. 23, pág. 334.

*duda de si es o no obligatoria la parte segunda de la cláusula tercera del artículo 265, porque, señores, es evidente que no se ha observado en distintas ocasiones, era necesario que al reformar la legislación vigente no quedase duda alguna sobre una parte de la misma tan importante.*¹²¹⁴

El Ministro de CIOP (D. Juan Bravo Murillo) le respondió¹²¹⁵ diciendo, en primer lugar, que no podía dudarse que el artículo 265 CCom 1829 estuviera en vigor:

*No puedo convenir en que ofrece duda el artículo 265 del Código de comercio: está, señores, tan vigente como lo están igualmente todos los demás del mismo Código, como lo están, en fin, todas las leyes que no han sido derogadas por otras posteriores; y el Sr. Moreno no puede desconocer, no negará que no existe ninguna ley posterior y contraria al Código de comercio; así, pues, dicho artículo tiene la misma, idéntica fuerza que cualquiera otro.*¹²¹⁶

Continuó el discurso del Sr. Ministro:

La segunda razón que ha aducido el Sr. Moreno, suponiendo vigente el artículo 265 del Código de comercio, es la de que hasta ahora no se ha observado, y que por consiguiente era preciso poner en la ley algo que fuera suficiente para evitar este abuso (...).

*Así, pues, aun cuando sea cierto que este artículo no se haya observado en ocasiones determinadas, creo que bastará la observación hecha por el Sr. Moreno para que tanto el Gobierno, como todos, pongan de su parte lo posible para que ese artículo del Código de comercio sea cumplido rigurosamente.*¹²¹⁷

Parece que la aplicación del artículo 265.3 CCom 1829 era confusa y, de hecho, existían compañías anónimas sin administradores o con administradores nombrados por los fundadores cuya remoción era bastante difícil. Esta situación es la que la Ley de 1848 quería evitar, si bien, como apuntaba el Senador Sr. Moreno, ningún precepto del PL 1848 recogía nada al respecto.

Pero el problema real para aceptar la enmienda era que en el momento de la tramitación parlamentaria en el que se encontraba el PL 1848, cualquier modificación, por mínima que fuese, suponía empezar de nuevo la tramitación¹²¹⁸. Por lo tanto, la respuesta hábil del Ministro pretende declarar que el artículo 265.3 CCom 1829 estaba en vigor, pero no acepta la enmienda, lo cual, aparentemente, puede parecer una contradicción.

En cualquier caso, intuyendo el Senador proponente que su enmienda no iba a prosperar porque supondría vaciar íntegramente el contenido del PL 1848 y empezar de nuevo su tramitación en las dos Cámaras Legislativas, propuso que se tuviera en cuenta al redactar el Reglamento de desarrollo de la Ley:

¹²¹⁴ Ídem.

¹²¹⁵ Nos parece interesante resaltar el silencio de Sáinz de Andino, Presidente de la CS, que aceptó sin ningún reparo la propuesta del Senador Sr. Moreno en la sesión de 24 de diciembre de 1847.

¹²¹⁶ DsC. Senado. Sesión de 17 de enero de 1848, núm. 23, pág. 334.

¹²¹⁷ DsC. Senado. Sesión de 17 de enero de 1848, núm. 23, págs. 334 y 335.

¹²¹⁸ Véase el capítulo sobre la formación y tramitación de la Ley de 1848.

*Bien sé que se me dirá que mi adición puede remitirse a la parte reglamentaria; más diré, que espero así se hará, porque creo que el Gobierno de su Majestad no desconocerá las razones poderosas que para ello hay; pero sin embargo, me parece que sería más conveniente que apareciese en el proyecto de ley.*¹²¹⁹

Y, efectivamente así fue, pues aunque su enmienda fue rechazada, el artículo 27 del Reglamento de 1848 se redactó de la siguiente manera: *Según está declarado en el artículo 265 del Código de comercio, los administradores de las sociedades por acciones, siendo anónimas, son amovibles a voluntad de los socios, mediando justas causas de separación, con arreglo a derecho o a lo que sobre la materia estuviere establecido en los estatutos de la sociedad.*

C) ACCIONES DEPOSITADAS EN GARANTÍA DEL EJERCICIO DEL CARGO

Las intervenciones sobre esta materia se producen en la sesión del 24 de diciembre de 1847 al debatir la redacción del artículo 13 del PL 1848 elaborado por la CS¹²²⁰. La primera enmienda que se planteó se refería a la formalidad concreta de la emisión de estas acciones (*cuyos títulos han de extenderse en papel y forma especiales*). Aunque la mayor parte de los debates se centraron en este aspecto, son interesantes algunas intervenciones en relación a la situación de los administradores.

El autor de la primera enmienda fue el Senador Sr. Moreno:

El abajo firmado tiene el honor de proponer al Senado, que en lugar del artículo 13 del proyecto de ley de Sociedades anónimas, se adopte la redacción siguiente:

Artículo 13. Los directores o administradores de cada compañía deberán poseer, mientras ejerzan sus cargos, un número fijo de acciones determinado en los estatutos, cuyos títulos se conservarán en depósito en el punto y forma que en aquellos se designe.

*Palacio del Senado, 24 de Diciembre de 1847. Antonio Guillermo Moreno.*¹²²¹

La CS emitió un Dictamen oponiéndose a la iniciativa en los siguientes términos:

La Comisión ha examinado la modificación del artículo 13, presentada por el Sr. D. Antonio Guillermo Moreno; y como la única variación esencial consiste en omitir la circunstancia de que las acciones que habrán de tener los gerentes, directores o administradores de cada compañía hayan de extenderse en papel y forma especiales, la Comisión encuentra que esta disposición únicamente podrá ofrecer algún gasto leve en la confección de las láminas; pero en cambio, asegura más eficazmente la observancia en esta ley y las precauciones que en

¹²¹⁹ DsC. Senado. Sesión de 17 de enero de 1848, núm. 23, pág. 334.

¹²²⁰ El texto del artículo 13 del PL 1848 redactado por la CS el 18 de diciembre de 1847 era:

Los gerentes o directores de cada compañía deberán tener en depósito, mientras ejerzan sus cargos, un número fijo de acciones, cuyos títulos han de extenderse en papel y forma especiales.

¹²²¹ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 294.

interés de los mismos accionistas establece. Más fácil será el depósito de tales acciones, y su negociación se hará imposible teniendo, como deben tener, un tipo especial que determine su origen y la aplicación durante el periodo prefijado para el ejercicio de los cargos de aquellos funcionarios.

La Comisión, en su consecuencia, no puede admitir la modificación propuesta por el Sr. Moreno, y propone que el Senado se sirva aprobar el artículo 13 conforme se halla en el proyecto de ley.

Palacio del Senado, 24 de Diciembre de 1847. Sáinz de Andino. Pérez. Juan María Pérez. Acebal y Arratia.¹²²²

En relación al número de acciones o porcentaje respecto al capital social, no hay una cifra o recomendación concreta. Parece que en la práctica no era una cantidad relevante, según expuso el Sr. Marqués de Montevirgen, que participó en el debate:

... porque es imposible que se cometa un fraude siendo corto el número de acciones que existan en depósito¹²²³ (el subrayado es nuestro).

Con independencia de si el número de estas acciones en garantía debía ser elevado o reducido, el Marqués de Montevirgen aprovechó su intervención para plantear la otra enmienda a la redacción del artículo 13. Su propuesta se refirió a fijar el número o porcentaje de acciones de los administradores en depósito:

... desearía yo que este número se determinase, y que se determinase con respecto al capital social de la compañía. Sin embargo, si ésta es cuestión de reglamento, la abandono enteramente; si no lo es, me parece que sería conveniente que la ley fijase la cantidad, el mínimum de acciones que deben ponerse en depósito al tiempo de instituirse la Sociedad. He manifestado a la Comisión mi pensamiento; lo he visto también indicado en la propuesta del Sr. Moreno: si la Comisión cree que puede ser bueno para la ley, estoy conforme; y si no lo hace, con el fin de que se exprese en el reglamento, lo estoy también.¹²²⁴

Al terminar su intervención, se puso a votación la redacción del artículo 13 y se aprobó la redacción inicial propuesta por la CS. No se recogieron ninguna de las dos enmiendas. En relación a la del Marqués de Montevirgen, tampoco se fijó en el Reglamento de 1848 la cuantía o proporción de estas acciones, pues prefirió el Gobierno dejarlo a la voluntad de los accionistas reflejada en los estatutos de la sociedad¹²²⁵.

Otro aspecto que trató el Senador Sr. Moreno en su enmienda fue la transmisión de estas acciones especiales. Su objetivo era aligerar de formalidades a dichas acciones, especialmente desde que en la sesión del día anterior (23 de diciembre de 1847) se

¹²²² DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 302.

¹²²³ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 303. El Marqués Montevirgen en ese momento estaba apoyando la enmienda presentada por el Senador Sr. Moreno transcrita un poco antes.

¹²²⁴ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 304.

¹²²⁵ Establecía el artículo 29 del Reglamento de 1848:

Dentro de los quince días siguientes al en que se hubiere declarado constituida la compañía, acreditarán los administradores ante el Jefe político haber hecho del depósito efectivo de las acciones con que deben garantizar su gerencia en la cantidad determinada en los estatutos, y conforme a lo prescrito en el artículo 13 de la ley de 28 de enero.

prohibieron las acciones al portador. Si las acciones sólo podían ser nominativas, no era necesario extenderlas *en papel y forma especiales*.

Pero el Ministro de CIOP, Sr. Bravo Murillo, se opuso a la propuesta para evitar que se repitieran los abusos cometidos por los administradores con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 1848. Éste es su análisis del texto propuesto por la CS:

*El artículo tal como se halla redactado exige dos garantías para que las acciones que tengan en depósito los presidentes o directores no puedan dejar de existir en depósito, ni puedan pasar a otras manos: las dos garantías que exige el artículo tal como se halla, son las siguientes; una que las acciones estén en depósito, y otra que tengan un papel especial. Al Sr. D. Antonio Guillermo Moreno le parece que basta una garantía, la de decir que las acciones están en depósito; a la Comisión le ha parecido que las dos convenían, la cuestión está reducida a si una es bastante, o no lo es.*¹²²⁶

De estas palabras se deduce que en algunas ocasiones los administradores habían vendido fraudulentamente a terceros las acciones que debían mantener en depósito como garantía del ejercicio del cargo. Y por esto el Senado al final aprobó que permanecieran las dos garantías: el depósito de las acciones y su emisión en papel y forma especiales.

D) CONFLICTOS DE INTERESES

La Ley de 1848 no hace referencia expresa a los conflictos de intereses de los administradores con la sociedad, aunque en varios artículos el Legislador trata de evitar, entre otras cuestiones, dichos conflictos. En este sentido, algunas intervenciones de los parlamentarios se refieren a circunstancias concretas en las que los administradores pueden buscar su interés personal antes que el interés social. De entre todas ellas, se va a seleccionar dos intervenciones, ambas realizadas en el Congreso de los Diputados el 21 de abril de 1847.

La primera, tuvo lugar tras dar lectura al artículo 7 del PL 1848, referente a la necesidad de haber suscrito, al menos, la mitad del capital social en el momento de presentar la solicitud de autorización¹²²⁷. El Diputado Sr. Mendizábal propone que esa cifra se reduzca al 25 %. Su discurso contenía una interesante referencia a la situación de conflicto de intereses de los administradores con la sociedad. Al tratar de justificar por qué proponía rebajar el mínimo de capital suscrito en el momento de solicitar la autorización, decía:

(s)on muchas las compañías en que conviene hacer un ensayo, y para esto es bastante perder un 25%; porque de quedar esto al arbitrio de los directores, el amor propio de éstos puede llevarlos hasta el punto de comprometer sus intereses juntamente con los de la compañía (el subrayado es nuestro).

¹²²⁶ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, págs. 302 y 303.

¹²²⁷ Decía así el artículo 7 del PL 1848 redactado por la CCD (16 de abril de 1847):

No se dará curso a la solicitud cuando de los pedidos de acciones no conste la suscripción de una mitad por lo menos del capital de la compañía.

Y vuelve a repetir:

Yo creo que el que se suscribe [el capital] no quiere sujetarse a lo que decida la mayoría ni a lo que el amor propio de los directores pudiera pretender, queriendo llevar adelante las operaciones, si algunos de los socios no se dan por satisfechos con los primeros ensayos que se hagan¹²²⁸ (el subrayado es nuestro).

La segunda, tuvo por autor al Diputado Sr. D. Juan José Fuentes, en relación al artículo 12 (que regulaba la emisión de títulos de acciones, tanto nominativas como al portador)¹²²⁹, en la que tangencialmente se aborda la situación de los administradores en relación a las “acciones de reserva” o al “fondo de reserva”. Dice así el Diputado Sr. Fuentes:

Uno de los inconvenientes de las sociedades anónimas son las acciones de reserva, y veo que sobre esto no se ha tomado ninguna precaución. La mayor parte de las sociedades emiten las dos terceras partes de las acciones y se reservan la otra tercera parte para emitir las cuando lleguen a tomar valor. Aquí es donde puede entrar el agio, y para evitarle creo que sería conveniente tomar alguna precaución respecto de estas acciones de reserva. Yo no quisiera que las compañías especularan más que con los objetos a que se dedican, no por este medio. Por consecuencia, creo que falta alguna cosa que añadir en este artículo respecto de esas acciones de reserva.¹²³⁰

Como se puede comprobar, en la propuesta no se hace mención a los administradores. El Diputado Sr. Bertrán de Lis, miembro de la CCD, se opone a la enmienda porque no le parece oportuno que se regulen las acciones de reserva. Ofrece dos razones, de las cuales sólo la segunda interesa a los efectos de lo que se está comentado ahora. Expone el Sr. Bertrán de Lis:

En segundo lugar, como he insinuado, sería ineficaz, porque si no se permitía que hubiese ese fondo de reserva no faltarían a los directores de las compañías medios para conservar o tomar en nombre suyo acciones que, con cualquier otro nombre, en realidad fuesen de reserva. Por esto, pues, la comisión ha creído que para huir de estos dos extremos, lo conveniente era dejar establecido que pudiese haber ese fondo de reserva a juicio de las mismas compañías¹²³¹ (el subrayado es nuestro).

Las acciones de reserva, como dijo en su propuesta el Diputado Sr. Fuentes, constituían una práctica frecuente en las compañías por acciones, según la cual un tercio del capital social no se emitía hasta que se hubiera constatado que el objeto social era

¹²²⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1464.

¹²²⁹ El artículo 12 del PL 1848 establecía:

Hasta que se haya declarado constituida la compañía no se podrá emitir ningún título de acción. Las acciones en que se divida el capital de la compañía estarán numeradas según nominales en sus dos terceras partes a lo menos. No podrá emitirse ninguna al portador sin que previamente se haya entregado su importe total en la caja de la compañía

Como se recordará, las acciones al portador fueron suprimidas en el paso del PL 1848 por el Senado. Por este motivo, el texto final de la Ley sólo contempla las acciones nominativas.

¹²³⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1465.

¹²³¹ Ídem.

viable y se hubiera empezado la actividad de la sociedad. Esto podía dar origen a especulaciones y manipulaciones de la cotización y colocación de los títulos de acciones entre los inversores. Muy probablemente el origen de esas especulaciones estaba en los administradores. La CCD, aun siendo partícipe de la preocupación del Diputado proponente, no veía fácil controlar esta práctica de algunos administradores. Éstos podrían obtener un lucro personal directo o indirecto por la colocación de esas acciones de reserva, una vez comprobado que la sociedad comienza a cumplir sus planes.

E) RESPONSABILIDAD POR CONDUCTAS CONCRETAS

En relación a la responsabilidad de los administradores, los Diputados y Senadores no se plantean la elaboración de un sistema especial que se aplique a las compañías por acciones. El Legislador pretende que la Autoridad pública sea titular de unas facultades de control y vigilancia casi totales, siendo, por tanto, los administradores responsables frente a esta Autoridad de forma directa y constante.

Cabe destacar algunas menciones expresas a la responsabilidad de la administración social en los casos que se comentan a continuación.

1. Utilización de fondos sobrantes

El artículo 9 del PL 1848 presentado por el Gobierno a las Cortes el 26 de febrero de 1847, establecía que las compañías por acciones sólo podían dedicarse al objeto social autorizado y, en consecuencia, se hacían responsables, entre otros, a los administradores, por el incumplimiento de esta disposición¹²³². En su párrafo final establecía:

Lo determinado en este artículo no impide que cuando tuvieren fondos sobrantes puedan colocarlos en descuentos o préstamos.

Este artículo fue trasladado al número 16, modificada su redacción y suprimido el último párrafo, en el PL 1848 presentado por la CCD el 16 de abril de 1847¹²³³. En la

¹²³² Este era el texto del citado artículo 9 del PL 1848 (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, pág. 654):

Las sociedades por acciones no podrán extenderse a otras negociaciones que las que sean peculiares de su objeto o empresa, según estén determinados en sus estatutos o reglamentos.

Todo contrato hecho por sus gerentes contra esta disposición será de su cuenta particular, y considerándose como celebrado en sociedad colectiva de los administradores de la sociedad, quedarán responsables a sus resultas con sus bienes propios y mancomunadamente cuantos la tuvieren a su cargo, salva la repetición a que contra ellos haya lugar por parte de los accionistas como infractores de los estatutos y reglamentos sociales.

Lo determinado en este artículo no impide que cuando tuvieren fondos sobrantes puedan colocarlos en descuentos o préstamos.

¹²³³ El texto del artículo 16 del PL 1848 presentado por la Comisión del Congreso el 16 de abril de 1847 era el siguiente:

Los que contraten a nombre de compañías que no se hallen establecidas legalmente, serán solidariamente responsables de todos los perjuicios que por la nulidad de los contratos se irroguen a los interesados, e incurrirán además en una multa que no excederá de 100.000 rs.

En igual responsabilidad incurrirán los que a nombre de una compañía, aun legalmente constituida, se extiendan a otras negociaciones que las de su objeto o empresa, según esté determinado en sus estatutos y reglamentos.

sesión en la que se debatió la redacción del artículo 16, el Diputado Sr. Fuentes solicitó a la CCD que aclarara si la supresión del último párrafo había sido un olvido o era consecuencia de la postura de la CCD de impedir la colocación de los fondos sobrantes. Esta es la transcripción de sus palabras:

*Yo creo que habrá sido porque no considere necesario decir que los fondos sobrantes puedan emplearlos las compañías en descuentos y préstamos; pero si lo hubiese suprimido con estudio, no puedo menos de hacerlo presente, porque podría perjudicar a las sociedades que se hallan en el caso de tener sobrantes, y por esto quisiera yo que se aclarase este punto.*¹²³⁴

Efectivamente, fue oportuna su solicitud, porque la supresión del párrafo que contenía la propuesta del Gobierno no fue un olvido. La rentabilización del “sobrante” mediante descuento o préstamo no formaba parte del objeto social autorizado y, por tanto, la CCD prohibía que la sociedad, a través de sus administradores pudiera disponer de esas cantidades. En algún caso, los administradores perdieron el exceso de tesorería de la sociedad al realizar una mala inversión o colocación del sobrante y, como consecuencia de ello, la compañía no pudo acometer el objeto social para el que se constituyó, causando un grave perjuicio a sus accionistas.

La justificación de la postura de la CCD la puso de manifiesto el Diputado Sr. Ríos Rosas:

*Si el artículo que se discute se redactase como dice el Sr. Fuentes, estaría en contradicción con otro anterior, en el cual se previene que las compañías no se establezcan sino para objetos determinados. Esta es la razón por la que no se puede admitir la enmienda que S. S. desea, enmienda que estaba en el artículo del Gobierno, pero que la Comisión no ha creído conveniente conservar. La Comisión ha creído que sería peligroso establecer en la ley que las sociedades pudieran destinar los fondos sobrantes a otros objetos que para los que han sido creadas; la Comisión ha creído que esto debe dejarse al arbitrio del Gobierno, el cual, considerando las condiciones particulares de cada compañía, su objeto y otra porción de circunstancias fugaces y variables, podrá o no autorizar a las compañías a que dispongan de sus fondos distrayéndolos del objeto de su escritura social.*¹²³⁵

Con estas explicaciones se matiza la postura de la CCD en el sentido de que, ante todo, pretende mantener el principio de que la compañía por acciones sólo puede desarrollar exclusivamente su objeto social autorizado. Cuestión distinta es que al tramitar la autorización de la compañía, se pudiera solicitar al Gobierno, por las razones que se estimaran oportunas, utilizar el “sobrante” para darle una rentabilidad. El Gobierno, una vez estudiada la propuesta, podrá permitir que los administradores descuenten o entreguen en préstamos los fondos sobrantes.

Estas consideraciones conectan directamente con el artículo 31 del Reglamento de 1848, que dispone:

Como se puede comprobar, la redacción se modifica sustancialmente y desaparece el último párrafo del artículo 9 del PL 1848 anterior.

¹²³⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1467.

¹²³⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1467.

Los fondos de las compañías mercantiles por acciones no podrán distraerse de la caja social para negociaciones extrañas al objeto de su creación. Se permitirá únicamente aplicar los fondos sobrantes que existan en caja para descuentos o préstamos cuyo plazo no podrá exceder de noventa días, dándose precisamente en garantía papel de la deuda consolidada.

Los administradores son directamente responsables de cualquiera cantidad de que dispusieren contraviniendo a estas disposiciones.

Y, de nuevo, cabe manifestar nuestra opinión sobre la ilegalidad de parte del contenido de este artículo, dado que está autorizando con carácter general la utilización del sobrante de la caja a cualquier compañía con independencia de sus condiciones particulares, objeto social, etc., como afirmaba el Sr. Ríos Rosas interpretando el contenido del artículo 16 del PL 1848, que luego pasó al texto final de la Ley de 1848. El texto reglamentario permitió descontar o prestar por un plazo inferior a noventa días, recibiendo en garantía *papel de la deuda consolidada*, que dependía del Gobierno. El Reglamento de 1848 (norma inferior) manipuló el contenido de la Ley de 1848 (norma superior).

A la vez, interesa destacar, a los efectos de lo que se está comentando, el último párrafo que declara a los administradores directamente responsables del incumplimiento de esta obligación.

2. Las promesas de acciones y la transmisión de acciones

En la segunda sesión en la que se debatió el PL 1848 en el Senado, Sáinz de Andino, Presidente de la CS, en un largo discurso trató de explicar que la crisis a la que habían llegado las compañías anónimas se debía a la incorrecta aplicación del CCom 1829 por parte de los T. de c.

En este sentido, enumeró varios aspectos de estas compañías, que el CCom 1829 encomendó a los T. de c. y que éstos no aplicaron adecuadamente. Uno de esos aspectos se refiere a la responsabilidad de los administradores de las sociedades en relación a las promesas de acciones. Así lo expresó Sáinz de Andino:

Para asegurar que el capital de estas Sociedades fuese cierto y efectivo, y no ilusorio ni ficticio, se prescribió en el artículo 281 del mismo Código que los títulos de las acciones no podrían emitirse por valores prometidos, sino por los que se hubiesen hecho efectivos en la caja social antes de su emisión, declarándose además que los administradores de la Sociedad que autorizaran estos títulos sin que constara de los libros la entrega del valor que representarían, responderían de su importe a los fondos de la compañía, y a todos los interesados en ella¹²³⁶ (el subrayado es nuestro).

Las promesas de acciones fueron suprimidas por la Ley de 1848, que estableció la formalización del compromiso de ser accionista mediante la suscripción de acciones

¹²³⁶ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 282.

por parte de los otorgantes de la escritura fundacional o, por las cartas de pedido de acciones¹²³⁷.

La responsabilidad de los administradores en la transmisión de acciones y anotación en el libro correspondiente aparece mencionada también en otra intervención de Sáinz de Andino, en este caso sobre las acciones al portador. Esta clase de acciones fue objeto de un extenso debate en el Senado, de manera que la mayoría aprobó una modificación muy importante del texto presentado por la CS en el sentido de prohibir la emisión de acciones al portador en las compañías por acciones.

Sáinz de Andino, Presidente de la CS, fue uno de los que más se opuso a la enmienda aduciendo diversas razones. Una de ellas fue comparar la facilidad de transmisión de las acciones al portador respecto a las acciones nominativas, en las que los administradores adquirirían una responsabilidad. Estas fueron sus palabras:

*... debe añadirse la consideración de que ejecutándose la enajenación de las acciones representadas en títulos al portador por la simple entrega de los títulos, la sociedad se preserva, no solo de las embarazosas formalidades con que deba hacerse la trasmisión de las acciones nominales, sino también de la responsabilidad que contrae la administración social en la legalidad de estos actos, teniendo muchas veces que intervenir en las cuestiones que se mueven sobre su validación*¹²³⁸ (el subrayado es nuestro).

Los administradores eran, por tanto, responsables de los perjuicios que pudieran causar con motivo de las transferencias de acciones nominativas que, como se ha dicho, eran las que componían la totalidad del capital social.

III. DOCTRINA DE LA ÉPOCA

La mayor parte de los comentaristas del periodo en que estuvieron en vigor el CCom 1829 y la Ley de 1848 se limitaron a transcribir o parafrasear el contenido de los artículos de ambos textos normativos relativos a la administración de las compañías por acciones. Así, LASO¹²³⁹, AVECILLA¹²⁴⁰, BIEC y VICENTE CARAVANTES¹²⁴¹ y GÓMEZ DE LA SERNA y REUS Y GARCÍA¹²⁴².

Cabe señalar dos aportaciones doctrinales relevantes. Una de 1859, en el “paso del Ecuador” de la vigencia de la Ley y del Reglamento de 1848. Y, otra, de 1875, posterior a la derogación de los textos normativos del 48.

¹²³⁷ Como se recordará, estas cartas de pedido de acciones son vinculantes para quienes las suscriben, diferenciándose radicalmente de la promesa de suscribir acciones.

¹²³⁸ DsC. Senado. 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 284.

¹²³⁹ LASO, E. (1849): *Elementos del Derecho mercantil* ..., págs. 22 y ss., con escasas aportaciones del autor.

¹²⁴⁰ AVECILLA, P. (1849): *Diccionario de la legislación mercantil* ..., págs. 99 y ss.

¹²⁴¹ BIEC, J. M. Y VICENTE CARAVANTES, J. (1851): *Suplemento al Diccionario razonado de legislación* ..., págs. 617 y ss. (Epígrafe II. *Deberes de los socios, gerentes y administradores*).

¹²⁴² GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio* ..., págs. 102 y ss.

En primer lugar, destaca la contribución de GONZÁLEZ HUEBRA¹²⁴³, que no se limita a parafrasear el texto de los artículos de las disposiciones normativas, sino que elabora una construcción sistemática del régimen de los administradores. Por su interés se va a recoger la cita casi íntegramente, aunque, por un lado, ya se han citado fragmentos en ocasiones anteriores y, por otro, tenga una larga extensión. Pensamos que ofrece un resumen excelente de los temas más relevantes para los juristas de la época. El texto, como se apuntaba en el párrafo anterior, es de 1859, 11 años después de la promulgación de la Ley de 1848 y 9 años antes de su derogación. GONZÁLEZ HUEBRA se centra en la administración definitiva:

... tienen atribuciones y derechos que ejercer, obligaciones y prohibiciones que cumplir, y responsabilidades por sus faltas. Las atribuciones se reducen a:

Dirigir y desempeñar los asuntos de la sociedad y sus derechos.

A percibir la retribución que les esté asignada, que podrá consistir en un sueldo fijo, o en una parte de las utilidades, o en las dos cosas juntas.

Sus obligaciones son:

1ª. Dar principio a las operaciones que ha de hacer la sociedad dentro del plazo que se señale, cuando se declare constituida.

2ª. Atemperarse al régimen general establecido en la escritura, y a lo que esté prevenido en los reglamentos para dirección particular de cada negocio.

3ª. Concurrir a la apreciación de los efectos de la industria, o el trabajo que pongan los socios como capital cuando no consista en dinero.

4ª. Reclamar de los morosos la parte que deban poner en fondo, procediendo contra ellos: por cualquiera de los medios que dejamos indicados.

5ª. Expedir los títulos de las acciones cuando no se conceda a otros esta facultad.

6ª. Llevar con la formalidad debida los libros de la sociedad.

7ª. Inscribir en el registro las acciones que se expidan con el nombre de la persona a quien correspondan.

8ª. Inscribir también las trasferencias o cesiones que se hagan de ellas, expresando la responsabilidad subsidiaria en que queda el cedente si no es efectiva por el todo.

9ª. Depositar en garantía de su administración dentro de los quince días siguientes al de haber sido nombrados, el número fijo de acciones que se designe en los estatutos, extendidas en el papel y en la forma especial que se halle establecida.

¹²⁴³ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil* ..., págs. 161 a 164.

10ª. Formar en las épocas acordadas o al menos todos los años, el balance general, en que se comprendan todas las operaciones hechas durante él, sus resultados y el estado del activo y el pasivo de la sociedad.

Las prohibiciones se limitan:

- 1. A disponer de los fondos en beneficio propio.*
- 2. A expedir billetes, pagarés, abonarés, ni ningún otro documento al portador, sin que la ley autorice a la compañía para emitirlos.*
- 3. A hacer en nombre de ésta negocios extraños al objeto con que se ha formado.*

Como en estas sociedades sólo el fondo social y el de reserva son los que garantizan el resultado de los negocios, los administradores no responden bajo tal concepto a los extraños con quienes contratan, sino únicamente a la sociedad, cuando no han desempeñado bien su encargo.

Su responsabilidad se reduce a la indemnización de daños y perjuicios, y la contraen siempre que faltan al cumplimiento de sus obligaciones o infringen las prohibiciones que dejamos expresadas; pero hay casos en los que incurren además en otras penas, que son:

- 1. Si expiden billetes u otros documentos al portador, en el que se les puede imponer una multa que llegue hasta 50,000reales.*
- 2. Si hacen por cuenta de la sociedad negocios extraños a su objeto, en el que puede llegar dicha multa hasta, 100,000 reales, según la gravedad de la falta.*
- 3. Si cometen dolo o fraude en el manejo y dirección de los negocios, en el que quedan sujetos a la formación de causa.*

Para que no se haga ilusoria, apareciendo insolvente, se exige el depósito de las acciones, de que antes hemos hablado; pero como es mejor impedir los males que tener que remediarlos, se ha establecido además una doble inspección que mire por los intereses de la sociedad, y cuide de la observancia de la ley, de los estatutos y de los reglamentos.

La primera se pone a cargo de las personas que nombra la Junta general, al mismo tiempo que los administradores, para que vigilen su administración, y ejerzan las demás atribuciones que se les confieran.

La segunda corresponde al Gobierno, que puede ejercer la que conceptúe necesaria, sin entorpecer el curso de los negocios; y usando de ella comprueba y publica los balances, examina el estado de la compañía y su régimen directivo y administrativo, suspende y anula la autorización si se falta al cumplimiento de

las disposiciones legales o a sus estatutos y procede criminalmente contra los culpables si se ha cometido algún delito.

Esta inspección la ejerce por medio de los Gobernadores civiles y delegados especiales.

La segunda aportación doctrinal sobre los administradores de las compañías por acciones es de MARTÍ DE EIXALÁ¹²⁴⁴. Se trata de una publicación de 1875, 8 años posterior a la derogación de la Ley y del Reglamento de 1848. Aunque en el presente trabajo las referencias a la Doctrina se centran fundamentalmente en las publicaciones aparecidas durante la vigencia de la Ley de 1848, cabe citar algunas ideas de este autor que reflejan la transición a postulados más modernos, en el contexto del sistema más liberal y flexible del CCom 1829, al que se volvió con la derogación de la Ley de 1848.

Para este autor, en las compañías anónimas *ninguno de los socios, por esta mera calidad, tiene derecho a la administración*. El patrimonio social es responsable de las obligaciones contraídas por los representantes legítimos, siempre que hubieran obrado según lo dispuesto en los estatutos y reglamentos sociales. Los administradores son amovibles por los socios, siempre por justa causa, según derecho y lo dispuesto en los estatutos.

Cabe destacar que considera a los administradores de estas sociedades factores, conforme a la regulación que de ellos hace el CCom 1829 (artículos 173 y ss.).

También señala que la obligación de tener en depósito un cierto número de acciones, como garantía de su administración, siguió observándose una vez derogada la Ley de 1848, instaurándose la costumbre de que el administrador saliente cedía al entrante sus acciones en depósito.

En relación a la inspección y vigilancia de las compañías por acciones, describe los sujetos encargados y los procedimientos. Cabe destacar que en su exposición se refiere a la distribución de la inspección entre los socios y el Gobierno. Ha desaparecido el órgano de control societario. Pero más adelante hace una interesante referencia a dicho órgano. Estas son sus palabras:

La administración de las sociedades mercantiles por acciones, sean comanditarias, sean anónimas, está sujeta a una doble inspección, la de los socios y la del Gobierno, porque hay un doble interés en su pureza, acierto y regularidad: el de los que han aportado sus capitales para hacer un lucro en común, que es de orden privado; y el de que no se comprometan los intereses generales relacionados con las sociedades anónimas, aunque hoy no estén como antes bajo la garantía del Gobierno, que es de orden público.

*Atribúyela a los primeros el artículo 309 del Código de comercio, aunque limitando el derecho de examen e investigación sobre la administración social a las épocas y forma que prescriben los contratos y reglamentos de cada compañía*¹²⁴⁵.

¹²⁴⁴ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil* ..., págs. 278 a 280.

¹²⁴⁵ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil* ..., págs. 279 y 280.

Y respecto al órgano societario de control expone que,

(e)n las escrituras de fundación de la sociedad deben determinarse la forma del nombramiento y las atribuciones de los que tengan a su cargo inspeccionar las operaciones de la administración, y en la práctica suele exigirse también a los nombrados para esta inspección el depósito de cierto número de acciones, y señalárseles una retribución en la misma forma, aunque en menor cantidad, que a los administradores; pero debe tenerse presente, al fijar las atribuciones que se quieran conceder a las juntas de inspección o vigilancia, la prohibición del artículo 272¹²⁴⁶ del Código de comercio que determina la naturaleza y límite de las mismas.

Por último, MARTÍ DE EIXALÁ recoge una interesante consideración sobre las competencias de la junta y de la administración, así como de sus límites recíprocos. Enmarca las facultades del órgano de administración dentro de lo dispuesto por la ley y los estatutos y reglamentos sociales. Pero se plantea que,

es necesario que exista una entidad capaz de suplir lo que la ley prohíbe a los administradores o la escritura de fundación no les concede explícita o implícitamente. Por esta razón, la Junta general de accionistas, legalmente reunida, debe tomar parte en la gestión social, sea ejerciendo las facultades que se haya reservado en la escritura de fundación (...), sea dictando reglas a los administradores para la gestión de los intereses sociales, sea acordando sobre todo lo que en los estatutos y reglamentos no estuviese provisto.¹²⁴⁷

Cabe recordar, como se ha expuesto anteriormente, que la elaboración del concepto técnico de “órgano social” se realiza a finales del siglo XIX en el marco del Derecho público. Es comprensible, por tanto, que las palabras citadas no diferencien las competencias del órgano de administración y de la junta general, afirmando, por ejemplo, que esta última *debe tomar parte en la gestión social*.

¹²⁴⁶ Este artículo se refería a las compañías comanditarias y establecía lo siguiente:

Tampoco pueden los socios comanditarios hacer acto alguno de administración de los intereses de la compañía, ni aún en calidad de apoderados de los socios.

¹²⁴⁷ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil* ..., pág. 279.

CAPÍTULO XII

VIGILANCIA E INSPECCIÓN ASIGNADAS A LA AUTORIDAD PÚBLICA

I. PRELIMINAR. EL DOBLE ÁMBITO DE LA VIGILANCIA Y DE LA INSPECCIÓN DE LA AUTORIDAD PÚBLICA

En este capítulo se aborda una cuestión clave del nuevo régimen instaurado por la Ley y el Reglamento de 1848: las facultades o atribuciones de vigilancia, control e inspección que tenía la Autoridad pública (Gobierno y Jefes Políticos/Gobernadores) sobre las compañías mercantiles por acciones. La nueva regulación, caracterizada desde el primer momento por su excesivo intervencionismo y rigidez, establecía estas facultades como uno de sus pilares básicos. Sin ellas, no se encontraba en condiciones de cumplir sus objetivos.

Cabe diferenciar dos ámbitos diferentes dentro de esta cuestión, aunque basados en el mismo principio intervencionista. El primero, se refiere a la inspección y control de todos los actos y documentos necesarios para la autorización gubernativa o parlamentaria de la compañía. Los titulares de estas atribuciones son las Cortes Generales o el Gobierno, según el tipo de autorización que solicite la compañía¹²⁴⁸.

El segundo ámbito, se refiere a las facultades de vigilancia e inspección de la Autoridad pública, una vez autorizada la compañía. Los sujetos titulares son el Gobierno y sus delegados, denominados Jefes Políticos y, más tarde, Gobernadores de la Provincia o Gobernadores civiles.

Aunque ambas esferas, como se decía antes, se basan en el mismo principio de máximo control, corresponden a etapas diferentes: la inspección previa a la autorización y, posteriormente, la vigilancia de la compañía, una vez iniciada su actividad empresarial.

Esta diferenciación de esferas o etapas facilita el análisis de la actuación de la Autoridad pública en las compañías mercantiles por acciones. El primer ámbito, la inspección previa a la aprobación, ya se ha estudiado con detalle en el capítulo VII sobre el régimen de la autorización parlamentaria o gubernativa y a él nos remitimos. En los siguientes epígrafes, se va a abordar las competencias del poder público para hacer cumplir lo estipulado por la Ley y el Reglamento de 1848 sobre las compañías por acciones ya autorizadas.

II. LOS JEFES POLÍTICOS. LOS GOBERNADORES DE PROVINCIA O GOBERNADORES CIVILES

Con carácter previo a la exposición del contenido de las fuentes normativas reguladoras de la inspección de las compañías por acciones, cabe mencionar la figura

¹²⁴⁸ En función de lo previsto en los artículos 1, 2 y 4 de la Ley de 1848.

del Jefe Político¹²⁴⁹, posteriormente denominado Gobernador de la Provincia o Gobernador civil.

En primer lugar, conviene advertir que la función de control e inspección era responsabilidad última del Gobierno, si bien éste actuaba mediante funcionarios cualificados que debían informarle sobre determinadas cuestiones y con la periodicidad establecida en la Ley y el Reglamento de 1848, como más adelante se verá. Esas personas eran los Jefes Políticos o Gobernadores civiles.

En este sentido, el texto legal no hace ninguna mención expresa a los Jefes Políticos, con excepción del párrafo final (fuera del articulado), en el que, siguiendo la tradicional fórmula de estilo, se ordena a las autoridades, entre las cuales se mencionan los “jefes”, a *que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes*.

Sin embargo, el Reglamento de 1848 hace referencia a los Jefes Políticos en 16 de sus 43 artículos. En concreto, aparecen en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 29, 37, 38, 39, 40, 42 y 43. Esta enumeración de los preceptos manifiesta el interés del Legislador en delegar los detalles concretos y prácticos al texto reglamentario, que se convertirá, por lo tanto, en una pieza normativa básica.

El Jefe Político es un cargo o figura creada por la Corona mediante la Ley de 1845, que fue sustituida por los Gobernadores de Provincia, también denominados Gobernadores civiles o Gobernadores civiles de Provincia, mediante RD 1849. Posteriormente, se les asignaron instrucciones concretas para su labor de vigilancia de las compañías por acciones en varios textos legales que se comentan en el epígrafe relativo a los textos normativos¹²⁵⁰. Ahora se estudia, en primer lugar, la Ley de 2 de abril de 1845 y, después, el RD 1849.

A) LA LEY DE 1845

La GdM de 9 de abril de 1845¹²⁵¹ recoge dos disposiciones legales que afectaron profundamente a la organización política y administrativa de España. En primer lugar, la Ley de organización y atribuciones de los Consejos Provinciales y, en segundo lugar, la Ley para el gobierno de las Provincias¹²⁵². Ambos textos se encuentran rubricados por el Ministro de la Gobernación de la Península, D. Pedro José Pidal.

Como se recordará¹²⁵³, el MCIOP se creó mediante RD de 28 de enero de 1847, siendo su primer titular, nombrado también por RD de la misma fecha¹²⁵⁴, D. Mariano Roca de Togores. Hasta ese momento, los asuntos relacionados con la rama de

¹²⁴⁹ Que en todos los documentos legales de la época se escribe “Gefe Político”, aunque aquí, por razones prácticas, se ha visto más conveniente utilizar la caligrafía actual.

¹²⁵⁰ En concreto, la Instrucción del MCIOP de 26 de enero de 1850, la comunicación de 25 de marzo de 1850 sobre la vigilancia del balance general de situación, el RD de 15 de febrero de 1854 y el Reglamento de 1857.

¹²⁵¹ Núm. 3860.

¹²⁵² Se prescinde del análisis de la primera ley, por no estar relacionada con la materia del presente estudio.

¹²⁵³ Capítulo sobre la formación y tramitación de la Ley de 1848.

¹²⁵⁴ GdM de 30 de enero de 1847, núm. 4521.

Comercio en la Península dependían del Ministerio de la Gobernación de la Península, cuyo titular era el mencionado D. Pedro José Pidal. A partir de la citada fecha, las materias de Comercio y Obras Públicas se transfirieron al nuevo Ministerio, del cual dependían los Jefes Políticos en sus competencias sobre dichas materias.

Esta Ley es breve, consta de 11 artículos y establece, en primer lugar, su finalidad:

*(p)ara el gobierno de las provincias de la monarquía habrá en cada una de ellas una autoridad superior nombrada por el Rey, bajo la dependencia inmediata del Ministerio de la Gobernación de la Península; esta autoridad conservará por ahora el título de jefe político*¹²⁵⁵.

Cabe destacar algunas consideraciones sobre este texto. La misión o finalidad de los Jefes Políticos consistía en gobernar la Provincia. En otros artículos posteriores se detallaban sus funciones y los medios de que disponían para cumplir su mandato. El Jefe Político dependía jerárquicamente del Ministerio de la Gobernación de la Península. Su denominación como Jefe Político era transitoria. En efecto, como se estudia en el siguiente epígrafe, esta designación, al cabo de cuatro años, cambió a Gobernador de Provincia o Gobernador civil.

En segundo lugar, establece que el nombramiento y cese de estas autoridades, debía realizarse mediante un RD refrendado por el Ministro de la Gobernación de la Península¹²⁵⁶.

Respecto a las funciones del Jefe Político, éstas se encuentran recogidas en el artículo 4 de la Ley. En relación a la materia objeto de nuestro estudio, destacan las que se comentan a continuación.

1. *Publicar, circular, ejecutar y hacer que se ejecute en la provincia de su mando las leyes, decretos, órdenes y disposiciones que al efecto le comunique el gobierno* (artículo 4.1). *Y en general, hacer y ejecutar todo lo que convengan las leyes, decretos y órdenes del Gobierno en la parte que requiera la intervención de su autoridad* (artículo 4.9). Estas facultades de carácter general se desarrollan en el Reglamento de 1848, en relación a las compañías por acciones, como luego se verá¹²⁵⁷.
2. *Proteger a las personas y las propiedades* (artículo 4.3). Esta labor de protección en la Ley y el Reglamento de 1848 se centra en los activos de las compañías por acciones (especialmente el dinero de la caja), así como en el valor de las acciones, cuyos propietarios podían verse afectados por actuaciones fraudulentas de los administradores.

¹²⁵⁵ Artículo 1 de la Ley de 1845.

¹²⁵⁶ Artículo 2 de la Ley de 1845.

¹²⁵⁷ Cabe citar, a modo de ejemplo, el artículo 25 del Reglamento de 1848, que dispone:

El Jefe político, a consecuencia de la orden en que se declare la compañía constituida convocará la Junta general de accionistas que se reunirá bajo su presidencia o la del empleado público en quien al efecto delegare, y dándose lectura del Real decreto de autorización y de aquella misma orden... (el subrayado es nuestro).

3. *Proponer al Gobierno todo lo que pueda contribuir al adelantamiento y desarrollo industrial y moral de la provincia, y al fomento de sus intereses materiales* (artículo 4.6). Es muy interesante, a estos efectos, la Instrucción del MCIOP de 26 de enero de 1850, que se comenta en un epígrafe posterior, en la que se exhorta a los Jefes Políticos a estimular la actividad comercial, industrial y agrícola.
4. *Vigilar e inspeccionar de todos los ramos de la administración comprendidos en el territorio de su mando, y los establecimientos que de ellos dependa* (artículo 4.7). Dentro de su *ramo* estaba todo lo relativo al comercio e industria, entre los que se encontraba la normativa sobre compañías mercantiles por acciones.
5. *Conceder o negar, con arreglo a las leyes o instrucciones, la autorización competente para procesar a los empleados y corporaciones dependientes de su autoridad por hechos relativos al ejercicio de sus funciones, dando, en caso de negativa, cuenta documentada al Gobierno para la resolución que convenga* (artículo 4.8). Entre las corporaciones y empleados dependientes de la autoridad del Jefe Político hay que señalar a las compañías por acciones y sus administradores y trabajadores. Su autoridad, por tanto, no se limitaba a un simple control o supervisión, sino que tenía competencia para estimar o desestimar solicitudes de procesamiento.

Para que los Jefes Políticos pudieran desempeñar correctamente sus funciones (*para el buen desempeño de su autoridad*, dice textualmente el artículo 5), la Ley de 1845 les dotaba de unas facultades que, en relación a las compañías por acciones, son las que se señalan a continuación.

En primer lugar, destaca por su importancia el artículo 5.5, el cual establece la siguiente facultad:

Suspender en casos urgentes a cualquier funcionario o empleado dependiente del Ministerio de la Gobernación de la Península, dando inmediata cuenta al Gobierno.

A este párrafo se refiere expresamente el artículo 38 del Reglamento de 1848, en el marco de la actuación del Jefe Político ante indicios de delitos en la gestión y administración de las compañías por acciones. Dice así el citado precepto:

Siempre que de resultados de la inspección que la administración ha de ejercer sobre las sociedades por acciones o por los documentos que estas deben someter a su comprobación o por cualquiera otro medio legal constare haberse perpetrado algún delito en el manejo directivo y administrativo de la sociedad, procederá el Jefe político conforme está prescrito en el párrafo 5 del artículo 5 de la ley de 2 de Abril de 1 845 (el subrayado es nuestro)¹²⁵⁸.

¹²⁵⁸ Como se recordará, en el capítulo sobre el órgano de administración, al comentar la remisión del artículo 38 del Reglamento de 1848 al artículo 5.5 de la Ley de 1845, se decía que no era sencilla la interpretación de ambos artículos, pues es difícil atribuir a los administradores (y se puede añadir a los empleados de la compañía) la condición de *funcionario o empleado dependiente del Ministerio de la Gobernación de la Península* (posteriormente, MCIOP). Una posible interpretación, se decía, puede ser que el texto se refiere a los funcionarios y empleados dependientes que contraten con la compañía, dado

En este contexto, se entienden adecuadamente las demás facultades del artículo 5 de la Ley de 1845, en relación al régimen de inspección de compañías por acciones previsto en el Reglamento de 1848. Dichas facultades son las siguientes:

1. *Instruir por sí mismo o por sus delegados la sumaria información de los delitos cuya averiguación se deba a sus disposiciones o agentes, entregando al tribunal competente los detenidos o presos con las diligencias practicadas en el término señalado por las leyes* (artículo 5.1). Esta facultad afectaba a los administradores y empleados de las compañías por acciones.
2. *Aplicar gubernativamente las penas determinadas en las leyes y disposiciones de política y en los bandos de buen Gobierno* (artículo 5.2). Esta previsión se relaciona con dos artículos de la Ley de 1848. En primer lugar, con el artículo 15 que establece una *multa que no podrá exceder de 50.000 reales* a los responsables de la emisión ilícita de billetes, pagarés, abonarés o documentos al portador. En segundo lugar, el artículo 16 de la Ley de 1848 en el que se regula la responsabilidad de la administración provisional y definitiva en determinados supuestos, estableciéndose una *multa que no excederá de 100.000 reales*. En ambos supuestos, el Jefe Político tenía la competencia de la instrucción y aplicación gubernativa de dichas multas.
3. *Imponer correccionalmente multas cuyo máximo no exceda de 1,000rs.y en caso de insolvencia la pena de detención, sin que el término de esta pueda nunca pasar de un mes* (artículo 5.3).
4. *Suspender, modificar o revocar, según lo exijan las circunstancias y con tal que no se opongan a ello las leyes o los decretos y órdenes del Gobierno, los actos de las autoridades, corporaciones y agentes que dependen del Ministerio de la Gobernación de la Península* (artículo 5.6). Las compañías por acciones eran corporaciones sujetas al MCIOP, que, como ya se ha dicho, sustituyó en estos ramos al Ministerio de la Gobernación de la Península. Por lo tanto, el Jefe Político, en nombre del MCIOP podía dejar sin efecto los actos o contratos de dichas sociedades (siempre que fueran ilegales). El grado de intervención y vigilancia era muy elevado.
5. Las juntas generales de accionistas quedan dentro de la competencia de los Jefes Políticos, en la medida en que son reuniones públicas (aunque limitadas a quienes tuvieran la condición de socios). Por este motivo, son de aplicación a estas asambleas los apartados 7 y 8 del artículo 5: *(d)ar o negar para las funciones y reuniones públicas, que hayan de verificarse en el punto de su residencia, y presidir estos actos cuando lo estime conveniente* (artículo 5.7); y *(p)residir, cuando lo juzgue oportuno, todas las corporaciones dependientes del Ministerio de la Gobernación de la Península* (artículo 5.8).

que, en muchas ocasiones, al tener objetos de interés público, debían obtener autorizaciones de la autoridad correspondiente. Pero, sin duda, al analizar ahora todas las facultades y atribuciones de los Jefes Políticos sobre las compañías por acciones, parece que estas autoridades podían obtener el mismo resultado (la suspensión de los cargos de la sociedad) utilizando otras de las muchas facultades previstas en el texto legal.

La facultad de convocar la junta general no corresponde, en términos generales, al Jefe Político. Lo que parece claro, a tenor de la Ley de 1845, es que los administradores que convocaran la junta, debían ponerlo en conocimiento del Jefe Político correspondiente, que podría denegar la autorización de la reunión.

Respecto a la presidencia de las juntas, según los artículos 5.7 y 5.8 transcritos anteriormente, queda claro que la facultad se atribuye primariamente al Jefe Político. Durante la vigencia de la Ley de 1848, esta competencia se concretó a partir del Reglamento de 1857 sobre las funciones que deben ejercer los Gobernadores de la Provincia y Delegados especiales del Gobierno cerca de las compañías mercantiles por acciones al inspeccionar estas sociedades¹²⁵⁹, que en su artículo 7 precisaba el contenido y características de la facultad de presidir las juntas en los siguientes términos:

Los Delegados del Gobierno cerca de las sociedades mercantiles por acciones asistirán a sus juntas generales y a las de dirección, vigilancia o gobierno de cada compañía, correspondiéndoles la presidencia honorífica sin voz ni voto.

Si los estatutos de las compañías confieren al Presidente alguna decisión o facultad que no sea la de dirigir la discusión, la ejercerá el que lo sea de la sociedad o de sus juntas, aun cuando en ellas ocupe el Delegado el sitio de preminencia, si no asistiese el Gobernador de la provincia, pues de concurrir esta Autoridad le corresponderá la presidencia de honor.

De esta manera, a los once años de la entrada en vigor de la Ley de 1848 se detalló la actuación de los Jefes Políticos o Gobernadores de la Provincias en las juntas de accionistas. Su función, podría decirse, era meramente testimonial en la medida en que se encontraban privados de voz y voto. Pero, en nuestra opinión, el simple hecho de estar presentes en la reunión tenía unos claros efectos de información y control, pues no es lo mismo discutir sobre los temas del orden del día encontrándose la Autoridad civil presente, que estando ausente.

6. Por último, el apartado 10 del artículo la Ley de 1845, concedía al Jefe Político la facultad de *(d)ictar las disposiciones que estime convenientes dentro del círculo de su autoridad para el cumplimiento de las órdenes superiores o para la buena administración y gobierno de los pueblos.*

Una vez reguladas las funciones y competencias de los Jefes Políticos, la Ley de 1845, a los efectos que ahora interesan, establece la responsabilidad por sus actuaciones. En primer lugar, no incurren en responsabilidad cuando actúen obedeciendo las disposiciones y órdenes del Gobierno¹²⁶⁰. Y, además, sólo se puede iniciar una causa judicial contra el Jefe Político si existe autorización previa del Rey expedida por el Ministerio de la Gobernación de la Península. El único Tribunal competente para conocer estas causas es el Tribunal Supremo de Justicia¹²⁶¹.

¹²⁵⁹ GdM de 13 de diciembre de 1857, núm. 1804.

¹²⁶⁰ Artículo 6 de la Ley de 1845.

¹²⁶¹ Artículo 9 de la Ley de 1845.

El detallado comentario de la Ley de 1845 ha tenido como finalidad mostrar el alto grado de intervención y control de los que eran titulares los Jefes Políticos antes de que asumieran las competencias inspectoras sobre las compañías por acciones. La política legislativa de la Ley y del Reglamento de 1848 estableció el sometimiento de estas sociedades a los Jefes Políticos dentro del marco legal establecido por la Ley de 1845.

B) RD 1849

La Ley de 1845 fue modificada mediante RD 1849¹²⁶², que cambió la denominación de Jefe Político por Gobernador de la Provincia. Las funciones y competencias permanecieron inalteradas. El objetivo prioritario, respecto a lo que ahora interesa, consistía en una racionalización y adaptación a la nueva realidad tras escindir el 28 de enero de 1847 el Ministerio de la Gobernación de la Península en varias carteras, entre la que se encontraba el MCIOP.

La Ley de 1845 estableció que la denominación de Jefes Políticos era de carácter provisional¹²⁶³ y, efectivamente, como se ha dicho, cuatro años después de su promulgación se cambió el nombre.

La Exposición de Motivos o Preámbulo del RD, rubricado por la Reina y el Presidente del Consejo de Ministros, justifica la conveniencia de esta modificación explicando que *(c)uando dos Autoridades iguales en categoría dividen entre sí atribuciones, que lejos de excluirse mutuamente tienen íntimo enlace y contacto, no pueden evitar conflictos, por grande que sean su celo y su abnegación, si les es dado proceder en sus disposiciones con aquella absoluta conformidad de miras, sin la cual la unidad administrativa se quebranta, ya que no desaparezca del todo*. Tras la división del Ministerio de la Gobernación de la Península en varias carteras en enero de 1847, los Jefes Políticos dependían de todos los Ministerios, aunque de manera inmediata del de la Gobernación de la Península. Aquí radicaba el problema organizativo que trató de solucionar el RD 1849.

Termina la Exposición de Motivos señalando que la sustitución de los Jefes Políticos e Intendentes por los Gobernadores de Provincia supondría tres ventajas. La primera, es la reducción del gasto público. La segunda, la simplificación de la administración del Estado. Y, la tercera, dar respuesta a la opinión pública que reclamaba la mejora de la organización de la administración. También se podría añadir una consecuencia más, siguiendo a COS GAYÓN¹²⁶⁴: la unión de los Jefes Políticos e Intendentes en una sola categoría, reuniendo todas sus atribuciones los Gobernadores, otorgó más autoridad y poder a estos nuevos cargos.

El artículo 1 del RD establece que *(e)n sustitución de los jefes políticos e intendentes, se crea una sola Autoridad civil superior en cada provincia con la*

¹²⁶² GdM de 30 de diciembre de 1849, núm. 5631.

¹²⁶³ El artículo 1 terminaba diciendo:

... *esta autoridad conservará por ahora el título de jefe político* (el subrayado es nuestro).

¹²⁶⁴ COS-GAYÓN, F. (1851): *Historia de la Administración Pública en España*, Madrid, pág. 300.

denominación de Gobernadores de Provincia. El nombramiento y el cese se realizarán mediante RD del Consejo de Ministros, refrendado por su Presidente¹²⁶⁵.

Respecto a las funciones y competencias que la Ley de 1845 atribuía a los Jefes Políticos, declara categóricamente el artículo 5 que *(l)as atribuciones de los Gobernadores, en parte política y administrativa, serán las mismas que han tenido los jefes políticos. En la parte económica tendrán también por punto general las que han ejercido los intendentes, con las modificaciones que se determinan en el Real decreto, que con la misma fecha tengo á bien expedir por el Ministerio de Hacienda.* Esta previsión es muy importante, en la medida que se declaran vigentes los artículos 4 y 5 de la Ley de 1845 sobre las funciones y competencias de los Jefes Políticos¹²⁶⁶. En cuanto a la cuestión económica, se hace una referencia a los Intendentes y al RD del Ministro de Hacienda de 28 de diciembre de 1849¹²⁶⁷.

En cuanto a la dependencia jerárquica de los Gobernadores, el RD trata de resolver el problema de la dependencia inmediata del Ministerio de la Gobernación de la Península, de la siguiente manera: *(l)os gobernadores de Provincia se entenderán directamente con los Ministerios de la Gobernación, Hacienda y Comercio, Instrucción y Obras públicas de los cuales dependen en los respectivos ramos del servicio*¹²⁶⁸. De esta manera se simplifica la tramitación de los expedientes de los ramos de Hacienda y Comercio, Instrucción y Obras Públicas, pues ya no tendrán que pasar por el Ministerio de la Gobernación de la Península, sino que los Gobernadores se entenderán directamente con el Ministerio correspondiente.

Por este motivo, el RD termina encargando a los Ministros de Gobernación de la Península, Hacienda y Comercio, Instrucción y Obras Públicas, la ejecución del RD¹²⁶⁹.

C) LA INSTRUCCIÓN DE 26 DE ENERO DE 1850, DEL MCIOP PARA LOS GOBERNADORES CIVILES DE LAS PROVINCIAS,

El RD 1849 comentado en el epígrafe anterior, consolida las funciones y facultades de la Autoridad pública, establecidas por la Ley de 1845. El Gobernador de la Provincia disponía de un conjunto de atribuciones para hacer cumplir la legalidad. Interesa reseñar que esta faceta política y administrativa de garante del orden público se complementaba con la función de impulsar y fomentar, por lo que aquí respecta, el espíritu comercial e industrial.

Buen ejemplo de ello es el texto de la Instrucción del MCIOP para los Gobernadores civiles de las Provincias de 26 de enero de 1850¹²⁷⁰, promulgada como RO. Esta Instrucción es resultado del RD 1849 por el que, entre otras cuestiones, los Jefes Políticos pasan a denominarse Gobernadores de las Provincias y se les asigna una dependencia jerárquica directa de los Ministerios de la Gobernación de la Península, Hacienda y Comercio, Instrucción y Obras Públicas. El artículo 8 del citado

¹²⁶⁵ Artículo 2 del RD 1849.

¹²⁶⁶ Expuestas en el epígrafe anterior.

¹²⁶⁷ Que no se comenta por exceder del ámbito del presente trabajo.

¹²⁶⁸ Artículo 6 del RD 1849.

¹²⁶⁹ Artículo 8 del RD 1849.

¹²⁷⁰ GdM de 29 de enero de 1850, núm. 5661.

Reglamento, como se vio en el epígrafe anterior, encarga a cada Ministerio la ejecución del RD.

Por este motivo, el Ministro de CIOP, D. Manuel de Seijas Lozano, remitió una Instrucción a los Gobernadores de las Provincias. El texto es largo y fue publicado en cuatro entregas en las GdM números 5661, 5662, 5663 y 5664, de fechas 29, 30, 31 de enero y 1 de febrero, respectivamente. Cabe destacar la Instrucción como muestra de esa otra faceta de los Gobernadores de las Provincias relativa al impulso y fomento de la actividad industrial y comercial, directamente relacionadas con las compañías por acciones.

El largo texto de la Instrucción comienza con una introducción en la que el Ministro de CIOP relata el encargo establecido en el artículo 8 del RD 1849. La finalidad es transmitir unas pautas a los Gobernadores de las Provincias para que desempeñen su cargo con la mayor disposición y eficacia. Como se puede comprobar en algunos de los párrafos que se transcriben a continuación, el tenor del texto tiende más al aliento y exhortación que al establecimiento de disposiciones coercitivas.

Respecto a los Gobernadores, dice el Ministro en el texto preliminar a la Instrucción, que la Reina no

... satisfará su Real ánimo con el tibio cumplimiento de los deberes de estos altos Magistrados. La acción de la administración, cuando se reduce al compasado curso de la mera ejecución de las disposiciones superiores, es siempre lenta y estéril. Un jefe celoso, y que comprende la alta misión que desempeña en la provincia de su mando, debe conocer que la iniciativa ha de partir de él, puesto que tocando más inmediatamente las necesidades de los pueblos, sólo él puede promover los medios más adecuados para satisfacerlas.

Los Gobernadores civiles deben tener entendido que la prosperidad o decadencia de las provincias de su mando, y las gestiones que practiquen para procurar el bien de las mismas, será el regulador de su conducta (...).

Por todo, S.M. se ha servido ordenarme prevenga a V. S.[se dirige a los Gobernadores de las Provincias], como de su Real orden lo ejecuto, que para el más exacto desempeño de su cargo, y a fin de que todos sus actos refleje el pensamiento que anima a S. M., observe puntualmente la instrucción adjunta, cuyo espíritu deberá servirle de guía en todo lo relativo al fomento de los intereses morales, intelectuales y materiales de esa provincia.

El contenido de la Instrucción se divide en varias Secciones. La primera, es sobre la instrucción pública; la segunda, sobre agricultura, industria y comercio; y, la tercera, sobre caminos, canales, puertos y demás obras públicas. A su vez, la Sección segunda se estructura en cinco capítulos: sobre los intereses materiales en general, la agricultura, la ganadería, la industria y el comercio. A continuación se comentan los capítulos relacionados con la actividad empresarial en general y con las compañías por acciones en particular.

En el capítulo titulado “De los intereses materiales en general”, se recogen una serie de principios y postulados programáticos que establecen unas directrices de la

actuación de los Gobernadores sobre la aplicación política de la Ley y del Reglamento de 1848¹²⁷¹. Una de las ideas básicas que subyace en este capítulo se refiere a conciliar el fomento de la actividad empresarial privada con el control de la misma, es decir, el binomio impulso-vigilancia. Se puede resumir esta cuestión con las siguientes palabras de la Instrucción:

*(c)uando en favor del interés colectivo el Gobierno trate de abrir nuevas vías de producción, debe reservarse la dirección o la intervención de la parte moral; todo lo que es empresa ha de dejarlo al empresario; y no le importa que este gane mucho*¹²⁷² (el subrayado es nuestro).

La indicación política al Gobernador es clara: fomentar el impulso empresarial dejando *todo lo que es empresa* al empresario. Esto recuerda la idea recogida en el importante artículo 17 de la Ley de 1848, que faculta al Gobierno para mantener una inspección estricta y constante de estas compañías, pero debiendo respetar siempre las operaciones y los fondos de la sociedad.

Pero, simultáneamente al fomento de la actividad mercantil, debe vigilar hasta el extremo de reservarse la *intervención en la parte moral*. Respecto a esto último, cabe recordar, por ejemplo, el contenido del artículo 13.4 del Reglamento de 1848 según el cual el Gobernador debía examinar las *garantías morales* de los administradores de la compañía por acciones.

Según la Instrucción, se trata de conciliar la autonomía de los criterios y decisiones empresariales con el control de las condiciones morales del empresario. El planteamiento es laudable, pero adolece de un defecto: ¿cuál es el contenido de la *parte moral*? Por lo que respecta a la materia de nuestro estudio, tanto la Ley como el Reglamento de 1848 ofrecen unos criterios o directrices sobre esas intervenciones en la *parte moral*. Pero la indeterminación del contenido de este concepto es tan amplia, que las condiciones personales y particulares de cada Gobernador tendrían un peso relevante en las decisiones. A este respecto, no se puede olvidar que estas personas eran políticos, no siempre familiarizados con los problemas empresariales y, en ocasiones, preocupados sobremanera por su imagen personal ante el Gobierno y los altos cargos.

Volviendo al contenido del capítulo sobre los intereses materiales en general, el Ministro de CIOP establece dos funciones básicas de los Gobernadores en relación con la agricultura, la industria y el comercio: *la ilustración, la remoción de obstáculos y los medios y auxilios que no pueden alcanzar por sí el interés privado*¹²⁷³. Estas funciones se encuentran sometidas a los siguientes principios:

El Gobierno no debe ser nunca especulador; el Gobierno no puede jamás arriesgar ni comprometer la fortuna pública ensayando industrias o acometiendo empresas para acumular rentas ni granjear ganancias. El Gobierno ha de buscar constantemente la alianza del interés privado con el

¹²⁷¹ No puede olvidarse que la Instrucción se publica dos años después de la promulgación de la Ley de 1848.

¹²⁷² Instrucción del MCIOP, apartado núm. 24, GdM de 30 de enero de 1850, núm. 5662.

¹²⁷³ Instrucción del MCIOP, apartado núm. 23, GdM de 30 de enero de 1850, núm. 5662.

*público. El Gobierno, en fin, debe siempre ilustrar y aconsejar en materias de producción; pero mandar, nunca*¹²⁷⁴.

Principios que establece el Gobierno y que a los Gobernadores, como representantes suyos, corresponde llevar a cabo y ejecutar en su jurisdicción correspondiente. Y si la aplicación de esas normas políticas lleva a generar riqueza en los empresarios,

*en tales ganancias, detrás de la del especulador, se halla la del Estado, porque una empresa feliz en este género es el más poderoso estímulo para otras nuevas*¹²⁷⁵. *En su multiplicación está la utilidad pública. A este sistema, que por sistema [sic] debe observarse, los Gobernadores civiles habrán de subordinar todos los actos de su administración*¹²⁷⁶.

En relación a la primera de las funciones básicas que la Instrucción asigna a los Gobernadores, *la ilustración*, se les estimula a relacionarse con los órganos o cuerpos consultivos en los siguientes términos:

*los Gobernadores deben hacerlo y no desdeñar, antes si asistir con frecuencia y consultar verbalmente y por escrito a los Consejos y Diputaciones provinciales, a las Juntas de Agricultura, a las sociedades económicas (...) y a las Juntas de Comercio, que tantos servicios han prestado al fomento del país*¹²⁷⁷.

A estos efectos, como se recordará, el Reglamento de 1848 establecía que, para la calificación por el Jefe Político de si el objeto social era de utilidad pública, debía solicitar informe a la Diputación y Consejo provincial, T. de c., SEAP y Ayuntamiento del domicilio social y de los lugares en los que se pretendiese fijar establecimientos. Estos informes podían extenderse a otras materias solicitadas por el Jefe Político¹²⁷⁸.

La Instrucción reitera la importancia de acudir a estos órganos:

*Estos cuerpos consultivos crecen en importancia a medida que son hábil y oportunamente requeridos y excitados por la Autoridad para ilustrar su acción. Tan funesto es abdicar ésta en sus manos para que flote indecisa y sin dirección ni responsabilidad, como no excitar su celo y laboriosidad en donde tanto se necesita de ésta, en un país en que desgraciadamente está todo por hacer*¹²⁷⁹.

Para terminar las disposiciones sobre esta función básica de *ilustración*, el texto hace una larga referencia a los beneficios de la utilización del *Boletín Oficial del*

¹²⁷⁴ Instrucción del MCIOP, apartado núm. 24, GdM de 30 de enero de 1850, núm. 5662.

¹²⁷⁵ Es interesante resaltar esta última afirmación, según la cual el Gobernador debe fomentar el éxito y triunfo del empresario, para que sirva de estímulo y emulación. Este planteamiento se encuentra muy lejos del otro que piensa que la reacción ante el empresario o profesional de éxito no es emularle sino esperar a su fracaso.

¹²⁷⁶ Instrucción del MCIOP, apartado núm. 24, GdM de 30 de enero de 1850, núm. 5662.

¹²⁷⁷ Instrucción del MCIOP, apartado núm. 25, GdM de 30 de enero de 1850, núm. 5662.

¹²⁷⁸ Artículos 14 y 15 del Reglamento de 1848.

¹²⁷⁹ Instrucción del MCIOP, apartado núm. 26, GdM de 30 de enero de 1850, núm. 5662.

Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, así como a la necesidad de promover el estudio y admiración por estos temas en las escuelas de enseñanza¹²⁸⁰.

Respecto a la segunda función básica, *la remoción de obstáculos*, dice la Instrucción que *es en lo que más cuidado deben prestar los Gobernadores*¹²⁸¹. La razón es que los particulares o empresarios ni pueden ni están capacitados para remover determinadas trabas y dificultades. Señala el texto que es competencia del Gobierno remover muchos de esos obstáculos, pero no sólo corresponde a la máxima autoridad esta misión, sino también y de modo muy especial a los Gobernadores, que deben informar al Gobierno de las dificultades para aplicar las leyes y de las quejas que reciban de los ciudadanos:

*Los obstáculos que nazcan de la localidad no puede conocerlos apenas la administración suprema si sus agentes en las provincias no les dan noticias de ellos. Afortunadamente todos esos obstáculos pueden removerse por los Gobernadores mismos, si saben estudiarlos y comprenderlos, si llaman en su auxilio el celo de las corporaciones instituidas a este fin y el patriotismo de los buenos ciudadanos.*¹²⁸²

Terminado el interesante capítulo introductorio de la Sección segunda de la Instrucción, se ha de saltar al capítulo IV “De la industria” para encontrar una relevante mención al criterio o espíritu con el que los Gobernadores deben aplicar los preceptos de la Ley de 1848. Se trata de un texto excepcional en cuanto a la concreción de la política administrativa de la Autoridad pública sobre las compañías mercantiles por acciones. El párrafo es breve y se transcribe a continuación.

*Protección, y muy eficaz, debe dispensar la Autoridad a las industrias de todo género, y no haciéndolo caerá en grave responsabilidad. Fomentar el espíritu de asociación, único medio para reunir capitales suficientes, es el primer medio que deben emplear. Pero no olviden que el recelo ha cundido, y no sin fundamento desgraciadamente, por lo que sus conatos deben dirigirse principalmente a restablecer la confianza. La Ley de sociedades anónimas debe ser su pauta, siendo vigilantes inspectores de las mismas para asegurarse de su proceder. Nada de contemplaciones en este punto: toda severidad es poca para el que abusa de la confianza en la administración de caudales ajenos*¹²⁸³ (el subrayado es nuestro).

Varios comentarios se pueden realizar sobre este párrafo de la Instrucción. En primer lugar, se encuentra en el marco de las disposiciones sobre la industria. En segundo lugar, lo primero a lo que se hace referencia es a la protección de todas las industrias, sin distinción de género. Después, se invoca el espíritu de asociación (el mismo al que se refieren casi todos los Diputados y Senadores que intervinieron durante los debates parlamentarios de la Ley de 1848) como único medio para la reunión de capitales. Esta puesta en común de capital, en la práctica, se hacía fundamentalmente a

¹²⁸⁰ Deseo u objetivo que dependía del mismo Ministro, ya que su cartera era de Comercio, Instrucción y Obras Públicas.

¹²⁸¹ Instrucción del MCIOP, apartado núm. 30, GdM de 30 de enero de 1850, núm. 5662.

¹²⁸² Instrucción del MCIOP, apartado núm. 31, GdM de 30 de enero de 1850, núm. 5662.

¹²⁸³ Instrucción del MCIOP, apartado núm. 59, GdM de 31 de enero de 1850, núm. 5663.

través de los distintos tipos de compañías mercantiles (colectivas, comanditarias y anónimas).

También se exhorta a recuperar la confianza perdida en las compañías (con especial referencia a las anónimas) por los abusos y los fraudes. Se trata de un interés cualificado del Poder Ejecutivo: restablecer la buena imagen destruida por las especulaciones ilícitas. Sigue en perfecta continuidad con los principios políticos inspiradores de la Ley y del Reglamento de 1848.

Por otro lado, llama la atención que en la referencia a la Ley de 1848 se citen las *sociedades anónimas* y no las compañías mercantiles por acciones.

Cabe resaltar, además, la utilización de la expresión *vigilantes inspectores* para calificar la actuación de los Gobernadores. El Ministro centra las características de su actuación en las compañías por acciones no en el fomento o impulso, sino en la vigilancia e inspección, que se completa con la contundente frase de *(n)ada de contemplaciones ... toda severidad es poca* ante la administración desleal de patrimonios ajenos.

Finaliza el capítulo sobre la industria haciendo referencia a las empresas mineras, *que merecen particular mención, ya por su importancia relativa en nuestro suelo, ya por las relaciones especiales que con ella mantiene el Gobierno en representación del Estado*¹²⁸⁴. En los debates del Congreso de los Diputados¹²⁸⁵ se planteó esta cuestión, resolviéndose posteriormente que las compañías mineras sin capital fijo se encontraban fuera del ámbito de la Ley de 1848. En este marco se sitúa el siguiente párrafo de la Instrucción:

*Deben asimismo procurar que desaparezcan la desmoralización y el ágio introducidos, y que han hecho la desgracia de las asociaciones mineras por medio de la subdivisión de acciones en papel bursátil, que las ha traído a un descrédito que por su índole verdadera están muy lejos de merecer*¹²⁸⁶.

III. FUENTES NORMATIVAS

Una vez estudiadas las disposiciones sobre los Jefes Políticos o Gobernadores civiles, encargados de la vigilancia e inspección de las compañías mercantiles por acciones, conviene tratar el régimen aplicable al control por la Autoridad pública. Para ello, se comienza por una referencia al régimen establecido por el CCom 1829, necesaria para conocer el sistema que será derogado y sustituido por la Ley y el Reglamento de 1848. A continuación se analizan estos dos textos normativos y se finaliza con el estudio de dos normas especiales: el RD de 15 de febrero de 1854 sobre

¹²⁸⁴ Instrucción del MCIOP, apartado núm. 62, GdM de 31 de enero de 1850, núm. 5663.

¹²⁸⁵ Cabe recordar la intervención del Diputado Sr. Manso y la contestación del Sr. Miota en la que se planteó si la el PL 1848 se aplicaría a las sociedades mineras. No quedó clara en la respuesta si dichas compañías se encontraban dentro del ámbito de la Ley de 1848 (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1480). Fue más tarde, mediante una RO de 8 de mayo de 1848 cuando se declaró que *las compañías mineras que se constituyan sin capital fijo no están comprendidas en la Ley de 28 de enero de este año* (GdM de 12 de mayo de 1848, núm. 4989).

¹²⁸⁶ Instrucción del MCIOP, apartado núm. 64, GdM de 31 de enero de 1850, núm. 5663.

la inspección de sociedades mercantiles por acciones domiciliadas en Madrid¹²⁸⁷ y el Reglamento de 1857 de las funciones que deben ejercer los Gobernadores de provincia y Delegados especiales del Gobierno cerca de las compañías mercantiles por acciones al inspeccionar estas sociedades¹²⁸⁸.

A) EL CCom 1829

El CCom 1829 atribuyó el control de la constitución de compañías anónimas a los Tribunales del ramo, es decir, a los T. de c. Estos Tribunales, aunque no tenían unas facultades de inspección y seguimiento de las compañías inscritas, expresamente asignadas a ellos, se puede decir que, de manera indirecta, detentaban cierto poder de supervisión, en la medida en que las sociedades debían inscribir actos posteriores a su constitución. Pero el control fue muy reducido y esporádico. Las compañías anónimas, una vez autorizadas por el T. de c., disfrutaban de una enorme autonomía en sus decisiones y actuaciones. Esta independencia era superior a la que tenían compañías similares en otros países de nuestro entorno como Gran Bretaña o Francia¹²⁸⁹.

Esta situación no fue casual o fruto del azar. El mismo autor del CCom 1829, Sáinz de Andino, explicó durante los debates del PL 1848, los motivos por los que dicho Código asignó a los T. de c. la autorización de las compañías anónimas. Se recoge a continuación un fragmento de su discurso, en el cual detalla las causas de esta decisión y que conviene recordar ahora:

Cuando se formó el Código de comercio vigente se encontraba nuestro tráfico mercantil en una postración y languidez lamentables: sus vías ordinarias que anteriormente eran las colonias americanas, habían desaparecido, y no se hacía más tráfico que el de surtir nuestro propios mercados para el consumo interior de la Península y exportar la parte sobrante de nuestros productos, que los tratados de comercio, poco favorables por cierto a nuestros intereses, nos permitían llevar a puertos extranjeros. El espíritu mercantil podía decirse con razón que estaba muerto entre nosotros, sucediendo otro tanto con el industrial; y de aquí la necesidad de adoptar cuantos medios pudieran contribuir a despertar en los españoles la afición a las grandes empresas mercantiles e industriales, que rápidamente se formaban en otros países, y a estimular a los capitalistas extranjeros, y con especialidad a los americanos, que habían trasportado sus capitales a varias plazas de Europa, para que se interesasen en las que pudieran formarse en España, donde por otra parte se les podían presentar mayores ventajas que en ningún otro país. Añadíase también la consideración de que por la situación política de la Monarquía en aquella época, y los trastornos que recientemente la habían conmovido, respiraban algunos actos de su Gobierno cierta intolerancia que tenían intimidados los ánimos, alejándolos de toda operación en que hubiese de intervenir directamente la acción del Poder Supremo, y por eso se creyó que inhibiéndose éste completamente de toda participación en la formación de las Sociedades anónimas, se disiparían aquellos temores y podrían éstas fomentarse

¹²⁸⁷ GdM de 17 de febrero de 1854, núm. 413.

¹²⁸⁸ GdM de 13 de diciembre de 1857, núm. 1804.

¹²⁸⁹ Se puede consultar más detalles en el capítulo sobre el régimen de autorización gubernativa o legislativa.

*concurriendo a ellas propios y extraños con toda confianza y seguridad*¹²⁹⁰ (el subrayado es nuestro).

En un momento posterior de su discurso, Sáinz de Andino volvió sobre la misma idea, en los siguientes términos, que conviene puntualizar:

*El mal viene, señores, de la inobservancia de aquellas disposiciones (...) y, finalmente, de que la autoridad pública haya prescindido absolutamente de la inspección que le competía y estaba obligada a ejercer sobre estas compañías, dando lugar con este abandono a que con infracción de sus estatutos hayan invertido sus capitales en especulaciones para que no estaban autorizadas.*¹²⁹¹

La puntualización se refiere al empleo de la expresión “autoridad pública” que, en nuestra opinión, alude a los T. de c., los cuales, en términos generales, correspondían a un tipo de ente de carácter público. Sáinz de Andino no podía identificar esta autoridad pública con el Gobierno o sus representantes, pues no aparecen en el texto del CCom 1829.

La política legislativa del CCom 1829 sobre la vigilancia e inspección se concretó en dos artículos. En primer lugar, el 293, que establecía:

Es condición particular de las compañías anónimas que las escrituras de su establecimiento y todos los reglamentos que han de regir para su administración y manejo directivo y económico, se han de sujetar al examen del Tribunal de comercio del territorio en donde se establezca; y sin su aprobación no podrán llevarse a efecto.

Los documentos fundacionales de cada compañía anónima necesariamente debían ser aprobados por el T. de c. del domicilio social, que no dependía jerárquicamente del Gobierno o de sus representantes¹²⁹². Por lo tanto, no había una injerencia directa ni organizada del poder público en el ámbito de las sociedades anónimas.

Ahora bien, esta falta de intervención por parte de la Autoridad pública no era absoluta. En efecto, el artículo 294 prevé una importante excepción en los siguientes términos:

Cuando las compañías anónimas hayan de gozar de algún privilegio que Yo les conceda para su fomento, se someterán sus reglamentos a mi Soberana aprobación.

Este era el único supuesto en el que una sociedad anónima dependía del poder público en cuanto a la concesión de la correspondiente autorización. Cabe insistir que esta dependencia, según el tenor literal del precepto citado, se refiere a la fase anterior a la aprobación. Por lo tanto, como se ha dicho anteriormente, no hay una asignación legal expresa de facultades de vigilancia e inspección al poder público para la fase

¹²⁹⁰ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 281.

¹²⁹¹ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, pág. 282.

¹²⁹² Sobre la composición de los T. de c., así como sus atribuciones, se puede consultar el capítulo relativo a los antecedentes de la Ley de 1848.

posterior a la autorización de la compañía, aunque en la práctica se podía producir si la autorización atribuía competencias de control a alguna Autoridad pública. Además, cualquier modificación de los reglamentos societarios debería someterse a la aprobación real.

B) LA LEY DE 1848

El Legislador de 1848 estableció la vigilancia e inspección por parte de la Autoridad pública como uno de los principios básicos de su política legislativa sobre compañías mercantiles por acciones. La Ley de 1848 lo establece en un único artículo de una manera muy escueta y breve en cuanto a su formulación, aunque su contenido es enormemente amplio. Establece el artículo 17:

El Gobierno sin gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías ejercerá la inspección que conceptúe necesaria para afianzar la observancia estricta y constante de la presente ley.

En el estudio de las diferentes redacciones de este artículo se observa que se produjo solamente un cambio –y muy importante–, como se recoge a continuación.

El primer PL 1848, presentado el 26 de febrero de 1847¹²⁹³ por el entonces Ministro de CIOP, Sr. Roca de Togores, tenía como objetivos fundamentales de política legislativa derogar el artículo 293 CCom 1829 (que asignaba la competencia para autorizar las compañías anónimas a los T. de c.) e instaurar un nuevo sistema de autorización gubernativa para las sociedades por acciones. En el segundo texto del PL 1848 es cuando aparece la autorización parlamentaria junto a la gubernativa¹²⁹⁴.

Pues bien, en el primer PL 1848, no consta ningún artículo que establezca con carácter general la facultad de inspección y vigilancia del Gobierno y de la Autoridad pública. Concretamente, el artículo que hace referencia a la intervención del Gobierno, es el 6, que respecto a lo que aquí se está comentando, dice así:

Las sociedades no podrán hacer por sí mismas reforma ni adición alguna en sus estatutos y reglamentos, ni ampliar el tiempo de su duración. Toda alteración que acordaren en su forma constitutiva o reglamentaria se someterá a la aprobación del Gobierno, sin la cual será nula, ineficaz (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, en líneas generales, la intervención del Gobierno, una vez constituida y autorizada la compañía, se preveía para los casos de modificación de la escritura fundacional o de sus reglamentos o estatutos. No se concedía a la Autoridad pública la facultad de intervenir constantemente en las sociedades por acciones.

El cambio sustancial de la política se produjo en el segundo texto del PL 1848, de fecha 16 de abril de 1847, presentado por la CCD. En esta nueva versión aparece la

¹²⁹³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, págs. 653 y 654.

¹²⁹⁴ PL 1848 de la CCD, de 16 de abril de 1847 (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393).

redacción del artículo 17, que permanecerá inalterada en las sucesivas versiones del PL 1848¹²⁹⁵. El acuerdo era unánime en las dos Cámaras Legislativas: la Autoridad pública ejercerá la inspección que conceptúe necesaria para que se cumpla la ley. La única voz discordante –que no contraria– de los parlamentarios pretendía enumerar las facultades de control para facilitar su ejercicio, pero no consiguió modificar el texto original, porque se pensó que la fórmula general de la redacción impedía la posible limitación de dichas facultades¹²⁹⁶.

Poco cabe añadir aquí sobre el contenido del artículo 17, pues los comentarios vertidos en el Congreso y en el Senado, que se exponen en un epígrafe posterior, son muy ilustrativos a este respecto. Sólo conviene recordar que se produce un cambio sustancial respecto a la función de vigilancia y control que hasta ese momento tenían los Jefes Políticos¹²⁹⁷. La redacción del artículo deja abierta la facultad de inspección al criterio político que el Gobierno estime más adecuada (*ejercerá la inspección que conceptúe necesaria*), ahora bien, con la clara limitación de no gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de la compañía.

Junto a los artículos del Reglamento de 1848 que concretan determinados aspectos del artículo 17 de la Ley de 1848, y que se exponen a continuación, cobran especial relevancia los comentarios más arriba expuestos sobre la Instrucción del MCIOP para los Gobernadores civiles de las Provincias de 26 de enero de 1850 en la que se recogen las líneas generales de la política administrativa del Gobierno de aquel momento.

C) EL REGLAMENTO DE 1848

El artículo 17 de la Ley de 1848 establece, en términos muy generales, que el Gobierno *ejercerá la inspección que conceptúe necesaria*, porque prefiere no descender en el texto legal a detalles que podrían limitar en la práctica esta facultad. Pero el Reglamento de 1848, de rango inferior, es una norma más adecuada para pormenorizar el ejercicio de la inspección. Aunque el Reglamento de 1848 no se modificará durante la vigencia de la Ley de 1848, esta decisión legislativa permitía al Poder Ejecutivo variar los criterios de control, según la evolución de la actividad económica y en función de los diferentes sectores.

A continuación se comenta el régimen de vigilancia e inspección establecido en el Reglamento de 1848.

1. Régimen general de la vigilancia e inspección

El artículo del Reglamento de 1848 que establece el régimen general del ejercicio de la vigilancia e inspección es el 30, cuyo texto se transcribe para comentar brevemente.

¹²⁹⁵ Que se presentaron el 23 de abril de 1847, el 18 de diciembre de 1847, el 29 de diciembre de 1847 y el 11 de enero de 1848.

¹²⁹⁶ Se trata de la enmienda planteada por los Senadores Sres. Conde de Vigo y Pérez Seoane y de la contestación del Ministro de CIOP, Sr. Bravo Murillo (DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, págs. 294 y ss.) que se comenta en el epígrafe sobre los debates parlamentarios.

¹²⁹⁷ Aunque ya tenían asignadas las cuestiones de orden público relacionadas con las reuniones de la junta de socios.

Las sociedades mercantiles por acciones estarán constantemente bajo la inspección del gobierno y del Jefe político de la provincia de su domicilio en cuanto a su régimen administrativo, y a la exacta observancia de sus estatutos y reglamentos, conforme está declarado en el artículo 17 de la ley de 28 de Enero. El gobierno, con el debido conocimiento de causa, y oído el Consejo Real, suspenderá o anulará, según estimare procedente la autorización de las compañías que en sus operaciones o en el orden de su administración faltaren al cumplimiento de las disposiciones legales o de sus estatutos.

En primer lugar, el texto del Reglamento introduce junto al Gobierno como titular de la potestad de control, a los Jefes Políticos. En segundo lugar, se cita expresamente el artículo 17 de la Ley de 1848, reiterando que la vigilancia debe ser *constante* y haciendo una referencia al cumplimiento de los estatutos y reglamentos sociales, aunque esto último no lo dice expresamente dicho artículo 17. Además se omite –probablemente no por olvido– la limitación establecida en el artículo 17 a la inspección: *sin gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías*.

Interesa ahora analizar el contenido de la última frase del artículo 30 del Reglamento de 1848. El Gobierno queda autorizado, en determinadas circunstancias, a suspender o, incluso, anular la autorización en caso de que la compañía faltare al cumplimiento de las disposiciones legales o sus estatutos. Esta disposición, en nuestra opinión, debía haber sido objeto de aprobación parlamentaria. En este punto, el Reglamento de 1848 excede su competencia y establece unas causas de anulación de la autorización que no se encuentran recogidas en la Ley de 1848.

En efecto, otro artículo de la Ley de 1848, el 11, se establece como causa de anulación de la autorización cualquier modificación de los estatutos o de los reglamentos sociales que no obtenga la aprobación del Gobierno. El contenido de este artículo fue debatido en el Senado. El Sr. Armendáriz propuso volver a una versión anterior del texto en la que se clarificaba que la anulación no era como consecuencia de que el Gobierno no aprobara la reforma, sino exclusivamente si la sociedad la ejecutara:

*... si una reforma proyectada en los estatutos de una Sociedad no se lleva a cabo, no pasará de ser un pensamiento, un proyecto, un conato; y los pensamientos, y los proyectos, y los conatos no pueden castigarse, y menos con una pena tan dura como la disolución de la Sociedad. Si por el contrario, no era ya un proyecto, sino que había tenido efecto, debía castigarse como propone la Comisión actual que se castigue*¹²⁹⁸.

Se ha transcrito esta intervención, pues en ella se califica a la anulación de la autorización como una “pena” muy “dura”. Aunque la enmienda del Senador Sr. Armendáriz no prosperó (lamentablemente, porque su matización era correcta) es útil a los efectos de lo que más arriba se estaba comentando: facultar para anular la autorización de *compañías que en sus operaciones o en el orden de su administración faltaren al cumplimiento de las disposiciones legales o de sus estatutos* debía haberlo aprobado el Parlamento y no el Gobierno.

¹²⁹⁸ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 266. Estas palabras son del entonces Ministro de CIOP, Sr. Bravo Murillo, con las que resumió la enmienda del Senador Sr. Armendáriz.

Por último, el artículo 30 del Reglamento de 1848 impone dos requisitos para que el Gobierno pueda anular la autorización. Primero, que lo haga *con el debido conocimiento de causa* y, segundo, que previamente solicite el parecer del Consejo Real.

2. Disposiciones específicas sobre la vigilancia e inspección

Junto al régimen general establecido en el artículo 30 del Reglamento de 1848, este texto normativo recoge otras disposiciones específicas en relación a la función de vigilancia e inspección, que se señalan a continuación.

El artículo 13 establece unas cuestiones que el Jefe Político debe examinar en la documentación que se presente solicitando la autorización. Como ya se dijo al principio de este capítulo, se pueden diferenciar dos ámbitos en la vigilancia e inspección. En primer lugar, todas las actuaciones de la Autoridad pública en la fase anterior a la obtención de la autorización, que se han comentado en el capítulo relativo al régimen de autorización. Y, en segundo lugar, el periodo posterior a la concesión de la autorización. Pues bien, el artículo 13 hace referencia al primer ámbito, pero hay dos menciones que trascienden al segundo y, por su importancia, deben recogerse ahora:

3. Si el capital prefijado en los estatutos sociales puede graduarse suficiente para el objeto de la empresa¹²⁹⁹; si esta convenientemente asegurada su recaudación; si las épocas establecidas para los dividendos pasivos de las acciones están combinadas de manera que la caja social se halle suficientemente provista para cubrir sus obligaciones.

4. Si el régimen administrativo y directivo de la compañía ofrece las garantías morales que son indispensables para el crédito de la empresa y la seguridad de los intereses de los accionistas y del público (el subrayado es nuestro).

En efecto, el seguimiento del desembolso de los dividendos pasivos, así como las garantías morales de los administradores¹³⁰⁰, son dos disposiciones que regulan aspectos específicos de la vigilancia e inspección por la Autoridad pública.

El artículo 29 consagra otra obligación concreta de los Jefes Políticos, en este caso en relación a la comprobación de la efectiva constitución del depósito de acciones por los administradores como garantía del ejercicio de su cargo.

Además, el Reglamento de 1848 regula el deber de inspección, por la Autoridad pública, de una cuestión fundamental en la vida de una sociedad: la contabilidad. Así, establece el artículo 34:

¹²⁹⁹ Con motivo del Proyecto de 1926, de reforma del CCom 1885, PÉREZ SERRANO puso como ejemplo de la máxima intervención de la Autoridad pública este punto concreto: ... *el sistema de autorización gubernativa, tan extremosa y severa, que la Jefatura política de las Provincias tenía que informar incluso sobre si el capital previsto debía reputarse suficiente para el objeto de la empresa* (PÉREZ SERRANO, N. (1927): “La proyectada reforma del Código de comercio: compañías anónimas y limitadas” en RDP, tomo XIV, enero – diciembre, pág. 6.

¹³⁰⁰ Se puede consultar un comentario detallado sobre esta cuestión en el capítulo sobre el régimen de los administradores.

Anualmente formalizaran las compañías mercantiles por acciones un balance general de su situación en que se comprenderán todas las operaciones practicadas en el año, sus resultados y el estado de su activo y pasivo. Estos balances autorizados por los administradores de la compañía bajo su responsabilidad directa y personal, y después de reconocidos y aprobados en junta general de accionistas, se remitirán al Jefe político de la provincia, quien dispondrá su comprobación y hallándose exactos y conformes con los libros de la compañía, se imprimirán y publicarán en el Boletín oficial de la provincia, comunicándose asimismo al tribunal de Comercio del territorio (el subrayado es nuestro).

Queda claro que no es el Jefe Político quien comprueba el balance general de situación, puesto que normalmente no tendría ni la formación ni la experiencia necesaria, pero tiene la obligación de encargar su comprobación o revisión a alguien con la pericia necesaria para ello. En otros lugares del presente trabajo¹³⁰¹ se comenta que, desde un punto de vista de práctica contable, las compañías anónimas presentaban una excepción muy importante respecto a los demás tipos societarios mercantiles: aquéllas no quedaba sometidas al “secreto de la contabilidad” y, por eso, se entiende el contenido del artículo 34.

En la práctica, los Jefes Políticos se encontraron con muchas dificultades para poder inspeccionar las cuentas anuales de las sociedades, sobre todo durante los primeros años de vigencia de la Ley de 1848. Fruto de esa situación fue el RD de 22 de marzo de 1850¹³⁰², del MCIOP a los Gobernadores civiles de las Provincias¹³⁰³ en el que les instaba a emplear mayor diligencia y empeño para conseguir comprobar las cuentas aprobadas por las sociedades.

Otro artículo del Reglamento de 1848 relacionado con la contabilidad es el 37, que dispone lo siguiente:

Los Jefes políticos darán cuenta al Gobierno del estado de cada compañía por acciones que hubiere en su territorio según el resultado del balance anual, exponiendo las observaciones que estimaren conducentes en las materias que sean de interés de la administración.

Además de estas comunicaciones anuales pondrán en conocimiento del Gobierno para la resolución correspondiente toda novedad que ocurra en el régimen directivo y administrativo de las compañías que pueda perturbarlo ó que produzca alguna alteración en la observancia de sus estatutos.

El primer párrafo se encuentra enlazado con el artículo 34, que se acaba de comentar, en relación a la comprobación del balance anual o balance general de situación. Aquí se establece la obligación de informar al Gobierno sobre el resultado de dicho balance anual y de cualquier otra cuestión relacionada con esta materia.

El segundo párrafo, constituye la obligación del Jefe Político de informar al Gobierno de cualquier novedad que afecte a la administración de la compañía y al

¹³⁰¹ En los capítulos sobre los órganos sociales: la junta general y los administradores.

¹³⁰² GdM de 25 de marzo de 1850, núm. 5716.

¹³⁰³ Que, como se recordará, sustituyeron a los Jefes Políticos.

cumplimiento de los estatutos. Esta obligación presenta una doble faceta: primero, la diligencia por parte del Jefe Político de informarse sobre la situación de las compañías que dependen de él, así como la valoración de potenciales riesgos; y, segundo, informar diligentemente al Gobierno de las posibles alteraciones del cumplimiento de la Ley y de los estatutos y reglamentos sociales.

Por último, cabe destacar otra alusión concreta a la vigilancia de los Jefes Políticos, que realiza el Reglamento de 1848 en su artículo 38, que establece que

(s)iempre que de resultas de la inspección que la administración ha de ejercer sobre las sociedades por acciones o por los documentos que estas deben someter a su comprobación o por cualquiera otro medio legal constare haberse perpetrado algún delito en el manejo directivo y administrativo de la sociedad, procederá el Jefe político conforme está prescrito en el párrafo 5 del artículo 5 de la ley de 2 de Abril de 1 845.

En el primer inciso de este artículo se recogen dos fuentes de conocimiento e información de los Jefes Políticos para desarrollar su función de control: los documentos que deben presentarles las compañías (fundamentalmente las cuentas anuales, aunque no sólo éstas) y cualquier otro medio legal que puedan utilizar. El contenido de esto último es muy extenso, aunque limitado por la misma legalidad. En el último inciso del artículo se cita la Ley de 1845, que establece las funciones y facultades de los Jefes Políticos y, concretamente, su artículo 5.5 que ha sido objeto de comentario en el epígrafe anterior sobre la Ley de 1845¹³⁰⁴.

3. La vigilancia e inspección de las compañías existentes antes de la promulgación de la Ley de 1848

El Reglamento de 1848 dedica otro grupo de disposiciones al deber de vigilar e inspeccionar, por parte de los Jefes Políticos, la adaptación de las compañías existentes el 28 de enero de 1848 a la nueva legislación. Probablemente este aspecto exigió bastante atención de la Autoridad pública durante los meses posteriores a la promulgación de la Ley y del Reglamento de 1848.

El Jefe Político debe presidir la junta que convoquen los administradores para decidir si la compañía solicita la autorización o procede a la liquidación de la misma¹³⁰⁵. Si los administradores incumplen esta obligación dentro del término de cincuenta días previsto por el Reglamento de 1848, el Jefe Político procederá

*... a convocar la junta general de accionistas bajo su presidencia o la de otro empleado público en quien delegare al efecto*¹³⁰⁶.

¹³⁰⁴ El artículo 5.5 de la Ley de 1845 establecía:

Suspender en casos urgentes a cualquier funcionario o empleado dependiente del Ministerio de la Gobernación de la Península, dando inmediata cuenta al Gobierno.

En el epígrafe anterior sobre la Ley de 1845 se recoge el contexto general de esta disposición, así como posibles interpretaciones y aplicaciones de su artículo 5.5 al supuesto concreto de las compañías por acciones.

¹³⁰⁵ Artículo 39 del Reglamento de 1848.

¹³⁰⁶ Artículo 40 del Reglamento de 1848.

En caso de que la compañía aprobara en junta general solicitar la correspondiente autorización, la dirigirá al Gobierno, exponiendo los motivos y acompañando certificación del acuerdo de la junta y de los estatutos y reglamentos. El Jefe Político debe tramitar el expediente, formándose

*(d)entro del término improrrogable de quince días el balance general que demuestre la situación de la compañía y la calificación de su activo, y comprobada que sea la exactitud de aquel documento se remitirá el expediente al Gobierno para la resolución conveniente...*¹³⁰⁷

Por lo tanto, el Jefe Político, junto a dar trámite a la solicitud de la compañía, debe inspeccionar la exactitud y veracidad del balance general de situación. Esta comprobación, como se dice en el artículo 34 del Reglamento de 1848, puede ser encargada por el Jefe Político a un perito. En este sentido, comenta BERNAL LLORÉNS¹³⁰⁸:

El Reglamento establecía que las sociedades existentes en el momento de su aprobación debían solicitar la autorización para continuar como sociedades anónimas en dos meses, previa aprobación de su Junta de Accionistas, en caso contrario quedarían disueltas. Disponemos de la decisión del Gobierno respecto de la práctica totalidad de las sociedades que solicitaron la autorización (...). Las decisiones del Gobierno (...) contaron generalmente con la colaboración de las Juntas de Comercio que eran nombradas para confrontar las cuentas de las sociedades. Se puede observar que las autoridades realizaron un considerable esfuerzo para que sólo continuasen las sociedades anónimas saneadas financieramente, siendo el resultado de la comprobación, o auditoría, de los libros de cuentas el criterio dominante.

Este comentario pone de manifiesto el interés y la dedicación de los Jefes Políticos en su labor de vigilancia e inspección, de manera que trataron de asegurar, durante los primeros años de vigencia de la Ley de 1848, que las compañías presentaban, primero, unas cuentas veraces y, segundo, que se encontraban en una situación financiera adecuada para seguir desarrollando sus actividades.

Por otro lado, el artículo 43 del Reglamento de 1848 establece el deber de los Jefes Políticos de dar cuenta al Gobierno de todas las compañías por acciones domiciliadas en su territorio que, una vez transcurrido el plazo de dos meses desde la promulgación de la Ley de 1848, no hubieran solicitado la autorización.

Por último, en el caso de que la compañía aprobara la disolución o no presentara la solicitud de autorización, el Jefe Político tenía la obligación de vigilar y controlar la liquidación de la sociedad. Esto se concretaba mediante la correlativa obligación de los liquidadores de *dar cuenta mensualmente del estado de la liquidación al Jefe Político de la provincia del estado en que se hallare, y acreditar asimismo a su conclusión haber quedado canceladas todas las resultas de la misma liquidación*¹³⁰⁹. La Autoridad

¹³⁰⁷ Artículo 42 del Reglamento de 1848.

¹³⁰⁸ BERNAL LLORÉNS, M. (2004): "La regulación ...", pág. 74.

¹³⁰⁹ Artículo 44 del Reglamento de 1848, que termina con el siguiente párrafo

pública debía, por tanto, inspeccionar los estados mensuales de liquidación y si no los recibía, tomar las medidas necesarias para que los liquidadores se los enviaran. Además, debía verificar la correcta finalización de todas las operaciones de liquidación.

D) LA RO DE 22 DE MARZO DE 1850, DIRIGIDA A LOS GOBERNADORES CIVILES SOBRE LA FORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y ENVÍO AL GOBIERNO DEL BALANCE ANUAL GENERAL DE SITUACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS POR ACCIONES

En otro capítulo¹³¹⁰ se han comentado las interesantes palabras de BERNAL LLORÉNS¹³¹¹ sobre el sistema contable de los comerciantes y de las compañías mercantiles, establecido por el CCom 1829: *el Código de comercio parte de la consideración de que la contabilidad es secreta*. Por este motivo, los artículos 34 y 37 del Reglamento de 1848, comentados anteriormente, suponen una ruptura radical con el régimen del CCom 1829. Las compañías por acciones quedaban obligadas no sólo a aprobar en junta de socios las cuentas anuales, sino que debían publicarlas y someterlas al examen del Gobernador civil de la Provincia quien, a su vez, tenía que dirigirlas –con los comentarios que estimara oportuno- al Gobierno.

Con estos breves antecedentes, cabe hacerse una idea de las dificultades que encontraron los Gobernadores civiles para cumplir esta función. La situación de falta de información de las compañías que, a su vez, impedía el cumplimiento de la obligación del Gobernador de enviar las cuentas anuales y sus comentarios al Gobierno, es la causa de la RO de 22 de marzo de 1850¹³¹², siendo Ministro de CIOP, el Sr. Seijas Lozano, que se comenta a continuación.

El texto es breve y enjundioso. Se pueden distinguir dos temas de fondo. El primero, se refiere a la denuncia del incumplimiento de la publicidad de las cuentas anuales, establecido por los artículos 34 y 37 del Reglamento de 1848, como desarrollo del artículo 17 de la Ley de 1848. Así dice la RO:

El artículo 34 del reglamento aprobado por S.M para la ejecución de la ley de 28 de Enero de 1848 sobre las sociedades por acciones dispone que por los administradores de las mismas se forme anualmente el balance general de su situación, que confrontado y hallado conforme con los libros, debe ser publicado en el Boletín Oficial de la provincia y comunicado al Tribunal de Comercio del Territorio. Este mismo balance, con las observaciones a que diera lugar, debe también ser dirigido al Ministerio por el Gobernador de la Provincia, según el artículo 37 del mismo reglamento. Ambas disposiciones son una consecuencia precisa del artículo 17 de la ley citada, que impone al Gobierno la obligación de vigilar que todas las compañías por acciones cumplan con las prescripciones de esta Ley; y mal pudiera ejercer esta

La inspección que sobre ellas se encarga a los Jefes políticos no obstará para que los interesados ejerciten judicialmente los derechos que les competan sobre los haberes de la compañía y para que su liquidación se haga legalmente.

¹³¹⁰ El capítulo sobre la junta general.

¹³¹¹ BERNAL LLORÉNS, M. (1998): “En torno a la regulación contable ...”, pág. 903,

¹³¹² GdM de 25 de marzo de 1850, núm. 5716.

vigilancia si sus delegados en las provincias no les facilitasen los medios de ejercerlas, que son los que se expresan en los ya referidos artículos del reglamento de 17 de Febrero de 1848.

Y, el segundo, recoge interesantes argumentos que fundamentan la decisión política del Legislador en relación a la vigilancia e inspección de las compañías por acciones por parte de la Autoridad pública. Se pueden señalar dos: por el privilegio de la responsabilidad limitada de los accionistas y por el prestigio del Gobierno, al ser responsable de la autorización de la compañía.

Respecto al primer argumento, se pueden destacar las siguientes palabras:

La sociedad anónima, a diferencia de las demás sociedades mercantiles que giran bajo la responsabilidad personal de sus socios, no tiene más crédito ni ofrece mejor garantía de la de su capital: perdido éste o comprometido en una especulación ruinosa, las terceras personas que hubiesen contratado con ella no tienen reclamación ninguna que dirigir contra los accionistas, cuyos nombres pueden serle desconocidos, y cuya responsabilidad está limitada al importe de sus acciones. Esta circunstancia especialísima de la asociación anónima, que constituye a su favor un modo privilegiado de contratar, la coloca en una dependencia más inmediata de la Administración Pública que la autoriza y hace necesaria la publicación periódica de su situación mercantil para que las terceras personas que con ella contraten sepan la responsabilidad que la sociedad les ofrece, y que no pueden apreciar como en las demás compañías mercantiles que giran bajo el crédito personal de sus socios (el subrayado es nuestro).

En cuanto al segundo argumento, relativo al daño del prestigio del Gobierno que autoriza cada compañía por acciones, dice la RO:

Además, en las sociedades por acciones se encuentra hasta cierto punto comprometido el nombre y crédito del Gobierno que las examina y autoriza, y esta circunstancia es otra razón más para que por cuantos medios la ley le concede vigile el buen manejo directivo y económico del capital social, y publique su situación, para que nunca la autorización del Gobierno sirva de capa a criminales agiotajes.

Se trata, sin duda, de un razonamiento coherente y en continuidad con el principio adoptado por el Legislador sobre la necesaria autorización (parlamentaria o gubernativa) de la compañía. El problema fue que la dependencia de estas sociedades respecto al Gobierno era tal que, como acertadamente se dice en el Preámbulo del Decreto de 1868,

(n)o lo quedaba a la compañía voluntad propia, ni en buena ley puede hacerse responsables a sus gerentes de acto alguno, sin que a la vez en ese mismo acto resulte responsable y punible la administración.¹³¹³

¹³¹³ GdM de 29 de octubre de 1868, núm. 303, pág. 6.

Es interesante comprobar que este mismo argumento del compromiso de la imagen del Gobierno por autorizar cada compañía, de nuevo será utilizado por el Legislador de 1868 para suprimir los Comisarios e inspectores que tenía el Gobierno en los Bancos y en las sociedades de crédito. Concretamente, se hace referencia en el Preámbulo del Decreto de 10 de diciembre de 1868 a que serán los administradores de dichas compañías los más interesados

*(e)n ejercer por si mismos una vigilancia eficaz, en vez de la ilusoria confiada al Gobierno, y dejará a éste libre de una responsabilidad que nunca debió tomar a su cargo...*¹³¹⁴

E) LA COMUNICACIÓN DE 16 DE ABRIL DE 1853 A LOS GOBERNADORES CIVILES PARA IMPEDIR QUE SOCIEDADES QUE AÚN NO HAN RECIBIDO LA AUTORIZACIÓN, EMITAN Y PONGAN EN CIRCULACIÓN SUS ACCIONES.

El artículo 12 de la Ley de 1848 establecía que *(h)asta que se haya declarado constituida la compañía no se podrá emitir ningún título de acción*. El Legislador trató de frenar los abusos y especulaciones que se habían producido en los años anteriores mediante las promesas de acciones y la venta de títulos antes de la puesta en funcionamiento de la compañía¹³¹⁵. Se trataba de una incorrecta actuación de administradores y fundadores que procuraban el aumento de la demanda y, por tanto, de la cotización de la acción, ante expectativas (no realidades) favorables a la concesión de alguna obra pública o privilegio particular.

Pues bien, parece ser que seguían repitiéndose este tipo de conductas aún después de haberse promulgado la Ley y el Reglamento de 1848 y por este motivo, el Ministro de Fomento (que desde el 21 de octubre de 1851 era la nueva denominación del MCIOP¹³¹⁶), dirigió la siguiente comunicación el 16 de abril de 1853 a los Gobernadores civiles de las Provincias¹³¹⁷:

La Ley de 28 de enero de 1848 y el Reglamento de 17 de febrero de 1848 sobre el establecimiento y autorización de las sociedades por acciones, ha impuesto al Gobierno la obligación, no solamente de procurar su riguroso cumplimiento, sino de impedir que se falseen y quebranten por medios indirectos. Las sociedades por acciones no tienen existencia legal hasta que no hayan recibido la autorización de S. M. o de la ley, en su caso, y por consiguiente, ínterin esta autorización no recaiga, aunque sea provisional, no pueden emitir ninguna clase de valores ni tener estos circulación legal en el mercado. Mas a pesar de esto tiene noticia el Gobierno de que algunas sociedades en proyecto, sin esperar la autorización indispensable, han emitido acciones o títulos provisionales de acción, y que éstos circulan como valores legales de crédito, lo

¹³¹⁴ GdM de 11 de diciembre de 1868, núm. 346, pág. 1.

¹³¹⁵ Se pueden encontrar más detalles sobre la cuestión en el capítulo sobre los antecedentes de la Ley de 1848.

¹³¹⁶ El cambio se produjo por RD de 20 de octubre de 1851 (GdM de 21 de octubre de 1851, núm. 6308), cuyo artículo 1 establecía:

El MCIOP, se denominará Ministerio de Fomento.

¹³¹⁷ GdM de 21 de abril de 1853, núm. 111.

que constituye una infracción manifiesta de la letra y del espíritu, no sólo de la ley especial de sociedades por acciones, sino del Código de comercio. Así pues, para corregir estos abusos y para evitar que en lo sucesivo se repitan, adoptará V. S. las medidas que su celo le sugiera para averiguar estas emisiones ilegales, denunciando a los infractores a los Tribunales competentes.

El Ministro pone en conocimiento de los Gobernadores esas situaciones de incumplimiento manifiesto de la Ley de 1848, para que lleven a cabo dos funciones. En primer lugar, averiguar si eso ocurre en su jurisdicción. Y, en segundo lugar, en caso de que así fuera, denunciasen a los responsables ante los Tribunales competentes, a parte de otras actuaciones y sanciones que, por sus facultades y competencias, pudieran imponerles.

F) EL RD DE 15 DE FEBRERO DE 1854, SOBRE LA INSPECCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES POR ACCIONES DOMICILIADAS EN MADRID. EL RD DE 15 DE AGOSTO DE 1854, QUE DEROGA EL RD DE 15 DE FEBRERO DE 1854

El 15 de febrero de 1854, el Ministro de Fomento, D. Agustín Esteban Collantes, decidió crear un nuevo cargo de “delegado especial” en las compañías por acciones domiciliadas en Madrid, dependiente directamente de su Ministerio. El motivo de esta decisión fue la dificultad práctica de cumplir las funciones de vigilancia e inspección de dichas sociedades. En la Exposición del RD de 15 de febrero de 1854¹³¹⁸ se recogen detalladamente las razones que le impulsaron a plantear esta iniciativa a la Reina.

Los Gobernadores civiles de las Provincias (excluyendo el de Madrid) se encontraban en condiciones de realizar adecuadamente sus tareas de inspección de las sociedades por acciones domiciliadas en sus territorios, porque eran muy pocas y *no alcanzan a distraerlos en manera alguna de las vastas y delicadas atenciones de gobierno y administración activa que las leyes encomiendan a su autoridad y celo*¹³¹⁹.

En cambio, la situación en la que se encontraba el Gobernador de Madrid y las compañías domiciliadas en su territorio era diferente. La Exposición de Motivos enumera las siguientes circunstancias:

- 1. En Madrid tienen su domicilio la mayor parte y las más considerables compañías mercantiles por acciones;*
- 2. aquellas cuyos objetos se extienden a varias provincias de la Monarquía;*
- 3. aquellas con las cuales los intereses pecuniarios del Estado están más estrechamente relacionados, bien por razón de las subvenciones y garantías con las que auxilia, bien por la participación directa que en sus beneficios le corresponde; y,*
- 4. en Madrid, las atenciones del Gobernador civil son tantas y tan perentorias a veces e importantes, que toda solicitud y cuidado por llenar cada una de*

¹³¹⁸ GdM de 17 de febrero de 1854, núm. 413.

¹³¹⁹ Exposición de Motivos del RD de 15 de febrero de 1854.

sus obligaciones no bastan a cumplir como se conviene con este nuevo encargo, ni a ejercer debidamente la inspección incesante y esmerada que el reglamento de 17 de Febrero ha hecho extensiva a esta clase de Autoridades.

La situación era complicada y esto llevó al Gobierno a nombrar unos *interventores especiales*, que no pudieron cumplir su misión por los conflictos con otras Autoridades públicas. La citada Exposición de Motivos lo expresaba con claridad:

... el Gobierno mismo se ha visto obligado a nombrar interventores especiales, los cuales por carecer de un centro donde dirigir sus observaciones y de donde recibir a cada momento las instrucciones y advertencias necesarias proceden sin la asiduidad y precisión indispensables o se exponen a producir conflictos y complicaciones perjudiciales con la Autoridad civil de la provincia.

Según se deduce de este texto, era difícil que el Gobierno cumpliera con eficacia las funciones de vigilancia e inspección de las compañías por acciones domiciliadas en Madrid. Por este motivo, el RD instaura la figura del delegado especial del Ministerio de Fomento ante dichas sociedades y lo hace según se señala a continuación.

*La inspección y demás atribuciones que el Artículo 17 de la Ley de 28 de Enero de 1848 sobre sociedades mercantiles por acciones encomienda al Gobierno para el mejor servicio de las mismas, y que el artículo 30 y otros del reglamento de 17 de Febrero de dicho año extiende a los Jefes políticos, se ejercerán en los sucesivos por el Ministro de Fomento respecto de las compañías que tienen su domicilio en la Corte*¹³²⁰.

Concretamente, para el desempeño de las funciones que el Reglamento de 1848 atribuye al Jefe Político, se establece *un delegado especial dependiente del Ministerio de Fomento*¹³²¹. De dicho delegado dependerán en adelante los interventores especiales de las sociedades por acciones domiciliadas en Madrid, *así como cualesquiera otros funcionarios que hoy entiendan o en lo sucesivo entendieren en la instrucción, inspección y vigilancia de los asuntos relativos a las indicadas compañías*¹³²².

Pero esta decisión política no resolvió los problemas que pretendía atajar. Más bien al contrario, se incrementaron las dificultades y descoordinaciones entre las diferentes Autoridades públicas, todo ello unido a un cambio en el titular de la cartera ministerial. Por este motivo, el nuevo Ministro de Fomento, Francisco de Luján, mediante RD de 15 de agosto de 1854¹³²³ cesa a *D. Pedro Víctor y Pico, Inspector de las sociedades mercantiles por acciones en virtud de supresión de la indicada plaza*. Y mediante otro RD de la misma fecha, 15 de agosto de 1854¹³²⁴, se suprime el citado cargo en los siguientes términos:

Queda derogado mi Real decreto de 15 de Febrero último, por el que se encomendaba a un delegado especial la inspección y atribuciones que por el

¹³²⁰ Artículo 1 del RD de 15 de febrero de 1854.

¹³²¹ Artículo 2 del RD de 15 de febrero de 1854.

¹³²² Artículo 3 del RD de 15 de febrero de 1854.

¹³²³ GdM de 17 de agosto de 1854, núm. 593, pág. 2.

¹³²⁴ GdM de 17 de agosto de 1854, núm. 593, pág. 2.

*artículo 30 del reglamento de sociedades mercantiles por acciones estaba a cargo del Gobernador de esta provincia respecto de las que tienen su domicilio en esta corte*¹³²⁵.

En consecuencia, se volvía a la situación anterior en la que el Gobernador civil de la Provincia de Madrid era el responsable de la vigilancia e inspección de las compañías por acciones domiciliadas en su territorio.

G) EL REGLAMENTO DE 1857, DE LAS FUNCIONES QUE DEBEN EJERCER LOS GOBERNADORES DE LA PROVINCIAS Y DELEGADOS ESPECIALES DEL GOBIERNO CERCA DE LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES POR ACCIONES AL INSPECCIONAR ESTAS SOCIEDADES

Tras un periodo de diez años de vigencia de la Ley y del Reglamento de 1848, se contaba ya con suficiente experiencia y perspectiva para desarrollar y concretar las funciones de vigilancia e inspección de las compañías por acciones. Tras las decisiones erráticas de nombrar un delegado especial para las sociedades por acciones domiciliadas en Madrid y su rápida derogación, aparece una RO de 12 de diciembre de 1857 que aprueba el *Reglamento de las funciones que deben ejercer los Gobernadores de provincias y Delegados especiales del Gobierno cerca de las compañías mercantiles por acciones al inspeccionar estas sociedades*¹³²⁶.

Cabe advertir, para enmarcar históricamente este Reglamento, que en los años 1855 – 1856 se promulgaron las leyes reguladoras de los bancos de emisión, de las sociedades de crédito y de las compañías concesionarias de obras públicas¹³²⁷. En esas leyes el Legislador evoluciona hacia una flexibilización de determinados aspectos del régimen establecido por la Ley y el Reglamento de 1848¹³²⁸, si bien se mantienen las previsiones relativas a la vigilancia e inspección por la Autoridad pública, sobre todo en lo relativo a los estados financieros¹³²⁹. Aunque el Reglamento de 1857 contiene unos artículos específicos sobre las sociedades concesionarias de obras públicas, se encuentra influenciado, tanto por la experiencia de la vigencia de diez años de la Ley y del Reglamento de 1848, como por las citadas leyes de 1855 – 1856.

El texto del Reglamento de 1857 se puede considerar como una RO que desarrolla un concreto aspecto del Reglamento de 1848, el relativo a la vigilancia e inspección por parte de la Autoridad pública. Se encuentra rubricado por el entonces Ministro de Fomento, D. Pedro Salaverría y Charitu y se dirige al Sr. Director General de Agricultura, Industria y Comercio para fijar *las funciones que deben ejercer los Gobernadores de provincia y Delgados especiales del Gobierno cerca de las compañías*

¹³²⁵ Artículo 1 del RD de 15 de agosto de 1854.

¹³²⁶ GdM de 13 de diciembre de 1857, núm. 1804.

¹³²⁷ LF (GdM de 6 de junio de 1855, núm. 886), LSCOP (GdM de 12 de julio de 1856, núm. 1286), LB (GdM de 29 de enero de 1856, núm. 1121) y la LSCr de igual fecha y publicación en la GdM que la anterior.

¹³²⁸ Como la autorización por RD, la emisión de acciones al portador, etc.

¹³²⁹ Para más detalles, se puede consultar el capítulo sobre las sociedades por acciones reguladas por leyes especiales.

*mercantiles por acciones al inspeccionar estas empresas, de manera que llegue a conocimiento de las expresadas sociedades y demás efectos consiguientes*¹³³⁰.

El Reglamento parte de la siguiente premisa: *(l)a inspección de las sociedades mercantiles por acciones que las leyes encomiendan al Gobierno, corresponde ejercerla inmediatamente a los Gobernadores de las provincias o a delegados especiales nombrados al efecto*¹³³¹. En realidad, el Reglamento de 1848 atribuía esta función de inspección a la Autoridad pública, concretamente al Gobierno y a los Jefes Políticos, posteriormente denominados Gobernadores civiles. La figura del delegado especial, surgió por la necesidad de asegurar la correcta inspección, sobre todo en la plaza de Madrid, en la que se concentraba el mayor número de compañías por acciones. Este cargo, por tanto, no lo prevé ni la Ley ni el Reglamento de 1848, pero se entiende que es una forma de concretar o desarrollar la disposición general del artículo 17 de la Ley de 1848 en el que se otorgan al Gobierno las más amplias facultades para realizar la vigilancia e inspección de estas sociedades.

Para evitar problemas de competencia (o, al menos, para tratar de que desaparecieran), el Reglamento establece que los delegados especiales *dependerán del Gobernador de la provincia respectiva, aun cuando se comunicarán directamente con el Gobierno o con la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio*¹³³². Además, el Gobernador convocará a los administradores de la compañía para *dar posesión al Delegado y hará que conste dicha posesión en acta de la reunión que al efecto se celebre*¹³³³.

A continuación se comentan las diversas funciones que el Reglamento de 1857 atribuye a los Gobernadores y a los delegados especiales.

1. Vigilancia e inspección en la fase anterior a la autorización de la compañía

El artículo 4 del Reglamento de 1857 relaciona los aspectos que los Gobernadores y los Delegados deben revisar e inspeccionar durante el proceso de autorización de la compañía. En realidad se trata de una repetición de varios artículos de la Ley y del Reglamento de 1848, con algún añadido en temas de detalle. A continuación se transcriben esos puntos y se relacionan con los preceptos de las normas de 1848.

Artículo 4.1: *comprobar si continua existente en Caja el importe del primer dividendo pasivo*. Reiteración del artículo 9 de la Ley de 1848 y de los artículos 13.3, 21, 22 y 23 del Reglamento de 1848.

Artículo 4.2: *que la sociedad se reúna en junta general para dar cuenta de la ley o del Real decreto de autorización, procediendo inmediatamente a la elección de las personas que hayan de tener a su cargo la administración de la compañía, y la inspección o vigilancia de esta misma administración si es sociedad anónima*. Relacionado, en parte, con el artículo 25 del Reglamento de 1848.

¹³³⁰ Preámbulo de la RO de 12 de diciembre de 1857.

¹³³¹ Artículo 1 del Reglamento de 1857.

¹³³² Artículo 2 del Reglamento de 1857.

¹³³³ Artículo 3 del Reglamento de 1857.

Artículo 4.3: *que la junta general asigne a los mandatarios la remuneración que hayan de disfrutar.* Hace referencia al artículo 5 del Reglamento de 1848.

Artículo 4.4: *que los mismos mandatarios depositen en el término de 15 días el número de acciones que se haya fijado por los estatutos para garantía de la gerencia.* Desarrollo del artículo 13 de la Ley de 1848 y, más concretamente, del artículo 29 del Reglamento de 1848.

Artículo 4.5: *que en el propio término se aprecien los objetos, valores, concesiones o cualesquiera efectos que algún socio o compañía aporte a la nueva sociedad, graduándose su importe por los medios legales o convencionales que se estipulen entre la administración definitiva de la compañía y el dueño de los objetos aportados, cuyo justiprecio se acreditará al Gobernador o Delegado, a fin de que comprueben necesariamente la exactitud de la operación por los medios más conducentes.* Relacionado con los artículos 3, 4 y 24 del Reglamento de 1848.

Artículo 4.6: *que en el plazo de 15 días se remitan al Tribunal de Comercio, en cuyo territorio tenga su domicilio la sociedad, copias de sus estatutos y reglamentos y de la ley o del Real decreto de autorización de la compañía.* Desarrolla el artículo 26 del Reglamento de 1848, añadiendo que se incluya en la remisión al T. de c. copia de la ley o del RD de autorización de la compañía.

Y, por último, el artículo 4.7: *que la sociedad dé principios a sus operaciones dentro del plazo fijado al efecto. Expirado este plazo, los Delegados darán cuenta al Gobierno de haberse o no cumplido todos los requisitos expresados, remitiendo copia literal del acta de la primera junta general, e informando circunstanciadamente acerca de lo que resulte y se haya ejecutado en observancia de lo dispuesto por el párrafo 6 de este artículo.* Proviene del artículo 10 de la Ley de 1848 y del artículo 23 del Reglamento de 1848. El texto introduce un detalle importante que no se encontraba explicitado en los textos del 48¹³³⁴ y que, aunque se refiera sólo a los Delegados, incluía también a los Gobernadores: la obligación de comunicar al Gobierno el inicio o no de las operaciones de la compañía, remitiendo copia literal del acta de la primera junta de accionistas. Además, se debía informar expresamente del cumplimiento de la remisión de la documentación prevista al T. de c., lo cual manifiesta la preocupación del Gobierno por la publicidad de todos los documentos sociales.

2. Participación y seguimiento de las reuniones de la junta general, de la dirección y de la vigilancia social.

En los debates parlamentarios del PL 1848 se trató en varias ocasiones de la participación de la Autoridad pública en las juntas de accionistas. Concretamente, en la sesión del Senado del 24 de diciembre de 1847¹³³⁵, los Senadores Sres. Pérez de Seoane y Conde de Vigo presentaron una enmienda para que el artículo 17 detallara las facultades de inspección y control, entre las que se encontraba la asistencia del Jefe Político a las juntas generales o quien éste designara entre determinados cargos públicos.

¹³³⁴ Si bien se trataba de una consecuencia lógica.

¹³³⁵ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 19, págs. 294 y ss.

Aunque la enmienda no prosperó, los partidarios de esta corriente continuaron su labor, que tuvo como fruto varios artículos del Reglamento de 1857, entre los que cabe destacar los dos siguientes.

En primer lugar, los delegados especiales asumieron la obligación de asistir a *todas las juntas generales y a las de dirección, vigilancia o gobierno de cada compañía, correspondiéndoles la presidencia honorífica sin voz ni voto*¹³³⁶. Los delegados no tenían la facultad de encargar la asistencia a terceros. Aunque no tuvieran derecho de voz ni de voto, su presencia les permitía informarse de primera mano de la situación de las compañías.

Y, en segundo lugar, debía levantarse acta de toda reunión de junta general ordinaria y extraordinaria. Copia literal de ellas tenía que enviarse al Gobernador o delegado quienes, a su vez, las debían remitir al Gobierno, informando de lo que estimaren oportuno¹³³⁷. Las formalidades de las actas y su transcripción al libro de actas estaban también intervenidas por el Gobernador o el delegado. En este sentido, *(a)demás de los libros Diario, Mayor y de Inventarios, llevarán las empresas el de Transferencia de acciones, el de Actas de sus juntas generales y de gobierno y cualesquiera otros que convengan a su mejor contabilidad y orden, debiendo los Gobernadores o Delegados rubricar y anotar dichos libros, con expresión de estar sellados los que deban tener este requisito, en cumplimiento de lo dispuesto por el Real decreto de 8 de Agosto de 1851*¹³³⁸ *e instrucción de 1 de Octubre del mismo año*¹³³⁹.

3. Inspección de los estados financieros

En relación a los estados contables y financieros de las compañías, el Reglamento de 1857 establece una serie de concreciones respecto a lo previsto por la Ley y el Reglamento de 1848, que son de gran interés para conocer la política del Gobierno en relación a la vigilancia e inspección de las sociedades por acciones. Se trata de unos importantes antecedentes sobre la legislación de auditoría española¹³⁴⁰.

La primera cuestión que establece el Reglamento de 1857 es de carácter general y no estaba prevista en los textos del 48: los Gobernadores y los delegados *cuidarán especialmente de que las compañías lleven su contabilidad con arreglo a lo previsto por el Código de comercio*¹³⁴¹. Posiblemente el desempeño de esta función de auditoría la

¹³³⁶ Artículo 7 del Reglamento de 1857.

¹³³⁷ Artículo 17 del Reglamento de 1857.

¹³³⁸ RD otorgado por el Ministro de Hacienda (D. Juan Bravo Murillo) en virtud de la autorización concedida por la Ley de 24 de enero de 1851 *para reformar las leyes vigentes sobre imposición y cobranza de la renta de papel sellado, documentos de giro, multas y penas de Cámara*, cuyo capítulo V “Del papel sellado de que se debe hacer uso en los documentos de comercio”, regulaba esta materia en su Sección Tercera “De los libros de comercio” (GdM de 10 de agosto de 1851, núm. 6236, pág. 3). El RD fue desarrollado por la Instrucción del mismo Ministerio de 1 de octubre de 1851, *para llevar a efecto el Real decreto de 8 de Agosto de 1851 sobre imposición y cobranza de la renta del papel sellado, documentos de giro y multas* (GdM de 7 de octubre de 1851, núm. 6294, págs. 1 a 3).

¹³³⁹ Artículo 7 del Reglamento de 1857.

¹³⁴⁰ Aunque la terminología utilizada es diferente a la actual, cabe plantear este régimen como un antecedente de la labor verificadora, no sólo de la corrección formal de la aplicación de las normas contables, sino de la comprobación material de determinadas operaciones. En BERCOVITZ, A. (1982): “La auditoría en la legislación mercantil española hasta 1982” en *RDM*, núm. 165 -166, julio – diciembre, págs. 444 – 447, se hace referencia, sobre todo, al CCom 1829.

¹³⁴¹ Artículo 5 del Reglamento de 1857.

realizarían a través de expertos o peritos de entidades como las Juntas de Comercio. Las consecuencias de esta disposición son de un enorme calado, cuyo estudio excede del ámbito del presente trabajo.

El siguiente aspecto, y de importancia capital, fue instaurar la obligación de formar *cada tres meses estados de situación, entregando al Gobernador o delegado una copia de los mismos, a fin de que los comprueben con los libros y caja de la sociedad*¹³⁴². Se trata de otra manifestación del triunfo de la corriente política de mayor intervencionismo en las compañías anónimas. En la primera sesión del debate del PL 1848 en el Congreso de los Diputados, se planteó una enmienda para exigir que las sociedades presentasen un estado de situación semestral a la Autoridad pública¹³⁴³. Fue rechazada por demasiado intervencionista. Pero al cabo de 10 años se logró establecer no la obligación semestral, sino trimestral, lo cual indica el grado tan elevado de vigilancia e inspección en el que evolucionaba la política del Gobierno¹³⁴⁴.

Volviendo a la obligación de comprobación de los balances trimestrales de situación, el Reglamento de 1857, establece dos deberes muy concretos en las actuaciones de la Autoridad pública, también manifestación del espíritu intervencionista del Gobierno. Se trata, en primer lugar, de que *(s)i de dicha comprobación resultase que la sociedad tenga fondos o valores por depósitos y cuentas corrientes en Banco u otros establecimientos públicos legalmente autorizados, deberá el Gobernador o delegado verificar la efectividad de estas existencias*¹³⁴⁵. Esta previsión da una idea precisa del detalle al que quería llegar el Gobierno en la auditoría de los estados financieros.

En segundo lugar, *si resultan en caja talones de otras compañías o particulares que tengan también cuentas corrientes en alguno de dichos establecimientos, se practicará igual verificación*¹³⁴⁶.

Pero la cuestión no termina aquí. En caso de que los estatutos o reglamentos de una compañía establezcan la verificación periódica de arqueos de caja, los responsables de la misma *darán conocimiento de los días en que se efectúe esta operación al Gobernador de la provincia para que pueda asistir al acto por sí o por persona que le represente, y al Delegado para que precisamente concorra a los arqueos*¹³⁴⁷. Se instauró, por tanto, una inspección ocular o presencial de la Autoridad pública de los arqueos de la caja social. Además, *(c)uando de ellos resulte en caja la existencia de resguardos, talones o valores de los expresados en el artículo 8, procederá la Autoridad o el delegado a practicar en el mismo día del arqueo, o al siguiente, la verificación prevenida en el mismo artículo*¹³⁴⁸.

Los Gobernadores y los Delegados especiales debían verificar también, al comprobar los estados trimestrales y los arqueos de caja, *la existencia de los depósitos*

¹³⁴² Artículo 8 del Reglamento de 1857.

¹³⁴³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 80, págs. 1420 y ss. El Diputado proponente fue el Sr. Gonzalo Morón. Le respondió el entonces Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Vaamonde.

¹³⁴⁴ Es posible que se trate de una reacción más frente al Bienio Progresista que terminó en julio de 1856.

¹³⁴⁵ Párrafo segundo del artículo 8 del Reglamento de 1857.

¹³⁴⁶ Párrafo tercero del artículo 8 del Reglamento de 1857.

¹³⁴⁷ Artículo 10 del Reglamento de 1857.

¹³⁴⁸ Último párrafo del artículo 10 del Reglamento de 1857.

*de acciones que deban tener hechos los Directores y mandatarios de la compañía en garantía de su gerencia*¹³⁴⁹.

Una vez inspeccionadas y comprobadas las cuentas trimestrales y los arqueos, los Gobernadores y los delegados especiales tenían la obligación de remitir al Gobierno copia de los estados de cada trimestre con un informe relativo a la situación mercantil, existencia legal y estado de la compañía¹³⁵⁰. En esos informes trimestrales *se expresará precisamente si los actos de los mandatarios de la compañía inspeccionada se hallan arreglados estrictamente a las prescripciones legales, a los estatutos sociales y a los acuerdos de las juntas generales, cuando el objeto no sea de ley o de estatutos*¹³⁵¹. Sin perjuicio de estas comunicaciones, los Gobernadores y delegados darán parte de toda infracción cometida por dichos mandatarios contra las leyes, estatutos o acuerdos de la sociedad inmediatamente que tengan noticia y conocimiento de cualquier de estas faltas¹³⁵².

Por último, para que no quedara lugar a ninguna duda, el Reglamento de 1857 en otro artículo reitera la necesidad de presentar una copia de los balances generales a la Autoridad pública para que *los compruebe con los libros de la sociedad y calificando su activo y pasivo, remitan al Gobierno dichos balances con informe circunstanciado acerca de los mismos*. Como novedad, se exige que en el informe se manifieste *si la compañía ha repartido o imputado dividendos activos o alguna parte de ellos por cuenta de beneficios calculados y no realizados*. Esto manifiesta la preocupación del Gobierno por el reparto de dividendos ficticios, que no obedecían a beneficios reales. Por último, *(s)i al formarse dichos balances se redactan y publican memorias acerca del estado de la sociedad, remitirán también una copia o ejemplar impreso de dichas memorias*¹³⁵³.

Sin duda, una de las conclusiones que extrae el lector de estos artículos que regulan la inspección de los estados financieros, es que era tan intensa, que, irremediablemente, el Gobierno se hacía responsable de la exactitud y realidad de los estados financieros de todas las compañías por acciones. Esta situación extrema desapareció expresamente en los bancos y sociedades de crédito con el Decreto de 10 de diciembre de 1868, citado anteriormente, en el que el Legislador declara, entre otras cuestiones, que el Gobierno nunca debió tomar esa responsabilidad a su cargo¹³⁵⁴. Este razonamiento se hizo extensivo a todas las compañías por acciones.

4. Vigilancia de las sociedades concesionarias de obras públicas

Desde la promulgación de la Ley y del Reglamento de 1848 hasta la publicación del Reglamento de 1857 se produjeron varios acontecimientos legislativos en relación a las compañías mercantiles por acciones. Por lo que respecta a lo que ahora se está comentando, destacan las Leyes de 1855 y 1856 (dentro del periodo conocido como Bienio Progresista) sobre los bancos, las sociedades de crédito y las de ferrocarriles y

¹³⁴⁹ Artículo 11 del Reglamento de 1857.

¹³⁵⁰ Artículo 12 del Reglamento de 1857.

¹³⁵¹ Este último inciso no es de fácil interpretación.

¹³⁵² Artículo 12 del Reglamento de 1857.

¹³⁵³ Todas las citas de este párrafo se refieren al artículo 14 del Reglamento de 1857.

¹³⁵⁴ GdM de 11 de diciembre de 1868, núm. 346, pág. 1.

otras obras públicas. En el capítulo siguiente se analizan estas leyes especiales sobre sociedades anónimas.

El Reglamento de 1857 dedica dos artículos a la vigilancia e intervención por parte de la Autoridad pública de las sociedades concesionarias de ferrocarriles u otras obras públicas.

En primer lugar, respecto a la obligación de presentar trimestralmente un estado de situación¹³⁵⁵, el artículo 9 coordina este deber con la regulación específica que se había aprobado el año anterior, 1856, sobre las compañías concesionarias de obras públicas, de manera que se complementaran ambas normativas. Establece el citado artículo que

(l)os estados de situación que rindan las compañías concesionarias de ferrocarriles u otras obras públicas, contendrán todas las noticias y detalles relativos a los gastos e ingresos de la empresa, según lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de 11 de Julio de 1856.

El referido artículo 11 de la LSCOP regula las formalidades y el contenido de los estados de situación, así como la facultad del Gobierno para exigir la presentación de determinada documentación, en los siguientes términos:

Las compañías estarán obligadas a presentar al Gobierno de S. M., por conducto del Gobernador civil, un balance demostrativo y calificado de todo su haber activo y pasivo, que se publicará en la Gaceta, y siempre que el Gobierno lo pidiere, remitirán por el mismo conducto estados que den pleno conocimiento de sus operaciones, así como las demás noticias y detalles relativos a los gastos e ingresos de la empresa. El Gobierno podrá además hacer examinar, siempre que lo estime conveniente, la contabilidad y administración de las compañías, y comprobar sus existencias, nombrando a este efecto delegados, retribuidos por las mismas sociedades¹³⁵⁶, a quienes sus respectivos Directores, gerentes o administradores tendrán obligación de presentar cuantos libros, datos, valores y documentos les fueren por estos pedidos, y existieren o debiesen existir en sus oficinas.

El segundo precepto sobre las compañías concesionarias de obras públicas se refiere exclusivamente a aquéllas que hayan recibido subvención o auxilio del Estado. En este caso, los Gobernadores y los delegados cuidarán:

1.- De que el importe de dichas subvenciones figure siempre en los balances de la sociedad con la debida expresión y con separación del activo social a fin de que resulte claramente el verdadero aumento o pérdida que haya sufrido el capital propio con el que se fundara la sociedad por suscripción y desembolso de sus accionistas.

¹³⁵⁵ Artículo 8 del Reglamento de 1857.

¹³⁵⁶ La cuestión sobre quién pagaba la retribución del delegado no se regulaba en el Reglamento de 1857, quedando abierta la posibilidad de que fuera la propia sociedad o la dotación pública del cargo. En cambio, en las compañías concesionarias de obras públicas, por lo previsto en este artículo 11, sería la propia sociedad la que, ordinariamente, asumiera el coste de dicha remuneración.

2.- De que los dividendos activos procedan solamente de beneficios efectivos realizados.

*3.- De que las empresas imputen sus gastos con separación al capital de establecimiento o al de explotación, según corresponda por la naturaleza de los mismos gastos*¹³⁵⁷.

Se trata de normas de carácter contable, cuyo cumplimiento sería verificado por peritos o expertos en la materia y cuya finalidad era asegurar el correcto uso de las ayudas públicas otorgadas a la compañía.

5. La coordinación entre el Gobierno, los Gobernadores y los delegados especiales

El Reglamento de 1857 trata un último aspecto de gran relevancia práctica: la coordinación de la actuación de las diversas Autoridades públicas. Como se recordará, en 1854 se trató de mejorar las relaciones entre el Gobierno, el Gobernador de Madrid y los delegados de varias compañías anónimas domiciliadas en la Capital de Reino. A los seis meses, comprobado el deficiente resultado, se decidió volver a la situación anterior¹³⁵⁸.

El Reglamento de 1857 trata de mejorar la eficiencia de la coordinación regulando dos aspectos: la rapidez en las comunicaciones, así como el archivo y custodia de dichas comunicaciones, esto último por parte de los delegados especiales.

*Los Gobernadores y delegados acusarán siempre a correo seguido el recibo de las Reales órdenes, y de las dadas o comunicadas por la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, sin perjuicio de lo que corresponda oficiar cuando dichas órdenes hayan tenido cumplimiento*¹³⁵⁹.

Además, los delegados debían llevar

un copiadore de dichas órdenes y otro de las comunicaciones que ellos dirijan al Gobierno, a la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, a las Autoridades y a los gerentes de la sociedad que inspeccionan.

*Estos libros copiadores y sus originales y minutas, con todos los demás papeles o documentos relativos a la inspección, formarán el archivo o antecedentes de la misma, y se hallarán siempre inventariados o constando en un índice que entregarán los delegados que cesen en sus cargos a los que les sucedan*¹³⁶⁰.

¹³⁵⁷ Artículo 15 del Reglamento de 1857.

¹³⁵⁸ Se trata de los Reales decretos de 15 de febrero y de 15 de agosto de 1854, comentados en un epígrafe anterior.

¹³⁵⁹ Artículo 17 del Reglamento de 1857.

¹³⁶⁰ Artículos 18 y 19 del Reglamento de 1857.

IV. DEBATES PARLAMENTARIOS

En el presente apartado se comentan los aspectos más relevantes de las numerosas intervenciones de los Diputados y Senadores sobre la vigilancia e inspección de las compañías mercantiles por acciones por parte de la Autoridad pública. Las discusiones se producen a lo largo de casi todas las sesiones, pero con más intensidad durante el debate del artículo 17 del PL 1848, tanto en el Congreso como en el Senado.

Cabe destacar en esta breve introducción la siguiente idea. El PL 1848 supone un drástico cambio de política legislativa en la materia de vigilancia e inspección por parte de la Autoridad pública respecto al CCom 1829. Las enmiendas al texto original del artículo 17 no pretenden volver a la flexibilidad del régimen del CCom 1829, sino que, al contrario, tratan de endurecer más las funciones de inspección e intervención del Gobierno. Estas iniciativas provenían de sectores minoritarios que no consiguieron la modificación del PL 1848 en esta materia, aunque continuaron muy activos y, como se ha comentado en un epígrafe anterior, obtuvieron la aprobación del Reglamento de 1857 en el que se incrementaba la intervención sobre estas sociedades exigiendo, por ejemplo, la presentación trimestral del estado de sus operaciones a la Autoridad pública (Gobernadores o delegados especiales).

A) DEBATES EN LAS SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

1. Propuesta de presentación semestral de un estado de operaciones al Jefe Político o al T. de c.

El 19 de abril de 1847 tiene lugar el primer debate sobre el PL 1848 en el Congreso. El Diputado Sr. Gonzalo Morón abre el turno de intervenciones manifestando que, simplemente, va a realizar unas observaciones al texto. En concreto, plantea tres y la última hace referencia al artículo 17 del PL 1848, que decía:

El Gobierno, sin gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías, ejercerá la inspección que conceptúe necesaria para afianzar la observancia estricta y constante de la presente ley¹³⁶¹.

El texto de este artículo coincide con el texto final aprobado el 28 de enero de 1848. Intervino el citado Diputado en los siguientes términos:

... el Gobierno es el tutor nato o el que debe ejercer su vigilancia sobre estas sociedades; la comisión, digo, no se ha contentado con establecer las formalidades que deben llenar todas las compañías para declararse legalmente constituidas, sino que ha establecido con mucha razón el principio expreso de la intervención que el Gobierno debe tener en estas sociedades; y yo que me encuentro de acuerdo con las opiniones de la comisión, quisiera que en este artículo se añadiese que las sociedades anónimas tuvieran la obligación de presentar al Jefe Político, o a la secretaría del Tribunal de Comercio a que correspondan, cada seis meses un estado de sus operaciones. Esta adición,

¹³⁶¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393.

además de ser muy conveniente, porque es necesario considerar cuál es el abandono que caracteriza generalmente nuestra administración, una adición de esta naturaleza traería la ventaja, en primer lugar, de estimular el celo de los directores de estas compañías; después prevendría los abusos que pudieran introducirse en esta clase de sociedades, y por último daría lugar a que el Gobierno, el país y el comercio tuviesen una noticia exacta del objeto, importancia y éxito de las operaciones de estas compañías. Por esto desearía yo que la comisión admitiese, si es posible, esta adición¹³⁶² (el subrayado es nuestro).

El Diputado Sr. Gonzalo Morón, de respetado prestigio en el ámbito de la investigación histórica¹³⁶³, representaba la corriente más intervencionista en cuanto a la vigilancia e inspección de las sociedades mercantiles por acciones. Pero muchos Diputados estimaban que exigir una rendición de cuentas con periodicidad semestral era un exceso. Por eso, el Sr. Bertrán de Lis, miembro de la CCD, contestó a D. Fermín Gonzalo Morón, de manera cautelosa en los siguientes términos:

La comisión no se opone enteramente a eso, pero lo cree muy grave y que debe dejarse para los reglamentos que el Gobierno forme para la ejecución de la ley, porque esto variará según la naturaleza de cada compañía. En algunas convendrá que presenten los estados cada seis meses, al paso que en otras bastará que los presenten cada año, y otras quizá los deberán presentar todos los meses o todas las semanas. También podrá haber compañías en que no convenga que remitan ese estado a la Junta de comercio o al Gobierno, sino a una u otra autoridad subalterna. Basta que las sociedades sepan que en adelante van a ser vigiladas por el Gobierno.¹³⁶⁴

El Sr. Bertrán de Lis, de manera elegante, manifiesta que no está conforme con una propuesta tan intervencionista como la planteada y remite la concreción sobre la periodicidad de la presentación del estado de las operaciones a lo que disponga el Reglamento que desarrolle la Ley. En este sentido, el artículo 34 del Reglamento de 1848 establecerá la obligación de remitir al Jefe Político el balance general de la situación, que comprenderá todas las operaciones realizadas en el año, sus resultados, así como el activo y el pasivo.

Terminado el turno del Sr. Bertrán de Lis, contestó a D. Fermín Gonzalo Morón el Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Vaamonde. Su intervención fue larga, pudiéndose diferenciar dos partes en lo que se refiere a la vigilancia e inspección del Gobierno.

La primera, aborda el tema de una manera tangencial al hablar de la prohibición de que las compañías anónimas operen en el comercio ordinario¹³⁶⁵:

¹³⁶² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1420.

¹³⁶³ En esa misma sesión, el entonces Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Vaamonde, se refirió al Sr. Gonzalo Morón como el dir. de “La Revista de Madrid” en la que él publicó unos artículos sobre el CCom 1829. DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1422.

¹³⁶⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 19 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1422.

¹³⁶⁵ Puesto que el privilegio de la limitación de responsabilidad se debe a que acometen empresas de utilidad pública

*Así es que el principio común y general (...) es que toda sociedad anónima sea admitida siempre que no sea contra las leyes o contra las buenas costumbres o en perjuicio de las condiciones naturales del comercio, y contra estas condiciones sería una sociedad anónima que se pusiera a traficar en las cosas en que trafica todo el mundo; porque desde el momento en que se desnivelan los precios de las cosas de una manera violenta y artificial, el Gobierno tiene un deber de atajar este germen de vicios que causan perjuicios inmensos a los comerciantes de buena fe y que colocan a la clase media, que es la que generalmente se dedica a este comercio, en manos de personas arrojadas, cosa en que no puede convenir jamás Gobierno alguno.*¹³⁶⁶

La segunda parte de la intervención del Ministro de Gracia y Justicia se refiere concretamente a la citada propuesta del Diputado D. Fermín Gonzalo Morón:

*Pero el Sr. Morón desea algo más. Desea S. S. que el Gobierno haya de recibir por medio de los Jefes Políticos o de sus agentes un estado cada seis meses, en el cual se haga ver cuál es la situación en que se encuentran los negocios de la sociedad. Esto, señores, es de mucha gravedad: no sólo no puede perderse de vista, como ha dicho el Sr. Bertrán de Lis, que esto sería demasiado inflexible en una ley y que no puede establecerse un principio de esta especie, sino que podría traer peligros e inconvenientes de otra especie. La sociedad antes de constituirse debe llenar todas las condiciones y garantías de solidez y de buena fe que se exijan por los reglamentos de esta ley.*¹³⁶⁷

La posición del Ministro de Gracia y Justicia coincide con la del Sr. Bertrán de Lis y discrepa de la propuesta del Sr. Gonzalo Morón. En su discurso el Ministro se refiere solamente a la intervención de los Jefes Políticos, sin hacer referencia al T. de c. Merece la pena transcribir el resto de las palabras del Ministro:

... es preciso muchísimo tino y cuidado para sujetar a una sociedad de esta especie a una fiscalización periódica de seis en seis meses: esta sociedad, señores, participa de la índole de todas las personas que se dedican a la contratación comercial, y en la contratación comercial a veces el buen resultado de una operación suele depender del secreto. El Gobierno debe tener todas las seguridades y garantías de que esa sociedad emprende un objeto conocido, con bases conocidas, con un capital seguro, firme y sólido, y que ha llenado todas las condiciones necesarias que se le han impuesto al tiempo de concederse la autorización; pero más que esto no se puede exigir porque sería una traba que está reñida con la contratación comercial.

No quiere decir esto que no pueda haber una sociedad en la que por las condiciones de su objeto no sea necesaria esta traba, esa vigilancia, esa fiscalización del Gobierno. Cuando esto suceda sin que sea necesario establecerlo aquí por principio general, la necesidad misma lo aconsejará. Cuando se instruya el expediente al tiempo de formarse esa sociedad, el Gobierno cuidará de imponerla esa clase de condición u otra equivalente. Por manera que el Sr. Morón puede estar completamente seguro de que después de haber oído al Consejo de Estado, después de tomar los informes que se deben

¹³⁶⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1422.

¹³⁶⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1423.

*tomar, porque es lo que se hace en estas materias en otros países, se impondrá esa condición*¹³⁶⁸ (el subrayado es nuestro).

El Diputado Sr. Gonzalo Morón, en su réplica al Ministro de Gracia y Justicia, manifiesta su desacuerdo:

Ha dicho S. S. que sería imponer una traba ilegítima que podría perjudicar a estas sociedades anónimas el que se las obligara a dar cada seis meses, o en un periodo determinado, un estado de su situación. (...)

*El Sr. Ministro de Gracia y Justicia me permitirá que le conteste a esto y que le pregunte cuál es la índole de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, como dije antes, son una excepción al derecho común (...) ¿Por qué dice S. S. que puede haber ciertos inconvenientes en que las sociedades anónimas presenten el estado de su situación dentro de un periodo dado? Yo digo, señores, que no hay esos inconvenientes.*¹³⁶⁹

La propuesta no se aprobó, pero este grupo minoritario partidario de un mayor intervencionismo consiguió años más tarde, en el Reglamento de 1857, que todas las compañías por acciones formaran *cada tres meses estados de situación, entregando al Gobernador o delegado una copia de los mismos, a fin de que los comprueben con los libros y caja de la sociedad*¹³⁷⁰. Lograron que la presentación de los estados financieros fuera cada tres meses y no cada seis como propuso en abril de 1847 el Diputado Sr. Gonzalo Morón. Se trata de una muestra de la evolución de la política del Gobierno en cuanto a la aplicación de la Ley de 1848.

Cabe recordar también, en relación a la tendencia de la política legislativa, que dos años antes del citado Reglamento de 1857 se aprobaron, en momentos diferentes, las leyes reguladoras de los Bancos, sociedades de crédito y concesionarias de obras públicas, en las que se exigían nuevos requisitos sobre la elaboración, inspección y publicidad de los estados financieros de dichas compañías.

2. Discusión del artículo 17 del PL 1848

En la sesión del Congreso de los Diputados del 21 de abril de 1847, al debatirse artículo por artículo el PL 1848 presentado por la CCD, el Diputado Sr. Fuentes tomó la palabra para plantear una enmienda del artículo 17. En primer lugar, hizo una referencia a las facultades de intervención del Gobierno según la legislación francesa del momento:

... doy gracias a los señores de la Comisión por haber tenido presente la legislación francesa en este punto, para apartarse de ella. Por una ley del año 1842 se creó en Francia una comisión de inspección de sociedades anónimas, compuesta de cinco individuos que hacen el efecto de comisarios regios. Dotadas aquí las sociedades, por lo que veo, de otro medio de intervención por

¹³⁶⁸ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1423.

¹³⁶⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 18 de abril de 1847, núm. 78, pág. 1424.

¹³⁷⁰ Artículo 8 del Reglamento de 1857, comentado en un epígrafe anterior.

*parte del Gobierno, no es necesaria esa comisión, y de ello doy gracias, repito, a la Comisión y al Gobierno.*¹³⁷¹

Y, después, pasó a solicitar a la CCD que definiera o concretara el ámbito de la intervención del Gobierno en las sociedades por acciones. El artículo 17 del PL 1848 de la Comisión disponía que

(e)l Gobierno, sin gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías, ejercerá la inspección que conceptúe necesaria para afianzar la observancia estricta y constante de la presente ley.

Por este motivo, solicitó el Diputado D. Juan José Fuentes lo siguiente:

*... quisiera que se marcase hasta qué punto ha de ir la inspección del Gobierno, y si era únicamente reducida a que no se alterase en nada los estatutos de las sociedades y la inversión de sus fondos en los objetos prevenidos en aquellos, y me parece que hubiera sido muy bueno que entre esos medios se adoptase el de provocar las reuniones de accionistas o facultarlos a éstos para tenerlas, pues así se conseguiría que las sociedades no se separasen absolutamente de lo prevenido en sus respectivos estatutos.*¹³⁷²

El Diputado Sr. Miota, miembro de la CCD, respondió diciendo que lo más importante era que el Gobierno pudiera aplicar la ley y velar por su vigencia, pero no parecía oportuno descender a más detalles. Por este motivo se rechazó la propuesta. En este sentido se expresó el miembro de la CCD:

*De manera que, con arreglo a este artículo [el 17], la inspección, la vigilancia del Gobierno han de contraerse necesariamente a afianzar la observancia de la presente ley (...). El Sr. Fuentes quisiera también que se hubiera acordado algo acerca de las reuniones de los accionistas. Esto no es de la ley: en lo sucesivo los estatutos y reglamentos no podrán hacerse sino discutiéndose por los accionistas mismos, es decir, por los que se suscriban para ser accionistas. Entonces, oyendo a todos los interesados, discutiendo su propia legislación, indudablemente establecerán las reglas más convenientes a sus intereses; y si después todas estas reglas no fuesen tales cuales debían ser, y si se les privara de la intervención que deben tener los accionistas, en ese caso todavía el Gobierno no daría su aprobación ni a la escritura social ni a los estatutos, y así se remediarán los males que teme el señor Fuentes.*¹³⁷³

El Diputado Sr. Fuentes, igual que el anteriormente mencionado D. Fermín Gonzalo Morón, formaba parte de un grupo que apoyaba una mayor intervención e inspección por parte de la Autoridad pública sobre las compañías por acciones. No eran los únicos, pues en los debates del Senado, también se planteó modificar el artículo 17 del PL 1848 para que recogiera una enumeración de funciones de vigilancia e

¹³⁷¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1474.

¹³⁷² Ídem.

¹³⁷³ Ídem.

inspección de la Autoridad pública, entre las que se encontraban la convocatoria de las juntas y la presidencia de las mismas. La enmienda tampoco prosperó¹³⁷⁴.

Este grupo –minoritario en el momento de aprobación de la Ley de 1848- fue adquiriendo cada vez más peso, influyendo en la política del Gobierno en cuanto a la aplicación de dicha Ley.

Así, diez años después de la promulgación de la Ley de 1848, el Reglamento de 1857 estableció la obligación de los delegados especiales de asistir a las juntas de accionistas, así como a las reuniones de la administración y del órgano de vigilancia de la sociedad, sin voz ni voto, correspondiéndoles la presidencia honorífica de la reunión¹³⁷⁵. Además, los Gobernadores o delegados debían recibir copia literal de cada acta de la junta general¹³⁷⁶.

3. La inspección de los bancos

Los bancos fueron objeto de varias controversias durante los debates parlamentarios del PL 1848. En la sesión del 21 de abril de 1847 en el Congreso, se discutió el artículo 18, relativo a la autorización de las compañías por acciones existentes antes de la promulgación de la Ley de 1848. Una de las cuestiones más importantes que se planteó fue la referida a los bancos que ya estaban constituidos. Al ser compañías por acciones, ¿debían solicitar una nueva autorización? Y, en caso afirmativo, ¿qué medidas de vigilancia e inspección se iban a establecer?

Estas cuestiones las planteó el Diputado Sr. Sánchez Silva, que fue respondido por el entonces Ministro de CIOP, Sr. Pastor Díaz. Respecto al tema de solicitar una nueva autorización conforme a los requisitos establecidos por la Ley de 1848, el Ministro expuso su opinión:

*[Los bancos] no podrían ser sometidos a la autorización de esta ley, pues ya tienen la suya, y tienen una existencia pública, y todo lo que su señoría puede exigir de ellos está consignado en sus estatutos, que corren impresos en el público.*¹³⁷⁷

Respecto a las funciones de vigilancia e inspección de los bancos ya autorizados, el Sr. Ministro expresó que estas entidades se encontraban sometidas a un mayor control y seguimiento que las demás compañías mercantiles por acciones:

El Gobierno tiene sobre ellos la debida inspección por medio de un comisario regio, que pasa el estado de lo activo y pasivo y del capital circulante cada quince días. El Gobierno tiene respecto de ellos todas las garantías de seguridad, de que carece respecto de esas otras sociedades, y sabe que sus especulaciones de descuento, préstamo y giro se sujetan a las bases establecidas en sus estatutos. Y cuando el Gobierno tiene todos los datos de sus operaciones;

¹³⁷⁴ Nos referimos a la enmienda de los Senadores Sres. Pérez de Seoane y Marqués de Vigo, que fue contestada por el entonces Ministro de CIOP, D. Juan Bravo Murillo (DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, págs. 294 y ss.), que se comenta en un epígrafe posterior.

¹³⁷⁵ Artículo 7 del Reglamento de 1857.

¹³⁷⁶ Artículo 16 del Reglamento de 1857.

¹³⁷⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1476.

*cuando sabe el estado de la emisión de su papel; cuando sabe el estado de sus cambios y demás; cuando tiene cerca de ellos una autoridad que vigila todas sus operaciones, no hay respecto de los Bancos esos temores que se han tenido respecto de las demás sociedades.*¹³⁷⁸

Como se ha expuesto en otro lugar, conviene enmarcar estas intervenciones en un momento histórico (1847) en el que aún no se había promulgado ninguna LB y, además, los Diputados y Senadores reclamaban con insistencia que el Gobierno presentara un Proyecto de Ley al respecto. Posteriormente se aprobaron la LB y la LSCr¹³⁷⁹, así como otras disposiciones sobre los Comisarios y delegados de los Bancos.

B) DEBATES EN LAS SESIONES DEL SENADO

1. Discusión del artículo 17 del PL 1848. Propuesta para concretar las funciones de vigilancia e inspección por la Autoridad pública

El texto del artículo 17 del PL 1848 pasó sin ninguna modificación del Congreso al Senado, cuya Comisión lo recogió íntegramente en su Dictamen¹³⁸⁰. En la sesión del 24 de diciembre de 1847 en la Cámara Alta, se debatió dicho artículo. Hubo una enmienda presentada por dos Senadores, los Sres. Pérez Seoane y el Marqués de Vigo, que pretendían, igual que sucedió en el Congreso de los Diputados, concretar las funciones de control e inspección del Gobierno.

El texto de la enmienda es el siguiente:

Artículo 17.- Se redactará en los términos siguientes:

El Gobierno, sin gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías, ejercerá la inspección que conceptúe necesaria para afianzar la observancia de esta ley y proteger los intereses legítimos de los accionistas. Con este fin podrá:

- 1.- Nombrar visitador que examine los libros de la compañía y cuanto estime necesario para formar un juicio cabal de su estado.*
- 2.- Mandar que se convoque extraordinariamente junta general de accionistas.*
- 3.- Designar persona que presida las Juntas generales de accionistas, así ordinarias como extraordinarias, siempre que lo juzgue oportuno.*

*La elección de visitador o de presidente de las Juntas generales, recaerá necesariamente en el jefe político, o en un individuo del Consejo Real, del Tribunal Supremo de Justicia, o del Tribunal de Comercio de Madrid, si la compañía se hallase domiciliada en la provincia de Madrid. Respecto a las domiciliadas en las demás del Reino, recaerá en el jefe político, o en un individuo del Consejo provincial, de la Audiencia del territorio o del Tribunal de Comercio respectivo.*¹³⁸¹

¹³⁷⁸ Ídem.

¹³⁷⁹ Ambas de 28 de enero de 1856 (GdM de 29 de enero de 1856, núm. 1121).

¹³⁸⁰ DsC. Senado. Sesión de 18 de diciembre de 1847. Apéndice Segundo al núm. 16, pág. 252.

¹³⁸¹ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 294.

El Sr. Pérez Seoane se encargó del apoyo y defensa de la enmienda. La iniciativa aportaba tres propuestas concretas: que el Gobierno pudiera nombrar visitantes de las compañías; convocar extraordinariamente juntas de socios; y, por último, designar al presidente de las juntas ordinarias y extraordinarias. Su planteamiento partía de que la redacción del PL 1848 era demasiado genérica y vaga, de tal manera que en la práctica el Gobierno podría encontrarse con dificultades para poder ejercer sus facultades de control y vigilancia. Por eso dijo:

*Pero si la ley no lo declara, ¿no podrá disputársele su ejercicio; no podrá desvirtuarse su resolución, calificándola de atentatoria a los derechos de la compañía, y contraria a los principios de libertad en la materia, que tanto se recomienda? Ciertamente si llega el caso de que deba ser acordada por el Gobierno la visita de una compañía, antes se habrán empleado por los interesados en impedirla los medios que todos conocemos para predisponer en contra eso que se llama opinión pública, y para que se haga inadoptable una medida legítima y de protección, que no dejará de calificarse de fiscalizadora e inquisitorial.*¹³⁸²

En opinión del Senador proponente, era necesario que esas tres facultades se recogieran explícitamente en el texto de la Ley porque, de esta manera, se evitaría la más que probable crítica al Gobierno por no respetar los principios de libertad de empresa y libertad económica.

Con respecto a quiénes pueden ser los visitantes o encargados de presidir las juntas, expresó al Senado que podían ser los que, tras detallada reflexión, había enumerado en su enmienda u otros que se estimara conveniente:

*En cuanto a las clases o categorías de que pueda sacar el Gobierno los visitantes y los encargados de presidir las Juntas generales de accionistas, caben combinaciones muy diferentes, y no me empeñaré yo en sostener que sea la mejor la contenida en mi adición; sin embargo diré que es la que he creído mejor, después de haber pensado mucho sobre este punto, y de tomar en cuenta los inconvenientes de acortar o agrandar mucho el círculo dentro del cual pueda el Gobierno elegir semejantes delegados.*¹³⁸³

El Ministro de CIOP (D. Juan Bravo Murillo) se opuso a la enmienda de los Senadores Sres. Pérez Seoane y Marqués de Vigo por dos motivos. Primero, porque la redacción dada por la CS, al ser de carácter genérico, no limitaba la actuación del Gobierno (siempre que no gravara los fondos de la compañía o entorpeciera sus operaciones); en cambio, la redacción propuesta en la enmienda podría limitar las facultades del Gobierno a las que en ella se recogían. Y, segundo, porque la materia de la propuesta correspondía al Reglamento de ejecución y no a la Ley.

Así expresa la primera razón:

El artículo del proyecto de ley, tal como se halla redactado, concede al Gobierno mucho más; porque el Sr. Pérez Seoane ha tratado de deslindar la

¹³⁸² Ídem.

¹³⁸³ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, págs. 294 y 295.

facultad del Gobierno, y el artículo del proyecto le deja una facultad omnímoda y absoluta de hacer todo lo demás.

*El Gobierno, por tanto, no puede adoptar una disposición que grave los fondos, que entorpezca las operaciones de una compañía; y con tal que el Gobierno no se oponga a lo que favorezca al buen éxito de estas compañías, puede hacerlo todo. La ley no le prefija cómo ha de ejercer esa influencia que le concede; solo le fija el límite sencillo, que es el de no poder gravar los fondos; de modo que no haciendo esto, puede hacerlo todo, y en este todo hay mucho más que lo que propone en la enmienda del Sr. Seoane. (...) Porque si al Gobierno se le conceden cuatro, no son más que cuatro cosas; en el todo hay muchas más que no ha comprendido el Sr. Seoane en su enmienda. Esta es la primera razón que ha hallado el Gobierno para oponerse a la enmienda de S. S.*¹³⁸⁴

En cuanto a la segunda:

*La segunda es porque las disposiciones contenidas en esa enmienda son puramente reglamentarias. Dice que el Gobierno puede nombrar los visitadores y presidentes de las Juntas; dice que el Gobierno debería tener la facultad de convocar a junta general de accionistas; quiere que se designe una persona que presida esta Junta, y hasta las personas que pueden ser; que pueden serlo el Jefe Político, un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, o un individuo del Tribunal de comercio de Madrid; y me parece, señores, que si esto no corresponde a los reglamentos, no hay nada que pueda corresponderles. Me parece que la ley no debe descender a pormenores personales; al reglamento toca exponer las medidas convenientes para ejecutar aquella base, que está en la ley. Pero si pudiera descender a este pormenor, sería decir: el Gobierno nombrará un individuo del Supremo Tribunal de Justicia, un individuo del Tribunal de comercio; y esto, señores, sería ligar las manos al Gobierno, entorpecer sus facultades y cercenarle derechos consignados hasta por la Constitución, la cual le concede la facultad de dictar los reglamentos convenientes, con arreglo a las leyes. Por estas razones se opone al Gobierno a que se admita la enmienda del Sr. Seoane.*¹³⁸⁵

Al terminar la intervención del Ministro de CIOP, pidió la palabra el Sr. Pérez de Seoane para rectificar al Ministro y retirar su enmienda:

*Me he levantado para hacer una rectificación importantísima, que es la de que la enmienda no tiene por objeto restringir en lo más mínimo las facultades del Gobierno, sino que se declare que, sin perjuicio de las demás que tenga, ha de poder hacer tal y cual cosa: en una palabra, que se legalicen facultades que mañana podrían parecer odiosas, e impugnarse como abusivas; pero puesto que el Sr. Ministro dice no ser necesario, y que el Gobierno tiene toda la autoridad que ha menester para mandar lo que contiene mi adición, la retiro en beneficio de la brevedad.*¹³⁸⁶

¹³⁸⁴ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 295.

¹³⁸⁵ Ídem.

¹³⁸⁶ Ídem.

Como se recordará, el Diputado Sr. Fuentes solicitó en el Congreso que se aclarara el contenido del artículo 17 del PL 1848, y sugirió que se modificara su redacción para que se recogiera expresamente la facultad de la Autoridad pública de convocar las juntas de socios. La propuesta fue rechazada por la CCD¹³⁸⁷. Este Diputado, como los Senadores que se acaban de citar, los Sres. Pérez de Seoane y el Marqués de Vigo, formaban parte de un grupo minoritario que propugnaba una mayor intervención e inspección por parte de la Autoridad pública. Aunque en el momento de aprobación de la Ley y del Reglamento de 1848 no consiguieron su propósito en cuanto a la convocatoria y asistencia a las juntas, diez años más tarde lo alcanzaron mediante el Reglamento de 1857, que estableció la obligación de que los delegados especiales asistieran no sólo a las juntas de accionistas, sino también a las reuniones del órgano de dirección y del órgano de vigilancia de la sociedad, como presidentes honoríficos de la reunión, sin voz ni voto¹³⁸⁸.

2. Inspección de las operaciones de liquidación

Las compañías por acciones existentes antes de la promulgación de la Ley de 1848 debían solicitar la correspondiente autorización, conforme a la nueva regulación (artículos 18, 19 y 20). En caso de que los accionistas manifestaran en junta general la decisión de no continuar con la sociedad, ésta debía disolverse y liquidarse.

En relación a la liquidación, el texto del artículo 20 del PL 1848 que se debatió el 24 de diciembre de 1847 en el Senado decía así:

*Las compañías por acciones que dentro del plazo ya señalado no solicitaren la Real autorización, se tendrán por disueltas, poniéndose en liquidación en la forma que prescriban sus estatutos y reglamentos.*¹³⁸⁹

La mención a la liquidación se limita a que se haga según el procedimiento establecido en los estatutos y reglamentos sociales. Aunque el texto sufrió una modificación durante los debates del Senado, la parte que aquí interesa (la mención sobre la liquidación) permaneció igual en la versión final del texto legal.

En la discusión sobre el artículo 20, el Senador Marqués de Fuentes de Duero propuso que se limitara el periodo de liquidación a seis meses:

Señores, la Comisión a mi juicio ha olvidado una cosa de mucho interés, y es el plazo o término que se ha de conceder a las Sociedades para que hagan su liquidación; porque Sociedades hay que hace cuatro o seis meses que están liquidando y aún no han concluido, y sería muy conveniente ordenar que aquéllas que no pidan la autorización se liquiden en un tiempo dado; y creo suficiente el de seis meses, porque en casos excepcionales en que alguna de éstas no la pudiera hacer, ya se la prorrogaría el término. Conozco que podrá decirse que las Sociedades que no liquiden oportunamente, se someterán al Tribunal de comercio; esto es cierto, pero no lo es menos que los trámites

¹³⁸⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, pág. 1474.

¹³⁸⁸ Artículo 7 del Reglamento de 1857, comentado en epígrafes anteriores.

¹³⁸⁹ DsC. Senado. Sesión de 18 de diciembre de 1847. Apéndice Segundo al núm. 16, págs. 251 y 252.

*curiales son muy largos, son indeterminados, y lo que conviene en los negocios mercantiles son plazos perentorios y fatales.*¹³⁹⁰

La respuesta de D. Pedro Sáinz de Andino fue contraria a fijar un plazo de liquidación, pues

... si una Sociedad, por ejemplo, tiene deudas, tiene contraídos empeños de cualquiera clase, la ley no puede perjudicar los derechos que por esta razón se hayan adquirido; la ley, en mi juicio y en el de la Comisión, no debe obligar a que las Sociedades liquiden en un término prefijado; esto sería bastante para que se perjudicasen los intereses de cuantos tengan negocios pendientes con estas compañías a quienes se marcase un plazo fijo. (...)

*Además, el Código de comercio señala también los trámites a que deben sujetarse las Sociedades mercantiles en sus liquidaciones; y sin embargo de esto, el Gobierno puede examinar o inspeccionar lo que crea conveniente en estas Sociedades; pero esto, señores, es materia de los reglamentos y no puede serlo de la ley.*¹³⁹¹

Por lo tanto, aunque el artículo 20 del PL 1848 se remita, en cuanto a la liquidación se refiere, a lo que prevean los estatutos y reglamentos sociales, Sáinz de Andino recuerda que es de aplicación el CCom 1829, sin perjuicio de que el Gobierno vigile e inspeccione lo que estime conveniente. Además, en su opinión, se trata de una materia propia del Reglamento y no de la Ley.

El Senador proponente, Marqués de Fuentes de Duero, insistió en su propuesta. Al terminar, el Marqués de Montevirgen trató de ofrecer una solución intermedia entre la enmienda del Marqués de Fuentes de Duero y la CS, representada por D. Pedro Sáinz de Andino:

Señores, la proposición que voy a presentar a la ilustración del Senado, concilia, a mi juicio, la opinión del Sr. Marqués de Fuentes de Duero con la de la Comisión. Creo, pues, que no debe señalarse expresamente un plazo determinado para la liquidación; pero sí que el Gobierno inspecciones cada mes o cada trimestre el estado de la Sociedad, y al mismo tiempo que se vaya recaudando, ir efectuando la liquidación. El Senado conocerá el objeto de esta medida. Así se evitará lo que sucede en algunas grandes Sociedades, en que los fondos recaudados, en lugar de servir para satisfacer sus dividendos, desaparecen sin saberse cómo. (...)

La Comisión ha manifestado muy oportunamente que no se puede presentar un término fijo para las liquidaciones de las Sociedades; y esto es muy cierto, porque estas Sociedades o compañías pueden estar empeñadas en operaciones que no finalicen sino hasta pasado un plazo más o menos largo. Esto todavía no impide que conforme vayan entrando en la Caja de la compañía fondos procedentes de dichas operaciones, sean liquidados y distribuidos paulatinamente. Pero todo esto es reglamentario, según ha dicho la Comisión; y

¹³⁹⁰ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 301.

¹³⁹¹ Ídem.

*por lo tanto me concreto a manifestar esta observación para que el Gobierno y la Comisión la tengan presente*¹³⁹² (el subrayado es nuestro).

El Ministro de CIOP, D. Juan Bravo Murillo, manifestó su acuerdo en los siguientes términos:

*Estoy enteramente de acuerdo con las insinuaciones que acaba de hacer el Sr. Marqués de Montevirgen; pero me parece que todo lo que S. S. propone no debe ser objeto de la ley, y creo también que deberá tener lugar en el reglamento; y me parece, vuelvo a decir, que será muy conveniente todo lo que S. S. propone, prescindiendo de si el plazo será un mes, dos o tres.*¹³⁹³

Tras esta intervención se votó la redacción del artículo 20 que, en relación a la liquidación, no fue modificado respecto a su versión inicial. Pero fruto de estas discusiones, el artículo 44 del Reglamento de 1848 prevé unas facultades de vigilancia e inspección por parte de la Autoridad pública en los procesos de liquidación de las compañías por acciones constituidas antes de la promulgación de la Ley que decidieron no continuar. En nuestra opinión, esas facultades de intervención se aplicarían igualmente a las liquidaciones de las demás compañías por acciones. Las facultades de control son las siguientes:

*En la liquidación de las compañías que quedaren disueltas, sea por acuerdo de los accionistas, o bien por no haber impetrado y obtenido la Real autorización, se procederá con arreglo a las disposiciones del Código de comercio, siendo obligación de los encargados de la liquidación dar cuenta mensualmente al Jefe Político de la provincia del estado en que se hallare, y acreditar asimismo a su conclusión haber quedado canceladas todas las resultas de la misma liquidación. La inspección que sobre ellas se encarga a los Jefes políticos no obstará para que los interesados ejerciten judicialmente los derechos que les competan sobre los haberes de la compañía y para que su liquidación se haga legalmente*¹³⁹⁴ (el subrayado es nuestro).

V. DOCTRINA DE LA ÉPOCA

La vigilancia e inspección de la Autoridad pública en las compañías mercantiles por acciones es una materia que la Doctrina de la época de la Ley de 1848 trata de un manera sucinta. Acostumbra a realizarlo dentro de los comentarios de carácter general, señalando esta cuestión como un elemento fundamental del cambio de política legislativa hacia el mayor control e intervención de estas sociedades. Cabe destacar también que los autores no analizan las concretas funciones de vigilancia e inspección establecidas por los textos normativos, quizá porque consideraban suficientes los comentarios de carácter general.

Como se recordará, la mayoría de las obras de aquella época suelen comentar los artículos del CCom 1829. Dado que las compañías por acciones (anónimas y comanditarias) son objeto de una breve regulación por dicho texto legal y, además,

¹³⁹² DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, págs. 301 y 302.

¹³⁹³ DsC. Senado. Sesión de 24 de diciembre de 1847, núm. 20, pág. 302.

¹³⁹⁴ Artículo 44 del Reglamento de 1848.

modificado sustancialmente por la Ley y del Reglamento de 1848, algunos autores añaden en Apéndices el texto de la citada Ley y del citado Reglamento, introduciendo, en su caso, algún comentario. Por todos estos motivos, no se dispone de mucho material ni tampoco de contenidos que aporten novedades sobre los textos normativos.

A continuación se recogen los comentarios más relevantes de los autores de la época, añadiendo entre paréntesis la fecha de publicación de la obra citada para facilitar la precisión histórica del texto reseñado.

VICENTE Y CARAVANTES (1850)¹³⁹⁵ y BIEC y VICENTE Y CARAVANTES (1851)¹³⁹⁶, en fechas muy cercanas a la promulgación de la Ley y del Reglamento, se limitan a parafrasear ambos textos legales, estructurando la materia de la vigilancia e inspección en cuatro apartados en los que transcriben los artículos que se exponen a continuación:

1. *Inspección del gobierno en las sociedades por acciones*: artículo 17 de la Ley de 1848 y artículo 30 del Reglamento de 1848.
2. *Obligación de formar las compañías un balance y efectos de éste*: artículos 34 y 35 del Reglamento de 1848.
3. *Cuenta que debe darse al Gobierno del estado de las compañías*: artículo 27 del Reglamento de 1848. Y, por último,
4. *Modo de procederse cuando se perpetra algún delito en el manejo directivo y administración de la sociedad*: artículo 38 del Reglamento de 1848.

En el comentario al CCom 1829 que realiza UNA SOCIEDAD DE ABOGADOS en 1857¹³⁹⁷, se encuentra una referencia a la intervención de la Autoridad pública en la glosa al artículo 309 sobre el derecho de información de los accionistas¹³⁹⁸. Estos autores relacionan la materia de la contabilidad, su investigación y publicidad, con la función de vigilancia e inspección de la Autoridad pública. Concretamente, su comentario al artículo 309 es el siguiente:

¹³⁹⁵ VICENTE Y CARAVANTES, J. (1850): *Código de comercio extractado*, cuarta edición, Madrid, págs. 140 y 141. El título completo de la obra es: *Código de comercio extractado con la exposición al pie de cada artículo, de los fundamentos de sus disposiciones; y con la solución de las principales dificultades y cuestiones que presenta el texto. Cuarta edición; corregida y considerablemente aumentada con nuevas notas doctrinales, y con la exposición y examen de la ley y reglamento sobre sociedades por acciones; de la ley de Bolsa; del decreto de 1 de Mayo de 1850; de los artículos del nuevo Código penal sobre quiebras, y de las demás disposiciones publicadas hasta el día sobre el derecho mercantil; precedida de un Resumen histórico-crítico de la Legislación Comercial de España, con arreglo al nuevo plan de estudios; y seguida de una Biblioteca por orden alfabético de las principales obras españolas y extranjeras que se han escrito sobre esta materia, con noticias biográficas de autores de más nota.*

¹³⁹⁶ BIEC, J. M. Y VICENTE Y CARAVANTES, J. (1851): *Suplemento al Diccionario razonado de legislación* ..., págs. 618 y 619.

¹³⁹⁷ UNA SOCIEDAD DE ABOGADOS (1857): *Código de comercio comentado por una Sociedad de abogados*, Barcelona, pág. 105.

¹³⁹⁸ Dicho artículo reza así:

En las compañías en comandita y en las anónimas no pueden los socios comanditarios ni los accionistas hacer examen ni investigación alguna sobre la administración social, sino en las épocas bajo la forma que prescriben los contratos y reglamentos de la compañía.

Las sociedades mercantiles por acciones estarán constantemente bajo la inspección del gobierno y del Jefe Político de la provincia de su domicilio, en cuanto a su régimen administrativo y a la exacta observancia de sus estatutos y reglamentos, conforme está declarado en el artículo 17 de la ley de 28 de enero. El Gobierno, con el debido conocimiento de causa, y oído el Consejo Real, suspenderá o anulará, según estimare precedente, la autorización de las compañías, que en sus operaciones, o en el orden de su administración, faltaren al cumplimiento de las disposiciones legales o de sus estatutos.

La obra de GONZÁLEZ HUEBRA (1859)¹³⁹⁹, al tratarse de un Curso de Derecho mercantil, no sigue la estructura de los autores citados anteriormente, que comentan el CCom 1829 artículo por artículo. En la parte relativa a las sociedades anónimas, señala un epígrafe, denominado “Administración e inspección”. En él expone que la Ley y el Reglamento de 1848 han establecido *una doble inspección*¹⁴⁰⁰ *que mire por los intereses de la sociedad, y cuide la observancia de la ley, los estatutos y los reglamentos*. La primera, es nombrada por la junta general para que vigilen y controlen a los administradores (el sistema dual)¹⁴⁰¹. La segunda,

... corresponde al Gobierno, que puede ejercer la que conceptúe necesaria, sin entorpecer el curso de los negocios; y usando de ella comprueba y publica los balances, examina el estado de la compañía y su régimen directivo y administrativo, suspende y anula la autorización, si se falta al cumplimiento de las disposiciones legales o a sus estatutos, y procede criminalmente contra los culpables si se ha cometido algún delito.

Por su parte, GÓMEZ DE LA SERNA y REUS Y GARCÍA (1863)¹⁴⁰², que siguen la sistemática de la glosa de cada artículo del CCom 1829, introducen en un Apéndice los textos de la Ley de 1848 y del Reglamento de 1848. El comentario al artículo 17 de la Ley de 1848 remite al artículo 30 del Reglamento de 1848 se limita a manifestar

*(p)or Real decreto de 15 de febrero de 1854 se dispuso que la inspección y atribuciones que según este artículo y otros corresponden a los Gobernadores, se ejerciese por un delegado especial respecto de las compañías que tienen su domicilio en la corte; pero este decreto fue derogado por otro de 15 de agosto del mismo año*¹⁴⁰³.

Y, por último, cabe citar a MARTÍ DE EIXALÁ (1875)¹⁴⁰⁴ quien, poco después de la derogación de la Ley y del Reglamento de 1848, no analiza el contenido de la inspección por parte de la Autoridad pública, sino que se limita a manifestar la derogación del régimen de vigilancia administrativa de la Ley y del Reglamento:

¹³⁹⁹ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil ...*, pág. 164.

¹⁴⁰⁰ Es el primer autor que trata a la vez estas dos clases de vigilancia o inspección.

¹⁴⁰¹ Artículos 1.10 y 25 del Reglamento de 1848.

¹⁴⁰² GÓMEZ DE LA SERNA, P. Y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio ...*, págs. 484 y 489.

¹⁴⁰³ Ambos RRDD se han comentado en un epígrafe anterior de este capítulo.

¹⁴⁰⁴ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1875): *Instituciones de Derecho mercantil ...*, pág. 274.

Según la Ley de 19 de octubre de 1869, la formación de las sociedades anónimas obedece únicamente a dos principios: libertad y publicidad. Para la aplicación del primero, se ha suprimido toda intervención administrativa ...

CAPÍTULO XIII

LAS COMPAÑÍAS POR ACCIONES REGULADAS POR LEYES ESPECIALES DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE 1848 (1848 – 1868)

En este capítulo se trata un tema que no puede faltar en el estudio de la Ley y del Reglamento de 1848: las leyes especiales sobre determinados tipos de sociedades anónimas, que se promulgaron durante la vigencia de los textos del 48 (1848 – 1868).

Estas disposiciones legales afectaron a las compañías de mayor relevancia empresarial y económica de la época. Por este motivo, conviene dedicar atención a dichas leyes especiales. Además, desde el punto de vista de la política legislativa, se establecen importantes excepciones al régimen general recogido en la Ley de 1848 y su Reglamento de ejecución, lo cual incrementa el interés por esta materia. Los datos estadísticos demuestran que, tras la promulgación de estas leyes, creció exponencialmente el número de constituciones de los tres tipos de sociedades anónimas especiales, hasta la aparición de la crisis económica de 1864 – 1868, momento en el que no sólo se dejaron de constituir estas compañías, sino que quebraron o se liquidaron gran parte de las que existían en aquel momento¹⁴⁰⁵. La Ley de 1869, al inicio del “Sexenio Revolucionario”, derogó las tres leyes que se estudian en el presente capítulo.

En cuanto a las citas de la Doctrina de la época, cabe advertir que corresponden exclusivamente a autores del periodo final de la vigencia de la Ley de 1848, es decir, de 1858 en adelante. Las obras del primer periodo (1848 a 1858) no mencionan nada al respecto, dado que aún no habían sido promulgadas las leyes especiales (bancos, sociedades de crédito y concesionarias de obras públicas).

Se abordan, en primer lugar, unas consideraciones generales sobre las compañías anónimas comunes y las reguladas por leyes especiales. Y, en segundo lugar, se comenta en tres epígrafes los regímenes jurídicos de las sociedades de bancos, de crédito y las concesionarias de obras públicas, desde la perspectiva exclusiva de las remisiones y excepciones al régimen establecido por la Ley de 1848. No se pretende exponer un comentario sistemático de la regulación de esos tres tipos societarios, que excedería al objeto del presente trabajo, sino estudiar las singularidades societarias de los tres tipos de compañías, en relación al contenido de la Ley y del Reglamento de 1848.

I. LAS COMPAÑÍAS ANÓNIMAS COMUNES Y LAS REGULADAS POR LAS LEYES ESPECIALES. DOCTRINA DE LA ÉPOCA

En la formación de las sociedades anónimas se advierte una circunstancia, que no concurre en los demás contratos, ni aún en la de otras clases de compañías, y es la de que pueden no estar sujetas a unas mismas reglas; porque como hay algunas que por el objeto con que se crean, tienen que ser autorizadas por una ley especial, como hemos dicho antes, las que se encuentran en este caso,

¹⁴⁰⁵ Estos datos se estudian con detalle en el siguiente capítulo sobre el triunfo del liberalismo.

pueden diferenciarse de las demás, y aún entre sí mismas, si la ley que las autoriza, como posterior y especial, deroga en parte la general, o modifica las disposiciones de las anteriores. Mas como esta autorización particular no se exige precisamente para una sociedad determinada, sino para clases enteras, como son, las que se propongan establecer bancos de emisión, construir obras públicas, o gozar de algún privilegio exclusivo, bien puede una ley establecer reglas comunes para cada una de estas clases en particular, y conceder al Gobierno la facultad de autorizar las que se conformen con ellas, limitando la necesidad de una autorización especial legislativa para las que pretendan separarse en algo de las prescripciones que establezca para las de su clase respectiva, y para los casos en que sea absolutamente indispensable por razón de su objeto; y así se ha hecho entre nosotros, promulgándose la que autoriza la formación de Bancos de giro o de circulación, la de sociedades de crédito y las de ferro-carriles y demás obras públicas.

Este párrafo de GONZÁLEZ HUEBRA¹⁴⁰⁶, publicado en 1859, a los pocos años de promulgarse las principales leyes especiales sobre compañías anónimas, compendia las ideas que se van a exponer en el presente epígrafe.

La primera cuestión básica es que la Ley y el Reglamento de 1848 no establecen un régimen único, aplicable a todas las compañías por acciones. En efecto, como se expone en el capítulo sobre la autorización, la Ley de 1848, en sus cuatro primeros artículos, diferencia entre las sociedades que deben ser autorizadas por ley y por RD. Aparentemente hay una regulación sustantiva común, pero en la práctica podría no ser así, puesto que las compañías autorizadas por ley podrían estar sometidas a un régimen diferente e incluso contradictorio respecto al consagrado en la Ley de 1848, dado que una ley posterior se encuentra facultada para modificar una anterior de igual rango. Por este motivo dice GONZÁLEZ HUEBRA en el pasaje citado: *porque como hay algunas que (...) tienen que ser autorizadas por una ley especial, (...) pueden diferenciarse de las demás, y aún entre sí mismas, si la ley que las autoriza, como posterior y especial, deroga en parte la general, o modifica las disposiciones de las anteriores.*

En este sentido, conviene diferenciar dos supuestos diferentes de leyes que regulen sociedades anónimas con un régimen distinto al establecido por la Ley de 1848. En primer lugar, una ley que regule una compañía concreta porque su objeto social requiera autorización parlamentaria (una ley *ad hoc* para esa sociedad). Y, en segundo lugar, una ley que establezca un régimen especial para unos tipos específicos de compañías, en función de su objeto social.

Este último supuesto, genera en la Doctrina posterior a 1856 la necesidad de diferenciar las sociedades reguladas por la Ley y el Reglamento de 1848, de las sociedades reguladas por leyes especiales. A las primeras, se las denomina “sociedades anónimas comunes” (GONZÁLEZ HUEBRA¹⁴⁰⁷ y MARTÍ DE EIXALÁ¹⁴⁰⁸) o “compañías anónimas en general” (PERECAULA¹⁴⁰⁹) y, a las segundas, “sociedades anónimas

¹⁴⁰⁶ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, pág. 168.

¹⁴⁰⁷ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, pág. 151.

¹⁴⁰⁸ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones ...*, pág. 264.

¹⁴⁰⁹ PERECAULA, A. (1871): *Diccionario de Derecho mercantil ...*, pág. 190.

especiales” (MARTÍ DE EIXALÁ¹⁴¹⁰) o “sociedades anónimas regidas por leyes particulares” (GONZÁLEZ HUEBRA¹⁴¹¹).

MARTÍ DE EIXALÁ¹⁴¹² pone de manifiesto que el fenómeno de estas sociedades anónimas especiales no supone la aparición de nuevas instituciones, sino la transformación de las antiguas:

(e)stas nuevas reglas, de ordinario excepción de las antiguas, algunas veces adición de ellas, distinguen a algunas compañías anónimas de las demás; por cuya razón, conocidos los principios porque se rigen las comunes, es necesario examinar los que constituyen la especialidad de las que hacen el negocio llamado de banca, de las denominadas de crédito y de las concesionarias de obras públicas, todas las cuales son objeto de leyes particulares.

Estas *clases enteras* constituyen, desde el punto de vista del Derecho de sociedades, nuevos “subtipos” de compañías anónimas, caracterizados, desde una perspectiva económica, por su importancia empresarial y estratégica en la economía nacional. El Legislador, para estos nuevos “subtipos”, se aparta de determinados aspectos del régimen de la Ley de 1848, en orden a flexibilizar algunos requisitos societarios y endurecer otros aspectos relacionados con la contabilidad y solvencia según el tipo de actividad que desarrollara la sociedad.

En este sentido, el mismo GONZÁLEZ HUEBRA¹⁴¹³ en una nota a pie de página, previa al texto anteriormente transcrito, manifiesta la siguiente opinión sobre la comparación entre el régimen general de la Ley de 1848 y los regímenes establecidos por las leyes especiales:

... se promulgaron después la ley de 28 de enero y el reglamento de 17 de febrero de 1848, que, pasando de un extremo a otro, exigieron para su formación [de las compañías por acciones] una ley especial, o un real decreto, y las reglamentaron y restringieron de modo que apenas se volvió a constituir ninguna después de su publicación. Estos males tan conocidos exigían una reforma esencial, según decíamos en nuestra edición anterior, y tratando de remediarlos las Cortes constituyentes en 1855, autorizaron la creación de las sociedades de crédito y las de ferro-carriles, suprimiendo varias de las restricciones impuestas en 1848, en las que se promulgaron para establecer dichas sociedades en 28 de enero y 30 de junio de 1856. Mas como no se propusieron uniformar este ramo de la legislación haciendo una ley general de sociedades anónimas derogando la anterior, sino solo autorizar la formación de aquellas dos clases especiales, resulta ahora que es más restrictiva y defectuosa la Ley general que las dictadas para las excepcionales que eran las que necesitaban acaso ser autorizadas con más limitaciones (el subrayado es nuestro).

Pocos comentarios se pueden hacer sobre estas palabras, que recogen la evolución de la política legislativa, la cual cambia a un planteamiento de mayor

¹⁴¹⁰ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones* ..., pág. 264.

¹⁴¹¹ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho* ..., pág. 169.

¹⁴¹² MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones* ..., pág. 296.

¹⁴¹³ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho* ..., pág. 152.

flexibilidad para los “subtipos” de las sociedades de bancos, de crédito y concesionarias de obras públicas¹⁴¹⁴, siendo éstos los que, paradójicamente, necesitarían de una mayor intervención para evitar la repetición de los abusos y fraudes que pretendió atajar la Ley de 1848.

En efecto, la legislación posterior, tanto el Decreto de 1868 como la Ley de 1869 que derogan la Ley de 1848, consagran la libertad de constitución y funcionamiento de las sociedades mercantiles, pero excepcionan las compañías de ferrocarriles, bancos sociedades de crédito, etc., a las que someten a un régimen de mayor control. Así lo expresan ÁLVAREZ DEL MANZANO, BONILLA Y MIÑANA¹⁴¹⁵ en 1916:

El legislador español, que se inspiró, al redactar el Código de 1885, en un criterio de amplia libertad, adopta un sistema más restrictivo respecto de ciertas clases de sociedades, exigiendo garantías por motivo de interés público.

Por eso, las sociedades de ferrocarriles y demás obras públicas (...); las de almacenes generales de depósito (...); y las sociedades bancarias en sus diversas clases (...) se hallan sometidas a reglas especialísimas, que tratan de evitar la destrucción, suspensión o perturbación de importantes funciones económicas de interés general.

Una vez expuesta la evolución de la política legislativa desde 1848 a 1856 en la que se constata una clara flexibilización de los “subtipos” societarios más relevantes (bancos, sociedades de crédito y concesionarias de obras públicas), cabe preguntarse por los motivos o causas de esta alteración de los principios reguladores de las compañías anónimas.

Como suele ocurrir en el estudio histórico de los cambios de tendencias, las causas son múltiples y variadas. Centrando la atención en los factores políticos, cabe destacar, fundamentalmente, el advenimiento del denominado “Bienio Progresista” (1854 – 1856), que surge con motivo de la revolución de 1854, tras la que Espartero y O'Donnell toman el control del gobierno. Los principios moderados e intervencionistas son cuestionados y se intenta una reforma aperturista en diversas materias, incluidas la mercantil y comercial. Este periodo de dos años fue breve y no pudo poner en práctica muchas de las reformas que pretendía. Aun así, como expresa PALACIO ATARD¹⁴¹⁶,

(a) pesar de cuanto se dice sobre la inocuidad del “bienio progresista”, no hay que olvidar tres hechos de relevante significación en cuanto al ejercicio del poder:

a) La elaboración del texto constitucional de 1856 que, aprobado por las Cortes, no llegó a ser promulgado.

¹⁴¹⁴ Aunque GONZÁLEZ HUEBRA, sorprendentemente, en su texto sólo cite a las sociedades de crédito y ferrocarriles, se debe incluir, como hace en la cita con la que se ha abierto este epígrafe, a los bancos y a las concesionarias de obras públicas en general.

¹⁴¹⁵ ÁLVAREZ DEL MANZANO Y ÁLVAREZ DE RIVERA, F., BONILLA Y SAN MARTÍN, A., Y MIÑANA Y VILLAGRASA, E., (1916): *Tratado de Derecho mercantil español comparado con el extranjero*, tomo II, Madrid, págs. 660 y 661.

¹⁴¹⁶ PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea ...*, Madrid, pág. 282.

- b) *La Ley de Desamortización general de 1 de mayo de 1855, siendo Ministro de Hacienda don Pascual Madoz.*
- c) *La Ley General de Ferrocarriles de 3 de junio de 1855 y las concesiones ferroviarias subsiguientes. Sobre este punto hace notar Tomás y Valiente el interesante proyecto de ley presentado por Agustín Collantes y otros diputados para financiar las construcciones ferroviarias con los capitales desamortizados (el subrayado es nuestro).*

A esta Ley de 3 de junio de 1855, le seguirán, ya al final del Bienio Progresista, la LB, la LSCr y la LSCOP. Las relaciones entre estos tres textos legales se encuentran analizadas por muchos historiadores económicos. A continuación se cita, a modo de resumen de los factores más importantes, las siguientes palabras de TEDDE¹⁴¹⁷:

Los gobernantes del bienio 1854 – 1856 pensaban que el elevado coste de las construcciones ferroviarias precisaría, de un lado, de intermediarios que canalizaran parte del ahorro disperso por toda la nación hacia los empresarios interesados en el ferrocarril, y de otro, de inversores extranjeros que trajeran fondos de los que, junto al Estado y los inversores privados españoles, aportar el capital necesario para las obras públicas planeadas. Para cubrir este flanco, los progresistas idearon la figura de las sociedades de crédito, que eran bancos en forma de sociedad anónima, pero sin facultades de emisión, destinados, por tanto, a recibir depósitos de los particulares, a prestar fondos al gobierno o a sujetos privados a corto y largo plazo, y a participar directamente en la financiación de empresas de todo tipo. La legislación de 28 de enero de 1856 concedía, por un lado, autorización para que se abrieran tres sociedades de crédito (...) y, por otro, configuraba la organización del sistema emisor de la nación. Ésta básicamente consistiría en la existencia de un Banco en Madrid, que pasaría a llamarse Banco de España a partir de entonces, y de Bancos emisores en las demás provincias o ciudades en que hubiera interés por parte de empresarios privados en erigirlos, salvo aquellos puntos en que se establecieran sucursales del emisor madrileño. Cada Banco o sucursal sería monopolista de la emisión en cada centro, aunque, naturalmente, no se excluía la aceptación voluntaria de billetes emitidos por otras entidades. La ambigüedad de este planteamiento era evidente a la hora de saber si el Banco de España tenía o no prioridad sobre los particulares para decidir si abría sucursales antes de que éstos decidieran abrir sus propios establecimientos de emisión. Pero tras la salida de los progresistas del Gobierno, la ambigüedad se superó a favor del Banco de España.

En relación a la valoración de la influencia de los bancos en el desarrollo industrial español del siglo XIX, ANES manifiesta *que la banca precedió a la industria en España, que la banca fue por delante de la industria y que fue agente principal del desarrollo económico, o, al menos, que no ha sido responsable, por ineficiencia, de que el desarrollo económico español no haya sido mayor.*¹⁴¹⁸

¹⁴¹⁷ TEDDE, P. (1988): “El sector financiero...”, pág. 304.

¹⁴¹⁸ ANES ÁLVAREZ, R. (1999): “Los Bancos en la economía española durante el siglo XIX” en ANES, G. (ed.): *Historia económica ...*, pág. 402.

Por último, respecto a los factores económicos, en los epígrafes sobre los bancos y las sociedades de crédito se estudian las causas económicas y financieras de este cambio.

II. LAS SOCIEDADES DE BANCOS DE EMISIÓN

La primera Ley general de Bancos fue la del 28 de enero de 1856¹⁴¹⁹. El texto legal consta de veinticinco artículos, está aprobado por las *Cortes Constituyentes*, sancionado por la Reina y rubricado por el Ministro de Hacienda, D. Juan Bruil¹⁴²⁰.

En este apartado no se pretende realizar un estudio sistemático y exhaustivo de la LB, puesto que el presente trabajo se centra en otros textos normativos: la Ley y el Reglamento de 1848. El propósito básico de los siguientes epígrafes es la exposición de las principales excepciones que establece la LB en relación al régimen consagrado por la Ley de 1848. Respecto a la valoración de este texto legal en relación a la política legislativa de bancos de emisión, cabe citar las siguientes palabras de TEDDE¹⁴²¹:

Se ha discutido la oportunidad de la legislación promovida por los gobernantes moderados a finales de la década de 1840. Concretamente, la Ley de sociedades por acciones de enero de 1848 o la propia Ley de Bancos de 1849 han sido consideradas por algunos especialistas (...) como una rémora para el crecimiento económico y el desarrollo de la actividad de mercado, dada la inspiración restrictiva de su contenido. Sin embargo, en lo que se refiere en concreto al Banco de San Fernando, hay una general apreciación de la mayor solidez y solvencia del establecimiento logrado tras las normas emanadas en estos años, si se comparan con las reglamentaciones de las épocas anteriores.

Se empieza el estudio de la LB por una breve referencia a las intervenciones durante los debates parlamentarios del PL 1848 en las que se discute la cuestión de los bancos.

A) REFERENCIAS A LA FUTURA LEY DE BANCOS DURANTE LOS DEBATES PARLAMENTARIOS DE LA LEY DE 1848

Durante los debates parlamentarios de la Ley de 1848 se produjeron numerosas intervenciones de Diputados y Senadores sobre la cuestión particular de los bancos, que se han comentado en el capítulo sobre el régimen de la autorización.

Básicamente se plantearon tres temas: la adaptación de los bancos existentes en la fecha de la promulgación de la Ley de 1848 al nuevo régimen legal, las cajas subalternas o sucursales y, por último, la necesidad de una ley que regulara estas instituciones.

¹⁴¹⁹ GdM de 29 de enero de 1856, núm. 1121. La fecha es exactamente ocho años después de la promulgación de la Ley de 1848.

¹⁴²⁰ Se puede consultar una breve biografía suya en FERNÁNDEZ CLEMENTE, E. (2006): “Juan Faustino Bruil, un banquero esparterista” en COMÍN COMÍN, F., MARTÍN ACEÑA, P. Y VALLEJO, R. (eds.): *La Hacienda por sus ministros ...*, págs. 209 a 228.

¹⁴²¹ TEDDE, P. (1988): “El sector financiero ...”, pág. 302.

Respecto a esta última cuestión, en varias ocasiones los parlamentarios intervinientes (tanto Diputados como Senadores) exigieron al Gobierno explicaciones sobre la situación de la prometida Ley de Bancos. Los antecedentes se encuentran sucintamente resumidos en la siguiente intervención del Senador Sr. Marqués de Santillán, quien apoya que

*el establecimiento de Bancos de emisión sea objeto de una ley, y de una ley especial. Esta es mi opinión; lo ha sido siempre, y por esta razón en el Real decreto de 25 de Febrero [de 1847], que tuve el honor de proponer a S.M., y refrendar después como Ministro entonces de Hacienda, se dispone por el artículo 11 que el Gobierno presentaría a las Cortes un proyecto de ley para que fuesen aprobadas las disposiciones allí contenidas; compromiso que el Gobierno debe cumplir. Hasta entonces, señores, el Gobierno había estado en la facultad de establecer Bancos de emisión; nadie se la había negado siquiera, y por desgracia mía, a pesar de haber sido el primero que consiguió que los Bancos de emisión fueran objeto de leyes especiales, fue censurado por la prensa y otras personas respetables, por no haberlo presentado como procedía a las Cortes.*¹⁴²²

En aquella sesión se encontraba presente el Ministro de CIOP, Sr. Bravo Murillo, responsable del PL 1848 que se estaba debatiendo. Dado que el Senador proponente había planteado esta interpelación al Gobierno, el Ministro le respondió en los siguientes términos:

*Que esto deber ser objeto de una ley, lo reconoce el Gobierno, quien presentará el proyecto de la ley sobre Bancos; se tratará esta cuestión, y se sentará el principio de que las sociedades de Bancos de emisión y su institución, deben ser objeto de una ley especial.*¹⁴²³

Se pueden aprovechar estas dos citas para resumir muy brevemente la evolución de la política legislativa respecto a los bancos. En la etapa anterior a estas intervenciones, la autorización para constituir bancos era competencia del Gobierno. Debido a las vicisitudes en la autorización de determinados bancos¹⁴²⁴, se decide asignar la competencia para la aprobación a las Cortes Generales. Este cambio no se realiza en un solo acto, sino que primero el Gobierno aprueba el RD de 25 de febrero de 1847¹⁴²⁵ (citado por el Marqués de Santillán en la intervención transcrita) en el que se exige que una ley convalide las disposiciones de dicho texto normativo y, después, la Ley de 1848 consagra la obligatoriedad de autorizar los bancos mediante ley especial.

El curso de la política legislativa sobre los bancos tiene su siguiente hito en la Ley de 4 de mayo de 1849¹⁴²⁶. Según TORTELLA¹⁴²⁷, uno de los principales objetivos de esta Ley era dar al Banco de San Fernando el monopolio de emisión en España, excepto

¹⁴²² DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 270.

¹⁴²³ Ídem.

¹⁴²⁴ Expuestas en el apartado sobre los bancos del capítulo relativo al régimen de autorización legal.

¹⁴²⁵ GdM de 26 de febrero de 1847, núm. 4548. Por este RD se creaba el “Banco español de San Fernando” mediante la fusión del Banco de San Fernando y el Banco de Isabel II.

¹⁴²⁶ GdM de 11 de mayo de 1849, núm. 5354.

¹⁴²⁷ TORTELLA, G. (1975): *Los orígenes...*, págs. 40 y 41.

Barcelona y Cádiz. El texto legal dividía el citado Banco en dos departamentos, uno de emisión y otro de operaciones, lo mismo que había hecho la *Peel Act* con el Banco de Inglaterra en 1844¹⁴²⁸.

Posteriormente se promulgaron otras normas relativas a los bancos, no especialmente relevantes, excepto la creación de la Caja General de Depósitos en 1852¹⁴²⁹, que dieron paso al texto clave sobre el régimen bancario español: la LB, en la que se permite autorizar las sociedades anónimas de bancos por RD, siempre que cumplan los requisitos establecidos en dicha ley. Por lo tanto, se ha evolucionado desde una competencia exclusiva por parte del Gobierno para autorizar los bancos a una etapa de exclusividad de las Cortes Generales desde la promulgación de la Ley de 1848¹⁴³⁰, que termina con la LB en la que se vuelve a la autorización del Gobierno, siempre dentro del marco de dicha ley.

Finalmente, cabe destacar una última intervención respecto a la petición al Gobierno de que no retrasase más la presentación del Proyecto de Ley de Bancos. Se trata de las palabras del Senador Sr. Guillermo Moreno, que exigió

*... explicaciones del Gobierno, con el objeto de que nos diga si el Banco Español de San Fernando sufrirá algún perjuicio con la presentación y aprobación de esta ley, y si trata de presentar el proyecto de ley ofrecido en el decreto de 25 de Febrero sobre el establecimiento de Bancos.*¹⁴³¹

El representante del Gobierno, Sr. Ministro de CIOP, le contestó en los siguientes términos:

El Banco de San Fernando seguirá existiendo como hasta aquí, en virtud del decreto de 25 de Febrero, hasta tanto que se someta la ley sobre Bancos a las Cortes (...).

*En cuanto a lo demás, el Gobierno puede manifestar, contestando al Sr. Moreno, que presentará ese proyecto de ley, que cumplirá con lo que se ofreció en el decreto de 25 de Febrero, y lo hará tan pronto como le sea posible, pues reconoce el interés y urgencia de la presentación de este proyecto de ley.*¹⁴³²

B) NOCIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS BANCOS

Decía GONZÁLEZ HUEBRA que *los Bancos, según nuestra actual legislación, son unos establecimientos que se ocupan en operaciones de cambio o de giro, bajo la*

¹⁴²⁸ En el mismo sentido, GARCÍA LÓPEZ, A. (1999): *Una historia de la banca española a través de sus documentos*, Valladolid, págs. 127 y 128.

¹⁴²⁹ Sobre su creación y evolución durante la vigencia de la LB, se puede consultar GONZALO Y GONZÁLEZ, L. (1981): *El tesoro público y la Caja General de depósitos (1852 – 1868). Un estudio de la deuda flotante en España a mediados del siglo XIX*, Madrid, Ministerio de Hacienda y SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N. (1967): “La crisis de 1866 en Madrid: la Caja de Depósitos, las sociedades de crédito y la Bolsa”, en *MyC*, núm. 100, marzo, págs. 6 – 12.

¹⁴³⁰ Periodo en el que no se autorizó ningún banco.

¹⁴³¹ DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 269.

¹⁴³² Ídem.

*inspección inmediata del Gobierno, mediante los privilegios que se les conceden*¹⁴³³. La LB establece el régimen de los bancos de giro, modificando la normativa anterior del Banco de San Fernando (que, en adelante se denominará BdE¹⁴³⁴) y de los Bancos de Barcelona y Cádiz¹⁴³⁵, que son los que entonces existían. Los futuros bancos se podrían establecer en función de las plazas en las que no hubiera sucursales del BdE¹⁴³⁶.

GONZÁLEZ HUEBRA describe el banco como un establecimiento, lo cual le lleva a plantearse la siguiente cuestión previa: ¿todos los bancos deben constituirse como sociedades anónimas? ¿Puede una persona física –un comerciante– establecer un banco de giro? Ésta es su respuesta:

*Los Bancos (...) casi siempre se establecen por sociedades anónimas, pero alguna vez, aunque rara también, se han formado de otro modo. Nosotros, sin embargo, los colocamos y tratamos entre los de esta clase, porque nuestra legislación, dando por supuesto que se han de establecer por un particular (en cuyo caso no sería banco sino un comerciante que haría el comercio de banca), exige que el capital esté dividido y representado por acciones de cuota fija, sin otra responsabilidad de parte de los accionistas, que la de poner en caja el importe de las acciones que han tomado, que éstos reunidos en junta general sean los que nombren las personas que han de componer el consejo de gobierno o de administración, y que se publiquen en la Gaceta sus estatutos y reglamentos; y con estas condiciones no pueden crearse otras compañías que las anónimas.*¹⁴³⁷

Por lo tanto, para GONZÁLEZ HUEBRA, quedaba despejada la cuestión sobre el ámbito de la LB: sólo pueden cumplir los requisitos para solicitar la autorización para establecer un banco las sociedades mercantiles y, dentro de sus diferentes tipos, exclusivamente las anónimas. En cambio, algunos historiadores como SÁNCHEZ-ALBORNOZ¹⁴³⁸ reconocen que junto a las sociedades anónimas de los Bancos también,

¹⁴³³ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, pág. 169.

¹⁴³⁴ Artículos 1 y 25 LB.

¹⁴³⁵ Artículos 2 y 25 LB.

¹⁴³⁶ La situación concreta se encontraba regulada en los siguientes artículos de la LB:

Artículo 3.- El Banco de España establecerá en el término de un año sucursales en Alicante, Bilbao, Coruña, Málaga, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, sin perjuicio de que sin necesidad de esperar a la terminación del año, puedan establecerse Bancos particulares en los puntos que acaban de indicarse y demás, con los mismos privilegios que la presente ley concede al de España.

Artículo 4.- En cada localidad sólo podrá crearse un establecimiento de emisión, bien sea Banco particular, bien sucursal del de España.

Transcurridos tres meses desde la publicación de esta ley sin que se haya solicitado autorización para crear Banco particular en alguna o algunas de las capitales mencionadas en el artículo 3, el Banco de España podrá optar por establecer o no sucursal.

Son interesantes las memorias de Ramón de Santillán en relación a la evolución normativa de los bancos durante el periodo objeto del presente trabajo. Cabe resaltar el capítulo en el que se recogen las negociaciones del nuevo Banco de San Fernando con el Gobierno para la redacción del texto de la Ley que se está comentando: SANTILLÁN, R. (1982): *Memoria histórica sobre los bancos Nacional de San Carlos, Español de San Fernando, Isabel II, Nuevo de San Fernando, y de España*. Tomo II. Madrid. Reedición con motivo del bicentenario de la fundación del Banco de San Carlos. Prólogo de TEDDE DE LORCA, págs. 58 y ss.

¹⁴³⁷ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, pág. 169.

¹⁴³⁸ SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N. (1968): “Los Bancos y las sociedades de crédito en provincias: 1856 – 1868”, en *MyC*, núm. 104, pág. 39.

se hallaban firmas familiares o razones sociales, de mayor o menor envergadura, que se dedicaban a actividades bancarias o crediticias, pero que no estaban formadas por sociedades anónimas.

En este mismo sentido, más recientemente CARRERAS Y TAFUNELL¹⁴³⁹, estiman que los “banqueros-comerciantes”

(t)enían un gran peso en la estructura financiera, si bien declinó paulatinamente durante la segunda mitad del siglo [XIX], lo que les relegó al fin a un puesto marginal. Por lo que conocemos, que es muy poco, la banca no societaria desempeñó un papel destacado en la oferta de servicios financieros y de medios de pago al comercio y a la industria.

La autorización faculta a la sociedad bancaria a emitir billetes al portador por una suma igual al triple de su capital efectivo, debiendo mantener en metálico, al menos, la tercera parte del importe de los billetes emitidos¹⁴⁴⁰. Las sociedades de bancos, además, podrán girar, descontar, prestar, llevar cuentas corrientes, ejecutar cobranzas, recibir depósitos y contratar con el Gobierno y sus dependencias competentemente autorizadas¹⁴⁴¹. Sobre bancos hipotecarios existió un Proyecto de Ley de las Cortes Constituyentes de 16 de abril de 1855, que no salió adelante¹⁴⁴².

Para desempeñar estas actividades, la LB establece los siguientes requisitos y prohibiciones (que interesa conocer para detallar el contenido de las obligaciones de los administradores, así como de la intervención y control por parte del órgano y autoridad competente): no pueden negociar en efectos públicos ni hacer préstamos con la garantía de sus propias acciones¹⁴⁴³ ni tampoco pueden anticipar al Tesoro sin garantía suficiente y de fácil realización, una suma mayor que la de su capital efectivo¹⁴⁴⁴.

C) EXCEPCIONES Y OBLIGACIONES ESPECIALES REGULADAS POR LA LB, EN RELACIÓN A LA LEY DE 1848

1. Autorización otorgada por RD y no por ley

Como se recordará, el artículo 2 de la Ley de 1848 establecía categóricamente que cualquier sociedad cuyo objeto social fuera la actividad de Banco de giro o emisión, debía ser aprobada por ley:

¹⁴³⁹ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, pág. 141.

¹⁴⁴⁰ Artículo 9 LB.

¹⁴⁴¹ Artículos 14 y 16 LB.

¹⁴⁴² El contenido del citado Proyecto de Ley y un amplio comentario a los bancos hipotecarios en los países europeos de la época de puede consultar en BORREL Y VILÁ, J. (1857): *Exposición de los principios del sistema de crédito territorial, y los medios convenientes para el establecimiento de Bancos hipotecarios en España; conteniendo además, la legislación adoptada en Francia sobre el mismo objeto, los estatutos de la Sociedad de Crédito Territorial de dicho Imperio y el Proyecto de la Ley de las Cortes Constituyentes de 16 de abril de 1855*, Barcelona, págs. 5 – 65 y 138 – 156.

¹⁴⁴³ Artículo 15 LB.

¹⁴⁴⁴ Artículo 17 LB.

(s)erá necesaria una ley para la formación de toda compañía que tenga por objeto: Primero, el establecimiento de Bancos de emisión y cajas subalternas de éstos,

Este principio de política legislativa era básico para el legislador del 48 y un cambio importante respecto al régimen anterior¹⁴⁴⁵. Esta variación fue adoptada por clara mayoría de ambas Cámaras, dentro del marco, como ya se ha expuesto anteriormente, de la promesa del Gobierno de presentar inmediatamente un proyecto de ley sobre bancos.

Esta situación cambia radicalmente ocho años más tarde. En virtud del artículo 8 de la LB,

(l)as concesiones para la creación de Bancos se harán por Reales decretos, acordados en Consejo de Ministros, previa la oportuna información y después de oído el Tribunal contencioso administrativo o el que hiciere sus veces, publicando los estatutos y reglamentos, después de aprobados en la Gaceta del Gobierno (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, la LB deroga uno de los puntos básicos de la Ley de 1848: la necesidad de autorización parlamentaria para constituir un banco de emisión o de giro. En nuestra opinión se trata de un giro político propiciado por los postulados del Bienio Progresista (1854 – 1856), por las presiones de grupos de poder, sobre todo locales, y, por último, por la constatación de la sequía de constitución de bancos.

Respecto a este último motivo, según los datos aportados por GARCÍA LÓPEZ¹⁴⁴⁶, en el periodo 1848 – 1856 no se constituyó ningún Banco de emisión. Entre 1856 y 1868 (año de la derogación de la Ley y del Reglamento de 1848) fueron autorizados veinte bancos de emisión¹⁴⁴⁷. Como dicen CARRERAS y TAFUNELL¹⁴⁴⁸, la legislación de 1856 fue el *Big Bang del sistema bancario español*.

¹⁴⁴⁵ Esta cuestión puede verse con más detalle en otro epígrafe de este capítulo sobre las menciones a los bancos en los debates parlamentarios del PL 1848. Cabe destacar la intervención del Marqués de Santillán en el Senado en la sesión de 22 de diciembre de 1847 (DsC. Senado. Sesión de 22 de diciembre de 1847, núm. 18, pág. 270).

¹⁴⁴⁶ GARCÍA LÓPEZ, A. (1999): *Una historia de la banca española ...*, págs. 297 a 299.

¹⁴⁴⁷ En concreto se constituyeron los siguientes:

Banco de Málaga, 27 de junio de 1856
 Banco de Valladolid, 25 de junio de 1857
 Banco de Santander, 15 de mayo de 1857
 Banco de Bilbao, 19 de mayo de 1857
 Banco de Sevilla, 21 de noviembre de 1857
 Banco de Zaragoza, 25 de abril de 1857
 Banco de La Coruña, 28 de noviembre de 1857
 Banco de Jerez de la Frontera, 20 de enero de 1860
 Banco de San Sebastián, 13 de junio de 1862
 Banco de Madrid, 3 de julio de 1863
 Banco de Pamplona, 22 de enero de 1864
 Banco de Oviedo, de 5 de febrero de 1864
 Banco de Palencia, de 11 de marzo de 1864
 Banco de Vitoria, de 11 de marzo de 1864
 Banco de Santiago, de 15 de mayo de 1864
 Banco Local de Tarragona de 27 de mayo de 1864
 Banco de Reus, de 4 de junio de 1864

2. Las acciones y el capital social

Respecto al capital y las acciones de las compañías cuya autorización era competencia de las Cortes, la Ley de 1848, como se recordará, no establecía requisitos concretos¹⁴⁴⁹. En cuanto a las sociedades autorizadas por el Gobierno, el texto legal exigía que fueran nominativas¹⁴⁵⁰ y que el Gobierno no pudiera exigir un desembolso inicial de las acciones superior al 25 por cien de su valor nominal¹⁴⁵¹.

La LB, en relación al desembolso de las acciones, establece la prohibición de dividendos pasivos, excepto para el Banco de Barcelona y para el Banco de Cádiz, cuyas acciones conservaron su condiciones anteriores hasta que fueron convertidas en definitivas.

En cuanto al capital, la LB prevé que en caso de que se redujera a la mitad antes de cumplirse el plazo de vigencia de la autorización, el Gobierno deberá proponer a las Cortes las nuevas condiciones para que pueda continuar el banco o se proceda a la disolución y liquidación¹⁴⁵².

3. La administración social y la vigilancia e inspección por la Autoridad pública.

Las obligaciones especiales de los administradores, que establece la LB en relación a la Ley de 1848, se refieren a: la publicación mensual, en la GdM, del estado de la situación, en la forma prescrita por el Ministerio de Hacienda¹⁴⁵³; la existencia permanente en caja y cartera, metálico y valores realizables, con vencimiento no superior a noventa días, de una cantidad suficiente para cubrir sus débitos por billetes, cuentas corrientes y depósitos¹⁴⁵⁴; y, por último, la dotación de una reserva equivalente al diez por ciento del capital efectivo, en los términos previstos por la ley¹⁴⁵⁵.

Por otro lado, los administradores de las sociedades de bancos son nombrados por las juntas generales y, por medio de comisiones, tendrán todas las atribuciones necesarias para garantizar eficazmente los intereses de los accionistas, debiendo realizarse todas las operaciones con su consentimiento¹⁴⁵⁶.

En cuanto a la vigilancia e inspección de los bancos por parte de la Autoridad pública, además de lo previsto por la Ley y el Reglamento de 1848, se establece la figura del Gobernador del BdE y de los Comisarios Regios en los demás bancos,¹⁴⁵⁷ añadiendo la importante obligación de controlar los activos que sirven de garantía para

Banco Balear, de 5 de junio de 1864

Banco de Burgos, de 6 de noviembre de 1864

Banca de Madrid y Londres, de 1864.

¹⁴⁴⁸ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, pág. 145.

¹⁴⁴⁹ Artículo 2 de la Ley de 1848.

¹⁴⁵⁰ Artículo 12 de la Ley de 1848.

¹⁴⁵¹ Artículo 9 de la Ley de 1848.

¹⁴⁵² Artículo 22 LB.

¹⁴⁵³ Artículo 21 LB.

¹⁴⁵⁴ Artículo 20 LB.

¹⁴⁵⁵ Artículo 23 LB.

¹⁴⁵⁶ Artículo 19 LB.

¹⁴⁵⁷ Artículo 20 LB.

cubrir los débitos por billetes, cuentas corrientes y depósitos. En este sentido, comenta MARTÍ DE EIXALÁ las siguientes ideas:

*(e)l uso que del crédito privado se haga puede afectar tan directamente al crédito público, y conviene tanto inspirar plena confianza en los documentos de crédito que los Bancos emiten con el nombre de billetes, que la ley [la LB] consideró no deber limitar a la común sobre las demás sociedades anónimas la inspección que ejercía sobre los Bancos [la Ley de 1848], sino que la organizó de suerte que pudiese ejercerla continua, directa y concretamente a cada establecimiento.*¹⁴⁵⁸

III. LAS SOCIEDADES DE CRÉDITO

A) NOCIÓN. GÉNESIS DE LA LEY

Las sociedades de crédito se encuentran reguladas por la LSCr¹⁴⁵⁹ (misma fecha que la LB). Se trata de un texto breve, de once artículos, aprobado por las *Cortes Constituyentes*, rubricado por el entonces Ministro de Hacienda, D. Juan Bruil y sancionado por la Reina.

Con carácter previo, cabe advertir que a estas sociedades también se las denominaba bancos, pero como dice GONZÁLEZ HUEBRA¹⁴⁶⁰, se diferenciaban de los bancos de giro *en el objeto con que se crean y autorizan, en los negocios que se ocupan, en los documentos que emiten y en las reglas por que se gobiernan*. El objetivo de la LSCr no era proteger el comercio, como ocurría con los bancos de giro, sino fomentar empresas industriales, de obras públicas y agrícolas.

En este mismo sentido se manifiesta MARTÍ DE EIXALÁ¹⁴⁶¹ diciendo que las sociedades de crédito nacieron y se propagaron para la realización de importantes obras públicas como los ferrocarriles, canales de navegación, roturas de terrenos y otras similares. Y añade la siguiente observación, que merece algún comentario:

Los hombres de negocios las consideraron como una combinación feliz para acometer empresas a que la sociedad anónima común no puede dar fácil cima; para las clases ajenas a la especulación mercantil, pero que disponen de algunos ahorros, fueron un medio seguro de emplearlos con mayor lucro, contribuyendo a la par al desarrollo de la riqueza pública; y los Gobiernos, en una época en la que parecía la más general de las aspiraciones la consolidación de la paz interior de los Estados, las miraron como el auxiliar poderoso de las empresas destinadas a alimentar la actividad industrial y mercantil y dar abundante ocupación a las clases jornaleras.

Mas para la realización de esas esperanzas y la consecución de su fin, no eran bastantes los capitales que suelen dedicarse a las especulaciones mercantiles;

¹⁴⁵⁸ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones...*, pág. 298.

¹⁴⁵⁹ GdM de 29 de enero de 1856, núm. 1121.

¹⁴⁶⁰ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho...*, pág. 176.

¹⁴⁶¹ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones...*, pág. 304.

hízose necesario por lo mismo atraer los pequeños ahorros y desviar de otras direcciones los modestos capitales, brindándose a un tiempo con la esperanza de un lucro superior al interés común y la de una seguridad superior a la que las empresas comerciales ofrecen de ordinario (el subrayado es nuestro).

En efecto, el lector queda sorprendido ante la declaración de que estas sociedades permitieron acometer las grandes iniciativas empresariales, *a las que la sociedad anónima común no puede dar fácil cima*. Por lo que se ha expuesto en los capítulos sobre el concepto de compañía mercantil por acciones y sobre los antecedentes de la Ley de 1848, la sociedad anónima era la figura jurídica que servía precisamente para acometer las grandes iniciativas empresariales (obras públicas, financiación, etc.). Que se diga, por tanto, que la sociedad de crédito permitió realizar lo que la *sociedad anónima común* no pudo hacer, merece alguna reflexión. Porque, además, se indica que *los modestos capitales* que pretendían invertir en grandes empresas lo hacían en mejores condiciones en las sociedades de crédito que en las sociedades anónimas generales (a las que financiaban aquéllas).

Pues bien, hay que admitir que parte de lo que se dice es correcto. La compañía anónima servía de cauce de inversión a los pequeños ahorradores, y permitía el fomento de las grandes empresas. Pero la opción marcadamente intervencionista de la política legislativa no facilitó de manera satisfactoria que el pequeño ahorrador invirtiera en las grandes empresas. Ésta es la contradicción del Legislador del 48: el excesivo control e intervencionismo impidieron en la práctica la acumulación de capitales para acometer los grandes proyectos empresariales que se pretendía realizar en esos años.

Esta situación es la que subyace en la creación de las sociedades de crédito. La coincidencia de un periodo político (el “Bienio Progresista” de 1854 – 1856) más liberal y reaccionario respecto a la legislación anterior, junto a la influencia y habilidad de importantes grupos de presión, propiciaron la promulgación de la LSCr. Fue una solución que flexibilizaba y simplificaba la financiación de las sociedades anónimas dedicadas a las grandes empresas, principalmente las concesionarias de obras públicas¹⁴⁶².

Los grupos de presión a los que se acaba de hacer referencia, eran diferentes a los que indujeron la aprobación de la LB. En el caso de las sociedades de crédito, tenían un gran peso los extranjeros y, más concretamente, los franceses¹⁴⁶³. Por esto, no es de extrañar que en el mismo número de la GdM en el que se publica la LSCr, aparezca la autorización de tres sociedades de crédito promovidas por grupos financieros franceses¹⁴⁶⁴. En este sentido, son muy indicativas de lo que ocurrió, las siguientes palabras del profesor TORTELLA:

¹⁴⁶² COMÍN COMÍN, F., MARTÍN ACEÑA, P., MUÑOZ RUBIO, M., Y VIDAL OLIVARES, J. (1998): *150 Años de Historia de los Ferrocarriles ...*, págs. 62 a 66.

¹⁴⁶³ Al ejemplo de las sociedades de crédito francesas se refiere MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones...*, pág. 305. Respecto a la inversión de capital extranjero, CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, págs. 132 y 133, recogen el dato aportado por PRADOS DE LA ESCOSURA, quien concluye que entre 1850 y 1876, representó el 37 por ciento de la inversión agregada. También se refieren estos autores a los porcentajes del origen de estas inversiones exteriores, recogidos por BRODER, A. (2000): *Historia económica de la España contemporánea*, Madrid: el 70 por ciento de la inversión provenía de Francia, el 20 por ciento de Reino Unido y, casi todo el resto, de Bélgica.

¹⁴⁶⁴ En efecto, en la GdM de 29 de enero de 1856, núm. 1121 aparecen, después del texto de la LSCr, tres concesiones a

Los franceses no sólo aportaron capital y talento, sino también iniciativa legislativa, porque varios empresarios franceses como Kervergen, Millaud, Péreire, Weisweiller (representando a James Rothschild) y Prost tomaron parte activa en la redacción de la legislación bancaria de 1856 (el subrayado es nuestro).¹⁴⁶⁵

Efectivamente, el Legislador de 1856 contó con la colaboración y el asesoramiento de juristas franceses para elaborar la LSCr¹⁴⁶⁶. Por otro lado, no se puede olvidar que estos grupos financieros franceses habían comprado importantes cantidades de deuda pública española y se encontraban, por tanto, en posiciones muy favorables para obtener beneficios y concesiones del Gobierno¹⁴⁶⁷.

La política legislativa, en vez de reformar la Ley de 1848 para adaptarla a las necesidades empresariales y financieras, se decantó por promulgar nuevas leyes (LB, LSCr y LSCOP) que excepcionaban principios fundamentales de la Ley de 1848. Probablemente no fuera la solución más adecuada, a juzgar por el breve periodo de existencia de estas sociedades de crédito¹⁴⁶⁸, aunque sin duda facilitó e impulsó la financiación de grandes empresas.

En este sentido, cabe señalar con SÁNCHEZ-ALBORNOZ¹⁴⁶⁹, TORTELLA¹⁴⁷⁰ y GARCÍA LÓPEZ¹⁴⁷¹, entre otros, que tras la aprobación de la LSCr, se produjo una

-
- D. Emilio y D. Isaac Pereire, en nombre propio y en el de las personas que representan, la formación de una sociedad anónima titulada “Sociedad general de crédito moviliario [sic] español”, con arreglo a lo dispuesto en la ley general de sociedades de crédito y a las que rijan sobre sociedades anónimas.
 - Los Sres. Prost, David de Sheesi y D’Alfon Shée y demás asociados la formación de una sociedad anónima titulada “Compañía general de crédito en España”, con arreglo a la ley especial de sociedades de crédito y a las que rijan sobre sociedades anónimas.
 - Al Duque de Sevillano, D. José Manuel Collado, D. Antonio Guillermo Moreno, D. Ventura de Cerrajería, Sres. Weisweiller y Baner, Sres. Rodríguez y Salcedo, D. Antonio de Gaviria, D. Estanislao de Urquijo, D. Rodrigo Soriano, D. Antolín de Udaeta, D. Fernando Fernández Casariego, D. Antonio Álvarez, D. José Eustaquio Moreno, D. Ramón Soriano y Pelayo, D. Manuel Pérez Hernández, Sres. Tapia, Bayo y compañía y D. José Orineta, la formación de una sociedad que se denominará “Sociedad española mercantil e industrial”, con arreglo a la ley general de sociedades de crédito y a las que rijan sobre sociedades anónimas.

Se puede advertir, como curiosidad, que en la primera y última concesión se habla de la “ley general de sociedades de crédito” y en la otra de la “ley especial de sociedades de crédito”.

Señala GARCÍA LÓPEZ, A. (1999): *Una historia de la banca española ...*, pág. 168, que los promotores de las tres sociedades fueron los siguientes grupos:

- Sociedad general de crédito mobiliario español: los hermanos Pereire y la Banque Transatlantique.
- Compañía general de crédito en España: los Prost-Guilhou.
- Sociedad española mercantil e industrial: los Rothschild.

Sobre esta última se encuentran interesantes referencias respecto a los negocios en ferrocarriles en LÓPEZ MORELL, M. A. (1999): “El papel de los Rothschild en la construcción de los ferrocarriles en España (1855 – 1874) en MUÑOZ RUBIO, M., SANZ FERNÁNDEZ, J Y VIDAL OLIVARES, J. (eds.) (1999): *Siglo y medio de ferrocarriles en España ...*, págs. 670 y ss.

¹⁴⁶⁵ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, pág. 181.

¹⁴⁶⁶ Esta interesante cuestión apuntada por TORTELLA y otros no puede ser objeto de una detallada atención pues el tema del presente trabajo se centra en la Ley y el Reglamento de 1848.

¹⁴⁶⁷ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, pág. 166.

¹⁴⁶⁸ Así lo previó GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, pág. 152, citado anteriormente.

¹⁴⁶⁹ Que en su obra SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N. (1968): “Los Bancos y las sociedades de crédito...”, págs. 41 y ss., ofrece detalles sobre fechas, capital y nombres de los fundadores.

enorme demanda de autorizaciones, que fueron concedidas, pero también fueron muchas las que cerraron sus puertas a los pocos años de iniciar su actividad¹⁴⁷².

¹⁴⁷⁰ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea* ..., pág. 143.

¹⁴⁷¹ GARCÍA LÓPEZ, A. (1999): *Una historia de la banca española* ...,pág. 144.

¹⁴⁷² Los datos aportados por GARCÍA LÓPEZ, A. (1999): *Una historia de la banca española* ..., págs. 297 a 299, son los siguientes:

NOMBRE DE LA ENTIDAD	ORIGEN	FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE CIERRE	DE
Sociedad Española Mercantil e Industrial	Madrid	1856	Antes de 1874	
Crédito Mobiliario Español	Madrid	20-II-1856	1902	
Sociedad Catalana General de Crédito	Barcelona	29-II-1856	1902	
Compañía general de crédito en España	Madrid	26-IV-1856	Antes de 1854	
Crédito Mobiliario Barcelonés	Barcelona	27-IV-1856	Antes de 1854	
Sociedad General Española de Descuentos	Madrid	1859	Antes de 1854	
Crédito Comercial. de Cádiz	Cádiz	25-I-1860	1866	
Compañía Gaditana de crédito	Cádiz	15-IV-1860	1866	
Crédito Cántabro	Santander	1-III-1861	Antes de 1874	
Crédito General Andaluz	Cádiz	10-VIII-1861	4-I-1862	
Crédito Vasco	Bilbao	1861	Antes de 1874	
Crédito y Fomento del Alto Aragón	Huesca	1861	Antes de 1874	
Crédito Castellano	Valladolid	17-I-1862	Antes de 1874	
Unión Mercantil	Santander	1862	Antes de 1874	
Bilbaína de Crédito	Bilbao	1862	Antes de 1874	
Crédito Comercial de Sevilla	Sevilla	1862	Antes de 1874	
Crédito Comercial de Jerez	Jerez	1862	Antes de 1874	
Crédito Comercial y Agrícola de Córdoba	Córdoba	9-III-1863	14-IV-1867	
Crédito Ibérico	Madrid	1863	Antes de 1874	
Sdad. Española Gral.de Cto.	Madrid	11-XII-1863	Antes de 1874	
Unión Castellana	Valladolid	24-I-1864	Antes de 1874	
Compañía General de Crédito Dep. y Fomento	Madrid	5-VI-1864	Antes de 1874	
Sociedad Española Central de Crédito	Madrid	1864	Antes de 1874	
Sociedad Española de Crédito Comercial	Madrid	1864	Antes de 1874	
Crédito Mercantil	Barcelona	1864	Entre 1892-1922	
Crédito y Fomento de Barcelona	Barcelona	1864	Antes de 1874	
Sociedad Crédito Industrial, Agrícola y Mercantil	Valladolid	1864	Antes de 1874	
Crédito Navarro	Pamplona	1864	1972	
Crédito Comercio y Agrícola de Córdoba	Córdoba	1864	Antes de 1874	
Sociedad de Crédito y Fomento de Vigo	Vigo	1864	Antes de 1874	
Crédito Leonés	León	1864	Antes de 1874	
Compañía Internacional de Crédito	Madrid	1865	1869	

B) OBJETOS SOCIALES

En este epígrafe se recogen los diferentes tipos de actividades a las que podían dedicarse las sociedades de crédito. Según la LSCr eran las siguientes¹⁴⁷³:

1. Suscribir o contratar empréstitos con el Gobierno, corporaciones provinciales o municipales y adquirir fondos públicos y acciones u obligaciones de toda clase de empresas industriales o de crédito.

Para suscribir o contratar empréstitos con naciones extranjeras se necesitará autorización del Gobierno.

No podrá tampoco dedicarse a la adquisición de fondos públicos al contado ni a plazo, más que la mitad del capital efectivo de las acciones de la sociedad.

2. Crear toda clase de empresas de caminos de hierro, canales, fábricas, minas, dársenas (docks) [sic], alumbrado, desmontes y roturaciones, riegos, desagües y cualesquiera otras empresas industriales o de utilidad pública.

3. Practicar la fusión y transformación de toda clase de sociedades mercantiles, y encargarse de la emisión de acciones u obligaciones de las mismas.

4. Administrar, recaudar o arrendar toda clases de contribuciones y empresas de obras públicas y ceder o ejecutar los contratos suscritos al efecto con la aprobación del Gobierno.

5. Emitir obligaciones de la sociedad por una cantidad igual a la que se haya empleado y exista representada por valores en cartera por efecto de las operaciones de que tratan los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de este artículo¹⁴⁷⁴.

6. Vender o dar en garantía todos los valores, acciones u obligaciones adquiridos por la sociedad, y cambiarlos cuando lo juzgue conveniente.

7. Prestar sobre efectos públicos, acciones u obligaciones, géneros, frutos, cosechas, fincas, fábricas, buques y sus cargamentos y otros valores, y abrir créditos en cuenta corriente recibiendo en garantía efectos de igual clase.

Los préstamos que la sociedad haga sobre sus propias acciones no podrán exceder del 10 por 100 del capital efectivo de la sociedad, del 60 por 100 del valor que éstas tengan en la plaza y del término de dos meses.

¹⁴⁷³ Artículo 4 LSCr.

¹⁴⁷⁴ Comentando este artículo, en nota a pie de página, GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho* ..., pág. 418 dice lo siguiente:

Según el Diario de las sesiones de Cortes, en la del 16 de enero de 1856, se aprobó este artículo con dos adiciones, una de la palabra “Fábricas” al número 2 y otra que decía y séptimo al núm. 5, después de los artículos 1, 2, 3 y 4. La primera se halla comprendida en las redacciones oficiales de esta Ley, pero la segunda no se encuentra en ninguna de ellas.

8. *Efectuar por cuenta de otras sociedades o personas toda clase de cobros y pagos, y ejecutar cualquiera otra operación por cuenta ajena.*

9. *Recibir en depósito toda clase de valores en papel y metálico y llevar cuentas corrientes con cualesquiera corporaciones, sociedades o personas.*

Se trata, por tanto, de un ámbito enormemente amplio y, además, de actividades que, aunque tengan en común operaciones de financiación, son bastante diferentes entre sí. En la práctica no todas estas actividades fueron desarrolladas con la misma intensidad. TORTELLA destaca que el sistema bancario de 1856 (los bancos de emisión y las sociedades de crédito) fue improvisado y

*(e)n lugar de contribuir al desarrollo de la industria o de la agricultura, [volcó] su capacidad crediticia al servicio de las compañías ferroviarias, cuya estructura societaria, actividad intensa y, sobre todo, apoyo oficial, las hacían campo aparentemente muy atractivo para la inversión.*¹⁴⁷⁵

Cabe subrayar, desde un punto de vista del Derecho societario, el apartado 3 del artículo 4 de la LSCr, que autorizaba a éstas a *(p)racticar la fusión y transformación de toda clase de sociedades mercantiles, y encargarse de la emisión de acciones u obligaciones de las mismas*. No se puede profundizar en el análisis de este artículo, por exceder del ámbito de nuestro estudio, simplemente se repara en él como precursor de las actividades propias de lo que actualmente se denomina banca de inversión.

En la Ley y en el Reglamento de 1848 no se hace mención a modificaciones estructurales de sociedades mercantiles. Evidentemente, se trataba de operaciones que se podían hacer y que debían estar aprobadas por el Gobierno o por el Parlamento (como ocurrió, por ejemplo, en la fusión del Banco de San Fernando con el Banco de Isabel II mediante RD de 15 de febrero de 1847). Es interesante que, por un lado, el artículo 4.3 LSCr sólo recoge dos modificaciones estructurales: la fusión y la transformación, dejando fuera a la escisión; y, por otro, la autorización de las sociedades de crédito para gestionar la emisión de acciones u obligaciones de otras compañías mercantiles.

C) DIFERENCIAS ENTRE EL RÉGIMEN DE LA LSCr Y EL DE LA LEY DE 1848.

Sin duda la Ley de 1848 y la LSCr están íntimamente vinculadas pero, como se ha comentado anteriormente, las bases de sus políticas legislativas son muy diferentes. La Ley de 1848 recoge una posición intervencionista y cautelosa ante el fenómeno de las compañías por acciones, mientras que la LSCr se basa en unos postulados más flexibles para atraer a los pequeños inversores. Como expone MARTÍ DE EIXALÁ,

(p)ara ello fue indispensable modificar la ley sobre sociedades anónimas respecto a la responsabilidad de los accionistas, y dotar a las nuevas sociedades de privilegios encaminados a poder utilizar el crédito en grande escala: éste fue el principal objeto de la ley de 28 de enero de 1856 (...) Pero la ley de

¹⁴⁷⁵ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, pág. 142.

*excepción de que se trata, necesitaba para completarse, la de sociedades mercantiles por acciones; de suerte que eran únicamente excepciones a esta última las disposiciones que en aquélla se contienen.*¹⁴⁷⁶

En el presente epígrafe se van a tratar esas excepciones de las que habla MARTÍ DE EIXALÁ, si bien, cabe advertir que la LSCr no se limita a establecer salvedades a la Ley de 1848, sino que también establece unas obligaciones especiales, que no son necesariamente contrarias a la Ley de 1848.

1. Excepciones establecidas por la LSCr en relación a la Ley de 1848

a) Naturaleza de la autorización: gubernativa y no parlamentaria

Con carácter previo, se ha de recordar que el artículo 2 de la Ley de 1848, que regula la autorización por ley, se refiere textualmente al *establecimiento de Bancos de emisión y cajas subalternas de éstos*, que no son sociedades de crédito, dado que no podían emitir billetes. Por lo tanto, no hay una referencia expresa a que dichas sociedades debieran ser aprobadas por ley del Parlamento. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que al poder desarrollar como objeto social la creación de *toda clase de empresas de caminos de hierro, canales, fábricas, minas, dársenas (docks), alumbrado, desmontes y roturaciones, riegos, desagües y cualesquiera otras empresas industriales o de utilidad pública*¹⁴⁷⁷, quedarían incluidas dentro de otras de las menciones del artículo 2 de la Ley de 1848: *construcción de carreteras generales, canales de navegación y caminos de hierro*. Por este motivo y, por otros como, por ejemplo, la posible consideración de empresas de interés público que gozaban de determinados privilegios¹⁴⁷⁸ para fomentar la inversión, habría que concluir que las sociedades de crédito deberían ser aprobadas por ley en las Cortes Generales. En cualquier caso, no disponemos de antecedentes concretos, pues no se constituyó ninguna de estas sociedades antes de 1856, fecha de la promulgación de la LSCr.

La LSCr supone una drástica variación en la política legislativa de la Ley de 1848 al establecer, con carácter general, que la autorización de estas compañías fuera competencia del Gobierno. En efecto, según el artículo 10 de la LSCr,

(e)l Gobierno podrá hacer concesiones por medio de Reales decretos para la organización de sociedades anónimas de crédito conformándose a lo dispuesto en la presente ley, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan acudir a las Cortes solicitando la constitución de una sociedad por ley especial.

Además, también se establece en la LSCr que

(l)os estatutos y reglamentos para la administración de las sociedades anónimas de crédito, serán presentados al Gobierno, publicados en la Gaceta y

¹⁴⁷⁶ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones...*, pág. 305.

¹⁴⁷⁷ Artículo 4.2 LSCr.

¹⁴⁷⁸ Artículo 2 de la Ley de 1848.

*aprobados, oyendo siempre previamente al Consejo de Estado. Interin éste no funcione, se oirá al Tribunal contencioso-administrativo*¹⁴⁷⁹.

Por lo tanto, los grupos interesados en la constitución de las sociedades de crédito tenían que negociar la autorización con el Gobierno, evitando el largo proceso de tramitación parlamentaria previsto en la Ley de 1848, en el que era más difícil y costoso obtener la aprobación del proyecto.

b) Objeto social general

El objeto social constituía una cuestión fundamental en las compañías anónimas. Ya el CCom 1829 establecía que estas sociedades se constituían *(c)reándose un fondo por acciones determinadas para girarlo sobre uno o muchos objetos*¹⁴⁸⁰. El privilegio de la responsabilidad limitada se concedía en la medida en que la nueva persona jurídica desarrollara la actividad exclusivamente en el ámbito de su objeto social¹⁴⁸¹.

El Legislador del 48 no varía esta política legislativa, en todo caso, pretende dejar claro qué actividades puede realizar la compañía anónima y cuáles no, por carecer de interés público. Así la Ley de 1848 establece que *(t)oda compañía por acciones, se constituirá precisamente para objetos determinados*¹⁴⁸² y que deben ser de interés público¹⁴⁸³. Por su parte, el Reglamento de 1848, al regular el contenido de la escritura de fundación de la compañía, recoge que este documento debe expresar *(e)l objeto o ramo de industria o de comercio a que exclusivamente ha de dedicarse la compañía*¹⁴⁸⁴ (el subrayado es nuestro).

En cambio, el Legislador de 1856, modifica esta postura. En efecto, como se ha visto en un epígrafe anterior, el artículo 4 LSCr permitía hasta nueve diferentes clases o tipos de objeto social que la compañía podía realizar simultáneamente. MARTÍ DE EIXALÁ¹⁴⁸⁵ expone esta modificación legislativa con las siguientes palabras:

[El contenido del artículo 4 sobre el objeto social de las sociedades de crédito] *no era más que una extensión de facultades como excepción al espíritu, más que a la letra del artículo 5 de la Ley de 28 de enero de 1848 y del n 3 del artículo 1 del Reglamento para su ejecución, en los cuales parecía haberse querido que una sociedad por acciones se contrajese exclusivamente a un ramo determinado de industria o comercio. Las nuevas sociedades de crédito no tienen límites ni restricción acerca de las operaciones a que quieran dedicarse.*

c) No es necesaria una proporción entre el capital social y el objeto social

Otro aspecto importante del objeto social era su relación con el capital social. Junto a la obligación de especificación del objeto social, expuesta en el epígrafe

¹⁴⁷⁹ Artículo 9 LSCr.

¹⁴⁸⁰ Artículo 265.3 CCom 1829.

¹⁴⁸¹ Se puede consultar al respecto el capítulo sobre el régimen del objeto social.

¹⁴⁸² Artículo 5 de la Ley de 1848.

¹⁴⁸³ Artículos 2 y concordantes de la Ley de 1848.

¹⁴⁸⁴ Artículo 1.3 del Reglamento de 1848.

¹⁴⁸⁵ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones...*, págs. 307 y 308.

anterior, el Legislador del 48 introduce la necesidad de que el capital social sea proporcionado a dicho objeto. La supervisión del cumplimiento de este requisito correspondía a la Autoridad pública.

En efecto, la Ley de 1848 establecía que

*(t)oda compañía por acciones, se constituirá precisamente para objetos determinados y con un capital proporcionado al fin de su establecimiento*¹⁴⁸⁶ (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, el capital social no era fijado de manera discrecional por los socios, sino que debía guardar necesariamente relación con el objeto social. Además, su desembolso tenía también que adaptarse a las necesidades financieras de la compañía. El Jefe Político (sustituido posteriormente por el Gobernador civil de la Provincia) era el encargado de controlar e inspeccionar esta cuestión, tal y como se prevé en el artículo 13.3 del Reglamento de 1848, en el que se asigna al Jefe Político examinar

(s)i el capital prefijado en los estatutos sociales puede graduarse suficiente para el objeto de la empresa; si está convenientemente asegurada su recaudación; si las épocas establecidas para los dividendos pasivos de las acciones están combinadas de manera que la caja social se halle suficientemente provista para cubrir sus obligaciones.

Esta facultad de inspección de la Autoridad pública se compone de dos ámbitos complementarios. En primer lugar, comprobar que la cifra de capital es acorde o proporcional con el objeto de la compañía. Y, en segundo lugar, si, una vez fijada la cifra, es razonable el calendario de desembolsos de los dividendos pasivos. Por este motivo, el Reglamento de 1848 establece que en el RD de autorización de la sociedad, el Gobierno fije *la parte del capital con que haya de constituirse (...) determinándose el plazo para hacer efectiva en la caja social y el que se estime suficiente para que se complete la suscripción de las acciones*¹⁴⁸⁷.

La LSCr supone una excepción al régimen de la proporción capital – objeto social establecido en la Ley de 1848, dado que en aquella, aunque no se deroga expresamente el régimen de ésta, ningún artículo recoge dicho principio, que queda suprimido de hecho por la nueva política legislativa. Así lo explica PERECAULA:

*(p)or la ley de 28 de enero de 1848 (...) se disponía en general respecto de todas las compañías por acciones que su capital fuese proporcionado al fin de su establecimiento, en las de crédito, como no se constituyen para un objeto fijo, sólo se dispone que sea determinado; de manera que han de concretarse en sus operaciones a lo que permitan su capital efectivo y el representativo de las obligaciones que legalmente puedan emitir.*¹⁴⁸⁸

¹⁴⁸⁶ Artículo 5 de la Ley de 1848.

¹⁴⁸⁷ Artículo 21 del Reglamento de 1848.

¹⁴⁸⁸ PERECAULA, A. (1871): *Diccionario...*, pág. 194.

Por último, cabe señalar con MARTÍN ACEÑA, que la Ley *no establecía un fondo de reservas mínimo y, lo que es más importante, no determinaba ningún tipo de coeficiente de caja o de cualquier otra modalidad*.¹⁴⁸⁹

- d) *Posibilidad de emitir acciones al portador y suspensión de la responsabilidad del cedente en la transmisión de acciones con dividendos pasivos (artículo 283 CCom 1829)*

La emisión de acciones al portador fue uno de los temas más controvertidos durante la tramitación de la Ley de 1848. El primer PL 1848 que presentó el Gobierno establecía la obligatoriedad de emitir sólo acciones nominativas¹⁴⁹⁰. La segunda versión del PL 1848 introdujo la posibilidad de emitir hasta un tercio del capital social mediante acciones al portador¹⁴⁹¹. Las dos siguientes versiones mantuvieron inalterado este tema¹⁴⁹². En cambio, el paso por el Senado cambió radicalmente la situación y, tras largas y acaloradas discusiones (probablemente el tema proporcionalmente más tratado por los intervinientes) se decidió prohibir la emisión de acciones al portador para evitar fraudes y abusos de los administradores¹⁴⁹³. Esta posición legislativa es la que prevaleció en la redacción final de la Ley, que en su artículo 12 establece que

(l)as acciones en que se divida el capital de la compañía estarán numeradas y se inscribirán en el libro de registro que habrá de llevarse necesariamente a nombre de la persona o corporación a quien correspondan.

Se trata de una importante paradoja que en la primera Ley española de sociedades anónimas se prohíba la emisión de acciones al portador, en las que el titular permanece en el anonimato.

Los grupos de interés que demandaban la autorización de acciones al portador (en el que, dentro de los juristas, destacaba, sin duda, D. Pedro Sáinz de Andino¹⁴⁹⁴) no cejaron su empeño para recuperar el derecho a emitir acciones al portador y lo consiguieron en 1856 con la LSCr. En efecto, su artículo 6 establece lo siguiente:

¹⁴⁸⁹ MARTÍN ACEÑA, P. (1985): “Desarrollo y modernización del sistema financiero, 1844 – 1935” en SÁNCHEZ ALBORNOZ, N. *La modernización económica de España 1830 – 1930*, Madrid, págs. 125 – 126.

¹⁴⁹⁰ Artículo 4 del PL 1848 presentado por el Gobierno el 26 de febrero de 1847 (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 27 de febrero de 1847. Apéndice Segundo al núm. 46, págs. 653 y 654).

¹⁴⁹¹ Artículo 12 del PL 1848 de 16 de abril de 1847 (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 16 de abril de 1847. Apéndice Quinto al núm. 76, págs. 1391 a 1393).

¹⁴⁹² Artículo 12 del PL 1848 de 23 de abril de 1847 (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 23 de abril de 1847. Apéndice Primero al núm. 81, págs. 1499 y 1500) y mismo artículo del PL 1848 de 18 de diciembre de 1847 (DsC. Senado. Sesión de 18 de diciembre de 1847. Apéndice Segundo al núm. 16, págs. 251 y 252).

¹⁴⁹³ PL 1848 aprobado por el Senado (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 29 de diciembre de 1847. Apéndice al núm. 32, págs. 617 y 618). En el capítulo sobre el régimen de las acciones se encuentran abundantes comentarios relativos a las intervenciones de los Senadores sobre la prohibición de las acciones al portador.

¹⁴⁹⁴ DsC. Senado. Sesión de 23 de diciembre de 1847, núm. 19, págs. 283 y ss.

*Las acciones serán al portador; pero cualquiera accionista tendrá derecho a depositarlas en la sociedad para recibir de la misma un resguardo nominativo*¹⁴⁹⁵.

Otra excepción importante respecto al régimen de las acciones establecido por la Ley de 1848, en continuidad con el CCom 1829, es la relativa a la responsabilidad del transmitente de acciones con dividendos pasivos.

En efecto, el artículo 283 CCom 1829 establecía que

(l)os cedentes de las acciones inscritas en las compañías anónimas que no hayan completado la entrega total del importe de cada acción, quedan garantes del pago que deberán hacer los cesionarios, cuando la administración tenga derecho a exigirlo.

Aunque la Ley de 1848 no recoge expresamente esta previsión del CCom 1829, sí lo hace el Reglamento de 1848 en los siguientes términos:

*Cuando no estuviere cubierto el valor íntegro de la acción, se hará expresión formal en el acto de transferencia de quedar el cedente subsidiariamente responsable del pago que deberá hacer el cesionario de las cantidades que falten para cubrir el importe de la acciones según se prescribe en el artículo 283 del Código de comercio*¹⁴⁹⁶.

Esta responsabilidad del socio transmitente que, sin duda, facilita el puntual y correcto desembolso de los dividendos pasivos en los momentos previstos, fue suspendida o dejada sin efecto por el mismo artículo 6 LSCr, antes citado, que en su párrafo final establece:

No tendrá efecto contra los cedentes de estas acciones lo dispuesto en el artículo 283 del Código de comercio.

Cabe transcribir aquí, como mejor comentario de estas dos excepciones (las acciones al portador y la suspensión de los efectos del artículo 283 CCom 1829), las siguientes palabras de MARTÍ DE EIXALÁ¹⁴⁹⁷:

Presentaba el carácter de un privilegio [consistente en] que las acciones de esas sociedades fuesen al portador y que contra sus cedentes no tuviese efecto la responsabilidad subsidiaria que impone el artículo 283 del Código de comercio (artículo 6 de la Ley de sociedades de crédito). Para atraer los ahorros de las

¹⁴⁹⁵ Este artículo, además, establece otros requisitos que no coinciden exactamente con la Ley de 1848, pero que no se puede entender que sean contrarios a ella. Así, el párrafo segundo dice que la emisión de acciones para poder constituir la sociedad

será desde un tercio a una mitad de las que constituyan el capital social. El primer dividendo se efectuará en la Caja social dentro de los treinta días de la aprobación oficial de la sociedad, y su importe deberá ser de un 25 por 100 si la emisión es por mitad, y de un 30 por 100 si las acciones emitidas representan la tercera parte del capital.

El artículo 9 de la Ley de 1848 fijaba un máximo de un veinticinco por ciento para el desembolso anterior a la obtención del RD de autorización.

¹⁴⁹⁶ Artículo 33 del Reglamento de 1848.

¹⁴⁹⁷ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones...*, pág. 308.

modestas fortunas, era necesario limitar la responsabilidad de los accionistas, lo que se conseguía dejándoles de imponer la subsidiaria que sobre los cedentes de las acciones pesaba hasta el completo desembolso de las mismas; por manera que, al exigirse un dividendo, podía el accionista que no quería pagarlo dejar caducar su acción, pero no hacer ningún nuevo desembolso sino consideraba próspera la situación o lisonjero el porvenir de la compañía (el subrayado es nuestro).

e) *Emisión de obligaciones al portador*

Las obligaciones al portador fueron un instrumento clave para el desarrollo de la actividad empresarial de las sociedades de crédito. Tan importante fue que PERECAULA¹⁴⁹⁸ describe a estas sociedades de la siguiente manera:

Llámanse indudablemente de “crédito”, porque utilizan el suyo principalmente por medio de las obligaciones al portador cuya emisión se les permite.

La Ley de 1848 prohibió la emisión de documentos al portador por las sociedades anónimas y comanditarias por acciones para evitar los fraudes y abusos que se habían producido en la constitución de sociedades que, aunque tenían un determinado objeto social, en realidad actuaban como bancos emitiendo papel al portador e invirtiendo después el dinero captado.

Por este motivo, el artículo 15 de la Ley de 1848 determina que

(n)inguna compañía podrá emitir, a no hallarse autorizada por la ley, billetes, pagarés, abonarés, ni documento alguno al portador: los infractores quedarán sujetos al pago de una multa que no podrá exceder de 50,000 reales.

Por lo tanto, la regla general era la prohibición de emisión de este tipo de documentos. La propia Ley de 1848 preveía su excepción, siempre que lo aprobase otra ley (lo cual no presenta especiales problemas interpretativos). La primera excepción legal fue la LB estudiada en el apartado anterior. Y la segunda, fue la LSCr, que regulaba esta cuestión en dos artículos:

Las operaciones de las sociedades de crédito podrán extenderse a los objetos siguientes:

5. Emitir obligaciones de la sociedad por una cantidad igual a la que se haya empleado y exista representada por valores en cartera por efecto de las operaciones de que tratan los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de este artículo¹⁴⁹⁹.

Y,

Las obligaciones que emitan las sociedades con arreglo al párrafo quinto del artículo 4 serán al portador y a plazo fijo, que no baje en ningún caso de treinta días con la amortización e intereses que se determine. Ínterin no se haya hecho

¹⁴⁹⁸ PERECAULA, A. (1871): *Diccionario ...*, pág. 193.

¹⁴⁹⁹ Artículo 4.5 LSCr.

efectivo todo el capital, las sociedades sólo podrán emitir el quíntuplo de la parte realizada en obligaciones a vencimientos de más de un año, y hasta diez veces su importe cuando el capital se haya realizado por completo.

La suma de obligaciones a plazos menores de un año, unida a la de las cantidades recibidas en cuenta corriente, no podrán, en ningún caso, exceder del doble del capital efectivo de la sociedad¹⁵⁰⁰.

Cabe aclarar que estas obligaciones son a plazo y devengan un interés y, por lo tanto, no se pueden identificar con los billetes emitidos por los bancos¹⁵⁰¹.

Señala GONZÁLEZ HUEBRA que la autorización para emitir obligaciones es consecuencia de la pluralidad de objetos sociales a los que se pueden dedicar las sociedades de crédito (artículo 4 de la LSCr), dado que

(t)odos o la mayor parte de ellos son también de la mayor importancia y de interés público, bien conocido, por lo que la Ley, deseando favorecer su ejecución, les concede la facultad de emitir obligaciones al portador, a fin de que utilizando su crédito puedan reunir los fondos que necesiten para realizarlos si no alcanzan los suyos propios o les conviene aumentarlos por este medio, llamando en su auxilio otros capitales.¹⁵⁰²

2. Obligaciones especiales establecidas por la LSCr, en relación a la Ley de 1848: vigilancia por la Autoridad pública y publicidad contable.

El régimen general de la intervención e inspección de las compañías mercantiles por acciones establecido por la Ley de 1848 se formula en su artículo 17, que dice así:

El Gobierno sin gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías ejercerá la inspección que conceptúe necesaria para afianzar la observancia estricta y constante de la presente ley.

Respecto a la obligación de las sociedades de informar sobre sus estados financieros a la Autoridad pública, el artículo 34 del Reglamento de 1848 establecía el deber de dar traslado a los Jefes Políticos¹⁵⁰³ del balance general anual de su situación, en el que se comprenderán todas las operaciones practicadas en el año, con el estado de su activo y pasivo. El Jefe Político debía comprobarlo y si era correcto, se imprimía, publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia y se comunicaba al T. de c.

Además, el Jefe Político debía informar al Gobierno del resultado del balance anual de cada compañía, así como de cualquier novedad relevante en relación a estas sociedades¹⁵⁰⁴.

¹⁵⁰⁰ Artículo 7 LSCr.

¹⁵⁰¹ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, pág. 178, MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones ...*, págs. 309 y 310 y PERECAULA, A. (1871): *Diccionario ...*, pág. 195.

¹⁵⁰² GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, pág. 177.

¹⁵⁰³ Posteriormente denominados Gobernadores civiles o de Provincia.

¹⁵⁰⁴ Deberes establecidos en el artículo 37 del Reglamento de 1848, cuyo texto dice así:

Estas previsiones son objeto de una regulación especial por la LSCr en su artículo 8, que establece lo que se transcribe a continuación:

Las sociedades de crédito estarán obligadas a presentar todos los meses al Gobierno de S.M. y a publicar en la Gaceta un estado de su situación, y además, siempre que el Gobierno lo pida, remitirán estados de cajas, cartera y resúmenes de operaciones.

El Gobierno podrá también hacer examinar, siempre y cuando lo estime conveniente, las operaciones y contabilidad de las sociedades y comprobar el estado de sus cajas. Al efecto serán presentados todos los libros, documentos y valores de cualquiera especie que existan en ellas.

Se consagra la obligación cualificada para las sociedades de crédito de presentar con carácter mensual (y no anual como establecía el Reglamento de 1848) un estado de situación, así como su publicación en la GdM. El objetivo de estas obligaciones era, según MARTÍ DE EIXALÁ

*que la publicidad de la situación de la sociedad mantuviese dentro de sus límites el crédito que cada compañía disfrutaba, y a fin de que pudiese el Gobierno prevenir los abusos o corregirlos oportunamente.*¹⁵⁰⁵

GONZÁLEZ HUEBRA¹⁵⁰⁶ compara estas obligaciones con las impuestas a los bancos de emisión por la LB y concluye que las sociedades de crédito, por su naturaleza, no necesitaban una inspección por la Autoridad pública tan constante y directa como los bancos. En cambio, para proteger a sus accionistas y a lo que hoy denominamos mercado, se encontraban sometidas a las mismas reglas de publicidad que las sociedades de bancos. SÁNCHEZ-ALBORNOZ¹⁵⁰⁷ manifiesta que la obligación de publicar el balance mensual en la GdM se hizo de una manera irregular.

Los Jefes políticos darán cuenta al Gobierno del estado de cada compañía por acciones que hubiere en su territorio según el resultado del balance anual, exponiendo las observaciones que estimaren conducentes en las materias que sean de interés de la administración. Además de estas comunicaciones anuales pondrán en conocimiento del Gobierno para la resolución correspondiente toda novedad que ocurra en el régimen directivo y administrativo de las compañías que pueda perturbarlo o que produzca alguna alteración en la observancia de sus estatutos.

¹⁵⁰⁵ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones...*, pág. 310.

¹⁵⁰⁶ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho...*, págs. 179-180.

¹⁵⁰⁷ SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N. (1868): *Los Bancos y las sociedades de crédito...*, pág. 40.

IV. LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE OBRAS PÚBLICAS

A) REFERENCIAS A LAS COMPAÑÍAS DE OBRAS PÚBLICAS EN LOS DEBATES PARLAMENTARIOS DE LA LEY DE 1848

Durante los debates del PL 1848, la cuestión de las sociedades concesionarias de obras públicas se planteó en varias ocasiones¹⁵⁰⁸. La más densa e importante se produjo en el Congreso durante la sesión del 20 de abril de 1847 entre el Diputado Sr. Martínez Almagro, el Sr. Bertrán de Lis, miembro de la CCD, y el Señor Pastor Díaz, entonces Ministro de CIOP.

Conviene detenerse en el contenido de las propuestas y contestaciones de los parlamentarios, pues reflejan la posición política del Legislador del 48, cuyo examen histórico, a la luz de la LSCOP (ocho años posterior a la Ley de 1848) apunta en la dirección del fracaso y equivocación.

Es importante tener en cuenta la legislación en vigor durante los debates parlamentarios. El Diputado Sr. Martínez Almagro lo explica con gran concisión en una parte de su intervención¹⁵⁰⁹:

... el Gobierno está en el día autorizado a hacer concesiones de esta clase por la ley vigente de 1840 y por el artículo 294 del Código de comercio¹⁵¹⁰. Según esta ley, se halla el Gobierno autorizado para adjudicar toda clase de obras públicas, y hasta para imponer arbitrios.

Por lo tanto, antes de la promulgación de la Ley de 1848, el Gobierno, en determinados casos, podía otorgar concesiones de obras públicas. En la medida en que el artículo 2 de dicha Ley exigía autorización parlamentaria *para la formación de toda compañía que tenga por objeto (...) la construcción de carreteras generales, canales de navegación y caminos de hierro*, y, dado que, además, el texto legal no contenía una disposición derogatoria clara y detallada, no resultaba evidente si la concesión podría ser autorizada exclusivamente por el Parlamento. Por este motivo, el Sr. Martínez Almagro preguntó de manera expresa tanto al miembro de la CCD que defendía el PL 1848 (Sr. Bertrán de Lis), como al entonces Ministro de CIOP, si la legislación citada quedaba derogada o no por la Ley de 1848. Ambas respuestas fueron afirmativas¹⁵¹¹.

El Sr. Martínez Almagro fue un precursor de la diferenciación entre la autorización de la concesión y ejecución de la obra pública (mediante ley), por un lado, y la constitución de la sociedad concesionaria (mediante RD), por otro. Esta postura se

¹⁵⁰⁸ Igual que lo fue el tema de las sociedades de bancos, aunque de manera más breve en el caso de las compañías concesionarias de obras públicas.

¹⁵⁰⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, págs. 1436 a 1443. Se advierte que en este epígrafe, como excepción, las citas textuales del Diario de sesiones, en ocasiones, no se referenciarán detalladamente para evitar un exceso de notas a pie de página de la misma fuente. Todas las intervenciones se encuentran en las ocho páginas citadas.

¹⁵¹⁰ Cuyo texto dice así:

Cuando las compañías anónimas hayan de gozar de algún privilegio que Yo les conceda para su fomento, se someterán sus reglamentos a mi Soberana aprobación.

¹⁵¹¹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1440 (contestación del Sr. Bertrán de Lis) y pág. 1444 (respuesta del Ministro, Sr. Pastor Díaz).

oponía frontalmente a uno de los pilares de la Ley de 1848, cual era la necesaria aprobación por ley de las compañías concesionarias de obras públicas. El Legislador de aquel año mantuvo inflexible su posición y rechazó de plano la propuesta de Martínez Almagro. Como se verá en epígrafes posteriores, a los ocho años de la promulgación de la Ley de 1848 el Legislador cambió de política legislativa de manera que la obra pública era concedida por ley y la compañía adjudicataria se constituiría con la autorización del Gobierno.

Una parte del contenido básico de la propuesta de este Diputado era aprobar urgentemente una Ley que regulara las obras públicas:

*La gran cuestión, a mi entender, es precisamente poner a cubierto los intereses sociales, dejando aparte la autorización de las sociedades, y para ello es preciso formar una ley especial, como ya he indicado, de obras públicas, caminos de hierro, Bancos y demás empresas análogas. Esta es una verdad que todos reconocemos y confesamos; necesidad que yo no puedo concebir cómo la ha confundido la Comisión con la formación de esas sociedades, porque de este modo se introduce mayor desorden, mayor anarquía que la que se quiere evitar con el proyecto de ley.*¹⁵¹²

Es decir, la constitución de la compañía adjudicataria quedaría en el ámbito del RD y no en el Parlamento. En este sentido, expuso el siguiente ejemplo:

(e)n los caminos de hierro se fijan las tarifas, señalando el máximo y el mínimo a que deben ascender, el depósito, etc., y dejando al Gobierno los pormenores de la subasta pública. Esto es lo que conviene hacer aquí, pues de lo contrario si se hace lo que esta ley dice, el Congreso se va a convertir en una especie de oficina de subastas: uno pedirá que la concesión sea por 90 años, por ejemplo, y otro dirá por 80 o menos; uno querrá que las tarifas sean de un 20 por cien y otro pretenderá sean de un 25 o de un 15, y nadie, como he dicho antes, se ocupará en si se han llenado o no las condiciones necesarias para la formación legal de la compañía.

A esta cuestión respondió el Sr. Bertrán de Lis, miembro de la CCD, aclarando que dicha Comisión no se había confundido, como insinuaba el Diputado Martínez Almagro en su intervención, puesto que su objetivo era que las compañías concesionarias de obras públicas fueran autorizadas exclusivamente por las Cortes Generales, no por el Gobierno. A continuación se extractan varios pasajes que desarrollan esta postura de la CCD¹⁵¹³:

- *(h)a creído también la Comisión que cuando esta compañía tenga por objeto beneficiar alguno de aquellos grandes objetos que interesan a la sociedad, no bastaban solamente las garantías que daba la intervención del Gobierno, sino que era ya menester la intervención legislativa; y esta intervención no la creía necesaria solamente por ser de la índole de los Cuerpos Colegisladores, porque lo es indudablemente, sino porque ofrece mayores garantías que ninguna otra, en atención a la publicidad que traen consigo las discusiones.*

¹⁵¹² DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1436. Esta referencia sirve también para la siguiente cita del discurso de Martínez Almagro.

¹⁵¹³ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, págs. 1437 a 1439.

- *La Comisión no solamente ha querido que el privilegio sea objeto de una ley, sino también la organización de la compañía.*
- *Pero no sólo se necesita que sea una ley la que determine el privilegio que se deba conceder, sino que cuando se trata de una compañía anónima es necesaria una ley que determine cuál ha de ser su organización, porque esas compañías por su índole son irresponsables, no se encuentran en ninguna parte cuando es preciso perseguirlas, y por consiguiente es necesario que la ley adopte ciertas disposiciones especiales, ciertas precauciones para su creación. Y así, cuando se trata de conceder un privilegio que por ser exclusivo es muy grave, es necesario saber a quién se concede.*
- *Cuando se trate de conceder un privilegio, no sólo se deberá tener en cuenta la clase de privilegio que es, sino qué garantías ofrece la compañía a quien se va a conceder, e imponerle tales condiciones para organizarse, que pueda llevarse a cabo su responsabilidad.*

En este mismo sentido se manifestó el Ministro de CIOP (Sr. Pastor Díaz), que se encontraba presente en esa sesión:

Desde luego conocí que la intención del proyecto era la que ha dicho el Sr. Bertrán de Lis: obligar de una manera indirecta al Gobierno a que todas las grandes cuestiones (...) vinieran a resolverse de una manera más parlamentaria: que las compañías de ferro-carriles que en algún tiempo se han de establecer y realizar, que la construcción total de las grandes líneas de carreteras, que los canales de navegación, que el encauzamiento de los grandes ríos, que todas esas obras en que se comprometen además de los intereses particulares los intereses públicos, que pueden ser mejorados o lastimados con su realización, habían de tratarse y debían tratarse aquí en el Parlamento¹⁵¹⁴.

La oposición, tanto de la CCD como del Gobierno, hizo que la propuesta del Sr. Martínez Almagro fracasara. Pero la argumentación de este Diputado no se limitó a las ideas que se acaban de comentar. Realizó una interesante mención al Derecho comparado para ilustrar la incoherencia del sistema propuesto por la CCD y aceptado por el Gobierno.

En primer lugar, hizo referencia al Derecho francés en el que

(s)e divide completamente la autorización de una sociedad para constituirse, de la concesión de una carretera, de un camino de hierro y otras cosas análogas, para las cuales da el Gobierno una subvención como por vía de auxilio y fomento. Y para que no se confundiese una cosa con otra, la ley de 1842 fijó ya las grandes líneas de caminos de hierro que se habrían de construir bajo la obligación del Gobierno en auxiliarlas.¹⁵¹⁵

¹⁵¹⁴ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, págs. 1442 y 1443.

¹⁵¹⁵ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1436.

El Sr. Bertrán de Lis¹⁵¹⁶ le respondió sobre el particular diciendo que, efectivamente, era así en Francia, pero porque la legislación se había aprobado hacía mucho tiempo, cuando no existía tanto espíritu de asociación, ni el Parlamento ejercía la influencia que tendría después. Y puso el interesante ejemplo de una concesión concreta que el Gobierno, aun siendo competente para autorizarla, decidió someterla a aprobación legal:

(s)in ir más lejos, hace pocos días se ha presentado por el gobierno en la Cámara de los Diputados, y posteriormente en la de los Pares, un proyecto para sancionar un contrato que el Gobierno había hecho con una compañía anónima para la navegación por vapor desde el Havre hasta Estados Unidos. Es verdad que estaba el contrato hecho y formada la compañía; pero el Gobierno presentó ese contrato, lo que basta para conocer que el espíritu y tendencia del poder legislativo en Francia sobre esta materia es aproximarse a la práctica inglesa. ¿Y qué ha hecho la Cámara? La Cámara ha querido examinar la organización de la compañía a quien se concedía el privilegio de establecer esta carrera, y ha llegado a tal punto su escrupulosidad, que la Cámara se ha ocupado de ver si en los individuos de esa compañía había algunos Pares y Diputados, porque creyó que no se debía conceder el privilegio si figuraban en ella tales o cuales individuos.

A este caso concreto, el Sr. Martínez Almagro replicó diciendo que el Parlamento había descendido a personas, *pero la ley no debe buscar la garantía en las personas, sino en el depósito de esas personas, cualesquiera que ellas sean*¹⁵¹⁷.

Y, en segundo lugar, Martínez Almagro se refirió al Derecho británico¹⁵¹⁸ en el que, según expuso, al principio se previó que todas las sociedades anónimas cuyo objeto fuera una obra pública o ferrocarril, debían aprobarse por ley,

*pero con una notable diferencia: las que tenían por objeto obras públicas pueden constituirse provisoriamente, enviando sus estatutos y demás a una oficina ad hoc, que se llama “Soint Stock” [sic], y acuden después al Parlamento; pero las de caminos de hierro tenían que presentarse desde luego ante una comisión de la Cámara.*¹⁵¹⁹

Lo más relevante del sistema británico era que el examen de la solicitud se realizaba por una Comisión de la Cámara, que resolvía sobre todos los detalles, pasando luego *por fórmula* a las Cámaras,

de modo que la aprobación realmente ha sido de la Comisión en la que todo se ventila en un juicio contradictorio con audiencia de las partes y asistencia de letrados.

A esta exposición respondió el Sr. Bertrán de Lis¹⁵²⁰ reconociendo que es la Comisión la que decide, pero que aunque sea *por fórmula*, es el Parlamento el que le da

¹⁵¹⁶ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1439.

¹⁵¹⁷ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1440.

¹⁵¹⁸ Puede consultarse el apartado correspondiente del capítulo sobre el régimen de autorización.

¹⁵¹⁹ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1437.

¹⁵²⁰ DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 20 de abril de 1847, núm. 79, pág. 1439.

el carácter legal. Y realiza una interesante referencia a las compañías con facultad de expropiación para conseguir realizar su objeto social:

toda compañía que exige la facultad de expropiar por causa de utilidad pública tiene que ir al Parlamento, no sólo para obtener el privilegio, sino para que se examine su organización; y es muy frecuente que a consecuencia de esto se varíe la organización de la compañía. En los caminos de hierro ha sucedido que algunas veces el Parlamento ha determinado que los particulares y las compañías han de tener tal interés en acción, que han de tener acciones permanentes, y otras reglas particulares que entran en la organización de las compañías.

En cualquier caso, como se comentaba más arriba, estas referencias al derecho francés y británico no sirvieron para modificar la postura del Legislador del 48. En los siguientes epígrafes se trata de los aspectos fundamentales del cambio legislativo de 1855 y 1856 en esta materia de sociedades concesionarias de obras públicas.

B) NORMATIVA APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE OBRAS PÚBLICAS

El cambio de política legislativa sobre las obras públicas se entiende en el marco del periodo histórico denominado “Bienio Progresista”, comentado en epígrafes anteriores. En los años 1854 – 1856 se produce una liberalización de muchos principios políticos, entre los que se encuentra el impulso de todas las obras públicas, con especial atención a los ferrocarriles. Este movimiento se plasma en dos textos legales: la LF y la LSCOP.

La normativa sobre concesión de ferrocarriles tiene un primer antecedente en la RO de 31 de diciembre de 1844¹⁵²¹, que autorizaba provisionalmente las primeras concesiones. Tras la promulgación de la Ley de 1848, el Ministro Bravo Murillo presentó el primer Proyecto de Ley de Ferrocarriles¹⁵²². Posteriormente, también presentaron sendos Proyectos los Ministros Seijas Lozano y Reinoso. Ninguno fue aprobado y las normas para aprobar las concesiones eran confusas¹⁵²³.

Como ya se dijo en otro lugar, la RO de 31 de diciembre de 1844 fue un fracaso. En efecto, CARRERAS Y TAFUNELL¹⁵²⁴ ofrecen los siguientes resultados comparativos a los diez años de la promulgación de dicha norma: en España se habían construido

¹⁵²¹ GdM de 19 de enero de 1845, núm. 3780. En el capítulo sobre el contexto político y económico de la promulgación de la Ley de 1848 se recogen unos comentarios de CARRERAS Y TAFUNELL al régimen establecido por esta RO.

¹⁵²² Sobre los detalles de la política de Bravo Murillo en relación a la implantación de los ferrocarriles en España, se puede consultar una muy interesante obra de la época en la que se explica los motivos de las decisiones de la Administración de Bravo Murillo al respecto: REYNOSO, M. M. DE (1857): *Política administrativa del Gabinete Bravo Murillo, en el ramo de Fomento; y demostración de la legalidad y conveniencia de las concesiones de ferrocarriles de aquella época*, Madrid, págs. 70 y ss.

¹⁵²³ Esta descripción de los antecedentes se encuentra en PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea ...*, pág. 341.

¹⁵²⁴ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, pág. 134. Se puede consultar, para más detalles, CARRERAS, A. (1999): “Los ferrocarriles en Europa ...”, págs. 41 a 49.

apenas 400 kilómetros de vía ferroviaria, mientras que Francia en esa época tenía 5.000 kilómetros, Alemania 7.000 kilómetros y Reino Unido 11.000 kilómetros.

TORTELLA¹⁵²⁵ y WAIS¹⁵²⁶ señalan la importancia de las autorizaciones provisionales establecidas por la RO de 1844, como puerta abierta a toda clase de especulaciones y corrupciones¹⁵²⁷. Entre agosto de 1843 y julio de 1846 se aprobaron 23 concesiones provisionales, de las cuales 22 nunca fueron utilizadas y sólo una se terminó a principios de la década de los 50. La promulgación de nuestra Ley de 1848 otorgó a las Cortes la competencia exclusiva para la autorización de compañías ferroviarias. Esto también ocasionó importantes problemas de corrupciones y sobornos, de manera que para TORTELLA, *(l)os escándalos ferroviarios de estos años movieron a la oposición a favorecer el pronunciamiento de 1854, la célebre Vicalvarada.*

¿Cuál fue el motivo del fracaso de la primera normativa de 1844? Según CARRERAS Y TAFUNELL¹⁵²⁸ la falta de recursos financieros. La RO no contemplaba la asignación de recursos públicos. Pero el panorama cambió cuando llegaron al poder los liberales en el denominado “Bienio Progresista”, que se inició en 1854. En efecto, como dice GÓMEZ MENDOZA, *este fracaso de la política ferroviaria entre 1830 y 1854 fue el origen de un giro radical en la actuación del Estado*¹⁵²⁹, que se concretó en la LF y la LSCOP.

Así, la primera norma que modifica el régimen establecido por la Ley de 1848 es la LF¹⁵³⁰. Se trata de un texto largo, de cuarenta y nueve artículos más uno adicional. En él se clasifican los ferrocarriles en líneas de servicio general y de servicio particular, se establece el régimen de concesión o autorización para construirlos, incluidos los privilegios y exenciones generales de los que pueden gozar, así como su explotación.

TORTELLA concede una gran importancia a la LF en los siguientes términos:

Con la excepción de unos cuantos tramos cortos (Barcelona-Mataró, Madrid-Aranjuez, Langreo-Gijón), la red ferroviaria no comenzó a construirse hasta después de promulgada la Ley General de Ferrocarriles de 1855. (...)

Los progresistas consideraban que el ferrocarril era un parte esencial en la modernización de la economía española (fin que ellos perseguían explícitamente) y para lograr la construcción de la red estaban dispuestos a volcar todos los recursos necesarios, nacionales o importados. Por eso la ley facilitaba la formación de sociedades anónimas ferroviarias, preveía el pago de

¹⁵²⁵ TORTELLA, G. (1975): *Los orígenes...*, págs. 167 y 168.

¹⁵²⁶ WAIS SAN MARTÍN, F., (1967): *Historia ...*, págs. 39 y ss.

¹⁵²⁷ ARTOLA matiza esta cuestión en los siguientes términos: *es evidente que esta fórmula [las concesiones provisionales] implicaba un privilegio, muy poco justificado en ciertos casos por la falta de medios del beneficiario para llevar a buen término la concesión, pero no cabe exagerar sus posibilidades de negociación frente a una compañía con mayores recursos dado que a ésta le resultaba suficiente con dejar que transcurriese el plazo en cuestión para estar en situación de obtener una nueva concesión.* ARTOLA, M. (1978): “La acción del Estado” en ARTOLA, M. (dir.): *Los ferrocarriles en España. 1844 – 1943. I. El Estado y los ferrocarriles*, Madrid, pág. 342.

¹⁵²⁸ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, págs. 134 y 135.

¹⁵²⁹ GÓMEZ MENDOZA, A. (1989): *Ferrocarril, industria y mercado en la modernización de España*. Madrid, pág. 43.

¹⁵³⁰ GdM de 6 de junio de 1855, núm. 886.

*subvenciones, garantizaba a los inversores contra una serie de riesgos, y desgravaba la importación de material de transporte. Y por eso se complementó la Ley de Ferrocarriles con dos leyes más (la de Bancos de Emisión y la de Sociedades de Crédito) que permitieron la rápida formación de un sistema bancario que financió la construcción de la red ferroviaria en su primera fase (1856 – 1866). En el decenio que siguió a estas leyes (1856 – 1866) entraron en funcionamiento unos 4.500 km de vía, con un promedio anual de construcción, por tanto, de unos 450 km, nunca alcanzado en España.*¹⁵³¹

Es cierto que la legislación sobre ferrocarriles no fue la más acertada. Pero también cabe recordar que la construcción del tendido ferroviario contemplado en su conjunto, acabó produciendo unos efectos positivos para la sociedad y economía española. Se podría señalar con COMÍN¹⁵³² algunos de ellos, como la movilidad del trabajo y la urbanización, la mejora de las comunicaciones y, en tercer lugar, la creación del mercado nacional.

La LF establecía el trazado de la red básica sobre una configuración radial y autorizaba dos tipos de subvenciones públicas: una cantidad proporcional al presupuesto de la obra y una cantidad para asegurar el rendimiento del capital desembolsado hasta que comenzase la explotación comercial¹⁵³³.

El segundo texto normativo es la LSCOP¹⁵³⁴. Está compuesto por doce artículos y, tomando como base la LF del año anterior, amplía su ámbito de aplicación a todas las compañías concesionarias de obras públicas¹⁵³⁵. La LSCOP no deroga la LF, sino que, al contrario, declara que

*(q)uedan vigentes y se aplicarán a estas compañías, en cuanto no fuesen contrarias a las prescripciones de esta ley, las de la general de ferro-carriles de 3 de junio de 1855 y las que rigiesen en lo sucesivo acerca de sociedades mercantiles por acciones.*¹⁵³⁶

Por este motivo, las referencias en el presente trabajo al régimen de las sociedades concesionarias de obras públicas incluyen, salvo que se diga otra cosa, a las dos leyes y no sólo a la que se refiere expresamente a dichas compañías.

Cabe señalar que ambas leyes (3 de junio de 1855 y 11 de julio de 1856) son promulgadas, tal y como se expresa en su texto original, por las Cortes Constituyentes. Se trata de un periodo de cambios y reformas, inestable y breve, pero que en lo que se refiere a estas dos leyes, conviene destacar que permanecerán en vigor durante bastantes años, hasta la llegada del turbulento periodo 1868 – 1874.

¹⁵³¹ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, págs. 106 a 108.

¹⁵³² COMÍN COMÍN, F. (1999): “Los efectos económicos del ferrocarril sobre la economía española (1855 – 1935)” en MUÑOZ RUBIO, M., SANZ FERNÁNDEZ, J. Y VIDAL OLIVARES, J. (eds.) (1999): *Siglo y medio de ferrocarriles en España ...*, págs. 258 a 262.

¹⁵³³ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, pág. 135.

¹⁵³⁴ GdM de 12 de julio de 1856, núm. 1286.

¹⁵³⁵ *La concesión de un camino de hierro, canal u otras obras públicas*, dice textualmente el artículo 1 de la LSCOP.

¹⁵³⁶ Artículo 12 LSCOP.

En efecto, ambas leyes fueron objeto de modificaciones, pero sobre materias accidentales o no relevantes. Así, el Legislador posterior al “Bienio progresista” cambió en varias ocasiones el régimen de emisión de obligaciones de estas sociedades (las leyes de 11 de julio de 1862¹⁵³⁷, 29 de enero de 1862¹⁵³⁸ y la ley de presupuestos de 3 de agosto de 1866¹⁵³⁹ sobre la emisión de obligaciones de empresas concesionarias), así como alguna otra cuestión menor en disposiciones posteriores.

La legislación de sociedades concesionarias de obras públicas ha sido objeto de valoraciones muy diferentes por los historiadores económicos. Se recoge a continuación una de GÓMEZ DE MENDOZA, que expresa, resumidamente, varios de los temas relacionados con el objeto de nuestro estudio: *(c)on la Ley General de Ferrocarriles, los progresistas dejaron patente su convencimiento de que la modernización económica del país exigía la transformación del sistema de transportes. Con su política, el gobierno se esforzó por hacer atractivas las inversiones ferroviarias tanto para el ahorrador nacional, poco acostumbrado a las operaciones bursátiles, como para el extranjero, que rehuía los valores españoles por su conocida insolvencia. El éxito de la ley fue rotundo y en los diez años siguientes se sentaron las bases del futuro sistema ferroviario.*¹⁵⁴⁰

C) NOCIÓN, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS

MARTÍ DE EIXALÁ¹⁵⁴¹ dice que bajo la denominación de “sociedades concesionarias de obras públicas” se comprenden las de ferrocarriles, canales, puertos u otras obras semejantes. La ley que las regula es la LSCOP, *complementaria de algunas disposiciones de la general de ferrocarriles de 3 de junio de 1855*. Este autor se pregunta por la razón o motivo de la existencia de este tipo especial de sociedades. Según él, son varios los motivos:

- El deseo de dotar rápidamente al país de una vasta red de ferrocarriles.
- El laudable intento de canalizar a estas sociedades los ahorros antes retraídos de la especulación, así como los capitales extranjeros.
- La necesidad de utilización del crédito para la construcción de obras que aumentarán la riqueza pública. Y, por último,
- La esperanza de pingües beneficios.

Una cuestión relevante respecto a la noción de este tipo de compañías, es la suscitada por GONZÁLEZ HUEBRA¹⁵⁴², relativa a su naturaleza, pues mantiene, primero, que no se dedican a actos de comercio y, segundo, que puede dudarse de su carácter mercantil. Esta postura conecta con la de aquellos que, tiempo antes, sostenían que las

¹⁵³⁷ GdM de 20 de julio de 1860, núm. 202.

¹⁵³⁸ GdM de 5 de febrero de 1862, núm. 36.

¹⁵³⁹ Citada por MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones...*, pág. 313.

¹⁵⁴⁰ GÓMEZ MENDOZA, A. (1985): “Transportes y crecimiento económico, 1830 – 1930” en SÁNCHEZ ALBORNOZ, N.: *La modernización económica...*, Madrid, pág. 118.

¹⁵⁴¹ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones...*, pág. 311.

¹⁵⁴² GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho...*, págs. 179 y 180.

compañías anónimas precodificadas titulares de privilegios (explotaciones monopolísticas, etc.), por sus características singulares, no eran comerciantes ni quedaban sujetas al Derecho mercantil, sino a su régimen especial, establecido por la Autoridad pública al otorgar el privilegio o concesión (*octroi*)¹⁵⁴³.

Además, no se puede olvidar, como dicen FRAX ROSALES y MATILLA QUIZA¹⁵⁴⁴, que, ya desde 1844 la Administración pública entendió el ferrocarril como servicio público y, por tanto, las compañías por acciones que desarrollaran esa actividad, cumplían con la nota caracterizadora de la utilidad pública de su objeto social. El legislador podía haber optado por otro sistema de gestión, pero lo hizo por el de concesión¹⁵⁴⁵. Por eso, como dice GÓMEZ MENDOZA, *(l)a compañía concesionaria fue la gran protagonista de la industria de ferrocarriles*.¹⁵⁴⁶

Es obligado, sin embargo, deslindar o diferenciar el ámbito de la concesión pública, de las normas relativas al sujeto titular de dicha concesión, las cuales, sin duda, pueden –o deben– regularse por el Derecho mercantil, en función de la naturaleza de dicho sujeto. Si esto no fuera así, ¿por qué GONZÁLEZ HUEBRA estudia en su Curso de Derecho Mercantil estas compañías? Ésta es su interesante respuesta:

Las sociedades [de ferrocarriles y otras obras públicas] no se ocupan de actos de comercio, ni merecen propiamente la calificación de mercantiles, pero se forman por acciones con sujeción a las mismas reglas de las anónimas; en lo que no sean derogadas por las suyas particulares o especiales, se consideran generalmente estas empresas como una negociación, y se van aumentando tanto entre nosotros, que creeríamos dejar imperfecto este tratado, si no nos ocupáramos de ellas al examinar las que se rigen por leyes particulares.

Una característica fundamental de la noción de estas sociedades es que la concesión debe obtenerse en virtud de una ley, y la autorización de la constitución definitiva de la compañía que haya de ejecutar la concesión, corresponde al Gobierno mediante RD acordado en Consejo de Ministros¹⁵⁴⁷. Como se comentó en un epígrafe anterior, el Diputado Martínez Almagro se adelantó en nueve años a esta política legislativa de las sociedades concesionarias de obras públicas, pues la LSCOP previó exactamente lo que le rechazó Congreso de los Diputados en abril de 1847.

Otra característica importante de la noción de compañía concesionaria de obras públicas se encuentra recogida en la LF y se refiere a la duración de la concesión y de la sociedad:

¹⁵⁴³ Para más detalles, se puede consultar el capítulo sobre el concepto de compañía mercantil por acciones.

¹⁵⁴⁴ FRAX ROSALES, E., Y MATILLA QUIZA, M. J. (1988): “Transporte, comercio y comunicaciones” en ARTOLA, M. (dir.), Y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario) *Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola, I. Economía. Sociedad. Madrid*, pág. 214.

¹⁵⁴⁵ Se puede consultar el breve capítulo titulado “La elección del sistema de gestión por concesión. Análisis crítico” en BERMEJO VERA, J. (1975): *Régimen jurídico del ferrocarril en España (1844 – 1974): estudio específico de Renfe*. Madrid, págs. 38 a 42, así como CORDERO, R., Y MENÉNDEZ, F. (1978): “El sistema ferroviario español” en ARTOLA, M. (dir.): *Los ferrocarriles en España. 1844 – 1943. I. El Estado y los ferrocarriles*, Madrid, págs. 210 y ss.

¹⁵⁴⁶ GÓMEZ MENDOZA, A. (1989): *Ferrocarril, industria y mercado en la modernización de España*. Madrid, pág. 57.

¹⁵⁴⁷ Artículo 1 LSCOP.

*Las concesiones de las líneas de servicio general se otorgarán por término de noventa y nueve años cuando más.*¹⁵⁴⁸

*Al expirar el término de la concesión, adquirirá el Estado la línea concedida con todas sus dependencias, entrando en el goce completo del derecho de explotación.*¹⁵⁴⁹

Y, por último, otra nota relevante de las sociedades concesionarias de obras públicas, es la posibilidad, prevista en la LSCOP, de subsidios o subvenciones públicas para hacer posibles las concesiones¹⁵⁵⁰, que no existe para otras compañías por acciones.

D) EXCEPCIONES ESTABLECIDAS POR LA LSCOP, EN RELACIÓN A LA LEY DE 1848

Al igual que ocurrió con la LB y la LSCr, el Legislador de 1855 – 1856 modificó algunos postulados básicos de la Ley de 1848 para configurar el nuevo régimen de las sociedades concesionarias de obras públicas. En algunos casos se trataba de excepciones a lo previsto en esta última Ley y, en otros, de unas obligaciones especiales, consecuencia de las características propias de estas sociedades.

TORTELLA¹⁵⁵¹ refiere que el Gobierno progresista modificó la Ley de 1848 tratando de incentivar la construcción del ferrocarril y, en su opinión, *(e)l incentivo mayor era probablemente el hecho de que las compañías ferroviarias no quedaban sujetas a la Ley de sociedades por acciones de 1848 y, por lo tanto, les daba mucho más fácil acceso al mercado de capital que el que tenían las otras compañías.*

1. Autorización provisional y definitiva. Autorización por RD

El Legislador de 1855 – 1856 mantuvo el principio, como lo hiciera el de 1848, según el cual la concesión de una obra pública era competencia exclusiva de las Cortes Generales. En cambio, el presupuesto de que la autorización de la compañía concesionaria también lo fuera, se modificó, primero, en la LF y, después, en la LSCOP.

En efecto, la LF establecía que las compañías sólo podían construir líneas de ferrocarril si hubieran obtenido previamente la concesión¹⁵⁵², que se debía otorgar siempre por ley¹⁵⁵³. En este sentido, las compañías debían presentar su solicitud al Gobierno, acompañando los preceptivos documentos y acreditando haber prestado los avales correspondientes¹⁵⁵⁴. Una vez admitido el proyecto y las condiciones de la concesión, el Gobierno debía presentar el Proyecto de Ley a las Cortes¹⁵⁵⁵.

¹⁵⁴⁸ Artículo 14 LF, no derogado por la LSCOP.

¹⁵⁴⁹ Artículo 15 LF, vigente tras la promulgación de la LSCOP.

¹⁵⁵⁰ Artículos 8 y concordantes de la LF, asumidos por la LSCOP.

¹⁵⁵¹ TORTELLA, G. (1975): *Los orígenes...*, pág. 168.

¹⁵⁵² Artículo 6 LF.

¹⁵⁵³ Artículo 7 LF.

¹⁵⁵⁴ Artículo 17 LF.

¹⁵⁵⁵ Artículo 18 LF.

En cuanto a la autorización de la *constitución de compañías por acciones que tengan por objeto la construcción y explotación de los ferrocarriles con arreglo a esta ley y a la de 28 de enero de 1848*¹⁵⁵⁶, la gran novedad es que el Gobierno puede autorizarlas provisionalmente si se cumplen los requisitos que se exponen a continuación.

1. El capital social no puede ser inferior al importe total de las obras de construcción y del material de explotación de la línea¹⁵⁵⁷.
2. La constitución provisional de la compañía se puede autorizar provisionalmente una vez que se hayan suscrito las dos terceras partes del capital social¹⁵⁵⁸.
3. La autorización provisional faculta exclusivamente para¹⁵⁵⁹:
 - i. nombrar los administradores,
 - ii. pedir la concesión de la línea que se proponga construir y explotar,
 - iii. presentar sus propuestas de subasta, si la concesión previese este requisito, y
 - iv. exigir a los accionistas hasta el diez por ciento de sus acciones para cubrir exclusivamente los gastos de establecimiento, estudio del proyecto y el depósito que se exija como garantía.
4. No se puede emitir títulos de acciones ni otra clase de documentos transferibles o negociables hasta que la compañía se haya constituido definitivamente y haya obtenido la concesión o adjudicación de la línea. Son nulas *las promesas de acciones o de las acciones provisionales que se entreguen a los suscriptores*¹⁵⁶⁰ (el subrayado es nuestro). Llama la atención que el texto legal utilice la expresión “promesas de acciones” en la medida en que el Legislador del 48 puso especial énfasis en no utilizarla y sustituirla por las “cartas de pedido de acciones” que *constituirán por sí una obligación legal*¹⁵⁶¹. Fueron largas las intervenciones durante los debates del PL 1848 sobre esta cuestión particular, dado que se trataba de uno de los puntos esenciales de los nuevos postulados asumidos por el Legislador¹⁵⁶².
5. Los primeros suscriptores que cedan sus acciones son responsables, junto con los cesionarios del pago de los primeros dividendos pasivos, hasta que se

¹⁵⁵⁶ Artículo 46 LF.

¹⁵⁵⁷ Párrafo primero del artículo 46 LSCOP.

¹⁵⁵⁸ Párrafo segundo del artículo 46 LSCOP.

¹⁵⁵⁹ Párrafo tercero del artículo 46 LSCOP.

¹⁵⁶⁰ Párrafo cuarto del artículo 46 LF.

¹⁵⁶¹ Artículo 7 de la Ley de 1848.

¹⁵⁶² A este respecto, en el capítulo sobre el régimen de las acciones se encuentra un comentario a las intervenciones de los Diputados Sres. Fuentes, Bertrán de Lis (miembro de la CCD) y Mendizábal, durante la sesión del 21 de abril de 1847 en el Congreso de los Diputados (DsC. Congreso de los Diputados. Sesión de 21 de abril de 1847, núm. 80, págs. 1462 y ss.).

haya desembolsado el cincuenta por ciento del valor nominal¹⁵⁶³. Y, por último,

6. (l)as acciones podrán convertirse en títulos al portador una vez se haya desembolsado el valor nominal total¹⁵⁶⁴.

El Gobierno, por tanto, podía conceder la autorización provisional para la constitución de la compañía con estos requisitos. Respecto a la autorización definitiva, la Ley establecía que *se considerará definitivamente constituida la compañía luego que se publique la ley relativa a su constitución*¹⁵⁶⁵. En consecuencia, la autorización seguía siendo competencia de las Cortes Generales.

La LSCOP, supuso un giro radical en los principios del Legislador y estableció la posibilidad de autorizarlas por RD¹⁵⁶⁶. Dice así su artículo 1:

Obtenida que sea, en virtud de una ley, la concesión de un camino de hierro, canal u otras obras públicas, podrá el Gobierno autorizar, por medio de Reales decretos acordados en Consejo de Ministros, la formación y constitución definitiva de la compañía que las haya de llevar a efecto.

De la lectura de este texto cabe destacar, en primer lugar, que la concesión de la obra pública, en cualquier caso, debía ser autorizada por el Parlamento. Y, en segundo lugar, que la autorización gubernativa para constituir definitivamente la sociedad debía cumplir el requisito de adoptarse por el Consejo de Ministros y no por el Ministerio del ramo correspondiente. El Legislador había establecido una excepción muy relevante a uno de los pilares básicos de la Ley de 1848 en relación a la necesaria autorización legal para las compañías de obras públicas¹⁵⁶⁷.

2. Emisión de acciones al portador. Suspensión del artículo 283 del CCom 1829

La posibilidad de emitir acciones al portador es otra de las excepciones más importantes respecto al régimen establecido por la Ley de 1848. Como se recordará, el Legislador del 48 estableció como principio básico de la regulación de las acciones que éstas fueran, de manera obligatoria, nominativas¹⁵⁶⁸.

Los nuevos principios liberales que impulsó el “Bienio Progresista” (1854 – 1856) facilitaron la vuelta a las acciones al portador en las compañías concesionarias de obras públicas¹⁵⁶⁹. Este retorno se produjo progresivamente en dos tiempos: primero, la LF y, posteriormente, la LSCOP.

¹⁵⁶³ Párrafo quinto del artículo 46 LF.

¹⁵⁶⁴ Párrafo sexto del artículo 46 de la LF.

¹⁵⁶⁵ Artículo 47 de la LF.

¹⁵⁶⁶ Siguiendo así la propuesta del Diputado Sr. Martínez Almagro, comentada en párrafos anteriores.

¹⁵⁶⁷ Como se recordará, el artículo 2 de la Ley de 1848 establecía:

Será necesaria una ley para la formación de toda compañía que tenga por objeto (...) la construcción de carreteras generales, canales de navegación y caminos de hierro.

¹⁵⁶⁸ Artículo 12 de la Ley de 1848.

¹⁵⁶⁹ Así como en las sociedades de crédito, comentadas en un epígrafe anterior.

La LF establecía la posibilidad de que el Gobierno autorizara provisionalmente la constitución de compañías mercantiles por acciones cuyo objeto social fuese la construcción y explotación de líneas de ferrocarril, siempre que cumplieran unos requisitos o condiciones. Entre ellas se encontraba la siguiente:

Cuando los accionistas hayan satisfecho el valor total de sus acciones, podrán convertirse éstas en títulos al portador¹⁵⁷⁰.

Por lo tanto, una vez desembolsado el cien por cien del valor nominal, la sociedad podía transformar las acciones nominativas en al portador. La LSCOP dio un paso más adelante estableciendo la obligatoriedad de convertir los títulos en acciones al portador, una vez que se hubiera verificado el desembolso del treinta por ciento de su valor nominal¹⁵⁷¹:

Las acciones serán al portador luego que se hubiere verificado el desembolso del 30 por 100 de su total importe; y su primer dividendo pasivo, que en ningún caso podrá bajar del 15 por 100, se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes al de la aprobación por el Gobierno de los estatutos de las relacionadas sociedades¹⁵⁷² (el subrayado es nuestro).

La LSCOP previó, además, que cualquier accionista tenía el derecho de depositar sus acciones en la sociedad, recibiendo un resguardo nominativo. En cualquier caso, las acciones al portador eran consideradas efectos públicos sólo en relación a la forma de su contratación¹⁵⁷³.

En cuanto a la vigencia del artículo 283 del CCom 1829¹⁵⁷⁴, que la Ley de 1848 no derogó y el Reglamento de 1848 recogió de manera expresa¹⁵⁷⁵, la LF suspendió parcialmente su aplicación en los siguientes términos:

Los primeros suscriptores y sus cesionarios son responsables solidariamente al pago de los primeros dividendos, hasta que quede cubierta la mitad del valor nominal de sus acciones¹⁵⁷⁶.

Este artículo, como el que se ha comentado anteriormente sobre las acciones al portador, corresponde a una de las condiciones o requisitos que debían cumplir las compañías por acciones dedicadas a la construcción y explotación de líneas de ferrocarril, para que pudieran ser autorizadas provisionalmente por el Gobierno. La suspensión parcial del régimen establecido por el artículo 283 CCom 1829 se refería a dos aspectos. En primer lugar, desde un punto de vista subjetivo, la responsabilidad se

¹⁵⁷⁰ Artículo 46.6 LF.

¹⁵⁷¹ GONZÁLEZ HUEBRA, en cambio, entiende que no es obligatoria la emisión de acciones al portador a partir del desembolso del treinta por ciento del capital social. Así, GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho* ..., pág. 185.

¹⁵⁷² Artículo 5 LSCOP.

¹⁵⁷³ Artículo 8 LSCOP.

¹⁵⁷⁴ Cuyo texto es el siguiente:

Los cedentes de las acciones inscritas en las compañías anónimas que no hayan completado la entrega total del importe de cada acción, quedan garantes del pago que deberán hacer los cesionarios, cuando la administración tenga derecho a exigirlo.

¹⁵⁷⁵ En el párrafo segundo de su artículo 33.

¹⁵⁷⁶ Artículo 46.5 LF.

circunscribía a los socios fundadores y a los primeros adquirentes; las siguientes transmisiones quedaban fuera de esta responsabilidad. Y, en segundo lugar, desde un punto de vista cuantitativo, la responsabilidad se limitaba al desembolso de la primera mitad del valor nominal.

La LSCOP, al igual que hiciera la LSCr del mismo año, suspendió definitivamente la aplicación del régimen de responsabilidad de dividendos pasivos en la transmisión de acciones de estas sociedades según los siguientes términos:

*No tendrá efectos contra los cedentes de estas acciones al portador lo dispuesto en el artículo 283 del Código de comercio.*¹⁵⁷⁷

3. Emisión de obligaciones

El Legislador de 1848 estableció la prohibición de la emisión de cualquier documento al portador, fijando, además, una multa en caso de incumplimiento¹⁵⁷⁸. El propio texto legal preveía, como no podía ser de otra manera, que esta prohibición podría ser suprimida por otra ley posterior.

El cambio político del “Bienio Progresista” flexibilizó esta restricción para las compañías concesionarias de obras públicas¹⁵⁷⁹, dada la singularidad de éstas. El cambio empezó con la LF que, para facilitar la financiación de las obras públicas, estableció lo siguiente:

*Si suscritas las dos terceras partes del capital social, y realizadas e invertidas en las obras de la línea, no pudiese la compañía hacer efectiva la otra tercera parte del capital por medio de la emisión y negociación de las acciones no suscritas, podrá obtener autorización del Gobierno para adquirir dicha tercera parte del capital por medio de empréstitos contraídos con la hipoteca de los rendimientos del ferrocarril a cuya construcción o explotación se destina. En este caso la autorización podrá comprender además la facultad de emitir cédulas y obligaciones hipotecarias de interés fijo, y amortizables dentro del periodo de la concesión, en los años que en aquella se determine.*¹⁵⁸⁰

La LSCOP abrió la puerta a la libre emisión de obligaciones al portador, dentro de los requisitos en ella establecidos:

Las sociedades de ferrocarriles, canales u otras obras públicas, podrán también emitir obligaciones al portador con interés fijo y amortización determinada dentro del periodo de la concesión con hipoteca de las obras y rendimientos del ferrocarril, canal u obra pública, a cuya construcción o explotación se destinen.

¹⁵⁷⁷ Artículo 6 LSCOP.

¹⁵⁷⁸ Artículo 15 de la Ley de 1848.

¹⁵⁷⁹ Así como en las sociedades de crédito.

¹⁵⁸⁰ Artículo 48 LF. Se ha transcrito el texto completo de este artículo en el que se regula la solicitud de autorización de financiación adicional en caso de no poder desembolsar el cien por cien del capital social, puesto que recoge una operación singular cuyo estudio excede del presente comentario. En efecto, el objetivo principal de la solicitud era poder hipotecar los rendimientos de la concesión para obtener un préstamo con el que la sociedad adquiriera las acciones no suscritas (acciones propias). Y, además, adicionalmente, se podía solicitar la autorización para emitir las cédulas y obligaciones hipotecarias en las condiciones recogidas por el citado artículo.

*La suma del importe de todas las obligaciones emitidas no podrá nunca exceder de la mitad del capital realizado de las acciones de la sociedad.*¹⁵⁸¹

De esta manera, se facilitaba la financiación de todos los proyectos de obras públicas, con independencia de si se hubiera suscrito la totalidad del capital social y, sobre todo, prescindiendo del tema de las acciones propias.

La LSCOP estableció la consideración de las obligaciones como efectos públicos a los solos efectos de la forma de contratación de las mismas¹⁵⁸².

MARTÍ DE EIXALÁ destaca que estas obligaciones son de carácter hipotecario y describe el procedimiento de constitución de la hipoteca:

*La hipoteca debe constituirse por medio de escritura pública, en la cual se exprese la autorización concedida para la emisión; el número y valor de las obligaciones emitidas; su serie, numeración y valor nominal de cada una; fecha de la emisión; interés que devenguen; las demás circunstancias que determinen la clase de títulos y valores, la cosa hipotecada, y en lugar del nombre del acreedor, el que la hipoteca queda constituida a favor de los tenedores de las obligaciones en la parte proporcional que a cada uno corresponda. La escritura debe inscribirse en el Registro de la Propiedad del punto de arranque de la obra, a menos que la hipoteca se extienda a otras obras inscritas en otros Registros (Real decreto de 26 de febrero de 1861).*¹⁵⁸³

Este autor se plantea si el carácter civil hipotecario de la emisión de estas obligaciones diluye su naturaleza mercantil, llegando a la siguiente conclusión:

Aunque las obligaciones de las sociedades concesionarias de obras públicas tienen la condición de hipotecarias, no por esto pierden su carácter mercantil. Su naturaleza legal es la misma que la de las obligaciones de las sociedades de crédito.

La regulación de la emisión de las obligaciones de sociedades concesionarias de obras públicas se modificó en leyes posteriores que ampliaron las facultades del Gobierno. Así, las leyes de 11 de julio de 1860, 29 de enero de 1862 y la ley de presupuestos de 3 de agosto de 1866, citadas en un apartado anterior, que fueron objeto de desarrollo por varios RRDD y RROO.

4. ¿Se encuentran excluidas las sociedades comanditarias por acciones del ámbito de aplicación de la LSCOP?

La LSCOP se refiere en sus artículos a las compañías mercantiles con carácter general. En ningún momento se menciona como tipo societario exclusivo a la anónima. Esta cuestión no plantea especiales dificultades, sino fuera porque algún autor lo puso en duda. Por este motivo, parece conveniente hacer una breve mención a esa opinión, aunque la nuestra es que la LSCOP no parece realizar ninguna discriminación respecto a la compañía comanditaria por acciones.

¹⁵⁸¹ Artículo 7 LSCOP.

¹⁵⁸² Artículo 8 LSCOP.

¹⁵⁸³ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones...*, pág. 313.

El autor de la opinión a la que se hace referencia es PERECAULA. Se transcribe a continuación el texto en el que formula su postura, sin que parezca necesario realizar comentarios adicionales:

Puede suscitarse la cuestión de si estas compañías [las concesionarias de obras públicas] pudieron constituirse en comandita o si debieron ser precisamente anónimas. Nada determina de un modo explícito sobre este punto la Ley de 11 de julio de 1856; pero hay en ella disposiciones que obligan a opinar que sólo podían constituirse anónimamente. Tal es por ejemplo, la del artículo 9 que previene que las juntas generales han de nombrar sus administradores; cuyo precepto no es aplicable a las compañías comanditarias por acciones, puesto que la administración de éstas corresponde exclusivamente a los gerentes bajo cuya dirección y responsabilidad solidaria verifica la compañía sus operaciones¹⁵⁸⁴.

E) OBLIGACIONES ESPECIALES ESTABLECIDAS POR LA LSCOP, EN RELACIÓN A LA LEY DE 1848. VIGILANCIA E INSPECCIÓN POR LA AUTORIDAD PÚBLICA

El Legislador del “Bienio Progresista” (1854 – 1856) modificó algunos puntos básicos de la regulación de las compañías por acciones de 1848 en la dirección de una mayor flexibilidad. La LF y la LSCOP establecieron unas obligaciones especiales o adicionales, en función de la singularidad propia de las compañías concesionarias de obras públicas, algunas de las cuales suponían un incremento del control e intervención por parte de la Autoridad pública.

En primer lugar, cabe destacar la inclusión de un nuevo ámbito de vigilancia e inspección en las compañías de ferrocarriles, recogido en la LF:

En cada concesión se determinará la manera en que el Gobierno ha de ejercer la intervención necesaria para mantener en buen estado el servicio de los ferrocarriles y asegurarse de los gastos e ingresos de las empresas¹⁵⁸⁵.

El Legislador amplió las funciones de vigilancia e inspección de carácter societario a las operaciones de la compañía para mantener en buen estado el servicio público objeto de la concesión, de manera que cabe concluir que las facultades de control e inspección de la Autoridad pública en la LF, eran más amplias que las previstas en la Ley de 1848, dado que este texto legal prohibía que la inspección del Gobierno entorpeciera las operaciones de las compañías¹⁵⁸⁶.

En este mismo sentido, el artículo 39 LF facultaba al Gobierno para tomar las disposiciones necesarias que aseguraran el servicio público del ferrocarril cuando, por causa de la concesionaria, éste se interrumpiera total o parcialmente. Estas medidas eran, además, a cargo de la empresa. La LSCOP no derogó estas facultades de

¹⁵⁸⁴ PERECAULA, A. (1871): *Diccionario ...*, pág. 197.

¹⁵⁸⁵ Artículo 41 LF.

¹⁵⁸⁶ Artículo 17 de la Ley de 1848.

inspección y vigilancia de la Autoridad pública sobre las compañías de ferrocarriles, quedando, por tanto, vigentes respecto a este tipo de sociedades.

Por otro lado, la LSCOP establece unas obligaciones especiales para todas las compañías concesionarias de obras públicas en relación a sus estados financieros¹⁵⁸⁷. Así, se puede señalar unas obligaciones de publicidad y otras de auditoría.

En cuanto a las obligaciones de publicidad, destaca la *presentación al Gobierno de S. M., por conducto del Gobernador civil, un balance demostrativo y calificado de todo su haber activo y pasivo, que se publicará en la Gaceta. Además, siempre que el Gobierno lo pidiere, remitirán por el mismo conducto estados que den pleno conocimiento de sus operaciones, así como las demás noticias y detalles relativos a los gastos e ingresos de la empresa.*¹⁵⁸⁸

Respecto a la presentación y publicidad del balance, el régimen de la LSCOP es bastante similar al recogido en el Reglamento de 1848, concretamente en su artículo 34, constituyendo una novedad importante la publicación en la GdM en sustitución del Boletín Oficial de la Provincia. Cuestión relevante es la periodicidad de la presentación de esa información, dado que el texto legal, sorprendentemente, no fija ningún plazo al respecto. Por eso, son interesantes las siguientes palabras aclaratorias de GONZÁLEZ HUEBRA:

*El artículo 11 de esta Ley no exige precisamente que se remitan los balances cada seis meses, sino que se limita a sentar la obligación de remitirlos sin fijar plazo, según está redactado en las ediciones oficiales que hemos visto, pero sin duda consiste en una omisión involuntaria, porque versó la discusión precisamente sobre estas palabras y fue aprobado con esta adición en la sesión de Cortes de 18 de junio de 1856.*¹⁵⁸⁹

Con referencia a la facultad del Gobierno de solicitar información y aclaraciones en los momentos que estimare oportuno, se trata de una concreción de la facultad de inspección del Gobierno recogida en el artículo 17 de la Ley de 1848 y del artículo 30 de su Reglamento de ejecución¹⁵⁹⁰.

Por último, la otra obligación especial relativa a la auditoría consistía en que *el Gobierno podía hacer examinar, siempre que lo estimara conveniente, la contabilidad y administración de las compañías, y comprobar sus existencias, nombrando a este efecto delegados, retribuidos por las mismas sociedades, a quienes sus respectivos Directores, gerentes o administradores tendrán la obligación de presentar cuantos libros, datos, valores y documentos les fueren por éstos pedidos y existieren o debieren existir en sus oficinas*¹⁵⁹¹. Se trataba de una obligación pormenorizada en cuanto a los sujetos (los

¹⁵⁸⁷ MARTÍ DE EIXALÁ precisaba que estas obligaciones eran similares a las que tenían los *Bancos, sociedades de crédito y otras* (MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones...*, 317).

¹⁵⁸⁸ Artículo 11 LSCOP.

¹⁵⁸⁹ GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho ...*, pág. 186, nota 2 **. No dicen nada en este sentido, limitándose a comentar el tenor literal del precepto PERECAULA, A. (1871): *Diccionario...*, págs. 198 y 199 y MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones...*, pág. 317.

¹⁵⁹⁰ Cabe recordar que el artículo 37 del citado Reglamento establecía la obligación de informar, por parte de los Jefes Políticos al Gobierno, sobre el contenido del resultado del balance anual. Este deber, en sentido estricto, se encontraba limitado al momento de la recepción del balance anual.

¹⁵⁹¹ Artículo 11 LSCOP.

administradores, gerentes y directores frente a los Delegados) y los objetos (presentación de documentos, libros, datos, valores, etc.).

Como se decía al principio de este epígrafe, el Legislador del 55 y del 56 flexibilizó una serie de aspectos regulados por la Ley y el Reglamento de 1848, pero en otras cuestiones, sobre todo en relación a la vigilancia e inspección de las operaciones de las compañías de ferrocarriles en particular y de los estados financieros de las sociedades concesionarias de obras públicas en general, estableció normas más estrictas e intervencionistas.

CAPÍTULO XIV

EL TRIUNFO DE LOS PRINCIPIOS LIBERALES: DEROGACIÓN DE LA LEY Y DEL REGLAMENTO DE 1848

I. SITUACIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL EN LOS AÑOS PREVIOS A LA DEROGACIÓN DE LA LEY Y DEL REGLAMENTO DE 1848

A) ANTECEDENTES. LA CRISIS ECONÓMICA DE 1866

Se puede decir, con carácter general, que 1866 es el inicio de una crisis económica que influye de manera radical en el periodo que se va a estudiar en este capítulo, y que enmarca la derogación de la Ley y del Reglamento de 1848. Muchos historiadores¹⁵⁹² coinciden en que esta crisis económica genera, coadyuva y propicia la crisis política, que en España tiene como primer momento clave el exilio de la Reina Isabel II, el 30 de septiembre de 1868¹⁵⁹³. La situación política se comenta en el siguiente epígrafe.

Escribe PALACIO ATARD que *(a) los “felices años cincuenta” sigue en Europa y también en España la depresión de 1866 – 1874*¹⁵⁹⁴. Suele establecerse en la quiebra de la compañía londinense *Overend Guernsey Co.*, durante el año 1866, el inicio de la crisis internacional, que luego contagiará a España. TUÑÓN DE LARA¹⁵⁹⁵ destaca las siguientes consecuencias de este hecho: la reducción de afluencia de capital extranjero a nuestro país, la disminución de la acuñación de moneda, la bajada de los precios de los productos coloniales y, por último, el pánico de los tenedores de billetes que trataron de convertirlos en oro o plata. A los dos días de la crisis en la *City* londinense, el contagio llegó a Barcelona. Un mes tardó en llegar a Madrid y de esta ciudad se generalizó a todas las plazas importantes. La crisis británica era financiera, pero la española era mucho más profunda y más antigua, pues en opinión de TUÑÓN DE LARA, a quien seguimos en esta exposición, se pueden detectar síntomas de dificultades económicas ya desde 1864¹⁵⁹⁶. Así, destaca la interrupción de trabajos ferroviarios, la situación de la materia prima algodonería afectada por la Guerra de Secesión norteamericana¹⁵⁹⁷, el incremento de la deuda pública¹⁵⁹⁸, el aumento del tipo de descuento, de los impuestos,

¹⁵⁹² Así, por ejemplo, CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975 ...*, págs. 292 y ss., COMELLAS, J. L. (1999): *Isabel II ...*, págs. 332 y ss., PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea ...*, págs. 348 y ss., y TUÑÓN DE LARA, M. (1976): *La España del siglo XIX*, Barcelona, págs. 249 y ss.

¹⁵⁹³ Cuya abdicación se produjo el 25 de junio de 1870.

¹⁵⁹⁴ PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea ...*, pág. 348.

¹⁵⁹⁵ TUÑÓN DE LARA, M. (1976): *La España del siglo XIX ...*, págs. 249 Y 250, a quien seguimos en este punto.

¹⁵⁹⁶ En este sentido, no puede olvidarse, por ejemplo, que pocos años antes, en 1861 y 1862 varias Bolsas extranjeras se habían cerrado a los valores españoles por incumplimiento de los compromisos de pago del Estado español (entre otros, se puede acudir a BRAVO MURILLO, J. (1864): *De las deudas amortizables y de los certificados de cupones*, Madrid, págs. 10 y ss.).

¹⁵⁹⁷ En el mismo sentido, CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975...*, pág. 292 y TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, pág. 107.

¹⁵⁹⁸ Cuya solución era ciertamente complicada: AZPILICUETA, M. (1869): *El déficit: modo de extinguirle y de reorganizar la Hacienda del Estado*, Madrid, págs. 15 a 23.

etc. Y, por todo esto, concluye diciendo que *(e)n esas condiciones, la crisis internacional es como el fulminante que se aplica al barril ya cargado de pólvora*¹⁵⁹⁹.

COMELLAS analiza estos años de crisis (1866 – 1868) y concluye que *(r)ealmente, se trata de dos crisis económicas distintas: la primera, de carácter eminentemente financiero, se hizo patente sobre todo en 1866; la segunda, una crisis de subsistencias*¹⁶⁰⁰, *vino a sumarse a la primera en 1867 – 1868: y fue justamente la que produjo una nube de ciudadanos descontentos y hasta indignados pertenecientes a las más diversas clases sociales*¹⁶⁰¹. Una de las consecuencias de la crisis financiera, como apunta ARTOLA¹⁶⁰², fue una nueva novación en 1867 de la deuda pública con extranjeros, conocida como la conversión de Barzanallana.

Cabe recordar, también, la importancia del sector agrícola en la economía española del segundo tercio de siglo XIX¹⁶⁰³. PALACIO ATARD¹⁶⁰⁴ subraya la importancia de este factor para comprender las causas del cambio político de 1868. En efecto, en 1866 la cosecha fue mala y no se pudo exportar como los dos años anteriores¹⁶⁰⁵. Además, se produjo un encarecimiento de los alimentos durante el invierno de 1867 – 1868 que propició un descontento social importante en amplios sectores de la población. Como dice CARR, en la crisis de 1867, *los elevados precios del grano sumaron los sufrimientos del pobre al descontento del rico*¹⁶⁰⁶.

Respecto a la política arancelaria, CARRERAS Y TAFUNELL¹⁶⁰⁷ indican que la Ley de 1849 sobre aranceles dio un paso importante hacia la libre circulación internacional de bienes. Aunque no fue comparable a las medidas coetáneas en materia de librecambio en Reino Unido, dicha Ley supuso un claro cambio respecto al proteccionismo anterior. Pues bien, esta situación se mantuvo durante la vigencia de la Ley y del Reglamento de 1848, si bien la Revolución de 1868 aceleró la marcha hacia la eliminación de las trabas al comercio exterior al aupar al poder a los liberales progresistas, partidarios del libre cambio.

La difícil situación económica y social no fue gestionada adecuadamente por la autoridad pública del momento, de manera que el absolutismo quedó relacionado con la crisis económica¹⁶⁰⁸, y los políticos progresistas utilizaron la crisis como palanca para

¹⁵⁹⁹ TUÑÓN DE LARA, M. (1976): *La España del siglo XIX ...*, pág. 250.

¹⁶⁰⁰ Se pueden consultar datos estadísticos comparativos de las crisis desde 1840 a 1868, en relación al sistema de ahorro, en SÁNCHEZ ALBORNOZ, N. (1963): *La crisis de subsistencias de España en el siglo XIX*, Rosario, págs. 115 – 117.

¹⁶⁰¹ COMELLAS, J. L. (1999): *Isabel II ...*, págs. 332 y 333.

¹⁶⁰² ARTOLA, M. (1986): *La Hacienda del siglo XIX ...*, págs. 315 – 317.

¹⁶⁰³ Otros países europeos, como consecuencia de su rapidez en el proceso industrializador, iban disminuyendo el peso del sector primario en sus economías. Se puede consultar sobre el sector agrícola en España durante el periodo que se estudia en el presente capítulo, los pasajes de la obra de PUJOL, J., GONZÁLEZ DE MOLINA, M., FERNÁNDEZ PRIETO, L., GALLEGO, D., Y GARRABOU, R. (2001): *El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea*, Barcelona.

¹⁶⁰⁴ PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea ...*, pág. 349.

¹⁶⁰⁵ En el mismo sentido, COMELLAS, J. L. (1999): *Isabel II...*, pág. 335, quien ofrece datos muy interesantes sobre las subidas de precio de las subsistencias durante esos años.

¹⁶⁰⁶ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975...*, pág. 293.

¹⁶⁰⁷ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, Barcelona, págs. 123 y 124.

¹⁶⁰⁸ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975 ...*, pág. 293.

levantar a muchas personas contra el régimen moderado¹⁶⁰⁹, al que había sostenido y protegido la Reina Isabel II.

En efecto, la reacción de los políticos frente a la crisis se concretó en varias medidas enormemente impopulares, entre las que cabe destacar las siguientes: rebaja del sueldo de los funcionarios públicos, anticipo forzoso de los impuestos del ejercicio siguiente¹⁶¹⁰ y la anulación de los pedidos para construir una nueva escuadra naval. Respecto a esto último, CARR¹⁶¹¹, señala que tuvo un doble efecto negativo. En primer lugar, la tradicional fidelidad dinástica de los oficiales de la marina se resquebrajó y, de hecho, tuvieron una importante participación en el destronamiento de Isabel II¹⁶¹². Y, en segundo lugar, se produjo un impacto muy perjudicial para la incipiente industria pesada catalana.

B) LOS FERROCARRILES

La LF y la LSCOP, propiciaron la creación de un gran número de compañías de ferrocarril que construyeron una vasta red de líneas. TORTELLA¹⁶¹³, a quien seguimos en la presente exposición, señala que en el periodo 1856 – 1866 se construyeron unos 4.500 km de vía, lo cual supone un promedio anual de 450 km, nunca más alcanzado en España. Durante esos años se constituyeron unas veinte compañías ferroviarias. En 1866 había en funcionamiento unos 5.000 km¹⁶¹⁴.

Según dicho autor, las causas de este rápido ritmo de construcción son las siguientes. En primer lugar, el apoyo estatal a través de las citadas leyes¹⁶¹⁵, que preveían el pago de subvenciones¹⁶¹⁶, garantizaban a los inversores frente a determinados riesgos y desgravaban la importación de material de transporte. A estas leyes se añaden la LB y la LSCr, que permitieron la rápida creación de un sistema bancario que financió la construcción del ferrocarril en este periodo 1856 – 1866, al que CARRERAS Y TAFUNELL denominan *la década prodigiosa en la formación de la*

¹⁶⁰⁹ COMELLAS, J. L. (1999): *Isabel II ...*, pág. 336.

¹⁶¹⁰ COMELLAS, J. L. (1999): *Isabel II ...*, pág. 336.

¹⁶¹¹ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975...*, pág. 293.

¹⁶¹² En el mismo sentido, entre otros, MARTÍNEZ RODA, F. (2011): “El Sexenio Revolucionario(1868 – 1874)” en PAREDES, J. (dir.) *Historia de España contemporánea*, Barcelona, pág. 382.

¹⁶¹³ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, Madrid, págs. 107 y ss.

¹⁶¹⁴ PALACIO ofrece los siguientes datos: a finales de 1858 había 850,9 kilómetros abiertos al público; en 1860 se abrieron 764,3 kilómetros; en 1863, 837,7 kilómetros; y, en 1865, 766,5 kilómetros. El número total de kilómetros abiertos al público en 1866 era de 5.145,6. PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea...*, pág. 342. Estos datos están contrastados con el relevante trabajo de CASARES, A. (1973): *Estudio histórico-económico de las construcciones ferroviarias españolas en el siglo XIX*, Madrid. Por su parte, ANES ÁLVAREZ, recoge los siguientes datos: (s)i hasta 1855 se habían abierto al tráfico 477 kilómetros de ferrocarril, en los diez años siguientes, con el marco legal de la ley aprobada y los incentivos establecidos, los kilómetros de ferrocarril concedidos alcanzan los 6.919 y los abiertos 5.076, hasta 1866, lo que da una media anual muy alta, pero poco más de un kilómetro de ferrocarril, por cada 100 de territorio ANES ÁLVAREZ, R. (1985): “El ferrocarril en la economía española” en ICE: *Revista de Economía*, núm. 623, julio, pág. 48.

¹⁶¹⁵ Se puede consultar al respecto el epígrafe relativo a las sociedades concesionarias de obras públicas del capítulo sobre las sociedades anónimas reguladas por leyes especiales.

¹⁶¹⁶ Que consistían en dos tipos: una cantidad proporcional al presupuesto de la obra y una cantidad para asegurar el rendimiento del capital desembolsado hasta que se diera inicio a la explotación económica del trazado (CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, pág. 135).

*infraestructura ferroviaria*¹⁶¹⁷. En segundo lugar, la influencia de capital y tecnología extranjeros¹⁶¹⁸. Y, por último, la importante aportación de capital nacional, sobre todo de Cataluña, País Vasco y Valencia.

Pero este crecimiento se fundamentaba en unas bases ficticias. Así afirma TORTELLA que *(l)as subvenciones y garantías estatales, las expectativas de grandes beneficios en la explotación, y la total certeza de grandes beneficios en la construcción (gracias a esas subvenciones y garantías) espoleaban a los constructores. A la velocidad de la construcción se sacrificaron muchas cosas; y cuando las grandes líneas troncales empezaron a estar terminadas a partir de 1864 se comprobó que las expectativas de beneficios en la explotación quedaban defraudadas: los ingresos no bastaban ni para cubrir los gastos, y menos aún para restituir los capitales invertidos*¹⁶¹⁹.

En el mismo sentido se manifiestan CARRERAS Y TAFUNELL, indicando que el *problema más grave del ferrocarril español radicaba en la escasez de demanda de servicios de transporte*¹⁶²⁰. Como se recordará, estos mismos autores señalaban que la causa del fracaso de la primera legislación ferroviaria de 1844 fue la falta de financiación, corregida posteriormente por la LF y la LSCOP. El Legislador del “Bienio Progresista” solventó esta enorme dificultad, permitiendo la subvención pública y favoreciendo las inversiones extranjeras, sobre todo las francesas. Pero los proyectos ferroviarios autorizados se basaron en unas deficientes previsiones sobre la explotación y utilización de los servicios. El resultado fue nefasto a corto plazo para el sector y para toda la economía nacional (así como para los capitales extranjeros), de manera que en mayo de 1866 el pánico se apoderó de los inversores, desplomándose las cotizaciones de las sociedades de ferrocarril, muchas de las cuales solicitaron concurso de acreedores.

BERTRÁN PÉREZ Y PONS añaden como otra causa importante de la crisis ferroviaria de aquella época *el aumento del tipo de interés en el mercado internacional de Londres (del 4 por cien al 9 por cien)*¹⁶²¹.

El parón en la construcción de líneas fue brutal. Así entre 1866 y 1876 se construyeron 1.000 km, una quinta parte de lo que se hizo entre 1856 y 1866. En 1865 se construyeron 929 km. En 1866 la cifra se desplomó a 40 km, el año siguiente remontó algo hasta 180 km, pero en 1868 se hicieron sólo 55 km¹⁶²².

¹⁶¹⁷ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, pág. 136.

¹⁶¹⁸ Respecto a la participación de ingenieros españoles, escribe LARRINAGA lo siguiente: *(c)omo cabe suponer, en la construcción de las líneas ferroviarias los ingenieros extranjeros desempeñaron un papel notable, aunque, en opinión de Sáenz Ridruejo, no es cierto que los ferrocarriles españoles fueran en su mayor parte contruidos por extranjeros* (LARRINAGA, C. (2007): *El Ingeniero de caminos Manuel Peironcelly (1818 – 1884). Modernización y obra pública en la España del siglo XIX*, Bilbao, pág. 27). La obra a la que se refiere es SÁENZ RIDRUEJO, F. (1993): *Los ingenieros de caminos*, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, pág. 116.

¹⁶¹⁹ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, Madrid, págs. 108 y 109.

¹⁶²⁰ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, págs. 138 y ss.

¹⁶²¹ BERTRÁN PÉREZ, C., Y PONS, M. A. “Qué son las crisis financieras y cómo ocurren”, en MARTÍN-ACEÑA, P., MARTÍNEZ – RUIZ, E., Y PONS, M. A., (eds.), (2013): *Las crisis financieras de la España contemporánea, 1850 – 2012*, Barcelona, pág. 43.

¹⁶²² Fuente: COMELLAS, J. L. (1999): *Isabel II ...*, pág. 334.

Respecto a la contribución de la crisis ferroviaria a la crisis política, CARR, apunta lo siguiente: (c)omo señalaba un súbdito inglés, los ferrocarriles fueron los que originaron la revolución de 1868: una “civilización ferroviaria” no podía soportar una mengua de los beneficios¹⁶²³.

Por último, cabe citar las diferencias de opinión entre varios historiadores económicos en cuanto a la valoración de la relación entre el desarrollo de la industria del ferrocarril en España y el estancamiento de otros sectores con ella relacionados, como la siderurgia, minería, etc. Esta interesante cuestión se aborda en el epígrafe posterior sobre otras industrias, en concreto, la siderúrgica.

C) EL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO

Respecto al sistema bancario, es obligado partir de la promulgación de la LB y de la LSCr, ambas de 28 de enero de 1856. Estos textos establecieron dos tipos diferentes de entidades bancarias. En primer lugar, los *bancos de emisión*, uno en cada plaza, cuya actividad era, fundamentalmente, la emisión de billetes y la concesión de préstamos y descuentos. Y, en segundo lugar, las *sociedades de crédito*, asimilables a los actuales bancos de negocios, que no podían emitir billetes, pero tenían amplias facultades para intervenir en toda clase de negocios¹⁶²⁴.

El sistema bancario tuvo una primera fase enormemente expansiva desde 1856 a 1864¹⁶²⁵, que dio paso a una gran contracción durante los años 1864 a 1870. Los datos aportados por los historiadores divergen en algunos aspectos¹⁶²⁶. GARCÍA LÓPEZ recoge una detallada relación de 24 entidades que solicitaron la suspensión de pagos o quiebra entre el 23 de agosto de 1865 y el 26 de mayo de 1869¹⁶²⁷. Esta crisis originó una

¹⁶²³ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975 ...*, pág. 293.

¹⁶²⁴ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea...*, pág. 142. Respecto a las sociedades de crédito, añade que su estructura estaba inspirada en el *Credit Mobilier* francés. Sobre la importancia de esta última institución y sus promotores, la familia Pereire, se puede consultar KINDLEBERGER, C. (2011): *Historia financiera de Europa*, Madrid, págs. 148 – 149.

¹⁶²⁵ Se pueden consultar datos estadísticos en los epígrafes sobre los bancos y las sociedades de crédito del capítulo relativo a las compañías anónimas reguladas por leyes especiales.

¹⁶²⁶ Pero dentro de cierta uniformidad, como se ve a continuación.

¹⁶²⁷ GARCÍA LÓPEZ, A. (1999): *Una historia de la banca española ...*, pág. 152. Esta es la lista que ofrece:

- El comercio, el 3 de mayo de 1867.
- Crédito Mobiliario barcelonés, 14 de mayo de 1867.
- Bilbaína de Crédito, 6 de marzo de 1868.
- Crédito vasco, 4 de enero de 1869.
- Banco de Burgos, 16 de enero de 1869.
- Crédito comercial de Cádiz, 31 de diciembre de 1866.
- Compañía gaditana de Crédito, 31 de diciembre de 1867.
- Crédito Comercial y Agrícola de Córdoba, 14 de Junio de 1867.
- Crédito Comercial de Jerez, 14 de febrero de 1868.
- Crédito leonés, 26 de mayo de 1869.
- Compañía General de Crédito en España, 31 de diciembre de 1866.
- Compañía Genera de Crédito, Depósitos y Fomento, 22 de Marzo de 1867.
- Sociedad Española General de Crédito, 6 marzo de 1868.
- Crédito Ibérico, 6 de marzo de 1868.
- Sociedad Española, Mercantil e Industrial, 21 de Julio de 1868.
- Banco de Madrid y Londres, 28 de abril de 1869.
- Compañía Internacional de Crédito, 26 de mayo de 1869.
- Banco de Madrid, 3 de Junio de 1869.

presentación masiva de billetes para su conversión en metal ante el BdE en 1869. El Banco pudo afrontar esta situación debido a que disponía de suficientes reservas en metálico y de una cartera de valores fácilmente realizable a corto plazo.

Según TORTELLA¹⁶²⁸, durante el periodo 1856 – 1865 se pasó de tres bancos de emisión a veinte, y de ninguna sociedad de crédito a treinta y cinco. El decenio posterior experimentó una reducción muy fuerte en el número de entidades bancarias: a principios de 1874 eran poco más de quince, de las cuales la mayoría eran bancos de emisión. Las sociedades de crédito, que habían invertido masivamente en las compañías de ferrocarriles, con la crisis de éstas, desaparecieron rápidamente. Entre las que superaron esos años de crisis destaca el “Crédito Mobiliario Español”, sucursal del *Credit Mobilier* francés.

Cabe preguntarse por las causas que generaron este *boom* de bancos y sociedades de crédito, durante los años siguientes a la promulgación de la LB y de la LScR. GARCÍA LÓPEZ¹⁶²⁹ señala dos motivos: en primer lugar, la fiebre especuladora entorno a la incipiente industria del ferrocarril y a la deuda pública; y, en segundo lugar, los favoritismos e intereses del Gobierno en las concesiones de las sociedades de crédito.

COMELLAS¹⁶³⁰ señala que en 1856 la circulación fiduciaria del BdE era de 39 millones de pesetas, alcanzando los 66 al final de la década, para llegar a 71 en 1864¹⁶³¹. Las emisiones del Banco de Barcelona en 1855 eran 2,6 millones de pesetas, 15 en 1861 y 21 en 1866¹⁶³². En Madrid, en el año 1863 se constituyeron siete sociedades de crédito con un capital global de 170 millones de pesetas. Pero la crisis bursátil de 1866 iniciada en Londres con motivo de la caída de la compañía londinense *Overend Guernsey Co.*, ocasionó el cierre de cinco sociedades de crédito de Madrid durante los siguientes meses y la disolución posterior de catorce sociedades de crédito¹⁶³³.

Por su parte, TUÑÓN¹⁶³⁴ manifiesta que de veinte sociedades de crédito y de diecinueve bancos de emisión, con motivo de la crisis de 1866 desaparecieron doce de las primeras y seis de los segundos. Los datos aportados por PALACIO ATARD¹⁶³⁵ reflejan que de veintiún bancos de emisión y de treinta y ocho sociedades de crédito

- Banco de Palencia, 12 de junio de 1868.

- Unión Mercantil, 27 de enero de 1869.

- Crédito Cántabro, 19 de febrero 1869.

- Crédito Comercial de Sevilla, 30 de septiembre de 1867.

- Crédito Castellano, 23 de Agosto de 1865.

- Sociedad de Crédito Industrial, Agrícola y Mercantil, 31 de diciembre de 1866.

Se pueden encontrar también abundantes datos sobre esta cuestión en SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N. (1968); *Los Bancos y las sociedades de crédito ...*, págs. 58 y ss.

¹⁶²⁸ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, pág. 143.

¹⁶²⁹ GARCÍA LÓPEZ, A. (1999): *Una historia de la banca española ...*, pág. 149.

¹⁶³⁰ COMELLAS, J. L. (1999): *Isabel II ...*, págs. 334 y 335.

¹⁶³¹ En aquellas fechas la peseta aún no era la moneda oficial. Entendemos que el autor ha realizado el cambio correspondiente a esta moneda (la que estaba en vigor en el momento de publicar su obra).

¹⁶³² TUÑÓN ofrece el dato preciso de que en 1865 la circulación fiduciaria había alcanzado la cifra de 14.849.500 pesetas. TUÑÓN DE LARA, M. (1976): *La España del siglo XIX ...*, pág. 251.

¹⁶³³ COMELLAS cita como fuente a SÁNCHEZ ALBORNOZ, N. (1970): “El trasfondo económico de la revolución”, en LIDA, C., Y ZAVALA, I. (eds.): *La revolución de 1868, Historia y literatura*, Nueva York, pág. 75.

¹⁶³⁴ TUÑÓN DE LARA, M. (1976): *La España del siglo XIX ...*, pág. 251.

¹⁶³⁵ PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea ...*, pág. 349.

existentes en 1866, la crisis forzó la desaparición de seis bancos y diecinueve sociedades de crédito.

Varios estudiosos coinciden en la importancia del atractivo de la rentabilidad que los ferrocarriles y la deuda pública ofrecían a los bancos. TORTELLA¹⁶³⁶ subraya que esta falta de diversificación en los activos de los bancos y de las sociedades de crédito fue un grave error, pues cuando, hacia 1864, se comenzó a vislumbrar que se iba a tardar mucho más tiempo del previsto en obtener beneficios, las compañías de ferrocarriles empezaron a suspender pagos. En consecuencia, los bancos, que tenían una sobreexposición de riesgo en ese sector, se vieron avocados a la disolución, dejando muchas deudas impagadas. Esta situación generó un pánico financiero que precedió a la revolución de 1868. Estos años han sido calificados por TEDDE¹⁶³⁷ como uno de los periodos más sombríos de la historia financiera española contemporánea.

A este respecto, también destacan CARRERAS Y TAFUNELL¹⁶³⁸, que la causa principal del desastre fue la extrema concentración del riesgo crediticio en el sector ferrocarril. El público, conocedor de la desvalorización e iliquidez de los activos bancarios, vendió en masa los títulos, retiró los depósitos bancarios y reclamó la conversión de papel moneda en metálico. Este malestar popular fue tan acusado, que originó trastornos políticos, que impulsaron la revolución del 68.

Otro aspecto importante en la crisis bancaria y financiera española de estos años es la dependencia del mercado de capitales francés, como señala CARR¹⁶³⁹, quien apunta el momento del hundimiento del *Credit Mobilier* francés como fecha relevante del origen de la inestabilidad financiera en nuestro país. Este mismo autor expresa gráficamente el poder del capital francés en la España de aquella época diciendo que *los hermanos Pereire y los Rothschild actuaban como si fueran a realizar con su capital lo que Napoleón I no había podido conseguir con las armas*¹⁶⁴⁰.

Cabe terminar este apartado formulando la pregunta ¿fue positiva la liberalización de las leyes de 1868 y 1869 para el sector bancario? En otras palabras, ¿se consiguió detener la crisis y reorientar la actividad de los Bancos? La respuesta se puede encontrar en las siguientes palabras de CARRERAS Y TAFUNELL: *la legislación condiciona las posibilidades de desarrollo bancario, mas no las determina. El establecimiento en 1869 de un régimen de absoluta libertad no enderezó un sistema bancario que se vino abajo con la crisis de 1866*¹⁶⁴¹.

D) EL SECTOR INDUSTRIAL

¿Cuál era la situación de la industria española en los años previos a la crisis de 1868? Las dificultades externas e internas del sector financiero y de las obras públicas, comentadas en los epígrafes anteriores, afectaron negativamente a la fabricación de los productos industriales y, además, redujeron la capacidad económica de la población, lo

¹⁶³⁶ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, pág. 143.

¹⁶³⁷ TEDDE, P. (1988): "El sector financiero ...", pág. 310.

¹⁶³⁸ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, págs. 146 y 147.

¹⁶³⁹ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975 ...*, págs. 261, 262, 267 y 293.

¹⁶⁴⁰ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975 ...*, pág. 267.

¹⁶⁴¹ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, pág. 143.

cual supuso una contracción de la demanda de dichos productos. También debe tenerse presente que los distintos sectores de la industria se desarrollaron de una manera desacompañada, en función de distintas variables¹⁶⁴².

Con carácter previo a comentar la situación del sector industrial, cabe recordar algo que puede ser una obviedad: la industrialización en España se produjo más tarde que en otros países de su entorno. Mucho se ha escrito sobre las causas de este retraso¹⁶⁴³. Este hecho tiene como consecuencia que el mayor impacto de la crisis económica iniciada a mediados de la década de 1860 se produjo sobre el sector agrario, el de mayor peso e importancia para la economía española¹⁶⁴⁴.

Cabe advertir, también, que no se dispone de datos definitivos sobre la utilización de compañías por acciones en el sector industrial. En relación a los bancos de emisión, sociedades de crédito y sociedades concesionarias de obras públicas, los historiadores económicos manejan datos precisos de compañías anónimas, dado que por exigencias legales, era el único tipo societario autorizado (junto a las comanditarias por acciones). En cambio, respecto a los demás sectores industriales, no hay estadísticas concluyentes sobre la utilización de sociedades por acciones en relación a las colectivas, comanditarias y a los empresarios individuales.

Por otro lado, no puede olvidarse que la Ley de 1848 sólo autorizaba la constitución de compañías por acciones a aquéllas que tuvieran un objeto social de interés público o utilidad pública, prohibiéndose expresamente las que se dirigieran a monopolizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad¹⁶⁴⁵. En consecuencia, lamentablemente, las sociedades por acciones no tuvieron una especial influencia en el sector industrial. Como se puso de manifiesto en los capítulos sobre el régimen del objeto social y la autorización de la sociedad, este punto concreto fue uno de los errores del Legislador del 48, dado que en otros países como Reino Unido, pronto se permitió la utilización de la limitación de responsabilidad de los socios en las sociedades mercantiles industriales y comerciales cuyo objeto social no era ni de utilidad pública ni de interés público.

Por todo lo expuesto anteriormente, los datos que a continuación se comentan sobre el sector industrial conviene, de cara a nuestro estudio, enfocarlos desde este punto de vista: las compañías anónimas no pudieron influir significativamente en la evolución del sector industrial (excluidos los bancos y ferrocarriles) por imposición legal. La derogación de la Ley y del Reglamento de 1848 supuso volver al régimen

¹⁶⁴² BILBAO, L. M., Y FERNÁNDEZ DE PINEDO, E. (1988): “Artesanía e industria” en ARTOLA, M. (dir.) y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario): *Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola*, I. Economía. Sociedad, Madrid, págs. 149 y 150.

¹⁶⁴³ Sin duda se trata de un tema de gran interés, pero no puede abordarse en el presente trabajo por exceder de su ámbito. En TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, pág. 66, se encuentra la siguiente frase: *(l)os historiadores económicos siguen buscando la explicación del fracaso*.

¹⁶⁴⁴ Sobre la evolución de la agricultura en el periodo que se está comentando, son de gran interés los capítulos correspondientes de TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, págs. 43 y ss., NADAL, J. (1997): *El fracaso de la Revolución industrial ...*, págs. 54 y ss., PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea ...*, págs. 332 y ss., y CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975 ...*, págs. 260, así como la obra general, ya citada, de PUJOL, J., GONZÁLEZ DE MOLINA, M., FERNÁNDEZ PRIETO, L., GALLEGU, D., Y GARRABOU, R. (2001): *El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea*, Barcelona.

¹⁶⁴⁵ Tal y como establecía sus artículos 2 (autorización parlamentaria) y 4 (autorización gubernativa).

anterior del CCom 1829 y, por tanto, a la libertad de constitución de sociedades anónimas industriales. Ahora es cuando se puede plantear una cuestión muy interesante relacionada con la política legislativa y sus consecuencias. ¿El regreso a la libertad de constitución de compañías anónimas permitió recuperar el retraso del sector industrial en España? Si aceptamos la tesis ampliamente extendida de que la Revolución Industrial no se consolida en España hasta entrado el siglo XX¹⁶⁴⁶, la conclusión es que esta liberalización no tuvo consecuencias sustanciales en el sector industrial. Quedaría para un nuevo trabajo el estudio de las relaciones entre la liberalización normativa de las sociedades mercantiles del último tercio del siglo XIX y el uso de las compañías por acciones.

Volviendo a la situación del sector industrial, cabe diferenciar distintos subsectores. Conviene empezar por los que fueron clave en la primera fase de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, que también lo fueron, años después, en España¹⁶⁴⁷: el textil y la siderurgia. Por razones de brevedad se recogen unos resúmenes de ideas generales con referencias bibliográficas en las que se desarrolla la materia.

La industria textil¹⁶⁴⁸. En primer lugar, cabe llamar la atención sobre el hecho de que esta industria se encontraba localizada en una zona determinada de España: Cataluña. Con motivo de la competencia de productos extranjeros, los industriales catalanes apoyaron desde el inicio una política proteccionista que encontró oposición en determinados sectores librecambistas, fundamentalmente en Madrid.

Este sector vivió una larga época de crecimiento hasta 1855, que se interrumpió. Se pueden señalar como causas, en primer lugar, la LF, la LB, la LSCr y la LSCOP, que propiciaron nuevas y más atractivas oportunidades de negocio en sectores diferentes al textil. En segundo lugar, la Guerra de Secesión norteamericana (1861 – 1865) que desestabilizó la industria algodonera. Y, por último, la crisis financiera de 1866. Una vez superada esta situación, la industria textil volvió a la senda del crecimiento.

Señala TEDDE que, durante el periodo que se está considerando, en la industria textil escaseaban las sociedades anónimas, abundando las empresas de pequeña dimensión en las que era frecuente la formación de capital mediante créditos a corto

¹⁶⁴⁶ NADAL, J. (1997): *El fracaso del desarrollo industrial ...*, págs. 236 a 238 en las que aplica el modelo de Hoffman de las tres etapas o estadios industriales al caso español. Citado también por PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea ...*, pág. 349. TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, pág. 65. PRADOS DE LA ESCOSURA, L. (1988): *De imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España (1780 – 1930)*, Madrid, págs. 139 y ss., en las que cita a CARRERAS, A. (1984): “La producción industrial española, 1842 – 1981: construcción de un índice anual” en *RHE*, II, 1, pág. 141, quien sostiene que el ritmo de expansión de la producción industrial española entre 1830 y 1860 fue superior al de Reino Unido y Francia. En el libro citado, PRADOS DE LA ESCOSURA mantiene que el crecimiento sostenido a largo plazo de la economía española se ve empañado por el atraso que experimenta en términos comparativos respecto a Europa (pág. 241).

¹⁶⁴⁷ TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea...*, pág. 66 y TORTELLA, G. (1975): *Los orígenes ...*, pág. 201.

¹⁶⁴⁸ Sobre la industria textil se puede consultar: NADAL, J. (1997): *El fracaso de la Revolución industrial ...*, págs. 188 y ss., y (1985): “Un siglo de industrialización en España, 1833 – 1930” en SÁNCHEZ ALBORNOZ, N.: *La modernización económica de España*, Madrid, págs. 90 – 97; TORTELLA, G. (1975): *Los orígenes del capitalismo en España. Banca, industria y ferrocarriles en el siglo XIX*, Madrid, págs. 219 y ss.; TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, págs. 66 y ss.; CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, págs. 170 y ss.; TUÑÓN DE LARA, M. (1976): *La España del siglo XIX ...*, págs. 242 y ss.; PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea ...*, págs. 332 y ss.; y CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975 ...*, págs. 264 y ss.

plazo y reinversión de beneficios. Además, destaca que *es, posiblemente, un ejemplo significativo de lo que era el comportamiento habitual de los empresarios industriales a mediados del siglo XIX*¹⁶⁴⁹.

La industria siderúrgica¹⁶⁵⁰. En los años previos a la crisis de 1868 esta industria comenzaba a echar raíces en el Norte de España, fundamentalmente en Asturias y Vizcaya, zonas de producción de carbón y hierro, respectivamente. Los primeros altos hornos de la zona de Marbella instalados a finales del primer tercio del siglo XIX no pudieron consolidarse debido a la lejanía de las materias primas de calidad¹⁶⁵¹.

Respecto a la siderurgia, los historiadores económicos¹⁶⁵² han reprochado a la LF y a la LSCOP, que no protegieron la industria siderúrgica española para que abasteciera la ingente cantidad de material que necesitaba la construcción del trazado ferroviario. A este hecho cabe añadir que las principales sociedades de crédito (creadas al amparo de la LSCr) estaban controladas por empresarios extranjeros, sobre todo franceses, que influyeron para que el material se importara de los países en los que tenían intereses¹⁶⁵³.

Hoy en día, como refieren algunos autores (CARRERAS Y TAFUNELL¹⁶⁵⁴) no está claro que este reproche sea preciso. Parece que la industria siderúrgica nacional, en los diez años entre 1856 y 1866 no tenía suficiente capacidad productiva, le faltaba tecnología y, además, no disponía de los necesarios recursos financieros para afrontar las inversiones requeridas¹⁶⁵⁵. GÓMEZ MENDOZA ha realizado unas estimaciones que muestran *que habría sido necesario incrementar la capacidad de la industria siderúrgica doce veces en sólo diez años para poder cubrir la demanda ferroviaria de*

¹⁶⁴⁹ TEDDE DE LORCA, P. (1988): “El sector financiero ...”, pág. 308.

¹⁶⁵⁰ Son interesantes los siguientes comentarios sobre la industria siderúrgica: TORTELLA, G. (1975): *Los orígenes ...*, págs. 233 y ss., algunas de cuyas conclusiones son matizadas en TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, págs. 74 y ss.; NADAL, J. (1997): *El fracaso de la Revolución industrial ...*, págs. 155 y ss.; TUÑÓN DE LARA, M. (1976): *La España del siglo XIX ...*, págs. 240 y ss.; PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea ...*, págs. 334 y ss.; y CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975 ...*, págs. 265 y ss.

¹⁶⁵¹ BILBAO, L. M., Y FERNÁNDEZ DE PINEDO, E. (1988): “Artesanía ...”, en ARTOLA, M. (dir.) Y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario): *Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola, I. Economía. Sociedad. Madrid*, pág. 150.

¹⁶⁵² NADAL, J. (1997): *El fracaso de la Revolución industrial ...*, págs. 158 y ss., y TORTELLA, G. (1975): *Los orígenes ...*, págs. 205 y ss.

¹⁶⁵³ En este sentido, son representativas de esta tendencia de los historiadores económicos las siguientes palabras de TORTELLA, G. (1975): *Los orígenes ...*, pág. 170: *La Ley de ferrocarriles de 1855 y las leyes bancarias de 1856 eran excepciones a las reglas restrictivas generales de 1848. El efecto que produjeron estas cuatro leyes combinadas fue el de dirigir los recursos del país hacia la construcción ferroviaria en detrimento de los demás sectores económicos. Como los bancos y los ferrocarriles eran los únicos campos en que la creación de sociedades por acciones era relativamente fácil, éstas eran en la práctica las únicas compañías cuyas acciones y obligaciones se cotizaban en las bolsas nacionales y extranjeras, las únicas que presentaban atractivos para capital e iniciativas nacionales y extranjeras, las únicas que podían utilizar sus acciones y obligaciones como garantía para préstamos.*

¹⁶⁵⁴ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, págs. 140 y 141, que citan los estudios de GÓMEZ MENDOZA, A. (1982): *Ferrocarriles y cambio económico en España 1855 – 1913*, Madrid, en el que cabe destacar el capítulo “Resumen y conclusiones” (págs. 234 a 243) y HERRANZ LONCÁN, A. (2008): *Infraestructuras y crecimiento económico en España (1850 – 1935)*, Madrid.

¹⁶⁵⁵ Así lo reconoce, en cierto modo el propio TORTELLA en una publicación posterior: TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, págs. 78 y 79.

*material fijo*¹⁶⁵⁶, lo cual no parece que se pudiera haber conseguido. Por lo tanto, la desaceleración de la industria del ferrocarril no parece que supusiera un golpe definitivo a la siderurgia. Fue la crisis de 1866 y su repercusión en la demanda interna la que influyó negativamente en esta industria.

TORTELLA afirma que, en el sector siderúrgico, sólo existía una sociedad por acciones¹⁶⁵⁷; el resto eran colectivas o comanditarias. Este autor se plantea si hubiera acudido más capital a la industria siderúrgica en caso de que hubiera sido más sencilla la constitución de sociedades anónimas¹⁶⁵⁸. Aunque con los datos empíricos no puede responder afirmativamente, concluye que el crecimiento de la producción siderúrgica comienza en 1876, después de que el legislador revolucionario derogara la Ley de 1848 y promulgara la libertad de asociación en la industria y el comercio.

Junto a las industrias textil y siderúrgica, cabe mencionar también otras cuya importancia respecto a la producción económica durante el periodo que se está estudiando no fue tan relevante, pero no se pueden olvidar¹⁶⁵⁹. Éstas son, fundamentalmente, la industria minera y energética¹⁶⁶⁰.

La industria minera¹⁶⁶¹. Durante los tres primeros cuartos del siglo XIX esta industria permaneció, en expresión de CARRERAS Y TAFUNELL¹⁶⁶², en un “estado de letargo”, a pesar de los buenos recursos mineros que subyacen a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Se pueden señalar como causas de este estancamiento la falta de capital, la carencia de tecnología, el subdesarrollo industrial que hubiera generado mayor demanda de los productos mineros y, por último, la legislación.

Respecto a esta última causa, la Ley de Minas de 1825 establecía un claro dominio de la Corona sobre las explotaciones mineras. Las siguientes Leyes de 1849 y 1859¹⁶⁶³ cambiaron de principios políticos y protegieron a las compañías particulares

¹⁶⁵⁶ GÓMEZ MENDOZA, A. (1985): “Los ferrocarriles en la economía española, 1855 – 1913” en MARTÍN ACEÑA, P. Y PRADOS DE LA ESCOSURA, L. (coords.) *La nueva historia económica en España*, Madrid, pág. 114.

¹⁶⁵⁷ TORTELLA, G. (1975): *Los orígenes ...*, pág. 234. La compañía era “La Palentina Leonesa” y a ella se hace referencia en el capítulo sobre el contexto económico y político de la Ley de 1848.

¹⁶⁵⁸ TORTELLA, G. (1975): *Los orígenes ...*, pág. 237.

¹⁶⁵⁹ CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, pág. 169, refieren el reciente interés de los historiadores económicos por las industrias menos relevantes y, a este respecto, destacan la siguiente obra de un equipo de investigadores dirigido por NADAL: NADAL, J., BENAUL, J. M., y SUDRIÀ, C., (dirs.) (2003): *Atlas de la industrialización de España, 1750 – 2000*, Barcelona.

¹⁶⁶⁰ También podrían citarse otras como la vitivinícola, harinera, conservera, molinería, agroalimentaria, etc.

¹⁶⁶¹ Cabe destacar varias referencias en relación a la minería: NADAL, J. (1997): *El fracaso de la Revolución industrial ...*, págs. 87 y ss., TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea ...*, págs. 84 a 95, y CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, págs. 162 y ss.

¹⁶⁶² CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X., (2012): *Historia económica ...*, pág. 162, inicio del apartado que trata la industria minera.

¹⁶⁶³ Sobre esta Ley de Minas de 1859, TORTELLA dice que *creaba una nueva figura legal: la Sociedad Especial Minera, que era una compañía por acciones con ciertas características que la diferenciaban de la anónima y cuya constitución exigía trámites mucho más simples que los establecidos en la Ley de 1848: bastaba con que el gobernador civil de la provincia correspondiente aprobase la escritura de constitución, habiendo, además, recurso ante el Ministerio de Fomento en caso de que el gobernador no aprobase. Con esta Ley, la minería quedaba claramente encuadrada dentro de los sectores privilegiados. Sin embargo, las sociedades mineras por acciones no alcanzaron un auge comparable al de los ferrocarriles y la banca*. TORTELLA, G. (1968): “El principio de responsabilidad limitada ...”, pág. 76.

que trataban de explotar los yacimientos. Es el Decreto que establece las bases generales sobre la nueva legislación de las minas, de 29 de diciembre de 1868¹⁶⁶⁴, consecuencia de los nuevos principios implantados por la Revolución de 1868, el que permitió el despegue de la industria minera durante el último cuarto del siglo XIX¹⁶⁶⁵. A esta Ley de bases se refiere NADAL con la gráfica expresión de la *desamortización del suelo*¹⁶⁶⁶.

Algunos autores como PASCUAL Y SUDRIÀ piensan que la incipiente industria minera, en el periodo que se está estudiando, tuvo efectos beneficiosos para la economía: *el incremento de la demanda exterior de vinos y minerales procuró recursos para la importación de materias primas y maquinaria que tuvieron efectos positivos para la modernización del país*¹⁶⁶⁷.

Por último, en relación a la minería, cabe recordar que durante los debates de la Ley de 1848 en el Congreso de los Diputados, se planteó la cuestión sobre si las compañías cuyo objeto social fuera la explotación minera se encontraban dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley. A pesar de la respuesta dada por el representante de la CCD, el tema no quedó clarificado hasta la promulgación de una RO de 8 de mayo de 1848 en la que se declaró que *las compañías mineras que se constituyan sin capital fijo no están comprendidas en la ley de 28 de enero de este año*¹⁶⁶⁸.

La industria energética¹⁶⁶⁹. Durante el siglo XIX se encontraba muy influida por la utilización del carbón como fuente de energía. Los datos señalan que durante la primera mitad del citado siglo, las fuentes de energía eran fundamentalmente la humana y la animal. Con carácter residual se podría encontrar algún caso de energía hidráulica y eólica. A partir de 1850 se empieza a utilizar el carbón que era exiguo, caro y de baja calidad, si se comparaba con el mismo mineral extraído en Centroeuropa.

Como energía alternativa, el gas, destilado de la hulla, comenzó a usarse para consumo doméstico y alumbrado público. Empezó a emplearse en Barcelona en 1842, incrementándose su producción hasta llegar, por ejemplo, en 1861 a veinticinco fábricas

¹⁶⁶⁴ GdM de 1 de enero de 1868, núm. 1.

¹⁶⁶⁵ COLL MARTÍN, comentando la obra *El fracaso de la Revolución industrial* de NADAL, expone que, en relación a la minería no energética, se pueden distinguir dos épocas diferentes durante el siglo XIX: la primera, anterior a esta Ley de 1868, caracterizada por las pequeñas explotaciones de capital nacional; y, la segunda, posterior al citado texto legal, en la que se constituyen grandes sociedades de capital extranjero (COLL MARTÍN, “El sector minero” en ICE, núm. 623, julio, pág. 89).

¹⁶⁶⁶ NADAL, J. (1997): *El fracaso de la Revolución industrial* ..., págs. 87 y ss.

¹⁶⁶⁷ PASCUAL, P., Y SUDRIÀ, C. (2002): “El difícil arranque de la industrialización (1840 – 1880)” en COMÍN COMÍN, F., HERNÁNDEZ, M. Y LLOPIS, E. (eds.): *Historia económica de España. Siglos X – XX*, Barcelona, pág. 240.

¹⁶⁶⁸ GdM de 12 de mayo de 1848, núm. 4989, pág. 1. El breve texto de la RO dice así:

Vistas las instancias de las compañías mineras tituladas Santa Cecilia, Suerte y Fortuna, Unión asturiana, Perla y Tempestad, y Rosa, en solicitud de que se declare si la ley de 28 de enero último sobre sociedades por acciones comprende a las mineras que se constituyen sin capital fijo: considerando que el artículo 1 y fundamental de la referida ley de 28 de enero no habla sino de las compañías cuyo capital en todo o en parte se divida en acciones, en cuyo caso la responsabilidad de los socios es ilimitada, y por lo tanto solidaria, lo que las separa completamente de las anónimas y comanditarias a que la ley se refiere; la Reina (Q.D.G.), conformándose con el parecer del Consejo Real, ha tenido a bien declarar que las compañías mineras que se constituyan sin capital fijo no están comprendidas en la ley de 28 de enero de este año.

¹⁶⁶⁹ En relación a la industria energética, los datos se han tomado de TORTELLA, G. (1998): *El desarrollo de la España contemporánea* ..., págs. 95 a 97.

de gas. En cualquier caso, su relevancia en los años previos a la crisis de 1868 era muy escasa.

La industria eléctrica prácticamente no existía antes de 1875 y, por lo tanto, su desarrollo es posterior al periodo que se está estudiando.

II. SITUACIÓN POLÍTICA ALREDEDOR DE LA DEROGACIÓN DE LA LEY Y DEL REGLAMENTO DE 1848 (INICIO DEL SEXENIO REVOLUCIONARIO)

A) ANTECEDENTES

Una vez concluida la exposición del epígrafe anterior sobre la crisis económica y empresarial iniciada en 1866, se dispone de más elementos valorativos para analizar la situación política de aquellos años, que originaron un importante periodo revolucionario en la historia de España. Probablemente el profundo cambio político no se puede entender sin la influencia decisiva de la crisis económica¹⁶⁷⁰.

Un aspecto importante para enmarcar los hechos revolucionarios es la proximidad temporal del Sexenio Revolucionario español (1868 – 1874) con otras revoluciones que se producen en países influyentes e importantes como Estados Unidos (Guerra de Secesión, 1861 – 1865), los movimientos definitivos de unificación en Alemania y Italia (1866 – 1870), el paso del Segundo Imperio a la III República en Francia (1870 – 1871), la reforma electoral en Gran Bretaña (1867) y, por último, la Revolución Meiji en Japón (1867 – 1868)¹⁶⁷¹.

Como expone PALACIO ATARD¹⁶⁷², a quien seguimos en la presente exposición, en los momentos iniciales de la revolución, el aspecto político no tenía un perfil definido dada la heterogeneidad de los sujetos participantes¹⁶⁷³. Dicho esto, cabe destacar dos objetivos políticos claros: el derrocamiento de la Reina Isabel II¹⁶⁷⁴ y el reconocimiento del sufragio universal.

¹⁶⁷⁰ En PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea* ..., pág. 367, se relativiza la influencia de la crisis económica sobre la situación política. Según este autor, VICENS enfatizó esta idea, pero ARTOLA ha observado que su importancia fue limitada. De manera que se trata de un factor coadyuvante a la revolución de 1868, cuya motivación reside, sobre todo, en factores políticos.

Por otro lado, cabe plantearse, en sentido inverso, la influencia de los nuevos principios políticos liberales en la actividad económica. A este respecto, se puede citar un breve e interesante estudio de TEDDE en el que concluye que *(e)n España, como en otras naciones, la reforma liberal se llevó a cabo con resultados contradictorios, por lo que se refiere a su repercusión en la modernización económica*. TEDDE DE LORCA, P. (1994): “Cambio institucional y cambio económico en la España del siglo XIX” en *RHE*, Año XII, núm. 3, otoño, pág. 536.

¹⁶⁷¹ COMELLAS, J. L. (1999): *Isabel II* ..., pág. 318.

¹⁶⁷² PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea* ..., págs. 354 y ss.

¹⁶⁷³ A este respecto, dice un escritor en una obra publicada a los pocos meses de triunfar la revolución que *(m)onárquicos sin rey, constitucionales sin Constitución, ideólogos sin idea, llegamos aquí a vernos enfrente de los republicanos unitarios y federales, que siquiera sabían a dónde iban, mientras nosotros navegábamos a merced del viento y de las olas*, RUBIO, C. (1869): *Historia filosófica de la revolución española de 1868*, tomo II, Madrid, pág. 508.

¹⁶⁷⁴ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975* ..., pág. 302, y TUÑÓN DE LARA, M. (1976): *La España del siglo XIX* ..., pág. 261.

El cambio político, que se concretará en una nueva Constitución (la CE 1869) y que terminará con la I República, no se puede entender sin la importancia de la actuación de los partidos políticos, ni la falta de tacto de Isabel II para llegar a un entendimiento con las posturas de los progresistas y demócratas¹⁶⁷⁵.

Las fuerzas políticas más importantes de la época eran tres¹⁶⁷⁶. En primer lugar, los Unionistas, fundamentalmente militares. En segundo lugar, los Progresistas, que aglutinaban a militares y a civiles. Al final, su líder fue el General Prim¹⁶⁷⁷, respecto a quien interesa destacar, a efectos de nuestro estudio, sus vinculaciones con la burguesía industrial catalana. Este grupo de presión tuvo un importante papel en las decisiones de política económica durante los primeros años del Sexenio¹⁶⁷⁸. Y, en tercer lugar, los Demócratas, que se nutrían de civiles (casi no había militares en sus filas) con un alto contenido doctrinal y un gran respaldo popular. Representaban a un conjunto heterogéneo de fuerzas políticas. Con motivo de la cuestión monárquica durante el periodo constituyente, se formaron dos grupos antagónicos: los demócratas republicanos y los demócratas monárquicos o cimbríos.

De estas tres fuerzas políticas, se puede destacar que sólo dos de ellas participaron formalmente en las decisiones parlamentarias y políticas durante los primeros años de la revolución (que son los que afectan a la derogación, en 1868, de la Ley y del Reglamento de 1848): los Unionistas y los Progresistas. Los Demócratas accederán al poder en la parte final del Sexenio.

El impulso inicial de la revolución de 1868 proviene de la burguesía liberal: los comerciantes modestos, menestrales y profesionales liberales a los que, como dice TOMÁS Y VALIENTE¹⁶⁷⁹, suele denominarse “clase media”. A ella hay que añadir el artesanado y parte de los trabajadores de la industria. Sus reivindicaciones, desde un punto de vista económico, se dirigían, en líneas generales, a terminar con el intervencionismo y control estatal de la actividad empresarial. Por este motivo, muchas de las primeras disposiciones normativas del Sexenio se orientan a liberalizar las normas de contenido económico, entre las que se encontraban las compañías mercantiles por acciones.

¹⁶⁷⁵ Respecto a los errores de Isabel II con el Partido Democrático, insiste con profundidad CARR, pudiéndose destacar la siguiente frase: *el pecado político capital de Isabel II fue que con su negativa a admitir a los progresistas en el poder, sometió a dura prueba su fidelidad a la dinastía, empujándoles a la revolución* CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975 ...*, pág. 284. Palabras similares se encuentran en ARTOLA: *(l)a constante preferencia de Isabel II por los moderados acabó por provocar un conflicto que terminó con el trono y luego incluso con la monarquía* (ARTOLA, M. (1988): “El Estado” en ARTOLA, M. (dir.) Y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario): *Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola. II. Instituciones políticas. Imperio, Madrid.*, pág. 154.

¹⁶⁷⁶ Se resume este tema según se expone en PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea ...*, págs. 367 y ss.

¹⁶⁷⁷ Hasta su muerte el 30 de diciembre de 1870 por el atentado que sufrió tres días antes.

¹⁶⁷⁸ Y también, según CARR en la crisis con Cuba, cuya guerra de independencia (1868 – 1878) fue un cáncer durante todo el Sexenio. Expone este autor que Prim quiso evitar a toda costa la guerra de Cuba, planteándose su autonomía o incluso su venta a Estados Unidos para evitar el ingente gasto de la guerra, pero sufrió, entre otras, la presión de los intereses catalanes para mantener la privilegiada situación económica de España en Cuba (CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975...*, pág. 301).

¹⁶⁷⁹ TOMÁS Y VALIENTE, F. (1997): *Manual de Historia ...*, pág. 450.

B) EL TRIUNFO DE LA “GLORIOSA”. EXILIO DE ISABEL II

Tras algunos intentos de sublevación mal ejecutados, en el verano de 1868 confluyeron los ingredientes necesarios para la activación del golpe revolucionario, que fue rápido y no encontró sólida oposición. Se inició en Cádiz, resolviéndose a los pocos días en Madrid, tras la famosa “batalla” de Alcolea y la sublevación de las Provincias¹⁶⁸⁰. La Reina, que se encontraba en Lequeitio, se vio obligada a exilarse el 30 de septiembre de 1868 a Francia. Tenía 38 años¹⁶⁸¹. La revolución había conseguido uno de sus objetivos fundamentales.

Abandonado el trono tras la “Revolución Gloriosa”, la soberanía la asumieron el Gobierno Provisional y las Juntas revolucionarias¹⁶⁸², que jugaron un papel fundamental en la preparación y acción del golpe revolucionario, especialmente a través de los “Voluntarios de la Libertad”. El Gobierno Provisional lo presidió el General Serrano. Se componía de tres unionistas (a parte del General Serrano): el Almirante Topete y los Sres. Romero Ortiz y López de Ayala, y de cinco progresistas: el General Prim (Ministro de la Guerra) y los Sres. Álvarez Lorenzana, Figuerola, Sagasta y Ruiz Zorrilla¹⁶⁸³. Los demócratas no aceptaron una cartera y no entraron en el Gobierno. El Decreto de 1868 que deroga la Ley de 1848, fue firmado por D. Manuel Ruiz Zorrilla, Ministro de Fomento.

Durante los meses siguientes al triunfo de la revolución, el Gobierno Provisional tuvo que reconducir la presencia y actuación de las Juntas y de sus Voluntarios de la Libertad. Fue este un proceso muy conflictivo que dirigió Prim con mano de hierro¹⁶⁸⁴, exigiendo el desarme de los Voluntarios. Las medidas fueron eficaces, pero dejaron un profundo descontento entre extensos grupos revolucionarios.

Cabe hacer un último apunte sobre la situación de Isabel II. Su partida al exilio hizo que desapareciera de la escena política pero, no por ello se había cerrado toda esperanza de regresar a España. En este epígrafe, de intento, se ha obviado la problemática de la lucha durante aquellos años entre monárquicos y republicanos, por exceder del ámbito de nuestro trabajo¹⁶⁸⁵. Sólo resta decir que Isabel II abdicó a favor de su hijo Alfonso el 25 de junio de 1870¹⁶⁸⁶.

C) LAS CORTES CONSTITUYENTES. LA CE 1869

Uno de los objetivos del proceso revolucionario era el reconocimiento del derecho al sufragio universal. Por este motivo, el Gobierno Provisional promulgó un largo Decreto el 9 de noviembre de 1868¹⁶⁸⁷, integrado por 138 artículos, en el que se

¹⁶⁸⁰ PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea* ..., págs. 368 y ss., y TUÑÓN DE LARA, M. (1976): *La España del siglo XIX* ..., págs. 264 y ss.

¹⁶⁸¹ Falleció en 1904 en París. Su exilio duró, por tanto, casi la mitad de sus años de vida.

¹⁶⁸² Sobre las Juntas, puede consultarse CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975* ..., págs. 302 y ss., PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea* ..., págs. 369 y ss., y TUÑÓN DE LARA, M. (1976): *La España del siglo XIX* ..., págs. 267 y ss.

¹⁶⁸³ GdM de 9 de octubre de 1868, núm. 283.

¹⁶⁸⁴ PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea* ..., págs. 371 y 372.

¹⁶⁸⁵ Y que se trata con gran extensión en la bibliografía citada en el presente epígrafe.

¹⁶⁸⁶ Para más detalles, COMELLAS, J. L. (1999): *Isabel II* ..., pág. 348.

¹⁶⁸⁷ GdM de 10 de noviembre de 1868, núm. 315. En el Preámbulo se califica como Decreto “orgánico”.

consagra el sufragio universal de los hombres mayores de 25 años inscritos en el padrón de la vecindad.

Días más tarde, el Decreto de 6 de diciembre de 1868¹⁶⁸⁸ convocaba a la elección de Diputados para las Cortes Constituyentes, cuya votación se fijó para los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 1869. Las Cortes se constituyeron el 11 de febrero de 1869 y la coalición revolucionaria disponía de la mayoría de los Diputados: progresistas, demócratas cimbrios y liberales unionistas. Los republicanos y los carlistas eran una minoría¹⁶⁸⁹. El objetivo fundamental era la redacción, aprobación y promulgación de una nueva Constitución.

Los debates parlamentarios de las discusiones sobre el Proyecto de Constitución (redactado por una Comisión de quince miembros: cinco por cada grupo: los progresistas, los unionistas y los cimbrios) se iniciaron el 6 de abril, terminando el 31 de mayo y constituyen el ejemplo más extremo de nuestra oratoria parlamentaria decimonónica¹⁶⁹⁰. El texto final fue aprobado el 1 de junio y promulgado solemnemente el 5 de junio de 1869.

TOMÁS Y VALIENTE¹⁶⁹¹, a quien seguimos en este breve resumen del contenido básico del texto constitucional, afirma que la ideología que subyace es la liberal – democrática. Por ello, el principio básico es la soberanía nacional (artículo 32), del cual deriva el sufragio universal¹⁶⁹² (artículo 16). También se consagra el principio constitucional de división de poderes.

El texto recoge el principio de unidad de Códigos y de jurisdicción, que afectará de manera notable al ámbito mercantil¹⁶⁹³. Por primera vez se recogen ampliamente los derechos individuales (Título I), los procesales-penales, la libertad de domicilio, la propiedad privada, la libertad de expresión, de asociación y de reunión, así como la libertad de cultos. De todos ellos, el sufragio universal, el derecho de reunión y el de

¹⁶⁸⁸ GdM de 7 de diciembre de 1868, núm. 342

¹⁶⁸⁹ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975 ...*, pág. 307 y PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea ...*, págs. 376 y ss. Este autor señala que se eligieron 381 Diputados (352 de la Península e islas adyacentes, 18 de Cuba y 11 de Puerto Rico) y que la participación fue de un 70 %.

¹⁶⁹⁰ A este respecto cabe destacar algunos comentarios como los siguientes:

Siempre se han recordado aquellas Cortes como la culminación de la oratoria política y parlamentaria del siglo XIX, y en su tiempo se escribieron varios libros sobre los oradores del 69 (PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea ...*, pág. 378).

Comenzó entonces aquel debate constituyente en el cual las proezas oratorias de los Diputados de todos los bandos se produjeron con verdadera incontinencia (TUÑÓN DE LARA, M. (1976): *La España del siglo XIX ...*, pág. 281).

Los debates, que pasaron a la categoría de clásicos de la oratoria parlamentaria española, dieron lugar a discursos de cuatro horas que leídos hoy parecen conferencias malas (CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975 ...*, pág. 307).

¹⁶⁹¹ TOMÁS Y VALIENTE, F. (1997): *Manual de Historia ...*, págs. 451 y ss.

¹⁶⁹² Que, como ya se ha expuesto anteriormente, fue reconocido por Decreto de 9 de noviembre de 1868 para todos los hombres mayores de 25 años inscritos en el padrón de la vecindad.

¹⁶⁹³ Comenta TOMÁS Y VALIENTE en la obra citada, en el capítulo relativo a la Codificación mercantil que *(l)a jurisdicción especial mercantil funcionó durante más de treinta años y siempre de un modo satisfactorio, tanto en su aspecto orgánico (Tribunales compuestos por comerciantes) como en el estrictamente procesal. Sin embargo, el Decreto de unificación de fueros (es decir, de jurisdicciones) de 6 de diciembre de 1868, llevado de un celo justificado por eliminar los muy diversos y perjudiciales tipos de tribunales especiales, suprimió también los de la jurisdicción especial mercantil, medida en este punto de discutible conveniencia* (TOMÁS Y VALIENTE, F. (1997): *Manual de Historia ...*, pág. 512).

asociación, son la articulación constitucional de la ideología liberal – democrática citada anteriormente.

Del conjunto de derechos individuales consagrados por el texto constitucional, los que más afectan a la materia objeto de nuestro estudio son la propiedad privada (artículos 13 y 14), así como el derecho de asociación y de reunión (artículo 17), del cual deriva la libertad para constituir sociedades mercantiles. Dice el artículo 17 CE 1869:

Tampoco podrá ser privado ningún español:

(...)

Del derecho de reunirse pacíficamente.

Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública.

El derecho de reunión se regula en el artículo 18 en los siguientes términos:

Toda reunión pública estará sujeta a las disposiciones generales de policía. Las reuniones al aire libre y las manifestaciones políticas sólo podrán celebrarse de día.

Y al derecho de asociación se le imponen las siguientes limitaciones (artículo 19):

A toda Asociación cuyos individuos delinquieren por los medios que la misma les proporcione, podrá imponérseles la pena de disolución. La autoridad gubernativa podrá suspender la Asociación que delinca, sometiendo incontinenti a los reos al Juez competente. Toda Asociación cuyo objeto o cuyos medios comprometan la seguridad del Estado podrá ser disuelta por una ley.

El texto constitucional recoge otro artículo cuyo contenido también es importante para el desarrollo de sociedades promovidas por extranjeros, lo cual era relevante para la economía de la época que, como se ha dicho en los epígrafes anteriores, dependía en gran medida de las inversiones externas. Establece el artículo 25:

Todo extranjero podrá establecerse libremente en territorio español, ejercer en él su industria, o dedicarse a cualquier profesión para cuyo desempeño no exijan las leyes títulos de aptitud expedidos por las Autoridades españolas.

En este marco constitucional es donde se encuentra el origen de la Ley de 1869 sobre la libertad de constitución de las sociedades que *tengan por objeto cualquier empresa industrial o de comercio* (artículo 1 de la Ley de 1869), que se estudia posteriormente.

Como se puede advertir, el nuevo régimen constitucional instaura una situación radicalmente diferente a la descrita en los capítulos sobre el régimen de autorización y la vigilancia e inspección de las compañías mercantiles por acciones durante la vigencia de la Ley y el Reglamento de 1848.

III. EL DECRETO DE 1868

El Decreto de 18 de octubre de 1868¹⁶⁹⁴ deroga la Ley y el Reglamento de 1848. Se compone de una larga Exposición de Motivos o Preámbulo y de cinco breves artículos, que se comentan a continuación. Esta norma, aunque parezca una obviedad recordarlo, no tiene rango de RD dado que en la fecha de su publicación la Reina Isabel II se encontraba en el exilio¹⁶⁹⁵. Se trata de un Decreto del autodenominado Gobierno Provisional, tal y como figura en la GdM de aquella época.

A) PREÁMBULO O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Preámbulo del Decreto de 1868 se abre citando la proclamación formal del principio de libertad de asociación realizada semanas antes por el Gobierno Provisional. Esta solemne declaración es uno de los primeros frutos del proceso revolucionario que culmina con el exilio de la Reina Isabel II el 30 de septiembre de 1868, al cual sigue, tras unos breves momentos de euforia capitaneada por Serrano y Prim, el Gobierno Provisional de Serrano. Como apunta CARR¹⁶⁹⁶, el 8 de octubre el Gobierno Provisional, bajo la presión de la Junta de Madrid, tuvo que admitir el programa demócrata. Desde un punto de vista formal, esto se plasmó en una declaración de derechos publicada en la GdM en la que textualmente se dice: *La Junta superior Revolucionaria, fiel a su elevado origen, hace la siguiente declaración de derechos:*

Sufragio universal.

Libertad de cultos.

Libertad de enseñanza.

Libertad de reunión y asociación pacíficas.

Libertad de imprenta sin legislación especial.

Descentralización administrativa que devuelva la autorización a los Municipios y a las Provincias.

Juicio por Jurados en materia criminal.

Unidad de fuero en todos los ramos de la Administración de la justicia.

Inamovilidad judicial (el subrayado es nuestro).¹⁶⁹⁷

El Decreto de 1868, por tanto, se fundamenta en la libertad de asociación, declarada solemnemente por el Gobierno Provisional. Una vez sentado este principio, el Ministro de Fomento que lo suscribe, D. Manuel Ruiz Zorrilla, alude a la fructífera experiencia de las sociedades anónimas en Gran Bretaña y Estados Unidos y, a renglón seguido, describe la lamentable fiebre especuladora de los momentos previos a la promulgación de la Ley de 1848, incidiendo en una cuestión que, a nuestro juicio, no fue especialmente relevante: el impacto negativo de la revolución francesa de 1848 en el estado de los negocios de aquella época¹⁶⁹⁸.

¹⁶⁹⁴ GdM de 29 de octubre de 1868, núm. 303, págs. 6 y 7.

¹⁶⁹⁵ Como se recordará, la fecha de su abdicación fue el 25 de junio de 1870.

¹⁶⁹⁶ CARR, R. (2000): *España 1808 – 1975 ...*, págs. 301 y 302.

¹⁶⁹⁷ Del día 9 de octubre de 1868, núm. 283, pág. 1.

¹⁶⁹⁸ Ya que, entre otras cuestiones, cuando comenzó aquella revuelta, la Ley de 1848 (de 28 de enero) llevaba un año tramitándose en el Parlamento. Se encuentran más detalles al respecto en el epígrafe sobre la crisis europea de 1848 y su influencia en España, dentro del capítulo sobre el entorno económico y político de la Ley de 1848.

El texto ofrece un diagnóstico de la crisis en la que se encuentran las compañías por acciones y delimita los culpables, excluyéndose en todo caso a la institución de la sociedad anónima, que en sí misma es *una fecundísima máquina económica*. La culpa se carga a diversos factores. En primer lugar, a *los hombres de negocios, por su excesivo ardimiento y su precipitación*. En segundo lugar, *al público, por su ligereza y su injustificable confianza*. En tercer lugar, *a la revolución, por el pánico que causara*. Y, por último, *al Gobierno, por su ley y su reglamento debía caer la responsabilidad del daño que los intereses de los particulares y el crédito del país sufrieron en aquella ocasión*. Y concluye el diagnóstico con las siguientes palabras:

(c)ontra la Sociedad anónima se forjó la ley de 28 de enero y el reglamento de 17 de febrero de 1848.

El Decreto de 1868 alude reiteradamente a la intervención y vigilancia por la Autoridad pública como el factor básico del fracaso de la utilización de las sociedades por acciones. Se dice que el Estado se convirtió en *una verdadera fiscalía, falible y ciega*. Y no sólo para autorizar estas compañías, sino también después de constituirse, pues *el Gobierno la fiscaliza: multiplica las precauciones contra ella, vigila sus menores detalles administrativos, mata su espontaneidad, y de tal modo la envuelve y aprisiona en las estrechísimas mallas de una serie interminable de artículos, que ni le queda a la Compañía voluntad propia, ni en buena ley puede hacerse responsables a sus Gerentes de acto alguno, sin que a la vez en ese mismo acto resulte responsable y punible la administración*.

Cabe subrayar estas últimas palabras porque señalan una consecuencia evidente del excesivo intervencionismo en la vida societaria, que pasó prácticamente silenciado durante los debates de la Ley de 1848: el Estado podría acabar siendo responsable solidario de las actuaciones ilícitas de los administradores a quienes vigilaba, intervenía y fiscalizaba.

El texto también pone de manifiesto que el gran fracaso de la Ley y del Reglamento de 1848 fue que no consiguieron impedir los fraudes y la crisis: *esta vigilancia y este celo son de todo punto estériles; ni evitan el mal, ni procuran el bien, y en cambio, entorpecen y dificultan lo que por su naturaleza debe ser rápido, fácil sencillo*. Añade, refiriéndose a la actuación de los delegados del Gobierno cerca de las compañías por acciones que *nunca impiden lo que el Gobierno con esta vigilancia constante quisiera, aunque inútilmente, impedir*, frase en la que TORTELLA¹⁶⁹⁹ encuentra una manifestación de la ideología liberal manchesteriana.

Se considera que la precedente observación es correcta, pero matizable. En efecto, la crisis de 1866, como se ha expuesto en los epígrafes anteriores, es consecuencia de una crisis financiera iniciada en Reino Unido y contagiada posteriormente a Francia, país con el que España tenía una desproporcionada vinculación empresarial. Las compañías por acciones especialmente afectadas por la crisis de 1866 fueron los bancos, las sociedades de crédito y las concesionarias de obras públicas, todas las cuales habían sido objeto de una regulación específica a través de la LF, la LB, la LSCr y la LSCOP, estudiadas en el capítulo sobre las sociedades anónimas

¹⁶⁹⁹ TORTELLA, G. (1968): “El principio de responsabilidad limitada...”, págs. 81 – 82.

reguladas por leyes especiales. Estos textos legales, como se vio en dicho capítulo, establecieron importantes excepciones al régimen de la Ley de 1848, constituyendo un régimen legal mucho más flexible que el regulado por dicha Ley¹⁷⁰⁰.

Un aspecto de importancia capital que señala el Preámbulo del Decreto de 1868 se refiere a que el objeto social de las compañías por acciones no tiene que ser necesariamente de utilidad pública. Como ya se puso de manifiesto en el capítulo sobre el objeto social, esta particular cuestión fue clave para el retraso de la industrialización en España. Mientras otros países, como Reino Unido, admitieron hacia mediados de siglo la posibilidad de compaginar el privilegio de la responsabilidad limitada con las actividades de interés exclusivamente particular, en España este régimen se interrumpió con la Ley de 1848 y no volvió a la práctica empresarial hasta la fecha que se está comentando: el 28 de octubre de 1868.

Por último, cabe citar otra cuestión tratada en el Preámbulo, en relación a la actitud pasiva de los accionistas, quienes, con motivo de la intervención continua de la Autoridad pública, se habían *maleducado* al confiar la *perpetua tutela* de sus intereses al poder público. Se trata de un diagnóstico certero y de gran calado. En efecto, el carácter extremadamente intervencionista del régimen instaurado por la Ley de 1848 pudo llevar –y de hecho llevó– a una desidia o falta de interés de los inversores no cualificados, confiados en que el poder público velaba por sus derechos reconocidos por la ley, que el Gobierno debía vigilar y aplicar. El nuevo régimen que iba a instaurar el Decreto de 1868 pretendía que *los accionistas aprendan lo que es una compañía por acciones, cuáles son sus derechos y sus deberes, elijan, con conciencia plena de lo que hacen, sus Directores y sus Consejos de administración, exijan publicidad en los actos y responsabilidad en los mandatarios,...*

B) ARTICULADO

El Decreto de 1868 consta de cinco breves artículos, que se comentan a continuación.

El artículo 1 deroga la Ley y el Reglamento de 1848 y el Reglamento de 17 de febrero del mismo año. Debe subrayarse, en primer lugar, que el texto del artículo se

¹⁷⁰⁰ Se puede recordar aquí las palabras de GONZÁLEZ HUEBRA, citadas en el capítulo sobre las compañías anónimas reguladas por leyes especiales:

*... se promulgaron después la ley de 28 de enero y el reglamento de 17 de febrero de 1848, que, pasando de un extremo a otro, exigieron para su formación una ley especial, o un real decreto, y las reglamentaron y restringieron de modo que apenas se volvió a constituir ninguna después de su publicación. Estos males tan conocidos exigían una reforma esencial, según decíamos en nuestra edición anterior, y tratando de remediarlos las Cortes constituyentes en 1855, autorizaron la creación de las sociedades de crédito y las de ferro-carriles, suprimiendo varias de las restricciones impuestas en 1848, en las que se promulgaron para establecer dichas sociedades en 28 de enero y 30 de junio de 1856. Mas como no se propusieron uniformar este ramo de la legislación haciendo una ley general de sociedades anónimas derogando la anterior, sino solo autorizar la formación de aquellas dos clases especiales, resulta ahora que es más restrictiva y defectuosa la Ley general que las dictadas para las excepcionales que eran las que necesitaban acaso ser autorizadas con más limitaciones [el subrayado es nuestro] (GONZÁLEZ HUEBRA (1859), *Curso de Derecho* ..., pág. 152).*

refiere a la “Ley de sociedades anónimas de 28 de enero de 1848”, constituyendo un error importante, dado que el ámbito de dicha Ley, como se recordará, se refiere a las compañías mercantiles por acciones, incluyendo las comanditarias por acciones.

Por otro lado, desde un punto de vista formal, sorprende profundamente que un Decreto derogue una Ley válidamente aprobada por el Parlamento. Las circunstancias históricas pueden justificar, en cierta manera, esta situación, que acabará siendo regularizada con la aprobación y promulgación de la Ley de 1869.

Como se recordará, algo similar ocurrió durante la tramitación parlamentaria de la Ley de 1848. La norma vigente en aquel momento, el CCom 1829, sometía la autorización de las compañías anónimas a la aprobación de los T. de c. El Gobierno, adelantándose a la eventual reforma que se quería aprobar, derogó el artículo 293 del citado Código (que establecía el sometimiento de las citadas compañías al T. de c. de su domicilio social) mediante la RO de 9 de febrero de 1847¹⁷⁰¹. En aquella ocasión una RO derogó un artículo del CCom 1829¹⁷⁰².

El artículo 2 deroga todas órdenes y decretos expedidos desde 1848 para la aplicación y explicación de la Ley de 1848.

El artículo 3 somete de nuevo a las sociedades anónimas (y, debe entenderse también a las comanditarias por acciones) al régimen del CCom 1829.

El artículo 4 recoge el régimen transitorio, de manera que las sociedades existentes en ese momento, previo acuerdo de la junta general, decidirán entre continuar sometidas a la legislación de 1848 o regirse por el CCom 1829. En este último caso, se suprimen de hecho los delegados o inspectores nombrados por la Autoridad pública.

No debieron ser muchas las compañías que optaron por mantener el régimen de la Ley y del Reglamento de 1848, a tenor de las siguientes palabras de MARTÍ DE EIXALÁ, publicadas en 1870: *(p)ocas serán las compañías que se encuentren en este caso, pues casi todas han acordado regirse en adelante por el Cod. de Com. [sic]; pero las que en él se encuentren, sólo continuarán sujetas a la legislación de 1848 mientras no expire el término de su duración: llegado éste, como toda prórroga equivale a nueva constitución de compañía, deberán someterse a la legislación que entonces rija*¹⁷⁰³.

Por último, el artículo 5 establece que el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre asociación industrial y mercantil, como así se hizo después de aprobar la CE 1869, cuyo resultado fue la Ley de 1869.

La caracterización fundamental del cambio de orientación legislativa del Decreto de 1868 (y de la Ley de 1869) fue el abandono de la disposición normativa reguladora de las compañías anónimas, para volver a la política legislativa de exención de todo ordenamiento normativo sobre este tipo societario.

¹⁷⁰¹ GdM de 14 de febrero de 1847, núm. 4536.

¹⁷⁰² En el capítulo sobre la formación y tramitación de la Ley de 1848 se pueden encontrar más detalles sobre este particular y la transcripción de algunas intervenciones de Diputados con motivo de esta RO y del RD de 15 de abril de 1847 por el que el Gobierno se reservaba la facultad para autorizar nuevas compañías por acciones.

¹⁷⁰³ MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones* ..., pág. 273, nota (α).

Llegados a este punto, cabe hacer una breve referencia a algunos comentarios doctrinales sobre esta decisión de política legislativa. En primer lugar, en la Doctrina de la época, PERECAULA es muy crítico con la técnica legislativa del Decreto (y también de la Ley del 69). Este autor reconoce los graves defectos de la Ley de 1848 y de las Leyes especiales sobre sociedades anónimas (LF, LB, LSCr y LSCOP) y concluye que era necesaria su reforma, *pero en vez de acometerla, se prefirió derogarlas aplicando el criterio de libertad a todas las compañías de esta clase, como así se hizo por el decreto de 18 de octubre de 1868 y la ley de 19 de igual mes de 1869, en cuya virtud toda clase de compañías por acciones pueden libremente constituirse y regirse con arreglo a las disposiciones del Código de comercio que antes fueron consideradas insuficientes para impedir los abusos a que se prestan, y a las pocas restricciones de la última citada ley. Es probable que dentro de poco tiempo se comprenda que mejor servicio se hubiera prestado al país estudiando y corrigiendo los defectos de que adolecieran las leyes y reglamento derogados* (el subrayado es nuestro)¹⁷⁰⁴.

En segundo lugar, se han seleccionado tres comentarios aparecidos con motivo de la publicación de nuestro Anteproyecto de reforma de la sociedad anónima de 1949, momento en el que se había planteado por la Doctrina un importante debate sobre los dos modelos regulatorios de la compañía anónima: el liberal (CCom 1885, vigente hasta la entrada en vigor de la LSA 1951) y el intervencionista. Así, GARRIGUES, en un conocido artículo, decía que *(p)retender que la sociedad anónima sea una especie de institución de Derecho divino, como tal exenta de cualquier ordenación jurídica coactiva, es reincidir en la aberración de creer que existe un sector de la vida económica sustraído al imperio del Legislador, olvidando que las sociedades por acciones, como la propiedad o los contratos, son creación de la ley y que el Legislador abdicaría de su misión si se abstuviese de regularlas*¹⁷⁰⁵.

Este mismo profesor, solicitó a algunos profesores extranjeros unos comentarios sobre el citado Anteproyecto de Ley. Por su interés, se recogen a continuación dos de ellos.

El profesor francés ESCARRA, exponía que *es un hecho que la legislación española en vigor sobre las sociedades anónimas, contenida casi toda en el Código de comercio de 1885, continúa siendo una de las más liberales que existen, abstracción hecha de las reformas introducidas en algunos puntos por leyes recientes. (...) Se ha puesto con frecuencia de manifiesto que este liberalismo cuasi total había sido una reacción contra la legislación anterior a 1885, que tenía carácter restrictivo*¹⁷⁰⁶. Continuaba diciendo que el régimen del CCom 1885 había resistido relativamente bien el paso del tiempo, pero que el régimen de la anónima se encontraba abandonando la tesis contractual para entrar en la institucional, de manera que esta sociedad mercantil es una “institución” en el sentido de que es una creación de la ley, de la Autoridad pública y no de pactos privados.

Por su parte, el italiano MOSSA, mantenía que *los autores de la libertad absoluta, la cual dejaba en el Código exclusivamente la definición de la sociedad*

¹⁷⁰⁴ PERECAULA, A. (1871): *Diccionario*..., pág. 183.

¹⁷⁰⁵ GARRIGUES, J. (1950): “Reforma, contrarreforma y ultrarreforma ...”, 182.

¹⁷⁰⁶ ESCARRA, J. (1950): “A propósito de la reforma del Derecho de sociedades anónimas en España” en *RDP*, vol. IX, núm. 26, marzo – abril, págs. 203 – 204.

*anónima, permitiendo a los fundadores cualquier maquinación, no encuentran eco en ninguna legislación (...). Una libertad absoluta, sobre el modelo de la que derrama la rudimentaria disciplina del Código español, verdaderamente no es de este mundo. Ningún Derecho con sentido moderno, en nuestro siglo, conoce esta libertad o licencia absoluta*¹⁷⁰⁷.

Efectivamente, se puede concluir que, con la perspectiva actual, la opción de nuestro Legislador de Derecho de sociedades de 1868 – 1869 no eligió el régimen normativo más adecuado, del mismo modo que tampoco acertó el de 1848.

IV. LA LEY DE 1869

A) INTRODUCCIÓN

La Ley de 1869, *declarando libre la creación de Bancos territoriales, agrícolas y de emisión y descuento, y de sociedades de crédito y demás asociaciones que tengan por objeto cualquier empresa industrial o de comercio*, no se puede entender correctamente sin el Decreto de 1868 comentado en el epígrafe anterior.

Las circunstancias políticas del momento (exilio de la Reina, compromiso de redacción de una nueva Constitución, etc.) forzaron una modificación legislativa de las compañías por acciones que podría calificarse de improvisada y formalmente incorrecta (un decreto que deroga unas leyes válidamente aprobadas por el Parlamento). Por estos motivos, era necesario que, una vez aprobada la nueva CE 1869, se aprobara una disposición con rango de ley que regulara el nuevo régimen de las compañías por acciones.

Así sucedió con la Ley de 1869, que se refiere en su párrafo introductorio a cualquier sociedad o asociación que tenga por objeto una empresa industrial o de comercio. PERECAULA en su obra de 1871, censura al Legislador de 1869 con las siguientes palabras: *(t)al fue la precipitación con que se procedió en la redacción de la Ley de 19 de octubre de 1869 que, atendido su texto, se pudo y debió entender que las disposiciones en ella contenidas comprendían a todas las compañías mercantiles cualquiera que fuera su clase. Así lo reconoció el Gobierno apresurándose a declarar con orden de 7 de marzo de 1870, previa consulta del Consejo de Estado, que los preceptos de aquélla sólo obligan a las compañías anónimas y comanditarias por acciones*¹⁷⁰⁸.

La Ley está sancionada por D. Francisco Serrano y Domínguez, Regente del Reino por la voluntad de las Cortes Soberanas y rubricada por el entonces Ministro de Fomento, D. José Echegaray¹⁷⁰⁹. Consta de quince artículos y dos disposiciones adicionales (denominadas “artículos adicionales”). A diferencia del Decreto de 1868,

¹⁷⁰⁷ MOSSA, L. (1950): “Fundación y administración de la sociedad anónima en el Proyecto español de reforma” en RDP, vol. X, núm. 28, julio – agosto, pág. 10.

¹⁷⁰⁸ PERECAULA, A. (1871): *Diccionario ...*, págs. 183 y 184.

¹⁷⁰⁹ Se puede consultar una breve biografía en TEDDE DE LORCA, P. (2006): “José Echegaray, economista” en COMÍN COMÍN, F., MARTÍN ACEÑA, P. Y VALLEJO, R. (eds.) (2006): *La Hacienda por sus ministros ...*, págs. 299 a 368 y, concretamente sobre la gestación de esta Ley, págs. 347 a 350.

carece de Preámbulo o Exposición de Motivos que explique el motivo y objetivos del texto. Probablemente el Legislador consideró suficiente el largo Preámbulo del Decreto de 1868.

A continuación, se analiza el contenido de la Ley de 1869, siguiendo la exposición de PERECAULA¹⁷¹⁰.

B) REGLAS COMUNES A TODAS LAS SOCIEDADES

Sin duda, el aspecto más relevante es el establecimiento de una completa libertad para la constitución de *bancos territoriales, agrícolas y de emisión y descuento, y de sociedades de crédito, de préstamos hipotecarios, concesionarias de obras públicas, fabriles, de almacenes generales de depósitos, de minas, de formación de capitales y rentas vitalicias, y demás asociaciones que tengan por objeto cualquier empresa industrial o de comercio*¹⁷¹¹. Esta libertad se extiende a los pactos que los socios estimen convenientes para su régimen y administración¹⁷¹².

El Legislador abandona la política de regulación por disposición normativa de las compañías por acciones, para pasar al régimen de exención de ordenamiento normativo. La Doctrina de mediados del siglo XX (GARRIGUES, GONZÁLEZ, DE LA PLAZA, URÍA, RODRÍGUEZ GIMENO, PALAO y SÁINZ DE BUJANDA¹⁷¹³) criticó esta decisión política, tomando como referencia, entre otras cuestiones, la legislación comparada. Cabe destacar el siguiente texto: *Mientras los demás Legisladores*¹⁷¹⁴ *se apresuraron a sustituir ese sistema [de autorización gubernativa en la fundación de sociedades anónimas] por el de las disposiciones normativas, que habían de regular coactivamente la fundación y el funcionamiento de esta clase de sociedades, el Legislador español optó por inhibirse no sólo desde un punto de vista gubernativo, sino desde el punto de vista legal.*

La Ley de 1869 establece, simultáneamente, unos requisitos necesarios como son, en primer lugar, que se formalice en escritura pública en la que comparezcan los tenedores o representantes de, al menos, la mitad del capital social o de la cifra fijada por los estatutos, siendo convocados a este efecto todos los interesados en la empresa; y, en segundo lugar, que se inscriba en el Registro público de la Provincia¹⁷¹⁵.

En relación a la constitución de nuevas sociedades, se establece una importante excepción en cuanto a los bancos de emisión para respetar sus derechos adquiridos: no pueden constituirse en las poblaciones donde existan otros de la misma clase hasta que hayan expirado sus condiciones especiales o el término de su duración, o por haber sido declarados en estado de liquidación o de quiebra, o por otro motivo¹⁷¹⁶.

¹⁷¹⁰ PERECAULA, A. (1871): *Diccionario ...*, págs. 185 Y 186.

¹⁷¹¹ Artículo 1 de la Ley de 1869.

¹⁷¹² Artículo 2 de la Ley de 1869.

¹⁷¹³ GARRIGUES, J., GONZÁLEZ, J., PLAZA, M. DE LA., URÍA, R., RODRÍGUEZ GIMENO, A., PALAO, J. E., Y SÁINZ DE BUJANDA, F. (1947): *Reforma de la sociedad anónima ...*, págs. 7 y 8.

¹⁷¹⁴ Se refieren a la Ley francesa de 1867.

¹⁷¹⁵ Artículos 2 y 3 de la Ley de 1869 y artículos 22, 25 y 290 CCom 1829.

¹⁷¹⁶ Artículo 14 de la Ley de 1869.

Otro aspecto destacado del contenido del texto legal es que estas compañías no se encuentran sujetas a la vigilancia e inspección del Gobierno. Las disputas y controversias que se susciten son competencia exclusiva de los Tribunales, pudiendo los accionistas reclamar, individual y colectivamente, el cumplimiento de los reglamentos y estatutos sociales, de los acuerdos de las juntas generales, así como exigir responsabilidad a los gerentes o directores por el uso de las facultades que se les hubiera conferido y por la inexactitud de los documentos publicados¹⁷¹⁷.

Los administradores deben remitir al Gobernador de la Provincia del domicilio social, en el plazo de quince días desde la fecha de la constitución de la compañía, una copia autorizada de la escritura social con sus estatutos y reglamentos, si los tuviere, y el acta de constitución de la compañía para que los envíe al Ministerio de Fomento. Dentro del mismo plazo, los administradores deben publicar esta documentación en la GdM y en el Boletín Oficial de la Provincia para que lleguen a conocimiento público¹⁷¹⁸.

La Ley de 1869 consagra otro deber de los administradores, referente a la publicidad de los estados contables. Esta obligación de publicidad es la que sustituye, en algunos aspectos, la desenfocada inspección y vigilancia por parte de la Autoridad pública según se estableció en la Ley de 1848. Los administradores deben remitir al Gobernador dos copias del inventario y del balance¹⁷¹⁹ examinados y aprobados por la junta general, así como publicarlos en la GdM y Boletín Oficial de la Provincia dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la junta, sin perjuicio de hacerlo, además, en otros momentos que los administradores estimen oportuno para el conocimiento del público y de los socios. El Gobernador debe enviar una de las copias al Ministerio de Fomento¹⁷²⁰. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, el Gobierno puede imponer multas a los administradores por importe entre 100 y 1.000 escudos¹⁷²¹.

En relación a las acciones, se levanta la prohibición de la Ley de 1848 sobre los títulos al portador¹⁷²², pudiendo ser, por tanto, de esta clase o nominativas, siempre que, en el primer caso, se exprese esta circunstancia en la escritura y en los títulos que las representen. Si existieran dividendos pasivos en las nominativas, en caso de transmisión, deberá recogerse expresamente que el transmitente es responsable subsidiario del pago de dichos dividendos pasivos, que deberá realizar el adquirente¹⁷²³.

La emisión de obligaciones, tanto nominativas como al portador, es libre. La Ley de 1869 exige un requisito de publicidad consistente en el deber de recoger en las cuentas anuales el número de obligaciones, el valor nominal o amortizable, la cantidad ingresada en la caja social, la fecha de emisión, de amortización y demás condiciones *para conocimiento del público*¹⁷²⁴.

¹⁷¹⁷ Artículos 10 y 11 de la Ley de 1869.

¹⁷¹⁸ Artículo 3 de la Ley de 1869.

¹⁷¹⁹ Artículo 36 CCom 1829.

¹⁷²⁰ Artículo 4 de la Ley de 1869.

¹⁷²¹ Artículo 12 de la Ley de 1869.

¹⁷²² Prohibición que, como se recordará, fue derogada para las sociedades de crédito (LSCr) y de las concesionarias de obras públicas (LF y LSCOP).

¹⁷²³ Artículo 5 de la Ley de 1869 y artículo 283 CCom 1829.

¹⁷²⁴ Artículo 9 de la Ley de 1869.

Por último, cabe concluir con PERECAULA¹⁷²⁵ que en todas las demás cuestiones societarias sobre las que estas reglas comunes no dispongan nada, se aplicará lo previsto en el CCom 1829.

C) DISPOSICIONES ESPECIALES PARA DETERMINADAS CLASES DE SOCIEDADES

En relación a los bancos, junto a la excepción comentada en el epígrafe anterior, la Ley de 1869 ratifica la facultad de emisión de billetes al portador hasta la cantidad fijada en sus estatutos, si bien su admisión en las transacciones mercantiles es voluntaria. Además, se establece que dichos billetes tengan fuerza ejecutiva mediante la correspondiente preparación¹⁷²⁶.

Los bancos territoriales, agrícolas, las sociedades de crédito, las de préstamos hipotecarios, las concesionarias de obras públicas y las industriales pueden emitir obligaciones, siempre que esté previsto en sus estatutos y con la condición de poner cada emisión en conocimiento del público, del Gobernador de la Provincia y del Gobierno, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acuerdo. En el concreto caso de las compañías concesionarias de obras públicas, sólo podrán hipotecar los derechos de que sean concesionarias y conforme a las restricciones de la Ley hipotecaria¹⁷²⁷.

Por último, a las compañías de almacenes generales de depósitos se les ratifica la facultad de emisión de resguardos nominativos y se les autoriza para expedirlos al portador¹⁷²⁸.

D) DISPOSICIONES ADICIONALES Y DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Aunque la Ley de 1869 formalmente no recoge un capítulo o sección de disposiciones adicionales cabe destacar, por su contenido, las siguientes.

En primer lugar, como ya estableciera el Decreto de 1868, se regula la aplicación del nuevo régimen legal a las sociedades autorizadas por el Gobierno, existentes con anterioridad a la promulgación de la Ley de 1869. Dichas compañías podrán seguir rigiéndose por sus estatutos o bien optar por la nueva regulación, siempre que así lo decidan sus socios en una junta general expresamente convocada al efecto, cuyo acuerdo debe adoptarse por las mayorías previstas en sus estatutos para la modificación de los mismos o, en caso de que no hubiera nada previsto al respecto, por mayoría de dos tercios del capital¹⁷²⁹.

¹⁷²⁵ PERECAULA, A. (1871): *Diccionario ...*, pág. 186.

¹⁷²⁶ Artículo 6 de la Ley de 1869.

¹⁷²⁷ Artículo 8 de la Ley de 1869.

¹⁷²⁸ PERECAULA, A. (1871): *Diccionario ...*, pág. 186.

¹⁷²⁹ Artículo 13 de la Ley de 1869.

En segundo lugar, se ordena una *revisión* inmediata del CCom 1829 para otorgar *la más amplia libertad de los asociados para constituirse en la forma que tengan por conveniente, y a fin de ponerlo en consonancia con los adelantos de la época*¹⁷³⁰.

En cuanto a la disposición derogatoria, ésta se encuentra en el artículo 15 de la Ley de 1869 que la formula en los siguientes términos: *(q)uedan derogadas todas las leyes y disposiciones anteriores que se opongan a esta ley*. De forma y manera que desde ese momento se convalida la derogación de la legislación anterior realizada por el Decreto de 1868 en contra del respeto del principio de jerarquía normativa. La derogación afecta, en primer lugar, a la Ley de 1848 y al Reglamento de 1848. En segundo lugar, a toda la legislación posterior por la que se desarrollan aspectos parciales de la Ley de 1848. Así, por ejemplo, la RO de 22 de marzo de 1850, sobre la formación, publicación y envío al Gobierno del Balance general anual de situación de las compañías por acciones, y el Reglamento de 1857. Y, por último, a todas las disposiciones normativas que regulan sociedades anónimas especiales, como la LB, la LSCr, la LF y la LSCOP, así como todas las normas que se dictaron en su desarrollo.

Acababa de iniciarse una nueva etapa en el Derecho de sociedades español.

¹⁷³⁰ Artículos adicionales 1 y 2 de la Ley de 1869. Lamentablemente, la cuestión relativa a la modificación del CCom 1829 y a la redacción del CCom 1885 no puede ser objeto de estudio del presente trabajo, que se centra en la Ley y Reglamento de 1848.

CAPÍTULO XV CONCLUSIONES

El último capítulo se dedica a las conclusiones, en las que se exponen los resultados más relevantes de la investigación.

Primera.- La Ley y el Reglamento de 1848 establecen una serie de cautelas imperativas del régimen sustantivo de la sociedad por acciones que son recogidas por las grandes reformas del Derecho de sociedades del siglo XX.

Aunque ambas normas (la Ley y el Reglamento de 1848) son calificadas como extremadamente intervencionistas, es indudable que establecen un conjunto de cautelas mediante el sistema conocido como “disposiciones normativas”, que fue recuperado por nuestro Legislador de 1951, 1989 y 2010. El sistema contrario, de mínima intervención o “exención de ordenamiento normativo”, no parece ser el adecuado en la actualidad para las sociedades por acciones y menos para las cotizadas.

Estas cautelas imperativas recogidas por las grandes reformas del Derecho de sociedades del siglo XX no se refieren a cuestiones marginales o irrelevantes, sino a temas básicos del derecho sustantivo. Siguiendo a SÁNCHEZ CALERO¹⁷³¹, se pueden señalar las siguientes: la preocupación por la claridad en la información al público de las características de la sociedad, la publicidad de sus estatutos y reglamentos; la necesidad de suscripción real del capital y desembolso previo a la constitución; exigencia de que el capital fuera proporcional al objeto social; la prohibición de emisión de acciones antes de la declaración de la constitución de la compañía; el control de las aportaciones de naturaleza no dineraria; el rigor del desembolso de los dividendos pasivos; el requisito de que las acciones sean nominativas y de su inscripción en el libro registro; la necesaria admisión a cotización de las acciones, interviniendo agente o corredor de cambio en las transmisiones de las mismas; la obligación de los administradores de tener en depósito un número de acciones en garantía del ejercicio de su cargo; la prohibición de aplicar fondos sociales a negociaciones extrañas al objeto social; la separación de los administradores por los socios mediando justa causa; la responsabilidad directa y personal de los administradores en la formulación de las cuentas anuales; el control administrativo de la correspondencia del balance con los libros contables de la sociedad; la limitación de la distribución de dividendos a los beneficios que figuraran en el balance, previa deducción de la parte que hubiera de aplicarse al fondo de reserva; el deber de entrega del balance al Gobernador de la Provincia, que tras comprobar su adecuación con los archivos de la sociedad, tenía la obligación de imprimirlo, publicarlo en el *Boletín Oficial de la Provincia* y comunicarlo al T. de c.; etc.

¹⁷³¹ SÁNCHEZ CALERO, F. (2001): *La sociedad cotizada en Bolsa ...*, págs. 51 y 52.

Segunda.- El CCom 1829 no acertó atribuyendo la aprobación de las sociedades anónimas a los T. de c.

Sáinz de Andino, en 1847, en una de sus intervenciones en los debates del PL 1848 en el Senado, justificó que el artículo 293 CCom 1829 atribuyera la competencia para aprobar las sociedades anónimas a los T. de c. por las siguientes razones: fomentar *el espíritu mercantil e industrial*, que en aquella época había languidecido; estimular la inversión de capital extranjero en España; y, por último, alejar esta materia de la *intolerancia* de los actos de gobierno de Fernando VII. Las motivaciones son claras y coherentes, pero la decisión quizá no fuera la más acertada.

El CCom 1829 debió, bien asignar la aprobación de estas compañías a un organismo técnico que formara parte de la Administración pública, sin necesidad de la intervención del Gobierno, bien otorgar unas facultades especiales a los T. de c. para que pudieran hacer cumplir la ley, lo cual no era fácil por las características de dicho órgano, que en nada se parece al actual Registro mercantil ni al “Regulador” de las sociedades cotizadas. Además, los miembros de los T. de c. no eran las personas más adecuadas, ni por su responsabilidad ni por su preparación, para cumplir satisfactoriamente la tarea asignada.

Por otro lado, es indicativo que, desde un punto de vista del derecho comparado (Francia y Reino Unido), la autorización de compañías mercantiles por acciones siguiera otros procedimientos diferentes. Nuestro CCom 1829 fue único en esta materia.

El hecho de que los T. de c. no dependieran del Gobierno facilitó que éste atribuyera toda la responsabilidad de la crisis de las compañías anónimas a aquéllos y, además, justificó la reacción pendular para que el poder político asumiera todo el control. La pérdida de credibilidad de estas sociedades, junto a las conductas abusivas de los administradores, se debió, en gran parte, al mal funcionamiento de los T. de c.

Lamentablemente, este error se trató de corregir con otro error al someter la autorización al Parlamento o al Gobierno, en función del tipo de objeto social. Ahora bien, no se puede olvidar que la política legislativa de los países de nuestro entorno en la primera mitad del siglo XIX mantenía unos principios similares.

Tercera.- Génesis de la promulgación de la Ley de 1848.

El Legislador de 1848 no se planteó sustituir los artículos del CCom 1829 reguladores de las compañías por acciones, en vez de promulgar una ley especial. Esta cuestión no aparece en los debates parlamentarios ni tampoco es cuestionada por la Doctrina de la época.

Por otro lado, las fuerzas que originan el cambio legislativo, en nuestra opinión, se pueden agrupar en torno a dos causas.

En primer lugar, determinados abusos de poder y escándalos de corrupción que se produjeron en los años previos a la promulgación de la Ley de 1848. Nos referimos concretamente a dos situaciones. Por un lado, algunos Ministros que formaban parte de las diferentes facciones del partido moderado, entonces en el poder, obtuvieron adjudicaciones de líneas de ferrocarril para sociedades anónimas de las que eran

accionistas. Vendieron sus participaciones obteniendo importantes ganancias, fruto de la especulación, desapareciendo al poco tiempo las sociedades, sin haber construido las obras comprometidas y, además, produciendo importantes pérdidas a los accionistas.

Y, por otro lado, en el sector bancario, el 25 de enero de 1844 se constituyó la sociedad anónima del Banco de Isabel II en el que participaban importantes miembros del partido moderado y del Gobierno. Esta institución, entre otras actividades, financió varias de las concesiones de ferrocarriles citadas en el párrafo anterior. El Banco, tras unos primeros años brillantes, llegó a una situación cercana al colapso y desde el Gobierno se propició su rescate mediante la fusión con el Banco de San Fernando, el 15 de febrero de 1847. Todos estos abusos hicieron que otras facciones del partido moderado presentes en el Parlamento trataran de poner fin a estas conductas y, para ello, uno de sus objetivos fue someter a la autorización legal las compañías por acciones en función de su objeto social.

La segunda causa, fue el pánico financiero de 1846 causante de importantes pérdidas en la Bolsa (tanto deuda pública como acciones cotizadas), que llevó a la ruina a muchas familias, fundamentalmente acomodadas y cercanas a la clase política, las cuales contribuyeron a crear un ambiente hostil a una de las instituciones económicas protagonista de la crisis: las compañías anónimas.

Por último, cabe señalar que la influencia de grupos de intereses extranjeros (sobre todo franceses y británicos) no parece que fuera especialmente relevante, como así ocurrió en la legislación del “Bienio Progresista” (1854 – 1856), de manera especial la LSCr y la LSCOP.

Cuarta.- Importancia del Reglamento de 1848. Excepción a la reserva de ley en materia de Derecho societario

El Reglamento de 1848 fue mucho más que un mero instrumento de ejecución o desarrollo de la Ley de 1848. Una parte importante de las disposiciones reglamentarias regulan materias sobre las que la Ley de 1848 no dice nada.

Cabe señalar que se trata de una de las excepciones más importantes a la reserva de ley del Derecho de sociedades anónimas desde el CCom 1829. Tras la Ley de 1848, las siguientes disposiciones sustantivas reguladoras del Derecho societario han sido leyes aprobadas por el Parlamento y no reglamentos del Gobierno.

El motivo de esta decisión del Legislador de 1848 se relaciona con las circunstancias particulares y singulares del momento de la tramitación del PL 1848, presididas por la urgencia de su aprobación y la inestabilidad parlamentaria y gubernativa, especialmente acusada desde mediados de 1846 a principios de 1848. Esta situación propició que muchas enmiendas, sobre todo al final de la tramitación del PL 1848, se resolvieran mediante el compromiso por parte del Ministro responsable de tenerlas en cuenta para la redacción del texto reglamentario. Los parlamentarios parece que se conformaron con someter la autorización de determinadas compañías a las Cortes Generales y consagrar el principio de vigilancia e intervención pública. La concreción de este último aspecto, dentro de la negociación política de aquel momento, se remitió al Gobierno.

Esta situación otorgó, de hecho, un gran poder al Gobierno de turno, que podía modificar el Reglamento de 1848 a su voluntad. Pero, en la práctica, el texto reglamentario no fue reformado, si bien otras normas posteriores lo completaron o alteraron en algunas materias. En este sentido, se puede destacar que los Gobiernos durante la vigencia de la Ley y del Reglamento de 1848, salvo la excepción del “Bienio Progresista”, fueron bastante continuistas de la política establecida en 1848. Incluso, en alguna ocasión, las normas posteriores se caracterizan por un mayor control y vigilancia de las compañías por acciones.

Quinta.- El concepto de sociedad anónima

Con carácter previo, hay que advertir que esta conclusión se refiere exclusivamente a las sociedades anónimas.

Destaca el reconocimiento de la limitación de responsabilidad de los socios, conceptuada desde el inicio como el mayor privilegio que se les concedía. A esta afirmación habría que añadir otra que pasa más desapercibida: la limitación de responsabilidad de los administradores. En efecto, las compañías anónimas eran una excepción frente a las sociedades mercantiles “comunes” (colectivas y comanditarias) en las que los administradores eran responsables de las deudas sociales. La limitación de la responsabilidad del órgano de administración de las anónimas fue también una novedad de primer orden, y así quedó recogida en la sistemática del CCom 1829.

Por otro lado, el concepto de sociedad anónima no es idéntico al actual. Se han constatado varias diferencias, pudiendo destacarse las siguientes.

El reconocimiento de la compañía anónima como un sujeto jurídico independiente de los socios no se recoge expresamente ni en el CCom 1829 ni en la Ley de 1848. Las sociedades anónimas precodificadas tenían personalidad jurídica propia en virtud de la norma que las constituía (sistema de *octroi*). Pero las compañías anónimas codificadas no ven reconocida su personalidad jurídica independiente en los textos legales. Esta cuestión fue objeto de varios comentarios doctrinales, tanto por autores coetáneos a la Ley de 1848, como por otros más cercanos a nuestra época. Aunque la solución normativa llegó con el artículo 116 del vigente CCom 1885, se puede concluir que, salvo algunos juristas aislados, se aceptaba mayoritariamente la personalidad jurídica independiente de la sociedad.

La Ley de 1848 regula solamente la sociedad cotizada (artículo 14). Desde un punto de vista tipológico, se trata exclusivamente de una sociedad abierta. La derogación de las normas de 1848 permitirá la existencia de anónimas cerradas.

La compañía anónima se constituía por un tiempo definido, en función de su objeto social. Este planteamiento tenía como consecuencia práctica una mentalidad de los administradores y socios diferente a la que se tiene hoy en día. El momento de disolución y liquidación era conocido y, de alguna manera, estaba presente en las operaciones societarias. La cuota de liquidación era un derecho relevante (probablemente más que hoy en día) para el socio.

Sexta.- Consecuencias de la autorización parlamentaria o gubernativa. Dificultades para constituir sociedades por acciones.

La autorización parlamentaria o gubernativa fue uno de los grandes errores del Legislador de 1848. Su consecuencia más clara fue disuadir y desanimar la constitución de compañías por acciones. Aunque no se dispone de datos estadísticos definitivos sobre las sociedades por acciones en toda España (así como de su capital y objeto social) durante el periodo objeto de estudio, se puede destacar lo siguiente. Durante los primeros años de aplicación de la Ley de 1848 se adaptaron bastantes compañías constituidas con anterioridad y se fundaron pocas sociedades. La tendencia cambió de manera sustancial con motivo de la promulgación de la LF, la LB, la LSCr y la LSCOP (1855 – 1856), momento a partir del cual se produce un enorme incremento de constituciones de estas compañías.

Otra consecuencia, y bastante relevante, fue la decisión del Legislador de 1848, fruto de la presión de grupos locales partidarios del proteccionismo frente a productos extranjeros, de excluir las actividades del comercio ordinario del objeto social de las compañías por acciones. Esta cuestión, con ciertos matices, se empezó a admitir en el derecho británico desde 1844 y, si se hubiera hecho en España, probablemente se hubieran constituido durante la vigencia de la Ley de 1848 más sociedades anónimas en vez de colectivas o comanditarias, facilitando la inversión de capitales en empresas de tipo medio (telares, conserveras, etc.).

Finalmente, conviene tener en cuenta que el largo y complicado procedimiento de tramitación de una ley para aprobar una sociedad por acciones, o el proceso negociador con el Gobierno para constituir este tipo de compañías, podía generar un mayor número de ocasiones de abuso de poder desde diferentes ámbitos de la Administración pública. Cabe recordar que para obtener la autorización era necesaria la consulta al Jefe Político, Diputación, Consejo Provincial, T. de c., SEAP y Ayuntamiento del domicilio social. Además, si la compañía planificaba abrir establecimientos en otras Provincias, también era necesaria la consulta al Jefe Político de esas demarcaciones.

Séptima.- Régimen de las acciones. Obligación de transparencia.

Paradójicamente, el texto de nuestra primera Ley sobre sociedades anónimas, que, como indica el propio término, prescinde de la identidad de los socios, prohibió la emisión de acciones al portador (artículo 12). La parte más larga de los debates del PL 1848 en el Senado versó sobre este punto concreto. Sáinz de Andino, entre otros, expuso de un modo exhaustivo los motivos por los que debía permitirse la emisión de acciones al portador. Pero la mayoría aprobó lo contrario: todos los títulos debían ser nominativos e inscribirse en el correspondiente libro registro.

Los fundamentos aducidos por los partidarios de establecer exclusivamente la emisión de acciones nominativas constituyen un interesante antecedente del movimiento hacia una mayor transparencia de las sociedades cotizadas. Se puso de manifiesto la necesidad de combatir las situaciones de conflictos de intereses y la utilización de información privilegiada en beneficio propio, así como la exigencia del cumplimiento

de los deberes de lealtad y fidelidad a la sociedad, por parte de administradores y, en cierta medida, de los socios.

Estamos de acuerdo con dichos argumentos, si bien, nos parece que la manera de exigir la fidelidad y lealtad a la sociedad no puede realizarse exclusivamente mediante la prohibición de las acciones al portador. Esta disposición tuvo una consecuencia negativa: se impidió que muchos capitales improductivos de aquella época, que por razones históricas no podían figurar en negocios económicos (militares, clérigos, religiosos, parte de la nobleza, etc.) y no tenían ningún conflicto de intereses con las sociedades concretas, perdieran la posibilidad de invertir en dichas compañías. Prueba de ello es que cuando se permitió la emisión de acciones al portador con las Leyes de 1855 y 1856, se incrementó sustancialmente la inversión doméstica en sociedades anónimas.

Octava.- Los órganos sociales

A) La junta general. Cabe destacar la falta de regulación sistemática de este órgano social, tanto en la Ley de 1848 como en el Reglamento de 1848. En la práctica eran los estatutos y reglamentos sociales los que regulaban la convocatoria, constitución, funcionamiento, régimen de mayorías, etc. La normativa dejaba a la libre voluntad de los socios la concreción de estas cuestiones. Ahora bien, con un importante matiz que no se puede olvidar: los estatutos y reglamentos eran aprobados por la Autoridad pública que, además, vigilaba su aplicación.

Por otro lado, la convocatoria de la junta debía ser autorizada por el Gobernador civil y, desde el Reglamento de 1857, era presidida por la correspondiente Autoridad pública o quien ésta designase. La celebración de esta reunión pública o asamblea era una cuestión de orden público, que dependía de la Autoridad.

Especial interés presenta la competencia de la junta para examinar y aprobar las cuentas anuales. En efecto, con carácter general, la contabilidad de los comerciantes (personas físicas o jurídicas) era secreta frente a terceros. Los accionistas tenían un derecho de información sobre la contabilidad, con carácter previo a su debate en la junta. Una vez aprobadas –y aquí está la novedad- debían enviarse a la Autoridad y publicarse para conocimiento de cualquier interesado.

B) Administradores. En relación a la naturaleza de la relación jurídica de los administradores con la sociedad, cabe preguntarse si era de carácter orgánico o contractual. La respuesta no es sencilla. En primer lugar, la noción técnica de órgano proviene del Derecho público de finales del siglo XIX, posterior, por tanto a nuestra Ley de 1848. En segundo lugar, después del análisis del CCom 1829, de la Ley y del Reglamento de 1848, nuestra conclusión es que el Legislador mercantil de aquella época consideró la naturaleza jurídica de la relación más cercana a la corporativa que a la contractual, aunque hay argumentos importantes en sentido contrario.

Cabe destacar, por otro lado, que el Reglamento de 1848 estableció el sistema dual a través de un *órgano de inspección o vigilancia* de los administradores.

Respecto a la responsabilidad de los administradores, destaca la novedad de su limitación respecto a las deudas sociales, en relación a otros tipos societarios. La

regulación normativa más detallada se refiere a la responsabilidad frente a la Autoridad pública. En cambio, no se hace referencia a la responsabilidad respecto a terceros porque, en nuestra opinión, el Legislador del 48 entendió que el régimen general de responsabilidad establecido por el Derecho civil o común, era directamente aplicable a las reclamaciones de terceros frente a los administradores. Por último, respecto a su ámbito de representación, destaca un régimen de responsabilidad cualificada por la actuación fuera del ámbito del objeto social.

Novena.- La vigilancia e inspección por la Autoridad pública

El artículo 17 de la Ley de 1848, desarrollado por abundantes preceptos del Reglamento de 1848 y de normas posteriores, pretendió otorgar un poder omnímodo al Gobierno y a sus representantes sobre las compañías por acciones. Sin duda, es otro de los errores del Legislador del 48.

Se trataba de un control, fundamentalmente político, aunque no limitado a este aspecto. El Gobernador civil y los delegados del Gobierno en las compañías por acciones eran cargos políticos. En ningún caso se pueden confundir con el “Regulador” actual. Aquéllas autoridades, cuando tenían que vigilar y controlar temas técnicos cuyo contenido desconocían (por ejemplo, contabilidad), solicitaban la colaboración de personas o instituciones expertas en la materia.

La valoración de esta política legislativa restrictiva e intervencionista queda muy bien expresada en el Preámbulo del Decreto de 1868, que derogó la Ley y el Reglamento de 1848 (por cierto, con evidente falta de respeto al principio de jerarquía normativa). Expone dicho texto que *esta vigilancia y este celo son de todo punto estériles; ni evitan el mal, ni procuran el bien; y, lo que es peor, nunca impiden lo que el Gobierno con esta vigilancia constante quisiera, aunque inútilmente, impedir*; es decir, el fracaso es consecuencia del error de su propio planteamiento. Además, una actitud tan intrusiva llevaba a que la compañía no tuviera *voluntad propia, ni en buena ley puede hacerse responsables a sus Gerentes de acto alguno, sin que a la vez en ese mismo acto resulte responsable y punible la administración*. Estamos de acuerdo con estas acertadas apreciaciones.

Décima.- Evolución de la política legislativa: la LF, la LB, la LSCr, la LSCOP y el Reglamento de 1857

El Legislador perdió una gran oportunidad de reformar la Ley de 1848 durante el “Bienio Progresista” (1854 – 1856). En lugar de acometer esa tarea, prefirió promulgar unas leyes especiales para tres clases de sociedades anónimas: los bancos, las sociedades de crédito y las sociedades concesionarias de obras públicas. En todas ellas se flexibilizó el régimen de la Ley de 1848. Esta decisión de política legislativa fue muy criticada por algún autor de la época, que hubiera preferido una reforma de las normas del 48 hacia unos postulados menos intervencionistas.

Estas Leyes fueron el resultado de la presión de determinados grupos interesados en la flexibilización del Derecho de las sociedades anónimas. En efecto, los datos históricos permiten concluir que la influencia de hombres de negocios extranjeros, franceses y británicos, principalmente los primeros, fue vital. Contaban con dinero para invertir en España, que no disponía de los instrumentos jurídicos que ellos necesitaban.

Además habían comprado un gran volumen de deuda pública española que les situaba en una buena posición negociadora con el Gobierno. En este marco se entiende que se llegara a un acuerdo para despejar los obstáculos legales que impedían la llegada de esas inversiones.

La técnica legislativa del Legislador de 1855 – 1856 consistió en mantener el régimen instituido por la Ley y el Reglamento de 1848, como marco general de las sociedades anónimas. Las excepciones y singularidades de cada clase de compañía anónima especial se establecieron en las correspondientes leyes.

Estas excepciones y especialidades se pueden resumir en las siguientes (aunque no todas se aplicaban a las tres clases de sociedades): autorización gubernativa y no parlamentaria; emisión de acciones al portador; objeto social amplio que podía incluir diferentes actividades; ausencia de proporción entre el capital social y el objeto social; y, por último, la emisión de obligaciones para captar recursos ajenos.

La promulgación de estas nuevas Leyes propició la constitución de un elevado número de sociedades anónimas “especiales”. Este *boom* societario llevó a que diez años más tarde, el número de estas sociedades “especiales” fuera relevante en relación a las compañías por acciones “comunes”. Ahora bien, hay que señalar que hacia 1866 da comienzo una fuerte crisis durante la cual desaparecieron la mayor parte de los bancos, sociedades de crédito y de ferrocarriles que se habían constituido bajo el paraguas de la LF, la LB, la LSCr y la LSCOP.

Paradójicamente, el Gobierno –no el Parlamento- con su Reglamento de 1857 evoluciona hacia una política más intervencionista en las sociedades anónimas “comunes”, mediante la regulación de la presencia del Gobernador civil en las juntas, la exigencia de mayor y más frecuente envío de documentación societaria, etc.

Décimo primera.- ¿Cómo influyó la Ley de 1848 en la industrialización española?

El Legislador de 1848 pretendió, según se desprende del *DsC*, primero, evitar los fraudes y abusos que habían protagonizado las sociedades por acciones; segundo, promover el espíritu empresarial; y, tercero, situar a España entre los países más adelantados en el proceso industrializador. Los datos históricos y económicos son concluyentes: no se alcanzaron la mayor parte de los objetivos planteados. Tratemos de analizar esta respuesta de manera global y objetiva.

Muchas voces han señalado a la Ley de 1848 como uno de los factores del retraso de la primera industrialización española. Nuestra opinión es que debe relativizarse esa acusación. La ralentización del despegue económico pudo verse causada por la ausencia de instrumentos jurídicos adecuados, pero, como mantienen bastantes historiadores económicos, los problemas de fondo fueron mucho más determinantes. Así, cabe señalar, entre otros, la falta de capital doméstico, la ausencia de tecnología, la orografía, la escasa tradición comercial, la aversión popular al riesgo (los valores cotizados en la Bolsa eran, fundamentalmente, la deuda pública emitida por el Estado y no la renta variable como las acciones de las sociedades anónimas), el proteccionismo de determinados sectores, etc.

En nuestra opinión, puede arrojar luz sobre la valoración de la Ley de 1848, el estudio del ritmo de industrialización de España en el periodo siguiente a su derogación en 1868 y comparar los resultados. A partir de aquel año, el Derecho de sociedades sigue el sistema de mínima intervención o “exención de ordenamiento dispositivo”. La modificación sustancial de este instrumento jurídico, ¿lo hizo más adecuado para favorecer la industrialización? Por lo que se ha podido estudiar en los historiadores económicos, parece que el retraso en el grado de industrialización de España en relación a los países más importantes de Europa va aumentando durante el periodo que va de 1850 a las vísperas de la Primera Guerra Mundial. Durante los casi cincuenta años que hay entre 1868 y 1914, etapa en el que rige una liberalización cuasi total del Derecho societario, ¿por qué siguió, en líneas generales, la misma tendencia de retraso comparativo en la industrialización española? Quizá la influencia del instrumento jurídico de la sociedad por acciones no fue tan relevante como se ha dicho. En efecto, el Derecho societario se dirige a una realidad instrumental del progreso económico y empresarial.

ABSTRACT

I. INTRODUCTION

The aim of this work is to analyse the content of the Spanish Act of 28 January 1848 on corporations (compañías mercantiles por acciones) and the Regulation implementing it of 17 February of the same year. These texts have not been the subject of in-depth study and their content is relatively unknown even today.

The system established by the two instruments was, and still is, criticised due to the repressive and interventionist nature of the same, insofar as it required legal or governmental authorisation for the company and enshrined a permanent system of inspection by the public authorities. At the same time, a large part of the content of the two instruments is unknown, yet they constitute a basic precedent of Spanish legislation on corporations.

The greatest difficulty posed by research on this topic is the scarcity of doctrinal works on the subject. There were very few authors writing about the 1848 Act at the time it was enacted and their contributions are meagre, insofar as they tend to transcribe or summarise the legal texts, as was the tradition of the time, rather than offering abundant or in-depth comment.

The most valuable source of information and interpretation of the legal text and legislative policy in 1848 were the interventions of the parliamentarians during the debates on the 1848 Draft Bill in the Congress and Senate. They reflect the negotiation of legislative policy and the positions of the different currents and interest groups. Without this material, this work would in all likelihood have been all the poorer and decidedly undistinguished.

The references to comparative law (essentially to the United Kingdom and France) appear in relation to the subject matter being analysed, as it was felt more useful to do so in this way rather than devoting a monographic chapter to the legislation of said countries on corporations in 1848 – 1868.

II. OBJETIVES AND RESULTS

The study set itself two main objectives. First of all, an analysis of the 1848 Act and Regulation, as well as of the supplementary rules enacted during the term of the same (1848 – 1868). The second objective sought to evaluate whether the legislator attained the objectives he set himself when enacting the 1848 Act and Regulation, which is related to the topic of the failure of the Industrial Revolution in Spain.

It is then a work that represents the confluence of two analytical perspectives: the legal-technical one, belonging to the realm of company law, and the historical one, which is essentially economic.

Due to space restrictions, it was not possible to discuss all the matters dealt with in the regulatory texts. The work centred on the following areas: the concept of a corporation; the system of authorisation, which is the most lambasted aspect of the Act and one that was subsequently abandoned by the legislator in 1868; the corporate object; shares; the corporate bodies: the general meeting and the administration (envisaging a dual system); surveillance and inspection by the public authorities; and, lastly, the special acts of 1855 and 1856 on bank companies, credit companies, railways and public works companies.

III. CONCLUSIONS

The most relevant conclusions of this study are the following:

- 1. The 1848 Act and Regulation establish a series of imperative safeguards to the substantive rules governing a corporation (public limited companies “sociedades anónimas” and partnerships limited by shares “sociedades comanditarias por acciones”), many of which were subsequently assumed by the major reforms of company law in the 20th century.*
- 2. The decisive factors affecting the passing of the 1848 Act and Regulation were the financial crisis of 1846, the cases of political corruption and abuse of power, as well as the political influence over the two most important banks of the time. For many savers, public limited companies were one of the most important causes of the crisis in the years leading up to 1848.*
- 3. Most company matters were regulated in the 1848 Regulation. As such, it constitutes a significant exception to the principle of legal reservation in company law. It is the only case in which this occurs. Meanwhile, the Government, which was remodelled on numerous occasions in the twenty years the Regulation was in force, did not carry out any material amendment of the text.*
- 4. The 1829 Commercial Code made a mistake in allocating the approval of public limited companies to a special type of court (Tribunales de comercio). From a comparative law point of view (United Kingdom and France) this system was unique. The Government and the legislator blamed the deteriorated situation of public limited companies on the actions of these courts. This justified a swing in the opposite direction*

which saw the political and legislative powers assuming control of corporations.

5. *Parliamentary or government authorisation was one of the biggest mistakes of the 1848 legislator. The immediate consequence was the reduction in the number of entities being incorporated. This trend changed with the passing of the bank, credit companies, railways and public works concessionaire acts (1855 – 1856) which led to an increase in the number of corporations being created.*

Meanwhile, the requirement of a public utility corporate object for the authorisation of corporations, in our opinion, not only reduced the number of these companies, it also delayed the process of industrialisation. This question, with certain nuances, began to be addressed in British law from 1844 onwards, facilitating investment in medium-sized companies (textile mills, canning companies, etc.).

6. *The concept of public limited company (which, together with a partnership limited by shares – the two types of company regulated in the 1848 Act and Regulation) is not the same as the current one. Three essential differences can be highlighted:*
 - a) *There is no express regulatory recognition of a public limited company as an legal entity independent of its members. This did not arrive until article 116 of the 1885 Commercial Code.*
 - b) *All public limited companies were traded on the stock market.*
 - c) *Public limited companies were incorporated for a specific term, depending on their corporate object.*
7. *With regard to the shares, the most noteworthy aspect is that our first companies act prohibited bearer instruments. This represented a contradiction with the terminology of a company considered “anonymous”. The reason for this rule was to stimulate transparency of the shareholding structure.*

The economic effect of this prohibition was that many anonymous investors opted not to channel their savings into public limited companies. At that time there were groups of people who, for certain historical reasons, were not allowed to appear in financial transactions (members of the armed forces, the clergy, part of the nobility, etc.). The alternative investment for obtaining some kind of profitability was, above all, government debt.

8. *Directors. The nature of their legal relationship with the company is not as clear as in the present day. The legal concept of a “corporate body” postdates 1848. In our opinion, the 1848 Act and Regulation consider the legal nature of the relationship to be closer to a corporate than contractual one, although there are powerful arguments for maintaining the opposite stance.*

It is worth highlighting that the 1848 Regulation establishes the two-tier system of administration by means of the “body responsible for inspection or surveillance” of the directors.

9. *The legislator lost a great opportunity to reform the 1848 Act during the bienio progresista (1854 – 1856). Instead of undertaking that task, he opted to enact special acts for three kinds of public limited companies: banks, credit companies and public works companies. In all these cases the regime established in the 1848 Act was relaxed. This legislative policy decision was roundly criticised by some authors at the time.*

The legislative strategy of the legislator in 1855 – 1856 consisted of maintaining the system introduced by the 1848 Act and Regulation as the general framework for public limited companies. The exceptions and singularities of each kind of public limited company were established in the corresponding acts, and can be summarised as follows: governmental and not parliamentary authorisation; issue of bearer shares; broad corporate object that was able to encompass a variety of activities; lack of proportion between the share capital and corporate object; and, finally, the issue of obligations to obtain resources.

10. *Did the 1848 Act and Regulation promote or delay industrialisation in Spain? The 1848 legislator had three objectives:*

- a) To avoid the fraud and abuses that had characterised corporations.*
- b) To promote entrepreneurial spirit.*
- c) To situate Spain at the vanguard of the process of industrialisation.*

The historical and economic data is conclusive: the majority of objectives set were not attained. Let us look at this response in a holistic, objective manner.

Many observers have pointed to the 1848 Act as one of the factors responsible for the delay in the first Spanish industrialisation. Our opinion is that this accusation should be downplayed. The slowdown of economic progress could have been caused by the lack of appropriate legal instruments, but, as many economic historians maintain, the underlying

problems were far more decisive. Here we can point, among other things, to the lack of domestic capital, the lack of technology, the geography, the meagre commercial tradition, popular aversion to risk (the securities traded on the stock market were, essentially, government debt and not variable income instruments such as shares in public limited companies), the protectionism of certain sectors, etc.

*In our opinion, one thing that can shed some light on the valuation of the 1848 Act is a study of the rate of industrialisation in Spain in the period following its derogation in 1868 and a comparison of the results. As of that year, company law followed the system of minimum intervention or “exemption from regulation”. Did the substantial amendment of this legal instrument make it more appropriate for favouring industrialisation? From the conclusion reached by economic historians, it seems that the deficient degree of industrialisation in Spain compared to the most important countries in Europe was exacerbated in the period running from 1850 to the eve of the First World War. For almost fifty years from 1868 and 1914, a time in which company law was characterised by virtually complete deregulation, why, generally speaking, did the same trend of comparative deficiency continue with regard to Spanish industrialisation? Perhaps the influence of the legal figure that is the *compañía mercantil por acciones* was not as relevant as previously maintained. Indeed, company law addresses an instrumental reality of economic and business progress.*

ABSTRACT

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV. (1858): *Estadística del Personal y vicisitudes de las Cortes y Ministerios de España* desde el 29 de septiembre de 1833 en que falleció el Rey, D. Fernando VII, hasta el 11 de septiembre de 1858 en que se disolvió el Congreso de los Diputados, Madrid, Imprenta Nacional.
- AA.VV. (1881): *Lecciones de Derecho mercantil según las explicaciones de D. Luis Silvela por varios de sus alumnos en el curso de 1879 a 1880*, Madrid.
- ÁLVAREZ, J. (1870): *La deuda extranjera de España. 1822 – 1870. Reseña de varias conversiones con estados demostrativos del resultado para el Gobierno y los poseedores de títulos*, Londres, Effingham Wilson, Royal Exchange.
- ÁLVAREZ DEL MANZANO Y ÁLVAREZ DE RIVERA F. (1903): *Curso de Derecho mercantil filosófico, histórico y vigente (español y extranjero)*, tomo I, Parte General, segunda edición, Madrid.
- ÁLVAREZ DEL MANZANO Y ÁLVAREZ DE RIVERA, F., BONILLA Y SAN MARTÍN, A., Y MIÑANA Y VILLAGRASA, E., (1916): *Tratado de Derecho mercantil español comparado con el extranjero*, tomo II, Madrid.
- AMARAL, S. (1993): *La independencia americana: consecuencias económicas*, Madrid.
- ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, G. (edit.) (1999): *Historia económica de España. Siglos XIX y XX*, Barcelona.
- ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, R. (1985): “El ferrocarril en la economía española” en *Información Comercial Española*, núm. 263, julio.
- (1988): “Economía y pensamiento económico en España” en ARTOLA, M. (dir) y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario): *Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola. III. Iglesia. Pensamiento. Cultura*, Madrid.
 - (1999): “Los Bancos en la economía española durante el siglo XIX” en ANES, G. (ed.): *Historia económica de España. Siglos XIX y XX*, Barcelona.
- ARRAZOLA, L. (coord.) (1858): *Enciclopedia española de Derecho y Administración o Nuevo Teatro Universal de la Legislación de España e Indias*, tomo X, Madrid.
- ARTOLA, M. (1973): *La burguesía revolucionaria (1808 – 1869)*, Madrid.
- (1974): *Partidos y programas políticos, 1808 – 1836*, vol. I, Madrid.
 - (1978), (dir): *Los ferrocarriles en España. 1844 – 1943. I. El Estado y los ferrocarriles*, Madrid, Servicio de Estudios del BdE.

- (1978): “La acción del Estado” en ARTOLA, M. (dir): *Los ferrocarriles en España. 1844 – 1943. I. El Estado y los ferrocarriles*, Madrid, Servicio de Estudios del BdE.
 - (1986): *La Hacienda del siglo XIX. Progresistas y moderados*, BdE, Madrid.
 - (1988), (dir) y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario): *Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola. I. Economía. Sociedad*, Madrid.
 - (1988), (dir) y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario): *Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola. II. Instituciones políticas. Imperio*, Madrid.
 - (1988), (dir) y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario): *Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola. III. Iglesia. Pensamiento. Cultura*, Madrid.
- ARTOLA, M., Y MARTÍN NIÑO, J. (1988): “La Hacienda” en ARTOLA, M. (dir) y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario): *Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola. II. Instituciones políticas. Imperio*, Madrid.
- AVECILLA, P. (1849): *Diccionario de la legislación mercantil de España*, Madrid.
- AZPILICUETA, M. (1869): *El déficit: modo de extinguirle y de reorganizar la Hacienda del Estado*, Madrid.
- BACARDÍ, A. (1840): *Tratado de Derecho Mercantil de España*, tomo II, Barcelona.
- BÁDENAS ZAMORA, A. (2005): *El patrocinio del justiciable pobre en la España liberal (1833 – 1868)*, Madrid.
- BARÓ PAZOS, J. (1993): *La codificación del Derecho civil en España (1808 – 1889)*, Santander.
- BERMEJO VERA, J. (1975): *Régimen jurídico del ferrocarril en España (1844 – 1974): estudio específico de Renfe*, Madrid.
- BERNAL LLORÉNS, M. (1998): “En torno a la regulación contable en el Código de Comercio de 1829” en *REFyC*, vol. XXVII, núm. 97, octubre - diciembre.
- (2004): “La regulación de las sociedades anónimas y la información contable publicada en la GdM a mediados del siglo XIX” en *REFyC*, vol. XXXIII, núm. 120, enero - marzo.
- BERTRÁN PÉREZ, C., y PONS, M. A. (2013): “Qué son las crisis financieras y cómo ocurren” en MARTÍN-ACEÑA, P., MARTÍNEZ-RUIZ, E., y PONS, M. A.: *Las crisis financieras de la España contemporánea, 1850 – 2012*, Barcelona.

- BIEC, J. M. Y VICENTE CARAVANTES, J. (1851): *Suplemento al Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia de Don Joaquín Escriche*, Madrid y Santiago.
- BILBAO, L. M., Y FERNÁNDEZ DE PINEDO, E. (1988): “Artesanía e industria” en ARTOLA, M. (dir) y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario): *Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola, I. Economía. Sociedad*, Madrid.
- BONILLA, F. Y SAN MARTÍN, A. (1916): *Tratado de Derecho mercantil español comparado con el extranjero*, tomo II. Madrid.
- BORREL Y VILÁ, J. (1857): *Exposición de los principios del sistema de crédito territorial, y los medios convenientes para el establecimiento de Bancos hipotecarios en España; conteniendo además, la legislación adoptada en Francia sobre el mismo objeto, los estatutos de la Sociedad de Crédito Territorial de dicho Imperio y el Proyecto de la Ley de las Cortes Constituyentes de 16 de abril de 1855*, Barcelona.
- BOYLES & BIRDS (1987): *Boyles & Birds Company Law*, Bristol.
- BRAVO MURILLO, J. (1864): *De las deudas amortizables y de los certificados de cupones*, Madrid.
- (1865): *El pasado, el presente y el porvenir de la Hacienda Pública*, Madrid.
- BRODER, A. (2000): *Historia económica de la España contemporánea*, Madrid.
- CARR, R. (2000): *España 1808-1975*, Barcelona.
- CARRASCO CANALS, C. (1975): *La burocracia en la España del siglo XIX*, Madrid.
- CARRERAS, A. (1984): “La producción industrial española, 1842 – 1981: construcción de un índice anual” en *RHE, II, 1*.
- (1999): “Los ferrocarriles en Europa: algunas perspectivas históricas” en MUÑOZ RUBIO, M., SANZ FERNÁNDEZ, J., Y VIDAL OLIVARES, J. (eds.) (1999): *Siglo y medio de ferrocarriles en España, 1848 – 1998: economía, industria y sociedad*, Madrid.
- CARRERAS, A., Y TAFUNELL, X. (2012): *Historia económica de la España contemporánea (1879-2009)*, Barcelona.
- CARRERAS Y GONZÁLEZ, M. (1860): *Elementos del Derecho mercantil de España. Obra escrita para que pueda servir de texto a los alumnos de las carreras de jurisprudencia, de administración, del notariado y de comercio, y de consulta a los comerciantes*. Prólogo de PÉREZ PUJOL, E., Madrid,
- CASARES, A. (1973): *Estudio histórico-económico de las construcciones ferroviarias españolas en el siglo XIX*, Madrid.

- CASTÁN, J. (1929): “Alrededor de la distinción entre las sociedades civiles y las comerciales” en *RGLyJ*, vol. XLIII.
- CASTRO-RIAL, B. J. (1946): “Evolución del Derecho de Sociedades en Inglaterra” en *RDM*, vol. I, núm. 2.
- CAVA MESA, M. J. (2011): “La economía en España, de 1800 a 1936” en PAREDES, J. (dir.) *Historia de España contemporánea*, Barcelona.
- CHARLESWORTH AND CAIN (1977): *Company Law*, décimo primera edición, Londres.
- COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA (Continuación de la colección de Decretos) (1849): *Primer cuatrimestre de 1848*, tomo XLIII, Madrid.
- COLL MARTÍN, “El sector minero” en *Información Comercial Española*, núm. 623, julio.
- COMELLAS, J. L. (1970): *Los moderados en el poder, 1844 - 1854*, Madrid.
- (1988): *Historia de España contemporánea*, Madrid.
 - (1999): *Isabel II. Una reina y un reinado*, Madrid.
- COMÍN COMÍN, F. (1988): *Hacienda y Economía en la España contemporánea (1800 – 1936)*, vol. I, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales.
- (1990): “Reforma tributaria y política fiscal” en GARCÍA DELGADO, J. L.: *España, economía*, Madrid.
 - (1999): “Los efectos económicos del ferrocarril sobre la economía española (1855 – 1935)” en MUÑOZ RUBIO, M., SANZ FERNÁNDEZ, J. y VIDAL OLIVARES, J. (eds.) (1999): *Siglo y medio de ferrocarriles en España, 1848 – 1998: economía, industria y sociedad*, Madrid.
 - (1999): “La Hacienda pública en el siglo XIX” en ANES, G.: *Historia económica de España. Siglos XIX y XX*, Barcelona.
- COMÍN COMÍN, F., MARTÍN ACEÑA, P., MUÑOZ RUBIO, M., Y VIDAL OLIVARES, J. (1998): *150 Años de Historia de los Ferrocarriles Españoles*, vol. I, Madrid.
- COMÍN COMÍN, F., HERNÁNDEZ, M. Y LLOPIS, E. (eds.): (2002): *Historia económica de España. Siglos X – XX*, Barcelona.
- COMÍN COMÍN, F., MARTÍN ACEÑA, P. Y VALLEJO, R. (eds.) (2006): *La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899*, Zaragoza.
- CONDE, F. J. (1947): “La transformación del Derecho patrimonial en la época del capitalismo” en *RDM*, vol. IV, núm. 11.

- CORDERO, R., y MENÉNDEZ, F. (1978): “El sistema ferroviario español” en ARTOLA, M. (dir): *Los ferrocarriles en España. 1844 – 1943. I. El Estado y los ferrocarriles*, Madrid.
- COS-GAYÓN, F. (1851): *Historia de la Administración Pública en España*, Madrid.
- CRUZ ALLI ARANGUREN, J. (2005): *Derecho, Estado y Administración en el pensamiento de Sáinz de Andino*, Pamplona.
- CURZON, L. B. (1998): *Dictionary of Law*, Londres.
- DE LA CUESTA RUTE, J. M. (1973): “La contabilidad en el Código de comercio” en *REFyC*, vol. II, núm. 4, enero – abril.
- DÍEZ DEL CORRAL, L. (1945): *El liberalismo doctrinario*, Madrid.
- DÍEZ ESPINOSA, J. R. (1986): *La desamortización de Mendizábal y Espartero en España*, Madrid.
- DURAN Y BAS, M. (1856): *Estudios políticos y económicos*, Barcelona.
- ESCARRA, J. (1950): “A propósito de la reforma del Derecho de sociedades anónimas en España” en *RDP*, vol. IX, núm. 26, marzo – abril.
- ESCRIBANO, J. R. (2012): *La evolución de la información pública de las cotizaciones en la Bolsa de Madrid*.
- ESTEBAN VELASCO, G. (1982): *El poder de decisión en las sociedades anónimas. Derecho europeo y reforma del Derecho español*, Madrid.
- ESTEBAN VELASCO, G. (1994): “Sociedad anónima: principales aspectos y problemas de su regulación” en *RdS*, núm. 3.
- FERNÁNDEZ CLEMENTE, E. (2006): “Juan Faustino Bruil, un banquero esparterista” en COMÍN COMÍN, F., MARTÍN ACEÑA, P. y VALLEJO, R. (eds.): *La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899*, Zaragoza.
- FIGUEROA, A. DE, Conde de Romanones (1941): *Un drama político: Isabel II y Olózaga*, Madrid.
- FONTANA, J. (1977): *La revolución liberal. Política y Hacienda en 1833 – 1845*, Madrid.
- (1985): “La desamortización de Mendizábal y sus antecedentes” en GARCÍA SANZ, A., y GARRABOU, R., (eds.) *Historia agraria de la España contemporánea*, vol. 1: *Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800 – 1850)*, Barcelona.

- FRAX ROSALES, E., y MATILLA QUIZA, M. J. (1988): “Transporte, comercio y comunicaciones” en ARTOLA, M. (dir), y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario) *Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola, I. Economía. Sociedad*, Madrid.
- FUENTES NAHARRO, M. (2007): “Algunas consideraciones sobre el informe acerca del principio de proporcionalidad entre propiedad y control en la Unión Europea” en *RdS*, núm. 29
- GARCÍA-BAQUERO (1976): *Cádiz y el Atlántico (1717-1778)*, Sevilla.
- GARCÍA COLMENARES, P., (1986): *La desamortización de Mendizábal y Espartero en España*, Madrid.
- GARCÍA DELGADO, J. L. (1990): *España, economía*, Madrid.
- GARCÍA LÓPEZ, A. (1999): *Una historia de la banca española a través de sus documentos*, Valladolid.
- GARCÍA SANZ, A. (1985): *Historia agraria de la España contemporánea*, vol. 1: *Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800 – 1850)*, Barcelona.
- GARCÍA TEJERO, A. (1858): *Historia político-administrativa de Mendizábal. Dedicada al pueblo liberal español*, tomo I, Madrid.
- GARRABOU, R. (1985): *Historia agraria de la España contemporánea*, vol. 1: *Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800 – 1850)*, Barcelona.
- GARRIDO FALLA, F. (1987): *Tratado de Derecho Administrativo*, vol. I, décima edición, Ed. Tecnos, Madrid.
- GARRIGUES, J. (1933): *Nuevos hechos, nuevo Derecho de sociedades anónimas*, Madrid, reeditado por CIVITAS, Madrid, 1998.
- (1946): “Fundación de la sociedad anónima” en *RDM*, núm. 1, enero–febrero.
 - (1950): “Reforma, contrarreforma y ultrarreforma de la Sociedad anónima” en *RDM*, vol. IX, núm. 26, marzo-abril.
 - (1956): *Curso de Derecho mercantil*, Madrid.
 - (1959): *Curso de Derecho mercantil*, tomo I, Madrid.
 - (1974): “Teoría general de las sociedades mercantiles” en *RDM*, núm. 131, enero-marzo, Madrid.
 - (1976): “Teoría general de las sociedades mercantiles” en *RDM*, núm. 142, octubre – diciembre, Madrid.

- GARRIGUES, J., GONZÁLEZ, J., PLAZA, M. DE LA., URÍA, R., RODRÍGUEZ GIMENO, A., PALAO, J. E., y SÁINZ DE BUJANDA, F. (1947): *Reforma de la sociedad anónima*, Madrid.
- GIRÓN TENA, J. (1947): “Sociedades civiles y sociedades mercantiles: distinción y relaciones en Derecho español” en *RDM*, vol. IV, núm. 10, julio – agosto.
- (1954): “Sobre los conceptos de sociedad en nuestro Derecho” en *RDP*.
 - (1976): *Derecho de sociedades*, tomo I, Madrid.
 - (1986): “Las Sociedades mercantiles en el Código de Comercio” en *Centenario del Código de comercio*, Ministerio de Justicia, Madrid.
- GÓMEZ DE LA SERNA, P. y REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio, concordado y anotado, precedido de una Introducción histórico-comparada, y seguido de la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio, y de un Repertorio alfabético de la legislación y del procedimiento mercantil*, cuarta edición, Madrid.
- GÓMEZ MENDOZA, A. (1982): *Ferrocarriles y cambio económico en España 1855 – 1913*, Madrid.
- (1985): “Los ferrocarriles en la economía española, 1855 – 1913” en MARTÍN ACEÑA, P. y PRADOS DE LA ESCOSURA, L. (coords.) *La nueva historia económica en España*, Madrid.
 - (1985): “Transportes y crecimiento económico, 1830 – 1930” en SÁNCHEZ ALBORNOZ, N., *La modernización económica de España 1830 – 1930*, Madrid.
 - (1989): *Ferrocarril, industria y mercado en la modernización de España*. Madrid.
 - (1999): “Los transportes y el comercio interior en la España del siglo XIX” en ANES, G. (edit.) *Historia económica de España. Siglos XIX y XX*, Barcelona.
- GONZÁLEZ HUEBRA, P. (1859): *Curso de Derecho mercantil*, tomo I, segunda edición, Barcelona.
- GONZALO Y GONZÁLEZ, L. (1981): *El tesoro público y la Caja General de depósitos (1852 – 1868). Un estudio de la deuda flotante en España a mediados del siglo XIX*, Madrid, Ministerio de Hacienda.
- GONZÁLEZ ORDÓÑEZ, J. M^a. (1956): “Los criterios del Derecho español sobre distinción de sociedades mercantiles y sociedades civiles y sus consecuencias prácticas” en *RDM*, vol. XXI, núm. 59, enero – marzo.

- GUASCH MARTORELL, R. (1999): “La doctrina de la infracapitalización: aproximación conceptual a la infracapitalización de las sociedades” en *RDM*, núm. 234.
- HALSBURY, The Earl of (1910): *The laws of England being a complete statement of the whole law of England*, vol. V, *Companies*, Londres.
- HERR, R. (1991): *Hacienda real y cambios rurales en España a finales del antiguo régimen*, Madrid.
- HERRANZ LONCÁN, A. (2008): *Infraestructuras y crecimiento económico en España (1850 – 1935)*, Madrid.
- HIERRO ANIBARRO, S. (1998): *El origen de la sociedad anónima en España*, Madrid.
- (1998): “La doctrina del Derecho mercantil y el origen de la sociedad anónima” en *RDM*, núm. 229, julio – septiembre.
- HOYO, A. (1993): *La evolución del mercado de valores en España. La Bolsa de Madrid, 1831-1874*, comunicación presentada al V Congreso de la Asociación de Historia Económica, San Sebastián.
- JUSTE, J. (1995): “Los derechos de la minoría en la Sociedad Anónima” en *RdS Monografía*, núm. 3.
- (2002): “Limitaciones al poder de representación del factor en el giro o tráfico del establecimiento. Actuación del administrador societario en calidad de factor” en *Derecho de sociedades. Libro Homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, vol. II, Madrid.
 - (2011): “Artículo 191. Mesa de la junta” en ROJO, A. y BELTRÁN, E. (dirs.) *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo I, Cizur Menor.
 - (2011): “Artículo 201. Mayorías” en ROJO, A. y BELTRÁN, E. (dirs.) *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo I, Cizur Menor.
- KINDLEBERGER, C. (2011): *Historia financiera de Europa*, Madrid.
- LAGO, J. M. (1864): *Vindicación del crédito económico de España, deprimido por jugadores de bosa y agiotistas ingleses*, Madrid.
- LANGLE, E. (1947): “Las directrices fundamentales del Derecho Mercantil” en *RDM*, vol. III, núm. 9.
- (1950): *Manual de Derecho mercantil*, tomo I, Barcelona.
- LARRINAGA, C. (2007): *El Ingeniero de caminos Manuel Peironcely (1818 – 1884). Modernización y obra pública en la España del siglo XIX*, Bilbao.

- LASO, E. (1849): *Elementos de Derecho Mercantil de España, formados con arreglo al programa de tercer año de Jurisprudencia*, Madrid.
- LASSO GAITE, J. F. (1998): *Crónica de la codificación española. Procedimiento civil*, vol. 2, Madrid.
- LEÓN SANZ, F. J. (dir.) y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, S. y PUY FERNÁNDEZ, G. (coord.) (2009): *Tendencias actuales en la ordenación del control y el capital en las sociedades mercantiles*, Madrid.
- LLEBOT MAJO, J. O. (1999): “La geometría del capital” en *RDM*, núm. 231.
- LIDA, C., y ZAVALA, I. (eds.): *La revolución de 1868, Historia y literatura*, Nueva York.
- LÓPEZ MORELL, M. A. (1999): “El papel de los Rothschild en la construcción de los ferrocarriles en España (1855 – 1874) en MUÑOZ RUBIO, M., SANZ FERNÁNDEZ, J. y VIDAL OLIVARES, J. (eds.) (1999): *Siglo y medio de ferrocarriles en España, 1848 – 1998: economía, industria y sociedad*. Madrid.
- MADOZ, P. (1850): *Diccionario geográfico – estadístico de España y sus posesiones de Ultramar*, tomo X, Madrid.
- MARTÍ DE EIXALÁ, R. (1870): *Instituciones de Derecho mercantil de España*, Barcelona y Madrid, quinta edición, puesta al día por DURÁN Y BAS.
- (1875): *Instituciones de Derecho mercantil de España*, séptima edición, Madrid, puesta al día por DURÁN Y BAS.
- MARTÍN ACEÑA, P. (1985): “Desarrollo y modernización del sistema financiero, 1844 – 1935” en SÁNCHEZ ALBORNOZ, N. *La modernización económica de España 1830 – 1930*, Madrid.
- (1985), (coord.): *La nueva historia económica en España*, Madrid.
 - (1993): *La creación de sociedades en Madrid (1830 – 1848). Un análisis del primer Registro Mercantil*, Documento de trabajo 9303 del Programa de Historia Económica de la Fundación Empresa Pública, Madrid.
- MARTÍN-ACEÑA, P., MARTÍNEZ – RUIZ, E., y PONS, M. A., (eds.), (2013): *Las crisis financieras de la España contemporánea, 1850 – 2012*, Barcelona.
- MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. (1862): *Diccionario de Administración; obra de utilidad práctica par los Alcaldes y Ayuntamientos y para todos los funcionarios públicos en el orden judicial y administrativo*, tomo V, voz “Sociedades mercantiles”.

- (1915): *Diccionario de la Administración española. Compilación de la Novísima Legislación de España en todos los ramos de la Administración pública*, sexta edición, Madrid.
- MARTÍNEZ DE LA ROSA, F. (1857): *Bosquejo histórico de la política de España*, tomo II, Madrid.
- MARTÍNEZ RODA, F. (2011): “El Sexenio Revolucionario (1868 – 1874)” en PAREDES, J. *Historia de España contemporánea*, Barcelona.
- MATEO DEL PERAL, D. (1978): “Los orígenes de la política ferroviaria en España (1844 – 1877)” en ARTOLA, M. (dir): *Los ferrocarriles en España. 1844 – 1943. I. El Estado y los ferrocarriles*, Madrid.
- MENÉNDEZ, F. (1978): “El sistema ferroviario español” en ARTOLA, M. (dir): *Los ferrocarriles en España. 1844 – 1943. I. El Estado y los ferrocarriles*, Madrid.
- MENÉNDEZ, A. Y ROJO, A (dirs.) (2013): *Lecciones de Derecho mercantil*, Cizur Menor.
- MIÑANA Y VILLAGRASA, E. (1916): *Tratado de Derecho mercantil español comparado con el extranjero*, tomo II, Madrid.
- MIRAFLORES, M. DE (1964): *Memorias del Reinado de Isabel II*, vol. II, Madrid.
- MORQUECHO Y PALMA, G. (1860): *La controversia económica en 1859. Colección de artículos publicados en varios periódicos en defensa del sistema proteccionista*, Madrid.
- MOSSA, L. (1950): “Fundación y administración de la sociedad anónima en el Proyecto español de reforma” en *RDP*, vol. X, núm. 28, julio – agosto.
- MOYA, J. (2011): “Artículo 23. Estatutos sociales” en ROJO, A. Y BELTRÁN, E. (dirs.) *Comentario de la Ley de Sociedades de capital*, tomo I, Cizur Menor.
- MUÑOZ RUBIO, M., SANZ FERNÁNDEZ, J. y VIDAL OLIVARES, J. (eds.) (1999): *Siglo y medio de ferrocarriles en España, 1848 – 1998: economía, industria y sociedad*, Madrid.
- NADAL, J. (1985): “Un siglo de industrialización en España, 1833 – 1930” en SÁNCHEZ ALBORNOZ, N.: *La modernización económica de España*, Madrid.
- (1997): *El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913*, Barcelona.
- NADAL, J., BENAUL, J. M., y SUDRIÀ, C., (dirs.) (2003): *Atlas de la industrialización de España, 1750 – 2000*, Barcelona.

- OLIVENCIA, M. (1981): “Sobre la historia de la compañía mercantil (Aportaciones del Departamento de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla)” en *RDM*, núm. 160, abril –junio.
- (2013): “El título preliminar de la propuesta de Código mercantil” en *RDM*, núm. 290, octubre – diciembre.
- OTERO LASTRES, J. M. (1981): “La autoentrada de los agentes de Cambio y Bolsa” en *Estudios de Derecho mercantil en homenaje al Profesor ANTONIO POLO*, Madrid.
- PALACIO ATARD, V. (1988): *Edad Contemporánea I [1808 – 1898]* en *Manual de Historia de España*, 4, Madrid.
- PALAFIX GAMIR, J. (1998): *Curso de historia económica*, Valencia.
- (1999): “Proteccionismo y libre comercio” en ANES, G. (ed.): *Historia económica de España. Siglos XIX y XX*, Barcelona.
- PALMER (1976): *Palmer’s Company Law*, vigésimo segunda edición, Londres, realizada por CLIVE M. SCHMITTHOF.
- PANDO, M., Marqués de Miraflores (1964): *Memorias del reinado de Isabel II*. Edición y estudio preliminar de Manuel Fernández Suárez. Madrid.
- PAREDES, J. (2011): “Los Bienios Progresista y Moderado (1854 – 1858)” en PAREDES, J. (dir.) *Historia de España contemporánea*, Barcelona.
- PASCUAL QUINTANA, J. M. (1958): “Aspecto histórico del Derecho mercantil” en *RDM*, vol. XXVI, núm. 69, julio - septiembre.
- PASCUAL, P., y SUDRIÀ, C. (2002): “El difícil arranque de la industrialización (1840 – 1880)” en COMÍN, F., HERNÁNDEZ, M. y LLOPIS, E. (eds.): *Historia económica de España. Siglos X – XX*, Barcelona.
- PAZ-ARES, C. (1983): “Sobre la infracapitalización de las sociedades” en *Anuario de Derecho Civil*.
- (1994): “La infracapitalización. Una aproximación contractual” en *RdS*, (Número extraordinario: *La reforma del Derecho de Sociedades de Responsabilidad Limitada*).
- PERECAULA, A. (1871): *Diccionario de Derecho mercantil español*, Barcelona.
- PÉREZ GALDÓS, B. (1985): “Las tormentas del 48” en los *Episodios Nacionales*, núm. 31, Madrid.
- PÉREZ JUAN, J. A. (2008): *El Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas (1847-1851)*. Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública.

- PÉREZ SERRANO, N. (1927): “La proyectada reforma del Código de comercio: compañías anónimas y limitadas” en *RDP*, tomo XIV, enero – diciembre.
- PETIT, C. (2009): “El anonimato de la sociedad mercantil y la llamada responsabilidad limitada. Apuntes para la historia de las anónimas en el Derecho español del siglo XIX” en LEÓN SANZ, F. J. (dir.) y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, S. y PUY FERNÁNDEZ, G. (coord.): *Tendencias actuales en la ordenación del control y el capital en las sociedades mercantiles*, Madrid.
- PIRALA, A. (1875): *Historia contemporánea*, Madrid.
- PRADOS DE LA ESCOSURA, L. (coord.) (1985): *La nueva historia económica en España*, Madrid.
- (1988): *De imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España (1780 – 1930)*, Madrid.
 - (1993): “La pérdida del Imperio y sus consecuencias económicas” en PRADOS DE LA ESCOSURA, L. y AMARAL, S. (eds.): *La independencia americana: consecuencias económicas*, Madrid.
 - (1999): “El sector exterior español durante el siglo XIX” en ANES, G. (ed.): *Historia económica de España. Siglos XIX y XX*, Barcelona.
- PRADOS DE LA ESCOSURA, L., y AMARAL, S. (1993): *La independencia americana: consecuencias económicas*, Madrid.
- PUJOL, J., GONZÁLEZ DE MOLINA, M., FERNÁNDEZ PRIETO, L., GALLEGU, D., y GARRABOU, R. (2001): *El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea*, Barcelona.
- RAMÍREZ ARCAS, A. (1859): *Manual descriptivo y estadístico de las Españas consideradas bajo todas sus fases y condiciones*, Madrid.
- REUS Y GARCÍA, J. (1863): *Código de Comercio, concordado y anotado, precedido de una Introducción histórico-comparada, y seguido de la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio, y de un Repertorio alfabético de la legislación y del procedimiento mercantil*, cuarta edición, Madrid.
- REYNOSO, M. M. DE (1857): *Política administrativa del Gabinete Bravo Murillo, en el ramo de Fomento; y demostración de la legalidad y conveniencia de las concesiones de ferrocarriles de aquella época*, Madrid.
- RODRÍGUEZ, J. M. (1861): *Elementos de Derecho civil, penal y mercantil de España*, tomo III (Parte Mercantil), Madrid.
- RODRÍGUEZ LÁZARO, F. J., (2000): *Los primeros ferrocarriles españoles*. Madrid.

ROJO, A. (1977): “José Bonaparte (1808-1813) y la legislación mercantil e industrial española” en *RDM*, núms. 143-144.

- (2011): “Artículo 22. Contenido de la escritura de constitución” en ROJO, A. Y BELTRÁN, E. (dirs.) *Comentario de la Ley de Sociedades de capital*, tomo I, Cizur Menor.
- (2012): “El Código mercantil” en *RDM*, núm. 286, octubre – diciembre.
- (2013): “El Registro mercantil (I). Organización y funcionamiento” en MENÉNDEZ, A. Y ROJO, A (dirs.) *Lecciones de Derecho mercantil*, Cizur Menor.
- (2014): “El Derecho mercantil y el proceso de unificación del Derecho privado” en *RDM*, núm. 291, enero – marzo.

ROJO, A. Y BELTRÁN, E. (dirs.) (2011): *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, Cizur Menor.

- (2011): “Artículo 4. Capital social mínimo” en ROJO, A. Y BELTRÁN, E. (dirs.) *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo I, Cizur Menor.

RUBIO Y LÓPEZ, J. (1857): *Novísimo manual de Derecho mercantil, arreglado a la legislación vigente sobre esta materia y al Código de comercio: comprende las leyes de Bolsa, Bancos y sociedades anónimas*, Madrid.

RUBIO, C. (1869): *Historia filosófica de la revolución española de 1868*, tomo II, Madrid.

RUBIO, J. (1947): “Sobre el concepto de Derecho mercantil” en *RDM*, vol. IV, núm. 12, noviembre – diciembre.

- (1950): *Sáinz de Andino y la codificación mercantil*. Madrid.
- (1969): *Introducción al Derecho Mercantil*, Barcelona.

RUEDA HERNANZ, G. [con la colaboración de GARCÍA COLMENARES, P., y Díez ESPINOSA, J. R.] (1986): *La desamortización de Mendizábal y Espartero en España*, Madrid.

SÁENZ RIDRUEJO, F. (1993): *Los ingenieros de caminos*, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid.

SAINZ DE ANDINO, P. (1845): “Ensayo crítico sobre la contratación de la bolsa de comercio y las ventas simuladas de los efectos públicos; en que se analiza el proyecto de reforma de la Ley de Bolsa, presentado por el Gobierno a las Cortes en la última legislatura”, Madrid, en SUÁREZ F., y BERALUCE, A. (1967): *Documentos del reinado de Fernando VII*, vol. I, Pamplona.

SÁNCHEZ ALBORNOZ, N. (1963): *La crisis de subsistencias de España en el siglo XIX*, Rosario.

- (1967): “La crisis de 1866 en Madrid: la Caja de Depósitos, las sociedades de crédito y la Bolsa” en *MyC*, núm. 100, marzo.
- (1968): “Los Bancos y las sociedades de crédito en provincias: 1856 – 1868” en *MyC*, núm. 104.
- (1968): *España hace un siglo: una economía dual*, Barcelona.
- (1970): “El trasfondo económico de la revolución” en LIDA, C., y ZAVALA, I. (eds.): *La revolución de 1868, Historia y literatura*, Nueva York.
- (1985): *La modernización económica de España 1830 – 1930*, Madrid.

SÁNCHEZ ANDRÉS, A. (1980): “En torno al concepto, evolución y fuentes del Derecho bursátil en el sistema jurídico español” en *RDM*, núm. 155, enero – marzo.

- (1984): “Las crisis bancarias en España. Apuntes sobre su tratamiento hasta la mitad del siglo XX” en *RDM*, núm. 171, enero – marzo.

SÁNCHEZ CALERO, F. (2001): *La sociedad cotizada en Bolsa en la evolución del Derecho de sociedades*, Discurso leído el día 26 de marzo de 2001 en el acto de su recepción como Académico de Número de la RAJyL.

- (2005): *Los administradores en las sociedades de capital*, Madrid.

SÁNCHEZ CALERO, F. y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J. (2011): *Instituciones de Derecho Mercantil*, vol. I, Cizur Menor.

- (2013): *Instituciones de Derecho Mercantil*, vol. I, Cizur Menor.

SANTILLÁN, R. (1982): *Memoria histórica sobre los bancos Nacional de San Carlos, Español de San Fernando, Isabel II, Nuevo de San Fernando, y de España*. Madrid. Reedición con motivo del bicentenario de la fundación del Banco de San Carlos. Prólogo de TEDDE DE LORCA.

SCARLATTI DE ALDAMA, D., y AMÉRIGO ALCARAZ, M. (1866): *Historia General de España desde los tiempos primitivos hasta fines del año 1860, inclusa la gloriosa guerra de África*, Madrid.

SIMÓN SEGURA, F. (1973): *La desamortización española del siglo XIX*, Madrid.

SMITH, K. & KEENAN, D. (1981): *Company Law*, cuarta edición, Londres.

SUÁREZ, F., y BERALUCE, A. (1967): *Documentos del reinado de Fernando VII*, vol. I, Pamplona.

SUDRIÀ, C. (2002): “El difícil arranque de la industrialización (1840 – 1880)” en COMÍN, F., HERNÁNDEZ, M. y LLOPIS, E. (eds.): *Historia económica de España. Siglos X – XX*, Barcelona.

TAMAMES, R., (1964): *Estructura económica de España*, Madrid.

TEDDE DE LORCA, P. (1981): *Madrid y el capital financiero en el siglo XIX*, Madrid.

- (1985): “El sector financiero y el fracaso de la revolución industrial en España, 1814 – 193” en *Información Comercial Española*, núm. 623, julio.
- (1988): “El sector financiero” en ARTOLA, M. (dir) y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario): *Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola, I. Economía. Sociedad*. Madrid.
- (1994): “Cambio institucional y cambio económico en la España del siglo XIX” en *RHE*, Año XII, núm. 3, otoño.
- (1999): “Del Banco de San Carlos al de España: formación de un Banco central” en ANES, G. (ed.): *Historia económica de España. Siglos XIX y XX*, Barcelona.
- (2006): “José Echegaray, economista” en COMÍN, F., MARTÍN ACEÑA, P. y VALLEJO, R. (eds.) *La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899*.

TOMÁS Y VALIENTE, F. (1982): “El proceso de desamortización de la tierra en España” en *AyS*, núm. 7.

- (1988): “El pensamiento jurídico” en ARTOLA, M. (dir) y PÉREZ LEDESMA, M. (secretario): *Enciclopedia de la Historia de España dirigida por Miguel Artola. III. Iglesia. Pensamiento. Cultura*, Madrid.
- (1997): *Manual de Historia del Derecho español*, Madrid.

TORTELLA, G. (1968): “El principio de responsabilidad limitada y el desarrollo industrial de España: 1829 – 1869” en *MyC*, marzo.

- (1975): *Los orígenes del capitalismo en España*, Madrid.
- (1998): *El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX*, Madrid.

TUNC, A. (1971): *Le Droit anglais des sociétés anonymes*, Paris.

TUÑÓN DE LARA, M. (1976): *La España del siglo XIX*, Barcelona.

UNA SOCIEDAD DE ABOGADOS (1857): *Código de comercio comentado por una Sociedad de abogados*, Barcelona.

- URÍA, R. (1987): *Derecho mercantil*, Madrid.
- VALLEJO POUSADA, R. (2006): “Alejandro Mon, un reformador económico” en COMÍN COMÍN, F., MARTÍN ACEÑA, P. y VALLEJO, R. (eds.) (2006): *La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899*, Zaragoza.
- (2006): “Ramón Santillán González, reformador de la Hacienda liberal” en COMÍN COMÍN, F., MARTÍN ACEÑA, P. y VALLEJO, R. (eds.) (2006): *La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899*, Zaragoza.
- VICENS VIVES, J. (1959): *Manual de historia económica de España*, Barcelona.
- VICENTE Y CARAVANTES, J. (1850): *Código de comercio extractado*, cuarta edición, Madrid.
- VILAR RAMÍREZ, J. B. (1983): “El esfuerzo industrializador” en *Historia general de España y América*, tomo XIV: *La España liberal y romántica*, Madrid.
- VISO, S. DEL (1864): *Lecciones elementales de historia, y de Derecho civil, mercantil y penal de España, con arreglo al programa de enseñanza para el tercer año de Jurisprudencia*, Parte Tercera “Del Derecho mercantil”, segunda edición, Valencia.
- WAIS SAN MARTÍN, F., (1967): *Historia general de los ferrocarriles españoles (1830 – 1914)*, Madrid.
- ZANETTI LECUONA, O. (1999): “El ferrocarril en la economía cubana” en MUÑOZ RUBIO, M., SANZ FERNÁNDEZ, J. y VIDAL OLIVARES, J. (eds.) (1999): *Siglo y medio de ferrocarriles en España, 1848 – 1998: economía, industria y sociedad*, Madrid.
- ZUMALACARREGUI, L. (1952): *El Banco de Isabel II y la crisis de la banca de emisión española de 1847*. Madrid.

COLECCION LEGISLATIVA DE ESPAÑA

(CONTINUACION DE LA COLECCION DE DECRETOS).

PRIMER CUATRIMESTRE

DE

1848.



—
Tomo XLIII.
—



MADRID.

—
EN LA IMPRENTA NACIONAL.

1849.

DE 1.848.

48.

COMERCIO, INSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

[28 Enero]¹⁷³² Ley, preceptuando que no se pueda constituir ninguna compañía mercantil, cuyo capital en todo ó en parte se divida en acciones, sino en virtud de una ley o de un Real decreto, con lo demás que se determina.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, Reina de las Españas, á todos los que las presentes vieren y entendieren sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1: No se podrá constituir ninguna compañía mercantil, cuyo capital en todo ó en parte se divida en acciones, sino en virtud de una ley ó de un Real decreto

Art. 2º Será necesaria una ley para la formación de toda compañía que tenga por objeto: Primero, el establecimiento de Bancos de emisión y cajas subalternas de estos, ó la construcción de carreteras generales, canales de navegación y caminos de hierro. Segundo, cualquiera empresa que siendo de interés público pida algún privilegio exclusivo. En este párrafo no se comprenden las compañías que se propongan beneficiar algunos de los privilegios industriales de invención ó introducción que el Gobierno puede conceder con arreglo a las disposiciones vigentes en esta materia.

Art. 3º La ley determinará en cada caso las condiciones en virtud de las cuales haya de concederse la autorización de que habla el artículo precedente.

Art. 4º Para la formación de toda compañía que no se halle comprendida en el artículo 2º de esta ley, será necesaria la autorización del Gobierno, expedida en forma de Real decreto. Esta autorización solo se concederá á las compañías cuyo objeto sea de utilidad pública. El Gobierno denegará la autorización á las compañías que se dirijan á monopolizar subsistencias ú otros artículos de primera necesidad

Art. 5º Toda compañía por acciones, se constituirá precisamente para objetos determinados y con un capital proporcionado al fin de su establecimiento.

¹⁷³² Se transcribe en los Anexos 1 y 2 los textos de la Ley de 1848 y del Reglamento de 1848, según aparecen en la *Colección Legislativa de España* del primer cuatrimestre de 1848 (Tomo XLIII), publicado en Madrid (1849). Se ha optado por transcribirlos íntegramente para facilitar su lectura, pues la copia escaneada del original resulta poco legible. Ha parecido conveniente mantener la ortografía original, si bien las citas copiadas en el texto del trabajo se han realizado según las reglas ortográficas actuales.

Art. 6º A la solicitud en que se pida la Real autorización, ha de acompañarse la lista de los suscritores que se propusieren formar la compañía, las cartas de pedidos de acciones, la escritura social y todos los estatutos y reglamentos que hayan de regir para la administración de la compañía. Los estatutos y reglamentos se aprobarán previamente en junta general suscritores.

Art. 7º No se dará curso a la solicitud cuando de los pedidos de acciones no conste la suscripción de una mitad, por lo menos, del capital de la compañía. Las cartas de pedidos de acciones constituirán por sí una obligación legal.

Art. 8º El Gobierno, oyendo al Consejo Real, que elevará consulta con presencia de todo el expediente, examinará si la autorización se halla ó no en el círculo de sus atribuciones. Cuando se trate de una compañía para cuyo establecimiento se requiera la autorización legislativa, el Gobierno se reservará el expediente si la empresa mereciere su apoyo para presentarlo a las Cortes con el correspondiente proyecto de ley. En caso contrario, devolverá el expediente a los interesados para que estos hagan de su derecho el uso que estimen oportuno.

Art. 9º Cuando se trate de una compañía para cuyo establecimiento baste la autorización Real, y el Gobierno juzgare la empresa de utilidad pública, lo declarará así a los recurrentes, aprobando desde luego la escritura social y los estatutos y reglamentos y determinando la parte del capital que la compañía haya de hacer efectiva antes de obtener el Real decreto de autorización. El Gobierno no podrá por razón de esta parte exigir en ningún caso mas de un 25 por ciento. En el caso de que el Ministro por cuyo conducto haya de resolverse la solicitud, disienta en todo ó en parte de lo consultado por el Consejo Real, se expedirá la resolución oyendo al Consejo de Ministros.

Art. 10. Luego que se hallen cumplidas las formalidades prescritas en el artículo anterior, el Gobierno otorgará la Real autorización, fijando en ella el plazo dentro del cual haya de dar la compañía principio á sus operaciones. Transcurrido este plazo sin haberlo verificado, se tendrá la autorización por caducada.

Art. 11. Toda alteración o reforma en los estatutos y reglamentos que no obtenga la aprobación del Gobierno, será ilegal, y anulará por sí la autorización en virtud de la cual exista la compañía.

Art. 12. Hasta que se haya declarado constituida la compañía no se podrá emitir ningún título de acción. Las acciones en que se divida el capital de la compañía estarán numeradas y se inscribirán en el libro de registro que habrá de llevarse necesariamente á nombre de la persona ó corporación á quien correspondan.

Art. 13. Los gerentes ó directores de cada compañía deberán tener en depósito mientras ejerzan sus cargos; un número fijo de acciones, cuyos títulos han de extenderse en papel y forma especiales.

Art. 14. Las acciones de las compañías establecidas con arreglo á esta ley se cotizarán como valores comunes de comercio, y conforme a las disposiciones prescritas en la ley de Bolsa

Art. 15. Ninguna compañía podrá emitir, á no hallarse autorizada por la ley, billetes, pagarés, abonarés, ni documento alguno al portador: los infractores quedarán sujetos al pago de una multa que no podrá exceder de 50,000 reales.

Art. 16. Los que contraten á nombre de compañías que no se hallen establecidas legalmente, serán solidariamente responsables de todos los perjuicios que por la nulidad de los contratos se irroguen a los interesados, é incurrirán además en una multa que no excederá de 100,000 reales. En igual responsabilidad incurrirán los que á nombre de una compañía aun legalmente constituida se extiendan a otras negociaciones que las de su objeto ó empresa, según esté determinado en sus estatutos y reglamentos.

Art. 17. El Gobierno. sin gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías, ejercerá la inspección que conceptúe, necesaria para afianzar la observancia estricta y constante de la presente ley.

Art. 18. Las compañías por acciones existentes en la actualidad sin autorización Real, la solicitaran dentro de dos meses, contados desde la publicación de esta ley, presentando al efecto sus escrituras, estatutos y reglamentos. Dentro del término de cincuenta días siguientes á esta publicación los gerentes ó directores convocarán á junta general de accionistas para que resuelvan si se ha de pedir o no la Real autorizacion, la cual se impetrará solamente en el caso de que la mayoría de los mismos accionistas que se computará con arreglo á sus estatutos y reglamentos, acuerde la continuación de la compañía.

Art. 19. La autorización Real se otorgará a todas las compañías que hubieren cumplido las condiciones con que fueron aprobadas por los tribunales de Comercio, y á las comanditarias por acciones que hubieren sido establecidas con arreglo á las disposiciones del Código de Comercio. No se concederá, sin embargo, esta autorización á las compañías por acciones, sea cual fuere su naturaleza, si se hallasen comprendidas en el último párrafo del artículo 4º

Art.20. Las compañías por acciones que dentro del plazo ya señalado no solicitaran la Real autorizacion se tendrán por disueltas, poniéndose en liquidación en la forma que prescriban sus estatutos y reglamentos.

Art. 21. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias á la presente ley.

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, gefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Dado en Palacio á veinte y ocho de Enero de mil ochocientos cuarenta y ocho. = YO LA REINA =. El Ministro de Comercio, Instruccion y Obras públicas, Juan Bravo Murillo.

COMERCIO, INSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS.

[17 Febrero de 1.848] Real decreto, dictando el reglamento para la ejecución de la ley de 28 de Enero de este año sobre compañías mercantiles por acciones.

Para la ejecución de la ley de 28 de Enero de este año sobre compañías mercantiles por acciones, oído el Consejo Real, he venido en decretar el adjunto reglamento que me ha presentado mi Ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas.

Dado en Palacio á 17 de Febrero de 1 848. Está rubricado de la Real mano. El Ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas, Juan Bravo Murillo.

REGLAMENTO para la ejecución de la ley de 28 de Enero de 1.848, sobre las compañías mercantiles por acciones.

Artículo 1º del Reglamento de 17 de febrero de 1848: "Las escrituras de fundación de las compañías mercantiles por acciones, han de contener necesariamente:

1º Los nombres, apellidos y vecindad de los otorgantes.

2º El domicilio de la compañía.

3º El objeto ó ramo de industria ó de comercio a que exclusivamente ha de dedicarse la compañía.

4º La denominación o razón comercial que ha de guardar en conformidad con el objeto de su fundación.

5º El plazo fijo de la duración de la compañía.

6º El capital social.

7º El número de acciones nominativas en que ha de dividirse el capital y cuota de cada uno.

8º La forma y plazos en que han de hacer efectivo los socios el importe de sus acciones.

9º El régimen administrativo de la compañía.

10. Las atribuciones de sus administradores, y de los que tengan a su cargo inspeccionar las operaciones de la administración.

11. Las facultades que se reserven a la Junta general de accionistas y época de su convocación no pudiendo menos de verificarse una vez cada año.

12. La formación del fondo de reserva con la parte que usualmente ha de separarse de los beneficios de la compañía para constituirlo hasta que componga un 10 por ciento á lo menos del capital social.

13. La porción de capital cuya pérdida ha de inducir la disolución necesaria de la sociedad.

14. Las épocas en que hayan de formarse y presentarse los inventarios y balances de la compañía, no pudiendo dejar de verificarse en cada año, como lo previenen los artículos 36 y 37 del Código de Comercio, y las formalidades con que hayan de revisarse y aprobarse por la Junta de accionistas.

15. La forma y tiempo en que hayan de acordarse la distribución de dividendos por la Junta general de accionistas con sujeción a lo que sobre ello se previene en este Reglamento.

16. La designación de las personas que hayan de tener la representación de la compañía provisionalmente y solo para las gestiones necesarias hasta que hallándose constituida se proceda al nombramiento de su administración por la Junta general de accionistas, ó se encarguen de ella los socios gerentes si la compañía es en comandita.

En las de esta última clase se observarán las disposiciones de los artículos 271 y 272 del Código de Comercio y ni los que se nombren como inspectores de la administración social ni la Junta general de accionistas podrán tener otras atribuciones y facultades que las que por derecho están declaradas a los socios comanditarios".

Art. 2º Será condición esencial y común en todas las sociedades mercantiles por acciones, que los socios tendrán iguales derechos y participación en los beneficios de la empresa, distribuyéndose estos proporcionalmente al número de acciones que posea cada socio.

No podrá reservarse ningún socio a título de fundador ni por otro alguno, el derecho de propiedad sobre la empresa en todo ni en parte, ni el de otras ventajas personales y privativas, fuera de la remuneración y participación de que hablan los artículos 6º y 7. º, ni el de la administración o gerencia irrevocablemente en las compañías anónimas.

Art. 3º Los objetos muebles ó inmuebles que algún socio aportare a la compañía para que se refundan en su capital se apreciarán convencionalmente entre el interesado y la administración definitiva de la misma compañía, ó por peritos si así se pactare, convirtiéndose su importe en acciones á favor del que hubiere hecho la cesión.

Art. 4º En igual forma se procederá con respecto á los socios que trasmitieren á la sociedad algún privilegio de invención, ó el secreto de algún procedimiento, siendo relativos el uno ó el otro al objeto para que aquella estuviere establecida, así como también á los que se contrataren para prestar á la empresa sus servicios científicos y artísticos en el concepto de socios industriales. En cualquiera de estos casos se graduara también convencionalmente la suma que en metálico haya de abonarse por retribución de la cesión o servicio que se hiciere á la sociedad, cubriéndose en acciones la cantidad convenida.

Art. 5º La remuneración que hayan de disfrutar los administradores de las compañías anónimas podrá establecerse por medio de un sueldo fijo, o por el de una participación en los beneficios repartibles de la empresa ó por ambos medios; pero en todos casos habrá de reservarse esta asignación á la Junta general de accionistas constituida que sea la sociedad.

Art. 6º En las sociedades en comandita por acciones tendrán los socios gerentes, como responsables solidariamente de los resultados de las operaciones sociales, la participación que se prefijare por la escritura de fundación en las ganancias y pérdidas de la empresa.

Art. 7º Los reglamentos de las sociedades por acciones comprenderán las disposiciones relativas al orden administrativo de la empresa y al directivo de sus operaciones, guardando conformidad con las bases establecidas en la escritura de fundación.

Art. 8º Con arreglo a lo prescrito en el artículo 287 del Código de Comercio, se tendrá por nulo todo pacto que establecieren los fundadores de las compañías ó acordaren los accionistas, sin que conste en la escritura de fundación ó en los reglamentos que han de someterse á la aprobación del Gobierno.

Art. 9º Para impetrar la aprobación Real de la escritura de fundación de toda sociedad mercantil por acciones ha de hallarse cubierta la mitad de las que compongan su capital social, sea por haberse distribuido este número entre los otorgantes de la misma escritura o sea por las cartas de pedidos de acciones que con posterioridad a su otorgamiento se hayan dirigido a la comisión encargada de gestionar para la aprobación de la compañía.

Art. 10. Las cartas de pedidos de acciones producen en los suscriptores la obligación de hacer efectivo el importe de las mismas acciones, en la forma que por la escritura de fundación se haya establecido, si la empresa obtuviere la Real aprobación. Los fundadores de la sociedad responderán de la autenticidad de las suscripciones para el efecto de haberse tenido por cubierto el número de acciones que se requieren a fin de la que la sociedad pueda constituirse.

Art. 11. Cubierta que sea la mitad de las acciones que constituyen el capital social. se reunirán los suscriptores en Junta general para que los que no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura de fundación, presten su conformidad con los estatutos y reglamentos de la compañía, y según lo que se acordare, quedaran estos definitivamente arreglados.

Art. 12. La escritura de fundación de la compañía, con sus reglamentos, las cartas de suscripción de acciones que completen la mitad del capital social y el acta de su aprobación definitiva, se presentarán al Jefe político de la provincia donde esté domiciliada la sociedad, á fin de que esta autoridad proceda á formar el expediente instructivo sobre su aprobación. Si los establecimientos que la empresa se proponga beneficiar estuvieren en distinta provincia de la de su domicilio se dirigirá también al Jefe político de aquella, copia autorizada de dichos documentos para que concurra a la formación de expediente en la parte que le concierna

Con la escritura de fundación y reglamentos que se han de presentar al Jefe político de la provincia del domicilio, se acompañarán copias simples de una y otros que remitirá dicho Jefe con el expediente y se conservará en el archivo del Ministerio.

Art. 13. Corresponde al Jefe político examinar:

1º Si los estatutos de la sociedad están conformes á lo prescrito en el Código de Comercio con respecto á las sociedades comanditarias y anónimas, á las disposiciones de la ley de 18 de Enero de 1 848 y a las de este reglamento.

2º Si el objeto de la sociedad es lícito y de utilidad pública, conforme al artículo 4º de la precitada ley, sin transcendencia a monopolizar subsistencias ú otros artículos de primera necesidad.

3º Si el capital prefijado en los estatutos sociales puede graduarse suficiente para el objeto de la empresa; si esta convenientemente asegurada su recaudación; si las épocas establecidas para los dividendos pasivos de las acciones están combinadas de manera que la caja social se halle suficientemente provista para cubrir sus obligaciones.

4º Si el régimen administrativo y directivo de la compañía ofrece las garantías morales que son indispensables para el crédito de la empresa y la seguridad de los intereses de los accionistas y del público.

Art. 14. Para calificar si el objeto de la compañía es de utilidad pública, el Gefe político pedirá informe a la Diputación y Consejo provincial al tribunal de Comercio en cuyo distrito estuviere domiciliada la compañía. á la Sociedad económica de Amigos del País, si la hubiere, y al Ayuntamiento. Estos informes podrán también extenderse á cualquiera de los demás extremos designados en el artículo anterior, sobre que el Jefe político estimare conveniente pedirlos.

Art. 15. Cuando los establecimientos comerciales é industriales de la compañía se hubieren de fijar en distinta provincia de la de su domicilio, el Gefe político de esta última pedirá también al de aquella los informes oportunos para completar la instrucción del expediente en cuanto á los hechos de que por la localidad de los mismos establecimientos deberá tener su conocimiento especial el Jefe de la provincia.

Art. 16. Instruido suficientemente el expediente de calificación de la empresa, se remitirá por el Jefe político al Gobierno, de cuya orden pasará al Consejo Real para que eleve consulta sobre la aprobación de la compañía y de sus estatutos y reglamentos.

Art. 17. Si el Consejo Real hallare incompleta la instrucción del expediente, acordará su ampliación, exigiendo nuevos informes, o la presentación de los documentos que sean conducentes.

Art. 18. Teniendo el expediente estado de resolución, el Consejo Real llevará su consulta, según corresponda a los méritos del mismo expediente, proponiendo en el caso en que no haya inconveniente para la aprobación de la sociedad, la parte del capital que haya de hacerse efectiva antes de ponerse en ejecución el Real decreto de autorización.

Art.19. Cuando la compañía fuere de las que no pueden establecerse sino por una ley, según lo dispuesto en el artículo 2.º de la de 28 de Enero, el Consejo consultará al Gobierno lo conveniente sobre su aprobación, y caso de que esta procediere, acompañará también a la consulta el proyecto de ley que en su juicio deba presentarse á las Cortes.

Art. 20. Cuando las sociedades por acciones, cuya autorización sea de la competencia del Gobierno, reúnan en su objeto las calidades prescritas por la ley, pero no estén conformes a sus disposiciones los estatutos acordados por los fundadores, propondrá el Consejo las modificaciones que en ellos deban hacerse. Conformándose el Gobierno con esta consulta, se comunicarán aquellas á los interesados, para que en su vista, si insistieren en la formación de

la compañía, otorguen nueva escritura reformando los estatutos según se les haya prevenido.

Art. 21. El Gobierno, con presencia de todo el expediente y de la consulta del Consejo Real, acordara lo que corresponda, y si procediere la aprobación de la sociedad con los estatutos y reglamentos presentados se expedirá el Real decreto de autorización en el cual se fijará la parte del capital con que haya de constituirse desde luego, con arreglo al artículo 9.º de la ley de 28 de Enero, determinándose el plazo para hacer efectiva en la caja social y el que se estime suficiente para que se complete la suscripción de las acciones.

Art. 22. Comunicado al Gefe político á quien corresponda el Real decreto de autorización, se imprimirán y publicarán los estatutos y reglamentos de la sociedad abriéndose por la administración provisional la suscripción de acciones vacantes dentro del plazo prefijado, á cuyo vencimiento se remitirá al mismo Jefe político en forma auténtica la lista de los nuevos accionistas, conque se acredite haberse cubierto la suscripción del capital social. Si no se presentaren accionistas para completarlo, se tendrá por caducada la Real autorización.

Art. 23. Realizada que sea en la caja social la parte de capital que el Gobierno hubiere prefijado, y comprobada su existencia por el Jefe político, dará este cuenta al Gobierno fin de que declare constituida la compañía, determinando el plazo dentro del cual ha de dar principio a sus operaciones.

Art. 24. Cuando parte del capital social se hubiere de constituir con bienes inmuebles aportados por algunos de los socios, se acreditará al Jefe político su justiprecio pudiendo esta autoridad comprobar la exactitud de la operación por los medios que tenga por conveniente para evitar que se dé a dichos bienes más valor del que realmente tuvieren.

Art. 25. El Jefe político, a consecuencia de la orden en que se declare la compañía constituida convocará la Junta general de accionistas que se reunirá bajo su presidencia o la del empleado público en quien al efecto delegare, y dándose lectura del Real decreto de autorización y de aquella misma orden, se procederá al nombramiento de las personas que hayan de tener a su cargo la administración de la compañía y la inspección o vigilancia de esta misma administración si es anónima, y al de las que hayan de tener á su cargo la inspección o vigilancia de la administración, si es comanditaria con arreglo en unas y otras a sus estatutos y reglamentos, declarándose a los elegidos lo mismo que a los socios gerentes, si la sociedad es comandita, el ejercicio de sus funciones y acordándose proceder a la emisión de los títulos de las acciones en suscripciones nominales. Estos títulos no podrán representar sino la cantidad efectiva que del importe nominal de cada acción se hubiere entregado por el accionista en la caja social.

Art.26. De los estatutos y reglamentos de la compañía después de haberse constituido y del Real decreto de autorización, se remitirán copias al tribunal de Comercio en cuyo territorio estuviere domiciliada para que se haga los correspondientes asientos en sus registros fijándose edictos en los estrados del tribunal con inserción literal de aquellos documentos.

Art. 27. Según esta declarado en el artículo 265 del Código de Comercio, los administradores de las sociedades por acciones, siendo anónimas, son amovibles á voluntad de los socios, mediando justas causas de separación, con arreglo a derecho ó a lo que sobre la materia estuviere establecido en los estatutos de la sociedad.

Art. 28. En las compañías comanditarias por acciones no podrán ser removidos los socios gerentes de la administración social que les compete como responsables directamente y con sus bienes propios, de todas las operaciones a la compañía. En caso de muerte ó inhabilitación de los socios gerentes se tendrá por disuelta la compañía, y se procederá á su liquidación.

Art. 29. Dentro de los quince días siguientes al en que se hubiere declarado constituida la compañía, acreditarán los administradores ante el Jefe político haber hecho el depósito efectivo de las acciones con que deben garantizar su gerencia en la cantidad determinada en los estatutos, y conforme á lo prescrito en el artículo 13 de la ley de 28 de Enero.

Art. 30. Las sociedades mercantiles por acciones estarán constantemente bajo la inspección del gobierno y del Gefe político de la provincia de su domicilio en cuanto á su régimen administrativo, y a la exacta observancia de sus estatutos y reglamentos, conforme está declarado en el artículo 17 de la ley de 28 de Enero. El gobierno, con el debido conocimiento de causa, y oído el Consejo Real, suspenderá ó anulará, según estimare procedente la autorización de las compañías que en sus operaciones o en el orden de su administración faltaren al cumplimiento de las disposiciones legales ó de sus estatutos.

Art. 31. Los fondos de las compañías mercantiles por acciones no podrán distraerse de la caja social para negociaciones extrañas al objeto de su creación. Se permitirá únicamente aplicar los fondos sobrantes que existan en caja para descuentos ó préstamos cuyo plazo no podrá exceder de noventa días, dándose precisamente en garantía papel de la deuda consolidada.

Los administradores son directamente responsables de cualquiera cantidad de que dispusieren contraviniendo á estas disposiciones.

Art. 32. Ningún accionista podrá excusarse de satisfacer puntualmente los dividendos pasivos que acordare la administración de la compañía en las épocas marcadas en los estatutos. En defecto de hacerlo, podrá optar la misma administración conforme a lo dispuesto en el artículo 300 del Código de

Comercio, entre proceder ejecutivamente contra los bienes del socio omiso para hacer efectiva la cantidad de que fuere deudor, o proceder a la venta de sus acciones al curso corriente en la plaza, por medio de la Junta sindical de los agentes, de cambio o la de corredores donde no hubiere colegio de agentes.

Art. 33. Las transferencias de las acciones han de consignarse en un registro especial para estas operaciones que llevara cada compañía interviniendo en ellas un agente o corredor de cambios para la autenticidad del acto, quedando aquel responsable de la identidad de las personas entre quienes se hiciere la negociación

Cuando no estuviere cubierto el valor íntegro de la acción, se hará expresión formal en el acto de transferencia de quedar el cedente subsidiariamente responsable del pago que deberá hacer el cesionario de las cantidades que falten para cubrir el importe de las acciones según se prescribe en el artículo 283 del Código de Comercio.

Art. 34. Anualmente formalizaran las compañías mercantiles por acciones un balance general de su situación en que se comprenderán todas las operaciones practicadas en el año, sus resultados y el estado de su activo y pasivo. Estos balances autorizados por los administradores de la compañía bajo su responsabilidad directa y personal, y después de reconocidos y aprobados en junta general de accionistas, se remitirán al Jefe político de la provincia, quien dispondrá su comprobación y hallándose exactos y conformes con los libros de la compañía, se imprimirán y publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, comunicándose asimismo al tribunal de Comercio del territorio.

Art. 35 Los dividendos de beneficios repartibles se acordarán necesariamente en junta general de accionistas con presencia del balance general de la situación de la compañía, y no podrán verificarse sino de los beneficios líquidos y recaudados del mismo balance, previa la deducción; de la parte que haya de aplicarse al fondo de reserva.

Art. 36. Cuando del balance resultase haberse disminuido el fondo de reserva se aplicara para completarlo toda la parte de beneficios que fuere necesaria, reduciéndose el dividendo para los accionistas a la que hubiere sobrante.

Art. 37. Los Jefes políticos darán cuenta al Gobierno del estado de cada compañía por acciones que hubiere en su territorio según el resultado del balance anual, exponiendo las observaciones que estimaren conducentes en las materias que sean de interés de la administración.

Además de estas comunicaciones anuales pondrán en conocimiento del Gobierno para la resolución correspondiente toda novedad que ocurra en el

régimen directivo y administrativo de las compañías que pueda perturbarlo ó que produzca alguna alteración en la observancia de sus estatutos.

Art. 38. Siempre que de resultas de la inspección que la administración ha de ejercer sobre las sociedades por acciones ó por los documentos que estas deben someter a su comprobación o por cualquiera otro medio legal constare haberse perpetrado algún delito en el manejo directivo y administrativo de la sociedad, procederá el Jefe político conforme está prescrito en el párrafo 5º del artículo 5º de la ley de 2 de Abril de 1 845.

Art. 39. Los gerentes o directores de las compañías por acciones existentes en la actualidad, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley de 18 de Enero, deben necesariamente convocar á junta general de accionistas dentro de los 50 días siguientes al de su publicación, darán conocimiento al Jefe político de la provincia del día de la reunión, a fin de que aquella autoridad pueda por sí ó por sus delegados presidir dicha junta. Celebrada esta remitirán los directores copia certificada del acuerdo, sea para declarar la compañía en liquidación ó bien para impetrar la Real autorización que la habilite para continuar en sus operaciones.

Art. 40. En defecto de prestarse por los directores de alguna compañía el debido cumplimiento á la disposición de la ley, procederá el Jefe político, transcurrido que sea el termino que en ella se prefija á convocar la junta general de accionistas bajo su presidencia o la de otro empleado público en quien delegare al efecto.

Art. 41. Las compañías que acordaren cesar en sus operaciones quedarán inhabilitadas desde la misma fecha de acuerdo para hacer nuevos negocios; y en caso de contravención, incurrirán los que lo hicieren en la responsabilidad y pena pecuniaria que se prescribe en el art. 16 de la ley de 28 de Enero

Art. 42. Los administradores de las compañías que acordaren solicitar la Real autorización, lo verificaran dentro del plazo legal, dirigiendo al Gobierno la correspondiente exposición, que acompañarán certificación de aquel acuerdo y sus estatutos y reglamentos Estos documentos se entregaran al Jefe político de la provincia, de cuya orden se formará dentro del término improrrogable de quince días el balance general que demuestre la situación de la compañía y la calificación de su activo, y comprobada que sea la exactitud de aquel documento se remitirá el expediente al Gobierno para la resolución conveniente que recaerá previa la correspondiente consulta del Consejo Real, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de 18 de Enero.

Art. 43. Transcurrido el plazo de dos meses después de la publicación de la misma ley, se declararán disueltas todas las compañías por acciones que no hubiesen impetrado la Real autorización, a cuyo fin los Jefes políticos darán cuenta al Gobierno de las que dentro del territorio de la provincia de su mando

se hallaren en este caso. La disolución de estas compañías se publicará en la Gaceta del Gobierno y en el Boletín Oficial de la provincia respectiva, dándose conocimiento de ello al tribunal de Comercio a quien corresponda

Art. 44. En la liquidación de las compañías que quedaren disueltas, sea por acuerdo de los accionistas, ó bien por no haber impetrado y obtenido la Real autorización, se procederá con arreglo a las disposiciones del Código de Comercio, siendo obligación de los encargados de la liquidación dar cuenta mensualmente al Jefe político de la provincia del estado en que se hallare, y acreditar asimismo a su conclusión haber quedado canceladas todas las resultas de la misma liquidación. La inspección que sobre ellas se encarga a los Jefes políticos no obstará para que los interesados ejerciten judicialmente los derechos que les competan sobre los haberes de la compañía y para que su liquidación se haga legalmente.

Madrid 17 de Febrero de 1848. Bravo Murillo.